

R.d 91820

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,

Facultad de Derecho,

Departamento de Historia del Derecho

XI-9

PUY

con

BIBLIOTECA UCM



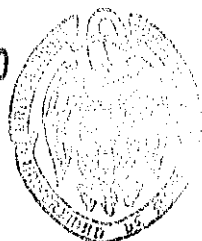
5303408129

DONATIVO

**EL CONSEJO REAL DE CASTILLA EN EL
REINADO DE FERNANDO VII**

EXCLUIDO DE PRESTAMO

TOMO I



BIBLIOTECA
DE DERECHO

José María Puyol Montero

Madrid, 1992

Colección Tesis Doctorales. N.º 260/92

© José María Puyol Montero

Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía.
Escuela de Estomatología. Ciudad Universitaria.
Madrid, 1992.

Ricoh 3700

Depósito Legal: M-29106-1992

na X-53-086664-0



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

SECRETARÍA DE ALUMNOS

La Tesis Doctoral de D. José María PUYOL.....
MONTERO.....
Titulada " EL CONSEJO REAL DE CASTILLA EN EL REINADO
DE FERNANDO VII"
Director Dr. D. José SANCHEZ-ARCILLA BERNAL
fue leída en la Facultad de DERECHO
de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, el día 24...
de septiembre..... de 19 91., ante el tribunal
constituido por los siguientes Profesores:
PRESIDENTE D. GUTIERRO VILLAPALCA VALLA.....
VOCAL D. FERRER JUANES VERAQUEN
VOCAL D. ENA MONTAÑO FERRIN
VOCAL D. FELICIANO RABIN PINTADO
SECRETARIO D. ROBERTO PEREZ PRATAJANTE

.....
habiendo recibido la calificación de .. APTO. CON LAUDE
... POR UNANIMIDAD

Madrid, a 20 de septiembre de 1991

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL.

Sechda. Zytuda 6

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL DERECHO

EL CONSEJO REAL DE CASTILLA EN EL REINADO DE FERNANDO VII

(TOMO I)

TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR
JOSÉ MARÍA PUYOL MONTERO

DIRIGIDA POR EL DR. D. JOSÉ
SANCHEZ-ARCILLA BERNAL,
CATEDRÁTICO DE HISTORIA DEL
DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID.

TABLA DE ABREVIATURAS

ACD	Archivo del Congreso de los Diputados
AGP	Archivo General de Palacio
AGS	Archivo General de Simancas
AHDE	Anuario de Historia del Derecho Español
AHN	Archivo Histórico Nacional
AMAE	Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores
AMJ	Archivo del Ministerio de Justicia
AVM	Archivo de la Villa de Madrid
BAE	Biblioteca de Autores Españoles
BAM	Biblioteca del Ateneo de Madrid
BCD	Biblioteca del Congreso de los Diputados
BCE	Biblioteca del Consejo de Estado
BN	Biblioteca Nacional
BPR	Biblioteca del Palacio Real
BS	Biblioteca del Senado
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas
FUE	Fundación Universitaria Española
HM	Hemeroteca Municipal
IEA	Instituto de Estudios de la Administración
IEAL	Instituto de Estudios de la Administración Local
IEP	Instituto de Estudios Políticos
INAP	Instituto Nacional de la Administración Pública
RAH	Real Academia de la Historia
REP	Revista de Estudios Políticos
SHA	Symposium de Historia de la Administración
SHM	Servicio Histórico Militar
SIEA	Symposium del Instituto de Estudios de la Administración
UCM	Universidad Complutense de Madrid

INDICE

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	6
II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.....	26
1. El Consejo en 1808. La abdicación de Carlos IV y la llegada al trono de Fernando VII.....	28
2. El Consejo de Castilla y la Junta de Gobierno..	50
3. El Consejo de Castilla en el primer reinado de José I.....	109
4. El Consejo de Castilla y las Juntas Provinciales La Junta Central Suprema y gubernativa.....	154
5. Supresión del Consejo de Castilla por Napoleón.	234
6. Supresión de los Consejos y creación del Consejo y Tribunal Supremo de España e I. (Consejo reunido).....	269
7. Restablecimiento de los Consejos (1810).....	278
8. El Consejo de Castilla desde 1810 hasta la promulgación de la Constitución de 1812 y su supresión.....	283
9. Restablecimiento del Consejo de Castilla en la etapa 1814-1820.....	325
10. Supresión del Consejo de Castilla al restablecerse la Constitución de 1812 en 1820..	384
11. El Consejo de Castilla en la década 1823-1833..	394
12. Supresión definitiva del Consejo en 1834.....	502
III. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSEJO.....	515
IV. COMPETENCIAS.....	524
a) Competencias del Consejo.....	526
b) Competencias de la Sala de Alcaldes.....	580
c) Funcionamiento del Consejo.....	588
d) Funcionamiento de la Sala de Alcaldes.....	629

V. ESTRUCTURA ORGANICA	638
1) Gobernador del Consejo.....	640
2) Decano.....	676
3) Consejeros.....	683
4) Fiscales.....	750
5) Escribanos de Gobierno.....	776
6) Escribanos de Cámara.....	792
7) Relatores.....	840
8) Agentes Fiscales.....	893
9) Archiveros.....	919
a) Superintendente.....	920
b) Archivero.....	925
c) Oficiales de Archivo.....	931
10) Porteros.....	936
a) de Cámara.....	938
b) de Estrados.....	959
c) habilitado.....	967
d) de Escribanía de Gobierno.....	970
11) Otros subalternos.....	974
a) Capellán.....	975
b) Ayuda de oratorio.....	981
c) Mozo de estrados.....	983
d) Tasador General de Pleitos.....	986
e) Registrador del Sello.....	991
f) Impresor.....	995
g) Contadores y Receptor de Penas de Cámara..	998
h) Relojero.....	1001
12) Empleados de Escribanía.....	1002
a) Oficiales.....	1003
b) Escribientes.....	1037
c) Repartidor de Pleitos.....	1046

V. ESTRUCTURA ORGANICA (cont.)

13) Sala de Alcaldes de Casa y Corte.....	1054
1) Gobernador.....	1056
2) Alcalde Decano.....	1063
3) Alcaldes.....	1065
4) Otros empleados de la Sala.....	1079
a) Fiscales.....	1079
b) Agentes Fiscales.....	1082
c) Escribanos.....	1084
d) Relatores.....	1087
e) Escribanos Oficiales.....	1089
f) Porteros.....	1091
g) Alguaciles.....	1093
h) Otros subalternos.....	1096
14) Dotación material del Consejo.....	1097
a) Palacio de los Consejos.....	1098
b) Otros establecimientos.....	1108
c) Archivos del Consejo.....	1112
d) Archivo de la Sala de Alcaldes.....	1133
e) Biblioteca.....	1049

VI. PERSONAL RELACIONADO CON LA LABOR DEL CONSEJO....1143

1) Abogados.....	1145
2) Procuradores.....	1160
3) Receptores.....	1178
4) Agentes en Corte.....	1188

VII. EL CONSEJO Y TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA E INDIAS (CONSEJO REUNIDO).....1192

VIII. CATALOGO DE CONSEJEROS Y FISCALES.....1226

IX. CONCLUSIONES.....1275

X. FUENTES BIBLIOGRAFICAS.....1277

XI. FUENTES DOCUMENTALES.....1304

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

A. Escasez de bibliografía referente al Consejo de Castilla. Valoración de la misma.

El Consejo Real de Castilla no ha sido nunca objeto de un estudio histórico-jurídico completo. Se han escrito algunas excelentes monografías que analizan aspectos parciales de esta institución, limitados en el espacio temporal, o en otros aspectos históricos o institucionales. Sin embargo no hay todavía una buena monografía que nos dé una visión completa de la evolución, organización y funcionamiento de esta institución central de la Monarquía hispánica en sus cuatro siglos y medio de existencia.

1. Esta carencia no afecta sólo al Consejo Real. Se da también en los demás Consejos de la Monarquía, por lo general insuficientemente estudiados todavía. Los Consejos han sido objeto en mayor o menor medida de algunos trabajos historiográficos, casi todos ellos en el siglo XX. Algunos estudian el sistema polisinodial en general o varios de aquellos Consejos. Aquí se encuentran entre otras las obras de Torreanaz', Alcocer Martínez' o F. Barrios'.

' TORREANAZ, Conde de, "Los Consejos del Rey durante la Edad Media", dos tomos, Madrid 1884.

' ALCOCER MARTÍNEZ, M., "Consejos: Real de Castilla, de Cruzada, Supremo de Inquisición", Imprenta Casa Social Católica, Revista Histórica de Valladolid, 1925.

' BARRIOS, F., "Los Reales Consejos. El gobierno central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII", Universidad Complutense de Madrid, 1988.

Sin embargo, la mayor parte de los estudios sobre el régimen de Consejos tienden a concretarse en parcelas aún más delimitadas: tanto en el tiempo -un siglo, un reinado, un momento histórico- como en el objeto material -un Consejo, una figura de su estructura orgánica-. Por tanto, aunque hay un cierto número de estudios monográficos sobre la historia general o parcial de un Consejo, o sobre alguno de sus aspectos institucionales, son en todo caso insuficientes. Los Consejos son poco conocidos todavía.

2. Sobre el Consejo Real de Castilla hay varios trabajos valiosos que estudian su organización y funcionamiento. Por el contrario, muy pocas publicaciones han pretendido dar una visión global de la institución a lo largo de su historia. Sólo una lo ha intentado, "El antiguo Consejo Real de Castilla", de R. Gibert. Otra importante monografía de S. de Dios también hace un estudio completo de la institución, aunque su ámbito temporal queda circunscrito a los orígenes y etapa medieval del Consejo (1385-1522)".

La historia general del Consejo queda también en parte reflejada en una recopilación de las ordenanzas del Supremo Tribunal y otros decretos y escritos, que han sido recogidas y publicadas por Salustiano de Dios en "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla".

El resto de la bibliografía relativa al Consejo es parcial, limitada por su materia o por su periodo de estudio. Sabemos que en el Antiguo Régimen fueron escritos un cierto número de trabajos sobre el Consejo Real. Algunos de ellos no han llegado a nosotros o son de difícil localización por ser fuentes manuscritas o por su propia antigüedad. Entre ellos cabe mencionar obras como las de

Para bibliografía sobre los Consejos puede verse BARRIOS, F., "El Consejo de Estado de la Monarquía Española 1521-1812", Madrid 1984 y la bibliografía allí contenida.

Nos referimos al trabajo de S. de Dios, "El Consejo Real de Castilla" (DE DIOS, S., "El Consejo Real de Castilla", C.E.C., Madrid 1982), y a la de R. Gibert "El Antiguo Consejo Real de Castilla" (GIBERT, R., "El Antiguo Consejo Real de Castilla", Ediciones RIALP, Madrid 1964). Aunque de reducida extensión y centrada en el Consejo Bajomedieval, "El Antiguo Consejo de Castilla", supone un certero análisis de la figura y papel del Consejo de Castilla. En ella R. Gibert acierta al comentar con gran intuición la heroica conducta del Supremo Tribunal en 1808.

"Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", obra publicada por la Diputación de Salamanca en 1986.

Elizondo, Macanaz', Salazar y Castro", Riol' o Cantos Benítez'', trabajos todos ellos que analizan la creación y autoridad de este Supremo Tribunal, con la particularidad de haber sido escritas por contemporáneos del Consejo.

Al repasar las fuentes bibliográficas sobre la historia del Consejo se observa que ésta es poco conocida. Por otro lado, la mayoría de estos trabajos se refieren a acontecimientos del reinado de Fernando VII. Acerca de este periodo (1808-1833), el estudio más completo sobre nuestro Consejo -el de Desdevises-, se limita al año 1808. Tan sólo un artículo de la M.I. Cabrera Bosch centra su investigación en la vida del Consejo Real bajo Fernando VII''.

Sobre la conducta del Consejo en el azaroso año de 1808 publicó G.Desdevises du Dezert'', en vísperas del Centenario de la Guerra de la Independencia, "Le Conseil de Castille en 1808". Esta magnífica obra resumía una parte de la documentación conservada en el Archivo Histórico

'. MACANAZ, M. de, "Explicación jurídica e histórica de la consulta que hizo el Real Consejo de Castilla al Rey Nuestro Señor, sobre lo que S.M. le sirvió preguntarle y se expresa en esta obra con los motivos que dieron causa para la Real pregunta y la respuesta. Y defensa legal de una de las principales partes, que componen el todo de la soberanía de S.M.", Semanario Erudito de Valladares, Madrid 1788.

". "Institución, origen y autoridad del Consejo de Castilla", Madrid.

°. "Informe que hizo Su Majestad en 16 de junio de 1726 sobre la creación, erección e institución de los Consejos y Tribunales...", en Semanario Erudito de Valladares, III, Madrid 1727. Otra obra suya es "Noticia general de todos los archivos y papeles pertenecientes a los Consejos y Audiencias de España", Madrid 1726.

°. CANTOS BENÍTEZ, P., "Escrutinio de maravedises y monedas de oro antiguas, su valor, reducción y cambio a las monedas corrientes, deducido en escrituras, leyes y pragmáticas antiguas y modernas de España", Marín, tomo IV, Madrid 1763.

°. "Consejo Real de Castilla, legislación y revolución liberal, 1808-1834", en la Revista de las Cortes Generales, núm. 11 (1987), oct.-dic., págs. 125 a 155.

°. Desdevises ha sido uno de los mejores historiadores del Consejo Real de Castilla. Entre sus obras dedicadas exclusivamente al Consejo cabe mencionar "Le Conseil de Castille en 1808" (Revue Hispanique, 1/ (1907), págs. 66 a 378); "Le Conseil de Castille au XVIIIe. siecle", Revue Historique, 79 (1902).

Nacional y daba a conocer el fascinante episodio del enfrentamiento del Consejo con el invasor francés y otros muchos datos sobre la institución". Casi contemporánea de esta obra fue una breve tesis doctoral que tenía por objeto otro episodio del Consejo: la negativa de este Tribunal a jurar el Estatuto de Bayona. Fue publicada por M. Pérez Búa" en 1911.

Monografías sobre aspectos parciales de las competencias del Consejo podemos destacar la de Serrano Sanz" y como guías la de Jiménez Embún y González Palencia"; y la de este último autor y Varón Vallejo". Para conocer los orígenes, competencias y autoridad del Consejo en su primera época contamos también con el trabajo de J. Sánchez-Arcilla sobre la administración de la justicia real en la Edad Media". Sin embargo, de forma colateral otros muchos autores han tocado aspectos de la naturaleza y atribuciones de este Supremo Consejo Regio.

En cuanto a su estructura orgánica, no es mucho mejor conocida que su historia. Varios autores han investigado, por ejemplo, sobre los miembros de la institución y sus empleados. Entre ellos destaca la obra de la historiadora francesa Janine Fayard, gran especialista en

".. Sobre esta misma temática publicó también A. Martínez de Velasco un breve pero riguroso trabajo: "El Consejo de Castilla y el poder francés", en La Guerra de la Independencia (1808-1814 y su momento histórico", tomo I, III Ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander (octubre, 1979), Centro de Estudios Montañeses, Diputación Regional de Cantabria, Santander 1982.

".. Esta obra tiene el mérito de acompañar también una interesante bibliografía sobre el Consejo de Castilla. Fue publicada por Pérez Búa con el título "Publicación y juramento de la Carta otorgada de Bayona por el Consejo de Castilla". Sevilla 1911. Se apoya fundamentalmente en la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional y en la correspondencia oficial de las autoridades francesas.

".. "El Consejo de Castilla y la censura en el XVIII", R.A.B., tomo XV, Madrid 1906.

".. "Consejo de Castilla. Índice de los pleitos sobre mayorazgos, estados y señorios", Madrid 1957.

".. "Consejo de Castilla. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Catálogos por materias", Madrid 1925.

".. SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., "La administración de la justicia real en León y Castilla (1252-1505)", U.C.M., Madrid 1980.

los Ministros del Consejo en la Edad Moderna"; otras publicaciones son la de Gan Giménez sobre los Presidentes de Castilla" en la Edad Moderna"; o un trabajo de A. López Gómez" sobre la figura del Escribano de Cámara del Consejo. Y parece que no hay nada más publicado en lo que se refiere a los miembros y empleados del Consejo, salvo unas obras del siglo XVIII escritas por prácticos del Derecho.

Otros aspectos de la estructura orgánica del Consejo Real han sido objeto de investigación. Sobre el Archivo del Consejo hay un interesante trabajo del que ha sido director del Archivo Histórico Nacional, J.A. Martínez Bara".

29. "Fortune et hierarchie au Conseil de Castille aux XVI^e et XVII^e siècles: les Arce et les Medrano", en Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas, Santiago de Compostela 1975, III, 542 y ss.; "Les membres du Conseil de Castille à l'époque moderne (1621-1746)", Ginebra-Paris 1979; la edición española "Los Ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788). Informes biográficos", Revista Hidalguía núms. 162 (1966) a 171 (1982), C.S.I.C., Madrid 1980-1982; "Los Miembros del Consejo Real de Castilla (1746-1788)", Cuadernos de Investigación Histórica 6, págs. 109-136, F.U.E., Madrid 1982, en un momento cronológica más limitado y recogiendo las reformas introducidas por Felipe V en el Consejo, está "La tentative de réforme du Conseil de Castille sous le règne de Philippe V (1713-1715)", en Melanges de la Casa de Velázquez, tomo II (1966), págs. 259-282. La misma J. Fayard comienza el prólogo de "Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)" señalando la escasez bibliográfica de trabajos sobre el Consejo de Castilla: "Estudiar el grupo social formado por los miembros del Consejo de Castilla, cuando se ignora todo o casi todo acerca del funcionamiento y de la actividad jurídica, administrativa y política de esta gran institución, podría parecer un desafío..." (FAYARD, J., op. cit., pág. 1).

30. "Los Presidentes del Consejo de Castilla (1500-1560)", Chronica Nova, Universidad de Granada, I, 1968.

31. Cabe mencionar también el trabajo de V. CASTAÑEDA sobre los Consejeros en el año 1637: "Aportación sobre la biografía española: El Consejo de Castilla en 1637", en B.R.A.H., CXVI (1945), págs. 315 a 324.

32. "Los Escribanos de Cámara (justicia y gobierno) del Consejo de Castilla", Hidalguía, 1969, núm. 212, págs. 119-143.

33. "Visicitudes del Archivo del Consejo de Castilla en los siglos XVIII y XIX", en Actas del II S.H.A., págs. 357 a 382, I.E.A., Madrid 1974. Aprovecha la documentación sobre el particular conservada en aquel Archivo, en especial el legajo 17.774 con el epígrafe "Archivo Antiguo del Consejo".

La peculiaridad de que dos importantes instituciones como el Consejo de Estado y Capitanía General de Madrid tengan su sede material en el Palacio de los Duques de Uceda o Casa de los Consejos, ha hecho objeto a este noble edificio de algunos artículos históricos o arquitectónicos. Podemos mencionar entre otros los breves trabajos de Tovar Martín", Martín Artajo" y el de Libreros Salvador". Sobre el edificio que ocupaba la Sala de Alcaldes, el Palacio de Santa Cruz, cabe mencionar entre otras la obra del Conde de Altea".

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte estaba conceptuada como Quinta Sala del Consejo de Castilla, aunque en la práctica era una institución peculiar dependiente del propio Consejo. La Sala también ha sido objeto de algún estudio monográfico, aparte de los interesantes capítulos que le dedica entre otros Martínez de Salazar en su obra "Noticias del Consejo" o Tapia en su "Febrero Novísimo". R.I. Sánchez Gómez ha hecho recientemente un trabajo breve sobre esta institución en el reinado de Carlos II", y también J.L.Bermejo" ha publicado un artículo sobre algún aspecto parcial de la Sala.

Finalmente hay que citar una última monografía, aunque no estudia propiamente el Consejo de Castilla sino otra institución emparentada con éste. Nos

""El Palacio del Duque de Uceda en Madrid: un edificio capital del siglo XVII", en Revista Reales Sitios, Patrimonio Nacional, año XVII núm. 64, II Trimestre 1980, págs. 37 a 44.

""El Palacio de los Consejos", Revista Reconstrucción, año 1945 núm. 50, págs. 33 a 35, Biblioteca del Consejo de Estado, caja 8 núm. 101.

""Capitanía General de Madrid", Revista Reconquista, págs. 16 y 17, Madrid, febrero 1984.

"ALTEA, Conde de, "Historia del Palacio de Santa Cruz (1629-1983)", Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid 1983.

""Estudio institucional de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante el reinado de Carlos II", Ministerio del Interior, Madrid 1989.

""Dos notas sobre la Sala de Alcaldes de Casa y Corte", Estudios de Historia del Derecho y de las Instituciones, págs. 177 a 186, Universidad de Alcalá de Henares, 1989.

referimos al trabajo de J. Sánchez-Arcilla", "El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1809-1810) (Notas para su estudio)" que describe en términos generales este desconocido 'Consejo reunido' que durante cerca de dos años reunió en una sola institución a varios de los Consejos de la Corte de Cádiz, entre ellos el Supremo de Castilla.

Hasta aquí los trabajos conocidos que se refieren directamente al Consejo Real de Castilla, global o parcialmente. Como vemos, su número es reducido y su temática bastante limitada. Por ello mismo, para conocer más datos sobre el Consejo es preciso acudir a otro tipo de fuentes impresas.

3. Son abundantes las obras históricas de carácter general que dedican algunas páginas a la figura del Consejo de Castilla. Entre otras obras generales sobre la Administración del Antiguo Régimen debemos mencionar varias escritas en el siglo XIX: las de Hamel", M. Colmeiro", Fernández Martín" y J. Beneyto". Manuales modernos que al estudiar las instituciones del Antiguo Régimen se refieren al Consejo Real de Castilla se encuentran entre otros los de los profesores A. García Gallo, L. G. de Valdeavellano" - limitado hasta el siglo XV-, J.M. Pérez Prendes", J.A. Escudero" y el elaborado conjuntamente por los

"El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1809-1810) (Notas para su estudio)", en el volumen En la España Medieval, V, Estudios en Memoria del prof. D. Claudio Sánchez Albornoz, v. II, págs. 1033 a 1050, Universidad Complutense, Madrid 1986.

"La Historia Constitucional de la Monarquía Española (411-1833)", tomos I y II, Madrid 1848.

"De la constitución y del gobierno de los reinos de León y Castilla", 2 vols., Librería de D. Angel Calleja, Madrid 1855; y "Derecho Administrativo Español", Madrid 1865.

"Derecho Parlamentario Español", 3 tomos, Madrid 1885 y 1900.

"Historia de la Administración española e hispanoamericana", Madrid 1958.

GARCIA DE VALDEAVELLANO, "Curso de las instituciones españolas desde los orígenes al final de la Edad Media", Revista de Occidente, Madrid 1968.

"Apuntes de Historia del Derecho Español", Madrid 1964.

"Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas", Madrid 1985.

catedráticos E. Montanos Ferrín y J. Sánchez-Arcilla y Bernal".

4. También aportan datos de interés sobre el Consejo otras monografías con motivos históricos o histórico-jurídicos. Entre los estudios sobre el reinado de Fernando VII los más abundantes son sin duda los relativos al año 1808: el Motín de Aranjuez, el Dos de Mayo, el estallido de la Guerra de la Independencia en toda España, los sucesos de Bayona y su Estatuto, el breve primer reinado de José Bonaparte, las juntas provinciales y la formación de la Central, especialmente.

a) En primer lugar, tienen un indudable interés las historias políticas sobre el reinado de Fernando VII. Muchas de ellas escritas por contemporáneos, como las muy conocidas del Conde de Toreno", la tradicionalmente atribuida a E.K. Bayo", "Historia de la vida y reinado de Fernando VII", o la de M. Marliani, "El reinado de Fernando VII". Entre las más modernas destaca sin duda la monumental obra de de M. Artola, "La España de Fernando VII".

b) Sobre episodios o momentos de este reinado, las obras son también relativamente abundantes. "El Motín de Aranjuez"; o de J. Pérez de Guzmán, "El dos de mayo de 1808 en Madrid". La Constitución de Bayona y su momento histórico fue estudiada también por sus contemporáneos. Aparte de la mencionada de Pérez Búa, cabe mencionar una conocida obra que Sanz Cid publicó en 1874" y las llamadas "Actas de la Diputación General de Españoles

".. "Historia del Derecho y de las Instituciones", 2 tomos, Madrid 1991, obra de muy reciente aparición.

".. QUEIPO DE LLANO, J.M., Conde de Toreno, "Historia del levantamiento, guerra y revolución de España", 3 tomos, Madrid 1835-1837. También aparece publicado en la B.A.E., tomo LXIV, Madrid 1953.

".. BAYO, E.K., "Historia de la vida y reinado de Fernando VII", 3 tomos, Imprenta Repullés, Madrid 1842.

".. De menos valor histórico para nuestro estudio es la apasionada obra de M. Marliani, "El reinado de Fernando VII, y otras como el "Ensayo imparcial sobre el gobierno del Rey don Fernando VII escrito en Madrid por un español en mayo del presente año", publicado por J.P. JACOB en Versalles en 1824.

".. "La Constitución de Bayona", Edt. Reus, Madrid 1922.

que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808"". También los problemas de la formación de un gobierno único tras la retirada francesa de Madrid en agosto de 1808 han sido estudiados por A. Martínez de Velasco".

Sobre los momentos difíciles de la Guerra de la Independencia, otros escritos valiosos son el de J.G. del Moral"; el de J. Muñoz Maldonado"; la obra francesa "Memoires historiques sur la Révolution d'Espagne", de M. Pradt"; y los escritos del diputado de las Cortes de Cádiz J.L.Villanueva". Podemos mencionar también las obras de J.C. Carnicero", F. Martínez de la Rosa", los trabajos del P. Salmón" y la "Historia de la Guerra de España contra

.. "Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808", Madrid 1874. De principios de este siglo es una breve obra de I. de Lizaur (LIZAUR Y LACAVE, I. de, "La Carta Otorgada de 1808", Imprenta Helénica, Madrid 1916).

.. "La Formación de la Junta Central", EUNSA, Pamplona 1972.

.. MORAL, J.G. del, "Memorias de la guerra la Independencia y de los sucesos posteriores (1808-1825)", publicadas por don Pedro Aguado Bleye, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid 1907.

.. "Historia política y militar de la Guerra de la Independencia de España contra Napoleón Bonaparte desde 1808 a 1814", 3 vols., Madrid 1833.

.. PRADT, M., "Memoires historiques sur la Révolution d'Espagne", París 1816.

.. "Apuntes sobre el arresto de los vocales ejecutado en mayo de 1814, suscritos en la cárcel de la Corona por el diputado Joaquín Lorenzo Villanueva, uno de los presos", Madrid 1820; y "Mi viaje a las Cortes", en Memorias de tiempos de Fernando VII", B.A.E., tomo xcVIII(2), págs. 1-440, Madrid 1957.

.. "Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de España", Imprenta de don M. de Burgos, 4 tomos, Madrid 1814.

.. "La Revolución actual de España. Epoca primera: desde principio de la insurrección hasta la instalación de la primera Regencia", Madrid 1814.

.. "Resumen histórico de la Revolución de España. Año de 1808", Madrid 1820.

Napoleón Bonaparte"" , mandada hacer en 1818 por el mismo Fernando VII.

Alguno de los abundantes estudios históricos sobre las Cortes de España en el XIX y en especial sobre las Cortes de Cádiz nos dan noticias de interés sobre el Consejo Real de Castilla. No olvidemos que las Cortes sometieron a proceso al Consejo de Castilla y terminaron suprimiéndolo en 1812. Podemos mencionar entre otras las excelentes obras de M. Fernández Martín", M. Calvo Marcos", y de las últimas décadas de este siglo dos magníficas aportaciones de F. Suárez" sobre las Cortes gaditanas. También es de necesaria consulta la importante obra de Diz-Lois sobre las Actas de la Comisión de Constitución".

Sobre la España napoleónica aportan datos de interés sobre el Consejo los escritos del Marqués de Villaurrutia", la historia del historiador francés afincado en España Claude Martín"; y las dos conocidas obras de J. Mercader Riba" sobre el Rey José I.

Más escasos son los trabajos sobre el periodo 1814-1833. Entre otros cabe destacar las obras de Le Brun"

"Historia de la Guerra de España contra Napoleón Bonaparte", 3 tomos, Madrid 1818.

"Derecho parlamentario español", 3 tomos, Madrid 1885 y 1900. Esta obra hace un interesante repaso histórico del los avatares políticos a través de los decretos, bandos, providencias y otras disposiciones normativas dictadas por las autoridades gubernativas.

"Régimen parlamentario de España en el siglo XIX. Apuntes y documentos para su historia", Madrid 1883.

F. SUAREZ VERDEGUER. "Las Cortes de Cádiz", RIALP, Madrid 1982; y "El proceso de la convocatoria a Cortes", Pamplona 1982.

"Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813)", Madrid 1976; y "El Manifiesto de 1814", Pamplona 1967.

"El Rey José Napoleón", Madrid 1927.

"José Napoleón I. Rey intruso de España", Editora Nacional, Madrid 1969.

"José Bonaparte. Rey de España. 1808-1813. Historia interna del reinado", C.S.I.C., Madrid 1971; y "José Bonaparte, Rey de España. 1808-1813. Estructura del Estado español bonapartista", C.S.I.C., Madrid 1983.

"Retratos políticos de la Revolución de España", Filadelfia 1826.

y M. Artola"; las conocidas publicaciones del Marqués de Villaurrutia: "Fernando VII Rey constitucional", y "Fernando VII, Rey Absoluto"; y el estudio de M.C. Pintos Vieites "La política de Fernando VII entre 1814 y 1820".

5. Los estudios sobre la Administración y sus instituciones en aquel periodo son asimismo relativamente abundantes, al igual que los trabajos sobre nuestra Administración en el Antiguo Régimen.

En vida del Supremo Tribunal fue escrito por Martínez Marina un trabajo jurídico -su "Teoría de las Cortes- que dedica algunas páginas a la naturaleza, autoridad y facultades de esta institución. Para el conocimiento de los empleados públicos en el siglo XVIII nos es igualmente de gran utilidad la obra monumental y clásica de Dou y Bassols, "Instituciones de Derecho Público General de España con noticia del particular de Cataluña".

Otros estudios sobre aspectos institucionales del Antiguo Régimen son ya más recientes. Son especialmente valiosos los de Desdévise du Dezert sobre las Instituciones

.. "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", Ariel Historia, Madrid 1978; "Orígenes de la España Contemporánea", 2 tomos, Madrid 1959; tomo XXVI de "Historia de España Menéndez Pidal, "La España de Fernando VII", Espasa Calpe S.A., Madrid 1968; "La burguesía revolucionaria (1808-1874)", Madrid 1981; "Los afrancesados", Edt. Turner, Madrid. También en la B.A.E., en "Memorias de tiempos de Fernando VII", tomo XCVII, aparece un interesante estudio preliminar sobre el reinado de Fernando VII, págs. V y ss., Madrid 1957.

.. "Fernando VII, Rey Constitucional. Historia diplomática de España 1820-1823", Madrid 1915; y "Fernando VII, Rey Absoluto. La ominosa década de 1823 a 1833", Fernando Beltrán Librería, Madrid 1931.

.. Sus dos obras principales son "Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla", Imprenta de la Hija de D. Joaquín Ibarra, Madrid 1808; "Teoría de las Cortes o grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo", Madrid 1820, tres tomos, reeditado por J.M. Pérez Prendes en 1979. Concretamente se refieren al Consejo Real el capítulo IX, del tomo I; y los capítulos XX al XXIX del tomo II.

.. "Instituciones de Derecho Público General de España con noticia del particular de Cataluña", tomos 2 y 3, Madrid 1801, reeditado por Banchs Editor, Barcelona 1975.

de España en el siglo XVIII" o un interesante estudio de J. Lalinde Abadía".

Sobre la Administración en el reinado de Fernando VII, podemos mencionar los trabajos de A.M. Barrero" y A. Nieto", sin dejar de citar las importantísimas obras de F. Suárez" y J. Fontana".

Los orígenes del Tribunal Supremo, institución estrechamente emparentada con el Consejo de Castilla, ha sido estudiado por de L. Moreno" en una meritoria obra. Su trabajo aporta nuevas luces sobre la institución que sucedió al Consejo de Castilla en 1812. Finalmente, varios trabajos complementan el estudio de la supresión definitiva del Consejo y su sustitución por un nuevo engranaje institucional. Esta materia ha sido

"Les Institutions de l'Espagne au XVIII^eme. Siecle", Paris; y "La España del Antiguo Régimen", F.U.E., Madrid 1989.

"Los medios personales de gestión del poder público en la Historia de España", en Estudios de Historia de la Administración, I.E.A., Madrid 1970.

"BARRERO GARCÍA, A.M., "La materia administrativa y su gestión en el reinado de Fernando VII", en Actas del IV S.H.A., págs. 71 a 92; también en A.H.D.E., tomo LIII, págs. 395 a 421, I.N.E.J., Madrid 1983.

"NIETO, A., "Los orígenes de lo contencioso-administrativo en España", en Revista de Administración Pública, núm. 50; "Estudios históricos sobre la Administración y el Derecho Administrativo", en Colección de Estudios de Historia de la Administración, I.N.A.P., Madrid 1986; y los "Apuntes para una historia de los autores de Derecho administrativo Español", en 34 artículos seleccionados de la Revista de Administración Pública con ocasión de su centenario, Madrid 1983.

"De F.SUAREZ VERDEGUER, gran experto en el reinado de Fernando VII, aparte de las ya mencionadas, podemos citar "La creación del Ministerio del Interior en España", en A.H.D.E., núm. 19 (1948-1949), págs. 15 a 56; "La crisis del Antiguo Régimen en España", RIALP, Madrid 1988; y "Notas sobre la Administración en el reinado de Fernando VII", en Actas del I S.H.A., págs. 441-460, I.E.A., Madrid 1970.

"La crisis del antiguo Régimen, 1808-1834", Barcelona 1983; y "La quiebra de la Monarquía Absoluta (1814-1820)", Barcelona 1971.

"Orígenes del Tribunal Supremo de Justicia", Ministerio de Justicia, Madrid 1990.

analizada por F. Arvizu" y por I. Sánchez-Bella".

6. Otra fuente importantísima para conocer el Consejo es la literatura jurídica de la época: los libros escritos por los propios empleados del Consejo o por prácticos del Derecho, como manuales o formularios jurídicos. Todos ellos carecen de una finalidad divulgativa y buscan recoger la práctica del Supremo Tribunal. Tienen por tanto el mérito de proporcionar información sobre una institución viva, ya que la obra estaba destinada a su uso por los propios empleados del Consejo. A ello añadimos el dato importante de que estas obras fueron escritas por contemporáneos del Consejo Real.

El trabajo más antiguo de los de esta clase que conocemos es una obra de J. de Moriana titulada "Discursos sobre el Consejo y Ceremonial del mismo", y que ha sido recientemente publicado por S. de Dios en la ya mencionada recopilación de fuentes sobre el Consejo. En aquella obra, Moriana hacía una descripción de algunos aspectos del funcionamiento de esta institución en el siglo XVII. En los siglos XVIII y XIX este libro fue de uso habitual en el Consejo de Castilla y así en muchos de sus expedientes aparecen referencias al libro de Moriana.

Del siglo XVIII debemos mencionar varias obras importantes sobre el Consejo Real. La primera cronológicamente es la conocida obra de A. Martínez de Salazar "Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo", libro publicado en 1764 y que es sin duda el mejor trabajo monográfico publicado hasta la fecha sobre la estructura orgánica del Consejo de

"ARVIZU, F., "El Consejo Real de España e Indias(1834-1836)". Actas del III S.H.A., I.E.A., págs. 387 a 408, Madrid 1974.

"SANCHEZ-BELLA, I., "La Reforma de la Administración Central en 1834", en Actas del III S.H.A., págs. 659 a 688, Madrid 1974.

"MORIANA, J., "Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo. Discursos generales y particulares de el gobierno general y político de el Consejo Real y Supremo de Justicia de estos Reynos de Castilla y León y ceremonias de él, adverbidos por Juan de Moriana, Portero de Cámara de S.M., que sirve en el mismo Consejo, y en el de la Cámara y estado de Castilla, desde el año 1614 hasta el de 1654, que es cuando se cerró", publicado por S. DE DIOS en "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", documento XXXIX, págs. 217 a 349, Salamanca 1986.

Castilla". Incluye también algunos aspectos del ceremonial y funcionamiento del primer Tribunal de la Corte. Unos años después, en 1787, el abogado de los Reales Consejos, don Antonio Sáchez Santiago, publicaba su "Idea elemental sobre los Tribunales de la Corte en su actual estado y última planta", en la que dedicaba buena parte del tomo segundo al estudio del 'Consejo Real y Supremo de Su Magestad'. Esta obra aporta ideas interesantes sobre la naturaleza y competencias del Consejo y, como señalaba el mismo autor, es un complemento a la obra de Martínez de Salazar. Sin embargo, la mejor obra sobre la labor ordinaria del Consejo y sus competencias es otra obra del siglo XVIII, en dos tomos, escrita también por otro de sus empleados, don Pedro Escolano de Arrieta", en 1796. El Escribano Escolano de Arrieta describió en esta obra póstuma con gran minuciosidad los entresijos de la labor del Consejo". Entre este grupo de obras debemos incluir también una serie de escritos de práctica procesal publicados a finales del XVIII y

"MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo: lo que se observa en el despacho de los negocios que le competen: regalías, preeminencias y autoridad de este Supremo Tribunal, y las pertenecientes a la Sala de Señores Alcaldes de Casa y Corte", Madrid 1764. En esta conocidísima obra se recoge una descripción detallada de los distintos ministros y subalternos del Consejo y sus funciones y cometidos. Es de imprescindible consulta para conocer la organización y funcionamiento del Consejo de Castilla.

"SANCHEZ SANTIAGO, A., "Idea elemental de los Tribunales de la Corte en su actual estado, y última planta", tomo II, Imprenta Real, Madrid 1787. Este volumen comprende "los Consejos y las Juntas Supremas actuales, y las extinguidas; con una instrucción breve y curiosa a la Juventud, sobre la elocuencia del Tribunal".

"ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos con distinción de los que pertenecen al Consejo pleno, o a cada Sala en particular: y las fórmulas de las cédulas, provisiones y certificaciones respectivas", 2 vols. Madrid 1796.

"Hubo más obras en los siglos XVII y XVIII que estudiaban parcial o totalmente la organización y funcionamiento del Consejo. Entre otras, las fuentes mencionan la existencia de un trabajo del Fiscal de la Real Chancillería de Granada don Francisco Antonio Elizondo. El tomo IV de su "Práctica Universal", fue dedicado al Consejo Real desde la pág. 310. Este trabajo de Elizondo fue escrito también en la segunda mitad del siglo XVIII.

principios del XIX".

7. Finalmente no podemos dejar de mencionar otras fuentes de las que habitualmente se pueden extraer bastantes datos sobre una institución y su entorno político. Nos referimos concretamente a las memorias, los folletos y los periódicos.

a) Documentos de extraordinario valor histórico son las memorias de personajes políticos contemporáneos de Fernando VII y otras crónicas de autores de la época. Estos escritos recogen muchos datos de interés sobre el Consejo y sus protagonistas. Entre otras cabe destacar: las de Azanza y O'Farril²⁰, ministros de José I. Son un interesante testimonio sobre los difíciles días de Aranjuez, la Junta Suprema y el reinado de José I; las muy conocidas del canónigo Escoiquiz²¹, consejero privado de Fernando VII, obra de especial interés para conocer la intervención del Consejo de Castilla en el viaje real a Bayona; o las "Memorias de Cavallos"²², que es igualmente otro de los documentos clave del año 1808.

Otros escritos interesantes son los de Alcalá Galiano²³; los del diputado A. Argüelles²⁴, en los que

²⁰. Entre ellas se incluye el conocido "Febrero Novísimo o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos", 7 tomos, Madrid 1828.

²¹. "Memoria sobre los hechos que justifican su conducta política", Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVIII, Madrid 1957.

²². "Memorias de Escoiquiz. Idea sencilla de las razones que motivaron el viaje del Rey Don Fernando VII a Bayona", en Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVIII, págs. 1-152, Madrid 1957.

²³. "Memorias de Cavallos. exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la Corona de España y los medios que el Emperador de los Franceses han puesto en obra para realizarla", en Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVIII, Madrid 1957.

²⁴. "Memorias de don Antonio Alcalá Galiano publicadas por su hijo", Madrid 1986; y "Recuerdos de un anciano", Madrid 1878.

²⁵. "Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1810 hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones el 14 del propio mes de 1813", Imprenta Charles Wood and Son, 2 tomos, Londres 1835. De Argüelles hay que mencionar también su "Discurso

recuerda los apasionantes momentos de las Cortes de Cádiz; o las memorias del Marqués de Ayerbe". El político J. García de León y Pizarro" escribió un conocido alegato en varios volúmenes. Aunque no aporta grandes datos sobre la figura del Consejo, sirve para comprender el momento político del reinado de Fernando VII. Finalmente y aunque algo posteriores, no debemos dejar de mencionar en este apartado las obras de Mesonero Romanos", que incluyen algunas descripciones interesantes de quien vivió directamente aquellos años difíciles.

Otras memorias han sido publicadas por F. Suárez en la colección Documentos del Reinado de Fernando VII" y describen avatares políticos de los últimos años del reinado de Fernando VII.

De menos interés para nuestro tema objeto de estudio son los llamados memoriales y otros testimonios privados del reinado de Fernando VII. Entre los que hemos localizado, los que aportan más datos sobre la figura del Consejo son manuscritos y no están todavía publicados". Entre los ya publicados, aunque de menos interés, podemos mencionar los recogidos por A. Heredia Herrera" y por J. A.

preliminar de la Constitución de 1812". Madrid 1981.

"Memorias del Marqués de Ayerbe", en Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVIII, Madrid 1957.

"GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, J., "Memorias", Revista de Occidente, 2 tomos, Madrid 1953.

"Memorias de un setentón natural y vecino de Madrid", Madrid 1880; y "El Antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa", tomo I, Madrid 1881.

"Podemos mencionar "Memorias de Arias Teijeiro", 3 tomos, Pamplona 1965 y 1967. Esta obra nos introduce en los entresijos de la política y el gobierno fernandinos; o "Pedro Sáinz de Andino. Escritos", 2 tomos, Pamplona 1968, con interesantes noticias sobre el estado de nuestra Administración.

"Hay algunos interesantes en los Papeles Reservados de Fernando VII, en el A.G.P., y otros han ido apareciendo en la documentación del Consejo conservada en el A.H.N., en especial en la sección de Consejo Suprimidos.

""Los acontecimientos políticos de agosto de 1808 en Madrid, a través de la correspondencia de un testigo ocular", en "La Guerra de la Independencia (1808-1814) y su momento histórico", tomo I, III Ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander (octubre de 1979), Centro de Estudios Montañeses, Diputación Regional de Cantabria, 421 págs.,

Escudero".

b) Otra fuente de datos importante son las colecciones de folletos y otros documentos similares. La Colección del Fraile conservada en el Servicio Histórico Militar incluye varios folletos relativos al Consejo de un enorme interés. Son en la mayoría de los casos obras anónimas en las que se contienen descripciones de sucesos en los que tomó parte el Supremo Tribunal. Mencionaremos de un lado la obra del P. Salmón, "Idea de la causa formada a catorce ministros del Consejo por las Cortes y su sentencia en que se les declara libres de toda culpa y cargo"; y la anónima "Causa fundamental de la extinción del Consejo Supremo de Castilla", ambas obras escritas en el mismo reinado de Fernando VII (año 1812)".

Es importante la colección "Folletos curiosos e interesantes", entre cuyos siete tomos hay un escrito con abundantes noticias del Consejo en el verano de 1808".

Un importante manifiesto fue elaborado por el Fiscal del Consejo don Jerónimo Díez en agosto de 1808 y relataba con bastante detalle la conducta de este Tribunal en los últimos meses de 1807 y la primera mitad de 1808. Es el conocido "Manifiesto de los procedimientos del Consejo Real en los gravísimos sucesos ocurridos desde octubre del año próximo pasado", imprescindible para conocer la historia política del Consejo en 1808. El trabajo queda complementado con otro elaborado por la Junta Superior de Valencia". Este manifiesto, aparte de su indudable valor histórico para

Santander 1982.

.. "Memoriales privados sobre la situación de España en el reinado de Fernando VII", en A.H.D.E., 42 (1972), págs. 331-341.

.. P. SALMÓN, "Idea de la causa formada a catorce Ministros del Consejo por las Cortes y su sentencia en que se les declara libres de toda culpa y cargo", Colección del Fraile núm. 925, Cádiz 1812.

.. "Causa fundamental de la extinción del Supremo Consejo de Castilla", Colección del Fraile núm. 762, Madrid 1812.

.. "Colección 'Folletos curiosos e interesantes'", 7 tomos con folletos de distintos orígenes y fechas, la mayoría de ellos circunscritos cronológicamente al reinado de Fernando VII.

.. "Manifiesto que hace la Junta Superior de Observación y Defensa del Reino de Valencia de los servicios y heroicos esfuerzos prestados por éste desde el día 23 de mayo de 1808"

conocer una valoración sobre la conducta del Consejo, analiza detenidamente la naturaleza y funciones del Consejo Real de Castilla.

c) Por el contrario, los periódicos de la época no nos aportan grandes datos sobre el Consejo Real, ya que la mayor parte se refieren a las etapas liberales del reinado, en las que el Consejo no funcionó.

B. Fuentes documentales

Al contrario que las fuentes bibliográficas, las fuentes documentales sobre el Consejo de Castilla en este periodo son riquísimas y la mayor parte todavía inéditas. Nuestros archivos conservan buena parte de la documentación de este Supremo Tribunal, lo que augura que en un futuro pueda conocerse con el máximo detalle todo lo referente a la institución. Miles de legajos aguardan su estudio por los investigadores, especialmente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. En aquel Archivo destaca muy especialmente la sección de Consejos Suprimidos y, en menor medida, las de Estado, Biblioteca y Fondos Contemporáneos.

La primera alberga toda la documentación de los extinguidos Consejos, entre ellos todos los papeles del Archivo Secreto del Consejo, de sus Escribanías, de la Secretaría de la Presidencia de Castilla y una parte importante de la documentación de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. También dentro de esta Sección de Consejos Suprimidos se conservan los documentos del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo reunido), de los difíciles días de 1808 en Madrid (Sección Invasión Francesa), del Tribunal Supremo de España e Indias y otros muchos legajos.

Para conocer la estructura orgánica del Consejo han sido especialmente valiosos los legajos de la Sala de Gobierno y las consultas de oficio del Consejo. También otras secciones como la de Biblioteca contiene los libros de matrícula de las diferentes secciones y otras publicaciones que formaban parte de la antigua Biblioteca del Consejo.

En otros archivos, quizá el que contiene más documentación más útil para el conocimiento del Consejo de Castilla es el Archivo General de Palacio, en especial los

Papeles reservados de Fernando VII. También hay algunos de estos volúmenes en el Archivo de las Cortes, donde se pueden consultar también algunos expedientes de las Secciones General y la de Cortes de Castilla.

Otros centros de interés documental sobre la materia objeto de esta tesis son la Biblioteca Nacional, el Servicio Histórico Militar; las Bibliotecas de la Real Academia de la Historia, del Congreso y del Senado, donde además se encuentran buenas colecciones de Guías de Forasteros; las Bibliotecas del Consejo de Estado, del Ateneo de Madrid, y la Biblioteca Central de la Universidad Complutense.

De menos interés es el Archivo del Ministerio de Justicia, cuyos expedientes de este periodo fueron remitidos al Archivo Histórico Nacional o se perdieron durante la Guerra Civil; y la Hemeroteca Municipal.

Finalmente mencionamos el Archivo General de Simancas, que si es fundamental para conocer etapas anteriores del Consejo de Castilla, para el reinado de Fernando VII sobre todo ofrece dos tipos de documentación interesante: todo lo referente al Gobierno de José Bonaparte (Gobierno intruso) y la documentación del Consejo Real de España e Indias, que substituyó al Consejo de Castilla en 1834. También ha aparecido algún documento interesante en la Sección de Gracia y Justicia.

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1. El Consejo de Castilla en 1808. La abdicación de Carlos IV y la llegada al Trono de Fernando VII.
2. El Consejo de Castilla y la Junta de Gobierno.
3. El Consejo de Castilla en el primer reinado de José I.
4. El Consejo de Castilla y las Juntas provinciales. La Junta Central Suprema y Gubernativa.
5. Supresión del Consejo de Castilla por Napoleón.
6. Supresión de los Consejos y creación del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo reunido).
7. Restablecimiento de los Consejos (1810).
8. El Consejo de Castilla desde 1810 hasta la promulgación de la Constitución de 1812 y su supresión.
9. Restablecimiento del Consejo de Castilla en 1814. La etapa 1814-1820.
10. Supresión del Consejo de Castilla al restablecerse la Constitución de 1812 en 1820.
11. El Consejo de Castilla en la década 1823-1833.
12. Supresión definitiva del Consejo en 1834.

1. EL CONSEJO EN 1808. LA ABDICACION DE CARLOS IV Y LA LLEGADA AL TRONO DE FERNANDO VII

Con el llamado "Motín de Aranjuez" concluía un largo proceso iniciado en la conspiración de El Escorial en octubre de 1807, y que traería consigo la destitución de Godoy, la abdicación de Carlos IV y la subida al trono de Fernando VII.

El Consejo de Castilla tomó parte activa en el enjuiciamiento del llamado "Complot de El Escorial". Algunos de sus ministros y uno de sus Fiscales formaron parte de la Comisión encargada de enjuiciar aquellos sucesos". Seguro de su triunfo, Godoy había anunciado con

.. Para la prosecución de la causa contra los procesados nombró el Rey el día 6 de noviembre de 1807 una Junta compuesta por don Arias Mon -Decano Gobernador interino del Consejo- y los Consejeros de Castilla don Sebastián de Torres y don Domingo Fernández de Campomanes. El Secretario sería don Benito Arias de Prada, Alcalde de Corte. Una vez formada la sumaria, fue designado Fiscal de la causa don Simón de Viegas, Fiscal de Castilla, y se agregaron a los referidos jueces para dar la sentencia otros ocho Consejeros (siete Consejeros de Castilla y uno de Ordenes). El Fiscal pedía la pena de muerte por traidores para don Juan Escoiquiz y para el Duque del Infantado, y otras penas para los demás. El proceso continuó hasta el 25 de enero de 1808, en que los jueces declararon libres de todo cargo a los acusados. El Rey sin embargo decidió confinar a los Duques del Infantado y de San Carlos y al clérigo Escoiquiz, y de esta manera concluyó el llamado "proceso de El Escorial". Los siete Consejeros de Castilla que fueron agregados a la Junta de Enjuiciamiento fueron don Antonio González Yebra, don Gonzalo José de Vilches, don Antonio Villanueva y Pacheco, el Marqués de

anterioridad a la publicación de las sentencias que habría dos penas de muerte. Sin embargo, la Comisión recomendó la libre absolución y puesta en libertad de los procesados". Sin duda esta resolución supuso un duro revés público para la política del valido Godoy y de su Gobierno".

Comenzaba entonces un periodo de fuertes tensiones políticas entre los partidarios del Príncipe de Asturias y los seguidores del Valido". El Consejo de

Casa-García, don Andrés Lasauca, don Antonio Alvarez Contreras y don Miguel Alfonso de Villagómez. Fueron seleccionados entre los nombres de más prestigio del Consejo de Castilla por el Marqués de Caballero, quien no dudó en elegir a aquéllos que no iban a dejarse intimidar por Godoy (ARTOLA, M., Introducción a Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVII, pág. V). También Carnicero mencionaba la creación de esta comisión: "Fernando había mantenido correspondencia con Infantado, San Carlos y Escoiquiz. Contra ellos se mandó seguir la causa a don Arias Mon, don Sebastián de Torres y don Domingo de Campomanes" (CARNICERO, J.C., "Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de España", imprenta de don M. de Burgos, Madrid 1814, tomo I, pág. 45). Carnicero señalaba también que en el mes de enero de aquel año otros ocho Señores del Consejo fueron a El Escorial para dictar sentencia. Eran Vilches, Villanueva, González Yebra, el Marqués de Casa-García, Alvarez Contreras, Lasauca, Villagómez, el Fiscal del Consejo de las Ordenes Eugenio Alvarez Caballero y el Alcalde de Corte Benito Arias de Prada, como Secretario. También participaba el fiscal del Consejo de Castilla Sr. Viegas. (CARNICERO, "Historia razonada...", tomo I, pág. 54).

"Uno de los principales encausados era el Duque del Infantado, a quien Fernando VII nombraría Presidente de Castilla tras el Motín de Aranjuez (CARNICERO, "Historia razonada...", tomo I, pág. 54).

"El Tribunal absolvió a los reos a pesar de las insinuaciones y amenazas, y contra todo el poder; pero el gobierno los condenó a destierro y encierros, después de haber sufrido unas prisiones rigurosísimas" (G. DE LEON Y PIZARRO, J., "Memorias", pág. 105).

"Esta carta del Marqués de Caballero, dirigida al Gobernador interino del Consejo y fechada en San Lorenzo de El Escorial el 28 de octubre de 1.807, nos orienta sobre el ambiente que existía aquellos días en la Corte: "Ilmo. Sr. Si S.A. el Smo. Sr. Príncipe Generalísimo Almirante determina que V.I. venga a este Sitio mañana con el Ministro del Consejo Campomanes u otro que S.A. disponga, deberá decir V.S.I. que yo le he llamado para tratar sobre pósitos y que Campomanes diga que también le he llamado para puntos pendientes sobre la Causa de los Cuertas, y convendrá no

Castilla se encontró desde los acontecimientos de El Escorial en el primero de aquellos grupos, como consecuencia de la participación de buen número de sus miembros en la sentencia final de la causa. "Era público el desagrado con que miraban desde entonces a este Tribunal los que se habían arrogado todo el poder; y se sabía también quan arriesgado era el no ceder enteramente a su voluntad"¹⁰⁰. Afirma Fayard¹⁰¹ que el proceso del Príncipe de Asturias creó un auténtico conflicto entre Godoy y el Consejo de Castilla, que duraría hasta la caída del valido. El mismo Godoy tomó medidas contra el Consejo, mandando "detener a doce de sus miembros". Sin embargo, la independencia y autoridad de esta institución quedó de manifiesto en la digna resolución de aquella causa, lo que ayudó sin duda a preservar íntegro su prestigio de cara a los tristes sucesos que siguieron al Motín de Aranjuez¹⁰².

venga V.I. con él sino separado, y de modo que uno y otro lleguen a este Sitio antes de las oraciones..." (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2).

¹⁰⁰. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511, "Manifiesto de los procedimientos del Consejo Real en los gravísimos sucesos ocurridos desde octubre del año próximo pasado", pág. 2. Las fuertes críticas que en este manifiesto se vertían contra Godoy confirman esta toma de postura del Consejo, aunque por otro lado eran coherentes con la opinión general de la sociedad española del momento. Por otro lado, la animadversión hacia el Consejo de Castilla parece venía de años atrás. Así señalaba Carnicero que "en el año 1803 ya se dijo que las miradas de Godoy se dirigían a apoderarse de la Regencia del Reino a pretexto de los achaques y avanzada edad del Rey Carlos, a cuya extravagante pretensión se había opuesto y negado el Consejo de Castilla" (CARNICERO, J.C., "Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de España", tomo I, pág. 17).

¹⁰¹. FAYARD, J., "Les membres du Conseil de Castille à l'époque moderne", Librairie Droz, Genève-Paris, 1979, pág. 10: "En 1807 se agravó la tensión entre Godoy, convertido en todopoderoso después de su breve etapa de desgracia (1.789-1.801), y el Consejo de Castilla, con el cual entró en conflicto con motivo del proceso del Príncipe de Asturias. Godoy mandó detener a doce de sus miembros".

¹⁰². Parece que popularmente tuvo buena acogida la sentencia dictada por la Comisión. En un escrito anónimo de la época conservado en la Colección del Fraile, del Servicio Histórico Militar, se afirma que fue una prueba de resistencia frente a los abusos del Favorito y que no hizo sino incrementar el fervor popular en favor del Príncipe de Asturias. También se afirma una idea que no tiene desperdicio: la adhesión de los Consejeros de Castilla a la causa de Fernando pudo ser la causa principal por la que el

Un factor exógeno contribuiría a caldear aún más el ambiente político tenso del primer tercio de 1.808: la entrada de tropas francesas y su asentamiento en las principales ciudades del Reino, todo ello consecuencia del Tratado de Fontainebleau¹⁰⁰. La ocupación francesa no hizo sino precipitar los acontecimientos¹⁰¹. El Consejo veía con desconfianza los recibimientos triunfales que se daban en las provincias a las tropas francesas¹⁰², y también el

Consejo de Castilla fue perseguido por los distintos Gobiernos que se sucedieron en España hasta la restauración de 1.814 ("Causa Fundamental de la extinción del Consejo Supremo de Castilla", S.H.M., Colección del Fraile, Volumen 199, folios 177 y 178).

¹⁰⁰. El Consejo de Castilla se encargó también de preparar la mejor acogida posible a las tropas francesas y facilitarles alojamientos y viveres (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.513 núms. 1, 2, 3, 4 y 5).

¹⁰¹. "A principios de marzo de 1.808 había en España cien mil franceses. Murat fue por entonces elegido lugarteniente del Emperador en España. Sus tropas se internaban más y más en el reino cada día, violando solemnes promesas. Tanto cúmulo de sospechosos indicios impelieron a Godoy a tomar una pronta y decisiva resolución. Consultó con los reyes y al fin les persuadió lo urgente que era pensar en trasladarse del otro lado de los mares. Pareció oportuno adoptar el consejo dado por el Príncipe de Castel-franco de retirarse a Sevilla, desde donde con más descanso se prepararía tan largo viaje. Godoy tomó una serie de medidas preliminares con este fin: pero con el Motín de Aranjuez se desbarataron sus planes y desploma estrepitosamente el edificio de su valimiento y grandeza" (CONDE DE TORENO, "Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España", Madrid, 1835, publicado en la B.A.E. tomo LXIV, tomo I, Madrid 1953, págs. 64 y 65).

¹⁰². A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511, "Manifiesto de los procedimientos...", op. cit.: "Observaba el Consejo que aún suponiendo las mayores seguridades, era imprudentísima la confianza con que eran recibidas, tanto por su número, como por las posiciones que tomaban, pues siempre fue máxima constante no admitir fuerzas de aliado superiores a las propias, y no permitirles jamás la ocupación de castillos y fortalezas; pero hubo de reprimir este Tribunal sus inquietudes, pues no tiene por su instituto autoridad alguna en esta esfera, y era peligrosísimo además manifestar desconfianzas mientras podía parecer probable que el objeto de estas fuerzas extranjeras fuera por impulso sólo de generosidad, o con miras de enlaces de familia el sostener los derechos del Príncipe más digno contra los proyectos que hubiese podido concebir el que tenía en su mano la dirección de los nacionales." No hemos encontrado, sin embargo, ninguna consulta del Consejo en que manifestase al Rey esta opinión, aunque sí que pudo haberla.

Gobierno. Carlos IV anunció de forma secreta a sus Ministros la resolución de trasladar la Corte a Sevilla"".

La filtración de la noticia y su confirmación por las órdenes comunicadas para el traslado de la guarnición a Aranjuez, fortalecieron las sospechas que el pueblo había concebido en aquella terrible y extraordinaria crisis"". También llamó mucho la atención que Godoy partiera para Aranjuez el día 13 de marzo"". El 16 de marzo era comunicado al Gobernador interino del Consejo"" el decreto que contenía una resolución del Generalísimo Almirante mandando la traslación del Real Cuerpo de Guardias de Corps y otras tropas de la guarnición de la Corte al Real Sitio de Aranjuez. El decreto pedía al Gobernador del Consejo que publicase un bando que sosecase los ánimos de la población ante esta medida"".

El decreto del Generalísimo Almirante fue comunicado a los miembros del Consejo de Castilla en reunión extraordinaria. Fue convocada esta reunión a las nueve y cuarto de la noche por el Decano Gobernador interino del Consejo, don Arias Mon, y a ella asistieron veintisiete

"". Sobre el proyecto de salida de la Corte de los Reyes hacia Sevilla escribía a finales del siglo pasado el Conde de Murat: "Dans la journée du 17 mars, le prince des Asturies avait dit à un de ses affidés, officier des gardes du corps, que le départ était décidé pour la nuit suivante, mais que quant à lui, il se refusait à partir. La nouvelle s'était répandue à Aranjuez comme une trainée de poudre" (MURAT, Conde de, "Murat, Lieutenant de l'Empereur en Espagne. 1808", Librairie Plon, Paris 1897).

"". BAYO, E.K., "Historia de la vida y reinado de Fernando VII", pág. 69.

"". CONDE DE TORENO, "Historia del levantamiento, guerra y revolución de España", tomo I, pág. 71: "ya que el valido tenía por costumbre pasar una semana en Madrid y otra en el sitio en que habitaban SS.MM."

"". Le fue comunicado en su domicilio, a las 7:30 de la mañana.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 1: el decreto o resolución de Godoy afirmaba lo siguiente: "Vengan en dirección al Sitio los Guardias de Corps y otros cuerpo de la guarnición que señala S.A. Dígase al Gobernador del Consejo que publique un bando asegurando que en esta novedad no hay más miras que las de la pura precaución para evitar riesgos en un pueblo abierto; pero que la alianza entre el Rey N.S. y el Emperador de los franceses existe inalterable".

Consejeros"" y los tres Fiscales"". Mon informó a los miembros del Consejo de la noticia traída aquella misma mañana por el Encargado de la Secretaría de Estado Mayor. Aparte de solicitar la correspondiente Orden por escrito"" para publicar el bando solicitado, se debatió el asunto en el Consejo pleno toda la noche"". Al día siguiente, 14 de marzo, el Consejo acordó obedecer, pero retrasar la publicación del bando hasta elevar al Monarca una consulta, en la que advertiría que tales medidas podrían dar motivos al pueblo a que renovase sus sospechas"". El Consejo recordó también al Rey los riesgos de trasladar a Sevilla la Corte"", tema entonces de común conversación en todo

"". Faltó sólo el Marqués de Casa García, que disculpó su asistencia en la forma debida.

"". Inicialmente sólo había acudido don Nicolás de Sierra. Por orden del Gobernador interino se mandó avisar a don Simón de Viegas y a don Jerónimo Antonio Díez.

"". Por Real Orden de 19 de septiembre de 1.804 le estaba prohibido al Consejo dictar provisiones, bandos o amonestaciones públicas sin que precediese una Real aprobación.

"". El Consejo tuvo presente el próximo caso de Portugal, donde las tropas francesas se habían apropiado del Reino con el pretexto de la huida de su Reina y Príncipes. El Consejo decidió impedir o retrasar al máximo la salida de las tropas, para dar tiempo a la reflexión y evitar medidas precipitadas. También se planteó, al parecer, el modo de facilitar la evasión del Príncipe de Asturias (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 1. He aquí un fragmento de esta consulta a Carlos IV: "La fórmula de la Real Resolución "no hay más miras que la pura precaución para evitar riesgos en un pueblo abierto" llenó al Consejo del mayor sobresalto al no entender cuáles eran estos riesgos..." También Escolquiz, en sus "Memorias", págs. 104 y 105, recoge el texto completo de este dictamen del Consejo (B.A.E., tomo XCVIII).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 1: "Tal medida ofendería sin duda la alianza con Napoleón -que es el fundamento para la entrada de sus tropas en España-, y que verificada llenaría de llanto, riesgo e inseguridad a la Corte, al Reino e incluso a V.M. y a toda la Real Familia. Caso de haber ocurrido nuevas causas o motivos en el plan amistoso del Emperador que exija recursos extraordinarios, pide el Consejo al Rey que antes de tomar resolución decisiva sobre este punto u otro que varíe el sistema político o militar, consulte a muchos de sus fieles vasallos. Y si el Consejo mereciese esta

Madrid.

Tuvo al parecer buena acogida en la Corte la actitud del Consejo. El Rey trató de suspender la partida, influido quizás por esta consulta del Consejo de Castilla. Su primera decisión fue la publicación de una proclama a sus vasallos, con objeto de tranquilizar al pueblo¹⁰⁰. Sin embargo, ese mismo día -16 de marzo- se aprobó una Real Orden mandando que el Consejo mandase publicar aquel Real Decreto en todos los pueblos del Reino¹⁰¹. El Consejo de Castilla conoció este decreto al día siguiente, 17 de marzo, y aunque el Consejo pleno lo aprobó y mandó imprimir, su fijación no se realizó hasta el 18 de marzo¹⁰².

Desde el 13 de marzo flotaba en el ambiente la próxima partida de los Reyes para Andalucía. Se palpaba una atmósfera de cierta inquietud y tensión¹⁰³, que terminó estallando la noche del 17 al 18 de marzo. Aquella noche hubo una conmoción popular en Aranjuez¹⁰⁴ y el pueblo armado

confianza emitiría dictamen sobre esto, con la brevedad, justicia y lealtad que corresponde, teniendo sólo presente el servicio de Dios, de V.M. y el bien de sus vasallos para desempeñar sus deberes y el juramento que tiene hecho de cumplirlos...

¹⁰⁰. CONDE DE TORENO, op. cit., pág. 72: "hubo algarabía y alegría en el populacho de Aranjuez con vivas a los Reyes, entendiendo se suspendía el proyectado viaje. Pero pronto se observó que esa misma noche partía parte de la guarnición de Madrid para Aranjuez y duró poco la común alegría". El texto completo de aquella proclama de Carlos IV se puede encontrar, entre otros sitios, en A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.995, expediente "Papeles del Sr. Marqués de la Romana".

¹⁰¹. "Que este edicto se imprima y fije en los parajes públicos, además de a la Sala de Alcaldes, Chancillerías, Audiencias Reales, Corregidores, Gobernadores y Alcaldes Mayores para su publicación en las capitales y pueblos de sus respectivos partidos".

¹⁰². Antes de las 12:00 del mediodía había sido fijado en todos los sitios públicos y parajes acostumbrados, por varios alguaciles de Corte.

¹⁰³. Nos basaremos en cartas y testimonios inéditos de testigos presenciales de los hechos.

¹⁰⁴. Seco Serrano apunta que fue esencialmente un motín palaciego, organizado, entre otros, por el conde de Montijo, Oñate, Altamira e Infantado (SECO, C., Introducción al tomo XCVII de Historia de España de Menéndez Pidal, "El reinado de Fernando VII en el primer ciclo de la revolución contemporánea", pág. XV). En esta opinión coincidía, entre

saqueó el palacio de Godoy. A las seis y media de la mañana salieron los Reyes al balcón y fueron largamente ovacionados por el pueblo. A las siete apareció el decreto exonerando a Godoy de sus cargos"". El Consejo de Castilla fue informado de estos acontecimientos el día 18 por don Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y del Despacho. Consecuencia de ello, el Consejo fijó un edicto informando al pueblo de estos sucesos"". Igualmente informó aquel mismo día a los corregidores y justicias del Reino"".

Al día siguiente, sábado 19 de marzo, el Decano del Consejo convocó en su casa a los Consejeros de Castilla, y desde allí siguieron los acontecimientos de Aranjuez y de la Corte. Esa misma tarde tomaba el Consejo varias medidas para mantener el orden en Madrid"".

A las doce de la noche del día 18 todavía seguía reunido el Consejo de Castilla. A esa hora llegó a la casa del Gobernador una multitud de los sublevados con clarines y tambores y velones encendidos. Subieron la escalera principal y solicitaron hablar al Consejo. Salieron algunos Ministros y más tarde el mismo Gobernador interino, quien exhortó al pueblo a la tranquilidad, ya que Godoy estaba ya preso. Los manifestantes se retiraron dando vivas al Rey, al Príncipe de Asturias, al Consejo y al Gobernador. El Consejo se disolvió a la una de la madrugada del día 20 de marzo, domingo.

El mismo día 19 aparecía el Decreto de abdicación de la Corona de Carlos IV en el Príncipe de Asturias. Carlos IV comunicó su determinación al Consejo de Castilla en la noche del 19, y el Consejo fue informado en su sesión extraordinaria del día 20. Así concluía su decreto de abdicación: "Y para que este mi Real Decreto de libre y espontánea abdicación tenga su exacto y debido cumplimiento,

otros, el Marqués de Villa-Urrutia: "una conjuración de Grandes y palatinos promovía en Aranjuez un motín a la usanza española que acabó tumultuariamente en la noche del 17 de marzo con el Gobierno del Príncipe de la Paz" (VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Constitucional", pág. 53).

"" A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 4.412.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 1.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 2.980 núm. 10.

"" El Consejo de Castilla dio varias instrucciones a los Alcaldes de Corte y dispuso la fijación de un bando y varios oficios al Capitán General y Gobernador de la plaza.

lo comunicaréis al Consejo y demás a quienes corresponda"***. El Gobernador inicialmente decidió pasar la Real Orden a sus Fiscales, siguiendo el antiguo formulario del Consejo. Sin embargo, el público y los Ministros del nuevo Rey se opusieron a este trámite y pidieron la inmediata publicación del Decreto por el Consejo de Castilla". Los altos magistrados acordaron obedecer y se mandó su rápida impresión y fijación en bando".

El Consejo de Castilla, tan amante del respeto a la ley y de los trámites legales, se vio, por tanto, forzado por el desarrollo de los acontecimientos a aceptar una abdicación y una elevación al trono que no respetaban los procedimientos que la legislación exigía".

***. "Historia de la vida y reinado...", op. cit., págs. 69 y ss; A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 4.413.

***. "El Consejo de Castilla, que trató de cumplir los trámites legales propios de la circunstancia, se encontró rebasado y hubo de dar estado oficial a la abdicación, sin tener en cuenta las fórmulas prescritas por las leyes. (ARTOLA, M., Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXVI, pág. 3).

*** Señalaba el Conde de Toreno cómo el Consejo de Castilla en ningún caso quiso oponerse a la publicación del Decreto ni reclamar los antiguos usos y prácticas de España. Simplemente quiso seguir el procedimiento habitual en sus resoluciones. "Sin embargo, para desvanecer todo linaje de dudas, conveniente hubiera sido repetir el acto de la abdicación de un modo más solemne y en ocasión más tranquila y desembarazada de los acontecimientos que de repente sobrevinieron, pudieron servir de fundada disculpa a aquella omisión; mas parándonos a considerar quiénes eran los íntimos consejeros de Fernando, cuáles sus ideas y cuál su posterior conducta, podemos afirmar sin riesgo que nunca hubieran para aquel objeto concurrido Cortes, graduando su convocación de intempestiva y peligrosa. Con todo, su celebración a ser posible hubiera puesto a la renuncia de Carlos IV (conformándose con los antiguos usos de España) un sello firme e incontestable de legitimidad". (CONDE DE TORENO, op. cit., pág. 71). Por su parte Carnicero señalaba que el domingo 20 de marzo, a las tres de la tarde "el Consejo de Castilla anunció por carteles, y como el mejor medio de asegurar el sosiego, que el Señor don Fernando había sido exaltado al Trono por la voluntaria y libre cesión del Señor don Carlos IV" (CARNICERO, J.C., op. cit., tomo I, pág. 71).

***. Sobre la legalidad de esta abdicación diría más tarde Argüelles: "Los menos expertos preveían que la renuncia de Carlos IV, por las circunstancias en que estaba hecha, no podría dejar algún día de promover dudas, protestas, reclamaciones, a no precaverlo con una autorización solemne y pública que la legitimase." (ARGÜELLES, "La Reforma

Algo parecido ocurrirá más tarde con el acceso al trono de José I. Sin embargo, en ambos casos el Consejo de Castilla adoptó posturas distintas: en el caso de Fernando VII, éste era Príncipe de Asturias y legítimo heredero reconocido por toda la Nación. Así, la resistencia del Consejo fue mínima y procedimental; en el caso de José I, su resistencia como veremos fue clara, pues este Monarca no contaba ni con el respaldo de la ley ni con el apoyo popular, aunque sí con la fuerza de las armas francesas que sostenían al hermano de Napoleón. Sin embargo, coincidimos plenamente con la opinión del Conde de Toreno y otros autores que el Consejo de Castilla debió exigir mayores garantías legales para refuerzo de la abdicación¹⁰⁰.

La acusación de que el Consejo de Castilla tuvo alguna parte en el Motín de Aranjuez y en la abdicación de Carlos IV parece por el momento carente de fundamento y de pruebas sólidas. Si parece probado que el Duque del Infantado¹⁰¹ participara en los acontecimientos y quizás algún Consejero de Castilla. Pero el Consejo informó con tiempo a Carlos IV de las consecuencias delicadas que podrían tener las medidas de traslado de la Corte, e igualmente se opuso inicialmente a una publicación llana y sencilla de la abdicación de Carlos IV. Sin embargo, tampoco podemos olvidar una acusación vertida por la Reina Madre unas semanas después contra "el Consejo", que si se refería al de Castilla juzgamos fruto del apasionamiento del momento¹⁰².

Constitucional de España", tomo I, pág. 102). Al escribir estas líneas, Argüelles pensaba probablemente en la reunión de Cortes. Sin embargo, de alguna manera también buscaron tanto Carlos IV como Fernando VII esa autorización legitimadora en la persona del Emperador.

¹⁰⁰. Quizás estas garantías hubieran evitado el ridículo enfrentamiento entre padre e hijo por la Corona de España y quizás también la lamentable reunión de la Familia Real en Bayona con Napoleón.

¹⁰¹. Pero no olvidemos que cuando tuvo lugar el Motín de Aranjuez, Infantado no pertenecía al Consejo de Castilla.

¹⁰². Extracto de una carta de la Reina al Duque de Berg, fechada entre el 10 y el 20 de abril de 1.808: "...A la verdad, él (su hijo) debe consultar con el Consejo; pero este Consejo se compone de toda la facción, tan detestable, que ha ocasionado esta revolución y que no tiene afecto alguno a los franceses, como tampoco mi hijo Fernando, a pesar de todo lo que ha puesto la Gaceta de ayer, porque es el miedo que tiene al Emperador el que le hace hablar así..." ("Memorias de Escoiquiz", B.A.E., tomo XCVIII, pág. 151). Lo más probable es que esta acusación fuera dirigida contra el Consejo privado del Rey y no contra el Consejo Real.

Las medidas consiguientes del Consejo de Castilla se destinaron a tranquilizar a la opinión pública y preparar la entrada de Fernando VII en Madrid". Aprobó providencias para reprimir los excesos del populacho contra los bienes de Godoy y de sus ministros allegados, y para mantener el orden en las calles". El Consejo fue informado de los saqueos del palacio de Godoy, el del Conde de Fuenteblanca -Gobernador del Consejo de Hacienda- y el de don José Marquina Galindo -Ministro del Consejo-. Se encontraban entonces amenazados por cuadrillas, entre otros, los Palacios de Buenavista" y del Almirantazgo. Aparte de la formación de rondas y de cuadrillas de vecinos honrados, y de comunicar varios oficios a la Sala de Alcaldes, se aprobó un bando en el que se conminaba al pueblo a la tranquilidad". El mismo Monarca, en Real Orden de 20 de

"" La Villa de Madrid escribió al Consejo de Castilla pidiendo permiso para invertir sus fondos públicos en los gastos de exaltación al Trono de Fernando VII, así como para la entrada de las tropas francesas y para el recibimiento del Emperador Napoleón. El Consejo lo autorizó el 26 de marzo pidiendo al mismo tiempo que se controlasen los gastos y que éstos fueran reducidos. (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 26).

"" "El día 21 apenas aparecían vestigios del alboroto y fue fácil al Consejo por medio de sus providencias y rondas de vecinos honrados volver al pueblo a su antigua tranquilidad" (CARNICERO, J.C., op. cit., tomo I, pág. 73).

"" Sin duda salvó el Consejo este Palacio de la furia del populacho. El 20 de marzo dispuso el Consejo que los Comandantes de Guardias Españolas pusieran dos centinelas de cada batallón en el referido Palacio. El 21 mandó al Capitán General que tropa de Caballería e Infantería evitase el saqueo del edificio (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 4).

"" "Una de las cuadrillas de los sediciosos con espadas desnudas los que la comandaban, llegaron y entraron en el salón del Consejo a las nueve y media dadas, pidiendo se les diese un retrato del nuevo Rey. Muñoz les informó que en el Consejo no lo había ni tampoco del Rey Padre, y se retiraron inmediatamente repitiendo vivas y aclamaciones a SS.MM. y al Consejo. Después, como a la hora de las once de la misma mañana, entró otra cuadrilla en el propio Salón del Consejo pidiendo se les permitiese hablar con este Supremo Tribunal. Y habiendo concurrido igualmente el corregidor entró éste en el Consejo, quien habiéndole oído las disposiciones que había dado y aprobados sus procedimientos le encargó procurase aquietar a aquella gente; salió del tribunal y habiéndole oído y a mí, se retiraron todos y el Consejo volvió a continuar su despacho hacia más de la una del día...en que se disolvió" (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 2).

marzo comunicada al Supremo Tribunal, informaba a éste de sus deseos de entrar en Madrid, así como que se hiciera entender al pueblo que deseaba que le dieran pruebas de calma y sosiego. El Consejo de Castilla tomó seguidamente nuevas medidas para mantener la calma pública y para recuperar los bienes expoliados, y pidió también la colaboración de la Nobleza"".

Con anterioridad, el 19 de marzo había firmado Fernando un decreto confirmando a sus ministros y a los de los demás Tribunales del Reino, para que pudieran continuar a sus respectivos destinos"". En su consulta del

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, Providencias del Consejo de los días 20, 21 y 22 de marzo. "Continuó la algarada y la alegría toda aquella noche del 20; pero habiéndose ya notado en ella varios excesos fueron inmediatamente reprimidos por el Consejo, y por orden suya casó aquel nuevo género de regocijos" (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 90).

"" "En consideración a que los Ministros de mi Consejo Real y demás Tribunales de mi Reino necesitan habilitación mía para continuar en sus respectivos destinos después de la abdicación del Reino que acaba de hacer mi augusto Padre, he tenido a bien confirmarlos en ellos por el tiempo de mi voluntad. Tendréislo entendido y lo comunicaréis a todos los Consejos a quienes corresponda. Aranjuez, 19 de marzo de 1.808." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 2; y legajo 5.525 núm. 2). He aquí la Carta del Consejo a Fernando VII al conocer el Decreto de confirmación de sus Ministros: "Señor, el Consejo ha recibido el Real Decreto de V.M. con fecha de ayer en que V.M. se digna habilitar y confirmar a sus Ministros y a los de otros Tribunales del Reino, para que puedan continuar en sus respectivos destinos después de la abdicación de la Corona que acaba de hacer el Augusto Padre de V.M. Luego que se comunicó al Consejo esta novedad, ocuparon su atención los más encontrados vivos afectos de sentimiento, considerando que cesaba en su gobierno un Rey tan benéfico y amado de sus vasallos, como el Padre de V.M.; y de alegría viendo que este suceso abre el camino a su Augusto Primogénito para dar a conocer en toda la vasta extensión de sus dominios las prendas que adornan la Sagrada Persona de V.M., y asegurar el más feliz reinado, y la fundada confianza con que pronostican todos los vasallos la felicidad y la gloria de la España a que el Consejo procura contribuir con sus luces y trabajos, como es de su obligación, acreditando con ello el interno amor que profesa a la Sagrada Persona de V.M., su lealtad y el más profundo reconocimiento a las honras con que acaban de distinguirla en la confirmación dada a sus Ministros en los destinos que sirven y que procurarán con todas sus fuerzas desempeñar para merecer la confianza de su Monarca, que es el consuelo de su pueblo...Madrid, 20 de marzo de 1808." La carta fue leída al Monarca en consulta de

22 de marzo, el Consejo alabó la figura de Carlos IV, "un Rey tan benéfico y amado de sus vasallos""", y manifestó su alegría por la llegada del nuevo Monarca: "las prendas que adornan la Sagrada Persona de V.M...aseguran el más feliz reinado..."". Fernando VII aceptó la abdicación de su padre y mandó "que teniéndose entendido en el propio Consejo y Cámara, se disponga por estos tribunales lo que

29 de marzo. El Rey respondió: "quedo enterado y muy satisfecho de las expresiones del Consejo". Al respecto se puede consultar también el legajo 3.312, expediente núm. 6 del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

"".. Carta del Consejo a S.M. Carlos IV al conocer la abdicación: "Con fecha de ayer se ha comunicado al Consejo por don Pedro Cevallos copia del Decreto que V.M. se ha servido dirigirle con la misma fecha y que es del tenor siguiente (aquí el Decreto). Esta resolución de V.M. ha causado en el Consejo una sensación que no es fácil de explicar. Por una parte, se ve penetrado del más vivo dolor al considerar que cesa en el gobierno de estos reinos un Rey tan benéfico, tan propenso a facilitar la felicidad de sus vasallos, tan amado de sus pueblos, y por cuya larga vida suspiraban dirigiendo sus oraciones a Dios para que no les faltara este consuelo; siendo el primero el Consejo por la proporción de conocer más de cerca las virtudes y la bondad de corazón que forman el carácter de V.M., dolor que le atormenta al reflexionar que el mismo trabajo y cuidados inseparables de las obligaciones del cetro han podido ocasionar los achaques de que adolece V.M., y que no le permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de estos reinos, habiéndose determinado a la abdicación de la Corona en su heredero y muy caro hijo el Príncipe de Asturias. El Consejo, señor, ni olvidará las muchas pruebas que V.M. le deja de su benignidad, ni sus acertadas providencias en beneficio de la Monarquía, ni dejará de dirigir los más fervorosos votos al Cielo para que consiga la reparación de su salud, que desea y en que tendrán el mayor gozo sus vasallos.

De otro lado, el corazón de los Ministros que componen el Consejo se llena de júbilo por el bien que reconoce va a asegurar en el reinado del Augusto Hijo de V.M., el Príncipe de Asturias, que heredero de las virtudes de su Padre dará a conocer en la larga carrera del gobierno que le desea el Consejo las máximas de su educación, imitando los admirables ejemplos de sus gloriosos progenitores, más propios a fijar la prosperidad de estos reinos y a mantenerlos en el esplendor de la gloria que les corresponde, cuya sola consideración es la que puede mitigar la pena de la citada resolución de S.M... Madrid, 20 de marzo de 1.808."

"".. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 6.073 núm. 38; también Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 2.

corresponde y debe hacerse en este caso"".

El mismo 20 de marzo, el nuevo Rey premiaba al Duque del Infantado su fidelidad, mostrada ya desde tiempos del llamado complot de El Escorial. Fue nombrado coronel de Guardias Españolas y Presidente del Consejo de Castilla"". Ese mismo día era suprimida la Superintendencia de Policía de Madrid y sus competencias encomendadas al Consejo Real""; también el día 20 cesó el Rey a los miembros de la Junta de Consolidación de Vales, atribuyendo sus competencias también al Consejo de Castilla"". Todo

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión francesa, legajo 5.511 núm. 2.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 2; y en "Historia de la vida y reinado de Fernando VII", op. cit., pág. 89; Claude Martín menciona de él que por su rama materna pertenecía a la aristocracia internacional de la Europa del siglo XVIII. Inmensamente rico, en 1.793 había reclutado un Regimiento por su cuenta para combatir la Revolución. (MARTIN, C., "José Napoleón I, Rey intruso de España", Editora Nacional, Madrid, 1.969, págs. 50 y 51). Infantado se encontraba por entonces confinado en Ecija, a resultas de la famosa Causa de El Escorial. Llegó a Madrid en la madrugada del día 24 y pasó recado a las 7 de la mañana a don Arias Mon, informándole que aquel mismo día tomaría posesión de la Presidencia. Mon fue a su casa y le informó de las formalidades que se seguían en tales casos. Seguidamente el ya sólo Decano fue al Palacio de los Consejos. Después de decirse misa y una vez hecha la semanería, informó a los miembros del Supremo Tribunal de este hecho. "Siendo cerca de las diez de la mañana entró S.E. en silla de manos hasta la entrada de la puerta de la Sala primera como es de regalía y habiéndolo yo hecho presente al Consejo, se levantó el Ilmo. Sr. Don Arias Mon y demás Sres. Y los Sres. Fiscales bajaron la tarima para recibir a S.E. y acompañarle como lo hicieron hasta que ocupó el lugar preeminente..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 15). Vid. también A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433, "Nombramiento de Infantado como Presidente del Consejo".

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12. El Rey, en su Real Decreto de 20 de marzo de 1.808 encomendó estas competencias al Consejo de Castilla, "pues S.M. confía en el celo y acrisolados servicios del Consejo, que nada le faltará para conducir a sus vasallos a la felicidad que les desea si tan sabios ministros no dejan de darle pruebas de su amor y lealtad, ilustrándole por todos los medios que le dicte su prudencia..."

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.515 núm. 1.

ello fue sin duda una prueba de agradecimiento al Consejo por su oposición al Favorito y una prueba evidente del papel relevante que quería Fernando VII que el Consejo Real jugase en su gobierno.

Por otro lado, se permitió la vuelta de los Consejeros y Alcaldes de Corte desterrados en el reinado anterior¹⁰⁰. Pronto también comenzarían las depuraciones políticas. Entre otras medidas fue formado más adelante un tribunal compuesto por dos Consejeros de Castilla: el Conde de Pinar¹⁰¹ y don Juan Antonio de Inguanzo para juzgar a

¹⁰⁰. Fueron reintegrados a sus cometidos los Alcaldes de Corte don Francisco Pérez de Rozas y el Marqués de los Llanos; y los Consejeros de Castilla don Domingo Codina, el Conde del Pinar, don Manuel de Lardizábal, don José Joaquín Colón de Larreátegui y don Juan Antonio López Altamirano (DESDE VISEUS DU DEZERT, G. "Le Conseil de Castille en 1.808"

pág. 116). De ellos, el Marqués de los Llanos había ya fallecido cuando fue rehabilitado (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 1). Así lo describía el Consejero de Castilla Izquierdo en dos cartas: una fechada el 29 de marzo y la segunda con fecha de 8 de abril: "...Vuelven al Consejo a sus plazas los jubilados del Decreto de Guadalajara y también el Conde del Pinar y no sé si alguno otro más como Urquijo. También se le alza el destierro a todos los confinados.

En el caso de que se hagan gracias éstas no serán hasta la coronación y no me olvidaré de lo que V.I. me previene..." (29 de marzo de 1.808. A.M.);

"Vuelven a sus plazas el Conde del Pinar, Colón, Codina y otros, de modo que nos aumentan doce plazas en el Consejo. En mucho tiempo no entrará ninguno y es mucho atraso para todos vosotros.

La Causa de El Escorial ha pasado al Consejo. Para la substanciación se ha nombrado al Conde del Pinar e Inguanzo. Me temo ha de salir muchísimo de ella..." (8 de abril de 1.808. A.M. Izquierdo).

Por Real Orden de 23 de marzo de 1.808 los Ministros jubilados por el Real Decreto expedido en Granada en el mes de agosto de 1.802 podían volver a sus destinos (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 1). Aparecen más noticias sobre la vuelta de estos Ministros jubilados en el libro de matrícula de la Secretaría de la Presidencia de Castilla núm. 1734 (A.H.N., Consejos Suprimidos). Concretamente nos informa que en abril de 1808 los ministros jubilados del Consejo Lardizábal y Colón por Real Orden podían volver a servir sus plazas; también el Fiscal jubilado de la Sala de Alcaldes don Juan Meléndez Valdés tenía licencia para volver a la Corte.

¹⁰¹. El profesor Suárez Verdeguer recoge algunas anotaciones sobre la personalidad de Pinar. Según Quintana, era hombre que gozaba fama de ser cruel y severo. Le Brun le calificaba de 'servilísimamente servil' y que fue

Godoy y a sus protegidos".

El 21 de marzo el Consejo de Castilla aprobó un edicto anunciando al pueblo de Madrid la entrada del Rey en la Corte el jueves 24 de marzo. El edicto iba firmado todavía por el Decano Gobernador interino del Consejo, a quien el Monarca había dirigido oficio el día anterior. He aquí el texto de este Edicto:

"Don Arias Mon y Velarde
Decano Gobernador interino del Consejo, etc.
EDICTO: En Real Orden que acabo de recibir por extraordinario se me dice que ha resuelto S.M. trasladarse desde Aranjuez a esta Villa el jueves próximo 24 del corriente con las Reales Personas de sus amados hermanos, tío y sobrinos, mandándome que lo haga entender al público, y le asegure que verá cumplidos en el día señalado los deseos que ha manifestado de ver a S.M., siempre que en este medio tiempo le dé pruebas de estar reducido todo al sosiego y orden debido; y para que llegue a noticia de todos he mandado fijar este Edicto en Madrid, a 21 de marzo de 1.808."

También el día 21 el Rey encargaba al Consejo de Castilla proveer de gobierno a los establecimientos reales más interesantes y ocupar bienes, intereses y personas determinadas. En definitiva, esta resolución suponía una nueva prueba de confianza del Monarca hacia el Consejo de Castilla y una muestra evidente de apoyo del

'afrancesado en Asturias, y con Murat, realista con Fernando, español con la Junta Central, liberal con las Cortes, servil con el Consejo de Castilla, y nada en realidad porque lo fue todo en apariencia'. (SUAREZ VERDEGUER, F., "El Proceso de la Convocatoria a Cortes").

"... "Historia de la vida y reinado de Fernando VII", op. cit., pág. 90. Así, por ejemplo, el Fiscal del Consejo don Simón de Viegas fue desterrado seis meses de la Corte: "Excmo. Sr.: El Rey ha concedido licencia a don Simón de Viegas, Fiscal del Consejo, para que se vaya inmediatamente por seis meses a su país, o donde quiera, como no sea Madrid, ni Sitios Reales, avisando el pueblo en que fijare su residencia. Lo que de orden de S.M. comunico a V.E. para su inteligencia y la del Consejo; en el concepto de que, con esta fecha, se lo aviso al referido Viegas, para su puntual cumplimiento...Palacio, 1 de abril de 1.808. El Marqués de Caballero. Sr. Presidente del Consejo."

Monarca en esta institución"". El Consejo agradeció esta resolución en consulta del mismo día 21, que tuvo lugar y fue publicada el día 29"".

En la mañana del día 22, a las once y media, don Arias Mon había dado un parte informando que todo estaba ya tranquilo y que Madrid aguardaba la entrada del Rey dos días después -el día 24 de marzo-, "quien ansiaba ver las aclamaciones y regocijo del pueblo"". Fernando hizo declarar a través del Consejo que seguiría el mismo sistema de alianzas de su padre y pedía que se acogiera bien a los franceses"".

En otro orden de cosas, el Gobierno, las instituciones y el público esperaban una pronta venida del Emperador a Madrid, según apuntaban todos los rumores"". Por Real Orden de 23 de marzo se anunciaba oficialmente que en dos o tres días llegaría Napoleón a Madrid y se pedía al Consejo y a la Sala de Alcaldes que preparasen todo lo

"". Llama evidentemente la atención que Fernando VII se apoye de esta manera en el Consejo de Castilla, como órgano principalísimo de su gobierno.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.073 núm. 40, consulta del 21 de marzo de 1.808.

"". El día 23 fue publicado un bando de los Alcaldes de casa y Corte mandando que todos los que concurrieran en la carrera en la entrada del Rey lo hicieran con el sosiego, tranquilidad y orden debido (A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 4.426). Sobre la llegada de Fernando VII a Madrid, se puede ver el legajo 5.511 núm. 2 de Invasión Francesa, en el A.H.N.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G. "Le Conseil de Castille en 1.808", pág. 112.

"". Extracto de una carta fechada en Madrid el 25 de marzo de 1.808, firmada por don Manuel Marín y dirigida a don Francisco Leiva: "...y sólo le digo a V.S. que a la hora esta han entrado en Madrid cuarenta mil franceses y mañana entra el Emperador..." Por otro lado, el Emperador tuvo pronto conocimiento de los sucesos de Aranjuez, informado por Murat por carta de 19 de marzo. En carta fechada el día del mismo mes, Napoleón daba instrucciones al Gran Duque de Berg: "traitez bien le Roi, le prince des Asturies, tout le monde. Dites que vous ignorez tout et que vous m'attendez. Ce qui est arrivé à Aranjuez est fort heureux, et la certitude que le Roi ne partira pas est très avantageuse. J'attends de vos nouvelles de Madrid". (MURAT, Conde de, "Murat, Lieutenant de l'Empereur en Espagne, 1808", op. cit., pág. 136).

conveniente al efecto"". Entre otras medidas, el Consejo mandaría también engalanar la carrera de Burgos a Madrid para dar una buena acogida a Napoleón"".

También del día 23 de marzo se dictó una Real Orden muy importante que reducía las dos Salas de Justicia de la Sala de Alcaldes a una sola"". Los motivos de esta medida los encontramos en una solicitud en este sentido de la propia Sala de Alcaldes. Sabemos que que la Sala plena y su Gobernador habían pedido que una vez se verificara la entrada de las tropas francesas en Madrid, se redujera el despacho de las dos Salas de Justicia a una permanente, que estaría autorizada para despachar las causas correspondientes de las dos. De esta manera se fijaban turnos entre los Alcaldes para que en previsión de desórdenes a cualquier hora del día o de la noche pudieran acudir los Alcaldes al domicilio del Gobernador. La preocupación por el mantenimiento del orden público llevó también al Capitán General de Castilla la Nueva a mandar que cada ronda de Alcaldes fuera acompañada por un soldado francés y otro español"".

El día 23 la Sala de Alcaldes publicó un bando con motivo de la entrada de Fernando VII en Madrid al día siguiente"".

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 6.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 5.

"". A.H.N., Libro de Gobierno 1.399, año 1808, Sala de Alcaldes, folios 356 y ss.

"". A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1.808, folios 356 y ss.

"". "Manda el Rey nuestro Señor y en su Real nombre los Alcaldes de su Real Casa y Corte que habiendo resuelto S.M. trasladarse a este Real Palacio mañana jueves 24 del corriente acompañado de sus amados hermanos, tíos y sobrinos, se guarde por todos los que concurran en la carrera el sosiego, tranquilidad y orden debido, observando la mayor compostura en acciones y palabras, y evitando todo motivo de disgusto que pueda turbar el gozo que debe reinar y manifestarse con tan plausible ocasión, y es tan propio de la lealtad y amor a su augusto soberano, que particularmente distinga a este pueblo. Para ello conviene que una hora antes de la entrada de S.M. y A.A. no pase por la carrera coche alguno, salvo los de las Personas Reales y de Su Real Comitiva, por lo que los que tengan sus casas en las calles por donde hayan de pasar, y quieran salir en coche, deberán hacerlo con dicha anticipación. Tampoco entrarán en la carrera caballerías, carros ni otro género de carruaje. No

En estos primeros días del reinado de Fernando VII aparece un Consejo Real que apoya fielmente la política del Monarca, al que reconoce como toda la Nación como el legítimo Rey de España. El Consejo se convierte en la mano derecha del Rey y desde comienzos de su reinado quedará el Supremo Tribunal estrechamente vinculado a la persona y política de Fernando VII.

Días después, el 25 de marzo una delegación del Consejo de Castilla pasaba a cumplimentar al Duque de Berg en nombre del Rey"". Sin embargo, se esperó en vano que Murat cumplimentara también al nuevo Monarca"". Ese

saldrán muchachos ni otras personas a los tejados de la carrera y estarán cerradas las guardillas y pasos de comunicación a ellas. No se arrojará cosa alguna por las ventanas y balcones, y se quitarán de éstos las celosías, tablas, tiestos y cualquiera otra cosa que pueda servir de embarazo o caerse. No se llevarán a la carrera palmas, palos, banderas, pendones ni otra cosa que pueda llamar la atención. Y en todo se encarga a este público se porte de modo que no se deje ver cosa alguna que no sea decente y propia de un día de tanto júbilo. Y para que se llegue a noticia de todos, y nadie en caso de contravención pueda alegar ignorancia, se publique por bando en la forma ordinaria y de él se fijen copias impresas autorizadas de don Ignacio Antonio Martínez, Escribano de Cámara más antiguo y de Gobierno de la Sala. Madrid, 23 de marzo de 1.808." (A.H.N., Consejos Suprimidos,, Invasión Francesa, legajo 5.511 expte. núm. 2).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 3: Real Orden para que el Consejo de Castilla y Ayuntamiento pasasen a cumplimentar al Gran Duque de Berg. La noticia de la Real Orden llegó al Consejo el día 24 de marzo a las siete de la tarde y fue comunicada al Decano. Esa misma tarde habló con el Rey, quien le insinuó que no acudiera en cuerpo de Consejo sino tan sólo una diputación de Ministros presidida por su Presidente, y que el Decano nombrase los que tuviese por conveniente, tanto respecto al Consejo como a la Sala de Alcaldes. El Decano designó a los ocho Ministros más antiguos, cuatro Alcaldes de Corte y diez alguaciles. Sin embargo, el día 25 señaló el Marqués de Caballero como por olvido no había anunciado la fecha de la audiencia al Consejo, y que tal audiencia debía ser aquella misma mañana. Así, los miembros del Consejo entonces presentes en el Palacio de los Uceda -Mon, Vilches, Fuente Hija y Navarro-, fueron a cumplimentar al Gran Duque en nombre del Consejo. La arenga que Murat pronunció en francés contenía las expresiones del mayor reconocimiento y distinción hacia el Consejo de Castilla.

"". En una carta fechada en Madrid el 1 de abril de 1.808, el Consejero de Castilla don Manuel Marín comentaba lo siguiente: "...se dice que dicho Sr. Duque está esperando de hora en hora las credenciales del Emperador para ir a

mismo día el Rey mandaba el Consejo que el decreto de abdicación fuera comunicado "a las ciudades, villas, grandes, títulos, etc., y que se levanten en el Reino pendones por mí, el día que yo señalara, y se hicieran las demás ceremonias que en semejantes casos se acostumbraban"".

En las semanas siguientes el Consejo centró su atención en el mantenimiento del orden público en Madrid. Algunos de sus miembros participaron en comisiones de purificación política. También se encargó de la atención a los franceses"" y de los aprovisionamientos de la capital. El 2 de abril, creó, por ejemplo, una Junta de Aprovisionamientos. También hubo de intervenir el Consejo en varios incidentes entre tropas francesas y ciudadanos españoles"".

cumplimentar a nuestro Soberano. También se le ha regalado una carroza con seis caballos muy hermosos y tanto esto como la espada es para el Emperador..." Evidentemente Fernando VII deseaba obtener a toda costa el respaldo del Emperador.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 2.

"" "Fernando VII (...) manifiesta ostensiblemente su buena disposición para con los franceses al encargar al Consejo de Castilla de los preparativos para suministrar a las tropas imperiales los auxilios y asistencia de que tuviesen necesidad (ARTOLA, M., "La España de Fernando VII", Historia de España Menéndez Pidal, tomo 26, pág. 67). Seguidamente, el 4 de abril se trató en el Consejo pleno sobre el alojamiento de los oficiales franceses y demás dependientes de la comitiva del Ejército francés. Se encargó a la Sala y a sus Alcaldes hacer esta distribución entre el vecindario de Madrid, "ercargándoles asimismo que no hagan distribución alguna a los Señores Ministros del Consejo por las consideraciones que son notorias." (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.513 núm. 3).

"" Por ejemplo, el incidente recogido en el legajo 2.675 núm. 7, de la Sala de Gobierno, Consejos Suprimidos, A.H.N.: "Expediente promovido con motivo de haber remitido en consulta al Consejo el Teniente don León de Sagasta los autos formados contra don Andrés López, preso en Carabanchel de Arriba por la muerte dada a Mr. Morté, Capitán francés." Otro ejemplo lo tenemos en el legajo 2.720 núm. 20 de la misma sección: "Expediente formado en virtud de una representación del Alcalde Mayor de la villa de Miranda de Ebro con la que remitió al Consejo en consulta el sumario que ha formado sobre la muerte violenta dada a dos soldados polacos de la Guardia Imperial Francesa." Sin embargo, desde la llegada de Fernando VII a Madrid se observaba también una tensa calma, con la euforia de contar con la presencia del nuevo Monarca. Así describía en su correspondencia particular

El 3 de abril de 1.808 por una Real Orden se encomendaba al Consejo la sustanciación de la causa contra el Príncipe de la Paz y contra otras personas"". Dos días después, el 5 de abril, el Marqués de Caballero comunicaba al Consejo de Castilla la decisión de S.M. de enviar al Infante don Carlos a Francia a cumplimentar al Emperador de los Franceses"".

Tras la visita del General Savary al Rey el 7 de abril"", el Monarca decidió a salir al encuentro de

un Ministro del Consejo la situación en Madrid por aquellas fechas: "... En cuanto a noticias, por ahora no hay más que van saliendo los franceses, pero si hoy salen mil, entran dos mil; ayer se regaló al Duque de Berg de orden de S.M. la espada de Francisco I Rey de Francia y una carroza con seis caballos. S.M. anda todos los días por Madrid y toda la gente no cesa de vitorearle... Madrid, 2 de abril de 1.808. Manuel Marín."; finalmente mencionamos también un incidente del que tuvo conocimiento el Consejo de Castilla el 7 de abril de 1.808: aquel día el Corregidor de Madrid, don Pedro Mora y Lomas informaba al Consejo que los serenos no ejercían por ahora sus funciones por haber suspendido su salida tras varios incidentes con soldados franceses. El Consejo ordenaba en esta ocasión que todos los serenos volvieran a ejercer sus cometidos (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.513 núm. 3).

"". Se puede ver al respecto el Manifiesto del Consejo de 22 de agosto de 1.808, folio 6, conservado, entre otros sitios, en A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 4.

"". Así la menciona don Manuel Marín en una carta fechada el 8 de abril: "Estimado amigo mío: estas cosas parece que se van aclarando de modo que hasta esta tarde hemos estado bastante opacos y nada satisfechos con estos franceses aquí, pero al mediodía ha llegado el General Savary, Embajador Extraordinario, con las credenciales de reconocimiento de Napoleón a nuestro Rey por tal de España e Indias; y además por su íntimo Amigo y Aliado, que cree saldrá a recibirlo a Burgos, que parece le íntima debe ir a verlo antes de llegar a ésta; pero lo que más nos importa es que ha venido..." Podemos deducir de esta carta que los Consejeros de Castilla y el Consejo mismo participaron aquellos días de las preocupaciones lógicas del nuevo Gobierno, en lo referente al necesario reconocimiento internacional de la abdicación en Fernando -teniendo en cuenta además la protesta formal hecha pública por su padre-. Y en especial, el deseo de un formal respaldo del nuevo Gobierno por Napoleón. Estos asuntos serían sin duda tema de debate en las reuniones del Consejo.

Napoleón, cuya llegada se consideraba inminente^{***}. Al día siguiente el Rey advertía al Consejo de Castilla que según las noticias más dignas de fe, su íntimo amigo y augusto aliado el Emperador de los Franceses estaba en Bayona y se preparaba a entrar en España. El Rey partiría a su encuentro y durante su ausencia, que en todo caso sería corta, dejaba constituida una Junta de Gobierno bajo la presidencia de su tío el Infante don Antonio^{***}. Reunido el Consejo pleno en la casa de su Presidente el día 9, acordó su cumplimiento. De esta manera, fue el Consejo Real quien anunció la salida del Rey de Madrid^{***}, que tuvo lugar el 10 de abril^{***}. En la comitiva regia se encontraba, entre otros, el Presidente de Castilla, Duque del Infantado.

Durante los largos días que mediaron entre la salida del Rey y los tristes sucesos de Bayona, el Supremo Tribunal mantuvo un estrecho contacto con el Rey y su Consejo privado y fue informando a la población mediante bandos de la situación e intenciones de nuestro Monarca.

^{***}. León y Pizarro acusaba al Duque del Infantado y a Escoiquiz de ser los principales causantes del viaje del Rey a Bayona (G. DE LEON Y PIZARRO, J., "Memorias", tomo I, págs. 107 y 132).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.995, "Papeles del Sr. Marqués de la Romana"; y en Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 6: "Real Decreto de Fernando VII dirigido al Presidente del Consejo anunciando su deseo de salir al encuentro de Napoleón": el Rey comunicó su decisión al Presidente del Consejo para que lo hiciera presente inmediatamente en Consejo extraordinario y se publicase por bando con la mayor brevedad posible.

^{***}. Un ejemplar del bando se encuentra en A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 4.440.

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 128 y 129.

2. EL CONSEJO DE CASTILLA Y LA JUNTA DE GOBIERNO

1. Introducción. Actitud del Consejo. La salida de Fernando hacia Bayona.

Con la partida del Rey hacia Bayona comenzaba una nueva etapa del reinado de Fernando VII. Llama poderosamente la atención que no existiera una consulta o informe al Rey por parte del Consejo de Castilla, ante lo que instituciones y pueblo consideraban como un arriesgado viaje para la persona del Monarca. El Consejo de Castilla se limitó a ejecutar fielmente las instrucciones reales que se le remitían y a ser un leal colaborador de la Junta de Gobierno".

Desde el 21 de abril hasta el 7 de mayo, día

"... Una de las acusaciones vertidas por Miguel Artola contra el Consejo de Castilla de este periodo es que se abstuvo de asumir sus graves responsabilidades políticas, insistiendo en su carácter de institución administrativa, limitada a dar cauce a las decisiones de autoridades superiores (ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y revolución liberal", pág. 160). En realidad, la actitud del Consejo en este periodo pasó por varias fases. Inicialmente pasó por el estado de perplejidad que se dio en todas nuestras autoridades ante el carácter y rápida sucesión de los acontecimientos. Como veremos, paulatinamente su intervención en los sucesos de este periodo fue en aumento, lo mismo que su oposición a los planes del Emperador para España.

en que se conocieron las abdicaciones de Bayona, la Junta de Gobierno fue de hecho el único poder soberano y así fue reconocido por todas las autoridades que constituían las Administración". Esta Junta de Gobierno o de Regencia estuvo desde el principio fuertemente condicionada por la autoridad de Murat" y por la fuerza de las armas francesas". El Consejo de Castilla y por supuesto el pueblo gozaban de una mayor independencia de movimientos. Ello explica que el Consejo no se sometiera tan fácilmente a las órdenes y presiones del Duque de Berg, manteniendo una sorda pero eficaz resistencia".

"" ARTOLA GALLEGO, M., "La España de Fernando VII", Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXVI, pág. 41.

"" A ello se refiere Artola por ejemplo cuando afirma: "Murat, a quien hemos visto resistir a los mandatos imperiales en que se ordenaba el inmediato restablecimiento del viejo monarca, esgrimirá, sin embargo, ante la Junta, la eventualidad del retorno de Carlos IV al Trono. El 16 de abril dio a leer a O'Farril el texto manuscrito de una proclama con la que el Rey Padre anunciaría su vuelta al poder, amparándose en la violencia que se le hizo para obligarle a abdicar la Corona. Aquella misma noche eran convocados dos miembros de la Junta -Azanza y O'Farril- para discutir más extensamente el asunto, acordándose finalmente que fuese el propio monarca quien comunicase directamente a la Junta sus deseos de volver al Trono, acto que no tendría ninguna consecuencia política por cuanto ésta se limitaría a dar traslado a Fernando VII. Murat lograba así poner en entredicho la autoridad de la Junta, atacando la confianza de los miembros en su gestión al negar validez a la abdicación del Rey Padre sin tener que llegar a la pública restauración, solución a la que vimos era enteramente opuesto." (ARTOLA, M., "La España de Fernando VII", op. cit., tomo XXVI, pág. 21).

"" "Las demandas del Gran Duque y sus comunicaciones con la Junta y su señor Presidente tomaron un carácter imperioso y de amenaza" (AZANZA y O'FARRIL, "Memoria Justificativa", pág. 282).

"" Claude Martin señala lo siguiente: tras el 2 de mayo de 1808, "el Consejo de Castilla iba a mostrarse mucho más reticente. Un poderoso partido fernandista existía en su seno y se esforzaba en ganar tiempo y entorpecer las propuestas de los adheridos al orden francés. La noticia de los disturbios retenía a los indecisos o los llevaba a unirse al partido nacional. En el mismo Madrid, éstos veían a los soldados españoles desertar en masa y la propaganda antifrancesa difundirse libremente por falta de una policía organizada que asegurase el orden en las calles o en las tabernas. En semejantes condiciones, toda medida a promulgar requería negociaciones, a veces amenazas, y sólo era adoptada finalmente con lamentable retraso." (MARTIN, C., op. cit.,

Se acusa sin embargo al Consejo de haber sido en ocasiones un instrumento en las manos de Murat: los bandos que algunos autores han llamado afrancesados", la falta de una oposición frontal a las manipulaciones de Murat, la condescendencia con las autoridades francesas que violaban toda hospitalidad y la soberanía española... Todos estos puntos los iremos analizando en este apartado. Sólo adelantaremos que coincidimos plenamente con las opiniones de J.Fayard", R.Gibert" y J.Sánchez-Arcilla, entre otros, respecto a que en aquellas circunstancias el Consejo pudo hacer poco más de lo que hizo. El engranaje institucional estaba en manos de Napoleón y una oposición frontal hubiera supuesto de inmediato la guerra y ocupación militar, para la que España no estaba ni estaría bien preparada. Su misión fue ganar tiempo e ir organizando la resistencia, que fue alguna y con algún éxito aislado gracias en parte a esta hábil política del Consejo de Castilla. Sin embargo, también es verdad que los sucesos del 2 de mayo impresionaron vivamente a los miembros de este Consejo, que debió ver la situación en algunos momentos como inevitable".

pág. 122). Por su parte Beneyto apuntaba cómo el Consejo "chocó con la ideología bonapartista. Murat creyó poder gobernar con él, y en ciertos momentos el Consejo representó el papel de escudo entre la situación anterior y los planes del lugarteniente de Napoleón". Seguidamente y refiriéndose a la conducta del Consejo bajo José I, Beneyto señalaba: "con José I fue el centro de la oposición legal: obstaculizó la publicación de la Constitución de Bayona, que veía elaborada fuera de España y con falta de consulta al país en el tema del cambio de dinastía. Publicado aquel texto, el Consejo se opuso a prestarle juramento y triunfó en esta resistencia..." (BENEYTO, J., "Historia de la Administración Española e Hispanoamericana", pág. 539).

"", Por ejemplo, el conocido edicto de 5 de mayo de 1.808, en el que llamaba facciosos y tumultuarios a los sublevados en Madrid el día 2 de mayo, y exaltaba la amistad con la nación francesa (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 8).

"", FAYARD, J., op. cit., págs. 10 y 11;

"", GIBERT, R., "El Antiguo Consejo Real de Castilla".

"", Muchos autores y testigos de la época coincidían en que no era posible en aquel momento la resistencia, sino era con un alto costo de vidas humanas y de pérdidas materiales. A lo largo de este trabajo iremos citando algunas de estas opiniones. Aquí mencionaremos lo recogido por LEÓN Y PIZARRO, F. en sus "Memorias" (pág. 107, tomo I): "Muchos que consideraban el poder inmenso y organizado de la Francia y nuestra casi imposibilidad, no sólo de resistir, sino de mejorar nuestro gobierno, de ilustrarnos nosotros mismos,

Veinticuatro días gobernó España la Junta presidida por el Infante don Antonio, desde la salida del Rey hasta la marcha del Infante el 4 de mayo de 1.808. Sin duda desde la salida de Fernando de Madrid, el Gran Duque de Berg comenzó una operación de control de esta Junta de Gobierno y de otras instituciones del Estado.

Otra de las acusaciones vertidas más tarde contra el Consejo de Castilla fue la falta de firmeza para impedir la salida del Monarca en un viaje a todas luces imprudente. Sin embargo, la misión del Consejo era la de asesorar al Rey, sin que tuviera potestad para impedir tal viaje. El mismo Consejo, en su exposición exculpatoria del mes de agosto señalaba cómo "no fue consultado acerca de esta determinación"". Por otro lado, era habitual que los monarcas salieran de la Corte y viajaran por sus Reinos, sin que por otro lado fuera entonces previsible una salida de España y menos una encerrona como la de Bayona. No hemos de perder de vista que todavía Napoleón era un aliado de España. Sin embargo, sí que es cierto que el Rey tenía datos o indicios de los deseos de Napoleón y sus planes de cambiar de dinastía"", pero el Consejo probablemente no los tendría. De otro lado, en la falta de reacción del Consejo de Castilla también influyó la rapidez de los acontecimientos: el Rey comunicó al Consejo su decisión de salir el 9 de abril, y salió el día 10. Finalmente, aunque es cierto que Infantado tomó parte importante en la resolución de ir al encuentro de Napoleón"", no olvidemos que Infantado obraba ahí más como consejero privado del Rey que como Presidente de Castilla. Y sin duda su opinión fue personal y en ningún caso como fruto de una reflexión del Consejo de Castilla o en su representación -si así hubiera sido, el Consejo hubiera hecho una consulta al Monarca en este sentido-.

Desde la marcha del Rey, la Junta de Gobierno mantuvo al Consejo Real diariamente informado de los

etc., decían 'pasemos este duro trago y esperemos de él muchos bienes'."

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto de los procedimientos...", pág. 21.

"" Aun así estos indicios no devieron ser muy consistentes, cuando Fernando decidió salir al encuentro del Emperador e incluso pasar la frontera.

"" Así lo afirman, entre otros, BAYO, E. de K., "Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España", tomo I, págs. 107 y 108;

acontecimientos". El Consejo por su parte informaba a la opinión pública de la situación del Rey, mediante bandos. Fueron estos bandos, además, otra causa de acusaciones de colaboracionismo vertidas contra el Consejo. Es cierto que aunque a regañadientes, el Consejo publicó muchos bandos que la Junta de Gobierno y Murat le mandaron circular. Muchos de estos bandos eran realmente imprudentes y no hacían sino excitar los ánimos y producir un efecto contrario al buscado por sus difusores". Igualmente estos bandos fueron la causa principal de la formación de una opinión pública condenatoria de la actitud del Consejo de Castilla".

... En su Memoria justificativa, Azanza y O'Farril defendían la actitud de la Junta ante el Consejo de Castilla: "la Junta, lejos de poner embarazos a aquel Supremo Tribunal, sostenía su autoridad, hacía apología de su conducta y daba apoyo a sus providencias." (AZANZA Y O'FARRIL, "Memoria justificativa", págs. 350 y 351, nota x);

... Ver por ejemplo, A.H.N., Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 25: "Comoción en Avila por la publicación de una proclama de Napoleón". Una de las consecuencias de esta política fue que las autoridades del Estado perdieron la confianza de la Nación, que se vio obligada a constituir juntas provinciales que llenasen el vacío de autoridad creado. Sobre este desprestigio de nuestros gobernantes escribieron Azanza y O'Farril: "uno de de los síntomas más funestos con que se presentó desde sus principios la revolución de España y que hizo formar, generalmente, el más triste pronóstico de éxito que podía tener la resistencia al inmenso poder de que se halló invadida, fue el haberse hecho sospechosas en la nación todas las reputaciones. El Consejo privado del Rey, sus ministros, los tribunales superiores, el Consejo Real, en fin todo hombre público que se hallase a la sazón en la alta jerarquía del Gobierno, perdieron la confianza de la nación. Todos trataron de justificarse, luego que pudieron, de los cargos que contra ellos se divulgaron en el público; y puede asegurarse que durante los seis años de guerra, los más se han quedado y mantenido con un concepto más o menos dudoso." (AZANZA Y O'FARRIL, op. cit., pág. 277).

... Carnicero comentaba lo siguiente sobre los bandos mandados publicar por orden de Murat: "en cuanto a la publicación de papeles, no fueron menos fecundos (los franceses); si bien más desgraciados porque los más de los españoles, o no los leían, o lo hacían con la mayor rabia, burla y desprecio. (...) Pero lo que excitó más estas pasiones fue la siguiente proclama que nos dirigió el insolente Napoleón, y que por muchos días fue el objeto de la burla y crítica de los de buen humor" (CARNICERO, J.C., op. cit., tomo I, pág. 132 y 133). "Con el mismo desprecio se miraron quantas proclamas, manifiestos y promesas hicieron y dirigieron Napoleón y sus secuaces desde Bayona y Madrid..." (CARNICERO, J.C., op. cit., tomo I, pág. 134).

Pero también es cierto y no debemos olvidarlo, que el Consejo de Castilla era un órgano sometido al poder constituido y que lo más que podía hacer era influir y a lo sumo suspender la publicación de los bandos en prueba de disconformidad y desacuerdo. Esto último lo hizo en varias ocasiones: por ejemplo, en el bando que anunciaba la entrega de Godoy a los franceses o en los manifiestos de Carlos IV. Pero una vez suspendida tal publicación, si se le reiteraba su publicación -con amenazas y con la presión moral de la ocupación militar-, poco más podía hacer para evitarla. Algo más sí que hizo, ya que desde la subida al trono de Fernando VII no publicó un solo bando o edicto de motu propio y de los que mandó circular bajo la ocupación, ninguno reunía los requisitos formales de un bando de estas características. Y en todo caso, el Consejo retardó sus publicaciones y manifestó en diversas ocasiones su oposición a los mismos. Pero quizás el argumento más importante en este punto -sobre el que abundaremos más adelante-, fue la falta de libertad de movimientos del Consejo de Castilla para obrar: sometido a fuertes presiones'', en un ambiente donde el poder constituido y los demás Consejos e instituciones del Estado habían cedido casi sin oposición, tuvo que obrar prudentemente soslayando un fatal enfrentamiento frontal de consecuencias imprevisibles''. Fue fiel a las órdenes que desde Bayona le llegaban de contemporizar y ganar tiempo, para favorecer la resistencia y preparar la convocatoria de Cortes en lugar seguro''. Y todo ello a costa de perder prestigio y autoridad entre los españoles. Podemos atrevernos a decir que la conducta del Consejo de Castilla en aquellos difíciles momentos fue quizás la más digna de entre nuestras instituciones de gobierno''.

'''. Así lo reconoció el mismo Monarca en uno de sus decretos: si el Consejo de Castilla se encontraba ya sin libertad de movimientos, otras autoridades locales debían asumir las responsabilidades de organización de la defensa y convocatoria de Cortes.

'''. No olvidemos que el Rey estaba ausente y en peligro; que el Ejército era incapaz de hacer frente al invasor y que éste había controlado hábilmente los resortes del poder.

'''. Ver SUAREZ, F., "El Proceso de Convocatoria a Cortes", EUNSA, Pamplona 1982, págs. 31 y 32.

'''. Discrepamos por tanto de la opinión del profesor Fontes, cuando defiende la actitud digna del Consejo de Estado frente al francés, 'en contraste con la del Consejo de Castilla' (FONTES, F., "El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII", págs. 28 y ss.). No olvidemos, por ejemplo, que el Consejo de Estado juró fidelidad a José Bonaparte, lo que se negaron a hacer tanto el Consejo de Castilla como la Sala de Alcaldes. Más adelante estudiaremos este punto con detenimiento.

Dos notas más para concluir estos apuntes: de un lado, no olvidemos que el Consejo en cuanto estuvo libre no dudó en manifestar clara e inmediatamente su opinión contraria a los abusos franceses""; y de otro lado, aparte de opiniones comprensivas hacia el Consejo ya en la época"", llama la atención cómo la práctica totalidad de

"". Esta conducta del Consejo fue como un jarro de agua fría para Napoleón: pensamos que más que por la "traición" en sí -según parece desprenderse de los llamados Decretos de Chamartín, por haber declarado el Consejo nulas las abdicaciones de Bayona-, porque suponía el desmoronamiento de toda la política pseudo-legalista seguida hasta la fecha por el Emperador. Ya no contaría con una apariencia de legalidad formal, ni con un aparente respaldo de las instituciones españolas. La oposición del Consejo de Castilla, con lo que quedaba todavía de su enorme prestigio secular, ayudó a alinear contra los franceses prácticamente a toda la Nación y dejaba la política imperial absolutamente en evidencia. Ahora ya no quedaría más opción para restablecer el control francés sobre la Península que la fuerza de las armas, en una sin duda costosísima campaña militar, de consecuencias imprevisibles. Fue entonces cuando el orgullo de Napoleón decidió reconquistar España a cualquier precio.

"". Recogemos, a título de ejemplo, un fragmento de un escrito anónimo fechado en 1.812 y conservado en el Servicio Histórico Militar: "A poco de haber tomado este satélite (Murat) del Tirano el mando, llegaron los decretos de Bayona, y comunicados al Consejo, este Cuerpo que todo su poder se explica y estriba en fórmulas, las varió, dando por este medio a conocer a los pueblos su repugnancia y falta de conformidad; y así puede decirse con toda verdad que fue el primero que resistió la dominación francesa; haciéndolo en términos que decía el ministro de una Potencia que residía en la Corte era su conducta la más diestra negociación diplomática; pues daba tiempo a los pueblos para que se armasen, y les manifestaba ser su voluntad que resistiesen, y por consiguiente cuando los pueblos alzaron el grito para su independencia, llevaban ya muchos días de resistir los magistrados: los movimientos de los pueblos de alguna consideración no fueron hasta después del 23 de mayo, habiendo todos nombrado en los días anteriores comisionados para Bayona; y a esta época llevaba ya muchos días de resistir con sus armas el Consejo. Napoleón conoció muy bien esta verdad, por cuya causa una de sus primeras providencias en la Península fue la supresión del Consejo con el objeto de aniquilar y destruir los primeros motores; pues es público decía a los que le rodeaban que este cuerpo fue el móvil de la insurrección, y que antes que existiesen insurgentes había manifestado oposición a sus planes y proyectos de regeneración: decía asimismo era indispensable para realizar sus ideas de privar a los pueblos de los cuerpos antiguos que amaban y miraban como su apoyo..." (S.H.M., Colección del

las instituciones y la mayoría de las Juntas provinciales aceptaron y disculparon plenamente las explicaciones del Consejo de Castilla, en su manifiesto del mes de agosto de 1808^{'''}. A lo largo de nuestro estudio sobre los avatares de este año irán apareciendo otras muchas referencias y juicios sobre aquella polémica actitud del Consejo de Castilla bajo la ocupación francesa.

Retomando el hilo de los acontecimientos, en el periodo correspondiente a la llamada Junta de Gobierno - que hemos visto llega hasta las abdicaciones de Bayona -, podemos destacar varios momentos trascendentales en relación con la historia del Consejo. Mencionaremos por un lado las tensiones con motivo de la orden de entregar a Godoy a los franceses; otro acontecimiento importante fue sin duda la actitud del Consejo ante el levantamiento del 2 de mayo de 1.808 y los tensos días subsiguientes; veremos también las relaciones con la Junta de Gobierno y la reacción del Consejo de Castilla ante los acontecimientos de Bayona. Aunque inicialmente en esta Junta Suprema propiamente no había ningún Ministro del Consejo de Castilla, sabemos que más adelante asistió con frecuencia a sus sesiones como miembro de ella el Decano Gobernador interino del Consejo, don Arias de Mon, junto con otros miembros del Consejo de Castilla^{'''}.

Fraila núm. 762, folio 278). En esta línea es muy interesante también el informe de Canga Argüelles leído en la Junta Suprema de Valencia, de fecha 8 de agosto de 1.808 (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 expte. núm. 2).

^{'''}. Hay un expediente sobre este manifiesto en A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27.

^{'''}. Entre otras fuentes, aparte de los expedientes del Consejo de Invasión Francesa, (A.H.N., Consejos Suprimidos), mencionaremos a CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 138; y las Minutas de las Sesiones de la Junta Suprema de Gobierno, Archivo de Villa, Secretaría, ref. 7-478-9. La Junta Suprema varió de composición en varias ocasiones. En mayo de 1.808 formaban parte de la Junta, entre otros, Mon, Vilches, el Fiscal Sierra y el Fiscal de la Sala de Alcaldes don Pablo Arribas.

2. La entrega de Godoy a los franceses

Tras la llegada al Trono de Fernando VII, una de las primeras medidas del nuevo Monarca fue la confiscación de todos los bienes, efectos, acciones y derechos de Godoy. Sin embargo, al no estar todavía juzgado ni condenado, tuvo que cambiar aquella pena por un embargo^{***}. La víspera de la salida del Rey de Madrid, Savary pidió que se dejase en libertad al Príncipe de la Paz^{***}. En la misma mañana que el Rey marchaba hacia Burgos, Murat pidió de nuevo a la Junta de Gobierno la entrega de Godoy, a lo que la Junta se negó, por no haber al respecto una orden expresa del Rey. El día 13 volvió a insistir. El Consejo de Castilla, por su parte, en la reunión extraordinaria del día 9 anterior había acordado continuar las diligencias de la causa^{***}. Las presiones de Murat debieron hacer mella en la Junta, que ordenaba aquel mismo día 13 que fuese suspendida la toma de declaración del Príncipe de la Paz, lo que acordó el Consejo el día 20, una semana después. Al día siguiente de aquella orden -el 14 de abril- había recibido también el Supremo Tribunal una Real Orden de la Junta de Gobierno mandándole poner a Godoy a disposición de Murat.

La reacción del Consejo de Castilla fue suspender la publicación de esta orden y consultar a la Junta los "graves inconvenientes" que hallaba en la misma, y los riesgos que tal medida implicaba de cara a la opinión del pueblo y a la misma autoridad de la Junta, por la

^{***}. MARTINEZ DE VELASCO, A., "La Formación de la Junta Central", págs. 28 y 29.

^{***}. Reunido el Rey con sus consejeros, se determinó contestar que caso de insistir en esta petición, el Rey no se alejaría de la capital. Enviados por el Rey a Savary, Infantado y O'Farril le informaron que el Rey había determinado partir y que estudiaría este asunto personalmente con el Emperador (AZANZA y O'FARRIL, "Memoria justificativa", pág. 282).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto de los procedimientos del Consejo...", folio 7.

impopularidad de Godoy"". El Consejo remitió copia al Rey de esta exposición, manifestando su preocupación por tal medida de la Junta. La respuesta del Rey, publicada en el Consejo pleno de 30 de abril, fue la siguiente:

"Me conformo con que el Consejo no haga publicar la orden que le fue expedida por la Junta de Gobierno relativa a la entrega de la persona del Príncipe de la Paz."

Anteriormente la Junta había pedido instrucciones a Fernando VII sobre el tema, quien decidió enviar una carta a Napoleón informando que caso de que el Consejo de Castilla condenase a muerte a Godoy, sería indultado. Sin embargo, las instituciones de Madrid eran, cada vez más, víctimas de las presiones francesas. Azanza y O'Farril reconocían en su "Memoria justificativa" que el General Marqués de Castelar estaba "receloso de algunas disposiciones que ya le parecían hostiles"". También añadían lo siguiente:

"Cuando se vio cambiado todo el teatro, errados todos los juicios, comprometida la suerte del Rey y de la Monarquía, y todas las autoridades de la capital luchando contra la violencia y las amenazas, la Junta de Gobierno y su señor Presidente se hallaron en una posición enteramente inesperada, forzados a ajercer una administración a la que no estaban preparados..."

Todas estas referencias nos sitúan en el ambiente de presión y amenazas con que se debió desenvolver también la actuación del Consejo de Castilla en aquellos difíciles días. El Gran Duque de Berg se hacía de esta manera poco a poco con el gobierno del Estado y nuestras

"" Ver A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2: recoge los textos de la Real Orden de la Junta y de la consulta del Consejo de Castilla; también en el legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto de los procedimientos del Consejo...", folios 9, 10 y 11.

"" AZANZA y O'FARRIL, op. cit., pág. 283.

"" AZANZA y O'FARRIL, op. cit., pág. 283. También el 16 de abril Murat llamó a O'Farril para presentarle unas quejas. Le avisó que no reconocía a otro Rey de España que a don Carlos IV y que pensaba publicar una proclama en este sentido. Contestó O'Farril que el pueblo español ya había reconocido a Fernando VII. Replicó Murat que "el cañón y las bayonetas la harían obedecer". También el 30 de abril o 1 de mayo, ante una negativa de la Junta, Murat dio a entender que estaba dispuesto a recurrir a la fuerza en caso necesario (op. cit., pág. 287).

instituciones no supieron o no pudieron oponerse al ocupante"".

La entrega de Godoy por decisión de la Junta tuvo lugar la noche del 20 de abril. La Junta de Gobierno, siguiendo los trámites habituales, comunicó esta decisión al Consejo de Castilla para que fuera informada toda la Nación. Pero el Consejo decidió no publicar esta orden por ser contraria a las disposiciones adoptadas con anterioridad contra el Príncipe de la Paz y por miedo a la reacción popular. También decidió consultar al Rey sobre esta medida, el cual en carta reservada de 26 de abril al Decano del Consejo confirmó su voluntad de que Godoy y sus cómplices fueran juzgados por el Consejo, asegurando su indulto en caso de pena capital. Por su parte la Junta de Gobierno, ante la negativa del Consejo de Castilla, decidió informar al público de la noticia mediante Gaceta extraordinaria, el 22 de abril.

El Consejo de Castilla en su conocido manifiesto de agosto, dedicaba dieciocho folios a su exculpación por la liberación de Godoy. Quería dejar claro que nada tuvo que ver en tal medida y que hizo todo lo posible en sus manos por evitarla. Sin duda, la impopularidad de Godoy era tan considerable"", que su liberación sería una cuestión nacional de gran importancia.

La liberación de Godoy marcaba un nuevo hito en aquella pequeña historia. Se ve con claridad la manipulación y falta de libertad de nuestras instituciones. El Rey se encontraba ya prisionero en Bayona; Murat dominaba la Junta de Gobierno, de la que sería nombrado Presidente; el Ejército francés controlaba la Corte y las principales ciudades del Reino. Prácticamente todos eran conscientes de la gravedad de la situación. El Consejo de Castilla se reunía a diario y enviaba mensajeros a las provincias. El populacho también estaba revuelto y se multiplicaban los incidentes en Madrid y en otras ciudades. La Junta Suprema y el Consejo buscaban mantener el orden y la calma a toda costa, pues cualquier imprudencia podía hacer estallar la tensión contenida.

"" "No hubo Cuerpo ni autoridad alguna que desde luego rehusase descubiertamente el nuevo orden de cosas que se quería introducir, contentándose el que más con algunas protestas y reticencias que probaban el desagrado general con que se recibía tamaña novedad, y querían dejar la puerta abierta a una remota esperanza o a futuros contingentes, pero sin presentar por de pronto ni obstáculos ni una firme oposición." (AZANZA Y O'FARRIL, op. cit., pág. 300).

"". Apunta Martínez de Velasco que en la consideración popular era el enemigo público número uno, el centro de todas las críticas, la causa de todos los males (op. cit., pág. 32).

3. La labor de gobierno. El Consejo de Castilla y la Junta de Gobierno

Fue misión del Consejo en aquellos días el mantenimiento del orden público^{***}. Llegaban a sus Salas diariamente noticias de incidentes y conflictos entre paisanos y franceses^{***}. Llama la atención la oposición del

^{***}. Un curioso incidente fue el que conoció el Consejo el 1 de abril a las cinco de la tarde. En la Plaza Mayor había habido un altercado entre un vecino o soldado español con algunos militares franceses. Se arremolinó gente con este motivo y a su vez, también tropas francesas se pusieron sobre las armas. Los comercios de la plaza cerraron y hubo algunas carreras. El Decano del Consejo en persona fue a la plaza para dispersar a la gente y persuadirles que se retirasen, lo que consiguió. Envió mensajes a las distintas autoridades de Madrid para la formación de patrullas. Al día siguiente el Consejo aprobó las siguientes medidas para el mantenimiento del orden público en la Corte: seguirían las rondas; cerrarían las tabernas, aguardienterías y tiendas de vinos generosos a las 8 en punto de la noche; no se venderían estos licores sino por mostrador durante el día, y tocadas oraciones hasta las 8 por la ventanilla; los Alcaldes de Corte debían hacer saber a los dueños de fábricas y talleres que cuidasen que sus aprendices asistiesen diariamente al trabajo; y mandaba a los padres de familia que no permitiesen que sus hijos y criados se mezclasen en los bullicios. El libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1.399, del A.H.N., correspondiente a la segunda mitad del año 1.808 contiene muchas referencias a medidas adoptadas por la Sala en aquella época para el mantenimiento del orden público.

^{***}. Así, por ejemplo, el 8 de abril el prior del convento de los Jerónimos informaba al Consejo del estado del monasterio, ocupado por tropas francesas de la Guardia Imperial y Mamelucos, y las dificultades que tenían para celebrar los oficios de Semana Santa (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 3); otro incidente relevante fue el que motivó una reunión extraordinaria del Consejo el viernes 15 de abril: en ella se informó del bando para la prisión del presbítero don Andrés López y se preparó una consulta a la Junta para el día siguiente: "...El Consejo...considera muy importante

Consejo al sistema de bandos que la Junta emplearía en este período para anunciar sucesos o para calmar a la población. En reiteradas ocasiones manifestó lo imprudente que era airear asuntos que no levantarían sino mayores incomprensiones o caldearían los ánimos. En este sentido se observa una buena voluntad del Consejo, deseoso de mantener el orden a toda costa; y a la vez obediente a la hora de publicar todas estas disposiciones. En ocasiones los bandos tenían un cierto carácter militar e intimidatorio que traslucía la mano francesa detrás; en otras, publicaban hechos o noticias de interés público como la protesta de Carlos IV, la liberación de Godoy o las mismas abdicaciones de Bayona. Como manifestará el Consejo más adelante y entonces fue evidente a todos, tales disposiciones producían de ordinario el efecto contrario al buscado.

Estos bandos, publicados y circulados muchos de ellos por el Consejo, fueron, como hemos apuntado anteriormente, la principal causa del descrédito público del Supremo Tribunal y de las acusaciones de colaboracionismo que contra él se vertieron^{***}. Todo lo publicado se

conservar la exaltación de los espíritus de los vasallos del Rey hacia su Real Persona, y la disposición en que todas se hallan de sacrificarse para su conservación y la de Monarquía, recurso tanto más apreciable cuanto escasean las demás fuerzas del Estado por las diversas circunstancias ocurridas en el gobierno anterior que V.A. sabe, les ha reducido y debilitado..." Tras analizar el suceso del mencionado presbítero, señalaba que era preciso hacer pronta justicia, pero no tenía mayor significación: no era una conmoción popular, ni intervinieron muchas personas ni era una conjura. "No reúne las circunstancias necesarias para que se publique una ley dura que comprenda a todos los vasallos del Rey, que suponga su desconfianza de que no se cumplirán los bandos publicados ya..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.513 núm. 1).

^{***}. Así describía Labra la actitud del Consejo por aquellos días: "Tampoco quiero decir palabra del soberbio Consejo de Castilla, de aquel refugio de la austeridad, del formalismo, del aire solemne, de la pureza tradicional que en los trances críticos de la época no tuvo ingenio más que para utilizar equívocos que no disfrazaban cumplidamente su sumisión al vencedor, cuando se vio constreñido a promulgar la renuncia de la Corona de Carlos IV y Fernando VII; que en abril de 1.808 secundó a Murat, renovando las antiguas penas contra los sediciosos y los autores de libelos y pasquines contra los franceses; que en junio y julio refrendó y promulgó todos los decretos vendidos de Bayona, la Constitución del Intruso y la Proclama de los afrancesados del Congreso reunido a orillas del Adour, y que en fin, -me cuesta trabajo recordarlo- sólo encuentra la voz y la energía para protestar contra los invasores y declarar nulo lo hecho en 1.808, al día siguiente de la Batalla de Bailén y de la

identificaba o relacionaba con la actitud del Consejo de Castilla frente al ocupante. El mismo Consejo era consciente de este descrédito y del sacrificio que cada publicación suponía para su reconocido prestigio^{***}, y no pudo o no supo reaccionar ni frente a esta política imprudente, ni tampoco frente a la evidente instrumentalización que hacían los mandatarios franceses de la autoridad del Consejo.

Por otro lado, la debilidad y entrega de la Junta de Gobierno a Murat puso en evidencia al Consejo de Castilla. No tenía poder para modificar las resoluciones de la Junta y tan sólo podía suspender la publicación de sus acuerdos, lo que hizo en varias ocasiones. Acostumbrado a ser fiel apoyo del poder constituido, se tenía que debatir en el dilema de aceptar u oponerse a los mandatos de la Junta^{***}. No dudamos que la conducta del Consejo en aquellos

salida de Madrid de aquel José Bonaparte, ante quien los Consejeros se habían posternado humildemente, mereciendo, que al volver Napoleón sobre la capital, desde Chamartín, declarase su "destitución por cobardes e indignos de los magistrados de una nación brava y generosa." (LABRA, R.M., "La España del siglo XIX", págs. 233 y 234).

^{***}. Así se expresaba el Consejo en su exposición a S.A. el Infante don Antonio y a la Junta de Gobierno, de fecha 23 de abril de 1.808: "...Pero al paso que el Consejo medita y dispone todo lo conveniente a la observancia de las leyes y sosiego de este pueblo y del Reino, no puede omitir hacer presente a V.A. que se le ha expuesto en gran manera y lo están comprometiendo especialmente en estos últimos días en que se trató de publicar y llegó a imprimirse una Proclama para que se reconociera por Rey a Carlos IV. Y en que los Generales franceses han manifestado en esta Corte y en los pueblos inmediatos tener orden de S.A.I. y R. en que se dice que el Emperador de los Franceses no reconoce por Rey a Fernando VII y trata de reponer en el trono a Carlos IV, especies las más a propósito para conmovier a todos los pueblos..." "{...} El origen de los alborotos ha estado en la tropa francesa..."; "...en vano se exigirá al Gobierno español su vigilancia y energía para contener todo desorden, si del otro lado la tropa francesa da causa de ellos." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 expte. núm. 6).

^{***}. Parece que le costó menos al Consejo manifestar su oposición al Rey José I: no quiso jurarle como Rey, no asistió a cumplimentarle tras su entrada en Madrid ni juró tampoco la Constitución de Bayona. Por otro lado, el dilema ante el que se encontró el Consejo de Castilla aparece bien recogido en este fragmento de la Memoria justificativa de Azanza y O'Farril: "el Consejo, por su parte, y en las sesiones a que asistieron algunos vocales de la Junta, resistió cuanto pudo el dar cumplimiento a lo pactado en los referidos tratados (de abdicación de los Reyes); pero como

días pudo ser más heroica y que quizás la Historia le hubiera premiado mejor un enfrentamiento frontal y tajante contra el invasor que hubiese concluido con su sacrificio o inmolación. Pero quizás una reflexión detenida nos podría llevar a planteamientos mucho más comprensivos y prudentes. El Consejo intentaba evitar una masacre -como luego resultó nuestra Guerra de la Independencia- y quizás hizo en aquellos momentos todo lo que podía hacer: "Se deseaba un pretexto para la mortandad y el saqueo. Aún en esta parte hizo todo lo que creyó poder hacer sin estos riesgos..."^{***}.

Desde los días 16 y 17 de abril, las relaciones del Gran Duque con la Junta tomaron un carácter más agrio. El 16 comunicó Murat a O'Farril que Napoleón no reconocía en España más soberano que Carlos IV. Al día siguiente este monarca comunicaba a la Junta la protesta de su abdicación. En estas circunstancias, la Junta envió a Bayona a don Evaristo Pérez de Castro y a don José de Zayas para solicitar instrucciones del Rey^{***}. Esta consulta nos muestra nuevamente el estado de inseguridad en que se

venían acompañados de órdenes terminantes de los legítimos soberanos y como ni la Junta ni el Consejo podían ser jueces en semejante cuestión, este Supremo Tribunal concluyó con manifestar que, estándole confiada por su instituto la ejecución de las leyes subsistentes, no podía dejar de hacer una protesta reservada de que la ejecución de estos tratados se entendiese salvos los derechos del Señor don Carlos IV, de su hijo y demás sucesores. No hubo la menor dificultad de parte del Gran Duque en que el Consejo acordase así su cumplimiento y lo mandase publicar y circular, como en efecto se hizo." (AZANZA Y O'FARRIL, op. cit., pág. 299).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto de los procedimientos...", folio 22.

^{***}. La Junta planteó al Monarca cuatro preguntas: "1. Si convenía autorizar a la Junta a substituirse en caso necesario en otras personas, las que S.M. designase, para que se trasladasen a parage en que pudiesen obrar en libertad, siempre que la Junta llegase a carecer de ella; 2. Si la voluntad de S.M. era que empezasen las hostilidades, y el modo y el tiempo de ponerlo en ejecución; 3. Si debía ya impedirse la entrada de nuevas tropas francesas en España cerrando los pasos de la frontera; 4. Si S.M. juzgaba conducente que se convocasen las Cortes, dirigiendo su Real Decreto al Consejo, y en defecto de éste por ser posible que al llegar la respuesta a S.M. no estuviera ya en libertad de obrar) a cualquiera chancillería o audiencia del reino." (BAYO, E.K., "Historia de la vida..." tomo I, pág. 144; también lo recogen AZANZA y O'FARRIL, "Memoria justificativa...", op. cit., pág. 287; y CEVALLOS, "Exposición de los hechos" op. cit., pág. 168; y también CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, págs. 139 y 140).

encontraba la máxima autoridad española. Veremos más adelante cuál fue la respuesta del Rey.

Nuevos incidentes con los franceses caldearon aún más el ambiente. El 20 de abril, a través de una noticia llegada a la Escribanía de Gobierno del Consejo de Castilla, por un agente de negocios, se supo que Murat había pasado a los generales franceses una orden que manifestaba que Carlos IV era nuevamente Rey de España. Esa misma tarde acudió al Decano Gobernador un impresor en cuya casa se habían presentado varios franceses conminándole a imprimir una proclama para reponer a los Reyes Padres. Detenidos estos franceses en la misma imprenta que debía estar en los aledaños de la calle Arenal, el Alcalde comisionado les salvó la vida de las furia del populacho. Más adelante, el día 26 otro impresor recibió una propuesta en nombre del Gran Duque para la venta de una de sus prensas^{***}.

El 27 de abril don Justo María Ibar Navarro remitía al Consejo de Castilla una carta informando detalladamente de los sucesos de Bayona y "del escandaloso e inesperado proyecto de arrancarle (al Rey) violentamente de sus sienes la Corona de España"^{***}. Sabiendo el Rey que los franceses estaban interceptando sus correos extraordinarios, decidió enviar a Ibar Navarro a informar a la Junta y al Consejo de Castilla. Tras pasar varios peligros consiguió llegar a Madrid el día 29. Continuaba así su relato este Oidor: "Habiendo preguntado yo voluntariamente al Sr. don Pedro Cevallos al despedirme de S.E. si prevendría algo a la Junta sobre la conducta que debiera observar con los franceses, me respondió: que aunque la comisión no comprendía este punto, podía decir que estaba acordado por regla general, que por entonces no se hiciera novedad, porque era de temer de lo contrario que resultasen funestas consecuencias contra el Rey, el Sr. Infante y cuantos españoles se hallaban acompañando a S.M. y el Rey se arriesgaba descubriendo ideas hostiles, antes que estuviere preparado para sacudir el yugo de la opresión"^o.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 24; también núm. 27, "Manifiesto de los procedimientos...", folios 23 y 24.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 23.

^o. Estas instrucciones reales transmitidas por Ibar Navarro confirman nuestra tesis anterior de que el Consejo no hizo sino cumplir fielmente las recomendaciones que el propio monarca desde Bayona le enviaba: era necesario ganar tiempo y no compensaba un enfrentamiento directo (Cfr. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 23). No olvidemos, por otro lado, lo que mencionan Azanza y O'Farril en su Memoria Justificativa: "Cuando el Rey se ausentó de Madrid, recibió la Junta por única instrucción

4. El Dos de Mayo de 1808

El 30 de abril el Duque de Berg presentó a la Junta una propuesta en forma de ultimátum: exigía la salida inmediata del infante don Francisco de Paula y de la Reina de Etruria para Bayona, el alejamiento de la Corte de los Guardias de Corps, la libertad de toda la familia de Godoy y varias indicaciones sobre la publicación y supresión de papeles o impresos que pudieran favorecer u obstaculizar las modificaciones políticas que debían producirse a corto plazo".

Ante la amenaza de acudir al uso de la fuerza, la Junta pidió tiempo para deliberar. Convocó aquella misma noche una reunión extraordinaria con los Gobernadores y Decanos de los Consejos Supremos, así como dos Ministros de cada Consejo. Todos ellos continuaron asistiendo a las deliberaciones más importantes de la Junta". A esta reunión extraordinaria fue invitado también don Justo María de Ibar Navarro, quien reprodujo las noticias e instrucciones traídas desde Bayona". El 6 de

verbal la de observar buena inteligencia y armonía con los franceses; después se le repitió el mismo mandato desde Vitoria y desde Bayona (op. cit., pág. 292).

"" AZANZA y O'FARRIL, op. cit., pág. 287. También MARTINEZ DE VELASCO, A., "La Formación de la Junta Central", op. cit., pág. 34.

"" No fue la primera ocasión en que participaban en las deliberaciones de la Junta Ministros del Consejo. Al menos el 23 de abril el Decano del Consejo de Castilla y cuatro de sus Ministros fueron invitados a asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 4).

"" Así lo recoge también un testimonio del Consejero de Castilla Vilches, presente en aquella reunión extraordinaria: "En una de estas Juntas (de Gobierno) se presentó un Oidor del Consejo de Navarra disfrazado y que había estado hablando de incógnito con Fernando VII y traía sus instrucciones verbales, que comunicar a la Junta, reducidas a manifestar su estado de opresión y deseos de que se continuara el mismo sistema de amistad y armonía con los franceses" (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa,

mayo regresó a Bayona con noticias de la Junta para Fernando VII.

En aquella reunión se discutió largamente sobre la posibilidad de presentar una resistencia abierta al Gran Duque de Berg. El Consejo de Castilla había ya elaborado un plan de defensa que permitiría armar a 300.000 soldados. Sin embargo, el Ministro de la Guerra O'Farril informó negativamente: una resistencia violenta comprometería la ciudad y haría estallar la guerra. Tras el informe de Ibar Navarro, el Infante don Antonio decidió evitar toda idea de resistencia violenta y nombrar una comisión de militares y de magistrados que informasen a las provincias de los peligros que amenazaban a España y a la dinastía".

Aparte de esta Junta se constituyó otra que se situaría en tierras no ocupadas por los franceses. La formarían tres tenientes generales y tres ministros de los Tribunales del Reino, entre estos últimos uno del Consejo de Castilla, don Manuel de Lardizábal y Uribe. Esta Junta tenía prevista su primera reunión en Zaragoza, el 2 de mayo".

Los sucesos del 2 de mayo fueron conocidos pronto por el Consejo de Castilla. La inmediatez del Palacio de los Uceda al Palacio Real permitió que desde este edificio se escucharan los primeros tiros y sus miembros pudieran presenciar en la calle Mayor algunos momentos de aquel episodio. Así comienza un documento del Consejo que relata los sucedido aquella mañana:

"poco después de las 10 y media" de la

legajo 5.525 núm. 23; también CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, págs. 64 a 67).

***. DESDEVISES DU DEZERT, G, "Le Conseil de Castille en 1.808", págs. 150 y 151.

***. Señalaba Labra cómo "el nombramiento de una especie de comisión ejecutiva,...la víspera del dos de mayo, y el ensanche de la Junta General con los Presidentes de los Consejos, cuatro Fiscales y seis Consejeros, no tuvo ningún efecto; ni lo dieron las consultas reservadas que la misma Junta hizo a fines de abril a Fernando VII para hostilizar al francés, impedir la entrada de sus tropas y convocar Cortes". (LABRA, R.M., "Muñoz Torrero y las Cortes de Cádiz...", págs. 238 y 239).

***. Por otras fuentes sabemos que los sucesos del Palacio Real debieron ocurrir alrededor de las nueve y media de la mañana. Apunta Desdevises que es difícil que no fueran conocidos en el Palacio del Consejo -tan cercano al Palacio Real- hasta una hora después. Quizás el redactor del informe, el Escribano de Gobierno Bartolomé Muñoz no haya sido muy

mañana del día dos de mayo de 1.808 se divulgó en el Salón del Consejo que en el Palacio Real se había alborotado el pueblo con motivo de la salida del Sermo. Sr. Infante don Francisco de Paula para la ciudad de Bayona, llamado por el Sr. don Carlos IV, su padre; y que habiendo insultado a un edecán del Srmo. Sr. Gran Duque de Berg, había enviado éste las tropas de su guardia, las que habían empezado a hacer fuego. En efecto, a poco rato se notó desde los balcones y puertas del Consejo que el pueblo corría de una a otra parte, y se oyeron repetidos tiros de fusil. El Oficial de la Guardia del Consejo, viendo llegar varias patrullas de tropas francesas que, recogiendo sus soldados hacían fuego, cerró las puertas y puso en cada una de ellas dentro del zaguán sus respectivas centinelas, y el resto sobre las armas..."

Los sucesos de aquella mañana" eran de alguna manera previsibles. En diversos informes confidenciales enviados al Consejo por la Sala de Alcaldes

preciso sobre tal hora.

"A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 7.

"Así los describía el propio Murat en carta enviada al General Dupont al día siguiente: "Querido General, la tranquilidad pública se ha quebrantado en la capital... Desde las ocho de ayer la plebe ha obstruido todos los accesos a Palacio... La Reina de Etruria debía partir para Bayona; uno de sus ayudas de campo fue detenido por el populacho y hubiera sido asesinado si no le hubiera libertado un piquete de mi guardia. Un segundo ayuda de campo que portaba órdenes al general Grouchy fue apedreado por los paisanos... El orden fue restablecido a cañonazos. Cincuenta de los agresores apresados con las armas en la mano han sido fusilados ayer por la noche; otros cincuenta esta mañana. Se va a proclamar que todo español a quien se le encuentre un arma será considerado como sedicioso y fusilado... He cursado órdenes para reprimir los disturbios que se producen en Aranjuez al general Vedel... Declarar públicamente que el Emperador ha sido elegido como árbitro por el Rey y por el Príncipe de Asturias de España. Advertir a la nobleza y al clero que la conservación de sus privilegios dependerá de la conducta frente al Emperador y frente a sus tropas, y que el interés de la nación española estará continuamente unido con el de Francia. Anunciar que el Emperador garantiza la integridad y la independencia de la Monarquía española..." (RUIZ-CASTILLO BASALA, J., "El 2 de mayo y Bailén". Diario ABC, miércoles 2.V.1990, pág. 44).

los días anteriores, se decía que se veían grupos incontrolados y corros en distintas zonas de Madrid y, especialmente, en la zona de la Puerta del Sol". El mismo Consejo el día 1 de mayo había mandado a la Sala redoblar la vigilancia". Sin duda, la noticia de la salida de los últimos miembros de la Familia Real había corrido por Madrid y era posible un movimiento. Sin embargo, parece que el levantamiento y sus consecuencias cogieron por sorpresa a nuestras instituciones".

Conocidos los hechos, el Consejo decidió salir en corporación a apaciguar al pueblo. Pasó comunicaciones a través de dos Relatores a los Consejos de Indias, Ordenes y Hacienda. Bajaron estos dos últimos con sus respectivos Presidente y Gobernador para acompañar al Gobernador de Castilla. Reunidos en la Sala primera de Gobierno, retardaron su salida hasta que cesasen los tiros que se escuchaban en la misma puerta del Palacio de los Consejos. Por su parte, el Consejo de Indias decidió no sumarse a los demás Consejos.

En ese tiempo se decidió enviar un oficio a Murat pidiendo retirara las tropas y señalase hora en que el Consejo pudiera pasar a su Palacio en diputación. Entre tanto, llegaron a la puerta de la sede de los Consejos a caballo don Miguel José de Azanza, Ministro de Hacienda, don Gonzalo O'Farril, Ministro de la Guerra, don Francisco Javier Negrete, Capitán General de Madrid, un General francés y varios oficiales de ambas naciones. En nombre de la Junta dijeron al Decano que era preciso fijar un bando para calmar a la población. Tras estudiar el tema los representantes de aquellos Consejos, salieron nuevamente y manifestaron a los ministros que les parecía mejor publicar

"". Se pueden ver algunos de estos informes en el A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, folio 381 y ss.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1.808", pág. 152.

"". De forma anecdótica nos puede servir un relato sobre un suceso de aquel día que escribió el Conde de Toreno: "Por desgracia, fuimos de los primeros en ser testigo de la ciega confianza de las autoridades españolas. Llevados acasa de don Arias Mon, Gobernador del Consejo, con deseos de librar la vida de don Antonio Oviedo, quien sin motivo había sido preso al cruzar de una calle, nos encontramos con que el venerable anciano, rendido por el cansancio de la fatigosa mañana, dormía sosegadamente la siesta. Enlazados con él por razones de parentesco, conseguimos que se le despertase y, con dificultad pudimos persuadirle de la verdad de lo que pasaba, respondiendo a todo que una persona como el Gran Duque de Berg no podía descaradamente faltar a su palabra..." (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 151).

de viva voz un bando que fijar edictos"".

La publicación de bando se hizo por los Consejos en las calles y plazas de Madrid, protegidos por algunos soldados franceses y españoles. El bando había sido redactado por el Consejero de Castilla don Gonzalo José de Vilches. Se formó una amplia comitiva que iba publicando los bandos en los sitios donde indicaba el Gobernador don Arias Mon. Entre otras cosas, pedían calma y anunciaban una amnistía general"". Se sumaron también a esta comitiva los Consejos de Indias y de la Guerra, y todos juntos recorrieron aquella mañana las calles de Madrid, primero en una y más tarde divididos en dos comitivas"".

Coincidimos con Desdiseis du Dezert"" en que la decisión del Consejo aquella mañana salvó muchas vidas y demostraba el prestigio de esta venerable institución"". En una rápida decisión"" supo reunir a los

"" Así narraba este hecho Carnicero: "Con efecto, luego que se hicieron varias descargas de artillería y fusilería, y la columna apostada en la plaza de Palacio venía haciendo fuego por la calle Mayor, se presentaron a caballo los ministros delante del Consejo de Castilla, e hicieron que saliesen también los ministros de los otros, y en grandes partidas con sus pañuelos blancos en las manos fuesen persuadiendo al pueblo que se aquietase y retirase a sus casas. Y a esta solemne promesa, hartó mejor que a sus armas, debió Murat que el pueblo se retirase, y al indulto que publicaron los Consejos, mediante el que aseguraban que terminado el alboroto, las tropas francesas no se meterían más con los paisanos, si éstos no lo hacían con aquéllas..." (CARNICERO, J.C., op. cit., págs. 104 y ss.).

"" AZANZA Y O'FARRIL, "Memoria justificativa", pág. 353.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27.

"" DESDEISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1808", págs. 160 y 161.

"" Sin embargo, muchos criticaron que el Consejo de Castilla no adoptase una actitud firme contra los franceses tras los acontecimientos de aquellos días. Hoy en día hay también autores que consideran que el Consejo se inhibió indebidamente ante aquellos hechos (Vid., por ejemplo, FONTES, F., "El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII" pág. 10). Más adelante estudiaremos con detenimiento esta cuestión. Sin embargo, apuntamos solamente que consideramos que la actitud prudente del Consejo fue quizás la mejor, considerando el estado de ocupación militar y de indefensión que tenía Madrid, la prisión de nuestra Familia Real y la inutilidad y peligros de un enfrentamiento frontal

demás Consejos y contribuir en aquella jornada al mantenimiento de la calma. Incluso consiguió la liberación de cuarenta paisanos, detenidos por tropas francesas bajo la acusación de llevar armas, y que quizás en otro caso hubieran sido fusilados"".

Los acontecimientos siguientes han sido relatados por Artola"": "La Junta y el Consejo de Castilla, requeridos por el Gran Duque, trataron por los medios a su alcance de restaurar la tranquilidad (...). El Consejo a instancias de Murat fijó una proclama prohibiendo se maltratase a los franceses. Ante un segundo requerimiento se hizo pública, coincidiendo con el fin de la resistencia, la prohibición de reunirse en calles y plazas y la orden de recogida de todas las armas cortas blancas y de fuego"". Al

con los invasores. Contener la rebelión era salvar muchas cosas. El Consejo prefirió ganar tiempo y ver el desarrollo de los acontecimientos. Por otro lado, la dura represión francesa también intimidó, no cabe duda, a los miembros del Consejo de Castilla.

"". Que contrasta sin duda con la lentitud habitual en el obrar de este Consejo.

"". Así relataba el Conde de Toreno la actuación de las autoridades españolas aquella mañana: "O'Farril y Azanza, habiendo recorrido inútilmente los alrededores de Palacio y no siendo escuchados de los franceses, montaron a caballo y fueron a encontrarse con Murat, quien desde principio de la sublevación para estar más desembarazado y más a mano para dar órdenes, se colocó con el Mariscal Moncey y principales generales fuera de las puertas en lo alto de la Cuesta de San Vicente. Llegaron allí los comisionados de la Junta y dijeron al Gran Duque que si mandaba suspender el fuego y les daba para acompañarlos a uno de sus generales, se ofrecían a restablecer la tranquilidad. Accedió Murat y nombró al efecto al general Harispe. Juntos los tres pasaron a los Consejos, y asistidos de los individuos de todos ellos se distribuyeron por calles y plazas, y recorriendo las principales alcanzaron que la multitud se aplacase con oferta de olvido de lo pasado y reconciliación general. En aquel paseo se salvó la vida a varios desgraciados, y señaladamente a algunos traficantes catalanes, a ruego de don Gonzalo O'Farril." (CONDE DE TORENO, op. cit., págs. 149 y 150).

"". ARTOLA, M., "La España de Fernando VII", Historia de España Menéndez Pidal, tomo 26, pág. 29.

"". El 3 de mayo a las 10 de la mañana el Decano manifestaba a Muñoz una orden que comunicaba el Gobernador de la Sala con relación al recogimiento de armas de que hablaba el bando publicado en ese mismo día. En ese bando se mandaba que los Alcaldes recogiesen las armas y formasen listas de las no prohibidas. Al parecer, la recogida de armas

mismo tiempo se formaron dos comisiones con los miembros de los Consejos, algunos ministros y oficiales franceses, delegados por Murat, que se cuidaron de restablecer el orden con la colaboración de destacamentos de ambas nacionalidades tomados entre los que no habían participado en la lucha."

A la una de la tarde entonces mandaba el Consejo fijar un edicto anunciando a los que participasen en incidentes graves penas hasta incluso la de muerte. Para las ocho de la tarde fue convocada una reunión extraordinaria del Consejo, a la que acudieron veintidós ministros. Durante la reunión, el Decano Gobernador interino con los Sres. Vilches y Colón pasaron a Palacio para asistir a la Junta Suprema de Gobierno. El Consejo estuvo reunido hasta la una de la madrugada, quedando aprobado en Decreto el siguiente bando:

"Aunque por las providencias tomadas se logró contener el alboroto del pueblo en la madrugada de este día y se ha visto ya desde la tarde el sosiego público, conviene tomar otras precauciones que aseguren que no se repitan tan funestos sucesos.

Y con este objeto se hace saber a todos los habitantes de Madrid que por ningún título ni pretexto se reúnan en las calles y plazas; en el concepto de que si advertidos por cualquier Alcalde de Corte o de barrio o cabeza de ronda, o jefe militar con patrulla, de cualquier graduación que sea, no se dispersaran inmediatamente, se les tratará como violadores de la pública tranquilidad e impondrán las penas correspondientes hasta la de muerte.

Que los Alcaldes de Corte recojan en el día de mañana todas las armas cortas blancas (en las cuales es bien sabido que se comprenden los puñales) y de fuego, para colocarlas en la pieza que a este fin se destine en las casas capitulares.

Que de las escopetas y armas largas permitidas por la pragmática sólo para la defensa propia, y evitar los asaltos de ladrones en las habitaciones o en los caminos, se forme lista por los mismos Alcaldes de cuartel, haciendo saber a sus dueños que no las empleen en otros usos, ni las entreguen a diferentes personas, bajo las

planteó ciertos problemas y fue objeto de debate en el Consejo en los días siguientes. Entre otras medidas el Consejo de Castilla mandó que se depositasen las armas en la Cárcel de Corte, al no haber espacio libre en las Casas Capitulares (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 7).

más severas penas.

Que si después de la publicación de este Bando se encontrare alguno usando de dichas armas cortas blancas o de fuego, se le impondrá no sólo la pena de pragmática, sino también se agravarán hasta la del último suplicio.

El Consejo espera de la ilustración y obediencia de los vecinos honrados de Madrid que procurarán impedir todo desorden, cuidando se conserve la mejor buena armonía con la tropa francesa, pero no exponerse a las fatales resultas que ya se han empezado a experimentar. Madrid, 2 de mayo de 1.808. ""

Ya hemos mencionado que una de las acusaciones que se vertieron contra el Consejo de Castilla es que no mandó al Ejército español defender a nuestros paisanos y permitió los fusilamientos del 2-3 de mayo. También se le imputaron estos bandos en que amenazaba con la pena capital a los paisanos insurrectos. Creemos que para comprender la reacción del Consejo debemos meternos en las personas de sus Consejeros y en las delicadísimas circunstancias que entonces se vivían.

La Junta de Gobierno mostraba una cierta carencia de personalidad e incluso de autoridad pública. Esta Junta, dominada por Murat y con una gran falta de movimientos, se sentía incapaz de controlar la situación y acudió al Consejo de Castilla. Ambos comprendieron que el levantamiento, en vacío de poder, podía convertirse en anarquía y desencadenar una matanza. Era preciso mantener a toda costa la autoridad pública y someter a los insurgentes a la autoridad española. Esto es lo que trató de hacer el Consejo de Castilla. Por otro lado, dejando aparte que el Consejo no tenía mando militar y que movilizaciones de tropa hubieran correspondido más a la Junta de Gobierno, si se hubieran tomado medidas que supusiesen un apoyo formal a la sublevación, hubiera sido el fin de toda la política seguida hasta el momento por el Consejo. Un respaldo a medidas de fuerza hubiera desatado la sublevación contra los franceses a todo el ámbito nacional, y esta previsible catástrofe era lo que el Consejo quería evitar a toda costa"".

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 7

"" Fontes Migallón, en su estudio sobre "El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII" acusa al Consejo de Castilla -al igual que la Junta- de colaboracionista y de plegarse "desde el primer momento y con toda facilidad" a los deseos de Napoleón, "en contraste con la actitud del Consejo de Estado. También acusa al Consejo de Castilla de inhibirse ante los acontecimientos del 1 y 2 de mayo. (op. cit., págs.

Algunos observadores de la época coincidieron también en esta opinión. He aquí la de Mor de Fuentes, recogida en sus Memorias escritas unos lustros después:

"En cuanto al número de víctimas, como se habló con tanta variedad, no me atrevo a fijarlo, pero sí me afirmo nuevamente en que fue muy acertado el conato de la Junta de Gobierno y del Consejo Supremo al contener al pueblo y hacer que cesasen las hostilidades, pues sin esta providencia es innegable que Madrid hubiera sido inundado en sangre"".

En cuanto a la cifra de muertos en aquel día, las primeras informaciones tendían a quitarle importancia al levantamiento"". "El Consejo, interesado en disminuirla, la rebajó a unos doscientos hombres del pueblo"; Murat la dejó a unos ochenta entre muertos y heridos"". En el informe justificatorio del mes de agosto el Consejo indicaba que hubo en total ciento cuatro muertos y que "la pérdida de los franceses fue considerablemente superior"". Parece que las cifras más acertadas las dio el Conde de Toreno, al afirmar que las bajas por ambos lados pudieron estar en mil

10 y 11). Ya hemos visto que no parece que esto fuera así.

"" MOR DE FUENTES. "Bosquejillo de su vida", Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVII, pág. 387.

"" El Consejo de Castilla fue obligado por Murat a formar un padrón de muertos y heridos, a la vez que por el Estado Mayor de Murat se recontaban las pérdidas del lado francés. El acuerdo del Consejo para formar las listas fue tomado el 7 de mayo y en menos de quince días se tuvo terminado. Murat necesitaba un informe oficial para remitírselo a Napoleón (~~PEREZ DE GUZMAN, "El dos de mayo en Madrid", págs. 27 y ss.~~). El 7 de mayo de 1.808 el Consejo pleno acordó enviar al Gobernador de la Sala la orden de que se formasen listas de muertos y heridos de sus cuarteles por los respectivos alcaldes (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1808: en los folios 562 y ss. se encuentra el expediente sobre el 2 de mayo en el Cuartel de San Martín (Parque de Artillería de Monteleón), donde aparecen los informes, entre otros, sobre don Pedro Velarde, don Luis Daoíz, doña Manuela Malasaña, doña Clara del Rey, etc.).

"" CONDE DE TORENO, op. cit., págs. 153 y 154.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto de los procedimientos...", folio 28.

doscientos muertos y heridos en total". En esta cifra también evaluaba el propio Murat el número de muertos del lado español en una carta dirigida a su superior jerárquico el general Dupont, fechada el 3 de mayo".

Las promesas realizadas por Murat y publicadas por el Consejo de Castilla de que no habría represalias, no fueron respetadas por los franceses. En los días 2 de mayo y siguientes hubo alrededor de 320 fusilamientos y el mismo día 3 Murat mandó fijar una proclama digna de una ocupación militar en regla. Consecuencia de toda ello fue una mayor indignación y odio contra el invasor". Había estallado la Guerra de la Independencia. En Consejo en su Manifiesto exculpatorio indica las distintas gestiones que hizo cerca de Murat para que cesaran las fusilamientos y se suprimiera la comisión militar que los determinaba, aunque Murat no parece que hiciera mucho caso a estas mediaciones del Consejo".

***. En esta opinión coincide DESDEVISES, op. cit., pág. 163.

***. RUIZ-CASTILLO BASALA, J., "El 2 de mayo y Bailén", Diario ABC, 5-V-1.990, citando esta carta de Murat a Dupont, de la que extractamos: "...Durante la jornada de ayer ha habido por lo menos mil doscientos hombres muertos, sean del populacho o de los burgueses madrileños; y por nuestra parte no hemos tenido más que centenares de heridos y eso porque fueron atacados cuando estaban solos en las calles." Sobre las víctimas del 2 de mayo se puede consultar también entre otras fuentes, el legajo 5.512 núm. 7 de Invasión Francesa (Consejos Suprimidos, A.H.N.), y los dos Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes correspondientes al año 1808.

***. Los días siguientes al 2 de mayo el Consejo recibió muchas representaciones a través del Gobernador de la Sala, de alcaldes de barrio o particulares informando de excesos, crímenes y robos por parte de la tropa francesa, tanto en Madrid como en sus alrededores. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 8). Días más tarde la Sala también informaba al Consejo que muchos militares de la guarnición de Madrid habían huido y que los alcaldes echaban de menos su asistencia (legajo 5.512 núm. 7).

***. Así relataba el Manifiesto estos sucesos: "Noticioso después el Señor Gobernador interino de que habían llevado los franceses al campamento de Chamartín a varios paisanos que prendieron, y habían ejecutado lo mismo con otros en la casa almacén de Artillería, pasó oficio al Serenísimo Señor Infante D. Antonio y Junta de Gobierno, para que lograrse su libertad del Gran Duque de Berg. Habiendo sabido el Consejo por la noche entre doce y una, hora en que subsistía aún formado en la posada de S.I., que permanecían todavía aquéllos en gran riesgo en dicho campamento, dirigió otro a Palacio, en donde se hallaba el Señor Gobernador, a fin de

El día 3 de mayo salía el infante don Francisco de Paula hacia Bayona. Al día siguiente, 4 de mayo, el Presidente de la Junta, Infante don Antonio también partía, por Real Orden del Rey^{***}. Con su marcha, acababa la primera etapa de la Junta de Gobierno. A partir de este momento será presidida por Murat y se convertirá en un juguete en manos de los franceses.

Con fecha 4 de mayo el Consejo de Castilla enviaba a la Junta Suprema de Gobierno un interesante oficio, que recoge muy bien sus sentimientos ante los momentos que se estaban viviendo^{***}:

"El Consejo, a cuya atención y vigilancia son inseparables no sólo el buen orden y tranquilidad de la Corte, sino el bien de la humanidad compatible con los mismo objetos, ha tomado en consideración las consecuencias dolorosas del movimiento popular acaecido en la mañana del 2 del corriente, que aunque se

que estrechase al Serenísimo Señor Infante a repetir prontamente instancias eficaces a favor de aquellos infelices y honrados vecinos: pasó una diputación de la Junta a verse con el Gran Duque, quien sólo dio esperanzas a favor de los militares que hubiesen sido hechos presos en el acto de cumplir las órdenes de sus jefes; pero creó una comisión militar, en la que parece se determinó la muerte de la mayor parte de los presos, sin audiencia alguna. Consternado el Consejo con esta noticia, envió en el día 3 a dicho Gran Duque una diputación, compuesta de los Señores Gobernador interino, D. Gonzalo José de Vilches y don Vicente Duque de Estrada, y logró que ofreciese extinguir dicha comisión, como lo verificó en el siguiente 4, aunque a pesar de esto fueron fusilados algunos españoles en este día, y en alguno de los posteriores..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27).

^{***}. El Consejo de Castilla en su manifiesto de agosto explicaba cómo reiteradas veces hizo intentos por convencer al Infante que debía refugiarse en un punto seguro de las Provincias y formar allí una nueva Junta de Gobierno. Don Antonio se negó siempre, para no dar motivo de queja a los franceses. Sabemos que el Infante don Antonio recibió en la noche del mismo día 3 de mayo, alrededor de las ocho de la noche, al Decano y a dos ministros del Consejo de Castilla (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 4). El día 4 a las tres de la tarde el Gobernador interino convocó en su casa a los miembros del Consejo a las cinco y media y les comunicó la importante noticia de la marcha del Infante don Antonio (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 6).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 7.

terminó y extinguió dichosamente por las providencias, bando y explicaciones que se tomaron, publicaron e hicieron por la Junta de Estado, tribunales de la Corte y Generales franceses, inspira aún el terror más nocivo a los habitantes honrados de este pueblo a causa de las investigaciones y cargos que se hacen y temen acerca de los hecho ocurridos en el mismo alboroto.

Reconoce el Consejo la importancia, el crimen y temeridad de los que le suscitaron y cooperaron a él (y mucho más la de aquéllos que alevosamente han disparado, tirado tejas o piedras desde las ventanas y otras partes), pero como quiera que estos males ya cesaron, que son inevitables y que la razón, la justicia y la insensibilidad exigen que no se multipliquen sin necesidad y utilidad, habiéndose logrado ya el escarmiento con los castigos ejecutados que son notorios, y tomándose las precauciones oportunas para desarmar a los revoltosos, parece que debe no tratarse ya de lo pasado, ya convenido en aquellos momentos desgraciados, ciñéndose el rigor a los que en lo sucesivo dieran justa causa o motivo de ejercitar la venganza.

En el mismo acto del tumulto se notaron muchas acciones generosas de parte de los vecinos para libertar a las tropas francesas de la persecución y violencia. Al populacho de que se puede hacer una manifestación individual a S.A.Y. y R., el Sr. Gran Duque de Berg., y en las mismas casas de donde se hay visto disparar pueden vivir y vivirán sin duda personas y familias enteras no sólo inocentes sino penetradas de los sentimientos más nobles contra semejante conducta. Es notorio que en las casas grandes de esta población, o en muchas de ellas, hay diversos vecinos que viven sin conocerse, tratarse ni tener ninguna relación entre sí, y especialmente en las buhardillas y sótanos se acomodan o aposentan muchas plebe a quien es más de temer haya procedido por el desorden con que procederse en tales casos. Por lo mismo creería ciertamente muy expuesto el notar las casas y obras contra ellas y sus habitantes. Y esta reflexión que es tan cierta aflige demasiado a tantos millares de personas distinguidas y apreciables que pueden sufrir gravísimos daños si ya no se adopta el suave partido de pedir a S.A.I. y Real se sirva por un efecto de su generosidad mandar que cese toda la pesquisa e investigación por los sucesos ya inevitables, supuesto que el desorden se ha corregido y es

de creer que no se repita con las activas disposiciones y conminaciones que se han tomado y hecho saber al público..."

5. Murat, Presidente de la Junta Suprema de Gobierno

Desde la partida del infante don Antonio, la Junta siguió sus sesiones. La asistencia del Gobernador del Consejo Real era frecuentísima. Lo mismo ocurría con los Decanos y Gobernadores de los demás Consejos, así como con algunos ministros de éstos. Nada más partir el Infante, Murat manifestó a la Junta sus deseos de participar en sus reuniones. Tras una negativa inicial y ante su nueva solicitud, Murat fue aceptado como Presidente de esta Junta. Así lo relataban Azanza y O'Farril en su "Memoria justificativa":

"Los Ministros Gil, Azanza y O'Farril y otros vocales la impugnaron abiertamente; pero la pluralidad receló mayores inconvenientes de no prestarse a ello, noticiosos de cuanto pasaba en Bayona, y temerosos de que cualquier incidente en que se chocase directamente con el Gran Duque excitase nuevas convulsiones."***

Murat se había percatado de algo que era evidente: el miedo a provocar incidentes mayores impedía a las autoridades españolas oponerse con firmeza a sus planteamientos. De esta manera, el Gran Duque obra cada vez con mayor desparpajo e insolencia, consciente de su posición favorable, y lleva siempre la iniciativa.

***. AZANZA y O'FARRIL, op. cit., pág. 295. En la mencionada reunión se encontraban presentes los Sres. Gobernadores y Decanos de los Consejos. Azanza y O'Farril intentan justificarse afirmando que se opusieron abiertamente al nombramiento de Murat, pero lo cierto es que de las Minutas de las sesiones de la Junta Suprema de Gobierno conservadas en el Archivo de Villa, en Madrid, en la correspondiente al 4 de mayo se puede leer que tal acuerdo fue tomado por unanimidad de todos los presentes, entre los que se encontraba también don Arias de Mon, Decano del Consejo Real.

El Consejo de Castilla no se opuso al nombramiento de Murat, ni presentó ninguna representación ni consulta, cuando este asunto sí que era de su competencia. En su manifiesto justificativo de agosto, el Consejo se excusará diciendo que no fue informado de esta admisión, cuando en realidad hemos visto que tal acuerdo había sido firmado por el Decano Gobernador interino del Consejo, don Arias Mon, quien participó en su aprobación^{***}. Coincidimos con Martínez de Velasco^{***} en que el Consejo de Castilla debió quedar muy impresionado por los sucesos del 2 de Mayo. Había visto la crueldad de los ocupantes franceses y sin duda los Consejeros de Castilla, al igual que los miembros de la Junta, se arredraron y no supieron ya oponerse al Gran Duque^{***}. Los días siguientes al 2 de mayo debieron quedar

^{***}. Cfr. también sobre este particular la "Memoria justificativa" de AZANZA Y O'FARRIL, op. cit., pág. 295. Por otro lado, no podemos olvidar que en la Junta Suprema de Gobierno había por entonces tres miembros del Consejo de Castilla -el Decano Arias de Mon, Vilches y el Fiscal Sierra- y el Fiscal de la Sala de Alcaldes don Pablo Arribas (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 15).

^{***}. MARTINEZ DE VELASCO, A, "La Formación de la Junta Central", op. cit., pág. 46.

^{***}. Una carta de Murat, remitida a Duhesme con fecha 6 de mayo refleja perfectamente la situación. Desdiseñes la publica en su historia sobre el Consejo de Castilla en 1.808: "La leçon donnée aux rebelles de Madrid a produit des résultats décisifs. Les partisans de Ferdinand, complètement battus et déconcertés, ont capitulé. A l'insolence des factieux ont subitement succédé la consternation et une résignation absolue. L'enthousiasme a disparu. Les Espagnols ont ouvert les yeux sur leur véritables intérêts. Tous, abandonnés de leur roi, implorent aujourd'hui la clémence de l'empereur, sa protection, et lui demandent un roi de sa dynastie. J'espère que le roi de Naples, si justement estimé de l'Europe, régnera sur les Espagnols. La Junte de Gouvernement, après avoir rempli ses devoirs de fidélité et de dévouement envers son prince, se trouvant dans des circonstances extraordinaires, réduite à ne pouvoir plus prendre d'ordre nide direction de ses souverains qui se trouvent à Bayonne, craignant enfin le retour des événements funestes du 2 mai, vient de me prier de me charger de sa présidence; j'ai bien voulu accepter." (DESDEISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1.808", págs. 172 y 173., obtenido del Archivo de las Guerra de París, Corresp. 1.808, Ejército de España, 6 de mayo de 1.808, Murat a Duhesme). Esta idea también fue recogida por Azanza y O'Farril en su "Memoria justificativa": la mayoría de los miembros de la Junta "receló mayores inconvenientes de no prestarse a ello (a que Murat presidiese la Junta), noticiosos de cuanto pasaba en Bayona, y temerosos de que cualquier incidente en que se chocase directamente con el Gran Duque excitase nuevas

desmoralizados y abatidos, con un sentimiento de impotencia ante el poderío del invasor francés"".

Inmediatamente, con fecha 4 de mayo apareció un decreto de Carlos IV expedido en Bayona, nombrando a Murat Lugarteniente General del Reino. Este decreto"" debió llegar a Madrid el día 7 y fue inmediatamente llevado a conocimiento del Consejo. Como hemos visto, sorprendentemente fue aceptado por el Consejo de Castilla, aún cuando era ilegal al no haber renunciado Fernando VII a la Corona. Como señalaba el decreto del Consejo, de fecha 8 de mayo, se acataba "a fin de evitar todo inconveniente"".

En los días 5 y 7 de mayo hubo alguna otra novedad que afectaba al Consejo. El día 5 aprobaba el Consejo una proclama mandando tener armonía con las tropas francesas"", y mandaba también publicar otra proclama de Murat dirigida a los soldados franceses""; su Consejero don Domingo Fernández de Campomanes era nombrado Juez de Policía

convulsiones." (AZANZA Y O'FARRIL, op. cit., pág. 295).

"". No existía un Ejército español en regla, los Reyes y la Familia Real estaban prisioneros en Bayona y en peligro, las autoridades del gobierno central carecían de libertad para gobernar y habían sido masacrados impunemente centenares de ciudadanos por el ejército intruso.

"". El original de este decreto se encuentra en A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 4.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12. Así relataban Azanza y O'Farril la llegada del documento a Madrid: "Carlos IV remitió a la Junta un Decreto dando a Murat la presidencia de la Junta de Gobierno. Como podía plantear problemas sobre la soberanía, aunque inmediatamente se pasaron estos documentos al Consejo, la Junta juzgó prudente no publicarlos en aquel día 8, acordando sólo su cumplimiento. Pero en el día siguiente e inmediatos felicitaron al Gran Duque todos los Consejos Supremos, todas las autoridades y corporaciones de la capital, el Nuncio de SS. y todo el Cuerpo Diplomático." (AZANZA Y O'FARRIL, op. cit., pág. 296). El Decreto de acatamiento expedido por el Consejo de Castilla fue expedido tras una reunión del propio Consejo con dos miembros de la Junta de Gobierno, aquella misma tarde a las siete de la tarde (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 4).

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 4.459.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núms. 7 y 8.

de Madrid en ese día 5""; y el mismo día los Consejeros Vilches y Colón entraban a formar parte de la creada comisión para censura diaria de la Gaceta.

También el día 5 la Junta de Gobierno conoció una carta de Fernando VII a su padre, con referencias a la abdicación. Aquella misma noche la Junta de Gobierno acordaba que el Marqués de Caballero, Gil de Lemos y O'Farril informaran al Consejo de Castilla de "un asunto de la máxima gravedad"". Este asunto parece ser el no reconocimiento por Napoleón de las abdicaciones de Aranjuez y también una carta escrita por Carlos IV al Gran Duque de Berg, con fecha 4 de mayo, pidiéndole que gobernase España en su nombre"", así como el decreto de nombramiento como Lugarteniente del Reino. En la sesión de la Junta del día 7 se acordó que la comisión de la Junta para tratar con una comisión del Consejo se compondría de los Sres. Marqués de Caballero, Pifuela e Iriarte, y se reunirían en casa del primero a las 7 de la tarde"". Aquel mismo día varios miembros de la Junta de Gobierno quisieron dimitir"", pero no se aceptó su dimisión.

Hemos anotado que el día 9 de mayo y siguientes felicitaban a Murat por su designación todos los Consejos Supremos, todas las autoridades y corporaciones de

"". Por Real Cédula de 11 de mayo de 1.808 fue creada una Junta de Policía en Madrid, presidida por don Domingo Fernández de Campomanes y con dos comisarios: Mr. Raymond y Mr. Esmenard, "cuya jurisdicción y conocimiento será extensiva a cuanto conciernia a la alta policía, a la de seguridad y administración, continuando la contenciosa a cargo de los magistrados que la hayan ejercido hasta ahora" (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 expte. núm. 2).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 4; ver también Minutas de las sesiones de la Junta Suprema de Gobierno, Sesión del 5 de mayo por la noche, Archivo de Villa,, Secretaría, ref. 7-478-9.

"". Murat la remitió al Consejo para que la tuviera presente, junto con otros documentos (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12).

"". Por parte del Consejo de Castilla fueron designados Vilches, Colón y Lardizábal (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12).

"". Parece que uno de ellos fue don Francisco Gil de Lemos, quien el día 6 de mayo manifestó a miembros del Consejo de Castilla que iba a pedir a la Junta de Gobierno su dimisión (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12).

la capital", el Nuncio de S.S. y todo el Cuerpo Diplomático. El Consejo de Castilla por su parte pasó a felicitar al Gran Duque de Berg el día 10".

Antes de ser conocidas las transacciones de Bayona, empezaron a llegar noticias al Consejo de resistencias y levantamientos en algunos pueblos de España, a medida que les llegaban rumores de lo acontecido en Madrid el 2 de mayo". El nuevo Lugarteniente General del Reino

... Curiosamente el Ayuntamiento de Madrid no había sido invitado a acudir, probablemente por olvido, de tal manera que el Corregidor de Madrid, don Pedro de Mora, escribió al Escribano de Gobierno del Consejo de Castilla, solicitando acudir con este Consejo a felicitar a S.A.: "Desearía no faltar y así ruego a V.S. se sirva preguntar al Consejo si es de su agrado que la Villa vaya hoy como se hace cuando el Consejo y demás Tribunales van a Palacio o si lo ha de dejar hasta que reciba el aviso de oficio..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 8). Por otro lado, parece ser, en opinión de Fontes, que fue el Consejo de Estado uno de los que más se resistió a cumplimentar a Murat, pues acudió el día 11 de mayo a Palacio y tan sólo estuvieron presentes seis Consejeros (FONTES, F., "El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII", págs. 13 y 14), si bien es cierto como apunta el profesor Sánchez-Arcilla que muchos Consejeros de Estado se encontraban entonces fuera de España y otros en Bayona con los Reyes.

... A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 8: "Expediente formado en virtud de Real Orden participando al Consejo haber señalado el Serenísimo Señor Gran Duque de Berg, como Lugarteniente General del Reino, la hora de las doce de la mañana del día diez de mayo para que el mismo Tribunal pasase a felicitar y cumplimentar a A.A.I. y R. con el plausible motivo de dicha tenencia general", Madrid, 9 de mayo de 1.808. El Decano del Consejo señaló la hora de las 8 y media para la asistencia de los ministros a la Casa del Tribunal, con el fin de pasar desde él a dicho acto a las once y media al Real Palacio. También el 9 de mayo se comunicaba a la Sala la orden para que el día siguiente martes 10 de mayo asistiese el Consejo a felicitar y cumplimentar a Berg con motivo de la tenencia general. El Decano del Consejo había acordado que la Sala concurriese a las 11:15 en punto a fin de acompañarle en este acto. (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.398, folio 1.024). Por otro lado, el Consejo de Estado cumplimentaría al Gran Duque de Berg al día siguiente, día 11 de mayo (FONTES, F., op. cit., pág. 13).

... Por ejemplo, en A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 2.757 núm. 10: "Expediente formado con motivo de la representación de la ciudad de Sevilla en que ha dado cuenta de la sensación que allí hizo la noticia del suceso de esta Corte el día dos de mayo de este año; y de las

dispuso que el Conde del Pinar, Consejero de Castilla, y don Juan Meléndez Valdés, Fiscal que había sido de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, pasasen a Asturias a apaciguar sus ánimos. Cuando llegaron a aquel Reino ya eran públicamente conocidos los Decretos de Bayona por los que se cambiaba la Dinastía, y las vidas de ambos comisionados corrieron serio peligro ante el furor que tales noticias causaron en la población^{***}. Este incidente mostraba ya la opinión pública que había ya en las provincias en contra del Consejo de Castilla^{***}.

providencias que le ha sido preciso tomar para satisfacer los deseos de aquel pueblo leal a su Rey, alistando a sus vecinos y fijando su pendón." También el legajo 5.512 de la serie Invasión Francesa (A.H.N., Consejos Suprimidos) contiene varios expedientes sobre conmociones y revueltas populares en distintas localidades españolas (por ejemplo, los expedientes núms. 21, 22, 23, 24, 25 y 26).

^{***}. AZANZA y O'FARRIL, "Memoria justificativa", pág. 307. Así describía los hechos el Conde de Toreno: "Pero el alzamiento general fue organizado y triunfó. Los comisionados por Murat por su propia seguridad habían sido detenidos a su arribo a Oviedo, junto con varios comandantes. Desde el principio el Marqués de Santa Cruz no había cesado de pedir que se les formase causa. La Junta dilataba su determinación esperrando que se templase la ira que contra los arrestados había. Recelosa la Junta de algún desmán, resolvió poner a los detenidos fuera de los lindes del Principado. Por atolondramiento se trató de sacarlos en medio del día y públicamente, para que en coche emprendiesen su viaje. Hubo gritos de mujerzuelas: ¡Que se marchan los traidores! Con cinco desventurados fueron capturados por la chusma y conducidos al campo de San Francisco extramuros, fueron atados a árboles para ser arcabuceados. Un canónigo salvó milagrosamente a estos presos de la ira del populacho." (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 190).

^{***}. Este suceso trascendió ampliamente a la bibliografía de la época y ha sido también recogido por otros muchos historiadores del reinado. He aquí el relato que nos ha transmitido C. Le Brun, fechado en 1826, que refleja bien los sentimientos del pueblo en aquella ocasión: "Quando entraron los franceses en Madrid lo escogió (al Conde del Pinar) el general Murat como el más a propósito para ir a Asturias y convertir a aquella Junta y Reino al Napoleonismo. Desempeñó su encargo (o su traición) con una osadía y sangre fría tan insolente y páfida, que el pueblo y la Junta se consternaron al oírle; y no podían creer lo que estaban oyendo de la boca misma de su compatriota que había ya renunciado la patria y la vergüenza. No pudieron persuadirle sus amigos y parientes explicase su comisión y expresiones por la fuerza que le habían hecho y el miedo que le habían impuesto para admitirla. Insistió siempre en que la admitió voluntariamente -que la desempeñaba de buena fe-, y que les exhortaba por eso

Volviendo a la situación en Bayona, Fernando VII conocía ya con detalle los objetivos de Napoleón. Había recibido también la consulta de la Junta de Gobierno -cuando era todavía presidida por el Infante don Antonio-con aquellas cuatro importantes cuestiones, y con fecha 5 de mayo expidió dos importantes decretos"":

El primero de ellos, dirigido a la Junta de Gobierno, decía lo siguiente: "Que se hallaba sin libertad, y consiguientemente imposibilitado de tomar por sí medida alguna para salvar su persona y la monarquía; que por tanto autorizaba a la Junta en la forma más amplia para que en cuerpo o sustituyéndose en una o muchas personas que la representasen, se trasladara al parage que creyese más conveniente, y que en nombre de S.M., representando su misma persona, ejerciese todas las funciones de la soberanía. Que las hostilidades deberían empezar desde el momento en que internasen a S.M. en Francia, lo que no sucedería sino por la violencia. Y por último, que en llegando ese caso tratase la Junta de impedir del modo que creyese más a propósito la entrada de nuevas tropas en la Península."

Con la misma fecha expidió Fernando este otro Decreto autógrafo dirigido al Consejo de Castilla, o a cualquier Chancillería o Audiencia libre del Reino: "Que en la situación en que S.M. se hallaba privado de libertad para obrar por sí, era su Real voluntad que se convocasen las Cortes en el parage que pareciese más expedito; que por de pronto se preocupasen únicamente en proporcionar los arbitrios y subsidios necesarios para atender a la defensa del Reino, y que quedasen permanentes para lo demás que

a seguir su partido y su opinión. El pueblo no pudo ya, oyendo esto, contener más su furia, ni la Junta y los primeros ciudadanos pudieron tampoco contenerlo en su ímpetu patriótico. Se apoderó en su exaltación y en su rabia de la persona del pérfido Conde, lo maltrató, lo arrastró, lo llenó de golpes y de insultos; lo ató por último a un árbol, para quitarle la vida, cebándose en su sangre y en sus sufrimientos, que quería fuesen humillante y dolorosa. Tuvieron que acudir al obispo y el clero, y los eclesiásticos de todas clases, para salvarlo del furor popular que habían arritado su insolencia, y su hábito de tratar al pueblo con desprecio. Fue menester por último sacar a Su Majestad de su Tabernáculo, para aplacar al pueblo con Ella en la mano; y así lo pudieron desatar y llevar hasta la iglesia, en donde entró ya destrozado, desnudo, ensangrentado y cubierto de cardenales. Hubo de hacer después mucho, para preservarlo y ponerlo a salvo..." (LE BRUN, C., "Retratos políticos de la Revolución de España", Filadelfia 1826).

"" Ver también SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", págs. 11 y 12.

pudiese ocurrir."""

Estos decretos fueron recibidos por Azanza el nueve o diez de mayo. Inmediatamente convocó a los otros tres ministros de la Junta, pero no tomaron ninguna decisión, cuando obrando lealmente debían haber adoptado urgentemente medidas.

6. Las abdicaciones de Bayona

Pronto llegaron a Madrid las noticias de las abdicaciones de Bayona. Con fecha 6 de mayo se recibió una carta de Fernando en que renunciaba a la Corona en su padre, Carlos IV. Sin embargo, estas noticias llegaron casi simultáneamente con los dos decretos antes mencionados. "Aquí volvemos a encontrar al monarca -dice Bayo- de dos fases, mandando en público la sumisión a las órdenes de su venerado padre, y el mantenimiento de la paz con Francia; y en secreto la reunión de Cortes y la guerra. ¿A cuál de las dos voluntades debía atenerse la Junta?... Los individuos pues de la Junta, recibidos los decretos del 5 de mayo, en que se les autorizaba poderes extraordinarios y se mandaba congregarse Cortes, los redujeron a cenizas conociendo que si

""", BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo I, págs. 166 y 167; ver también CEVALLOS, "Memorias: Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la Corona de España y los medios que el Emperador de los Franceses han puesto en obra para realizarla", B.A.E., tomo XCVIII, págs. 167 y 168; y SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", págs. 11 y 12. En su decreto de 4 de mayo de 1814, dictado en Valencia, Fernando VII mencionaba también este decreto de 5 de mayo de 1808: "...En tan lastimoso estado expedí en la forma que rodeado de la fuerza lo pude hacer, como el único remedio que quedaba, el decreto de 5 de mayo de 1808, dirigido al Consejo de Castilla, y en su defecto a cualquier chancillería o audiencia que se hallase en libertad, para que convocasen las Cortes (...); pero este mi Real decreto por desgracia no fue conocido entonces y, aunque lo fue después, las provincias proveyeron, luego que llegó a todas la noticia de la cruel escena de Madrid por el jefe de las tropas francesas en el memorable día 2 de mayo, a su gobierno por medio de las juntas que crearon." (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo V, pág. 58, apéndices).

llegaban a oídos de Murat, comprometían la suerte de Fernando y no era posible su cumplimiento"".

Evidentemente, hasta la llegada de los decretos de Bayona y las noticias de las abdicaciones, el Consejo de Castilla había quedado conmocionado por la represión francesa tras los sucesos del 2 de Mayo. A partir de ahora empieza a recuperarse de la impresión y desde el primer momento conoce que las abdicaciones de Bayona no tienen ningún valor: prisionero el Rey, bajo la presión psicológica de la amenaza y del encierro, no es difícil conseguir de él éstas y otras declaraciones"". Sin embargo, todavía tardará el Consejo de Castilla algún tiempo en reaccionar. No así la Junta, que definitivamente se suma al lado francés.

El Consejo comenzó entonces una política sibilina de contempORIZACIÓN y "amortiguación" de las medidas que Murat quiere en la Nación. Así lo expresaba Desdevises: "Avec tous les avantages que lui le donnait sa parfaite connaissance du milieu, avec les infinites ressources de la chicane administrative, et toute l'obstination naturelle aux juristes de profession, le Conseil temporaire, délibéra, discuta chaque mesure, contedit à chaque ordre, paralyse tout geste décisif et remplit en définitive avec une grande habileté le rôle honorable de gardien des traditions nationales en face du conquérant étranger."""

Apuntaba Desdevises cómo debió Murat comportarse como un dictador y no intentar dar un aspecto corriente a su gobierno, cuyo origen era a todas luces ilegal. De esta situación supo aprovecharse el Consejo de Castilla.

Con fecha 11 de mayo, el Consejo de Castilla remitió cartas de agradecimiento a Carlos IV, a Fernando VII y a Napoleón. Tras manifestar a Carlos IV su alegría por la nueva asunción al Trono, y hacer los mejores votos para su nuevo mandato, el Consejo añadía:

"El Consejo, inalterablemente leal a sus

"" BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo I, págs. 169-170.

"" La persona retenida contra su voluntad, en un ambiente extraño y tenso, bajo amenazas y presiones, y sin capacidad de larga resistencia, ve cómo finalmente su personalidad termina derrumbándose y accediendo a todo lo que le proponen sus captores. Estas ideas, aunque carentes de criterio médico, quizás pudieran aproximarse a lo que pudo pasar a Fernando en Bayona.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 181 y 182.

Soberanos, y firme en las máximas inseparables de su deber, se aplica incansablemente al cumplimiento de sus obligaciones, ayudando con sus luces y conocimientos los ilustrados y distinguidos talentos del Smo. Sr. Príncipe I. y R. el Gran Duque de Berg, a quien V.M. ha colocado dichosamente al frente del gobierno; por cuya digna elección tributamos las más reverentes gracias confiados del acierto a que contribuirá en cuanto alcance, para repeler con esta unión y la perfecta amistad de nuestros aliados los franceses a nuestros enemigos comunes, sosteniendo la gloria hereditaria de nuestros mayores..."".

En su carta a Fernando VII, el Consejo le agradecía su renuncia, en los siguientes términos:

"El Consejo Real y Supremo llega lleno de admiración a L.P. de V.A. Real a prestarle el más debido y glorioso homenaje de su gratitud por la dócil generosidad con que ha renunciado en su Augusto Padre el Sr. Don Carlos IV, nuestro Soberano, el trono y cetro de España. Es bien sensible perder un Rey que posee tanta virtud, y que se desprende de la grandeza en respeto filial, y de las ventajas del bien público de la nación que domina. Pero nuestro consuelo en esta separación es justo, porque vamos a recobrar el gobierno y experiencia del glorioso padre de V.A. que tantos años nos ha regido benignamente y de quien esperamos nos continúe las muestras de su notoria Real bondad, y no podría el Consejo sin olvidar su constante lealtad, y su inviolable adhesión y obediencia a los Soberanos preceptos dejar de aceptar, cumplir y ejecutar el que S.M. y V.A. uniformemente nos dirigen en la renuncia de V.A. y en el Real Decreto de S.M.

Así, Serenísimo Señor, seremos fieles observadores de lo que prescriben tan excelsos mandatos, ocupándonos en las obligaciones de nuestros empleos con el celo y amor que ha sido siempre característica de este Tribunal; y rogaremos siempre por la felicidad y prosperidad de V.A. con la sinceridad de los corazones españoles."

En realidad el Consejo y todas las instituciones de Madrid debían estar perplejos por la

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12.

rapidez con que se sucedían los acontecimientos y el carácter que tomaban. El Consejo de Castilla parecía creer sinceramente entonces que esta abdicación era el fin de la pesadilla que estaba azotando a España y que con Carlos IV en el Trono todo podría volver a su cauce anterior. Por ello mismo escribía también una carta al Emperador de los Franceses agradeciéndole su mediación: "El Consejo...no puede ocultarle su íntimo agradecimiento por la mediación y reconciliación que la sabiduría de V.M. ha dispensado y conseguido entre nuestro amable Rey el Sr. don Carlos IV y su dignísimo hijo el Smo. Sr. Príncipe de Asturias. El conflicto en que debía constituir a este Tribunal cualquiera disputa y controversia entre las Augustas Personas de S.M. y A. consternaban los ánimos de sus individuos, debiendo luchar su amor leal y constante con la integridad de la justicia y los sagrados deberes de su ministerio. V.M. I. y R. ha hecho por su poderosa influencia cesar toda discordia y dificultad, fijando nuestra obediencia y las dudas en que hubiéramos podido vacilar en la ardua cuestión entre padre e hijo..."^{***}

Sin embargo, pronto se desengañaría el Consejo, cuando conociese la nueva abdicación de Carlos IV en Napoleón. A partir de este momento, aunque no se opuso frontalmente, sí se observa un nuevo cambio de actitud en el Supremo Tribunal. Es conocida la afirmación de Martínez de Velasco de cómo el Consejo desde ese momento ya no mandó cumplir las órdenes que circulaba, entre otras medidas.

El 12 de mayo a las nueve de la mañana una representación de la Junta de Gobierno informaba oficialmente al Consejo de Castilla que se estaba gestionando un tratado por el que Carlos IV renunciaba a sus derechos al trono en favor de Napoleón^{***}. También aprovecharon para sugerir al Consejo que se uniera a la Junta haciendo una propuesta conjunta para Rey de España en favor de José Bonaparte^{***}. Por la tarde, el Ministro de Gracia y Justicia, don Sebastián Piñuela, transmitía al Consejo de forma oficial dos notas de Murat informando del acta de renuncia al Trono firmada por Fernando^{***} y la subsiguiente abdicación de Carlos IV en Napoleón, dos días

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12.

^{***}. MARTINEZ DE VELASCO, op. cit., pág. 48.

^{***}. "El 8 de mayo Napoleón dirigió al gran Duque de Berg las instrucciones para que la Junta Suprema y el Consejo de Castilla le indicasen en cuál de las personas de su familia les sería más grato que recayese el trono de España." (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 178).

^{***}. Entre otros muchos sitios, aparece en CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, apéndice al libro II, pág. 91.

después.

El Consejo acordó finalmente el cumplimiento de estos Reales Decretos. El Supremo Tribunal, en su memoria de agosto intentó justificar de distintos modos su actuación: afirmaba que no tuvo el tiempo debido para reflexionar, que la cesión de la Corona a Carlos IV era un mal menor dentro de la gravedad de los hechos, que por la mala salud de Carlos IV "se consideraba próximo el término señalado por la naturaleza", la conveniencia pública y los deseos de quitar al peligroso mediador en la cuestión.

En nuestra opinión, nunca debió el Consejo de Castilla aceptar estas renunciaciones. Era consciente de la falta de libertad de sus Reyes y de la ilegalidad de aquellos acuerdos. Quizás por precipitación y seguro bajo fuertes presiones, los magistrados no supieron cortar el curso de los acontecimientos. Aunque el Consejo se excusó más tarde afirmando que una vez descubiertos los verdaderos planes de Napoleón, "fue muy diversa su conducta", y ya no expidió en nombre de Napoleón ni de su hermano Real Cédula ni provisión alguna; desde ese momento sólo dirigió avisos por medio de circulares; "excusó aun los despachos respectivos a pleitos y negocios entre partes, en los que según la fórmula hubieran debido sonar sus nombres, dando en su lugar a los interesados certificaciones de las providencias""; nunca -continuaba exculpándose el Consejo- ni aún las apariencias exteriores de autorización y reconocimiento, mandando sólo que la órdenes se imprimiesen y circularan o publicasen. El Consejo manifestaba también que no podía evitar la publicación de estas órdenes y decretos, por estar en manos del poder todas las imprentas y que, en todo caso, en algunos casos permitió su publicación para tener al tanto a la población de los planes de usurpación y aumentar su indignación y lealtad.

Evidentemente todas estas justificaciones apuntan a que el Consejo no pudo o no supo oponerse aquellos días a los planes de Murat. Le faltó firmeza y le sobró debilidad para no manifestar con una mayor claridad su oposición a la usurpación de la Corona. También es verdad que el Consejo se encontraba ahora solo, pues la Junta ahora era Murat y las demás instituciones no parecían mostrar una oposición muy radical a estas cesiones de la Corona. Y el Consejo de Castilla por supuesto no podía reaccionar con la misma libertad de actuación que querrían los ciudadanos de las provincias no ocupadas, que veían con otra perspectiva aquellos acontecimientos. Aunque en este momento la conducta del Consejo no fue esencialmente heroica, sí es cierto que

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto de los procedimientos...", folio 50.

no obraba con libertad"" y se vio obligado a manifestar su oposición de una forma más sibilina, pero que muchos no pudieron entender por aquel entonces"".

Quizás la cuestión pudiera ser aquí si se les podía exigir una conducta más heroica, por representar a toda la Nación, y si obrando de esta manera evitaron grandes riesgos y permitieron la organización de la resistencia contra el invasor. El hilo de los acontecimientos en las semanas siguientes nos da nuevas luces sobre estos puntos, pero creemos, y ya hemos apuntado algún dato en esta línea, que el Consejo de Castilla, tras los sucesos del dos de mayo y por las presiones francesas, pecó de debilidad por temor. Y esta conducta se podría hacer extensiva a las demás instituciones del Estado, empezando quizás por nuestros Monarcas y por la propia Junta de Gobierno.

El día 12 de mayo fue informado por tanto el Consejo de Castilla que Carlos IV había cedido la Corona de España a Napoleón, y que el Emperador había decidido transmitirla a su hermano José, Rey de Nápoles"". En su

"" Entre otras muchas referencias a esta falta de libertad, podemos citar la exposición del Fiscal Díez, de fecha 9 de agosto de 1.808, en la que se mencionan las constantes amenazas que sufrieron los Consejeros de Castilla por parte de los franceses desde principios de mayo (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 25).

"" Al referirse al cambio de las tradicionales fórmulas de publicación o circulación de documentos, el Consejo se justificaba de la siguiente manera: "Los inteligentes saben bien la diferencia que hay entre ambas fórmulas en el concepto legal y en el estilo del Consejo; y la que adoptó y siguió constantemente manifestaba con bastante claridad a toda la Nación quales eran sus principios políticos, y aún sus deseos" (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27). Sin embargo, la conducta del Consejo de Castilla fue muy criticada en la época. He aquí unas referencias del Conde de Toreno: "el Consejo, empezando desde entonces aquel sistema medio y artificioso que le quitó después, más propio de un subalterno de la curia que de un cuerpo custodio de las leyes, se avino muy bien con lo que se le propuso, imaginando así poner en cobro hasta cierto punto su comprometida existencia, ya que se afirmase la dominación de Napoleón, ya que fuese destruida. Conducta no atinada en tiempos de grandes tribulaciones y vaivenes, y con la que perdió su crédito e influjo entre nacionales y extranjeros." (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 178).

"" Claude Martin, en su estudio sobre el Rey José Napoleón, señala cómo el Emperador escribió a su hermano el 10 de mayo comunicándole su decisión de hacerle Rey de España. Martin señala la fecha del 21 de mayo -creemos se

Manifiesto, el Consejo expresaba el dolor que le produjo la actitud de los miembros de la Junta de Gobierno, quienes no sólo intentaron convencer largo rato al Consejo de la beneficioso que era este hecho sino que incluso "llevaban extendida y leyeron la carta que se había de dirigir al Emperador"***.

La primera reacción del Consejo ante esta abdicación en Napoleón fue de indignación y protesta y así lo manifestaron a los tres miembros de la Junta que habían acudido al Consejo. En su Manifiesto exculpatorio, el Consejo hace lo que vulgarmente se denomina 'cargar las tintas': era absolutamente ilegal, contrario a nuestras leyes y a los principios más elementales del Derecho Público; la Soberanía no era disponible por los Reyes Padre e Hijo, y las renunciaciones no podían perjudicar los derechos dinásticos de otros miembros de la Familia Real, de otras Casas Reales europeas, y por supuesto, de la Nación española. Sin embargo, de las actas de la sesión*** parece que toda fue mucho más calmada. Entonces se registraron como pegadas por parte del Consejo lo arduo de la materia, la inconveniencia de haber publicado dos días antes la accesión al trono de Carlos IV y la falta de autoridad del Consejo de Castilla para resolver sobre tales asuntos. Lo que sí es cierto es que unánimemente se rechazó la propuesta de los miembros de la Junta, cuya decisión, por cierto, se había tomado aprovechando la ausencia de la reunión de la Junta de Gobierno del Decano del Consejo de Castilla.

refiere al 12 de mayo- como el momento en que José recibió la noticia por correo extraordinario del Emperador. Este, en su carta, decía lo siguiente: "El Rey Carlos me cede todos sus derechos a la Corona. El Príncipe de Asturias había renunciado antes a su pretendido título de rey. La Nación por conducto de Consejo de Castilla me pide un Rey. Es a vos a quien destino esta Corona..." (MARTIN, C., "José Napoleón I", págs. 13 y 14).

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27. Continuaba así el Consejo: "No se detendrá el Consejo en expresar los términos en que estaba concebida; dirá sí que no es fácil discernir qué fue lo que causó más admiración a este Tribunal después de los primeros momentos de turbación; la inesperada especie de la cesión del Señor Rey Padre, tan distante del estado en que suponía el asunto, y tan repugnante a todas las reglas de la justicia y de la razón; o el que unos españoles y vasallos tan favorecidos, que aun quando la viesan realizada, y no la pudiesen resistir, debían a lo menos explicar con el dolor su absoluta desaprobación, hubiesen podido concebir o adoptar el pensamiento de anticipar un paso que se dirigía a prepararla o cohonestarla..."

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 11.

Al retirarse estos miembros de la Junta -Marqués de Caballero, O'Farril e Iriarte-, a las diez de la mañana, dijeron al Consejo que la Junta esperaba una consulta sobre el tema en cuestión a las once"". La esencia de esta consulta del Consejo decía que el Supremo Tribunal no se hallaba autorizado ni con facultades para acceder a la propuesta solicitada por los miembros de la Junta de Gobierno"".

Por la tarde se recibió la comunicación oficial de Piñuela con las dos notas, extractos de cartas del Emperador. El Secretario de Gracia y Justicia pedía también una consulta del Consejo sobre las mismas"".

Evidentemente, sorprende la falta de delicadeza de Napoleón y su poco respeto por el Derecho Público y de Gentes. Sus escasos escrúpulos -se comportó como un 'salteador de caminos' para Seco Serrano""-, debieron impresionar a un órgano tan legalista como el Consejo de Castilla. Con esta decisión se les abrirían

"". El Consejo intentó demostrar en su Manifiesto exculpatorio cuán clara y terminante fue su oposición a la Junta y cómo esta oposición fue recibida con indignación por los miembros de esta Junta, "que no perdonaron al Consejo...el desayre que creyeron haber sufrido en esta ocasión." ("Manifiesto", op. cit., pág. 53).

"". No es por tanto completamente cierta la afirmación de Fontes de que "el Consejo de Castilla, tras recibir el día 13 de mayo la comunicación de las abdicaciones, no va a expresar en ningún momento una negativa u oposición rotunda, como es de esperar, ni la defensa de las leyes fundamentales de la Monarquía..." (FONTES, F., op. cit., págs. 28 y 29). Sí que es cierto que la resistencia del Consejo ante las abdicaciones fue corta y pronto accedieron a las presiones de Murat.

"". El Texto de ambas notas era el siguiente: Nota número I: Era un extracto de una carta de Napoleón a Murat, fechada el 7 de mayo de 1.808: "El tratado con el Rey Carlos IV acaba de firmarse. El Rey Carlos IV y el Príncipe de Asturias me han cedido todos sus derechos a trono de las Españas." Nota número II: Era también un extracto de una carta de Napoleón a Murat, fechado el 8 de mayo: "La Junta puede hacer conocer que el Rey Carlos y el Príncipe de Asturias me han cedido todos sus derechos al trono de las Españas: que yo desearía saber la opinión del Consejo de Castilla sobre la elección de un nuevo soberano, que debe ser tomado de mi Casa, a fin que la unión de las dos naciones sea perpetua, y que las cabezas, como los pueblos, tengan los mismos intereses."

"". SECO SERRANO, Introducción a Historia de España
Menéndez Pidal, op. cit., tomo XXVI, pág. xxv.

definitivamente los ojos sobre las verdaderas intenciones de Napoleón, y comprenderían perfectamente todos los hechos acaecidos en España desde el Tratado de Fontainebleau.

Aquella misma noche volvió a reunirse el Consejo. La situación era especialmente delicada, en cuanto ya intervenía directamente el Emperador en este asunto. El Consejo decidió remitir la nueva consulta solicitada, afirmando "que no manifestaba las reflexiones que se le ofrecían sobre la primera Nota, porque ignoraba en esta parte la voluntad de S.M.I. y R.; y que en cuanto a la segundo rogaba se le excusase de hacer la designación que se solicitaba"***. No señalaba el Consejo en su Manifiesto que en este caso la evasiva no se basó "en su falta de capacidad, sino en el desconocimiento que de la Familia Imperial francesa tenía"***.

Debemos puntualizar que esta consulta no fue adoptada por unanimidad entre todos los miembros del Consejo. Algunos introdujeron votos particulares, como fue el caso de don Francisco Javier Durán, quien votó a favor de que se reconociese a José I***.

Antes de continuar con el hilo de los acontecimientos parece interesante hacer una apreciación sobre estas medias verdades que introdujo el Consejo de Castilla en su Manifiesto. Evidentemente, si su conducta

***. Manifiesto, op. cit., folio 55.

***. MARTINEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág. 49. Consciente el Consejo del peligro que podía entrañar un enfrentamiento directo, se sirvió de una política evasiva sobre el meollo de la cuestión. En ello coincidimos también con Fontes: "en el asunto de las abdicaciones, el Consejo de Castilla trató en el inicio de actuar de forma evasiva" (FONTES, F., op. cit., pág. 29).

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2. Don Francisco Javier Durán era del dictamen que "habiendo renunciado los Sres. Carlos IV y Príncipe de Asturias sus derechos en favor del Emperador de los Franceses, según resulta de la nota remitida al Consejo y que se halla rubricada por S.A.I. y R., y persuadido de que darnos un soberano que nos gobierne será la felicidad de la Nación, desde luego creo conveniente que siendo del agrado de S.M. I. y R. recaiga la Corona de España en el Sr. Rey de Nápoles, de cuyas particulares prendas y mayores virtudes me hallo bien enterado." Otros ministros -Puig, Fernández de Campomanes, Contreras y Carrillo- eran del parecer que no se hablase más que de la nota segunda, aunque de ella en los términos que opinaba el Consejo en esta consulta. Pese a estos votos particulares, el Consejo decidió no variar el dictamen propuesto. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 10).

hubiese sido intachable, no variaría sutilmente su participación en aquellos acontecimientos a su conveniencia: en ocasiones omitía hechos, en otras recalcaba y acentuaba otros que le eran favorables, desvirtuando con ello la precisión y exactitud de su intervención en aquellos sucesos.

Al día siguiente, 13 de mayo, todos los ministros del Consejo de Castilla fueron convocados en el Palacio del Duque de Berg, de paisano y sin ceremonia, a las cuatro de la tarde. Aquella reunión tuvo una vital importancia, en cuanto que no sin resistencias el Consejo de Castilla terminó insinuando a Napoleón que José podría ser un buen Rey para España. Por su interés veremos con detalle lo acontecido en aquella reunión.

Reunido el Consejo en Palacio, sus miembros pasaron a la primera Secretaría de Estado, a la que fueron también los miembros de la Junta. Estos, por pelotones fueron instruyendo a los Consejeros sobre el motivo de la convocatoria y las ventajas que resultarían de su aceptación. Seguidamente habló a todos los presentes el Marqués de Caballero, de parte de Murat y de la Junta de Gobierno afirmando que era inevitable el acceso al Trono de España de los Napoleones; que Napoleón deseaba que el Consejo de Castilla le insinuase cuál de sus hermanos prefería para el Trono; que el Gran Duque había manifestado que deseaba que fuera José el designado por el Consejo de Castilla; que este nombramiento o designación en nada comprometía la fidelidad del Consejo, quien no juzgaba sobre la validez del tratado; y que a cambio se ofrecía la integridad e independencia de España, la conservación de la religión, de las propiedades, de las leyes constitucionales y forma de gobierno, "a excepción de algunas ligeras modificaciones que hacían indispensables varios abusos que se habían introducido"***. Manifestó Caballero que por todo ello se esperaba que el Consejo de Castilla propusiera a José como Rey de España.

La respuesta del Consejo a esta petición fue, según las fuentes del Consejo, unánimemente negativa: en él no residía la representación de la Nación -a la que correspondía esta decisión- y no entraba ello en sus competencias. También manifestó no comprender por qué tenía tanto interés el Gran Duque en que el Consejo de Castilla se plegase a sus deseos.

Retomando la palabra Caballero y O'Farril expresaron al Consejo que uno de los principales motivos por los que el Emperador deseaba la insinuación del Consejo era "por evitar la emulación que podía haber entre sus

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 11, Actas de la reunión del Consejo de Castilla de 13 de mayo de 1.808.

hermanos". Deseaba enviarlo "como por condescender con los deseos del primer Tribunal de la Nación"". Reiteraron las ventajas de tal propuesta y que ella no supondría ningún perjuicio a los derechos de los Borbones y otras dinastías a la Corona de España"".

El Consejo alegó entre otras cosas que un paso así sería improcedente antes de ver el tratado, y que antes debía dispensarle el Rey de su juramento de fidelidad.

Finalmente llegaron a un acuerdo. El Consejo sugeriría a José, pero en ningún caso quedarían afectados por ello los derechos legítimos a la Corona de España; tampoco el Consejo se mezclaba con ello en la aprobación del tratado. De esta manera, fue pasada al Consejo una Real Orden"" en la que se pedía una consulta, y consecuencia de

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 11. Actas de la reunión del Consejo del 13 de mayo de 1.808.

"" "Hoy tenemos en España cien mil franceses y vendrán otros cincuenta mil, si no nos prestamos de buena voluntad; permanecerán uno o dos años aniquilando a la Nación; cuando de esta manera dentro de un par de meses no quedarán más de veinte o treinta mil." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 11. Actas de la reunión del Consejo del 13 de mayo de 1.808).

"" La Real Orden era la siguiente: "Ilmo. Sr.: El Emperador de los Franceses y Rey de Italia tiene concluido su tratado con el Rey de España Carlos Cuarto, y su hijo Fernando el Príncipe de Asturias, por el qual han cedido ambos en manos y voluntad de S.M.I. y R. todos sus derechos a la Corona de España; en cuyo supuesto, y debiendo recaer en Príncipe de su Imperial Familia, conforme a su deliberada voluntad, desea S.M.I. que el Consejo de Castilla manifieste el que le parezca más a propósito, sin que por esta específica designación se entienda que el Consejo se mezcla en la aprobación o desaprobación de dicho tratado, ni que los derechos del Rey Carlos, su hijo y demás sucesores a la Corona, según las leyes del Reino, queden de modo alguno perjudicados por dicha designación. Todo lo qual comunico a V.S.I. por orden del Serenísimo Señor Lugar-Teniente General del Reyno, para que la haga presente al Consejo, y pueda éste deliberar, vencida con dichos presupuestos la dificultad que indica en la consulta de ayer, y le impidió el hacerlo por la delicadeza y exactitud en el fiel desempeño de sus obligaciones. Dios guarde a V.S.I. muchos años. Palacio 13 de mayo de 1.808.=Sebastián Piñuela.= Señor Decano del Consejo." Esta Real Orden fue redactada por la Junta de Gobierno junto con los Consejeros de Castilla y fue retocada por el propio Murat. Esta participación del Consejo de Castilla en la redacción de la orden fue silenciada en su Manifiesto.

ella el Consejo aprobó la correspondiente consulta.

En ella, el Consejo manifestaba sus deseos de procurar la felicidad de España y evitar las desgracias que la amenazaban. Seguidamente afirmaba:

"La escrupulosa fidelidad que ha conservado con sus augustos Reyes, hasta en las épocas más desgraciadas, y en los reynados más ifelices, será siempre el más evidente testimonio de su amor y lealtad "en lo sucesivo" (tachado: "a sus futuros soberanos"). Bien sabe este Supremo Tribunal que estos procedimientos no pueden menos de ser lisonjeros al Grande Héroe que con tanta generosidad le distingue. No son otros los deberes que exige de sus fieles vasallos, y es así que Vuestra Alteza Imperial y Real, que conoce, sin equivocarse, el heroico corazón de S.M.Y. y R. ha roto de una vez los grillos que le detenían para complacerle.

Lo deseaba el Consejo para manifestar de algún modo su profundo reconocimiento, y no hallaba términos con qué conciliar su obediencia con lo que exige la ley, "que no pende de su afección ni de su arbitrio"***. Pero ya que esta ha de quedar ilesa por parte del Consejo "según dicha Real Orden"***, y que conforme a (tachado: "según") su letra, han de quedar así mismo preservados los derechos a la sucesión de esta Corona, de los Sres. D. Carlos IV y su hijo el Príncipe de Asturias, con los demás a quienes pueda pertenecer; desde luego le parece "que en ejecución de lo resuelto por S.M.Y. podría recaer la"*** (tachado: "sería muy acertada la") elección para Rey de las Españas (tachado: "y de las Indias"), en José Napoleón Rey de Nápoles; pues aunque el Consejo no tiene el honor de conocerle sabe su soberana condecoración, y que siendo hermano mayor del Emperador de los Franceses y Rey de Italia, y habiéndose granjeado por sus altas y generosas prendas, su singular estimación, no puede menos de estar adornado de sus mismas virtudes, actividad y talentos..."

Seguidamente continuaba el Consejo en su consulta dejando a salvo los derechos de la Familia reinante y otros posibles según nuestras leyes.

Como apuntaba el Conde de Toreno, "a Murat le importaban muy poco aquellas secretas protestas, con tal de que tuviese un documento público de las principales autoridades del Reino que presentar a los gobiernos europeos, pudiendo con él Napoleón dar a entender que había seguido la voluntad de los españoles más bien que la suya

***. Texto añadido con una nota marginal.

***. Texto añadido con una nota marginal.

***. Texto añadido con una nota marginal.

propia"***.

Nuevamente nos encontramos un Consejo instrumentalizado por el poder francés. En su consulta, el Consejo reconoce implícitamente la validez de las abdicaciones y no sabe oponerse con firmeza a una actuación que era claramente ilegal. Olvidan ser los garantes del cumplimiento de las leyes españolas, sabiendo además que nuestros monarcas están presos por Napoleón. El Consejo de Castilla no estuvo aquí a la altura de las circunstancias, evidentemente. En su Manifiesto, al relatar las circunstancias que rodearon esta consulta, comienza afirmando que el Consejo estaba "fatigado con las repetidas sesiones extraordinarias y con los desagradables debates de los días anteriores"***; que tomó la resolución "en un paraje desusado y sin ceremonia, y de un modo misterioso", bajo amenazas "por medio de insinuaciones privadas". El Consejo de Castilla no obró bien, aunque no podemos olvidar que estos -en su mayoría- venerables ancianos, estuvieron sometidos a fuertes presiones de todo género y que el Consejo fue la única institución del poder central que opuso alguna resistencia importante a los franceses***.

***. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 178. Fontes critica esta propuesta del Consejo por un doble motivo: en primer lugar, porque carecía de funciones representativas, ya que estas correspondían exclusivamente a las Cortes. Este motivo fue alegado también inicialmente por el Consejo para resistirse a presentar la propuesta; en segundo lugar, Fontes apunta que "si de lo que se trataba era elevar consulta sobre el problema sucesorio, tampoco competía al asunto al Consejo de Castilla, sino al de Estado, (...) de acuerdo con el decreto de 28 de febrero de 1792 y su Reglamento Orgánico de 25 de mayo de ese año" (FONTES, F., op. cit., pág. 29). Queda claro por tanto que el acto que se proponía al Consejo era ilegal y simplemente buscaba aprovechar el prestigio del Consejo de Castilla para obtener una declaración de este Supremo Tribunal.

***. Lo que por otro lado no es de extrañar dada la tensión de los acontecimientos y el trajín que conllevaban. No olvidemos por otro lado la elevada edad de los Consejeros de Castilla, superior a los 65 años de media. Este dato también va en defensa de la conducta de estos Consejeros en aquellos días.

***. Otras instituciones también prestaron resistencias a los franceses. Así, como apunta Fontes en su trabajo sobre "El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII", el Presidente de este Consejo fue el único que insistió mantenerse apartado de la Junta de Gobierno, a pesar del acuerdo de 7 de mayo de esta Junta que desautorizaba la dimisión de cualquiera de sus miembros. (FONTES, F., op. cit., pág. 12). Sin embargo, es incuestionable que la resistencia prestada por el Consejo de Castilla a los

El 14 de mayo nuevamente recibía el Consejo una Real Orden en la que se le pedía redactase una carta al Consejo similar a la ya escrita por la Junta de Gobierno, o en su caso que firmase la misma carta. Igualmente se le informaba de la renuncia que Fernando había hecho a todos sus derechos, al igual que todos los Príncipes de la misma Familia. El Consejo de Castilla tuvo entonces una reunión extraordinaria al atardecer de aquel día en la Casa del Tribunal, que duró hasta las doce y media de la noche. Acordó entonces una consulta, manifestando no tener nada que añadir a lo que había manifestado en su consulta anterior.

7. Una diputación del Consejo de Castilla acude a Bayona. Convocatoria de la Asamblea de Notables.

Al día siguiente, 15 de mayo, era convocado el Consejo pleno, con cláusula de precisa asitencia. El motivo fue un oficio de la Junta de Gobierno, informando del acuerdo de esa Junta para "que una diputación del Consejo de Castilla presente al Emperador de los Franceses la expresión de los deseos de aquel Tribunal en punto a la elección del soberano que ha de regirnos"". Continuaba el acoso de la Junta para arrancar del Consejo el apoyo a José.

Tres días después, el 18 de mayo Murat mandaba al Consejo por Real Orden que publicase el Real Decreto de Abdicación de Carlos IV en Napoleón. El Consejo

franceses fue muy superior a la de otras instituciones o Consejos. Y en lo referente al caso concreto del Consejo de Estado, en nuestra opinión no parece correcta la opinión de Fontes cuando afirma que la conducta de sumisión a los franceses del Consejo de Castilla "contrasta" con la actitud sostenida en este punto por el Consejo de Estado. No consta que el Consejo de Estado ofreciera toda la resistencia que prestó el de Castilla a los planes de Murat, e incluso sabemos que el de Estado juró tanto la Constitución de Bayona como a José I, cosa que se negó a hacer el Consejo de Castilla.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 10.

así lo hizo el mismo día 18. En la misma Real Orden exigía Murat al Consejo que pidiera claramente a Napoleón la Corona para su hermano José:

"Al mismo tiempo que espera el Srmo. Sr. Gran Duque de Berg (...) que el Consejo sin embargo de su consulta anterior y atendida la variación de circunstancias y la absoluta renuncia que los referidos Sres. hacen de todos sus derechos al Trono de las Españas, consultará sin reserva alguna de derechos que ya no existen por dicha absoluta y libre renuncia de S.M.I. y R. el Emperador Napoleón, pidiéndole que ponga expresamente la Corona de España e Indias sobre la cabeza de su augusto hermano el Príncipe Josef, Rey de Nápoles, cuya consulta deberán llevar los Ministros del Consejo que van a Bayona para ponerla en las Reales Manos de S.M.I. y R..."

En esta ocasión, la respuesta del Consejo fue más firme: "...El Consejo no estima precisa la diputación para la manifestación de sus deseos de condescender en cuanto sea posible con las insinuaciones tan respetables del Emperador ni le parece que los documentos que últimamente se le han presentado añaden algún punto nuevo que no resultase ya de las notas que acompañaban las órdenes y que anunciaban los tratados firmados..."^{***}. Pese a todo, el Consejo decidió nombrar una diputación, que pondría en manos de Napoleón la consulta pedida. Evidentemente esta respuesta contrastaba con la actitud contemporizadora anterior. Es probable que el Consejo conociera ya por entonces las sublevaciones que se habían extendido por todo el territorio nacional. Lo cierto es que desde este momento se observa un tono de mayor firmeza y de oposición que irá in crescendo en lo sucesivo^{***}.

La diputación del Consejo de Castilla estaría formada por los Consejeros don Sebastián de Torres y don Ignacio Martínez de Villela -que ya se encontraban en Guipúzcoa al haber sido designados muy anteriormente por la Junta y sin noticia ni intervención del Consejo-, y don José Vilches y don José Colón -designados ahora por el Consejo-.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.611 núm. 10.

^{***}. Creemos, sin embargo, que tiene mucho sentido a la hora de explicar la conducta del Consejo en la primera quincena de mayo, la siguiente afirmación de Azanza y O'Farril: "No hubo ni cuerpo ni autoridad alguna que desde luego rehusase descubiertamente el nuevo orden de cosas que se quería introducir, contentándose el que más con algunas protestas y reticencias que probaban el desagrado general con que se recibía tamaña novedad, y querían dejar la puerta abierta a una remota esperanza o a futuros contingentes, pero sin presentar por de pronto ni obstáculos ni una firme oposición."

Rechazado Vilches por Murat, la designación del Consejo recayó en don Manuel de Lardizábal***, quien era el que seguía en antigüedad a los otros dos. Su salida se efectuó el 25 de mayo, reuniéndose en Bayona con los comisionados que habían salido con anterioridad***.

***. Un expediente de finales de mayo de 1.808 nos indica que fueron reunidos diversos documentos relativos a la Causa de El Escorial, mudanza de Dinastía, registro de consultas, orden de Godoy para trasladar tropas, abdicaciones, entrega de Godoy a Napoleón, reflexiones políticas del Consejo sobre la estancia de tropas francesas y otros. Fueron llevados a don Tomás Moyano y don Nicolás Sierra, quienes mandaron sacar copias certificadas con fecha 20 de mayo. Estas copias fueron entregadas a Lardizábal y Colón, quienes al parecer debían llevarlas a Bayona. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 9).

***. Torres y Martínez de Villela salieron de la Corte hacia Bayona el 29 de abril. Fueron enviados por orden de la Junta de Gobierno, al parecer sin conocimiento del Consejo de Castilla. Por ello mismo el Consejo no quiso abonarles sus dietas sino desde el día que salieron los demás comisionados del Consejo de la Corte, es decir, desde el 25 de mayo hasta el 19 de julio. A todos ellos, como a los ministros de los demás Consejos, se les asignó la cantidad de 300 reales diarios en concepto de dietas. El 12 de junio representaban al Consejo en queja por la reducción de sus dietas: "...Sorprendidos de tan notable diferencia no podemos menos de hacer presente a V.A. que el habernos anticipado no fue por nuestra voluntad, sino en cumplimiento de órdenes del Srmo. Infante don Antonio y Junta de Gobierno, expedidas con fecha de 26 de abril último en que se nos mandó ponernos en camino con la brevedad que nos fuese posible, órdenes en ninguna manera deseadas y mucho menos solicitadas por nosotros. Mandósenos también en ellas esperar en la frontera del Reino las de S.M. y no pasar adelante hasta recibirlas. Así que luego que llegamos a Irún lo pusimos en noticia de don Pedro Cavallos con fecha 9 de mayo, y no habiendo recibido contestación suya lo representamos con la del 13 a la Junta de Gobierno, cuya resolución esperamos hasta que nos llegó la circular del 19. Tampoco por consiguiente fue voluntaria nuestra detención en aquella villa y no puede ocultarse a V.A. que así allí como en el viaje debemos haber sufrido no menores incomodidades y gastos, o quizá mayores que en esta ciudad; todo en comisión del Real servicio, pues por tan sin duda debe tenerse un encargo particular hecho con objeto de utilidad pública a unos ministros del Rey por quien era entonces depositario de todo su poder y autoridad soberana..." Quizás el Consejo se encontraba molesto por que estos Consejeros obrasen al margen del Supremo Tribunal. Por otro lado, si la comisión no había sido encomendada por el Consejo, no le correspondía a este Tribunal solicitar a Contaduría el pago de las dietas, sino a quien la había encomendado.

Con fecha 19 de mayo fue elaborada la consulta que se presentaría a Napoleón en Bayona. En esa carta el Consejo reproducía su criterio sobre la propuesta de José Bonaparte:

"...V.M.I. y R...tuvo la bondad de insinuar gustaría saber la opinión de este cuerpo acerca del Príncipe de la Familia Imperial y Real de Francia en quien recaería el Trono de las Españas, a consecuencia de las referidas renunciaciones y tratados. (...) Estos deseos suponen que en el Consejo de Castilla reside la voz y representación de la Nación, siendo así que sólo tiene parte en el gobierno por medio de las competencias consultivas al Trono que pueden ceder en beneficio general del Reino, con facultad de representar acerca de las resoluciones del Monarca respectivas a los ramos de su conocimiento que sean contrarias a las leyes y costumbres del país, limitándose en lo demás a la recta administración de justicia."

"La incapacidad de introducirse el Consejo a manifestar su dictamen en un asunto tan arduo, propio por todas las circunstancias del examen y juicio de la Nación entera: el conocimiento previo de los tratados que se indicaban, las materias y consideraciones políticas y de Estado que era necesario resolver, constituían otros tantos impedimentos que detenían al Consejo para denostar su opinión, que sólo debía dar en cuestiones legales sobre que se le exigiera, o en las de gobierno y Estado en que se le pidiera consejo."

"De aquí se deduce cuál sería el conflicto del Tribunal considerando sus coartadas facultades, y ponderando sus deseos de corresponder a las singulares distinciones con que le engrandecía V.M.I. y Real."

"Elegió pues el medio único que le presentaban las circunstancias y que reproduce hoy por sus diputados ante V.M.I. y R., a saber de que habiendo de surtir efecto los insinuados tratados de renuncia y la resolución de V.M.I. y R. de que recaiga el Trono de las Españas en un Príncipe de su Familia Imperial, parecía más a propósito el Rey de Nápoles José Napoleón...19 de mayo de 1.808."

Aquí cabe plantearse una nueva cuestión: con esta consulta a Napoleón ¿hubo un reconocimiento implícito de los tratados de abdicación? Parece que la respuesta debe ser afirmativa, aunque en el propio texto de la consulta se deja todavía una puerta abierta a la invalidez de aquellos

tratados. Sin embargo, no debemos olvidar que esta diputación lo que llevaba propiamente era una carta o mensaje de felicitación para el Emperador¹⁰⁰.

La Junta Suprema y la Villa de Madrid enviaron también representaciones a Bayona, con sendas cartas pidiendo que José Bonaparte fuera designado Rey de España. Tan pronto como Napoleón recibió estos escritos, ordenó a Murat que los publicara. Sin embargo, no dejó publicar el escrito del Consejo de Castilla, porque le parecía confuso¹⁰¹. Pese a todo, Napoleón no quedó satisfecho con la sumisión y petición de las autoridades españolas y decidió convocar una reunión de una diputación de españoles en Bayona¹⁰².

En la Junta de Gobierno del día 15 de mayo se había acordado que se reuniesen cuatro miembros de esta Junta con otros cuatro Consejeros de Castilla para tratar el modo de nombrar diputados del Reino que fueran a Bayona a estudiar unos importantes asuntos. La reunión tuvo lugar en casa del Marqués de Caballero. En aquella reunión fue leída una carta del Emperador proponiendo nuevamente se pidiera a José I y se reuniesen en Bayona antes del 15 de junio entre 100 y 150 diputados de las provincias y de los tres estamentos. También fueron designados los cuatro miembros de la Junta que estudiarían esta convocatoria junto con cuatro Consejeros de Castilla. Entre los representantes de la Junta fue elegido el Decano del Consejo de Castilla, don Arias Mon. Finalmente se aprobó que tres Consejeros de Castilla fuesen en diputación a Bayona, a presentar a Napoleón los deseos del Consejo. Se dio esta comisión a los mencionados ya Torres, Martínez de Villela y al Alcalde de Corte Pereyra¹⁰³.

En realidad, la idea de reunir en Bayona una especie de Cortes Generales no era nueva. Ya Murat el 29 de abril había tanteado la posibilidad de convocar esta reunión. Pero la convocatoria no fue publicada hasta el 25 de mayo en la Gaceta. Como apuntaba Bayo, era una convocatoria de Napoleón, hecha a su manera y para

¹⁰⁰. BAYO, F. K., "Historia de la vida...", op. cit., págs. 171 y 172.

¹⁰¹. Correspondencia de Napoleón, tomo 17, págs. 260-261, Carta a Murat del 2 de junio de 1.808, citada por MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 133.

¹⁰². CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 179 y 180.

¹⁰³. Archivo de Villa, Secretaría, Minutas de las Sesiones de la Junta Suprema de Gobierno, Sesión del 15 de mayo de 1.808. Estos tres comisionados se hallaban por entonces ya en Bayona; cfr. también TORENO, op. cit., tomo I, pág. 180.

sancionar con su aprobación todo lo allí actuado^{***}.

En la proclama de Napoleón se anunciaba también la elaboración de una nueva Constitución en Bayona, que sería estudiada y aprobada por la mencionada Asamblea de Notables. También en su artículo tercero se confirmaba en sus puestos a los Ministros de los Consejos de Estado y de Castilla y a las demás autoridades. Y en su artículo cuarto se mandaba al Consejo de Castilla circular aquel decreto. Este Real Decreto fue comunicado al Consejo de Castilla por don Sebastián Piñuela el 29 de mayo.

En el artículo 15 del decreto de convocatoria de la Junta de Bayona se especificaba el número de representantes de los Consejos que acudirían a la ciudad fronteriza francesa: cuatro nombrados por el Consejo de Castilla, dos del de Indias, dos del de la Guerra -uno de ellos militar y el otro togado-, otro del de Ordenes, otro del de Hacienda y otro del de la Inquisición^{***}. El Consejo de Castilla confirmó a los anteriormente nombrados para acudir en Diputación a Bayona a entregar una carta al Emperador: don Sebastián de Torres, don Ignacio Martínez de Villela, don José Colón y don Manuel de Lardizábal, junto con el Alcalde de Corte don Marcelino Pereyra^{***}.

El decreto de convocatoria no entrañaba grandes reformas, sino tan sólo la búsqueda de los problemas y de las soluciones para mejorar el estado del Reino. No implicaba el cambio de Dinastía, ni aparentaba carácter de Cortes. Una vez allí se dieron cuenta del verdadero carácter de la reunión: la nueva Constitución del Reino se les dio prácticamente hecha y se les presentó al nuevo Rey como si fuera un hecho consumado.

^{***}. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", op. cit., tomo I, págs. 172 y 173. El original de la proclama-convocatoria de Napoleón se encuentra actualmente en el legajo 5.511, expediente número 10, de la Sección Invasión Francesa, Consejos suprimidos del A.H.N. de Madrid.

^{***}. Para Juretschke la Asamblea de Bayona fue un gran éxito, pues reunió a once miembros de la alta aristocracia, diecinueve de los Consejeros de Estado más importantes, siete militares directivos, ocho príncipes de la Iglesia y cuatro generales de las órdenes religiosas (JURETSCHKE, H., "Los afrancesados en la Guerra de la Independencia", Biblioteca de la Historia de España, Sarpe, Madrid 1986, pág. 28).

^{***}. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, Apéndice al Libro II, pág. 92. El Fiscal de la Sala Pereyra fue sustituido en su plaza en la Sala de Alcaldes por el Agente Fiscal de la misma don Manuel Norberto Pérez del Camino, por nombramiento de don Arias de Mon. (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1.399, año 1808).

El 24 de mayo se comunicaba al Gobernador de la Sala de Alcaldes un oficio en el que se manifestaba el malestar del Gran Duque de Berg por los rumores que corrían en Madrid: en los cafés, librerías y demás sitios públicos en que se reunían muchas personas se hablaba con poco miramiento de Murat y de la Suprema Junta de Gobierno. Se afirmaba que las providencias generales que se aprobaban eran contrarias al bien de España. También era muy criticada la convocatoria de notables en Bayona. Y se comentaban las turbaciones y levantamientos que estaban ocurriendo en provincias. Mandaba Murat que los Alcaldes buscasen las fuentes de tales rumores, para acabar con ellos^{***}.

El 30 de mayo el Consejo de Castilla presentaba a Murat una nueva e interesante consulta. Eran ya conocidos importantes disturbios públicos y levantamientos en muchas provincias^{***}. La Junta había ordenado al Consejo el día anterior la publicación de unas proclamas de Napoleón, a lo que el Consejo de Castilla puso objeciones y suspendió su circulación^{***}. Sin duda la más importante era el reconocimiento de las abdicaciones de Bayona:

"Las circunstancias del día no le permiten entrar en esta discusión y contrayendo a ellas debe repetir a V.A.I. y R. que nunca ha tenido ni tiene por ley la representación de toda la Nación y que por lo mismo no se halla autorizado ni con facultad para elegir ni admitir Rey, cuya sucesión no esté señalada

^{***}. A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, folio 381. La Sala expidió varios bandos en este sentido. También alguno de los rumores que corrían entonces por Madrid eran falsos. Así se decía que "dentro de pocos días se cerrarían las puertas de Madrid y se alistarían forzosamente los jóvenes" (Bando de la Sala de 23 de julio de 1.808).

^{***}. El 26 de mayo el Consejo de Castilla presentaba consulta a la Junta de Gobierno sobre las ocurrencias de Valencia, en las que el pueblo se había levantado. Era entonces el Consejo del parecer que no debía mandarse ninguna proclama llamando al orden, pues produciría el efecto contrario. Debía ser por tanto la Audiencia la que intentase hacerse con el control de la situación. También se anunciaron entonces importantes conmociones públicas en Zaragoza. (Archivo de Villa, Secretaría, Minutas de la Junta Suprema de Gobierno, sesión del 26 de mayo de 1.808; también en A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 14).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 10. El Consejo pleno ni siquiera pidió dictamen a los Fiscales en esta ocasión para dar una respuesta inmediata.

por ellas, y que sus funciones propiamente son ceñidas a la observancia de las mismas leyes.

Cualquier novedad que se haga o intente hacer en la Sucesión al Trono toca exclusivamente a la Nación misma, y cuanto se ejecute de otra forma es ilegal y nulo según la constitución actual de esta Monarquía.

El anuncio que se hace en el Decreto y Proclama insertos de haber aceptado dichas renunciaciones el Sr. Emperador y Rey, y el uso de la autoridad real que ejerce en la resolución de los artículos (...) es un reconocimiento de su soberanía sobre España, y embebe una exclusión de todos los llamados a ella por las leyes fundamentales de estos Reinos, el cual en manera alguna puede decretar el Consejo sin dictamen expreso de la Nación, o no hacerse reo de su infracción y de la de sus más esenciales obligaciones.

Cuando el Consejo pudiera olvidarse de ellas, su proceder ningún valor daría a la publicación que se le pide, porque todos los españoles conocerían el ningún valor de estos actos, y se afirmarían en la idea que ya han publicado el pueblo de Valencia y los autores de muchos anónimos que se le han dirigido de que no procede en sus deliberaciones con la cordura y justicia que han constituido siempre su carácter, si no es oprimiendo por la fuerza y careciendo de libertad.

V.A.I. y R. sabe la fermentación que hay en varias provincias y conoce la necesidad de sofocarla en su principio, o no daría pábulo, para evitar las results funestas que son consiguientes a la inquietud y turbación del Reino, al derramamiento de sangre humana y a la fortaleza que adquieren las opiniones cuando se pelea por ellas, cuyo resultado es el encarnizamiento y el que se perpetúen, y más atendido el carácter de esta nación..."

Evidentemente el Consejo de Castilla parecía haber cambiado. Ahora se atreverá nada menos que a suspender la publicación de un Decreto y Proclama de Napoleón, como Rey de España. Y se atrevió a decirle que no estaba claro que fuera Rey de España y por tanto cualquier acto en cuanto tal podría ser ilegal. Sin duda las noticias de las provincias hicieron mella en el ánimo del Consejo, que se encontraba de algún modo más respaldado por el levantamiento de una buena parte de la población. Frente al abatimiento

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 10.

que siguió al 2 de mayo, el Consejo de Castilla había recobrado nueva fuerza moral y empezaba a reaccionar.

El mismo día 30 de mayo, cuando conoció Murat la negativa del Consejo a circular los decretos, el Gran Duque reiteró al Supremo Tribunal la orden de publicarlos"" junto con la proclama a los españoles. La sesión del Consejo de aquel día nos ha quedado relatada por la Minuta que levantó el Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz:

"Hoy 30 de mayo de 1.808, día feriado por serlo del glorioso San Fernando, siendo la hora de las seis de la mañana me envió a decir el Ilmo. Sr. D. Arias Mon y Velarde, Decano del Consejo, dispusiese se avisase a todos los Sres del él, incluso los Sres. Fiscales, para que precisamente concurriesen en este propio día a las ocho en punto al Consejo; y habiéndolo hecho así, después de haber oído Misa en el oratorio del mismo Tribunal, concurrieron a él los Sres. al margen. Y también el Excmo. Sr. don Sebastián Piñuela, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia. Y formado el Consejo presidido del referido Ilmo. Sr. Decano ocupó el lugar de su derecha el citado Ilmo. Sr. Piñuela y los demás señores los suyos. Y también concurrieron los dos Sres. Fiscales. Y después de un rato salió del Tribunal el enuniciado Sr. Piñuela, quien a su salida me dijo había enviado a la Imprenta Real copia de los papeles que quedaban en el Consejo para que tuviera adelantada la impresión de ellos, y luego que el Consejo acordase la extensión de la cabeza y pie de la circular que había de expedirse, lo enviase sin pérdida de tiempo a la imprenta y firmadas, cerradas y selladas las cartas por mí y por mi compañero don Manuel de Santisteban, se las enviase a su Secretaría para disponer que por extraordinarios se comunicasen a todo el Reino.

En este estado quedó el Consejo tratando el asunto y volvió el Sr. Piñuela a la hora de las once: estuvo en la Sala segunda de

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 10, Real Orden comunicada al Consejo por Piñuela, el 30 de mayo de 1.808: "El Srmo. Sr. Lugarteniente General del Reino quiere y manda que el Consejo publique, imprima y circule inmediatamente las Ordenes de S.A.I. que le comunicó ayer, juntamente con el Real Decreto y Proclama del Emperador de los Franceses, hechos en Bayona a 25 de este mes. Lo que participo a V.I. de Real Orden para su inteligencia y cumplimiento del Consejo."

Gobierno con el Excmo. Sr. Decano y a breve rato se salió y continuó el Consejo en su sesión hasta la una dada, y habiéndome llamado se disolvió dándome el decreto siguiente...30 junio 1.808."'''

El Consejo de Castilla aceptó finalmente la publicación, impresión y circulación de las órdenes, decretos y proclama mencionados. Sorprende francamente de débil resistencia del Supremo Tribunal, cuya negativa dura menos de 24 horas. A la ejemplar consulta de la mañana sucede la simple y llana sumisión. Debieron influir en este caso en gran medida las amenazas por parte de Murat: en Palacio se calificó la consulta del Consejo como manifiestamente sediciosa. Piñuela era hombre cabal y honrado, y quizás aportara argumentos de mantener la calma y contemporizar para ganar tiempo. Por otras fuentes sabemos también que varios Consejeros de Castilla mantenían contactos con la Junta de Gobierno y éstos debieron apoyar sin duda tales argumentos. La reunión de la Junta de Gobierno de aquella tarde había sido al parecer bastante escabrosa y en ella se acordó que por entonces sólo se exigiese al Consejo de Castilla la materialidad de la impresión y circulación y así lo hizo el Supremo Tribunal'''.

Con fecha 3 de junio se pasó al Consejo de Castilla una nueva proclama, elaborada esta vez por la Junta de Gobierno. Sin embargo, el Consejo publicó sólo el decreto y la proclama, pero no la consulta de la Junta de Gobierno que los acompañaba. Esta consulta fue publicada en circular del Consejo el día 4 de junio, junto con el decreto y la proclama'''.

Finalmente la Gaceta del 7 de junio publicaba la proclama de Napoleón a los españoles, la comunicación de la Junta al Emperador y una nota oficial que añadía que S.M.I. y R., condescendiendo a los deseos manifestados por la Junta de Gobierno, por el Consejo de Castilla, por la Villa de Madrid y por diferentes cuerpos civiles y militares, había decidido transferir la Corona de España a su hermano

''' A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 10.

''' Los decretos imperiales fueron publicados en la Gaceta del 3 de junio de 1.808 (DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1.808", op. cit., pág. 193).

''' A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 4.474, "Sobre los movimientos suscitados en algunas provincias y las medidas militares tomadas para reprimirlos."

José***.

Por tanto, el 6 de junio fueron conocidos públicamente los deseos de Napoleón con respecto a su hermano José. Murat informaba aquel día al Consejo de Castilla de la inmediata salida de José desde Bayona, rumbo a Madrid. Aunque todavía no se sabía el día de su llegada a la capital del Reino, el Gran Duque previno al Consejo para que con la máxima brevedad fuese organizada una magnífica recepción***. El Consejo aprobó las órdenes correspondientes e informó a la Sala de Alcaldes y al Ayuntamiento de Madrid.

El 11 de junio don Sebastián Piñuela escribía al Consejo para que hiciera proclamar al nuevo Rey. Ese mismo día el Consejo de Castilla publicó el decreto del Emperador por el que nombraba a su hermano José I Rey de España***.

***. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1.808", op. cit., pág. 193. Napoleón retrasó bastante la información al público sobre el nombramiento de su hermano. Quizás deseó prolongar la sensación de vacío de poder para facilitar una mejor acogida del nuevo Rey. También pudieron influir en ello los retrasos propiciados por el Consejo, tanto a la hora de sugerir a José como candidato, como en los negativos a publicar varios decretos. Por otro lado, ya mencionamos en su momento la reacción que causó en el pueblo esta proclama de Napoleón, citando para ello a CARNICERO, op. cit., tomo I, pág. 132.

***. Dadas las correspondientes órdenes, al día siguiente informaba el Ayuntamiento de Madrid al Consejo de Castilla que las limitaciones de tiempo permitirían tomar sólo las siguientes medidas: colgar la carrera por donde hubiera de pasar S.M.; adornar las Casas Consistoriales; celebrar funciones de teatro, las que fueran mejores; fuegos artificiales en el Parque de Palacio con unos tablados en los que se colocarían grandes orquestas que hicieran más agradable esta diversión; algunas corridas de toros extramuros de la Puerta de Alcalá, que ya estaban preparadas de antemano con motivo de la venida que se esperaba del Emperador y del Rey de Italia (A.H.N., Consejos suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 13).

***. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 194; y MARTINEZ DE VELASCO, A., "Formación de la Junta Central", pág. 51.

3. EL CONSEJO DE CASTILLA EN EL PRIMER REINADO DE JOSE I

1. Los sucesos de la Corte

El 6 de junio de 1.808 fue publicado y circulado por el Consejo de Castilla el Decreto por el que se nombraba a José Bonaparte Rey de España. Comenzaba un breve periodo conocido como el primer reinado de José I, que se prolongaría hasta la precipitada huida de Madrid, en la madrugada del 1 de agosto. Sin embargo, desde las abdicaciones de los Reyes Borbones en Napoleón, era José el inmediato destinatario de la Corona de España, aunque en la práctica se encontrara supeditado a los deseos del Emperador^{***}.

Una de las primeras medidas de nuevo Monarca fue la confirmación en su puesto de Lugarteniente General del Reino al Gran Duque de Berg, "encargándole que haga expedir todos los decretos que convengan a fin de que los tribunales y los empleados de todas clases continúen en el

^{***}. El día anterior, 5 de junio, por Real Orden comunicada al Gobernador de la Sala por el Decano del Consejo don Arias de Mon, se avisaba al público que sería duramente castigado el que acogiese en su casa a un soldado desertor, "por la notable deserción que se advertía en las tropas nacionales." (A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.399).

ejercicio de sus funciones respectivas...""". Este y otro decreto del nuevo Rey de España fueron mandados imprimir, publicar y circular por el Consejo de Castilla el 14 de junio, tres días después de su comunicación por don Sebastián Piñuela"". Aquel día Murat informaba al Consejo de Castilla sobre la aceptación de su nombramiento y confirmaba en sus destinos a los ministros de los Consejos y tribunales y a todos los demás empleados civiles y militares"".

Con esta misma fecha hubo una consulta del Consejo, la primera al nuevo Rey, en la que se manifestaba en los siguientes términos: "...El Consejo, Señor, ha visto con el mayor gozo que las altas prendas de V.M., su amor por la felicidad del Reino de Nápoles, que ha tenido la dicha de que le gobernase y su alto conocimiento de lo que influye en la felicidad de los estados ha merecido al Gran Napoleón Emperador de los Franceses y Rey de Italia que les distinguiese entre sus ilustres hermanos para cederle todos los derechos que había adquirido a la Corona de las Españas por los tratados ajustados en los días 5 y 10 de mayo..." El Consejo continuaba felicitando a José por esta elección, en lo que se complacía, y le agradecía sus deseos de beneficencia a España y a sus autoridades"".

El 14 de junio el Consejo de Castilla recibió la aceptación de la Corona de España por José I y procedió a su publicación"". Este y otros documentos publicados por

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 14, Real Decreto de 10 de junio de 1.808.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 12. Así decía en uno de sus párrafos la Real Orden comunicada por Piñuela: "El Consejo hallará en esta suprema determinación de S.M.I. la sabiduría de su previsión y el testimonio más evidente de sus intenciones benéficas hacia toda la Nación española"

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 15.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 14. Consulta del 14 de junio de 1.808.

"" Así lo describe la minuta de aquel día: "Hoy, 11 de junio de 1.808 siendo la hora de las nueve y media, después de separado el Consejo pleno y estando en su despacho las respectivas Salas, envió a decir el Serenísimo Sr. Decano don Arias Mon que vendría luego al Consejo y se avisase a los Sres. que no hubiesen concurrido para que lo hiciesen precisamente. Y habiéndoseles enviado llamar concurrieron inmediatamente los Sres. y también el Fiscal don Jerónimo Antonio Díez, pero no su compañero Sr. D. Nicolás María de Sierra, por hallarse indispuesto: y estando formado el

el Consejo corrían con dificultad por las provincias, y normalmente producían, como ya hemos visto, un efecto contrario al deseado"". Por otro lado, la prensa y las autoridades en las zonas no ocupadas promovían a su vez la movilización contra el invasor"".

Al mismo tiempo envió también el Consejo una carta de felicitación al nuevo Rey, en los siguientes términos:

"El Consejo felicita a S.M. por esta decisión y al mismo tiempo le manifiesta en la efusión de su corazón las más rendidas y respetuosas gracias por sus deseos de beneficencia a este Reino y a toda su jerarquía"".

También el 14 de junio Murat comunicaba al Consejo de Castilla su aceptación del cargo confirmado y hacía extensiva esta confirmación en sus destinos a los Ministros de los Consejos y tribunales, y a todos los demás empleados civiles y militares. Sin embargo, a consecuencia de unas fiebres debió ser sustituido el Gran Duque por el General Savary, que llegó a Madrid el día 15.

Igualmente el 14 de junio había resuelto Murat que la Sala de Alcaldes se encargase exclusivamente de

Consejo pleno se publicó en él la Real Orden y el Decreto que anteceden y en su inteligencia acordó lo siguiente: "Madrid, once de junio de 1.808. Publicado se acordó se impriman, publiquen y circulen inmediatamente la Real Orden y Decreto en cumplimiento de lo que se previene, y en la forma acostumbrada." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 12).

"" CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 307.

"" He aquí, por ejemplo, un extracto del Diario de Granada de 9 de junio de 1.808: "No se ha visto otra unión ni otro fuego español como el que arde en nuestros pechos por el rescate de nuestro Rey Fernando, hasta que haya salido de su cuna, para que no se borre el carácter de Don Pelayo, y siempre saldrá de aquí en todos los apuros la restauración de España, pues tenemos la Reina y Señora despótica de las batallas Nuestra Señora de Covadonga, que supera todas las Monarquías." (Hemeroteca Municipal de Madrid, Diario de Granada, 9 de junio de 1.808).

"" MARTINEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág. 52. Se observa aquí la doble política seguida por el Consejo. De un lado adula y guarda un exquisito trato con las autoridades francesas, y de otro se opone dentro de lo posible a sus medidas.

la Dirección de la Policía Superior de Madrid"". Debía colaborar en estrecho contacto con el General Grouchi. Conocida la noticia, el Gobernador de la Sala de Alcaldes dimitió del cargo de Superintendente de la Policía por motivos de salud, pero el Gran Duque no le admitió la dimisión"".

A la mañana siguiente, el 15 de junio, Murat ordenaba que la tradicional procesión de la festividad del Corpus, a la que solían asistir los Consejos, se hiciera en el interior de la iglesia de Santa María, a las 10 de la mañana del día siguiente. La presidió el Consejo de Castilla y asistieron representantes de los Consejos y otras autoridades civiles y eclesiásticas"".

A partir de este momento se acentúa lo que podemos llamar un proceso de abstención, siguiendo la expresión de Artola"". El Consejo mandaba imprimir, publicar y circular las órdenes, pero no las mandaba cumplir. "El Consejo de Castilla empezaba a situarse al frente de la oposición legal -en expresión de Claude Martin-, lo mismo que el Parlamento de París bajo el Antiguo Régimen"". Sin embargo, en las provincias se consideraba que la sola publicación de las normas del gobierno intruso ya bastaban para inculpar al Consejo. Se le imputaba en fin el que no se opusiera abiertamente a los invasores"".

"". Desde el 11 de mayo de 1.808 ejercía el cargo de Juez de Policía de la Villa de Madrid el Consejero de Castilla don Domingo Fernández de Campomanes. Este, tras presentar varias veces su dimisión, fue relevado del cargo el 2 de junio de 1.808 (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.398, año 1808).

"". A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.398. La Sala plena de la Sala de Alcaldes aprobó un decreto el 17 de junio de 1.808 en el que se mandaba se formase un libro en donde se habían de recoger todas las novedades que ocurriesen en los diez cuarteles en que estaba dividido Madrid. Diariamente debían informar los Alcaldes de verbalmente o por escrito de los sucesos del día.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 9.

"". ARTOLA, M., "Orígenes...", op. cit., tomo I, págs. 116-117.

"". MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 175.

"". Discrepamos de la opinión de Martínez de Velasco (op. cit., pág. 52), cuando afirma que "en todo caso, si el más alto Tribunal de la nación no hubiera albergado dudas acerca de la lealtad y limpieza de su actuación, no habría

Por aquellas fechas se difundió en España una proclama de los diputados presentes en Bayona, fechada el día 8 de junio***. En ella recomendaban la adhesión a la nueva dinastía. Como apuntaba Toreno, ésta y otros manifiestos "corrían con dificultad en las provincias; pero si alguno de ellos se introducía, soplabá el fuego en vez de apagarlo"***. A ello contribuía también la propaganda oficial: los papeles públicos -los periódicos- hablaban bastante de la supuesta ineptitud de los Borbones y su mala conducta, motivo por el cual el Emperador había decidido cambiar de dinastía***.

El 22 de junio se mandaba al Consejo publicar y circular los discursos de Azanza -Presidente de la Junta

considerado necesario publicar posteriormente un Manifiesto exculpatorio." Evidentemente, el que tenía serias dudas sobre la conducta del Consejo de Castilla era el pueblo español, y es comprensible que el Consejo explicara los motivos que le llevaron a obrar como lo hizo. En todo caso, si su conducta no fuese en ningún caso justificable, no se hubiera atrevido a publicar el manifiesto que publicó y tampoco éste hubiera tenido la buena acogida que tuvo en toda España. Fontes por su parte afirma lo siguiente: "En Bayona, bien que mal, hasta la desbandada del día 12, los consejeros, en particular Ceballos, Infantado y Ayerbe, habían mantenido el principio de que el Rey no podía disponer del Reino pues estaba vinculado con él a través de ese pacto entre el Monarca y las Cortes concebidas como órgano de representación estamental. En Madrid no vamos a escuchar nada parecido en el Consejo de Castilla, sino tan sólo excusas y pretextos con que se trata de eludir la grave responsabilidad de los órganos." (FONTES, F., op. cit., pág. 28).

***. Fue comunicada al Consejo por Real Orden de 13 de junio para su publicación, que tuvo lugar al día siguiente por orden del Consejo. Así parecían expresarse los individuos de los Consejos, Grandes de España y demás españoles allí presentes: "...¿Cuánto sentiríamos que malográseis con vuestra indiscreta conducta estas felices disposiciones para la consolidación de la pública felicidad de la España que tantos desvelos cuesta a nuestro generoso Protector? Estos son los sentimientos que han procurado inspiraros el Serenísimo Sr. Lugarteniente General del Reino, la Suprema Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla, que son las autoridades primeras de la Nación..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22; también en Colección de Reales Cédulas, núm. 4.477).

***. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 307.

***. A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, número 1.399, año 1.808. Aquella propaganda oficial contra Fernando VII y contra los Borbones alcanzó un cierto arraigo a nivel popular.

de Bayona- y la respuesta de José Napoleón. El Consejo no encontró ajustado a la realidad el texto presentado y suspendió nuevamente su publicación. Molestaba al Supremo Tribunal una referencia a las constantes esperanzas de la Junta y el Consejo en el nuevo Soberano. Nuevamente le fue presentado por Piñuela otro texto que corregía lo anterior, pero que igualmente contenía otras expresiones que le asociaban a la Junta de Gobierno, con lo que de nuevo el Consejo de Castilla suspendió su publicación.

En nueva orden de Piñuela se mandó al Consejo publicar todas las órdenes que se le comunicasen, "quedando a mi cuidado expresar las que no deban imprimirse, de cuya clase es ésta". Nuevamente el Consejo suspendió el cumplimiento de esta tercera orden y envió a la Junta de Gobierno una consulta, en los siguientes términos:

"Señor: es doloroso al Consejo que V.A.I.R. le dicte y mande el acuerdo que ha de hacer en cumplimiento de la tercera Real Orden, sin haberle oído antes sobre los motivos que han reglado su conducta para el cumplimiento de las dos primeras, y como privándole de libertad y acción que tiene por las leyes de suspender el cumplimiento y de representar las justas causas para hacerlo así (...). Tampoco puede omitir el Consejo manifestar a V.A.I. y R. (que entonces) quedaría reducido a un instrumento material para la impresión, publicación y circulación de las expresadas Reales Ordenes si es que como puede inferirse al literal mandato de V.A.I. y R. no ha de poder dejarlo de hacer, aunque halle muy graves inconvenientes para ello..."

Consecuencia de esta consulta fue la rectificación de la Junta, que por nueva Real Orden remitió un texto rectificado en que se suprimía enteramente todo lo que se atribuía al Consejo en las anteriores. También se afirmaba que no era "del Real ánimo privar al Consejo del derecho de representar". El mismo día 24 el Decano convocó

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22.

***. La nueva Real Orden de 24 de junio decía lo siguiente: "Enterado el Smo. Lugarteniente General del Reino de la consulta que el Consejo pleno extraordinario me dirigió anoche por medio de V.I. sobre la Real Orden comunicada el propio día; y en vista de las observaciones que ofrece la citada consulta, no siendo de Real ánimo de S.A. privar al Consejo de la facultad de representar; y considerando también que en un tiempo en que se vierte la sangre de muchos conciudadanos el anunciar a la Nación las muestras benéficas

a los miembros del Consejo a las 8 de la noche, y en la reunión se acordó publicar ambos discursos.

Ya por entonces era tema de dominio público las presiones a las que se veía sometido el Consejo de Castilla. He aquí un discurso anónimo de origen popular que se difundió por entonces por Madrid, y que refleja bien la situación de opresión en que se encontraba el Supremo Tribunal:

"Señores, no puedo ponderar a ustedes el cruel tormento que padezco al ver a nuestro sabio y rectísimo Consejo de Castilla sin el menor descanso en ninguna hora del día y la noche, rodeado de los verdugos de la humanidad, y obligado a tratar continuamente con ellos, a rebatir sus crueles y ambiciosas resoluciones, y a negarse a condescender y admitir sus temerarios decretos. Al verle, pues, en una situación tan amarga y lamentable, se presentan a mi agitada imaginación reflexiones tan funestas, que confunden mi espíritu, oprimen mi aliento y destrozan mi corazón. Debíamos unirnos estrecha y valerosamente todos los vecinos de Madrid y a costa de nuestras vidas poner en salvo las suyas. Poseo la táctica: he servido muchos años en la milicia con el honor que mi graduación justifica: me pondré a la cabeza de estos honrados ciudadanos, los conduciré al teatro del honor, y derramaré mi sangre con el mayor gusto en defensa de aquel cuerpo tan respectable, como asombroso en su leal constancia y desprecio de la muerte, pues con tanto afán trabajo por nuestra existencia, sin atender a la suya."""

Días después, el 28 de junio Murat mandaba reunir la Sala de forma extraordinaria. El motivo era la propagación de "bulos y especies subversivos y la fijación de pasquines en las calles contra el gobierno". La Sala

de su actual Soberano y las esperanzas que infunde este convencimiento, no deben tardar ni cesar instantes en publicarse, me manda incluya a V.I. como lo hago la adjunta orden que deberá imprimirse, publicarse y circularse con los documentos que en ellas se citan...24 de junio de 1.808. Sebastián Piñuela." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22).

"" S.H.M., Colección del Fraile núm. 3.230, "En nombre del honrado y generoso pueblo de la capital de España, Responde a la admirable Proclama que se dignó publicar el día 5 del presente mes el Supremo Consejo de Castilla, un buen ciudadano", págs. 16 y 17.

plena extraordinaria se reunió en la casa de su Gobernador desde las 8 de la noche del día 28 hasta las dos de la mañana del día 29, en la que fue publicado y fijado un bando. Pese a todo, comunicaron al Gran Duque de Berg que el bando no surtiría el efecto deseado y que sería más útil que los Alcaldes de Cuartel cuidaran para impedir tales conversaciones"".

Sin embargo, no toda a la actividad del Consejo de Castilla se centró en la importante cuestión de la Corona y la nueva Constitución. Otros asuntos de despacho ordinario eran estudiados también por el Consejo. Así, con fecha 7 de julio se estudió un expediente para economizar los gastos que ocasionaba la festividad del Corpus Christi"". Más tarde, el 16 de julio se remitió oficio al Ministerio de Hacienda pidiendo papel sellado para los tribunales"".

El nuevo Monarca debía entrar en España"". Había interés en que tal acta fuera una manifestación del fervor monárquico que tales actos solían representar. Así, el 11 de julio Murat mandaba al Consejo que en el momento de su entrada en España debían repicar todas las campanas de

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.006 núm. 22.

"" Con fecha 30 de julio el Conde Cabarrús mandó que se hiciera una tercera habilitación con el nombre "Valga para el reinado del Sr. don José I". Las circunstancias obligaron a suspender pronto el cumplimiento de esta Orden, de lo que se informó al Consejo para que resolviera lo que estimase conveniente. El Consejo aprobó más adelante la suspensión del cumplimiento de esta Orden y se dispuso una tercera suscripción con el "Valga para el reinado del Sr. don Fernando VII". Como el papel ya estampillado a nombre del Lugarteniente General era bastante y para no causar un notable detrimento a la renta, fue aprovechado poniendo una nueva estampilla debajo.

"" He aquí por ejemplo lo que escribe Martín: "Cuando se vio que su mala voluntad (del Consejo de Castilla) se había propagado a los demás Consejos, los Ministros, de acuerdo con las Órdenes de José, pidieron a los Consejeros que jurasen la Constitución. El Consejo de Castilla no envió delegados a la reunión preparatoria y los restantes Consejos se zafaron a su vez. Los Ministros de José, temerosos de provocar la huida de los altos magistrados hacia las zonas insurrectas, no osaron insistir. Puesto que el Rey estaba al llegar, zanjaría la dificultad (MARTÍN, C. "José Napoleón I", pág. 176, citando la Correspondencia de La Forest a Champagny, días 17 y 18 de julio de 1.808).

Madrid y oírse salvas de artillería"". Todo ello debía comunicarse debidamente al público para su tranquilidad. La fecha de la entrada de José fue fijada para el 14 de julio. Aquel día toda la Corte debía vestirse de gala y debía haber luminarias en el cielo"".

Unos días después, el 18 de julio, el General Grouchy representaba al Gobernador de la Sala que por las noches había alborotadores que insultaban al nuevo Rey y a los franceses. También ese mismo día por Real Orden fue comunicado al Consejo que S.M. llegaría a Madrid el día 20, para que fueran avisados el Gobernador y Sala de Alcaldes, y el Corregidor de Madrid para que se cuidara la tranquilidad pública y el adorno en la carrera, que sería desde la Puerta de los Pozos hasta la Puerta del Sol, y por la Parroquia de Santa María a Palacio"".

Según lo previsto, el 20 de julio el Rey José había hecho su entrada en la capital"". En vano aguardó en Chamartín a los Grandes que debían haberle acompañado por su cargo, y que por distintos motivos se excusaron acudir. Muchas autoridades no acudieron inicialmente a cumplimentar al nuevo Monarca"", entre otras el propio Consejo de Castilla. El Supremo Tribunal tuvo conocimiento oficial de la entrada del Monarca en el Consejo pleno del día siguiente, jueves 21 de julio. En esa misma

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 4.492: Edicto avisando al público y vecinos de Madrid, para que no se asusten ni causen incomodidad alguna, que inmediatamente que se tenga noticia de que el Rey N.S. ha entrado en España, habrá con tal motivo repique general de campanas y salvas de artillería.

"". Fue aprobado por el Consejo pleno el 13 de julio e inmediatamente se avisó a la Sala de Alcaldes para su cumplimiento (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 17).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 18: la Corte se debía vestir de gala con uniforme los días 21 y 22 de julio. Se pondrían igualmente luminarias en sus noches.

"". Llegó a la capital al mediodía y paró en la quinta del duque del Infantado. Hizo su entrada en Madrid aquella misma tarde entre las seis y media y las siete y media, yendo por la Puerta de Recoletos, calle de Alcalá y Mayor hasta Palacio. (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 382; A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 18). "La población tomó una actitud expectante o de repulsa. (JURETSCHKE, H., "Los afrancesados en la Guerra de la Independencia", op. cit., pág. 33).

"". VILLA-URRUTIA, "El Rey José Napoleón", pág. 17.

reunión acordó el Consejo excusarse de acudir a Palacio al día siguiente a la tradicional consulta de los viernes"".

El día 24 de julio Piñuela comunicaba al Consejo una Real Orden para que los tribunales fueran a cumplimentar a José I. El Consejo de Castilla lo comunicó a las autoridades de la Villa"" y acordó que la Sala de Alcaldes fuera al Palacio de los Consejos a las 11 de la mañana, para que tras oír misa acudieran juntos el Consejo y la Sala al Palacio Real"". La Sala también se encargó de los preparativos de la proclamación del Monarca, que quedó fijada para el 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol.

El día 25 por la mañana algunos de los Consejeros no asistieron al Palacio de los Consejos. Esa misma mañana les fue comunicado mediante nota que el Consejo asistiría a la proclamación de S.M. desde los balcones de las Casas Consistoriales. La ceremonia tendría lugar a las 5 de la tarde"". El Consejo también pidió al Corregidor que quedase libre la salida por la calle de Luzón a la Plazuela de la Villa para cuando el Decano del Consejo fuese en su coche al Ayuntamiento.

Parece que el Consejo de Castilla sí asistió a la proclamación de José desde los balcones del Ayuntamiento, aunque por otro lado Azanza y O'Farril afirman

"" Minuta de la reunión del Consejo de la mañana del 21 de julio: "Hoy 21 de julio de 1.808, estando el Consejo pleno compuesto de los Sres. del margen, hice presente que el nuevo Rey de España don José Napoleón I había entrado en Madrid y hospedándose en el Real Palacio en el día de ayer 20 como estaba anunciado; y que siendo mañana 22 viernes y día en que el Consejo hacía constantemente las consultas personales con los Sres. Reyes cuando estaba en Madrid, lo hacía presente para la resolución que fuese de su agrado, y habiendo conferenciado el Consejo sobre el asunto, se sirvió acordar el Decreto que sigue: 'Por ahora no se haga novedad, excusándose hacer consulta personal'. 21 julio 1.808."

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núms. 20 y 19; varios individuos del Ayuntamiento a quienes se invitó para que asistieran al acto se hallaban ya fuera de la Corte. Otros varios manifestaron encontrarse enfermos, por lo que no había el quórum necesario para la celebración del acto. El 22 de julio informaba al Consejo de Castilla que era imposible la celebración del acto de proclamación de José I el día 25 y pedía que fuera pospuesta.

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1808, folios 880 y ss.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 19.

que el Consejo ni siquiera llegó a ver al nuevo Monarca, lo que era ratificado por el propio Consejo en su Manifiesto". En todo caso, la acogida al nuevo Rey fue bastante fría. Aquel mismo día Savary escribía a Berthier una carta, en la que entre otras cosas le decía lo siguiente: "L'opposition opiniâtre du Conseil de Castille est le levain de toute cette fermentation"."

Para concluir este primer apartado podemos recoger a modo de síntesis una atinada reflexión de Claude Martin sobre la actitud del Consejo ante aquellos acontecimientos: "Desde que se fuera Fernando, el Consejo hacía una oposición, tan pronto sorda como abierta, a la instauración de un Bonaparte en el Trono de España. Al principio quiso ganar tiempo para ver cómo se resolvía el viaje de Fernando. Después pareció aceptar el hecho consumado y envió incluso delegados a la Asamblea de Bayona. Pero bien porque la explosión del sentimiento nacional y los éxitos de Valencia y de Zaragoza arrastraran a los fríos togados que componían el Consejo o los asustara, bien porque la Constitución de Bayona ponía término a las antiguas instituciones de las que eran parte esencial, de día en día habían aplazado la publicación de las nuevas leyes institucionales que José promulgó en Vitoria..." A ello podemos añadir que si bien desde el principio el Consejo - como las demás instituciones- sintió indignación por la conducta de los franceses, sólo con el paso del tiempo y el transcurso de los acontecimientos fue reaccionando ante la usurpación.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto...", folio 86: "Partió José Napoleón con el ejército, sin que el Consejo ni la Sala de Alcaldes, que tampoco prestó el juramento, hubiese llegado siquiera a verle, ni aún para la ceremonia de urbanidad con que ha acostumbrado distinguir desde los tiempos más remotos a todos los príncipes extranjeros que han venido a esta Corte." En todo caso, cabe la duda de si ese 'verle' se refiere sólo a una recepción formal o se extiende también al mismo hecho físico.

***. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 242; cfr. MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 175.

***. MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 176.

2. Los sucesos de Bayona

Pero volvamos a los acontecimientos vividos en Bayona. No fueron a aquella ciudad francesa todos los diputados previstos y muchos de los que fueron, no lo hicieron de buen grado^{***}. Ya vimos en su momento que cuatro ministros del Consejo fueron enviados a Bayona y un Alcalde de Corte. Por lo recogido en el Manifiesto del Supremo Tribunal, al menos Colón y Lardizábal iban contra su voluntad, por mandato del Decano. Refería Cevallos en sus Memorias^{***} cómo los Consejeros de Castilla comisionados a Bayona fueron sin poderes ni instrucción alguna^{***}. Esta

^{***}. Apunta Toreno cómo a principios de junio no llegaban a treinta los representantes allí congregados. Y de los que acudieron, algunos se vieron obligados a salir de Madrid, otros se encontraban en pueblos ocupados por tropas francesas, etc. Sin duda tenía razón Toreno al afirmar que era "lógica esta reticencia considerando además que la insurrección prendía por todas partes y el gran compromiso al que se exponían" (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 308).

^{***}. CEVALLOS, "Memorias: Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la Corona de España y los medios que el Emperador de los Franceses han puesto en obra para realizarla", pág. 169.

^{***}. He aquí el texto de la comisión encomendada a los Ministros del Consejo de Castilla Colón y Lardizábal: "Ilmos. Sres.: De acuerdo con el Consejo, paso a V. S. Ilustrísimas la adjunta consulta que hace S.M. el Emperador de los Franceses y Rey de Italia, a consecuencia de una Real Orden del Srmo. Sr. Gran Duque de Berg, comunicada por el Sr. Don Sebastián Piñuela, acompañando un Real Decreto del Sr. Don Carlos IV, por el cual hace renuncia de su Corona en favor de S.M.I. y R.; y una Real Carta de los Sres. Príncipe de Asturias don Fernando, e Infantes don Carlos y don Antonio, exhortando a los españoles a la confianza que deben tener en las operaciones del Sr. Emperador, a fin de que V.S.S.II. la pongan en manos de S.M.I. y R. como Diputados del Consejo. Dios guarde a V.S.S.II. muchos años. Madrid, 20 de mayo de

medida se adoptó, de acuerdo con los propios comisionados, para precaver cualquier clase de compromiso. Y esto pasó también a otros diputados: la mayoría de ellos no tuvieron otros poderes que la simple orden de partir.

Según lo previsto, el 15 de junio fue abierta la Asamblea de Notables en Bayona, en el palacio llamado Obispado Viejo^{***}. Realizada la verificación de poderes, se leyó un decreto publicado por el Consejo Real, sobre la cesión de derechos a la Corona de España por Napoleón en favor de José Bonaparte.

Antes del comienzo de las sesiones de la Junta, pidió Napoleón a los diputados allí presentes que elaborasen una proclama pidiendo a los ciudadanos de Zaragoza que se sometiesen al nuevo Rey. Una vez redactada fue llevada a la capital aragonesa por una comisión formada, entre otros, por el Consejero de Castilla don Ignacio Martínez de Vilella y el Alcalde de Corte don Luis Marcelino Pereyra. Sin embargo, ni siquiera pudieron acercarse a la ciudad por lo exaltados que estaban los ánimos^{***}.

En otro punto de sus Memorias, elogiaba Cevallos la conducta de la Diputación del Consejo de Castilla en Bayona: "El Emperador encontró a estos individuos ministros incorruptibles"; "No entro en los pormenores de este Congreso; tal vez alguno de los Ministros del Consejo de Castilla, que tanto honor hicieron a la toga, contentará la curiosidad del público sobre este punto interesante"^{***}.

Llegada la comisión del Consejo de Castilla a Bayona, acudió a cumplimentar al Emperador. Estaban presentes también los Ministros españoles de Estado y Hacienda, y el Ministro francés de Relaciones Exteriores. En la recepción tomó la palabra el Sr. Colón y afirmó lo siguiente:

"Señor: El Consejo Supremo de Castilla, conocido por el Consejo del Rey y primero entre los más

1.808. Arias Mon. Sres. don José Joaquín Colón y don Manuel de Lardizábal."

^{***}. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22.

^{***}. AZANZA y O'FARRIL, "Memoria justificativa", op. cit., pág. 304. Por este motivo llegaron tarde a las sesiones de la Asamblea de Bayona. No se incorporaron hasta el día 21 de junio, el cuarto día de sesiones ("Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808", pág. 32).

^{***}. AZANZA Y O'FARRIL, op. cit., pág. 169.

altos Tribunales de la Nación española, representado por sus individuos don Manuel de Lardizábal, don Sebastián de Torres, don Ignacio Villela y don José Colón, que como su Decano es el que habla; traspasando por primera vez desde su primera erección los límites de su territorio, viene desde la capital de España, en ejecución de vuestra Imperial y Real invitación, a enterarse de vuestros Reales designios.

La constante fidelidad e indeble amor que siempre ha prestado el Consejo a sus Soberanos le han grangeado su confianza, y esta misma fidelidad espera que le merezca la de V.M.V. y R., quien no puede menos de aplaudir semejante conducta. ¿Cuál sería Sr. el justo desprecio que merecería el Consejo ante vuestra Imperial presencia, si en las notorias circunstancias ocurridas se hubiera desviado de las leales sendas que le abrieron sus mayores? Igual sería la desconfianza con que le miraría el Soberano en quien deba recaer la Regia Corona de ambos mundos, si este Supremo Tribunal hubiese prostituido sus obligaciones.

Sea pues el sujeto que nos gobierne el que merezca vuestra Real elección y preferencia, y a que su arbitrio, parece han de surtir efecto los tratados de renuncia del Rey Don Carlos IV, sus hijos y tío los Señores Don Fernando, Don Carlos y Don Antonio, y en los términos legales que por escrito los propone el Consejo, y que de viva voz los reproducimos. Pero ya que el Consejo no puede dejar por sí de preamar la pública tranquilidad y de evitar la opresión y efusión de sangre de sus conciudadanos, permítasenos el recomendar según debemos, nuestra única Religión Católica en toda su pureza sin mezcla de otra alguna; la integridad del Reino, la conservación de sus clases y de sus exenciones; la conservación de su actual legislación y tribunales, incluso los privilegios de algunos Reinos y provincias, como premio, de unos de su valor y fidelidad, y otros como necesarios a su población, industria y aumento; la permanencia de los precisos cuerpos religiosos, seculares y regulares; el alivio de los pesados tributos, reales y municipales, que agobian a los pueblos; y la seguridad de las propiedades de cada uno.

Si los puntos insinuados necesitasen alguna reforma, como todas las cosas humanas, el Consejo ayudará a su legítimo Soberano con el más activo celo; y el pueblo que es dócil, fiel y devoto, en igual eminente grado que guerrero, obedecerá sumiso con tranquilidad.

Dígnese V.M. acceder a nuestros comunes votos y admita benignamente la presente representación del Consejo."'''

La audiencia duró media hora. En ella sólo se habló sobre la legislación y administración de Justicia en España. Napoleón confesó entonces no tener la menor noción ni conocimiento sobre esta materia. El Emperador, al

''' A.H.N., Estado, legajo 28 A, documento núm. 34/2: "Relación de lo ocurrido en Bayona con la Diputación del Consejo Real".

contrario de lo que ocurrió con la Diputación de los Grandes de España, se comportó en esta ocasión con atención y urbanidad."'''

Hasta el día 7 de junio no llegó José a Bayona. Napoleón había reunido a todos los vocales españoles sin darles motivo o explicación. De repente fueron informados de la llegada del nuevo Rey y tuvieron que habilitar uno de los salones para felicitar al Soberano recién llegado. Para ello se dividieron en cuatro diputaciones: la de los Grandes de España, la del Consejo de Castilla, la de los Consejos de la Inquisición, Indias y Hacienda y la del Ejército. Previamente cada diputación debió presentar a Napoleón el escrito de su exposición, para su censura previa. Los diputados representantes del Consejo de Castilla cumplieron a José I, pero evitaron el reconocimiento claro, "limitándose por su falta de autoridad, según expresaban, a manifestar cuáles eran sus deseos"'''. Azanza y O'Farril escribían en tono de queja unos años después -no sabemos si conforme a la verdad o no- que aquellos diputados que en público adulaban a José, comentaban también en privado sus deseos de que la Nación aceptase al nuevo soberano, "pues era ya forzoso el paso a una nueva dinastía".'''

Unos días antes, el Ministro Azanza había pasado a los representantes del Consejo de Castilla un cuaderno manuscrito con el siguiente epígrafe: "Estatuto Constitucional para España". Les mandó que pudiesen sobre su contenido las reflexiones que les pareciese convenientes, lo que hicieron en un término de 30 días. Los mismos diputados decidieron también preparar un discurso aparte sobre el

''' A.H.N., Estado, legajo 28 A, documento núm. 34/2: "Relación de lo ocurrido en Bayona con la Diputación del Consejo Real".

''' CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 301. Más violenta fue la visita a José de la Diputación de la Grandeza, presidida por el Presidente de Castilla, Duque del Infantado, a cuyo discurso contestó Napoleón con fuertes amenazas.

''' AZANZA y O'FARRIL, "Memoria justificativa", pág. 306. En otro punto de su Memoria escribían: "No hubo cuerpo ni autoridad alguna que desde luego rehusase descubiertamente el nuevo orden de cosas que quería introducir, contentándose el que más con algunas protestas y reticencias que probaban el desagrado general con que se recibía tamaña novedad, y querían dejar la puerta abierta a una remota esperanza o a futuros contingentes, pero sin prestar por de pronto ni obstáculos ni una firme oposición." (op. cit., pág. 300).

nuevo Estatuto y la legislación española"" , que fue entregado al Emperador a repentina petición suya el día 16 de junio a las once y media de la noche. Así relata este último suceso Martín, apoyándose para ello en fuentes francesas: "Poco antes de la Asamblea (de Bayona), Napoleón recibió (...) una extensísima memoria del Consejo de Castilla insistiendo en reformas de detalle que estimaba útiles. Su prolijidad irritó al Emperador, que escribió al margen de la traducción francesa: "Sois unos estúpidos". (...) Sin embargo, Napoleón aceptó determinadas observaciones. Para complacer al Consejo de Castilla ya no se habló de la introducción del Código de Napoleón, sino de la necesidad de adoptar un sólo Código para toda España..."

Sanz Cid y Mercader Riba abundaban un poco más en el memorial del Consejo. Nos dicen que tenía un carácter francamente conservador y que había sido redactado por los Consejeros de Castilla Colón y Lardizábal.

En su informe, los Consejeros de Castilla pedían, entre otras cosas, las siguientes: que en el Código Civil y Penal se tuviera en cuenta el derecho tradicional; que se separasen de la competencia de los Consejos y autoridades -chancillerías, capitanías generales e intendencias- las atribuciones de distinta índole de la principal de su cometido; que el Consejo de Castilla quedara como Tribunal de Casación; que se declarase la inamovilidad de los Ministros de las Audiencias, Chancillerías y Consejos; que se conservaran las Cámaras de Castilla y de Indias""; que las Cortes sólo se reuniesen cada tres años,

"" . Le hicieron ver que aún siendo necesaria la reforma de nuestros Códigos Civil y Criminal, e incluso la formación de otro nuevo, no era adaptable el Estatuto de Bayona a nuestras leyes fundamentales. Le expusieron detalladamente, capítulo a capítulo, esta afirmación. Igualmente le manifestaron no parecerles justa la extinción de todos los mayorazgos; y que juzgaban necesaria la conservación de los jueces y tribunales entonces existentes, en especial de los Consejos Supremos de Castilla y de Indias, y de sus respectivas Cámaras.

"" . MARTÍN, C., "José Napoleón I", págs. 138 y 139.

"" . Don Vicente Alcalá Galiano, entonces Tesorero General y Ministro del Consejo de Hacienda, había sugerido en uno de los epígrafes de su dictamen en la Asamblea de Bayona lo siguiente: "También me parece conveniente conservar la institución de la Cámara. Este Tribunal debe continuar consultando los más beneméritos para todos los jueces de primera instancia, de los tribunales de apelación, sus presidentes y para las vacantes del Consejo Real. Nunca puede ser excesivo el cuidado en la elección de los magistrados, y no deben dejarse a los Ministros solos en las propuestas,

para evitar gastos; que se conservasen las vinculaciones y los mayorazgos para conservar las primeras clases como Estado monárquico que era España; que no fueran concedidos cargos a extranjeros y que se pusiese la atención en los Vales Reales"".

El breve análisis de estas peticiones es orientativo de los deseos y expectativas del Supremo Tribunal: el deseo de defender el derecho tradicional, en donde entraba el respeto a las instituciones de la Monarquía""; la necesidad de descargar al Consejo de las competencias añadidas y superfluas que agobiaban de trabajo a los Ministros, y el hacer de él un Tribunal Supremo de Justicia para casación""; o la inamovilidad de los puestos de Consejero de Castilla, que muchas veces veían sus destinos en manos del capricho del gobernante de turno, he aquí algunas de las inquietudes de los miembros del Consejo.

Ya hemos visto que el día 15 de junio fue inaugurada oficialmente la Junta de Bayona, bajo la presidencia de don Miguel José de Azanza. Verificados los poderes se había leído un decreto publicado por el Consejo de Castilla, que contenía la cesión del Emperador de todos los derechos a la Corona de España y de las Indias en favor de su hermano José"". Azanza leyó un discurso, que fue

porque ocupados en otros asuntos muy graves, no pueden tener lugar para averiguar, como es necesario, la conducta e idoneidad y demás circunstancias de los pretendientes." ("Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808", pág. 85).

"" SANZ CID, C., "La Constitución de Bayona", Madrid, 1.922, págs. 228 a 230; cfr. también MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", págs. 37 y ss.

"" "Las ideas conservadoras eran defendidas por el canónigo de Burgos Ramón María de Andurriaga, que había deseado el mantenimiento del absolutismo. Los Consejeros de Castilla compartían ese punto de vista..." (MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 140).

"" Esta petición también la había hecho en Bayona don Cristóbal de Góngora, Oficial Mayor de la Secretaría del Despacho de Hacienda ("Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona", págs. 86 y 87).

"" Concretamente se leyó una circular del Consejo de 11 de mayo de 1.808, por la que se mandaba publicar por el Reino de España el decreto de S.M. I. y R. Napoleón I, Emperador de los Franceses, expedido el 6 del mismo mes, en el que se proclamaba Rey de España y de las Indias a su muy amado hermano José Napoleón, antes Rey de Nápoles y de Sicilia. ("Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808", pág. 19).



BIBLIOTECA
DE DERECHO

respondió por el Rey José.

Las reflexiones y trabajos de la representación del Consejo no fueron tenidos en cuenta, al igual que los de otros Consejos". Pocos días después apareció impreso un Estatuto constitucional con varias adiciones y artículos, también contrarios al sistema de leyes hispano. Se repartió un ejemplar a cada vocal y se les dio tres días para que cada uno escribiese, a continuación de su respectivo ejemplar, las observaciones que tuviera a bien incluir, y que lo entregasen a continuación al Presidente de la Junta, Sr. Azanza", quien de orden del Emperador previno que su voto no era decisivo sino consultivo. Aquellos vocales sacaron la conclusión de que sus observaciones serían también ignoradas". Aún así, los diputados del Consejo de Castilla hicieron nuevas reflexiones sobre los artículos añadidos y reprodujeron las

"" El Conde de Toreno criticaba una propuesta de don Ignacio Martínez de Villela: en la sesión del 22 de junio, este Consejero de Castilla propuso que se comprendiese en la ley fundamental un artículo para que ninguno pudiese ser incomodado por sus opiniones políticas y religiosas. Toreno criticaba la conducta de Villela: "admiraría que aquel mismo magistrado años más tarde se convirtiese en duro y constante perseguidor (op. cit., tomo I, pág. 312); también le critica por su enérgica defensa de la Inquisición (pág. 311); este episodio también fue mencionado por BAYO, op. cit., págs. 188 y 189, quien calificaba a Martínez de Villela "apóstol de las persecuciones y agente de la tiranía". Cfr. también SANZ CID, C., "La Constitución de Bayona", pág. 228 y ss. Por otro lado, sabemos que Infantado, Colón, el Prior de Roncesvalles y don Simón Pérez de Cevallos fueron nombrados el 20 de junio como miembros de una Comisión con el objeto de estudiar la supresión del impuesto de 4 maravedís en cuartillo de vino ("Actas de la Diputación General de Españoles...", págs. 25 y 26); y que los Sres. Martínez de Villela y Pereyra no estuvieron presentes en la Asamblea de Bayona desde su apertura, sino que se incorporaron a los trabajos el día 21 de junio (op. cit., pág. 27).

"" Claude Martin afirma que debían entregar estas observaciones a dos comisiones que tenían por misión examinarlas y ordenarlas. Al parecer, la segunda de estas comisiones estaba formada por el Duque del Infantado y los Consejeros de Castilla Colón, Lardizábal, Torres, así como el Consejero de la Inquisición Etenhard. (MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 140).

"" En todo caso, apunta Toreno, en Bayona y a la vista de Napoleón donde celebraron sus sesiones, ninguna se hubiera atrevido a enmendar un punto esencial del sistema propuesto (op. cit., tomo I, pág. 312).

anteriormente incluidas". Concluyeron su exposición advirtiéndole al Emperador de las funestas consecuencias que tendrían en España las reformas que se deseaban introducir.

Muchos diputados presentaron observaciones a la nueva Constitución. Sin ánimo de ser exhaustivos, sin embargo no carece de interés repasar algunas de estas observaciones y que hacían referencia al Consejo Real.

Por ejemplo, el diputado por Caracas don José Odoardo Grandpré solicitó en su informe que el Senado, el Consejo de Estado y el Consejo Real tuvieran cada uno de ellos dos, tres o más sujetos que fueran naturales de América. Y añadía: "Esta providencia hará se borre la odiosa distinción entre los habitantes de ambos continentes, y que al cabo de algún tiempo formen una misma familia.""

O el tristemente famoso canónigo de la catedral de Toledo y más tarde Ministro de Isabel II, don Juan Antonio Llorente, quien hacía las siguientes observaciones: "Me parece que el Consejo Real, que se ha titulado de Castilla, debe ya nombrarse "de las Españas"; pues así corresponde con los títulos con que ha de ser nombrado el Rey según el artículo 5"."

Otros, como don Luis Meléndez de Bruna, entonces del Consejo de las Ordenes y más tarde del de Castilla, pedía que se estipulara un número mínimo de Consejeros de Castilla, "que convendría no baje de treinta y seis según los destinos que se les asignan.""

Pocos días después fue presentada la

"" Ver "Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808", págs. 69, 70 y 71. Estas observaciones, hechas también por Colón y Lardizábal, ofrecen menor interés.

"" "Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808", Madrid 1.874, pág. 113.

"" "Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808", pág. 100; al final, en el proyecto finalmente aprobado se utilizaría la expresión "Consejo Real", en vez de la de "Consejo de Castilla", que fue la inicialmente presentada por Napoleón (op. cit., págs. 51 y ss.). Presentó esta observación en la sesión del 23 de junio de 1.808 (op. cit., pág. 32).

"" "Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808", pág. 81.

Constitución definitiva, "sin variación sustancial" y sin ser tenidos en cuenta la mayor parte de los reparos puestos por los vocales de la Asamblea que manifestaron su oposición. Ni siquiera fueron leídos sus escritos, como oportunamente pidió uno de ellos. En doce sesiones se habían ventilado y aprobado los artículos de la Constitución, tal y como habían sido propuestos".

Inmediatamente fue fijado día para jurar la nueva Constitución: el 7 de julio. Aquel día los vocales fueron conducidos a la Sala de Juntas, en el Palacio del Arzobispado Viejo, por medio de dos compañías de soldados con bayoneta calada. Cerrados en ella y en presencia del nuevo Rey José Napoleón, se les conminó a jurar "obediencia y fidelidad al Rey, a las Leyes y a la

... En lo que se refiere al Consejo de Castilla, aparte del cambio de nombre por el de Consejo Real (en los arts. 32, 44, 54, 74, 85 y 107), hay tan sólo dos muy leves modificaciones en los artículos 104 y 107. En el 104 tras referir que el Consejo haría las funciones de tribunal de reposición, se suprime en el texto definitivo la coletilla "para la España y las Indias"; y en el artículo 107 se sustituye la expresión: "este recurso se introducirá en el Consejo de Castilla", por "este recurso se introducirá en el Consejo Real para España e islas adyacentes; y en las salas de lo civil de las audiencias pretoriales para las Indias. La Audiencia de Filipinas se considerará para este efecto como Audiencia pretorial." ("Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808", págs. 51 y ss., Proyecto de Estatuto Constitucional presentado por Napoleón y variaciones con el Estatuto definitivo). De estas modificaciones, el acta de la sesión del día 27 de junio nos amplía detalles interesantes: "Reflexionaron algunos de los Sres. vocales que el artículo 19, como está extendido, produce el inconveniente de que, siendo el Consejo de Castilla único tribunal de reposición para toda la dominación española, o no había de haber recurso de reposición de las sentencias criminales de los tribunales de Indias, o era imposible que se administrase la justicia como conviene. Por tanto, se puso en votación si convendría limitar el artículo a la España e islas adyacentes, y unánimemente se determinó que convendría declarar que el recurso de reposición de las sentencias criminales de los tribunales de Indias se introduzca en las Audiencias que se llaman pretoriales, y que para el efecto se eleve a la clase de tal a la de Filipinas." (op. cit., pág. 39).

... BAYO, E.K., "Historia de la vida...", págs. 188 y 189.

... Indica Villa-Urrutia que en ese día también fue votada la Constitución (VILLA-URRUTIA, "El Rey José Napoleón", pág. 31).

Constitución""". Después firmaron todos la nueva Constitución""". Los Consejeros de Castilla allí presentes y los demás vocales quedaron sorprendidos -según manifestaron más tarde- por semejante ceremonia, de ningún valor, y por la falta de moral que en todo ello manifestaba el Emperador""".

Más adelante veremos la aceptación que tuvo en España esta Constitución y la reacción del Consejo de Castilla ante la misma. Sólo apuntaremos aquí que al regreso de la Diputación del Consejo de Castilla su conducta fue aprobada y que el Consejo no dio ningún valor a lo ejecutado en aquella Asamblea""". Los informes de estos comisionados sirvieron para enconar aún más los ánimos de los miembros del Consejo de Castilla en contra del nuevo Rey.

Antes de continuar en nuestro relato histórico podemos mencionar algunas notas sobre la ubicación del Consejo de Castilla en la nueva Constitución. El Supremo Tribunal era la única institución relevante del Estado que no tenía un título propio. Perdía buena parte de su importancia y aunque se le reconocían algunas competencias, no parecía quedar muy perfilado su papel dentro del nuevo

""". Estas fueron las palabras literales del juramento.

""". En total hubo 90 firmantes, entre ellos los miembros del Consejo de Castilla Colón, Lardizábal, Torres y Martínez de Villela, en cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar de los firmantes respectivamente. (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22).

""". Así recoge Toreno este juramento: "El 7 de julio reunido el Congreso en el Palacio del Arzobispado Viejo, juró José la Constitución en manos del Arzobispo de Burgos y lo mismo los 91 diputados. de ellos apenas 20 habían sido nombrados por las provincias. Los demás, o eran de aquéllos que habían acompañado al Rey Fernando, o individuos de diversas corporaciones o clases residentes en Madrid y ciudades oprimidas por los soldados franceses. Para que subiera la cuenta obligaron también a españoles transeúntes casualmente en Bayona, a que pusiesen su firma en la nueva Constitución. Pero nunca pudo completarse el número de 150, que era el determinado en la convocatoria. Tras la ceremonia, se trasladó la Junta en cuerpo al Palacio de Marac a cumplimentar a Napoleón" (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 313).

""". Según expresaba Colón de Lardizábal en un informe, nada más llegar los cuatro Consejeros a Madrid, uno de ellos hizo por escrito formal dimisión de su plaza, honores y sueldo, y otros dos la hicieron de los ascensos con que les sorprendió, sin esperarlos, José Napoleón (A.H.N., Estado, legajo 28 A, documento núm. 34/2, "Relación de lo ocurrido en Bayona con la Diputación del Consejo Real.")

entramado institucional. Perdía parte de sus competencias y era sustituido en sus funciones principales por el Consejo de Estado y el sistema ministerial. Parece que la Constitución lo dejaba reducido a un tribunal de reposición y que compartía sus funciones de Supremo Tribunal de Justicia con el Senado y la Alta Corte Real. Incluso la misma planta del Consejo variaba al introducirse las figuras de los dos vicepresidentes y del título de Procurador General'''.

Jurada la Constitución por el Monarca y por todos los diputados y autoridades, José procedió al nombramiento de sus ministros y confirió honores y prebendas a los allí asistentes. Entre otros, el Duque del Infantado fue galardonado con un puesto en Palacio como coronel de Guardias Españolas'''.

Sin embargo, hay otro punto que se ha pasado de largo y que ofrece algún interés. El Conde de Toreno, a la hora de cuestionar el origen del primer proyecto de Constitución de Bayona, indicaba que sus bases más esenciales fueron entregadas al Emperador francés en Berlín después de la Batalla de Jena, que el proyecto primero fue entregado por Napoleón a Azanza antes del principio de las sesiones y que aunque no se sabe quién fue el autor de la misma, parecía adivinarse detrás una mano española'''. Vamos a profundizar en esta cuestión, ya que parece intervinieron de alguna manera varios Consejeros de Castilla en su elaboración.

El 19 de mayo de 1.808 había escrito una carta Napoleón a Murat, en los siguientes términos: "Sondez le Conseil de Castille pour savoir ce qu'on pense du code Napoléon et si l'on pourrait l'introduire en Espagne sans inconvenient'''. El día 24 de mayo recibía Murat del Emperador una copia del proyecto de Constitución, para que fuera revisado por sus embajadores La Forest y Fréville, así como por cuatro o cinco Consejeros de Castilla, de los que

***. Cfr. un ejemplar del Estatuto de Bayona en A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22; cfr. también SANZ CID, C., "La Constitución de Bayona", págs. 417 y ss.

***. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", op. cit., págs. 193 y 194.

***. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, pág. 308.

***. "Correspondencia de Napoleón Primero, publicada por orden del Emperador Napoleón III"; y "Lettres inédites de Napoléon Premier", publicadas por León Lecestre, recogido por LIZAUR Y LACAVE, I., "La Carta otorgada de 1.808", pág. 20; SANZ CID, C., "La Constitución de Bayona", pág. 70; y MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rev de España", pág. 29.

en él ejercieran mayor influencia y autoridad. Al parecer, el día 28 de mayo era devuelto el proyecto al Emperador, tras haber ejecutado fielmente sus instrucciones"".

En realidad, parece que hubo cinco proyectos sucesivos, siendo el quinto y último el que juraron los diputados de Bayona. Sabemos que el primero de ellos tenía 78 artículos y que fue redactado por Napoleón y Maret entre el 16 y el 19 de mayo, y sometido el 28 a la aprobación de varios Consejeros de Castilla; el segundo proyecto, de 67 artículos, fue redactado antes del 8 de junio y fue sometido en Bayona a una comisión formada por tres Consejeros de Castilla y un Consejero de la Inquisición, y sólo fue ligeramente modificado. Los demás proyectos tuvieron ya escasas modificaciones"".

"". Lizaur recoge la opinión del Fiscal de la Sala de Alcaldes don Pablo Arribas, que fue remitido al Emperador por Champagny el día 16 de junio. He aquí lo más interesante: "He hablado esta mañana con don Pablo Arribas, y he aquí el resumen de sus opiniones. S.M. el Rey José debe estar en Madrid lo más pronto posible, su presencia bastaría para calmar la fermentación que allí existe, y que juzga mayor que la que precedió al 2 de mayo. El buen espíritu de la capital se extendería así poco a poco a todas las provincias con la presencia real y, añade, que en España los interregnos han sido siempre tumultuosos. Creo que la Constitución debe comprender solamente disposiciones bastante generales para dar toda clase de reglamentos particulares, cuando las circunstancias lo demanden.

No es tarea que pueda hacerse muy rápidamente, por falta de disposición favorable de los miembros de la Asamblea. Los grandes, sin excepción, son enemigos del nuevo orden de cosas; pero carecen de talento y de cultura, y tienen sobre el pueblo muy poca influencia. Casi todos los eclesiásticos se encuentran en el mismo caso; sin embargo, entre el clero rural, que por regla general es muy pobre en España, se vería sin pena la destrucción de los conventos; pero esta destrucción no debe ser anunciada.

Todas las reformas en el orden eclesiástico deben ser hechas con lentitud; sin embargo, los monjes de las órdenes de San Benito, San Bernardo, San Jerónimo y los Cartujos, los más ricos de España, podrán ser suprimidos completamente apenas se establezca el gobierno.

En cuanto a las reformas de las demás órdenes, y sobre todo de los mendicantes, que viven entre el pueblo y ejercen sobre él una gran influencia, hay que proceder con medios más lentos y graduales.

Es preciso que se hable mucho a los notables de Bayona y que se les haga entender muy claramente, las ventajas públicas y particulares del nuevo sistema y los inconvenientes del antiguo estado de cosas".

"". LIZAUR, I., "La Carta otorgada de 1.808", págs. 20 a 25.

3. Publicación de la Constitución

El 7 de julio se remitió al Consejo un ejemplar de la nueva Constitución y otro de nombramiento de los Secretarios de Despacho^{***}. El Consejo lo remitió a los Fiscales para su preceptivo informe el día 12. Al día siguiente, día 13 de julio, fue recibida nueva Orden en el Consejo mandándose al Supremo Tribunal la inmediata impresión, publicación y circulación de la nueva Constitución.

La actitud del Consejo tomó un cierto carácter de oposición. Hasta tal punto que Belliard recomendaba a Grouchy que no perdiera de vista a los magistrados^{***}. Así lo recogía Desdevises^{***}: "Il paraît que la Conseil de Castille s'agite et se remue beaucoup; je te prie de faire surveiller tous les membres en particulier avec beaucoup de soin et nommément ceux que tu connais comme moi. On dit qu'il en est trois ou quatre qui veulent passer aux insurgés. C'est qu'il faut bien éviter." Como señalaba Desdevises, Savary anunció a Bethier que el Consejo había rechazado la Constitución.

Hasta el 22 de julio no presentaron los Fiscales su informe. Este magnífico documento, al parecer redactado por el Fiscal don Jerónimo Díez, exponía con gran

^{***}. Este ejemplar se encuentra en el A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22. De su estudio podemos deducir los siguientes puntos: el Consejo Real era mencionado en los artículos 5, 32, 44, 54, 74, 85, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 110 y 112.

^{***}. Apunta Claude Martin que se mandó vigilar el domicilio de los magistrados para impedirles la huida, pues corrían rumores de que ésta era su intención (MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 177).

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT. G., "Le Conseil de Castille en 1.808", págs. 222 y 223, citando el Archivo de la Guerra en París, Corresp. 1.808, Ejército de España, 17 de julio de 1.808.

claridad los motivos por los que no procedía la publicación de la Constitución. El dictamen fue adoptado en lo sustancial por el propio Consejo en su consulta a la Junta. Por aquellos días fueron llamados los Fiscales a la Secretaría de Gracia y Justicia a exponer su criterio, ante los Sres. Piñuela y O'Farril. Al parecer, Piñuela pidió a los Fiscales por medio de un papel confidencial que no acelerasen el despacho de este expediente.

Parece ser sin embargo que el Consejo de Castilla conocía este informe desde el 21 de julio. Afirmaba Desdevises que por Savary sabemos que don Arias Mon fue a Palacio el 21 de julio a despachar y que en el despacho real de aquel día se hablaba de las objeciones de los Fiscales del Consejo a la publicación de la Constitución***.

Suscintamente, los Fiscales objetaban en primer lugar que la Nación no había sido oída para el cambio de dinastía que establecía la nueva Constitución; en segundo lugar, la legitimidad y representatividad de la Asamblea de Bayona era absolutamente dudosa para tomar tales medidas; en tercer lugar, la validez de las abdicaciones obtenidas en Bayona. Los Fiscales proponían suspender su inútil publicación -entre otros motivos, no sería obedecida- y convocar Cortes legalmente para el estudio de la cuestión***. Finalmente comentaban otros aspectos erróneos de la Constitución que no procedían en aquel momento: la parte relativa al gobierno de las Américas; al orden judicial; la alianza perpetua con Francia allí pregonada; la religión; la concesión del derecho de vecindad, etc. Antes de concluir afirmaban lo siguiente:

"Pero a la verdad, la España no necesita de nueva Constitución. Con la que rige actualmente ha prosperado en los reinados precedentes, ha sido rica y se ha merecido la estimación y respeto de otras potencias. De lo que únicamente necesitaba era de cabeza que gobernase libre de toda pasión y miras ambiciosas, que mandase la ley, no el hombre

***. PEREZ BUA, M., "Publicación y juramento de la Carta Otorgada de Bayona por el Consejo de Castilla", pág. 3.

***. No parece por tanto cierta la tesis que proponía F. Fontes cuando afirmaba: "En Bayona, bien que mal, hasta la desbandada del día 12, los consejeros, en particular Ceballos, Infantado y Ayerbe, habían mantenido el principio de que el Rey no podía disponer del Reino pues estaba vinculado con él a través de ese pacto entre el Monarca y las Cortes concebidas como órgano de representación estatal. En Madrid no vamos a escuchar nada parecido en el Consejo de Castilla, sino tan sólo excusas y pretextos con que se trata de eludir la grave responsabilidad de los órganos." (FONTEs, F., op. cit., pág. 28).

arbitrariamente, que se observasen religiosamente y se hiciesen observar las leyes, usos y costumbres, en que está bien cimentada su felicidad, haciendo alguna leve reforma, sin resolver ni trastornar todo el orden con novedades como las que contiene la nueva Constitución, que aunque fuesen útiles y necesarias, su multitud y gravedad es perniciosa en el día..."

El mismo 21 de julio, don Sebastián Piñuela se dirigía al Decano del Consejo volviendo a ordenar la publicación de la Constitución. Le transmitió la siguiente Real Orden, que había sido escrita de puño y letra por el mismo José:"

"Las observaciones que el Consejo, sus individuos o Fiscales crean conveniente hacer sobre las mejoras de la Constitución, corresponden a la época en que se celebren las primeras Cortes; y los magistrados tendrán entonces el mismo voto que los demás ciudadanos. Por ahora sólo se trata de que se publique este acto, que por su naturaleza jamás estuvo sujeto a las observaciones del Consejo. Ocho días ha que se dio orden al Consejo para que la publicase y circulase, y aún no lo ha verificado. Entre tanto no acaban de sosegar los ánimos, y los buenos españoles esperan con ansia este punto de reunión contra la anarquía que siembran los enemigos de la Nación. Toda dilación ulterior de un acto tan sencillo y tan importante, no puede menos de mirarse y castigar como una desobediencia positiva y un sistema sedicioso. Además de esto me manda S.M. decir al Consejo por última vez, y sin perjuicio de admitir después sus observaciones para apreciarlas en su tiempo y lugar, que es su Real voluntad que mañana en el día acuerde el Consejo la publicación y circulación de la Real Cédula, y que en el mismo le dé V.S.I. cuenta de haberlo hecho así, remitiendo en caso contrario los votos individuales de sus Ministros."

En su representación del día siguiente, el Consejo empezaba con sentimientos de queja: "Le ha llenado

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22.

***. En un escrito enviado al Consejo de Castilla el 29 de agosto de 1.808, don Sebastián Piñuela manifestaba que en aquellos días bajo el Gobierno intruso se le daban minutas las notas y no bastaba su resistencias para dejar de firmas estas notas, pues le obligaban a ello al pertenecer al Ministerio de su cargo (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 11).

***. Manifiesto del Consejo, A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27; folios 77 y 78.

del más justo sentimiento el ver que a pesar de la notoria bondad de su Real corazón, haya encontrado motivos para notarle con los epítetos de inobediente, bullicioso y rebelde, añadiendo la amenaza de que así se le castigaría"***. Continuaba el Consejo justificando su conducta, pues había observado en el despacho de este expediente los trámites que en cualquier otro de igual naturaleza. Por otro lado, el Consejo prevenía de los males de publicar esta Constitución y reiteraba sus consultas sobre las abdicaciones de Bayona. Antes de concluir, el dictamen decía lo siguiente:

"Por último, no puede dejar de hacer presente que, según el estado del Reino, la circulación de la Constitución apenas se verificará en una décima parte de él, que comprometerá a las justicias y magistrados para que sufran el furor del pueblo, que, por otra parte, las provincias juzgan que el Consejo no tiene libertad en lo que hace por estar oprimido, no faltando alguna de ellas que así lo ha dicho y, que por tanto, no le obedece. Y finalmente que siempre es un desaire a la autoridad mandar una cosa que probablemente no ha de ser por ahora obedecida. Dar tiempo al tiempo y contemporizar, mandar poco y observar mucho, sería ésta la máxima más sana en tan crítica situación de cosas..."**.

Al parecer, el original francés contenía aún unas expresiones más duras, que fueron transmitidas por Piñuela a Mon en confidencia. Por otro lado, varios Ministros del Consejo eran partidarios de que se guardase, cumpliese y ejecutase cuanto S.M. mandaba. Concretamente fueron don José Marquina y don Francisco Javier Durán***.

Como señalaba Desdevises, el Consejo de Castilla permanecía como la oposición legal al nuevo Rey. Y lo hizo con una inteligencia, ánimo y constancia digna de los más grandes elogios***.

***. Consulta del Consejo de 22 de julio de 1.808, en PEREZ BUA, M., "Publicación y Juramento de la Carta Otorgada de Bayona por el Consejo de Castilla", págs. 41 y 42; y en A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22.

***. PEREZ BUA, op. cit., págs. 44 y 45. Por otro lado, no olvidemos que la Constitución de Bayona dejaba al Consejo de Castilla en una segunda fila. Nada podía herir más a este Tribunal: en todo caso, difícilmente podía ser favorable un dictamen del Consejo sobre esta Constitución.

***. Hubo también Ministros del Consejo que afirmaron tener votos particulares a esta Consulta, pero no los redactaron entonces y no los presentaron.

***. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 229.

Martin ha analizado la actitud del Consejo y del gobierno del Intruso. Para éste era importante que fuera realizada esta impresión por el Consejo de Castilla: no debía parecer que el nuevo Rey retrocedía ante el Consejo. Por ello mismo antes de tomar cualquier otra medida de fuerza se esperó a la llegada a Madrid del propio José, para que la orden tuviera más fuerza⁻⁻⁻.

Tras nuevas órdenes y amenazas⁻⁻⁻, el Consejo decidió ceder y decretó la impresión, publicación y circulación del ejemplar de la Constitución de Bayona, que tuvo lugar el 25 de julio⁻⁻⁻. Ya la noche del 22 José pudo comunicar a su hermano que los Consejeros de Castilla "habían cumplido con su deber"⁻⁻⁻. Sin duda esta publicación deterioró aún más en las provincias la imagen del Consejo de Castilla⁻⁻⁻. Trascendió también, sin embargo, la oposición

⁻⁻⁻. MARTIN, C., "José Napoleón I", págs. 176 y 177. "José reunió a su Consejo. Los Ministros que, naturalmente, juraron como se les exigía, estaban divididos. O'Farril y Mazarredo formulaban reservas sobre el carácter representativo de la Junta de Bayona y habían propuesto la víspera al Rey que convocara en Madrid una asamblea que comprendiese a los grandes, a los títulos de Castilla y a los diputados de Bayona que formaban parte de las antiguas Cortes a fin de proclamar la Constitución."

⁻⁻⁻. Savary llegó a creer que el Consejo iba a abandonar Madrid, tras las duras expresiones de la mencionada Real Orden (DESDEVISES, G., op. cit., pág. 233).

⁻⁻⁻. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 22. Asistieron aquel día al Consejo pleno 22 Consejeros, a las diez de la mañana y sin traje de ceremonia. Un ejemplar de esta impresión se encuentra en A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 4.491: Constitución que había de regir en España e Indias, aceptada por la Junta Española en Bayona (Circular de 26 de julio). Apuntaba Sebastián Piñuela en una exposición al Consejo de fecha 29 de agosto, que él también se opuso a circular la Constitución y no lo hizo, pese a "habérsele mandado por tres veces, dejando en mi Secretaría los tres mil ejemplares que se hicieron imprimir a cierto impresor francés" (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 expte. núm. 11).

⁻⁻⁻. MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 177.

⁻⁻⁻. A la recepción del Estatuto, la Junta de Teruel acuerda "que el Consejo de Castilla por ahora no exista", por haber remitido esta nueva Constitución "los españoles que formados en Cuerpo tuvieron en otro tiempo la honra de llamarse Consejo de Castilla" (GASCON, "La provincia de Teruel en la Guerra de la Independencia", págs. 39 y 40).

de este Consejo a la publicación de la Constitución⁻⁻⁻ y al hecho de prestar el juramento mandado. El Diario de Granada, en su ejemplar del día 27 de julio daba al público la siguiente información:

"Igualmente se da como positivo que el Consejo de Castilla se ha negado abiertamente a reconocerlo (a José I) y a admitir la constitución fraguada en la farsa de Cortes representada en Bayona."⁻⁻⁻

He aquí también, a título de ejemplo, unas coplas populares de por entonces recogidas por Cambronero⁻⁻⁻:

El Consejo de Castilla
palladium de la nación
a esta gran carta no quiso
nunca dar su aprobación.
¡Al jaleo, jaleo, muchachos!
dijo Pepe a sus ministros:
hágase lo que yo quiero;
los demás no tocan pito.
¡Ay, ay! ordena y dispone
a pesar de este Consejo.
¡Ay, ay! lo impriman, publiquen
y circulen al momento
¡Ay, ay!

El Consejo de Castilla había publicado la Constitución de Bayona, pero no la había jurado ni había reconocido formalmente al nuevo Monarca. Este ejemplo debió ayudar a muchos a resistirse también a reconocer al ya conocido como el Rey intruso⁻⁻⁻.

⁻⁻⁻. Muchas obras de la época mencionan este particular. Podemos citar, por ejemplo, la ya mencionada de José Clemente Carnicero, "Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de España", editada en Burgos en 1.814 (tomo I, pág. 158).

⁻⁻⁻. Hemeroteca Municipal de Madrid, Diario de Granada, miércoles 27 de julio de 1.808.

⁻⁻⁻. CAMBRONERO, C., "El Rey Intruso", pág. 39.

⁻⁻⁻. Otras autoridades y clases del Estado se negaban también a reconocer al nuevo Monarca. El Ministro de Marina Mazarredo señalaría que muchos jefes a sus órdenes se negaban a jurar fidelidad a José. (MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 177).

4. Juramento de la Constitución y del nuevo Rey por el Consejo de Castilla

El 12 de julio José Napoleón había dado un Decreto en Vitoria mandando que el Consejo de Castilla con su Decano prestasen juramento a la Constitución de Bayona, según lo establecido en esta Constitución¹³. El día 17 el Consejo pleno extraordinario estudió este asunto. Conociendo la resistencia general de las provincias y los riesgos que implicaba tal juramento, decidió dejar pasar el tiempo. Nuevamente el día 22 fue recordado al Consejo este Decreto y se le mandó jurar al día siguiente: el Consejo debía remitir a la Secretaría de Estado un certificado declarando haber jurado todos sus miembros.

Inmediatamente esta orden fue pasada a los Fiscales del Consejo, quienes dictaminaron que el juramento prestado por José no era legal, pues no había sido hecho conforme a lo establecido por la propia nueva Constitución; aparte de ello, el Consejo ni ningún Tribunal habían jurado antes en cuerpo, sino cada individuo al acceder a un cargo; por otro lado, como todos los cargos del Estado habían jurado ya una vez fidelidad de vasallos, parecía al Consejo vano jurar ahora esta nueva Constitución. Seguidamente los Fiscales añadían:

"En el actual estado del Reino conviene en buena razón y política mandar poco o nada, y no hacer ninguna novedad. Cualquiera cosa de éstas enciende más el fuego que devora las provincias, como se ha notado. Y dificulta más la pacificación, que es tanto de desear que se verifique prontamente y nada pierde el

¹³. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 23. He aquí un fragmento de este Decreto: "...es mi voluntad que el Consejo Real, con su Decano, preste el juramento que señala la propia Constitución para los vasallos, y que remita al Ministro Secretario de Estado un testimonio firmado por todos los individuos para que lo conserve en su Ministerio Secretaría..." También ordenaba que circulase una orden a todos los tribunales de provincias, corregidores y otras autoridades.

gobierno por aflojar algún tanto, suspendiendo el ejercicio de su poder, mientras que los ánimos perseveren exaltados..." 22 julio 1.808"".

Tras el dictamen de los Fiscales, el Consejo pleno del día 23 decidió hacer dos consultas a S.M. sobre este juramento y sobre la publicación de la Constitución -ésta ya la hemos visto anteriormente-. Ese mismo día se recibía en el Consejo nueva Real Orden de S.M. reiterando la orden de jurar en estos términos:

"No habiéndome V.I. remitido aún la certificación del juramento de la Constitución que por Real Orden de ayer se mandó hacer al Consejo con la calidad de que se remitiese hoy en todo el día para ponerlo en noticia del Rey, ha resuelto S.M. que si V.I. no me remite dicha certificación antes de las 12 del día de mañana, no será el Consejo admitido al acto de la felicitación señalado para dicha hora."

El Decano, en oficio de 23 de julio, contestaba lo siguiente: "Esta demostración sería muy sensible para el Consejo y para mí y por lo mismo ruego a V.S. que haciendo presente al Rey mi aviso del Consejo de este día me diga si se dignará oír al Tribunal y concederle el tiempo que necesita para evacuar y poner en sus Reales manos la reverente consulta que tiene acordada, comunicándome las órdenes que fueren de su soberano agrado..."

José I recibió simultáneamente los dos papeles del Consejo: la decisión de hacer una consulta al Monarca y el oficio del Decano. A éstos el mismo día 23 contestaba Piñuela que era decisión de S.M. no admitir al Consejo para que le felicitase "hasta que haya presentado el referido juramento, como ya lo han hecho el Consejo de Estado, el de Indias, los Jefes de Palacio y otros empleados."

El 24 de julio por la mañana el Consejo reiteraba mediante oficio sus deseos de presentar al Monarca la consulta preparada. A este oficio, el mismo día 24 el Rey resolvía puevamente no admitir al Consejo a dicho acto mientras no prestase el juramento a la Constitución.

El 25 de julio era el día previsto para la proclamación del nuevo Rey. Reunida aquella mañana el Consejo de Castilla, se decidió no acudir a Palacio. He aquí

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 num. 22.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 23.

el relato de lo ocurrido aquel día:

"Luego que S.I. el Sr. Decano recibió la antecedente Real Orden y la hizo presente al Consejo estando aún formado este Supremo Tribunal, se acordó su separación; se despidió a la Sala de Alcaldes que estaba esperando y se pasó recado por medio de un portero a los demás Consejos diciendo que este Supremo Tribunal no iba a Palacio. Pero cuando iba S.I. a tomar el coche se le presentó una persona desconocida y le dijo que S.M. aguardaba al Consejo. Con este motivo dispuso S.I. se esperasen los Sres. Ministros que aún no se habían marchado; y me mandó pasar a Palacio a estar con el Sr. don Sebastián Piñuela, y le manifestase esta ocurrencia, a fin de saber si era o no cierto el recado, y que esto sería una equivocación, pues sin duda era el dirigido al Consejo de Indias, que había prestado el juramento y debía estar al tenor de la última Real Orden."""

A la mañana siguiente, el 26 de julio, José I recibió las dos consultas del Consejo de Castilla, de fecha 24. El Rey las entregó a Azanza para que como Ministro de Justicia le expusiese su dictamen sobre su contenido. Fue a ejecutarlo Pinilla y habiéndole preguntado si los Ministros del Consejo habían hecho ya el juramento por escrito, le respondió que no. El Rey no quiso escuchar más ni permitió siguiesen adelante las consultas. Mandó también el Rey reiterar al Consejo que cumplierse los Reales Decretos y Ordenes anteriores, y que si no había unanimidad en esta postura del Consejo, los Consejeros que desearan jurar lo pusiesen por escrito individualmente.

Ese mismo día hubo nuevo pleno extraordinario del Consejo. Acudieron dieciocho Ministros. Visto el gran número de ausentes, se les volvió a convocar para el día siguiente, 27 de julio, a las ocho de la mañana. A los que habían faltado se les mandó llamar para que acudieran "sin excusa alguna, exceptuando la grave indisposición".

El 27 se recibió en el Consejo un nuevo decreto del Rey, comunicado por Azanza:

"El Rey quiere que V.I. me diga inmediatamente si el Consejo ha dado cumplimiento a los Reales Decretos y Ordenes que se le han comunicado para prestar el juramento que previene la Constitución y particularmente a la que con fecha de ayer comuniqué a V.I.,

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 23.

preveniéndole que los Ministros que prestasen juramento lo pusiesen por escrito y me lo remitiesen para dar cuenta a S.M. 27 de julio."'''

A la reunión del Consejo pleno extraordinario del día 27 faltaron bastantes de sus Ministros. Tras la reunión, el Decano volvió a pedir al Monarca que las súplicas del Consejo de Castilla fuesen atendidas. También informaba que dos Ministros del Consejo desde el principio estaban dispuestos a prestar el juramento y se les dijo que lo hicieran por escrito según lo mandado'''.

Ese mismo día se recibía en el Consejo nueva Real Orden de S.M., en la que tras manifestar que el Rey había atendido las súplicas del Consejo y leído sus dos consultas, afirmaba que "...sin embargo de todo cuanto se expone en dichas consultas por el Consejo, debe éste prestar su juramento y me manda decírselo así por medio de V.I. por última vez, para que se ejecute, avisándomelo al instante de que se haga en el concepto de que deberá V.I. convocar al Consejo extraordinariamente para ganar tiempo".

De acuerdo con esta nueva Real Orden, el Decano convocó a los Ministros del Consejo para el día siguiente, 28 de julio, a las ocho en punto de la mañana. Acudieron aquella mañana diecisiete Ministros. Uno de ellos, Álvarez de Contreras, se adhirió a Durán y Marquina''' y manifestó sus deseos de jurar por escrito. También se recibió una nota de don Bernardo Riega, indispuesto, en la que votaba pedir a S.M. que diera curso a la consulta del Consejo. En el mismo sentido se recibió una nota de don Nicolás María de Sierra'''. Parece ser que por entonces ya tenía el Consejo noticias fidedignas de la apurada situación

'''. Acompañaba a esta Real Orden una nota del Ministro de Justicia Azanza de su puño y letra: "Estoy aguardando la respuesta de V.S.I. para dar cuenta de ella a S.M."

'''. Estos Ministros eran don Francisco Javier Durán y don José Marquina Galindo. Entre los que se opusieron en la reunión a jurar se encontraban Colón y Lardizábal, mientras que Martínez de Villela y Torres decidieron no acudir a la reunión del Consejo pleno. Sin duda estos comisionados habían informado con detalle al Consejo pleno de lo acontecido en Bayona.

'''. Durán y Marquina acompañarían más tarde a José I en la retirada a Vitoria. (ARTOLA, M., "Los afrancesados", pág. 135).

'''. Decía así Sierra: "Debo hacer presente a V. Ilma. que mi dictamen es el que he manifestado repetidas veces de palabra y por escrito; en él me afirmo, por no permitirme otra cosa ni la religiosidad de mi oficio, ni la de mi conciencia."

de los franceses en Andalucía. De esta manera, acordó el Consejo remitir al Rey una nueva consulta. He aquí un extracto:

"...Tampoco puede esconderse a la perspicacia de V.M. que el Consejo tiene un interés directo en condescender con su Real voluntad, pendiente de ella la continuación en sus destinos, su propia subsistencia, la de su familia; en fin, su existencia..."

El nuevo Monarca se encontraba profundamente irritado con la resistencia que encontró en el Supremo Tribunal del Reino. Llegó a pensar en exiliar al Consejo entero a Bayona^{***}, pero nuevos acontecimientos imprevistos obligaron a José a distraer su atención. Se empezaba a preparar la retirada francesa, tras las alarmantes noticias que llegaban de Andalucía.

Sin duda, la conducta del Consejo por aquel entonces fue ejemplar. Se opuso con firmeza al nuevo Monarca y se negó a acatarle como Rey^{***}, al igual que no aceptó la Constitución de Bayona. No es menos cierto que el Consejo de Castilla conocía ya la situación de sublevación general en España y también la gran victoria española sobre las tropas francesas en Bailén. Recobrada la moral, supo oponerse el Consejo a José, no acudiendo tampoco a cumplimentar al Monarca^{***}. Sin duda fue su conducta un ejemplo para los

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 23.

^{***}. Cevallos en sus Memorias afirma que se opuso con firmeza a José cuando pensó en desterrar al Consejo a Bayona por su resistencia (op. cit., pág. 170). Esta idea del exilio forzoso también se expresaba en el Manifiesto del Consejo de agosto. Popularmente también trascendió la oposición del Consejo a jurar y la posibilidad de confinar a los miembros del Consejo de Castilla en Francia. Así lo expresaba en 1814 José Clemente Carnicero (op. cit., tomo I, págs. 157 y 158): "Ufanos con la entrada y proclamación principiaron como buenos fariseos a exigir a todos los cuerpos el juramento de fidelidad. Los más se resistieron a prestarlo, pero singularmente el Consejo de Castilla, que por esto tenían determinado llevarlo prisionero a Francia."

^{***}. Curiosamente muchos autores afirman que el Consejo de Castilla juró finalmente a José Bonaparte. Podemos citar, a título de ejemplo, a MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 53; o a JURETSCHKE, H., "Los afrancesados en la Guerra de la Independencia", págs. 39, 78 y 79.

^{***}. Señala Oman en "A History of the Peninsular War" (citado por Fontes, F., "El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII"), que la victoria de Bailén influyó muy

demás Consejos"" y autoridades de la Nación que habían prestado ese juramento"". Su resistencia fue conocida más

seriamente en la actitud que entonces adoptó el Consejo. Dice textualmente: "podemos suponer que de no haber sido por Bailén, el Consejo se hubiese resuelto tragar la píldora..." En realidad, las buenas noticias que llegaron de Andalucía, así como las noticias que venían de los levantamientos en toda la Península, ayudaron sin duda al Consejo a mantenerse fuerte frente al invasor.

---. "Los principales órganos del Estado, como el Consejo de Castilla, intentaron ganar tiempo aplazando con nuevos pretextos la prestación del juramento exigido por José. Pero la noticia de la batalla de Bailén y de su feliz desenlace para España llegó demasiado tarde, y en las últimas semanas de julio prestaron el juramento de fidelidad la mayor parte de las autoridades" (JURETSCHKE, H., "Los afrancesados en la Guerra de la Independencia", pág. 33). Tras el estudio detenido de la conducta del Consejo de Castilla ante estos juramentos, parece claro que carece de sentido la tesis de Fontes que defiende el heroico comportamiento del Consejo de Estado en aquellos momentos, frente a la conducta débil y evasiva manifestada por el Consejo de Castilla. Afirma Fontes lo siguiente: "Al hilo de ambos textos (el contenido en la nota del Secretario del Consejo de Estado, Pizarro, redactada junto al acta de la sesión y el que años más tarde nos dejaría en el texto de las Memorias del propio Pizarro), puede asegurarse que la actitud del Consejo difirió sustancialmente de la Junta y Consejo de Castilla, aun cuando llegara a prestarse el juramento." (FONTES, F, tesis doctoral "El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII", pág. 20).

---. Señalaba León y Pizarro en sus "Memorias" (págs. 108 y 109) que el Consejo de Estado se presentó a jurar desde el día antes de llegar José. Juró en la capilla de Palacio con la mayor solemnidad y los demás cuerpos políticos en varias iglesias. Como ya hemos visto, todos los demás Consejos prestaron también su juramento al nuevo Monarca e igualmente hicieron otras autoridades como el Corregidor y Ayuntamiento de Madrid. Sólo parece que se negaron a prestar este juramento el Consejo de Castilla y la Sala de Alcaldes (Toreno, t.I, pág. 386). Lo que fue especialmente meritorio, de acuerdo con lo que apuntaban Azanza y O'Farril en su "Memoria justificativa" (pág. 310): hasta los miembros de la comitiva de Fernando VII en Valençay prestaron juramento a la Constitución y al nuevo Rey. Como afirmaba también Fayard (op. cit., págs. 10 y 11), su resistencia a jurar impidió que el Rey intruso exigiera juramento de fidelidad a otros funcionarios, lo que sin duda les hubiera planteado problemas al regreso del Rey Fernando VII.

tarde y elogiada por una buena parte de los españoles".

Lo que parece evidente a estas alturas es que no es cierta la afirmación de Artola^{***} de que el Consejo de Castilla se plegó a dar forma legal a la voluntad de los franceses y de la Junta de Gobierno^{***}. Tampoco es cierta la afirmación de María Isabel Cabrera^{***} de que el Consejo de Castilla intentó a toda costa no perder el poder que hasta entonces había tenido y que era discutido por las nuevas instituciones revolucionarias. Nos parece por el contrario,

^{***}. señalaba por su parte el Conde de Toreno cómo no gustó entonces al público la conducta aparentemente ambigua del Consejo de Castilla. De un lado imprimía y publicaba los decretos a su nombre, y por otro suprimía la fórmula de que éstos se guardasen y cumpliesen. "Porque al paso que doblaban la cerviz al usurpador, buscaban con sutilezas e impropios ardidés un descargo a la severa responsabilidad que sobre ellos pesaba: proceder que los malquistó con todos los partidos." En esta línea se presentaba también la crítica de León y Pizarro, referida a todas las autoridades españolas: tras el 2 de mayo, "el gobierno se entregó como siempre, sin experiencia política, y no llamaron a los que algo podían decir; así es que en vez de disolverse los cuerpos políticos y disiparse al acercarse el Rey con el Ejército, de modo que Madrid fuese un lugar, como se hizo en la guerra de sucesión; en vez de avisar a los hombres visibles y hábiles del plan nacional, se ocuparon en retruécanos escolásticos con Murat y luego con José; ocultaban sus opiniones y estragaban las del público con esto, siendo cómplices del extravío voluntario de muchos." (G. DE LEON Y PIZARRO, J., "Memorias", pág. 108).

^{***}. ARTOLA, M., "Los orígenes...", vol. I, pág. 133.

^{***}. A lo largo de los tres capítulos hasta ahora estudiados hemos comprobado varias manifestaciones de la oposición directa o indirecta del Consejo de Castilla a los planes de Napoleón. Más adelante iremos viendo otras resistencias de este Supremo Tribunal. Por ello no es correcta la siguiente afirmación de Fontes: "La primera muestra pública de desafección al nuevo régimen por un alto órgano de gobierno de la Monarquía iba a ser la del propio Consejo (de Estado). En efecto, apenas liberado Madrid de las tropas francesas que se replegaron tras la batalla de Bailén, (...) a los cinco días de la liberación del poder intruso, el Consejo (de Estado) sería convocado para el día 11 de agosto, a petición de la mayor parte de los Consejeros, quienes consideraban necesario un pronunciamiento formal del Consejo de Estado sobre la invalidez de las abdicaciones y la consecuente ineficacia legal de los actos de gobierno de José I".

^{***}. CARRERA BOSCH, M.I., "Consejo Real de Castilla, legislación y revolución liberal 1.808-1.834", pág. 127.

que el Consejo de Castilla supo sobreponerse ejemplarmente de las fuertes presiones francesas y ejerció dignamente su papel en unas circunstancias muy difíciles. Por ello mismo estamos plenamente de acuerdo con lo afirmado en una obra publicada en Londres en el mismo reinado de Fernando VII (año 1.829), escrita por don José Canga-Argüelles y en la que se aboga por el Consejo con afirmaciones como las siguientes: "...su descrédito fue más bien un producto inevitable del rigor de los compromisos en que se vio aquel Supremo Tribunal (...), (...) que con pasos mañosos, con representaciones, con respuestas capciosas y con artificios, procuraba cansar la constancia de Napoleón..."^{***}. El Consejo de Castilla debió luchar en aquellos días contra las autoridades francesas y sus presiones de todo género; contra las propias autoridades españolas afrancesadas, que apoyaban la nueva dinastía; y bajo la impaciencia e incomprensión de sus propios compatriotas, que movidos por el apasionamiento no comprendían la política del Consejo y deseaban un enfrentamiento frontal con los franceses.

^{***}. CANGA-ARGÜELLES, J., "Observaciones sobre la historia de la guerra de España que escribieron los señores Clarke, Southey, Londonderry y Napier", págs. 134 y 197, citado por PEREZ BUA, M., op. cit., pág. 27.

5. Negativa de la Sala de Alcaldes a prestar juramento.

También fue ejemplar la resistencia de la Sala de Alcaldes a jurar la Constitución de Bayona^{***}. Junto con el Consejo de Castilla, como ya hemos visto, fueron una de las pocas altas instituciones de la Corte que se negaron a prestar este juramento^{***}.

Cuando el 22 de julio se recordó al Consejo de Castilla la orden de jurar la nueva Constitución, también debió mandarse a la Sala de Alcaldes. Al día siguiente se ordenaba a la Sala que remitiese un testimonio firmado por todos sus miembros a la Secretaría de Estado. Debían reunirse los Alcaldes esa misma noche para jurar la Constitución y el certificado del juramento debía haber sido enviado antes de las 12 horas del día siguiente. Igualmente se prevenía que "en el concepto de no hacerlo, no será la Sala de Alcaldes admitida mañana a dicha hora con el Consejo de Castilla a cumplimentar a S.M." Si hubiera algún verdaderamente ministro enfermo debería jurar por separado y certificarlo por escrito.

Aquella noche estuvo reunida la Sala de Alcaldes desde las 9 de la noche en la casa del Gobernador de la Sala. La reunión duró hasta las 12 y media. "Enterados los Sres. de ella y con atención a que por el Consejo de Castilla nada se ha dicho a la Sala en particular, ya que ésta de Corte está reputada por una Quinta Sala del Consejo, se acordó nombrar una comisión compuesta de los Sres. Don

^{***}. "La Quinta Cámara del Consejo de Castilla (Sala de Alcaldes) manifestó con orgullo que el cuerpo en su totalidad se había resistido a la presión de prestar juramento" (JURETSCHKE, H., "Los afrancesados en la Guerra de la Independencia", pág. 39).

^{***}. Según Juretschke, hubo otros órganos superiores de la Administración central que no juraron. Así, el Consejo de Marina reconocía en su Junta Suprema de Gobierno del día 25 de septiembre "no haber incurrido (en el juramento)" (JURETSCHKE, H., "Los afrancesados en la Guerra de la Independencia", pág. 40).

Manuel Pérez de Rozas y Don Martín de Leones a preguntar al Decano del Consejo si este Supremo Tribunal había jurado ya a la Constitución nueva del Reino y habiéndolo hecho dichos Sres. en acto seguido y dada la contestación de que el Consejo se disponía a representar en el día siguiente a S.M.""". Como la Sala debía acudir a Palacio al día siguiente a cumplimentar a S.M., se decidió esperar a que el Consejo decidiera.

Al día siguiente, 25 de julio, al no tener la Sala noticia a las 11 y media que el Consejo de Castilla hubiese jurado ya, decidió enviar a S.M. una representación que había sido acordada:

"...Cuando V.M. quiera que la Sala preste juramento con separación del Consejo de Castilla al que se halla unida y reputada como una quinta Sala de aquel Tribunal. La ilustración que desde luego se muestra en los primeros pasos del gobierno sabio de V.M., condenaría la precipitación de unos magistrados que juraran sin haber leído al menos la Constitución. Esto no se ha pasado anteriormente a la Sala como a los demás Tribunales, acaso porque teniéndola por la quinta del Consejo de Castilla, no se haya creído necesario.

De todos modos, Señor, pronta y dispuesta la Sala de Corte a prestar el juramento en unión del Consejo de Castilla no duda será del agrado de V.M. y que lo graduará como una prueba del deseo de acierto que debe caracterizar a sus Magistrados..."". La Sala continuaba alegando que sus Ministros no tuvieron tiempo de leer la Constitución y que siendo una quinta Sala del Consejo de Castilla, debía jurar con él.

Evidentemente la Sala de Alcaldes mantenía un estrecho contacto con el Consejo de Castilla. No en vano, su Gobernador era Ministro de aquel Alto Tribunal. Los mismos motivos que fueron expuestos en el Consejo serían los que la Sala acogería para no prestar el juramento prescrito. La excusa que expone el Consejo es ciertamente ingenua: que la Sala no podía actuar si no era con el Consejo. De hecho, recibida esta representación por José, reiteró éste inmediatamente la orden de que prestase juramento con arreglo a los Reales Decretos y Orden comunicados, "prescindiendo de si forma o no quinta Sala del Consejo de Castilla, pues que expresamente se le ha mandado como Sala de Alcaldes..."

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, folios 893 y ss., año 1.808.

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, folios 893 y ss., año 1.808.

"" A.H.N., Libro 1.399 de Gobierno de la Sala de Alcaldes, fol. 938.

Esta nueva Orden fue pasada al día siguiente a todos los Alcaldes. De ellos, don Luis Marcelino Pereyra" y el Fiscal don Pablo Arribas manifestaron que ya habían jurado la Constitución anteriormente y que estaban dispuestos a jurarla en ese mismo acto. También manifestó estar dispuesto a ello el Alcalde don Mariano Alonso.

Dos días después, el 27 de julio, por nueva Real Orden el monarca preguntaba si la Sala había obedecido a los Reales Decretos y Ordenes comunicados. El Gobernador de la Sala contestó inmediatamente que la Sala iba a reunirse ese mismo día para ello por la mañana, pero que habiendo sido citado el Gobernador por el Consejo y no pudiendo entonces asistir, se había "pospuesto a esa tarde o a la mañana siguiente a más tardar"". El día 28 se comunicó al Rey que dos Alcaldes y un Fiscal estaban dispuestos a jurar y ya lo habían hecho, pero los demás no. Y se envió una importante representación exponiendo los motivos para no hacerlo"". Tras expresar que los días 25, 26 y 27 de julio había procedido la Sala a la lectura y meditación del Real Decreto por el que se pedía a aquélla prestar juramento, había deliberado en la mañana del 28 lo siguiente:

"La Sala considera substancialmente fundada en principios de equidad la nueva Constitución, pero comprende que sin explicarse en algunos artículos, sin añadirse otros y sin reformarse algunos, su publicación en las actuales circunstancias en que se encuentra el Reino ha de producir consecuencias contrarias a la tranquilidad y orden, que son móvil principal de S.M. para su establecimiento. Esto es el juicio que unánimemente han formado los ministros que exponen, los cuales tanto por el conocimiento práctico que tienen de la opinión del territorio de su actual jurisdicción como por el que han adquirido de las provincias en donde anteriormente han servido, no pueden menos de representar a V.M. su concepto y opinión conforme, sobre un punto tan grave.

La Sala, Señor, no trata de revestirse de otra representación que la que tiene por las leyes, y cree que es al Consejo a quien corresponde exponer a V. M. los inconvenientes particulares que justifican aquel concepto; por tanto, se abstiene aún de indicar los fundamentos de su

"". Recordemos que este Alcalde de Corte había acudido a la Junta de Bayona en representación de la Sala de Alcaldes, junto con la Diputación del Consejo de Castilla.

"". A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, folio 943 y ss.

"". En esta representación el Gobernador dejó escrito de su puño y letra el siguiente voto particular: "Sobre este asunto tiene expuesto juntamente con el Consejo Real como uno de sus Ministros, a que se remite."

opinión, bastando para la tranquilidad de sus Ministros, manifestar a V.M. su juicio.

No negará a V.M. que la ha sido sensible y doloroso el que para un acto tan solemne y tan grave se la separe del Consejo de Castilla con quien tiene la unión y la dependencia que fijan las leyes, pero habiendo recibido vuestra soberana resolución sobre este punto, está muy lejos de insistir en él, asegurando a V.M. bajo el juramento más solemne que ninguno de sus ministros se mueven por sugestión o relaciones contrarias al orden que quiere V.M. que se restablezca en el Reino.

Sin embargo, Señor, los Ministros que exponen unánimemente preferirán el sacrificio de su opinión a la indignación y desagrado de V.M. y todos los que no han jurado lo harán si su delación se gradúa de una desobediencia criminal e infundada.

La Sala espera que V.M. tendrá en consideración para no atribuir a voluntariedad esta reverente representación la gravedad del punto de que se trata, la crisis de las circunstancias del Reino, el decoro y honor del tribunal y sobre todo la bondad de que caracteriza el ánimo de V.M. ""

Concluía su representación la Sala de Alcaldes incluyendo el testimonio del juramento que habían prestado los Alcaldes don Luis Marcelino Pereyra y don Mariano Alonso, así como un voto particular del Gobernador de la Sala.

Como vemos, el texto de la representación es sencillo, pero capaz sin duda de encolerizar con rabia a su destinatario. Con lisongeras palabras, la Sala afirmaba que no juraba, que no debía obrar por separado del Consejo y que su juicio era que esta Constitución no convenía, aunque ni siquiera iba a dar los fundamentos de su juicio. Sin duda influyó en ella la fecha en que fue escrita: 28 de julio. Por entonces, era ya bien conocida en la Corte la gran derrota francesa de Bailén e incluso se tenían los primeros indicios de una pronta salida de los franceses hacia el Norte.

La Sala parece que no asistió a la Proclamación del Rey José I ni acudió nunca a cumplimentarle a Palacio. Tampoco llegó a jurar la nueva Constitución ni reconoció mediante juramento al nuevo Monarca. Unas semanas más tarde, habiendo ya abandonado los franceses Madrid y creada la Suprema Junta Central, el mismo día de publicación en Consejo pleno de la provisión de establecimiento de esta Junta Central, el 6 de octubre de 1.808, la Sala prestó juramento a Fernando VII según la fórmula contenida en la

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1.399, año 1.808.

Real provisión"".

6. Noticia de Bailén y huida de los franceses de Madrid

El día 29 de julio, don Arias Mon escribía al Gobernador de la Sala informándole haberle llegado noticias por varios conductos de cierto movimiento y disposiciones esa tarde en las tropas francesas y en los españoles domiciliados en Madrid, que podrían implicar una repentina salida de la Corte. También le comunicaba haber detectado cierta conmoción en las gentes del pueblo cuando conoció los acontecimientos de Andalucía y otras partes de España. Mon pedía entonces al Gobernador que ante la posibilidad que estas noticias fuesen ciertas, tomase medidas de precaución para garantizar el orden público"".

Evidentemente esta comunicación era importante pues probaba que el Consejo conocía de antemano la retirada francesa, desde varios días antes. Igualmente prueba que los sucesos de Andalucía -en especial de Bailén- y de otros Reinos eran bien conocidos ya a nivel popular y, por supuesto, por el propio Consejo de Castilla.

Al parecer, y así lo relataba el Conde de Toreno, empezó a difundirse la noticia en Madrid el día 23 de julio, aunque no llegó una comunicación oficial al ejército francés hasta el 29. Azanza y O'Farril afirmaban que José no conoció la derrota de Bailén hasta el 27 ó 28 de julio"". Martín atribuía este tardío conocimiento al

"". En la Sala del Acuerdo había preparada una imagen de Cristo con dos candelabros y unos evangelios. Extendida la mano derecha sobre este libro, fueron jurando sucesivamente el Gobernador y los demás Alcaldes por orden de antigüedad, siendo el último de todos el Fiscal jubilado don Juan Meléndez Valdés.

"". A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, folio 952.

"". AZANZA y O'FARRIL, op. cit., pág. 311. Por su parte Mercader Riba afirma que José conoció la noticia el 28 de julio, y que el general Savary la comunicó al embajador La

aislamiento en que se encontraba José de la España Meridional^{***}. En todo caso, al menos los rumores que corrían en la Corte sí deberían ser conocidos por el intruso. Por el contrario, el Consejo tendría noticia de ello con seguridad unos días antes. Lo cierto es que reunida por José una Junta extraordinaria, se siguió la opinión de Savary de retirarse hasta el Ebro.

Los días 30 y 31 de julio tanto el Consejo como la Sala tomaban algunas medidas para garantizar el orden público ante tal eventualidad: los Grandes, el Vicario eclesiástico, los títulos de Castilla y los prelados de las órdenes religiosas eran informados para que colaborasen. También desde el día 28 la Sala adoptó diversas medidas y forma rondas de alcaldes y de vecinos honrados por las calles de Madrid^{***}.

El 31 de julio fue establecida una guardia especial en algunos edificios importantes, como el Palacio de los Consejos, la Casa de la Moneda, la Casa de Correos y la Casa de Consolidación de Vales^{***}.

Como se preveía, la madrugada del 31 de julio al 1 de agosto los últimos franceses abandonaron Madrid, tras haber saquear la Real Casa de Descuentos^{***} y las alhajas y vajillas del Palacio Real^{***} y de los Reales

Forest, con la recomendación de evacuar la capital (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 54).

^{***}. MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 190.

^{***}. A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, folio 258.

^{***}. Afirma Desdeves que estas medidas disminuyeron el pillaje. Lo que omite el escritor galo es que el pillaje de más gravedad fue precisamente el realizado por tropas francesas, según consta en la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional, Invasión Francesa. Entre otras acciones se describe con detalle el saqueo de la Real Casa de Descuentos por un destacamento francés aquella noche.

^{***}. Extrajeron 6.740.857 reales 2 maravedís (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.515 núm. 7).

^{***}. El 27 de julio José y varios ministros y personalidades, entre las que se encontraba el Decano del Consejo don Arias Mon, repasaron las alhajas de la Corona de España todavía existentes en el Palacio. De los 300 millones de reales en que estaban valoradas las joyas de la Corona antes existentes, apenas quedaban algunas valoradas en 16 millones de reales. (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España"). Como es sabido, Carlos IV había mandado en su momento sacar del Palacio Real la mayor parte de las joyas

Sitios. No cabe duda a estas alturas que el motivo de más peso para la salida fue la derrota francesa en Bailén y el avance del General Castaños hacia Madrid"".

7. Conclusión

De esta manera, salió el Rey José Napoleón sin que el Consejo de Castilla ni la Sala de Alcaldes llegaran ni siquiera a verle, y por supuesto tampoco juraron al nuevo Monarca ni la Constitución de Bayona. Si la conducta del Consejo tras los acontecimientos del dos de mayo fue titubeante e indecisa"", sin duda fue salvada por su digna actitud de los meses de junio y julio, y fue también quizás la actitud más decorosa de entre las autoridades supremas españolas"". El Consejo Real de Castilla se mostró en este periodo digno defensor de la

de la Corona y llevarlas a Francia.

"". Así lo expresaban, entre otros, Azanza y O'Farril en su "Memoria justificativa", págs. 311 y ss.; el Conde de Toreno, op. cit., tomo I, págs. 408 y ss.; Calvo Marcos en "Régimen parlamentario español en el siglo XIX", pág. 5; y Mesonero Romanos en "El Antiguo Madrid", pág. 111. Tras coincidir en esta opinión, Desdevises en su obra sobre el Consejo de Castilla en 1.808, pág. 246 afirmaba lo siguiente al referirse a la salida de las tropas francesas de Madrid: "Les soldats s'attendaient à chaque instant à se voir surpris par l'armée de Castaños..."

"". Estas frases contienen la Memoria justificativa de Azanza y O'Farril (págs. 304 y 305), perfectamente aplicables al ánimo del Consejo por aquel entonces: "todos preferían una resignación pacífica a una guerra desoladora"; "estaban persuadidos de que toda resistencia de parte de la nación le sería funesta y ruinosa"

"". Aparte del juramento prestado por casi todas las autoridades de la Corte, podemos recordar con Toreno el manifiesto de los españoles que componían la comitiva de Fernando VII, Carlos IV y el infante don Antonio, de fecha 22 de junio de 1.808, en el que reconocían a José I y se ponían a su servicio (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo I, apéndice al libro IV, págs. 119-120).

legalidad y supo mantener ese equilibrio entre la fidelidad al Rey -con las serias dudas de entonces sobre cuál era el verdaderamente legítimo- y la defensa de las leyes españolas. Demostró igualmente un equilibrio y serenidad que permitió plantear y ganar un pulso al Emperador de los Franceses y todo su poderío militar***. Una conducta menos serena habría cuando menos adelantado una encarnizada guerra sin cuartel.

***. Por ello mismo nos parece equivocada la opinión de Artola cuando afirma que "en este trimestre crítico de la historia de España, la institución más representativa del Antiguo Régimen se ha mostrado incapaz de regir la nación. La serie de sucesos extraordinarios ante los que no ha sabido reaccionar, hieren el principio mismo de la institución colegiada de gobierno." (ARTOLA, M., Historia de España R. Menéndez Pidal, tomo XXVI, pág.48). Ni era su misión regir la nación, ni dejó de llevar a cabo una eficaz política de oposición y entorpecimiento de la labor de gobierno del intruso.

4. EL CONSEJO DE CASTILLA Y LAS JUNTAS PROVINCIALES. LA JUNTA CENTRAL SUPREMA Y GOBERNATIVA

1. El Consejo de Castilla tras la retirada francesa de Madrid

a) Los primeros días de agosto

La salida de los franceses de Madrid no fue una gran sorpresa para nuestras autoridades, pero sí para el público en general^{***}. La primera reacción de los madrileños debió compaginar a la vez una tremenda alegría con un cierto

^{***}. Así comenta la noticia de la partida de los franceses León y Pizarro en sus Memorias: "En esto llegó la noticia de la retirada de todo el ejército y Corte por la derrota de Bailén" (G. DE LEÓN Y PIZARRO, J., "Memorias", tomo I, pág. 109). Aunque corrían rumores de esta retirada, la rápida confirmación de su veracidad y la inmediata salida sorprendería a los madrileños. De esta opinión es también Claude Martin ("José Napoleón I", pág. 207). Por su parte, Carnicero describía así la llegada a la Corte de las primeras noticias de Bailén: "estas plausibles noticias se supieron en Madrid el día 27 cierta y positivamente por algunas cartas de la mancha, y porque en el mismo entraron dos edecanes, uno español y otro francés, para hacerla saber al rey y a sus generales. Lo que se holgaron los madrileños con ellas no es fácil ponderarlo, pero singularmente lo hicieron al día siguiente quando advirtieron algunos movimientos que indicaban la marcha..." (CARNICERO, J.C., op. cit., tomo I, págs. 161 y 162).

temor, por el vacío de autoridad que esto podía representar. Era un momento propicio para el saqueo y la anarquía. Por ello mismo, la principal preocupación del Consejo de Castilla debió ser el día primero de agosto reorganizar la policía y asegurar el mantenimiento del orden público". Sin embargo, ya vimos en el anterior apartado cómo desde días anteriores había adoptado algunas medidas con este fin".

En la mañana del día 1 de agosto el Consejo aprobó un decreto" para evitar los excesos que se estaban cometiendo y pudieran cometerse por el pueblo en el Retiro" tras la retirada del Ejército francés, al no haber tropa española en Madrid". Reunido el Consejo pleno, estableció la creación de varias rondas de vecinos honrados", cuya organización encomendó a la Sala; los Alcaldes debían cuidar de sus respectivos cuarteles y las

***. DESDE VISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1.808", págs. 246 y 247.

***. El decano don Arias de Mon había escrito confidencialmente a la Sala para que reorganizara las rondas de alcaldes.

***. Algunos autores (v. gr. vid. OMAN, Ch., "A History of the Peninsular War", mencionado por Fontes, F., "El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII"), critican que en este primer aviso al público el Consejo no adoptara una postura más crítica para los franceses, y ni siquiera contuviera una palabra ofensiva para ellos. Nos parece que por mera prudencia en tan delicadas circunstancias, y por una ausencia real de necesidad, el Consejo adoptó una actitud de expectativa lógica hasta ver como se desarrollaban los acontecimientos. Por ello mismo se limitó a publicar un bando de orden público. (vid. este 'Aviso al Público' en A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.514 núm. 1).

***. Una buena parte del Ejército francés había estado acantonado en el Retiro.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.514 núm. 2. "La desertiones y las huidas hacia las zonas insurrectas se multiplicaban. 'El mismo día de la llegada del Rey y los días siguientes, se han producido desertiones y bastantes personas de todas las clases de la sociedad se han alejado de Madrid', reconocía La Forest, que atribuía 'esos tristes resultados' a las 'intrigas incansables del Consejo de Castilla...' (MARTIN, C., "José Napoleón I", págs. 177 y 178).

***. Fueron invitados a formar estas rondas las cinco corporaciones mayores, los inspectores de las corporaciones menores y los patronos de fábricas y de talleres. (DESDE VISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 248).

tropas españolas que quedasen en Madrid debían ayudar a los Alcaldes. También aprobó el Consejo un aviso al público llamando al orden y a la calma a la población de Madrid"".

Cuatro Consejeros de Castilla quedaron comisionados de velar por el orden público en Madrid"". Eran el Marqués de Fuentehíjar"", don José Navarro"", don Juan Antonio Inganzo"" y don Benito Arias de Prada"": debían velar día y noche para el cumplimiento de las providencias del Consejo en sus respectivos departamentos. Para ello, debían estar perfectamente informados por los Alcaldes de Corte de todo cuanto ocurriera en Madrid"".

La Sala pidió al Príncipe de Castelfranco, Capitán General de Castilla la Nueva, al Gobernador de la plaza, al comandante general de Artillería y al comandante de las Guardias Españolas que pusieran todas sus tropas a su disposición"". También el Consejo creó una Junta presidida por Infantado y formada por varios Generales y oficiales de todas las armas del Ejército, de dos Ministros del mismo Consejo, del Gobernador de la plaza, del Corregidor de la Villa"". El Consejo le facilitó los medios

"" "La prudencia -miedo quizás- que caracteriza al Consejo durante toda esta época, le lleva a cerciorarse primeramente de que la retirada de los franceses es un auténtico abandono y no un movimiento estratégico de diversión" (MARTINEZ DE VELASCO, A., "La formación de la Junta Central", op. cit., pág. 159).

"" "El Consejo de Castilla había conseguido regir la ciudad sin que se produjeran demasiados incidentes..." (MARTIN, C., "José Napoleón I", pág. 207.

"" Se le encomendó los cuarteles de Afligidos y San Martín.

"" Le correspondieron los cuarteles de Barquillo, San Jerónimo y Maravillas.

"" Le correspondió velar por los cuarteles de Plaza Mayor y San Francisco.

"" Responsable de San Isidro y Lavapiés.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.514 núm. 1.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 248.

"" Esta Junta fijaría el número de cuerpos de Infantería, Caballería y Artillería que sería preciso levantar, emplazar con los voluntarios de las provincias, instruir y organizar (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527).

precisos para su cometido.

Sin duda las medidas del Consejo fueron eficaces. Durante las pocas semanas en que fue responsable de la vida de la capital, mantuvo el orden público y la paz civil***. Aún así, hubo algunos actos de pillaje y algún acto vandálico, como el asesinato del que fue Intendente de la Habana y hombre de confianza del Príncipe de la Paz, don Luis Viguri, en manos del populacho***.

El 4 de agosto el Consejo pleno aprobó nuevas medidas, entre ellas un nuevo edicto pidiendo tranquilidad pública***. El día 5 publicaba el Consejo otro edicto, en el que exultaba y animaba a los madrileños a mantener la calma dentro del gozo general***.

***. FAYARD, J., op. cit., págs. 10 y 11. Apunta también León y Pizarro en sus Memorias lo siguiente: "Estos y otros actos se hacían en Madrid sin que pudiera decirse que hubiera gobierno en Madrid, más que la voluntaria deferencia por la fantástica autoridad del Consejo de Castilla, el cual afectaba una autoridad gubernativa que nunca tuvo: sin tropa, sin resorte alguno de autoridad, se condujo Madrid admirablemente, y no respirando más que alegría y juicio." (G. DE LEÓN Y PIZARRO, J., op. cit., tomo I, págs. 108-109).

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.514 núms. 1 y 6: el 3 de agosto una multitud congregada frente al Cuartel de Reales Guardias Walonas, sacó de él a Viguri y tras quitarle la vida llevó su cadáver arrastrando por las calles y plazas de la Corte. Viguri tenía fama de connivencias con los franceses. Reunido con este motivo el Consejo pleno el día 4 se acordó publicar un nuevo bando al público de Madrid. Sobre este crimen se puede consultar también, entre otros, a CARNICERO, J.C., op. cit., págs. 168 y 169.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.514 núm. 1.

***. Entre otras cosas afirmaba que "el Reino y sus fieles provincias se llenarán de júbilo, quando el Consejo os presente a vuestra vista y a la de toda la Europa la firmeza constante con que han sostenido vuestra causa y los sagrados derechos del Trono los hombres de bien, la más elevada Nobleza, los Tribunales Supremos y el primero de la Nación. No pocos de sus individuos han sido conducidos por la fuerza y por el dolo, más allá de los límites de España; y aunque sin libertad, y expuestos a los últimos y más duros insultos, han acreditado la inflexibilidad de su lealtad y la religiosidad de sus opiniones. Desconfiad hasta de sus firmas, que han hecho bolar entre vosotros y esperad con paciencia los testimonios de sus procedimientos. El principal autor de tantos males se ve libre y fuera de nuestra jurisdicción..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión

En este edicto el Consejo anunciaba a los madrileños un próximo manifiesto en el que justificaría el Consejo su conducta anterior. Llama la atención entre otras cosas cómo el Consejo denunciaba haber sido utilizada su firma en muchas proclamas del Gobierno intruso: la razón era que el Consejo de Castilla había circulado buen número de ellos. Como hemos visto, esta política había sido causa de abundantes críticas en el populacho contra el Supremo Tribunal.

La conducta del Consejo de Castilla tras la retirada francesa de Madrid, fue coherente con la actitud mantenida frente a José días atrás. Libre el Consejo de opresión, pudo manifestar libremente su opinión, que coincidía plenamente con lo que los Consejeros de Castilla habían manifestado en las propias reuniones del Consejo bajo mandato del Intruso¹⁰⁰. Fue por ello mismo por lo que el día 4 de agosto el Consejo había encomendado al Consejero de Castilla don Antonio Ignacio Cortabarría, la publicación de un Manifiesto de sus procedimientos en los gravísimos sucesos ocurridos desde octubre de 1.807. Más adelante estudiaremos este asunto con detenimiento.

Siguiendo con los sucesos de aquellos días, el 5 de agosto hubo por orden del Consejo una rogativa general y públicas en todas las iglesias de la nación¹⁰¹. También ese día agradecía el Consejo de Castilla al General Castaños sus desvelos por la Patria y solicitaba fuerzas que protegiesen las Corte y sus Tribunales. Por su interés podemos detenernos a estudiar las relaciones entre Castaños y el Consejo en aquellas primeras semanas tras la retirada francesa.

Francesa, legajo 5.519 núm. 1).

¹⁰⁰. Parece por tanto infundada la acusación que Fontes hace contra el Consejo de Castilla, cuando acusa a sus ministros de conducta incoherente tras la retirada francesa de Madrid. Afirma Fontes: "Pero a diferencia del Consejo de Castilla, a partir de ese momento el Consejo de Estado mantendría una actitud coherente que obligaría a la mayoría de los Consejeros a seguir en su retirada a los miembros de la Junta Central, y más tarde, de la Regencia. Posiblemente por ello, el Consejo de Estado sería el único Consejo no suprimido por el Decreto de la Junta de 6 de mayo de 1.809." (FONTES, F., "El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII", pág. 23).

¹⁰¹. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 13.

b) Las relaciones entre Castaños y el Consejo de Castilla

Como hemos mencionado, el Consejo de Castilla remitió a Castaños una felicitación y una petición de ayuda. Sin duda, el Consejo temía también por aquellos días por su propia seguridad. Los ánimos estaban exaltados y la opinión general era la de considerar al Consejo como traidor a la Patria o al menos afrancesado o colaboracionista. Por ello mismo decidió inmediatamente publicar un Manifiesto exculpatorio. Curiosamente, parece que la contestación de Castaños no llegó hasta el 29 de agosto. Quizás el mismo Castaños se viera influido inicialmente por la opinión general contra el Consejo de Castilla, aunque en el mismo mes de agosto hubo correspondencia amistosa entre ambas autoridades.

El 29 de agosto contestaba Castaños al Consejo de Castilla, que enterado de la poca armonía que reinaba entre varios Tribunales, solicitaba al Consejo y a los demás Tribunales que conservase "aquella estrecha unión y sabia armonía que siempre le ha caracterizado, hasta que formada la Junta Central Suprema puedan ser juzgados los cuerpos o individuos que lo soliciten, o que aquel Supremo Tribunal estime conveniente."

El 31 de agosto escribía de nuevo el Consejo de Castilla a Castaños en los siguientes términos:

"...todos los Tribunales de la Corte son independientes del de Castilla y no conocen más superioridad que la del Soberano o de quien le representa. No pueda menos de confesar este Tribunal a V.E. que ha visto con disgusto la sindicación de su conducta y que se procure arrancar en varios papeles públicos la confianza que en todos los tiempos ha merecido de los Reyes y la Nación, especies tan contrarias a la consideración a que se creía acreedor. El Consejo ha disimulado por largo tiempo, pero bien convencido de la rectitud de sus procedimientos, conociendo cuánto convenía la misma armonía que V.E. insinúa, ha sofocado en el silencio sus justas quejas aspirando

únicamente a contribuir a todo género de sacrificios a la felicidad general, ciñéndose por fin a presentar a la Nación una exposición fiel y sencilla de sus operaciones, que es la más segura y prudente apología.

El Consejo espera que penetrados de estas ideas, las dará el aprecio que se promete de sus luces y quedará convencido personalmente de que es enteramente conforme su modo de pensar al de este Supremo Tribunal..."

La correspondencia cruzada entre Castaños y el Consejo continuó en los días siguientes. El día 3 de septiembre el General pidió dinero al Consejo y el día 5 el Consejo pleno aprobó el envío de un millón de reales en metálico. El día 5 Castaños agradecía así al Gobernador interino del Consejo el millón recibido: "...Espero que V.S.I. haga presente al Consejo mi reconocimiento y el de todo el Ejército, pues su celo y patriotismo ha facilitado la marcha de las dos divisiones que tanto interesa al bien de la Patria..." El 12 de septiembre el Consejo remitía a Castaños un segundo millón de reales".

Una noticia recogida por Artola nos informa que el General Cuesta llegó a proponer al General Castaños, vencedor de Bailén, lo que según Artola hubiera sido el primer pronunciamiento de nuestra historia: "encargar al Consejo del gobierno civil de España, repartiéndose ellos dos e Infantado el supremo mando militar"."

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 17.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 17.

"". ARTOLA, M., "Los Orígenes de la España Contemporánea", tomo I, pág. 205.

c) El Manifiesto del Consejo

El periodo comprendido entre la salida de los franceses de Madrid y su regreso a principios de diciembre fue también difícil para el Consejo. Si antes tuvo que enfrentarse con las autoridades francesas y con una opinión pública contraria, ahora tuvo que defender su conducta ante los propios españoles y ante sus nuevas autoridades -Juntas provinciales y la propia Junta Central-. Ya hemos visto la inicial actitud distante del General Castaños ante el Consejo y la queja de éste por ciertos documentos públicos que le difamaban. Muchas otras autoridades reaccionaron así inicialmente. Aunque en las primeras semanas de agosto los acontecimientos llevaron al Consejo a convertirse en la primera autoridad de la Corte y de Castilla la Nueva, el prestigio del Supremo Tribunal se encontraba seriamente mermado. Por ello mismo encomendó al Ministro Cortabarría la redacción de un manifiesto exculpatorio.

Por acuerdo del Consejo^{***}, el Ministro Cortabarría reunió toda la documentación del Consejo desde los sucesos de octubre de 1.807^{***} y elaboró en sólo dos semanas un extenso informe de 93 folios que fue remitido impreso a las Juntas provinciales de gobierno, a tribunales territoriales, corregidores, gobernadores y alcaldes mayores cabeza de partido, a los intendentes y a los preladados eclesiásticos seculares y regulares^{***}. Junto al documento

^{***}. El Consejo pleno extraordinario reunido en la casa del Decano Gobernador interino en la noche del día 4 de agosto acordó aprobar una decreto y mandó reunir todos los apelos y expedientes formados desde aquella fecha (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27).

^{***}. Esta documentación, conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, forma la sección denominada "Invasión Francesa", dentro de la correspondiente a los "Consejos Suprimidos".

^{***}. Ya hemos mencionado anteriormente el valor de este extenso documento. En líneas generales se ajustaba con bastante precisión a la realidad de los hechos y sólo en contadas ocasiones omitía circunstancias que no dejaban bien

se acompañaba una carta explicativa del Decano don Arias Mon''.

También con fecha 4 de agosto el Gobernador del Consejo había remitido una carta a todos los Presidentes de las Juntas provinciales establecidas y a los generales de los Ejércitos, informándoles de la liberación de la Corte. Estas cartas no fueron sino un primer escrito exculpatorio

al Consejo; en ocasiones también hacía incapié en detalles que le favorecían especialmente. En cuanto a su localización, se conservan ejemplares en los principales archivos de Madrid: en el Archivo Histórico Nacional (Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27), en el Archivo de Villa (Secretaría, legajo 166, sección 2 núm. 1). Parece que hay otro ejemplar en el Archivo del Congreso de los Diputados.

'''. Pronto llegaron ecos al Consejo de la buena acogida que tuvo su manifiesto. Ya veremos más adelante, al estudiar las Juntas provinciales, las respuestas que una a una fueron remitiendo al Consejo. Como testimonio popular, podemos mencionar un escrito publicado por el Servicio Histórico Militar, Colección del Fraile, número 3.230, con el siguiente título: "En nombre del honrado y generoso pueblo de la capital de España, responde a la admirable Proclama que se dignó publicar el día 5 del presente mes el Supremo Consejo de Castilla, un buen ciudadano." En este escrito, el autor anónimo exalta la conducta de los miembros del Consejo, que "indefensos, subyugados y rendidos por un déspota infiel a Dios y a los hombres, resististeis sus formidables influencias, burlásteis sus deseos, despreciásteis sus amenazas, y os coronásteis de palmas y laureles, que harán eternos vuestro honor, vuestra lealtad, vuestra constancia y vuestro nombre en los fastos de la historia." (op. cit., pág. 7). Continuaba destacando cómo el Consejo utilizó su talento para rebatir con la razón la iniquidad, y con la ley el poder tiránico (op. cit. pág. 8). Y más adelante, lo siguiente: "Todos lo sabemos y todos lo admiramos. En el corazón de todos están impresos con caracteres indelebles las incesantes tareas, las continuas meditaciones, profundas conferencias y acertadas resoluciones de V.A., tenidas y disputadas hasta dejarlas en el estado de admirables; siendo todas relativas a nuestro bien y felicidad. (...) ¿Ha tenido V.A. en el discurso de más de dos meses una hora sola de descanso? No, por cierto. Siempre fatigado, siempre inquieto y cuidadoso por la seguridad de este pueblo, ni formaba un aliento por zozobra, ni articulaba una palabra sin riesgo. Como era tan pérfido como audaz el enemigo con quien trataba, redoblaba V.A. su vigilante observación para penetrar sus crueles intenciones y contener su ejecución con anticipados remedios" (op. cit., págs. 9 y 10). Como vemos, este texto confirma nuestra opinión expuesta en el apartado anterior, de que el Consejo de Castilla supo librar y ganar una hábil batalla diplomática frente a la fuerza armada de Napoleón.

de la conducta del Consejo bajo el intruso". Tras manifestar su lealtad y amor a la justicia y a la razón, añadía: "No duda este Supremo Tribunal que V.E. estará asegurado de esta verdad, como de la sinceridad y franqueza con que le manifiesta la resolución constante en que ha permanecido siempre..."

Continuaba el Consejo llamando a la colaboración y prometiendo un pronto plan para fijar la representación de la Nación. Por el momento, el Consejo pedía a cada Junta que enviara a un diputado a la Corte para "conferenciar acerca de este importantísimo objeto, y arreglarlo de conformidad." Finalmente pedía el Supremo Tribunal que se prestasen "a proporcionar al Consejo y a la Corte prontos auxilios de tropas, que los pongan a cubierto de una nueva opresión, como a reunir las luces y autoridad de este Supremo Tribunal a los medios de defensa de toda la Nación".

La importancia del Manifiesto exculpatorio del Consejo es evidente. En sus páginas se recoge con gran detalle la historia inmediata de los sucesos de aquel año hasta la fecha de su redacción, agosto de 1.808. Este valioso testimonio, elaborado por un Consejero de Castilla, ha sido una de las principales fuentes usadas por los historiadores para conocer aquellos acontecimientos. El lector de nuestro trabajo habrá comprobado las continuas referencias a aquel Manifiesto, cuyas páginas hemos ido desgranando, completando a veces, y otras aclarando o rectificando lo allí recogido, a partir de otras fuentes de la época.

... "Madrid, que ha gemido de más de cuatro meses a esta parte bajo el yugo y poderío irresistible de los ejércitos franceses, empieza por fin a respirar, por un efecto especialísimo de la divina Providencia; y el Consejo, a quien no podía menos de caber la mayor parte en esta terrible opresión, aprovecha los primeros momentos de su libertad para explicar a V.E. sus sentimientos..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, Manifiesto de los procedimientos..., folio 87).

... A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto...", folios 87 y 88.

... A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto...", folio 89. Y en otro escrito parecido solicitaba fuerzas a los generales del Ejército para la defensa de la Corte, como ya hemos visto.

... Así describía Carnicero en su "Historia razonada..." las causas y el efecto que produjo este Manifiesto: "Las provincias singularmente libres no se habían hecho cargo de la rigurosa violencia y opresión en que estaba el Consejo de

d) Otras medidas del Consejo de Castilla en agosto de 1.808

Remitió también el 4 de agosto un escrito a los Intendentes de Madrid, La Mancha, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Avila, las provincias más cercanas a la Corte, para que reclutasen hombres y armas con ese fin^{***}. También escribió el Consejo de Castilla el día 8 de agosto al Gobernador de Gibraltar, "como Jefe de aquella potencia (Inglaterra) que reside con mayor inmediación a España". Le agradecía su ayuda a las provincias litorales de España, y solicitaba a la Nación Inglesa 300.000 mil fusiles y 30.000 pares de pistolas. Comisionaba para su recogida al Comandante General del Campo de San Roque^{***}.

También el 4 de agosto el Consejo aprobaba una orden de alistamiento general, que llamaba a filas a

Castilla durante la permanencia de los franceses... Así juzgó aquel recto Tribunal vindicarse de las calumnias y mala opinión que había padecido. Para este fin publicó un prudente y documentado manifiesto, que fue bien recibido, y sirvió a tenerlo y respetarlo en su antigua opinión y fama..." (CARNICERO, J.C., op. cit., pág. 181).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto...", págs. 90 y 91. Carnicero apunta lo siguiente: "...Y así el pueblo de Madrid obedecía sus órdenes (las del Consejo de Castilla) con la mayor prontitud y respeto; por lo que el Consejo no desistió del intento de armarlo. Y para mejor conseguirlo hizo componer las cureñas, cañones y gran número de fusiles, que dejaron los franceses o se hallaron en otras partes, y prohibió al mismo tiempo aquellos papeles que no tuviesen absoluta licencia para publicarse..." (CARNICERO, J.C., "Historia razonada...", tomo I, pág. 182).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27, "Manifiesto...", folios 92 y 93; y legajo 5.516 núm. 15.

todos los varones comprendidos entre los 16 y los 40 años"".

El 5 de agosto tuvo lugar la mencionada rogativa pública y general celebrada de orden del Consejo. Tras su asistencia, el Supremo Tribunal volvió a reunirse aquel día y mandó imprimir y fijar en todos los lugares públicos de Madrid una proclama al Pueblo Honrado y Generoso de la Capital"". También aquel día decretaba recoger las armas de todos los soldados franceses que habían quedado en la Corte"".

El día 6 acordaba un decreto para que se cantase Te Deum de acción de gracias el día 7"". También aquel día restablecía la antigua práctica de publicar dos gacetas semanales en los días martes y viernes. El Diario de Madrid continuaría publicándose con arreglo a su privilegio desde el lunes 8 de agosto"". Ese mismo día recibía el Consejo un oficio del Comandante General del Cantón de Calatayud, en que solicitaba al Consejo 3 ó 4.000 fusiles para armar a sus habitantes, a fin de socorrer a Zaragoza, que se encontraba cercada"".

Hubo el 6 por la mañana una reunión en Madrid de las autoridades militares y políticas de la Corte. En ella se estudiaron las disposiciones militares que convenía

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.517 núm.5. Carnicero recogía así esta noticia: el Consejo de Castilla "fijó un edicto por el que mandaba concurrir al día siguiente a ciertos y determinados puntos por sus respectivos barrios y cuarteles a todos los que llegasen a los 18 años y no pasasen de 50, para que asistiendo también a ellos los oficiales y generales, que había en la Corte, pudiesen empezar el alistamiento y organización de los respectivos cuerpos. Obedeció tan puntualmente el pueblo de Madrid, que se puede asegurar que en la mañana del 9 de agosto había en sus respectivos puntos 40.000 hombres de la referida edad..." (CARNICERO, J.C., "Historia razonada...", tomo I, págs. 171 y 172).

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.514 núm. 1.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2.

"" Se insertó en la Gaceta Extraordinaria del mismo día 7 de agosto (Legajos 5.525 núm 19 y 5.521 núm 13).

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 19.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión francesa, legajo 5.516 núm. 2.

tomar para la seguridad interior y exterior de la Villa. Aquel día a las 8 de la tarde fueron reunidos los miembros del Consejo de Castilla en la casa de su Gobernador, sin ceremonia, para informarles de las medidas acordadas"".

Como vemos, los primeros días tras la liberación de Madrid fueron muy intensos para el primer Tribunal de la Nación. Actuó con energía para movilizar fuerzas de la Capital y de las provincias, y mantuvo el orden interno de la Villa. Ya veíamos que hasta enemigos declarados de esta institución como G. de León y Pizarro elogiaron en sus escritos la labor realizada por el Consejo en aquellos días"".

El 7 de agosto hubo una nueva rogativa en la iglesia de Santa María de la Almudena, a las 9 de la mañana"". Ese mismo 7 de agosto el Consejo decidía la conveniencia de proclamar inmediatamente al Rey Fernando VII, "con la mayor ostentación y fausto". Evidentemente el Consejo de Castilla deseaba expresar de alguna manera su fidelidad a Fernando VII y esta proclamación sería bien acogida por las provincias. Todo fue estudiado con detalle. Incluso se eludieron los trajes y maneras de la Corte francesa, que fueron sustituidos por vestidos a la española antigua, de negro y blanco"". Se aprobó igualmente la acuñación de monedas con la efigie de Fernando VII, de cuatro modelos distintos, para ser distribuidas al público asistente.

La proclamación de Fernando VII en la Corte y en Toledo sería el 24 de agosto. Se anunció al público en la Gaceta y en el Diario de Madrid. También se debía celebrar en las demás villas y ciudades, quienes deberían

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 1.

"" El Consejo también encontraría obstáculos y dificultades en su labor. "Pero por desgracia ya en este día (9 de agosto) principió a hacer su oficio también en Madrid una mano oculta, que sin saber cómo, ha entorpecido y frustrado las mejores operaciones de la Nación. El Consejo prevenía que a los puestos saldrían oficiales de todas las graduaciones: y esto no se verificó con uniformidad. En una parte no había ninguno, y en otras no se atrevieron, o quisieron comenzar la obra a pretexto de ser ellos pocos, y la gente mucha..." (CARNICERO, J. C., "Historia razonada...", tomo I, págs. 173 y 174).

"" Asistieron además de los Ministros del Consejo, los Alcaldes vestidos de golilla y en la forma ordinaria los Alguaciles (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.398, año 1.808).

"" Fue aprobado por el Consejo el 9 de agosto.

presentar sus cuentas al Consejo por la Contaduría General de Propios. La hora de la proclamación sería la de las 4 de la tarde. También aprobó el Consejo una Real Orden para que se contribuyera a cada Ministro del Consejo con 300 reales del Fondo de Penas de Cámara, para que iluminasen sus casas en las tres noches de celebración.

El día 19 de agosto era invitado oficialmente el Consejo a asistir a los actos de proclamación desde los balcones de las Casas Consistoriales. El día 22 daba las gracias al Ayuntamiento el Supremo Tribunal y comunicaba su aceptación. Ese mismo día era informado el Consejo que las monedas acuñadas estaban preparadas***.

El Duque del Infantado no asistió con el Consejo a la proclamación del Rey, sino en otro lugar más preferente. El mismo día 24 enviaba oficio a don Arias Mon en los siguientes términos: "Deseando participar lo más íntimamente posible a la augusta ceremonia de la Proclamación de nuestro Soberano, uniéndome lo más cerca que sea dable al común júbilo y regocijo, he determinado acompañar a caballo al séquito del Alférez Mayor; cuya circunstancia me impide el permanecer en el Consejo, en lo que hubiera tenido la mayor complacencia a no mediar este motivo..." De esta manera el Presidente de Castilla destacaba el papel primordial que tenía el Consejo Real y a su Presidente como la segunda personalidad del Reino después del Monarca***.

***. En total, 60.000 reales de vellón en las cuatro clases de veintenes de oro y de pesetas, reales de plata y realitos. El Consejo nombró comisionado que fuera a recoger las monedas el día 23: el encargo recayó en el Caballero Mayor (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión francesa, legajo 5.511 núm. 26).

***. La celebración fue muy solemne. Entre otros festejos, se celebraron en honor del Rey dos corridas de toros: la primera, el día 26 a las 10 de la mañana; y la segunda el día 29 a las 4 de la tarde. Los Regidores de Madrid comunicaron al Consejo que había a disposición de sus Ministros tres palcos para cada función: para la del día 26, los números 81, 82 y 83; para la del día 29 los números 104, 105 y 106; a la sombra. En la corrida del día 26 hubo algunos incidentes. Las tropas subieron al tejado y rompieron muchas tejas. Los paisanos también se aprovecharon y se colaron sin pagar varios miles de personas. Los destrozos ocasionados fueron considerables, de tal manera que se pidió al Consejo la celebración de seis corridas más para sufragar gastos y daños. El Consejo de Castilla estudió el asunto y decidió era preferible invertir ese dinero en el Hospital General y Piedad de la Corte para asistir a los enfermos. Por otro lado, el 30 de agosto mandaba el Consejo que fuese publicada en la Gaceta la Proclamación del Rey y los festejos celebrados con este motivo. Sin duda, el Consejo era el

Continuaba el Consejo su labor de gobierno, con una capacidad al parecer digna de todo elogio. Con fecha 8 de agosto aprobaba un decreto para saber el estado de las armas, municiones, vestuario y número de tropas de nuestros Ejércitos^{***}. Evidentemente entre las previsiones del Consejo se encontraba la posibilidad de que los franceses regresaran a Madrid, una vez que se hubieran afianzado sus posiciones. Entre otras medidas de armamento, el 9 de agosto estudió los reclutamientos que se estaban efectuando y dio comisión a don Andrés Lasauca y a don Vicente Duque de Estrada para que hicieran su clasificación y su método y reglas^{***}. Ese mismo día se creó también una Junta de Hacienda, presidida por el Decano, para proporcionar los caudales precisos para atender a la defensa y seguridad de la Corte^{***}.

También el día 9 de agosto el Consejo de Castilla dictó providencia para dar destino a los más de 2.000 franceses enfermos que se hallaban en los Reales Hospitales, a medida que fueran mejorando^{***}. Buscaba con esta medida garantizar su seguridad y evitarles vejaciones. También ordenó que se les diera ocupación manual para que se ganasen su sustento.

Estas medidas fueron completadas con otras las semanas siguientes, en orden a poner a salvo los franceses existentes en la Corte. El día 17 se decidió

primer interesado en dar a este hecho la máxima publicidad. El 2 de septiembre todavía no se había publicado y el Consejo reiteró la Orden. Por otro lado, sabemos como dato anecdótico que el Ayuntamiento obsequió a los miembros del Consejo de Castilla el 30 de agosto con 34 cucuruchos de barquillo. Para el Decano, uno de 120 reales; para los Camaristas de número y honorarios, seis de 80 reales; para los Ministros del Consejo que estaban en Madrid, veintisiete de a 60 reales cada uno. El Consejo daba las gracias al Ayuntamiento en escrito de 2 de septiembre. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 26).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 5.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 4.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 3.

^{***}. Fueron remitidos al Hospicio de San Fernando, al Alcázar de Toledo y a los Hospicios de Cuenca y Ciudad Real (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.514 núm. 3).

trasladar a estos franceses al Real Sitio de El Escorial^{***}. Mientras tanto, Madrid festejaba alegremente la salida de los franceses y se preparaba a recibir eufóricamente a las tropas españolas^{***}.

- e) El Consejo de Castilla declara nulo todo lo actuado en Bayona

El 9 de agosto el Fiscal del Consejo don Jerónimo Antonio Díez presentó una importante propuesta: que se declarase nulo todo lo decretado en Francia por los Sres. Don Carlos IV y Don Fernando VII, los tratados de Bayona, la Constitución y lo demás dispuesto por el gobierno intruso (actos de proclamación de José I, etc.). Esta petición

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.514 núm. 4. El 20 de agosto escribía el Gobernador de El Escorial al Consejo de Castilla exponiendo las penurias y saqueos realizados por los franceses que aquel sitio había padecido y no responsabilizándose de la vida de los presos franceses. El día 21 ya se habían trasladado a San Lorenzo 59 franceses. Sabemos que muchos de los franceses confinados en El Escorial terminaron fugándose, ya que nadie les suministraba alimentos y se encontraban en el mayor abandono.

^{***}. A. HEREDIA, en su trabajo "Los acontecimientos políticos de agosto de 1.808, en Madrid, a través de la correspondencia de un testigo ocular", refleja algunos aspectos de la vida en Madrid en aquellos días. El ciudadano de a pie consideraba que la precipitación de la salida francesa había sido motivada sin duda por el resultado de la Batalla de Bailén. El pueblo estaba excitado y deseoso de manifestar su adhesión a la Monarquía española en la proclamación del día 24. Algunos días más tarde, el 12 de agosto, se esperaba en Madrid la entrada del ejército valenciano y llegaban también noticias de una nueva derrota francesa ante los aragoneses. "Al pueblo trasciende la gestión del Consejo de Castilla con las Juntas provinciales para la formación de la Regencia hasta tanto se decide la suerte del Monarca español y la preparación del Manifiesto que el Consejo estudia para dar a conocer su programa de actuación en este tiempo de 'desorden y opresión'" (HEREDIA HERRERA, A., op. cit., en "La Guerra de la Independencia (1.808-1814) y su momento histórico", Tomo I, págs. 185 y 186).

implicaba declarar nulo todo lo dispuesto y ordenado desde el día 2 de mayo al 1 de agosto de aquel año. Su exposición tiene para nosotros bastante interés en cuanto recoge la opinión^{***} de un miembro cualificado del Consejo de Castilla, testigo presencial, en cuanto a la opresión padecida por el Supremo Tribunal bajo el intruso^{***}:

"El Gobierno intruso, a quien abrió las puertas la perfidia y la traición, y que se sostuvo por el terror y la violencia desde principios de mayo, dispuso con autoridad soberana cuanto le podía conducir para conducirse en su tiránica usurpación. El Consejo, que sólo podía oponer la fuerza de la razón, no era oído ni atendido: fueron despreciadas sus consultas y representaciones, y los individuos que le componen, por haber hecho uso del lenguaje de la razón y de la justicia, fueron baldonados con los negros epítetos de rebeldes, sediciosos y revolucionarios, y amenazados en la vida y en la honra, de manera que llegaron a temer fundamentalmente que no se salvarían aunque hiciesen dimisión de sus empleos, a lo que estaban resueltos. En tal conflicto, en tan terribles circunstancias, en la más dura opresión, teniendo sobre sí un ejército numeroso a quien igualmente que a sus jefes caracterizaba lo atroz, lo cruel e inhumano, fue indispensable al Consejo condescender en algún modo con las ideas del usurpador, mandando imprimir, publicar y circular las proclamas, órdenes, decretos y otros documentos a que se le estrechaba imperiosamente. Ahora que ha salido de esta capital el ejército extranjero, siguiéndole el Rey intruso José Napoleón con señales nada equívocas, si no de fuga, por lo menos de abandono, mira el Consejo distante el peligro que tan de cerca le circundaba y ha llegado la ocasión de hacer uso de su libertad y energía..."

En su escrito, Díez llegaba a pedir "que se tilde y borre de los libros capitulares todas las actas que se hubieren extendido en orden a la proclamación de dicho José Napoleón y demás que puedan perjudicar a la dignidad y

^{***}. Opinión sincera, en cuanto no estaba destinada al público en general, sino que sólo sería conocida por los miembros del Consejo. Este escrito no fue, por tanto, publicado.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 25.

soberanía del Sr. Don Fernando VII, bajo la pena que imponen las leyes a los traidores que faltan a la fe y lealtad debida a su legítimo Rey y Señor natural...^{1100a}.

La consecuencia fue la cálida acogida que esta exposición tuvo en el Consejo y la aprobación el 11 de agosto del siguiente decreto^{1101a}:

"Se declaran nulos de ningún valor ni efecto los Decretos de abdicación y cesión de la Corona de España firmados en Francia por los Sres. Reyes Don Fernando VII y Don Carlos IV, los dados a su consecuencia por este monarca; por el Emperador de los Franceses y por su hermano José, inclusa la Constitución jurada para esta Monarquía en Bayona con fecha de 7 de julio próximo; la que se recogerá por los Tribunales, Corregidores y Justicias del Reino, remitiendo sus ejemplares al Consejo para las demás providencias correspondientes. Igualmente se declaran nulos los tratados que se enuncia en dichos decretos haberse celebrado en Francia por los Sres. Don Carlos IV y Don Fernando VII, los Sres. Infantes Don Carlos y Don Antonio y cuanto auto se ha ejecutado por el Gobierno intruso en estos reinos, así por la violencia con que todo se ha procedido como por la falta de autoridad legítima para disponerlo. Y para que conste a todos, expídase la circular correspondiente, en la cual se prevendrá también que en los libros de Ayuntamiento se copie este auto, tildándose el asiento de proclamación de José I en los pueblos donde se haya ejecutado, y cualquiera nota puesta en ellos respectiva al Gobierno intruso. Madrid, 11

^{1100a}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 25.

^{1101a}. Si consideramos que la petición del Fiscal Díez llevaba fecha de 9 de agosto, creemos no del todo acertada la opinión de Fontes cuando afirma que "la primera muestra pública de desafección al nuevo régimen por un alto órgano de gobierno de la Monarquía iba a ser la del propio Consejo (de Estado). En efecto, (...) a los cinco días de la liberación del poder intruso, el Consejo sería convocado para el 11 de agosto, a petición de la mayor parte de los Consejeros, quienes consideraban necesario un pronunciamiento formal del Consejo de Estado sobre la invalidez de las abdicaciones y la consecuente ineficacia legal de los actos de gobierno de José I. Con ello el Consejo expresaría su parecer especialmente necesario, dado que el Consejo de Castilla había llegado, como vimos, a pedir al Emperador la Corona de España para su hermano." Aparte de esto, el mismo Fontes reconoce más adelante que lo que hizo el Consejo de Estado fue hacer "suyo un auto acordado del Consejo de Castilla reunido en Consejo pleno, en el sentido de declarar la nulidad de las abdicaciones y de los actos de gobierno de José I, así como la invalidez de la Carta de Bayona." (FONTES, F., op. cit., págs. 35 y 36).

de agosto de 1.808.""

Como apuntaba Desdevises"", este decreto suponía que se considerarían a partir de este momento nulas todas las disposiciones del gobierno intruso. Esta decisión no era sino la consecuencia lógica de la paciente oposición del Consejo a Murat, Savary y José"". Como apunta más adelante con acierto Desdevises, el Consejo que supo permanecer en su puesto y ofrecer seria resistencia al usurpador, al alcanzar la libertad podía sin deshonor declarar nulos los actos del Intruso, quien en los momentos de peligro no supo permanecer en el suyo y huyó sin defender aquello a lo que se había comprometido"".

La aprobación de este Decreto debió sentar muy mal a José y a Napoleón. Evidentemente fue éste y no otro el principal motivo de las duras expresiones contenidas en los decretos de Chamartín contra el Consejo y sus miembros, a quienes el Emperador calificaba "cobardes e indignos de ser magistrados de una nación valiente", y a quienes amenazaba de "ser perseguidos y castigados como

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 25. En opinión del profesor Sánchez-Arcilla, este decreto es el que F. Barrios en "El Consejo de Estado" y con él F. Fontes, atribuyen al Consejo de Estado.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 255.

"". Este decreto se completaría con otro de 31 de agosto en el que se prohibía ejecutar ninguna orden de José Napoleón: estas órdenes debían ser tenidas por nulas, sin efecto y sin valor.

"". "Non seulement le Conseil pouvait annuler les décrets de l'intrus, mais il le devait, et l'Espagne entière lui en sut gré, comme d'un acte de patriotisme et de justice" (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 256). Coincidimos plenamente con la opinión de Desdevises. El balance de la actitud del Consejo desde los sucesos de Aranjuez es francamente honroso y digno para aquel Supremo Tribunal. Artola en nuestra opinión es excesivamente crítico hacia el Consejo cuando afirma: "En este trimestre crítico en la Historia de España la institución más representativa del Antiguo Régimen se ha mostrado incapaz de regir la Nación. La serie de sucesos extraordinarios ante los que no ha sabido reaccionar hieren mortalmente el principio mismo de la institución colegiada de gobierno. En años posteriores se conservará únicamente una apariencia institucional, perdida la mayor parte de sus omnímodas facultades e influencia en los destinos patrios." (ARTOLA, M., "Los Orígenes de la España Contemporánea", tomo I, pág. 120).

traidores""'. En el artículo II de este decreto se exceptuaba expresamente a los miembros del Consejo que no firmaron la deliberación del 11 de agosto de 1808, "tan deshonrosa para la dignidad del magistrado como para el carácter del hombre""'.

También consecuencia del Decreto anterior fue un nuevo Decreto de fecha 11 de agosto en el que se mandaba no se abonase cantidad alguna prescrita en la Constitución ni los sueldos y pensiones de los empleados que se habían ido con José Napoleón, y por tanto, a los dos Ministros del Consejo que habían huido con los franceses""'.

Por otro lado, por Real Orden fechada en Madrid el 10 de agosto de 1.808 se suprimía el Juzgado de Imprentas creado por Real Orden de 27 de marzo de 1.808. Cesaba en el cargo de Juez de Imprentas don Juan Antonio Melón y volvía este cometido al Consejo, tal y como estaba antes de la mencionada Real Orden. Fue nombrado Juez de Imprentas el Consejero de Castilla don José Colón de Larreátegui""'.

Con fecha 12 de agosto el Consejo aprobó un plan sobre lo que debía ejecutarse en las críticas circunstancias en que se hallaba la Nación. En este plan, en primer lugar el Consejo se preguntaba por las causas de la precipitada huida de José y de su ejército. De las tres posibles causas -la derrota de Bailén, los problemas internos de Francia y una coalición antifrancesa en el Norte de Europa- curiosamente descarta la primera por su precipitación -en tres días- hallándose como se encontraba Castaños a más de 40 leguas de Madrid""'. Seguidamente

""'. Decreto de 4 de diciembre de 1.808 destituyendo a los miembros del Consejo de Castilla, arts. I y II.

""'. Discrepamos entonces de la opinión de Artola y otros autores que ven en estas expresiones de Napoleón la consecuencia lógica de una conducta desleal o contemporizadora con las autoridades francesas.

""'. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núms. 16 y 21: éstos fueron don José Marquina Galindo y don Francisco Javier Durán.

""'. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.958.

""'. Creemos que aquí el Consejo se equivocó en su apreciación. Las desastrosas noticias que llegaban de Andalucía amenazaban seriamente la seguridad de la Corte. Además, podían crear un levantamiento general en Madrid o provocar un aislamiento de la capital. Lo cierto es que las autoridades francesas consideraron prudente un repliegue de sus efectivos, que todos consideraron provisional.

consideraba el Consejo que debía reunirse bajo una mano todas las fuerzas de la Península. Debía ser una autoridad reconocida por toda la Nación, que defendiese los derechos de los españoles y de su monarca.

Tras señalar que el Consejo Real hasta ese momento había "estado preso y sin libertad, por el despotismo y fuerza de los franceses", el Plan señalaba los siguientes puntos a realizar: 1. mandar hacer un alistamiento general en Madrid; 2. proponer a la Junta de Sevilla que se trasladase a Madrid, para que junto con el Gobernador del Consejo, dos ministros a su elección y algún general más pudiera seguir sus sesiones allí; 3. establecer un plan general de defensa contra los franceses; 4. convocar Cortes y formar un Consejo de Regencia, con representantes de todas las Juntas; 5. trans formar la Regencia, ésta debería ponerse en contacto con otras potencias y también tomar importantes medidas de gobierno interno***.

De esta manera, y como hemos visto, el 12 de agosto publicaba el Consejo el decreto que declaraba nulas las abdicaciones de la Corona de Fernando VII y Carlos IV***.

f) Más noticias de agosto de 1.808

Antes de continuar, debemos hacer un importante inciso. En varios documentos de aquellos primeros días de agosto curiosamente se habla de la figura de un Gobernador del Consejo o Gobernador interino. Esto quiere decir que Infantado no ejercía la Presidencia de Castilla en algún momento, pues la presencia simultánea de ambas figuras eran incompatible. Sabemos además que era un Gobernador interino, es decir, en funciones, por lo que la persona que ocupaba esta plaza era el Decano del Consejo, por ser el Consejero más antiguo. Por ello mismo, pensamos que ante la ausencia de Infantado o por otro motivo, Mon se hizo cargo interinamente del Gobierno del Consejo, cargo en el que

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.513 núm. 10.

***. A.H.N., Estado, legajo 28 A, Papeles de la Junta Central, expediente número 1.

cesaba cuando regresaba Infantado"".

Algunos Ministros del Consejo rehabilitados en sus plazas por el Decreto de 15 de abril de 1.808, todavía en agosto no habían ocupado aquéllas por los sucesos de la guerra. Así, don Benito Ramón Hermida se encontraba en Monroyo (partido de Alcañiz) cuando tuvo lugar la sublevación de Zaragoza, lo que le impidió venir a la Corte. Don Domingo Codina se encontraba por su parte en Vich cuando las tropas francesas ocuparon Cataluña"".

El 13 de agosto hacían su entrada en Madrid 16.000 valencianos, que fueron recibidos con la emoción popular y fueron agasajados por representaciones de las autoridades de Madrid. Ese mismo día también el Consejo creó una Junta de tranquilidad pública, que estuvo funcionando regularmente hasta finales de octubre. Apuntaba Desdeseives que "le Conseil rendit donc à Madrid l'inappréciable service de le sauver d'un pillage, regardé comme inévitable, et d'y maintenir la paix, pour ainsi dire par le seul prestige de son autorité morale"."".

Sin embargo, el Consejo de Castilla debió continuar esforzándose por mantener a toda costa el orden público interno. El 14 de agosto hubo un incidente de amplia repercusión, a resultas del cual fueron asesinadas dos personas en la casa del Ministro Plenipotenciario de Rusia en España. El Consejo de Castilla tomó cartas en el asunto y encomendó al Alcalde de Corte don Andrés Romero que dirigiera la comisión que investigaría el crimen"".

"" . Como vimos ocurrió en la proclamación del Rey del 24 de agosto, en la que estuvo presente Infantado con el título de Presidente de Castilla. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna disposición expresa que nos dé nuevas luces sobre este particular. Por todo ello, parece que la solución más lógica a esta cuestión podría estar por tanto en una interinidad por alguna imposibilidad que impidiera a Infantado ejercer este oficio.

"" . A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 1. En otro orden de cosas, parece que por aquel entonces ya operaban en España algunos grupos de francmasones. Una noticia nos informa que el Consejo de Castilla recibió varias cajas incautadas con insignias y bandos de estos grupos (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 46).

"" . DESDEVEISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1.808", pág. 248.

"" . A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1.808, fol. 1.017. Don Andrés Romero presentaría más tarde la renuncia de esta Comisión, renuncia que no fue aceptada por la Sala de Alcaldes en su resolución

El Consejo se ocupó también de las relaciones internacionales. Una noticia fechada el 14 de agosto nos refiere que aquel día el cónsul de Roma en Tarragona, Tortosa y sus distritos, don Antonio Pi y Carabassa, ofreció al Consejo de Castilla, en nombre de S.S. el Papa, levantar y equipar un batallón de Voluntarios de Roma c de S.S. de Infantería Ligera"". El 17 de agosto el Consejo pleno acordaba también pasar oficios a varios soberanos europeos, entre ellos los de Austria, Rusia y Sajonia"".

Por aquellas fechas eran frecuentes los escritos anónimos dirigidos al Supremo Tribunal. Muchos de ellos se enviaban al Correo y eran recibidos por en el Palacio de los Consejos o en los domicilios de sus miembros. En general, criticaban la conducta del Consejo de Castilla o amenazaban a sus ministros. En ocasiones también alentaban al Supremo Tribunal en su labor. Así, el 18 de agosto el Consejo pleno aprobaba un decreto en el que se mandaba comunicar orden a los Directores Generales de Correos para que no repartieran ninguno de los pliegos que se echasen por el buzón del Correo con sobre a dirección del Ilmo. Sr. Decano, al Consejo o a cualquier persona pública residente en la Corte"".

de 29 de octubre, en la que le ratificaba al frente de esta Comisión.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 6.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 28.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.515 núm. 28. Se puso el aviso correspondiente en la Gaceta y en el Diario. Veamos algunos fragmentos de algunos anónimos conservados: "Al Real y Supremo Consejo de Castilla: (...) Soberano y Sabio Cónclave: permitid que un buen patricio os hable con la claridad que debe. No pretendo haceros entrar en conocimiento, pues ya enteramente deslumbrados por el rayo de la inhumanidad reconozco que os es imposible. Si sólo pretendo sepáis que ya no hay criatura en el orbe que no lamente vuestra execrable traición. ¿Qué os ha hecho este infeliz Príncipe para que con tanta tiranía lo tratéis? ¿Os ha quitado por fortuna algún derecho de los que en ley de Dios debía haberos despojado? Lejos de eso, os miró desde luego con respeto para dar ejemplo a los vasallos, para que os reconociesen como unas firmes columnas, en quienes pendía la seguridad de la Corona, y la tranquilidad y sosiego del Reino todo. Pero ¡ah!, qué mal correspondido..." (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 10). Otros eran más animantes para el Consejo: "Cada una de las provincias en particular y todas en general os hablan pues que todas conocen la malicia, contradicciones y falsedad de los papeles públicos hechos por

El Consejo de Castilla también se ocupó de la persecución de los afrancesados y el embargo de sus bienes. Así, el 19 de agosto el Consejo encomendaba una comisión a don Ignacio Martínez de Villela y a don Benito Arias de Prada para que procedieran inmediatamente al embargo y secuestro de los bienes pertenecientes a varias personalidades políticas: el Marqués de Caballero, don Gonzalo O'Farril, don Miguel José de Azanza, Conde de Cabarrús, don José Mazarredo, Duque de Frías, Conde de Campo-Alange, don Francisco Javier Negrete, don Mariano Luis de Urquijo, don José Marquina, don Francisco Javier Durán, don Pablo Arribas, don Francisco Amorós, don Manuel Romero, don Francisco Angulo, don Ignacio Tejada, don Francisco Antonio Cea, don Juan Melón, don Pedro Estala, don Juan Antonio Llorente, don Leandro Fernández Moratín, don Juan Antonio Conde, don Manuel Pérez de Herbás, don Francisco Manota, don Julián de Velasco, don José Mamerto, don Tomás García Suelto y don Luis Baviche^{***}. La orden también facultaba para el secuestro de los bienes de todas las demás personas que hubieran salido de Madrid o de otras ciudades para acompañar a José I o con motivo de la retirada de las tropas francesas^{***}.

Y por decreto de 20 de agosto de 1.808 creaba el Consejo una Junta de Tranquilidad Pública, compuesta por cinco Ministros del Consejo -Riega, Puig, Fernández Campomanes, Moyano y el Sr. Decano Gobernador interino-,

nuestros enemigos con los que infructuosamente intentan seducirnos; y no se les oculta que todas esas repetidas abdicaciones y cartas son nulas y de ningún valor por las razones que no ignoráis. Por último se valen de vuestra autoridad y tratan de engañaros; medid bien vuestras operaciones y reflexionad con madurez vuestros deberes. Acordaos que sois Padres de la Patria: Que perder la vida en su defensa es el verdadero honor; y que más vale morir que vivir sin él..." (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 10).

^{***}. Conocemos algunos datos de la opinión del público general a través de cartas de la época: todo el mundo estaba al tanto de la confiscación de bienes que se estaba realizando en algunas personalidades españolas y francesas, de los que la mayoría eran ministros de José I que siguieron en su retirada al Intruso. Fueron colocadas las armas del Rey en las casas de los primeros y las de los segundos fueron cerradas con candados. Se actuó contra los franceses de entonces residentes en Madrid y los españoles que habían colaborado escondiéndolos fueron castigados. (HEREDIA HERRERA, A., "Los acontecimientos políticos de agosto de 1.808, en Madrid, a través de la correspondencia de un testigo ocular", pág. 187).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.513 núm. 10.

para investigar conductas contra la Patria y contra Fernando VII^{***}. Eran por tanto los Consejeros de Castilla los encargados de reprimir los llamados delitos de infidencia.

Otra de las competencias que asumió el Supremo Tribunal fue como vimos la referente a armamentos y reunión y equipamiento de cuerpos de ejército. Así el mismo día 20 formaba el Consejo una Junta Militar que se ocuparía de facilitar y atender a la organización y armamento de los cuerpos militares que se habían formado en Castilla la Nueva. Estaría presidida por el Duque del Infantado y formada por varios generales y oficiales de todas las armas del Ejército, por dos Ministros del Consejo de Castilla, el Gobernador de la Plaza y el Corregidor de la Villa. Su misión era fijar el número de cuerpos de Infantería, Caballería y Artillería que sería preciso levantar y organizar. Esta Junta tuvo su primera sesión el día 26 y el mismo día 27 se publicó un Aviso al Público informando de la constitución de la misma y llamando a la población al reclutamiento de voluntarios.

La respuesta a esta convocatoria fue excelente, ya que pudo cubrirse completamente las plazas del Regimiento de Infantería de Línea, formado por tres batallones de Voluntarios de Madrid^{***}.

Con este objetivo de formar cuerpos de ejército para la defensa de Madrid, el Consejo también promovió varias comisiones de algunos de sus Ministros para recogida de armas, vestuario, munición y otros efectos dejados por las tropas francesas en la Corte y en otros pueblos inmediatos^{***}.

La víspera de la proclamación del Rey, ya se conocía en Madrid la llegada del Duque del Infantado

^{***}. Tales individuos serían procesados, arrestados y embargados, dando la Junta orden a la Sala de Alcaldes para que lo ejecutase. (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.398, año 1.808, fol. 1.284 y ss.).

^{***}. En el Aviso al Público del Consejo de Castilla de 2 de septiembre de 1.808 se volvería a convocar a los madrileños para crear otro Regimiento de Infantería de Línea, Segundo de Voluntarios de Madrid. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 1 y legajo 5.527).

^{***}. La ayuda del Consejo de Castilla en armamento, vestuario y socorro a las tropas de las provincias superó al parecer los 5 millones de reales. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527).

procedente de Astorga"" , adonde había acudido para pulir las desavenencias existentes entre el ejército gallego y el general Cuesta. Ese mismo día entraba el general Castaños en Madrid con los héroes que participaron en la Batalla de Bailén. Al parecer, el recibimiento popular fue apoteósico, con vivas, música, arcos del triunfo. Testigos presenciales lo describían como unos momentos de enorme emoción y alegría"". Las primeras autoridades de Madrid, entre ellas el Consejo de Castilla y el Ayuntamiento, enviaron representantes a agasajar a Castaños.

g) Ecos del Manifiesto del Consejo

El 24 de agosto, día de la proclamación del Rey, Madrid esperaba también el anunciado Manifiesto del Consejo, de lo que tenemos también referencias por correspondencia privada de la época conservada"". Se decía en los corrillos que tendría más de 20 pliegos y que se estaba imprimiendo ya. También se comentaba entre el populacho el nombramiento de una Junta de Hacienda, compuesta por el Gobernador interino del Consejo, por otros

"". Esto confirma la teoría de que la interinidad del Gobierno del Consejo en la persona de su Decano era debida a la ausencia del Presidente de Castilla.

"". HEREDIA HERRERA, A., op. cit., pág. 187.

"". He aquí dos extractos de cartas de don Juan Escolano, agente del Consulado de Cargadores a Indias, remitidas al mismo Consulado. La primera tiene fecha de 19 de agosto: "El Consejo de Castilla está trabajando para dar brevemente al publico un manifiesto documentado de sus procedimientos en todo este tiempo de desorden y opresión; dicho Supremo Tribunal parece va de acuerdo, en quanto es posible, con las Juntas de las Provincias para la formación de la Regencia del Reyno que tanto interesa en el día parta la felicidad completa de esta monarquía, interin se decide la suerte de nuestro soberano." La segunda carta estaba fechada el 23 de agosto: "Se está imprimiendo el manifiesto que ha ofrecido el Consejo de Castilla, ocupará más de 20 pliegos y creó podrá remitirle por el correo próximo." (HEREDIA HERRERA, A., "Los acontecimientos políticos de agosto de 1.808, en Madrid, a través de la correspondencia de un testigo ocular", págs. 190 y 191).

dos Consejeros de Castilla, por los Condes de Castelar y Montarco, por don Vicente Ambrosio Aguirre, diputado de los cinco gremios mayores y por dos miembros más***.

Dos días más tarde, el 26 de agosto, el Consejo de Castilla dictaba providencia para que no se imprimiesen periódicos ni libro alguno sin la licencia del Consejo o del Juez de Imprentas. El motivo de esta resolución era, en palabras de un Consejero de Castilla, el cariz que había tomado la libertad de imprenta introducida por los franceses, pues en los periódicos se hablaba libremente contra los Reyes y la Nación. El Consejo deseaba por tanto volver a controlar este importante sector***.

El 29 de agosto el Consejo de Castilla recibió un oficio del que fuera Ministro de Justicia de José I, don Sebastián Piñuela. En él pedía al primer Tribunal de la Nación que pusiese en su Manifiesto una nota que justificase su conducta en tiempo del Gobierno intruso***. Entre otras cosas, exponía Piñuela lo siguiente: "También me sería fácil hacer ver las muchas veces que he defendido a V.I. y al Consejo, con otras cosas que me harían mucho honor si pudiera referirlas"; "el Sr. Don Antonio Villanueva sabe muy bien lo que le respondí cuando me preguntó confidencialmente sobre imprimir o no y circular la nueva Constitución, que yo no circulé sin embargo de haberseme mandado por tres veces dejando en mi Secretaría los tres mil ejemplares que se hicieron imprimir a cierto impresor francés"****.

***. HEREDIA HERRERA, A., op. cit., pág. 187.

***. A.N.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.958. Por Real Cédula expedida en Aranjuez el 3 de mayo de 1.805, Carlos IV puso a cargo de don Juan Antonio Melón, Ministro de la Real Junta de Comercio y Moneda, las competencias sobre imprentas, eximiendo al Consejo y a todos los demás tribunales del Reino de estas competencias. Por esta Real Cédula se creaba también un Juzgado Privativo de Imprentas, que asumiría estas competencias. Finalmente, por carta-orden de 16 de agosto de 1.808 fueron restituidas estas competencias al Consejo de Castilla.

***. Pedía que el Consejo insertase en su Manifiesto la siguiente nota: "El Consejo sabe que el Señor Don Sebastián Piñuela, que se ha quedado en Madrid, es buen español y tiene motivos para disculparle de haber firmado las órdenes que quedan copiadas en este manifiesto..." Sin embargo, parece que el Consejo no introdujo esta nota, ya que el 7 de septiembre del mismo año acordó sobreseer este expediente.

***. Más adelante añadía Piñuela: "Una de las cosas con que se ha acriminado mi conducta es por haberse estrechado demasiado al Consejo en las órdenes que yo le comunicaba. Prescindiendo de que los Secretarios no somos más que la voz

El caso Piñuela nos recuerda una cuestión polémica relativa a nuestras autoridades de la época: la mayoría continuaron en sus cargos bajo el Intruso o le juraron fidelidad, sin que más tarde les fueran exigidas responsabilidades. La cuestión de la obediencia debida fue planteada por algunos de los políticos perseguidos, aludiendo a que nadie quedaba exento de responsabilidad por los sucesos políticos de España de 1.808. El reducido número de empleados del Consejo que fueron apartados de sus plazas por motivos políticos parece avalar esta idea.

Aunque el Manifiesto del Consejo llevaba fecha de 22 de agosto, hasta los últimos días del mes no fue conocido por todas las autoridades de la Nación. Fue sin duda un documento histórico de primer orden, en el que con sumo detalle y en nada menos que 93 folios se recogía la conducta del Consejo en los últimos meses. No vamos a entrar a analizar en este lugar lo expuesto en este Manifiesto. Ya lo hemos repasado con detalle en los capítulos anteriores de este trabajo. Pero sí nos interesa en gran manera conocer cuál fue la reacción de aquellos a los que iba destinado el Manifiesto. Y nos interesa esta reacción, precisamente porque nos añade un dato más de opinión existente sobre la conducta del Consejo de Castilla: la opinión de sus contemporáneos, de los que vivieron los acontecimientos, que sin duda tendrían buenos elementos de juicio para valorar el comportamiento del Supremo Tribunal.

Podríamos agrupar estas reacciones en dos grupos: los que entusiastamente felicitaron al Consejo y aprobaron su conducta, y los que ignoraron el Manifiesto y a lo sumo dieron acuse de recibo de su recepción. En este segundo grupo se alinearon especialmente algunas Juntas provinciales, que habían acordado no aceptar ninguna orden más de los Tribunales de Madrid^{***}. Hagamos un repaso de las opiniones vertidas sobre el Consejo por las distintas autoridades -judiciales, locales, eclesiásticas, etc.- receptoras del Manifiesto. Este valioso material nos aporta

por donde se comunican las resoluciones así del Rey como de los Tribunales, sin poder dejar de hacerlo, y de que nunca se ha culpado a los que sirven de tales en ese mismo Consejo y en los demás, aún cuando hayan comunicado y expedido órdenes que contengan providencias que parezcan poco justas, pero lo cierto es que, aunque sin razón, se mira como delito el haber firmado yo las que quedan indicadas, porque no saben todos, como lo sabe V.I. y lo puedo hacer constar, que se me daban minutas y que no bastaba mi resistencia para dejar de firmarlas, pues me obligaban a ello porque pertenecían al Ministerio de mi cargo..."

^{***}. Estudiamos con detalle la respuesta de estas Juntas provinciales dentro de este Capítulo, en el apartado correspondiente a las relaciones entre las Juntas y el Consejo de Castilla.

sin duda muchas luces sobre el estado de opinión en las provincias libres de la ocupación francesa.

Así escribía al Consejo de Castilla el 14 de septiembre de 1.808 un Alcalde del Crimen de la Audiencia de La Coruña^{...}:

"...Más de cuatro veces se asomaron las lagrimas a mis ojos previendo la esclavitud de mi amada Patria en la tiránica opresión que sufría el Consejo. Pero así como mi sensibilidad me hizo probar estas amarguras, la misma me ha hecho sentir un placer al concluir la lectura del Manifiesto de V.A., que ya no creí percibir. Permítame por tanto V.A. que ya que en ese Santuario de la Justicia no ha resonado últimamente más que la horrorosa voz de los inurbanos satélites del Tirano de Europa, se oiga al menos una vez la reverente enhorabuena con que un Ministro patriótico felicita a la Patria, felicitando al Consejo porque respira ya libre de la opresión que le ha dado motivo para hacer notoria su constancia y prudencia..."

Por su parte, la respuesta de la Real Chancillería de Valladolid decía, entre otras cosas, lo siguiente: "...En uno y otro escrito advierten sus ministros haber descubierto el grado de prudencia que en las circunstancias más difíciles se había prometido de la sabiduría y cordura del augusto Consejo de la España..." (10 de septiembre de 1.808). Y la Audiencia de la Coruña, una semana después, afirmaba: "Tenemos el placer de hallar en el Manifiesto pruebas de inmortal heroicidad. Congratulamos pues a V.A. y le tributamos los sentimientos y homenajes de nuestra adhesión y de nuestro respeto."

Un regidor de Córdoba y miembro de la Junta escribía al Consejo disculpándose por no poder dar curso al escrito del Consejo, como sería su deseo, por prohibirlo aquella Junta Suprema.

El Corregidor de Avila, el 7 de septiembre, recogía por su parte la opinión popular sobre el Consejo en la Ciudad de Avila: "se extendieron voces de desconfianza hacia el celo del Consejo por el bien de la Nación y sobre su integridad. Eran frecuentes las conversaciones a nivel popular sobre este asunto y además bastante apasionadas. Sin embargo, el nuevo estilo con que se comunicaban las órdenes en el tiempo de la Regencia de Murat y de José, por el Consejo o por la Secretaría de Gracia y Justicia, daba la

^{...} A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2.

impresión de que eran arrancadas por la fuerza y así se interpretó por las autoridades abulenses. De esta manera decidieron no contestar a muchas y otras lo hicieron fríamente. Tampoco fueron publicadas muchas Reales Ordenes, especialmente desde que se observó el descontento que producía en el pueblo de Avila su publicación.

De los escritos que por entonces iban llegando al Consejo, se observa que muchos ciudadanos atribuían los desastres que ocurrían en España a la falta de medidas por parte del Consejo Real, o a la debilidad en aceptar mandar ejecutar -como decían- las que salían de una potestad ilegítima. Pocos comprendieron quizás antes la situación de opresión en que se encontraba sumido el Consejo de Castilla. Tras el Manifiesto, hubo al parecer un generalizado cambio de actitud, al menos en muchas de las autoridades, cuyos testimonios son la mejor absolución -por gente contemporánea- a la conducta del Consejo. Consideramos sin embargo, que los juicios vertidos sobre la conducta indigna del Consejo debieron dejar siempre un poso de duda a nivel popular, que se mantendría probablemente en las décadas siguientes. Esta difamación coadyubaría a proporcionar un estado de animadversión contra el Consejo, aprovechado por los partidarios de su supresión.

Sequimos con el repaso de estos testimonios. Recogemos aquí la respuesta del Corregidor de Toro: "Quedo enterado de cuanto contiene el referido manifiesto y convenido enteramente, aunque siempre lo he estado, de la sabiduría del Consejo y de la justificación de sus Ministros...6 de septiembre de 1.808." En términos similares se manifestaba el Ayuntamiento de aquella ciudad".

El Corregidor de Orense aseguraba al Decano del Consejo que "toda la ciudadanía (estaba) penetrada de los más íntimos sentimientos por Nuestro Soberano, como de la fidelidad de ese Supremo Consejo y entereza de todos los individuos que lo componen, sin embargo de la opresión en que se ha visto ha resistido con firmeza, despreciando el inminente riesgo a que tantas veces le expuso la tiranía del Gobierno francés de perder sus vidas." (11 de septiembre de 1.808). Esta firmeza del Consejo era también destacada por la Ciudad de Soria en un escrito".

"... "El Manifiesto es un testimonio de la sabiduría del Consejo y que califica su amor al Rey y la justa confianza que siempre le ha debido toda la Nación. Este Ayuntamiento lo reconoce así...6 de septiembre de 1.808" (A.H.N., Consejos suprimidos, Invasión francesa, legajo 5.525 núm. 2).

"... "Firmes entre los riesgos de perder su libertad y sus empleos, y serenos cuando veían sus familias amenazadas con el deshonor y la indiferencia...Si hubiera podido escuchar las voces con que mis capitulares lamentaban la falta de libertad del Consejo, trasluciendo en ellas y a sus

Finalmente dentro de este grupo de testimonios de autoridades territoriales destacamos la respuesta de la ciudad de Córdoba, dando gracias al Consejo por su conducta: "Por el Manifiesto que ha dirigido el Consejo ha visto los justos procedimientos en el tiempo que estuvieron en la Corte los franceses y lo expuesto que estuvo el mismo Supremo Tribunal por haber defendido los derechos de la soberanía de nuestro Rey, el Sr. Don Fernando VII; por todo lo cual da las gracias."

En un tercer grupo de documentos queremos reunir los abundantes testimonios de autoridades eclesiásticas que conserva el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Veamos algunos de mayor interés: así respondía al Consejo el Arzobispo de Badajoz: "...Me ha sido de particular satisfacción ver en el ejemplar del Consejo la integridad y firmeza con que se ha conducido ese Supremo Tribunal y que le son tan propias, como lo ha acreditado en todos los tiempos" (10 de septiembre de 1.808).

El obispo de Córdoba opinaba lo siguiente sobre la conducta del Consejo de Castilla: "...He visto con sumo gusto mío la heroica constancia con que este primer Tribunal de la Nación ha sostenido en circunstancias tan críticas aquel carácter de firmeza, de fidelidad a sus leyes y de celo por el bien de la Patria, con que en todos los tiempos se ha granjeado la estimación y la confianza universal" (8 de septiembre de 1.808).

Algunos testimonios reflejaban el estado de opinión existente en la calle, donde la actitud del Consejo fue tema de conversación y de polémica: "He leído con mucho gusto el Manifiesto de los procedimientos del Consejo Real...He sostenido su honor en las muchas ocasiones que se me han presentado con los principales fundamentos que contiene, y son obvios a los que hacen uso de la reflexión y amor a la justicia (Abad de Villafranca, 9 de septiembre de 1.808); "Lo he leído con el mayor gusto, pues veo en él confirmado cuanto he dicho en diversas ocasiones" (Obispo de León, 8 de septiembre de 1.808); "El Consejo en todo tiempo ha sido el Tribunal de la Nación. He visto algunos papeles

deseos que no fuesen obedecidas..." (13 de septiembre de 1.808). Por su parte, el regidor perpetuo de Mérida afirmaba con fecha 13 de septiembre: "los ciento dieciséis folios que contiene deben quedar grabados para la perpetuidad, de la fidelidad, resistencia arriesgada y resignación con que V.A. supo sufrir las maldades y opresiones causadas por los agentes del peor de los hombres..." Y el Corregidor de Vivero afirmaba en defensa del Consejo: "me ha sido de la mayor satisfacción haber hallado en él datos positivos con que contrarrestar a los que con ligereza se sobrepasan a criticar los justos procedimientos de ese respetable, fiel e íntegro Tribunal...13 de septiembre de 1.808." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2).

que pretendían desacreditar su entereza: pero papeles impresos, en donde no han visto la cara del enemigo, las exterminadoras langostas, vasallos ilegítimos de su Rey Napoleón..., como los que hemos tenido la inhumanidad y fiera sobre nuestras cabezas..." (Obispo de Segovia, 7 de septiembre de 1.808)***.

Hubo también algunas respuestas frías o afrentosas para el Consejo, aunque sin duda éstas fueron una minoría. Aparte de las de varias Juntas Provinciales - que estudiamos más adelante-, mencionaremos la de la Junta Suprema de Hacienda de la Coruña:

"Esta Suprema Junta aprecia el loable celo del Real Consejo, pero siendo notorio que desde el día 29 de mayo se declaró este Reino libre o independiente del yugo francés, jurando no obedecer ni reconocer más autoridad que la de nuestro muy caro y amado Soberano Fernando VII, sosteniendo sus derechos con las armas del poderoso ejército que mantiene en Castilla, no puede dudar ese Supremo Tribunal que nunca obedecería (una orden de José Bonaparte).

Constante este Reino y la Junta en sus principios puede V.S. asegurar al Real Consejo que no obedecerá ninguna disposición que emane de José Bonaparte, Intruso Rey de Nápoles, ni tampoco de otra autoridad que no sea de nuestro legítimo Soberano o de un Gobierno Nacional Central Provisional, y entre tanto que esto se realiza, debe obedecer sólo el instituido en este Reino..." (9 de septiembre de 1.808)***.

***. Entre los otros muchos escritos conservados, mencionamos finalmente tres más: El del Obispo de Urgel, fechado el 9 de septiembre: "He recibido y leído más de una vez con ansia el manifiesto sencillo y oportunísimo que en testimonio digno de la verdad será publicado... para que entienda la Nación que su integridad y fortaleza constituyen su carácter en el templo inviolable de la justicia"; el del Abad de Lao, fechado el 14 de septiembre: "He leído con asombro en vista de su resistencia y constancia heroica en el tiempo que duró su opresión por los pérfidos enemigos de nuestra España y del género humano, exponiendo a sus individuos a perder la vida por no adherir a las máximas de un gobierno intruso y capcioso..."; y la del Abad de Ripoll, de 19 de septiembre: "...los procedimientos de ese Tribunal, en todo conformes al celo, prudencia, lealtad y patriotismo que en todo tiempo le han caracterizado y granjeado la más alta estimación y respeto." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2).

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2.

h) Otras medidas del Consejo

El día 30 el Consejo de Castilla mandaba demoler todas las fortificaciones que habían dejado los franceses en el Retiro, excepto las que miraban a la Puerta del Casón^{***}. Al día siguiente, el Consejo de hacía eco de los saqueos y tropelías cometidos por las tropas francesas en toda la Península. Aquel mismo día también el Consejo pleno aprobó un Decreto en el que se pedía al Decano escribiese a los generales de los Ejércitos para que hicieran publicar proclamas a fin de que las tropas francesas se abstuvieran de cometer tropelías en los pueblos ocupados, conminándoles con que de lo contrario se procedería con los prisioneros por ley de represalia^{***}. También en aquella fecha aprobó el Consejo que se hicieran funciones de desagravios de los ultrajes hechos por las tropas francesas en los templos^{***}.

También el día 31 de agosto, con motivo de un oficio del General Castaños, acordó el Consejo la organización de una nueva Junta Central de Suministros de Víveres a las tropas nacionales, refundiéndose en ella los cargos de la Dirección de Reales Provisiones.

En el mes de septiembre continuó el Consejo de Castilla su labor de gobierno. A medida que se iban conociendo los horrores cometidos por los franceses en los

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2.

^{***}. Quizás una consecuencia de esto fue el abandono al que se sometió a los miles de prisioneros franceses aprehendidos tras la Batalla de Bailén, la mayoría de los cuales murieron antes y durante su confinamiento en la isla de Cabrera, aunque parece no había otro sitio donde pudiera dejárselos con custodia segura.

^{***}. El Consejo de Castilla y la Sala de Alcaldes asistieron con este fin en la iglesia de Santa María de la Almudena a una misa de desagravio al Santísimo Sacramento, que tuvo lugar el domingo 4 de septiembre de 1.808 (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 16).

pueblos ocupados, el Consejo tomaba medidas para su conocimiento y difusión por el público en general***.

El 2 de septiembre volvía el Consejo a convocar a los madrileños para crear otro Regimiento de Infantería de Línea, segundo de Voluntarios de Madrid***. Ese mismo día por la noche llegó a Madrid el General don Gregorio de la Cuesta, Capitán General de Castilla la Vieja. Ese mismo día invitaba también el Decano Arias Mon al recién llegado Ministro del Consejo Codina a unirse lo antes posible a su plaza de Consejero de Castilla***. El Supremo Tribunal aprobaba al día siguiente un decreto para que una diputación formada por los cuatro Ministros más antiguos del Consejo, y otra del Ayuntamiento de Madrid, pasasen a complimentar al General Cuesta***.

Entre otras medidas, el Consejo decidió escribir al Marqués de la Romana -destacado en Centroeuropa con tropas de élite españolas-, para informarle de los sucesos de España y pedirle que volviese a nuestro país con su Ejército lo antes posible***. Ese mismo día 3 el Consejo recibía un escrito del General inglés Lord Doyle, residente en Madrid, en el que proponía al Consejo una serie de medidas de tipo gubernativo y militar***. Por otro lado, en un bando se la Sala de Alcaldes, se mandaba que todos los franceses domiciliados o transeúntes que se hallasen en Madrid, se presentasen a sus respectivos alcaldes de barrio en el término de ocho días***.

***. Fruto de esto fueron algunos magníficos informes conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, que describen pueblo a pueblo las tropelías francesas.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 1.

***. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 250.

***. Anteriormente el Consejo había acordado medidas similares con motivos de la llegada a la Corte de los Generales de los Ejércitos de Valencia y Murcia, y con el de Andalucía (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.517 núm. 3).

***. El mensaje del Consejo lo llevó un correo inglés a Londres y de allí se remitió al Marqués de la Romana (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 24).

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.517 núm. 17.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.514 núm. 4.

El Consejo trató el día 7 de septiembre de los perjuicios que resultaban de no haberse elaborado ya el inventario, tasación y venta de los muebles que hubieran quedado en Madrid pertenecientes a las personas que habían huido con José Napoleón. Acordó, entre otras medidas, que las alhajas de estas personas fuesen inmediatamente reducidas a metálico en la Real Casa de la Moneda. También estudió el tema de las personas que habían seguido a José Napoleón en su huida y amplió la lista inicialmente elaborada***.

Unos días después*** en la Gaceta Extraordinaria de Madrid se informaba en un oficio enviado por el General Castaños al Decano Gobernador interino del Consejo, don Arias de Mon, comunicándole la rendición y capitulación del General Junot en Francia ante el ejército inglés***. Mon informó inmediatamente de esta buena noticia al Consejo pleno.

También estudió la Sala de Alcaldes las medidas a tomar para asegurar la vida y subsistencia de los franceses confinados. Los días 21 y 23 la Sala proponía medidas a este fin***.

Se conserva una larga serie de documentos-testimonio que reflejan la opinión popular en aquellos momentos***. Entre estos escritos, algunos fueron recibidos

***. Hasta el 13 de septiembre se habían secuestrado las casas de veintinueve personas (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.513 núm. 10).

***. El 10 de septiembre de 1808.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 22.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.514 núm. 4.

***. La documentación conservada por el Consejo de Castilla nos permite conocer muchos escritos y en ellos anécdotas que nos ayudan a pulsar la opinión popular sobre el Consejo en aquellos días de septiembre. Por ejemplo, el día 18 se daba un incidente, que refleja bien el estado del ánimo popular; a las once y media de la mañana, en la esquina de la calle de los Tintes "dos soldados con uniforme blanco, de los que uno parecía tener alguna graduación, aunque no llegaba a la de oficial, acompañado de considerable concurso, estaban parados delante de un cartel de toros, y con ademanes de furia y voces descompuestas, rompía el más graduado dicho cartel diciendo: 'Todo esto que dice es un engaño y no se debe permitir. No hay tal Supremo ni tal Consejo, así debe hacerse'. Y siguió haciéndolo pedazos con expresiones de cólera. Las gentes guardaron, por fortuna, silencio profundo;

directamente por el Consejo de Castilla. Uno de ellos fue especialmente famoso y comentado en aquella época. Nos referimos a una carta enviada por el Gobernador de Cádiz, don Tomás de Morla, al Secretario del Consejo de Castilla don Bartolomé Muñoz. Llevaba fecha de 30 de agosto de 1.808. En ella, Morla criticaba las pretensiones del Consejo de

pero alguno no dejó de decir que semejantes acciones insolentes no debían tolerarse. Un Ministro (del Consejo) que lo presencié y observé casualmente, se separó del concurso y aconsejó que se hiciera lo mismo, lo que los otros hicieron". Enterado de este incidente el General Castaños, comunicó al Consejo de Castilla su pesar por la acción de estos dos soldados y que había dado órdenes para localizar y castigar a estos soldados de forma ejemplar, para así dar al público y al Consejo la satisfacción que merecían (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.517 núm. 10). En esta línea hubo otro incidente mencionable, que tuvo lugar también en Madrid el día 23 de septiembre. Aquel día amaneció Madrid inundado de pasquines anónimos fijados en las calles contra el Ministro del Consejo don José Navarro. Los mencionados pasquines referían que si no se echaba a Navarro del Consejo de Castilla, el pueblo le ejecutaría. Se afirmaba también que era un traidor que mantenía correspondencia con Murat y con José Napoleón, y que era indigno de ostentar la presidencia de la Junta de Provisiones para los Ejércitos Nacionales. En su reunión de aquel día, el Consejo reconoció el patriotismo del Consejero Navarro y sus altos medios, pero le recomendó por su seguridad personal que abandonase Madrid (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 41). Sin embargo, este Magistrado pidió continuar en el ejercicio de sus derechos y permanecer en la Villa y Corte, lo que consiguió (DESDE VISES DU DEZERT, op. cit., págs. 250 y 251). De Navarro podemos añadir que había sido uno de los Ministros del Consejo que con más esfuerzo se había opuesto a prestar juramento a José. El mismo Consejo de Castilla le había encargado que trabajase en las dos últimas consultas sobre el particular, la primera junto con Colón y la segunda con Vilches. Asistió con el Decano y otros Consejeros a varias sesiones de la Suprema Junta de Gobierno. Parece que su postura de fiel patriota les valió fuertes amenazas de Mr. Frevill, tanto a él como a Vilches, por no seguir el partido francés. De estas amenazas dieron cumplida cuenta en el siguiente Consejo pleno. Había sido Presidente de la Junta de Suministros para las tropas francesas. Como los demás Consejeros de Castilla, no visitó a José Napoleón ni a sus Ministros, ni puso los pies en Palacio. Fue finalmente autor del "Manifiesto del Consejo al Senado conservador de Francia en demostración de la perfidia e iniquidades de su Emperador y la atroz conducta de sus ejércitos en España". También fue autor de la carta escrita por el Consejo al Rey de Inglaterra.

querer asumir el gobierno central"" y proponía un reconocimiento formal de la autoridad de las Juntas y la formación de una Junta Suprema Central"".

Otro escrito de origen popular, fechado el 26 de septiembre, nos ayuda a desgarnar la mentalidad del Consejo de Castilla sobre las nuevas ideas. En este escrito, un particular remite al Consejo un folleto de ideas liberales titulado "El voto de un español". Este impreso, de cuatro caras en octavilla, defendía la división de poderes y un gobierno controlado, empezando por el Rey, con un Consejo de Estado, un Senado y una renovación periódica de las Cortes. Contestó el Consejo de Castilla agradeciendo el envío de este impreso, "cuyo contenido es ciertamente escandaloso y perjudicial en gran manera, por la propagación de unas ideas tan detestables y opuestas a los buenos principios"". Pedía el Consejo a este particular que le remitiese todo papel que llegase a sus manos "porque interesa en ello el mejor servicio al Rey y de la Patria." Evidentemente, el Consejo de Castilla veía en estas ideas de origen francés, el conjunto de males que habían azotado España desde la invasión francesa. Sin duda perjudicó mucho a las ideas liberales el que su introducción en España se hiciera por primera vez de una forma tan traumática.

En esta línea también hubo un escrito al Presidente del Consejo el 30 de septiembre sobre los perjuicios que resultaban de la circulación de varios papeles impresos y sobre la necesidad de que fueran

"". "En la actualidad, ¿qué derechos tiene el Consejo Real para aspirar a mandar en soberano? ¿Son los que le da su supremacía en lo judicial? ¿Quiere reunir el poder legislativo y ejecutivo, con el que realmente tiene, para ser el mayor de los déspotas? ¿Piensa que jamás la nación llegue a tal ceguera que se someta en todo a una aristocracia de individuos de una sola profesión, y de un mismo interés personal?..." (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 52).

"". "La autoridad no puede nacer sino de quien la tiene, y es un hecho que no reside sino en las Juntas Supremas. Creada por éstas la Central, que sin duda será reconocida por todas las provincias, le quedan al Consejo Real y aún a los demás Tribunales Supremos las preciosas funciones de ser como los reguladores de ella: sus luces y experiencia le sugerirán ideas, y 'morigerarán' sus resoluciones: su prudencia e imparcialidad le darán confianza." (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 137).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.991 núm. 1.

respetadas las leyes en esta materia***.

Al día siguiente el Consejo aprobó un Plan de Milicias Urbanas para la guarnición y defensa de la Villa y Corte de Madrid, propuesto por la Junta de Armamento***. Tres días después, el martes 4 de octubre, hubo otra rogativa pública en Madrid organizada por el Consejo, desde la iglesia de Santa María de la Almudena hasta la de Atocha***.

Desde la constitución de la Junta Central se redujo considerablemente el papel del Consejo en el gobierno. En comparación al intenso mes de agosto, en octubre apenas tomará el Consejo de Castilla algunas medidas de relieve y en noviembre se dedicará fundamentalmente a organizar la defensa de Madrid***. Sí fueron importantes las relaciones mantenidas con la Junta Central y con las Juntas Provinciales, que estudiamos en subcapítulos independientes.

***. A.H.N., Estado, legajo 28 A, Papeles de la Junta Central, expediente número 2.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.516 núm. 21.

***. A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.398, año 1.808.

***. El 9 de octubre la Junta Central pedía al Consejo que tomase medidas contra la expedición de papeles sediciosos y le remitía algunos ejemplares (A.H.N., Estado, legajo 28 A, "Papeles de la Junta Central", expediente núm. 2). A finales del mismo mes, el 31 del mismo mes aprobaba el Consejo un Decreto para que se tuviera por festiva la conmemoración de los fieles difuntos y en el mismo fueron esteradas anualmente las Salas del Consejo (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 49). Más adelante, el 23 de noviembre el Consejo aprobaba la propuesta del Ayuntamiento de Madrid para recibir y obsequiar a las tropas inglesas que iban a entrar en la Corte (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.521 número 14).

2. El Consejo de Castilla y las Juntas Provinciales

El Marqués de Ayerbe escribió en sus Memorias*** lo siguiente:

"Ya hacía varios días que los franceses habían dejado Madrid cuando se presentó en esta Corte un diputado de la Junta de Sevilla con la banda encarnada, que es su distintivo, lleno de vanidad y haciéndose el jefe de la Nación. Comenzaron aquí los cuentos con el Consejo de Castilla que, o bien quería mandar en ausencia de S.M. o bien que se observase la ley de Partidas, la cual establece que en menor edad del rey se nombre un regente o un consejo de Regencia de tres o cinco personas.

Aplicándola al caso, parece que esto es lo que debería haberse hecho; pero, por una parte, el Consejo se había desacreditado con haber obedecido y comunicado las órdenes de Murat y de José Bonaparte, y por otra cada provincia quería erigirse en soberana y mandar independientemente en su territorio, o que las otras le reconociesen superior. Asturias, Valencia y Sevilla lo pretendían con más ahínco."

Sin duda el fenómeno de las Juntas provinciales ha sido objeto de muchos estudios y lo será de muchos más. En este apartado nos interesa especialmente la relación de estas Juntas con el Consejo de Castilla, y circunscrita además esta relación a un período muy limitado: el que va desde la salida de los franceses de Madrid el 1 de agosto, hasta la supresión del Consejo por Napoleón a principios de diciembre. Sin embargo, debemos hacer obligada referencia al nacimiento de estas Juntas y sus primeros contactos con la autoridad legítima establecida en Madrid, representada por el Consejo de Castilla.

***. AYERBE, Marqués de. "Memorias", capítulo IV, pág. 249.

Amenazada España de convertirse en una provincia francesa, y ante el vacío de poder creado por la prisión de la Familia Real en Bayona y la opresión de las autoridades del gobierno central en Madrid^{***}, se constituyeron en muchas localidades una Juntas. Estas asambleas, de cierto carácter revolucionario, estaban formadas por elementos heterogéneos unidos por la causa común de la lucha contra el francés.

Desde la constitución de las primeras Juntas en el mes de mayo, tras los luctuosos sucesos del día 2 en Madrid, el Consejo de Castilla tuvo abundantes informes sobre los movimientos y operaciones de las mismas. En diversas representaciones a Murat y a José, el Consejo mencionaba las convulsiones de las provincias, y el Gobierno intruso pedía con frecuencia al Consejo que llamase al orden a los insurgentes.

Si inicialmente la formación de estas Juntas debió ser vista con buenos ojos por el Consejo de Castilla, como una forma de organizarse contra el francés, sin duda contemplaba también los riesgos que estos polos de poder representaban: anarquía, desgobierno, ambiciones, carencia de una autoridad central reconocida por todos... Quienes de forma espontánea asumieron el poder en un territorio, al margen de los procedimientos legales y de una específica regulación jurídica, pondrían dificultades más adelante para ceder estos poderes.

El Consejo de Castilla mantuvo algunos contactos esporádicos en los primeros momentos con estas Juntas. Tras dos meses y medio de relativo aislamiento, observó el Consejo que las disposiciones de estas autoridades hacia el Supremo Tribunal habían cambiado; sin duda el Consejo de Castilla había caído en un profundo descrédito, por los bandos y edictos publicados con su nombre. La secular autoridad del Consejo de Castilla se había deteriorado considerablemente y había perdido buena

^{***}. BULDAIN JACA afirma lo siguiente: "(Las Juntas provinciales) surgieron como consecuencia del vacío de poder que supuso la ausencia de la Monarquía borbónica del suelo español, la usurpación napoleónica y la negativa a seguir los dictados de la potencia invasora, bien directamente, bien a través de las autoridades legítimas que, como el Consejo de Castilla, se afrancesaron". (BULDAIN JACA, "Régimen político...", pág. 58). Matizando la afirmación del afrancesamiento del Consejo, que ya hemos visto en su momento que no fue tal, si destacaríamos esa sublevación de ánimos que apunta Buldaín, por no querer someterse las provincias a una potencia invasora: de ahí también el mismo nombre de la guerra que seguidamente estalló: Guerra de la Independencia.

parte de su reconocido prestigio y autoridad".

Un folleto" anónimo popular de aquellos días estudiaba el origen y las facultades de las Juntas Provinciales. Recogemos ahora un extracto, en el que se defiende la conducta del Consejo de Castilla frente a las acusaciones vertidas entonces por aquellas Juntas:

"Ya habrás visto en algunos impresos que el Consejo está trabajando un Manifiesto a la faz de toda la Nación", para conservar su nombre respetable a la posteridad, por lo que no me extiende a decirte nada de su conducta inexorable, ni de la falsedad con que el intruso Gobierno francés hacía publicar en nuestros papeles, que el Consejo daba cumplimiento a todos aquellos desbarros; pero sí haré una reflexión que me parece ha de tener lugar en los ánimos desinteresados: si el Consejo no hubiera tardado en sus deliberaciones, ni dado lugar a que algunos de nuestros débiles Ministros, vendidos a la Francia, le increpasen públicamente su morosidad, en consentir la publicación de tanto infame decreto. ¿Habría jamás la Nación entera llegado por sus pasos a aquel grado de entusiasmo, con que se ha hecho invencible? ¿Si el Consejo no hubiera hecho retardar la partida de las tropas francesas a las Provincias, con las lisonjeras esperanzas que les hacía concebir la autoridad respetable de tan Supremo Tribunal, habrían tenido tiempo éstas para armarse, y levantarse en masa? ¿Y esos Vocales de las Juntas Supremas habrían tenido valor para ponerse a su frente, llegando a ser de este modo objeto de la ira francesa? ¿Si el Consejo hubiera desde un principio abandonado la Corte, y establecido su asiento en alguna de las provincias (que es el grande cargo que muchos le hacen), no habrían corrido los ejércitos franceses, como perros rabiosos en su seguimiento? ¿Y qué resistencia se les habría opuesto? ¿No habría sido éste un acto de rompimiento que hubiera facilitado a los franceses la conquista, que ya es

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 257.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527 núm. 13, "Dictamen que un Amigo da a otro sobre el origen y facultades de las Juntas Supremas de las Provincias, y cómo y por quiénes deben nombrarse los Vocales de la Suprema del Reyno, en satisfacción al manifiesto de Sevilla de 3 de agosto", folios 8 y 9.

"" Por las referencias que da este folleto, debió ser escrito dentro de las tres primeras semanas del mes de agosto de 1.808, por lo que sólo por la fecha de su elaboración - todavía no era conocido el Manifiesto del Consejo-, tiene para nosotros un valor documental de primer orden. Sus argumentos coincidirán plenamente con los expuestos por el Consejo en su Manifiesto exculpatorio.

imposible?"". Los mismos franceses conocen muy bien, que en el mes de mayo, antes de las renunciaciones, y en aquellos mismos días, debieron haber marchado sus tropas, y tomado posesión de las capitales de las provincias. Desengáñate amigo si es que pensabas de otro modo, todo ha contribuido a que éstas, llenas de valor y entusiasmo, y robustas de fuerzas, hayan destrozado al enemigo, haciéndole huir vergonzosamente, rindiendo a la España los laureles y triunfos, ganados en catorce años de victorias. Por último, ¿quién tiene facultades para desautorizar e ilegítimizar al Consejo? Pregunto, ¿qué habría hecho la Nación, si el Rey hubiera querido suprimir el Consejo? Yo no sé que nadie en el Reino tenga más autoridad que el Rey..."

Este folleto expone con claridad las críticas que vertieron entonces las Juntas provinciales contra el Consejo de Castilla, al que juzgaban de afrancesado y traidor. Sin embargo -aunque ya abundaremos más adelante en este punto-, ninguna de ellas tenía la legitimidad legal del Consejo de Castilla ni eran enteramente representativas de los territorios que gobernaban. Pero por otro lado, es comprensible que su reacción inicial ante los mandatos del Consejo fuese de desconfianza, conocidos los bandos que el Supremo Tribunal había circulado los meses anteriores.

Lo cierto es que tras la retirada de los franceses de Madrid, el Consejo de Castilla tomó entonces las riendas del gobierno y quiso someter a su obediencia a las Juntas provinciales"". El día 4 de agosto el Consejo

"". Ver nota anterior. Esta afirmación del folleto está muy acorde con la euforia vivida en Madrid en las primeras semanas de agosto de 1.808.

"". BAYO, E.K., "Historia de la vida...", op. cit., tomo I, pág. 203. Bayo afirma que el Consejo proclamó el principio de que en él residía la facultad soberana. Sin embargo, esta afirmación, que siguen otros autores, no es del todo cierta. En sus declaraciones tras el abandono de la Corte por los franceses, no aparece en ningún caso una afirmación semejante, ni tan siquiera una conducta que lo aparentase. El Consejo, eso sí, se comporta ciertamente como la máxima autoridad del Estado y solicita la colaboración de las Juntas. Esto mismo es lo que parece indicar la Junta Suprema de la ciudad de Valencia cuando indicaba: "Sin monarca, sin familia real que supla sus veces, sin junta suprema de gobierno... es indispensable que la autoridad suprema resida en el Consejo, a quien compete el gobierno interior del Reino por la ley y por la constitución ("Manifiesto de la Junta Suprema de la ciudad de Valencia comunicado a las demás del reino sobre la necesidad de que la Junta Central de gobierno de España e Indias se componga de diputados de las provincias unidas al Consejo de Castilla", Valencia 8 de agosto de 1808, A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 2; también en ARTOLA, M., "Orígenes de la España Contemporánea",

remitía un escrito por correo extraordinario"" a las Juntas de Gobierno establecidas en las provincias"", en el que les informaba de la salida repentina de las tropas francesas de Madrid y les exhortaba a enviar diputados que viniesen a tratar con el Consejo de Castilla sobre el bien general"". En su escrito, el Consejo explicaba haber estado sin libertad y manifestaba su acendrada lealtad al Monarca legítimo, así como el no haber reconocido a José I dentro de lo que en sus manos fue posible"".

Sabemos que la mayoría de estas Juntas provinciales contestaron al Consejo de Castilla"". La Junta de la Coruña lo hizo el día 1, así como la de Oviedo; antes lo había hecho ya la de Valencia, el día 8, y la de Murcia el 9; la de Granada contestó el día 11 y la de Sevilla el 12. Y así varias Juntas más"".

tomo I, págs. 156 y ss.). Por otro lado apunta al respecto Sánchez-Arcilla que al Consejo de Castilla no le hacía falta proclamar expresamente el principio de que en él residía la facultad soberana, ya que en ausencia del Rey era depositario de tal soberanía.

"". Correo extraordinario era correo urgente.

"". Concretamente a las establecidas en Sevilla, Zaragoza, Badajoz, Coruña, Oviedo, Valencia, Cataluña y Murcia. Y parece que alguna más también lo recibió, como la de Granada.

"". "Aussi le Conseil de Castille invita-t-il les juntas à envoyer des représentants à Madrid pour y constituer un organisme central de gouvernement. Or, l'impopularité du Conseil était si grande, que sauf une, toutes les juntas lui répondirent qu'il n'avait plus aucune autorité, car son zèle patriotique était de fraîche date. Autrement dit: aux Résistant d'organiser la résistance." (BRUGUERA, F.G., "Histoire Contemporaine d'Espagne", 1.789-1.950, Editions Ophrys, Paris 1.953, pag. 107).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión francesa, legajo 5.519 núm. 1.

"". Así comenta Bayo las contestaciones de las Juntas: "Desoyeron éstas indignadas sus mandatos, y sólo convinieron para centralizar el poder en que se formara una Junta Suprema compuesta por los delegados de las mismas juntas." (BAYO, E.K., op. cit., tomo I, pág. 203.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 1. No hemos encontrado las respuestas de las Juntas de Córdoba y de Zaragoza, que pudieron no contestar. También respondieron al Consejo de Castilla los generales que recibieron el correspondiente escrito del Consejo de Castilla: no aparecen las contestaciones de los

Al parecer, las contestaciones de estas Juntas no fueron en mayoritariamente complacientes hacia el Consejo. Así se desprende un informe suyo de 30 de septiembre del mismo año: "Las contestaciones de las Juntas no fueron todas sinceras, ni conformes entre sí, ni correspondientes en sus expresiones a la dignidad y respeto que se merece este Tribunal. Sin embargo, todo lo disimuló por el bien de la paz y por el amor a la unión, entendiendo que no era conveniente en aquella época de insubordinación resistir a los quiméricos planes y fantásticos proyectos de las Juntas, cuyos pasos ha ignorado el Consejo en el largo tiempo que ha transcurrido con grave detrimento de la Nación, hasta la instalación de la Suprema Central Gubernativa del Reino, que se efectuó el 25 del corriente y se hizo saber al Consejo por medio del Duque Presidente en el 26 del mismo."***

Estas respuestas de las Juntas no fueron del todo sinceras, afirmaba el Consejo. Quizás fueran redactadas por el propio temor y respeto que les infundía la autoridad del Supremo Consejo de Castilla***. Sin embargo, también hubo muchas Juntas que no dudaron en increpar con claridad al Consejo: la de Galicia no solamente tachaba a cada uno de sus Consejeros de ser adictos a los franceses, sino que echaba en cara al Cuerpo entero el haber sido el más activo instrumento del usurpador; por su parte, el general Palafox le respondía severamente que "ese Tribunal no ha llenado sus deberes"; y la Junta de Sevilla, en su manifiesto del día 3 vertía también fuertes improperios: le acusaba "de haber obrado contra las leyes fundamentales, (...) de haber facilitado a los enemigos todos los medios de usurpar el señorío de España, (...) de ser en fin una autoridad nula e ilegal, y además sospechosa de haber cometido antes acciones tan horribles que podían calificarse de delitos atrozísimos contra la Patria..."***.

No debió sorprender mucho al Consejo la actitud recelosa de las provinciales. Pero debieron impactar en el ánimo de este prestigioso Tribunal unas acusaciones a las que evidentemente no estaba acostumbrado. Por ello mismo decidió el Supremo Tribunal inmediatamente enviar a todas las Juntas provinciales un Manifiesto que explicara la conducta del Consejo en los últimos meses, al que ya hemos hecho varias referencias.

generales Castaños, Reding, Palafox y Galluzo.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 4, "Sobre la arbitrariedad de las Juntas Provinciales", folio 6.

***. MARTINEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág. 162.

***. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo II, págs. 88 y 89.

Aparte de ello, el Consejo de Castilla continuaría sus contactos con las Juntas. Fueron constantes las cartas y contestaciones a las recibidas durante todo el mes de agosto***.

Sin duda el espíritu legalista del Consejo y su respeto por las leyes no veía con buenos ojos unas Juntas creadas espontáneamente, contra la expresa disposición de las leyes, que enfrentándose al Consejo de Castilla, hacían caso omiso de sus disposiciones***. La conducta de las Juntas suponía, por tanto, también una cierta actitud revolucionaria contra las instituciones del Antiguo Régimen. Sin embargo, la actitud de las Juntas respondía a motivos evidentemente comprensibles y justificables***, como ya hemos visto anteriormente. Pero estos motivos se hacían ya cuestionables tras la liberación de Madrid y de sus Tribunales:

"ya en libertad estas autoridades al retirarse los franceses de Madrid, ¿era lícito a las Juntas seguir gobernando, imponer contribuciones, abrir empréstitos, embargar las rentas, disponer de los correos, proveer empleos, despojar empleados, formar cámaras y secretarías de estado, conferir prebendas y beneficios?"***.

Evidentemente, una vez detentado el poder era costoso volverlo a entregar, sobre todo si había habido motivos de fondo para no reconocer al Consejo anteriormente.

No todas las Juntas mantuvieron una oposición

***. Ver A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 1.

***. Podríamos aceptar la distinción de dos momentos en la actuación de estas Juntas, que hace Martínez de Velasco. Hasta la batalla de Bailén o quizás un poco más adelante, la legitimidad de estas Juntas es aceptada por todos e indiscutida; después empiezan a plantearse serias dudas y se ve como necesario la creación de una autoridad central soberana. (MARTÍNEZ DE VELASCO, A., "La Formación de la Junta Central", pág. 96).

***. Apunta Martínez de Velasco que este enfrentamiento durante los meses de junio y julio era plenamente justificable, ya que el Consejo de Castilla, al transmitir todas las órdenes y decretos del gobierno intruso, de hecho y casi de derecho había dejado de reconocer a Fernando VII (MARTÍNEZ DE VELASCO, A., op. cit., págs. 99 y 100).

***. "Un ermitaño de Montserrat al futuro Regente o Presidente de la Suprema y Soberana Junta Central de España e Indias", págs. 18 y 19, año 1808, obra citada por MARTÍNEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág. 98.

formal al Consejo de Castilla. En la Junta Suprema de Valencia fue leída el 5 de agosto una conocida memoria en defensa de la conducta del Consejo Real^{***}. Tras denominarle "el monumento más sagrado y el más digno que nos ha dejado la antigüedad"^{***}, destacaba cómo la mordacidad y la intriga intentaban representar al Consejo de Castilla como culpable. Sin embargo, su honor sería restablecido cuando fueran mejor conocidas sus operaciones. "Para decidir si el Consejo de Castilla ha faltado o no a sus deberes, es preciso conocerlos"^{***}. Tras desarrollar en varias páginas la historia y glorias del Consejo, estudiaba las funciones del Supremo Tribunal, que resumía en 'la guarda y conservación de las leyes'. Sin embargo -añadía la memoria-, eran funciones consultivas y no ejecutivas y carecía de fuerza para hacer cumplir las leyes a los Reyes si se separaban de ellas. Destacaba este escrito el carácter gallardo y noble del Consejo, que supo ejercer fielmente sus funciones en difíciles circunstancias y que supo oponerse con firmeza, dentro de su papel, al gobierno intruso^{***}.

Otras Juntas manifestaron su oposición. La de Mallorca decidía no obedecer más que a los decretos del Consejo que ella juzgase útil su publicación. Por su parte, la Junta de Murcia respondía irónicamente que hacía más de

^{***}. "Partidarios del cuerpo mixto -Consejo y Juntas- lo fueron únicamente el Consejo y la Junta de Valencia. Conocemos ya el llamamiento hecho por el primero en 4 de agosto, y también hemos citado el Manifiesto de la Junta de Valencia de 8 de agosto, que supone la plena aceptación de la doctrina del Consejo, doctrina que se perfilará en el Plan de Arias Mon..." (ARTOLA, M., "Orígenes de la España contemporánea", pág. 172). Cfr. también "Memoria leída en la Junta Suprema de Valencia por uno de sus vocales en defensa de la conducta del Consejo Real en las actuales circunstancias", en A.H.N., Estado, legajo 70-I, documento 173.

^{***}. A.H.N., Estado, legajo 70-I-173, "Memoria leída en la Junta Suprema de Valencia por uno de sus vocales...", op. cit., pág. 2.

^{***}. Op. cit., pág. 4.

^{***}. La posición de esta Junta se vio corroborada por el Manifiesto que publicó el mismo día (MARTINEZ DE VELASCO, A., op.cit., pág. 163). Sin embargo, la Junta de Valencia cambiará pronto de actitud con respecto al Consejo de Castilla: en una carta dirigida a la Junta de Sevilla, fechada el 16 de agosto, atacará a los miembros del Consejo de Castilla. Creemos que debió influir en ello la propia actitud hostil de la Junta de Sevilla así como el ambiente de opinión generalizado contra el Consejo, que debió hacer comprender a la Junta de Valencia que se encontraba sola en su apoyo al Consejo de Castilla.

un mes que las Juntas provinciales soñaban organizar un gobierno central y aunque prometía el envío de tropas a Madrid, pedía que el ejército se hiciera cargo del gobierno de Madrid y que los Tribunales suspendieran toda providencia general gubernativa hasta la formación completa de la Junta Central y General del Reino***.

La de Jaén también contestó al Consejo. En su misiva afirmaba que ya se estaba entendiendo con la Junta de Sevilla y por tanto no podría ejecutar inmediatamente las órdenes del Consejo***. Otras, como la de la de Extremadura respondió por un simple acuse de recibo***. Ante una nueva carta del Consejo, contestó esta Junta agradeciendo al Consejo su moderación y ofreció su colaboración. Una tónica parecida se observó en las Juntas del Norte de España***.

Ofrece para nosotros especial interés la respuesta de la Junta de Sevilla, constituida ya entonces

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 5, "Oficio de la Junta Suprema de Murcia al Decano del Consejo de Castilla", 9 de agosto de 1.808.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 7, "Oficio de la Junta Suprema de Jaén al Decano del Consejo de Castilla", 14 de agosto de 1.808.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 6, "Oficio de la Junta Suprema de Extremadura al Decano del Consejo de Castilla", 19 de agosto de 1.808.

***. Por su parte, la Junta de Granada, que también había recibido el oficio del Consejo de Castilla, contestó a su vez con otro oficio en el que se limitaba a notificar que desde tiempo atrás estaba preparando con las demás Juntas la reunión de una Central (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 12, "Oficio de la Junta Suprema de Granada al Decano del Consejo de Castilla", 13 de agosto de 1.808); la Junta Superior de Galicia dio acuse de recibo de la circular del Consejo y le felicitó por la salida de los franceses de Madrid que le devolvía la libertad. Pero manifestó al Consejo que acordaría lo conveniente para el servicio de su Soberano el Sr. don Fernando VII" (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 8, "Oficio del reino de Galicia al Decano del Consejo de Castilla", 16 de agosto de 1.808); la Junta de Asturias respondió cortésmente que se encontraba comprometida con las Junta y la comisaría inglesa de Galicia para buscar un gobierno único, y se opuso a que ninguna otra autoridad distinta de la suya fuera reconocida en el Principado (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 11, "Oficio de la Junta Suprema del Principado de Asturias al Decano del Consejo de Castilla", 10 de agosto de 1.808).

como la más importante de entre las formadas en toda España y que había hecho reconocer su autoridad por todas las Juntas de Andalucía***. Ante una respuesta llena de ironía, en la que afirmaba que las Juntas procederían conforme a sus ideas, el Consejo contestó duramente que él nunca había dejado de cumplir con su deber: que correspondía la nación decir bajo qué gobierno quería ella vivir y que el Consejo no pretendía asumir otro papel que el que la nación le encomendase. La Junta de Sevilla no respondió y continuó gobernando Andalucía con las Juntas locales de Ronda, Córdoba, Jaén y Ciudad Real***. Como es conocido, esta Junta de Sevilla, aunque prestó indudables servicios, aspiraba a ser Junta Suprema de España e Indias, y el aglutinante de las demás Juntas. Por ello mismo, su recelo ante la propuesta del Consejo de Castilla debía ser mayor***.

Estamos de acuerdo con la opinión de Martínez de Velasco sobre que la oposición de las Juntas era propiamente al Consejo de Castilla y no a las instituciones del Antiguo Régimen, como defiende Miguel Artola en "Orígenes de la España Contemporánea"***. Las Juntas estaban

***. En su Manifiesto del día 3 de agosto esta Junta atacaba despiadadamente al Consejo de Castilla.

***. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 259 y 260. La Junta de Sevilla debió sentirse herida por el oficio del Consejo, considerando además su pretensión a ser considerada como la Suprema Junta de la Nación. Así, en una carta enviada a la Junta de Valencia se negaba a que la futura Junta Central se reuniese en Madrid y se lamentaba que el Consejo llamase a las Juntas Supremas sólo "Juntas provinciales" (MARTINEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág. 163).

***. Es interesante lo que no relata el Marqués de Ayerbe en sus Memorias: "(Tras Bailén) Ya hacía diez días que los franceses habían dejado Madrid cuando se presentó en esta Corte un diputado de la Junta de Sevilla con la banda encarnada, que es su distintivo, lleno de vanidad y haciéndose el jefe de la nación. Comenzaron aquí los cuentos con el Consejo de Castilla que, o bien quería mandar en ausencia de S.M. o bien que se observase la ley de Partidas, la cual establece que en menor edad del rey se nombre un regente o un Consejo de Regencia de tres o cinco personas. (...) Aplicándola al caso, parece que esto es lo que debería haberse hecho; pero, por una parte, el Consejo se había desacreditado con haber obedecido y comunicado las órdenes de Murat y de José Bonaparte, y por otra cada provincia quería erigirse en soberana y mandar independientemente en su territorio, o que las otras le reconociesen superior. Asturias, Valencia y Sevilla, por haber derrotado al enemigo, lo pretendían con más ahínco." (AYERBE, M. de, "Memorias", BAE tomo XCVIII, capítulo IV, pág. 249).

***. ARTOLA, M., op. cit., tomo I, págs. 149 y ss.

molestas por la aparente conducta del Consejo y le creían ahora carente de legitimidad para asumir el mando supremo. Pero no parece haber nada más que esto.

Por otro lado, las Juntas se mostraban incómodas de que la formación de la pretendida Junta Central estuviera unida al Consejo de Castilla^{***}.

A mediados de agosto, la tónica general continuaba siendo de oposición al Consejo de Castilla. Así, la Junta del Reino de Galicia en su sesión del 20 de agosto ordenaba al Real Acuerdo de La Coruña que "las cédulas, provisiones y órdenes que se comuniquen por aquel Tribunal no se pongan en ejecución, sin que pasen primero por este Reino."^{***} Evidentemente, como apuntaba Desdevises^{***}, el Consejo de Castilla no podía ver las cosas con optimismo: para los magistrados del Consejo, el régimen de Juntas equivalía a la anarquía pura: en Tembleque, un secretario de la Junta de Sevilla había declarado al ayuntamiento que no tenía que obedecer ninguna orden del Consejo de Castilla; o por ejemplo, el Comandante del Campo de San Roque había escrito a don Bartolomé Muñoz, titulándole "Secretario del antiguo Consejo de Castilla".

Sin embargo, el Consejo Real era consciente de la popularidad de las Juntas y de la necesidad de extremar una vez más la prudencia^{***}. En todo caso, el

^{***}. Esta idea -afirma Martínez de Velasco- fue ya observada por el Teniente Torrado el 14 de agosto cuando escribía al Reino de Galicia: "por ahora me contento con decir no les acomoda que la Junta esté unida al Consejo de Castilla" (A.H.N., Estado, legajo 68-A-6, citado por MARTINEZ DE VELASCO, A., op. cit., págs. 166 y 167).

^{***}. A.H.N., Estado, legajo 76-A-3, Actas del Reino de Galicia, sesión del 20 de agosto de 1.808.

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 264

^{***}. Así se lo pedía, por ejemplo, el Gobernador de Cádiz, en un escrito fechado el 9 de septiembre y remitido al Consejo de Castilla en contestación a su Manifiesto. Decía entre otras cosas lo siguiente: "...su lectura me ha llenado de la mayor satisfacción, así porque en él se prueba la rectitud y fidelidad del Consejo, como porque manifiesta al fin sus buenas disposiciones para la erección de una Junta Central y de Regencia. (...) El Consejo solo, con su mucha prudencia, plegándose cuanto fuere necesario y dando ideas sanas podrá elevar esta gran obra. Más nunca aprobaré el que se dirija mientras subsistan las Juntas Supremas a particulares que estén bajo sus órdenes. Este método, como ya he insinuado en mis anteriores cartas, irritará a las Juntas y sólo puede servir a causar desavenencias..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525

Consejo subsistía con la misma representación y atribuciones, y su autoridad -aunque dañada-, había sido reconocida mayoritariamente por Juntas y generales, de lo que era prueba evidente las comunicaciones que le hacían^{***}. El Consejo de Castilla sabía que convenía la formación de un Gobierno Central -así lo había propuesto en su circular del día 4-, y que él mismo no podía ser la máxima autoridad del Estado ni sería reconocido como tal, por lo que se vio forzado a ceder^{***}.

A finales del mes de agosto el Consejo remitía a las Juntas provinciales el conocido Manifiesto exculpatorio. En él manifestaba que la autoridad suprema debía depositarse "en la forma y modo que estime la Nación misma en Cortes, o por medio de diputados de las Juntas y de las Provincias que no las tengan, en las personas o cuerpos que elija y que el Consejo será el primero en reconocer"^{***}. El Consejo, consciente de que no podía ser la autoridad suprema aglutinadora de todos los representantes del a Nación y que convenía inmediatamente la formación de un cuerpo central representativo con autoridad sobre todas las Juntas.

Un nuevo capítulo de las relaciones entre las Juntas y el Consejo de Castilla se abrió con el Manifiesto del Consejo de finales de agosto. En las semanas siguientes se agolparon en el Palacio de los Consejos escritos de muy diversas autoridades locales y provinciales mostrando su satisfacción -y en algún caso también su indiferencia- ante lo expuesto en este escrito. Mencionaremos aquí, por tanto, algunos de estos escritos, en donde incluiremos también documentos de autoridades locales que destacan por su

núm. 2).

^{***}. MARTINEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág. 133. Artola por su parte defiende que en realidad existía un radical divorcio entre el Antiguo Régimen -representado por el Consejo de Castilla- y el Nuevo de la Juntas provinciales, cuyo resultado fue una tensión constante, una guerra sorda en la que el Consejo de Castilla saldría muy mal parado (ARTOLA, M., "Orígenes...", tomo I, pág. 163).

^{***}. Señala Artola cómo el Consejo renunció a partir del 27 de agosto a sus pretensiones de gobernar, "al proponer la convocación de unas Cortes o la creación de una Junta Central (...). Ya no se trata de atraer a su seno a los vocales de las Juntas, sino que acepta que éstas formen un gobierno supremo, al cual se someterá, y bajo cuya égida espera recobrar sus funciones administrativas, económicas y judiciales." (ARTOLA, M., "Orígenes...", págs. 163 y 164).

^{***}A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 27. Cfr. al respecto también ARTOLA, M., "Orígenes...", op cit., pág. 164.

interés histórico, al reflejar la opinión popular sobre los sucesos de los últimos meses. Estas respuestas se fueron recibiendo a lo largo del mes de septiembre.

De los escritos de las Juntas vamos a mencionar los de las Juntas de Murcia, Córdoba, Cuenca, La Coruña, Badajoz, León y la respuesta de la Villa de Daimiel.

La Junta Suprema de Murcia reconocía en su contestación la opresión a la que se había visto sometido el Consejo de Castilla bajo el gobierno intruso¹⁰⁰:

"Así como esta Suprema Junta oyó con la mayor sorpresa y sentimiento que algunos de los individuos que componen ese Supremo Tribunal prestaron escandalosamente el juramento de fidelidad al intruso Rey, así ha tenido la más completa satisfacción cuando se ha enterado del manifiesto que ha formado y le ha dirigido por su mano, relativo a demostrar documentalmente la rectitud de intención que ha gobernado en todos los angustiosos momentos de la opresión, y penetrada de la notable diferencia que distingue a una voluntad forzada de la que obra en plena libertad, queda combinada de la fidelidad y amor que siempre ha caracterizado al Consejo...10 de septiembre de 1.808."

Un Regidor de Córdoba escribía al Consejo el 7 de septiembre manifestando su adhesión al Supremo Tribunal. Muy distinta fue la opinión de la Junta, que había dado orden de retener toda orden proveniente de los Tribunales de Madrid. Sólo más adelante contestará al Consejo esta Suprema Junta. Veamos, en primer lugar, la respuesta de otro Regidor de Córdoba, miembro de la Junta Suprema¹⁰¹:

"...Estando acordado por esta Suprema Junta de Gobierno de la que soy individuo, que se pase a ella antes de su cumplimiento cualquier orden y demás que tenga cualquier relación con cualquier Tribunal de esta Corte; se lo dirigí todo...Por la adjunta copia podrá V.S. hacerse cargo del compromiso en que me hallo y que las circunstancias actuales no me dan lugar a cumplir como quisiera y estoy acostumbrado, las respetables órdenes de ese Tribunal, a quien

¹⁰⁰. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5:525 núm. 2.

¹⁰¹. El Ayuntamiento de Córdoba dio un simple acuse de recibo.

espero informe V.S. de todo para que en ningún caso se me culpe de omisor y poco observador de tan sabias leyes..."

La copia que menciona este Regidor, de una orden de la Junta Suprema de Córdoba, decía por su parte lo siguiente: "Quedan detenidas por ahora las dos órdenes del Real Consejo (...). Y con vista de dichas órdenes ha resuelto esta Suprema Junta se recuerde a V.S. y que ya le está dicho por punto general y ahora se le repite que interin se arregla el gobierno y respectivas subordinaciones de la Nación, no se dé curso a orden alguna de los Tribunales de Madrid..." (7 de septiembre de 1.808).

Tan sólo el 22 de septiembre resolvió responder al Consejo la Junta de Córdoba en los siguientes términos: esta Junta "ha leído el Manifiesto y queda convencida de sus justificados procedimientos...22 de septiembre de 1.808."***

Por su parte, la Junta de Salamanca tuvo desde el principio una actitud más afable hacia el Consejo de Castilla: "Los apretados apuros en que se vio su regia autoridad dan la prueba más firme del buen proceder y cordura en sus sabias determinaciones..." (7 de septiembre de 1.808)***.

También debió ser animante para el Consejo la respuesta de una Junta de una localidad pequeña como Alcaraz: "...la satisfacción que le resulta de ver vindicados la rectitud y patriotismo del Supremo Magistardo de la Nación de las imposturas que la equivocación o malicia podrá haber formado contra el acendrado celo del Consejo..." (9 de septiembre de 1.808)***.

Ideas similares exponía la Junta de Gobierno de otra pequeña localidad, Daimiel: "satisfacción...de ver acrisolado el honor con que una vil pluma había tenido valor para mancillar en lo más leve el decoro de ese Supremo Tribunal..." (16 de septiembre de 1.808)***.

En términos laudatorios se expresaba también en uno de los párrafos de su oficio, la Junta de Cuenca, una

***. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión francesa, legajo 5.525 núm. 2.

***. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2.

***. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2.

de las primeras en contestar al Supremo Tribunal: "...los sentimientos más vivos de gratitud por el celo heroico con que V.A. se sacrifica con tan glorioso éxito por la Religión, la Patria y el Rey" (26 de agosto de 1.808)***.

No todas las respuestas de las Juntas fueron tan favorables al Consejo. Las Juntas Supremas de Ciudad Real (9 de septiembre), de Oviedo y La Coruña (10 de septiembre), y la de Guadalajara (12 de septiembre) daban un simple acuso de recibo del Manifiesto.

La Junta Suprema de Badajoz, por su parte, dejaba para la reunión en la Junta Central la vindicación de la conducta del Consejo bajo el Intruso: "...aunque por sus graves ocupaciones no ha podido aún enterarse del contenido (del Manifiesto del Consejo), puede por ahora decir que ayer han salido con dirección a Ciudad Real los dos vocales que han de concurrir para la formación de la Central en donde espera ésta se ha de dar a dicho manifiesto el mérito que merezca de Justicia a favor del concepto y juicio que solicita el Consejo..." (6 de septiembre de 1.808)***.

Otras Juntas manifestaron una opinión contraria al Consejo. La de Granada mantuvo su acuerdo de que por ahora y hasta nuevo decreto no se diera cumplimiento a ninguna orden del Consejo ni de Tribunal ninguno de Madrid; la de Mallorca aprobó en la misma línea un decreto para que no se obedeciera orden alguna de las autoridades de Madrid.

Finalmente haremos mención de una de las últimas respuestas, la remitida por la Junta de León el 29 de septiembre:

"...no pueden menos de admirarse de los grandes esfuerzos y extraordinarios impulsos, aunque por unos medios exquisitos y extraordinarios, ha procurado levantar la Patria de la opresión que la amenazaba, y tanto más dignos de consideración cuanto presentan a ese Tribunal oponiéndose a rostro firme a las amenazadoras e insultantes gestiones del gobierno intruso de la Corte, y al desprecio que por ellos hizo, teniendo por contraste la pérdida de sus togas y personal existencia de no acceder de lleno a

***. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525
núm. 2.

***. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525
núm. 2.

sus disposiciones e intrigas..."

Como ya apuntamos en el capítulo anterior, estos testimonios contemporáneos, escritos tras la lectura meditada del Manifiesto del Consejo -por otro lado, bastante próximo a la verdad-, son uno de los mejores argumentos en defensa y absolución de la conducta del Consejo de Castilla bajo el gobierno del Intruso.

También sufrió mucho el Consejo con la actitud soberana de las Juntas. Continuamente le llegaban informes de usurpaciones de soberanía o extralimitaciones de poder de estas Juntas provinciales: nombramientos de autoridades judiciales y otros empleos públicos, desobediencias, aprobaciones de tasas e impuestos y algunos abusos".

Vimos en su momento cómo el Consejo de Castilla en su circular del día 4 había propuesto a las Juntas la formación de un gobierno central. Como escribía León y Pizarro en sus Memorias, "conseguida la primera victoria y arrojado al Ebro el enemigo, el espíritu de desunión empezó a frustrar el fruto de la victoria, empleando en competencias un tiempo precioso para prepararse a la guerra. Cada Junta Provincial quería ser y mandar como soberana, y según León y Pizarro, 'el desacreditado y marchito Consejo de Castilla también se removía en su estúpida ambición'".

Dejando a un lado esta última opinión, es conocido el espíritu de desunión que trajo consigo el

"" A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 2.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 311-313. El pesar del Consejo quedaba recogido en tono de queja en el informe fiscal del 12 de septiembre de 1808: "Se presentan mayores obstáculos a la ejecución de las órdenes del Consejo con las disposiciones que acuerdan y llevan a efecto las Juntas creadas en la presente época (...). Las Juntas supremas no sólo apoyan este sistema que han inspirado a las demás, sino que presuponen residir en ellas la soberanía, apropiándose todas sus funciones, actos y atribuciones, no reconociendo otra autoridad superior a la suya (...). Tratan de reducir la autoridad del Consejo, queriendo circunscribirla a los estrechos límites que indican en sus oficios. Se abrojan privativamente estas Juntas el arreglo del Congreso y erección del gobierno central como fruto y recompensa de los frutos prestados a la patria, atribuyéndose Sevilla el primer rango en este plan..." (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núms. 22 y 24, citado por ARTOLA, M., en "Orígenes...", tomo I, pág. 162).

"" G. DE LEON Y PIZARRO, "Memorias", tomo I, pág. 112.

régimen de Juntas. Lógicamente costaría formar un gobierno único, al que todas las Juntas provinciales cedieran toda su pretendida soberanía adquirida. Y aunque las tensiones entre las Juntas y el Consejo de Castilla continuaron en los meses siguientes, fue la formación de una autoridad central lo que polarizó la atención de unos y otros.

3. El Consejo de Castilla y la Junta Central Suprema y Gubernativa.

Ya hemos visto anteriormente cómo el Consejo de Castilla planteó desde el mismo momento de la salida de los franceses la necesidad de reunir una junta representativa de todas las provincias para que con el Consejo decidiera el camino a seguir. La idea de "reconcentrar en una sola mano o cuerpo la potestad suprema" venía de atrás, pero contaba inicialmente con varios obstáculos importantes: de un lado, la falta de acuerdo sobre el modo y lugar, la novedad del asunto y las rivalidades y competencias que surgieron; de otro, el conflicto entre el Consejo de Castilla, que se rigió en autoridad suprema, y las juntas provinciales que no quisieron reconocerle como tal.

Ciertamente los primeros días tras la retirada francesa de Madrid fueron momentos de desconcierto. No se sabía si la salida francesa era definitiva o por el contrario suponía una simple operación estratégica. También estamos de acuerdo con Toreno^{***} que pudo influir en los primeros momentos el temor a una vuelta de los franceses y la incertidumbre que tendría el Consejo de ser o no obedecido. En Madrid esta obediencia parecía más probable, pero en las provincias no lo era tanto.

Lo cierto es que el Consejo de Castilla se erigió a sí mismo como la máxima autoridad de la Corte y se dispuso a organizar la Nación. Convocó a las Juntas provinciales a enviar diputados a Madrid, con ánimo de formar ese necesario cuerpo central de gobierno

^{***}. CONDE DE TORENO, op. cit., t.II, pág. 83.

^{***}. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo II, pág. 83.

representativo". Las Juntas provinciales tomaron a mal verse impelidas o mandadas por este Supremo Tribunal conceptuado entonces de traidor y afrancesado. El mismo Consejo se autotitulaba máxima autoridad de la Nación, al afirmar en su escrito a las Juntas que tocaría "sólo a él resolver sobre medidas de otra clase y excitar la autoridad de la Nación y cooperar con su influjo, representación y luces al bien general de ésta". Conocida por el Consejo la opinión de las Juntas, decidió obrar con prudencia y elaborar el conocido Manifiesto exculpatorio.

El mes de agosto fue por tanto un mes de contactos entre las Juntas, los generales del Ejército y el propio Consejo. Poco a poco fueron acordando aquéllas remitir a Madrid diputados que formasen una Junta Central. El 3 de septiembre llegaron a Guadalajara los dos primeros diputados, representando a Zaragoza". Como afirma Martínez de Velasco mencionando a Toreno, que ya citamos en su momento, el Consejo de Castilla pudo intentar crear un Consejo de Regencia", para lo que contaba con la ayuda del general don Gregorio de la Cuesta".

... Unos días después de la salida de los franceses de la Corte, el Consejo dirigía a las Juntas supremas provinciales el siguiente escrito: "...le servirá de la mayor satisfacción el que V.E. se sirviera diputar a la mayor brevedad persona de su mayor confianza que, reuniéndose a las nombradas por las Juntas establecidas en las distintas provincias y al Consejo, pudiesen conferenciar y arreglarlo de conformidad, de manera que partiendo todas las providencias y disposiciones desde este centro común, fuese tan expedito como conviene su efecto." (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 1, "Demostración de la lealtad española", IV, 37, "Gaceta extraordinaria de Zaragoza", 10 agosto de 1808, citado por Artola en "Orígenes...", págs. 156 y 157). Señala también este autor cómo fue remitido en 4 de agosto a las Juntas de Sevilla, Zaragoza, Badajoz, La Coruña, Oviedo, Valencia, Cataluña y Murcia y a los generales en jefe.

... A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 núm. 1, "Carta del Consejo de Castilla a las Juntas provinciales", 4 de agosto de 1804.

... MARTINEZ DE VELASCO, A., "La Formación de la Junta Central", op. cit., pág. 169.

... Las materias civiles serían resueltas por el Consejo y las militares por una Junta formada por Cuesta, Castaños y el Duque del Infantado. La oposición de Castaños hizo fracasar el plan (MARTINEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág. 169).

... Don Gregorio de la Cuesta había sido anteriormente Gobernador del Consejo de Castilla.

Sin embargo, aunque había una gran variedad de opiniones acerca de la mejor solución al problema de la formación de un gobierno central, todos coincidían en la necesidad de esta autoridad única, pero no se ponían de acuerdo en la solución adecuada. Muchos hablaban de crear una Junta o Regencia. El Consejo de Castilla no podía ser quien nombrase esta Regencia, ni tampoco debía convocar Cortes por sí, por no tener la representación nacional"". Entonces cabían otras soluciones posibles, algunas de las cuales circularon mediante escritos anónimos impresos"".

El mismo Consejo de Castilla tenía su propia idea de las medidas necesarias para salvar a la Patria. Don Arias Mon presentó un escrito que fue estudiado en el Consejo pleno del día 12 de agosto. En él proponía la formación de una asamblea llamada Junta Suprema Central y compuesta por algunos vocales de las Juntas Supremas provinciales, Gobernador del Consejo y algunos de sus ministros. Esta Junta tendría funciones militares y debía convocar Cortes, que estarían formadas exclusivamente por los procuradores de las ciudades y villas con derecho a voto. La misión principal de estas Cortes sería el nombramiento de un Consejo de Regencia compuesto por veinte o más personas"".

Desdevises citaba tres escritos que

"" Así lo reconoció el mismo Consejo en su Manifiesto.

"" Así, por ejemplo, en la "Carta sobre el modo de establecer el Consejo de Regencia del Reino con arreglo a nuestra constitución", atribuida a Pérez de Villamil, se afirmaba que eran las Juntas y el Consejo quienes debían convocar conjuntamente las Cortes, la legítima representación nacional. Para ello se debía construir una nueva junta formada por seis diputados de la Juntas provinciales y tres Consejeros de Castilla, y bajo la presidencia del Duque del Infantado, Presidente de Castilla. Esta Junta funcionaría como gobierno de la Nación hasta que las Cortes se reuniesen y designasen la Regencia. También el "Dictamen que un amigo da a otro" mantenía que el Consejo de Castilla era el único cuerpo con autoridad suficiente para el nombramiento de un Gobierno Supremo.

"" MARTINEZ DE VELASCO, A., op. cit., pág. 161. Martínez de Velasco critica que esta propuesta no se ajustaba tampoco a lo establecido en los textos de las Partidas y del Espéculo, y por tanto aparentemente el Consejo adoptaba "una actitud totalmente contraria a la normalidad jurídica". Creemos que una propuesta así no era evidentemente una solución revolucionaria, y que quizás quiso adaptar la legislación a las circunstancias del momento. Creemos con Artola que el Consejo en todo momento buscó "lo que pudiéramos llamar vuelta a la normalidad jurídica" (ARTOLA, M., "Orígenes", op. cit., pág. 161).

circularon por España en aquella época. "El Dictamen que un amigo da a otro sobre el origen y facultades de las Juntas Supremas de las provincias""; "El Plan de lo que podría proponerse al Consejo en las críticas circunstancias en que se halla la nación""; y una carta del general don Tomás de Morla, que también mencionamos en su momento.

El Dictamen era claramente partidario de la acción directa y preponderante del Consejo de Castilla, al que confería el derecho de convocar la Junta. Era la defensa de la legalidad existente""; en lo referente a la carta de Morla, ya vimos cómo el Gobernador de Cádiz no quería oír hablar más que de las Juntas. En el fondo Morla defendía la existencia de un derecho revolucionario nuevo; el Plan, por su parte, buscaba un entendimiento entre el Consejo de Castilla y la Junta de Sevilla"".

Apuntaba Desdevises cómo el Consejo de Castilla pudo haber exhibido los decretos enviados por Fernando VII desde Bayona, en uno de los cuales le ordenaba la convocatoria de Cortes"". Sin embargo, el Consejo prefirió no jugar esta baza, pues podía poner en riesgo la

"" "Dictamen que un amigo da a otro sobre el origen y facultades de las Juntas supremas de las provincias, y cómo y por quiénes deben nombrarse los vocales de la Suprema Junta del reino, en satisfacción al manifiesto de Sevilla de 3 de agosto.", A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.527 núm. 13.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.513 núm. 10, agosto 1.808.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 268.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 268.

"" Como sabemos, la minuta de estos decretos fue destruida por Cevallos en Bayona para evitar comprometer a Fernando VII si llegaba a conocimiento de Napoleón. El original de los decretos fue entregado a Azanza en Madrid. Azanza reunió a los ministros de la Junta Suprema, "opinando todos sin vacilar que las nuevas circunstancias hacían ya su ejecución "imposible". Quedó oculto "en la carpeta de un libro" y lo quemó cuando tuvo conocimiento del internamiento de Fernando en Valençey. Sin embargo más tarde fue reconstruido de memoria por Cevallos y confirmado por dos funcionarios de la Secretaría de Estado, presentes en Bayona el día 5 de mayo (cfr. SUAREZ, F., "El proceso de la convocatoria a Cortes", págs. 32 y 33; también cfr. al respecto EVOLUCIÓN HISTÓRICA, Capítulo 2: "El Consejo de Castilla y la Junta Suprema de Gobierno"; también SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", págs. 11 y 12; BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo I, págs. 166 y 167; y CEVALLOS, "Memorias...", op. cit., págs. 167 y 168).

vida del Rey prisionero. Por ello mismo optó por la prudencia que siempre le caracterizó en los momentos difíciles y se limitó a publicar la conocida memoria justificativa de su conducta^{***}. Sin embargo, nos parece que el motivo fundamental fue la simple oportunidad política. Esta tesis parece desprenderse del siguiente dictamen de los Fiscales del Consejo de Castilla, fechado el 30 de septiembre de 1.808 ^{***}:

"El Consejo luego que tuvo noticia de este Decreto de S.M., pudo sin la menor nota de exceso proceder a la convocación de las Cortes; mas su acreditada circunscripción y moderación, la armonía y consecuencia que escrupulosamente ha guardado con las Juntas Supremas; no olvidando la sentencia que tal vez es la más execrable áncora de la iniquidad, y que tanto se repite por gentes que sólo tienen el patriotismo en los labios o en la pluma: 'salus republicae suprema lex esto', se ha abstenido de hacer el uso de tan sagrada como inestimable confianza, dándoles en esto otro nuevo ejemplo de su verdadero amor al bien público, sin relación a ningún otro interés."

Sin duda hay un punto que a todos quedaba claro: no correspondía al Consejo de Castilla funciones de gobierno supremo y si éste ahora detentaba alguna, era de forma provisional, para evitar el evidente vacío de poder central. Y por otro lado, el Consejo de Castilla tenía en su actuación más legitimidad que las Juntas provinciales, ya que había sido constituido por un poder legítimo y su constitución no había sido arbitraria como en el caso de las Juntas^{***}.

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 268 y 269.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 4, "Sobre la arbitrariedad de las Juntas provinciales y el establecimiento de la Regencia", folios 6 y 7, 30 de septiembre de 1.808.

^{***}. De esta manera dictaminaban los Fiscales del Consejo el 28 de agosto de 1808 "sobre los poderes de las Juntas Supremas, en especial de la de Sevilla: "Prescindiendo los Fiscales por ahora del modo ilegal con que fue establecida la Suprema Junta de Sevilla como que dicha erección no fue ejecutada por los individuos de la provincia, sino sólo por cuatro particulares de la ciudad; prescindiendo asimismo, que la Junta de Sevilla se ha abrogado unas facultades que ni el pueblo le ha concedido ni podido conceder, titulándose vana y quiméricamente Junta Suprema de España e Indias..." (ARTOLA, M., "Orígenes...", tomo I, págs. 161 y 162, citando el legajo 5.519 núm. 22 (Invasión Francesa, Consejos

Concebida la idea de formar una Junta Central compuesta de vocales de las demás, esta Asamblea tuvo sus primeras reuniones preparatorias en Aranjuez a lo largo del mes de septiembre. Varios diputados, entre ellos los de Sevilla, propugnaron esta ciudad mejor que Madrid, entre otros motivos para mantener la independencia del Consejo de Castilla***. Tras la última sesión preparatoria en la noche del 24 de septiembre, y decidida la instalación de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino para el día siguiente, esta decisión fue comunicada al Consejo de Castilla el día 26, y también fue comunicada directamente a las Juntas Supremas, y a todas las autoridades del Reino a través del Consejo de Castilla***.

Aunque el Consejo de Castilla colaboró con la naciente Junta Central, sin duda quedó herido por haber sido marginado en la formación de este gobierno. Más incluso cuando se vio obligado a someterse a esta Junta, de la que ahora dependía en todo. La Comisión de Gracia y Justicia tendría entre sus atribuciones los nombramientos de todos los Ministros de los Consejos, y como depositaria de la soberanía atendería las periódicas consultas del Consejo de Castilla***.

Como hemos visto, el 26 de septiembre*** la

Suprimidos, A.H.N.).

***. "Sabíamos también que estos mismo (los de Sevilla) y algunos otros diputados, ya fuese por preocupación contra el Consejo, ya por otra razón, venían envargados y dispuestos a resistir el establecimiento del Gobierno Central en Madrid" (JOVELLANOS, "Memoria", pág. 539, citado por MARTINEZ DE VELASCO, op. cit., pág. 173).

***. Al Supremo Tribunal se le mandó circular esta noticia.

***. "El Consejo de Castilla no dejó de hacer sus buenas reflexiones sobre la ilegalidad con que se formaba (la Junta Central); y no faltaron otros que hiciesen presentes los inconvenientes que resultarían al conde de Floridablanca y demás compañeros, de quienes si fueron bien recibidos, no salieron bien despachados. Los más pensaban que estando la Ley de Partida tan terminante para un caso semejante, la Junta o Regencia sería conforme a su disposición..." (CARNICERO, J.C., "Historia razonada...", págs. 219 y 220).

***. Es decir, al día siguiente de haberse realizado la instalación. Parece ser que el Conde de Floridablanca pudo dar parte previo de esta instalación al Ayuntamiento de Madrid, pero evidentemente, este Cuerpo no tenía jurisdicción en Aranjuez ni representaba a la Provincia, como sí parece que lo hacía el Consejo de Castilla, al no existir en Madrid una Junta Superior (S.H.M., Colección del Fraile, "Causa

Junta Central daba cuenta de su instalación al Presidente del Consejo de Castilla¹⁰⁰, y le prevenía que tras prestar el debido juramento, expidiese las cédulas, órdenes y provisiones competentes para que todas las autoridades de la Monarquía se sometiesen a la Junta. El Consejo de Castilla no respondió inmediatamente, sino que dilató su respuesta hasta el día 30 de septiembre, lo que muchos entendieron como una resistencia a reconocer a la Junta Central¹⁰¹.

En realidad, recibida la comunicación por el Conde de Floridablanca, y por don Martín de Garay,

Fundamental de la extinción del Consejo de Castilla, pág. 6).

¹⁰⁰. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.522 núm. 1. "Conde de Floridablanca: acta de instalación de la Junta Central Gubernativa del Reino."

¹⁰¹. Así lo manifiestan muchos autores y fue recogido en crónicas de la época. Evidentemente le costaba al Consejo de Castilla aceptar simple y llanamente el haber sido excluido e ignorado y debió meditar mucho la conducta a seguir. Como ejemplo podemos ver el siguiente texto crítico contra el Consejo de Castilla, extracto de un escrito anónimo de la época conservado en el Servicio Histórico Militar de Madrid: "El Consejo de Castilla, habituado a una extensión sin límites a esta facultad (de interpretar la ley), insultando a la Nación entera, y contra la voluntad general no se intimidó de aspirar a hacer creer que le correspondía ejercer la Soberanía. Trató pues de mandar a las Juntas Provinciales, cuando éstas ejercían el mando supremo. Cuando después se iba a reunir la Junta Central hizo los esfuerzos posibles para componer parte de aquel cuerpo soberano sin nombramiento de la Nación, y sin más fundamento que pretender sobre su palabra se debían obedecer ciegamente sus oráculos, como había sucedido anteriormente. Verificada la reunión de la Central, en su tardanza a reconocer este nuevo Gobierno, manifestó que no sólo la necesidad de no poder resistirse a este acto era el principal fundamento, y motivo que le obligaba a hacer el reconocimiento. Una repugnancia tal del Consejo al voto unánime de la Nación, a la salvación de la Patria, y a lo que tan claramente dictaba la justicia, no podía dejar de ser un indicio manifiesto de que jamás coadyuvaría de buena fe a las ideas de un Gobierno cuya formación había mirado con tanta aversión. La política...exigía que la Junta Central tratase ya de moderar las excesivas facultades que aquel tribunal había logrado aglomerarse en perjuicio de la libertad de los ciudadanos, y que tan peligrosas podían ser a un Gobierno reciente, y al que por otra parte por ninguna consideración debía contener, para hacer esta reforma, la conducta poco heroica que el Consejo ofrecía desde que habían comenzado los riesgos de la Patria." (S.H.M., El Fraile, volumen 197, documento 762, pág. 15).

Presidente y Secretario interinos de la Junta Central", hubo una primera contestación por parte del Presidente del Consejo de Castilla, manifestando haberse enterado de la celebración de la primera Junta Central Gubernativa y sus esperanzas de que llegase prontamente el día en que se resolviesen todos los problemas que afligían a España.

Pero hasta el 29 de septiembre no hizo presente oficialmente al Consejo pleno esta comunicación. Al día siguiente estaba elaborado el dictamen fiscal opuesto al juramento. Y aunque remitió finalmente el juramento pedido", algunas fuentes indican que adjuntó también la

"... He aquí el texto de esta Real Orden: "Excmo. Sr.: Con la uniformidad de dictámenes que en el día de ayer se hizo la instalación solemne de la Junta Central de Gobierno de los Reinos de España y de las Indias, se ha acordado por ella en este día comunicar al Consejo la resolución y encargo de que, precediendo el juramento de sus individuos, igual al ejecutado por los de la Junta, de que remití a V.E. copia certificada en mi oficio anterior, expida ese Tribunal sus Cédulas, Provisiones y Ordenes a todos los de las Provincias, sus Juntas formadas hasta ahora, Justicias y Magistrados, Virreyes y Gobernadores de cualesquier clase que sean, para que en todos los asuntos de la gobernación de estos reinos y administración de justicia, obedezcan exactamente y con prontitud las resoluciones de esta Junta general gubernativa como depositaria de la autoridad soberana de nuestro amado Rey Fernando Séptimo, hasta que le consigamos ver restablecido en todo el poder y esplendor de su Augusta dignidad, bajo la conminación de ser castigados y tratados los inobedientes como reos de lesa majestad. El Consejo, sin embargo, continuará en el ejercicio de sus funciones ordinarias con arreglo a las leyes, consultando según ellas a esta Junta lo que excediese de sus facultades, y que debería consultar al Soberano en los casos correspondientes a su instituto.

V.E. participará esta resolución al Consejo y jurará y se servirá darme aviso de su cumplimiento para inteligencia de la Junta." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 4).

"... Señala R. Gibert, en "El Antiguo Consejo de Castilla", cómo fue ésta la única claudicación del Consejo de Castilla, tras haber sabido mantenerse fuerte frente al absolutismo y frente a la invasión extranjera. Creemos sin embargo que un empecinamiento del Consejo negándose a toda costa a aceptar lo que había sido aceptado por todas las Juntas, hubiera sido absurdo. El Consejo nuevamente adopta una postura prudente, renunciando a un legalismo a ultranza en favor de los intereses nacionales. Aunque no estaba conforme con la solución adoptada, prefirió evitar una oposición frontal contraproducente para la organización de la Nación, y para el propio Consejo de Castilla.

exposición... de sus Fiscales contraria a prestar el juramento... y que reclamaba el uso y costumbres antiguas... El Consejo de Castilla no había seguido el la opinión de los Fiscales, pero al parecer prefirió remitirlo... También había acordado el Consejo hacer una próxima consulta a la Junta Suprema con algunas observaciones...

... Se puede ver un ejemplar de esta exposición en A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejos reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm.4.

... Es comprensible la reticencia de los Consejeros de Castilla a prestar juramento, considerando el tradicional carácter legalista del Consejo de Castilla. La Junta Central no representaba sino a las Juntas provinciales, autoridades de origen revolucionario sin respaldo legal. Aún así, el Consejo había solicitado a las Juntas que enviaran a Madrid algunos delegados y aquellas no respondieron con mucha cortesía a esta invitación. Incluso se había establecido la Junta Central en territorio sometido a la jurisdicción del Consejo de Castilla sin informarle. Junto a ello, el hecho de que la nueva Regencia tuviera 35 miembros, cuando las leyes de Partida sólo permitían un máximo de cinco, aparte de algunos abusos que ya se empezaban a conocer por parte de estas Juntas. Era normal que el Consejo de Castilla, extremadamente legalista, no viera con buenos ojos esta Junta formada al margen del derecho tradicional.

... CONDE DE TORENO, op. cit., tomo II, pág. 115.

... Parece ser que sí envió a la Junta Central este informe de los Fiscales, en contra de lo que decía Desdévise, quien decía que el Consejo no se atrevió a remitirlo (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 307).

... En esta consulta, tras reconocer que los deseos del Consejo de Castilla hubieran sido la constitución de una Junta Central respetando todas las formalidades legales, el Consejo afirmaba: "Para esto reflexionó el estado de las provincias del Reino, con un gobierno creado en cada una de varios modos y por diferentes impulsos, con un ejército particular, disponiendo para mantenerlo de todas las rentas reales de su territorio, de los donativos que el patriotismo de sus habitantes ofreció y de los arbitrios que se buscaron con este intento.

Se complacía en el dulce objeto que arrebató a las provincias a un mismo tiempo para hacer estos esfuerzos y perseguir con un entusiasmo laudable a los contrarios de nuestra religión, de nuestro Soberano y de nuestra Patria.

Ha visto con gozo que el espíritu que animaba a todo buen español se hallaba en la tropa disciplinada y en sus oficiales y generales, que uniéndose a una u otra provincia se empeñaban a porfía a destruir al enemigo común.

El resultado ha sido la victoria y será la gratitud

La Junta Central contestaba en Real Orden de 1 de octubre a un oficio del Presidente de Castilla que tomaría en consideración las meditaciones del Consejo. Lo cierto es que el Consejo de Castilla aceptó jurar por motivos patrióticos -en palabras de un miembro del propio Tribunal-, y reconoció a la Junta el título de Majestad^{***}.

Evidentemente, el Consejo había considerado una afrenta la actitud de la Junta Central, aunque prefirió someterse y evitar todo enfrentamiento, que en aquellos momentos sería contrario a los intereses de la Nación. Sin embargo, es bueno que antes de continuar profundicemos en este punto, para conocer con más detalle la opinión del Consejo sobre aquellos hechos. Sin duda, viene bien recogida en el mencionado dictamen de los Fiscales del Consejo de Castilla sobre la formación de la Junta Central, de fecha 30

eterna de nuestro Soberano, de toda su Real Familia y de la Nación entera a los que han tenido parte en tan gloriosa empresa.

...Las extraordinarias circunstancias de unos acontecimientos que no tienen ejemplo en la Historia han influido en que no se haya guardado para la convocación e instalación de la Junta Suprema Gubernativa del Reino lo dispuesto por las leyes para la convocación y apertura de las Cortes, y estas mismas son las que quiere V.M. tenga presente el Consejo al representar sus meditaciones fijadas en la conservación y observancia de nuestras leyes, notando que aún en nuestra Historia hay un suceso adaptable al caso del día...

Reflexiones tan fundadas han movido al Consejo a reconocer en los Vocales de la Junta Central, una representación de provincias que en otro estado de cosas negaría, respecto de no venir hecha la elección de diputados por los Ayuntamientos de los pueblos que tienen derecho de elegir y representar a sus ciudades, provincias o reinos."

Terminaba su consulta el Consejo proponiendo tres importantes puntos, sobre los que incidiremos más adelante. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 4).

^{***}. Algunos escritos de la época, de tendencias políticas diversas, criticaron la actitud de la Junta Central. He aquí un fragmento de un folleto anónimo periódico titulado "Memorial Militar y Patriótico del Ejército de la Izquierda", número 34: "En tanto que decretaba (la Junta Central) que quinientos mil infantes y cincuenta mil caballos, se entretenían con el título de Magestad, exigía juramento de fidelidad y obediencia de las diversos corporaciones, que no podían negarlo, o ponerla restricciones sin manifiesto peligro, todo con el objeto de afianzarse en el mando; e ignoraba o fingía ignorar el estado miserable de los ejércitos españoles, y los refuerzos que recibían los franceses. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 5, op. cit., pág. 30).

de septiembre de 1808^{***}:

"...No quisieran recordar los Fiscales el alto desprecio con que en este punto se ha tratado al Consejo y a su Presidente, siendo bien extraño el que una Junta, sea de la clase que sea, dentro de su jurisdicción y territorio, se hubiese congregado sin el previo aviso y noticia del primer Tribunal de la Nación, contra la expresa disposición de las leyes, desentendiéndose de la convocación y forma contenida en ella, y ofrecimientos del Consejo, prescindiendo de la precipitación e impaciencia de los diputados, que llegaron primero a Aranjuez, sin que consta si precedió señalamiento fijo de día y de lugar para los ausentes."

Con fecha 8 de octubre remitió el Consejo a la Junta Central la consulta que anteriormente reseñábamos. Aparte de la explicación de los motivos que le impulsaron a prestar el juramento pedido, lo más importante de esta consulta eran los tres puntos que solicitaba de la Junta: primero, que fuera reducido el número de vocales de la Central a cinco miembros, por ser el que entonces tenía contrario a la Ley de Partidas; segundo, la extinción de las Juntas provinciales; y tercero, la convocatoria de Cortes conforme al decreto dado por Fernando VII en Bayona^{***}.

El Conde de Toreno criticó la primera de aquellas peticiones del Consejo. Decía Toreno^{***} que el mismo Consejo se contradecía, ya que inicialmente deseaba reunir en una gran asamblea a representantes de todas las Juntas con los miembros del propio Consejo de Castilla. Tenía razón Toreno al afirmar que "si se hubiera condescendido con la voluntad del Consejo, lejos de ser

^{***}. A.H.N., Consejos suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 4, op. cit., folio 3.

^{***}. Señalaba Desdevises, que el Consejo remitió a la Junta Central esta consulta por un incidente acaecido entre ambas instituciones. Fue, según el historiador francés, lo que ocurrió con la llamada Junta de Suministros creada por el Consejo de Castilla. Sus miembros, atacados duramente por algunos de la Junta Central, presentaron su dimisión. El Consejo de Castilla les ordenó permanecer en su puesto y decidió enviar esta consulta planteando los tres mencionados puntos. La Junta Central rehusó ceder y tras ocho horas de resistencia, el Consejo capituló y aceptó la dimisión de la Junta de Suministros. (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 308).

^{***}. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo II, págs. 116 y 117.

menos en número los individuos de la Central, se hubiera ésta engrosado con todos los magistrados de aquel Cuerpo""'. Sin embargo, nos parece que lo que en uno y otro momento planteaba el Consejo era distinto. Y la respuesta la encontramos en una afirmación de Labra""', en la que nos recuerda que el Consejo de Castilla buscaba inicialmente una figura distinta a lo que fue luego la Junta Central. Si una asamblea representativa y no ejecutiva podía y debía ser numerosa, una institución de gobierno de 25 miembros podía ser considerada quizás también numerosa. Y esto es lo que nos parece que hizo el Consejo de Castilla en su representación: mostrar su disconformidad sobre el número de componentes de la Junta""'.

La segunda y la tercera petición del Consejo de Castilla no agradó tampoco a los de la Central. La segunda, por considerarse todavía necesarias las Juntas provinciales, ante la proximidad de los ejércitos franceses. Una petición así no debió gustar nada a unos miembros que precisamente estaban allí como representantes de sus Juntas, y parecía por tanto difícil que tal petición fuera aceptada. En cuanto a la tercera, se dudó de la buena fe de la petición. Así lo reflejaba Jovellanos""' en su "Memoria en defensa de la Junta Central":

"No era la convocación de las Cortes lo que aquel Tribunal deseaba entonces (...). Deseaba por consiguiente que se adoptase un medio extraordinario y era que las Juntas

""'. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo II, pág. 116.

""'. LABRA, R.M., "Muñoz Torrero y las Cortes de Cádiz", pág. 239. Al hablar sobre la Junta Central decía: "se verifica su elección por designación directa de las corporaciones locales "a despecho de lo que que el Consejo de Castilla había ideado a última hora para asociarse una junta de mera consulta".

""'. No dudamos tampoco que influyera en sus excepciones el hecho de que el propio Consejo hubiera sido ignorado por la Junta Central en el momento de su formación.

""'. Añadimos aquí también una referencia crítica contra Jovellanos, recogida en un escrito anónimo de la época en defensa del Consejo de Castilla: "Que las razones del Consejo eran fundadas, lo ha demostrado la experiencia; y que eran sólidas lo comprueba el voto de uno de los primeros literatos que la componían, aunque después en sus obras impresas haya sido uno de los que más han tirado a este Cuerpo, no guardando exactitud en los hechos que refiere, y manifestando en sus expresiones un furor y rabia que le hace poco honor, nacido de causas públicas que no son imputables al Consejo." (S.H.M., Colección del Fraile, "Causa Fundamental de la extinción del Consejo de Castilla", págs. 7 y 8).

(provinciales) y el mismo Consejo formasen un Gobierno, que reuniendo en un centro común la autoridad repartida entonces entre tantas provincias, se encargase de la Administración Pública, y la desempeñase tan expeditamente como las circunstancias requerían"".

Lo que parece del todo cierto es que las peticiones del Consejo de Castilla no parecieron del todo oportunas. "Las insinuaciones del Consejo se llevaron pues tan a mal, que intimidado no insistió por entonces en su empeño"". Si parece ser que la Junta Central mandó publicar la consulta del Consejo, al parecer con el objeto de desacreditar a este Cuerpo"". De todo ello resultaba un incremento de la mutua desconfianza entre ambas instituciones.

Sin embargo, sabemos por varias fuentes que dentro de la Junta Central había varios miembros cuya opinión coincidía con la del Consejo de Castilla, entre ellos Jovellanos, partidario de formar más adelante una Regencia de tres o cinco miembros.

A partir de este momento el Consejo dejó de plantear a la Junta Central una oposición abierta, pero no dejó de censurar o criticar sus actos más relevantes. Así, por ejemplo, en octubre retardó varios días la publicación de un manifiesto de la Junta por considerarlo improcedente.

En la Junta Central debía estar también representada Castilla la Nueva, territorio sobre el que ejercía su jurisdicción el Consejo de Castilla al estilo de una Junta Suprema. Por oficio de aquella Junta Central se mandó al Ayuntamiento de Madrid que eligiera dos vocales que representaran a aquella región. Un escrito anónimo de la época nos relata este sucedido"":

"El Consejo no se opuso a esta orden, sin embargo de que en justicia debía decir que si la causa principal para ejercer la soberanía las Juntas era el consentimiento de los pueblos, a él era a quien correspondía nombrar a los representantes, pues era quien había mandado

"" JOVELLANOS, G.M., op. cit., tomo I, pág. 513, citado por MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 30.

"" CONDE DE TORENO, op. cit., tomo II, pág. 117.

"" Servicio Histórico Militar, Colección del Fraile, núm. 762, "Causa Fundamental de la Extinción del Consejo Supremo de Castilla", pág. 7.

"" S.H.M., Colección del Fraile, "Causa fundamental", op. cit., pág. 8.

y a quien con gusto había obedecido Castilla; siendo muy notable que el primer diputado que nombró el Ayuntamiento para Vocal de la Central fue don Arias Mon, y por haberse excusado nombró después a don Josef Joaquín Colón, quien hizo lo mismo; los dos eran individuos del Consejo, y así es un testimonio evidente del desinterés y ningún espíritu de ambición que asistía a los que le componían"".

Por un oficio de 2 de octubre de 1.808 la Junta Central informaba al Consejo de Castilla de haber elegido por Presidente al Conde de Floridablanca"". El Consejo de Castilla le felicitó en oficio del día 3 y lo circuló seguidamente por todo el Reino"". En este mismo día 3 nuevamente comunicaba la Junta una Real Orden. En esta ocasión se le informaba del tratamiento de "Majestad", que en lo sucesivo tendría la Junta Central, con todos los demás atributos propios de la soberanía"". El Consejo de Castilla, como hemos visto, también acató esta Real Orden.

El 4 de octubre de 1.808 el Duque del Infantado, de acuerdo con el Consejo, envió al Duque de Floridablanca cien ejemplares de la circular expedida con inserción de la orden de la Junta Central para que se pusieran durante tres noches luminarias y se hicieran durante nueve días rogativas públicas para implorar de Dios la pronta restauración en su Trono a Fernando VII"".

Los días siguientes continuaron los contactos entre la Junta y el Consejo. El día 9 la Junta Central

"" . Fue una reacción lógica que Mon y Colón no quisieran estar en la Junta Central, tras las tensiones con aquel Cuerpo y el desplante que la Central había hecho al Consejo. Estar en la Junta Central en representación de Madrid hubiera estado fuera del tono y la línea mantenida hasta el momento por el Consejo de Castilla.

"" . Como observaba el Conde de Toreno, la Junta Central necesitaba del Consejo de Castilla, entre otros motivos porque el Consejo debía hacer circular las órdenes por todo el Reino. Quizas por ello cobre también todo su sentido la afirmación de Labra de que la Junta Central se mostró "harto respetuosa del Consejo de Castilla, que todavía intentaba hacer prevalecer el Antiguo Régimen" (LABRA, R.M., "España y América 1.812-1.912: La pérdida de las Américas", pág. 188).

"" . A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.522 núm. 4.

"" . A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.522 núm. 2.

"" . A.H.N., Estado, legajo 28-A-3, "Papeles de la Junta Central".

remitía al Consejo papeles sediciosos o inconvenientes para que el Consejo tomara medidas. El 14 la Junta Central preguntaba al Consejo sobre el sentido que tenía un bando publicado por éste para recoger las armas del vecindario de Madrid". Ese mismo día la Junta Central pedía a la Sala de Alcaldes que le diera parte diario de las novedades que ocurrieran en el vecindario".

Más tarde, por Real Orden de 15 de octubre, la Junta Central prescribía el modo de encabezar las Cédulas, Pragmáticas y Provisiones del Consejo de Castilla. A partir de ahora quedarían encabezadas de la siguiente forma:

"El Rey nuestro Señor Don Fernando VII y en su Real nombre la Junta Central y Gubernativa del Reino..."

El Consejo de Castilla presentó a su vez una consulta a la Junta Central, proponiendo dos modelos de encabezamiento, según fuera para Reales Cédulas" o para las Provisiones del Consejo".

Ese mismo día la Junta Central pedía

"... A.H.N., Estado, legajo 28-A-6, "Papeles de la Junta Central".

"... A.H.N., Estado, legajo 28-A-11, "Papeles de la Junta Central".

"... A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.522 núm. 3. Para las Reales Cédulas que se registraban y sellaban, propuso el Consejo el siguiente modelo: "Don Fernando VII por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra Firme, del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Absburg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y Molina, &. Y en su Real Nombre la Junta Central Gubernativa del Reino. A los de mi Consejo, Presidentes, Regentes, Oidores, &:..."

"... La fórmula para las provisiones sería parecida a la de las Reales Cédulas, sólo que más reducida: "Don Fernando VII por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y Molina, &. Y en su Real Nombre la Junta Central Gubernativa del Reino. A Vos &:..."

información al Consejo sobre las causas que se estaban formando contra los franceses, adictos y cómplices, y sobre otra formada por un incidente del día anterior". Los comisionados del Consejo de Castilla, Alcaldes de Casa y Corte, Corregidor y su teniente tenían entonces formadas causas a 46 españoles y 17 franceses. Tres días después una nueva orden solicitaba al Consejo de Castilla una relación de estas causas contra los franceses y sus cómplices".

También el 15 de octubre nombraba la Junta Central como Secretario de Gracia y Justicia a un Ministro del Consejo de Castilla, don Benito Ramón Hermida, que había sido Regente de la Audiencia de Sevilla".

Las fuentes del Archivo Histórico Nacional nos muestran que por el momento las relaciones entre el Consejo de Castilla y la Junta Central fueron correctas. El Consejo reconocía la máxima autoridad de la Junta y acataba y daba curso a sus disposiciones".

Así por ejemplo, ante una consulta del Consejo del día 15 de octubre, en la que aquel manifestaba sus apuros para sostener a los ejércitos, la Junta Central manifestaba su confianza en la experiencia del Consejo, para que éste propusiera los medios y arbitrios que le parecieran más adecuados".

Dos días después, la Junta Central ordenaba al Consejo de Castilla que sus comisionados facilitasen al arquitecto don Juan de Villanueva el reconocimiento de las casas que habitó don Manuel Godoy con el fin de habilitar alojamientos para los vocales de la Junta en Palacio nuevo y sus inmediaciones".

"A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión francesa, legajo 5.514 núm. 16.

"A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1.808, folios 1.304 y ss.

"Cfr. ESCUDERO, J.A., "Los cambios...", págs. 43 y 44; GÓMEZ-RIVERO, R., "Los Orígenes del Ministerio de Justicia [1.714-1.812]", pág. 46; y A.H.N., Estado, legajo 3.423-1.

"Lo que sin embargo no excluye que pudieran existir pequeñas tensiones o roces temporáneos entre ambas instituciones.

"A.H.N., Estado, legajo 28-A-12, "Papeles de la Junta Central".

"A.H.N., Estado, legajo 28-A-14, "Papeles de la Junta Central". Cfr. ESTRUCTURA ORGANICA, El Palacio de los Consejos.

El 26 de octubre la Suprema Junta Central pedía al Consejo que organizase un sistema de policía y vigilancia para Madrid, para evitar toda clase de desórdenes"". Y dos días después, la Junta preguntaba al Duque del Infantado si había publicado como se le prevenía la orden sobre la suspensión del alistamiento y formación de milicias urbanas de Madrid. Por dos veces contestó el Presidente de forma afirmativa, el mismo día 28 y el día 30"".

Pero sin duda el momento cumbre de las tensiones entre Junta Central y Consejo de Castilla fue una Real Orden de fecha 6 de noviembre de 1.808. En ella acordaba la Junta Central separar del conocimiento del Consejo todos los asuntos relativos a armamento, víveres y vestuario"". Sin duda esta Real Orden fue un jarro de agua fría para el Consejo, hasta el punto que decidió suspender su cumplimiento. He aquí el texto de la Real Orden, enviada al Presidente del Consejo Real:

"Considerando la Suprema Junta de Gobierno del Reino que el distraerse ese Tribunal en negocios ajenos

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.398, año 1.808, folios 1.024 y 1.180 y ss: el Consejo y la Sala de Alcaldes trabajaron mucho por aquellos días en la reorganización de un ejército en la capital.

"" A.H.N., Estado, legajo 28-A-21, 22 y 23, "Papeles de la Junta Central".

"" Un escrito anónimo de la época, en defensa del Consejo de Castilla, describía así aquel suceso: "Además, era tanto el prurito que la Central tenía por desacreditar dicho Cuerpo, que a pocos días de su instalación dio órdenes públicas, que no podían tener otro fin, a no hacerle un mayor agravio: el Consejo, conociendo que las victorias podían ser, como lo fueron, pasajeras, trató de fortificar a Madrid, y de formar un cuerpo respetable de Milicias para su defensa, baxo un plan sabio y prudente aprobado por los Inspectores generales de todos los Cuerpos, por otros Militares de opinión, y por otros muchos hombres de conocimiento; y cuando todo se iba a realizar mandó la Central suspenderlo, y nada resolvió sobre estas materias hasta últimos de Noviembre, tiempo en que no pudo realizarse por la venida de los enemigos. Ninguno pueda persuadirse que fuese por evitar otros males, pues es bien público que el tiempo en que el Consejo mandó en su Provincia, no cometió los excesos que las Juntas cometieron tan perjudiciales a la Nación, siendo uno de ellos los nombramientos de Generales, y otros empleados que tantos males han causado, y principalmente el de que ninguno esté contento viendo sobre sí al que nada ha hecho, ni es capaz de hacer el correspondiente a sus ascensos." (S.H.M., Colección del Fraile, "Causa Fundamental...", op. cit., pág. 9).

a su instituto puede causar un atraso considerable a la administración de justicia, para que pueda ocuparse sin intermisión en este importante y principalísimo ramo y sus tareas, se ha servido acordar que (""") se desprenda del conocimiento de todos los negocios (""") relativos a armamento, víveres y vestuarios, remitiendo por mi conducto todos los expedientes de estos ramos en el estado en que se encuentren para acordar en su vista las providencias que estime conducente. De Real Orden lo comunico a V.E. para inteligencia y cumplimiento del Consejo...Aranjuez, 6 de noviembre de 1.808""".

El argumento central de la consulta presentada a continuación por el Consejo de Castilla era que tales competencias no distraían en modo alguno la labor del Consejo"". En su exposición, señalaba el Supremo Tribunal las comisiones que se habían encargado de realizar estos cometidos: una Junta Militar creada por el Consejo, la comisión de vestuario y armas, la de donativos y la de arbitrios. Señalaba a continuación el Consejo en su consulta la organización de estas comisiones: formadas cada una por dos ministros distintos del Consejo, que asistían a las reuniones con la máxima puntualidad y en horas de despacho distintas de las horas de tribunal. Las disposiciones habían provenido ordinariamente de estas comisiones y sólo en

""". En el borrador se incluía aquí: "este Supremo Tribunal", que más tarde fue tachado.

""". En el borrador se incluía aquí la siguiente frase, más tarde tachada: "que no son de su atribución según las leyes del Reino y principalmente de todos los que son".

""". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527 núm. 16.

""". A.H.N., Estado, legajo 28-A-25: El Consejo de Castilla contestó a la Junta Central que a la vista de las medidas tomadas en materia de armamentos, era evidente "que esta empresa no pudo distraer nunca al Consejo con perjuicio del despacho de los demás negocios de su instituto". Entre las medidas tomadas por el Ministro del Consejo don Sebastián Torres, comisionado para el armamento y vestuario de las tropas de Madrid y demás provincias de Castilla la Nueva, se encontraban: la habilitación de más de 6.000 fusiles, preparación de cañones de artillería; construcción de 40 cureñas y 30 carros para municiones; satisfacción del porte de más de 1.000 quintales de pólvora que se condujeron al almacén de Carabanchel; equipación del Regimiento primero de Voluntarios que salió de Madrid el día 2 de agosto. Dio además 100 uniformes al comisionado del Ejército de Extremadura y ayudó de forma importante -decía el propio Consejo en un informe- a otros ejércitos de provincias. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527 núm. 16).

contadas ocasiones el Consejo les había auxiliado con alguna providencia. Por aquellas fechas se encontraba ya practicamente concluida la labor de estas comisiones y sólo les faltaba hacer efectiva la cobranza de algunos créditos***.

Atendida por la Junta Central la consulta del Consejo de Castilla, resolvió con fecha 29 de noviembre que la citada Real Orden del día 4 se ejecutase solamente respecto a los vestuarios y donativos de efectos de ropa y montura hechos en la Corte, y los de armas que no necesitase el Consejo para concluir la habilitación de los Cuerpos que se había propuesto levantar en Madrid y su Provincia***.

Evidentemente el Consejo no deseaba perder relevancia ni competencias, y se defendió enérgicamente en todas las ocasiones en que los Gobiernos menoscababan sus atribuciones. En este caso además coleteaba el asunto de la creación de la Junta y que ésta no contase con el Consejo de Castilla. Sin embargo, el pequeño recorte de competencias al Consejo era ya todo un vaticinio de la pérdida paulatina de prestigio y relevancia de este Supremo Tribunal a lo largo del reinado de Fernando VII***.

***. Estos créditos se habían cedido para suplir los gastos de armamento de Madrid por sus respectivos dueños y acelerar la conclusión de la obra de costura de prendas de vestuario y montura. Para lo primero procedían los ministros comisionados de los donativos de acuerdo con los Directores del Banco de San Carlos, y para lo segundo importaba mucho no variar de mano -señalaba el Consejo en su consulta-, porque los ministros encargados del vestuario habían hecho las contratas, habían procedido con mucha economía sobre muchos artículos, estaban al corriente del negociado y más fácilmente podían concluirlo que pasando a terceras manos. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527 núm. 16).

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527 núm. 16.

***. Cabrera Bosch, en su trabajo "Consejo Real de Castilla, Legislación y Revolución 1.808-1.834", hace algunas afirmaciones arriesgadas, como las siguientes: "La acción crítica del Consejo frente a la Central, no era más que el resultado de la pérdida de toda esperanza por parte del Consejo de Castilla de concentrar el poder en sus manos; ya que, en efecto, su irresponsabilidad había sido la causante de haber perdido la dirección política del Gobierno de la Nación. Fue su actitud reaccionaria frente al proceso revolucionario la causante de sus propios problemas. En un momento en que lo que parecía más importante era expulsar a los franceses, el Consejo de Castilla no quiso tomar parte nunca en la toma de armas por el pueblo para defenderse del invasor, y como siempre resolvía sus problemas en grandes

Por un Real decreto de 31 de octubre de 1.808 se aprobaba el reglamento que señalaba las funciones, causas y términos en que debía conocer el Tribunal Extraordinario y Temporal de Vigilancia y Protección, creado por la Junta Central, y las personas que habían de componerlo. Entendería de las causas de infidencia o adhesión al Gobierno francés y estaría formado por Ministros de todos los Consejos y otros Tribunales del Reino. Por el Consejo Real fue designado don Andrés Lasauca y como Fiscal lo sería don Justo María Ibar Navarro, conocido oidor del Consejo Real de Navarra de papel relevante en tiempos de la Junta Suprema. Se estableció entre otras cosas que este Tribunal juzgase los casos según el estilo y la práctica de la Sala de Alcaldes***.

Llama la atención el papel destacado que ya asumía el Consejo de Castilla en la persecución de las causas de infidencia y contra los afrancesados. Esto nos demuestra que era un cometido propio de la naturaleza de este Consejo y que ya las autoridades de aquella época se apoyaban en el Consejo para la resolución de este tipo de asuntos.

sesiones de las que no se obtenía ningún resultado." (CABRERA BOSCH, M.I., op. cit., pág. 129). Parece que a la altura de nuestra investigación, las cuestiones planteadas por M.I. Cabrera Bosch pueden quedar ahora más claras. El Consejo se opuso a la Junta por defender la legalidad vigente y aún así y a las humillaciones sufridas, supo servir lealmente a la Junta Central, a la que juró inmediatamente, y expuso en cada ocasión sus dictámenes y consultas, como era su cometido; por otro lado, parece que la madurez y responsabilidad del Consejo de Castilla queda fuera de toda duda, y que supo comportarse con extremada astucia y serenidad frente a la fuerza de las armas francesas; por ello mismo, el Consejo buscó evitar un enfrentamiento frontal con un ejército mucho más poderoso que el español, y a la vez promovió y se encargó personalmente en el momento debido de la formación de nuevas unidades de tropa y de su equipamiento.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.995, "Papeles del Sr. Marqués de la Romana", "Real Provisión de 1.808 del Consejo Real en que se manda guardar y cumplir el Reglamento del Tribunal Extraordinario de Vigilancia y Protección creado por la Junta Suprema Gubernativa del Reino."

4. Noviembre de 1.808: la campaña de Napoleón

A partir de noviembre comenzaron a llegar a la Corte malas noticias del Norte. Se empezó a conocer que el Emperador en persona se había puesto al frente de un poderoso ejército francés^{***}, que bajaba inexorable hacia Madrid. Los rumores y bulos corrían por Madrid y el Consejo tomó cartas en el asunto para evitar su propagación^{***}.

El 12 de noviembre, en Burgos, Napoleón aprobaba varios decretos. En uno de ellos ponía fuera de la ley a algunas personalidades, entre ellas al duque del Infantado. Y daba un ultimátum a los españoles, a partir de su entrada en Madrid, para someterse^{***}. Por su parte, la Junta Central respondió con una declaración formal de guerra

^{***}. El 29 de octubre, tras la firma del tratado de Erfurt con el zar Alejandro, Napoleón partía para España. El 3 de noviembre estaba ya en Bayona y tres días más tarde, el 6 de noviembre, asumía personalmente el mando del Ejército en Vitoria.

^{***}. El expediente número 17 del legajo 5.512, (Invasión Francesa, Consejos Suprimidos, A.H.N.), fue formado en virtud de un Decreto del Consejo de Castilla para que la Sala de Alcaldes realizara las diligencias correspondientes para la averiguación de las personas que se presentaron en la calle de la Montera y Plazuela del Angel, extendiendo noticias bastante funestas, conocidas por medio de unas cartas que decían remitidas desde Burgos el 16 de noviembre de 1.808. El Consejo tomó medidas para evitar que se difundieran tales noticias: decidió inicialmente que se publicase un bando, edicto o aviso para que el público no creyese sino lo que el Gobierno publicase con relación a nuestros ejércitos. Se pedía también que se avisase sobre las personas que difundían tales noticias, que alarmaban al pueblo y turbaban la paz pública. Pero más tarde pidió el Consejo a la Sala de Alcaldes que no publicase el bando y que continuara con sus diligencias.

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 331.

a Francia***.

Con fecha 17 noviembre 1.808 el Consejo dictó providencia para que las Justicias de los pueblos del Reino diesen cuenta al Consejo inmeditamente de cualquier ocurrencia extraordinaria que hubiera en los Ejércitos. Era muy importante conocer con detalle los movimientos de los ejércitos enemigos***. Y las noticias que llegaban del Norte eran sin duda preocupantes. Comenzaba a saberse que Burgos había sido destruida por los ejércitos del Emperador y aquéllos se acercaban a Madrid***. La Sala propuso publicar un edicto, recomendando al pueblo no dar fe más que a las informaciones oficiales. El Consejo juzgó este edicto inoportuno e inútil***.

Inmediatamente se estudió el modo de llevar a cabo la defensa de Madrid***. En primer lugar, era necesario armar y equipar nuestros ejércitos, algo a lo que el Consejo había dedicado muchos esfuerzos desde el mes de agosto. Fueron reunidas fuertes sumas, de fondos públicos o aportadas por particulares. Muchos nobles y autoridades eclesiásticas contribuyeron también a esta causa. Ello permitió que el Consejo pudiera remitir dinero y fusiles a ejércitos como lo hizo con Castaños o con el barón de

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm 3 (f). Este expediente contiene una copia de esta declaración de guerra. El original de esta declaración fue hallado hace unos meses en un librería de Madrid.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.527 núm. 6.

***. Azanza y O'Farril apuntaban en su memoria que tras la destrucción de Burgos por Napoleón enviaron un escrito a la Junta Central para que fuese evitada la destrucción de Madrid. Más adelante decían: "Sin embargo, la presencia de los riesgos dictó al pueblo de Madrid y a sus jefes el mismo partido racional y prudente que queríamos inspirarle por medio de nuestro escrito. Y así se vio que cuando el Emperador llegó con su ejército a las puertas de la ciudad, y pudieron calcularse más de cerca los resultados probables de su venganza, la prudencia de algunos jefes, las disposiciones sumisas de la población y la medición del rey José salvaron a Madrid de la ruina y saqueo con que estaba amenazado". (AZANZA y O'FARRIL, "Memoria justificativa", pág. 327).

***. DESDEISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 332.

***. Los expedientes 1, 3, 4 y 5, del legajo 5.526 de Invasión Francesa (A.H.N., Consejos Suprimidos), recogen medidas del Consejo de Castilla para la defensa de Madrid en caso de asedio.

Varsage. Entre otras medidas, el Supremo Tribunal suspendió el pago de todas las pensiones concedidas por los antiguos Reyes y por José I. Pero ante las muchas protestas recibidas, debió limitar esta medida a las pensiones concedidas por José Napoleón***.

El 20 de agosto había creado una Junta militar para la organización y armamento de los cuerpos militares de Castilla la Nueva. El 27 de agosto publicó un orden en Madrid indicando que el 30, a las 6 de la mañana, en los diez cuarteles de la Capital, habría una reunión de todos los solteros y viudos sin hijos, que formarían unidades de infantería fuera de Madrid. Para el día 31 fueron convocados los voluntarios de caballería y los de artillería fueron convocados para el 1 de septiembre. Todos ellos formaron esas tres unidades ya mencionadas anteriormente, que era los Voluntarios de Madrid, tres batallones con 1.000 hombres cada uno***.

También tomó medidas el Consejo de Castilla para controlar la opinión pública***. La Gaceta comenzó a ser publicada dos días a la semana -martes y viernes-, y el Consejo permitió que fueran insertados artículos de tipo panfletario que suplían las lagunas de información de aquel periódico y alimentaban la curiosidad pública. También permitió la publicación de relatos de las atrocidades cometidas por los franceses***.

El Consejo gobernó Madrid y las provincias de alrededor como si fuera una Junta Suprema de Castilla la Nueva. Sabemos que trabajó también bastante para la formación de una Junta Suprema en Madrid, al estilo de las

***. DESDEVEISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 277.

***. Cuenta Desdeveises cómo el general inglés Doyle remitió a la Junta de armamento un plan de organización militar, y cómo el Consejo pudo contestarle que ya había adoptado la mayor parte de las medidas propuestas (DESDEVEISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 283). Por otro lado, el Consejo encontró algunas dificultades más en la formación de unidades militares fuera de Madrid.

***. Afirmaba Desdeveises en "Le Conseil de Castille en 1.808" lo siguiente: "le Conseil ne laissait rien passer qu'il eût pu abattre l'esprit national, et faisait au contraire reproduire toutes les nouvelles capables d'exaspérer les rancunes populaires, ou d'exalter les espérances patriotiques" (DESDEVEISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 330).

***. DESDEVEISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 287.

creadas en las provincias^{***}. Entre las medidas de gobierno adoptadas estaba también el control de los gastos públicos^{***}.

El 24 de noviembre fueron aprehendidas en Somosierra tres cartas de Ministros de José, dirigidas respectivamente al Marqués de Floridablanca, al Decano del Consejo de Castilla y al Corregidor de Madrid. La indignación entre las autoridades españolas fue grande y la Junta Central inmediatamente abrió proceso a aquellos Ministros del Intruso. Se encomendó al Decano del Consejo de Castilla, don Arias Mon, los procesos de O'Farril, Cabarrús y Romero, y al Consejero de Castilla Martínez de Vilela los de Azanza y Urquijo^{***}.

Los días siguientes fueron de intensos trabajos de fortificación de Madrid. El día 25 el Consejo publicó un Aviso al Público de Madrid, informando de las obras de fortificación para defensa de Madrid en caso de la llegada a la Corte de las tropas francesas. Según el plan fijado por el Consejo, fueron señalados varios puntos para las obras de fortificación. En cada uno de ellos habría un

***. G. DE LEON Y PIZARRO, J., "Memorias", tomo I, pág. 109. Esta noticia nos confirma que el Consejo de Castilla no presentó una oposición radical al sistema de Juntas provinciales. El rechazo del Consejo provenía de lo que de anarquía y división de la soberanía tenía el sistema de Juntas planteado. Probablemente comprendería el Consejo que las Juntas eran necesarias y habían realizado un papel eficaz, pero no admitía la insubordinación, la descoordinación y la suplantación arbitraria de las autoridades tradicionales constituidas.

^{***}. Desdevises nos refiere una anécdota en este sentido. Cuando se anunciaba la entrada de las tropas españolas en Madrid, el Ayuntamiento pensó en festejar su entrada con un rancho gratis para los soldados, corridas de toros y otros gastos de adornos y arcos del triunfo. La cuantía de los gastos previsibles llevó al Consejo de Castilla a suspender estos festejos. Ante la queja del Ayuntamiento -¡qué pensaría el ejército si en Madrid era peor recibido que en los pueblos de su carreral-, y ante el temor de perder popularidad, decidió permitir unos festejos, pero más sobrios. (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 293).

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 333. Por su parte, Carnicero añadía lo siguiente a aquella noticia: "Las avanzadas de Somosierra sorprendieron a un hombre con tres cartas dirigidas, una al Conde de Floridablanca, otra al Decano del Consejo Real y otra al corregidor de Madrid, según informaba la Gaceta del 25 de noviembre". El texto de la carta no fue publicado entonces, sino hasta la Gaceta extraordinaria de 6 de diciembre (CARNICERO, J.C., "Historia razonada...", op. cit., págs. 239, 240 y 247).

Alcalde de Corte, un regidor o diputado de la Villa de Madrid, un arquitecto, un aparejador y un sobrestante. Nuevas medidas fueron anunciadas al público mediante nuevo Aviso el día 28 de noviembre^{***}.

En el lado francés, el 26 de noviembre Napoleón había conocido la victoria del Mariscal Lannes en Tudela, sobre el ejército de Aragón y decidió avanzar rápidamente sobre Madrid^{***}. Tres días después, el 29 de noviembre, la Junta Central decidía retirarse de la Villa y Corte hacia Toledo, y dejaba al cuidado de la defensa de Madrid al Consejo de Castilla^{***}.

Al día siguiente, 30 de noviembre, las tropas del Emperador encaraban Madrid, tras cruzar victoriosamente el paso de Somosierra.

El Consejo de Castilla pudo haber huido con la Junta Central, pero prefirió quedarse en Madrid. Ni siquiera tuvo una comunicación oficial de la salida de la Junta Suprema^{***}, como sí la tuvieron los madrileños a través de un Manifiesto^{***}. Decidió remitir una carta a la

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.522 núm. 8.

^{***}. El 28 de noviembre el Consejo pedía urgentemente al Intendente que le tuviera informado de cualquier novedad referente a los movimientos del enemigo. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 12).

^{***}. Ya anteriormente el 27 de noviembre la Junta Suprema había decidido trasladarse a Toledo tras unas noticias alarmantes. Pero demostrándose que éstas eran falsas, se suspendió el traslado al día siguiente, 28 de noviembre. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 2).

^{***}. Parece que la precipitación con que se desarrollaron los acontecimientos no justificaría tampoco este desliz de la Junta Central.

^{***}. Un escrito anónimo de la época describía así este episodio: "El primero de diciembre la Central acordó la providencia justa y necesaria para el bien de la Nación de su viaje a Sevilla; pero se olvidó de los Magistrados; hasta que últimamente dictó una providencia para que de cada uno de estos Cuerpos saliesen unos pocos, y que todos los demás quedasen para auxiliar los vecinos de aquel heroico pueblo; orden que por los más no se recibió, y no pudieron cumplirla: esta conducta no aterró al Consejo, y pareciéndole que no era prudente ni racional abandonar un pueblo tan leal y valiente dejándolo entregado a la anarquía y a la discreción del mayor de los Tiranos; aunque Madrid se hallaba en la triste y deplorable situación que queda dicho, contando con el valor

Junta, en la que le manifestaba "su sentimiento con su sinceridad acostumbrada"¹⁰⁰. El Consejo de Castilla quedaba nuevamente solo frente a los franceses.

de sus moradores, resolvió defenderlo..." (S.H.M., Colección del Fraile, "Causa Fundamental...", op. cit., pág. 9).

¹⁰⁰. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 336.

5. SUPRESION DEL CONSEJO DE CASTILLA POR NAPOLEON

1. La defensa de Madrid

Tras la partida de la Junta Suprema Central, el Consejo de Castilla se encargó de organizar la defensa de Madrid¹⁰⁰. Entre otras medidas, solicitó a los pueblos de la provincia que vinieran en defensa de la Villa y Corte¹⁰¹.

El 1 de diciembre el Consejo pleno trató del

¹⁰⁰. Carnicero defendía en su "Historia razonada" que los Consejos debían haber salido también de Madrid, al igual que la Central, tal y como había ordenado Felipe V durante la Guerra de Sucesión en circunstancias parecidas. "Esto mismo debió practicarse ahora: los individuos de estos Tribunales siempre hubieran contribuido con su consejo y autoridad para alentar el resto de la nación al paso que por haber permanecido en Madrid pudieron influir muy poco en su defensa. Así los de la Inquisición y Castilla fueron las primeras víctimas de las iras de Napoleón y de sus vengativos Ministros (CARNICERO, J.C., op. cit., págs. 300 y 301).

¹⁰¹. "Tras la llamada del Consejo de Castilla, gentes de todos los pueblos marcharon hacia Madrid, en un estado de exaltación peligrosísimo al que huía" (G. DE LEON Y PIZARRO, F., "Memorias", tomo I, pág. 115); cfr. también A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm.4, "Los pueblos que vengan en socorro de Madrid." Mercader Riba afirma que la Junta Central no disponía para la defensa de Madrid más que de 20.000 hombres escasos (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 77).

peligro en que se hallaba la Corte por haber atacado y roto los franceses el paso fortificado de Somosierra. Entre otras medidas se acordó formar una Junta Política y Militar permanente que tendría su sede en la Casa de los Correos, en la Puerta del Sol, por ser el lugar más a propósito para acudir desde allí a todos los puntos de Madrid"".

El mismo día 1 la Junta Suprema expedía desde Toledo una orden al Consejo de Castilla, mandándole reunir víveres y municiones de guerra para la defensa de Madrid. El Consejo remitió esta orden al Tesorero General y al Ayuntamiento, y procedió a su cumplimiento"". También aquel primero de diciembre aprobaba el Consejo un edicto para el pueblo de Madrid. Ante la inminencia de un asedio a la capital, solicitaba calma y obediencia, y animaba a huir a las mujeres, niños y gente inválida"".

En un oficio, mandaba al Ayuntamiento de Madrid que permaneciera reunido permanentemente en las Casas Consistoriales"", para mantener al tanto a la población de las necesidades de la defensa"", y en otro decreto mandaba recoger víveres en los pueblos inmediatos, con vistas a un

"". Esta Junta estaría formada por el Capitán General de Castilla la Nueva, el Director de Artillería, Teniente General don Tomás de Morla, el Gobernador de la Plaza, don Fernando de Vera, el Gobernador de la Sala de Alcaldes, el Corregidor de Madrid, el Intendente del Ejército, varios generales y oficiales del Ejército, cuatro ministros del Consejo de Castilla y cuatro regidores, todos ellos elegidos por el Presidente de Castilla, el Marqués de Castelar, el más antiguo de los miembros de todos los demás Consejos y todos ellos bajo la presidencia del Presidente del Consejo de Castilla. El Duque del Infantado quedaba, por tanto, como la primera autoridad de Madrid (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 2; DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 337; y MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 78). El episodio lo mencionaba también Carnicero "el Consejo anunció el día 1 de diciembre que el gobierno de la Corte estaba a cargo de una Junta permanente en la Casa de Correos" (CARNICERO, J.C., "Historia razonada...", págs. 263 y 264).

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 337.

"". El Consejo de Castilla tuvo problemas para imprimir este edicto, pues habían huido los oficiales de la Imprenta Real. Esto también es señal de que muchos habitantes de Madrid decidieron huir de la Villa (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 2).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 6.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., op cit., pág. 338.

próximo asedio de la ciudad"". También el Tribunal Extraordinario de Vigilancia se puso a disposición del Consejo 'para todo lo que pudiera contribuir a la defensa de la Patria'. Tras agradecerle su ofrecimiento, el Consejo de Castilla le pidió que tuviera el mayor número de sesiones posible"".

Como miembros del Consejo de Castilla en la Junta Militar y Política de Madrid fueron designados los Ministros Vilches, Lardizábal, Cangas y Moyano"". También acordaba el Consejo el día 2 de diciembre que tres porteros del Consejo de Castilla asistiesen continuamente a la Casa de Correos, para atender a la Junta Militar y Política"".

El día 2 de diciembre se informó al Consejo "con noticias seguras aunque no de oficio de la traslación de la Junta Suprema"". Supo el Consejo que la mayor parte de sus miembros, junto con el Cuerpo Diplomático, se habían trasladado a Toledo. Al día siguiente se supo que acababan de marchar los miembros de la Junta Central que quedaban en Madrid, y que habían salido también de la Villa y Corte dos divisiones"".

A la reunión del Consejo pleno del día 2 acudieron diecisiete Consejeros. Ese día el Consejo de Castilla trató que desde el día anterior la Villa estaba sitiada por los ejércitos franceses. Acordó el Consejo quedar permanente, estableciendo turnos de cuatro ministros en cada tanda. Los turnos comenzarían a las doce de la mañana y durarían hasta las 9 de la mañana del día siguiente -pues debía respetarse la asistencia regular al despacho en las tres Salas de despacho ordinario-. Así se hizo y se

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 7'

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., op cit., pág. 338.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 5.

"" A.H.N., Consejos Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 12.

"" El día anterior había el Consejo informado a la Junta Suprema que el paso de Somosierra había sido forzado, y que una Junta Militar había sido instituida en Madrid, y que se habían adoptado todas medidas que exigía la situación presente (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 339).

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 10.

ejecutó en los días siguientes"".

También se acordó la formación de turnos entre el personal subalterno del Consejo. Se encomendó al Escribano de Gobierno Muñoz la composición de los turnos de su propia asistencia y de la de los Relatores"", Escribanos de Cámara"" y Porteros, entendiéndose que había de ser sin perjuicio de la asistencia regular en las tres horas fijadas para el despacho ordinario. También se comunicó orden al Gobernador de la Sala para que diese las disposiciones correspondientes para que en aquellas circunstancias además de los dos alguaciles de a pie que debía haber de forma permanente, hubiera dos más a caballo"".

"". Se formó un plan de turnos, del que se dio copia a cada Ministro del Consejo. Este plan de turnos fue el siguiente: primero, de 12 am a 2 pm: Colón, Villanueva, Arias y Quílez; segundo, de 2 pm a 4 pm, Riega, Yebra, Villagómez y Carrillo; de 4 pm a 6 pm, Pinar, Casa-García, Duque de Estrada y Villela; cuarto, de 6 pm a 8 pm, Puig, Torres, Cortabarría y Arias; quinto, de 8 pm a 10 pm, Fuente-Hijar, Campomanes, Contreras y Quílez; sexto, de 10 pm a 11 pm, Colón, Villanueva, Riega y Carrillo; séptimo, de 11 pm a 7 am, Navarro, Domenech, Arjona e Inguanzo; octavo, de 7 am a 9 am, Yebra, Pinar, Estrada y Villagómez. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 14). No debemos olvidar por otro lado que la media de edad de estos ministros superaba los 65 años.

"". Así quedó el turno de los Relatores del Consejo: don Juan de Santander, de 12 am a 3 pm; don Antonio Benito, de 3 pm a 10 pm; don José María Zorraquín, de 10 pm a 7 am; don Vicente Pedrosa, de 7 am a 10 am; don Juan Santander, de 10 am a 1 pm; don José María Zorraquín, de 1 pm a 4 pm; don Antonio Benito, de 4 pm a 7 pm; don Manuel Luján, de 7 pm a 10 pm; don José de la Vega Carballo, de 10 pm a 7 am del día 4 de diciembre, siguiendo así el turno e invirtiendo las horas de modo que todos se quedasen una noche (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 14).

"". El turno de Escribanos de Cámara quedó establecido en la siguiente forma: don Manuel Picó, de 6 de la tarde a 11 de la noche; don José Ayala, de 11 pm a 6 am; don Manuel Peñarredonda, de 6 am a 9 am; don Manuel Carranza, de 12 am a 3 pm; don Valentín Pinilla, de 3 pm a 6 pm, etc. Se entendía que el aumento de horas que se tomaban los dos primeros era mientras don Valentín Pinilla estuviera empleado en acudir a la defensa de la Villa con una partida de gente que él mandaba (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 14).

"". La orden del Consejo establecía que si no podían venir a caballo lo podían hacer en mula (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 14).

El día dos de diciembre aprobaba también un decreto el Consejo por el que se mandaba a la Sala que con el fin de mantener el orden se hiciesen rondas continuas de día y de noche". También ese día se fijó un edicto mandando a los tenedores de artículos de primera necesidad que no alterasen los precios. Tuvo conocimiento igualmente el Consejo de la posición del enemigo en aquel día: los franceses se encontraban ya frente a la Puerta de Alcalá".

En Madrid se veía la situación evidentemente difícil. La Sala aprobaba un Decreto por el que se ponía en libertad a todos los presos, aunque sus causas estuvieran pendientes, en atención a las especiales circunstancias. No se liberó, sin embargo, a franceses ni a acusados de delitos de infidencia o de mucha gravedad".

El día 3 amaneció nublado. Los madrileños pensaron que llegaba el ataque general. "Así también lo creyó el Consejo y la Junta permanente, y para más animar al pueblo fijó un cartel en que decía esperaba llegasen a tiempo de auxiliar la defensa varios tercios del general Castaños, en cuya busca y alcance había salido el día anterior el duque del Infantado". Por otra parte, se encontraban ya concluidas las fortificaciones de Madrid, realizadas en tan sólo cuatro días. Sin embargo, parece que aquéllas carecían de solidez y la ciudad tenía escasas tropas para su defensa".

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 15.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 18. El Consejo de Castilla debía de seguir muy de cerca las operaciones militares.

***. A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1.808, número 1.400.

***. CARNICERO, J.C., "Historia razonada...", págs. 268 y 269. Sobre la salida de Infantado debemos recordar que el duque era todavía entonces Presidente del Consejo de Castilla y Presidente de la Junta de Defensa. Parece que había partido el día anterior hacia Guadalajara según se dijo a suplicar al General Castaños que viniera en auxilio de Madrid. Esta operación, que pudo bien ser una excusa para salir de la ciudad sitiada, probablemente salvó la vida a Infantado, si hubiera caído en las manos de Napoleón. Martín afirma lo siguiente: "El Duque del Infantado, por saber que Napoleón no le perdonaría su perjurio a José, había abandonado la víspera la ciudad con pretexto de ir en busca de refuerzos..." (MARTÍN, C., "José Napoleón I", pág. 234).

***. Madrid "no podría haberse sostenido mucho tiempo contra un ejército grande." (CARNICERO, J.C., "Historia razonada...", págs. 283 y 284).

Ese mismo día se comunicaba al Consejo de Castilla que a las 6 de la mañana un teniente coronel de artillería español preso en Somosierra había traído a la Junta Militar y Política un pliego del Mayor General del Ejército Francés en España. Príncipe de Neuchatel, informando que el Ejército francés venía mandado por el Emperador en persona y que se componía de 55.000 hombres -de ellos, 12.000 de caballería-. El Emperador con su hermano José estaba a 3/4 de legua de Madrid. En el mencionado pliego, Neuchatel pedía, por orden del Emperador, la rendición de la Villa y Corte para evitar muertes y la destrucción de Madrid"". El marqués de Castelar, en representación de la Junta, contestó a la carta de Neuchatel prometiendo una pronta respuesta y solicitando entre tanto un alto el fuego hasta el día siguiente por la mañana"".

Reunida la Junta Militar y Política, acordó informar del asunto al Consejo de Castilla, al Ayuntamiento y al pueblo de Madrid, para entre todos adoptar una postura común. A las seis y media de la mañana don Gonzalo José Vilches dejó la Casa de Correos para volver al Consejo. Y eran las nueve de la mañana cuando la carta de Castelar llegó a manos de Napoleón.

El Consejo de Castilla estuvo reunido aquella mañana hasta el mediodía, en sesión ordinaria. Recibía constantemente informes del desarrollo de los combates en las calles de Madrid. A última hora de la mañana conoció la ocupación del Retiro por las tropas francesas. Fue entonces cuando decidió enviar a la Junta un lacónico mensaje invitando a acabar con una resistencia inútil. Este fue el acuerdo aprobado:

"...el Consejo ha acordado uniformemente después de haber meditado sobre este gravísimo asunto en el modo que permite lo urgente de las circunstancias, que la Junta, en quien tiene este Tribunal toda la confianza que se merece, tome todas las

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 19.

"" He aquí el texto de la respuesta de Castelar: "Señor, me es indispensable, consultar antes de responder categóricamente a V.A., a las autoridades constituidas en esta Corte, y aún además ver las disposiciones del pueblo, informándole de las circunstancias del día; por esta razón, suplico a V.A. en el día de hoy dé suspensión a fin de que pueda cumplir con estos deberes, prometiendo que mañana temprano, o esta noche, enviaré un general y contestaré a V.A., asegurándole que le profeso todas las consideraciones debidas a su alto rango y mérito. Marqués de Castelar. Madrid, 3 de diciembre de 1.808" (DESDE VISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 346).

medidas más proporcionadas y convenientes para el bien público, procurando sea la primera por los medios más eficaces que se suspendan unilateralmente y de un modo seguro las hostilidades con las precauciones que son propias y se acostumbra en tales casos...Madrid, 3 de diciembre de 1.808."

El 3 de diciembre se reunió el Consejo en la forma acostumbrada a las 9 de la mañana, después de haber oído misa en el oratorio del Consejo. Se leyó un oficio comunicado por Vilches a las 6:30 de la mañana, como vocal de la Junta Militar y Política. También el Ministro Colón leyó el Aviso al Público elaborado por la Junta y una nota con un parte recién recibido en que se comunicaba que los franceses habían roto ya las tapias del Retiro. El Consejo de Castilla estuvo reunido hasta la una y media de la madrugada, recibiendo noticias de la marcha de los combates, unas favorables y otras no. A última hora conoció el alto el fuego que por cierto término -hasta las 11 de la mañana- había concedido el Emperador"".

El general Berthier había dirigido a Castelar un nuevo ultimátum. Aplazaba la reanudación de los combates hasta las 2 de la tarde, asegurando que en caso contrario Madrid sería destruida. Antes de las dos de la tarde debía aparecer una bandera blanca y debían enviarse emisarios para tratar de la capitulación de la Villa. Como a las dos de la tarde no había respuesta, Napoleón decidió esperar hasta las cinco, hora en que llegaron don Tomás de Morla y don Bernardo Yriarte al Campo Imperial de Chamartín, representando a las autoridades civiles y militares de la capital. Traían consigo la rendición de Madrid"".

La defensa de Madrid fue breve"". El asedio duró pocos días y se vio como algo inútil. Crónicas de la época mencionaban cómo los Magistrados del Consejo de Castilla participaron activamente en este episodio: visitando con frecuencia las trincheras, dirigiendo los

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 19.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 348; A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.525 núm. 20, "Capitulación de Madrid y nombramiento hecho por el Emperador en el General Belliard para Comandante General de esta Corte."

"" En la época fue sin embargo exaltado como un episodio heroico. El 10 de junio de 1.817 fue aprobada una Real Orden por la que se creaba la Cruz de Madrid, concedida para premiar los méritos adquiridos en la defensa de Madrid en los tres primeros días de diciembre de 1.808. (Archivo de Villa, legajo 141, sección 2 número 1).

trabajos de fortificación e incluso poniéndose al frente de tropas.

El 4 de diciembre el general Belliard tomaba posesión de la Villa de Madrid. Ese mismo día conoció el Emperador que la noche anterior el Marqués de Castelar se había evadido de la capital con su guarnición, violando así el tratado de capitulación"". Ese mismo día tomó en su indignación varias medidas, contenidas en los llamados Decretos de Chamartín. "Fustigó en primer lugar al Consejo de Castilla que en agosto había proclamado que todo decreto del Emperador francés y su hermano era nulo e inválido"". "

2. Supresión del Consejo de Castilla

En uno de sus Decretos, Napoleón destituía a los individuos del Consejo de Castilla"". En la práctica esta medida suponía la supresión del Consejo"":

"" . León y Pizarro en sus Memorias contaba cómo el Capitán General de Madrid, Marqués de Castelar, se había unido a las multitudes que tras la capitulación de Madrid salían de la Capital. "El, por no firmarla, nos dijo que salía así, y vimos bien claro lo tenebrosamente que se había manejado dicha capitulación." (G.DE LEON Y PIZARRO, F., "Memorias", tomo I, pág. 118).

"" . Historia General de España y América, tomo XII, Edt. RIALP, pag. 198.

"" . DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", documento XXVIII, págs. 152 y 153. Ver también al respecto MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 83: "Los ocho decretos del Emperador".

"" . Este decreto era a su vez una violación del tratado de capitulación de Madrid: en el artículo II de esta capitulación se estipulaba que a todos los habitantes de Madrid les sería respetada su vida y sus propiedades, y a todos los empleados públicos la conservación de sus empleos y el derecho a salir de Madrid, si ellos lo preferían. Y el artículo IV declaraba que nadie sería perseguido por ningún escrito político, que los empleados públicos no serían inquietados por lo que ellos hubieran hecho hasta el momento

"En nuestro Campo Imperial de Madrid a 4 de diciembre de 1.808.

NAPOLEON, Emperador de los Franceses, Rey de Italia, y Protector de la Confederación del Rin.

Considerando qu el Consejo de Castilla se ha comportado en al ejercicio de sus funciones con tanta debilidad como superchería:

Que después de haber publicado en todo el Reino la renuncia hecha por el Rey Carlos IV y los Príncipes D. Fernando, D. Carlos, D. Francisco y D. Antonio a la Corona de España, y después de haber reconocido y proclamado nuestros legítimos derechos al Trono, ha tenido la bajeza de declarar a los ojos de Europa y de la posteridad que había suscrito a estos diversos actos con restricciones secretas y pérdidas: Hemos decretado y decretamos lo siguiente:

Art. 1. Los individuos del Consejo de Castilla quedan destituidos como cobardes e indignos de ser los Magistrados de una Nación brava y generosa.

Art. 2. Los Presidentes y Fiscales del Rey serán arrestados y detenidos como rehenes. Los demás Consejeros quedarán detenidos en sus domicilios en esta Corte, so pena de ser perseguidos y tratados como traidores. Se exceptúan, sin embargo, de la presente disposición aquellos Consejeros que no hayan firmado la deliberación de 11 de agosto de 1.808, tan deshonrosa a la dignidad de S.M., como el carácter del hombre.

Art. 3. El presente decreto será publicado, y de él se hará registro en todos los Consejos, Audiencias y demás Tribunales, para que se cumpla como ley del Estado.

Firmado, NAPOLEON. Por el Emperador El Ministro Secretario de Estado Hugues B. Maret."

Napoleón mostraba así su indignación por el Decreto del Consejo de Castilla de 11 de agosto de 1.808 en el que se declaraban nulos e ilegales todos los actos del

presente, en el ejercicio de sus funciones y por obedecer al anterior gobierno. Y el artículo VI estipulaba que Madrid conservaría sus costumbres y sus tribunales en su constitución actual, hasta la definitiva organización del Reino. (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 350). Evidentemente, varios de estos puntos de la Capitulación se hicieron pensando en el Consejo de Castilla muy particularmente. La salida de Castelar con la guarnición de Madrid y la consiguiente violación que esta medida suponía, impulsaron a Napoleón a violar también él el tratado que se acababa de firmar.

gobierno intruso"". El propio Napoleón comprendería el doble juego realizado por este Consejo y cómo su actitud en agosto había dejado en completa evidencia la política imperial para España"".

Sin embargo, el Decreto imperial del 4 de diciembre no supuso el fin del Consejo de Castilla. El día 5 de diciembre"" acudieron los Ministros del Consejo al Palacio del Supremo Tribunal a la hora acostumbrada de las 9 de la mañana, como si nada hubiera pasado. Se repartieron ejemplares de la Capitulación propuesta por la Junta Militar y Política a Napoleón. El Consejo a su vez lo comunicó a todas las autoridades seculares y eclesiásticas de Madrid"".

En aquella reunión fue nombrada también una diputación del Consejo compuesta por el Sr. Vilches, Subdecano del Supremo Tribunal y por tanto el Consejero más antiguo tras el Decano Arias Mon, los cuatro Ministros más modernos y dos Alcaldes de Corte, también los más modernos, para cumplimentar a S.A.I. el Príncipe de Neuchatel.

Habiendo acudido esta diputación al Palacio del general francés, se le respondió en su primera visita que no estaba en Madrid. Se volvió a comunicar entonces al Príncipe, en el mismo día y a través de un oficio del Decano, "que el Consejo tendría a grande honor presentársele en cuerpo o en diputación, en como fuese de S.M. agrado, en el paraje donde se hallen desempeñando este tributo debido a la alta consideración con que mira a S.M.M""". Como el

"" . Vid. el Capítulo cuarto de esta EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

"" . Probablemente influyó en la expedición de este fulminante decreto la violación por Castelar de la Capitulación recientemente firmada, lo que sin duda debió indignar a Napoleón. El Emperador decidió vengarse en el Consejo de Castilla, al que guardaba también el mencionado antiguo resentimiento.

"" . El día 4 de diciembre no hubo reunión del Tribunal.

"" . A los Consejos de Indias, Ordenes, Hacienda, Guerra, Inquisición, Marina y Cruzada. El Escribano de Gobierno fue encargado de comunicarlo a la Junta de Comercio, Ayuntamiento, Nunciatura, vicariato eclesiástico, corregidor, teniente de corregidor y a la Cámara de Castilla. (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 352).

"" . A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 20. El 6 de diciembre, a las 11 de la mañana, llamó el Consejo al Relator don Antonio Benito y el Decano le envió a casa del Conde de Oñate, donde residía el General Belliard, Gobernador Político Militar de la Villa. Se informó del curso que había seguido la carta enviada el

Consejo de Castilla, igual hicieron los demás Consejos y Corporaciones residentes en Madrid, incluida la Sala de Alcaldes"".

Los documentos conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid nos aportan nuevas luces sobre los hechos acaecidos en aquellos días: por ejemplo, sabemos que el Consejo de Castilla estaba preocupado por los abastos de Madrid"", ya que los pueblos vecinos de la Corte no se atrevían a venir a la capital, y que esta preocupación duró varios días más, ya que el día 9 de diciembre el Consejo tuvo que tomar medidas específicas para garantizar los suministros de Madrid"". El Consejo siguió ocupándose de los asuntos de gobierno ordinario y así, por ejemplo, mandó reponer en su sitio las balas de algodón que habían sido utilizadas para la defensa de Madrid"".

También el día 5 varias personas de las que en su momento habían huido con el ejército francés, se presentaron a Martínez de Villela y Arias Mon pidiendo las llaves de sus domicilios y los efectos en ellas existentes. El Consejo de Castilla se vio obligado a acceder a su petición"".

A las cinco de esa misma tarde recibía el Decano una orden a través del Ministro don Manuel Romero para que aquél, junto con dos miembros del Supremo Tribunal, el Fiscal más antiguo y los dos Escribanos de Gobierno acudieran ese día a las 5 de la tarde a la Secretaría de Justicia. Acudieron inmediatamente los Consejeros Lardizábal y Campomanes, el Fiscal Jerónimo José Díez, y los Escribanos Santisteban y Muñoz. Entraron en una sala donde estaban los Secretarios de la Cámara don Juan de Ayestarán y don Pedro Tavira. Un poco más tarde entró Romero, Ministro interino de Justicia, e hizo a los presentes una disertación sobre las

día anterior a Neuchâtel, por medio del Secretario de la Presidencia. Regró el Relator al Consejo a las 11:15, diciendo que Belliard había remitido ya la carta a Neuchâtel.

"" Así lo apuntaron Azanza y O'Farril en su "Memoria Justificativa", págs. 328 y 329, añadiendo que una diputación numerosa de todas las Corporaciones de Madrid pidió a Napoleón la presencia de José I.

"" Aquel día informaba la Sala de Alcaldes que el abasto de alimentos en la Plaza Mayor era mínimo.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 21.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 352.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 22.

grandes beneficios y felicidades que el Emperador pensaban traer al Reino, a pesar de las ofensas que se le habían hecho por la conducta observada después de la ausencia suya de la Corte. Concluyó se exposición informándoles que el Rey había resuelto que se le diese una certificación de varios puntos:

"1. Certificación de los acuerdos y consultas del Consejo posterior a la salida de S.M. de esta Corte, sin incluir lo correspondiente a particulares y de Justicia; 2. Otra de los papeles que en dicho tiempo se hubiesen extraído del Archivo del Consejo; 3. Otra de quiénes son los Ministros del Consejo que han dejado de asistir a él desde la salida de S.M. de esta Corte."""

El Consejo pleno del día 6 estudió la petición real. Evidentemente, acceder a probar documentalmente las actuaciones del Supremo tribunal era firmar su propia sentencia de muerte. El Consejo debió deliberar largamente sobre este asunto, pues ello implicaba incluso concretar las responsabilidades de cada uno de sus miembros. Pero por otro lado, era clara y conocida por todos la actuación del Consejo de Castilla en ese periodo y no cabía ocultar nada. Por ello mismo el Consejo pleno decidió ejecutar este mandato real y acordó en consecuencia que los Escribanos de Cámara lo cumpliesen puntualmente con la mayor brevedad posible"".

Sabemos que el día anterior el Decano Arias Mon había enviado un mensaje al Príncipe de Neuchatel, informándole de los repetidos intentos que se habían realizado para presentar sus respetos a Su Alteza, y manifestándole los grandes deseos que tenía el Consejo de Castilla de ser recibido en cuerpo o por diputación"".

De los días siguientes a la capitulación de Madrid tenemos noticias diversas. El Consejo de Castilla siguió funcionando normalmente, acordando providencias de

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 24. Romero dejó a la prudencia y libre albedrío del Decano el modo de ejecutar todo lo mandado con la prontitud que el Rey deseaba. Y lo mismo propuso con respecto a la Cámara.

"" Sabemos que fueron hechos los correspondientes certificados. De la Escribanía de Cámara y de Gobierno de Santisteban sabemos que no había tomado ninguna providencia general durante la ausencia de José I y sólo había dirigido las que se le pasaron según costumbre por la Escribanía de Gobierno y que dimanaban de decretos y resoluciones del Consejo y de la Junta Central. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 24).

"" DESDE VISES DU DEZERT., G., op. cit., págs. 353 y 354.

varias clases, incluso algunas de ellas tomadas para ejecutar lo establecido en la misma capitulación". También se encargó de velar por el mantenimiento del orden público".

Sin embargo, el Consejo de Castilla sabía que sus días estaban contados. Incluso recibía comunicaciones de Reales Decretos en los que se le ordenaba alguna diligencia, lo que como opinaba Desdevises, era sin duda un buen augurio: la existencia del Consejo de Castilla era todavía aceptada". Pero pronto los indicios irían por otro camino.

Dos días después tuvo conocimiento el Supremo Tribunal que por orden especial del Emperador se habían mandado poner sellos en la Escribanía de Gobierno de Muñoz. Esta medida repentina impidió que pudieran ser levantadas las certificaciones anteriormente pedidas, ya que toda la documentación de la Escribanía había quedado dentro".

"" Así, por ejemplo, el día 7 de diciembre el Consejo disponía lo conveniente mediante providencia para que se cumpliera el artículo 7 de la Capitulación que prevenía el alojamiento que se había de dar a los oficiales franceses en pabellones amueblados. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 26); el 10 de diciembre recibía el Consejo de Castilla una Real Orden del Conde de Cabarrús, mandando al Consejo de Castilla la devolución de los bienes embargados a comerciantes franceses o a fieles vasallos de José I. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 30).

"" Con motivo de la segunda entrada del Ejército francés en Madrid, el Decano del Consejo pidió a la Sala que rondasen los Alcaldes de Corte a fin de mantener la tranquilidad. También hubo órdenes del Consejo y oficios del Corregidor sobre el recogimiento de armas, a consecuencia de varias órdenes del General Belliard en este sentido, el 8 de diciembre. (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.400, año 1.809, folios 122 y ss.).

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 355. Ese mismo día, por ejemplo, el Consejo de Castilla recibía una Real Orden del Conde de Cabarrús, mandando al Consejo la devolución de los bienes embargados a comerciantes franceses o a fieles vasallos del Rey (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 30).

"" El 8 de diciembre a las diez y media de la mañana fue don Bartolomé Muñoz a casa de del Sr. Romero, que aunque se encontraba en cama le recibió. Le comunicó que habiendo ido a ver Muñoz esa misma mañana al Conde de Cabarrús. éste pidió a Muñoz que informase a Romero que en virtud de orden especial del Emperador, esa mañana había ordenado que inmediatamente se pusiesen los sellos en la Escribanía de Gobierno de Muñoz. Enterado éste, cuando fue a su Escribanía

También ese día el impresor del Consejo informaba que el general Belliard le había prohibido imprimir nada sin su orden expresa.

El 9 de diciembre el Conde del Pinar comunicaba por escrito a Vilches que su hermano, don Arias de Mon, y el Sr. Fiscal habían sido detenidos, hechos prisioneros de guerra y trasladados a un lugar desconocido. Ambos habían ido la tarde del día 8 de diciembre a Chamartín a ver al Emperador por orden suya^{***}. Habían recibido esta orden por la mañana a través de Belliard^{***}.

Inmediatamente se reunió el Consejo de Castilla bajo la presidencia del Subdecano Vilches -prisionero don Arias Mon, Vilches debía hacer cabeza-, y asistieron diecisiete Ministros. En la reunión fue estudiado el proceder del Consejo ante la prisión de dos de sus miembros.

El 10 de diciembre, después de haberse reunido el Consejo pleno, alrededor de las 12:15 de la mañana vino al Consejo don José Marquina, acompañado del oficial de la Guardia Imperial Mr. Gorce, edecán del General Savary. Traían un pliego de Mr. Hedouville, Ministro Plenipotenciario de Francia cerca del Príncipe Primado, dirigido a los Ministros del Consejo de Castilla. Lo tomó Vilches y tras su lectura llamó inmediatamente a todos los Ministros del Consejo. El pliego contenía una carta en la que se anunciaba un importante decreto, cuyo contenido todavía permanecía inédito para los miembros del Consejo de

ya estaban puestos los sellos. Inmediatamente informó Muñoz al Decano de todo, y como los papeles para hacer la certificación habían quedado dentro, ésta ya no se podía hacer. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 24).

^{***}. Don Jerónimo Antonio Díez, en un escrito que remitió a las Cortes en 1811, relataba que fue llevado "por fuerza a Chamartín, con el Decano don Arias de Mon, después de ser allí humillados e insultados por Napoleón Buonaparte, se les condujo a Francia con escolta, en donde permanecieron cautivos casi tres años hasta que falleció Mon en un hospital de París y Díez pudo por último fugarse..." (A.H.N., Fondos Contemporáneos, Ministerio de Justicia, expedientes personales, legajo 4.391 expte. núm. 2.307).

^{***}. "Muy Sr. mío y mi apreciable compañero. Acabo de recibir aviso de mi hermano y del señor Fiscal que ayer tarde pasaron a Chamartín a ver al Emperador, por orden suya, que ayer mañana les comunicó el Sr. Belliard, de quien han sido hechos prisioneros de guerra y trasladados a otro lugar que se ignora. Lo que participo a Vm. para que se sirva ponerlo en noticia del Consejo" (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 31).

Castilla. He aquí el texto de la carta de Hedouville***:

"Señores:

He traducido a S.M.I. y R. la Carta de VV.EE. del 3 de diciembre: Su Majestad me manda informarles:

Que por su Imperial Decreto, el cual debe haberles sido intimado hoy, quedan VV.EE. bastante enteradas de Su Voluntad. Ha extrañado (a) S.M. la osadía que han tenido de recurrir a su Soberana Persona, como también las alabanzas que se han atrevido a dirigirle siendo VV.EE. los mismos que han asombrado al mundo por la hipocresía y falsedad de su conducta, pues han declarado 'que nunca se debería dar crédito a lo que dirían'.

S.M. se ha dignado por un rasgo de innata clemencia perdonarles la vida** que debían perder en un cadalso. Se lisonjea que en adelante no le hablarán más de VV.EE.; y que por una vida retirada se dejarán olvidar, a fin de que S.M. pierda de vista los delitos que han cometido VV.EE. contra Su Persona y el Pueblo Español.

Tales son a la letra las órdenes de S.M.I. y R. que tengo el honor de comunicar a VV.EE... Cuartel Imperial de Chamartín, 10 de diciembre de 1.808.

Th. Chs. Hedouville
M. Plenipotenciario de
Francia cerca del
Príncipe Primado,
empleado cerca de
S.M.I. y R.

***. A.H.N., Consejos suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 31.

***. Llama la atención poderosamente que Napoleón decidiera perdonar la vida a los Consejeros de Castilla, después de la gravedad del delito que se les imputaba y más en un periodo de guerra. Quizás sea aventurado pensar que en el fondo se trasluce un cierto reconocimiento a la nobleza de este Tribunal -aunque a la vez se les llame traidores-, porque supo defender con energía la razón, oponiendo siempre el derecho a la fuerza. La reacción del Consejo de Castilla tras la salida de los franceses de Madrid no podía sorprender al Gobierno intruso, ya que era consecuente con la oposición legal anteriormente manifestada.

Sres. del Consejo de Castilla."

Evidentemente se avecinaba una tormenta para los miembros del Consejo de Castilla. Tras la conducta mostrada por este Supremo Tribunal en los días de la Junta de Gobierno, del primer reinado de José y su reacción antifrancesa al abandonar el Intruso la Corte, no podía aceptar Napoleón una vuelta a la política de adulación y comparsa. Por de pronto, dos miembros del Consejo estaban ya en prisión.

Reunido el Consejo pleno, asistieron 20 Ministros. Se disculparon por encontrarse indispuestos los Sres. Cebra, Canga, Altamirano, Casa-García y Martínez de Villela. Los porteros tampoco encontraron en sus domicilios a los Sres. Torres y Quílez. Leída la carta en el Consejo pleno, se dispuso remitir una contestación, que en sobre cerrado llevó el Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz a la casa del Duque de Medinaceli, donde estaba la sede del nuevo Gobierno Militar de Madrid. Allí mismo el oficial Mr. Gorce se excusó de recibirla, alegando que el Sr. Hedouville se hallaba en Chamartín con el Emperador y que a éste se podía dirigir la carta. También se intentó llevar a la casa del Gobernador Militar Belliard, pero tampoco estaba en Madrid sino en Chamartín. Finalmente sólo se pudo conseguir que un edecán se hiciese cargo de dirigirla con la primera ordenanza que saliese para Chamartín y la seguridad de que al anochecer estaría el pliego en manos de Hedouville"".

He aquí el texto de la carta remitida a Hedouville por el Consejo de Castilla:

"Excmo. Sr.:

A las doce y cuarto de este día fue recibido como Decano del Consejo de Castilla por mano del Capitán de la Guardia Imperial Mr. Gorce la imperial y Real Orden que V.E. comunica a los Ministros de este Consejo desde el Cuartel Imperial de Chamartín con fecha de hoy, cuyo tenor es el siguiente:

Aquí la Carta

Inmediatamente convoqué a Consejo pleno extraordinario y habiéndose enterado de esta Imperial y Real Orden quedan todos sus individuos en obedecer y cumplir exactamente cuanto en la misma se manda.

Debo hacer presente también a

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 31.

V.E. con el mayor respeto que el Imperial Decreto de que en la Imperial Orden se hace mención hasta ahora no se ha comunicado al Consejo de cuyo acuerdo lo traslado a V.E...10 de diciembre de 1.808"".

Era el fin del Consejo de Castilla. De hecho, en la documentación oficial del Supremo Tribunal de aquellos días, las crónicas acaban. A partir del día 10 no debió reunirse más el Consejo y sus miembros debieron esperar en sus respectivos domicilios la sucesión de los acontecimientos. Sabemos por varias fuentes que don Arias Mon -como hemos visto- fue detenido y metido en prisión junto con el Consejero Conde del Pinar y el Fiscal Díez. Los tres fueron llevados a Bayona bajo la consideración de prisioneros de guerra"". De ellos don Arias Mon nunca regresaría a España, pues falleció tiempo después en un hospital de Bayona o quizás de París"".

Sin embargo no existió un Decreto que propiamente dicho suprimiera entonces el Consejo de Castilla. Por los decretos de Chamartín fueron destituidos la mayoría de los miembros del Consejo, aunque ni siquiera lo fueron todos"". Sin embargo, una institución sin miembros dejaba en la práctica de funcionar"". No fueron

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 31.

"" "El Emperador se llevó presos a muchos de Madrid, entre otros, a Mon, los Fiscales del Consejo y a algunos más de otros Tribunales; que siempre los franceses han continuado con este método, el cual, en vez de ganarles las voluntades, hace que tengan menos partidos en los países que dominan que en los otros." (MARQUES DE AVERBE, "Memorias", B.A.E., tomo XCVIII, capítulo IV, pág. 253).

"" Carnicero afirmaba en su "Historia razonada..." que Mon falleció en un hospital de París: "...aprehendieron y condujeron a Francia al Sr. Mon, Decano del de Castilla, que después murió en un hospital de París, y que por su acendrada virtud mereció sobre su sepulcro un epitafio, que hace ver su constancia y ancianidad, y de consiguiente la injusticia, crueldad y tiranía del infame Napoleón..." (CARNICERO, J.C., op. cit., pág. 301).

"" No lo fueron aquellos que no aprobaron el acuerdo del Consejo de Castilla de 11 de agosto de 1.808, sobre nulidad de las abdicaciones de Bayona y de todos los actos del Gobierno de José I.

"" Un Consejo de Castilla que -como apunta Mercader Riba-, fue respetado y tenido en cuenta por la Constitución de Bayona, sería suprimido inmediatamente tras el regreso del gobierno intruso a Madrid. (MERCADER RIBA, op. cit., pág.

nombrados sustitutos. Más adelante se confirmaría esta resolución al crearse unas Juntas -las llamadas Juntas Contenciosas-, encargadas de ejercer las funciones y cometidos que realizaba el Consejo de Castilla.

Un decreto imperial de fecha 10 de diciembre ordenaba el arresto de los miembros del Tribunal de la Inquisición, entre los que se encontraban tres miembros del Consejo de Castilla. Don Arias Mon ya había sido detenido, don Pedro de Orbe de Larreátegui no pudo ser localizado y sí fue arrestado don Antonio González Yebra^{***}.

De los días siguientes hasta fin de año tenemos muy escasas noticias. El día 11 de diciembre fueron publicados en carteles por las calles los decretos de Chamartín^{***}. Sabemos que la Sala de Alcaldes fue convocada por el General de Brigada Laubardiére mediante carta dirigida al Gobernador de la Sala. En ella se pedía a éste que reuniera a los Alcaldes ese día a las 12 del mediodía para comunicarles una orden de Napoleón. Reunida la Sala, les leyó los nueve decretos aprobados por el Emperador el 12 de noviembre anterior^{***} y pidió su inmediato registro y

89).

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 359.

^{***}. "Napoleón, o más bien sus aduladores Ministros, tuvieron la avilantez de publicar por las esquinas todos aquellos decretos que dieron motivo para que yo emprendiese sobre ellos mis primeros comentarios..." (CARNICERO, J.C., "Historia razonada...", pág. 293). A los madrileños les consternó mucho la publicación de estos decretos: "Oír poco después aquella temeraria proposición de que los Borbones no podían reinar en Europa; con todas las demás amenazas que se verán después, y ver echados por tierra los Consejos de Castilla y la Inquisición sin más dilación ni examen; fue uno de los mayores golpes, y que más agravaron su pesar y sentimiento." (CARNICERO, J.C., op. cit., págs. 299 y 300).

^{***}. De entre ellos destacamos uno, dirigido contra el Duque del Infantado, Presidente de Castilla, y otros nobles: art. I: "Los Duques del Infantado, de Híjar, de Medinaceli... quedan declarados enemigos de Francia y España y traidores a ambas Coronas. Como tales se aprehenderán sus personas, serán entregadas a una comisión militar y pasados por las armas. Sus bienes muebles y raíces se econfiscarán en España, en Francia, en el Reino de Italia, en el Reino de Nápoles, en los Estados del Papa, en el Reino de Holanda y en todos los países ocupados por las armas francesas, para que sirvan a los gastos de guerra; Art. II: Toda venta a disposición, sea entre vivos o por testamento, hechas por ellos o sus poder-habientes después del presente decreto, queda nula y de ningún valor..." El motivo que daba de estos dos artículos era el "haber jurado fidelidad al Rey y luego

publicación, lo que la Sala hizo sin dilación"".

Parece que por tanto a partir de este momento la Sala de Alcaldes asumió algunas de las funciones que el Consejo Real había ejercido anteriormente"". Sería la encargada de publicar y hacer cumplir los Decretos de Napoleón y aquellos que le remitiera el Gobierno intruso. Sabemos que recibía órdenes y edictos directamente de Belliard para su ejecución y publicación"". De esta forma, de alguna manera quedó la Sala de Alcaldes como la única institución que sustituía al suprimido Consejo de Castilla"".

El 16 de diciembre pedía la Sala exención de alojamiento de tropas francesas para los Alcaldes de Corte. El motivo de esta petición era que el Alcalde don Antonio Alcalá Galiano se había visto conminado a alojar en su casa a varios oficiales franceses"".

Desde la capitulación de Madrid, la Sala de Alcaldes se encargó directamente del orden público en la

haber violado el juramento; que después de haber aceptado empleos, se han servido de la autoridad que les había confiado para ir contra los intereses de su Soberano, y venderle; y que en lugar de emplear su influjo para ilustrar a sus conciudadanos, sólo se han servido de él para perderles." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión francesa, legajo 5.526 núm. 31).

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.400, fols. 169 y ss.

"" También la Cámara de Castilla, a la que pertenecía la jurisdicción graciosa del Consejo, continuaba imperturbablemente sus funciones, en medio de las terribles sacudidas que agitaban la Península. (DESDEVISES DU DEZERT., G., op. cit., pág. 83).

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.400, año 1.809, folios 80 y ss.

"" MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 92. Señala también Mercader Riba cómo el 18 de diciembre el Gobernador de la Sala, Manuel Pérez de Rozas, recibió orden del general de brigada comandante de la plaza de Madrid, barón Laubardiére, de incluir en los registros de dicho tribunal los nueve decretos del Emperador. Esta misión hubiera correspondido al fenecido Consejo de Castilla (op. cit. pág. 90).

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.400, año 1.809, fols. 80 y ss.

Capital". El mismo 16 de diciembre los ministros Arribas", Ministro de la Policía General, y Romero, de la Justicia, dirigieron sendos mandatos a los Alcaldes madrileños recriminándoles su pasividad ante la proliferación de gente sospechosa", por la invasión constante de mendigos y vagabundos y por los reiterados pasquines subversivos que aparecían fijados durante la noche. También les acusaba de connivencia con los malhechores detenidos por los soldados franceses, a quienes habían dejado escapar". Para controlar a los extranjeros,

"" "Abolido el Consejo de Castilla (por Napoleón), todo el aparato judicial parecía suspendido, bien que fuesen exceptuados de la destitución los Alcaldes de Corte, hombres por otra parte rutinarios e incapaces de adaptarse a las circunstancias del día, tímidos y aún mal dispuestos a reprimir cualquier conato sedicioso, pero por lo mismo seguramente, respetados por el pueblo." (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 81). Sin embargo, dichas funciones de policía les fueron pronto absorbidas por el ministro de Policía, Arribas, el 28 de febrero de 1809. Arribas contaba ya por entonces con un organizado equipo de comisarios y agentes de seguridad a sus órdenes (MERCADER RIBA, J., op. cit., pág. 91).

"" "Arribas, Ministro de Policía, desconfiaba de aquéllos (los Alcaldes) por su parte. Así, en carta al Decano de los Alcaldes de Corte, fecha 18 de diciembre de 1.808, les amonestaba duramente a tomar providencias para evitar desmanes, ya que ellos son 'los únicos magistrados de la Policía de Madrid'." (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 81, nota 44, citando a La Forest, "Correspondance...", I, 424, y A.H.N., Consejos, libro de Gobierno de la Sala Alcaldes correspondiente a 1.809, núm. 1400, pág. 388).

"" MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 81: los Alcaldes se defendieron de la requisitoria del Ministro Arribas alegando que nunca había habido en Madrid menos movimiento y que a los cafés prácticamente sólo acudían los oficiales del Ejército francés. Finalmente alegaban la imposibilidad de que "los Ministros de la Sala se carguen de responsabilidad de lo que se les atribuye, mientras no se organice de otro modo la Policía, y no se les faciliten los instrumentos."

"" MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", págs. 81 y 82: los Alcaldes de Corte se defendieron replicando al Ministro Arribas que en menos de quince días se habían producido más incendios en Madrid que nunca, debido a la utilización indebida de estufas y hogueras para calentarse por parte de las tropas francesas, "destrozando así las mansiones en las que se alojaban, extraña manera de cumplimentar los preceptos acordados en la capitulación de la ciudad."

el Gobernador Militar de Madrid, general Belliard, proveyó a los Alcaldes de Corte de una "Carta de Seguridad", el 1 de enero de 1.809 y les ordenó identificar a todos cuantos entrasen en la Villa, a fin de comprobar su personalidad".

La Sala debió tomar algunas otras medidas que no agradaron mucho a las autoridades francesas. Así, el 2 de enero el Gobernador de la Sala recibía una carta del general Belliard en la que se pedía que no liberase ningún preso sin su consentimiento". Una nueva amonestación imperial la recibiría unos días después, con motivo de una visita realizada a Valladolid por una diputación de la Sala, para cumplimentar al Emperador y al Rey José. Tres miembros de la Sala" acudieron entonces a la ciudad castellana, junto con otra diputación del Ayuntamiento de Madrid. Por aquellos días -10 de enero de 1.809- Napoleón había fijado allí su residencia. En el discurso pronunciado por el Emperador ante los representantes de varios Consejos y del Ayuntamiento de Madrid, entre otras cosas Napoleón apuntó:

"Que también observaba en la Sala de Alcaldes alguna retardación e indulgencia en el pronto y riguroso castigo de los malvados, ociosos y mal entretenidos, sumamente necesario en estas circunstancias como acababa de verse con los reos aprehendidos por el Gobernador Militar de Madrid, a quienes la Sala había castigado levemente tal vez por consideraciones, temores o recelos indebidos con los delincuentes y facciosos que intentan hacerse dueños de la autoridad pública con sus alborotos y deben enfrenarse constantemente".

Otras competencias fueron al parecer encomendadas a la Sala de Alcaldes. Por decreto de José Napoleón I, fechado el 6 de febrero, le autorizaba a conocer las apelaciones que iban antaño a la Sala de Provincia del suprimido Consejo de Castilla. Su jurisdicción quedaría extendida a las 12 leguas del rastro de Madrid, y su

"" MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España",
pág. 82.

"" También el día 5 se publicaba en dos lenguas - español y francés- una orden por la que detalladamente se encomendaba a los Alcaldes de Corte el control de orden público en la Villa. (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1.809, núm. 1.400, folios 274 y ss.).

"" Don Manuel María del Junco, don Luis Marcelino Pereyra y don Alfonso, Angel Noriega.

"" A.H.N., libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.400, año 1.809, folios 197-204.

competencia abarcaría asuntos de dotaciones de otros Consejos extinguidos y demás tribunales privilegiados de la clase que fuesen"".

A su vuelta de Valladolid, José I les pidió que se presentasen a cumplimentarle al Palacio del Pardo, donde había fijado su residencia, el día 25 de enero a las 12 menos cuarto de la mañana "".

Por otro lado, Mercader Riba nos informa también que un ex-Gobernador del Consejo de Castilla colaboró con el Gobierno josefista. Así, el 9 de febrero era nombrado el Conde de Montarco para la comisaría de Santander, León y el Principado de Asturias"". Y el 8 de marzo tanto Montarco como el antiguo Consejero de Castilla don Francisco Javier Durán fueron nombrados miembros del Consejo de Estado, este nuevo cuerpo consultivo que "venía a suplantarse de una vez el complejo sistema polisinodial existente"."".

Finalmente mencionaremos que la Sala de Alcaldes, que en su momento también se resistió a cumplimentar a José I y a jurar la nueva Constitución,

"" , MERCADER RIBA, J., op. cit., pág. 91.

"" . Unos días antes la Sala había participado en la organización de la entrada de José I en Madrid. Esta entrada tuvo lugar el domingo 22 de enero de 1.809 a las 11 de la mañana. Los Alcaldes de Corte, excepto los dos que debían ir a San Isidro, estaban encargados de mantener el buen orden y tranquilidad entre el pueblo. José I se trasladó desde el Palacio de El Pardo. En el ceremonial de la comitiva se fijaba que el Ministro Decano de la Sala asistiría en coche, detrás del Consejo de Hacienda, acompañado de otro Alcalde, representando a todo el Tribunal. (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro 1.400, año 1.809, fols. 147 y ss.; 161 y ss.). También nos informa Mercader Riba que tras la entrada de José I en Madrid, el Ministro de Hacienda cabarrús entregó una mesada completa a todos los empleados públicos administrativos y judiciales, y a los servidores de la Casa Real. (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 97). Con esta medida política intentaría atraerse voluntades y probablemente recuperar a algunos empleados públicos para reconstruir la nueva Administración josefista.

"" , MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 103.

"" , MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", págs. 110 y 111. Con posterioridad también serían designados Consejeros de Estado los Ministros de las Juntas Contenciosas don Juan Meléndez Valdés, don Luis Marcelino Pereyra y don Benito de la Mata.

terminó prestando este juramento el 16 de febrero de 1.809"".

Ese mismo día mandó formar el Rey José una Junta Criminal Extraordinaria compuesta de cinco Alcaldes de Corte, con la misión de conocer de todos los delitos de espionaje y sedición. Podían imponer penas de horca inmediatas y sin apelación posible. Los Alcaldes designados cesaron entonces en sus funciones policiales y sin perder su carácter de Alcaldes se dedicaron a las nuevas funciones judiciales asignadas"".

Para concluir este capítulo de la historia del Consejo de Castilla en el reinado de Fernando VII, tras su primera supresión, repasaremos dos últimas cuestiones: qué fue de los Ministros del Consejo en los meses siguientes y qué institución pasó a ejercer las competencias de nuestro Supremo Tribunal.

"" Por Decreto de 16 de febrero de 1.809 se ordenaba que todos los magistrados del Reino y empleados públicos que no hubieran jurado a José I, lo hicieran por escrito en el término de tres días. La Sala ejecutó la orden y todos sus Ministros y subalternos prestaron el juramento el mismo día 16 de febrero. (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1.809, núm. 1.400, folios 60 y ss.); MERCADER RIBA, J., en "José Bonaparte, Rey de España", pág. 91 da la fecha del 23 de febrero para este juramento). Algunos Alcaldes hicieron defección: Mercader Riba señala a don Ramón Navarro Pingarrón y don Antonio Alcalá Galiano, que se encontraban ausentes, don Antonio Cano Manuel, quien se excusó por 'estar dispuesto y no poder firmar en la actualidad' (MERCADER RIBA, J., op. cit. pág. 91).

"" MERCADER RIBA, J., "José Napoleón, Rey de España", pág. 100.

3. Los Consejeros de Castilla tras la supresión

En los Decretos de Chamartín los Consejeros de Castilla quedaban destituidos de sus cargos. El Presidente y sus Fiscales fueron arrestados y considerados como rehenes, mientras los demás Consejeros quedarían sometidos a detención domiciliaria^{***}.

Ya hemos visto cómo don Arias Mon fue llevado preso a Francia^{***}. Suárez Verdeguer apunta que estando preso en Francia falleció en un hospital^{***}. Por algún otro documento de la época sabemos que falleció en París, en 1811 y que tenía entonces 72 años de edad^{***}. Tras la prisión del

^{***}. Según Carnicero, Napoleón pronunciaría más tarde un discurso ante el Ayuntamiento de Madrid y sus clases. En un momento dado y refiriéndose en parte a los Consejeros de Castilla, afirmó: "He satisfecho a lo que debía a Mí y a mi Nación: la parte de la venganza está ya hecha; ha recaído sobre diez de los principales delinquentes; para todos los demás, el perdón es entero y absoluto." (CARNICERO, J.C., "Historia razonada...", op. cit., págs. 332 y 333).

^{***}. Así lo relataba Bayo en su Historia de la vida de Fernando VII: "(Napoleón) confinó a país extranjero a varios españoles entre los cuales merecen citarse a don Arias Mon, Decano del Consejo, el Príncipe de Castelfranco, el Marqués de Santa Cruz del Viso, el Conde de Altamira o Trastámara y el Duque de Sotomayor, conmutándose en encierro la sentencia de muerte fulminada en Burgos". (BAYO, E.K., op. cit., págs. 209 y 210).

^{***}. SUAREZ VERDEGUER, F., "El proceso de la convocatoria de Cortes", pág. 242.

^{***}. A.H.N., Fondos Contemporáneos, Ministerio de Justicia, expedientes personales, legajos 4.391 expte. 2.307, y legajo 4.284, expte. 783. El expediente personal de don Arias de Mon nos informa también que su hijo Juan de Mon murió años más tarde también a resultas de la persecución al Rey. Juan de Mon era teniente de la Real Guardia y fue muerto durante el llamado Trienio constitucional.

Gobernador interino, su mujer y sus nueve hijos permanecieron en Madrid y se vieron obligados a alojar en su casa a varios oficiales franceses, cuya carga debía ser agobiante. Hasta el punto que se vio en la necesidad de pedir clemencia al Emperador para evitar morir de hambre con toda su familia. También solicitaba en su escrito -fechado el 15 de diciembre-, la libertad de su marido. Fue dispensada de alimentar a sus huéspedes, pero no le fue concedida la gracia que para su marido pedía. También sabemos por otro expediente que la casa de Mon fue sellada unos días o a lo sumo unas semanas después, a finales de 1.808 o principios de 1.809. Por aquellas fechas doña María Argüelles de Mon presentaba nueva instancia a José Napoleón sobre su casa sellada. El Real Decreto de 14 de febrero de 1.809 ordenaba levantar los sellos de la casa y reconocer y recoger todos los documentos allí existentes que pertenecieran a la Presidencia de Castilla. Todos los documentos privados serían respetados.

Junto al Decano Mon, otros miembros del Consejo de Castilla habían sido también confinados en Francia. El 19 de julio de 1.811 las Cortes eran avisadas que los Consejeros de Castilla Campomanes y Prada, hasta entonces prisioneros en el país galo, habían conseguido huir y se habían presentado en Cádiz. Estudiado el caso, las

***. DESDEVICES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 359.

***. Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, Gobierno Intruso, legajo 1.088. He aquí el texto de este Real Decreto de 14 de febrero de 1.809: "Artículo 1: se levantarán los sellos puestos en la casa habitación de don Arias Mon y se hará el debido reconocimiento de los papeles que haya en ella. Artículo 2: todos los papeles correspondientes a la Secretaría de la Presidencia de Castilla quedarán a disposición de nuestro Ministro de Policía General para que, como a los demás que existen en el Consejo, les dé la oportuna dirección. Los papeles de la pertenencia particular de dicho don Arias Mon, como todos los demás efectos de la casa quedarán a disposición de su mujer..."

***. "...Intentaron sus satélites (de Napoleón) después arrestar también, aunque no lo consiguieron con todos, a los Consejeros don Gonzalo Vilches, don José Colón, don Manuel de Lardizábal, don José Puig, don Sebastián de Torres, don Ignacio Villela, don Tomás Moyano, don Raimundo Etenhard y Salinas y otros varios, y con particular ahínco buscaron a los dignos Fiscales don Jerónimo Díez y don Nicolás Sierra. He dicho dignos, porque como los demás Ministros del Consejo hicieron ver a Napoleón y sus parciales que en España no había unos jueces meramente rutinistas y venales, como ellos insinuaron, sino instruidos, íntegros y dispuestos a sostener los justos derechos de su legítima patria, y de su verdadero Soberano" (CARNICERO, J.C., "Historia razonada...", págs. 302 y 303).

Cortes acordaron que podían ser empleados como pareciese a la Regencia"".

Otro de los miembros del Consejo llevados prisioneros a Francia fue el Fiscal don Jerónimo Antonio Díez. De él sabemos que permaneció preso en el país vecino hasta octubre de 1811 en que regresó a España"". Díez sería designado por las Cortes magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, elegido en 1813 diputado a Cortes en representación de Salamanca"" y más tarde también Presidente de las Cortes ordinarias"". De los demás miembros del Consejo que quedaron en España, sabemos que muchos huyeron de Madrid y sólo unos pocos quedaron en la

"" M.C. DIZ-LOIS publica en "El manifiesto de 1814" (págs. 116 y 117), un escrito localizado en el Archivo del Congreso de los Diputados (legajo 6 núm. 92), que recoge una comunicación dirigida a los secretarios de las Cortes, fechada en Cádiz el 18 de junio de 1811, y firmada por el también ministro del Consejo de Castilla don José Antonio Larrúmbide. He aquí el texto de esta comunicación: "Los ministros del Consejo Real D. Domingo Campomanes y D. Benito Arias de Prada dieron cuenta al Consejo de Regencia desde esta ciudad de Valencia de que atropellando los mayores riesgos pudieron fugarse de Francia en la noche de 4 de junio, de donde llegaron a aquella ciudad en 18 del mismo mes; y solicitan se les reintegre en sus plazas y permita venir a servirlos. Teniendo S.A. en consideración que estos dos ministros estuvieron prisioneros por espacio de muchos meses en aquella nación, que el primero fue uno de los jueces y el segundo secretario en la Causa de El Escorial, y que desde que salieron de Madrid no recibieron auxilio alguno del Gobierno, viéndose por lo mismo en la mayor necesidad, se ha servido resolver lo participe a V.S.I., como lo ejecuto para que haciéndolo presente a S.M. se sirva resolver lo que fuere de su agrado". También VILLANUEVA menciona este episodio en "Mi viaje a las Cortes", pág. 222.

"" S.H.M., Colección del Fraile, "Idea de la causa formada por orden de las Cortes a los 14 Ministros del Supremo Consejo de Castilla". En otro escrito remitido a las Cortes en 1811, Díez informaba de haberse fugado de su prisión en Francia y de encontrarse por entonces "en la mendicidad y extremada miseria" (A.H.N., Fondos Contemporáneos, Ministerio de Justicia, expedientes personales, legajo 4.391, expte. núm. 2.307).

"" Tomó posesión en el Congreso el 21 de octubre de 1813 (DIZ-LOIS, M.C., "El Manifiesto de 1814", op. cit., pág. 34).

"" "Sus cualidades indudables le llevaron a ser elegido Presidente de las Cortes ordinarias de 1813" (DIZ-LOIS, M.C., "El Manifiesto de 1814", pág. 127).

Villa"".

El 14 de enero de 1.809 el general Belliard

"" Villanueva en su obra "Mi viaje a las Cortes", nos relataba el siguiente episodio relativo al Consejero de Castilla Puig: "19 de diciembre de 1.810. Expuso el Sr. Puig, Regente interino, que luego que Bonaparte extinguió en Madrid el Consejo de Castilla, cuyo individuo era, hallándose reducido a la oscuridad de un particular, fue llamado a la iglesia de San Isidro por el Conde de Cabarrús, como Superintendente de Hacienda, para que jurase como individuo de la Junta de Comercio y Moneda, comisión que había tenido antes como individuo del Consejo. Que a este acto asistió también el Ministro del Consejo Ibarra, que actualmente se halla prisionero en Francia. Que este juramento, como violento, nada prueba contra su lealtad, mayormente habiéndose resistido a él y sufriendo por esta causa un mal tratamiento del Conde de Cabarrús, y no habiéndole libertado de ser llevado preso al Retiro y después a Bayona. Pide que se le reponga en su honor, etc." Las Cortes sobreseyeron este asunto, pese a la petición de dimisión por este motivo por parte de varios diputados. La acusación contra Puig por este juramento apareció varias veces a las sesiones de las Cortes de aquellos meses (VILLANUEVA, J.L., op. cit., págs. 109, 115 y 121).

De otros Consejeros de Castilla sabemos algunos datos más. Don Sebastián de Torres huyó inmediatamente a Lérida, desde donde escribía el 17 de enero de 1809 la siguiente carta a la Junta Central: "Creo muy propio de mi deber manifestar que el 4 del pasado en que entraron los franceses en el Retiro, no dudando ocuparían luego la población y que querían que el Consejo autorizase sus usurpaciones e iniquidades, salí con lo que tenía puesto dejando abandonada mi casa, donde he sabido me buscaron al día siguiente con amenazas, habiendo tomado todo cuanto había en ella, las muchas comisiones que he tenido en fomento de la justa causa que defendemos me hizo objeto odioso a su vista, pero he tenido la satisfacción de llegar a esta ciudad después de mil riesgos de tropezar con ellos; permaneceré aquí mientras no haya recelos de invasión y espero que V.E. me comunique las órdenes que sean de su agrado..." (A.H.N., Estado, "Papeles de la Junta Central, legajo 28c, folios 165 a 168, Causa de don Sebastián de Torres).

Por su parte, de don José Navarro Vidal sabemos que el 13 de enero se fugó de Madrid. Su casa fue ocupada y saqueada; su mujer y familia fueron arrestados; y su persona fue proscrita. Un Tribunal especial purificó su conducta en Sevilla en 11 de enero de 1810, aunque más tarde fue jubilado por la Junta Central, por Real Decreto de 27 de septiembre de 1810 (A.H.N., Estado, "Papeles de la Junta Central, legajo 28c, Causa de don José Navarro Vidal").

hizo arrestar a todos los miembros de los Consejos de Castilla^{***} y de la Inquisición que todavía se encontrasen en Madrid. En la orden se les calificaba de enemigos irreconciliables, que era preciso alejar de Madrid y de España durante algún tiempo y dejar en la impotencia de estar en la oposición directa al Emperador^{***}.

Opina Mercader Riba^{***} que medidas tan severas fueron contraproducentes. "La gente se apiadó de su avanzada edad y de los malos tratos recibidos, de la penosa situación en que dejaron a sus familias, puesto que vieron confiscados sus bienes también, y no dejó de chocar desagradablemente el ver a los representantes del más Alto Tribunal de la nación conducidos como vulgares presidiarios. Desde la fortaleza del Retiro en donde se hallaban encerrados, no descuidaron los magistrados del Consejo de Castilla, y hasta los del de Inquisición, ejercer su influjo a través de las visitas que diariamente recibían, 'hasta el punto de tomarse como oráculo su palabra'."

^{***}. FAYARD, J., "Los miembros del Consejo de Castilla (1.621-1.746)", pág. 12

^{***}. Mercader Riba añade la siguiente explicación: "Por otro lado, esta crisis (la que rodeó a la Batalla de Talavera) había puesto de relieve el peligro que significaba para dominadores franceses y afrancesados, el tener casi incólume a un clero con bríos de cruzada, a una nobleza ávida de empujar de nuevo la frente, a una burocracia sometida de mala gana. Los josefistas (...) no querrán ahora arriesgarse otra vez, y reclamarán de José Bonaparte una severidad absoluta contra sus compatriotas que todavía suspiran por un cambio de situación. He aquí por qué José I va a firmar ahora sus trascendentales decretos sobre la Grandeza y los antiguos Consejos y se llevará hasta sus últimas consecuencias la ofensiva contra el clero regular. (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 120). La razón de estas medidas estriba en que en los días inciertos que rodearon a la Batalla de Talavera, hasta la de Almonacid, el 11 de agosto de 1.809, hubo momentos de incertidumbre sobre la posible toma de Madrid por las tropas inglesas. Muchos se envalentonaron ante esta perspectiva y animaron la sublevación. He aquí unas interesantes palabras del Embajador francés a su Ministro, recogidas también por Mercader Riba: "...Los antiguos Consejos de la administración estatal, todos los empleados y lo que es más intolerable aún, aquéllos que han sido repuestos por José I en Madrid y en otras provincias del Reino, acaban de probar con su conducta que si habían prestado juramento de fidelidad al nuevo Rey, lo habían verificado con reservas mentales..." (MERCADER RIBA, J., "José Napoleón, Rey de España", pág. 121).

^{***}. MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", págs. 83 y 84.

El 15 de enero se permitía los magistrados de más de 65 años quedarse en sus casas, bajo vigilancia policial, y anunciaba Belliard el envío a Francia de seis Consejeros de Castilla y cuatro Consejeros de la Inquisición. Al día siguiente escribía Napoleón animando a acelerar la partida de los prisioneros^{***}.

Sin embargo, José indultó a los Consejeros, de tal forma que Belliard se encontró perplejo, al recibir instrucciones contradictorias de José y de Napoleón. Sabemos que en la determinación de José influyeron las instancias de todos los Cuerpos de la Villa de Madrid. Sin embargo, como apunta Desdevises, José I se equivocó en sus suposiciones, ya que muchos de los Consejeros de Castilla se pasaron a zona no ocupada y colaboraron activamente con las instituciones organizadas en Sevilla^{***}.

Las últimas noticias de los Consejeros residentes en Madrid nos las aporta Desdevises. Varias registros domiciliarios fueron mandadas hacer en las casas de don Arias Mon, don Jerónimo Antonio Díez y don Simón de Viegas, así como en las de los Consejeros don Antonio Ignacio de Cortabarría y don Juan Antonio de Inguanzo. Parece ser que los resultados de estas pesquisas fueron muy limitados^{***}.

^{***}. Sin duda era desagradable tener unos presos tan cualificados en Madrid. Por otro lado, una medida así convertía a tales consejeros en mártires de la opresión francesa.

^{***}. "Cuando en el mes de junio de 1.809 la Junta nacional instituyó en Sevilla el Tribunal Supremo de España e Indias, diez Consejeros de Castilla figuraron entre los miembros del Supremo tribunal". (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 360 y 361).

^{***}. En casa de don Jerónimo Antonio Díez se encontró correspondencia con las Juntas provinciales y las Juntas Supremas, entre otros documentos. (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 362 y 363).

4. Las Juntas Contenciosas

Por Real Orden de 9 de febrero de 1.809 se comunicaba a la Sala de Alcaldes que S.M. había creado dos Juntas compuestas por diez jueces, cinco para cada una, que se encargarían de resolver los asuntos contenciosos^{***} que quedaban pendientes en el Consejo Real y en los demás Consejos y Tribunales de la Corte^{***}. Entre los nombrados para ocupar estas plazas estaban cinco Alcaldes de Casa y Corte: don Andrés Romero Valdés, don Diego Gil Fernández, don Luis Marcelino Pereyra, don Tomás de Casanova y don Martín Leonés^{***}. Las Juntas contaban también con una plantilla de subalternos, en su mayoría antiguos empleados del Consejo de Castilla y de otros Consejos^{***}.

^{***}. Por este motivo fueron conocidas como Juntas Contenciosas o Juntas de Negocios Contenciosos. Los demás asuntos de la competencia del Consejo de Castilla serían remitidos por los Escribanos y Relatores a los ministros competentes. (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 367).

^{***}. A.H.N., Consejos suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.617 núm. 1.

^{***}. A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.400, año 1.809. José I nombró para las plazas de Alcaldes que éstos dejaban a don Diego Cossío, Fiscal del Crimen de la Chancillería de Valladolid, a don Francisco Remón, don Manuel Sanabria, don Laureano Jadó y don Domingo Rico. Los demás ministros de las Juntas fueron elegidos entre Consejeros de Hacienda y del Consejo de Ordenes. No figuró, sin embargo, ningún Consejero de Castilla. Sin embargo, como apunta anecdóticamente Desdevises, los honores de miembro del Consejo fueron concedidos, en el mismo decreto de nombramiento, a don José Ignacio Joven de Salas, abogado cerca de la Sala y nuevo miembro de las Juntas. (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 367 y 368).

^{***}. "Todos los oficiales de aquellos Consejos, o quedarían adscritos a las susodichas Juntas, o solicitarían su inmediata jubilación. De tal modo pasaron a la órbita de tales Juntas Contenciosas todas las Escribanías de Gobierno y de Justicia del antiguo Consejo Real o de Castilla, sus



Fue corriente durante el siglo XIX la creación de Juntas ocasionales que asumieran en un momento determinado el papel de un Consejo o de otra institución suprimida. Este fenómeno, como señala el profesor Escudero, le ocurrió varias veces al Consejo de Estado durante el siglo XIX y un ejemplo claro fue éste de las llamadas Juntas Contenciosas^{***}.

La naturaleza y características de estas Juntas quedan fuera del ámbito y objetivos de esta tesis doctoral y remitimos su estudio a un trabajo posterior. Ahora sólo apuntaremos con Mercader Riba^{***} que su carácter oscilaba entre ser una reliquia del más alto organismo del Antiguo Régimen^{***} y ser antesala del Consejo de Estado Bonapartista^{***}. Como heredero del Consejo de Castilla

Relatores y Agentes Fiscales, sus capellanes, archiveros, sus subalternos; en total cerca de 40 empleados, si bien muchos más de la antigua plantilla, o se hallaban ausentes con licencia o no, o habían fallecido y en algún caso, hasta prisioneros de guerra deportados a Francia. Asimismo se incorporaron a las mencionadas Juntas todos los Escribanos del Consejo de Guerra y Marina, del de Indias, Hacienda, Ordenes, los Relatores y Secretarios del extinguido Consejo de Inquisición, por más que en su mayoría estaban ya cesantes o habrían huido, los empleados de la Escribanía de Cámara de la Junta Central de Comercio y Moneda, así que los de la Suprema de Correos. En conjunto, de unos 200 funcionarios procedentes de los antiguos Consejos del Reino, tan sólo habrían quedado apenas 80 en pie. (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España"— págs. 92 y 93).

^{***}. ESCUDERO, J.A., "Notas sobre el Consejo de Estado entre los siglos XVIII y XIX", Revista Hispania, núm. 128. C.S.I.C., pág. 610.

^{***}. MARCADER RIBA, "José Napoleón, Rey de España", pág. 92.

^{***}. Desdeseis señala cómo la creación de las Juntas Contenciosas fue una curiosa tentativa de resurrección del Consejo de Castilla operada por el mismo José Bonaparte. (DESDEVEISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 88 y 89).

^{***}. Sus competencias fueron aumentadas por un Real Decreto de 18 de agosto de 1.809, tras la supresión de los Consejos de Guerra, Marina, Indias, Ordenes, Hacienda, etc. El artículo 2 de este Real Decreto decía que estas Juntas decidirían "provisionalmente los negocios contenciosos que se hallaren pendientes en los tribunales de que se habla en el artículo precedente" (art. 1.); el artículo 5 decía que "ese observará en el despacho y clasificación de los negocios pendientes en los tribunales suprimidos el mismo método que se ha seguido para los asuntos del extinguido Consejo Real. Los Secretarios, Escribanos de Gobierno y Relatores de los

seguía en buena parte sus procedimientos formales"". Eran consideradas también herederas de la universal competencia del Consejo de Castilla".

Las Juntas habían sido establecidas el 6 de febrero de 1.809 por decreto de José Bonaparte"" y se constituyeron 10 días después de su creación en presencia del Ministro Romero. Ambas Juntas tendrían un Fiscal común, en la persona de Juan Meléndez Valdés. Entre sus funciones se recogían las de examinar los decretos reales y dar dictámenes sobre la eficacia de las medidas adoptadas.

Las Juntas tuvieron su sede física durante su

citados Consejos se conformarán al sistema que hayan practicado la Escribanía de Gobierno y los Relatores del mencionado Consejo Real." (A.G.S., Gracia y Justicia, Gobierno Intruso, legajo 1.088; también vid. A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.400, año 1.809, fol. 365).

"". La historia de las Juntas muestra su constante preocupación por mantener las tradiciones del Consejo. Adoptaron los títulos honoríficos que disfrutaban los miembros del Consejo; tendría siete Relatores y los repartieron tal y como lo estaban en el antiguo Consejo de Castilla; decidieron que todos los días habría Consejo pleno, como acostumbraba el extinguido tribunal; y así otros muchos usos fueron respetados. (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., págs. 369 y 370).

"". Por ello mismo el gobierno josefista les encomendó importantes comisiones y participaron en todas las ceremonias cívicas o religiosas de la Monarquía josefista en calidad de herederas legítimas e inmediatas del Consejo de Castilla. Incluso al parecer por este motivo llegaron a disputar a autoridades nuevas puestos de protocolo. (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", págs. 93 y 94).

"". Las propias Juntas conforme a lo establecido en el decreto de creación, establecieron que se recogieran los pleitos y expedientes del Consejo de Castilla para clasificarlos y remitir los administrativos y de gobierno a los respectivos ministerios. El Escribano de Gobierno del extinguido Consejo de Castilla don Bartolomé Muñoz durante mucho tiempo evitó pasar oficio para el recogimiento de la Causa de El Escorial. En enero de 1.810 se vio precisado a entregar esta causa a petición del Fiscal de las Juntas. estuvo guardada esta documentación en un cajón de la Sala de Mil y Quinientas, pendiente del estudio de los jueces de las Juntas. Recogida nuevamente por Muñoz, la tuvo en su poder hasta el 8 de enero de 1.812 en que se vio nuevamente obligado a entregarla en virtud de Real Orden del Rey intruso. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, legajo 3.026 núm. 47).

tiempo de duración en el Palacio de los Consejos. Allí se reunieron diariamente de ocho de la mañana hasta el mediodía. Sus sentencias serían ejecutorias, sin que cupiera apelación al Rey. Los procesos importantes de la provincia de Madrid que vinieran en apelación al Consejo de Castilla, serían juzgados por una de las Salas de la Sala de Alcaldes, al estilo de como se juzgaban hasta entonces los asuntos de menos importancia"".

Con la reestructuración del aparato judicial de la Nación, mediante el decreto dictado por el Rey José el 21 de junio de 1.812, fue creado un Tribunal de Reposición en la Corte que absorbía buena parte de las funciones de las Juntas de Negocios Contenciosos"". Sin embargo, todavía seguirían teniendo alguna reunión más, como la celebrada el 30 de abril de 1.813, que debió ser la última. Por otro lado, también en aquel decreto se establecía un total de trece chancillerías en toda España. La que correspondía a Madrid absorbía a su vez la Sala de Alcaldes de Casa y Corte"".

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 367. Esta organización tenía carácter de provisional hasta que fueran instituidos los tribunales previstos por la Constitución de Bayona.

"". Se prolongó en demasía la interinidad de las Juntas Contenciosas, "ya que hasta el mes de junio de de 1.812, en vísperas del derrumbamiento casi definitivo del Estado bonapartista en España, no se llegó al establecimiento de un sistema judicial coherente, totalmente concebido según los dictados de la Constitución de Bayona y con un Tribunal de Reposición en la cúspide y un aparato tribunalicio, perfectamente escalonado y bien trabado. Únicamente en aquel entonces la desaparición de todo lo que aún quedaba del extinguido Consejo Real o de Castilla, hubiera podido ser admitida sin subterfugios de legalidad." (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 94).

"". MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", págs. 95 y 96. Sin entrar a fondo en esta cuestión, ajena a nuestro estudio, sí apuntaremos que se produjeron algunas tensiones entre la Sala de Alcaldes y el Gobierno intruso, y que estos roces bien pudieron precipitar la supresión de la Sala. Por ejemplo, uno de estos conflictos venía recogido en la Real Orden al Decano de la Sala de 26 de noviembre de 1.809. En esta Real orden se decía que "el nombramiento de los Alcaldes de Barrio no pertenece en modo alguno a la Sala de Alcaldes según las atribuciones que en lo sucesivo debe tener este Tribunal y por consiguiente no procederá a ejecutarlo en modo alguno." (A.G.S., Gracia y Justicia, Gobierno intruso, legajo 1.164); en otro orden de cosas, la idea de la supresión de la Sala no era nueva. Como señala Mercader Riba, "al ser suprimido el Consejo de Castilla, el Ministro de Justicia, Romero, pensó que su Cámara criminal

Vemos por tanto que la medida de fuerza adoptada por el Emperador contra los Consejeros de Castilla fue un error. Las Juntas Contenciosas intentaron reparar y componer un sistema institucional que necesitaba de una figura similar al Supremo Tribunal, y cuyo por otro lado no debieron realizar con igual eficacia.

De esta manera, tras la supresión del Consejo de Castilla por Napoleón en diciembre de 1.808 -la primera sufrida por este Tribunal tras más de cuatrocientos años de existencia-, el Supremo Tribunal no volvería a ocupar su sede física en Madrid hasta la restauración efectuada por el propio Fernando VII en 1.814. En el intervalo, como veremos a continuación, se sucedieron distintos restablecimientos y supresiones, paralelos a los acontecimientos políticos de nuestra Guerra de la Independencia.

5. Epílogo al Consejo de Castilla en el año 1808.

Incluimos aquí a modo de epílogo un atinado análisis de R. Gibert que resume muy bien la conducta del Consejo de Castilla en el año 1808. Gibert realiza su análisis a partir de la lectura de la conocida obra de Desdévise du Dezert "Le Conseil de Castille en 1808":

"...el que siga leyendo a ese autor leerá la historia más vigorosa, más recia, más valiente. Una historia que otorga al Consejo de Castilla lugar muy digno en la Guerra de la Independencia, de la que se han visto generalmente sus aspectos espontáneos, populares, y menos de los que se debía los aspectos institucionales. Porque tan militar es el escudo como la espada. Y eso fue el Consejo frente a Napoleón. El escudo de España.

El autor va sintiéndose ganado por el tema, y la actitud del Consejo de Castilla le parece cada vez mejor,

(la Sala de Alcaldes de Casa y Corte) debía seguir este mismo destino, pero sus escrúpulos legalistas le impidieron pasar adelante. Romero se limitó a hacer una exhortación muy seria a los Alcaldes, para que se hiciesen merecedores de la indulgencia que se les demostraba (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 81, nota 44, citando la correspondencia de La Forest, I, 424, Madrid 11 de enero de 1.809).

más noble y más enérgica. Y cuando llega al final, y cuenta que el Emperador ha disuelto el Consejo de Castilla y calificado a sus miembros de indignos y cobardes, se pone resueltamente al lado del Consejo y dice: 'a pesar de eso, el Emperador representaba la fuerza, y el Consejo de Castilla representaba el derecho'. Cómo luchó por el derecho es una historia minuciosa, que se debe seguir día por día. Fue una operación militar frente al enemigo. No podía comprenderse desde lejos, desde la zona libre. Una retirada escalonada, sabia y prudente, salvando siempre el honor y los bagajes. Recuperando siempre el terreno. Se apoyó en su falta de poder para no cambiar la constitución de la monarquía a gusto del invasor, e hizo uso de su torpeza y de su rutina para frenar la violencia. Fuerte frente al absolutismo y frente a la invasión extranjera, el Consejo tuvo una sola claudicación, cuando juró a la Junta Suprema y le dio tratamiento de Majestad; lo hizo obedeciendo a Floridablanca; le había resistido como ministro de un rey absoluto, pero se sometió a él como presidente de la Revolución. Todavía vencido, continuó laborioso. En los momentos de entusiasmo bélico, el Consejo se ocupaba del crédito público y de los abastecimientos. Proseguía impasible en la necesaria labor burocrática, mientras a su lado batía la Independencia. Y, como un fantasma del antiguo régimen, el que había hecho frente a los generales franceses hubo de proteger a los residentes franceses de las iras patrióticas.

Sólo con una profunda tristeza podemos ver el final del Consejo de Castilla. Había resistido a Napoleón. Había sobrevivido a su disolución. Dos días después de ser disuelto por un decreto de Chamartín todavía se dirigió al Emperador. Hubo de decirsele que el Emperador no quería oír hablar más de él. Y todavía le irritó por algún tiempo. Obra de los siglos, no podía morir por un decreto. Había resistido a Napoleón, pero no pudo resistir a las Cortes de Cádiz, a la forma genuina de la Revolución. Melancolía de un final inmerecido. Pero el Consejo existe todavía con esa activa existencia que es la vida histórica."

6. SUPRESION DE LOS CONSEJOS Y CREACION DEL
CONSEJO Y TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA E
INDIAS (CONSEJO REUNIDO).

1. Introducción: creación del Consejo y
Tribunal Supremo de España e Indias

Tras la extinción oficial del Consejo de Castilla por los llamados Decretos de Chamartín, los primeros meses del año 1.809 fueron de un cierto desconcierto. Las instituciones de la Corte quedaron desmembradas y sus componentes huyeron a diferentes lugares de España.

De los distintos Consejos que residían en la Corte tan sólo el Consejo de Guerra acompañó a la Junta Central en su huida a Sevilla desde Aranjuez***.

Sabemos que muchos empleados de la Corte huyeron también hacia Sevilla***. León y Pizarro en sus Memorias

***. MARQUES DE AYERBE, "Memorias", B.A.E., tomo XCVIII, cap. IV, pág. 264. "Este Consejo lo han compuesto los ministros del antiguo, escapados de Madrid, y aún algunos de los que fueron a Bayona a jurar al Rey José, en lo que se ha murmurado mucho".

***. Este fenómeno no ocurrió sólo en los Tribunales de la Corte. El 22 de marzo de 1.809 don José Galdiano, oidor del Consejo de Navarra informaba al ministro de Justicia, don Manuel Romero de la clausura de los tribunales de Navarra por el mismo motivo. Se expresaba en estos términos: "Muy Sr. mío y de mi mayor respeto. Siete meses ha que se hallan cerrados los

relataba que a todos los prófugos les fueron dadas allí dos mesadas, pues "abundaba Sevilla en dinero, y bien pronto la langosta de los empleados asoló la Tesorería"".

Propiamente por tanto no cabía hablar por entonces de los Consejos, en cuanto éstos carecían de operatividad y de personal. No extraña por tanto que la Junta Central se viera obligada a optar entre tres soluciones. O dejar las cosas como estaban y no restablecer los Consejos; o bien restablecer todo el sistema polisinodial vigente a finales de 1.808, o finalmente reunir en un sólo Consejo o en varios los entonces existentes. Fue esta tercera posibilidad la escogida por la Junta Gubernativa y de esta manera por Real decreto de 25 de junio de 1.809 fue creado el llamado Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, conocido popularmente como Consejo reunido.

Este Consejo reunía las competencias de los Consejos de Castilla, Hacienda, Ordenes e Indias. No todos los Consejos fueron suprimidos. Algunos como el Consejo de Estado"" y el Consejo de Guerra"" continuaron en sus funciones. El Supremo Tribunal de España e Indias quedó instalado finalmente en Sevilla el 10 de julio de 1.809"".

Sabemos sin embargo que la Junta Central había adoptado la medida en marzo de 1.809, pero seguidamente se suspendió el cumplimiento de este decreto, que fue finalmente promulgado el 25 de junio"". La razón podría ser la fuerte oposición de los miembros del Consejo y la de lo que podríamos

tribunales de este Reino, por haberse ausentado sus Ministros, declarándose del partido de los insurgentes y maquinando cuantos medios pudo producir su imponente influencia para sublevar este país y enconar la indignación pública contra los dos únicos Ministros, que cumpliendo nuestro deber y arrojando, no sin peligros, la opinión del vulgo, nos hemos sostenido auxiliando a los Virreyes y cooperando a la tranquilidad..." (A.G.S., legajo 1.088, Gobierno Intruso año 1.809, Sección Gracia y Justicia).

"" GARCIA DE LEON Y PIZARRO, "Memorias", tomo I, pág. 125.

"" SANCHEZ-ARCILLA, J., "El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1.809-1.810) (Notas para su estudio)", pág. 1.036.

"" MARQUES DE AVERBE, "Memorias", B.A.E., tomo XCVIII, cap. IV, pág. 264.

"" CALVO MARCOS, M., "Régimen parlamentario de España en el siglo XIX", pág.65, nota 1. Agustín Argüelles, en su obra "La Reforma Constitucional de España", comentaba cómo la Junta Central se tuvo que enfrentar también con el descrédito y la falta de popularidad que tenían en las provincias los Ministros de los Consejos. (op. cit., tomo I, pág. 162).

"" CONDE DE TORENO, op. cit., tomo III, pág. 16.

llamar opinión pública. Parece que hubo una fuerte contestación a la publicación de un decreto que revolvía las estructuras del Antiguo Régimen. No cabe duda que la medida de la Junta Central fue muy criticada en la época", tanto por los enemigos de aquellas corporaciones como por sus apasionados defensores". Ello motivó que en su informe a la Junta Central explicaran sus vocales los motivos que les llevaron a reunir los Consejos en uno. Coincidimos plenamente con el profesor Sánchez-Arcilla -y discrepamos en ello de la postura de Artola y de otros autores"-, que la creación del Consejo reunido no puede entenderse como un castigo o una represalia contra el Consejo de Castilla y los demás Consejos. Los argumentos expresados por los vocales de la misma Junta y las circunstancias de la medida parecen no dejar duda al respecto.

Tiene especial interés para nosotros la Exposición presentada en las Cortes por los vocales de la Junta Central, justificando su conducta en el tiempo de su administración. Extraídos de la sección de Justicia el profesor Sánchez-Arcilla" ha publicado algunos fragmentos inéditos de un

... El Marqués de Ayerbe, por ejemplo, en sus Memorias, criticaba la medida afirmando que fue una simple excusa para disolver una serie de Consejos y Juntas supremas particulares (MARQUES DE AYERBE, "Memorias", B.A.E., tomo XCVIII, cap. IV, pág. 264).

... BAYO, E.K., "Historia de la vida...", op. cit., pág. 229; "Poco después disgustó igualmente el restablecimiento de todos los Consejos: a sus adversarios por juzgar aquellos cuerpos particularmente al de Castilla opuestos a toda variación o mejora, a sus amigos por el modo como se restablecieron... La reunión y confusión de todos los Consejos en uno solo fue lo que incomodó a sus individuos y parciales..." (CONDE DE TORENO, tomo III, pág. 16). Incluimos aquí este interesante comentario de Artola: "Con esta decisión, la Central concedía a sus mayores enemigos, los Ministros de los Consejos, la necesaria representación y autoridad que habían perdido como consecuencia de la dispersión de sus miembros. Marx enjuiciaría la medida, en este caso con acierto, diciendo: 'De este modo la Junta creó por propia iniciativa un poder central para la contrarrevolución'." (ARTOLA, M., "Orígenes de la España Contemporánea", tomo I, pág. 219).

... Entre otros podemos mencionar a CABRERA BOSCH, M.I., en "Consejo Real de Castilla, Legislación y Revolución Liberal 1.808-1.834", págs. 130 y ss.

... El profesor Sánchez-Arcilla ha publicado el que parece ser el único estudio realizado hasta la fecha sobre el Consejo reunido. Su título es "El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1.809-1.810) (Notas para su estudio)". En él estudia detenidamente los motivos que llevaron a la creación de este Consejo, con los que coincidimos plenamente. Fue sin duda una medida de eficacia administrativa la creación de esta figura

manuscrito justificatorio en el que se analizaba los motivos de creación del Consejo reunido***.

Según Sánchez-Arcilla, la Exposición de los vocales de la Central partía del reconocimiento que la creación de este nuevo Consejo era "una medida que no mereció la aprobación general, y por ella fue censurada (la Junta Central) casi en toda la Nación"***. Los propios vocales recogían así los motivos por los que crearon aquel Consejo reunido:

"Pero el deseo de restituir a los ciudadanos el giro de sus negocios por conductos conocidos; la necesidad de hacerlo así o de interrumpir el curso de muchos con perjuicio de la administración de justicia de los pueblos, y de muchos individuos, o bien la previsión de trastornar todo el orden del gobierno interior del Reyno, que ni entraba en nuestro plan, ni lo creíamos propio de nuestras facultades; el deseo de dar útil ocupación a una porción de magistrados que huyendo de la dominación francesa desde los primeros meses de la ocupación de Madrid se habían presentado en Sevilla; y en fin, la necesidad de atender por medio del Consejo al despacho de los negocios de Indias cuyos habitantes, exentos de los trastornos que nosotros sufrimos, los producían como de ordinario y estaban acostumbrados a la autoridad de este Tribunal, fueron consideraciones que pesaron mucho en el conto de la Junta que la hicieron meditar el modo de hacer compatible con nuestro estado los demás objetos que interesaban en la creación del Consejo y creyó encontrarlo en la providencia decretada"***.

Evidentemente era conocida la tensión que inicialmente había existido entre la Junta Central y el Consejo

excepcional para unos momentos excepcionales.

***. Este manuscrito se encuentra en le Biblioteca Nacional, con la numeración ms. 7.251, dentro del epígrafe con el título "Documentos referentes al ejercicio del mando supremo que tuvo en España la Junta Central en 1.809". Allí se encuentra la "Exposición que hacen a las Cortes generales y extraordinarias de la nación española los individuos que compusieron la Junta Central Suprema Gubernativa de la misma, de la conducta en el tiempo de su administración".

***. SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., págs. 1.039 y 1.040, citando la mencionada Exposición, Justicia, B.N., ms. 7.251, fol. 5 r.

***. "Exposición...Junta Central", Justicia, B.N., ms. 7.251, fol. 5 r., citado por SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., pág. 1.040.

de Castilla. Era sabida la oposición del Consejo a un sistema de gobierno contrario a lo dispuesto en nuestro sistema de Partidas. Además, como los mismo vocales reconocían en su exposición, el Consejo era un censor incómodo e inoportuno y ésta era sin duda una ocasión de liberarse de él. Sin embargo, creemos con Sánchez-Arcilla que la Junta no lo vio así e intentó obrar con rectitud de intención, aunque sabía que sería criticada por esta medida. No intentó librarse del Consejo, a pesar de que incluso una medida de supresión definitiva hubiera sido bien acogida por muchas Juntas. Sencillamente optó por resolver de forma lógica y coherente los asuntos de gobierno y justicia":

"Nadie mejor que la Junta conocía que los principios del Antiguo Régimen no le eran favorables en ciertos puntos y aunque las circunstancias habían puesto en su mano libertarse de un censor incómodo e inoportuno sin riesgo de ser censurada de la nación; pero persuadida de que la administración de justicia exigía su creación, pudo más ésta que cualesquiera otras consideraciones.""

Faltaban magistrados y empleados públicos en Sevilla". Era necesario montar una administración. Por supuesto, la mayoría de los Consejeros de Castilla no se encontraban allí, al igual que los Ministros de otros Consejos". Como señala Sánchez-Arcilla paragrafeando la

"... "La Junta Central reconocía las discrepancias habidas entre ella y el Consejo, pero pone claramente de manifiesto que en última instancia dependía sólo de ella restaurar o extinguir definitivamente el Consejo de Castilla. De haber tomado esta última determinación habría contado con el apoyo incondicional de un buen número de las Juntas Provinciales, poco propicias, como hemos visto, al Consejo. La Junta Central, en cambio, ponderó la urgente necesidad de dar solución a los asuntos de gobierno y justicia por encima de cualquier rivalidad y optó por restablecer el Consejo". (SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., pág. 1.040).

"... B.N., Justicia, "Exposición...Junta Central", ms. 7.251, fol. 6 r., mencionado por SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., pág. 1.040.

"... Así lo expresa por ejemplo León y Pizarro en sus Memorias: "Apenas llegó el Gobierno a Sevilla, falto de hombres prácticos, de papeles y de noticias, necesitaba más de los pocos salvados de Madrid para montar la Administración." (G. DE LEON Y PIZARRO, J., op. cit., tomo I, pág. 126).

"... Coincidimos con el profesor Sánchez-Arcilla cuando afirma que no parece que la Junta Central obrara deliberadamente contra el Consejo de Castilla (op. cit., pág. 1.041). De un lado, esta medida fue tomada también contra otros Consejos, como ya hemos visto; de otro, la Junta sabía que una medida así sería

mencionada Exposición de los Centrales, en Sevilla "no había Consejos ni Consejeros que reintegrar, sino en muy corto número", por lo que la Junta "ni pudo ni debió restablecer estos Tribunales en la forma que antes tenían, con perjuicio del Estado y de los Ministros ausentes que se juzgasen hábiles para ocupar sus plazas"".

Otros factores influyeron en la decisión de los vocales de la Central: la guerra y la ocupación de vastas regiones por el enemigo impedían la organización tradicional de los negocios por provincias, aparte de que el número de pleitos era entonces muy inferior al habitual; las estrecheces del Erario público para sufragar los gastos de la poderosa máquina administrativa de los Borbones, ahora a todas luces innecesaria; la creación de nuevas plazas y los previsibles conflictos futuros con sus antiguos detentadores. Todo ello influyó sin duda en la decisión de la Junta Central"".

Una última razón de peso ha sido también recogida por J. Sánchez-Arcilla: los miembros del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias eran mayoritariamente antiguos Consejeros de Castilla"". Esta idea lleva a J. Sánchez-Arcilla

impopular y muy criticada, y que sería aprovechada en su contra.

"" SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., pág. 1.041, citando un texto de la mencionada Exposición, B.N., Justicia, ms. 7.251, fol. 7 v.

"" "La intención de la Junta y su resultado fue que un solo Consejo compuesto de ministros de los de Castilla, Indias, Hacienda y Ordenes, que existían en aptitud, despachasen los asuntos de la atribución de todos por exigirlo así la necesidad y la conveniencia pública; teniendo en consideración, ya la estrechez del territorio libre de la Península de la opresión del enemigo, ya los pocos negocios gubernativos y contenciosos que por las circunstancias del tiempo ocurrían en este, cuyo conocimiento incumbiese a los Consejos; ya el corto número de empleados en ellos que habían salido de Madrid y que estaban a disposición del legítimo Gobierno; ya el ahorro de sus sueldos inútiles, siempre recomendable y en la actual época urgentísimo; ya porque en la forma dada al Consejo reunido se proveía de suficiente remedio para el breve curso y decisivo de los negocios ocurrentes, ya, en fin, por la unidad de acción no menos interesante en los Tribunales a quienes estaba confiada una parte del gobierno político y económico de los pueblos..." (B.N., Justicia, ms. 7.251 fol. 8 v., citado por SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., pág. 1.042).

"" Así lo mencionaba, por ejemplo, el Marqués de Ayerbe en sus Memorias: "Este Consejo lo han compuesto los ministros del antiguo, escapados de Madrid, y aún algunos de los que fueron a Bayona a jurar al rey José, en lo que se ha murmurado mucho" (op. cit., pág. 264). Cabrera Bosch incide también en el hecho de que coincidan los nombres de los Consejeros de Castilla entre los

a rebatir la tesis de que la Junta Central deseaba la supresión del Consejo de Castilla como "censor incómodo e inoportuno"***.

2. La labor del Consejo reunido: del 25 de junio de 1.809 al 16 de septiembre de 1.810.

Ya hemos señalado el interés fundamental que tiene estudiar las características y el papel de la institución que sucedió al Consejo de Castilla y que representaba de alguna manera, como hemos visto, su continuidad.

A la hora de estudiar el Consejo reunido en su momento histórico, llama la atención la idea ya apuntada de que existen muy pocas referencias la institución en publicaciones impresas. Se sabe poco de este periodo y menos del Consejo reunido. Si hacemos un repaso de lo que afirman los estudiosos de aquel periodo, encontraremos con facilidad tópicos y opiniones coincidentes, que fácilmente se alejan de la realidad de los hechos o carecen al menos de una sólida demostración. También hay estudios parciales y brillantes, como los que sobre las Cortes de Cádiz*** y su convocatoria realizó Suárez Verdeguer, o el ya

componentes del nuevo Consejo reunido, aunque defiende a nuestro juicio erróneamente que su creación fue una clara medida adoptada por la Junta Central contra el Consejo de Castilla: "como resultado de sus malas relaciones (con las Juntas)", y por no encajar "en lo que iba a ser la nueva legalidad" (CABRERA BOSCH, M.I., op. cit., págs. 130 y 131).

***, "pero quizás la prueba más evidente que viene a confundir las intenciones de la Junta Central está, a mi modo de ver, en la composición que da al nuevo Consejo. (...) De los quince miembros que integrarán el Consejo reunido, nada menos que ocho pertenecían al Consejo de Castilla, sin contar los Fiscales. Creo que estos datos son definitivos. Si la Junta Central hubiese tenido en mente la supresión del Consejo de Castilla, "censor incómodo e inoportuno", hubiera sido mucho más lógica la exclusión de sus Ministros del Consejo reunido y no les hubiera otorgado una clara mayoría dentro de él." (SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., pág. 1.042).

***. SUAREZ VERDEGUER, F., "Las Cortes de Cádiz", "El proceso de la convocatoria a Cortes".

mencionado de Sánchez-Arcilla sobre el Consejo de España e Indias"". Veamos a continuación algunas opiniones sobre el Consejo.

La mayoría de los autores que mencionan al Consejo de España e Indias destacan sus tensas relaciones, probablemente exageradas, con la Junta Central. En esta línea se encuentran García Mandaria, quien al destacar esta fuerte rivalidad entre el Consejo de Castilla y la Junta Central la atribuye a la Real Cédula por la que se fusionaron varios Consejos en uno y se formaba un Consejo reunido"". Artola por su parte destaca también el papel opositor a la Junta Central que representó en todo su periodo de vigencia el Consejo reunido"".

Si acudimos a las fuentes originales de la época, sin duda una de las personas más calificadas para definir lo que fue y lo que representó el Consejo reunido era su propio Decano. En el discurso pronunciado ante el Consejo de Regencia con motivo del reconocimiento de la suprema autoridad de esta Corporación, decía don José Joaquín Colón de Larreátegui lo siguiente:

"...no es el Consejo reunido un Cuerpo representativo de la Nación Española, y de sus Indias; pero es su Tribunal Supremo de Justicia y de Gobierno, y subsiste bajo de diferentes formas desde el remoto origen de la Monarquía. No es un Cuerpo en quien resida la facultad de sancionar; pero su primera obligación consiste en la observancia de las leyes tradicionales, en consultar lo más útil, y en obedecer y ejecutar

"" SANCHEZ-ARCILLA, J., "El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1.809-1.810) (Notas para su estudio)".

"" GARCIA MANDARIA, J.M., "Estructura de la Administración Central (1.808-1.931)", pág. 57. Creemos que García Mandaria se confunde aquí. Aparte de que la rivalidad era ya anterior, da como fecha de creación del Consejo reunido la del 18 de julio y no la del día 25 de junio. Confunde esta Real Cédula probablemente con la Real Cédula por la que se comunicana a varias autoridades la constitución del Supremo Tribunal.

"" "Desde ese momento, el Consejo, en sus dos versiones sucesivas, de Castilla y reunido de España e Indias, encabeza la oposición a los distintos Gobiernos revolucionarios y no vacilará en aprovechar las reliquias de su poder para elevar consulta tras consulta, en las que lo que en definitiva se pone en cuestión es el principio mismo del levantamiento popular y se defiende la vuelta de lo que podríamos llamar normalidad constitucional" (ARTOLA, M., Estudio preliminar al tomo XCVIII de la B.A.E., Memorias del Reinado de Fernando VII, Madrid, 1957, pág. XV). También Torenó apunta que fue un gran error de la Junta "dar vida y halagar a enemigo tan declarado" (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo III, pág. 16).

lo que se le ordene, sin exigir del trono la conformidad con su dictamen. La Nación no lo ignora, y le obedece: sabe su fidelidad y justicia, y le ama: le constan sus sacrificios por su salvación, y le respeta: sabe que por costumbre es su asilo y antemural entre el sumo poder y el humilde ciudadano; y no pocas veces ha oído sus infructuosos clamores por la erección del presente Gobierno, indicando por la ley y la experiencia, análogo a nuestra constitución, deseado por el Estado, y temido por nuestro enemigo"***.

Para Sánchez-Arcilla, el Consejo reunido fue una institución excepcional para unos momentos excepcionales. Por ello debía ejercer todas aquellas "funciones que fueron peculiares de todos y cada uno de los antiguos Tribunales suprimidos, y especialmente de los Consejos de Castilla, Indias, Hacienda y Ordenes"***. Esta fue probablemente la verdadera naturaleza del Consejo reunido.

***,"Discurso que al Consejo de Regencia hizo el Ilmo. Sr. don Josef Joaquín Colón, Decano del Supremo Consejo de España e Indias, en nombre de este Tribunal, al tiempo de prtesentar a S.M. la consulta en que reconoce la suprema autoridad de la Regfencia, en la Real Isla de León a 4 de febrero de 1.810", A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.999, expediente núm.33.

***, Real Decreto de 25 de junio de 1.809

7. RESTABLECIMIENTO DE LOS CONSEJOS (1810)

Por el decreto de la Regencia de 16 de septiembre de 1.810^{***} quedaban restablecidos los cuatro Consejos suprimidos el 25 de junio de 1.809, es decir, el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, el Consejo de Ordenes y el Consejo de Hacienda.

Así describía Argüelles este suceso: "...Pocos días antes de abrirse las sesiones de las Cortes, la Regencia, inopinadamente y con sorpresa general, restableció todos los antiguos Consejos en el pleno ejercicio de sus funciones, y con las facultades y prerrogativas de la época anterior..."^{***}

^{***}. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, número 4.646, 16 de septiembre de 1.810. Esta Real Cédula fue seguida de otra con fecha 21 de septiembre por la que se mandaba cumplir la anterior (A.H.N., Colección de Reales Cédulas núm. 4.647, "Real Cédula de S.M. y Sres. del Consejo. En que se manda guardar y cumplir un Real Decreto (16 de septiembre de 1.810) por el cual se restablecen los cuatro Consejos de Castilla, Indias, Ordenes y Hacienda, reunidos por el de 25 de junio de 1.809"). Curiosamente Salustiano de Dios da como fecha del restablecimiento la del decreto de 21 de septiembre (DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", pág. LXXXVIII).

^{***}. ARGÜELLES, A., "La reforma Constitucional de España", tomo I, pág. 247.

El restablecimiento de los Consejos a su antigua planta sorprendió a todos. Aunque el motivo alegado era la llegada a Cádiz de Ministros suficientes para recomponer estos Tribunales^{***}, a muchos no satisfizo esta explicación. Aunque en su momento se alegaron diversos motivos que podrían justificar esta medida, la opinión general parece que no la aprobó. En realidad, no habían variado prácticamente las circunstancias que había justificado la reunión de los Consejos: el territorio libre de franceses seguía siendo mínimo, y el volumen de expedientes también era mucho menor que en 1.808.

Creemos, con Salustiano de Dios, que hubo otros motivos de fondo que contribuyeron a esta medida. El Conde de Toreno afirmó que la Regencia se encontraba debilitada y necesitaba el apoyo del Consejo de Castilla. Por otro lado, la mayoría de los miembros de la Regencia habían sido anteriormente Consejeros de Castilla y probablemente simpatizarían con un completo restablecimiento del Supremo Tribunal^{***}. Sus nombres eran don José Colón, don Miguel de Lardizábal, don José Navarro Vidal, Duque de Estrada y Tomás Moyano.

Artola, y con él también Salustiano de Dios, considera esta medida del Consejo de Regencia como una muestra evidente de su clara intención reaccionaria. En este sentido Bayo^{***} ya había afirmado en el siglo pasado que la Regencia se asustó ante el cariz que tomaba la elección de suplentes para las Cortes, donde claramente triunfaban los amigos de las reformas, y decidió como contrapeso el restablecimiento de los Consejos. En este sentido apunta Bayo cómo el Consejo de Castilla intentó por varios caminos ejercer la influencia que en otros tiempos tuviera -y que en gran parte había perdido-, e incluso más adelante su Gobernador^{***} intentaría presidir las Cortes.

Sin embargo, ya hemos visto en el capítulo anterior cómo el Consejo de España e Indias debió afrontar un número considerable de expedientes y asuntos. Por otro

^{***}. DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", pág. LXXXVIII.

^{***}. Salustiano de Dios así lo expresa en "Fuentes..." sin embargo, De Dios afirma que todos los consejeros habían sido ministros del Consejo. En realidad, parece que confunde a Miguel de Lardizábal, Regente, con su hermano Manuel, conocido ministro del Consejo de Castilla (op. cit., pág. LXXXVIII).

^{***}. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo I, pág. 259.

^{***}. Don José Joaquín Colón de Larreátegui.

lado, el propio Decreto de restablecimiento^{***} indica cómo fueron admitidos en el Consejo reunido los distintos Consejeros antiguos que iban llegando a Cádiz, de tal manera que aumentó demasiado su número. El mismo Decreto también indicaba cómo la atención de los negocios, su número y gravedad, exigían el desgajamiento de los Consejos reunidos^{***}.

Parece deducirse de la lectura del Decreto que fue la creación de un Consejo de Indias independiente el motivo fundamental para la separación de los Consejos, ya que sus asuntos no debían estar bien atendidos y ahora sí había ministros suficientes para formarlo.

En todo caso, creemos que sí pudo ser un buen apoyo para la Regencia la creación de un Consejo de Castilla, y que entre los objetivos del restablecimiento pudo haber la búsqueda de un apoyo en este Consejo, pues no parecía estrictamente necesario su restablecimiento. Por otro lado, las delicadas circunstancias del momento justificaban también que la Regencia deseara el apoyo y el consejo del prestigioso Supremo Tribunal^{***}.

En cuanto a la planta del repuesto Consejo de Castilla, el propio decreto de restablecimiento indicaba el listado de sus Ministros: don José Joaquín Colón, Decano. Don Manuel de Lardizábal y Uribe, Don Bernardo de Riega y Solares, Conde del Pinar, Don José María Puig y Samper, Don Sebastián de Torres, Don José Navarro Vidal, Don Antonio de Cortavarría, Don Ignacio Martínez de Villela, Don Miguel Alfonso Villagómez, Don Vicente Duque de Estrada, Don Tomás Moyano, Don Pascual Quílez y Talón, Don Justo María Ibar Navarro, Don Antonio Cano Manuel, Fiscal del Consejo y

^{***}. Ver DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", págs. 158 y 159.

^{***}. El decreto afirmaba lo siguiente: "Sucesivamente fueron llegando varios ministros de todos los Consejos; y habiendo solicitado y obtenido su incorporación, se aumentó demasiado su número, en términos que exigían las diversas circunstancias la reintegración de todos a su antiguo estado, así como los negocios de los dominios de Indias requerían toda la atención de su propio Consejo por la multitud y gravedad de ellos, y para su más pronta expedición". El Consejo añadía que ya existía un número suficiente de Ministros de Indias como para formar un Consejo de Indias propiamente dicho (DE DIOS, S., "Fuentes...", pág. 159).

^{***}. En todo caso, nos parece simplista una explicación basada en la afirmación de que la Regencia deseaba restablecer el Antiguo Régimen o que se oponía al progreso.

Cámara, Don Esteban Varea, Secretario del Consejo y Cámara***.

Si comparamos esta distribución de Ministros con la que tuvo el Consejo reunido, comprobamos que componían el Consejo de Castilla un total de catorce Ministros, de los que nueve lo habían sido del Consejo de España e Indias, y de los cinco restantes cuatro habían pertenecido anteriormente al Consejo de Castilla en 1.808: don Bernardo Riega, don José María Puig, don José Navarro, don Vicente Duque de Estrada. Incluso don Justo María de Ibar Navarro había formado parte anteriormente del Consejo de Castilla***. Sin embargo no habían sido nunca Consejeros de Castilla don Antonio Cano Manuel y don Esteban Varea***.

En cuanto al personal subalterno, ya hemos visto que buena parte de los empleados del Consejo de España e Indias continuaron en el Consejo de Castilla tras su restablecimiento. Por reponerse el supremo Tribunal a su situación en 1.808, seguramente tendría una estructura orgánica paracida, aunque no se puede afirmar con absoluta precisión por estar perdido hoy en día el expediente de restablecimiento del Consejo. El Decreto de 16 de septiembre de 1.810 hablaba de que fueran restablecidos los citados cuatro Consejos*** y parece deducirse que fue una restauración del Consejo de Castilla tal y como estaba establecido -habla de 'restablecimiento'- en 1.808.

***. Ver DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", pág. 155, y SANCHEZ-ARCILLA, J., "El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias", pág. 1.049.

***. Así consta en un expediente del legajo 51.424 de la Serie Consejos Suprimidos, A.H.N. Ibar Navarro fue Consejero de Castilla durante el reinado de Carlos IV. Recordamos de este magistrado su brillante papel en la embajada al Consejo de Castilla y a la Junta Suprema desde Bayona, para informar a las autoridades de Madrid del desarrollo de aquellos acontecimientos. Ibar Navarro era entonces oidor del Consejo Real de Navarra y posteriormente pasó a Consejero de España e Indias tras la creación del Consejo reunido. De él también nos da una noticia León y Pizarro en sus "Memorias" (op. cit., tomo I, pág. 129): "se formaba un brillante ejército en Sierra Morena de unos 50.000 hombres muy bien equipados; acompañaban al ejército varios extranjeros...; iba, además, de comisario de gobierno, a manera de la Revolución Francesa, el Consejero Ibar Navarro."

***. Aunque don Antonio Cano Manuel había sido miembro de la Sala de Alcaldes de Corte.

***. Ver De DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", documento XXX, págs. 158-160.

Y coincidimos con el profesor Sánchez-Arcilla^{***} cuando afirma que "la Junta Central trató en todo momento de conservar las estructuras básicas del Estado" pues "sin ellas era prácticamente imposible ejercer un control efectivo sobre la Nación"^{***}. Bastantes problemas habían planteado ya las Juntas provinciales como para disolver los esquemas básicos de control de la sociedad. Si resolvió reunir varios Consejos, debió ser principalmente por falta de recursos humanos que los dirigieran -como afirmó la propia Junta-, y no por motivos puramente ideológicos. La Regencia, que veía con más simpatía al Consejo de Castilla, tuvo menos inconvenientes o reparos para tomar una medida de restablecimiento. Es más, lo veía como una medida necesaria y muy útil para respaldar su política.

^{***}. SANCHEZ-ARCILLA Y BERNAL, J., "El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1.809-1.810)", op. cit., pág. 1.049.

^{***}. "Por ello a pesar de los enfrentamientos con el Consejo de Castilla y con las Juntas Provinciales, quiso mantener los esquemas institucionales básicos de la Administración en los que todavía, a pesar de la importancia de las Secretarías del Despacho, el régimen polisinodial seguía jugando un papel importante del que no se podía prescindir." (SANCHEZ-ARCILLA Y BERNAL, J., "El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1.809-1.810)", op. cit., págs. 1.049 y 1.050).

**8. EL CONSEJO DE CASTILLA DESDE 1.810 HASTA
LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE
1.812 Y SU SUPRESION.**

1. Introducción

El 24 de septiembre de 1.810 quedaron instaladas las Cortes^{***}. Y el 24 de febrero abrieron sus sesiones las Cortes en la isla de León en la iglesia de San Felipe Neri^{***}. El mismo día de la apertura, tras el discurso de la Regencia y la elección de Presidente y Secretario, el Sr. Muñoz y Torrero, diputado por Extremadura, hizo una serie de proposiciones en forma de Decreto. Dos de ellas nos interesan especialmente: "3. Que no conviniendo quedasen reunidas las tres potestades, legislativa, ejecutiva y judicial, las Cortes se reservaban sólo el ejercicio de la primera en toda su extensión; (...) 5. Se confirmaban por entonces todos los Tribunales y justicias del Reino, así como las autoridades civiles y militares de cualquiera clase que fuesen"^{***}.

^{***}. TORENO, op. cit., tomo IV, libro XVI, pág. 199.

^{***}. TORENO, op. cit., tomo IV, libro XVI, pág. 199.

^{***}. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo III,, págs. 399 a 401.. Este decreto fue aprobado el 24 de septiembre, tras el juramento del Consejo de Regencia -con excepción del obispo de Orense-. Fue conocido bajo el título de "Decreto de 24 de

Aunque el Consejo de Castilla y los demás Consejos serían inicialmente respetados, comenzaba una dura batalla entre los defensores del Antiguo Régimen y del orden constitucional, que acabaría con la supresión del sistema de Consejos.

Este nuevo período del Consejo de Castilla fue el comprendido entre el Real Decreto de restablecimiento de los Consejos que habían sido reunidos con fecha 16 de septiembre de 1.810, hasta la supresión expresa del Supremo Tribunal por Real Decreto de las Cortes de Cádiz de 17 de abril de 1.812. Tácitamente esta supresión fue anterior, por la Constitución de 19 de marzo del mismo año^{***}. Fueron por tanto apenas diecisiete meses los que estuvo vigente en su tercera etapa el Consejo de Castilla.

La primera referencia histórica a la actuación del Supremo Tribunal recién restablecido nos la da el Conde de Toreno. Afirmaba Queipo de Llano^{***} que días antes de su apertura, "el Consejo Real desvivióse por obtener que su Gobernador o Decano presidiese las Cortes, que la Cámara examinase los poderes de los diputados, y también que varios individuos suyos tomasen asiento en ellas bajo el nombre de asistentes. Tal era la costumbre seguida en las últimas Cortes, tal la que ahora se intentó abrazar, fundándose en los antecedentes y en el texto de Salazar, libro sagrado a los ojos de los defensores de las prerrogativas del Consejo." Como seguía afirmando el propio Toreno, los diputados que venían de las provincias desconfiaban de los Consejos y de la misma Regencia y se opusieron a estas peticiones del Consejo Real, que finalmente fueron desechadas por la Regencia^{***}.

Al día siguiente, 25 de septiembre de 1.810, las Cortes decretaron que todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas pasasen a prestar reconocimiento y juramento de obediencia a las Cortes Generales en los pueblos de su residencia, "y que el General en Jefe de este Ejército, los Presidentes, Gobernadores o Decanos de los

setiembre".

^{***}. DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo de Castilla", pág. LXXXVIII.

^{***}. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo III, pág. 386. También hace una referencia a este sucedido Bayo (op. cit., tomo I, pág. 259).

^{***}. Se estableció un peculiar sistema de comprobación de poderes. Se escogió seis diputados propietarios, que se encargarían de hacer esta comprobación. En cuanto a la presidencia, las Cortes se la concedieron a don Ramón Lázaro de Dou (BAYO, F.K., "Historia de la vida...", tomo I, pág. 260).

Consejos Supremos existentes en Cádiz, así como los Gobernadores militares de la misma Plaza y de la Real Isla de León pasasen a la Sala de Sesiones de las Cortes para hacerlo...""'. Igualmente estas autoridades debían exigir el debido juramento a sus subalternos.

De esta manera, el Decano del Consejo de Castilla se prestó a jurar ante las Cortes Generales en la sesión pública del 2 de octubre de 1.810""'.

A partir de este momento y hasta la supresión del Consejo de Castilla por el decreto de 17 de abril de 1.812, el Consejo continuó ejerciendo su papel habitual de Supremo Tribunal del Reino, con sede en Cádiz. Fueron frecuentes las consultas presentadas a la Regencia""' y a las Cortes""'. También los miembros del Consejo ocuparon cargos importantes en el Gobierno""' o en comisiones de las

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

""'. Hizo un ligero discurso análogo a las circunstancias, y fue contestado por el Presidente del Consejo de Regencia (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1).

""'. Una Real Orden de 14 de febrero de 1.812 establecía que las resoluciones a las consultas de los Consejos debían ir rubricadas de todos los individuos de la Regencia que asistan a la consulta (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.999 núm. 29).

""'. Villanueva se expresaba en "Mi viaje a las Cortes", en los siguientes términos: "...En la sesión del día 23 de noviembre de 1.810 manifestaron los Sres. Argüelles y Castro 'que no pudiendo desentenderse el Gobierno de lo que ve con ojos prudentes y políticos, en los negocios en que no hay perjuicio de partes se aparta algunas veces de las consultas del Consejo, cuando el proceder según ellas, esto es, según la letra de las leyes, pudiera perjudicar a la causa pública, y que éste parecía haber sido el espíritu del Gobierno, que siguió el dictamen de prudencia del Sr. Hernida y no el legal del Consejo'." (VILLANUEVA, J.L., op. cit., tomo XCVIII B.A.E., 'Memorias del tiempo de Fernando VII', págs. 58 y 59). En otro lugar menciona, por ejemplo, que el 20 de julio en sesión secreta de las Cortes se leyó la consulta con que acompañó el Consejo Real el reglamento del Tribunal de Policía, y se desechó, acordándose que así se dijera en la sesión pública del día siguiente (VILLANUEVA, J.L., op. cit., pág. 222).

""'. El Fiscal Sierra fue Ministro de Gracia y Justicia; o el Consejero Puig llegó a ser Regente interino. Como dato anecdótico podemos mencionar lo ocurrido en la sesión de 19 de diciembre de 1.810. En aquella ocasión, el Sr. Puig,

Cortes"" o las mismas Cortes encomendaron al Consejo de Castilla nuevas comisiones o competencias"".

A la hora de estudiar la actuación del Consejo de Castilla en este periodo tenemos que destacar varios acontecimientos importantes en los que participó el Supremo Tribunal. De un lado, los conocidos asuntos ocasionados por los manifiestos del Regente don Miguel de Lardizábal y "España vindicada" del Decano Colón; de otro, el juicio contra catorce Consejeros de Castilla; y, finalmente, la obra legislativa de las Cortes y la aprobación de la Constitución, con la consiguiente supresión

Regente interino explicó ante las Cortes cómo se vio forzado a prestar juramento de adhesión al Intruso, y solicitaba de las Cortes la reposición en su honor. Señalaba Villanueva que las Cortes sobreseyeron el asunto, pese a la petición de dimisión que gritaron varios de los diputados presentes. Al parecer, la acusación contra Puig apareció varias veces en las sesiones de las Cortes de aquellos meses. (VILLANUEVA, J.L., "Mi viaje a las Cortes", op. cit., B.A.E., págs. 109, 115 y 121). También nos cuenta Villanueva que en la sesión secreta de las Cortes de 1 de junio fue leído un discurso de Puig, en el que pedía la tercera parte del sueldo que le correspondió siendo Regente, y que se le considerase en una jerarquía más elevada a la antigua de camarista, en que estaba cuando se le eligió Regente interino. "Causó desagrado al Congreso esta representación (del Sr. Puig) y se acordó contestar a sus dos partes que no ha lugar y que vuelva a servir su plaza en el Consejo Real. (VILLANUEVA, J.L., op. cit., pág. 199; cfr. también BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo I, págs. 265 y 266).

"". En la sesión secreta de las Cortes de 7 de mayo de 1.811 "dio cuenta la Regencia de haber nombrado a don Andrés Lasauca, Ibar Navarro y otros Ministros del Consejo Real, con su Fiscal, para que formasen el reglamento para el juez o superintendente de Policía que debe establecerse en Cádiz, en virtud de lo mandado por las Cortes, y que había nombrado para este destino al dicho Consejero Ibar Navarro. Desde luego pareció a algunos señores que antes era formar el reglamento que nombrar el juez que lo ha de hacer observar... Se suspendió por ahora contestar sobre esto." (VILLANUEVA, J.L., "Mi viaje a las Cortes", pág. 179). También el 19 de julio de 1.811 se avisó a las Cortes de la llegada a Valencia de los Ministros Campomanes y Prada, que habían huido de Francia, y acordaron las Cortes que podían ser empleados como pareciese a la Regencia (VILLANUEVA, J.L., op. cit., pág. 222).

"". Real Orden de 8 de octubre de 1.811: "A falta de la Junta General de Comercio, Moneda y Minas, entienda el Consejo de Castilla en la aprobación de las Ordenanzas de comercio, artes y manufacturas", (Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 4.739 del catálogo).

2. Asunto Lardizábal. Procesos a catorce Ministros del Consejo de Castilla y a su Decano, el Sr. Colón de Larreátegui.

a) El asunto Lardizábal y el proceso a catorce Ministros del Consejo.

En el mes de septiembre de 1.811 fue publicado en Alicante un escrito con el siguiente título: "Manifiesto que presenta a la Nación el Consejero de Estado Don Miguel de Lardizábal y Uribe, uno de los cinco que compusieron el Supremo Consejo de Regencia de España e Indias, sobre su política en la noche del 24 de setiembre de 1.810""'. Según el Conde de Toreno""', el documento empezó a circular en Cádiz"" y se propagó con rapidez, tanto por la personalidad del autor como por incluir los pensamientos e intenciones que tenía la Regencia sobre las Cortes cuando éstas se instalaron.

El 14 de octubre fue llevado el asunto al Congreso, de la mano de Argüelles"" y del Conde de Toreno.

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm. 1.

""'. TORENO, op. cit., tomo IV, págs. 390 y ss.

""'. Como hemos visto, recoge el Conde de Toreno en su conocida obra sobre "La revolución en España...", que las Cortes se trasladaron de la isla de León a Cádiz y abrieron allí sus sesiones el 24 de febrero de 1.811, en la iglesia de San Felipe Neri. (CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, libro 16, pág. 199).

""'. Vid. "Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias", núm. 377, sesión del 14 de octubre de 1811. También Argüelles en su obra "La Reforma Constitucional de España", escribió lo siguiente sobre el caso Lardizábal: "Esa singular revelación; el arrojó de publicar las tentativas de la noche en que se instalaron las Cortes, al cabo de dos

Fue leído este escrito, que suponía un ataque violento contra las Cortes, dirigido "a persuadir la ilegitimidad de éstas; y asentando que si el Consejo de Regencia las reconoció y juró en la noche del 24 de septiembre, fue obligado de las circunstancias por hallarse el pueblo y el ejército en favor de las Cortes"***. Hablaron varios diputados sobre este asunto, entre otros el propio Conde de Toreno, que pidió se exigieran responsabilidades tanto a Lardizábal como a otros posibles implicados, mencionando esto "a los individuos de los Tribunales Supremos, que como se deduce de esa narración, tienen relación con este asunto"***.

En el manifiesto de Lardizábal se expresaba que el obispo de Orense había remitido en su momento al Consejo de Castilla una exposición o protesta. Por ello mismo el diputado Calatrava proponía en la sesión de las Cortes del día siguiente, 15 de octubre, en varios puntos que una comisión de las Cortes pasase a recoger a la sede del Consejo de Castilla tal exposición, así como la consulta que había extendido últimamente el Consejo de Castilla sobre la autoridad de las Cortes y otros particulares relativos***. A esta proposición fue también añadido con

años, y existiendo en ejercicio la autoridad nacional contra quien se habían dirigido; el lenguaje insolente y decisivo que usaba, semejante al de los conspiradores después de triunfar en la conjuración, no dejaban duda de que este libelo estaba enlazado con el plan vasto y denunciado tantas veces como próximo a ejecutarse, desde que se halló tan débil y tan ineficaz la oposición, dentro de las Cortes, a la reforma constitucional." (op. cit., pág. 102).

***. Cfr. "Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias", núm. 377 págs. 2069 a 2072; y vid. también CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, pág. 391.

***. Cfr. "Diario de Sesiones de las Cortes...", núm. 377, págs. 2071 y ss.; y S.H.M., Colección del Fraile, volumen 259, "Idea de la causa formada por orden de las Cortes a los catorce ministros del Consejo de Castilla", pág. IV.

***. Esta moción de Calatrava fue aprobada por las Cortes con el siguiente texto: "Que se nombre una comisión de dos Diputados, para que inmediatamente pasen al Consejo Real, y recojan de donde quiera que se hallen la exposición o protesta remitida por el R. Obispo de Orense, según el manifiesto de Lardizábal; y la consulta que se dice de público haber extendido últimamente el mismo Consejo acerca de la autoridad de las Cortes, y otros particulares relativos." ("Diario de Sesiones de las Cortes", núm. 377, págs. 2072 a 2074; y en "Idea de la causa formada por las Cortes...", S.H.M., volumen 259 Colección del Fraile, pág. V). Por su parte Argüelles escribía al respecto: "Para que

otra proposición que esta comisión exigiera además certificaciones de las Secretarías de Gracia y Justicia y del Consejo de no existir ni haber existido en sus archivos otros papeles relativos a este asunto. Fueron nombrados para esta primera comisión los Sres. Giraldo y Calatrava.

Una tercera proposición de Calatrava pedía "que se formara una comisión de cinco Diputados, para que juzgue al autor del manifiesto, y entienda en la causa que debe formarse desde luego para descubrir todas sus ramificaciones, procediendo por los términos más breves y sumarios, y con amplias facultades, hasta la sentencia definitiva, que deberá consultar con las Cortes" ^{***}. Puesta a discusión esta propuesta, se acordó que los Jueces que debían componer dicho tribunal no debían pertenecer a las Cortes, ni debían ejercer entonces la magistratura, y su sentencia no debía ser consultada a las Cortes. De esta manera se aprobó la siguiente proposición:

"Que una comisión del Congreso proponga en el día de mañana doce sujetos que actualmente no ejerzan la magistratura, para que entre ellos elijan las Cortes cinco Jueces y un Fiscal, que juzguen al autor del manifiesto, y entiendan en la causa que debe formarse desde luego para descubrir todas sus ramificaciones, procediendo breve y sumariamente, con amplias facultades, y con la actividad que exige la gravedad del negocio." ^{****}

Fueron designados para esta Comisión los Sres. Conde de Toreno, Herrera, Argüelles, Dueñas y Moragues.

El Conde de Toreno pidió que inmediatamente fuesen las Comisiones nombradas al Consejo Real y a la

nada faltase a la irritación y encendimiento de los ánimos, mientras se deliberaba sobre esta sediciosa composición, se denunció como próxima a salir a la luz una consulta acordada en Sala plena por el Consejo Real contra la autoridad y competencia de las Cortes para establecer la constitución que se discutía. La efervescencia a que habían llegado los espíritus con los debates dio lugar a que se asociasen por su coincidencia y analogía todos estos incidentes..." (ARGÜELLES, A., "La Reforma Constitucional de España", pág. 102).

^{***}. S.H.M., "Idea de la causa formada por las Cortes...", pág. V.

^{****}. "Diario de Sesiones de las Cortes", núm. 377, págs. 2071 y ss.; y en S.H.M., "Idea de la causa formada por las Cortes", op. cit., pág. VI.

Secretaría de Gracia Y Justicia, y que mientras se evacuaban estas diligencias permaneciesen las Cortes reunidas con carácter permanente.

Seguidamente se levantó el Sr. García Herreros, quien hizo una cuarta proposición que, como veremos, tendrá en su momento mucho interés: "Encárguese al Gobernador de esta Plaza que indague inmediatamente si es cierto que en la Librería Bosch se han impreso o se está imprimiendo un papel cuyo título es: 'España vindicada en sus clases y jerarquías'; y que en el acto entregue el impresor dos ejemplares, y manifieste el autor, o entregue el original en el caso de no estar impreso."***

Uno de los diputados comisionados para ir al Consejo de Castilla pidió a continuación a la Cámara que fuera expedido el oficio correspondiente al Decano del Consejo de Castilla, en el que constasen las facultades que las Cortes les conferían y los papeles y documentos que debían serles entregados. De esta manera, acudirían revestidos de la autoridad de las Cortes y no como simples alguaciles. A resultas de esta petición fue aprobada una proposición: "Que se comunique orden al Consejo de Castilla, avisándole que una comisión de las Cortes pasa a dicho Tribunal, quien la recibirá de ceremonia, y tomando la Comisión el lugar preeminente, manifestará al Consejo la orden de las Cortes, y evacuará su cometido."*** Mientras tanto, quedaron las Cortes en sesión permanente.

Ese mismo día recibía el Consejo de Castilla el siguiente oficio: "Las Cortes Generales y Extraordinarias han decretado que el Consejo de Regencia pase orden al Consejo Real para que permanezca reunido y, si no lo está, que se reúna al momento, hasta que reciba las órdenes de las Cortes. Cádiz, 15 de octubre de 1.811."***

Los comisionados por las Cortes acudieron a la residencia del Consejo, donde fueron recibidos con toda distinción. El Conde del Pinar había reconocido que el Consejo de Castilla iba a hacer por junio una consulta a la Regencia***, sobre la que había habido tres votos

***. S.H.M., "Idea de la causa formada...", op. cit., págs. VI y VII.

***. "Diario de Sesiones de las Cortes", núm. 377, págs. 2072 y ss.; y S.H.M., "Idea de la causa formada...", págs. VII y VIII.

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

***. El origen de esta consulta estaba en una Real Orden de la Junta Central, de agosto de 1.809, en la que se pedía al Consejo de España e Indias que le consultara acerca de los

particulares, y que no todos los puntos ahí tocados estaban en la consulta***. Como los Ministros del Consejo no se pusieron de acuerdo sobre aquélla, fue destruida y sólo se conservaban entonces los tres votos particulares. Parece cierto también que el Consejo había aprobado un decreto diciendo "a consulta en los términos que lleva entendido el señor Conde del Pinar." Por tanto, se había acordado por el Consejo que se hiciese la consulta y se encargó a Pinar su redacción. Este Ministro tardó en extender el borrador de la consulta, pero finalmente lo redactó. Lo llevó al Consejo y tras su lectura se empezó a discutir.

Al parecer, el primer día habían hablado solamente tres o cuatro Ministros, entre ellos Ibar Navarro, que no acudió los días siguientes por estar haciendo de Fiscal. Tras varios días de discusiones y hechos los votos particulares, volvió a recoger el borrador el Conde del Pinar para hacer una nueva redacción teniendo presentes tales votos. Pero Pinar, viendo que no se ponían los Consejeros de acuerdo sobre el texto definitivo y que habían variado de dictamen, se enojó, hasta tal punto que destruyó el borrador presentado***. De forma que se quedó sólo en consulta proyectada pero no aprobada y sin efecto alguno***. El Consejo también afirmó que no se había pensado llevar a

medios que pudieran adoptarse en el orden de proceder y substanciar las causas criminales, y su abreviación en beneficio de los reos. Más adelante, el 12 de octubre de 1.810 se comunicó al Consejo de Castilla un informe que las Cortes habían aprobado, en el que se precisaba que el Consejo de Castilla hiciese en Cádiz una visita general extraordinaria de cárceles, y que igualmente presentase a las Cortes a través de la Regencia con la mayor brevedad, el reglamento o instrucción que le pareciera más apropiado para sustanciar y fallar los delitos de infidencia. De los tres asuntos, en junio de 1.811 todavía quedaba pendiente el relativo a las mejoras en las leyes civiles y criminales, por su complejidad. Por ello mismo, por decreto del Consejo de Castilla de 17 de junio de 1.811 le fue encargado al Conde del Pinar la redacción del borrador de esta consulta, que fue la que dio origen a todo el revuelo. (Extractado del informe del Fiscal de la causa, S.H.M., Colección del Fraile, "Idea de la causa formada por las Cortes...", págs. 1 a 5).

***. Por ejemplo, el de la Corona electiva.

***. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, págs. 394 y 395. Añade Toreno que la mayoría de los Diputados pensaron que no había ocurrido así y que probablemente el documento había sido destruido posteriormente; también ver A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

***. S.H.M., Colección del Fraile, "Idea de la causa formada...", op. cit., págs. XII y XIII, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

cabo ninguno de los puntos a que hacía relación la consulta y si solo lo correspondiente a la reforma en los códigos civil y criminal"".

También preguntaron los comisionados por el otro papel que decía Lardizábal en su manifiesto que había entregado el obispo de Orense al Decano del Consejo de Castilla. Colón reconoció haberlo recibido y que se lo había mandado el obispo de Orense para que lo hiciera presente en el Consejo y en él se archivase. Pero que pensando que era inoportuno presentarlo al Consejo, se lo había reservado y lo tenía guardado en casa. Por tanto, los Ministros del Consejo desconocían el documento ni habían tenido noticia del paso dado por el obispo, lo que confirmaron los otros Consejeros. Prometió el Decano remitirlo a las Cortes cuando volviera a su casa. Apostilló Colón que la consulta no había sido hecha y era inexistente y reiteró que el Consejo había manifestado siempre su respeto y obediencia a las Cortes"".

Realizada su misión, regresaron a donde estaba reunido el Congreso. Llevaban consigo algunos documentos recogidos en el Archivo del Consejo de Castilla"", que presentaron a las Cortes. Seguidamente

"" Argüelles escribía lo siguiente: "Las Cortes después de mucha discusión pidieron todos los documentos que existiesen en la materia. El Consejo Real aseguró que no había llegado a aprobar la consulta, si bien no pudo ocultar los votos originales de tres de sus Ministros, en que se impugnaba circunstanciadamente la doctrina general y pasajes determinados del escrito..." (ARGÜELLES, A., "La Reforma Constitucional de España", págs. 102 y 103). Cfr. también "Diario de las Cortes", núm. 378, págs. 2075 y 2092.

"" S.H.M., "Idea de la causa formada...", pág.X; A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1; cfr. también BAYO, E.K., op. cit., tomo I, págs. 286-287.

"" Concretamente fueron recogidos del Consejo los siguientes documentos: "los votos particulares de los Ministros don José Navarro y Vidal, don Pascual Quílez y Talón y don Justo Ibar Navarro; el expediente formado en el Consejo con motivo de la orden de la Junta Central de 17 de agosto de 1.809 sobre el modo de abreviar las causas criminales, y de la resolución de las Cortes de 11 de octubre de 1.810 para que los Consejos de España e Indias hiciesen sus observaciones acerca de los abusos introducidos en nuestros Códigos, y mejoras de que fuesen susceptibles: en cuyo expediente recayó un decreto del Consejo de 17 de junio último, que por las palabras 'lo acordado que lleva entendido el señor Conde del Pinar', que en él se contienen, parece haber sido el origen de la consulta que extendió dicho Ministro; una certificación de don Santos Sánchez, oficial mayor de la Secretaría del Consejo, habilitado para el despacho de sus negocios, en que refiere el resultado de

Giraldo explicó los pormenores de la misión realizada. Fueron leídas en las Cortes ambas certificaciones y los tres votos particulares de los Ministros del Consejo de Castilla***.

El Conde de Toreno acusó a los miembros del Consejo de no decir la verdad "por equivocación o por malicia." Y propuso que las Cortes suspendieran a los Ministros del Consejo que habían acordado la consulta, y fueran mantenidos en sus funciones sólo los tres Ministros que se opusieron***.

El asunto Lardizábal se produjo en un momento de gran recelo y apasionamiento. No es de extrañar que encontrase el ambiente lo suficientemente caldeado como para derivar en una reacción contra el Consejo de Castilla, del que desconfiaban los sectores más liberales. Ciertamente había un elevado número de diputados que veían aquí una ocasión de atacar a este enemigo declarado, símbolo del Antiguo Régimen. Sin embargo, la acusación sobre la conducta desleal del Consejo era muy débil. Había tan sólo algunos indicios de haber realizado el Consejo una crítica solapada

dicho expediente, y lo que manifestó el Conde del Pinar en el Consejo pleno, a presencia de los señores comisionados, acerca de la consulta; y otra certificación del mismo Sánchez, relativa a no haberse formado expediente ni hecho acuerdo alguno a su presencia sobre consultar a las Cortes acerca de la Constitución que se estaba discutiendo. (S.H.M., "Idea de la causa formada...", op. cit., págs. VIII y IX; también en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1).

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1. También "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 378, págs. 2075 y ss.

***. He aquí los dos artículos de la propuesta de Toreno: "Primera. Que se suspendan los individuos del Consejo Real que han acordado la consulta de que hacen mérito los votos particulares de los Ministros Ibar Navarro, Quílez Talón y Navarro Vidal, remitiendo estos votos, y todos los papeles y documentos que tengan relación con este asunto al Tribunal que mañana debe nombrar el Congreso para la causa de Don Miguel de Lardizábal; Segunda. Que mientras tanto entiendan en los negocios propios de las atribuciones del Consejo los tres individuos que se opusieron a la consulta, y los que hayan venido después, que se hallen en el ejercicio de sus funciones." (S.H.M., "Idea de la causa...", op. cit., pág.XII; también "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 378, págs. 2075 y ss.).

desleal del Consejo era muy débil. Había tan sólo algunos indicios de haber realizado el Consejo una crítica solapada contra el sistema". Pero la falta de pruebas hacía esta acusación jurídicamente casi insostenible, pues la consulta no se había dado. Por tanto, las acusaciones contra el Consejo se podían basar simplemente en la suposición de unas discusiones planteadas en el seno del Supremo Tribunal sobre la Constitución y Las Cortes, cuya única prueba eran los mencionados votos particulares". Aún así, no había prueba de la opinión de todos los Consejeros sobre el asunto, y los mismos testimonios indicaban que no se llegó a un acuerdo definitivo e, incluso, que los Consejeros variaron más tarde su dictamen inicial, motivo de enojo para el Conde del Pinar. Por tanto, los fundamentos de la acusación era jurídicamente bastante débiles".

Lo cierto es que el apasionamiento hizo mella entre los diputados. Hubo varios encendidos discursos de los Sres. Caneja y Mejía en favor de la propuesta de Toreno. Incluso Caneja pidió que el Conde del Pinar fuera arrestado preventivamente. Se opuso seguidamente Villagómez, por fundarse la propuesta en un supuesto que no estaba suficientemente probado, a lo que fue replicado por el diputado Polo en sentido contrario. Finalmente fue aprobada la siguiente resolución de las Cortes:

"Las Cortes Generales y Extraordinarias han resuelto que queden suspensos del ejercicio de sus funciones los individuos del Consejo Real que han acordado la consulta relativa a la autoridad de las mismas y a varios artículos de la Constitución, de que hacen mención los votos particulares de los Ministros del mismo Consejo don José Navarro Vidal, don Pascual Quílez y Talón y don Justo María Ibar Navarro, remitiéndose los

***. En la consulta, y deduciéndolo de los votos particulares, probablemente se pusiera en tela de juicio los principios de Soberanía de la Nación, el derecho de cambiar las Cortes las leyes fundamentales, la abolición de los estamentos, la limitación de las facultades del Rey y otros puntos menos importantes. Al parecer, el Consejo podría haber considerado que la soberanía residía únicamente en el Rey y no en las Cortes.

***. "¿Quién no veía que los votos de los tres Ministros que desintieron, extendidos en forma según se presentaron en las Cortes, eran un acto correlativo y posterior a la consulta?" (ARGÜELLES, A., "La Reforma Constitucional de España", pág. 107).

***. Parece ser que los mismos Ministros que habían presentado los tres votos particulares apoyaron también los testimonios de sus compañeros sobre este asunto.

expresados votos y todos los papeles, documentos e incidentes que tengan relación con este asunto al Tribunal que mañana deben nombrar las Cortes para la causa de don Miguel de Lardizábal. Y que mientras tanto entiendan en todos los negocios de la atribución del Consejo los tres expresados Ministros que se opusieron a la Consulta y los que hayan venido después de la misma, que se hallen en el ejercicio de sus funciones... Cádiz, 15 de octubre de 1.811."***

Concretamente quedaron suspensos los siguientes Consejeros de Castilla: don Manuel de Lardizábal, don Bernardo Riega, el Conde del Pinar, don Sebastián de Torres, don Domingo Fernández de Campomanes, don Andrés Lasauca, don Ignacio Martínez de Villela, don Francisco Arjona, don Vicente Duque de Estrada, don Juan Antonio González Carrillo, don Tomás Moyano, don Benito Arias de Prada y don José Antonio Larrúmbide**.

Seguidamente propuso el diputado Sr. Caneja formalmente una proposición para que el Conde del Pinar fuera inmediatamente arrestado***. Tras varios debates, fue rechazada la proposición del Caneja***.

El 16 de octubre la Comisión nombrada para proponer individuos para la formación del Tribunal de Lardizábal hizo su propuesta, y en la sesión del día siguiente, 17 de octubre, fueron elegidos los jueces de la causa: don Toribio Sánchez Monasterio, asesor de arribadas de Cádiz, don Juan Pedro Morales, abogado titular del Ayuntamiento de Cádiz, don Pascual Bolaños de Noboa, ex-Decano del Colegio de abogados de Cádiz, don Antonio Vizmanos, abogado de los Reales Consejos y don Juan Nicolás

***. "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 378, págs. 2090 y ss.; y A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

***. "Que se preevenga al Consejo de Regencia disponga que inmediatamente se proceda al arresto del Conde del Pinar, y ocupación de todos sus papeles, requiriéndole que diga lo que ha hecho de la consulta que extendió a nombre y de orden del Consejo." (S.H.M., Colección del Fraile, "Idea de la causa formada por orden de las Cortes...", op. cit., pág. XIX).

***. "Diario de Sesiones de las Cortes", núm. 378, págs. 2091 y 2092.

Undabeitia¹⁰⁰. Para Fiscal fue designado don Manuel María de Arce, abogado del Colegio de Cádiz e antiguo individuo de su Junta¹⁰¹.

Fue leída también en aquella sesión una comunicación del Decano del Consejo de Castilla en la que informaba haberse obedecido y ejecutado en todas sus partes la resolución de las Cortes suspendiendo a varios de sus Ministros. Se acompañaba certificación de un acuerdo celebrado en el día 16 por el Consejo pleno, en que aquél manifestaba lo que ocurrió acerca de dicha consulta y pedía que todo fuera leído en sesión pública.

Sobre la consulta, el Decano aseguraba "que la consulta que se supone acordada no lo estaba definitivamente, ni concluida, y por consiguiente tampoco rubricada, y sí suspenso su curso: y que en la que se meditó, y en la parte de ella que se leyó, nadie de los individuos del Consejo dudó de la suprema y soberana autoridad de las Cortes..."¹⁰².

Más adelante, el propio decreto aprobado por el Consejo de Castilla el día 16 reafirmaba "que los Ministros suspensos que convinieron en que se hiciese la consulta, lejos de poner en duda la legitimidad, autoridad y validación de los decretos de las Cortes Generales y Extraordinarias, lo reconocieron todo abiertamente: que la consulta no llegó a acordarse definitivamente, ni a concluirse, por estar pendientes varias correcciones y añadiduras en que también convinieron, y la satisfacción a todos los votos particulares: y últimamente, que observando los mismos Ministros posteriormente que las Cortes habían sancionado ya la mayor parte de los artículos del proyecto de Constitución sobre los que había de presentar el Consejo sus observaciones, teniendo por inútil e inoportuno el hacerlo, se pusieron de acuerdo extrajudicialmente en que no se hiciera nada, no habiendo faltado otra cosa que devolver

¹⁰⁰. Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 4.741 del catálogo, de 17 de octubre de 1.811, "Decreto de las Cortes creando un Tribunal para juzgar al autor de un impreso titulado 'Manifiesto que presenta a la Nación el Consejero de Estado don Miguel de Lardizábal y Uribe...'". Cfr. también "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 379, págs. 2093 y ss.

¹⁰¹. Cfr. "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 379, págs. 2093 y ss.; y S.H.M., "Idea de la causa formada por las Cortes...", pág. XXII.

¹⁰². S.H.M., "Idea de la causa formada...", op. cit., pág. 41.

los votos particulares a los Ministros que los hicieron."""

También ese día fue leída una representación de los Ministros del Consejo de Castilla Sres. Navarro Vidal, Quílez y Talón e Ibar Navarro, intercediendo por sus compañeros suspendidos. Tras recordar que era lógico que hubiera entre los Ministros del Consejo diversidad de opiniones, no por eso debían ser tenidos como criminales, afirmaban que "en el borrador que se leyó y sobre que recayó la votación, se protestaba varias veces desde el principio que el Consejo y sus Ministros reconocían la autoridad del augusta Congreso de las Cortes, y se sometían a sus decisiones y decretos; que si se movían a hacer presente a V.M. sus reflexiones sobre diferentes puntos del proyecto impreso de Constitución, era precisamente porque se consideraban obligados a exponer lo que creyesen conveniente al bien de la Nación y del Rey, en cumplimiento del juramento que individualmente prestaron al entrar a servir sus plazas, y a lo prevenido por las leyes del Reyno..." Concluían manifestando que en tiempos tan difíciles era necesaria la experiencia, el tino y la prudencia que siempre había proporcionado el Consejo de Castilla con sus reflexiones.

Leída la representación, el diputado Sr. Mejía Lequerica propuso que el Tribunal formado juzgase sobre el asunto. Seguidamente, el Sr. Inganzo tomó la palabra y advirtió al Congreso que una medida de suspensión era de por sí de bastante gravedad y presuponia la existencia de culpabilidad, y sin embargo sería más justo dejar el asunto en manos del Tribunal formado, levantando la pena impuesta. Además, si más tarde se demostraba la inocencia de los miembros del primer Tribunal de la Nación, quedaría dañado el decoro de las Cortes Generales. Solicitó

""". "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 379, págs. 2093 y ss.; y S.H.M., "Idea de la causa formada...", op. cit., págs. 41 y 42.

""". "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 379, págs. 2093 y ss.; y S.H.M., "Idea de la causa formada...", op. cit., págs. 43 y 44.

""". Don Pedro de Inganzo y Rivero fue diputado por Asturias. Era sacerdote, de gran ilustración y buen orador. Ocupó importantes destinos eclesiásticos -obispo de Zamora y arzobispo de Toledo-. Llegó a ser Consejero de Castilla y más tarde decano del Consejo Real. Moriría en Toledo en 1.836. Era conceptuado de opiniones muy monárquicas, que defendió con fuerza en las Cortes de Cádiz. (BELDA, J. y LABRA, R.M. -hijo, "Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San Felipe", Madrid 1.912, Imprenta Fortanet, pág. 104).

que el Congreso resolviera sobre esta petición". Tras la consiguiente intervención del Conde de Toreno, se dejó el asunto en manos del Tribunal formado el día anterior.

Ese mismo día, 18 de octubre, llegaba al Secretario de las Cortes un oficio en el que don Juan Nicolás de Undabeitia renunciaba a formar parte del susodicho Tribunal". Las Cortes, en su sesión pública del mismo día 18, acordaron "que exponga al Consejo de Regencia los fundados motivos...". Al día siguiente, día 19, un nuevo escrito de Undabeitia llegaba a las Cortes. En él alegaba como razones para su dimisión su inexperiencia como letrado -pese a ser Relator de la Chancillería de Valladolid y abogado de los Reales Consejos-, junto con el agradecimiento debido a don Manuel de Lardizábal, hermano de Don Miguel, así como su respeto y admiración por muchos de los Ministros del Consejo suspensos". Las Cortes, por su parte, respondieron en la sesión pública del 22 de octubre que no se admitía su excusación y se le conminaba a presentarse a jurar al día siguiente, a las 12 horas, en el Salón de Sesiones de las Cortes".

Si hacemos un breve balance de los tensos acontecimientos relatados hasta este momento, se observa que las Cortes adoptaron una medida extremadamente dura y con todas las apariencias de haber sido fruto del apasionamiento del momento. Sin duda fue un duro golpe de efecto más contra el prestigio del Consejo. Creemos que éste no hizo nada irregular -y así se reconoció luego públicamente-, y que su gran mal radicaba en el pensamiento de sus miembros, mayoritariamente opuesto a las reformas liberales. A sus enemigos se les había presentado una ocasión espléndida de perseguir desprestigiar a esta detestada institución del

"" "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 381, págs. 2103 y ss.; y S.H.M., "Idea de la causa formada...", op. cit., págs. XXIV, XXV y XXVI.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm. 1.

"" "Diario de sesiones de las Cortes de 18 de octubre de 1.811", núm. 381, págs. 2103 y ss.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm. 1; y "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 382, págs. 2113 y ss.

"" "Diario de sesiones de las Cortes", sesión pública del 22 de octubre de 1.811, núm. 385, págs. 2127. A propuesta del Sr. Mejía, las Cortes habían aprobado en la sesión pública del 18 de octubre de 1.811 que explicase los motivos para no poder aceptar (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm. 1; también cfr. "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 381, págs. 2103 y ss.)

Antiguo Régimen.

Pero por otro lado, también es entendible que en momentos delicados para la Nación, se agrandaran los temores ante cualquier suceso, que pudiera desencadenar una mayor oposición política, y por otro lado la estabilidad del gobierno y de las mismas Cortes se encontraba zarandeada por abundantes amenazas y temores.

Finalmente, conviene señalar y esto ya lo hemos visto a lo largo de todo el proceso, que las Cortes no obraron aquí conforme a Derecho y su precipitación rayó los principios más elementales de la Justicia. Así sería declarado formalmente por el Tribunal nombrado por las Cortes, quien en su sentencia resolvió absolver completamente a los catorce Ministros del Consejo Real.

Pero retomemos el hilo histórico. Unos días después de la constitución del nuevo Tribunal, nuevamente la cuestión salía a colación, con motivo de una representación del Tribunal constituido, solicitando un título análogo a la institución que lo había creado, las propias Cortes, y un tratamiento especial". Las Cortes Generales aprobaron en respuesta a esta petición la siguiente resolución:

"Las Cortes Generales extraordinarias, deseando evitar cualquiera duda acerca del título y consideración que deba tener el tribunal creado por las misma en 17 del corriente, decretan: 1. El nombre de este Tribunal será únicamente el de 'Tribunal especial creado por las Cortes'; 2. Se le dará tratamiento de Alteza; 3. Encabezará los despachos que se le ofrezcan a nombre del Rey y con las fórmulas que acostumbra el Consejo Real...Cádiz, 25 de octubre de 1.811"***.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1. En su reunión del 23 de octubre de 1.811, en su punto primero solicitaba de las Cortes: "Que aunque los jueces que lo componen no pueden ni desean, antes bien suplican con todo encarecimiento que no se les conceda distinción alguna, porque les basta la confianza que la Nación ha depositado en sus personas y sólo aspiran a merecerla, no pueden ni deben prescindir del honor mismo de V.M., de la importancia de los objetos que se les encomiendan ni de la necesidad de oficiar a los Consejos, Tribunales y Jefes de la más alta jerarquía, por lo cual creen conveniente recurrir al augusto Congreso para que se digne señalar al Tribunal reunido un título análogo a su inmensa derivación de V.M. y un tratamiento, cual corresponda a tan singular circunstancia, previniéndole igualmente la fórmula con que ha de encabezar los despachos que se le ofrezcan expedir para fuera de la ciudad."

***. "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 388, págs. 2145 y ss.; y A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

b) El escrito del Decano del Consejo
Sr. Colón de Larreátegui

Inmediatamente estalló en las Cortes otro asunto que levantaría también una importante polémica. Ya vimos en su momento cómo se había imprimido en la Librería Bosch de Cádiz un papel titulado "España vindicada en sus clases y jerarquías". El Sr. García Herreros había propuesto el 15 de octubre el estudio de este documento, afirmando que su autor era el Decano del Consejo de Castilla, don José Joaquín Colón. De esta manera, el 21 de octubre se pasó un ejemplar manuscrito al Tribunal especial que iba a entender en las otras dos causas"".

Con fecha 19 de octubre había escrito Colón una atenta carta al Consejo de Regencia, otorgando toda clase de facilidades para su declaración. Como recordamos, Colón era uno de los catorce Ministros del Consejo Real suspensos por acuerdo de las Cortes. Este Congreso por acuerdo de la sesión pública de 20 de octubre de 1.811 le devolvió a través del Consejo de Regencia la representación que en su momento envió, en la que "sometiéndose como individuo a comparecer ante el tribunal especial, pedía como persona pública la venia más atenta, para que el juicio y cuanto se obrase en él, fuese y se entendiese con la reserva de exponer (por sí, si vivía, o por el que le sucediese) a las Cortes presentes y futuras cuanto conveniese a su alto cargo y a su Tribunal."""

En realidad, la mayoría de los diputados no comprendieron bien esta representación y por qué el Decano del Consejo Real solicitaba una venia. Algunos pensaron que esta exposición era ambigua y que suponía una protesta

"" CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, pág. 397.

"" CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, pág. 398; y "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 383, págs. 2121 y ss.

anticipada de las reformas judiciales de la Constitución". Por ello mismo devolviéndole la representación, le pidieron que explicase "con más claridad las cláusulas en que como persona pública pide venia para que el juicio decretado y cuanto se obre en él sea y se entienda... Y haciendo la explicación de modo que no haya lugar a dudas, el Consejo de Regencia lo remita a las Cortes"".

El nuevo escrito remitido a las Cortes con fecha de 24 de octubre, en contestación de su anterior del día 19, es todo un estudio jurídico que no tiene desperdicio. He aquí lo esencial de este texto"":

"...Teniendo reconocida y jurada solemnemente la suprema autoridad de las Cortes de tantos modos en el antiguo y moderno ejercicio de mi empleo, cómo era posible que yo dudase ahora de su poder y facultades, cíanse éstas en el presente caso a los particulares Ministros del Consejo, a su Decano o a todo el Tribunal? Cualquier exposición que tenga el honor de elevar al antiguo Congreso, debe entenderse que estriba en estos reconocidos principios, bien descubiertos y patentes en mi primer escrito, hasta donde han alcanzado mi buena fe y mi capacidad. Pedí la venia más atenta a S.M. para formalizar en su caso (si conviene a mi empleo) la reserva que expuse, sin perjuicio del juicio y sentencia que se había servido decretar. Estas reservas son unos remedios saludables, autorizados por la ley, tan usados y comunes que apenas en negocio medianamente se grave se presenta pedimento de letrado en Tribunal alguno que no las contenga, como una salvaguardia de los derechos de las partes. No entorpecen su conocimiento ni disminuyen su autoridad, ni tiene precisión el interesado de manifestar las causas hasta que le

"" CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, pág. 398. Argüelles también lo afirmaba en su estudio sobre la obra de las Cortes: "Era el decano del Consejo uno de los ministros suspensos a causa de la consulta acordada por este Tribunal, y como su Presidente dirigió a las Cortes una representación en que, entre otras cosas, pedía venia para exponer en ellas o en las futuras, por sí o por el sucesor, cuanto conviniese a su empleo y al mismo Consejo. Pareciendo oscuro el sentido de algunos pasajes, y sobre todo capcioso el pedir venia para representar a las Cortes, cuando todo español tenía este derecho, y a nadie se le había embarazado jamás el ejercicio, se resolvió que el Decano explicase lo que solicitaba. La aclaración de este magistrado, lejos de disipar las dudas, promovió muchos debates..." (ARGÜELLES, A., "La Reforma Constitucional de España", pág. 109).

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

convenga: las más veces pueden usarse en cualquier ocasión, especialmente si la reserva espera ante el Soberano, en cuyo caso ni la prescripción ni el lapso de tiempo, ni la cosa juzgada (sin perjuicio de sus efectos) pueden anonadarla ni impedir su ejercicio. Es como una especie de súplica al Trono, autorizada por nuestras leyes desde el primitivo Fuero de los Jueces, limitada por el Santo Rey por su demasiada presencia, ordenada por don Juan I y observada hasta nuestros días. Con presencia de estas leyes pedí licencia a S.M. para poder usar de ella en las presentes Cortes y en las futuras, en lo cual manifesté: lo primero, que como recurso preparatorio (precisamente para ante Soberano) debía preceder su permiso; lo segundo, que éste debía ser transmisible a mis sucesores porque no era mío lo que acaso podría dar motivo de la reserva, y lo tercero porque igualmente me allané a poder usar este derecho en las presentes Cortes si fuere posible, lo que es un nuevo conocimiento de su autoridad y la más expresiva confianza de su justificación. Como persona particular desisto de ella, como ya dije, porque mi amor a la patria a nadie teme y mucho menos a unos jueces nombrados por S.M. para entender en este asunto, de quienes no tengo motivos de sospecha. Como Decano creo que debo repetir la venia, si fuese del superior agrado de las Cortes. Deseo al mismo tiempo obedecerlas en lo que me manden sin alegaciones ni excusas, y paso a hacerlo en cuanto puedo. Las causas que pueden sobrevenir en el discurso del juicio (aunque no lo espero) son varias, y como contingentes y futuras, no es posible designarlas; pero hay otras que, sin perjudicar los trámites del juicio, son dignas en todo tiempo de la atención de S.M. y mucho más después de finalizado, conforme a mi allanamiento, y son las siguientes:

Primero: cualesquiera que fuesen mis razones, según los antecedentes que han prevenido, podría el público (si ahora las expusiese) atribuirles a querer eludir o dilatar el juicio, y entre tanto, era regular y muy conforme que me reputase por criminal o sospechosos hasta que judicialmente (sean unos u otros los sujetos que me juzguen, porque todos reciben la autoridad de S.M.), declaren delimitadamente lo contrario.

Segunda: por más autorizado que sea el nuevo tribunal, parece insuficiente una sola sentencia para causar ejecutoria en materias graves y de calidad, sin que a lo menos se conceda a los interesados el remedio y consuelo legal de la reserva, por más confianza que tengan en sus jueces, como al presente. Y si la reserva es para ante el Soberano (que son las Cortes), ¿cómo puede dudarse, si el que la hace y pide su venia, reconoce o no su suprema autoridad?

Tercera: el cargo o dignidad que tengo no es mío y mañana puede S.M. o V.A. transferirla a quien le parezca, y prescribirle sus atribuciones, aunque hasta ahora no se han servido variarlas sustancialmente. No debo querer

que mi silencio perjudique en lo sucesivo, y por otra parte tampoco debo exponerme a que cuanto ahora pudiese alegar se interprete como tímidos subterfugios para no ser juzgados. En una palabra, Señor, como particular, como Consejero y como Decano Presidente"" reconozco la autoridad de las Cortes y me someto a su voluntad, sin que asiente mi insuficiencia a aclarar con términos más específicos y absolutos mi obediencia y la seguridad de mi interior, que es cuanto tengo que decir en cumplimiento de lo que se me ordena. Devuelvo mi primera representación y suplico a V.A. se digne remitir ambas a S.M., asegurándole (si lo tiene a bien) de la consideración con que siempre he mirado sus preceptos. Cádiz, 24 de octubre de 1.811."

Al día siguiente y a propuesta del Sr. Aner, las Cortes accedieron a la petición del Decano Colón y le concedieron la venia que solicitaba "para poder representar a las mismas lo que tenga por conveniente y crea corresponderle a su derecho"".

En la sesión pública del día 26 fueron leídas dos proposiciones del diputado Sr. Calatrava, que fueron aprobadas al día siguiente. En la primera solicitaba les fuera reconocido el derecho a suplicar en segunda instancia al propio Tribunal especial: "Enteradas las Cortes de las representaciones de Don José Colón, han venido en declarar como declaran, que no ha sido su ánimo privar del remedio de la segunda instancia a los individuos que deben ser juzgados por el Tribunal especial, creado por las mismas, siempre que les competa según las leyes; y quieran que éste se considere con la autoridad necesaria para rever sus sentencias en grado de súplica en los casos que correspondan con arreglo a derecho, a la naturaleza de los negocios que se le han cometido, y a la brevedad con que debe proceder"".

En la segunda propuesta de Calatrava, las Cortes acordaron lo siguiente: "...que se remitan al Tribunal las tres representaciones referidas para que por él mismo se haga entender a Colón que use en él del derecho que le asista, y que así como ningún español necesita venia para

"".. Obsérvese que Colón de Lardizábal, por ser noble de alto rango -los Colón eran descendientes del Almirante-, no ejercía como Gobernador interino sino como Presidente interino. (Cfr. ESTRUCTURA ORGANICA).

"".. "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 388, págs. 2146 y 2147; y A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm. 1.

"".. "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 389, págs. 2151 a 2156. El reconocimiento del derecho a la segunda instancia nacía de una exposición anterior de don Miguel de Lardizábal, solicitando a las Cortes que se le señalase un Tribunal que conociese en segunda instancia de su causa.

representar a S.M. debidamente cuanto corresponde, ninguno pueda sin delito intentar reservas en ningún concepto contra lo que la Soberanía Nacional ha determinado o determine"".

Continuaba, por tanto, la tensión entre las Cortes y el Consejo de Castilla. Esta moción aprobada por las Cortes sentó mal al ya ex-Decano del Consejo de Castilla. Ese mismo día, 27 de octubre, escribió una carta a las Cortes aclarando sus rectas intenciones, el malentendido existente sobre su reserva y la renuncia a tal reserva, y su profundo reconocimiento a la suprema autoridad de las Cortes"".

Nos cuenta Villanueva"" que el día 26 hubo alguna conmoción al final de la sesión pública de las Cortes. Cuando se estaba estudiando la resolución que debía tomarse acerca de la segunda representación del Decano Colón, sobre la venia o reserva para representar a las Cortes, tomó la palabra el diputado y ex-Regente Sr. Valiente y afirmó crudamente que le extrañaba las interpretaciones que se habían dado a la solicitud del Sr. Colón. Al parecer, hubo tumulto entre el público asistente, parece que en su contra, y también hubo una cierta conmoción a su salida del Palacio donde las Cortes se reunían"".

"" "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 389, págs. 2151 a 2156; y A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm. 1.

"" "Señor: Don José Colón, con el más profundo respeto hace presente a V.M. ha llegado a entender que contra sus rectas intenciones ha producido su sumisa reserva efectos bien contrarios a su voluntad. Desde luego se separa de ella absolutamente en todas sus partes y significaciones, como si no se hubiese escrito, y repite de nuevo su reconocimiento a la Suprema autoridad de V.M., a quien suplica se digne darle por separado, mandando devolverle la representación del 19 y su exposición del 24 del corriente. Cádiz, 27 de octubre de 1.811" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm. 1).

"" VILLANUEVA, "Mi viaje a las Cortes", pág. 243.

"" "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 389, págs. 2151 a 2156. El Conde de Toreno, al relatar el incidente, lo achaca a otros motivos, fundamentalmente la animadversión del pueblo de Cádiz contra su actuación en cargos anteriores que perjudicaron a la ciudad de Cádiz. Relata Toreno cómo al escuchar los murmullos Valiente solicitó que la sesión fuera secreta y no pública, lo que excitó los ánimos del público, quien tardó en desalojar el Salón y se congregó a la salida. Suspendida poco después la sesión, Valiente debió refugiarse en un buque de la Armada, donde fijó su domicilio, ante el temor de ser linchado por el populacho (TORENO, op. cit., tomo IV, págs. 399 a 401). Cfr. también ARGÜELLES, A., op.

c) Resolución de las causas

El 31 de octubre de aquel año, 1.811, comenzaba el Tribunal especial sus actuaciones, y acordaba que se hiciera una consulta al Congreso de las Cortes, pidiendo que se le remitiera por los Secretarios varios certificados"".

Una nueva noticia aparece con fecha 2 de noviembre de aquel 1.811. Por la misma deducimos que los suspensos Consejeros de Castilla lo habían sido también de la Cámara de Castilla, cuando ostentaban la condición de camaristas. Esto debió ocasionar algunos problemas, ya que a propuesta del Sr. Morales Gallego, las Cortes aprobaron con fecha de aquel día un decreto por el que interinamente y por vía de comisión despachasen los asuntos y negocios de la Cámara"".

También ese mismo día llegaba a las Cortes la petición del Tribunal especial para "que por los Sres. Secretarios del Augusto Congreso se le certifique, entre otras cosas, del juramento que el Consejo Real presentó en las Cortes inmediatamente a su instalación; y asimismo de todo lo ofertado con respecto a la consulta que se inquiriere del propio Consejo, antes de la creación del Tribunal especial, de modo que conste el resultado de las diputaciones de Cortes, tanto al Supremo Consejo de Regencia

cit., págs. 109 y 110.

"" S.H.M., Colección del Fraile, "Idea de la causa formada por las Cortes...", pág. XXX.

"" Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, legajo 4 núm. 30. El texto del decreto es el siguiente: "Las Cortes Generales y Extraordinarias, teniendo presente que entre los Ministros del Consejo Real suspensos hay algunos que lo son también de la Cámara, han resuelto que se diga al Consejo de Regencia puede habilitar a los individuos que hoy componen el citado Consejo para que por ahora y por vía de comisión despachen todos los asuntos y negocios pertenecientes a la Cámara... Cádiz, 2 de noviembre de 1.811." Cfr. también "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 396, págs. 2197 a 2200.

como a dicho Consejo Real, y contestaciones de éste y sus individuos en aquel acto""'. Las Cortes remitieron los certificados solicitados seis días después, el 8 de noviembre.

Con fecha 16 de noviembre se presentaba al Tribunal especial por parte del los catorce Ministros del Consejo, un recurso en que exponían que encontrándose suspensos en sus empleos por resolución de las Cortes, hacía un mes que fue tomada contra ellos esta medida. Alegaban ser para ellos muy doloroso padecer esta pena, que tanto perjudicaba a su reputación, después de tantos trabajos y servicios. Y pedían al Tribunal se sirviese tomar las providencias correspondientes en justicia para el más breve curso y determinación de este negocio""'.

El Tribunal especial creado por las Cortes continuó diariamente sus trabajos de investigación. Antes de que acabase aquel mes, noviembre de 1.811, se plantearía un nuevo conflicto jurídico, de notable interés para este estudio en cuanto que sacará a la luz las características de algunos privilegios de los Consejeros de Castilla.

En la tarde del 25 de noviembre, el Tribunal especial enviaba un oficio a tres Ministros del Consejo de Castilla -Sres. Navarro, Quílez e Ibar Navarro-, para que fueran a declarar a la sede del Tribunal, instalada en la Casa del Ayuntamiento de Cádiz""'. Sin embargo, la contestación de los Ministros, guardando las cortesías de rigor, mostraba un cierto resentimiento contra las Cortes y en su escrito aquéllos exigían el respeto de los honores y preeminencias que correspondían a un Consejero de Castilla""'.

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1. Las Cortes remitieron estas certificaciones al Consejo de Regencia para que dispusiese su remisión a este Tribunal especial.

""'. S.H.M., Colección del Fraille, "Idea de la causa formada por las Cortes...", págs. XXIX y XXX. Se mandó unir este escrito a los autos y que se tuviese presente.

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1: "El tribunal especial creado por las Cortes Generales y Extraordinarias del Reino, en su decreto de hoy, ha mandado entre otras cosas que en la tarde del día de mañana a la hora de las cinco concurra V.I. en la Sala de Tribunal que se halla establecido en la Casa del Ayuntamiento, y por acuerdo del mismo lo hago presente a V.I. para su cumplimiento."

""'. He aquí este texto: "Los tres Ministros del Supremo Consejo de Castilla que abajo firman y que, como todos han dado pruebas de su adhesión, respeto y pronta obediencia que tienen jurada a los decretos del Augusto Congreso de las

Evidentemente, los Ministros mostraban su indignación por una nueva falta de consideración por las Cortes -en este caso, por el Tribunal especial por ellas creado-". La suspensión de 14 de sus Ministros era, sin

Cortes, se presentan a V.M. con la solicitud de que les aguarden los honores, preeminencias y prerrogativas con que las leyes los han distinguido siempre, y el decoro con que los Tribunales han mirado sus personas. Pues nada es más conveniente en toda Monarquía que el que se guarden a los magistrados las distinciones y consideraciones que prescriben las mismas leyes.

En la tarde de ayer, el Tribunal especial creado por V.M. pasó a los Ministros que representan (con sólo la diferencia de horas), el oficio siguiente firmado por su Escribano Secretario don Juan Manuel Martínez (...).

El objeto de esta comparecencia no puede ser otro que el de practicar alguna diligencia judicial en la causa que ha motivado la suspensión de los Ministros sus compañeros.

V.M. no desea sino que se respeten las leyes y la práctica que conforme a ellas se haya observado inconcusamente. La que constantemente se ha practicado en los de España es: Que los Ministros, no sólo los del primer Tribunal de la Nación, de los Supremos, y aún Superiores, sino hasta los que ejercen jurisdicción ordinaria declaren por medio de informes o certificaciones; y que en casos particulares en que así se mande expresamente por la Autoridad Suprema, pase a sus Casas el Juez de la Causa avisando antes por medio de oficio que firma éste y en propia mano entrega el Escribano.

La jurisdicción que ejercen los Ministros es la propia de S.M. y a V.M. toca honrarla y distinguirla, honrando y distinguiendo a éstos para que sean tan acatados como la utilidad pública lo exige.

Los que exponen han creído que faltarían a su obligación si no lo hicieran todo presente a V.M. para que se sirva mandar lo que crea más conveniente y de mayor bien público. Y aún de esta exposición se abstendrían si no existieran las Reales Resoluciones de 9 de diciembre de 1.798, la de 3 de mayo de 1.803 y la de 30 de septiembre de 1.804 que arreglan este punto; y las Cortes mismas no lo hubiesen así sancionado en la causa que de su Orden se formó al Reverendo Obispo de Orense.. Cádiz, 26 de noviembre de 1.811." Eran los tres Ministros del Consejo de Castilla que en su momento presentaron voto particular a la consulta causante del proceso: don José Navarro Vidal, don Pascual Quílez y Talón y don Justo Ibar Navarro. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1).

***. En el fondo, el Consejo defendía un requisito legal que tampoco era esencial ni insalvable. Tenemos de unos meses antes -5 de diciembre de 1.810- un curioso precedente donde intervino el mismo Consejo de Castilla. En aquella fecha este Supremo Tribunal fue consultado por la Regencia sobre si en algunas declaraciones que se debían tomar a los Sres.

duda, un hecho insólito en la historia del Consejo de Castilla y sin duda también, desprestigiaba en gran manera a esta institución. Cuando el Tribunal especial convocó a declarar a estos Consejeros como si fueran simples particulares, lo hizo sin quizás desconociendo lo que establecía la ley para tales casos, y dio con ello también una muestra de alguna precipitación y de alguna ignorancia de los formalismos habituales. De hecho, las mismas Cortes en su sesión secreta de aquel mismo día decidieron recomendar al Tribunal especial que como medida de prudencia, suspendiera por el momento hacer comparecer a los Ministros hasta que las Cortes estudiaran el asunto"".

Al día siguiente las Cortes trataban el asunto en sesión pública. A propuesta del Sr. Aner, se aprobó una resolución por la que se mandaba al Tribunal especial de las Cortes que practicara "las diligencias judiciales en el modo y forma observados hasta ahora con los magistrados"".

Este reconocimiento por las Cortes de los honores de los Consejeros de Castilla, no tuvo lugar sino tras algunos enconados debates. Así, uno de los más opuestos a tal privilegio, el diputado Sr. Argüelles propuso que "sin perjuicio de ulterior resolución del Congreso sobre abolir la práctica de admitir declaraciones de testigos por certificaciones o informes, declaren las Cortes que en atención a la gravedad del asunto y a lo extraordinario de las circunstancias, los Ministros del Consejo Real hayan de

Castaños, Saavedra, Escaño y Lardizábal, en la causa del reverendo obispo de Orense, se debía proceder por medio de oficios o por diligencias verbales. El Consejo dictaminó entonces que aunque era costumbre evacuar las declaraciones de personalidades por medio de oficios, convenía en este caso acudir a las declaraciones verbales, por su mayor rapidez y su mayor facilidad para apurar la verdad de los hechos (VILLANUEVA, J.L., "Mi viaje a las Cortes", op. cit., pág.79). Lo curioso es que esta consulta no salió a relucir en ningún momento en este conflicto, porque el Consejo defendía entonces exactamente los criterios que propugnaría más tarde el Tribunal especial de las Cortes.

"" "Discútase en la sesión pública de mañana y dígase desde luego al Tribunal especial por medio del Consejo de Regencia, que hasta la resolución de S.M. suspenda hacer comparecer a estos tres Ministros." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1). Cfr. "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 421, págs. 2331 a 2339.

"" "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 422, págs. 2341 a 2346.; y A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm. 1. Esta resolución fue comunicada al Secretario interino del Despacho de Gracia y Justicia al día siguiente, 28 de noviembre de 1.811.

dar las declaraciones personalmente ante el Tribunal especial creado para conocer este asunto que le está cometido." Como es sabido, esta propuesta no fue aceptada.

Sin embargo, la tormenta continuaba. Sentó muy mal a los jueces del Tribunal especial la determinación de las Cortes. En un largo escrito fechado el 30 de noviembre presentaron su dimisión en bloque.

El escrito de los magistrados nos interesa. Tras manifestar el desengaño que la medida de las Cortes produjo en ellos, pese a sus notables esfuerzos en esta causa, pasaban los jueces a considerar el método de trabajo seguido, afirmando haber tenido "presentes no sólo las disposiciones sino el ceremonial que, aun a la faz de las leyes, en cuya presencia todos los ciudadanos son iguales, se han introducido en el foro cuando es preciso tratar con sujetos de rango y distinción". Lamentaban los magistrados que tales etiquetas saliesen en perjuicio del interés general, siendo como eran unas cortesías vanas y enfadosas que existían "por abuso o porque las inventaron los mismos que las disfrutaban y quebrantan a su gusto y conveniencia." Consideraban seguidamente que si se había concedido al Tribunal especial trabajar al estilo del Consejo Real, en otras ocasiones aquel Supremo Tribunal había llamado a sí a personalidades sin esta formalidad.

Continuaban sus alegaciones los miembros del Tribunal especial haciendo algunas calificaciones a la negativa a declarar de los Consejeros de Castilla sobre unos "hechos oscuros y sigilosos ocurridos en lo interior de una Comunidad". Tras manifestar que esta actitud respondía quizás a la de "los miembros de un Cuerpo que quizás teme por su existencia", lamentaba que tomen tanto empeño "en el seguimiento de usos que facilitan la confabulación y consultas entre sí, las dilaciones y los ardides de precaver cualquier resultado adverso, reclamando a su favor un privilegio muy fuera de propósito, mil veces interrumpido y diametralmente contrario a las leyes que expresamente previenen que los dichos o testimonios enviados por escrito no valgan, sino deponiendo ante los jueces." Tras otras muchas consideraciones sobre su labor, finalmente concluían su exposición considerando imposible continuar con la causa en estas circunstancias y presentando la dimisión de sus cargos"".

Sin duda el caso adquiría renovado interés. El Tribunal especial no obraba conforme a las leyes tradicionales, sino más bien conforme al espíritu de las Cortes de Cádiz y quizás a la lógica. Esto parece ser así. Sin embargo, la propia seguridad jurídica debía haberles llevado a ser delicadamente respetuosos con la legislación.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

De la lectura de este texto se deduce lo visto anteriormente: el Tribunal no respetó tal normativa, probablemente por desconocimiento o por precipitación, y luego no supo enmendar su error. Esta resolución planteaba así nuevos problemas a las Cortes, que deberían ser resueltos cuidadosamente.

Las Cortes estudiaron el caso en su sesión del 1 de diciembre de 1.811 y acordaron no admitir la dimisión de los magistrados del Tribunal especial. Y decidieron una solución salomónica que intentaba contentar algo a todos, y conceder de paso al Tribunal especial lo que pedía: "si no es urgente, no acudan; en caso contrario, sí". Y como precisamente habían señalado en su carta de dimisión los jueces del Tribunal especial que la causa era urgente y necesitaban llamar a declarar a los Consejeros, les quedaba vía libre a su arbitrio para hacer declarar a los Consejeros de Castilla, como así ocurrió el 4 de diciembre. Aquel día los tres Ministros acudieron a declarar a la sede del Tribunal especial^{***}.

Los días siguientes continuaron los trabajos del Tribunal especial. Se llamó a declarar a don Santos Sánchez, Secretario del Rey y oficial mayor habilitado para la Secretaría del Consejo y Cámara. Pasada su declaración al Sr. Arce, pidió éste se tomara declaración al Fiscal del Consejo Sr. Cano Manuel, que se evacuó el 14 del mismo mes, y se repitió nuevamente el día 18 de diciembre, a petición del mencionado Sr. Arce. En su vista pidió Arce que se pasara oficio al Consejo para que le fueran remitidos algunos documentos de interés, entre ellos la fórmula del juramento que hacían a su ingreso los Ministros del Consejo de Castilla.

De los meses siguientes tenemos pocas noticias. Torreno nos relata que el asunto se tranquilizó bastante y fue un tiempo de trabajo del Tribunal especial. Sabemos que el 7 de enero de 1.812 se tomó declaración al Conde del Pinar y que ésta duró seis días útiles más^{***}.

Mientras tanto el 21 de enero nombraron las Cortes una nueva Regencia, en la que entró como miembro el Duque del Infantado. Señala Bayo^{***} que admiraba "en este extremo que en una Asamblea donde acababan de triunfar las

^{***} "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 425, págs. 2357 a 2360; y S.H.M., Colección del Fraile, "Idea de la causa formada por las Cortes...", pág. XXX.

^{***} S.H.M., Colección del Fraile, "Idea de la causa formada por las Cortes...", pág. XXX. El interrogatorio y las respuestas suponían en total veintinueve folios del sumario.

^{***} BAYO, E.K., "Historia de la vida...", op. cit., tomo I, pág. 288.

más democráticas doctrinas, obtuviesen el poder hombres reconocidos por amigos del despotismo"***. La elección de personas tan significadas políticamente podía bien implicar un cambio en las tornas políticas.

Otra noticia nos indica que el 26 de enero, en sesión secreta de las Cortes, el Sr. Villagómez pidió que se declarase si era causa criminal la de los Consejeros de Castilla suspensos, y que sobre esto se pidiera informe al Tribunal que entendía de este negocio***.

En los días siguientes, desde el 1 de febrero hasta el 16 de marzo, se recibieron las declaraciones a los otros trece Ministros del Consejo. Estas declaraciones ocuparon en el sumario doscientos cincuenta y tres folios***. En ellas quedó demostrada, entre otros particulares, su desconexión con el asunto del Sr. Don Miguel de Lardizábal, a quien muchos de ellos ni siquiera conocían. También se comprobó que incluso los votos particulares eran disconformes entre sí y que los Consejeros de Castilla habían escuchado la lectura del escrito del Sr. Conde del Pinar en tan sólo una ocasión.

Otro de los temas fue la resolución del asunto del Decano del Consejo de Castilla: "empantanóse con una calificación que en su favor dio la Junta Suprema de Censura, en oposición a otra de la de Provincia"***. Apostillaba Toreno que en realidad se había excedido aquella Junta en sus facultades. Lo cierto es que tanto este proceso como el de don Miguel de Lardizábal duraron varios meses más y tras varias peripecias y no pocos disgustos para los reos, como ya adelantábamos serían finalmente absueltos por el Tribunal Supremo de Justicia***.

De esta manera, el 29 de mayo de 1.812 el

***. Y seguía añadiendo Bayo: "Preciso era o que escaseasen mucho los personajes de temple liberal, o que mano oculta dirigiese aquellos manejos para fines siniestros."

***. VILLANUEVA, J.L., "Mi viaje a las Cortes", pág. 267. En aquella sesión se acordó que el asunto se trataría más adelante en sesión pública. (Cfr. "Diario de sesiones de las Cortes", núm. 479, págs. 2695 a 2704).

***. S.H.M., Colección del Fraile, "Idea de la causa formada por las Cortes...", pág. XXXI.

***. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, págs. 401 y 402.

***. LABRA, R.M., "La España del siglo XIX", op. cit., pág. 262. Sería interesante estudiar el influjo que pudo tener el nombramiento de una nueva Regencia presidida por Infantado en esta sentencia absolutoria.

Tribunal especial de las Cortes"" dictaba sentencia definitiva -aunque no fue unánime en su decisión""-, en la que absolvía respectivamente a los catorce Ministros del Consejo de Castilla y al Decano de este Consejo"".

"". Este Tribunal solicitó finalmente su extinción el 20 de octubre de 1.812. Y esa mismo día las Cortes aprobaron su supresión. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1).

"". No hubo unanimidad entre los Ministros. Hubo tres votos particulares, dos del Sr. Sáenz de Vizmanos y uno de don Toribio Sánchez. En los suyos, Sáenz de Vizmanos afirmaba "que en esta causa se persigue un crimen atroz, gravísimo y de lesa majestad, que admite prueba privilegiada; (...) que no habiéndose desvanecido por las posteriores actuaciones judiciales el justo motivo por el cual las Cortes mandaron formar esta causa a dichos Ministros del Consejo Real y suspendidos del ejercicio de sus funciones, deben ser separados de sus empleos y condenados mancomunadamente a las costas del proceso, fijándose el Gobierno su domicilio en la Península fuera de la Corte y en las islas adyacentes bajo la vigilancia de sus respectivos Gobernadores a los Sres. don José Colón y Conde del Pinar, por el mayor grado de culpa que contra ellos resulta; que se toma en consideración por el Tribunal la censura del Sr. Fiscal con respecto a la apología que hace en ella de los Ministros procesados. Cádiz, 29 de mayo de 1.812." Por su parte don Toribio Sánchez de Monasterio se adhería "al precedente voto del Sr. Vizmanos en todas sus partes, añadiendo que el verdadero estado de la causa exige que teniéndose y declarándose nulo todo lo obrado desde el folio 505, se desglose y archive, devolviéndose la causa al Sr. Fiscal para que, conforme a su naturaleza, promueva lo que corresponde para su substanciación." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1).

"". "...Conformándose con el dictamen del Sr. Fiscal, folio 505, considerando igualmente que los referidos catorce Ministros del Consejo Real no faltaron a su ministerio por haber pensado dirigir al Congreso Nacional sus observaciones sobre algunos artículos de la primera parte del proyecto de Constitución cuando aún no se hallaban sancionados, ni en haber desistido de hacerlo por respeto al mismo Congreso, cuando ya lo estaban; y administrando justicia, los debían declarar libres y exentos de toda culpa y cargo, y desvanecidas enteramente las sospechas que motivaron la suspensión acordada por las Cortes Generales y Extraordinarias en el ejercicio de sus empleos, en que deberán continuar, si existen en dicho ejercicio los demás individuos del mismo Consejo Real, sin que la formación de esta causa pueda perjudicar jamás a su honor y reputación, ni les obste para servir al Soberano y a la Patria en los destinos que sean de su agrado sin excepción alguna. También declarar que el Sr. Decano D. José Colón obró bien y prudentemente en reservar en sí la representación del

En la sentencia se repasaban todos los puntos delicados del proceso. Se reconocía que el Consejo de Castilla no había faltado a sus deberes ni al juramento prestado al instalarse las Cortes. Quedaba aclarado el verdadero objeto de la consulta proyectada, y los debates habidos en el seno del Consejo sobre el particular. También quedaba de manifiesto el riguroso respeto del Consejo de Castilla hacia las Cortes y el repetido reconocimiento y sumisión a la autoridad de aquel Congreso. Y finalmente se reconocía la facultad y obligación que las leyes imponían al Consejo de Castilla, y a cada uno de sus Ministros en particular, de consultar y exponer con entera libertad lo que creyesen conveniente para el mejor servicio de la causa pública"".

Acompañó el Tribunal especial a su sentencia una exposición dirigida a las Cortes Generales. En ella quedaba claro que el fundamento de la sentencia absolutoria estaba en el derecho a la libertad de expresión reconocido por las propias Cortes:

"...Nunca pudieron sus individuos cometer exceso ni delito en expresar su opinión cualquiera que fuese, porque la ley y el juramento al ingreso de sus plazas los quarece, y porque el legislador no está obligado a seguirla. Tampoco debe ser reconvenido el Decano por reservar en sí la representación del R.Obispo de Orense, que hubiera sido imprudencia propagar en aquellas circunstancias..."

Concluido el proceso, las Cortes Generales"" decidieron que la Comisión encargada de proponer individuos para el Tribunal especial, sería la encargada de correr con la impresión de la causa de los catorce Ministros del

R.Obispo de Orense y no comunicarla al Consejo, en aquellas circunstancias. Notifíquese esta sentencia dando copia a los interesados si la pidieren, y póngase en noticia de S.M. para los efectos convenientes..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1).

"" S.H.M., Colección del Fraile, "Idea de la causa formada por orden de las Cortes...", págs. xxxi y xxxii.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1.

"" Calvo Marcos señala que la decisión del Tribunal especial causó gran disgusto en las Cortes. Pero lo diputados no podían menos que acatar este fallo, porque ellos mismos habían autorizado al Tribunal para que juzgase. (CALVO MARCOS, M., "Régimen parlamentario de España en el siglo XIX", pág. 355).

Consejo de Castilla y de la del obispo de Orense***.

Evidentemente, la sentencia exculpatória debiera haber supuesto una manifestación pública de reconocimiento del buen hacer del Consejo de Castilla. Pero la realidad era muy distinta. El proceso a los catorce Ministros del Consejo de Castilla fue un proceso al mismo Consejo. Un proceso de estas características deterioró sobremanera la autoridad moral de esta multisecular institución, ahora durante meses sentada en el banquillo de los acusados. El daño que una causa de estas características produciría a la autoridad moral de esta institución era a todas luces irreparable***. Igualmente quedaba acentuado su marchamo de institución trasnochada, típicamente representativa del Antiguo Régimen.

Sin embargo, el golpe de gracia le había sido dado a la institución unas semanas antes, con la aprobación de la Constitución y del consiguiente decreto que suprimía al Consejo de Castilla. Poco o nada podía representar ya una sentencia exculpatória, dictada sobre una institución ya denigrada y desaparecida ya en la práctica. Fue, por tanto, una satisfacción moral ya inútil.

Pero también parece justo llamar la atención sobre un punto. Se quejaba Blanco White en un artículo publicado en El Español, en octubre de 1.812, de que las Cortes que tanto defendieron la libertad de imprenta, fueron responsables de procesos tan llamativos contra esta libertad, como los que acabamos de reseñar. Pero también hemos de reseñar cómo al menos los Tribunales trataron de ser independientes y buscaron la justicia en asuntos tan

***. Esta orden de las Cortes llevaba fecha de 24 de noviembre de 1.812. El 9 de diciembre contestaba la Comisión a los Secretarios de las Cortes que aún no les había sido entregada la primera de las causas -la de los catorce Ministros del Consejo de Castilla-. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1). La causa concluida sobre el Consejo de Castilla constaba de tres piezas: una con 533 folios, otra con 46 y una tercera con 6 folios más.

***. En 1.815 los Consejeros agraviados por el proceso de 1.811 solicitaron consulta a S.M. para restablecer su honor. En marzo de 1.815 los papeles de aquel proceso estaban diseminados entre varios organismos. La causa formada contra el Consejo estaba recogida en el Archivo del propio Consejo de Castilla, y la de Colón se encontraba en la Secretaría de Gracia y Justicia. Esta causa fue entonces remitida al Consejo por petición del Duque del Infantado, entonces Presidente del Consejo de Castilla. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm.1).

delicados como los mencionados". En los casos Colón y Lardizábal al parecer hubo incluso dos apelaciones sucesivas y contradictorias, admitidas en ambos casos por los respectivos tribunales apelados". Sin embargo, parece claro que como apunta Suárez, "quienes cayeron en sospecha de haber ofendido a Su Majestad, tuvieron que sufrir por ello. Los procesos de Lardizábal, Colón, los Consejeros de Castilla..." fueron muestras muy expresivas de ello".

***. Argüelles añadía otro dato en favor de las Cortes. El hecho de que estas causas se instauraran "sin reserva ni misterio, como no podía menos en un sistema de gobierno fundado en la libertad de imprenta, publicidad de discusiones y debates en las Cortes, y responsabilidad en los magistrados y funcionarios de todas clases." Y seguidamente comparaban las garantías de estas causas con las de las celebradas después de 1.814: "¡Qué contraste entre esta magnánima conducta, y la atroz violencia que derramó el terror y el espanto por toda la Monarquía en ambos mundos desde el momento en que se entronizó otra vez el régimen inquisitorial y despótico llamado 'Restauración'!" (ARGUELLES, A., "La Reforma Constitucional de España", pág. 15).

***. SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", págs. 172 y 173: "Por lo que se refiere al poder judicial, el desconcierto por parte de los Tribunales no fue menor que el experimentado por todos los Consejos de Regencia que existieron durante el tiempo que estuvieron reunidas las Cortes de Cádiz. En verdad, las Cortes se mostraron muy susceptibles respecto a su poder. Este fue, según parece, el motor que las llevó a formar causa a personas ajenas a las Cortes, algunas veces por formular juicio y opiniones... Porque máximas declaraciones generales no valen nada contra circunstancias particulares. Las Cortes amaban con entusiasmo la libertad de imprenta, en general y en abstracto. Pero llega el caso de que el Regente Lardizábal escribe que la soberanía no está actual sino radicalmente en el pueblo -es decir, en las Cortes-, y los defensores y establecedores de la libertad política no paran hasta que Lardizábal escribe que la soberanía no está actual sino radicalmente en el pueblo -es decir, en las Cortes-, y los defensores y establecedores de la libertad política no paran hasta que Lardizábal sale condenado en un tribunal extraordinario hechura de las Cortes mismas. Escribe otro 'La España vindicada' y se alborotan las Cortes de modo que parecía que se iba a declarar la ley marcial, porque 'la patria está en peligro'..."

***. SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", pág. 207.

3. La Constitución de 1.812 y la supresión del Consejo

El Consejo de Castilla había sido informado el día 3 de junio de 1.811 de la sentencia dictada por el Tribunal especial de las Cortes. Como ya hemos visto, el Tribunal había resuelto absolver a los Consejeros de Castilla de los cargos imputados. El Consejo conoció la noticia a través del Ministro que hacía las veces de Decano, si bien también el Sr. Colón había sido informado directamente. Publicada el día 4 de junio, fueron invitados a reasumir sus puestos en el Consejo el Sr. Colón y los demás Ministros suspensos. De esta manera, desde el 5 de junio asistieron todos ellos regularmente a las sesiones del Supremo Tribunal.

Sin embargo, este estado de cosas apenas duró quince días. El 19 de junio siguiente acordaron las Cortes que se diese orden a la Regencia para que se instalase inmediatamente el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo de Justicia, de lo que debía darse cuenta en el término de cuarenta y ocho horas que había sido verificado^{***}. Como veremos seguidamente, la aprobación de la Constitución de Cádiz llevaba consigo la creación de nuevas instituciones y la desaparición del Consejo de Castilla. De esta manera, el 20 de junio de 1.812 quedaba disuelto el Supremo Consejo de

^{***}. Fue a consecuencia de una proposición presentada por los diputados Sres. Muñoz Torrero y García Herreros. La proposición aprobada fue la siguiente: "Deseando las Cortes evitar las dudas que pueden suscitarse sobre la multiplicación de autoridades, y de que continúenb en ejercicio las ya extinguidas, han resuelto que se instale inmediatamente el Consejo de Estado y Supremo Tribunal de Justicia, dándose cuenta a las mismas de haberse esto verificado en el tiempo de cuarenta y ocho horas, y que si no estuviese aún preparada en el Palacio de la Regencia la sala en que deba tener sus sesiones el referido Consejo, pueda éste reunirse por ahora en casa de su decano o en otra cualquiera parte." (Diario de sesiones de las Cortes", núm. 592, pág. 3.338).

Castilla***.

La medida no era nueva. Por un Decreto de la Junta Central de 8 de junio de 1.809 se solicitaba de la Comisión de Cortes informes sobre la reforma de la Administración de Justicia. Varios de los dictámenes presentados proponían la creación de un Tribunal Supremo de Justicia, colocado en el vértice de la organización judicial. Como apunta el profesor Moreno Pastor, ya un informe de 3 de junio de 1.809, firmado por Fernando Miguel Hurtado, había presentado un modelo de Tribunal Supremo de la Nación. Sin embargo, en aquella ocasión el modelo presentado era mucho más parecido al modelo del Consejo Real de Castilla que al que más tarde recogería la propia Constitución***.

En las Cortes Generales parece que se estudió por primera vez la creación de un Tribunal Supremo de Justicia en la sesión de la Comisión de Constitución del 30 de agosto de 1.811. En el acta de aquel día se mencionaba este particular de forma lacónica: "Después se discutió si habría un Tribunal Supremo de Justicia y se acordó que sí"***.

Evidentemente, la implantación del principio de la división de poderes debería llevar consigo una profunda reforma del sistema de Consejos. Parece ser que inicialmente no se contempló directamente la supresión de los Consejos, sino la pérdida de las funciones gubernativas y judiciales que éstos detentaban***. De esta manera, el

***. S.H.M., Colección del Fraile, "Idea de la causa formada por las Cortes...", págs. 32 y 33.

***. MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo: 1.812-1.833", págs. 14 y 25.

***. "Actas de la Comisión Constitucional", op. cit., pág. 177; también en MORENO PASTOR, L., op. cit., págs. 28 y 29. La creación y características de este Supremo Tribunal de Justicia fueron estudiadas en las sesiones de los días 30 y 31 de agosto, y 4 y 6 de septiembre de aquel año.

***. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, pág. 377: "En los debates de las Cortes, al tratar del gobierno de los Reinos se fijó en siete el número de Ministros o Secretarios del despacho de la autoridad del Rey. La novedad consistía en los dos Ministerios de la Gobernación, o sea, de lo Interior, que tropezó con obstáculos por cuanto ya indicaba que se querían arrancar a los Tribunales lo económico y gubernativo en que habían entendido hasta entonces." "Por de pronto apartábase de la incumbencia de los tribunales lo gubernativo y económico en que antes tenían concurso muy principal, y se les dejaba sólo la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales..." (op. cit., pág.

Consejo de Castilla quedaría como una institución puramente consultiva, ya que las competencias judiciales pasarían a un Tribunal Supremo de Justicia.

Por tanto, la privación de atribuciones dejaba vacía de contenido a esta institución y llevaba necesariamente a su supresión^{***}. De este modo sus funciones pasarían a tres instituciones diferentes: un nuevo Consejo de Estado, que asumía las funciones consultivas; un Supremo Tribunal de Justicia, que tomaba sus funciones judiciales^{***}; y un Ministerio de la Gobernación, al que pasaron sus funciones administrativas.

El Tribunal Supremo de Justicia quedaba encargado de los negocios de competencia y delimitación de las competencias de los Tribunales inferiores, causas de Estado, juicios de residencia de altos empleados públicos, recursos de fuerza de los Tribunales superiores de la Corte y de nulidad interpuestos contra las sentencias dadas en última instancia^{***}; conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al Real Patronato^{***}

El Consejo de Estado, por su parte, fue el único de los Consejos que subsistió. Quedó como un órgano consultivo del Monarca, cuya principal misión sería aconsejarle en la elección de los Ministros.

Por otra parte, y como ya hemos visto, aparecería ese Ministerio de la Gobernación, que cubriría el vacío dejado por la desaparición de las funciones propiamente gubernativas del Monarca.

Como también vimos en su momento, la decisión de crear un Tribunal Supremo de Justicia parece que se tomó rápidamente, sin grandes debates. Sabemos, sin embargo, que algunos diputados sí se opusieron a la supresión de los Consejos, entre ellos curiosamente el propio Conde de

379).

^{***}. Ver sobre esto ARTOLA, M., "Los orígenes de la España contemporánea", tomo I., págs. 426 y 427.

^{***}. LABRA, R.M., "España y América, 1.812-1.812. La pérdida de las Américas", pág. 212: "Pero he dicho que algo de lo que estamos observando entrevieron las Cortes de Cádiz... Tratábase de la supresión de los Consejos especia es para dividir las funciones administrativas de las puramente contenciosas, creando el Consejo de Estado y el Supremo Tribunal de Justicia."

^{***}. LABRA, R.M., "La España del siglo XIX", op. cit., pág. 252.

^{***}. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo IV, pág. 379.

Toreno, que fue "acusado en diversas intervenciones de nostálgico del antiguo sistema de Consejos"***.

De esta manera, a principios del año 1.812 ya se encontraba perfilado el título V de la Constitución de Cádiz, correspondiente a la organización de los Tribunales de Justicia***. Paralelamente se estudió el desarrollo institucional mediante la aprobación de los correspondientes Decretos.

El Conde de Toreno hizo una propuesta en la sesión del 20 de enero de 1812 para que la Comisión Constitucional presentase a la mayor brevedad un proyecto sobre la forma que debía darse al Tribunal Supremo. Aprobada la propuesta, el 14 de febrero se reunió aquella Comisión***, aprobando el 20 del mismo mes las bases sobre las que debía elaborarse el proyecto a presentar a las Cortes***. Este importante documento contemplaba ya la supresión de los Consejos y la atribución de sus competencias al Tribunal Supremo***. Igualmente establecía

***. MORENO PASTOR, L., op. cit., pág. 45.

***. Título V: "De los Tribunales, y de la Administración de justicia en lo civil y criminal."

***. "Actas de la Comisión de Constitución", op. cit., pág. 233: "Se reunió la Comisión para tratar del establecimiento del Supremo Tribunal de Justicia y se habló de la materia en general, habiendo el secretario de la Comisión presentado un papel de apuntes sobre la materia. Quedó pendiente el punto..."

***. El día 18 de febrero "se continuó hablando de varios puntos relativos a la creación del Supremo Tribunal de Justicia, y se acordó que el decreto que había de formarse se extendería en artículos, y que se irían estableciendo bases generales que sirviesen a la formación de la minuta del decreto." ("Actas de la Comisión de Constitución", op. cit., pág. 234).

***. La primera de las bases fijadas era, por tanto, la supresión de "los tribunales conocidos con el nombre de Consejos, y las Juntas supremas de diferentes ramos ("Actas de la Comisión de Constitución", op. cit., pág. 234). Añade L. Moreno que "para evitar entorpecimientos en la resolución de los asuntos contenciosos, debería conocer de los mismos en la forma en que lo habían hecho aquéllos antes de su extinción" (MORENO PASTOR, L., op. cit., págs. 55 y ss.). No sólo en el procedimiento el nuevo Tribunal Supremo asumiría peculiaridades del Consejo de Castilla. Así también en otras facetas, como el propio uniforme de los Magistrados, habría similitudes entre una y otra institución (op. cit., pág. 510, Reglamento del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1.814, artículo 17).

que este Supremo Tribunal habría de continuar y "terminar todos los negocios contenciosos que se hallen radicados en los tribunales extinguidos en la forma que lo habrían éstos hecho antes de su extinción"***.

El 17 de marzo la Comisión Constitucional presentaba en el Congreso el proyecto de los artículos referentes a la Administración de Justicia***. El 25 del mismo mes se abrieron los debates y tras muchas discusiones, el Decreto fue publicado el 17 de abril de 1.812***. Aquel día por tanto se constituía, de acuerdo con la Constitución, un Tribunal Supremo de Justicia. Por los artículos 1 y 2 del mencionado Decreto quedaban suprimidos de facto al mismo tiempo los Consejos. Y decimos de facto, porque teóricamente ya habían sido suprimidos como consecuencia de la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz***.

***. "Actas de la Comisión de Constitución", op. cit., pág. 235. En estas bases había varias referencias más a los Consejos suprimidos. Así, se mandaba que si quedaban "jubilados algunos de los magistrados de los que actualmente componen los Consejos suprimidos, lo quedarán con los honores y sueldo, sujeto éste sólo a la ley de máximo, etc." También se fijaba que si quedaban jubilados algunos magistrados de los Consejos suprimidos que eran diputados a Cortes, "no se entiendan inhabilitados por este hecho para ser llamados desde ahora en este Supremo Tribunal" (op. cit., pág. 236).

***. Se había vuelto a estudiar este asunto en las sesiones de la Comisión de Constitución de los días 28 y 29 de febrero y 2 de marzo de 1812. El día 13 se aprobaron y aprobaron los artículos correspondientes a la abolición de los Consejos y creación del Supremo Tribunal de Justicia, quedando aprobada toda la minuta del decreto al día siguiente (op. cit., págs. 242 y 243).

***. Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 4.789 del catálogo, "Decreto de las Cortes. Se suprimen los Tribunales conocidos con el nombre de Consejos. Se crea el Tribunal Supremo de Justicia". Fue comunicada la instalación del Consejo de Estado y la supresión del Tribunal Supremo por Real Orden de 21 de junio de 1.812 (Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 4.805). "La Cortes Generales y Extraordinarias suprimieron por su decreto de 17 de abril de 1812 los tribunales conocidos con el nombre de Consejos. Dispusieron que los negocios contenciosos pendientes en los Consejos de Castilla, Indias y Hacienda se remitiesen al Tribunal de Justicia" (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 5).

***. La Constitución de Cádiz no mencionaba expresamente que el Consejo de Castilla quedaba suprimido. Sin embargo, esta extinción se deducía claramente del articulado de la Constitución gaditana, al hacer incompatible al Consejo con la nueva estructura del Estado liberal (DE DIOS, S., "Fuentes

Inmediatamente que se creaban las nuevas instituciones, se traspasaban competencias que les serían propias. Así, todos los negocios contenciosos de que conocían los Consejos suprimidos de Castilla, Indias y Hacienda se pasaron para su determinación y continuación al Tribunal Supremo". Más adelante, en mayo de 1.812, se hizo presente al Supremo Tribunal que una porción considerable de los negocios de tanteo, reversión, incorporación a la Corona y otros varios ramos de que conoció siempre el Consejo de Castilla, habían pasado a la Junta Suprema del Real Patrimonio".

Sin embargo, las Cortes permitieron interinamente que los Consejos continuaran con sus funciones hasta que el Tribunal Supremo pudiera hacerse cargo plenamente de sus atribuciones. Y también provisionalmente, mientras estuvieran sin destino, conservarían los magistrados de los Consejos suprimidos sus honores y sueldo, como ya se ha apuntado anteriormente". No olvidemos, por otro lado, que el Consejo de Castilla se encontró mayoritariamente suspenso en sus funciones hasta principios de junio de 1.812.

Lo cierto es que parece que en la práctica los Consejos debieron continuar en sus funciones con absoluta normalidad y que el Tribunal Supremo y Consejo de Estado continuaban sin estar formados a mediados de junio, es decir, dos meses después de su establecimiento legal. En las Cortes se levantaron algunas protestas al respecto. El 19 de junio, por ejemplo, ante una consulta presentada por

para el estudio del Consejo Real de Castilla", págs. LXXXVIII y LXXXIX). Y por otro lado y lógicamente, la aplicación de la Constitución y del mencionado decreto debía producir inicialmente algunos conflictos jurídicos. Los artículos 3 y 4 asignaban al nuevo órgano el conocimiento de los negocios contenciosos pendientes de resolución en los Consejos de Castilla, Indias y Hacienda, y también de los recursos de aquellos negocios que hubieran comenzado en las Chancillerías, Audiencias y Juzgados de Hacienda antes de la publicación de la Constitución y cuya competencia hubiera correspondido a los tribunales extinguidos. (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo...", op. cit., págs. 55 y ss.).

***. Archivo de Palacio, Sección Fernando VII, caja 204, expediente núm. 26. Estos negocios estaban comprendidos en el artículo 3 del Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de 17 de abril de 1.812.

***. A.G.P., Sección Fernando VII, caja 204, expediente 26.

***. Cfr. también DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", pág. LXXXVIII.

al extinguido Consejo de Indias, se produjo una airada protesta de varios diputados -Muñoz Torrero, Calatrava, García Herreros-, por venir esta consulta de un Cuerpo extinguido***.

Ese mismo día, y por causa de la mencionada consulta del Consejo de Indias, fue aprobada una proposición presentada por Muñoz Torrero en la que se mandaba la inmediata instalación del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de Estado***.

Al día siguiente fue comunicado oficio al Consejo, informándole de la anterior resolución y comunicándole que a las diez de la mañana de ese día 20 de junio quedaría instalado el Supremo Tribunal de Justicia en la Casa de Tavira. Se mandaba también a los subalternos de los extinguidos Consejos que acudieran al mencionado edificio, a dar cuenta de los negocios en que debía entender el Tribunal Supremo conforme al decreto de 17 de abril de aquel año. También se ordenaba el cese inmediato de todos

***. En aquella sesión, el diputado Sr. Dou manifestó lo siguiente: "...Publicada la Constitución dije yo que quedaban derogados y extinguidos el Consejo de Indias y el de Castilla, con otras jurisdicciones que había en Cádiz; que había de ser nulo cuanto dichos tribunales hiciesen; que antes de instalarse el Consejo de estado y el tribunal Supremo de Justicia debían resolverse por las Cortes los reglamentos respectivos; y que para evitar toda dificultad convenía que las Cortes habilitasen a todos los tribunales para proseguir como antes hasta que se les diese aviso de estar corrientes el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de Estado. El Sr. Zorraquín apoyó esta idea; pero fue en vano: con todo, siempre su supuso en las Cortes, siempre se ha convenido en que el Consejo de Castilla y el de Indias con las demás jurisdicciones debían seguir en sus funciones hasta estar instalados y corriente el Tribunal de Justicia. ¿Cómo, pues, se quiere hacer ahora un cargo al Consejo de Indias por haber continuado en el ejercicio de sus funciones, si siempre hemos supuesto que debía hacerlo, y no ha estado aún ni está corriente el Tribunal Supremo de Justicia, que se subroga en su lugar?" ("Diario de sesiones de las Cortes", op. cit., núm. 592, pág. 3.338; también ver MORENO PASTOR, L., op. cit., pág. 319).

***. "Deseando las Cortes evitar las dudas que puedan suscitarse sobre la multiplicación de autoridades, y de que continúen en ejercicio las ya extinguidas, han resuelto que se instale inmediatamente el Consejo de Estado y Supremo Tribunal de Justicia, dándose cuenta a las mismas de haberse verificado en el tiempo de cuarenta y ocho horas..." ("Diario de Sesiones de las Cortes", op. cit., núm. 592, pág. 3.338; y MORENO PASTOR, L., op. cit., pág. 319).

los Consejos suprimidos en el ejercicio de sus funciones"".

Recibido este oficio, el Consejo de Castilla acordó su puntual ejecución y cumplimiento, y sus subalternos pasaron a informar de los asuntos pendientes al local del Tribunal Supremo. Igualmente se decidió aprobar un último acuerdo, antes de la disolución definitiva del Consejo, en el aparte de comunicar el fiel cumplimiento de lo mandado, se recomendaba a los que hasta ahora habían sido sus subalternos y dependientes, para recompensar a los que les sirvieron y auxiliaron en el desempeño de su instituto, quienes habían "dado al Consejo y a la Cámara pruebas constantes y continuas de su exactitud, fidelidad y sumisión, como también de su acendrado celo por el servicio de S.M. y de la causa pública"....

"El Consejo y la Cámara, cuando por última vez dirigen a V.A. la palabra, no quedarían tranquilos si no pusieren todo esto en la paternal consideración de V.A., rogándole encarecidamente atiende a dichos subalternos y dependientes para su colocación en los destinos correspondientes a sus clases y circunstancias como fuere de su superior agrado..."....

Ya hemos visto en otros apartados de esta evolución histórica y lo veremos nuevamente en la estructura orgánica del Consejo, que muchos de los empleados del Tribunal Supremo lo habían sido anteriormente del Consejo de Castilla"". Esto llevaría también a que las Cortes sintieran una cierta desconfianza ante el Tribunal Supremo, por estar formado esencialmente por hombres que pertenecieron a instituciones del Antiguo Régimen"".

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

"" A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

"" Sobre los diputados que eran Consejeros, ver el Decreto de las Cortes de 16 de abril de 1.812, Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 4.788, "Decreto de las Cortes sobre destinos de los diputados que queden sin él, por la extinción de los Consejos de que eran Magistrados."

"" MORENO PASTOR., L., op. cit., pág. 80. Un caso curioso lo relataba Villanueva en "Mi viaje a las Cortes": El 20 de mayo de 1.812 en sesión secreta de las Cortes se dio cuenta de una representación del camarista de Castilla don José Navarro Vidal, en la cual manifestaba haber obtenido

De esta manera la Constitución de Cádiz 'ignoró' al Consejo de Castilla^{***} y trajo consigo un cambio radical en nuestra organización institucional. Desaparecían las bases judiciales del Antiguo Régimen y quedaba establecido un régimen nuevo y moderno, pero que no tenía tradición ni precedente ninguno en el pasado español^{***}, y que estaba claramente inspirado en los modernos modelos franceses. Como añade Comellas, "entre septiembre de 1.810 y julio de 1.812 se promulgan 26 decretos que suponen la transformación del orden político"^{***}. Sin duda fue un corto espacio de tiempo para unas transformaciones tan profundas de nuestra organización política y el precio podía ser alto. Así, el sistema nacido de la Constitución gaditana apenas duraría dos años, hasta mayo de 1.814.

seis votos en la consulta del Consejo de Estado para cubrir las plazas del Supremo Tribunal de Justicia, y que a pesar de esto no había sido incluido en las ternas. También manifestaba que tan sólo al final de las ternas se había puesto en una nota que Navarro había obtenido seis votos. Pedía que puesto que ese número era la mitad de todos los vocales y resultaba un verdadero empate, declarasen las Cortes que conforme a las declaraciones anteriores fuese incluida en la consulta. Apunta Villanueva cómo finalmente no fue incluido en la lista de los propuestos. (VILLANUEVA, op. cit., pág. 300).

^{***}. GIBERT, R., voz "Consejo Real", Gran Enciclopedia Rialp, tomo VI, pág. 289.

^{***}. SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", pág. 126.

^{***}. Citado por SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", pág. 129.

9. RESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO DE CASTILLA EN 1.814. LA ETAPA 1.814-1.820.

1. Introducción

El 8 de diciembre de 1.813 el Conde de San Carlos y Laforest firmaban el Tratado de Valençay, por el que entre otras cosas Napoleón reconocía a Fernando VII como Rey de España. El Monarca pedía seguidamente al citado Duque que pusiera en manos de la Regencia el tratado para su ratificación.

Unos días después, la Regencia recibía a los enviados de Fernando e informaba seguidamente de lo tratado en esta reunión a las Cortes. El Congreso antes de resolver quiso oír el dictamen del Consejo de Estado, que opinó "que no se permitiese ejercer la autoridad real a Fernando VII hasta que hubiese jurado la Constitución en el seno del Congreso, y que se nombrase una diputación que al entrar S.M. libre en España le presentase la nueva ley fundamental, y le enterase del estado del país y de sus sacrificios y muchos padecimientos"***.

De acuerdo con este dictamen, las Cortes reunidas en Madrid en sesión secreta, el 2 de febrero de 1814, aprobaban un decreto en el que se decía que 'no se

***. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", op. cit., tomo I, pág. 327.

reconocerá libre al Rey, ni por tanto se le prestará obediencia, hasta que en el seno del Congreso Nacional preste el juramento prescrito en el artículo 173 de la Constitución"".

Concluida la primera legislatura de las Cortes el 19 de febrero, se abrieron nuevamente las Cortes el 1 de marzo para comenzar la segunda"". Unos días después, el 7 de marzo, Napoleón facilitaba a Fernando los pasaportes necesarios para volver a España. Al día siguiente, 8 de marzo, en una reunión con el Duque de San Carlos y otros consejeros, parece que se fijaron las bases para la actuación frente al nuevo Código Constitucional"".

Mientras tanto, el Rey hacía un viaje triunfal desde Valençay. El 24 de marzo ponía por primera vez en muchos años pie en territorio nacional"" y era recibido a su paso por cada localidad con un enorme entusiasmo"". El 15 de abril el Rey llegaba a Segorbe, donde hubo una Junta de Notables. Entre los consejeros del Rey allí presentes estaba el Duque del Infantado. Para el Duque sólo había tres caminos. O jurar la Constitución, o negarse a jurarla o jurarla pero con restricciones. Y esta última posibilidad era para Villa-Urrutia la aconsejada por Infantado"". Apunta al respecto Bayo que de sus palabras podía deducirse que opinaba que el Monarca debía prestar un juramento condicional"".

Por aquellos días fue redactado también el

"" Ver SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", pág. 164.

"" Previamente, el 5 de enero se habían trasladado las Cortes a Madrid, y se instalaron en el antiguo teatro de Caños del Peral, en la recién creada plaza de Oriente, frente al Palacio Real. (MESONERO ROMANOS, R., "El Antiguo Madrid", pág. 112).

"" BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo II, pág. 5.

"" La fecha del 24 de marzo quedaría como efemérides y día de gala en la Corte durante todo el reinado de Fernando VII (A.G.P., Sección Fernando VII, caja 206 núm. 32).

"" Cfr. entre otras muchas fuentes a TORENO, op. cit., tomo V, págs. 533 y 534.

"" VILLA-URRUTIA, "Fernando VII. Rey Constitucional", págs. 140 y 141.

"" BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo II, pág. 20.

llamado "Manifiesto de los Persas"¹⁰⁰⁰, documento que llegó a estar firmado por sesenta y nueve diputados de las Cortes¹⁰⁰¹. Constituía este escrito un elogio de la Monarquía absoluta y solicitaba la celebración de Cortes con solemnidad y en la forma que se celebraron las antiguas¹⁰⁰². El Manifiesto tiene importancia como documento jurídico y político de primer orden, no sólo por su análisis crítico de las reformas efectuadas por las Cortes, sino por ofrecer una interesante síntesis de la doctrina clásica del Siglo de Oro, en expresión de M. Artola¹⁰⁰³, frente a la del sistema liberal recogida en la Constitución de Cádiz¹⁰⁰⁴. Este documento hablaba también del Consejo de Castilla y defendía su existencia frente a un Supremo Tribunal de Justicia:

¹⁰⁰⁰. Sobre este importante y poco estudiado documento se pueden consultar, entre otras, las obras de M.C. DÍZ-LOIS, "El Manifiesto de 1814" (EUNSA, Pamplona 1967); y de F. SUÁREZ, "La crisis política del Antiguo Régimen"; también M. ARTOLA habla del documento en "Historia de España Menéndez Pidal", tomo XXVI, "La España de Fernando VII", (págs. 524 y 525); otros autores restan importancia al Manifiesto, como es el caso de J. FONTANA en "La quiebra de la Monarquía absoluta" (Ariel, Barcelona 1974, pág. 83), para quien no fue "un documento ideológico y político coherente" y "no sirvió más que para cohonestar el golpe de Estado de mayo de 1814, (...) no volvió a ser usado de nuevo, citado o reeditado; no merece la pena, por tanto, el trabajo de analizarlo ni de tomarlo en serio".

¹⁰⁰¹. Este documento fue firmado, entre otros, por los miembros del Consejo de Castilla don Benito Arias de Prada, don Domingo Fernández de Campomanes y el Fiscal don Jerónimo Antonio Díez. El Manifiesto lo firmaron el Presidente de las Cortes y tres de los cuatro secretarios del Congreso. No lo firmó, sin embargo, uno de los Secretarios que era otro Consejero de Castilla, don Tadeo Ignacio Gil (DÍZ-LOIS, M.C., "El Manifiesto de 1814", págs. 100 a 106). Tampoco consta que lo firmara otro Consejero de Castilla que debía ser por entonces diputado a Cortes: don Miguel Alfonso Villagómez.

¹⁰⁰². BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo II, págs. 26 y 27.

¹⁰⁰³. ARTOLA, M., op. cit., pág. 524.

¹⁰⁰⁴. Sin embargo, la importancia política y jurídica y consecuencias de este documento distaron mucho de lo que significó la Constitución gaditana, como apunta bien J. Fontana ("La quiebra de la Monarquía Absoluta", op. cit., págs. 83 y ss.). La tesis de F. Suárez de que el documento tuvo una significación semejante a la que la Constitución de 1812 tuvo para los liberales, debemos entenderla en cuanto a ser un valioso documento de síntesis de una doctrina política. La Constitución de Cádiz fue un excelente producto en este sentido, como también lo fue el Manifiesto de 1814.

"Desde el Artículo 259 se fijó un Tribunal Supremo de Justicia, que pudo excusarse, existiendo el de Castilla, y otros que concordaban en el mismo atributo de Supremos de Justicia, ya los conocía la Nación de muy antiguo por la energía y tesón con que habían sabido defender la Religión, el Rey y la Patria, y no poco influyó para las ruinas de las Américas la extinción del de las Indias."

Al día siguiente, 16 de abril, el Presidente de la Regencia, Cardenal Borbón, hizo entrega al Rey de un ejemplar de la Constitución de Cádiz, en cumplimiento de lo acordado por las Cortes en el mes de febrero¹⁰⁰⁰.

El día 3 de mayo las Cortes designaban una comisión que saliera a recibir al Rey. Ya por entonces cundía el temor en el Congreso que el Rey no juraría ni aceptaría la Constitución¹⁰⁰¹. Y así iba a ser, ya que el 4 de mayo firmaba Fernando varios importantes decretos en Valencia. Uno de ellos declaraba nula la Constitución y todos los decretos aprobados por las Cortes desde su establecimiento¹⁰⁰².

¹⁰⁰⁰. Aparte de esta mención del Consejo en el punto 66, hay otra más en el punto 120: "Consiguiente a este cuidado de la soberanía dijo la Ley 8 título I libro 2 de la Recopilación: que cuando se tratase en el Consejo de hacer alguna ley nueva, derogar o dispensar las hechas, concurriesen en un voto todos los del Consejo, o por lo menos las dos terceras partes y lo consultasen al Rey, para que proveyese en ello lo conveniente a su servicio, y al bien público del Reino: y no con menos solemnidad y madura detención se hacían, o revocaban las leyes con intervención del Rey de Aragón" (DIZ-LOIS, M.C., "El Manifiesto de 1814", págs. 228, 229 y 260). También Luis Moreno menciona el epígrafe 66 en su obra "Los Orígenes del Tribunal Supremo", págs. 94 y 95.

¹⁰⁰¹. El Rey la recibió con mucho agrado y dijo al Presidente que nada deseaba más que la felicidad de la Nación. También entregó al Rey las insignias de la Orden Militar de San Fernando, que igualmente recibió con mucha complacencia. {A.M.A.E., legajo 3.312, expediente 1-33-3}.

¹⁰⁰². SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", pág. 165.

¹⁰⁰³. A.H.N., Colección de Reales, Cédulas, núm. 5.025, "Real decreto declarando nulos la Constitución y los decretos de las Cortes." Otro decreto nombraba Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de Ultramar nada menos que a don Miguel de Lardizábal y Uribe, ex-Regente perseguido y confinado por las Cortes. Por otro lado, el Presidente de las Cortes era entonces un diputado americano, don Antonio

Era evidente cuál sería el subsiguiente hilo de los acontecimientos. Fernando VII partió de Valencia la noche del 10 al 11 de mayo. Las Cortes todavía habían seguido reuniéndose hasta el mismo día 10 de mayo¹⁰⁰⁰. Esa misma noche fueron detenidos muchas autoridades y diputados del Régimen Constitucional¹⁰⁰¹. Dirigía la operación el nuevo Capitán General de Castilla la Nueva, ayudado entre otros por don Ignacio Martínez de Villela, Consejero de Castilla¹⁰⁰². Otro Consejero se negó sin embargo en participar en "encargo tan criminal y odioso". Fue don José María Puig, quien fuera hasta ese momento tantas veces criticado en las sesiones de las Cortes Generales¹⁰⁰³.

El 13 de mayo entraba el Rey en Madrid¹⁰⁰⁴, en medio de un gran entusiasmo popular. En las siguientes semanas fue restablecido todo el sistema institucional del

Joaquín Pérez, quien fue quien recibió el manifiesto y decretos aprobados por el Rey el 4 de mayo (VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Constitucional", op. cit., pág. 144).

¹⁰⁰⁰. SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", pág. 164.

¹⁰⁰¹. Entre la documentación del Consejo de Castilla se conserva este relato de don José Canga Argüelles: "...permanecí arrestado desde la noche del día 10 de mayo de 1.814, sin que en el espacio de cuarenta y cinco días se me hubiese tomado declaración, ni hecho pregunta alguna, por donde pudiese venir en conocimiento de mi detención contra lo que expresamente se previene en la ley 10. tit. 32 libro 12. de la Novísima Recopilación..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089 núm. 18, instancia de don José Canga Argüelles). Tras la detención de ministros y diputados queda restaurado el absolutismo y comienza lo que Artola llama "el primer proceso político de de nuestra Historia Contemporánea" (ARTOLA, M., "Historia de España Menéndez Pidal", tomo XXVI, pág. 533)

¹⁰⁰². Fernando VII antes de salir hacia Madrid desde Valencia disolvió las Cortes y decretó el arresto de regentes, ministros y diputados. Para ejecutar esta orden nombró al General Eguía, Capitán General de Castilla la Nueva y Gobernador de Madrid, a Martínez de Villela, a don Antonio Alcalá Galiano, a don Francisco Leyva y a don Jaime Álvarez de Mendieta, bajo el título de jueces de la Comisión de Policía (MARLIANI, M., "El reinado de Fernando VII", pág. 93). Ver también TORENO, op. cit., tomo V, pág. 547.

¹⁰⁰³. CONDE DE TÓRENO, op. cit., tomo V, pág. 547.

¹⁰⁰⁴. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.221, "Proclamación de S.M. y entrada en público". También esta fecha adquirió categoría de día de gala en la Corte en todo el reinado de Fernando VII. (A.G.P., Sección Fernando VII, caja 206 núm. 32).

Antiguo Régimen"". Por decreto de 23 de mayo recuperaba su existencia la Sala de Alcaldes de Casa y Corte"". Y tres días más tarde, el 27 de mayo, un nuevo decreto restablecía el Consejo Real de Castilla"".

2. Restablecimiento del Consejo Real

El Real decreto de restablecimiento del Consejo de Castilla quería ser una reparación moral por las vejaciones sufridas por sus magistrados. En él no faltaban las adulaciones por su lealtad inquebrantable al Rey. Pero también deja traslucir este decreto alguna revisión del papel y competencias de este Supremo Tribunal, en aras a una

"". "Pasados estos días entre los mayores regocijos y diversiones, de luego a luego se aplicó el Sr. Don Fernando a poner orden a las cosas y tribunales, y volverlas al estado que tenían en el año de 1808. Así, por su orden fue restablecido el supremo y antiquísimo Consejo de Castilla, la Sala de Alcaldes, los Consejos de Indias, Ordenes y hacienda, encargando a todos el más pronto y mejor despacho". (CARNICERO, J.C., "Historia razonada", tomo IV, pág. 276).

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 5.034. También ARTOLA, M., "La España de Fernando VII", op. cit., pág. 544. En agosto de 1814 el Secretario de Gracia y Justicia don Pedro Macanaz remitió al Consejo ejemplares del Real decreto de 23 de mayo que restablecía la Sala de Alcaldes (libro de matrícula de la Secretaría de la Presidencia de Castilla, Consejos Suprimidos, núm. 1.735).

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 5.038; A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 38. Apunta Moreno Pastor que este decreto suponía también de hecho la supresión de derecho del Supremo Tribunal de Justicia (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 98). A partir de ese momento se verificaría de facto la transferencia de los negocios contenciosos que obraban en el Tribunal Supremo para que fueran sustanciados por el Consejo de Castilla conforme a la legislación vigente en el periodo anterior a la Constitución.

mayor eficacia de la institución^{***}. Parece por tanto como si el Monarca quisiera de un lado desagrar a la institución y por otro reconociese que había aspectos de la misma que no podrían continuar como estaban antes del periodo constitucional:

"...Pero al restablecerle quiero que el Consejo...me proponga con la brevedad posible qué negocios de los que le están atribuidos convenga separar de su conocimiento, para que mis vasallos logren su más pronto y menos costoso despacho, y qué distribución sería conveniente hacer en los atribuidos a cada Sala para que simultáneamente se ocupen todos en el trabajo sin desigualdad ni atraso: de manera que sea el mi Consejo, como lo espero de su fidelidad, medio por donde se verifiquen mis Reales intenciones del más acertado gobierno de mis súbditos, pronta y recta administración en la Justicia, y el adelantamiento en los ramos de pública prosperidad de que le han encargado los Reyes mis predecesores y en lo que por este mi Real Decreto le confirmo..."^{***}.

Una muestra evidente de este replanteamiento sobre la figura del Consejo de Castilla es el recorte de las facultades concedidas al Presidente o Gobernador del Consejo:

"...Pero no es de mi ánimo confirmar por él las facultades de que usaban el Presidente o Gobernador, despachando por sí y separadamente por su Secretaría recursos, pleitos y otros negocios de los que abusivamente acudían a ella; porque mi intención y voluntad es que el Presidente o Gobernador que nombrare, únicamente tenga y use de las facultades que le están declaradas

^{***}. Para Artola en "La España de Fernando VII" (en "Historia de España Menéndez Pidal", volumen XXVI, págs. 544-546), tal medida respondía quizás a que el Rey desconfiaba del excesivo poder del Consejo de Castilla. También el Rey de esta manera se hacía así eco de las quejas que se escuchaban contra la lenta burocracia del Consejo y su multiplicidad de competencias. Y especialmente por el desbordamiento de funciones que se había producido en la Secretaría de la Presidencia de Castilla, que se había excedido con mucho en sus cometidos invadiendo funciones de otros organismos.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46; también en DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", págs. 164 y 165.

en las leyes para el gobierno y decoro del Consejo, y por sola esta consideración y respeto..."

Hubo también una Real Orden de S.M. de fecha 2 de junio de 1.814, por la que se acordaba cesar en sus funciones y quedar disuelto el Supremo Tribunal de Justicia, del que había sido Decano don Gonzalo José Vilches, en el día en el que el Consejo se abriera". Los ministros que componían el Tribunal gozarían, mientras no fueran destinados, de los sueldos que los ministros de su respectiva clase tuvieran habitualmente asignados".

En nuevo Real Decreto de 3 de junio el Rey nombraba al Duque del Infantado Presidente de Castilla".

"... A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46. Concluía el Decreto el Rey solicitando del Consejo que propusiera "todo lo demás que convenga al bien y felicidad de mis reinos." Este recorte ha pasado casi inadvertido a la mayoría de los historiadores. Sin embargo, parece que tiene bastante fondo y justificaría un estudio detenido sobre la Secretaría de la Presidencia de Castilla y su papel en los reinados de Carlos IV y Fernando VII. Este organismo autónomo dependiente del Gobernador del Consejo de Castilla elevaba al Rey las consultas del Consejo, llevaba los registros de estas consultas. Igualmente coordinaba las múltiples potestades del Presidente o Gobernador de Castilla y parece que llevaba también al menos parcialmente las relaciones del Consejo de Castilla con otros organismos. Al parecer, en los últimos años se había convertido en una oficina poderosa que incluso resolvía pleitos y recursos que acudían a ella indebidamente. Sobre el desconocimiento sobre esta oficina se puede consultar ALVAREZ-COCA, M.J., "La Corona de Aragón: documentación en el Consejo y la Cámara", Hispania, XLIX/173 (1989), págs. 920 y 921.

"... Parece que el Consejo Real pudo empezar a ejercer sus funciones el mismo día 4 de junio de 1814 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

"... A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

"... A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 5.044; también A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46. Don Pedro de Alcántara y Toledo Salm-Salm Hurtado de Mendoza y Orozco, Duque del Infantado, de Pastrana, de Lerma, Marqués de Santillana y de Saldaña, Príncipe de Eboli, etc., Grande de España de Primera Clase, sería Presidente de Castilla hasta el 31 de marzo de 1.815 (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.517 núm. 20; y ver también GARCIA MADARIA, J.M., "Estructura de la Administración Central (1.808-1.931)").

También por otro Real Decreto^{****} de la misma fecha se designaban a los veintitrés Consejeros que formarían parte del Supremo Tribunal: don Gonzalo José Vilches, don José Joaquín Colón, don Manuel de Lardizábal, don Antonio Villanueva, don Bernardo Riega, el Conde del Pinar, don José María Puig, don Sebastián de Torres, don Domingo Fernández de Campomanes, don Andrés Lasauca, don Antonio Alvarez de Contreras, don Ignacio Antonio de Cortabarría, don Ignacio Martínez de Villela, don Francisco Arjona, don Miguel Alfonso Villagómez, don Juan Antonio Carrillo, don Tomás Moyano, don Juan Antonio Inganzo, don Benito Arias de Prada, don Jerónimo Díez, don Nicolás María de Sierra, don José Antonio Larrúmbide y don Luis Meléndez Bruna^{****}.

Por Real Decreto de 4 de mayo se habilitaba a todos los subalternos del Consejo que no tuvieran tacha legal, para que ejercieran sus respectivos oficios y ocupaciones^{****}. Y también se pedía a aquellos que no hubiesen jurado en el tiempo que sirvieron en Cádiz que juraran ahora^{****}:

^{****}. Cfr. A.M.A.E., legajo 3.312 núm. 9, "Decreto de S.M. rehabilitando en el mismo destino a los Ministros que lo fueron en tiempo de su padre".

^{****}. De estos veintitrés magistrados, tan sólo tres lo habían sido del Supremo Tribunal de Justicia: don José María Puig, don Antonio Ignacio de Cortabarría y don Jerónimo Díez (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", op. cit., págs. 98 y 99; también se puede ver A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

^{****}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

^{****}. De esta manera, los subalternos del Consejo de Castilla en su restauración en 1.814 fueron los siguientes:

1) Primera Escribanía de Gobierno a cargo de don Bartolomé Muñoz de Torres: oficial primero, don Damián Juárez; oficial segundo, don Manuel Sande; oficial tercero, don Santos Sánchez; oficial cuarto, don Manuel Abad; escribiente primero don Sebastián Salcedo; escribiente segundo, don Gregorio Vicente Gil; escribiente tercero, don Rafael Vega.

2) Escribanía de Cámara de Justicia de don Bartolomé Muñoz: oficial primero don Cosme de Miguel García; oficial segundo, don Francisco Poza; oficial tercero, don Antonio Merendón. Todos servían en el Consejo en el año 1.808.

3) Escribanía de Gobierno de Aragón a cargo de don Manuel Antonio de Santisteban: oficial primero, don Pedro Zabala; oficial segundo, don Miguel Gonzalo; oficial tercero, don Lucas Bartolomé López; oficial cuarto de consultas, don Santiago Rero Peñuelas.

4) Escribanía de Cámara de don Manuel de Carranza: oficial primero, don Juan Aguado; oficial segundo, don Francisco García; oficial tercero, don Manuel Salvador Carranza.

Ese mismo día se pidió a Infantado que convocase al Consejo para el día siguiente a la hora acostumbrada. Como algunos de los Consejeros no tenían el título correspondiente, acordó que los sacasen cuando se estableciera el Tribunal que debiera expedirlos -la Cámara de Castilla-.

Entre la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid se encuentra una minuta firmada por don Bartolomé Muñoz, Escribano de Gobierno del Consejo, en la que relataba lo sucedido aquel día:

"Hoy, 4 de junio de 1.814, siendo la hora de las 9 de la mañana, vino a mi casa don Manuel González, criado mayor del Escribano don Pedro de Alcántara Toledo, Duque del Infantado, Caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, Grande de España de Primera Clase, Teniente General de los Reales Ejércitos, Coronel de las Reales Guardias Españolas, manifestándome que en la noche de ayer 3 había recibido el expresado Excmo. Sr. un Real Decreto de S.M. en que servía nombrarle Presidente del

Ocupaban todos ellos estos mismo destinos en el año 1.808.
5) Escribanía de Cámara de don José de Ayala: oficial primero, don Dionisio Antonio del Campo; oficial segundo, don Pedro Antonio Echevarría; oficial tercero don Manuel Jofre de Villegas. Durante la ausencia de don Manuel Jofre de Villegas cubría su plaza don Joaquín Fanjul, que había sido oficial tercero de una de las Escribanías del Consejo en Cádiz.

6) Escribanía de Cámara de don Manuel Pico Santisteban: oficial primero, don Florentín Yanguas; oficial segundo, don Tomás Payo Sanz; oficial tercero don Francisco Izquierdo y Ansaldo. Don Francisco Izquierdo sirvió en Cádiz de oficial segundo en una de las Escribanías de Cámara del Consejo.

7) Escribanía de Cámara de don Valentín Pinilla: oficial primero, don Rafael Yarza; oficial segundo, don Clemente Reboles; oficial tercero, don Tomás de Velandía. Don Tomás de Velandía fue oficial tercero en una de las Escribanías del Consejo en Cádiz, por hallarse sirviendo de oficial en el Ejército don Isidro Rexo Peñuelas, que era oficial tercero en 1.808.

8) Escribanía de Cámara vacante por fallecimiento de don Manuel de Peñarredonda: oficial primero, don Antonio Martínez Martín; oficial segundo, don Julián Sandalio Aguado; oficial tercero, don Vitores Vicario Jorge. Don Julián Sandalio sirvió en Cádiz de oficial primero en una de las Escribanías. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

Este Consejo fue constituido por Real Decreto de 5 de junio (A.H.N., Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 5.045).

Consejo, previniéndola que tomase la posesión en este día y que debiendo el Consejo dar principio a sus funciones, en este día concurriese yo inmediatamente con los demás subalternos, avisándoles a este efecto.

Así lo hice y a las 9:30 de la mañana se juntaron en las Casa de los Consejos todos los Sres. que se expresarian, y habiendo llegado S.E., salió a recibirle el Consejo a la puerta de la Sala Primera, y entrando en ella quedaron a puerta cerrada hasta las doce y media de la mañana, a cuya hora se me llamó, y entregaron para publicarlos un ejemplar del Real Decreto de 27 de mayo próximo en que se establece el Consejo Real. El original escrito y firmado de la Real mano de S.M. nombrando a S.E. Presidente del Consejo y una Real Orden comunicada por el Escribano Sr. Don Pedro Macanoz, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia, en que particiopa los Sres. Ministros que han de componer el Consejo, a cuya continuación se había puesto el Decreto que precede a esta nota, habilitándome para la publicación y ejecución de esta orden.

Antes de que se verificase mandó el Consejo se abriese la puerta y llamase a los subalternos de él, y permitiese la entrada a los concurrentes, como así se hizo, y a presencia de todos leí los citados Real Decreto y Orden, y el Sr. Presidente tomó el de su nombramiento, y le besó y puso sobre su cabeza y, enseguida, despejada la Sala, se proveyó el Decreto que va a continuación

(...)

El Sr. Presidente besó y puso sobre su cabeza el referido Real Decreto del día 3; y el Consejo acordó que con inserción de todo se expida la Real Cédula correspondiente la cual se imprima y circule en la forma acostumbrada. Y por ahora se habilita a todos los Escribanos de Gobierno y Cámara, Relatores, Agentes Fiscales y demás subalternos del Consejo que no tengan tacha legal según el estado que tenía en 1.808, para que ejerzan sus oficios y ocupaciones, y para los que faltaren se habilita con la misma calidad de por ahora a los Escribanos de Cámara, Relatores, Agentes Fiscales y Porteros que sirvieron al Consejo en la Ciudad de Cádiz, conforme a su antigüedad. Póngase en noticia de S.M. por medio de S.E. el Sr. Presidente, para su Real aprobación, acompañando lista de todos los empleados que existían en el año 1.808, expresando los que de ellos han fallecido o hubieren tomado otro

destino. E igual lista se forme de los Escribanos de Cámara, Relatores, Agentes Fiscales y Porteros sirvieron al Consejo en la ciudad de Cádiz...¹⁰⁰⁰.

En su reunión del mismo día 4 el Consejo acordó pedir permiso al Rey para besar en cuerpo su Real mano y las de SS.AA. Fue para ello mismo convocada reunión al día siguiente, a las 9 en la Casa de los Consejos. Seguidamente, y en acción de gracias por el restablecimiento del Rey y del Supremo Tribunal, el Consejo de Castilla había convocado un Te Deum solemne en la cercana parroquia de Santa María, a las 9:30 de la mañana. El Besamanos quedó fijado para las 12:00 de la mañana en el Palacio Real.¹⁰⁰¹

También el mismo día 4 de junio el Consejo elevaba consulta a S.M.¹⁰⁰². En ella, el Consejo reconocía que había padecido grandes tribulaciones durante la cautividad del Rey, "pero cumplida ya la esperanza que jamás le abandonó de verle restituido al Trono de sus Padres, la lealtad y amor que constantemente han profesado sus Ministros a V.R.P. han recibido un premio muy superior a su merecimiento. No hay cláusula en el Real Decreto que no les llene de gloria ni que deje de obligarles a sacrificar, si fuera menester, su vida de V.M. y la prosperidad de sus vastos reinos y señoríos..." El Consejo agradecía efusivamente las honras con que el Rey acababa de distinguirles y muy especialmente el reconocimiento regio, tras los duros momentos pasados por el Consejo de Castilla.¹⁰⁰³

Evidentemente Fernando VII buscó en el Consejo de Castilla un firme apoyo para su política, como ya lo manifestara en marzo de 1808, al comenzar su reinado. El Consejo era pieza clave en el organigrama institucional de la Monarquía. Por sus amplias competencias dominando el Consejo se podía controlar amplios sectores del gobierno y

¹⁰⁰⁰. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46. También se extendía a los Escribanos de Cámara y demás subalternos del Consejo, así como a los del Tribunal Supremo de Justicia.

¹⁰⁰¹. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

¹⁰⁰². Fue publicada el 9 de junio de 1.814.

¹⁰⁰³. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6.120 núm.1: "El 4 de junio de 1.814 se pasó a la Secretaría de la Presidencia consulta manifestando a S.M. los sentimientos que ocupaban al Consejo de reconocimiento y celo por su Real Servicio al verse restablecido en el pie que tenía el año de 1.808 por los Decretos que S.M. había tenido a bien comunicarle."

la administración de justicia en estos Reinos.

Tendría así el Monarca en el periodo 1814-1820 muchos detalles con este Consejo. El primero de todos - aparte del propio restablecimiento del Supremo Tribunal-, fue una visita sorpresa al Palacio de los Consejos el 6 de julio de 1814. Aquel día, estando reunido el Consejo en el salón de procuradores, se dio la voz que el Rey había entrado con su carroza en el zaguán de la Casa de los Consejos. Así continuaba su relato una minuta de aquel día:

"Al instante salieron a recibirle todos los Ministros y subalternos, lo que se verificó en el patio antes de esa Sala (La de Procuradores).

Acompañado de todos entró S.M. en la Sala primera de Gobierno en la que se quedó solo con el Consejo pleno y estuvieron un buen rato reunidos allí"".

De esta manera, el Consejo Real volvía a entender como cuerpo consultivo, como tribunal y como autoridad gubernativa en toda clase de asuntos de la

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 1. En su discurso de recepción, Infantado manifestó cómo el Consejo Real se encontraba honrado tanto por la presencia del Rey, como por sus deseos de felicidad para toda la Nación. Añadió el Duque-Presidente: "...Se confirmará en la lustrísima idea que tiene formada de muchos años a esta parte de lo que más de una vez dijo con efusión de mi corazón el Augusto Abuelo de V.M., a saber, es que V.M. sería otro santo Rey Fernando: en su razón, quien será capaz de calcular la felicidad que se prometerán los vasallos de V.M. de sus constantes desvelos... El Consejo desearía que se repitiese este glorioso suceso..." (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.120, consulta del 7 de julio de 1.814). El Consejo en memoria de esta visita mandó colocar una placa conmemorativa en la Sala primera de Gobierno. No sería ésta, sin embargo, la única visita del Rey al Consejo aquel año. El 27 de agosto se presentó el Monarca nuevamente y de incógnito. Aquel día se encontraba reunido el Consejo para recibir juramento del Ministro don Francisco Marín. "Siendo las ocho y cuarto entró el rey de incógnito acompañado del Marqués de Castelflorido. Subió al estrado y ocupó el primer lugar, a sus dos lados el Presidente y el Decano. Todos los subalternos se retiraron y quedó solo el Rey con el Consejo. Se practicó el juramento previsto con presencia de subalternos y público. Seguidamente de nuevo quedaron solos S.M. y el Consejo. El Rey estuvo en él dos horas para dirigirse seguidamente a pie a Palacio" (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 1).

Monarquía""", aunque como señala Fontana, pudo haber desde ahora una paulatina sustitución de la importancia decisiva de los Consejos, y concretamente del Consejo Real, por un gobierno más personalista del Monarca"". En esta línea se explicaría también el recorte del radio de acción de la Secretaría de la Presidencia del Consejo de Castilla.

3. Instalación del Supremo Tribunal. Primeras medidas del Consejo

Tras dos años de inactividad, a lo que se añadían los complejos años de la Guerra de la Independencia, las primeras disposiciones del Consejo de Castilla iban orientadas a la reorganización y puesta a punto de la institución.

Curiosamente una de las primeras medidas del Consejo de Castilla fue la localización de la causa formada por las Cortes a 14 Ministros del Supremo Tribunal. El 2 de julio Infantado escribía al Secretario de Gracia y Justicia, Macanaz, solicitando la causa original, con el fin de rehabilitar la fama de este Consejo. He aquí el texto de la carta del Duque-Presidente:

"El Consejo que en la amarga ausencia de S.M. se ha visto atacado reiteradamente en su opinión hasta el extremo de haberle formado causa, y presentándole a la faz de la Nación como criminal, desea vindicarse y que no quede para lo sucesivo la más leve duda ni sospecha sobre su legal e irreprochable conducta en todas las épocas de este interregno desgraciado, a cuyo fin, y necesitando tener a la vista la causa original que se le formó en Cádiz, espero que V.E. lo hará presente a S.M. para que se digne mandar, si lo tuviere por conveniente,

""". FONTANA, J., "La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833", pág. 118. Fontana cita un conocido texto de Mesonero Romanos, en "Memorias de un setentón", B.A.E., núm. 203, pág. 86.

"". FONTANA, J., op. cit., págs. 136 y 137.

que con el objeto expresado se busque y pase al Consejo íntegra esta Causa, como lo espera de la Real benignidad y justicia. 2 de julio de 1814****.

Más adelante, Don Bartolomé Muñoz presentaría el 31 de octubre una exposición resumiendo las principales necesidades del Consejo. De esta manera el Consejo aprobó entonces una serie de medidas urgentes: "1. Que los procuradores de los Consejos entreguen los autos que tenían tomados al tiempo de la invasión francesa de las respectivas Escribanías de Cámara y Gobierno de Castilla y Aragón, formando inventarios de los que falten; 2. Lo mismo en lo referente a papeles en que quedaron en las casas de los Ministros, Fiscales, sus Agentes y cualesquiera otros***; 3. Entrega de papeles recogidos por Muñoz a cada departamento; 4. Nombramiento por el Sr. Juez de Ministros de dependientes y subalternos necesarios para reconocer, inventariar y clasificar los negocios gubernativos que pendían en la Junta de Negocios Contenciosos formada por el Gobierno Intruso, y demás asuntos existentes en las Escribanías; 5. El Sr. Juez de Ministros acordará la preferencia y orden con que los Relatores y Escribanos de Cámara deban hacer presente al Consejo según su clase y naturaleza el estado respectivo de los negocios; 6. Se remitan a otros Consejos papeles recogidos por don Bartolomé Muñoz; 7. El Sr. Ministro señalará los subalternos que juzgue necesarios para que concluya el recogimiento de papeles de las Secretarías de Despacho Universal; 8. Junta de Secuestros: se examine si entre los papeles secuestrados se hallan algunos pertenecientes al Gobierno o a la dotación o dependencia del Consejo; 9. Pídase a los Jefes Políticos o sus representantes expedientes, papeles y demás pasados a ellos; 10. Comuníquese oficio por el mismo Sr. Juez de Ministros al Sr. Decano del Tribunal Supremo de Justicia para que se devuelvan los libros comprehensivos de las consultas del Consejo que se entregaron a su Ilma. y los expedientes, autos y papeles pasados por don Bartolomé Muñoz a don Segundo García Cid, Escribano de Cámara del mismo

****. El 9 de julio recibía Infantado una comunicación en los siguientes términos: "Cumpliendo con una Real Orden que me ha comunicado el Sr. Don Pedro Macanaz, paso a manos de V.E. la causa formada en Cádiz contra varios Ministros del Consejo Real. Dios guarde a V.E. ms. as. Madrid 9 de julio de 1814. Excmo. Sr. Presidente del Consejo". (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 6).

****. El legajo 3.026, expediente núm. 47 del A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, recoge las medidas tomadas en 1.814 para reconstruir el Archivo del Consejo en la parte correspondiente al periodo 1.808-1.814. Y el mismo legajo, expediente núm. 39 informa sobre lo ocurrido con los asuntos y papeles del Consejo durante la Invasión Francesa {ver ESTRUCTURA ORGANICA, ARCHIVO}.

Tribunal; 11. Pídase a la Diputación Provincial efectos, libros y enseres que se sacaron bajo recibo de los pertenecientes a los estrados del Consejo; 12. Por medio de oficio del Sr. Duque Presidente se hará presente a S.M. lo conveniente que será se remitan al Consejo la copia de la Causa de El Escorial y los expedientes que expone don Bartolomé Muñoz¹⁰²².

Por otro lado, el Consejo asumió los expedientes tramitados por el Supremo Tribunal de Justicia¹⁰²³ y comenzó el despacho ordinario de los cada vez más numerosos expedientes de su competencia que iban llegando a su conocimiento.

El día 5 de junio, después de la celebración en la iglesia de Santa María se pasó sin ceremonia al Real Palacio. La ceremonia del Besamanos tuvo lugar, según lo previsto, a las 12 del mediodía. Así la relataba la minuta oficial levantada por el Escribano de Gobierno Bartolomé Muñoz:

"Habiéndose congregado en Palacio el Consejo con el Presidente, después de celebrada la Corte, estando S.M. sentado y acompañado de los jefes de su Real Casa, Grandes y mayordomos de Semana en sus respectivas filas y graduaciones, recibió al Consejo, presidiéndole S.E. quien hizo una arenga propia de su sabiduría y análoga al objeto a que se dirigía, y concluida besó S.E. la Real mano de S.M. y enseguida lo hicieron todos los Sres. del Consejo por el orden de su antigüedad, nombrándolos S.E. por una lista que llevó al efecto, y lo mismo los Alcaldes de Corte y los dos Escribanos de Gobierno"¹⁰²⁴.

Concluida esta ceremonia pasó el Presidente con el Consejo y la Sala a besar la mano de los Infantes Don Carlos y Don Antonio, con lo que concluyó el acto. Era ésta por tanto la primera vez que el Consejo de Castilla cumplimentaba a Fernando VII tras su restablecimiento en el Trono de España.

Al día siguiente hubo un nuevo acto en el Palacio de los Consejos. Aquel día fue reunido todo el Consejo y se dio lectura a la Real Orden nombrando a los Ministros del Supremo Tribunal. De ellos, dos Consejeros los eran por primera vez -don José Antonio Larrúmbide y don Luis

¹⁰²². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 47; también legajo 3.133 núm. 5

¹⁰²³. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, expediente núm. 40, "Lista de asuntos a cargo del Supremo Tribunal de Justicia".

¹⁰²⁴. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

Meléndez Bruna-, y otros dos eran Fiscales del Consejo en 1.808 -don Nicolás María de Sierra y don Jerónimo José Díez-. A los cuatro les fue por tanto tomado el preceptivo juramento^{***}. Por otro lado, al no haberse nombrado por la Real Orden de 3 de junio a los que habrían de ser los nuevos Fiscales del Consejo, se acordó un nuevo Real Decreto por el que se habilitaba para desempeñar esta función a los susodichos Sres. Sierra, Larrumbide y Meléndez Bruna^{***}.

Aquel mismo día el Consejo acordaba también que vinieran al día siguiente a prestar el debido juramento los Alcaldes de Corte que no tuvieran título. Finalmente consta entre la documentación del Consejo que aquel día también fue habilitado don José Toledo para el puesto de Tasador General de Pleitos, "y sin perjuicio de lo que se acordare, ejecute las tasaciones y entre a jurar"^{***}. Y para el puesto de Teniente Canciller Mayor y Registrador del Sello Real de Castilla fue habilitado y nombrado don Fernando Iturmendi^{***}.

También por Decreto del Consejo pleno de 11 de junio de 1.814 se mandaba que los Escribanos de Cámara que sirvieron en él en Cádiz y en el Tribunal Supremo de Justicia, formasen con toda la brevedad posible la lista de los negocios que tuviesen en sus respectivos oficios^{***}.

^{***}. También se previno que cuando fuera establecido el Tribunal que debía expedir los títulos correspondientes unos y otros debían sacar sus títulos.

^{***}. A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46. También se pasó aviso a los Agentes Fiscales para que se presentasen a despachar con ellos los asuntos que se fueran presentando.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46. Al parecer, finalmente no prestó tal juramento porque lo había hecho ya antes de la invasión francesa, pues ya ocupaba la plaza de Tasador General de Pleitos en 1.808. Ver ESTRUCTURA ORGANICA, TASADOR GENERAL DE PLEITOS.

^{***}. Pues había fallecido durante la Guerra el que fuera titular de esta oficina en 1.808, don José Alegre, (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 47: "Madrid, 11 de junio de 1.814. en cumplimiento de lo resuelto por S.M. en su Real Decreto de 27 de mayo último y acordado en su virtud por el Consejo, los Escribanos de Cámara que sirvieron en él en la ciudad de Cádiz y en el Supremo Tribunal de Justicia formen con toda brevedad posible lista de los negocios que tuvieren en sus respectivos oficios, con expresión de su estado y la distinción de los que se le hubieren pasado de los pertenecientes al Consejo y por los Ministerios y jueces; y hecho remitan las mismas

Días después, el 17 de junio se pasó nueva consulta al Monarca, en la que el Consejo cumplía con lo mandado en la Real Orden de 3 de junio relativa a que se llevase a efecto el Real Decreto de 4 de mayo reponiendo las cosas al estado que tenían en aquella fecha. En ella proponía el Consejo su dictamen¹⁰⁰³. Era sin duda un largo estudio en el que por un lado, intentaba el Consejo reponer las cosas a la situación anterior al advenimiento del sistema constitucional; y por otro reflejaba muy bien el pensamiento del Consejo en aquel momento. En este expediente hemos de distinguir dos partes importantes y bien diferenciadas: el dictamen de los Fiscales, y la propiamente dicha consulta o resolución del Consejo.

Según los Fiscales, había que restablecer las antiguas instituciones y no deben continuar las autoridades, corporaciones y jurisdicciones constitucionales, a quienes se podía considerar como verdaderos criminales en su mayoría. Concretamente debían cesar las Diputaciones Provinciales y los jueces de primera instancia o letrados de partido. Debían ser repuestos los corregidores y alcaldes mayores, y los alcaldes ordinarios debían recuperar el estado que tenían a principios de 1.808.

Continuaban los Fiscales proponiendo que las Audiencias y Chancillerías recuperaran las facultades que tenían antes del sistema constitucional, y que fueran purgados de los tribunales de Justicia todos aquellos sujetos que desmerecieran la aceptación pública.

En lo referente a la libertad de imprenta, aunque ya abolida por el Decreto de 4 de mayo, proponían los Fiscales actuar contra la llamada Junta Suprema de Censura y contra las demás llamadas de Provincia.

El Consejo por su parte en la consulta no se ajustó en todo a la opinión de sus Fiscales. Proponía que hasta que se hiciera una propuesta más detenida, continuaran en los Ayuntamientos los sujetos que entonces los componían¹⁰⁰⁴, pero con dos precisiones: que no pudieran ejercer otras funciones que las que les competían en 1.808; y que fueran borrados de los libros de los Ayuntamientos las

listas al presente Secretario para que las haga presentes." Fueron pasados los oficios en el mismo día 11 de junio.

¹⁰⁰³. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6.120 núm.3.

¹⁰⁰⁴. "...Quedarán algunos sujetos poco dignos de la confianza de V.M. y aún de los pueblos: pero hay en lo político ciertos males que conviene disimular para evitar otros mayores..." (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 17 de junio de 1.814).

actas de las elecciones constitucionales y se subrogase el decreto de la habilitación interina mencionada.

También estaba conforme el parecer del Consejo a que los jueces de primera instancia y de partido continuasen por el momento con el nombre de alcaldes mayores y corregidores, según los casos. Y los pueblos que sólo tuviesen alcaldes ordinarios, recuperasen esta categoría. También propuganaba el Consejo que las Audiencias y Chancillerías volviesen al estado en que se encontraban en 1.808.

En lo referente a las Diputaciones Provinciales afirmaba el Consejo de Castilla que eran "la más popular de todas las instituciones modernas, y las facultades que se les concedieron tienen tanta extensión que apenas hay ramo alguno de la administración económica de los pueblos en que no debiesen intervenir más o menos directamente. Su subsistencia no es compatible con el sistema de nuestras sabias leyes, con el bien público ni con el ejercicio de las funciones en que V.M. se ha dignado restablecer a su Consejo"¹⁰⁰⁰. Continuaba proponiendo el Supremo Tribunal la supresión de estas instituciones y la remisión de sus archivos al Consejo de Castilla para darles el destino que procediese"¹⁰⁰⁰.

Sobre la libertad de imprenta, la opinión del Consejo de Castilla se ajustaba plenamente a la expuesta por los Fiscales. Tras quejarse de los abusos que había habido en esta materia, daba el Consejo su parecer: "El Consejo entiende que pues ha tenido V.M. la bondad de restablecer al Consejo en todas las funciones que le estaban encargadas por las leyes, entre las cuales ocupa un lugar muy señalado la referente a la impresión de libros y papeles, podrá servirse también reintegrarle en ella para que pueda ejercerla en el modo que lo hacía antes de la novedad causada en los últimos tiempos del Reinado de Carlos III; aboliendo además por Decreto las Juntas de Censura establecidas por las Cortes Extraordinarias y estimando lo propuesto por los Ministros Fiscales sobre los papeles que existan en ellas"¹⁰⁰⁰.

Conservamos la respuesta textual que el Rey Fernando VII dio a esta consulta del Consejo de Castilla:

¹⁰⁰⁰. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 17 de junio de 1.814.

¹⁰⁰⁰. Hay evidencias de que esta orden fue ejecutada. En la documentación de la Sala de Gobierno del Consejo, correspondiente al periodo 1814-1820 aparecen unos cuantos legajos con documentos pertenecientes a las extinguidas Diputaciones Provinciales.

¹⁰⁰⁰. A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 17 de junio de 1.814.

"Quedo muy satisfecho del celo que el Consejo me manifiesta en esta Consulta. Como parece. En cuanto al tercer punto entiéndase por ahora; y en cuanto al quinto, que se ocupen y remitan al Consejo todos los papeles que existan en la Junta de Censura y en las Provinciales; y sobre la libertad de imprenta me reservo proveer más adelante"¹⁰⁴¹.

El 18 de junio el Presidente del Consejo remitía al Ministro de la Guerra un oficio inquiriendo el nombre de los capitanes y comandantes generales del Reino para la remisión de circulares¹⁰⁴².

4. El problema de los subalternos del Consejo en Cádiz y del Tribunal de Justicia. Las purificaciones en el Consejo.

Pronto llegaron al Consejo instancias de algunos subalternos del Consejo reunido y del Tribunal Supremo que veían ahora perdidas sus plazas, como consecuencia del restablecimiento del Consejo de Castilla. El Real Decreto de 4 de junio de 1.814 daba preferencia a los subalternos que servían al Consejo en 1.808 y a los posteriores según su antigüedad y sin tacha legal¹⁰⁴³. Así,

¹⁰⁴¹. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 17 de junio de 1.814.

¹⁰⁴². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.031 núm. 19.

¹⁰⁴³. Hubo también purificaciones de subalternos del Consejo. Una de ellas fue la de don Vitores Vicario, oficial tercero de la Escribanía de Cámara de don Segundo García Cid. Fue suspendido en su destino a consecuencia de la prestación que hizo al remate de unas casas pequeñas que existían en Valdemoro y que se habían subastado en la Corte en tiempos de la dominación francesa. Vicario fue suspendido por el Rey según dictamen de la Comisión de Purificación relativo a algunos subalternos del Consejo. Tras la presentación del correspondiente recurso, fue finalmente absuelto y rehabilitado. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090 núm. 64).

subalternos de grado inferior habían subido rápidamente en el escalafón, al estar vacantes muchos puestos superiores. Y ahora muchos de ellos se veían nuevamente relegados a puestos inferiores a los que servían en Cádiz o en el Tribunal Supremo. Y por otro lado, muchos que habían ingresado por primera vez con el Consejo en Cádiz o con el Supremo Tribunal de Justicia, ahora se encontraban sin plaza.

A ello se sumaba la agravante de que aquellos que se quedaron en Madrid sirviendo al Gobierno intruso, estuvieran ahora por delante en el escalafón. Por otro lado, también llegaron protestas al Consejo por incumplimiento del citado Real decreto, ya que en algún caso se había dado destino a gente más moderna frente a sujetos más antiguos en el escalafón¹⁰⁰⁰.

A mediados de julio de 1814 se empezaron a tomar medidas contra la provisionalidad y comenzaron las purificaciones. El 19 de este mes, por Real Orden del Consejo pleno se mandaban hacer las primeras purificaciones dentro del Consejo:

"Hágase saber a todos los subalternos que servían en el año de 1.808 en el Consejo y se hallan habilitados interinamente, acrediten su purificación en el preciso término de un mes, a cuyo fin la activen ante los Sres. Ministros encargados de esta Comisión. Dígase al Escribano de Cámara don José Ayala y demás habilitados interinamente que se hallan ausentes, se presenten al mismo término con apercibimiento, que pasados se darán por vacantes sus destinos. Hágase saber a los actuales Escribanos de Cámara no despachen los asuntos de otros compañeros sin expresa orden de habilitación"¹⁰⁰¹.

¹⁰⁰⁰. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

¹⁰⁰¹. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46. Concretamente los subalternos del Consejo que debían someterse a purificación eran los siguientes: el Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz; el Escribano de Cámara y de Gobierno de la Corona de Aragón don Manuel de Santisteban; los Escribanos de Cámara don Manuel de Carranza, don Manuel Pico Santisteban y don Valentín Pinilla; los Relatores don Manuel Viergol y don Vicente Pedrosa; los oficiales de las Escribanías de Cámara de Gobierno y de Justicia de Muñoz, don Damián Juárez, don Manuel Sande, don Rafael Díez Vega, don Cosme Miguel García, don Francisco Poza y don Antonio Merendón; los oficiales de la Escribanía de Cámara de Santisteban, don Pedro Zabala y don Santiago Rero Peñuelas; los oficiales de la Escribanía de Cámara de Carranza, don

El 5 de abril de 1.815 se publicaba por el Consejo una Real Orden por la que se rehabilitaban y reponía en sus empleos a los subalternos del Consejo que ya detentaban sus plazas en 1.808. En la Real Resolución de fecha 30 de marzo ya se había especificado que el haber servido en la Junta de Negocios Contenciosos, y especialmente en lo referente a los dos Escribanos de Gobierno, no debía perjudicarles en su buena opinión y concepto^{***}.

Finalmente mencionaremos aquí un asunto relativo a un Consejero de Castilla jubilado. El 13 de mayo de 1817 el ex-Consejero, don Pascual Quílez y Talón, era objeto de una consulta del Consejo al Rey. En ella el mismo Consejo de Castilla pedía la reposición de este Consejero en

Juan Aguado, don Francisco García y don Manuel Salvador Carranza; el oficial de la Escribanía de Cámara de Ayala don Pedro Antonio Echevarría; los oficiales de la Escribanía de Cámara de Pico, don Florentín Zanguas y don Tomás Payo Sanz; los oficiales de la Escribanía de Cámara de Pinilla, don Rafael de Larza y don Clemente Reboles; los oficiales de la Escribanía de Cámara que ocupaba hasta poco antes Peñarredonda, don Antonio Martínez Martín y don Vitores Vicario Jorge; otros empleados que debieron someterse a purificación fueron varios porteros: don Antonio Regidor, don Matías Fernández del Pato, don Gregorio Antonio Escobar, don Antonio José García, don Julián Pastor y don Santiago Domínguez; los Agentes Fiscales don Juan Pedro Delgado, don Antonio Alfaro, don José Ruiz Barriopedro y don Vicente Ramón de Vigo; el archivero don Miguel Ramírez y el mozo de estrados don Pedro José Cadanes.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 núm. 38, "Real Orden de 5 de abril de 1.815 por la que se clasifica y rehabilita a los subalternos del Consejo": "...Se rehabilita y se repone en sus empleos que servían en el año de 1.808 a los comprendidos en la primera y segunda clase, y se les da pase el oficio correspondiente para su satisfacción; y que continúen en el ejercicio de dichas plazas o de las que hubiesen optado por nombramiento interino del Consejo. Y a los nombrados par servir interinamente las que estaban vacantes, se les expidan los títulos en la forma ordinaria para su continuación y percibo de los sueldos asignados a sus destinos y entren a hacer juramento correspondiente. Por lo que hace a don Vicente Vicario y don Tomás Payo, los respectivos Escribanos de Cámara les hagan saber las Reales resoluciones de S.M. para los efectos convenientes. Pásele certificación de ella a la Tesorería General y demás oficinas que corresponda para el abono de sueldos desde la instalación del Consejo y demás sucesivos a dichos interesados, y se haga presente en las demás Salas..."

su plaza de Ministro del propio Consejo^{***}.

5. Las causas políticas: La causa a los diputados de las Cortes. La Causa de Canga Argüelles. La cuestión de la amnistía.

El proceso de purificaciones políticas contra los liberales se dio en todos los órdenes del Estado y el Consejo Real y su Sala de Alcaldes participaron activamente en él.

Ya hemos mencionado la detención y procesamiento de autoridades y diputados del periodo liberal. Inicialmente fue creada una Comisión de Policía, de la que ya vimos formaban parte cuatro personas, entre ellas el Consejero de Castilla don Ignacio Martínez de Villela^{***}. Fiscal de esta Comisión de Policía lo era el Fiscal de la Sala de Alcaldes don Antonio Segovia. El 2 de junio al parecer el Monarca animó al Tribunal a remitir las causas ya sentenciadas en cuatro días, lo que la Comisión juzgó del todo imposible^{***}.

El Fiscal de esta Comisión don Antonio Segovia presentó su dictamen el 1 de julio^{***}. Pero al

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.129 núm. 1.

^{***}. MARLIANI, M., "El reinado de Fernando VII", pág. 93. También TORENO, op. cit., tomo V, pág. 547.

^{***}. ARTOLA, M., "La España de Fernando VII", op. cit., pág. 533.

^{***}. "Su conclusión era que los reos habían apetecido una Monarquía moderada, contrarrestando únicamente la soberanía absoluta del Rey" (MARLIANI, M., "El reinado de Fernando VII", pág. 95). Artola abunda más en este punto: A mediados de junio el relator Segovia había elaborado un extenso memorial de cargos (28) que recogía la acusación contra los detenidos: básicamente se les imputaba haber atentado contra la Soberanía del Rey y contra los derechos

parecer hubo de rehacerlo y presentó uno nuevo el día 17, con nuevos cargos contra los procesados. Sin embargo, señala Artola^{***} cómo el 9 de julio había ya entrado la causa en su segunda etapa, al ser trasladado el expediente a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Fueron desglosados los cargos individuales y se tomó declaración a todos los detenidos, según un cuestionario de cuarenta y dos preguntas. Según Artola, la Sala de Alcaldes consultó al Monarca mostrando que no había mérito para sustanciar la causa y pidió la libertad de los presos^{***}.

A principios de septiembre el Rey nombró una Junta extraordinaria a la que llamó Comisión de Estado. Sería la encargada de estudiar la causa. Entre otros miembros figuraban varios ministros del Consejo de Castilla, como don Andrés Lasauca, el Conde del Pinar y el Fiscal de la Sala de Alcaldes don Mateo Zendoquíz^{***}. El 15 de octubre de 1815 fue renovado el Tribunal. Según Marliani^{***}, el diputado Calatrava representó contra tres miembros del Tribunal, Pinar, Lasauca y Mosquera, y éstos presentaron la dimisión. Fueron sustituidos según Artola^{***} por tres Alcaldes de Corte, que según Marliani eran Álvarez

y regalías del Trono, para establecer un gobierno democrático" (ARTOLA, M., "La España de Fernando VII", op. cit., pág. 533).

^{***}. ARTOLA, M., "La España de Fernando VII", op. cit., pág. 533.

^{***}. Afirma Marliani que pasó el expediente a uno de los tribunales ordinarios, que entregó las carpetas al Fiscal de la sala don Mateo Zendoquíz. Descubrió según Marliani las nulidades del sumario y manifestó la imposibilidad de seguir sustanciando la causa si no abarcaba a cuantos diputados habían votado como ellos. "Los jueces cuanto más se internaban en la causa, más desenfadadamente declaraban que nunca se avendrían a revalidar una votación arbitraria, y aún parece que el Tribunal trató de elevar una representación al rey demostrándole la sinrazón y la ilegalidad de la sustanciación entablada contra los diputados. Mas apenas se trasladó aquel dictamen de los jueces, se les quitó arrebatadamente el conocimiento del negocio" (MARLIANI, M., op. cit., pág. 95).

^{***}. MARLIANI, M., op. cit., pág. 96; y ARTOLA, M., "La España de Fernando VII", op. cit., pág. 533; también libro núm. 1.735, Consejos Suprimidos, libro de matrícula de la Secretaría de la Presidencia de Castilla, Real decreto nombrando Fiscal de las Causas de estado a don Matías Zendoquíz.

^{***}. MARLIANI, M., op. cit., pág. 96.

^{***}. ARTOLA, M., op. cit., pág. 533.

de Contreras, Torres-Cónsul y Fernández de Quesada¹⁰⁰⁰. Al parecer Zendoquiz ascendió y dejó también la causa. Artola añade que el 27 de noviembre por Real Orden quedó reducida la Comisión a sólo los Alcaldes de Corte, bajo la Presidencia del Capitán General de Castilla la Nueva¹⁰⁰¹.

Vemos por tanto que al principio fue creada una Comisión especial, aunque en la práctica debía seguirse el procedimiento ordinario de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Como señala Palacio Atard¹⁰⁰², "el planteamiento encerraba una contradicción (...), porque el deseo de Fernando VII era doble: que se siguiera un proceso según las leyes y que se tramitara en breve tiempo. Ante la imposibilidad de hacerlo así, se sacrificó el segundo deseo al primero; es decir, prevaleció el sentido jurídico"¹⁰⁰³. El sistema se demostró así arduo y complicado en sus distintos trámites.

Según Artola, el dictamen de la Comisión de Estado encargada de la causa fue favorable a los procesados¹⁰⁰⁴. Sin embargo, poco después terminó el proceso en virtud de una particular del Rey. El 15 de diciembre de 1.815 el Rey usó de su autoridad política y dictó de motu propio sentencias con penas de prisión o destierro contra cincuenta y un procesados principales. Y más tarde, el 26 de enero del año siguiente, aprobaba un Decreto Conciliatorio por el que se suprimían las comisiones que entendían en las causas criminales, para que se remitieran a los tribunales ordinarios¹⁰⁰⁵.

Otra de las causas importantes que el Consejo

¹⁰⁰⁰. Marliani (op. cit., pág. 96) dice que eran Consejeros de Castilla. Parece que aquí tiene razón Artola, pues por entonces no eran todavía Consejeros de Castilla, aunque pronto lo serían.

¹⁰⁰¹. ARTOLA, M., op. cit., pág. 533; también PALACIO ATARD, V., "La España del siglo XIX", Madrid 1974, pág. 109.

¹⁰⁰². PALACIO ATARD, V., "La España del siglo XIX", págs. 108 y ss.

¹⁰⁰³. PALACIO ATARD, V., "Siete calas en la España liberal", págs. 11 y ss., en "Estudios sobre la España liberal", Anexos de Hispania núm. 4, Madrid 1.973.

¹⁰⁰⁴. ARTOLA, M., op. cit., pág. 533. Marliani por su parte señaló que Zendoquiz y Segovia habían sumariado a los reos y que "pidieron la pena capital contra el Conde de Toreno, García Herreros, Calatrava, Argüelles y Martínez de la Rosa" (MARLIANI, M., op. cit., pág. 96).

¹⁰⁰⁵. PALACIO ATARD, V., "La España del siglo XIX", pág. 109.

de Castilla trató con el Monarca fue la formada a don José Canga Argüelles, quien al parecer en otra época hiciera una ardiente defensa del Consejo en la Junta Suprema de Valencia, en agosto de 1.808. Canga Argüelles había recusado a los Ministros de la Comisión de Causas de Estado que debían juzgarle en el proceso entonces en curso, abierto "por intentar trastornar todo el orden antiguo e introducir y sostener el nuevo establecido por la Constitución"^{***}. Cangas había recusado a varios miembros de la Comisión, algunos de los cuales también eran Consejeros de Castilla: don Mateo Sandoquíz, don Andrés Lasauca y el Conde del Pinar. Alegaba Cangas que Sandoquíz^{***} había apoyado también el sistema constitucional, y que Pinar y Lasauca, como partes agraviadas por las Cortes, no podían ser juez y parte a la vez en esta causa^{***}.

La causa a Canga Argüelles, como la que se

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089 núm. 18.

^{***}. Afirmaba Cangas que el Fiscal don Mateo Sandoquíz le acusaba "grave y criminalmente por haber sido cooperador en cuanto ha estado en mí para sostener el partido de una porción de facciosos cuyas ideas eran las de trastornar el sistema constitucional bajo el cual había sido jurado el Sr. Don Fernando VII..." Por su parte, Cangas alegaba que Sandoquíz había cooperado para introducir y sostener el sistema nuevo de la Constitución. Había dicho a las Cortes el 28 de marzo de 1.812 que hubiera sido de los primeros en manifestarles el entusiasmo patriótico de su corazón, de no haberle detenido la consideración de esperar a ser guiado por el respectivo Supremo Tribunal que le presidía, creyendo que para tan digno objeto ocuparía su firma el lugar correspondiente en las representaciones de los Ministros del Consejo; pero "que no habiendo tenido esta satisfacción, se apresuraba a felicitar al Congreso por la sabia Constitución que acababa de publicarse"..., etc. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089 núm. 18).

^{***}. Sobre Lasauca y el Conde del Pinar afirmaba Canga Argüelles: "éstos en un memorial afirmaron 'haber las Cortes vituperado y arrollado las clases más distinguidas y las corporaciones más respetables, como había sucedido con los Decretos de extinción de los Consejos de Castilla e Indias,..., el procedimiento contra los canónigos de Cádiz y otros de esta naturaleza, que constan en el Diario de sus sesiones'" Cangas afirmaba que "Pinar y Lasauca eran Consejeros de Castilla cuando la extinción de este Supremo Tribunal; fueron comprendidos en ella y en la causa que las Cortes mandaron formar contra esta Corporación; son partes agraviadas y por lo mismo no pueden ser jueces en causas de la naturaleza de la que me sigue formada, entre otros motivos, por las providencias referidas..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089 núm. 18).

hizo a otros conocidos diputados liberales, nos aporta información valiosa. Si todo lo que manifiesta Canga era cierto, habría dentro del seno del Consejo de Castilla diputados claramente colaboracionistas con el Régimen liberal y otros cuya línea política permaneció invariable a lo largo de todo el periodo de la Guerra. Entre el primer grupo se encontraría don Mateo Zendoquiz y don José Vilches, Ministros que ocuparon destacados empleos bajo el gobierno liberal. En el caso de Sandoz, el cambio político parece que fue más radical, ya que pasó de entusiasta liberal, a represor de antiguos diputados liberales. Valga como colofón de esta idea una muestra de algunas de las manifestaciones públicas que hiciera Zendoquiz, según el testimonio de Canga Argüelles:

"¡Feliz el que ha nacido en la época de la opresión para vivir al abrigo de una Constitución liberal!; ¡Dichoso el que ha presenciado las oposiciones e intrigas del Despotismo para verlas holladas y destruidas!; ¡Y una y mil veces dichoso el que ha contribuido a la elección de un Congreso tan solícito del eterno bienestar de sus conciudadanos!; ¡Gloria inmortal a las Cortes Generales y Extraordinarias!; ¡Eterna duración de la Constitución Política de la Monarquía Española! (folios 367 y 368, tomo 12, Diario de las Cortes). El mismo -continuaba afirmando Canga Argüelles- admitió la plaza de la Audiencia Constitucional de Madrid, y en esta calidad sostuvo la Constitución, como puede verse en el expediente impreso que acompaña, seguido a don Manuel Ribacoa, en el cual llamó sabio al sistema de la Constitución, noble y sencillo al estilo de las Cortes, sabia a la Constitución y legítimo al Gobierno establecido por ella (folios 6 y 7)"".

El diputado que profirió estas expresiones en las Cortes, unos meses después formaba parte de tribunales contra diputados liberales por su actuación bajo el Régimen Constitucional.

A lo largo de este periodo se prodigaron también en el Consejo las causas de infidencia. El día 9 estudiaba el Supremo Tribunal ante el Rey una causa contra dos personas acusadas de ser afectas a la Constitución de Cádiz""; la causa contra el vecino de Llerena, don Fernando Figueroa""; o contra el alcalde mayor de Medina de las Torres, don Francisco Javier Campsa, contra el cura

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089 núm. 18.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.080, consulta del 9 de septiembre de 1.817.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.080, consulta del 31 de agosto de 1.817.

párroco y otros individuos de ese pueblo"".

En otro orden de cosas, el Consejo estudió también en los meses de julio y agosto de 1.815 la conducta de las Juntas provinciales. Se trataba de un lado de depurar comportamientos, pero también de premiar en su caso los buenos servicios prestados por estas Juntas. Se concedieron distintivos a los miembros de las Juntas que destacaron por su patriotismo y su servicio a la Patria"". En los años siguientes muchas de estas asambleas provinciales representaron al Consejo alegando méritos y solicitando honores.

En cuanto a la cuestión de la amnistía política, sabemos que Fernando VII cambió de planteamiento pronto en cuanto a lo que a la represión política se refiere. Ya en 1816 la cuestión de la amnistía política se convirtió en una de las grandes cuestiones para el Gobierno. El 29 de mayo se consultaba al Consejo de Castilla acerca de la utilidad pública de una amnistía general o con excepciones. Al parecer y según señala Pintos Vieites, las discusiones fueron muy enconadas. El Consejo de Castilla contestó considerando poco prudente la concesión de tal amnistía, coincidiendo en ello con otros organismos. De esta forma y tras muchas consultas, Fernando VII decidió conceder una amnistía política que excluía a los liberales ya fugados y sentenciados, así como a los que se hallaban presos"". Y por lo tanto afectaba a un limitadísimo número de perseguidos políticos.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.080, consulta del 22 de septiembre de 1.817.

"". Se conservan muchos expedientes con informes, cartas y concesión de honores a miembros de estas Juntas, correspondientes a los años 1.815-1.817: cfr., por ejemplo, A.H.N., Consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.075, consulta del 31 de julio de 1.815 sobre las Juntas Superiores de Soria y Santander; A.H.N., Sala de Gobierno, legajo 3.538, Junta de Cataluña; legajo 3.547, Junta Provincial de Granada; legajo 3.561, Junta de Sevilla; legajo 3.571, Junta de Valencia; legajo 3.461 núm. 39, Junta de Ciudad Rodrigo; legajo 3.463 núm. 10, Junta Superior de Cádiz; legajo 3.471 núm. 19, Junta Superior de Galicia, núm. 21; Junta Superior de Guipúzcoa; núm. 25, Junta Superior de Armamento de Guadalajara; legajo 3.474 núm. 4, Junta Superior de León; legajo 3.477 núm. 31, Junta Superior de Murcia; núm. 32, la Mancha; legajo 3.483, Junta Provincial de Palencia; núm. 50, Junta de Educación o Sociedad Patriótica del País (Ronda); legajo 3.489 núm. 17, Junta Provincial de Salamanca; núm. 18, Soto, Rioja y Alava; etc.

"". FONTANA, J., "La quiebra de la Monarquía Absoluta 1814-1820", págs. 142 y 143.

6. Algunas consultas del Consejo. Consulta sobre la convocatoria de Cortes. Otras consultas.

Tres días después, el 10 de agosto, el Consejo de Castilla recibía una Real Orden^{""}, comunicada por el Secretario de Gracia y Justicia Macanaz, en la que se pedía consulta al Consejo sobre la posibilidad de reunir Cortes, tal y como el Monarca había prometido en su decreto de 4 de mayo dado en Valencia. Al parecer, el Consejo no llegó a consultar sobre este particular y tal Real Orden quedó en el olvido.

Varios autores han especulado sobre el que el

^{""}. He aquí el texto de esta Real Orden, recogido también por BAYO, E.K., en "Historia de la vida...", op. cit., tomo II, págs. 67 y 68: "Por Real Decreto dado en Valencia en 4 de mayo próximo prometió S.M. oír a la Nación junta en Cortes legítimamente congregadas, y con diputados de España e Indias, para restablecer sólida y legítimamente cuanto conviniera al bien del Reino, y que restablecidos el orden y los buenos usos en que ha vivido, y que con acuerdo habían establecido los Reyes Augustos predecesores de S.M., las congregaría lo más pronto posible, y que desde luego se pondría mano en preparar y arreglar lo que mejor pareciese para su convocación. Ya restablecidos los primeros tribunales del Reino, acordado también el restablecimiento de los demás, y dadas providencias en otros ramos de gobierno para que vuelvan al estado en que se hallaban antes de las turbaciones pasadas, parece haber llegado el tiempo en que se trate de la ejecución de esta parte de dicho Real Decreto. Pero este negocio, en el cual tanto conviene el acierto, es de los más arduos y graves que en la actual situación del Estado pueden ocurrir. Conociéndolo así S.M. y deseando proceder en él con la madurez que requiere, y evitar los males que se podrían seguir si en cosa tan importante se cayese en alguna imprudencia o error, ha resuelto oír sobre ello al su Consejo, de cuyo celo y prudencia espera que después de considerar en toda su extensión este negocio, le consulte con el tino y sabiduría que acostumbra cuanto convenga al bien y sosiego de la Nación y de sus súbditos... En Palacio, a 10 de agosto de 1.814. Pedro Macanaz."

Consejo Real archivara la causa. Pintos Vieites afirma que pudieron influir las conspiraciones de Cádiz y Navarra, descubiertas pocos días después¹⁰⁰⁰. Para Bayo por el contrario, el motivo de este olvido era que el Consejo no quería destituirse a sí mismo y por otro lado conocía los verdaderos sentimientos del Rey Fernando y prefirió sepultar el asunto¹⁰⁰¹. El Marqués de Miraflores, por su parte, indicaba también la posibilidad de que esta actitud pudo deberse a indicaciones superiores y el retraso de la consulta fue voluntariamente realizado por el Consejo¹⁰⁰².

Había que introducirse en los entresijos de la política de Fernando VII para conocer los verdaderos motivos de que este asunto quedara suspenso. Evidentemente, una consulta sobre materia tan relevante no pudo caer inadvertidamente en el olvido, sino por motivos serios que lo aconsejaron. Todo indica que esos motivos era la situación política del Reino, cuya falta de estabilidad y el estado de excepción que se vivía en la práctica, impedían una normal convocatoria de Cortes. Así lo había indicado el mismo Monarca en el Decreto de 4 de mayo -como muy bien señala Pintos Vieites¹⁰⁰³-, cuando fijó dos circunstancias para la convocatoria: que pudieran intervenir en las Cortes diputados de España y América, y la de reunirlos luego que se estableciese el orden. Si el orden político estaba confuso, no parecía propicia una convocatoria de Cortes. Lo cierto es que ni siquiera le dio tiempo al Consejo de Castilla a preparar una consulta sobre este tema, cuando realmente hubiera tardado en hacerla unas cuantas semanas. Y que llegó el año 1820 sin que fuera estudiado este importante asunto prometido por el Monarca en la inmediata Restauración.

Hubo otro caso en el que una importante consulta del Consejo de Castilla tampoco tuvo lugar. El 21

¹⁰⁰⁰. PINTOS VIEITES, M.C., "La política de Fernando VII entre 1814 y 1820", pág. 279.

¹⁰⁰¹. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo II, págs. 67 y 68; y 79 y 80. Unos meses después Macanaz fue metido en prisión por orden de Fernando VII. Para Bayo lo que verdaderamente irritó al Monarca fue la insistencia de Macanaz para que el Consejo de Castilla prosiguiese sus trabajos para la reunión de Cortes por estamentos, como se había mandado el 10 de agosto. Macanaz fue sustituido en la Secretaría de Gracia y Justicia por don Tomás Moyano, Consejero de Castilla.

¹⁰⁰². MIRAFLORES, Marqués de, "Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la Revolución de España desde el año 1820 hasta 1823", tomo I, Londres 1834, págs. 20 y 21, citado por DIZ-LOIS, M.C., "El manifiesto de 1814", pág. 167.

¹⁰⁰³. PINTOS VIEITES, M.C., op. cit., pág. 105.

de julio de 1.814 el Rey aprobaba un decreto por el que quedaba restablecida la Inquisición. Previamente había solicitado dictamen del Consejo de Castilla y de otras instituciones, tribunales, autoridades eclesiásticas y establecimientos literarios. El Consejo pasó el asunto a sus Fiscales, pero antes de que fuera realizada la consulta el Monarca decidió restablecer el Santo Oficio¹⁰⁰⁰. No parece por tanto que el Consejo Real participara en esta importante decisión del Monarca.

Por Real Decreto de 30 de junio de 1.814 se encargaba al Consejo que tomando en consideración todos los antecedentes referentes al arreglo y administración de los propios y arbitrios del Reino, se estudiasen las mejoras que pudieran inventirse en este ramo¹⁰⁰¹. Al parecer, en los meses siguientes tras el fin de la Guerra hubo múltiples reclamaciones de particulares, relativas a los ramos de propios, como la provisión y confirmación de empleos en las Contadurías Generales de diversas ciudades, incluida Madrid; la enajenación de fincas durante dominación francesa, etc. De todos estos recursos, unos vinieron directamente al Consejo y otros se le pasaron por el Sr. Presidente y por Real Orden a través de la vía reservada de Gracia y Justicia y de Hacienda.

Todo ello llevó también a poner en cuestión qué autoridad dirigiría con más eficiencia este ramo, que tradicionalmente había correspondido al Consejo de Castilla. Sabemos que hubo en aquellos primeros meses tras la Restauración una fuerte polémica al respecto. El Consejo de Castilla, siguiendo el parecer de sus Fiscales, dictaminó que este ramo debía seguir bajo la tutela del Consejo¹⁰⁰².

Al igual que ésta, el Consejo que presentó al Monarca varias importantes consultas más sobre el estado del Reino. Fernando VII en el Real Decreto de restablecimiento del Consejo de Castilla había pedido a este Tribunal que le propusiera "todo lo demás que convenga al bien y felicidad de mis Reynos, para que vuelva el orden, y lo más prontamente posible se reparen los males que han sufrido..."¹⁰⁰³. Para satisfacer la voluntad real, el 12 de

¹⁰⁰⁰. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo II, págs. 59 y 60.

¹⁰⁰¹. De este expediente dimanó la Real Orden de 22 de agosto de 1.814 sobre el tema (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 4).

¹⁰⁰². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 4.

¹⁰⁰³. Real decreto de Fernando VII restaurando el Consejo Real, Madrid, 1.814, recogido en De DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", documento xxxii,

agosto de 1.814 presentaba el Consejo una nueva consulta al Monarca en la que le proponía una serie de reformas. Algunas, como la extinción de los ayuntamientos constitucionales o de las diputaciones provinciales, no eran nuevas, y las había ya mencionado en su consulta anterior de 17 de junio; otras, sí eran más novedosas, y en general apuntaban a poner las cosas tal como estaban en 1.808. Y con una buena parte de las medidas propuestas, el Consejo intentaba recuperar aquellas competencias que el Supremo Tribunal había visto perder en el periodo constitucional.

Suscintamente, las propuestas de esta consulta del Consejo fueron las siguientes: en lo referente a los ayuntamientos, debían suprimirse los llamados constitucionales y debían restablecerse los antiguos, a los que había que delimitar facultades y obligaciones; en cuanto a los jueces de letras y a los Tribunales Superiores de las provincias, deberían restablecerse éstos tal y como estaban organizados en 1.808; las diputaciones provinciales debían ser disueltas y los negocios y encargos que las Cortes pusieron a su cuidado volverían a tener su curso antiguo; los ayuntamientos, por su parte, quedarían sujetos a los Intendentes, a los Acuerdos de las Audiencias y al Consejo de Castilla en las materias de gobierno y demás que señalasen las leyes.

Propuso también el Consejo medidas para la seguridad del Comercio, de los pueblos y de orden público, incluyendo también algunas para vigilancia de caminos y persecución y castigo de ladrones y malhechores; para fomento de la agricultura propuso el Consejo establecer el ramo de los pósitos tal y como estaba en 1.808; y que los arbitrios de los pueblos o las provincias sirvieran para pagar sus cargas y sufragar sus necesidades sin detrimento especial del público y de los particulares; finalmente propuso también la devolución del gobierno de los propios al Consejo y el restablecimiento de la Contaduría de este ramo¹⁰⁰⁰.

El Rey perdió sin duda una ocasión espléndida de modernizar España. Tras una lamentable Guerra y en una Restauración como la presente debían haber sido introducidas algunas innovaciones tanto en lo económico, como en lo político. Las medidas que anunciaba el Consejo eran de alguna manera un borrón y cuenta nueva sobre las reformas

págs. 164 y 165.

¹⁰⁰⁰. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 12 de agosto de 1.814.

introducidas por las Cortes^{***}. Y, no lo olvidemos, algunas de estas reformas representaban un importante progreso frente a la legislación del Antiguo Régimen. El apasionamiento, las presiones y sobre todo las delicadas circunstancias políticas, sociales y económicas llevaron al Rey a apoyarse en una institución que se convertía en el adalid del Antiguo Régimen. No es que se pueda defender todo lo obrado por las Cortes -que en muchos casos cayó en el apasionamiento de signo contrario-, pero sí que se presentó una buena ocasión para renovar y mejorar muchos aspectos de nuestras leyes^{***}. Curiosamente, el reinado de Fernando VII será un lento pero inexorable reconocimiento de esta realidad, y las reformas irían viniendo pausadamente, y entre convulsiones que pudieron haber sido evitadas.

En todo caso, hay que destacar el papel trascendental representado por el Consejo de Castilla en el rumbo seguido por nuestro gobierno desde 1.814. Ello se desprende de la lectura atenta de estas y otras consultas que fueron presentadas a nuestras máximas autoridades.

Una de las cuestiones más delicadas a resolver en los primeros meses de la Restauración fue la referente a los señoríos. Muchos nobles, en especial de Valencia, reclamaron a Fernando. El Monarca consultó también al respecto al Consejo de Castilla.

S. de Moxó ha estudiado detenidamente esta consulta del Consejo de Castilla^{***}. El monarca remitió al Consejo la cuestión para que fuera estudiada por el Consejo pleno -y no sólo por la Sala de Gobierno que lo tramitaba-. También pidió el monarca que fuera estudiado con audiencia

^{***}. Villa-Urrutia llegaba también a esta consideración (VILLA URRUTIA, "Fernando VII, Rey Constitucional. Historia diplomática de España 1.820-1.823", pág. 174). Para este marqués, la Monarquía restaurada en 1.814 "aspiraba a ser una continuación no interrumpida de la antigua, como si fuera posible borrar del tiempo y dar por no vividos los días y sucesos que mediaron desde que Fernando perdió su cetro en Bayona hasta que volvió a empeñarlo como Rey absoluto en Valencia." En aquellos momentos faltó visión histórica y no se comprendió que los sucesos del periodo 1.808-1.814 habían hecho una mella quizás irreparable en la Monarquía hispánica del Antiguo Régimen y que eran necesarias las reformas. Sin embargo, también es cierto que la Monarquía pasaba momentos muy difíciles: un país devastado, guerra en las Indias, crisis económica, inestabilidad política en el interior. El momento era sin lugar a dudas bastante delicado.

^{***}. Por otro lado, así lo había pedido el propio Monarca en el Real decreto de restablecimiento del Consejo.

^{***}. MOXÓ, S. de, "La disolución del régimen señorial en España", C.S.I.C., Madrid 1965.

de los tres Fiscales. En el primer dictamen de los Fiscales, que fue aceptado por el Consejo en auto de 11 de agosto, se declaró la ausencia de necesidad de presentar los títulos originales del señorío para el cobro de las prestaciones territoriales no abolidas explícitamente por la ley de 1811. Esta resolución suponía el explícito reconocimiento de los derechos solariegos en los antiguos señoríos jurisdiccionales^{***}.

La cuestión sobre los señoríos jurisdiccionales no concluyó aquí, pues en los años siguientes continuarían las reclamaciones tanto de los pueblos como de los señores ante el Consejo de Castilla, donde se sucedieron las actuaciones y asuntos, que se prolongaron incluso hasta las Cortes del Trienio Liberal^{****}.

Sin embargo, la posición del Consejo de Castilla iría evolucionando en los años siguientes hasta posiciones más claras. El 20 de agosto de 1817 un dictamen de sus Fiscales se manifestaba partidario de la no restitución de los derechos jurisdiccionales^{****}. El

^{***}. Según Artola, el Consejo de Castilla elevó consulta al Monarca el 18 de agosto de 1814. En su dictamen, el Consejo mencionaba el elevado número de peticiones que había para que el decreto de agosto de 1.811 fuera derogado. Como muchos pueblos se consideraban ya propietarios de aquellas tierras y daban por abolidos los símbolos del antiguo vasallaje, el Consejo de Castilla se mostró partidario de la aceptación de la legislación de las Cortes. De esta manera según Artola el decreto de 15 de septiembre de 1.814, que seguía literalmente la consulta del Consejo, y suponía el reconocimiento formal de lo dispuesto por las Cortes en 1.811, con la novedad de dejar a cargo de los pueblos el peso de la prueba (ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 215. Parece sin embargo más acertada la opinión de Moxó, cuando afirma que en tal disposición de 15 de septiembre de 1814 se establecía concretamente que los señores jurisdiccionales fueran "reintegrados inmediatamente en la percepción de todas las rentas, frutos, emolumentos, prestaciones y derechos de su señorío territorial y solariego -excepción hecha de los derechos señoriales y exclusivos-, sin que se les obligue a la previa presentación de los títulos originales" (MOXÓ, S., "La disolución del régimen señorial en España", pág. 82 y ss.). Señala también Moxó cómo es significativo que tanto la consulta como el informe fiscal que abstuvieran expresamente de pronunciarse sobre la nulidad del decreto de 6 de agosto de 1811 (op. cit., pág.87).

^{****}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.588 núms. 15 y 16; y MOXÓ, S. de, "La disolución del régimen señorial en España", pág. 88.

^{****}. MOXÓ, S. de, op. cit., págs. 90 y ss.

mencionado dictamen hacía incapié en los inconvenientes y perjuicios que tal reintegro ocasionaría. Reunido el Consejo pleno el 20 de febrero de 1818, el Consejo consultó al Rey. El Monarca aceptó el dictamen del Consejo y se abstuvo de restaurar las jurisdicciones señoriales, y "dejó para más circumspecta decisión el punto de nulidad de la ley de 1811"¹⁰⁰⁰.

7. El Consejo recupera el ramo de propios. Reformas en las competencias del Consejo.

De los aspectos estudiados por la citada consulta del Consejo de 12 de agosto de 1814, hay uno sobre el que incidió especialmente el Supremo Tribunal y que para el estudio de la historia de la institución ofrece un mayor interés. Nos referimos a la dirección y gobierno del ramo de propios del Reino, reclamado ahora por el Consejo de Castilla¹⁰⁰¹.

"El Consejo no podía dispensarse de esta inspección y vigilancia sin faltar gravemente a las generales obligaciones de su instituto y abandonar el gobierno general del Reino que le estaba encargado por las leyes. Tal papel consistía en gran parte en el desinteresado y discreto manejo de las rentas de sus propios y arbitrios

¹⁰⁰⁰. A.H.N., Consejos, legajo 3.588 núm. 16; también MOXÓ, S. de, op. cit., pág. 95. Señala este autor como el principal defensor en el Consejo de esta doctrina fue el Consejero Torres-Cónsul. Otro dato interesante es el hecho de que el Presidente del Consejo de Castilla por aquel entonces fuese el Duque del Infantado, Grande de España y conocido señor territorial. Por los amplios intereses que Infantado tenía en esta resolución, parece prefirió no participar en las votaciones del Consejo pleno sobre esta cuestión (MOXÓ, S. de, op. cit., pág. 83).

¹⁰⁰¹. Tras la supresión del Consejo de Castilla, las nuevas instituciones habían autorizado a los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Jefes Políticos en sus respectivos distritos para presidir la administración y gobierno de los fondos de propios bajo la supervisión de la Secretaría llamada de la Gobernación de la Península.

en su aplicación y destino a los objetos de utilidad y conveniencia pública, y en la obviación de peculados y malversaciones a que estarían expuestos estos fondos si faltase para prevenirlos o castigarlos la vigilancia del Consejo y el poderío de su autoridad respetada en todo el Reino"****. Con estas palabras resumía el propio Consejo su misión al frente del ramo de propios: la suprema inspección y gobierno de todos los bienes conceptuados como bienes propios de los pueblos. Exponía el Consejo las listas de competencias del propio Consejo que se apoyaban económicamente y se sufragaban gracias a las existencias y sobrantes de cada pueblo.

La labor del Consejo de Castilla como supremo director del ramo de propios era explicada en otro expediente por el mismo Consejo****: "Los pueblos afligidos por el hambre, epidemias, langosta, inundaciones, apedreos y otras calamidades públicas acuden a buscar su alivio al Consejo: le manifiestan las necesidades en que se hallan de obras públicas, casas de Ayuntamiento y misericordia, hospitales, iglesias, puentes, calzadas, cárceles y otras oficinas públicas, y en todos estos casos no podría el Consejo proveer a tales gastos si no le fuera dado tener un conocimiento exacto de los propios y arbitrios, y de las existencias y sobrantes en cada pueblo para socorrerlos con proporción a sus facultades. Esto mismo se verificaría en otros varios ramos no menos precisos como son los de asignar salarios a las justicias, a sus ministros, a los médicos, cirujanos, regidores, maestros que se ocupan en la enseñanza pública y otras personas que sirven al común y se emplean en la expedición de los negocios y defensa de sus derechos; concesión, prórroga y extinción de arbitrios y todo lo demás que tiene una íntima conexión con el gobierno de los propios"****.

El Consejo, y los mismos Fiscales en su dictamen, proponía la creación de una oficina independiente como la Contaduría General, a la que estuvieran encomendados con exclusividad los asuntos relativos a propios. Incluso el Consejo sugería restablecer la Contaduría con los oficiales existentes entonces, sin proveer por el momento las vacantes resultantes desde 1.808, a excepción de la de Contador.

Igualmente proponía el Consejo restablecer con toda su fuerza y vigor la observancia de los Reales Decretos, instrucciones y providencias que regían en el año

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta de 12 de agosto de 1.814.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 4.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 4.

1.808, relativas al gobierno, administración y fomento del ramo de propios y arbitrios, tanto en lo gubernativo y económico, como en lo contencioso de sus asuntos y dependencias. Y que volviendo el Consejo al pleno goce de sus competencias"" y habiéndose restablecido la Contaduría a su antigua planta de 1.808, se declarasen nulos todos los decretos y providencias que hubieran emanado de los gobiernos habidos durante la ausencia del Rey.

Hacia también incapié el Supremo Tribunal en que se informara bien a todo el Reino que el Consejo recuperaba estas competencias. Y que quedaban desaprobadas todas las novedades hechas acerca de la dirección, manejo e inversión del producto de estos ramos de propios y arbitrios. Esta última observación era sin duda una petición de respaldo moral por parte del Consejo, cuya autoridad y prestigio habían sufrido graves mermas en el periodo anterior.

A todas estas peticiones contenidas en esta importante consulta del Consejo de Castilla del 12 de agosto, respondió Fernando VII con un simple "Fiat!", "¡Sea así!", con el que quedaba aprobado todo su contenido"". De esta manera, por Real Cédula de 22 de agosto de 1.814 se mandaba volver al Consejo la administración y gobierno de los propios"". El Consejo de Castilla volvía así a dominar los recursos económicos de los pueblos, indispensables para el ejercicio de sus vastas competencias.

El viernes 18 de abril de 1816 una nueva Real Resolución afectaba al Consejo de Castilla: ante la duda planteada sobre el organismo a través del cual debían despacharse los asuntos de Propios, el Rey resolvió: "Es mi

"". Con arreglo a la instrucción de 30 de julio de 1.760 y demás decretos y órdenes posteriores, y con la jurisdicción y facultades que existía en 1.808. (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 12 de agosto de 1.814).

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 12 de agosto de 1.814.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 4; y Colección de Reales Cédulas, núm. 5.099, de 22 de agosto de 1.814, "Real Cédula por la cual se manda volver al Consejo la dirección, gobierno y administración de los propios del Reino, con las facultades y jurisdicción que ejercía en lo contencioso y gubernativo, y se restablece la Contaduría General de este ramo." "Pronto comenzó a ejercer el Consejo este papel directivo: por ejemplo, el 19 de septiembre enviaba circular pidiendo razón del estado de propios, enajenación de fincas, etc., en toda la Península (A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 5.113).

voluntad que los asuntos de Propios se dirijan por el Ministerio de Hacienda. Por otro lado, un documento del Consejo, elaborado por la Contaduría de Propios y Arbitrios y fechado el 4 de enero de 1.816 defendía el parecer de

.... (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 5.). Sin embargo, parece que esta resolución se perdió y no llegó a ser conocida. El expediente que contiene la Real Resolución se encuentra localizado hoy en día en un legajo correspondiente al año 1.823: el 3.994 núm. 5 de Consejos, Sala de Gobierno, A.H.N. En aquellos años debió darse por perdido. En una nota al pie del expediente se afirma lo siguiente: "En 1.816 no se resolvió sobre si se seguía haciendo por el Ministerio de Hacienda según resoluciones de 4 de junio y 17 de noviembre de 1.815. La Consulta en efecto llegó a las Reales Manos el 27 de marzo de 1.816, pero no consta lo que entonces se acordó" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 5; y Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.076, consulta del 29 de marzo de 1.816).

.... A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 4. He aquí el texto completo de este documento, que parece ser un dictamen oficial de la Contaduría de Propios y Arbitrios, probablemente solicitado por el Consejo: "Los ramos de Propios y Arbitrios corresponden a la administración civil de los pueblos. El gobierno económico y gubernativo de los pueblos toca al Consejo, según las leyes, y en los casos que requiere la noticia de S.M., consulta este Supremo Tribunal por el Ministerio de Gracia y Justicia, y por éste se le comunican las Reales Resoluciones. Por la conexión tan íntima que tiene este gobierno económico de los pueblos con el de los ramos de Propios y Arbitrios, se encargó a los pueblos la dirección de éstos, y en unos y otros asuntos se versan negocios puramente de gracia y justicia, y de ningún modo de Real hacienda o Rentas del Reino. Cabalmente a los asuntos de propios unos son de gracia, como señalamientos de salarios a los sirvientes de los mismos pueblos; concesiones de arbitrios donde no hay propios para pagar a dichos sirvientes, y otras cargas concejiles que tienen sobre sí, que se omite su pormenor por no dilatarse este informe, y pueden verse en los reglamentos que les están comunicados, cuyo importe deberían sufrir por repartimiento vecinal; resarcimientos de perjuicios o rebaja en los arrendamientos de sus ramos, y otros diferentes; y de justicia lo son aquéllos que los propios tienen que salir en defensa de sus derechos, bien sean demandantes o demandados, los cuales se ventilan ante los Corregidores o Alcaldes mayores hasta la sentencia definitiva con las apelaciones al Consejo; y también los en que se trata de ocultaciones y malversación de caudales públicos. En efecto, todos los negocios de propios son puramente de gracia o justicia, y si los otros que proceden del gobierno económico de los pueblos de que pertenece su conocimiento al Consejo, han corrido y corren cuando requiere consulta por la Secretaría o Ministerio de

que el Consejo de Castilla debía consultar los asuntos de Propios y Arbitrios a través del Ministerio de Gracia y Justicia. Por ello mismo, es posible que el Consejo de Castilla pudiera propugnar esta solución en la consulta con el Rey¹⁰⁰⁰.

Otra medida que afectó de manera importante a las competencias del Consejo fue la restitución del ramo de pósitos. Por Real Cédula de 7 de agosto se devolvía al Consejo de Castilla el cuidado y la dirección de los pósitos del Reino, que tradicionalmente había correspondido al Consejo Real, y se restablecía la Contaduría General de este ramo según la planta y funciones que ejercía en 1.808¹⁰⁰¹. Sabemos que en el mismo mes ya tomó el Consejo medidas en su papel director de este importante ramo de la Administración¹⁰⁰².

Por otro lado, el 20 de junio de 1814 quedó extinguida la Secretaría de la Gobernación de la Península, que era la principal innovación del sistema administrativo liberal. Esta institución había ejercido parte de las

Gracia y Justicia, ¿por qué no ha de seguirse el mismo orden con respecto a los negocios de Propios y Arbitrios? La Contaduría no halla una razón poderosa para que no sigan una misma carrera ambos negociados. Las rentas o llámase Real Hacienda no tiene la más mínima conexión con la administración de las rentas de los pueblos. Son distintas y separadas enteramente estas dos Haciendas, y para la del Reino está la Secretaría o Ministerio de Hacienda; así como debe estarlo la de Gracia y Justicia para la Hacienda de los pueblos, que son sus propios y arbitrios. Sobre éstos, nada pertenece a la Real Hacienda... Si en un principio se encargó por la Instrucción de 1.760 que el Consejo consultase por la vía de Hacienda, sería quizás porque encargándose en ella también el gobierno de estos ramos en las provincias a los Intendentes, y teniendo éstos el manejo y dirección de las rentas, parecerá tal vez análogo al de los propios y arbitrios. Entonces no se podía tener un conocimiento práctico de estos ramos. Hoy en día se ve que verdaderamente pertenece consultarse los negocios por el Ministerio de Gracia y Justicia... 4 de enero de 1.816."

¹⁰⁰⁰. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 5.

¹⁰⁰¹. A.H.N., Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 5.090. Cfr. entre otros, a BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo II, pág. 61.

¹⁰⁰². Así, por ejemplo, el 30 de agosto aprobaba una circular por la que solicitaba a las Juntas de Pósitos las cuentas pendientes, y daba nuevas normas con el fin de recobrar y aumentar los fondos. (A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 5.102, de 30 de agosto de 1.814).

competencias de gobierno encomendadas a nuestro Consejo Real^{100a}.

Sin embargo, el Consejo Real todavía no había entrado en otra de las peticiones que el Monarca formulaba en el Real Decreto de su restablecimiento: lo relativo a los negocios de su conocimiento que conviniese atribuir a otro organismo. En aquella ocasión se había expresado el Monarca en estos términos:

"Pero al restablecerlo quiero que el Consejo, bien meditadas las plantas que se le dieron en distintos tiempos, y lo que posteriormente por varias resoluciones se le ha encargado, y a cada una de sus Salas, Me proponga con la brevedad posible qué negocios de los que le están atribuidos convenga separar de su conocimiento, para que mis vasallos logren su más pronto y menos costoso despacho, y qué distribución convendría hacer en los atribuidos a cada Sala, para que simultáneamente se ocupen todos en el trabajo sin desigualdad ni atraso; de manera que sea el mi Consejo, como lo espero de su fidelidad, medio por donde se verifiquen mis Reales intenciones del más acertado gobierno de mis súbditos, pronta y recta administración en la justicia, y el adelantamiento en los ramos de pública prosperidad de que le han encargado los Reyes mis predecesores y en que Yo por este mi Real Decreto lo confirmo..."^{101a}.

Este Real mandato fue confirmado por una Real Cédula posterior de 11 de junio de 1.814, en la que el Monarca mandaba que el Consejo le propusiese lo más conveniente para el pronto despacho de los negocios de su dotación^{102a}.

De esta manera, en su reunión del Consejo pleno de 3 de septiembre, de conformidad con las mencionadas Reales disposiciones, el Consejo pleno aprobó un Decreto por el que se creaba una Comisión formada por los Sres. Puig, Torres, Fernández de Campomanes, Cortabarría, Moyano y

^{100a}. ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 214.

^{101a}. Real Decreto de Fernando VII restaurando el Consejo Real. Madrid, 1.814, en DIOS, S. de, "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", documento XXXII, págs. 164 y 165.

^{102a}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a.

sierra. Esta Comisión debía proponer aquellos negocios de la dotación del Consejo de Castilla que pudieran ser despachados más eficazmente por otros tribunales. También debían estudiar un arreglo de competencias entre las Salas del Consejo"".

Da la impresión que la actuación de esta Comisión no fue muy eficiente. Después de varios meses de funcionamiento, todavía no habían sido propuestas estas reformas, de forma que el Rey dictaría en 1815 un importante Decreto haciendo una distribución provisional de competencias. Evidentemente le costaba bastante al Consejo ser él mismo juez y parte en el asunto, decidir sobre la limitación y renuncia de parte de sus propias competencias"". De esta manera, el 1 de agosto de 1.815 la Comisión presentaba un informe aproximativo"".

De esta manera, en la reunión de la Sala primera de Gobierno de 20 de mayo de 1.815 el Consejo se enteró de la Real Resolución de S.M. sobre distribución de competencias del Consejo, de Real Orden de 27 de abril de 1.815. Según esta Real Orden, los cambios propuestos con carácter provisional: los asuntos de la Corona de Aragón debían pasar a la Sala segunda de Gobierno, por ahora y a la espera de lo que consultase el Consejo; la misma Sala segunda conocería también todo lo perteneciente a pósitos del Reino, asistiendo con este fin a esta Sala el Contador General dos días cada semana distintos de los señalados al Contador General de Propios para despachar en la primera; la Sala de Mil y Quinientas conocería los asuntos contenciosos sobre propios y arbitrios del Reino, montes, y sobre la legitimidad de pagos hechos en vales reales; todo ello sin perjuicio de que la Sala de Provincia determinase todos los pleitos radicados en ella, de forma que en lo sucesivo de cada seis asuntos de su atribución, cuatro irían a parar a la Sala de Provincia, el quinto a la de Mil y Quinientas y el sexto a la de Justicia: tanto la Sala de Mil y Quinientas como la de Justicia despacharían estos expedientes por la Sala de Provincia.

El Consejo trató en su reunión de las dificultades que se ofrecían para poner en ejecución lo resuelto por el Rey en cuanto a conocer la Sala segunda de

.... La Comisión estaba autorizada a servirse de un Relator y otros subalternos si lo consideraba preciso. El 27 de septiembre fue nombrado a este fin el Relator don Miguel Cornejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a).

.... A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a.

.... Cfr. A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a.

asistencia en ella, y la que motivó que las declaraciones por las que se ordena la concurrencia de uno de los fiscales a la misma, a fin de que oyéndole in voce, si lo exigiesen los asuntos se eviten dilaciones y atrasos en el curso y despacho de ellos.

Bien sabido es que los que forman la dotación de la Sala primera son todos de la mayor importancia por su generalidad, y por la conexión íntima que entre sí tienen, y es necesaria para afianzar, no sólo la tranquilidad de los pueblos y el buen orden en su gobierno municipal, sino también el que tanto importa y se desea en el interior general del Reino. Para lo cual es indispensable en concepto de los que dicen que la acción parta de un sólo centro: que se regule por la misma mano y que llegue con igual eficacia y por el mismo orden a todos los puntos de la circunferencia. No es fácil que esto suceda si los negocios se dividen como la Real Orden previene y lo peor de todo será que con arreglo a las mismas leyes, con igual espíritu de celo ilustrado por el bien público, no habrá entre las providencias de ambas Salas toda aquella conformidad, que, al paso que contribuye al bien por los mismos medios, evita el descrédito de la autoridad, consiguiendo siempre a la oposición o desigualdad de las resoluciones en iguales casos y en los mismos ramos..."

Como vemos, la filosofía de concentración de poderes propuganada por el Consejo era la típica del sistema de gobierno del Antiguo Régimen. En la mentalidad del Consejo era por tanto lógico que pretendiera esta concentración de poderes. Y por otro lado, influiría también el deseo de no ver a este prestigiosa institución con menos competencias de las que tradicionalmente habían correspondido a su instituto.

Sin embargo, las razones del Consejo para suspender la mencionada Real Orden no satisficieron plenamente al Monarca. El 7 de mayo de 1816 llegaba a conocimiento del Supremo Tribunal "que el Rey deseaba que el Consejo repitiera la Consulta de 8 de agosto pasado, relativa a los motivos que había tenido el Consejo para suspender a la Real Orden que mandaba llevar los asuntos de la Corona de Aragón en Sala segunda"....

Hubo otras muchas reformas en este periodo que afectaron a las competencias del Consejo. Así, tras la consulta del Consejo de 23 de septiembre, fue restablecido por el Rey el Concejo de la Mesta, que nuevamente estaría bajo la presidencia de un Ministro del Consejo de

Castilla"".

Otro sector importante que había sido desgajado del Consejo de Castilla por las Cortes era el de montes de realengo y comunes. El Consejo de Castilla consultó al Rey el 7 de octubre el restablecimiento de las Reales Ordenes de 7 y 12 de diciembre de 1.748 y las demás órdenes que regían para montes de realengo y comunes"". Nuevamente el Monarca accedió a esta petición del Consejo en todos sus puntos y por Real Orden de 13 de septiembre de 1.814 quedaba restablecida la Conservaduría General de Montes, al estado que tenía en 1.808"".

El 5 de enero de 1816 tuvo lugar ya una importante reunión en Consejo pleno. El motivo era la resolución de la consulta, sobre arreglo de negocios entre la Sala primera de Gobierno y las demás del Consejo"". El Supremo Tribunal dictaminó entonces que los asuntos gubernativos debían permanecer en la Sala primera de

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 23 de septiembre de 1.814: así se expresaba el Consejo de Castilla en la consulta: "eleva a la soberana consideración que se digne mandar que se ponga en el lleno de su ejercicio la leyes, privilegios, usos y costumbres contenidas en el Código o Cuaderno de la Mesta, que protegen los ganados y ganaderos de esta Comunidad llamada honrado Concejo de la Mesta: Y que presida las Juntas de Tabla y Estilo y provea lo que conduzca al bien y prosperidad de la Cabaña Real el Ministro del Consejo a quien tocara según lo dispuesto en la citada resolución de 11 de agosto de 1.652 (...), derogando especialmente todos los decretos y cualesquiera órdenes de las llamadas Cortes extraordinarias que sean contrarias a su restablecimiento."

"". En su consulta el Consejo pedía que se declararan nulos de ningún valor ni efecto el Decreto de las Cortes extraordinarias de 14 de enero de 1.812 y leyes posteriores al 18 de marzo de 1.808; que tales leyes se restablecieran con pleno vigor con respecto a montes comunes, realengos, de propios y de dominio particular; y que para que tuviera puntual cumplimiento dicha ordenanza y cédulas posteriores se restablecieran las dos Conservadurías Generales del ramo con la misma jurisdicción y facultades que les estaban concedidas por las leyes y las dos Secretarías de su dependencia en esta Corte. (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 7 de octubre de 1.814).

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 5.110.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.074 núm. 4, consulta del 5 de enero de 1.816.

Gobierno, tanto los correspondientes a la Corona de Aragón como a los demás Reinos de la Monarquía"".

Un Real Decreto de 31 de agosto de 1.815 mandaba formar estados de cada uno de los Ministerios, con ánimo de conocer el número exacto de empleados públicos. Este Real Decreto tiene importancia para nuestro estudio, en cuanto obligará a la formación de completos resúmenes de los estados Consejo de Castilla. Estos informes luego se repetirán anualmente, y nos permitirán conocer con detalle la estructura orgánica del Consejo de Castilla en esos años. Son sin duda un antecedente para la formación de Presupuestos anuales del Consejo"".

"" Se expresaba así el Consejo de Castilla: "...Por lo que el Consejo es de dictamen que no conviene decir el despacho de los negocios gubernativos ni sacarlos de la Sala primera para fijarlos en la segunda, que no sería conforme a la buena política separar los negocios pertenecientes a la Corona de Aragón de la Sala donde se resuelven los demás del Reino, para que de este modo haya uniformidad y sistema, y de consiguiente que la Sala primera continúe como hasta ahora conociendo los asuntos gubernativos de aquella Corona, como también de los que se despachaban por la Contaduría general de Propios, que por su gravedad y trascendencia puedan causar regla general, dándose cuenta enseguida de los que sean de interés privado. Que igualmente continúen las demás Salas despachando los negocios de sus respectivas dotaciones y que se cumpla puntualmente lo prevenido en el referido auto acordado de 4 de agosto de 1.806, usando la Sala primera de la facultad que éste le concede para remitir a las demás los negocios que no sean de su privativa o rigurosa inspección o dotación, cuidando vuestro Presidente del Consejo y respectivamente en sus Salas los que las presiden, de su ejecución, con lo que no duda el Consejo se llenarán los deseos a V.M. en el más pronto despacho de los negocios..." Esta consulta fue aprobada por el Rey y se comunicó en cada una de las cinco Salas del Consejo, a las Contadurías Generales de Propios y Pósitos y al Repartidor de los Negocios del Consejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a). Por otro lado, ese mismo pleno propuso aquel día varios Ministros del Consejo para la formación de la Junta Suprema de Represalias, para conocer lo concerniente al artículo 1 adicional del Tratado de París de 20 de julio de 1.814 (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.074 núm. 19, consultas del 5 de enero de 1.816; legajo 6.076, consulta del 30 de marzo de 1.816; y legajo 6.077, consulta del 5 de junio de 1.816).

"" GARCIA MADARIA, J.M., "Estructura de La Administración Central", págs. 63 y 64. En el Real Decreto de 31 de agosto de 1.815 se mandaba con el más puro de los paternalismos empleado por la Corona, formar en "cada uno de mis Ministerios de Estado y del Despacho" un estado general, expresando los empleados de todas las dependencias "para que

La formación del primer Presupuesto de Sueldos y Gastos del Consejo y de sus Subalternos fue quizás la noticia sobre el Consejo mas relevante del año 1.818. Por el Real Decreto de 30 de mayo de 1.817, en su artículo 1 se establecía que en lo sucesivo cada Ministerio se ajustaría a un Presupuesto fijo, formado considerando las rentas y contribuciones, las posibilidades de los contribuyentes y las verdaderas necesidades del Estado. De esta manera, el Ministerio de Gracia y Justicia recibió Real Orden con fecha 29 de septiembre para formar el Presupuesto correspondiente a este Ministerio para el año 1.819.

Consecuentemente, el Secretario de Gracia y Justicia pidió al Duque del Infantado que sin la menor demora le remitiese "con separación los correspondientes a los Supremos Tribunales del Consejo y Cámara y al Tribunal de la Sala de Alcaldes, con expresión circunstanciada de las diferentes partidas que lo compongan"". Por su parte, el Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz envió escrito al Contador General de Penas de Cámara y Gastos de Justicia del Consejo dando cuenta de esta Real Orden y pidiendo que la Contaduría informase de los sueldos que se abonaban en el Consejo y también de los gastos que tenía el Consejo de Castilla en un quinquenio"".

Por otro lado, las reformas también llegaron a la Sala de Alcaldes. En nueva consulta, de fecha 16 de diciembre, se propuso al Rey dotar a la Sala con un Agente

teniendo una razón exacta de los que en todo mi Reino disfrutan sueldo sin ocupación se emplee en las vacantes a los que se hallen aptos y sean dignos de ser colocados."

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11, 6 de octubre de 1.818. He aquí el texto de esta carta: "El Excmo. Sr. Duque Presidente del Consejo se ha servido comunicarme el oficio que sigue (...)

Publicada en el Consejo la Real Orden contenida en el oficio antecedente, ha acordado su cumplimiento y que la Escribanía de Gobierno, tomando las noticias y conocimientos oportunos forme y remita a S.E. el Presupuesto relativo al Consejo que en ella se previene.

Y lo participo a V.S. de su orden a fin de que así lo ejecute por lo respectivo a la Contaduría General de Propios y Arbitrios a su cargo con la expresión y claridad que S.E. previene, remitiéndome el presupuesto que formare para hacerlo yo a S.E. como se ha servido mandarme...Madrid, 6 de octubre de 1.818."

Fiscal más e incrementar las dotaciones de ambos Agentes"". Por otro lado, el 16 de enero de 1.815 se restablecía el Juzgado de Provincia y su despacho volvía a ser encomendado a los Alcaldes de Corte, tal y como lo hacían en el año de 1.808"". Y poco después, el 25 de enero de 1.815 se atribuía al Decano de la Sala la titularidad del Juzgado de Caza Y Pesca y su veda, como ocurría en 1.808"".

El 18 de noviembre de 1815 la Sala de Alcaldes envió una exposición al Mayordomo de S.M., solicitando que quedasen expeditas las facultades de los Alcaldes, tal y como estaban reconocidas hasta el año 1.808, en lo referente a asistir con sus rondas en Palacio para mantener el orden"". Esta prerrogativa de los Alcaldes fue reconocida también en aquella ocasión.

Como hemos visto, en este primer año de la Restauración las medidas relativas al Consejo se orientaron a restablecer una situación similar a la que tenía el Supremo Tribunal en 1808, salvo los consabidos recortes en las facultades de la Presidencia de Castilla. Sin embargo, para Artola la situación no responderá ya al modelo constitucional del Antiguo Régimen"": "el Consejo de Castilla dejará de ser el centro del proceso legislativo en beneficio de una institución, circunstancialmente potenciada, como el Consejo de Estado, al tiempo que crece la importancia de la acción ministerial y la influencia de la camarilla."

También la autoridad del Supremo Tribunal se encontraba mermada y sometida a revisión. En varias ocasiones tuvo que recordar a las distintas autoridades sus obligaciones con respecto al Consejo de Castilla, olvidadas quizás en parte en algún caso por el tiempo transcurrido y

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 16 de diciembre de 1.814, "Consulta que hizo la Sala de Alcaldes a consecuencia de haber solicitado su Fiscal se aumentase un Agente Fiscal y la dotación de ambos, propone a S.M. su dictamen."

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 5.153, de 16 de enero 1.815.

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas núm. 5.157, de 25 de enero de 1.815.

"". A.G.P., Sección de Fernando VII, legajo 199 núm. 22.

"". ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 214.

los trastornos padecidos por la Nación"". También el día 25 de enero de 1815 y el siguiente 26 el Consejo recordaba a todas las autoridades del Reino su obligación de mantener informado al Presidente del Consejo de las ocurrencias graves, muertes, robos, incendios, epidemias y otras ocurrencias graves"". Por lo que se ve, parece que todavía no había recuperado el Consejo el pleno control del Reino.

El Duque del Infantado continuó todo el periodo al frente del Consejo. Del Presidente de Castilla decía el Ministro inglés Lambd en una ocasión que 'fuera de Infantado y del Infante don Carlos, no había en España quien no se vendiera, incluso el Rey, por un puñado de libras esterlinas'"". Como sabemos, Fernando VII le había conferido este prestigioso destino por Real Decreto de 3 de junio del año anterior"". Por una noticia mencionada en un libro de matrícula de la serie Secretaría de la Presidencia de Castilla sabemos que por el motivo que fuera Infantado puso su cargo de Presidente del Consejo a disposición del Rey en 1815. Esta dimisión presentada quizás por las tensiones políticas del momento, no fue aceptada por el Monarca, quien en Real Orden "dio a S.E. una satisfacción sobre el celo con que desempeña el alto cargo de Presidente del Consejo"."".

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 5.081, de 27 de julio de 1.814, "Circular del Consejo. Recordando a las Autoridades el cumplimiento de sus deberes respecto al Consejo Real, enviando cuenta de las ocurrencias graves."

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núms. 5.159 y 5.160.

"". VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Constitucional", pág. 206.

"". GARCIA MADARIA, J.M., "Estructura de la Administración Central (1.808-1.931)", pág. 61. García Madaria afirmaba que la Presidencia quedó vacante el 31 de marzo y que recaería desde entonces, en defecto de la presencia del propio Monarca, en alguno de los Infantes y tío del Rey.

"". A.H.N., Consejos, libro de matrícula de la Secretaría de la Presidencia de Castilla, núm. 1.735, mesa 1, noviembre de 1815, "Real Orden por Gracia y Justicia dando a S.E. una satisfacción sobre el celo con que desempeña el alto cargo de Presidente del Consejo y no admitiéndole la dimisión que ha hecho".

8. Otras noticias en la labor diaria del Consejo en este periodo

Si en 1.814, el peso del Consejo de Castilla era todavía considerable. Participa en las Comisiones contra los liberales; se le presentan importantísimas consultas que el Rey aprueba casi automáticamente. Sin embargo, el periodo 1814-1820 nos muestra una lenta pérdida de protagonismo del Supremo Tribunal, hasta el punto de que en la llamada Década Ominosa el Consejo distará mucho del que fuera primer Tribunal del Reino y primero entre los Consejos del Rey.

Del importante año 1.814 hemos visto muchos asuntos y tan sólo mencionaremos dos noticias más referentes al Consejo. Ambas son del mes de diciembre: el día 5 una Real Orden mandaba buscar y continuar la Causa de El Escorial^{***}. Tema sobre el que volveremos más adelante, pues el Monarca se mostró muy interesado en concluir esta causa y restaurar su imagen en aquel lamentable proceso. Y casi dos semanas más tarde, el 18 de abril, el Consejo tomaba medidas de orden del Rey para celebrar jornada de luto el 2 de mayo, aniversario de la sublevación del pueblo de Madrid contra los franceses. Aquella fecha fue rendido un sentido homenaje a las víctimas de aquel día y este aniversario a partir de entonces continuaría celebrándose solemnemente^{***}. También ese día remitía el Consejo una circular en la que solicitaba de las autoridades fuera informado de todas las enajenaciones de bienes de iglesias, beneficios, capellanías, etc.^{***}.

Pocas noticia, aparte de las mencionadas, cabe apuntar de la vida en el Consejo en 1.815. Fueron muchas las circulares expedidas por el Supremo Tribunal, sobre materias de orden público, gobierno de los pueblos, gobierno de los propios, caza y pesca y otras competencias

^{***}. A.M.A.E., legajo 3.312, Real Orden del 5 de diciembre de 1.814.

^{***}. A.G.P., Sección Fernando VII, Caja 199 núm. 12.

^{***}. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 5.210.

del Consejo Real"".

Sabemos también que una Comisión del Consejo de Castilla -formada por cuatro Ministros y un Fiscal-, revisó en 1.815 la publicación del segundo suplemento de la Novísima Recopilación. Esta publicación al parecer debía haber sido realizada en 1.808 y no se llevó a cabo entonces. Como es sabido, estaba previsto en la Real Cédula de 1.805 que Don Juan Reguera Valdelomar formara y publicara los cuadernos o suplementos anuales a la Novísima Recopilación. Estaba previsto que a su muerte esta labor fuera asumida por el Fiscal más antiguo del Consejo de Castilla"". A este fin se le debía pasar todos los años un ejemplar de cada una de las providencias generales publicadas por pragmáticas, cédulas, decretos y resoluciones reales, tanto por las Secretarías del Despacho Universal como por los Consejos y demás Tribunales"". También se mandaba por la citada Real Cédula que el Fiscal del Consejo promoviese un expediente general en que estudiase qué leyes convenía rectificar, suprimir o derogar, y de cualquier otro defecto que advirtiéndose en la Novísima Recopilación.

1.816 comenzó para el Consejo de Castilla con una tónica similar a la del año anterior: estudio de reformas internas y en la Administración del Estado, medidas para devolver el orden y la tranquilidad a todo el Reino, problemas de orden público y represión de grupos subversivos.

El 16 de febrero el Consejo en pleno era recibido por el Rey. En esta ocasión la consulta tenía un significado distinto, ya que el Monarca había comunicado su próxima boda y el Consejo acudía a felicitarle al Real Palacio. Por ello mismo decidió el Tribunal no llevar en el orden del día otro asunto que esta felicitación al Rey"".

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas núms. 5.307, 5.311, 5.310, 5.312, 5.316, 5.320, 5.323, 5.328, 5.329, 5.332, 5.343, etc.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089 núm. 21.

"". El Consejo de Castilla pasó a Reguera Valdelomar, a mediados de 1.816, un ejemplar de cada una de las providencias circuladas por el Consejo desde mayo de 1.814 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.033 núm. 44).

"". Esta fue la contestación del Monarca: "Estimo mucho las expresiones con que me felicita mi Consejo. Espero continuará cuidando de la más recta administración de Justicia; y me ayudará en el buen gobierno de mis pueblos" (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.076, consulta de 16 de febrero de 1.816).

Al día siguiente, 17 de febrero, se promulgaba un Real Decreto en el que el Monarca participaba oficialmente al Consejo de Castilla su tratado de casamiento y el del Infante Don Carlos María de Isidro"". La boda real tuvo también sus repercusiones en la vida ordinaria del Consejo, ya que el 27 de septiembre el Supremo Tribunal comunicaba al Monarca que con motivo de la entrada de la Reina había acordado en aquel día la suspensión de Tribunales durante tres días"".

Pocas noticias más destacables aparecen en aquel año 1.816. La mencionada boda del Infante don Carlos María, la entrada de la nueva Reina y su celebración, las medidas de reconstrucción de templos y pueblos, como fue el caso de la capilla de Nuestra Señora de Atocha, de Madrid"", o de la abadía de Montserrat"". En general se observa del estudio de la documentación del Consejo una multiplicación de los desórdenes, conspiraciones y grupos opuestos al Régimen. Muchos de estos informes fueron conocidos por el Consejo y participó él también en la toma de medidas de gobierno para la defensa del Régimen.

Tampoco hubo muchas novedades en el año 1817"". En las semanas siguientes se sucedieron algunas ~~casas~~ de infidencia, como la seguida contra don Rafael

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 5.350. Por otro lado, la felicitación al Infante Carlos María por su boda con la Princesa del Brasil la hizo el Consejo de Castilla en la consulta con el Rey del 10 de septiembre de 1.816 (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.078).

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.078 núm. 27, consulta del 27 de septiembre de 1.816.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, consulta del 8 de julio de 1.816.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.078, consulta de 31 de julio de 1.816.

"". El 20 de abril de 1817 moría de una pulmonía el Infante don Antonio. Al día siguiente, 21 de abril, el Consejo daba el pésame al Rey (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.121 núm. 54, consulta del 21 de abril de 1.817). El Infante don Antonio era hermano de Carlos IV y, por tanto, tío del Rey Fernando VII. Según Villa-Urrutia había tenido parte importante en el llamado Motín de Aranjuez y también había desempeñado un papel importante al frente de la Junta de Gobierno, durante la partida y estancia de Fernando en Bayona (Ver VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Constitucional", pág. 157).

Valenzuela"" o contra el canónigo de San Isidoro de León""; y otras como la reclamación de los Reyes Padres sobre las acciones que poseían en el Banco de San Carlos desde que eran Príncipes de Asturias"". Entre otros dictámenes importantes de aquellos días podemos mencionar el que propuso el Consejo sobre el trato a dar a los españoles que se refugiaron en Francia siguiendo al Gobierno intruso"".

Ya durante el verano una noticia debió conmocionar a los miembros del Supremo Tribunal: el 6 de julio de 1817 falleció en Madrid el Consejero don Nicolás María de Sierra, antiguo Secretario de Gracia y Justicia y también antiguo Fiscal del mismo Consejo"". La causa de la muerte fue una apoplejía ocurrida el mismo día de su fallecimiento. Al día siguiente, 7 de julio, el Duque del Infantado enviaba oficio manifestando su sentimiento para que se hiciese presente en el Consejo. Todos sus miembros y otras autoridades fueron invitadas al funeral que se celebró al día siguiente, al anochecer y de ceremonia, como era costumbre"".

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.121, núm. 108.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.121 núm. 16.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.121 núm. 3.

"" Ver A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.121 núm. 93.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.958. El mismo día 6 de julio, antes de su fallecimiento, previéndose inminente, el Duque del Infantado previno a don Manuel de Lardizábal para que se aprestara a recoger sus documentos de su domicilio.

"" Ha aquí la descripción del acto que nos ha dejado el Escribano de Gobierno del Consejo, don Bartolomé Muñoz: "...El Consejo y la Sala de Alcaldes se reunieron a la hora prevenida. Se presentó el Sr. Presidente con vestido negro y ocupando su preeminente lugar mandó que inmediatamente se diese principio al funeral, al que concurrió un numeroso concurso de Sres. Ministros de los demás Consejos y personas de distinción. Concluido el oficio se puso en pie S.E. y el Consejo, y el Sr. Presidente dio lugar para que los concurrentes hiciesen la demostración de su asistencia correspondiendo S.E. con demostración de gratitud a aquella atención, con lo que salió el Consejo acompañándole hasta la puerta de la iglesia, y después de ella le acompañaron todos los subalternos hasta que tomó el coche..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.267 núm. 57).

Los meses siguientes no presentaron ninguna novedad digna de ser relatada. El Consejo supo de la resistencia del Ayuntamiento de la Coruña a cumplir las órdenes mandadas para la celebración de los enlaces del Rey y del Infante don Carlos""; o también conoció la petición del mismo Ayuntamiento para que se premiara a la ciudad por los servicios prestados durante la sublevación del General Díaz Porlier"". El 20 de agosto el Consejo estudiaba con el Rey las exenciones que correspondían al Cuerpo Diplomático"".

En el mes de septiembre de 1.817 encontramos también algunas causas curiosas. El día 9 estudiaba el Supremo Tribunal ante el Rey una causa contra dos personas acusadas de ser afectas a la Constitución de Cádiz"". El día 15 proponía al Monarca la reconstrucción del Puente de Almansa"". Y ocho días después el objeto de la consulta era el sobreseimiento de unos créditos de época del Rey Felipe V"". Se prodigaron también las causas de infidencia: por ejemplo, contra el vecino de Llerena, don Fernando Figueroa""; o aquella contra el alcalde mayor de

"" A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.080, consulta del 31 de julio de 1.817.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, consulta del 28 de julio de 1.817, legajo 6.080.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.080, consulta del 20 de agosto de 1.817. Dos días después felicitaba a la Reina por el feliz alumbramiento de su primer hijo(A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, consulta del 22 de agosto de 1.817). Y casi dos semanas antes había consultado el Consejo una petición que en la inmediata postguerra se había repetido varias veces: una víctima del Dos de Mayo de 1.808, Doña María Delgado, herida gravemente en aquel evento, solicitaba del Consejo de Castilla una pensión (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.080, consulta del 9 de agosto de 1.817).

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.080, consulta del 9 de septiembre de 1.817.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.080, consulta de oficio de 15 de septiembre de 1.817.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.080, consulta del 23 de septiembre de 1.817.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.080, consulta del 31 de agosto de 1.817.

Medina de las Torres, don Francisco Javier Campsa, contra el cura párroco y otros individuos de ese pueblo"".

De los últimos meses de 1.817 pocas son las noticias de interés. El Consejo estudió la solicitud del Ayuntamiento de Calatayud, pidiendo el uso de banda y escudo que acreditase los servicios de aquella ciudad durante la Guerra de la Independencia"". Antes había estudiado el Consejo la provisión de becas del Colegio Mayor de Fonseca, la dotación de ellas y otros puntos de este Colegio"". Finalmente, el Consejo proponía como todos los años al Rey la lista de miembros del Consejo y sus Salas, así como los que serían Alcaldes de Casa y Corte y sus Salas de destino para el siguiente año, 1.818"".

El año 1.818 se abría para el Consejo con una representación de su Presidente, el Duque del Infantado, dirigida al Ministro de Gracia y Justicia. En ella se estudiaban aspectos relativos a la persecución y aprehensión de ladrones, los juicios y condenas a estos bandoleros y ladrones, y las penas y modos de evitar la reincidencia, especialmente en los robos con violencia"".

En marzo hacía propuestas el Consejo para cubrir las cátedras de Prelecciones Canónicas, Instituciones Canónicas y Elementos Matemáticos de la Universidad de Santiago"". Antes el Consejo había estudiado el destino de los españoles que se fugaron a Francia"".

El 6 de agosto era el Ayuntamiento de Madrid el que acudía al Consejo. Pedía ser exonerado de la manutención de los presos de la Cárcel de Corte y que esta misión fuera entregada a la Sala de Alcaldes, como aquella

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.080, consulta del 22 de septiembre de 1.817.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.081, consulta del 12 diciembre de 1.817.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.081, legajo del 19 de noviembre de 1.817.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.081, consulta del 15 de diciembre de 1.817.

"" A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 71 núm. 50.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.082, consulta del 13 de marzo de 1.818.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.082, consulta del 21 de enero de 1.818.

venía desempeñando hasta 1.808"".

Unas semanas después el Consejo tenía conocimiento del embarazo de la Reina y daba su enhorabuena a la Familia Real"". Sin embargo, la alegría se tornaría pronto en pesar, ya que poco después, el 27 de diciembre, el Consejo daba al Monarca su más sentido pésame "por la temprana muerte de la Reina Nuestra Señora"".

Un curioso expediente sobre el mundo del toreo fue resuelto por el Consejo de Castilla el 21 de octubre de 1.818. Fue a consecuencia de una instancia de don José Romero, torero de Ronda y hermano del famoso torero Pedro Romero. En su escrito, don José Romero solicitaba que el haber sido torero no le sirviera de obstáculo ni a él ni a sus hijos y descendientes para obtener empleos eclesiásticos civiles y militares. En su dictamen el Consejo siguió el criterio que ya había seguido unos años antes con el mismo Pedro Romero en instancia similar, considerando que el toreo era profesión noble y por tanto no susceptible de causar indignidad"".

El 9 de noviembre se pasaron al Archivo del Consejo, de orden del Supremo Tribunal, ciento ochenta y seis ejemplares de la Constitución francesa decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en los años 1.789, 90 y 91, que había sido impresa en Madrid por don Miguel de Burgos en 1.814 y recogida reservadamente de orden del Consejo de Castilla"". Y unos días antes, el 5 de noviembre,

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.084, consulta del 6 de agosto de 1.818.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.084, consulta del 29 de agosto de 1.818.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.085. A mediados de septiembre, la Ciudad de Toledo volvía reclamar al Consejo los gastos por los suministros facilitados a las tropas francesas durante la Guerra (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.084, consulta del 10 de septiembre de 1.818). Y el 28 de septiembre solicitaba Almagro al Consejo la facultad de celebrar un mercado semanal en aquella localidad (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.084, consulta del 28 de septiembre de 1.818).

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.084, consulta del 21 de octubre de 1.818.

"" A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo 17.704.

dictaminaba el Consejo en consulta al Monarca sobre el Ministerio al que correspondía publicar el nacimiento del Príncipe heredero"".

Entrado ya el mes de diciembre, en esta ocasión hizo el Consejo de Castilla una temprana propuesta de Ministros y Alcaldes para el año siguiente. Fue presentada la consulta el 9 de diciembre y recibió la correspondiente aprobación regia"".

De este año sólo nos interesan tres expedientes más. El mencionado ya con motivo de la muerte de la Reina; la causa abierta a un cura párroco de la Catedral de Cádiz por sus opiniones políticas""; y un expediente fechado el día de Nochebuena de aquel año, en el que el Consejo estudiaba la administración y recaudación de los arbitrios destinados para premiar a los importadores de granos extranjeros y los destinados a la construcción de la Casa de los Consejos"".

Los Reyes Padres Carlos IV y Maria Luisa fallecieron en los primeros días de enero de 1.819. La Reina Madre doña María Luisa falleció el 2 de enero, y don Carlos IV el día 19"". Con este motivo, el Consejo de Castilla

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.085, consulta del 5 de noviembre de 1.818. El 16 de noviembre nuevamente un herido el Dos de Mayo de 1.808 solicitaba la concesión una gracia especial (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.085, consulta del 16 de noviembre de 1.818). Y el 28 enviaba circular el Consejo mandando que en todas las escuelas del Reino se estudiara el catecismo político de don Isidro de la Hera y Miranda. Estas recomendaciones de libros fueron frecuentes entre las medidas del Consejo en todo el reinado de Fernando VII.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.085, consulta del 9 de diciembre de 1.818.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.085, consulta del 14 de diciembre de 1.818.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.085, consulta del 24 de diciembre de 1.818.

"". VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Constitucional", págs. 233-235. Con motivo de la muerte de Carlos IV se suspendió el despacho de tribunales por nueve días contando los feriados y se declaró luto riguroso por seis meses (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 13). Curiosamente la reina Madre murió unos días después. Por este motivo se celebró Consejo extraordinario en la casa del Presidente del Consejo el 24 de enero, y se acordó también

expresó al Rey su más sentido pésame"".

El Consejo era fiel guardián y custodio de la Monarquía. Ello se comprueba en la consulta que el Supremo Tribunal presentó al Monarca el 6 de marzo de 1819, menos de tres meses después del fallecimiento de la Reina doña M. Isabel Francisca de Braganza, acaecido el sábado 26 de diciembre de 1818"". En esta consulta, el Consejo de Castilla hacía presente al Monarca sus deseos y la necesidad de que contrajese un nuevo enlace "para asegurar la sucesión y la felicidad del Reino""q.

El Consejo recibió el estrecho encargo de cuidar la introducción de libros y papeles extranjeros en España. Por Real Orden de 6 de septiembre de 1.819 se prohibía la importación de aquellos textos y se reducía a una sola ley todas las órdenes comunicadas sobre el asunto. La Real Orden autorizaba al Presidente del Consejo de Castilla y al Inquisidor General a proceder al nombramiento de revisores donde no los hubiere todavía, "encargando muy estrechamente tanto al Consejo como al Inquisidor General no tengan el menor disimulo con los contraventores de los artículos expresados..."".

Antes de entrar en el polémico y agitado año de 1.820 podemos hacer un balance del periodo 1.814-1.820 en lo referente al Consejo de Castilla.

La restauración de 1.814, para C. Seco Serrano, significó "pura y simplemente la reacción"". Si

suspender el despacho de tribunales por cinco días contados, y declarar seis meses de luto (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 14).

"". En los meses siguientes no aparecen grandes novedades en la labor del Consejo. Varias localidades solicitaban permiso del Consejo para reparar sus puentes. Por ejemplo, Sepúlveda (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.111, consulta del 20 de agosto de 1.819). Y también la ciudad de Teruel pedía al Consejo se le permitiera usar una cinta roja de aguas que acreditase los servicios prestados en la última Guerra (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 29 de octubre de 1.819).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 12.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.427 núm. 6.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.959.

"". SECO SERRANO, Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXVI, La España de Fernando VII, "Introducción", pág. XVII.

José I intentó crear un sistema político nuevo, a través de la Carta de Bayona, Fernando VII no hizo sino hacer tabla rasa del período anterior e ignorar su existencia. Muchas cosas habían cambiado en España desde el Motín de Aranjuez"" y algunas al menos sí podrían haber evolucionado tras la Restauración. Al apasionamiento liberal de las Cortes, no siguió un plan de reformas y una convocatoria de Cortes, tal y como se había prometido en el decreto de 4 de mayo e incluso pedido en el Manifiesto de los Persas"". Y el Consejo Real ejerció un papel importante en esta política mediante sus consultas. El Monarca por su parte también se apoyó mucho en esta institución y aceptó mayoritariamente las consultas que el Consejo le presentaba.

Sin embargo, la actitud de Fernando VII es también comprensible. Es innegable que la mayor parte del pueblo español en el momento de la Restauración apoyaba la actitud de Fernando y no deseaba la Constitución"". Fernando a la hora de restablecer la soberanía no encontró ningún obstáculo e incluso fue empujado por la opinión. Esta tesis, que es también defendida por Comellas"", parece innegable. El pueblo deseaba el sistema tradicional formado por su Rey, su religión y sus instituciones de siempre. Y conceder esto era lo más fácil y deseado por el Monarca, que no tuvo más que seguir los consejos que en esta línea le facilitaron sus colaboradores más allegados.

"". Por el contrario, parece una exageración lo que afirma Villa-Urrutia en "Fernando VII, Rey Absoluto", pág. 57: "Los seis años de desgoberno absoluto, de 1.814 a 1.820, fueron mucho más fecundos en errores, y para la Nación española mucho más desastrosos que los otros seis años de mansa anarquía en que vivió España durante la Guerra de la Independencia."

"". Esa inicial voluntad reformista del Monarca es, por otra parte, innegable. El mismo decreto de restablecimiento del Consejo plantea la necesidad de reformas aspectos de la institución.

"". "Lo español era lo que hasta entonces habían vivido los españoles de 1808: el Rey, la religión la Monarquía, las tradiciones bajo las cuales vivían hasta la entrada de los franceses; lo extranjero era lo que se oponía a la continuación de aquel estado de cosas" (SUAREZ, F., "La crisis política del Antiguo Régimen"). "Con este recelo y odio hacia lo nuevo, venido de fuera, lucharon durante seis años y ahora, cuando veían el fruto de sus esfuerzos, cuando gritaban entusiasmados ante el retorno del Rey, ¿cómo pensar que le aclamarían para que les gobernase con ideas semejantes a las que habían combatido en los campos de batalla?" (PINTOS VIEITES, M.C., "La política de Fernando VII", pág. 91).

"". COMELLAS, op. cit., pág. 263.

El Rey al iniciar la Restauración había prometido una amplia regeneración interna partiendo de los órganos tradicionales de la Monarquía. Así venía expresado, como ya hemos visto, en el decreto de 4 de mayo de 1814. Así lo vimos también en el mismo Decreto de restauración del Consejo de Castilla, en el que se pedía propuesta de reformas para superar los males padecidos"". Para Seco Serrano "", "la anulación de lo legislado en Cádiz se condicionó a la promesa de convocar cuanto antes unas Cortes legítimamente congregadas, compuestas de procuradores de España y de las Indias." Afirman el propio Seco y Artola que una vez controlada la situación, no había ya necesidad de mantener las promesas realizadas. Creemos que no fue este el motivo, sino precisamente el contrario. Las constantes dificultades internas del periodo y la inestabilidad política del sistema impedía adoptar soluciones liberalizadoras, más todavía cuando la opinión general apoyaba la actitud del Monarca. Sin embargo, las propias circunstancias y la inviabilidad del sistema le obligarían paulatinamente a introducir reformas.

Pese a la aparente tranquilidad que tuvieron aquellos seis años de esta década, en la que parecía que todo volvía por su cauce de normalidad"", una fuerte oposición a la forma de gobierno fernandista se iba gestando. Consecuencia de ella sería el llamado Trienio Liberal.

Y en cuanto a lo que supusieron estos seis años para el Consejo de Castilla, en el periodo 1814-1820 prácticamente no pasó nada notable en el Consejo. Los asuntos vuelven a su normalidad habitual y el Consejo de Castilla recupera prácticamente sus antiguas atribuciones.

"". Cfr. DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", págs. 164 y 165.

"". SECO SERRANO, Introducción al tomo XXVI. Historia de España Menéndez Pidal, pág. XXVII.

"". "El regreso del cautivo monarca al seno de su capital, y el beneficio de la paz material que obtuvo el país durante los seis primeros años del gobierno de Fernando VII; la afición material que manifestaba éste al pueblo de Madrid, y el aparato de una corte montada con arreglo a la antigua etiqueta castellana, templaban en parte la agitación política que sordamente iban minando los espíritus y adormecían el ánimo del Monarca..." (MESONERO ROMANOS, "El Antiguo Madrid...", op. cit., pág. 115).

10. SUPRESION DEL CONSEJO DE CASTILLA AL
RESTABLECERSE LA CONSTITUCION DE 1.812
EN 1.820.

El 1 de enero de 1.820 tenía lugar el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan, que sería el detonante del llamado Trienio Constitucional.

Las semanas siguientes fueron de inestabilidad y crisis política. Tras la sublevación del conde de la Bisbal en Ocaña, el 6 de marzo fue aprobado un polémico decreto convocando Cortes"":

"Habiéndome consultado mi Consejo Real y de Estado lo conveniente que sería al bien de la Monarquía la celebración de Cortes; conformándome su dictamen, por ser con arreglo a la observancia de las leyes fundamentales que tengo juradas, quiero que inmediatamente se celebren Cortes; a cuyo fin el Consejo dictará las providencias que estime oportunas para que se realice mi deseo, y sean oídos los representantes legítimos de los pueblos asitidos con arreglo a aquellas de las facultades necesarias; de cuyo modo se acordará todo lo que exige el bien general, seguros de que me hallarán pronto a cuanto pida el interés del Estado y la felicidad de unos pueblos quer tantas pruebas me han dado de su lealtad, para cuyo logro me consultará el Consejo cuantas dudas

"" BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo II, págs. 154 y 155.

le ocurran, a fin de que no haya la menor dificultad ni entorpecimiento en su ejecución. Tendréislo entendido y dispondréis lo correspondiente a su puntual cumplimiento. Palacio, 6 de marzo de 1.820."

Señalaba Bayo que ante las delicadas circunstancias de aquellos días, con el ejército sublevado en Cádiz, tan sólo se tomaron dos medidas: la aprobación de esta curiosa convocatoria de Cortes y el envío de un Consejero de Castilla a Cádiz -no se nos menciona cuál fue-, con la misión de atajar los progresos del incendio"". Más adelante abundaremos sobre las características de aquella convocatoria de Cortes y la intervención del Consejo de Castilla en ella.

Siguiendo con la rápida sucesión de acontecimientos, al día siguiente día 7 de marzo el Rey firmaba otro Decreto, que suponía la proclamación sin condiciones del sistema constitucional hasta entonces tan perseguido"";

"Para evitar las dilaciones que pudieran tener lugar por las dudas que al Consejo ocurrieren en la ejecución de mi decreto de ayer para la inmediata convocación de Cortes, y siendo la voluntad general del pueblo, me he decidido jurar la Constitución promulgada por las Cortes Generales y Extraordinarias en el año de 1.812. Tendréislo entendido y dispondréis su pronta publicación.- Rubricado de la Real mano.- Palacio 7 de marzo de 1.820."

De esta manera se inauguraba oficialmente el llamado Trienio Constitucional. Dos días después, el 9 de marzo, el Rey juraba la Constitución Gaditana en el Salón del Trono del Palacio Real, delante del Ayuntamiento de Madrid en cuerpo y de seis comisionados del populacho"". Inmediatamente, y a instancia de los presentes, el Rey nombró una Junta consultiva de Gobierno, -en la que se encontraba el Consejero de Castilla Sr. Lardizábal-, y esta Junta se hizo con las riendas de la situación política.

Una de las primeras medidas de la Junta fue una consulta al Rey para el restablecimiento de los

"" BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo II, págs. 154 y 155.

"" BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo II, pág. 158.

"" BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo II, pág. 165.

Tribunales Constitucionales""'. De esta manera el 10 de marzo""', día siguiente de la instalación de la Junta, ésta proponía al Rey que "habiéndose cesado en sus funciones los Consejos y la Sala de Alcaldes de Corte -por el restablecimiento de la Constitución de Cádiz- se halla la capital sin administración de Justicia y para evitar los males que esta cesación podría producir, el dictamen es de restablecer el Tribunal Supremo de Justicia, Audiencia Territorial y Tribunales de primera instancia, todo en calidad de provisionales""'.

Atendida la consulta por el Monarca, fue aprobado el 12 de marzo de 1.820 el Decreto de restablecimiento del Tribunal de Justicia""'.

""', Ver MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", págs. 101 y 102.

""', MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 104.

""', MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", págs. 101 y 102.

""', "Deseando dar a la Administración de Justicia la actividad que exige el orden público y los benéficos principios sancionados en la Constitución política de la Monarquía Española, y siendo uno de los medios más conducentes para realizar estas justas intenciones el restablecimiento del Supremo Tribunal de Justicia, conforme a lo prevenido en el artículo 259 de la misma Constitución, he venido a resolver de acuerdo con el parecer de la Junta, que desde luego se instale y ejerza provisional e interinamente sus funciones el mencionado Tribunal, en los mismos términos que fue creado por Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de 17 de abril de 1.812, y que se componga por ahora de los Ministros existentes en el día de los nombrados a consulta del Consejo de Estado de 14 de mayo de 1.812, y son don José María Puig, don Francisco López Lisperguer, don Francisco Ibáñez Leiba, don Manuel Antonio de la Bodega y Mollinedo, don Jaime Alvarez Mendieta, don Andrés Oller, don Diego María Vadillo y don Ramón López Pelegrín, Fiscal, y no siendo posible hasta ahora la próxima reunión de las Cortes prestar el juramento conforme a lo prevenido en dicho Decreto de 17 de abril de 1.812, lo ejecutarán interinamente todos los referidos magistrados en manos del Decano y éste en los del Subdecano, cuidando el primero de que se reúnan todos los dependientes del Tribunal que existan de los que se hallaban en actual ejercicio al tiempo de su supresión, los cuales deberán igualmente prestar su juramento en los términos que lo ejecutaron cuando fueron elegidos. Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento. De Orden de S.M. lo comunico a V.I. para su inteligencia y a fin de que mañana se reúna sin falta el Tribunal a la hora acostumbrada. 12 de marzo de 1.820".

El mismo día de la constitución del Tribunal Supremo de Justicia se aprobaba otro Real Decreto por el que quedaban suprimidos los Tribunales conocidos como Consejos"".

Si repasamos el texto de la consulta antes mencionado, puede extrañar que se solicite del Monarca la creación de un Tribunal Supremo de Justicia, "porque los Consejos habían cesado en sus funciones", cuando en realidad el Decreto de supresión de los Consejos, como hemos visto, fue posterior al de creación de aquel Tribunal. La razón más probable, como ya apuntábamos, reside en la vigencia de la propia Constitución de Cádiz. Restablecida la Constitución del 12, automáticamente cesaban los Consejos y se restablecía un Supremo Tribunal de Justicia: ambas medidas fueron hechas efectivas mediante los dos Reales Decretos mencionados"".

Las consecuencias jurídicas en nuestro

(A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 3).

"" He aquí el texto de este Real Decreto: "Excmo. Señor. El Rey se ha servido dirigirme con esta fecha el Decreto siguiente: Habiendo resuelto el restablecimiento del Supremo Tribunal de Justicia y demás autoridades con arreglo a la Constitución Política de la Monarquía Española que he jurado, y no siendo compatible con ella la existencia de los Tribunales conocidos con el nombre de Consejos, ha venido en suprimirlos, conservando a los individuos de ellos que queden sin destino todos sus honores y el mismo sueldo de su dotación en los términos que previene el Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de 17 de abril de 1.812. Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento.

De orden de S.M. lo traslado a V.E. para su inteligencia y efectos correspondientes en ese Tribunal. Palacio, 12 de marzo de 1.820. Josef García de la Torre.

Al Sr. Presidente del Consejo Real."

(A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 5; también en DIOS, S. de, "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", documento XXXIII, pág. 166, "Traslado del Real Decreto", dirigido al Presidente del Consejo de Castilla por parte del Secretario interino del Despacho de Gracia y Justicia, por el que el Rey se sirve suprimir los Tribunales conocidos con el nombre de los Consejos conservando a sus individuos los honores y sueldos mientras estén sin destino, restableciendo al mismo tiempo el Supremo Tribunal de Justicia. Palacio Real de Madrid, 1.820").

"" Por nuevo Real decreto de 22 de marzo se mandaba al Consejo de Castilla que se pasasen al Tribunal de Justicia todos los expedientes contenciosos pendientes en aquel Consejo (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 5).

sistema administrativo resultantes del restablecimiento de la Constitución de Cádiz fueron, según ha estudiado Cos Gayón''', similares a las que la nueva Constitución produjo en el año 1.812: parte de las facultades ejecutivas de los Consejos pasaron a las Secretarías de Despacho. De lo consultivo se haría cargo el Consejo de Estado, y lo contencioso y judicial fue asumido por el mencionado Supremo Tribunal de Justicia. Las funciones de este Tribunal Supremo serían la de decidir sobre las competencias suscitadas entre las Audiencias y otros tribunales superiores; procesar a los altos empleados del país; formar causa a los Ministros acusados por las Cortes, etc. Se restableció al parecer también el Tribunal especial de Guerra y Marina, que recogía lo contencioso de los anteriores Consejos de la Guerra, de Castilla, Indias y Hacienda.

La medida de suprimir los Consejos era lógica, si se quería realmente restablecer el sistema de la Constitución de Cádiz. Pero ahora se planteaba un nuevo problema: qué destino se daría a los muchos empleados de los Consejos y concretamente a los del Consejo de Castilla. Buena parte de la documentación relativa al Consejo de Castilla del Trienio Liberal se refiere precisamente a pleitos e instancias de antiguos empleados de este Supremo Tribunal solicitando destino u otras gracias. Sigamos entonces con nuestro repaso histórico.

El Presidente del Consejo, Duque del Infantado, tuvo conocimiento inmediato de aquellas Reales disposiciones. Inmediatamente reunió a los Ministros y Fiscales del Consejo en su casa y les puso al tanto de la noticia'''. También comunicó el contenido de las mismas al

'''. COS GAYÓN, F., "Historia de la Administración Pública en España", I.E.A., Madrid, 1976, págs. 247 a 249.

'''. "Consiguiente a estos avisos concurrieron a la Posada de S.E. todos los Ministros y Fiscales citados y después de reunidos se les leyó la Real Orden de cuyo contenido se enteraron, indicando a S.E. que tuviese a bien pasarles oficio con inserción de la misma para su conocimiento y gobierno. S.E. convino en ello y se pasaron con efecto tales oficios a todos los Ministros incluso los Sres. Lardizábal, Puig, Torres-Cónsul y Pelegrín, y a los dos Fiscales Gutiérrez de la Huerta y Hevia y Noriega en el mismo día del propio mes de marzo; y en el mismo día se avisó al Ministerio de la convocatoria y disolución del Consejo; a cuyo Escribano de Gobierno se insertó igualmente la Real Orden para los efectos convenientes en la Escribanía". La reunión fue convocada el miércoles 15 de marzo a la una de la tarde en la casa del Presidente. No se avisó a Lardizábal, Puig, López Pelegrín, don Pedro de la Puente y don José García de la Torre: los tres primeros y el quinto estaban empleados ya, y el cuarto, ausente (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 5).

Escribano de Gobierno del Consejo, Bartolomé Muñoz"", quien informó a todos los Escribanos de Cámara, Relatores, Agentes Fiscales y demás jefes de las oficinas dependientes del Consejo. Una de las primeras medidas adoptadas por Muñoz fue mandar que se recogiesen los papeles en poder de dichos subalternos y que se formasen las correspondientes matrículas según el estado en que cada uno se hallaba"". Muchos expedientes fueron pasados a los distintos Ministerios, así como al Tribunal Supremo de Justicia, Diputación Provincial, Jueces de primera instancia, y a la Dirección General de Estudios los expedientes relativos a planes, obras, reglamentos, proyectos y expedientes relativos a la enseñanza"".

En cuanto a los Consejeros, Fiscales y los empleados y subalternos del Consejo, su destino fue diverso"". Cada uno de los Ministros del Consejo debió conocer oficialmente la noticia a través de una comunicación por el Presidente del oficio remitido a través del Despacho de Gracia y Justicia"".

"". Don Bartolomé Muñoz era por entonces el subalterno del Consejo más veterano. Al concluir el Trienio Constitucional tenía 85 años, de los cuales llevaba 69 como empleado en el Consejo de Castilla (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

"". El 20 de marzo de 1820 una Real Orden de Gracia y Justicia pedía a los Consejos extinguidos de Castilla, de Indias y de Hacienda remitiesen al Tribunal de Justicia para su determinación definitiva las causas pendientes en tales Consejos extinguidos (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 5).

"". Ver ESTRUCTURA ORGANICA.

"". "Por el Secretario Interino del Despacho de Gracia y Justicia se comunicó el 12 de marzo de 1.820 la Real Orden siguiente: 'Excmo. Sr.: El Rey se ha servido dirigirme con esta fecha el Decreto siguiente: 'Habiendo resulto el restablecimiento del Tribunal Supremo de Justicia y demás autoridades, con arreglo a la Constitución política de la Monarquía Española, que he jurado, y no siendo compatible con ella la existencia de los Tribunales conocidos con el nombre de Consejos, he venido en suprimirlos, conservando a los individuos de ellos que queden sin destino todos sus honores y el mismo sueldo de su dotación, en los términos que previene el Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de diez y siete de abril de 1.812. Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento.' De Orden de S.M. lo traslado a V.E. para su inteligencia y efectos correspondientes en ese Tribunal. Lo que comunico a V.S. como

El Tribunal Supremo. El decreto de 13 de marzo de 1.820 ordenaba que, de acuerdo con el artículo 259 de la Constitución de 1.812, se instalase el Tribunal Supremo en los mismos términos en que fue creado por las Cortes por decreto de 17 de abril de 1.812. Como fueron designados magistrados aquellos que fueron nombrados para tal plaza en 1.812, pasaron a formar parte del Supremo Tribunal varios Consejeros de Castilla: don José María Puig, que sería nuevamente Decano, don José Navarro Vidal o don Miguel Alfonso Villagómez¹³⁰⁹. Los demás Consejeros de Castilla quedarían en su mayoría cesantes¹³¹⁰.

También sabemos que más adelante se incorporó algún Consejero de Castilla más al Tribunal Supremo. Este fue el caso, por ejemplo, de don Miguel Antonio Blanes, que entró a sustituir a un antiguo Ministro del Consejo de Guerra enfermo en agosto de 1.820¹³¹¹.

Por otro lado, algunos Consejeros de Castilla ocuparon también puestos políticos destacados. Así, entre los miembros de la Junta Provisional Consultiva creada por el Rey en 1.820, encargada del cumplimiento del decreto de 7 de marzo, se encontraba, como vimos, don Manuel de Lardizábal¹³¹².

Del Presidente del Consejo también tenemos algunas noticias en este periodo. Cuando estalló la Revolución de 1.820 estaba, al parecer, al frente de la guarnición de Madrid¹³¹³. En agosto de 1.820 "prestóse el Rey a desterrar al Duque del Infantado y a nombrar su ayudante de campo y capitán general de Aragón a Riego que,

Ministro que era del Consejo Real para su inteligencia y Gobierno. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, 16 de marzo de 1.820."

¹³⁰⁹. MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", págs. 106 y 107. Cfr. Decretos de 13 y 14 de marzo de 1.820, y consulta del Consejo de Estado de 14 de mayo de 1.812.

¹³¹⁰. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

¹³¹¹. Ocurrió por Real Decreto de 21 de agosto de 1.820 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 2).

¹³¹². VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Constitucional", pág. 176.

¹³¹³. VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Constitucional", pág. 172. Esta guarnición se componía entre otras unidades de dos Regimientos de la Guardia Real.

a la sazón, se hallaba de cuartel en Oviedo""". También León Y Pizarro nos refiere en sus Memorias que Infantado tardó en salir a su destierro y que aprovechó la ocasión para publicar un peculiar artículo en El Espectador"".

También a Infantado se le incluye entre los participantes en un plan que buscaba restablecer el antiguo régimen absolutista"".

En aquellos tres años algunos Ministros del Consejo fallecieron, como fue el caso del Decano Sr. Colón, y de los Sres. Lardizábal, Lasauca, Ondarza, Fernández Campomanes y De la Puente. También falleció el Fiscal Don Francisco Gutiérrez de la Huerta"".

"" VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Constitucional", pág. 251.

"" "El Duque del Infantado, como era natural, no se daba gran prisa a salir, y asestándole un artículo en El Espectador (que era ministerial), creo tuvo la debilidad de publicar impresa una especie de allocución protestando de su obediencia y de la sinceridad de sus principios constitucionales." (G. DE LEON Y PIZARRO, F., "Memorias", tomo I, pág. 296).

"" VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Constitucional", pág. 225: "El pueblo cometió un horrible asesinato en la persona del capellán de honor de S.M. arcediano de Tarazona y antes cura de Tamajón don Matías Vinuesa, autor de varias proclamas subversivas y de un 'Plan para conseguir nuestra libertad', que se halló entre sus papeles, escrito de su puño y letra con enmiendas, y que era un descabellado proyecto de contrarrevolución, del que sólo debían tener noticia S.M., el Infante don Carlos, el Duque del Infantado y el Marqués de Castelar, y consistía en que el Rey llamara una noche a Palacio a los Ministros, al Consejo de Estado y al Capitán General, y una vez reunidos serían allí presos de los Guardias de Corps, a cuyo frente se pondría el Infante don Carlos, mientras el Duque del Infantado tomaba el mando del Batallón de Guardias acuarteladas en Leganés y del Regimiento del Príncipe, "cuyo Coronel debía estar en buen sentido", y a las cinco y media de la mañana empezarían la tropa y el pueblo a gritar: ¡Viva la Religión! ¡Viva el Rey y la Patria! ¡Muera la Constitución!; y sin preocuparse de la resistencia que pudiera oponer el resto de la guarnición, el Parque de Artillería y, sobre todo, la Milicia Nacional, daba Vinuesa por supuesto que todos se dejarían prender como los liberales de 1.814 y quedaría así restablecido por encanto el antiguo régimen absolutista."

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

En cuanto a los subalternos del Consejo, muchos pasarían al Tribunal Supremo"". Previamente fue examinada la conducta y opinión política de los candidatos, y aquéllos sobre los que se hizo algún informe desfavorable en cuanto a su opinión sobre el sistema constitucional, fueron excluidos. Los primeros nombrados para servir en el Tribunal Supremo recibieron su nombramiento efectivo el 23 de julio de 1.820"". Los que quedaron cesantes conservaron los sueldos que percibían en el Consejo, pero sin los correspondientes emolumentos"".

A lo largo del Trienio también se acudió a antiguos subalternos del Consejo para asistir a los Tribunales existentes. Así lo pidió, por ejemplo, el Tribunal Supremo al Gobierno el 25 de julio de 1.820"".

Dejando a un lado el destino de los empleados del Supremo Tribunal -que por otro lado, se encuentra estudiado en el capítulo de Estructura Orgánica-, algunas otras noticias mencionan al Consejo de Castilla en este periodo. Sabemos que el Supremo Tribunal elaboró una consulta como consecuencia del Real Decreto de 6 de marzo para la celebración de Cortes. Al parecer, el Consejo de Castilla remitió unos días después un informe en el que se proponían unas Cortes del Antiguo Régimen. El 14 de marzo enviaba el Ministro de la Gobernación esta documentación a la Junta Consultiva. Dos días después la Junta devolvía al Ministro el informe, ya que lo que se buscaba era una convocatoria a Cortes constitucionales. Así nos refiere el hecho Buldaín Jaca"": el 16 de marzo de 1.820 la Junta elevó al Gobierno para su consulta al Rey una comunicación sobre los acuerdos tomados para la convocatoria a Cortes. "En su elaboración no tuvo en cuenta el expediente formado por el extinguido Consejo de Castilla, como consecuencia del

"". Ver ESTRUCTURA ORGANICA.

"". Ver ESTRUCTURA ORGANICA.

"". El 11 de julio de 1.820 los Escribanos de Cámara y oficiales de las Escribanías del extinguido Consejo de Castilla solicitaban de las Cortes el aumento de sus emolumentos (A.C.D., Serie General, legajo 32, expediente núm. 163).

"". A.C.D., Serie General, legajo 33 núm. 11. Las Cortes aprobaron esta petición en la sesión de 14 de agosto de 1.820, en la que al parecer fue modificado el Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia. Los dos Relatores y dos Escribanos pertenecerían a los extinguidos Consejos y asistirían con la dotación de sus respectivas jubilaciones y con opción a cubrir las vacantes de sus compañeros.

"". BULDAIN JACA. "Régimen político...", págs. 102 y 103.

Real Decreto de 6 de marzo, para la celebración de Cortes, que el Ministro de la Gobernación había enviado; actitud lógica natural por parte de la Junta Provisional cuando lo que preparaba era una convocatoria a Cortes constitucionales, no según las antiguas leyes. En cambio, resulta sorprendente que a esas alturas del proceso, el Ministro de la Gobernación, José García de la Torre, enviase una documentación completamente obsoleta. Puede pensarse bien en incapacidad por su parte, que es lo que a simple vista parece bien en un mal disimulado deseo de él o del Rey de que todavía pudiesen convocarse unas Cortes del Antiguo Régimen." Añade Buldaín Jaca"" más adelante que este envío estaba totalmente fuera de lugar, salvo que Fernando pretendiera el mantenimiento del Antiguo Régimen.

De los siguientes días tenemos todavía alguna noticia. Aunque el Consejo de Castilla ya no existía y sus empleados estarían dispersos, lo cierto era que sus archivos conservaban muchos expedientes sobre los que el Consejo estaba trabajando al tiempo de su supresión. Concretamente, un documento"" de la época nos informa que 46 expedientes en trámite quedaron paralizados por la repentina supresión. Por otro lado, el 13 de abril del mismo año, la Secretaría de Gracia y Justicia pedía al Archivo del Consejo que remitiera a esa Secretaría seis ejemplares de la colección de decretos de las Cortes constitucionales, si los hubiera en los libros correspondientes al Gobierno constitucional"".

"" BULDAÍN JACA, op. cit., pág. 131.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 50.170. Este legajo, como los dos anteriores, tienen por título "Papeles pertenecientes al Consejo Real que no tuvieron curso con motivo de las ocurrencias del día 7 de marzo de 1.820."

"" A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo 17.704. Torres-Cónsul contestaba en aquella ocasión "que no hay ni se pasó ejemplar alguno de dichos Decretos al Archivo porque no fueron de los que se mandaron recoger."

11. EL CONSEJO DE CASTILLA EN LA DECADA 1.823-1.833

1. El Consejo Real de Castilla en el año 1.823. Restablecimiento del Consejo.

Tras la llegada de los llamados "Cien mil Hijos de San Luis" entró también en España una Junta provisional llamada de España e Indias. Quedó instalada en Oyarzun el 9 de abril de 1.823. Estaba presidida por el General don Francisco Eguía, que en 1.814 comandara el ejército fernandino que se hizo con la capital. En su primera proclama a los españoles, la Junta declaró que no reconocía más origen de la autoridad soberana que el Rey y que todo volvía a la situación que estaba el 7 de marzo de 1.820 "".

La Junta era sólo una solución transitoria. Se vio preciso constituir una autoridad de mayor representatividad que se hiciera con el mando supremo durante la cautividad del Monarca. Si bien como señala Artola"", en un principio "se pensó en conferir estas funciones al Consejo de Castilla, pero la lentitud de su

"" BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, pág. 76.

"" ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", págs. 250 y ss.

funcionamiento bastaba a descalificarlo para asumir el poder". De esta manera se pensó en crear una Regencia.

El 23 de mayo el Duque de Angulema anunciaba la decisión de nombrar una nueva Regencia en una proclama dirigida a los españoles desde Alcobendas****: "...Ha llegado el momento de establecer de un modo solemne y estable la Regencia que debe encargarse de administrar el país, de organizar un ejército y de ponerse de acuerdo conmigo sobre los medios de llevar a cabo la grande obra de libertar a vuestro soberano. Este establecimiento presenta dificultades reales que la honradez y franqueza no permiten ocultar, pero que la necesidad debe vencer. La elección de S.M. no puede saberse. No es posible llamar a las provincias para que concurren a ella sin exponerse a prolongar dolorosamente los males que afligen al Rey y a la Nación"****.

Seguidamente anunciaba Angulema en la misma Proclama su intención de restablecer los Consejos de Castilla y de Indias, para que ellos mismos designaran los miembros de la Regencia****: "...En estas circunstancias difíciles y para las cuales no ofrece lo pasado ningún ejemplo que seguir, he pensado que el medio más conveniente, más nacional y más agradable al Rey, era convocar el antiguo Consejo Supremo de Castilla y el de Indias, cuyas altas y varias atribuciones abrazan el Reino y sus colonias ultramarinas, y el conferir a estos grandes Cuerpos, independientes por su elevación y por la situación política de los sujetos que la componen, el cuidado de señalar ellos mismos a los individuos de la Regencia. A consecuencia he convocado los precitados Consejos, que os harán conocer la elección. Los sujetos sobre los que hayan recaído sus votos ejercerán un poder necesario hasta que llegue el deseado día en que vuestro Rey dichado y libre, pueda ocuparse en consolidar su trono, asegurando al mismo tiempo la fidelidad que debe a sus vasallos..."****.

De esta manera vemos que se produce un primer

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608 núm. 13, "Creación de una Regencia durante la cautividad del Rey."

****. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", págs. 94 y 95.

****. Apunta Artola que fue declarado públicamente que los miembros de la Regencia habían sido elegidos por un colegio electoral formado por dos vocales de cada Consejo. (ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 251).

****. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", págs. 94 y 95.

restablecimiento de hecho del Consejo con este fin. Y los Consejeros residentes en Madrid se reunieron y obraron como si en la práctica el Consejo no hubiera sido suprimido. Como veremos más adelante, el restablecimiento de derecho del Consejo tendrá lugar con fecha 16 de junio de 1.823, por Real Cédula de la Regencia del Reino^{***}.

Los recién constituidos Consejos contestaron que no estaban facultados por las leyes del Reino para designar ellos mismos la Regencia. Sin embargo, sí presentaron una lista de personalidades que consideraban idóneas para este supremo destino, "y que eran los mismos que deseaba el Monarca"^{****}. De esta manera el 25 de mayo recayó el poder supremo en el Duque del Infantado, como Presidente, y en el Duque de Montemart, el Barón de Eroles, el Obispo de Osma y don Antonio Gómez Calderón^{****}.

La Regencia designó a su vez otros puestos: al Consejero de Castilla don Benito Arias de Prada le correspondió el 8 de junio de 1.823 la Superintendencia General de Vigilancia Pública. Señalaba Bayo que Prada se distinguió en este cargo por su crueldad con los vencidos^{****}.

Tras los días de asedio de Cádiz y la liberación del Rey, éste aprobaba un decreto que declaraba nulos todos los actos del gobierno llamado constitucional y que aprobaba todas las disposiciones de la Junta provisional de Gobierno y por la Regencia del Reino de Oyarzun y Madrid respectivamente^{***}.

Según Villa-Urrutia Fernando VII tras su liberación se reunió con el Duque del Infantado y don Víctor Damián Sáez, Ministro de Estado interino, para adoptar las

^{***}. Cfr. DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", documento XXXIV, págs. 167 y 168.

^{****}. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, pág. 96.

^{****}. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, pág. 96; y RICO Y AMAT, J., "Historia Política y Parlamentaria de España", Madrid, 1.861, tomo II, pág. 217; VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Absoluto", pág. 46.

^{****}. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", pág. 113.

^{***}. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, págs. 159-162. Real Decreto fechado en el Puerto de Santa María, el 1 de octubre de 1.823.

primeras medidas en orden a restaurar el régimen absolutista"". Por su parte el Rey con toda la Familia Real se trasladó seguidamente a Cádiz, donde quedó instalada temporalmente la Corte"".

De esta manera, a fines de mayo de 1823 el Consejo fue a instalarse de nuevo de la Casa de los Consejos. El Palacio había albergado durante el Trienio al Tribunal de Justicia y al parecer, se encontraba en un estado lastimoso"". Inicialmente se habilitó una Sala que había pertenecido al Consejo de las Ordenes, para Sala de Gobierno""; y poco después una más por haber aumentado el número de sus Ministros. También sabemos que al principio el Consejo no pudo tomar medidas por falta de medios económicos, pues no había dinero en el fondo de penas de cámara"".

En cuanto a los Ministros que había en el Consejo al restablecerse, sabemos que el 30 de mayo de 1823 la Regencia del Reino pidió una lista de los Ministros que entonces componían el Consejo Real, siendo entonces nueve los Consejeros más un Fiscal"".

Continuando con el hilo de los acontecimientos históricos, hemos visto ya cómo el Consejo de Castilla había sido restablecido. Por Real Orden de la Regencia del Reino, de 29 de mayo, se mandaba al Decano del Consejo para que al día siguiente por la mañana convocase

"" VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey absoluto", pág. 76.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608 núm. 5, expediente que contiene la proclama de la Regencia informando del traslado del Rey y la Familia Real a Cádiz.

"" "Habían desaparecido todos los efectos de estrado y oratorio, aún hasta la librería y tapicería de su propiedad, hasta incluso los braseros" (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 6).

"" El Consejo de las Ordenes pronto reclamó esa Sala, pero no se le pudo devolver inmediatamente hasta que no se ejecutaron las obras que el edificio necesitaba (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 6).

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 6.

"" La lista se remitió a la Regencia al día siguiente: los Ministros eran: don Bernardo Riega, Decano; don Antonio Alvarez Contreras, don Ignacio Martínez de Villela; don Juan González Carrillo; don José Antonio de Larrúmbide; don Francisco Marín; don Felipe Sobrado; don Tadeo Soler; don José Cabanilles; y el Fiscal don José Hevia y Noriega (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 5).

sin falta a los Ministros del Consejo que asistieron el día 23 al domicilio del Sr. Duque Presidente y a todos los demás Consejeros en quienes concurriesen iguales circunstancias que en aquéllos. Debían continuar en el Palacio de los Consejos sus funciones habituales, interrumpidas de hecho y no de derecho -sigue diciendo la Real Orden- el día 9 de marzo de 1.820"".

Al día siguiente, 30 de mayo, don Bernardo Riega, como Decano del Consejo, tras convocar a todos los Ministros, constituyó el Tribunal a las 10 de la mañana en la Casa de los Consejos, hasta entonces ocupada por el Supremo Tribunal de Justicia, en la sala habilitada al efecto"". De los Ministros habilitados del Consejo sólo no asistió don Felipe Sobrado, por motivos de salud"". Se aprobó entonces la Real Cédula correspondiente, que se distribuyó entre las distintas autoridades de la Nación"".

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609 núm. 22.

"". Ya hemos visto y así lo indica también Salustiano de Dios cómo en aquellos primeros momentos el Consejo carecía de locales adecuados (ver ESTRUCTURA ORGANICA, EL PALACIO DE LOS CONSEJOS), y del dinero necesario para ponerlo en funcionamiento. Incluso faltaba el número preciso de Consejeros para atender cada una de las Salas, hasta el punto que el Ministerio de Gracia y Justicia en una minuta de oficio de 28 de julio de 1.823 era partidario de que en atención a las circunstancias se formaran solamente dos Salas y que se despachase en ellas indistintamente todos los negocios de las cinco habituales (A.H.N., Consejos, legajo 11.887 núm. 4 y DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", pág. XCIII).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609 núm. 22.

"". He aquí el texto que se acompañó con cada Real Cédula: "Remito a V. de orden del Consejo el adjunto ejemplar de la Real Cédula, por la cual se manda que el Consejo Real continúe por ahora en el ejercicio de sus funciones, interrumpidas por el pretendido Gobierno constitucional, con lo demás que se expresa, a fin de que disponga su cumplimiento en la parte que le toca, comunicándola al mismo efecto a las Justicias de los pueblos de su partido; y del recibo me dará aviso. Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 23 de junio de 1.823." En cuanto a las autoridades a las que se remitió esta Real Cédula, fueron las siguientes: 28 de junio: se remitieron a la Chancillería de Valladolid el competente número de ejemplares para Gobernadores, Corregidores y Alcaldes Mayores de su distrito, y los correspondientes para el propio Tribunal; también el 28 de junio se remitieron ejemplares a la Sala; el 4 de julio a la Audiencia de Extremadura y a la de Sevilla, al Comisario

En la nueva etapa del Consejo, nuevamente una de sus primeras misiones era rehacer los inventarios de asuntos acaecidos durante el Trienio y hacerse con los correspondientes expedientes ya tramitados o en tramitación. Para ello, el Consejo pleno en providencia del 31 de mayo mandaba a los Escribanos que habían servido en el Tribunal Supremo de Justicia que pasasen listas de todos los negocios que tuviesen en sus respectivos oficios con expresión de su estado y por clases, según las distintas atribuciones de que conoció dicho Tribunal. En la providencia se pedía también que en las listas se distinguiesen los expedientes del Consejo de aquellos que correspondiesen a la Cámara o a los Consejos de Indias o Hacienda. Para la ejecución de lo acordado fue comisionado el Consejero don Tadeo Soler, el 5 de junio de 1.823'"".

Por otro lado, sabemos que en aquella época existía un gran desorden en la oficina de la Escribanía de Gobierno del Consejo. La falta de orden de los expedientes y papeles impedía el trabajo eficaz de esta importante oficina. Por ello mismo el Fiscal solicitaba del Consejo la visita de la Escribanía para hacer un reconocimiento de sus papeles y comprobar su estado. De esta manera el Consejo dio comisión al Consejero Sr. Cabanilles para que investigara esta oficina. Participarían también en esta comisión el Escribano de Gobierno don Valentín Pinilla y como Secretario de la misma el Escribano de Cámara don Antonio Martínez'"".

También el Consejo en providencia del 3 de

General de Cruzada, al Secretario del Consejo de Indias, al Decano del Tribunal de la Rota, a los tenientes de Villa, al Secretario del Consejo de Ordenes, al de la Cámara, al Escribano de Gobierno de la Corona de Aragón, al Archivero del Consejo Real, al Secretario de la Asamblea de la Orden de San Juan, a las Secretarías de Estado y del Despacho; el 5 de agosto a la Chancillería de Granada; el 8 de agosto al Secretario del Consejo de Ordenes; el 13 al Acuerdo y Ministros de la Audiencia de Asturias y también al Subdelegado de la Provincia Marítima de Asturias; el 26 al Consejo de Hacienda; el 16 de septiembre a la Audiencia de Galicia; y el 17 al Capitán General de Galicia y al Consejo de Guerra, (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609 núm. 22).

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.617 núm. 2. En auto fechado el 3 de julio de 1.823 se mandaba que "con las listas remitidas por los Escribanos de Cámara del extinguido Tribunal Supremo de Justicia formen piezas separadas para que en cada una se pueda proveer lo corriente sin confusión..." Si alguno no cumplía con lo mandado con la mayor brevedad, sería castigado con multa de 50 ducados.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 55.

junio de 1.823 solicitaba del Ministro de Gracia y Justicia le remitiese un cierto número de ejemplares de cada uno de los Decretos expedidos por la Junta Provisional de Gobierno de España e Indias desde su instalación. El Consejo necesitaba estas disposiciones para la resolución de los distintos recursos que ya se le habían presentado y que se le presentarían en los sucesivos"".

De esta manera comenzaba para el Consejo la llamada Década Ominosa, en la que muchas cosas iban a cambiar para el Supremo Tribunal. En estos años de "violentas fluctuaciones y bandazos irracionales", en expresión de Fontana"", el Consejo Real pasaría a un segundo plano e iría perdiendo paulatinamente buena parte de sus competencias. Es por tanto un década de tensiones políticas y de revisión de la Administración del Antiguo Régimen.

Y las medidas y reformas no se hicieron esperar. Así por Real Decreto de 20 de mayo del mismo año se establecía una Superintendencia General de Pósitos del Reino y se exoneraba al Consejo de Castilla del conocimiento de los asuntos contenciosos del ramo. Este sector había estado encomendado a la dirección y gobierno del Consejo desde hacía más de dos siglos. Sin embargo, al parecer la atención del Consejo no había conseguido todos los resultados favorables que exigía el fomento de la agricultura y el bien del Reino. Se acumulaban los expedientes de este ramo, cuyo despacho no podía ser atendido con la debida rapidez y atención por los Ministros del Supremo Tribunal"".

Conocida esta Real Resolución, el Consejo estudió el asunto, quizás el primero importante tras la Restauración. En su informe, los Fiscales manifestaban que "no sólo es competente el Consejo para conservarlo en toda su fuerza y vigor, sino que le pertenece esencialmente por su misma institución afianzado en nuestras leyes y que en sus manos han tenido estos establecimientos todos los progresos y mejoras de que han sido susceptibles según las circunstancias, sin que en tiempo alguna hayan dimanado del Consejo las desventajas y decadencia que hubiesen experimentado, ni ésta puede ser objeto de comparación con la prosperidad que se les atribuye mientras se manejaron por

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.602 núm. 32.

"" FONTANA, J., "La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833", pág. 42.

"" A.H.N., Consejos, legajo 6.086, Consulta de Oficio del 1 de octubre de 1.823.

sus manos han tenido estos establecimientos todos los progresos y mejoras de que han sido susceptibles según las circunstancias, sin que en tiempo alguna hayan dimanado del Consejo las desventajas y decadencia que hubiesen experimentado, ni ésta puede ser objeto de comparación con la prosperidad que se les atribuye mientras se manejaron por la Superintendencia General...". Continuaba el Fiscal expresando en un largo informe las grandes ventajas logradas por el gobierno del Consejo para este ramo de pósitos y para el bien público.

Sin duda el Real Decreto de 20 de mayo suponía un nuevo golpe al prestigio del Consejo, premonición de lo que sería la llamada Década Ominosa. El Consejo de Castilla empezaba ya a comportarse como una institución que se veía herida de muerte. En el mismo texto del Real Decreto se vertían contra la institución acusaciones antes jamás oídas: incapacidad para atender debidamente sus cometidos, falta de conocimientos de sus Consejeros, causa de retrasos perjudiciales incalculables al interés público...

El Consejo en su consulta al Monarca de 1 de octubre arremetió duramente contra este decreto en defensa de la institución. En primer lugar manifestaba, como ya lo habían hecho los Fiscales en su informe, la gran labor realizada por el Consejo en las tres etapas de gobierno de este ramo. Seguidamente alegaba la estrecha relación de esta competencia con las demás del Consejo y, por tanto, las trabas que ello supondría para el ejercicio de su alto cometido". Pero quizás lo que más dolía al Supremo Tribunal era la manifiesta desconfianza oficial en la eficacia de la institución: "...si al menos fuese para aliviarle de tan gran cúmulo de negocios o para conferirle otras competencias..." Pero lo que sin duda le resultaba insoportable era que las razones alegadas fueran su incompetencia para entender y conocer de dichos asuntos:

"... A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.086, consulta del 1 de octubre de 1.823.

"... Que no pudiendo dejar de conservar el Consejo el conocimiento de todo cuanto tiene relación con el buen orden, tranquilidad y sosiego de los pueblos, con el mayor fomento y prosperidad de su agricultura, comportamiento y conducta de sus Ayuntamientos y Justicias en el manejo de los fondos públicos y en otros muchos objetos de su particular interés, no podrá dictar con todo el acierto necesario las providencias convenientes en todos estos ramos, no continuando con el de pósitos, cuyo buen régimen, conservación y aumento influye tanto en sus cosechas, abastecimiento y provisión de plazas y mercados, confianza y respeto para consus alcaldes y concejales..." (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.086, consulta del 1 de octubre de 1.823).

hasta entonces el Consejo siempre había sido considerado como una autoridad capaz de gobernar y ejercer eficazmente sus cometidos"". Ahora su eficacia era públicamente puesta en tela de juicio.

Por otro lado, el Consejo sentía también que esta medida anunciaba el preludio de la desmembración del sistema del Antiguo Régimen"", del cual sin duda el Consejo de Castilla era uno de sus pilares "". Advertía así el Consejo al Monarca de lo necesario que era en aquellas difíciles circunstancias que se salvase el prestigio y la integridad del Consejo de Castilla, si se quería salvar el Antiguo Régimen e incluso la propia Monarquía: "del Consejo de Castilla tan íntimamente unido con su Rey por la Constitución del Estado, que puede decirse que su existencia es inseparable de la de V.M., y que quien le ofende no puede hacerlo sin ofender a V.M. mismo" "".

Estaba muy acertado el Consejo al hablar en estos términos, pues con la desaparición de Fernando VII acabó también la existencia del Consejo de Castilla. Y

"". "...El ramo de pósitos a cargo del Consejo fue siempre un manantial fecundo de felicidad y alivio para los pueblos y de cuantiosos auxilios para el Erario y que si alguna vez estuvo en decadencia, provino de las fatales calamidades y circunstancias de los tiempos..." (A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta del 1 de octubre de 1.823).

"". "Cualquier alteración de este orden y particularmente en objeto de tan íntima relación con el interés general y felicidad de los pueblos, como es el de pósitos...podría facilitar la descomposición de todo el sistema y proporcionar a los enemigos de S.M. y del Consejo el logro de minar toda nuestra antigua constitución, introduciendo insensiblemente las abolidas instituciones de las llamadas Cortes de Cádiz y reduciendo al Consejo a tan limitada esfera, que ya no fuese nunca el depósito de las confianzas de S.M. y su descanso y alivio en las frecuentes y complicadas tareas de su gobierno." (A.H.N. Consejos, legajo 6.086, consulta del 1 de octubre de 1.823).

"". El Consejo solicita que S.M. tenga presente este dictamen, "no precisamente para conservar (al Consejo) la parte de autoridad que se le quita y que nunca echará de menos si consultase su comodidad particular, sino únicamente para exponer al bien común de la república con peligrosos proyectos, para mantener ileso y puro el buen nombre y reputación del Consejo de Castilla, para hacer respetar sus providencias y las que promulga de orden de S.M..." (A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio del 1 de octubre de 1.823).

"". A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio del 1 de octubre de 1.823.

muchos enemigos del Monarca vieron en esta institución al más claro representante de las instituciones del Antiguo Régimen agonizante. El Real decreto de 20 de mayo de 1823 era, evidentemente, el comienzo del fin definitivo: el Consejo incluso parecía haber perdido ya el favor del Rey mismo.

La primera cuestión que se nos plantea es por qué Fernando VII cambió tan radicalmente de actitud ante el Consejo. No olvidemos que el decreto sobre los pósitos tenía fecha de 20 de mayo de 1823, es decir, fue una temprana medida del gobierno recién restablecido.

De un lado, el Monarca tuvo tres años para reflexionar rendidamente sobre los males que aquejaban a sus reinos. La experiencia del Trienio era lo suficientemente aleccionante, como para estudiar nuevos rumbos y reformas. Por otro lado, Fontana nos indica que Fernando inició su segunda restauración "con un gobierno netamente ultra"****. Quizás pudo haber alguna reacción contra los miembros del Consejo de Castilla, por su actitud durante el Trienio -no olvidemos, por ejemplo, que varios de sus ministros colaboraron abiertamente en el Supremo Tribunal de Justicia-. Es significativo que el Presidente Infantado presentase la dimisión a los pocos meses de restablecido el Consejo, a finales de 1823, y que ello coincidiera a su vez con el nombramiento de un nuevo Gobierno por el rey, de signo más reformista****. No sabemos, por otro lado, si esta dimisión tuvo alguna relación con el destierro que le impuso el Monarca en 1820, al estallar la revolución.

Lo cierto de todo ello es el planteamiento reformista del Monarca con respecto al Consejo y a su Administración, a partir de 1823. Y junto a ello, las depuraciones y bandazos políticos, que afectarán como veremos, también muy seriamente a este Supremo Tribunal.

****. FONTANA, J., op. cit., pág. 174.

****. "En diciembre de 1823, obligado por las presiones de los aliados, Fernando nombra un ministerio más presentable, de claro matiz reformista. Emprende la difícil tarea de restablecer la desquiciada Administración del Absolutismo, ya que resulta impensable volver a la situación que había conducido a la quiebra de 1820" (FONTANA, J., "La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833", pág. 42). Es muy interesante al respecto la siguiente afirmación de F. SUAREZ: "el que, como afirma Bois-le-Comte, los afrancesados de la escuela imperialista llevarán la dirección de los negocios del Estado a partir de 1823, no es, ni mucho menos, una afirmación hecha a la ligera..." (SUAREZ, F., "La crisis del Antiguo Régimen en España", pág. 136).

2. Causas políticas

a) Purificaciones políticas en el Consejo Real

Señala Villa-Urrutia^{***} cómo la Regencia había dado un Decreto, confirmado más tarde por el Rey, en el que mandaba que se purificasen los empleados públicos^{***}. Consecuencia de un Informe de una Comisión creada por la Junta Consultiva de Gobierno, conocido como Informe del Ministro Ballesteros, fue suspendida la Real Cédula sobre purificaciones y fue reconsiderado el asunto "porque era evidente que se habían originado abusos o desajustes"^{***}. El profesor Escudero destaca dos vicios fundamentales: las dilaciones que se cometían en los procesos, y las injusticias en que en ocasiones se incurría.

^{***}. VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto", pág. 104.

^{***}. "La idea de purificar se le ocurrió por primera vez a los gobernantes de Cádiz en la Guerra de la Independencia y fue seguido después en 1.814 para acrisolar el patriotismo de los empleados de todas manchas de la usurpación de Bonaparte. No bien experimentada todavía la eficacia y oportunidad de los medios de purificar sin que resultase injusticia, se repitieron éstos en 1.823 con el mismo recto deseo de expurgar la fidelidad de los que entrasen en empleos o activamente de toda sombra revolucionaria, y de asegurar la adhesión del Rey..." (del Informe de la Junta Consultiva de Gobierno, de mayo de 1.823, en ESCUDERO, J.A., "La Junta Consultiva de Gobierno", op. cit., pág. 152).

^{***}. ESCUDERO, J.A., "La Junta Consultiva de Gobierno", págs. 112 y ss. La solución que la Junta proponía buscaba una calificación positiva de los expedientes: declarar a un súbdito buen español y ciudadano, fiel al Monarca. Y ello frente a una calificación negativa y afrentosa. Esta idea de Escudero concuerda con lo afirmado por Artola, que no se buscó tanto perseguir a los liberales, como conocer a los verdaderos absolutistas.

Por otro lado, señala Escudero cómo el principal defecto radicaba en el criterio de selección de los jueces, ya que se valoró exclusivamente la fidelidad al gobierno del Rey, pero se dejó a un lado otras consideraciones sobre la aptitud para puesto: "no se reparó si reunían o no condiciones de imparcialidad y competencia"****.

Inquirido por la Regencia, el 4 de junio el Consejo presentaba su dictamen acerca de la separación y reposición de los empleados en los ramos de la Administración. De esta consulta, junto con la consulta de 23 de junio de 1.823 saldrá el Real Decreto de la Regencia que fijaba las reglas para purificar a los empleados públicos de la Administración. Como nos interesa especialmente conocer la opinión y criterio del Consejo sobre el asunto y las repercusiones que tuvieron sus consultas en el Decreto definitivo, vamos a desglosar algunos puntos de las mismas.

El 4 de junio tenía el Consejo la primera de estas consultas. Señalaba en aquella ocasión el Consejo las dificultades que tendría la calificación de la conducta política: "el principal obstáculo contra las calificaciones extrajudiciales, que habrá de hacer cada Consejo, Tribunal y organismo sobre sus empleados durante el Trienio, es la dificultad de encontrar informantes que quieran decir francamente cuanto sepan acerca de la conducta política del empleado. Esto se funda en el temor de ver descubiertos y presentados en juicio sus informes. Así, si se conserva el secreto de éstos de forma que se les inspire confianza, a los acusados se les haría juicio".

Continuaba describiendo el Consejo las características que podrían tener estos procesos: "No serían causas formalmente criminales en que se tomase declaración al empleado y se le hiciesen cargos. Tal procedería sólo cuando además de la tacha que hiciera indigno al empleado de la confianza del Gobierno, resultase del expediente un delito señalado por las leyes. El juicio que propuso el Consejo es sólo para curarse en salud el empleado y desmentir con hechos y pruebas incontestables lo que constase en el expediente gubernativo. Aquella obraba ya contra él y era a su cargo desvanecerlo con audiencia fiscal"****.

Finalmente el Consejo no consideraba imprescindibles algunas garantías procesales de un proceso ordinario: "El Consejo no cree de absoluta necesidad que se oiga en justicia a aquéllos a quienes se excluía del empleo

****. ESCUDERO, J.A., "La Junta Consultiva de Gobierno",
pág. 112.

****. A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio
del 4 de junio de 1.823.

que obtuvieron de S.M. antes del 7 de marzo de 1.820 y en el que han continuado, o a los que habiendo logrado otro, no se les reponga en el que tenían en aquella época, con tal de que del expediente gubernativo resulte bien probada la tacha que les haga indignos y así sean calificados por la Corporación o Junta que les juzgue"".

Sabemos que estos criterios fueron recogidos en el Decreto de 27 de junio. Sin embargo, no fueron aprobados unánimemente por todos los Consejeros hasta entonces habilitados. Tres Ministros -Riega, Martínez de Vilella y don Tadeo Soler- manifestaron sus discrepancias en sendos votos particulares"".

Ofrece indudable interés otra consulta posterior del Consejo, que lleva el título genérico "Dictamen ante el expediente sobre arresto de liberales". Aunque sin una seguridad absoluta, parece por las fechas que puede ser identificado con la consulta celebrada el 23 de junio -el dictamen fue remitido para celebrar consulta con la Regencia el 19 de julio-. En realidad conservamos sólo el dictamen del Fiscal, orientativo quizás de la opinión del Consejo sobre las llamadas "purificaciones políticas":

"...desde el uno al otro extremo y ángulo de España se ve el mismo espíritu de persecución contra los amantes de las innovaciones. Pero el Gobierno, ¿habrá de obrar por el mismo impulso? ¿podrá dejarse llevar de la pasión de la venganza como el populacho indiscreto e imprudente? Bien lejos de eso, ya hemos visto su mucha circunspección con los hombres al parecer más execrables y dignos de ejemplar castigo..."

Seguidamente el Fiscal sugería una serie de artículos que el Consejo podría proponer a la Regencia. Pedía que sólo se castigase a los absolutamente necesarios y a los que no se considerase culpables se les pusiese inmediatamente en libertad. También añadía una categoría de doce personas dignas de castigo"".

"" A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio del 4 de junio de 1.823.

"" Lamentablemente no ha aparecido el texto de estos tres votos particulares.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608 núm. 5.

"" El Consejo estudió el asunto y lo remitió a consulta con S.A.S. la Regencia del Reino tal y como lo tenía entendido el Ministro del Consejo don José Cabanilles, el 19

Nos interesa para nuestro estudio un repaso del Real Decreto de la Regencia sobre la separación y reposición de los empleados en los ramos de la Administración. Este Real Decreto de 27 de junio sería precisamente el aplicado sobre los Consejeros y subalternos del mismo Consejo de Castilla y de otras muchas instituciones. Estas fueron suscintamente las reglas o criterios de purificación política: 1. Cesarían inmediatamente todos los empleados civiles que no hubieran sido nombrados por el Rey antes del atentado de 7 de marzo de 1.820, quedando sin efecto los honores concedidos desde esa fecha; 2. Serían repuestos todos los empleados nombrados antes de ese día, que hubieran sido separados por no ser afectos al sistema constitucional y hubieran conservado seguidamente su buena opinión; 3. Se declaraba que no habían perdido ésa los referidos empleados que después de haber sido separados de sus destinos no constase que hubieran ayudado en favor del gobierno revolucionario con sus escritos, hechos positivos o proclamación pública de sus máximas; 4. Los empleados nombrados por el Rey antes del 7 de marzo de 1.820, que al restablecimiento del sistema constitucional no quedaron separados de sus destinos, serían sujetos a purificación a efecto de continuar o ser repuestos. También los que desde esa época hubiesen obtenido ascensos de escala o extraordinarios, o variado su destino; 5. Para esa purificación se tendrían por suficientes los informes reservados de su conducta política y calificación de la opinión pública...; 6. Los Ministros ya repuestos en el Consejo de Castilla procederían a la purificación de los no repuestos; de sus Escribanos de Cámara y demás subalternos; de los Regentes, Oidores y Alcaldes del Crimen de las Chancillerías y Audiencias de la Península e islas adyacentes... Lo mismo haría el Consejo de Indias y Tribunales superiores de provincias en sus ámbitos respectivos; 7. (...); 8. (...); 9. La continuación o reposición de unos y otros empleados antiguos serían y se entenderían también sin perjuicio de las reclamaciones que cualquier particular pueda tener contra ellos por el abuso de sus respectivas funciones; 10. Los que en virtud de esta calificación no lograsen ser repuestos tendrían derecho de reclamar ante los mismos Tribunales y Juntas, los cuales sin forma de juicio procederían a tomar nuevos informes de otras personas con las calidades requeridas en el artículo 5, y en igual número al menos, con cuyo nuevo examen determinarían finalmente lo que creyesen justo sin que de esta segunda calificación se pudiese presentar reclamación. Unos y otros informes serían sellados y archivados enseguida por exigirlo así la conveniencia pública, sin poderse hacer de ellos otro uso; 11. De la ejecución de todo cuanto se encomendaba a los

de julio de 1.823. Aunque no salió a corto plazo una resolución sobre esta consulta, una nota dice que fue resuelta el 5 de enero de 1.828. Lo cierto es que si no fuera la mencionada consulta del 23 de julio, sin duda influiría en el Real Decreto de 27 de junio sobre esta materia.

Consejos, Tribunales y Juntas, así como de los incidentes que se pudieran producir se daría cuenta al Gobierno sucesivamente (...) 27 de junio de 1.823***.

De esta manera, los Decretos de 27 de junio de 1.823 y más tarde el de 26 de octubre del mismo año suspendían las purificaciones, tal y como se hacían hasta entonces. Y establecían las nuevas reglas de calificación de conducta política****. El asunto sin embargo fue sometido a reflexión y estudio. El Consejo de Castilla y el miembro de la Junta Consultiva de Gobierno Sr. Alameda eran partidarios de que el Rey no dirimiese personalmente los asuntos de purificaciones, como había aconsejado la Comisión de Purificaciones creada por aquella Junta: aportaban como motivos la insuficiente seguridad del Trono, la remisión multitudinaria de expedientes a los que el Monarca apenas podría hacer frente, así como el improcedente papel de un Monarca presidiendo tales juicios. Se propuso por el contrario que correspondiera al Rey la decisión de otorgar perdón, al margen del procedimiento habitual de justicia. Pero sí debían mantenerse las Juntas purificadoras****.

El 1 de julio el Consejo expedía la Real Cédula correspondiente con el mencionado decreto de 27 de junio. Más adelante serían desarrollados algunos apartados de esta Real Cédula. Así, por ejemplo, la Real Orden comunicada al Consejo el 3 de septiembre de 1.823 fijaba los plazos para presentar los recursos mencionados en el artículo 10 de la Real Cédula: cuando era denegada una reposición en una plaza por no haber pasado la purificación, el interesado tenía como plazo para presentar su recurso los diez días siguientes a la notificación de la decisión. Pasado el plazo no se le admitía la reclamación y se llevaba a efecto la expresada denegación****.

De esta manera se generalizó un proceso de calificación de la conducta política de todos los empleados públicos. El 22 de septiembre se mandaba instalar juntas de purificación en todas las provincias y el 30 de septiembre se determinaba que el juicio de purificación en segunda instancia llevara consigo la separación del destino en caso

***. A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio del 4 de junio de 1.823.

****. Artola al hablar del decreto de 27 de junio señala que aquel texto fue aprobado no tanto para eliminar a los liberales cuanto para conocer a los auténticos absolutistas (ESCUDERO, J.A., "La Junta Consultiva de Gobierno", pág. 99).

****. ESCUDERO, J.A., "La Junta Consultiva de Gobierno", págs. 112 y ss.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 3.

de ser negativo"".

El Consejo pleno se reunió el 9 de julio para llevar a efecto lo mandado en esta Real Cédula, en lo referente a la purificación de los empleados del propio Consejo. Y estudiado el asunto, se aprobó el siguiente Real Decreto: "Madrid, 9 de julio de 1.823. La Escribanía de Gobierno, tomando razón de los dependientes de este Supremo Tribunal y de sus oficinas subalternas, forme listas expresivas de ellos, por clases y oficinas; igual diligencia practique respecto de los dependientes de las Secretarías de la Cámara y los de la Presidencia, a cuyo fin se pasen los oportunos oficios a los respectivos señores secretarios, haciendo saber a aquellos inmediatamente que los que se hallen en los casos que señala la Real Cédula del primero del corriente mes, ocurran a este Supremo Tribunal por el conducto de la misma Escribanía de Gobierno con las solicitudes que crean convenientes, a efecto de que tenga cumplimiento la expresa Cédula y puedan acordarse las providencias que correspondan"".

Evidentemente, al proceso de purificaciones tuvieron que someterse Ministros y subalternos del Consejo de Castilla. Aunque este proceso aparece estudiado ya en el capítulo correspondiente a la Estructura Orgánica del Consejo"" , según cada categoría profesional, nos interesa ver algún aspecto de las purificaciones en conjunto, así como sus consecuencias para los ministros del Consejo"".

En primer lugar, podemos preguntarnos por tanto cómo afectaron a los Consejeros y por tanto, cuáles eran las opiniones políticas de éstos y cómo influyeron tales opiniones en el desenvolvimiento de la institución.

"" . ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal",
pág. 253.

"" . A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608
núm. 9.

"" . Se puede ver también en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 con el título genérico "Expediente General de Purificaciones".

"" . Algunos subalternos del Consejo no resultaron purificados. Una noticia anecdótica fechada el 4 de julio de 1829 nos informa que el oficial subalterno del Consejo, don Pedro García Teresa, en 1.824 le había denegado la purificación y tuvo que dejar su puesto entre los empleados del Consejo. Pues bien, en aquella fecha solicitaba del Consejo, al no ser posible la rehabilitación, al menos se le remitiesen los documentos que entonces presentó. Estudiado el asunto por el Consejo, se le respondió negativamente: "No ha lugar" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 3).

Un escrito fechado el 13 de julio de 1.823 nos proporciona valiosos datos para entrar en esta cuestión. Al parecer, inicialmente había un clima de desconfianza dentro del Consejo hacia varios de sus miembros, probablemente debida a su conducta dubitativa o colaboracionista bajo el Trienio. Lo cierto es que parece hubo una dilación en la tramitación de las purificaciones, intencionada o quizás no, pero que impidió a siete de los Consejeros asistir a las reuniones del Supremo Tribunal durante dos meses. Más adelante veremos también qué opinión política tenía el Gobernador del Consejo sobre cada Consejero, información que conocemos gracias a un documento confidencial filtrado al Monarca y guardado celosamente por el Rey en su archivo privado.

El 13 de julio de 1.823 varios Ministros del Consejo de Castilla, todavía no purificados, remitían una representación a la Regencia solicitando la calificación de su conducta política"".

La instancia no hizo sino acelerar el proceso de purificación, de tal forma que el propio Consejo al parecer dictó una providencia el 16 de julio que suponía la purificación provisional de todos los Consejeros. En las semanas siguientes fueron publicadas las providencias del Consejo pleno que dejaban en situación de purificados a estos Consejeros -el 23 de julio, Puig y Torres Cónsul; el 24 el Sr. Adell; el 30 de julio don Ramón López Pelegrín; el 1 de agosto don Alejandro Dolarca; el 22 de agosto don

"" "Serenísimo Sr.: Los Ministros del Consejo Real que abajo firman representan a V.A. con el respeto debido: que publicada la Real Cédula de 1 del corriente han esperado hasta hoy su indudable reposición, apoyados así en la general opinión pública favorable de su constante honrada conducta como, aún más, principal y propiamente en el concepto ventajoso adquirido en el desempeño de sus respectivos destinos después del 7 de marzo de 1.820; de lo cual han sido testigos presenciales los Ministros que componen actualmente aquel Supremo Tribunal. Por manera que no les fue imaginable a los exponentes el sospechar de no ser repuestos en fuerza de lo notoriedad de su derecho depositada en los individuos del mismo Consejo. Mas no pudiendo soportar los exponentes por más larga dilación el menoscabo de su honor, convencido siempre con esmero al través de tantas penalidades en los cambios de las cosas públicas.

A V.A. suplican se digne decretar la inmediata y perentoria reposición de los exponentes en sus respectivas plazas del Consejo Real como notoriamente dignos y acreedores a él desde el momento de su formal instalación. Justicia y gracia que se prometen de la generosa protección de V.A.S. Madrid, a 13 de julio de 1.823. Puig, López Pelegrín, Blanes, Dolarca, Adell, Hermosilla, Torres" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 2).

Miguel Antonio Blanes; el 27 de agosto el Sr. Hermosilla-
"".

También presentó instancia el 12 de agosto don Joaquín Cisternes, Consejero nombrado de Castilla en 1.820 pero que no pudo tomar posesión de su plaza el 7 de marzo de ese año. Seguía cobrando como Consejero de Guerra y deseaba ser purificado por el Consejo de Castilla o que se le siguiera considerando Ministro del Consejo de Guerra. El 4 de septiembre una providencia del Consejo le tenía por purificado por el Consejo Real, pasando seguidamente a jurar su cargo en el Consejo"".

En aquella ocasión sólo un Ministro del Consejo no pasó la purificación. Fue el conocido don Justo María Ibar Navarro, quien presentando instancia en el mismo sentido, se le dio una "dilata", hasta que se decidiera el juicio de su purificación. Sin embargo, al menos se le concedió la mitad del máximo de sueldo hasta aquel momento. Ibar Navarro había sido Consejero de Estado durante el Gobierno Constitucional"".

En ocasiones fue el mismo Consejo el que animó a subalternos a que procedieran a su purificación. Este fue el caso por ejemplo de los procuradores, que al parecer acudían a esta calificación con extremada lentitud"".

En otro orden de cosas, en noviembre de 1.823 cubría Fernando varios de los principales cargos del Estado. El Duque del Infantado era designado para la Comandancia de la Guardia Real y la Presidencia del Consejo de Castilla. Sin embargo, Infantado renunciaría a este puesto y al Monarca se le presentó la disyuntiva de la elección de un nuevo Presidente o Gobernador del Consejo.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609
núm. 22.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040
núm. 2.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040
núm. 2.

"" El 20 de septiembre de 1.823 aprobaba el Consejo el siguiente Decreto: "Dése orden al número de los Procuradores por el conducto de su Decano, para que les haga saber que en el preciso y perentorio término de 8 días, ocurran a este Supremo Tribunal los que no lo hubieren ejecutado en solicitud de purificación como está mandado, en inteligencia de que transcurrido dicho término, el que o los que no lo hubieren verificado, quedarán en el mismo hecho suspensos en el uso y ejercicio de sus respectivos oficios." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608 núm. 9).

Curiosamente en este relevo en el Gobierno del Consejo de Castilla el Monarca siguió fielmente los consejos de un informe confidencial hay conservado en los Papeles Reservados de Fernando VII. En este informe, el autor proponía que para que el Consejo pudiera "cooperar útilmente con el Ministerio y Consejo de Estado a la Restauración de la Monarquía, se necesita poner a su frente con el carácter de Gobernador, un Ministro práctico e inteligente del mismo Tribunal con lo cual al paso que se economizan los sueldos de un Presidente, se facilitará el despacho de los negocios, la administración de justicia y la reorganización de los tribunales de provincia"". Y fue esto precisamente lo que hizo el Rey.

Por Real Decreto de S.M. de 2 de diciembre de 1.823, comunicado por el Secretario de Estado y del Despacho de Marina, era conferido en propiedad el gobierno del Consejo de Castilla a don Ignacio Martínez de Villela, con el título de Gobernador"". Martínez de Villela fue recibido por el Rey al día siguiente"". El Gobernador no era así el más antiguo de los Consejeros -el Decano Riegasino un Ministro más moderno. Las medidas consiguientes que adoptó Martínez de Villela supusieron, como veremos, importantes cambios en el Consejo y en su línea de actuación.

1.824 sería también año de importantes acontecimientos en el seno mismo del Consejo. Aquel mismo año nada menos que once Ministros del Supremo Tribunal fueron jubilados por Real Decreto. Sin duda una medida de este género debía responder a graves motivaciones, que intentaremos descubrir.

La clave de este asunto quizás se encuentra en un oscuro documento que Fernando VII guardaba en su archivo privado"". Son unos cuantos folios que recogen un informe reservado presentado por el Gobernador del Consejo, don Ignacio Martínez de Villela, y fechado el 12 de febrero de 1.824. Este escrito parece tener las respuesta a aquel importante suceso.

"" A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, folios 198-200.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609 núm. 27; también consulta de oficio del 3 de diciembre de 1.823; también lo menciona BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, pág. 178.

"" A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio del 3 de diciembre de 1.823.

"" A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, Exposición de don Ignacio Martínez de Villela.

En su exposición Martínez de Villela hacía varias observaciones relativas a los Ministros del Consejo de Castilla y de las Ordenes, y acompañaba dos listas de personas: una con las que consideraba que debían ser separadas de sus empleos y otra con personas dignas de aquellas plazas. Se expresaba así el Gobernador del Consejo:

"...Mi constante amor a la sagrada persona de V.M. me han presentado éstas y otras reflexiones como de la mayor transcendencia, las cuales no me dejan ya dudar un momento que sin purificar ante todas cosas y pronto el Consejo de V.M. y completar su número con otros Ministros sin tacha y acrisolados, en vano se quiere dar un paso hacia la felicidad y calmar la justa inquietud de la Nación..."

Parece por tanto que la purificación de varios de los Ministros del Consejo nació de su propio Gobernador, quien la solicitó personalmente del Monarca. Así parece deducirse también de otro párrafo del escrito en el que el Gobernador aclaraba los motivos de su petición al Rey:

"...Ojalá correspondiera a mis ardientes votos por la gloria de V.M. y por el bien de nuestra Patria la indicación que me he atrevido a hacer a V.M. de los males que he tocado de cerca y que se siguen de continuar en el Consejo de V.M. los que directa o indirectamente han servido en la época anterior, igualmente que la manifestación de las personas que por su literatura, providad, odio justo a las novedades destructoras, y decidido amor a V.M. me han parecido a propósito para ser empleados en su primer Consejo, inspirar confianza a los vasallos de V.M. y procurar con desvelo su bienestar..."

Continuaba Martínez de Villela aportando un criterio de fijación de pensiones a los Ministros que podrían ser jubilados:

"Como entre los Ministros que deben ser separados hay diferencia en el número y calidad de sus servicios anteriores y en la conducta que ha tenido durante el gobierno

"" A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, Exposición de don Ignacio Martínez de Villela.

"" A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, Exposición de don Ignacio Martínez de Villela.

revolucionario, parece propio y justo que haga lo que corresponde en orden al sueldo que se les deje, pues no parece regular se les asigne el mismo a los que por debilidad u otros fines de puro interés se prostituyeron, que a los que pretendieron con instancia y lograron ser propuestos por el Consejo de Estado y ejercieron unos empleos rigurosamente constitucionales y de la mayor influencia en el sostén del sistema.

Esto podrá resolverse por un Decreto separado.

V.M. se dignará hacer el uso que estime de mis observaciones. Madrid, 12 de febrero de 1.824. Don Ignacio Martínez de Villela"****.

En su escrito, Martínez de Villela presentaba una lista de ocho Consejeros de Castilla, bajo el epígrafe: "Lista de los Ministros con quienes no puede contarse en las actuales circunstancias para nada bueno." Estos Ministros eran los siguientes: don Bernardo Riega, Decano, don José María Puig, don Manuel de Torres Cónsul, don Ramón López Pelegrín, don Juan Bautista Hermosilla, don José Montemayor, don Miguel Antonio Blanes y don Alejandro Dolarea****. En un apartado posterior, describía Martínez de Villela la situación y los destinos ocupados por estos personajes, a los que añadía los nombres de los demás Ministros del Consejo: don Antonio Alvarez Contreras, don Miguel Alfonso Villagómez, don Juan Antonio González Carrillo, don José Antonio de Larrúmbide, don Francisco Marín y don Francisco Javier Adell. Por su interés, para conocer la trayectoria política de estos Consejeros y comprender las causas de su depuración política, reproducimos las notas que el Gobernador recoge de sobre cada uno:

"Don Bernardo Riega continuó sirviendo en la Junta de Sanidad, en el Tribunal de la Comisaría General de Cruzada y percibiendo los emolumentos del Juzgado de Patrimonio Real; don José María Puig fue llamado a continuar en el titulado Supremo Tribunal de Justicia en marzo de 1.820 y declarados interinos estos destinos, pretendió con instancia y obtuvo la plaza en propiedad en dicho Tribunal, de que fue Decano; don Antonio Alvarez Contreras se halla muy achacoso y en la edad de 70 años; don Miguel Alfonso Villagómez sirvió desde marzo de 1.820 en el referido Tribunal Supremo de Justicia hasta que lo despidieron; don Juan Antonio González Carrillo continuó en la Junta de Sanidad; don José Antonio Larrúmbide continuó en la Comisión

****. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, Exposición de don Ignacio Martínez de Villela.

****. Curiosamente coincide esta lista con los Ministros del Consejo a los que inicialmente se les retrasó la purificación en el Consejo.

de la Fábrica de Ojalatas de Alcaraz; don Francisco Marín continuó en la Comisión de la Protectoría de la Casa de Desamparados; don Manuel de Torres-Cónsul fue Ministro del Tribunal Especial de Guerra y Marina; don Manuel López Pelegrín, Fiscal y Ministro del llamado Tribunal Supremo de Justicia, Secretario de Estado de Ultramar, y retirado con los honores de Consejero de Estado; don Juan Bautista Hermosilla, propuesto a su instancia y nombrado para Ministro de dicho Tribunal Supremo de Justicia; don José Montemayor, Ministro del Tribunal Especial de Guerra y Marina, y propuesto dos veces por el Consejo de Estado para el Tribunal Supremo de Justicia; don Francisco Javier Adell, Ministro Decano del Tribunal Especial de las Ordenes Militares; don Miguel Antonio Blanes, Ministro del Tribunal Especial de Guerra y Marina; don Alejandro Dolarea, Diputado a las llamadas Cortes por Navarra y Ministro del Tribunal Especial de las Ordenes Militares"****.

En una nota final pedía Vilella que don Antonio Alvarez Contreras y don Juan Antonio González Carrillo fueran jubilados con todos sus sueldos y honores de la carrera, por sus antiguos y buenos servicios"****.

Por otro lado, el Gobernador sugería una "lista de Ministros con quienes pueden reemplazarse los que se separen"****.

****. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, Exposición de don Ignacio Martínez de Vilella.

****. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, Exposición de Don Ignacio Martínez de Vilella. Parece por tanto que la jubilación de estos dos Consejeros no era debido a su conducta política sino, probablemente, por motivos de edad o salud.

****. Eran los siguientes: "Don Miguel Otal, Director interino del Canal de Aragón con honores del Consejo de Hacienda, Fiscal que fue de la Audiencia de Zaragoza y Asesor después de la Superintendencia del Ministerio de Hacienda; don Francisco Martínez de Galinsoga, Alcalde Decano de Casa y Corte; don Joaquín Almazán, Alcalde de la misma Sala; don Tadeo Ignacio Gil, Alcalde también de la propia Sala; don Luis de León, Alcalde de la referida Sala; don José Ignacio Llorens, Regente de la Real Audiencia de Cáceres; don León de la Cámara Cano, Corregidor de Madrid; don Gabriel Suárez Valdés, Oidor Jubilado de Granada; el Regente de Navarra, don Juan Garrido y López. (A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, Exposición de don Ignacio Martínez de Vilella). Todos ellos aparecían en la Guía de Forasteros del año siguiente -1815-, como miembros del Consejo Real, excepto el que era entonces Decano de la Sala de Alcaldes, don Francisco Martínez de Galinsoga, que tampoco aparece como miembro de la Sala (Guía de Forasteros del año 1815, págs. 79 a 82).

Curiosamente la carta de Martínez de Villela fue fechada apenas tres semanas después de la tensa consulta sobre la amnistía política, en la que al parecer se decantaron en el Consejo claramente las posiciones ideológicas. No sería desdeñable la suposición de que a partir de esta consulta el Gobernador y algunos Ministros de confianza planteasen la necesidad de eliminar o jubilar a aquellos Consejeros que presentaban tendencias pro-liberales.

Sabemos por un expediente del Archivo Histórico Nacional que finalmente el 20 de febrero del mismo año, apenas una semana después, fueron jubilados catorce Ministros del Consejo. En una primera tanda los Consejeros Sres. Riega^{***}, Puig, Villagómez, Larrumbide, Marín, Torres-Cónsul, Hermosilla, López Pelegrín^{***}, Montemayor^{***}, Adell, Blanes y Dolarea^{***}. Curiosamente otros dos Ministros del Consejo Real fueron jubilados el mismo día 20, pero por un decreto aparte. Fueron los Sres.

^{***}. Riega era entonces el Decano del Consejo de Castilla. He aquí la contestación que remitió: "...quedo enterado...del Real decreto, el qual venero con profundo respeto como uno de los más fieles vasallos de S.M. en la toga y fuera de ella..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 3).

^{***}. Don Manuel López Pelegrín dio acuse de recibo de su jubilación el 29 de febrero de 1824 (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 3).

^{***}. Varios documentos de distintos legajos se contradicen sobre este particular. El legajo 11.887 núm. 3 afirma que fueron ambos jubilados el 20 de febrero, pero a su vez no menciona a Alvarez Contreras y González Carrillo entre los jubilados ese día. Sabemos por el mismo expediente que Contreras y Carrillo fueron jubilados con seguridad el 20 de febrero, pues se conservan los decretos de jubilación. Creemos quizás acertada la información que ofrece sobre el particular el legajo 3.658 núm. 15 (Sala de Gobierno, Consejos Suprimidos, A.H.N.).

^{***}. Una Real Orden del Consejo pleno de 22 de febrero mandaba recoger los documentos que conservaran estos Ministros jubilados: "Recójanse de poder de los Sres. Ministros de este Supremo Tribunal a quienes S.M. ha tenido a bien jubilar todos los papeles que obren en su poder pertenecientes a él y a las Comisiones y encargos que les estaban confiados para que pueda dárseles el destino correspondiente; y a este efecto se les pase respectivamente el oficio oportuno" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm. 15). Concretamente las materias que se especifican como de más interés en cuanto a la recogida de documentos eran Universidades, Cementerios, Otras Comisiones y Archivo Secreto del Consejo.

Alvarez Contreras"" y González Carrillo. La explicación de esta discriminación nos la da el estudio de los mismos decretos de jubilación. Los doce ministros mencionados en primer lugar fueron jubilados con medio sueldo, mientras los Sres. Alvarez Contreras y González Carrillo, jubilados "por su avanzada edad y achaques", lo eran con todo su sueldo y a la vez se les premiaba con los honores de Camaristas de Castilla. Mientras unos eran de alguna manera castigados, dos eran premiados"".

Este expediente es fundamental para conocer la historia del Consejo Real de Castilla desde 1.820 hasta el final del reinado de Fernando VII. Es como si dijéramos un punto de inflexión en la institución. Hemos visto ya en los sucesos del periodo 1814-1820 cómo el Consejo de Castilla presentó algunos dictámenes de carácter moderado frente a opiniones más absolutistas. También en los primeros años de la llamada Década Ominosa el Consejo emitió dictámenes en esta línea. Así, aceptó la concesión de una amnistía restringida, frente a la negativa del Consejo de Estado; o cómo en el asunto de los señorios se opuso a las peticiones de los Nobles, proponiendo que los pueblos fueran eximidos del pago de las contribuciones correspondientes al Trienio.

Sin embargo, los miembros del Consejo serán ahora sometidos a una profunda depuración política. En aquel año 1.824 la mayoría de sus miembros dejaron de serlo por

****. "En atención a la avanzada edad y achaques de los Ministros de mi Consejo Real don Antonio Alvarez Contreras y don Juan Antonio González Carrillo he venido en jubilarlos con todos sus sueldos concediéndoles además los honores de la Cámara en consideración a sus dilatados y buenos servicios. Tendréislo entendido y lo comunicaréis a quien corresponda para su cumplimiento. Está rubricado de la real Mano. En Palacio a 20 de febrero de 1824. Al Gobernador del Consejo Real". (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 3).

****. Así dio acuse de recibo del decreto González Carrillo: "Yo, Sr. Gobernador, he quedado confuso y lleno de agradecimiento a tantas gracias y beneficios como me ha dispensado por término de mi carrera y así suplico a V. Ilma. se lo haga presente a S.M. y que hasta el último espíritu de mi vida pediré al Todopoderoso por la felicidad no sólo de mis Soberanos, sino de toda su Augusta Familia..." Por su parte, la carta de don Antonio Alvarez Contreras se expresaba en términos parecidos: "...Dígnese V.I. hacer presente a S.M. mi gratitud y reconocimiento por la honra y merced singular que debo a sus piedades: asegurándole de mi particular amor a su Soberana Persona..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 3).

repentino Real Decreto"". El motivo pudo ser sus opiniones transigentes con los movimientos liberales, o el haber participado en responsabilidades bajo el Gobierno constitucional, razón esta última que parece la más probable si seguimos lo expuesto claramente por el mismo Gobernador Villela en su escrito remitido al Monarca. El Gobernador proponía al Rey separar del Consejo a todos los sospechosos de connivencia con las ideas liberales.

Si comparamos la lista de Ministros que Villela propone separar del Consejo con los efectivamente separados, comprobamos que coinciden plenamente: los catorce propuestos por Villela fueron los catorce Ministros jubilados una semana después"".

El siguiente paso que nos sirva para confirmar esta tesis es la comprobación de la filiación política de los sujetos que reemplazaron en el Consejo a los Ministros jubilados. Antes sin embargo vamos a recoger dos datos más que refuerzan esta teoría.

En primer lugar, es fácil comprobar las ideas realistas y antiliberales del nuevo Gobernador del Consejo, Martínez de Villela. Basta releer detenidamente el escrito remitido al Monarca para ver expresada su línea política. Pero además contamos con otro testimonio recogido por Fontana"", transcribiendo una conversación mantenida entre el Gobernador del Consejo y el entonces Embajador de Francia Boislecote. En aquella conversación Villela se manifestó partidario de la persecución de los liberales y de sus 'ideas perniciosas'"".

"". En 1823 eran 19 los Ministros del Consejo, entre los que había varias situaciones peculiares: don Ramón López Pelegrín tenía todavía suspensa su reposición; al igual que don José Montemayor; don Felipe Sobrado era Gobernador de la Sala de Alcaldes y don Manuel Arjona era Superintendente de Vigilancia. De esta manera, sólo había 17 Ministros destinados a las Salas del Consejo -excluyendo aquí como tal la de Alcaldes-: 8 estaban destinados en la Sala primera de Gobierno, 5 en la Sala de Mil y Quinientas y los 4 restantes debían atender las Salas segunda de Gobierno, Justicia y Provincia (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 6).

"". Cfr. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, Exposición de don Ignacio Martínez de Villela; y también A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 6.

"". FONTANA, J., "La crisis del Antiguo Régimen", op. cit., pág. 173.

"". En la mencionada conversación, que ambos mantuvieron a comienzos del mes de septiembre de 1824, el Gobernador del Consejo afirmó "que jamás se había visto que

En segundo lugar, la separación de Ministros del Consejo que parecían adictos al sistema constitucional no fue casual ni se dio al parecer solamente en el Consejo de Castilla. Señala también Fontana en la misma obra^{***} que a finales de 1823 Francia y Rusia presionaron al Monarca español y éste fue el motivo para constituir un gobierno moderado bajo la presidencia del Marqués de Casa-Irujo. Sin embargo, Fernando VII impuso al nuevo Gobierno unas limitaciones, cifradas en una serie de bases o instrucciones^{****}. La base cuarta decía textualmente:

"Base 4. Limpiar todas las Secretarías de Despacho, Tribunales y demás oficinas, tanto de la Corte como de lo demás del Reyno, de todos los que han sido adictos al sistema constitucional, protegiendo decididamente a los realistas".

Por tanto, lo que hizo Martínez de Vilela fue sencillamente cumplir una indicación que en este sentido le haría probablemente el mismo Monarca.

Por otro lado, hay que ver la filiación política de los Consejeros que sustituyeron a los jubilados. El mismo 20 de febrero de 1824 por otro Real decreto eran nombrados diez nuevos Ministros del Consejo Real: don Ignacio Llorens, Regente de la Audiencia de Extremadura; don Juan Garrido, Regente del Consejo de Navarra; don León de la Cámara Cano, del Consejo de Hacienda; don Miguel Otal, del mismo Consejo; don Francisco Martínez Galinsoga, don Joaquín de Almazán, don Tadeo Ignacio Gil, don Luis de León, todos ellos Alcaldes de Casa y Corte; don Gabriel Juárez Valdés, Oidor jubilado de la Chancillería de Granada; y don Dionisio

un revolucionario español se corrigiera, y que, por tanto, resultaba peligroso perdonarlos; que había que expulsarlos, como se había hecho en su tiempo con los moriscos (...). Que a él le constaba que de entre los nueve millones de habitantes que tenía España, había de tres a cuatro millones de liberales, que casi toda la nobleza estaba ganada para estas ideas perniciosas, y que no se podía contar con un sólo oficial del antiguo ejército, pero que más valía vivir en España con un millón de personas honradas que con diez millones de revolucionarios" (FONTANA, J., op. cit., pág. 173).

^{***}. FONTANA, J., "La crisis del Antiguo Régimen", págs. 174 y 175.

^{****}. "Bases sobre las que ha de caminar indispensablemente el nuevo Consejo de Ministros".

Catalán, teniente de corregidor de Madrid¹³⁰⁰.

Si cotejamos esta lista de Ministros nombrados con la propuesta por Martínez de Villela en su mencionado escrito, comprobamos que todos ellos coinciden plenamente con los allí sugeridos. Sólo hay uno más que no aparece en la lista y por tanto no fue propuesto por Villela: es don Dionisio Catalán, teniente de corregidor de Madrid. De todos ellos dice Villela que eran "personas que por su literatura, providad, odio justo a las novedades destructores y decidido amor a V.M. me han parecido a propósito para ser empleados en su primer Consejo..."¹³⁰¹.

La sustitución de estos Consejeros por personas con opiniones políticas absolutistas contrastadas convertía nuevamente a esta institución en un bastión del Antiguo Régimen, un refugio de absolutistas, defensores de las estructuras de un Antiguo Régimen que ya se presentaba a todas luces necesitado de profundas reformas. Si estos Consejeros del Rey eran marcadamente de tendencias absolutistas, esta línea sería la que adoptaría el Consejo en sus consultas a partir de ahora. E igualmente influiría en esta línea en las decisiones del Monarca. La definición ideológica del Consejo de Castilla que esta decisión supuso hacía de él un nuevo obstáculo para las necesarias reformas, y le convertían en un claro enemigo para los defensores del sistema liberal.

Sin embargo, también es verdad que esta depuración política no duró mucho. La mayoría de los Ministros del Consejo de Castilla que habían sido jubilados, en los años inmediatos siguientes fueron repuestos en sus destinos. Así, Consejeros como Riega o Puig llegarían a ser Decanos del Consejo, y otros como Llorens o Torres-Cónsul volverían a sus sillones de Consejeros de Castilla. Por el contrario, otros Consejeros a los que les había sido conservada su plaza, como don Felipe Sobrado, sería jubilado¹³⁰².

En febrero de 1825 fueron repuestos en sus plazas algunos de los Consejeros jubilados el año anterior, tras haber presentado éstos el correspondiente recurso Así,

¹³⁰⁰. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 3. Los Ministros nombrados juraron sus plazas en el Consejo el día 23 de febrero, lunes, junto con tres nuevos Alcaldes de Casa y Corte nombrados el 24 de febrero: don Miguel Entanda, don Rafael Paz y Fuentes y don Manuel Victoriano Lozano. No juró sin embargo otro Alcalde de Corte nombrado el mismo día, don Lorenzo Hernán López, por renuncia.

¹³⁰¹. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, "Exposición de don Ignacio Martínez de Villela".

¹³⁰². A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 37.

el 16 de febrero de 1825 tomaban posesión de sus plazas los Ministros Villagómez, Larrumbide y Marín¹⁰⁰⁰. Según el Real decreto de reposición, fueron restablecidos en sus puestos por su colaboración en el Plan General de Estudios y arreglo de las Universidades¹⁰⁰¹. Por cierto, que en el acto de la toma de posesión de estos Ministros ocurrió un incidente. El Ministro del Consejo don Felipe Sobrado protestó en medio del acto airadamente, alegando los derechos al Decanato. Seguidamente se levantó, dejó el asiento y se retiró del Consejo. El día 19 de febrero una Real Orden de la Secretaría de Gracia y Justicia informaba que el Rey "había tenido a bien jubilar a don Felipe Sobrado, Ministro del Consejo y Cámara con los honores y medio sueldo de esta plaza, mandando al propio tiempo que salga de Madrid en el término de tres días para la provincia de su naturaleza y que no se separe de ella sin Real licencia..."¹⁰⁰².

El Ministro Torres-Cónsul, que se contaba entre los Consejeros jubilados de forma forzosa en 1824, tras recurrir fue pronto rehabilitado, según indica un documento fechado en 1828¹⁰⁰³.

El 2 de junio de 1830 un Real Decreto del Rey mandaba reponer en sus plazas a los Sres. D. Ramón López Pelegrín y don José Montemayor, en las plazas, sueldo y

¹⁰⁰⁰. El Consejo de Ministros, en su reunión del 9 de febrero de aquel año acordaba a petición del Ministro de Gracia y Justicia reponer en sus destinos a los Ministros del Consejo y Cámara de Castilla don Francisco Marín y don Miguel Alfonso Villagómez, que habían sido anteriormente jubilados por Real Decreto (Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, año 1825, tomo I, págs. 149, 150 y 151). Con respecto a don Francisco Marín, sabemos también que ese mismo año él y don Tadeo Ignacio Gil entraron a formar parte de la Real y Suprema Junta Patrimonial de Apelaciones de los Juzgados de la Real Casa, Capilla, Cámara, Caballeriza y demás del Real Patrimonio (A.G.P., Sección Fernando VII, caja 207 expte. núm. 20). Al mandar elaborarse la Guía de Forasteros para 1826 se tomó nota de esta modificación con respecto a los datos de 1825.

¹⁰⁰¹. También se concedieron otros honores a varias personas que colaboraron en la elaboración de este Plan, como fue el caso del Padre Maestro Barbajero, Fray Manuel Martínez y el obispo de Málaga: se les concedió los honores de Ministro honorario del Consejo (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 37).

¹⁰⁰². A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 37; hay noticias también sobre el particular en el legajo 11.887 núm. 6.

¹⁰⁰³. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.761 núm. 20.

antigüedad que disfrutaran en el Consejo en tiempo de su jubilación, "en atención a los particulares méritos y servicios de ellos"****. Ambos, Pelegrín y Montemayor, eran tenidos en 1823 como los más liberales entre los Ministros del Consejo Real. Por otro lado, parece que eran los únicos de entre los Consejeros jubilados en 1824, que todavía no habían sido repuestos en sus plazas****. Como se ve, desde 1824 ha habido una lenta evolución ideológica, que parece paralela al declive del propio Consejo dentro de nuestra Administración y a la pérdida de competencias por este Supremo Tribunal.

b) El Rey pide responsabilidades por los sucesos del Trienio

El 12 de septiembre de 1823 el Rey solicitó en Decreto que se pusieran en claro los principales acontecimientos contra la Real Persona del Trienio. Concretamente llamaba la atención el Monarca sobre los tres sucesos más graves de la época revolucionaria, el modo de conocer sus autores y por qué tribunal debían ser juzgados. Los tres sucesos referidos eran la Sublevación militar de Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1.820; y los insultos al Rey en las puertas del mismo Palacio en la asonada de los días 19 y 20 de febrero de 1.823, junto con los sucesos del 11 de junio siguiente, en los que el Rey fue depuesto y fue nombrada una Regencia. El Monarca llamaba la atención de la Justicia Real sobre estos tres sucedidos por ser "los de más excesos y porque han atacado al Rey como Rey, además de

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 38.

****. Entre los repuestos anteriormente se encontraba don José María Puig y Samper, de quien F. Suárez ha dicho: "hubo un conjunto de hombres que, sin motivos ocultos al parecer, fueron los agentes inmediatos del hundimiento del Antiguo Régimen y del triunfo del sistema liberal", entre ellos Salcedo y Puig Samper, "todos ellos ilustrados, sin orientaciones precisas de carácter político, pero con una apreciable cantidad de teorías y convicciones ideológicamente afrancesadas, y con un insano excepticismo en la base de sus creencias religiosas" (SUAREZ, F., "La crisis del Antiguo Régimen en España", op. cit., pág. 155).

hacerlo en su Augusta Persona" "...". Con este motivo pidió el Rey al Consejo que le consultase "con tanta reserva como brevedad lo que le parezca y ofrezca sobre estas ideas y sobre el modo, tribunales y parajes en que se ha de conocer de tan importantes hechos..."

En su informe de 20 de septiembre, los Fiscales del Consejo presentaban al Supremo Tribunal un detallado dictamen "...". Primeramente manifestaban que ya el Consejo en agosto anterior había remitido una consulta al respecto a la Regencia, que no habría llegado a las Reales manos "a consecuencia de las diversas órdenes de ésta sobre arresto de liberales y seguimiento de sus causas".

Las propuestas del Fiscal se resumían en las siguientes: 1. Sólo debía procederse al arresto, formación de causa y secuestro de bienes de los que descaradamente habían tratado de trastornar la Constitución fundamental. Debían quedar excluidos aquéllos que siendo afectos al sistema constitucional, sin embargo la opinión pública no los señalaba por tumultuarios y sediciosos; 2. Que en la condición de tales delincuentes descarados no se tuviera en cuenta distinción alguna en razón de clase y condición social, por privilegiada que fuese, aún la eclesiástica y militar.

En la primera categoría quedarían comprendidos todos los que se sublevaron con Riego o no impidieron esta sublevación pudiendo hacerlo; en la octava clase -de las doce que fijaba- comprendía el Fiscal "todos los llamados diputados a Cortes de las dos legislaturas que con sus discursos o con su voto habían promovido y autorizado las tropelías ejecutadas en la Sagrada Persona de S.M., ya privándole de la libertad a permanecer en sus Reales Sitios fuera de Madrid, ya del ejercicio de su libre y absoluto derecho..." En la primera incluía también el Fiscal a "todos los individuos que compusieron el Ayuntamiento de Madrid y Diputación Provincial en los tres largos años del último trastorno revolucionario, que hubiesen fomentado de algún modo los atentados..."

Más adelante calificaba el Fiscal los delitos como de alta traición al Rey, con la agravante algunos de

"...". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658
núm. 14.

"...". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658
núm. 14.

"...". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658
núm. 14.

"...". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658
núm. 14.

ellos de haberse cometido en la misma Corte, y todos ellos con la muy cualificada agravante de haberse cometido directamente contra la Persona del Rey. Por su gravedad, tales delitos debían ser conocidos por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, "porque en suposición de ser casos de esta naturaleza, no hay otro Tribunal superior que con más razón deba ni pueda abrazar su conocimiento". No influía tampoco que el principal autor y sus cómplices fueran militares. Por otro lado, la práctica de la Sala era "la más acomodada para evitar dilaciones". En definitiva, los Fiscales consideraron que tales crímenes eran casos de Corte y que era la Sala de Alcaldes la que debía conocer de ellos, con total inhibición de todos los demás, quedando derogado todo fuero especial"".

El Consejo pleno estudió este asunto el mismo 20 de septiembre y el 21 acordó elevar consulta al Rey en los términos expresados por los Fiscales. La consulta tuvo lugar el 27 de septiembre.

Este dictamen fue aplicado poco después, entre otros, en el proceso de uno de los principales encartados: Riego. Había caído en manos de los realistas en Arquillos y fue encarcelado en Andújar"". De allí fue trasladado a Madrid bajo una fuerte escolta. La Sala de Alcaldes se encargó de juzgarle por alta traición. El Fiscal de la Sala pidió la pena de horca y el desmembramiento de su cadáver, colocando la cabeza en el pueblo donde en 1.820 diera Riego el grito de libertad, y los demás pedazos del cuerpo en Sevilla, Isla de León, Málaga y Madrid. Sin embargo, la sentencia de la Sala "lo condenó a la pena ordinaria de horca, a la que sería conducido arrastrado por todas las calles del tránsito, con la confiscación de todos sus bienes para la Cámara de Su Majestad, y asimismo en las costas del proceso"."".

El 4 de octubre anterior había rubricado Fernando en Jerez un nuevo decreto en el que prohibía que durante su viaje a la Corte se hallase a cinco leguas en contorno de su tránsito ningún individuo que en el Trienio

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm. 14.

"" ASTUR, E., "Riego", Oviedo, 1.984, págs. 490 y ss.

"" VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto", págs. 84 y 85. Riego fue ahorcado el 7 de noviembre de 1.823 en la Plaza de la Cebada, en Madrid (MESONEROS ROMANOS, "El Antiquo Madrid", pág. 117). Seis días después entraba solemnemente el Rey Fernando en Madrid, quien había hecho el viaje con majestuosa lentitud para dar tiempo a que la sentencia de Riego fuera ejecutada antes de su llegada (MESONERO ROMANOS, "El Antiquo Madrid", pág. 117; y VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto", pág. 84).

hubiese sido diputado a Cortes en las dos legislaturas pasadas, Secretario del Despacho, Consejero de Estado, vocal del Supremo Tribunal de Justicia, comandante general, jefe político, oficial de la Secretaría del Despacho, o jefe y oficial de la extinguida milicia voluntaria. También señalaba Bayo que en el decreto se especificaba que les quedaba cerrada para siempre la entrada en la Corte y Reales Sitios dentro del radio de 15 leguas"".

Siguiendo con los acontecimientos de octubre. Por otro lado, el 22 del mes de octubre, el Rey aprobaba un Real Decreto desde Sevilla en el que pedía que en el término de cuatro días le consultase cuanto estimase conveniente "para fijar la suerte futura de sus vasallos, señalando sendas seguras por las que caminen los unos a las recompensas de que se han hecho dignos por su fidelidad y lealtad, y los otros que han obtenido el olvido de sus pasados desaciertos se hagan acreedores de la estimación de sus hermanos y de la Real benevolencia; calificando al mismo tiempo a los principales delinquentes, que desmerecedores del perdón, sufran las penas que merecen según las leyes""". El Consejo de Castilla emitió la correspondiente consulta, cuyo contenido no conocemos pues por su carácter confidencial fue archivada de forma reservada.

c) La concesión de la amnistía política

De octubre de 1.823 nos daba Villa-Urrutia una noticia curiosa. Luis XVIII, en una carta escrita por Chateaubriand, aconsejaba a Fernando VII que diera una amnistía, "porque los príncipes cristianos no deben gobernar por medio de proscripciones". Respecto al régimen que pensaba establecer, le insinuaba que lo buscase en las antiguas instituciones de España y le decía: "un despotismo ciego, lejos de aumentar el poder de los reyes, lo debilita; porque si su poderío no tiene reglas, si no reconoce regla

""". BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, págs. 171 y 172; también RICO Y MATA, "Historia Política y Parlamentaria de España", tomo II, pág. 252.

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.609 núm. 43. El Rey pidió esto mismo a los demás Consejos para que le suministrasen luces, "con la reflexión y madurez de que tantas pruebas tienen dadas."

alguna, pronto sucumbe bajo el peso de sus propios caprichos"''''.

Sabemos por otras noticias que también el Zar Alejandro de Rusia solicitó del Monarca español la concesión de una generosa amnistía. Con todo ello se estudió por el Gobierno español, que decidió abrir un expediente.

El 20 de mayo'''' se publicaba finalmente en la Gaceta el Decreto por el que por fin se concedía la tan solicitada amnistía. Como es sabido, Fernando era consciente de haber prometido poco antes de su liberación la concesión de una amnistía para los liberales. Tras la petición del Gobierno de Francia y del mismo Zar, el Monarca español había decidido concederla y mandó que fuera redactado por el Ministerio de Gracia y Justicia un primer proyecto que contenía muy pocas excepciones. El asunto fue sometido a consulta del Consejo de Castilla y del de Estado. Mientras el de Castilla realizaba una restrictiva clasificación, que fue considerada totalmente insuficiente por los embajadores de las potencias de la Santa Alianza, el Consejo de Estado declaraba que no debía perdonarse a ninguno. Sin embargo, tras otras varias consultas a autoridades y organismos, se probó un proyecto de amnistía cuyo ámbito de aplicación quedó muy reducido por las numerosas excepciones a su aplicación que se fijaron''''.

'''''. VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto", pág. 82. Por su parte, en los Papeles de Ugarte se contiene la siguiente nota: "Los horrores e iniquidades que cometía el Rey con todo el que en una u otra forma dependía del Gobierno y sobre el cual recayera la más leve sospecha de liberalismo, obligaron al gabinete a instar enérgicamente a Fernando para que concediera una amnistía general. Forzado a ello el Rey, aunque de malísima gana, encargó al ministerio que redactara el oportuno decreto, labor que llevaron a cabo el conde de Ofalia y Cruz, con un amplio espíritu de clemencia. Pero los fanáticos amigos del infante don Carlos por un lado, y por otro los obispos y el rancia Consejo de Estado, introdujeron en él tal cantidad de excepciones, que era difícil, casi imposible, no quedar comprendido en alguna de ellas." (ORTIZ DE LA TORRE, E., "Papeles de Ugarte. Documentos para la historia de Fernando VII", Santander 1.934, nota 4, págs. 48 y 49).

'''''. ORTIZ DE LA TORRE, E., "Papeles de Ugarte", pág. 49, nota 4.

'''''. Ver también VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto", págs. 106 y 107; A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.657 núm. 49 y 3.656 núm. 21; y ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 257.

En los primeros días de enero de 1828 se estudió por el Consejo de Castilla un nuevo proyecto de amnistía.

Los Diarios de Arias Teijeiro parecen arrojar nuevas luces sobre este particular. Según lo afirmado en los mencionados Diarios, el dictamen del Consejo de Castilla fue contrario a la concesión de la amnistía. "El Consejo pedirá perdón para los catalanes, pero jamás amnistía para los que causan todos nuestros males"****. Tras muchas discusiones y animos encendidos, el Consejo se inclinó finalmente por denegar esta amnistía, en una reñida votación. Destacada intervención tuvo al parecer el Consejero Gil****. Sabemos también que hicieron voto particular los Ministros Puig, Marín, Suárez-Valdés, Fernández del Pino, Hevia, Torres-Cónsul y quizás también Heredia. Parece probable que fueran todos estos Ministros mayoritariamente partidarios de conceder la amnistía. Sabemos también que el Decano Sr. Riega votó en contra.

Los datos de los Diarios de Arias Teijeiro son muy reveladores. Teijeiro hace incapié en que la votación fue extremadamente reñida**** y que en la consulta

****. ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", Documentos del Reinado de Fernando VII, tomo III, pág. 6., días 4, 5 y 6 de enero de 1.828 "El Consejo se ha decidido felizmente contra la amnistía. Algunos pícaros querrían apoyarla. Pero el corregidor Gil habló enérgicamente, manifestando las continuas maquinaciones de los negros, quienes han perdido la batalla y querrían apoderarse del botín. El Consejo pedirá perdón para los catalanes, pero jamás amnistía para los que causan todos nuestros males."

****. ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", días 4, 5 y 6 de enero de 1.828, pág. 6: "El Consejo se ha decidido felizmente contra la amnistía. Algunos ícaros querrían apoyarla. Pero el corregidor Gil habló enérgicamente, manifestando las continuas maquinaciones de los negros, quienes han perdido la batalala y querrían apoderarse del botín. El Consejo pedirá perdón para los catalanes, pero jamás amnistía para los que causan todos nuestros males."

****. ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", días 10-13 enero, págs. 14 y 15: "Cuando se presentó en el Consejo la consulta sobre amnistía, hicieron voto particular en favor de ésta Puig, Marín, Suárez-Valdés, Fernández del Pino, Hevia, Torres-Cónsul y no sé si Heredia. Se está extendiendo la refutación de estos votos. Si se hubiese adherido a los amnistiantes el Decano, ellos hubieran vencido. ¡Es lástima que no tenga un pillo que conociese bien este teatro, la pluma para extender

sobre hubo gran división de opiniones. No sólo los seis o siete votos particulares -unos serían quizás favorables a una amplia amnistía, otros quizás pedían una radical negativa-, sino como hemos visto también en la misma votación. Dice Arias Teijeiro que "si se hubiese adherido a los amnistiantes el Decano, ellos hubieran vencido"****.

Sin embargo finalmente fue concedida la mencionada amnistía, con el dictamen contrario del Consejo de Castilla, y aunque esta amnistía tuvo un carácter muy restringido es sintomático que en esta ocasión no se tuviera en cuenta el dictamen del Consejo.

- d) Algunas conocidas causas políticas. Las causas del Empecinado y de Mariana Pineda. Alguna noticia más sobre purificaciones: el caso León y Pizarro.

Mientras tanto las Comisiones Militares siguieron con su cometido. Continuaron las causas contra los liberales, entre las que hubo algunas particularmente famosas, como la seguida contra el famoso guerrillero de la Guerra de la Independencia El Empecinado. Don Juan Martín El Empecinado había capitulado con el ejército francés al rendirse la plaza de Cádiz y se había retirado a la villa de Roa. Allí fue detenido por un comisionado regio, el

el dictamen del Consejo...! Los afrancesados trabajan lo que no es creíble para lograr la amnistía; y es muy de recelar lo consigan."

****. ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", días 10-13 de enero de 1.828, págs. 14 y 15. Continúa afirmando Arias Teijeiro: "¡Es lástima que no tenga un pilllo que conociese bien este teatro, la pluma para extender el dictamen del Consejo...! Los afrancesados trabajan lo que no es creíble para lograr la amnistía; y es muy de recelar lo consigan."

Corregidor de Castrillo del Duero""'. Tras tenerle en prisión bastante tiempo, le condenó finalmente a muerte y consultó la sentencia con la Sala de Alcaldes, que confirmó la sentencia. Esta se cumplió el 19 de agosto de 1.824 y Juan Martín murió ahorcado""'.

Otro caso famoso muy posterior en que intervendría la Sala de Alcaldes fue el de la granadina Mariana Pineda, a la que se encontró en su casa una bandera de seda verde con el lema: 'Ley, Libertad, Igualdad', que debía servir de enseña para un proyecto revolucionario. Condenada a muerte, la Sala de Alcaldes confirmó la sentencia""'.

De los meses siguientes tenemos algunas noticias sobre purificaciones. El Consejo circuló varias Reales Resoluciones sobre esta materia por todo el Reino""'. Por otro lado, la Sala segunda de Corte consultaba al Monarca el 17 de julio sobre varias dudas en la causa pendiente contra los Regidores del Ayuntamiento constitucional de Madrid""'. Más adelante, el 4 de agosto del año siguiente 1.825, conformándose el Rey con el dictamen del Consejo Real, mandaba suprimir las Comisiones Militares y que las causas pendientes pasaran a los

""'. En una carta fechada en Aranjuez el 23 de mayo de 1.824, escrita por Fernando VII a Ugarte le animaba a perseguir al Empecinado: "Ya es tiempo de (...) despachar al otro mundo a Chaleco y al Empecinado." ("Papeles de Ugarte", op. cit., pág. 52).

""'. VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Absoluto"; y PALACIO ATARD, V., "La España del siglo XIX", págs. 153 y 154.

""'. VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto". La pena capital fue ejecutada el 26 de mayo de 1.831.

""'. Por ejemplo, el de 9 de junio de 1.824 concediendo medio sueldo a todo empleado que acreditase hallarse en posesión de su destino antes del 7 de marzo de 1.820 y que hubiese intentado su purificación en tiempo hábil sin conseguirlo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 3); o la Real Orden de 29 de julio de 1.824 que declaraba que toda persona que sirviera oficios público fuera con nombramiento real o su particular, debería sujetarse a purificación (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm. 2).

""'. A.H.N., Consejos, legajo 6.088, consulta de oficio del 17 de julio de 1.824.

Tribunales ordinarios"". En su dictamen el Consejo señalaba cómo las comisiones militares no guardaban armonía con la legislación española"".

En 1828 el Rey pidió al Consejo de Castilla mediante Real Orden que todas las causas de Estado en que entendía el Gobernador de la Sala y remitía éste al Consejo de Castilla, fueran examinadas por el Consejo y consultadas seguidamente al Monarca"".

Importantes personalidades políticas se vieron sometidas a procesos de purificación. Una de ellas fue García de León y Pizarro que en sus Memorias describe las distintas peripecias por las que pasó su causa hasta obtener la total purificación nada menos que en octubre de 1.830. En su proceso intervino varias veces el Consejo de Castilla e incluso el mismo León y Pizarro solicitó varias veces al Consejo esta purificación. El conocido político liberal nos cuenta también que en la Junta que entendía de su purificación se encontraba, entre otros, el duque del Infantado"".

"" VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto", pág. 146.

"" BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, pág. 259.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.780 núm. 13. Arias Teijeiro recoge en sus Diarios el siguiente comentario: "El Gobernador de la Sala sigue en las causas bastante bien, y aún comprometiéndose por no hacer. Veremos el fin." (op. cit., días 19-22 de enero de 1.828, pág. 33).

"" LEON Y PIZARRO, "Memorias", tomo I, págs. 296 y 305. He aquí un extracto del relato de Pizarro: "Empezó por omitir en la Guía algunos nombres; reclamaron los omitidos, entre los cuales estaba yo; se respondió a algunos que había sido olvido, y por lo que hace a mí, se pasó mi exposición a consulta del Consejo de Castilla. Cosa verdaderamente extravagante. Parece que el Consejo consultó a mi favor. El Sr. Cea, a las reclamaciones de mi suegra, que era mi apoderada, respondió siempre que, aunque se trataba de crear una Junta de purificación, eso no hablaba conmigo y entre tanto, formada la junta, me ofició en derecho a París que acudiera a purificarme. Eso era tanto más infame cuanto que yo era el único de mi clase con quien se hacía, y el señor duque de San Fernando. Este jamás quiso acudir (hizo bien). Yo pensé en lo mismo, y así lo representé de oficio; pero estando ausente y obligado por todos los amigos de Madrid a que no diera prueba de orgullo rehusándome a una cosa que para mí sería de pura fórmula y muy breve, etc., acudí a

De este proceso sabemos, por ejemplo, que León y Pizarro acudió al Rey en 1.825 en solicitud de que se le abriese causa legal sobre su conducta política. El Rey resolvió por Real Orden de 10 de marzo de 1.825 que el Consejo de Castilla le consultase antes ante qué Tribunal de Justicia podría abrirse la causa de León y Pizarro. Si bien el Fiscal era "de parecer que bajo de este supuesto y atendida la calidad y circunstancias de don José León y Pizarro, sólo el Consejo es el Tribunal ante quien podrá ventilarse este juicio..."", sin embargo el Consejo dictaminó en otro sentido: su petición no era conforme al método establecido para todas las clases del Estado y como no había solicitado su purificación en ningún sitio ni se le había denegado, el Consejo estimó que "se someta al juicio de purificación en la misma forma en que está mandado para con todas las clases del Estado...20 de abril de 1.825"....

En el año 1.829 continuaba el ambiente subversivo en toda España. Eran numerosas las denuncias que llegaban al Consejo de Castilla por aparición de pasquines o textos impresos, por circulación de proclamas o conductas contrarias al sistema político vigente. A ello tuvo que dedicar también el nuestro Consejo algunas consultas al

hacer mi petición, aunque de muy mala gana, porque siempre he sometido mi opinión a la de otros, en cosas mías. Mi representación fue grave y el P. Cirilo, por espíritu de amistad, aconsejó a mi mujer presentase otra omitiendo muchos pasajes. Yo le agradezco sin duda su intención; pero creo que me perjudicó notablemente. En efecto: no se debe poner un pedimento reclamando la justicia o una representación de agravio en el tono de un memorial, en que se pide una gracia o una ayuda de costa..."

.... "Que aunque tratándose de averiguar la opinión política de este interesado parecía que debería sujetarse a las reglas prescritas para la purificación de todos los empleados en cualquier ramo de la Administración Civil del Estado, en los términos que previene el artículo 7 de la Real Cédula de 1 de julio de 1.823, como quiera que el objeto de la consulta pedida a este Supremo Tribunal se limita únicamente a que se designa Tribunal de justicia en que debe abrirse la causa; es del parecer que bajo de este supuesto y atendida la calidad y circunstancias de don José García de León y Pizarro sólo el Consejo es el Tribunal ante quien podría ventilarse este juicio y así lo podrá consultar a S.M...26 de marzo de 1.825." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.704 núm. 3).

.... A.H.N., Estado, legajos 879 y 3.420; también LEON Y PIZARRO, J., "Memorias", tomo II, apéndice II, pág. 301.

Monarca, como las habidas los días 20, 27 y 28 de marzo""", o la del 1 ó 9 de abril""", entre otras. Algunas de ellas eran contra personas significadas por sus cargos, como era el caso de varios individuos de la Diputación Provincial de Badajoz"" o un capellán de honor de S.M.""". Incluso consultó una causa abierta al corregidor de Avila por no haber impedido un papel sedicioso anónimo""".

En consulta del 13 de mayo, el Consejo de Castilla estudiaba el descubrimiento de una sociedad masónica en la Isla de La Palma en Canarias, en casa del capitán del Ejército Sr. Massieu""". Y ésta no fue la única causa de este género estudiada por el Consejo. Abundaron los expedientes sobre esta materia, que ciertamente preocupaba mucho a las autoridades.

También Arias Teijeiro recogía en sus notas del 28 de junio una noticia sobre una causa de masones en Granada. Decía al respecto Teijeiro: "Modet ha hecho un voto particular para que todas las causas de masones, etc., se unan, y sigan aquí por un Magistrado de conocido realismo, y que ni haya sido afrancesado ni liberal""".

Curiosamente, muchas de las causas abiertas por subversión lo eran a clérigos. Así, por ejemplo, las consultas de oficio de 6 de julio, 30 de julio y 20 de

""", A.H.N., Consejos, legajo 6.097, consultas de oficio de los días 20, 27 y 28 de marzo de 1.829.

""", A.H.N., Consejos, legajo 6.097, consultas de oficio de los días 1 y 9 de abril de 1.829.

""", A.H.N., Consejos, consulta del 6.097, consulta de oficio del 1 de abril de 1.829.

""", A.H.N., Consejos, legajo 6.097, consulta de oficio del 1 de abril de 1.829.

""", A.H.N., Consejos, legajo 6.097, consulta de oficio del 20 de junio de 1.829.

""", A.H.N., Consejos, legajo 6.097, consulta de oficio del 13 de mayo de 1.829.

""", ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", pág. 173. También incluía entre sus notas algunos chismorreos políticos de otro género: por ejemplo, el 13 de junio escribía: "Casquero es nombrado estos días Alcalde de Corte; este golpe yo ya lo esperaba. Pero al momento va al Sitio y logra se le admita la renuncia." Y el día 24 añadía: "Galindo es al fin Alcalde de Corte." (op. cit., pág. 156).

agosto eran contra individuos de este estado""'. La de 30 de julio tenía la peculiaridad que en ella se estudiaba la conmutación de la pena de 4 años de reclusión a la que un presbítero había sido condenado por haber firmado en su momento una representación a las Cortes durante el Trienio Liberal, siendo entonces diputado por Badajoz""'.

Quizás estos motivos de orden público, junto con un indudable desprestigio de nuestro Supremo Tribunal, fue lo que llevó al Rey a aprobar una Real Orden mandando que las autoridades y demás personas a quienes el Decano pidiese informes o noticias, cumpliesen sin la menor omisión lo que por ellas les fuese ordenado, so "pena de incurrir en el desagrado de S.M. y más que haya lugar""'. Ordenes como ésta se habían sucedido periódicamente desde el año 1.814. Como se ve, el Consejo de Castilla no había recuperado totalmente su antigua autoridad en el Reino.

""'. A.H.N., Consejos, legajo 6.098, consultas de oficio de 6 y 30 de julio, y de 20 de agosto.

""'. A.H.N., Consejos, legajo 6.098, consulta de oficio del 30 de julio de 1.829.

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.815 núm. 8, Real Orden de 25 mayo 1.829.

3. La Administración y el Consejo. Proyectos de reforma. Paulatina pérdida de competencias del Consejo Real.

a) La creación de un Ministerio del Interior

Por un decreto de junio de 1823 era creado -o más bien se mantenía- un Ministerio del Interior"".

Inmediatamente el Consejo de Castilla elevó consulta a la Regencia criticando esta medida que lesionaba las competencias del Supremo Tribunal. Ya los mismos Fiscales en su informe habían afirmado con rotundidad que "semejantes novedades están en contradicción con el régimen que en lo político y judicial se hallaba establecido y reconocido en dicho día 7 de marzo, y que la Junta Provisional y la Regencia han decretado establecer..."

Posteriormente, el mismo Consejo manifestaba los motivos por los que tal decreto, al variar el orden establecido, lo hacía peligrar:

"La Sabiduría del Rey N.S. tuvo presente aquel principio en política de que sin una gran necesidad y utilidad, no deben hacerse alteraciones en el régimen a que

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608 núm. 11, "Creación de un Ministerio llamado de lo Interior." Para este capítulo también ver SUAREZ, F., "La creación del Ministerio de Interior en España", en A.H.D.E. núm. 19 (1948-1949), págs. 15 a 56.

"" A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta de Oficio del 18 de junio de 1.823.

están acostumbrados los pueblos. Se enteró (S.M.) por sí mismo del disgusto y resistencia que sus vasallos manifestaron a esta novedad, y no se le podía ocultar que siendo este Ministerio uno de los principales ejes del sistema de las Cortes de Cádiz y chocante con el que dejó establecido a su salida del Reino en 1.808 era preciso, o abolir semejantes Secretarías de Gobernación, o establecer un nuevo Régimen en el gobierno de su Reino.

Esta es, Serenísimo Señor, la alternativa en que V.A. se ha colocado al crear el Ministerio del Interior. Por su Decreto, le dota con los expedientes y negociados que fueron de las particulares atribuciones de las Secretarías de la Gobernación de la Península y Ultramar; que es decir, que la Secretaría de Estado queda sin los negocios de Beneficencia, Correos, Caminos, Postas y otros; la de Gracia y Justicia, limitada a los asuntos de provisiones en las iglesias, tribunales y juzgados y a los pujos de Justicia. Y el Consejo y los Acuerdos de las Audiencias, despojados del conocimiento de los asuntos gubernativos..."

Tras manifestar que tal medida podía crear malestar por suponer el pueblo que los Jefes Políticos serían restablecidos, afirmaba el Consejo: "En las grandes crisis debe alejarse toda idea de desconfianza en el Gobierno. Un corto número de hombres bulliciosos y que sacan partido de la docilidad de los pueblos bastará para persuadirlos que no se cumple lo que se les ha ofrecido de restablecer el régimen (que había el) 7 de marzo de 1.820, pues bajo otro título se hace revivir la Secretaría de la Gobernación, nombre ominoso y detestado..."

Finalmente pedía el Consejo que tal medida no fuera aprobada por la Regencia y apelaba a que por su importancia fuera adoptada por el mismo Rey: "Por último, cuando la Regencia considere este nuevo Ministerio de suma utilidad al Reino, cree el Consejo conforme por los principios anunciados por V.A. a la España en 4 del corriente, que debe reservarse este punto a la soberana decisión de S.M., a quien única y exclusivamente pertenece arreglar el mejor gobierno de su Reino, luego que se halle en el libre ejercicio de su poder y autoridad..."

Al Consejo de Castilla le sentó muy mal la

"...". A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta del 18 de junio de 1.823.

"...". A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta de oficio del 18 de junio de 1.823.

"...". A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta del 18 de junio de 1.823.

creación de este Ministerio del Interior, continuación del constitucional Ministerio de la Gobernación, del Trienio, que vaciará al Consejo de una parte de sus competencias gubernativas. El Supremo Tribunal esgrimió toda clase de argumentos, -incluso el ingenio del orden público al restablecerse una institución similar a la constitucional-, y decidió finalmente apelar a la decisión regia última, como confiando que el Rey lo desaprobaba. El Consejo Real era consciente de jugarse en cada una de estas pequeñas batallas jurídico-políticas su propia entidad y continuidad como institución básica del régimen.

Lo cierto es que el Rey accedió -una vez más, pero probablemente la última vez en una petición de este género- a la solicitud del Consejo. Sin embargo, el Monarca tardaría todavía tres meses en adoptar la medida. De esta manera y por Real Decreto de 18 de octubre de 1.823 era suprimido este Ministerio.

Hacemos también una referencia somera a otro aspecto considerado en el mismo expediente: junto al Ministerio del Interior, se creaba también dos Comisiones para Extremadura y Andalucía. Pues bien, el Consejo se opuso también a la creación de las mismas, por sus poderes ilimitados -"que han de ser siempre extraordinarios"-, y por su competencia para designar Justicias"".

En 1.828 volvió a ser estudiada la creación de un Ministerio del Interior. En una conocida exposición fechada el 10 de octubre, el Ministro López-Ballesteros proponía nuevamente la creación de este Ministerio, que estaría exclusivamente encargado de todo lo referente a la administración civil del Estado. El proyecto fue presentado al Monarca quien pidió consulta al Consejo de Estado, quien sin embargo lo desestimó por el momento"".

Sin embargo sí volvería a ser estudiado en 1830, año a partir del cual, según Federico Suárez, la vida española sufrió una profunda y violenta transformación"". Sin duda ahora se gestaban seriamente los grandes reformas

"" A.H.N., Consejos, legajo 6.086, consulta del 18 de junio de 1.823.

"" SUAREZ, F., "La creación del Ministerio del Interior en España". Señala el profesor Suárez como pudo haber un Decreto autógrafo del Monarca creando un Ministerio del Interior, que no llegó a ver la luz pública 'por las intrigas que rodeaban al Trono'.

"" SUAREZ, F., "La creación del Ministerio del Interior en España", pag. 28.

administrativas que iban a suponer en pocos años la desaparición del Antiguo Régimen.

El 5 de noviembre el Rey enviaba al Ministro de Estado González Salmón un Real Decreto autógrafo, en el que le informaba de su resolución de crear un Ministerio del Interior^{****}. Este Decreto autógrafo fue causado según Sáinz de Andino por dos Exposiciones del Ministerio de Hacienda que él mismo redactó^{****}.

En un texto denominado "Nota propugnando la creación de un Ministerio del Interior", especificaba Sáinz de Andino que "este Ministerio reunirá por consiguiente en sí mismo las diferentes funciones repartidas hoy entre las Secretarías de Estado y del Despacho, Consejos Supremos, Chancillerías y Audiencias del Reino, Direcciones generales y particulares, Ayuntamientos, Cuerpos y personas a cuyo cargo corría su desempeño". E incluía una lista detallada de competencias que asumiría, muchas de las cuales históricamente habían pertenecido al Consejo de Castilla^{****}.

Tras examinar aquel Decreto del Rey, el Consejo de Ministros del día siguiente acordó que "a la mayor brevedad y con toda urgencia se reúnan cuantos antecedentes, datos y noticias pueda haber en los varios Ministerios relativamente a este asunto, para ocuparse de él sin demora". En la reunión del Consejo de Ministros del día

****. "palacio, 5 de noviembre de 1.830.- Salmón: He resuelto crear un Ministerio del Interior con las atribuciones que le son propias; y que se reúna y concentre en el Ministerio de Hacienda la administración y contabilidad de todas las contribuciones, rentas, impuestos, fondos y arbitrios de cualquier especie que sean, que estuvieron hasta ahora al cargo de diferentes Ministerios. Hazlo saber al Consejo de Ministros para que en el preciso término de ocho días me proponga el proyecto de decreto consiguiente a esta mi soberana resolución, señalando en él las funciones peculiares de cada una de las seis Secretarías del Despacho que ha de haber en lo sucesivo. Expóngame igualmente las personas capaces de desempeñar este nuevo Ministerio". (A.P.C.M., Actas del Consejo de Ministros, año 1.830, pág. 274, citado por SUAREZ, F., Documentos del Reinado de Fernando VII, v. III, Introducción, pág. 12).

****. Una de ellas sería, al parecer, la que presentó López Ballesteros como propia con fecha 10 de octubre de 1.830. (SUAREZ VERDEGUER, F., Documentos del Reinado de Fernando VII, v. III, pág. 13).

****. SUAREZ, F., op. cit., págs. 38 y ss.

siguiente se acordaba que cada Ministro por separado propusiera las competencias de su Departamento que podrían pasar al nuevo Ministerio, y cuáles no. Los días 4 y 5 de diciembre se comenzó a estudiar los informes de cada Ministerio y finalmente se llegó a la conclusión "de que dos de los Ministros no creían que la ocasión fuese la más oportuna para implantar la reforma ministerial decretada"****.

Continuaron los estudios por los distintos Ministerios, que presentaron unas Memorias. El mismo Consejo de Estado intervino en el asunto. Fue tratado en las sesiones del 19 de enero y de los días 9, 14 y 23 de febrero. El centro de la cuestión era decidir si era o no oportuna la creación de este nuevo Ministerio en las circunstancias difíciles del momento. En la votación final sabemos que se pronunciaron por la no oportunidad, entre otros, el Duque del Infantado, el Obispo de León y el Infante don Carlos; a favor votaron, entre otros, el General castaños y el Infante don Francisco de Paula. De esta manera, en la consulta elevada al Monarca, el Consejo de Estado dictaminaba que se suspendiera toda discusión acerca de este asunto y que no se volviera a tratar de la creación del Ministerio del Interior****.

Entre los dictámenes presentados en esta ocasión, se encontraba uno del Duque del Infantado. Aunque era contrario a la creación del Ministerio del Interior, sin embargo en ningún momento hizo una defensa de las competencias o del instituto del Consejo Real de Castilla****.

****. SUAREZ, F., op. cit., pág. 14.

****. SUAREZ, F., op cit., pág. 18.

****. SUAREZ VERDEGUER, F., op. cit., págs. 331 a 340, "Dictamen del Señor Duque del Infantado contra la creación de un Ministerio del Interior".

b) Estudios sobre reforma de la Administración

Como ya hemos visto, el 18 de octubre de 1.823 era suprimido el Ministerio del Interior. Parece que a esta medida siguieron diversos estudios sobre reorganización de la Administración Pública, quizás por mandato del Monarca, por lo que aquella medida podría haber sido una concesión provisional accediendo a la solicitud del Consejo de Castilla. Sabemos así que a partir de este momento se sucederán los memoriales públicos y privados^{****} y los proyectos de reforma sobre esta materia.

En un memorial privado y sin firma, fechado en noviembre de 1.823 y conservado entre los Papeles Reservados de Fernando VII, el autor hacía al Monarca varias reflexiones acerca del estado de la Nación, de los Ministerios, de los Consejos y, en general, de la Administración pública española. Entre otros aspectos estudiaba la decisión de suprimir el Ministerio del Interior en los siguientes términos:

"Los que conceptúan que los negocios gubernativos y directivos se desempeñan mejor por una sola mano, y que los hombres de una sola profesión, y especialmente los letrados propenden a dar a los negocios gubernativos un giro contencioso, que si en algunas ocasiones asegura el acierto, en otras muchas perjudica a la expedición y celeridad, preferirían el establecimiento de un Ministerio del Interior auxiliado por el Consejo de Estado para todo lo que fuere consultivo; pero V.M. ha obrado sabiamente extinguiendo por ahora el Ministerio del Interior que creó la Regencia, cuya existencia era incompatible con las actuales atribuciones del Consejo de Castilla. Si con profunda meditación se resuelve algún día que este Consejo quede reducido a las funciones de un Supremo Consejo

^{****}. Algunos de ellos fueron conservados por el Rey Fernando VII en sus Papeles Reservados (Archivo General de Palacio y Archivo del Congreso de los Diputados).

Judicial, encargado de las apelaciones en última instancia, de la vigilancia sobre los demás Tribunales y de organizar y arreglar nuestra legislación, entonces solamente sería cuando podría sin inconveniente establecerse el Ministerio del Interior, y unirse lo consultivo y gubernativo al Consejo de Estado, disminuyendo el número de los Consejeros de Castilla. Entretanto y para que esta respetable Corporación pueda cooperar útilmente con el Ministerio y Consejo de Estado a las Restauración de la Monarquía, se necesita poner a su frente con el carácter de Gobernador, un Ministro práctico e inteligente del mismo Tribunal, con lo cual al paso que se economizan los sueldos de un Presidente, se facilitaría el despacho de los negocios y la reorganización de los Tribunales de provincia"****.

Sin duda el año 1.823 fue un periodo de reformas administrativas. Si bien mayoritariamente fueron restablecidas las instituciones vigentes a principios de 1.823, se nota con respecto a la restauración de 1.814 que al menos hay un replanteamiento del estado y de la estructura de la Administración. Buena prueba de ello fue el intento inicial de mantener un Ministerio del Interior. El 27 de noviembre una nueva medida en esta línea era adoptada. Se aprobaba un Real Decreto "para que se economice el número de empleados y el de los sueldos en todos los ramos del Estado, en vista del deplorable estado del país"****. La pérdida de las Américas y la inestabilidad política habían tenido importantes repercusiones en nuestra economía****.

Para ello se pidió al Consejo por Real Orden de 3 de diciembre que formase y remitiese al Ministerio de Hacienda un completo informe sobre el número de Ministros, subalternos y dependientes del Supremo Tribunal, en el que debía señalar además si algún oficio se encontraba enajenado

****. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24.

****. A.H.N., Consejos, legajo 3.781 núm. 11.

****. Un memorial privado que guardaba Fernando VII en su archivo particular acusaba a los Consejeros del Rey -entre los que bien podemos incluir a los de su Consejo Real- de falta de previsión ante los acontecimientos políticos vividos: "Los Consejeros del Rey debieron prever las causas de la Revolución del 20: fueron incapaces de impedir el trastorno general que repetidas veces se había intentado y se dejaron sorprender por la revolución del año 20." (A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 70 núm. 15, Exposición de don José Manuel Regato fechada el 26 de octubre de 1.826 sobre arreglo de la Administración: "Bases para una Administración sencilla y expeditiva").

de la Corona y si estaban servidos o no por los propietarios. Igualmente debían indicarse los sueldos que se percibían y una evaluación de sus emolumentos"". Con este informe y otros similares se podrían emprender las correspondientes reformas en orden a la mejora de la administración de Justicia y al gobierno de los pueblos.

c) El Consejo de Castilla recupera el ramo de propios. Pérdida definitiva de este ramo.

En la misma línea representaba el Consejo nuevamente a la Regencia el 18 de septiembre. En su escrito, el Supremo Tribunal solicitaba el restablecimiento de la Contaduría General de Propios y Arbitrios al estado que tenía en 1.820 y bajo la tutela del Consejo. Igualmente solicitaba fueran declarados nulos todos los actos administrativos y providencias del gobierno erigido en 1.820 por la rebelión. Añadía el Consejo en su instancia cómo era urgente "descubrir y remediar los males, daños y trastornos que padeció este importante ramo con las enajenaciones, repartimientos y disipación de fincas y caudales" "".

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11. El Consejo elaboró un largo informe de setenta y cinco folios, en el que quedaba descrita con gran detalle la estructura orgánica del Consejo en aquel momento.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 5. "El pretendido gobierno constitucional procuró con el más siniestro designio acostumbrar a los pueblos a gobernarse por sí mismos, sin dependencia ni reconocimiento de la autoridad soberana del Rey, y puso a cargo de los nuevos ayuntamientos el gobierno, administración, inversión y manejo de las fincas y caudales de los Propios y Arbitrios bajo la inspección de las Diputaciones Provinciales, y de privativa aprobación de las Cortes, dejando únicamente al Rey una propiedad estéril y nominal. Por el empeño y porfía de destruir la forma de gobierno monárquico, del que con tantas razones debe gloriarse la Nación Española, después de haber extinguido el Consejo real y cuantas instituciones servían de apoyo al gobierno legítimo, quiso el gobierno

La petición del Consejo de Castilla nuevamente fue acogida. El 1 de octubre del mismo año la Regencia del Reino comunicaba al Consejo una Real Orden por la que quedaba restablecida la Contaduría General de Propios y Arbitrios en el mismo estado que tenía a principios de 1.820. Se especificaba también que el Consejo debía dirigirse a la Regencia en todos los asuntos del ramo a través del Ministerio del Interior****.

Sin embargo, la alegría del Consejo duraría poco. Un Real Decreto de 3 de abril de 1.824 sería el primero de una serie de aldabonazos que anunciarían el fin definitivo de este Consejo. Por aquel Real Decreto cesaba definitivamente el Consejo Real en el conocimiento de los

revolucionario que no quedase rastro ni memoria del orden y método de cuenta y razón de los Propios Y arbitrios, establecido con tanta sabiduría y acreditado por una larga experiencia con utilidad de los pueblos. Con este fin fue suprimida la Contaduría General de Propios y Arbitrios del reino por decreto de las llamadas Cortes de 3 de julio de 1.813, a pretexto de que debían determinar en las provincias los negocios de sus atribuciones, según el nuevo sistema. Renovado desgraciadamente por la rebelión, no sólo volvió a quedar suprimida aquella Contaduría; más también se mandó el 31 de enero y 20 de junio de 1.821 que todos sus papeles se remitiesen a las respectivas Diputaciones Provinciales, como se verificó, según informó el oficial mayor del ramo. Así en 1.823 la Contaduría se encontraba sin expediente alguno, antiguo o moderno, fuera de aquéllos que por causar providencias generales no pertenecían a pueblo alguno en particular. Este particular trastorno fue indudablemente efecto de la malicia y de la falta de conocimiento del objeto y atribuciones de la Contaduría General, la cual fue creada para el reconocimiento, ajuste y liquidación de las cuentas del ramo, para que el Consejo, por cuya mano debían partir las providencias, tuviese todas las noticias necesarias para despachar de oficio por providencias gubernativas y económicas sin exigir derecho alguno los negocios que no fuesen contenciosos, por lo que se ve la falsedad de la imputación de que gobernaba con los trámites judiciales, y finalmente para que pudiese dar anualmente cuenta a S.M. del estado de los valores y cargas de los Propios y Arbitrios, pues para este fin todos los Intendentes debían llevar correspondencia y remitir las relaciones al Contador General del ramo..."

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 5. También el 18 de diciembre se comunicaba al Consejo una Real Orden por la que se nombraba para regir la Contaduría a don José Echevarría, Intendente Corregidor de Guadalajara.

asuntos de propios y arbitrios del Reino, que a partir de ahora serían confiados a una Dirección General creada al efecto, y dependiente de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda. Expresaba en el Real Decreto al Monarca que era su voluntad "que los negocios contenciosos que se susciten en las provincias se determinen por los Intendentes de ellas con las apelaciones de mi Consejo de Hacienda en Sala de Justicia"****.

Las Actas del Consejo de Ministros, en su sesión de aquel mismo día 3 de abril****, recogen la deliberación que sobre este asunto se dio en aquel Consejo. Fue el único asunto que consta fuera estudiado en la reunión de aquel día, presidida por el Rey****. Tomó la palabra el Secretario del Despacho de Hacienda y propuso al Monarca "se dignase dar al ramo de Propios y Arbitrios del Reyno un nuevo orden para mejorar su administración defectuosa, conciliando la celeridad y exactitud de las recaudaciones con el alivio y fomento de sus amados pueblos, y con la pronta y cumplida justicia en la decisión de los negocios que tuviesen el carácter de contenciosos"****. Tras repasar la historia del ramo de propios y su gobierno, el Sr. López Ballesteros señaló cómo había sido hecha una encuesta a los

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7º Real Decreto de 3 de abril de 1.824: "Conociendo la necesidad de que la administración de los ramos de propios y arbitrios del Reino se despache con la rapidez que se propuso mi Augusto Padre al expedir su soberano Decreto de 30 de agosto de 1.796 y era mi Real ánimo al dictar mi resolución de 15 de noviembre de 1.818, después de haber aído a mi Consejo de Ministros, he venido a crear una Dirección General con inmediata y única dependencia de mi Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, poniéndola al cuidado de un Director General que nombraré, y cesando mi Consejo real en el conocimiento de los expresados ramos, pues es mi voluntad que los negocios contenciosos que se susciten en las provincias se determinen por los Intendentes de ellas con las apelaciones de mi Consejo de Hacienda en Sala de Justicia. Tendréislo entendido y lo comunicaréis a quien corresponda para su cumplimiento."

****. Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo I, sesión del día 3 de abril de 1.824, págs. 8 y ss.

****. Junto al Monarca asistieron los Ministros siguientes: el Conde Ofalia, don Francisco Tadeo Calomarde, don José de la Cruz, don Luis María Salazar, don Luis López Ballesteros y don Antonio Ugarte, Secretario.

****. Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo I, pág. 9.

Intendentes y Subdelegados de Real Hacienda para que informasen "reservadamente hasta qué año se hallaban corrientes las cuentas de propios, el estado de su administración, los pueblos que estaban en descubierto y las causas de sus atrasos, acompañando su dictamen acerca del sistema que debería observarse para la mejor administración, recaudación e inversión de estos fondos"****.

Al parecer, los Intendentes y Subdelegados de Hacienda coincidieron todos "en el asombroso atraso de las cuentas, y en el trastorno general de la administración, entorpecida por el interés privado, y por los defectos de un sistema, para cuya reforma muchas de dichas autoridades creían indispensable que el conocimiento de estos negocios se separase del Consejo de Castilla, recargado con el peso de otras atenciones de un orden diferente, y cuya marcha lenta en la sustanciación de los expedientes de gobierno económico hacía sufrir a los más sumisos, mientras que autorizaba a otros para que a la sombra de las necesidades del momento usurpasen las facultades del alto Gobierno, y convirtiesen en utilidad privada las rentas que debían servir al común aprovechamiento, y a las atenciones de la Corona"****.

En definitiva, se trataba de establecer una unidad central en la administración de todos estos fondos, libre de las fórmulas lentas inseparables de toda corporación y especialmente de los tribunales****. Es significativo además que hubiese ya una opinión mayoritariamente contraria a la gestión del Consejo entre las autoridades económicas.

Aprobado el Real Decreto con fecha 3 de abril, el día 5 fue comunicado al Consejo por el Ministerio de Hacienda en Real Orden. Inmediatamente fue preparada consulta por el Consejo en defensa de estas atribuciones. Resumiendo sucintamente lo expuesto por los Fiscales y en la misma consulta****, el Consejo defendía la conservación de este ramo con los siguientes argumentos: en primer lugar, la gran labor realizada por el Supremo Tribunal durante

****. Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo I, pág. 9.

****. Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo I, págs. 9 y 10.

****. Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo I, págs. 10 a 12.

****. Vid. A.H.N., Consejos, legajo 6.087, consulta de oficio del 6 de mayo de 1.824.

siglos; en segundo lugar, la ausencia de responsabilidad en el Consejo por el mal estado actual de los propios, mal estado causado por las terribles convulsiones políticas de la Guerra de la Independencia y del Trienio Liberal; en tercer lugar argumentaba el Consejo de Castilla que ninguna institución podía realizar esta labor mejor que el Consejo, por reunir en su seno potestades de gobierno y de administración de Justicia, por su larga experiencia y por su propia autoridad en los pueblos; y finalmente esgrimía como argumento principal la necesidad que tenía el Consejo de controlar el ramo de propios para ejercer sus labores de gobierno"".

También se dejaban notar en sus alegaciones la herida que una medida así producía en el orgullo de este veterano Tribunal"", que no quería depender en el ejercicio de sus cometidos de otra institución (por ejemplo, verse en la necesidad de solicitar información), sino sólo del Rey; e igualmente dejaba traslucir el daño que una medida así ocasionaba a su prestigio"".

También acudiría el Consejo Real a un repetido argumento: el de las novedades peligrosas: "en las actuales circunstancias, más que nunca es peligrosa toda novedad en el Régimen a que están acostumbrados los pueblos

"". "El gobierno exige necesariamente que el Consejo tenga la dirección de los propios y arbitrios,...porque este gobierno consiste en gran parte en el desinteresado y discreto manejo de los propios y arbitrios, y en su aplicación y destino a los objetos de utilidad y conveniencia pública y en la evitación de postulados y malversaciones..." (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.086, consulta del 6 de mayo de 1.824).

"". "No es decoroso al primer Tribunal de la Nación haber de mendigar las noticias que necesite del Director y dirigirse por vía de ruego. Y suponiendo en el Director la mayor franqueza no llegarían estas noticias con la prontitud que si el Consejo presidiese este ramo, como hasta la fecha. Y si el Director no quiere darlas sin conocer el objeto para el que se piden o si se opone a una providencia del Consejo, se complicaría todo bastante..." (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.086, consulta del 6 de mayo de 1.824).

"". "No puede dejar de ser muy sensible al Consejo esta Real Orden por la desconfianza que envuelve de su actividad en el gobierno y administración de los propios y arbitrios del Reino..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7; y legajo 6.087, consulta de oficio del 6 de mayo de 1.824).

y mucho más una novedad de tanta consecuencia"****. Repetía así una vez más el argumento de fondo que solía esgrimir el Consejo de Castilla en los momentos difíciles para su instituto: 'o nosotros, o el caos': la institución era la única opción que podía hacer un gobierno justo y eficaz. Cualquier cambio o reforma sería a peor.

En definitiva, el Supremo Tribunal era consciente que la pérdida de este ramo de gobierno mermaba seriamente su papel y sus prerrogativas. Incluso el despacho ordinario de las competencias del Consejo quedaría afectado por esta decisión, al perder el control sobre recursos económicos y sobre la información.

El 15 de febrero de 1825, el Consejo pedía al Monarca que se dignara resolver las consultas que había elevado en 6 y 26 de mayo anterior solicitando que se restituyera al Consejo de Castilla el antiguo y privativo conocimiento sobre el ramo de propios****. En su informe el Fiscal señalaba que el Consejo se encontraba paralizado en su labor por este motivo****.

Sin embargo, parece que la decisión de que el Consejo no llevara los propios y arbitrios era firme. Por

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.086, consulta del 6 de mayo de 1.824.

****. A.H.N., Consejos, legajo 6.089, consulta de oficio de 15 de febrero de 1.825.

****. "Otrosí. La multitud de expedientes que continuamente se pasan a este ministerio Fiscal, ya de la clase del actual, sobre que los Ayuntamientos de los pueblos abonen a varios interesados que lo solicitan sumas mayores o menores que suponen debérseles por dichas corporaciones, ya sobre el aumento de dotaciones a médicos, cirujanos y otros empleados en los pueblos que deben disfrutarlas del ramo de propios y arbitrios; y ya finalmente por el establecimiento de jueces letrados o regentes en varios pueblos, en todas las cuales es preciso tomar su conocimiento exacto del estado en que se hallan los propios y arbitrios de los pueblos para proponer y dictar en su razón las providencias oportunas que en el estado de paralización y suspensión en que se halla el Consejo por el conocimiento de propios y arbitrios, no puede tener cumplido efecto, hace indispensable ponerlo en noticia de S.M. para que se sirva decidir las consultas hechas a S.R. Persona, sobre que se restituya al Consejo su antiguo peculiar y privativo conocimiento en dichos ramos, según lo disfrutaba en el fatal y aciago día de 7 de marzo de 1.820..." (A.H.N., Consejos, legajo 6.089, consulta de oficio de 15 de febrero de 1.825).

Real decreto de 3 de abril de aquel año se erigía la Dirección General de Propios. También en la segunda parte del Decreto se ponía a cargo de la Sala de Justicia del Consejo de Hacienda lo contencioso de la materia. Por tanto, el Consejo perdía irremisiblemente estas importantes competencias.

En esta situación cabían dos salidas. O se devolvía al Consejo todo el sector de propios y arbitrios, indispensable para su normal funcionamiento según su tradicional estructura; o bien era preciso ir delimitando competencias de este Supremo Tribunal que se atribuirían a otros órganos. La razón era sencilla: sin los propios y arbitrios el Consejo de Castilla estaría mucho más incapacitado para ejercer sus cometidos. Se hacían precisas nuevas reformas en el futuro.

El 22 de abril nuevamente el Fiscal del Consejo dictaminaba que se hacía imprescindible la recuperación de estas competencias. El Consejo se encontraba al parecer en un estado en el que no podía decidir ni resolver muchas de las solicitudes que los pueblos le dirigían. Muchos expedientes eran sobreesidos por este motivo, y también otros no referidos específicamente a propios, pero sí relacionados con ellos indirectamente: las dotaciones de alcaldes mayores, cirujanos, maestros de primeras letras, arreglo de cárceles y casas de los ayuntamientos, fuentes, empedrados, socorro de expósitos, rompimientos y repartos de montes y dehesas, denuncias, remates, etc. El Consejo manifestaba entonces encontrarse "casi reducido a las atribuciones de un Tribunal Supremo de Justicia, a imitación del que había en la época del gobierno revolucionario, y precisado a ser un simple espectador de las necesidades de los pueblos sin poderlas remediar de modo alguno..."

Este malestar del Consejo se tradujo también en algunos conflictos con la recién creada Dirección General de Propios. El Director General mediante los artículos 4, 5 y 6 de una Orden suya, que había circulado impresa el Intendente de Toledo, refundió una serie de competencias que hasta entonces eran privativas del Consejo. "El acotamiento de pastos y rastrojeras, de hoja de viñas y de terrenos comunes, las cortas de madera, corridas de novillos y el rompimiento de tierras siempre han estado bajo la autoridad del Consejo, y aún sólo en pleno se consultan los nuevos rompimientos, debiendo estar conformes las dos terceras partes de votos, y oído el Procurador del Consejo de la Mesta y del General del Reino con otras formalidades. A

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995
núm. 7.

pesar de hallarse vigentes y en su fuerza tantas leyes, a pesar de no haberse autorizado para ello al Director de Propios, se arroga tamañas facultades y reduce al Consejo a un mero Tribunal de Justicia al modo que lo establecieron los constitucionales,...y el Consejo faltaría a su obligación si no reclamase tanto abuso de autoridad en el Director de Propios"****.

Sabemos que el Director General de Propios y Arbitrios del Reino se quejó al Rey de la mala voluntad del Consejo en lo referente a la remisión de varios documentos que reclamaba. "Enterado S.M. se ha servido mandar que el Consejo Real remita a la Dirección General de Propios los documentos que reclama y reclamare en lo sucesivo como S.M. tiene ordenado repetidas veces"****.

El Consejo aprovechó la ocasión para presentar también sus quejas al Monarca. El Supremo Tribunal había contestado en diversas ocasiones a las peticiones del Director General de Propios manifestando las razones que le asistían para no remitirle los expedientes unidos. El Consejo defendía que la Dirección General no tenía por qué enterarse del motivo de la formación de otros expedientes, lo cual era privativo del conocimiento del Consejo****. En

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7; también en la consulta del 7 de junio de 1.825 se quejaría de una circular de la Dirección General de Propios que se inmiscuía en la jurisdicción del Consejo en lo referente a la creación de arbitrios (A.H.N., Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio de 7 de junio de 1.825).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 8.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 8: "De ninguna manera debía esperarse que los sacase de este Supremo Tribunal para pasarlos a la Dirección, que por la única facultad que le concede el expresado Real Decreto de su creación no puede entender de ellos sin traspasar los límites de sus funciones.

Estas según lo terminante de la letra y sentido del propio Real Decreto se hallan reducidas a conocer de la administración de los ramos de propios y arbitrios que antes estaba unida a las demás propias del Consejo, de que no se le ha privado por Decreto expreso de S.M., y por consiguiente cualquier tentativa de la Dirección del propio ramo dirigida a entorpecer y privar interim al Consejo de las otras muchas que le competen como inherentes a su instituto debe contrarrestarse elevando a la soberana consideración...

...De conceder a la Dirección General de Propios el conocimiento que pretende en los expedientes unidos de

todo caso, la resistencia a colaborar con aquella Dirección General era muestra del resentimiento que había en el Consejo por la pérdida de aquel ramo.

El 6 de mayo el Consejo hacía nueva consulta al Monarca sobre el particular. Tras manifestar cómo siempre que se había tomado en consideración el asunto, se había determinado dejar el gobierno de los propios al Consejo, añadía: "Y sobre todo y en las actuales circunstancias, más que nunca es peligrosa toda novedad en el régimen a que están acostumbrados los pueblos y mucho más una novedad de tanta consecuencia. Confía pues el Consejo que V.M. se dignará suspender el Real Decreto de 3 de abril próximo..."

Y nuevamente el 7 de junio presentaba el Consejo una nueva consulta. En ella el Supremo Tribunal mostraba haber variado sus posiciones. En vista de la dificultad de que todo el ramo de propios le fuera nuevamente reintegrado, el Consejo decidió recular y propuso al Rey que al menos se reservase a la Sala de Justicia del Consejo de Castilla lo contencioso de este ramo: "La parte administrativa de la materia de propios puede ser embarazosa al Consejo Real por sus vastas atribuciones. Pero en lo contencioso ningún otro Tribunal puede tener ideas tan exactas como el Consejo, que ha creado y promovido dicho ramo con el ardor que manifiesta el Código sobre propios y la formación de reglamentos para más de 26.000 pueblos..." El Fiscal también se quejaba en esta ocasión por "el empeño que hay desde hace más de 70 años en desacreditar la administración y el gobierno del Consejo en este ramo".

A estas consultas del Consejo Real sucedió por fin una Real Resolución. Fue sin duda de una inusitada dureza contra el Consejo, a lo que el Supremo Tribunal no debía estar acostumbrado: "Llévese a puro y debido efecto el Real Decreto de 3 de abril de 1.824. El Consejo, dejando de hacer más consultas sobre la materia, pasará cuantos

igual o semejante naturaleza vendría a quedar el Consejo no sólo destituido de las facultades que le son más inherentes, sino el más insignificante y nulo de todos los tribunales..."

... A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7.

... A.H.N., Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio de 7 de junio de 1.825.

... A.H.N., Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio del 7 de junio de 1.825.

expedientes y documentos tiene de propios y arbitrios a la Dirección General, y expedirá una Real Cédula insertando dicho Real Decreto de 3 de abril de 1.824, de cuyo cumplimiento dará cuenta. Lo he mandado comunicar al Director General de Propios..."****.

Como era muy característico de su tradicional sumisión a la voluntad regia, el Consejo de Castilla acató rápidamente la decisión real. Publicó esta resolución en Consejo pleno el 15 de julio e inmediatamente se pasó a los Fiscales con urgencia para la expedición de la Real Cédula correspondiente. Igualmente dio órdenes a todos los Escribanos de Cámara y de Gobierno del Consejo para que en el término de dos días remitiesen una lista expresiva de todos los expedientes, autos o negocios que se hallasen pendientes y tuvieran relación con el ramo de propios"****.

El Consejo daba orden el 30 de julio que se pasasen a la Dirección General de Propios todos los expedientes relativos a este ramo que estuvieran actualmente en curso y que no ofrecieran duda alguna de pertenecer a aquella Dirección General. Por otro lado, una Escribanía de Cámara del Consejo informaba a la Dirección General de Propios el 6 de septiembre que no podía remitirle todos los papeles que le solicitaba pues esa oficina estaba bajo la autoridad del Consejo, "sin cuyo expreso mandato y conocimiento no podemos ni debemos cumplir con los de cualquiera otra que nos oficie, a pesar de que nos merezca el mayor respeto y consideración..."****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7.

****. Las Escribanías cumplieron con lo mandado y presentaron las indicadas listas, si bien todas no abarcaban una misma época. Grandes dificultades tuvo la Escribanía de Gobierno para elaborar las suyas, según expresaba el titular de la oficina el 30 de julio (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7).

****. "...Parece que está en el orden y en buena práctica que hablen y se dirijan a dicho Supremo Tribunal porque éste es quien ha de acordar y mandarnos hacer la remisión de los que V.S.I. tenga necesidad, previa la debida calificación, pues que como tales Escribanos de Cámara no somos árbitros para proceder de otra forma, ni otra cosa que unos meros órganos por los cuales se le transmite todo lo que cualquiera con autoridad tenga que hacerle presente y por donde se comunican sus resoluciones...Madrid, 6 de septiembre de 1.825." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7).

En cuanto a otras medidas tomadas por el Consejo de Castilla en acatamiento de la disposición regia, sabemos que se formó por las Escribanías de Cámara un doble inventario para que uno acompañase a los expedientes y otro sirviese de resguardo y conocimiento de las expresadas Escribanías. Se pidió también al Director General de Propios que habilitase a dependiente o persona de su confianza para que inspeccionase, recibiese y se hiciese cargo de dichos negocios"". De esta manera, parece que los papeles se pasaron a la Dirección General el 21 de septiembre de 1.825 y algunos documentos más al menos el 16 de marzo siguiente"".

Debió encajar el Consejo bien la derrota. Era uno más de los acontecimientos difíciles que el Supremo Tribunal estaba viviendo en los últimos años, que bien podrían llamarse de decadencia del Consejo. Todavía en una consulta de apenas cinco días después se observaba el tono amargo de la queja: "...no estando los propios bajo su omnimoda y privativa autoridad, no puede el Consejo desempeñar el gobierno de los pueblos, que es su principal instituto..."".

d) El Consejo pierde también los pósitos

Sin embargo, la pérdida del ramo de propios no había venido sola. Por un Real Decreto de 25 de marzo de 1.825 se había ordenado también la inhibición del Consejo en los asuntos contenciosos de pósitos, dejando sin efecto el Real Decreto de 2 de mayo de 1.818 en que se le reservó el conocimiento de las apelaciones de los Subdelegados de Pósitos en la Sala de Mil y Quinientas. El Consejo preparó también una consulta solicitando la restitución de estas

""'. Fue nombrado para este cometido a don Manuel Laso de la Vega, Archivero de la Dirección General.

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7.

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7.

competencias, consulta que presentó al Monarca el 27 de junio de aquel año""'. De esta consulta, ofrecen un especial interés algunos párrafos del dictamen de los Fiscales, que definen muy bien los sentimientos del Consejo Real en aquellos momentos:

"...Por una fatalidad inconcebible, ve y palpa el Consejo y toda la Nación que se van disminuyendo como insensiblemente sus facultades y precisamente en los asuntos en que más acostumbrados estaban los pueblos a vivir bajo su suave y dulce intervención, como son los de propios y pósitos, pudiendo asegurarse que su falta de conocimiento en estos dos ramos influye tan poderosamente en todos los demás del mejor gobierno, conservación y prosperidad de los pueblos puestos a su cuidado, que a cada paso se ve paralizado para proporcionar los auxilios y recursos que en otro tiempo podría prodigar a manos llenas (...). No parece sino que continúa el espíritu de novedad con respecto al Consejo, para ir anonadando pulatína y progresivamente las facultades y prerrogativas de su constitución, hasta reducirle a un Tribunal puramente de Justicia, como el establecido con el nombre de Supremo por la ominosa Constitución, y que se trata de remover la íntima unión que constantemente ha tenido con sus Reyes, conforme a las leyes del Estado, y que debe repetirse pues ya lo dijo el Consejo en consulta que hizo a S.M. a 1 de octubre del año último, siendo su existencia inseparable de la de S.M., y que quien le ofende no pueda hacerlo sin ofender a su Rey y Señor."

Más adelante, los Fiscales añadían:

"No se crea que este noble ardor y franqueza de los Fiscales tiene por único objeto quejarse de la disminución de facultades que va experimentando el Consejo, por el sólo hecho de no intervenir en lo que antes intervenía. Sus miras provienen de ver que el Consejo Real, esta roca constantemente inaccesible y firme contra los furiosos embates de los noveleros y reformadores, empieza a minarse y que según va, apenas le

""'. A.H.N., Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio del 27 de junio de 1.825.

quedará más que el nombre, sin poder cooperar como de antiguo y en unión con S.M. a la prosperidad y mejora de los pueblos y conservación y propagación de máximas uniformes y probadas con la experiencia de muchos siglos"****.

Texto sin duda interesante, en el que el mismo Consejo se define como pilar del Antiguo Régimen y de la Monarquía Absoluta, y dique contra toda novedad e innovación. No andaban por tanto descaminados autores como Toreno, Villa-Urrutia o el mismo Argüelles cuando vertían estas acusaciones contra el Consejo de Castilla.

e) Nuevos proyectos de reforma de la Administración. El Consejo de Estado.

El 28 de diciembre de 1.825 se producía un relevo de instituciones, que tendría importantes repercusiones en la organización de nuestra Administración. Por decisión del Monarca, cesaba en sus funciones la Junta Consultiva. Su hueco era cubierto por un influyente Consejo de Estado, con amplias atribuciones. Entre otros cometidos, debía buscar la causa de los males que afligían al país y proponer medidas para hacerlos desaparecer y lograr un funcionamiento óptimo de nuestra Administración Pública****.

Durante el año 1.825 habían corrido ya abundantes rumores sobre la necesidad de reformas en nuestra Administración. Se decía que el Monarca preparaba un auténtico vuelco en nuestras instituciones tradicionales. Ante tanto rumor parece ser que Fernando quiso cortar este

****. A.H.N., Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio de 27 de junio de 1.825.

****. SUAREZ, F., "Documentos del Reinado de Fernando VII", vol. II, pág. 53, citado por GARCÍA MADARIAGA, J.M., "Estructura de la Administración Central", pág. 75; y ESCUDERO, J.A., "La Real Junta Consultiva de Gobierno", op. cit.

género de alarmas y afirmaba la en un Real Decreto de 19 de abril de 1.825: "que no solamente estoy dispuesto a conservar intactos y en toda su plenitud los legítimos derechos de mi soberanía, sin ceder ahora ni en tiempo alguno la más pequeña parte de ellos..., sino que tengo las más solemnes y positivas seguridades de que todos mis augustos aliados (...) continuarán auxiliando en todas ocasiones a la autoridad legítima y soberana de mi Corona, sin aconsejar ni proponer directa ni indirectamente innovación alguna en la forma de mi gobierno"....

Sin embargo, ya en 1.826 se van a suceder una serie de escritos que aciertan probablemente en diagnosticar una causa importante de los males de España. Ciertamente se palpaba en el ambiente que las reformas de nuestra Administración estaban ya próximas..., como lo demuestra también la abundancia de escritos públicos y privados proponiendo reformas, entre ellos el conocido de Javier de Burgos....

El 24 de enero de 1.826 Javier de Burgos

....PALACIO ATARD, V., "La España del siglo XIX", págs. 157 y 158.

.... El profesor Seco Serrano ha estudiado la correspondencia del infante don Carlos con Fernando VII, en el periodo julio-agosto de 1.826, que revela entre otras cosas la alarma de don Carlos porque su hermano Fernando pudiera dar un paso "tan agingantado contra tu autoridad y soberanía, del cual ya no puedas retroceder, y que lejos de escapar de ser presa de los constitucionales, te entregues en sus manos..." (SECO SERRANO, C., "Don Carlos y el Carlismo", págs. 36-38, citado por PALACIO ATARD, V., "La España del siglo XIX", pág. 159).

.... "Por otra parte, una multitud de documentos giran en torno a una inequívoca tendencia a reformar el sistema de gobierno y algunas de las instituciones (el Consejo de Estado, por ejemplo). Durante el año 1.826 se refleja en los documentos una gran actividad en este sentido: Exposiciones del Marqués de Almenara, del obispo de León don Joaquín Abarca, de Regato, de Carnecero; proyectos de reforma del Duque del Infantado; Memorias anónimas sobre reformas del sistema de gobierno y de la Hacienda; una nutrida correspondencia de López-Ballesteros con distintas personas, abundante en noticias en torno al difícil momento político español y que refleja las inquietudes de más de un sector, etc." (SUAREZ VERDEGUER, F., "La crisis del Antiguo Régimen en España", Madrid 1.988, pág. 157).

dirigía al Monarca desde París una conocida exposición¹⁰⁰⁰ en la que proponía una serie de medidas para restaurar la Monarquía. Una de ellas era "separar de las atribuciones del Consejo de Castilla la administración superior del Estado y confiársela a un Ministerio especial", el Ministerio del Interior¹⁰⁰¹. Sin embargo él mismo preveía las objeciones que su propuesta encontraría: su establecimiento coartaba o destruía las facultades que las leyes daban al Consejo de Castilla en materia de gobierno o de administración; gravaba al Erario con nuevos gastos; era imitación de una de las instituciones del Gobierno intruso y de los gabinetes liberales¹⁰⁰².

En su escrito describía también los defectos del Consejo de Castilla dentro de nuestra Administración. Se expresaba así Javier de Burgos en su exposición: "Un Cuerpo que se reúne sólo a ciertas horas y en ciertos días y a quien hábitos respetables han sometido al imperio de fórmulas lentas, bien que útiles para los negocios judiciales, no puede velar sobre necesidades que con mucha frecuencia exigen urgente remedio. Añadiré que un cuerpo como el Consejo está limitado por su constitución a decidir los negocios de gobierno de que por su complicación o su importancia debe dársele cuenta, y que siendo éstos respectivamente poquísimos, la generalidad de los intereses públicos queda abandonada a sí misma, sin que haya quien los promueva o proteja: para que el despacho de los negocios administrativos, que ocupan en todos los países de Europa centenares de individuos llenos de instrucción, no tiene el Consejo más que un Escribano de Gobierno, que no conoce por lo común otro mundo administrativo que la Sala del Tribunal, ni otros libros que los legajos de una Escribanía: que por

¹⁰⁰⁰. El documento llegó a alcanzar una gran celebridad en su época. Fue difundido en librerías y muchos periódicos de la época publicaron su contenido parcial o total. Sin embargo, el escrito no llegó a alcanzar por entonces mayores consecuencias (SUAREZ, F., "La creación del Ministerio del Interior en España", págs. 18 y 19).

¹⁰⁰¹. SUAREZ, F., "La creación del Ministerio del Interior en España", págs. 17 y ss. "La creación de un Ministerio del Interior, que sustituyendo al anacrónico Consejo de Castilla, se ocupará de agilizar la administración interna y promover las reformas necesarias" (De la representación de Javier de Burgos, citado por PALACIO ATARD, V., op. cit., pág. 157).

¹⁰⁰². SANCHEZ BELLA, I., "La Reforma de la Administración Central en 1.834", Actas del III Symposium de Historia de la Administración, pág. 661; y SUAREZ, F., "La creación del Ministerio del Interior en España", págs. 17 y ss.

su calidad de Cuerpo colegiado y por la falta de un código administrativo no tiene el Consejo la menor responsabilidad por el daño que hace con una providencia poco acertada, ni por el bien que en razón de su constitución, o por cualquier otro motivo, deja de hacer: daños que deben experimentarse a menudo, pues un Cuerpo de letrados no puede discutir siempre con acierto intereses cuyo examen necesita conocimientos que no suministra la jurisprudencia: que no existiendo entre nosotros sino poquísimas leyes administrativas, y contándose entre ellas algunas que sería mejor que no existiesen, las decisiones deben fundarse o en el buen sentido, que no siempre inspira lo mejor, o en antecedentes, que suelen extraviar en vez de conducir. Señor, yo no creo que ninguno de los dignos jurisconsultos que pronuncian en vuestro Consejo Real los oráculos soberanos de la justicia niegue la exactitud de estas observaciones. Ellos lloran sin duda la necesidad en que se les pone frecuentemente de pronunciar sobre cosas de que no trata el Derecho, y en las cuales, para descargo de su conciencia, tienen que conformarse a veces con el dictamen de los subalternos, a los de alguna de sus circunstancias o las erróneas tradiciones de la Escribanía.

El Consejo no reclamará ciertamente la prerrogativa de continuar encargado de los intereses sobre que no puede velar y cuyo constante abandono justifica la necesidad de encomendarlos a quien pueda promoverlos. Si tal situación se prolongase, los gérmenes de prosperidad que aún nos quedan se irían secando sucesivamente, y la España, reducida a la miseria, haría recordar con dolor sus antiguas épocas de abundancia." (...) "Se necesitan vastos conocimientos, actividad infatigable y competente número de auxiliares." (...) "Separando, pues, de las atribuciones del Consejo Real las que él no puede desempeñar, dispensa V.M. un beneficio insigne a la Nación que rige, removiendo el principal obstáculo de las mejoras que reclama, y hace al mismo tiempo más fácil a sus Consejeros el desempeño de sus funciones judiciales, y más expedita la marcha de la Justicia. Siempre que lo creyeron conveniente el bienestar de sus pueblos, hicieron otro tanto los augustos predecesores de V.M., ora creando, ora suprimiendo Consejos, Juntas u oficinas, ora ampliando o restringiendo sus atribuciones. Los beneficios que deben resultar de la erección de un Ministerio de lo Interior no podrían, pues, ser retardados por el temor de quitar al Consejo Real facultades que no le es posible desempeñar, y a que aquel Cuerpo renunciará sin duda espontáneamente, cuando conozca las intenciones de V.M., dirigidas a promover la prosperidad y la ventura de sus vasallos"....

---. SANCHEZ BELLA, I., "La Reforma de la Administración Central en 1.834". Actas del III S.H.A., pág. 661.

Ya hemos señalado cómo 1.826 fue un año de estudios sobre nuestra Administración. Aquel año abundaron los memoriales públicos y privados sobre la reorganización de nuestras instituciones administrativas. Incluso en Francia se elaboraron informes sobre nuestra Administración. Entre la documentación guardada por Fernando VII en sus Papeles Reservados se encontraba una interesantísima memoria que fue presentada al Conde de Villele, Presidente del Consejo de Ministros de Francia. Esta memoria estaba fechada el 12 de julio de 1.826 y llevaba por título "De la urgente necesidad en que se encuentra el Rey de España de ser eficazmente ayudado por Francia para restablecer la tranquilidad en sus Estados y organizar la Administración." Es el llamado Informe Almanara, que fue remitido al gobierno francés por el Embajador de España en París, el Marqués de Almenara¹⁵⁹. Para Palacio Atard, este escrito ponía el dedo en la llaga de las dos cuestiones en que el sistema de gobierno del Antiguo Régimen hacía crisis: la crisis del mecanismo administrativo, que había que modernizar sin violencias, y el 'sistema de furor' que sostenían los realistas exaltados¹⁶⁰.

He aquí el texto original de este interesante informe, tal y como llegó a manos de Fernando VII:

"Le Roi d'Espagne est intimement pénétré que la bonheur de son peuple et la fiabilité de la Monarchie dependent de la bonne administration de l'Etat: il fait que le Conseil d'Etat, le Conseil Royal et Suprême du Roi ou de Castille, le Conseil Suprême des Indes, le Conseil Suprême de la Guerre et le Conseil Royal des Ordres Militaires ont été créés à des époques reculées où l'on ne connaissait nulle part en Europe la distinction et les limitations des fonctions judiciaires et administratives, et avant que l'on eut créé le Corps qui les exercent sans confusion et sans conflit de Jurisdictions.

C'est ainsi que les Conseils Suprêmes d'Espagne sont encore appelés indistinctement Conseils ou Tribunaux, tous ils decident dans les matières judiciaires de leur report respectif; tous ils font confutir par le Roi dans les affaires d'Etat et dans la partie contentieuse qui s'y rapporte, et ce qui est

¹⁵⁹. PALACIO ATARD, V., "La España del siglo XIX", pág. 159.

¹⁶⁰. PALACIO ATARD, V., "La España del siglo XIX", pág. 159.

plus encore, tous ils font confutir dans les affaires politiques graves en forte que dans un même cas le monarque entend des rapports des opinions contradictoires, sans qu'il puisse tranquilliser sa conscience et que les Ministres se trouvent echargés d'une responsabilité qui paralyse l'exercie de leurs fonctions. Aussi est-on très souvent forié d'avoir recours à différents performes prises hors des Conseils ou tribunaux, si l'on veut faire disparaître les contradictions et rendre une résolution possible¹¹ 1406.

Entre otra serie de medidas, el autor de la memoria proponía que "la France devra coopérer de la manière la plus active à établir las bases d'un Conseil pour l'Administration de l'Etat, sans faire des reformes violentes pour cela il est à propos d'examiner tous les Corps ou Conseils qui composent actuellement le gouvernement espagnol et de deduire de cet examen la partie qu'on peut tirer de chacun d'eux"¹² 1407.

El que éste y otros memoriales e informes se encontrasen archivados entre los documentos reservados del Monarca demuestra también la preocupación que tenía Fernando VII por la reforma de su Administración y por el funcionamiento de los Consejos. Y por otro lado, es significativa la escasa mención que se hacía en estos memoriales del Consejo de Castilla, un dato que demuestra la pérdida de protagonismo del que todavía era primer Tribunal de la Nación.

Todavía vamos a citar un memorial más de aquel año, por lo demás bastante conocido. Fue escrito por don José Manuel Regato y tenía por título "Bases para una Administración sencilla y expeditiva." Debió ser remitido al Monarca, quien también lo guardo en su Archivo

¹¹06. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 70, núm. 8. Memoria presentada al Conde de Villele, Presidente del Consejo de Ministros de Francia: "De l'urgente nécessité où se trouve le Roi d'Espagne d'être efficacement secouru par la France pou retablir la tranquillité dans ses Etats et en organiser l'Administration."

¹²07. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 70 núm. 8, Memoria presentada al Conde de Villele, Presidente del Consejo de Ministros de Francia, op. cit.

Reservado^{****}. Recogemos aquí la parte que ofrece mayor interés a nuestro estudio:

"...De poco serviría clasificar los Ministerios si continuase como hasta aquí la confusión de atribuciones en los primeros Jefes y Tribunales de la Nación. El mismo entorpecimiento, el mismo desorden y la misma falta de actividad seguiría si (...) a los Tribunales y jueces se les ocupase con otras atenciones que las delicadísimas de juzgar y decidir de la vida, hacienda y honor de los demás, y si los Cuerpos establecidos para aconsejar se distrajeran de su propósito sentenciando pleitos, interviniendo en ramos económicos y ejerciendo funciones gubernativas. Así como en las grandes y complicadas máquinas se requiere una precisa colocación de todos los ejes y piezas que han de contribuir a su movimiento, y se exige tal independencia en cada una de ellas que ni se contrapongan unas a otras ni menos se separen del círculo que respectivamente tengan señalado para su acción, del mismo modo en los grandes estados bien gobernados deben estar señaladas con distinción e independencia las funciones de los encargados en su administración a fin de que no se confundan unas con otras, ni pueda retardarse el cumplimiento de lo mandado en otros y cada uno de sus ramos sin conocer al instante en donde se halle el entorpecimiento (...). La falta de encadenamiento en las atribuciones de Tribunales y jueces, la ninguna proporción que se advierte en su distribución, los privilegios particulares de algunos y sobre todo las atenciones de otra especie que pesan sobre los Supremos Consejos que forman los primeros Tribunales de España, ocasionan competencias, causan dilaciones y producen clamores, quejas y extorsiones que no han podido remediarse con las providencias aisladas que han dictado los predecesores de V.M. y aún V.M. mismo. Por todo lo cual considero importante que se clasifiquen las atribuciones de todos los jefes y Tribunales de la Monarquía, de manera que en lo militar entiendan única y exclusivamente los Capitanes Generales; en lo político se establezca un Jefe cuyo cargo sea la tranquilidad del Estado, el fomento de la riqueza y la ejecución de todas las medidas de buen gobierno; en lo judicial se gradúen uniformemente en todo el Reino las facultades de jueces y Tribunales hasta el último superior que se establezca; y los Consejos no tengan más atribuciones que la de proponer y consultar lo que estimen conveniente al mejor gobierno de la Monarquía y dar sus parecer en los casos que V.M. se lo pida."

En 1929 continuaron también los proyectos de

^{****}. A.G.P., Papeles Reservados, Fernando VII, tomo 70, núm. 15.

reforma de la Administración, aunque todo parecía indicar que las reformas tendrían que esperar a la desaparición de Fernando VII. Uno proyecto nuevo importante fue el presentado por Sáinz de Andino "sobre la situación política del Reino y medios de restauración". En él se analizaban los orígenes de los males, abusos y desórdenes que se habían introducido en la Administración Pública, y se proponían medios para corregir sus defectos"".

En noviembre de aquel año el Rey aprobaba una "Instrucción para el arreglo de la administración, y de la cuenta y razón de los propios y arbitrios del Reino"".. El tema tocaba una herida abierta en el Consejo. Los Fiscales recibieron el expediente y manifestaron que excusaban "repetir aquí lo mucho que con toda energía y oportunidad tienen manifestado sus antecesores y también ellos mismos sobre este asunto, mediante a no haberse servido conformar el Rey N.S. con lo sabiamente propuesto por el Consejo en

"" GARCIA MADARIA, J.M., "Estructura de la Administración Central". Decía así Sáinz de Andino: "Tutor celoso y solícito del bienestar de doce millones de criaturas, que con los ojos levantados hacia el cielo aguardan del amor y de la sabiduría de V.M. el remedio de sus desdichas presentes, V.M. no tardará ciertamente más tiempo e proveer las disposiciones convenientes para sacar vuestros Reinos de la postración a que han llegado que el que necesita para analizar el origen del mal, caracterizar con exactitud los desórdenes y abusos que se han introducido en la administración pública, y fijar los medios más prudentes, suaves y eficaces para enmendarlos, reparar sus efectos y acertar con las vías seguras de prosperidad que, seguidas con constancia y el debido afán, nos conduzcan a la cumbre de la felicidad que V.M. apetece con ansia para todos sus vasallos". (SAINZ DE ANDINO, P., "Escritos", Documentos del Reinado de Fernando VII, volumen II, pág. 26).

"" En la Real Orden por la que se remitía este Decreto se especificaba lo siguiente: "Con objeto de que los negocios de Propios y Arbitrios del Reino se despachasen con la rapidez y conocimiento que pide su importancia, y de que el patrimonio común de los pueblos consiguiese el arreglo y aumento que puede recibir de una vigilante y metódica administración, tuve a bien crear por mi Real Decreto de 3 de abril de 1.824 una Dirección que desembarazada de otras tenciones se ocupase solamente de las peculiaridades del ramo, encargado al propio tiempo que se formase, y se me propusiese la Instrucción Reglamento de su organización general que la acertada ejecución de esta providencia hiciese necesario para asegurar en lo posible la mejora del régimen administrativo de dicho ramo..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951 núm. 1).

repetidas consultas acerca de restablecer a su antigua forma el conocimiento y manejo de los negocios y caudal de los referidos ramos, y de suprimir en consecuencia su Dirección General, por los incalculables males que resultaban a los pueblos de mezclar y confundir su patrimonio con la Real Hacienda..."

f) El Consejo pierde el ramo de montes

Sin embargo, un nuevo golpe debería ser encajado por el Consejo de Castilla: la pérdida del ramo de 'Rompimientos de dehesas, montes y tierras incultas'. Con un oficio de 8 de diciembre supo el Consejo el texto de la Real Orden que hacía efectiva esta nueva merma de competencias:

"Excmo. Sr.: Conformándose el Rey N.Sr. con el parecer del Consejo de Señores Ministros ha tenido a bien resolver que el conocimiento de los expedientes de rompimiento de dehesas, montes y tierras incultas del ramo de Propios y Común de vecinos corresponde a la Dirección General de Propios con absoluta inhibición del Consejo Real. 23 de noviembre de 1.829..."

Sin embargo, la consulta del Consejo no llegó hasta junio de 1.833. Los Fiscales mandaron que se uniese un ejemplar de la mencionada Real Orden a la consulta del Consejo de 13 de enero de 1.829. También afirmaron que aquella Real Orden estaba en oposición con la circular de 13 de enero del mismo año..., y asimismo indicaron que no

"... A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951
núm. 1

"... A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951
núm. 1.

"... En esta circular el Monarca declaró a consulta del Consejo de Castilla que éste era "quien con arreglo a Ordenanza debía conocer con sus Subdelegados y Justicias ordinarias de los negocios de montes, dehesas y terrenos comunes o del común aprovechamiento de los vecinos sin que

guardaba tampoco armonía con el Real Decreto de 31 de diciembre del mismo año""", y que reducía a la nulidad las leyes recopiladas y las escrituras de Millones en materia de rompimientos""".

El Consejo finalmente en su consulta del 6 de agosto de 1.833 reprodujo el dictamen de los Fiscales y solicitó del Rey que se sirviera resolver la citada Real Orden de 23 de noviembre "por el trastorno que causa no sólo en las escrituras de Millones sino en toda la legislación sobre Montes y Rompimientos, a no ser que crea conveniente oír antes al Juez de éstos, Procurador General del Reino y al de la Mesta por su orden...""".

en ello se mezclasen los Intendentes a quienes sólo correspondía con las apelaciones al Consejo de Hacienda el conocimiento y determinación de los Montes y Plantíos pertenecientes a propios y de los que hubiesen sido apropiados o aplicados a este ramo por alguno de los medios que la ley prevenía." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951 núm.1).

""". Por este Real Decreto "entre los arbitrios aplicados al pago de réditos y amortización de la Deuda Pública, se señalaba el de la venta de baldíos y realengos, encargando ésta, así como la averiguación y aclaración de ellos exclusivamente al Ministerio de Hacienda, procediéndose en el particular por medio de expedientes gubernativos cuya formación sería del cargo de los Intendentes." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951 núm.1).

""". La condición 113 de Millones prohibía con el mayor rigor dar licencias para nuevos rompimientos, cerrar ni acotar términos baldíos realengos ni de propio cualquiera que fuese el motivo. (A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.951 núm. 1).

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951 núm. 1. Al final del expediente aparece la siguiente nota: "Sin haber recaído resolución a esta consulta se suprimió el Consejo y se archivó este expediente."

g) El Ministerio de Fomento""

Quizás la reforma más importante del año 1.832 fue la creación del Ministerio de Fomento, medida esperada tras los múltiples estudios realizados para la creación de un Ministerio del Interior. Aquel Ministerio fue "considerado unánimemente -señala Artola""- como pieza clave que racionalizase y centralizase la administración territorial y local, vista la creciente incapacidad de los procedimientos del Consejo Real para proporcionar una gestión administrativa adecuada". Fue creado por el decreto de 6 de noviembre de 1.832"" y más tarde ampliado por el decreto del 9 de noviembre siguiente. Le asignaban competencias sobre las mismas materias que en 1.809 y 1.812 atribuyeron el Gobierno intruso y las Cortes de Cádiz, respectivamente, a los Ministerios del Interior y de la Gobernación"".

"". Sobre la creación de Ministerio de Fomento se pueden consultar, entre otras, las obras de A. GUAITA, "El Ministerio de Fomento. 1832-1931", Madrid 1984; y "La competencia del Ministerio de Fomento. 1832-1931", Actas del IV S.H.A., págs. 349-399; y la de P. MOLAS RIBALTA, "De la Junta de Comercio al Ministerio de Fomento", en Actas del IV S.H.A., págs. 529-556.

"". ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 265.

"". SUAREZ, F., "Sáinz de Andino. Escritos", v. III, Introducción, Documentos del Reinado de Fernando VII, pág. 19.

"". SUAREZ, F., "La creación del Ministerio del Interior en España", págs. 19 y ss. Caían así bajo su jurisdicción materias como estadística, fijación de límites de provincias y pueblos, caminos, canales y obras públicas en general; casas de monta y depósitos de caballos, comercio,

Todo el gobierno interior del Reino quedaba en manos del Ministerio de Fomento. Sin embargo, la reforma sería aún más profunda cuando Javier de Burgos se puso al frente del Ministerio, lo reorganizó y creó los llamados Subdelegados de Fomento. Fue este formidable instrumento político lo que los partidarios de las reformas necesitaban para romper definitivamente los moldes del Antiguo Régimen^{***}.

Sin embargo, los defensores del Antiguo Régimen comprendieron también el valor de esta importante carta. Aunque parecía que "estas medidas eran de orden puramente interior -señalaba Villa-Urrutia- y en nada modificaban las leyes fundamentales de la Monarquía, corrióse la voz de que este sistema de reformas nos llevaría a una revolución, que frustraría las benéficas miras de S.M., y dio esto motivo a una circular que dirigió Cea a nuestros representantes en el extranjero el 3 de diciembre (...) haciéndoles saber que la Reina, conservando las bases que la sabiduría del Rey había sentado como reglas fijas de su gobierno, se declaraba enemiga irreconciliable de toda innovación religiosa o política que intentara suscitar en el Reino o introducir la fuerza para transformar el orden establecido, cualquiera que fuese la divisa o pretexto con que el espíritu de partido pretendiera encubrir sus criminales intentos"^{***}. Se avecinaba por tanto una última batalla en la que los liberales parecían tener todas las de ganar, porque el Antiguo Régimen estaba ya moribundo.

industria, artes oficios y manufacturas; pantanos, riegos, montes y arbolados, minas, pesca y caza; escuelas e instrucción pública; imprentas y periódicos; correos y comunicaciones; beneficencia, ayuntamientos, fiestas y espectáculos; ferias y mercados; tribunales de comercio; sanidad, policía y seguridad pública; cárceles y establecimientos correccionales y penales; gobierno económico y municipal de los pueblos, etc. El repaso de esta amplia gama de competencias nos muestra que muchas de ellas se solapaban con las que hasta entonces mantenía el Consejo de Castilla.

^{***}. SUAREZ, F., "La creación del Ministerio del Interior en España", págs. 26 y ss.

^{***}. VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto", pág. 205.

3. Situación interna en el Consejo. Crisis económica: control de sueldos y gastos. Apuros económicos en el Consejo Real. La burocracia en el Consejo.

Tras el restablecimiento del Consejo Real en 1823, uno de los primeros problemas con que se encontró este supremo Tribunal fue la escasez de Ministros, hasta el punto que no podían "formar las cinco Salas de su instituto". Por ello mismo el Consejo resolvió despachar en Consejo pleno indistintamente todos los asuntos de las otras Salas, "previniendo por este medio cualquier inconveniente sobre nulidad que pudieran argüir en adelante algunos interesados"****. Días después, el 28 de julio, una minuta de oficio del Ministerio de Gracia y Justicia proponía se formasen dos Salas en el Consejo en que se despachasen indistintamente todos los negocios, "supuesto que hay suficiente número de Ministros en el Consejo"****. En los siguientes meses fue elevado el número de Ministros de nueve a diecinueve. Aún así, el 5 de diciembre el Consejo pedía a la Secretaría de Gracia y Justicia que elevase el número de Ministros del Consejo a 20, "cuando no sea el de 25 de que se componía a principios de marzo de 1820", así como un Fiscal más****.

Y el 17 de diciembre se elevaba consulta al Rey los nombres de los Sres. Ministros que compondrían las Salas del Consejo en 1.824. En la Sala primera de Gobierno estarían don Bernardo Riega, don José María Puig, don

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 4.

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 4. Como vimos en su momento, a principios de junio de aquel año había en total nueve Consejeros y un Fiscal en el Consejo Real (legajo 11.887 núm. 5).

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 6. Ya hemos visto cómo en 20 de febrero de 1824 fueron sustituidos buena parte de los Consejeros por otros de nueva designación.

Francisco Marín, don Francisco Javier Adell, don José Cabanilles, don José Manuel Ariona y el Fiscal don José Hevia y Campomanes; en la Sala de Mil y Quinientas estarían don Antonio Alvarez Contreras, don Manuel Torres Cónsul y don Miguel Antonio Blanes; en la Sala de Justicia, don Miguel Alfonso Villagómez, don José Antonio Larrumbide y don Tadeo Soler; en la Sala de Provincia, don Juan Antonio González Carrillo, don Juan Benito Hermosilla y don Alejandro Dolarea, quien también sería Juez de Ministros¹⁰⁰⁰.

En la consulta el Rey expresó su voluntad de que mientras se aumentaba el número de los Ministros del Consejo Real, se ayudasen mutuamente las Salas primera y segunda de Gobierno, que cuando lo exigiese la gravedad de los negocios y fuese preciso podrían juntarse. Lo mismo podría hacerse -indicó el Monarca- con las tres Salas de Justicia, cuando se tratase de pleitos para cuya vista y determinación se necesitase mayor número de Ministros que los que entonces tenían asignadas las respectivas Salas¹⁰⁰¹.

El 18 de mayo de 1824 el Consejo conocía un Real Decreto de S.M. por el que se mandaba fuesen reducidos los empleados en todos los ramos de la Administración del Estado al número absolutamente preciso, y los sueldos a lo estrictamente necesario. El Consejo, en cumplimiento de este Real Decreto, lo transmitió al Juez de Ministros para que estudiase su aplicación y propusiese las economías de sueldos y empleos que pudieran hacerse en las oficinas subalternas del Consejo¹⁰⁰². Más adelante y con fecha 27 de noviembre se pediría también al Juez de Ministros que informase lo que estimase conveniente para la más pronta expedición y despacho de los negocios en la Relatorías del Consejo de Castilla¹⁰⁰³.

El informe del Juez de Ministros llegaría a finales de año, con fecha 10 de diciembre. En él curiosamente no se proponía una reducción de personal, sino el incremento en uno o dos en el número de Relatores. He

¹⁰⁰⁰. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608 núm. 48.

¹⁰⁰¹. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608 núm. 48.

¹⁰⁰². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

¹⁰⁰³. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 19.

aquí un extracto de su informe"":

"...Los negocios pendientes en la actualidad en el Consejo son en notable menor número que los que ordinariamente ha habido; el número de dependientes es el mismo menos en el de Relatores, que hoy son dos y la dotación es de siete, y aunque a primera vista se presente deberse equilibrar los operarios con los trabajos, no es así. Despáchase a un tiempo en todas las Salas y es por lo mismo necesario que los dependientes sean los que en la actualidad y a más se provean una o dos Relatorías. Los dos que las desempeñan darían más trabajos pero no pueden dar cuenta a un tiempo cada uno en diversas Salas, y se observa que por estar despachando suele estar sin ejercicio alguna de ellas; tanto más frecuente cuando alguno de ellos está indispuerto, como ha sucedido con ambos en poco tiempo. Por todo ello es de sentir que se proponga a S.M. la provisión de una o dos Relatorías más de las provistas en la actualidad sin hacer novedad en los restantes empleados por considerarlos precisos..."

El Consejo pleno estudió este informe y acordaba el 5 de enero del siguiente año, 1.825, sacar a concurso-oposición dos plazas de Relator con destino a las Salas de Mil y Quintientas, Justicia y Provincia, así como dos plazas de Agente Fiscal que estaban vacantes"".

Sin embargo, los problemas económicos no pertenecían sólo a la economía nacional o a la Administración. El mismo Consejo sentía en su economía interna graves necesidades, derivadas en primer lugar del mal estado en que había quedado la Casa de los Consejos,

"" A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 19.

"" Estas plazas de Agente Fiscal que habían servido don Juan Nepomuceno San Miguel y don Juan Becerra, estaban vacantes. La del primero porque San Miguel no había hecho instancia alguna para su purificación; la segunda porque aunque Becerra la había presentado, le fue denegada en primera instancia y no recurrió a la segunda instancia (A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 19).

precisada de importantes obras de remodelación""", así como la falta de mobiliario y enseres. Se agolpaban las deudas por gastos ordinarios como impresiones, correo, gastos de oratorio, papel sellado, etc. Para atender a estos gastos el Subdelegado General de Penas de Cámara remitía a este fin al Gobernador del Consejo la cantidad de 35.000 reales, el 2 de junio de 1.824.

Los antecedentes de este asunto se remontaban a junio del año anterior. El día 7 de junio de 1.823 había solicitado también el Decano a la Regencia del Reino que diese orden a la Dependencia del ramo del Papel Sellado para que facilitase a la Escribanía de Gobierno del Consejo el papel de oficio necesario para atender a su servicio y al de la Sala de Alcaldes; lo mismo se solicitó a la Dirección General de Correos respecto de la correspondencia"".

La Regencia estudió la petición del Consejo y mandó que se oficiase a los Ministros del Interior y de Hacienda que hasta el restablecimiento de la referida Contaduría General y con compromiso de reintegro, se le franquease al Consejo el Correo y el papel sellado de oficio, lo que fue comunicado al Consejo el 10 de junio de 1.823. Sabemos que al menos hasta fin de año se le habían satisfecho diversas cantidades de papel sellado. Lo cierto es que en mayo de 1.824 se adeudaban fuertes sumas en concepto de correo, papel sellado e impresiones. Habiendo acudido al Monarca a través de la Secretaría de Gracia y Justicia en el mes de mayo, el 2 de junio se recibían los mencionados 35.000 reales que permitirían al Consejo pagar las deudas pendientes y afrontar las obras del Palacio"".

Tras el verano de 1824, el Consejo se encontró con nuevos problemas internos. El 5 de septiembre informaba el Presidente de la Sala de Provincia que esta Sala se encontraba sobrecargada de asuntos. Por aquel entonces tenía señalamientos de pleitos hasta el día 10 de

""". El Arquitecto Mayor estimaba entonces los gastos necesarios en obras de remodelación de las Salas del Consejo en 30.000 reales. (vid. ESTRUCTURA ORGANICA, PALACIO DE LOS CONSEJOS). Por otro lado, también llegaban aquel año noticias alarmistas sobre el estado ruinoso del Palacio de los Consejos y de su archivo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.732 núm. 18).

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15.

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15; ver ESTRUCTURA ORGANICA, El Palacio del Los Consejos.

noviembre"". El Consejo estudió la situación de la Sala de Provincia y en providencia del 6 de septiembre acordó que los pleitos que desde entonces fueran apareciendo se distribuyeran por partes iguales entre las dos Salas de Provincia y las de Mil y Quinientas y Justicia unidas"".

También por Decreto del 15 de noviembre de 1.825 se mandaba a cada Ministerio que formase un Presupuesto para el año siguiente. De esta manera la Secretaría de Gracia y Justicia enviaba oficio al Consejo con fecha 30 de noviembre para que remitiera con la mayor brevedad posible el estado de gastos del Consejo. El mismo Decreto describía las características de este estado: "el sueldo correspondiente a cada uno de los Ministros de su dotación, el de cada dependiente o subalterno según su clase, el de los jubilados, reformados o cesantes y demás que dependan de él, y en distintas partidas los gastos fijos y eventuales, teniendo presente que las sumas que ahora se suscitan no serán abonadas una vez sea aprobado el Presupuesto, en el que deberán anotarse con distinción las cantidades satisfechas por Tesorería de Corte o por

"". "La Sala de Provincia que tengo el honor de presidir se halla tan sobrecargada de negocios que hay pleitos señalados hasta el día 10 de noviembre, con lo que, y otros que habrán de señalarse sucesivamente, según aparece de las notas de Relatores y Escribanos de Provincia y Número, hay reclamaciones continuas por el interés más o menos urgente que traen consigo los litigios y en cuya dilación sufren las partes perjuicios incalculables a pesar de que en muchos días hay señalamiento de dos pleitos.

Lo que elevo al conocimiento de V.E. de acuerdo de la misma Sala para que se sirva tomarlo en consideración como Gobernador de este Supremo Consejo para las determinaciones que su superior ilustración estime convenientes a la más pronta administración de justicia y servicio del Rey N.S...3 de septiembre de 1.824." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm. 13).

"". "No se haga novedad respecto de los pleitos y negocios que la Sala de Provincia tiene señalados ya hasta el día 10 de noviembre próximo; y para concurrir al mejor servicio de S.M. y del público, y evitar los perjuicios de las partes consiguientes de la decisión en la decisión de sus pleitos, los que sucesivamente vayan ocurriendo se distribuyan para su vista y determinación con igualdad entre las dos Salas de Provincia y la de Mil y Quinientas y Justicia unidas. Y esta providencia se ponga en noticia de S.M. en la forma ordinaria." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm. 13).

cualquier otra..."

Los Diarios de Arias Teijeiro recogen los bulos y mentideros que corrían en círculos próximos al Consejo, en los que aparecen mencionados varios Consejeros de Castilla"

Las noticias aparecidas en estos diarios personales de Arias Teijeiro nos introducen también en el conocimiento de la conducta e ideología de los Consejeros, características que de ordinario no se suelen descubrir de la fría documentación oficial. Veamos, por ejemplo, lo que Arias comentaba el 17 de marzo de aquel año: "El día 17 de marzo de 1.828 se vio por el Consejo pleno la célebre causa del obispo de Oviedo, y nueve votos contra siete decidieron a favor del obispo. Algunos Consejeros pusieron a los obispos como trapos, pero Gil y Modet probaron la nulidad de todo lo hecho por la Cámara; y el primero llenó de insolencias a los malos y les dejó sin resollar. Una de las cosas que dijo fue: 'Señor, aquí están ya marcadas y son bien conocidas las opiniones...'".

"... A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

"... He aquí algunos de estos comentarios, en los que por cierto se intenta guardar el anonimato de algunos de los protagonistas:

"N. trabaja en recomendar la causa de Marco del Pont a los Consejeros de la Sala de Justicia. A su instancia, el Obispo de León lo hizo a Catalán, y yo al Prior de San Marcos para su confesado Hevia; el objeto es ver si se corta el sumario" (ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", pág. 45, días 4 y 5 de febrero de 1.828).

"Día 20 de febrero de 1.828: En efecto vino nombrado Consejero el Sr. Lamas; y su reemplazo, como anunció el Mayor. Gran alegría de Company y Milla; y sentimiento de todos los demás. Los porteros lloraban pero el Sr. Lamas lleno de alegría. Al mismo tiempo reponen a Llorens en la plaza de Larrúmbide, para la cual iba consultado Pelegrín; esto, supongo, para neutralizar la injusticia del Sr. D. José, y para darle gusto. Lloraba el infeliz Llorens" (ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", pág. 59).

"Día 26 de febrero 1.828: Gordon dijo al Sr. Lamas que pensaba consultarlo para la vacante de Torres-Cónsul; pero él le disuadió, y con razón" (ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", Documentos del Reinado de Fernando VII, pág. 62, 26 de febrero 1.828).

"... ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", Documentos del reinado de Fernando VII, págs. 76 y 77.

El suceso al que se refiere Arias Teijeiro lo recoge también Armand Durfort¹: "se suscitaron persecuciones a los eclesiásticos en las misma España y arrancaron al Consejo de Castilla una resolución inicua contra el obispo de Oviedo. Un sacerdote constitucional había obtenido una canongía cuya posesión rehusó dejarle tomar el obispo de Oviedo. La resistencia del prelado se juzgó por el Consejo de Castilla como un delito digno del destierro. El Nuncio apostólico logró justificar al obispo con el Rey, quien pidió al Consejo de Castilla nuevas noticias".

En sus notas del día siguiente, Arias Teijeiro volvía a comentar el asunto del obispo de Oviedo: "El Consejo ha decidido el gran asunto del obispo de Oviedo: en favor de las pretensiones de éste de formar él el expediente para la admisión del bueno de Sánchez Caso; por nueve votos contra siete. Estos fueron los tres camaristas, y Fernández del Pino, Hevia, Suárez-Valdés y Adell; Gil defendió enérgicamente los derechos de los obispos, a quienes algunos de aquéllos llenaban de insolencias, y dijo, entre otras cosas, que 'en el Consejo estaban ya marcadas las opiniones', etc. Modet también habló como era de esperar."²

Y nuevas referencias aparecen en las notas sobre la sesión del día 24 de marzo de 1.828: "La sesión sobre el obispo de Oviedo fue acaloradísima y los Consejeros se pusieron como trapos. El Sr. Gil dijo 'que el Rey ni podía, ni debía mandar, etc.'; uno de los de la comparsa pidió que se anotase aquella proposición. Gil contestó 'que él mismo la pondría, si se le encargaba la consulta'. 'Usted, le dijo, trata de pillar, de atrapar, ¿eh?' 'No, señor'. El Decano tocó la campanilla. 'No, señor, no callo', dijo Gil, '¿Por qué no ha tocado Vd. la campanilla cuando el señor hablaba y me insultaba?'"³.

¹---. DURFORT, A., "Revelaciones de un militar francés...", manuscrito de 1.833 citado por el propio Arias Teijeiro, op. cit., págs. 76 y 77.

²---. ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", Documentos del Reinado de Fernando VII, págs. 76 y 77.

³---. ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", Documentos del Reinado de Fernando VII, pág. 85, día 24 de marzo de 1.828. El día 18 de abril se volvió a ver el asunto del obispo de Orense en el Consejo. "Se había empatado con motivo de otra Nota del Nuncio. El resultado fue el mismo: nueve contra siete. Cabanilles y Llorens no votaron, por no estar en los antecedentes. La discusión fue acaloradísima. Gil, sobre todo, habló con la mayor claridad; y Modet le imitó." (op.

Los Diarios de Arias Teijeiro aportan datos interesantes sobre este momento del Consejo. Con las matizaciones propias de unos escritos informales, estas notas al menos nos orientan sobre el ambiente que se respiraba en la camarilla cercana al Consejo de Castilla en aquellos años.: "Días 9-13 de noviembre de 1.828: 'Llegó Salelles. Ya no recela la necesidad de que lo hagan Consejero de Castilla'""; "Días 14-30 de noviembre de 1.828: 'Oller ha sido repuesto en la Alcaldía de Corte. Diputado menos malo en las Cortes extraordinarias, individuo del Tribunal Supremo de Justicia, repuesto en la Alcaldía en 1.824, pero sin efecto por oposición de la Sala, lo ha logrado ahora con escándalo, y haciendo volver atrás al pobre Cid Miranda, a quien, por ser realista más que por lo que dicen que robó, no sólo le han postergado nombrando por el Consejo a dos Alcaldes más modernos, sino que ahora le sacan del Decanato con sus comisiones, etc., que tenía más ha de un año, para dárselo a Oller. Este es pariente de la viuda de Eroles, y con ella vivía. Company iba por allí de tertulia (...). Escudero tiró a degüello a Salelles en sus dos declaraciones: no le pudo hacer más mal. Pero él, en sus voluminosas contestaciones, se defendió perfectamente. En premio habrán dado a Escudero la plaza en el Consejo'""; "Días 1-14 diciembre de 1.828: 'Menos buen aspecto presenta la (causa) de Salelles. Ya se ve: contra él concurren el Gobernador de la Sala, su enemigo por haberle buscado su Catecismo, Escudero, etc.; solicita últimamente que la causa se vea ante el Consejo y no por Pino. Si él fuese valencianet, no se vería acaso así'"".

Estos testimonios nos muestran un Consejo de Castilla completamente distinto al solemne y hierático primer Tribunal de la Nación que siempre existió. Muchas cosas han cambiado en estos años. El Consejo se permite ser campo de apasionamientos y disputas fuera de tono; se critica a los obispos e incluso al mismo Monarca y sus poderes excesivos, en un tono incluso desmedido. Todo ello parecería inaudito unos pocos años antes. Y junto a ello, la presencia de varios Ministros que sucesivamente han sido depurados y restituidos a sus plazas en el Consejo. El Consejo ha cambiado, es ahora distinto. La pérdida de competencias, el desprestigio de las sucesivas humillaciones, el desmerecimiento ante el mismo Monarca que autorizaba estas medidas, cambian en pocos años la fisonomía

cit., pág. 99).

"" ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", pág. 133.

"" ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", pág. 137.

"" ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", pág. 140.

de esta institución que fue columna del régimen y mano derecha del Rey. Ya no goza de la absoluta confianza real, ya no ejerce un papel predominante en el Estado, ya no es un sólido pilar del sistema de gobierno absolutista. Incluso las ideas liberales son compartidas por una parte de sus miembros y las divergencias políticas hacen mella en su seno y dividen su Cuerpo. El Consejo de Castilla ha perdido su identidad y se presenta ya como una institución agonizante en espera de su fin.

Por Real Orden de 1 de septiembre de 1828, el Rey mandaba que en el término de 20 días el Consejo le remitiese un estado de todos los gastos del distrito del Consejo que se causasen en la Administración de Justicia y sueldos de que gozasen sus empleados pagados por el Real Tesoro o por otro fondo o concepto.

Cumpliendo con este mandato el Escribano de Gobierno formó un Presupuesto para el año siguiente, 1.829. Incluía entre sus partidas sueldos, pensiones por jubilación, gastos en sueldos para subalternos y dependientes, gastos ordinarios, fijos, eventuales y extraordinarios y otros gastos y fondos que abonaba el Consejo''''.

También en 1828, una Real Orden del Consejo Real en oficio del día 27 de diciembre mandaba a las Escribanías de Cámara enviasen relación de los expedientes consultivos, de oficio y de interés de la causa pública que se hallaren pendientes. Junto a la contestación a esta Real Orden se acompañaba un interesante informe que nos pone al día del estado de la burocracia en el Consejo:

"...Al margen de cada partida se designan con una P los que se promueven y solicitan por partes, y con una N los en que no interviene semejante solicitud, por cuya falta no pocas veces se entorpece y dificulta su precisa y necesaria instrucción.

El número de éstos (...) es excesivo respecto de los demás, y dándolos como a todos curso de oficio, la Escribanía por los respetos debidos a los soberanos mandatos que al Consejo mismo, su resultado viene a ser el de constituirse en un verdadero agente de tales negocios con su gravamen insoportable en el acrecentamiento de sus gastos de escritorio y pago de manos subalternas para el inmenso escrito que producen, que es lo

mismo que decir que sobre privarse de los emolumentos que tales negocios deberían justamente producirla, y en que consiste su dotación, le viene a ser gravosos y causan la vejación de desembolsos que no puede soportar ni compensar con otros, cuando no son pocos los en que sucede otro tanto por ser de su naturaleza de oficio y de interés de la causa pública, y bien notorios los que se han separado del conocimiento del Consejo y antes de ahora compensaban aquéllos, hallándose en el mismo caso los Relatores y demás subalternos dotados el más con un sueldo, haciéndolo en el de oficio para poder dar curso a tales negocios.

Esta misma causa u origen está en el orden sea el de la lentitud y retraso que se advierte respecto de las Chancillerías y Audiencias del Reino, y demás autoridades subalternas, a quienes hallándose en igual caso se piden informes y cometen diligencias para la precisa instrucción de los mismos, no ejecutándose alguno en que no sea necesario tener que hacer dos, tres o más recuerdos, hasta con alguna demostración, no sin penalidad y mayor gravamen del oficio de gobierno...

También acompaño a V.I. iguales listas que he pedido y me han dado las respectivas Escribanías de Cámara de Justicia de los prebendados en ellas, inclusa la de Gobierno de los Reinos de la Corona de Aragón, siendo el resultado de todo que de parte del Consejo y sus dependientes no hay retraso notable en el despacho de los soberanos mandatos, pues que entre tanto no se instruyen los negocios y ponen en estado de poderlos resolver y manifestar a S.M. su dictamen, en ellos con la circunspección que acostumbra nada puede hacer por más que reducido a tres Salas y menos dependientes de los de su dotación le sobre como le sobra mucho tiempo para poderlo verificar (...). 7 de enero de 1829".

Desde la pérdida de las competencias sobre propios y pósitos en 1824, la labor del Consejo de Castilla se redujo considerablemente. Pocas novedades aparecen en el despacho diario del Consejo si no es la disminución de expedientes tramitados y la cada vez más frecuente presencia

de expedientes de orden público y de subversión política"".

En los años siguientes hubo escasísimas novedades en lo que se refiere a la vida del Consejo. A título de ejemplo podemos citar algunos expedientes. A principios de agosto de 1829 el Consejero de Castilla Puig fue nombrado comisario regio o juez protector del que hasta entonces se llamaba Banco de San Carlos y a partir de ahora se llamaría Banco de San Fernando. Le fue adjudicado por este motivo un sueldo de 33.000 reales"".

Y el 17 de agosto tenía conocimiento el Supremo Tribunal de una Orden dada a los Consejos para que quedasen 'sin mayor progreso ni efecto' los Decretos dados y las consultas del Consejo de Castilla y su Gobernador para que volviesen los emigrados españoles"".

También en ocasiones Arias Teijeiro anotaba breves apuntes sobre la vida en el Consejo aquellos días. Así se refería a varios miembros del Consejo. A don Tadeo Ignacio Gil lo pintaba como "realista intransigente, aunque no muy entusiasmado con la persona de Fernando VII""". Del entonces Decano del Consejo Real afirma que era Presidente de la Junta de Competencias y que por estos cargos era todavía el primer magistrado de la Nación. Afirma también que en aquel año estaba con los realistas"".

De las quince consultas que el Consejo presentó al Monarca el año 1831, la mayoría carecen de un excesivo interés. Entre ellas destaca quizás la del 27 de septiembre en la que se informaba sobre ciertos abusos en la oficina de Teniente Canciller Mayor del Real Sello de

""". A título de ejemplo, entre otros muchos, podemos citar el legajo 3.750 núm. 6, del A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno: "prohibición de un folleto: 'Pintura de los males que ha causado a la España el Gobierno absoluto de los dos últimos reinados'".

""". ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", días 4 y 5 de agosto de 1.829, págs. 203 y 204: "Por un nuevo reglamento, el Banco de San Carlos se llama de San Fernando, y Puig es nombrado comisario regio o Juez protector, con 33.000 reales. ¿Qué tal? Antes era Galindo, con 500 ducados, creo. Todo va así."

""". ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", pág. 214, 19 de agosto de 1.829.

""". Arias Teijeiro, "Diarios", págs. 6 y 7.

""". ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", págs. 6 y 7.

Castilla y Registrador General"".

Por otro lado, el Consejo continuaba defendiendo las competencias que le restaban. En el Consejo de Ministros del 19 de noviembre de aquel año se leyó una exposición del Supremo Tribunal remitida al Monarca en la que pedía se tuviera a bien declarar haber sido una equivocación del Ministerio de Hacienda la afirmación que se contenía en una Real Orden de que el Consejo de Castilla no debía entender en ninguna clase de repartimientos vecinales. Se acordó que tal exposición pasase al Secretario del Despacho de Hacienda para que dispusiese que se instruyera el oportuno expediente sobre el particular"".

Los sueldos de los Consejeros eran por aquella época entre los mejores de la Administración. Así nos lo refiere el mismo Teijeiro: "Todos se quejan menos los Consejeros, Directores, etc., a quienes dan 50.000 reales; éstos, aunque se jubilen al día siguiente de su nombramiento, perciben 40.000 reales. Los demás jubilados no cobran la mitad hasta 25 años de servicio. Fuera sueldos personales, montepíos, etc. El tiempo doble, abonado a los militares de la Guerra de la Independencia, anulado. En fin, bastaba esto para promover la revolución ¡Pobre España!"".

En cuanto al horario de trabajo en el Consejo, variaba como siempre según la estación. El 1 de diciembre del año 1831 el Sr. Decano Gobernador interino del Consejo informaba a los miembros del Consejo que desde el día dos de diciembre de aquel año se entraría al despacho a las 10 de la mañana por la crudeza de la estación. Esta concesión del Decano lo había sido a instancia de los mismos Ministros del Consejo. El Gobernador interino aprobó este cambio de horario, no sólo por la crudeza notoria del invierno, sino también considerando la avanzada edad de la mayor parte de los Ministros del Consejo, la distancia entre sus domicilios y el Palacio de los Consejos y la comprobación de que por retrasar una hora no se perjudicaba el Real Servicio y se respetaba lo dispuesto en la Ley. Esta medida también afectó a la Sala de Corte, 'como quinta Sala

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106.

"" Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, sesión del 19 de noviembre de 1.828, págs. 270 y 271.

"" ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", Documentos del Reinado de Fernando VII, pág. 99, días 16-20 de abril de 1.828.

del Consejo que era considerada' "".

En otro orden de cosas, en la misma semana se mandaba por una Real Orden al Consejo de Castilla que en 15 días presentase el Presupuesto que había de regir para 1.832, señalando descuentos, etc., conforme al Real Decreto de 3 abril de 1.828"". Y en ese mismo mes se aprobaba también la tradicional distribución de Salas del Consejo para el año siguiente"".

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.910 núm. 9. El horario de trabajo de invierno desapareció el 5 de marzo. El Decano Gobernador volvía a fijar la hora de entrada de los Sres. Ministros a las 9:00 de la mañana, al haber cesado los motivos que obligaron a cambiar este horario. También pedía el Gobernador interino que durante los días del Sermón de Cuaresma no se descuidara el trabajo actualizado en el Consejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.910 núm. 9). Este horario se mantuvo hasta el primero de octubre, en que se volvió al de invierno nuevamente, hasta el 29 de marzo siguiente (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.910 núm. 9): "Anoche me previno el Sr. Decano Gobernador interino del Consejo que en la semanería de hoy hiciera presente, como lo he verificado asistiendo los Sres. al margen, que desde el lunes inmediato primero de octubre entraría el Consejo a las diez y de ello he dado el oportuno aviso a la Sala y a los Sres. Ministros y Fiscal que han concurrido en esta día...Madrid, 29 de septiembre de 1.832. Abad."

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.912 núm. 2.

4. El Consejo de Ministros y el Consejo Real""

Por el Real Decreto de 19 de noviembre de 1823, Fernando VII creaba el Consejo de Ministros, constituido por los cinco Secretarios de Estado y del Despacho entonces existentes"". Entre las razones que alegaba Forsthoff para la creación del Consejo de Ministros figuraba la de "eliminar el pluralismo en la cabeza de la Administración", para facilitar una relación directa entre el Rey y los ministros y evitar intromisiones de miembros de los Consejos, en especial del Consejo Real"". González Marínas considera como razón más probable el deseo del Monarca de un ejercicio distinto del poder, despersonalizado

"". Entre otras publicaciones sobre la creación y primeros años del Consejo de Ministros se encuentran las obras de J.A. ESCUDERO, "La creación de la Presidencia del Consejo de Ministros", A.H.D.E., 42 (1972), págs. 757 a 767; del mismo autor "La Real Junta Consultiva de Gobierno, 1825", Madrid 1973; F. FONTES, "El Consejo de Ministros en el reinado de Fernando VII", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 71, Madrid 1985; P. GONZÁLEZ MARÍNAS, "Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en España (1800-1875)", Madrid 1974; A. GUAITA, "El Consejo de Ministros", Madrid 1959; J. SÁNCHEZ-ARCILLA, "Consejo Privado, Consejo de Ministros. Notas para el estudio de los orígenes del Consejo de Ministros en España", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 71, Madrid 1985.

"". Eran los de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina y Hacienda. (GONZÁLEZ MARÍNAS, P., "Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en España (1800-1875)", págs. 83 y ss., I.E.A., Madrid 1974).

"". FORSTHOFF, F., "Tratado de Derecho Administrativo", págs. 53 y 54, Madrid 1958, citado por GONZÁLEZ FARIÑAS, P., op. cit., pág. 84.

gradualmente.

Desde su constitución, el Consejo de Ministros recibió el carácter de órgano coordinador de las medidas de gobierno. Se trataba de conseguir objetivos como la unidad en las resoluciones y la celeridad en su ejecución. Era por tanto un órgano de asesoramiento y de ejecución de las relaciones reales"".

Por todo ello, la creación de este Consejo de Ministros tuvo que afectar necesariamente al Consejo Real, ya que como tendremos ocasión de ver, el Consejo de Ministros asumió parte de las competencias del Monarca con respecto al Consejo Real.

De la lectura de las Actas"" del Consejo de Ministros en el reinado de Fernando VII se deducen las siguientes notas. En primer lugar, las consultas que el Consejo Real remitía al Monarca, eran ahora remitidas al Consejo de Ministros"". De ellas daba cuenta el Secretario de Gracia y Justicia en la propia sesión del Consejo"".

"". GONZALEZ MARINAS, P., op. cit., págs. 98 y 100.

"". La mejor fuente para analizar las relaciones Consejo de Ministros-Consejo Real son las propias Actas del de Ministros. Hasta la fecha de realización de este trabajo han sido publicados cuatro volúmenes por la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con las Cortes. Corresponden respectivamente a los años 1824 y 1825; 1826 y 1827; 1828; y 1829.

"". Por ejemplo, el 2 de julio de 1828, el Consejo de Ministros estudiaba otra importante consulta del Consejo de Castilla sobre la reforma agraria. Al parecer, el 4 de agosto del año anterior el Consejo de Castilla había consultado sobre si debía o no subsistir lo dispuesto en el Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de julio de 1.813, relativo al acotamiento de las fincas de dominio particular. Ello dio lugar a que los Fiscales del Consejo Real reuniesen los antecedentes y el expediente de la Ley Agraria, desde hace muchos años retenido en el mismo Consejo ("Actas del Consejo de Ministros", Fernando VII, tomo III, págs. 200 y 201, sesión del 23 de julio de 1.828).

"". Por otro lado, las actas del Consejo de Ministros nos dan testimonio en su sesión del 15 de diciembre de 1824 de otra consulta del Consejo de Castilla de la que daba cuenta al Consejo de Ministros el titular de la Cartera de Gracia y Justicia. En ella el Supremo Tribunal proponía que el Alcalde de Corte Cutanda fuera a Alcalá de Henares a

Por otro lado, muchas de tales consultas eran ahora resueltas por el propio Consejo de Ministros^{***}. Sin embargo, esto no supone que el Consejo de Ministros resolviera ahora con exclusividad las consultas del Consejo de Castilla, ya que vemos que en otras ocasiones es el propio Monarca el que solicita los servicios del Consejo.

El Consejo de Ministros también acudía en ocasiones al Consejo Real para solicitar consultas^{***} o la ejecución de determinadas medidas de la competencia del Consejo^{***}. En ocasiones resolvía sobre reclamaciones

residenciar a aquel Ayuntamiento y separar al Intendente, Corregidor y Alcalde de Armas. El Consejo de Ministros acordó que no saliese el Alcalde Cutanda y que se buscasen pruebas positivas contra los sujetos que se quería hacer salir de Alcalá (Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo I, págs. 90 y 91, sesión del 15 de diciembre de 1.824).

^{***}. Del año 1826 podemos señalar una interesante consulta del Consejo sobre si los que fueron milicianos voluntarios podían recibirse de abogados, escribanos, cirujanos y médicos (Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo II, año 1.826, págs. 82, 85 y 86, sesiones del 27 y 29 de diciembre de 1.826).

^{***}. Como la de medidas que podrían adoptarse para contener los continuos robos (Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo II, año 1.827, pág. 183, sesión del 5 de mayo de 1.827). Otro asunto interesante fue el que hacía referencia al nombramiento de nuevo Nuncio de S. Santidad y un tema de preconización de obispos para las provincias insurgentes de América. Se acordó en la sesión del 9 de junio que ante este delicado asunto y con toda urgencia los Consejos de Castilla e Indias consultasen "levantando mano de cualquier otro negocio y empleando horas extraordinarias si fuese necesario" (Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo II, año 1.827, sesiones del 9 y 23 de junio de 1.827, págs. 200 y 213 respectivamente). También el Consejo de Ministros en su sesión del 11 de octubre de 1828 acordaba que el Consejo de Castilla le consultase si convendría extender la providencia de nombramiento de Regidores perpetuos en la Corona de Aragón, al resto de España (Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, año 1.828, sesión del 11 de octubre, págs. 254 a 257).

^{***}. El Consejo de Ministros del 27 de septiembre del mismo año tomaba en consideración un informe dado por el Decano del Consejo Real con motivo de haber solicitado la Duquesa Viuda de Híjar que se señalase a don José Cabanilles la asignación que debía disfrutar como Juez Interventor de su Casa y Estados. En su informe proponía el Decano que se

contra lo obrado por el Consejo"" o incluso mostraba su reprobación por algún informe que le había presentado el Consejo Real y que no era de su agrado"".

El Consejo de Ministros también se apoyaba en la sala de Alcaldes para la adopción de medidas ejecutivas"".

fijase a la referida Duquesa y demás personas de su clase "un cierto término para regresar al Reyno con el fin de evitar la extracción de numerario que tanta falta hace, y que en caso de no verificarlo se les embarque sus rentas y se apliquen al Real Tesoro". El Consejo de Ministros acordó oír de nuevo sobre este punto al de Castilla y le encargó que señalase la cuota con que se deberían gravar los bienes de las personas que, bajo diferentes pretextos, se hallaban en el extranjero (Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo III, sesión del 27 de septiembre de 1.828, págs. 248 y 249).

"". Un caso fue el de la reclamación del Ayuntamiento de Toledo contra las disposiciones iniciadas por el Consejo de Castilla y continuadas por la Dirección General de Propios para enajenar unos montes (Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo II, pág. 251, sesión del 11 de agosto de 1.827).

"". El Consejo de Ministros en su sesión del 12 de abril de 1827 se enteraba de una consulta del Consejo de Castilla sobre reuniones sospechosas en varios pueblos de la Mancha "de varios individuos marcados por la opinión pública como desafectos al Gobierno Legítimo". El Consejo de Ministros manifestó su dolor que el Supremo Tribunal de la Nación se limitara a proponer medidas gubernativas, como eran la jubilación y separación de unos cuantos empleados y particulares, cuando la voluntad del Rey al consultar sobre este asunto no debía limitarse tan sólo a esto. Por ello mismo el Consejo de Ministros tuvo en cuenta que el Gobernador de la Sala de Alcaldes estaba formando varias Causas de Estado con las que podría tener alguna relación el expediente y acordó remitirlo a aquella sala a fin de que los sustanciase y determinase según las leyes ("Actas del Consejo de Ministros", Fernando VII, tomo III, año 1.828, sesión del 12 de abril de 1.828, pág. 118; también se volvió a ver en el Consejo de Ministros del 23 de julio de 1.828 (op. cit., pág. 214)).

"". Una de ellas recogida en el acta de la sesión del 27 de septiembre de 1827 decía así: "Reunidos en Marina los Sres. Secretarios del Despacho se leyó la contestación dada por los Consejeros de Castilla don Francisco Marín y don José

Finalmente también se observa que el Consejo de Ministros intervenía en otra hasta entonces exclusiva competencia regia: en la designación de los Ministros del Consejo y de la Sala.

5. Otras consultas importantes del Consejo en este periodo

Por un Decreto de la Regencia de 15 de agosto de 1823 se acordaba la restitución de los señoríos a sus titulares. En su consulta el Consejo de Castilla se mostraba partidario de esta restitución, pero sin la exigencia del pago de las cantidades atrasadas y no pagadas correspondientes al Trienio. Pero en esta ocasión el Consejo de Castilla no fue atendido en su dictamen y la Regencia aprobó no sólo la restitución de los señoríos, sino también el pago de dichas cantidades atrasadas, con claro perjuicio para los pueblos afectados"".

Pero no acabó aquí todo lo referente al espinoso tema de los señoríos. Sabemos por el profesor Escudero"" que una comisión de la Junta Consultiva de Gobierno estudió desde el 29 de septiembre de aquel año las consultas del Consejo Real de 4 de abril de 1.818 y de 5 de

Hevia al oficio que se les pasó en 22 de este mes incluyéndoles varias cartas y papeles interceptados; y siendo el dictamen de ambos magistrados que estos documentos producen suficientemente para proceder contra sus autores y cómplices, se acordó proponer a S.M. que remitan al Gobernador de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte para que por sí mismo o por un Alcalde activo, íntegro y eficaz, que se le autorizará a nombrar, se proceda inmediatamente a la formación de la correspondiente causa" (Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII, tomo II, pág. 287).

"" Cfr. ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 254.

"" ESCUDERO, J.A., "La Junta Consultiva de Gobierno", pág. 84.

febrero de 1.819. La primera hacía referencia a la abolición de los señoríos jurisdiccionales y la segunda sobre las elecciones de ayuntamientos"".

Otra consulta importante del Consejo era la relativa a la abolición de la esclavitud. El Monarca había pedido al Consejo de Castilla una importante consulta sobre la abolición de la esclavitud en todos sus dominios o en parte de ellos"". La consulta llegó el 7 de diciembre de 1825, y previamente los Fiscales habían presentado al Supremo Tribunal su dictamen con fecha 15 de noviembre"". La consulta ofrece bastante interés, en cuanto se conjugan los derechos humanos con los intereses de Estado. He aquí lo que en su momento consideraron los Fiscales del Consejo sobre la esclavitud:

"...Siendo la esclavitud contraria al Derecho Natural e introducida por el Civil y de Gentes, los deseos de S.M. no pueden ser más interesantes y benéficos a la Humanidad y a la sociedad. A la Humanidad, porque se dirigen a restablecer al hombre con aquella dignidad con que lo creó el Autor de la Naturaleza. Y a la sociedad civil porque tienen por objeto el que ésta se consolide sobre las bases que el Derecho Natural puede

"". Al parecer, la Junta Consultiva rechazó buena parte de lo propugnado por el Consejo de Castilla en lo referente a la primera consulta. Y con respecto a la segunda, parece que se refería sobre todo al posible asesoramiento de los alcaldes ordinarios por los alcaldes de señorío. Sobre esta segunda consulta, parece que la Junta Consultiva se conformó enteramente con lo que había ya propuesto el Consejo de Castilla en su consulta de 30 de julio de 1.817. Y propuso que el Consejo se ocupase de averiguar cuáles eran los pueblos de señorío que realmente necesitaban alcaldes mayores, cuáles podían permitirse este gasto y qué destinos de alcalde podían ser suprimidos. El Consejo Real al parecer debía también realizar un plan para el establecimiento en todo el Reino de alcaldes mayores por partidos o distritos, con un doble objetivo: de un lado, buscar la posible comodidad de los pueblos; y de otro, reducir el número de los alcaldes mayores al número óptimo para la buena administración de justicia. (ESCUERO, J.A., "La Junta Consultiva de Gobierno", págs. 84 y ss.).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.384 núm. 20.

"". A.H.N., Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio del 7 de diciembre de 1.825.

suministrar. En efecto, criado el hombre libre y dueño de todas las operaciones, el más fuerte lo venció y despojó de las cualidades que antes tenía. Creyendo que justamente podía quitarle la vida y que le hacía una merced conservándola, en compensación de ello exigió hacerse dueño de su persona y de su obrar, y adquirir el precio que ponía a la una y a las otras. Las leyes civiles y el consentimiento de todas las naciones autorizaron estas exigencias y aún las regularon con varias disposiciones que vinieron a constituir lo que se llama Derecho de Esclavitud, y a colocar al hombre en el estado degradante de una bestia. S.M. desea restituirle su natural estado de libre y hacerle miembro de la sociedad. Y véase como no puede darse un derecho más benéfico para el hombre y para la sociedad.

Afortunadamente, tanto en España como en los demás países civilizados se fueron poco a poco enmendando los yerros que antes se habían cometido y cegando las fuentes de donde manaban los llamados derechos de esclavitud. Entre nosotros quedaban únicamente dos: la compra de negros y el parto de las esclavas. El primero se ha suprimido en virtud del tratado de 23 de septiembre de 1.817 con Gran Bretaña... Sólo resta el segundo, pero éste debe ser de muy corta duración, porque depende digámoslo así del primero y muy en breve debe acabar.

Por consiguiente, siendo la esclavitud opuesta al Derecho Natural, habiéndose abolido en las naciones cultas y estando muy próximo su fin en la Península, parece que no hay duda en que conviene su abolición...

En Ultramar militan diferentes circunstancias. Es muy excesivo el número que allí hay y compone una parte muy importante de la fortuna de los habitantes. Faltaban brazos de hombres libres que puedan ocuparse en los trabajos de los esclavos. Hay otras costumbres y acaso datos que ignoran los que suscriben..."

El Consejo en su consulta resumía lo manifestado por sus Fiscales:

... A.R.N., Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio del 7 de diciembre de 1.825.

"El Consejo, señor, teniendo presentes las actuales circunstancias políticas, el corto número de esclavos que puede haber y que hay en España, perjuicios que por aquéllos deberían seguirse en las colonias si se aboliese hoy la esclavitud... cree que ni útil ni político es en el día su abolición. En las colonias por lo indicado y en la Península porque apenas hay objeto y sólo serviría de un mal ejemplo a aquéllas"....

En su consulta, el Consejo de Castilla se mostró como un genuino representante del Antiguo Régimen. En su dictamen primaba la razón de Estado frente a los derechos individuales. Un estudio detallado sobre las circunstancias sociales y económicas de la América hispana confirman que las razones expuestas por el Consejo fueron ciertamente las que retrasaron la abolición de la esclavitud en España hasta finales del siglo XIX....

También hubo ese año otra importante consulta sobre la abolición del Tribunal de la Inquisición que, como es sabido fue el único de los Consejos de la Monarquía no restablecido en 1.823. Tardó bastante el Consejo en presentar su dictamen sobre este espinoso asunto. "El Consejo seguía con lentitud el expediente abierto sobre un asunto de tanto interés, y su mesura no era hija de los sentimientos de sus individuos, sino de la invencible repugnancia que notaban en Fernando...".... El Monarca no deseaba abrir nuevas heridas.

Finalmente el Consejo de Castilla dio su dictamen. En consultas del 5 y 15 de diciembre de 1.823 y de 22 de julio de 1.825 hizo presente al Monarca que "con sólo el restablecimiento del Santo Oficio de la Inquisición podría contenerse a los sectarios de la impiedad, mejor que otras medidas que se adoptasen, ya con conformidad con otros soberanos aliados, ya con la creación de una Superintendencia de Policía".... señalaba el Consejo que el restablecimiento del Santo Oficio era de la mayor necesidad

.... A.H.N., Consejos, legajo 6.090, consulta de oficio del Consejo de Castilla del 7 de diciembre de 1.825.

.... A.H.N., Consejos, legajo 6.090, consulta del 7 de diciembre de 1.825.

.... BAYO, E.X., "Historia de la vida...", tomo III, pág. 274.

.... A.H.N., Consejos, legajo 6.108, consulta de oficio del 29 de octubre de 1.832.

y urgencia para afirmar más y más la seguridad del Trono. Como es sabido, Fernando VII decidió en aquella ocasión no restablecer la Inquisición para no exasperar aún más los ánimos.

Entre los papeles del Archivo Privado de Fernando VII se encuentra un parte reservado remitido al Monarca por el Superintendente General de Policía don José Recacho. En el mismo, fechado el 15 de agosto de aquel año, informaba al Rey de la impresión negativa que había causado en las clases del Estado la consulta del Consejo de Castilla sobre reposición del Tribunal del Santo Oficio. Señalaba en aquella ocasión el Superintendente General de Policía que la opinión general era que el Fiscal del Consejo de Castilla se equivocaba: los ánimos estaban muy exaltados, había enfrentamientos y la Inquisición no haría más que exacerbarlos***.

A finales de enero de 1.828 era conocido otro dictamen importante del Consejo. Esta vez era de los Fiscales del Consejo de Castilla y hacía referencia a una pastoral del Arzobispo de Santiago. Los Fiscales del Supremo Tribunal criticaban duramente al arzobispo por prohibir la venta, impresión y lectura de algunos libros, así como dar curso a los índices de Roma sin que el Consejo de Castilla les diese pase. El Consejo en su indignación había mandado al arzobispo que le remitiera los expedientes que hubiera formado para la prohibición, y que mientras tanto suspendiese la impresión de las pastorales y recogiese las ya expedidas****. Aunque podría extrañar que estuviera molesto el Consejo con la censura de libros impuesta por la autoridad eclesiástica, sin embargo su indignación no carecía de lógica: el Consejo no hacía sino defender sus competencias frente a una extralimitación de una autoridad eclesiástica.

Sin embargo, la consulta del Consejo sobre las prohibiciones de libros por la Iglesia siguió siendo un tema debatido en los meses siguientes. Para unos era un atentado contra la Iglesia, para otros una reafirmación del absolutismo del Consejo****. Incluso todavía se seguía

***. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 71, núm. 36.

****. Arias Teijeiro criticaba duramente este dictamen y lo asimilaba a los Decretos de las Cortes (ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", pág. 43, día 31 de enero de 1.828).

****. Así se expresaba el 16 de julio de 1.829 Arias Teijeiro en sus Diarios: "N. excitó al obispo de León para que escriba a los obispos y reclamen contra la orden del

tratando el asunto en el Supremo Tribunal a finales de agosto de 1.829^{***}. Y el día 30 afirmaba Arias Teijeiro: "Estos días se vio la causa del obispo de Oviedo. Los Fiscales han tenido atrevimiento para pedir que el obispo se presentase en el Consejo a responder. ¡Heredia y Pérez Juana! Cavanilles impugnándolo el primero, y se consulta sólo 'que se manifieste al obispo el Real desagrado, y que se suspenda por un año al provisor, Agente Fiscal, etc.'^{***}."

Las consultas al Monarca a veces tenían un significado distinto, como el dar la enhorabuena al Monarca por algún acontecimiento feliz, y en o casiones, darle también el pésame del Consejo. Así el 31 de enero de 1.832 el Consejo de Castilla felicitaba al Monarca por el feliz alumbramiento de la Reina, la tarde anterior^{***}. También el 15 de febrero daba el Consejo su enhorabuena al Rey por haber concedido al Infante don Sebastián permiso para casarse con la Princesa de Dos Sicilias doña María Amalia^{***}. Dos semanas después la consulta tenía otro signo. El Consejo consultaba entonces al Monarca sobre un asunto luctuoso: la causa formada para la averiguación de los autores y cómplices del atroz atentado contra el Capitán General de Galicia, don Nazario Eguía^{***}.

Consejo sobre prohibiciones de libros de resultas de lo del Arzobispo.

La Real Orden, que aún excede a la resolución del Consejo, es un golpe fatalísimo a la Iglesia: Que los obispos no puedan prohibir libros sin la aprobación previa del Consejo ¡¡¡Qué tal!!!" (op. cit., pág. 187).

^{***}. ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", pág. 221, 25 de agosto de 1.829. En las notas del 25 de agosto de aquel año escribía Arias Teijeiro que "el Consejo de Castilla estaba tratando el asunto del obispo de Oviedo". Y añadía seguidamente: "Será lo que quieran los pícaros, pues no asisten Modet enfermo, Gil, que se ha excusado cuando se le avisó, y Villagómez."

^{***}. ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", día 30 de agosto de 1.829, pág. 225.

^{***}. "Aprecio las demostraciones de fidelidad que me manifiesta mi Consejo Real" (A.H.N., Consejos, legajo 6.107, consulta de oficio del 31 de enero de 1.832).

^{***}. A.H.N., Consejos, legajo 6.107, consulta de oficio del 15 de febrero de 1.832.

^{***}. A.H.N., Consejos, legajo 6.107, consulta de oficio del 29 de febrero de 1.832.

6. El Consejo Real y la cuestión sucesoria

Estamos ya a finales de junio de 1.829. Unos días después daba el Supremo Tribunal su pésame al Rey "por la temprana y dolorosa muerte de la Reina Doña María Josefa Amalia"****. Los problemas sucesorios seguían por tanto preocupando al Rey Fernando y el gobierno planeó una nueva boda. Así la Reina doña María Cristina de Borbón, cuarta y última mujer de Fernando VII, llegaba a Madrid el 11 de diciembre de aquel mismo año. Y el 10 de octubre de 1.830 nacía la princesa heredera doña Isabel, que el 20 de junio de 1.833 sería jurada princesa heredera por las Cortes del Reino, convocadas a este efecto en la iglesia de San Jerónimo en Madrid****.

La cuestión sucesoria preocupaba a la clase política. Así lo reflejaba Arias Teijeiro en sus Diarios, según varias notas correspondientes a marzo de 1.830****. En

****. A.H.N., Consejos, legajo 6.097, consulta del 18 de mayo de 1.829.

****. MESONERO ROMANOS, "El Antiguo Madrid", págs. 117 y ss.

****. "Aquí, en virtud de una Junta de Ministros, se reúne extraordinariamente el Consejo de Castilla y con el Corregidor, Capitán General, Subdelegado de Policía, etc., se ha tratado de la seguridad pública (...) (27 de marzo de 1.830). Casqueiro dijo que nada sabía del objeto del gran Consejo de ayer. Pero N. ha descifrado este misterio y avisado bien temprano a pequeño por O. Antes de anoche, Calomarde dio un pliego al Decano mandando convocar ayer a Consejo pleno con asistencia previa del Corregidor y Gobernador de la Sala. Se reunió en efecto; se cerraron las puertas, y ¿qué era? Una ley que concede la sucesión a las mujeres de mayor grado en concurrencia con varones. El Consejo pasó por todo (...)" (ARIAS TEIJEIRO, "Diarios",

abril del mismo año Fernando VII dio un paso de honda trascendencia política, al establecer que fuera publicada la Pragmática Sanción de 1789, por la que se abría paso al Trono al infanta Isabel. Esta resolución"" fue objeto también de una importante consulta del Consejo de Castilla. Al parecer, de los veinte Consejeros presentes tan sólo cinco se opusieron a la Pragmática, y uno de ellos con especial vehemencia, pues calificó esta disposición de promovedora de una guerra civil"".

Según Fontana, un grupo de altos dignatarios encabezados por el Ministro de la Guerra Zambrano y por el decano del Consejo de Castilla Puig Samper se preparaban para organizar la resistencia a la conjura que desde bandos afines al infante Carlos se estaba organizando"".

En septiembre del año 1832 Fernando caía gravemente enfermo. Se dio por irreversible su enfermedad. Ante un previsible próximo fallecimiento del Rey, el Ministro Calomarde, en presencia de varios Secretarios del Despacho, presentó al Rey en su lecho un Decreto de revocación de la pragmática de sucesión. El Monarca lo firmó automáticamente con letra ilegible, fruto de su semiinconsciencia"". Creyendo que el Rey había entrado ya en coma irreversible, el Ministro Calomarde imprudentemente violó el secreto y extendió aquel mismo día certificaciones de lo actuado, que seguidamente envió al Consejo de Castilla y a al Secretario de la Guerra, para que su publicación

Documentos del Reinado de Fernando VII, pág. CXI).

"". La Real resolución llevaba fecha de 29 de marzo y fue publicada el 1 de abril.

"". PEGUENAUDE, P., "Trayectoria y testimonio de José Manuel del Regato", EUNSA, Pamplona 1978, carta de Regato a Carnerero fechada el 1 de abril de 1830, todo ello citado por FONTANA, J., "La crisis del Antiguo Régimen", op. cit., pág. 184.

"". Según este historiador, en favor de la sucesión femenina, "que significaba una salida moderada de la crisis, estaba la mayor parte de la nobleza terrateniente, de la burguesía y de las clases populares urbanas" (FONTANA, J., op. cit., pág. 210).

"". Según Fontana, "cuando se arrancó a Fernando el decreto que debía revocar el de 29 de marzo de 1830, se consultó sobre ello a varios Consejeros de Castilla que se encontraban en la Granja y aquéllos opinaron que esta revocación podía hacerse legalmente y que tendría pleno valor" (FONTANA, J., op. cit., pág. 209).

según las fórmulas de estilo. Sin embargo, el Decano Gobernador del Consejo Sr. Puig y el Secretario de la Guerra Zambrano se negaron a ello, mientras no les constase la muerte del Rey"".

Por otra parte, sabemos también que durante aquella enfermedad de Fernando VII, varios Consejeros de Castilla -Marín, Gil y Borja-, asistían al Monarca convalciente en su residencia de San Ildefonso, en virtud de una Real Orden"".

Lo cierto es que el Rey se recuperó y fue conocido públicamente el engaño con que se le arrancó la firma. Señalaba León y Pizarro que uno de los Consejeros de Castilla que acudieron a la Granja aconsejó al Monarca la adopción de medidas más severas contra los confabuladores"".

"" BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, págs. 359-363: "Sólo aparecieron algunas copias manuscritas fijadas en distintos puntos de la Corte por el bando carlista, que difundió rápidamente la noticia que había expirado el monarca."; MARLIANI por su parte afirmaba lo siguiente: "Alcanzada la firma de Fernando, u lo que debía hacer sus veces, los capataces de aquella tramoya volaron con el acta al respetable Decano del Consejo de Castilla, don José Puig, para que dispusiese su publicación; pero aquel dignísimo magistrado se desentendió de todo el empeño del partido apostólico antes del fallecimiento del Rey y retuvo en su poder el documento" (MARLIANI, M., "El reinado de Fernando VII", pág. 160). También VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto", págs. 195 y 196.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.910 núm. 9.

"" La infanta doña Luisa Carlota, esposa del infante don Francisco y hermana del Rey, regresó a San Ildefonso el 22 de septiembre, alarmada por la gravedad de la enfermedad del Rey. Allí se enteró, por Puig y Zambrano, de las escenas de San Ildefonso y del decreto del día 18. Desatada en cólera, al encontrarse con el Ministro Calomarde le dio una tremenda y sonora bofetada y seguidamente hizo pedazos el original del decreto y las certificaciones que se habían expedido y que ordenó recoger de manos del Decano del Consejo de Castilla, Sr. Puig (VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Constitucional", págs. 198 y ss.). Calomarde fue desterrado. Por otro lado, comentaba León y Pizarro en sus Memorias lo siguiente: "...Los Consejeros de Castilla que fueron a la Granja, y uno de ellos le dijo que no eran suficientes las medidas tomadas, y que era menester derramar sangre, etc." (op. cit., tomo II, pág. 6).

Por otro lado, sabemos que el Monarca agradeció al Decano del Consejo Real su actitud ante el incidente. Y lo hizo nombrándole unos días después Gobernador efectivo del Consejo, cargo en el que apenas estuvo unas semanas pues fue jubilado en octubre del mismo año, debido a su avanzada edad¹⁰⁰⁰.

Ante la gravedad del estado de Fernando y su prolongada ausencia de las tareas de gobierno, por un Real Decreto de 6 de octubre la Reina María Cristina de Borbón fue llamada a tomar parte en el gobierno de la Monarquía, en el despacho de los negocios públicos. La primera medida que tomó la Reina fue la concesión de un indulto general el 7 de octubre, a la vez que abría las Universidades¹⁰⁰¹.

Expidió la Reina en su mandato varios Decretos, que fueron circulados por el Consejo, como el del 9 de octubre mandando hacer un solemne Te Deum "en acción de gracias a Dios por haber librado al Rey del peligro de que ha estado amenazada su vida". El Gobernador Sr. Puig fijó la hora de las 12:00 de la mañana del miércoles día 10 de octubre, en la iglesia de Santa María. Se comunicó este Decreto a los Presidentes de los Consejos y Tribunal de la Contaduría¹⁰⁰².

Dos semanas después el Consejo de Castilla presentaba consulta de oficio al Monarca. En ella expresaba su júbilo por su restablecimiento y la gratitud por haber confiado a S.M. la Reina el despacho de los negocios de Estado durante la convalecencia¹⁰⁰³.

Entre las medidas adoptadas en las semanas siguientes se encontraba el mencionado Decreto por el que se

¹⁰⁰⁰. José María Puig y Samper contaba entonces con más de ochenta años y era entonces el más veterano de los miembros del Consejo de Castilla, pues su nombramiento databa del reinado de Carlos IV. Había sido el primer Gobernador efectivo en el Consejo Real tras el fallecimiento de don Ignacio Martínez de Villela en Aranjuez el 12 de mayo de 1827. Y había sustituido en el Decanato a don Bernardo Riega, también fallecido el 6 de febrero de 1830 (A.H.N., Consejos suprimidos, legajo 51.433 núms. 44 y 45).

¹⁰⁰¹. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, págs. 368-369.

¹⁰⁰². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.912 núm. 7.

¹⁰⁰³. A.H.N., Consejos, legajo 6.108, consulta de oficio del 23 de octubre de 1.832.

jubilaba al Gobernador del Consejo de Castilla don José María Puig y en su lugar se nombraba un Presidente de Castilla, en la persona de don Francisco Javier Castaños. El General Castaños, Duque de Bailén, era el segundo Presidente en propiedad que tenía el Consejo de Castilla en el reinado de Fernando VII¹⁰⁰⁰. Igualmente se le confió a Castaños el mando militar de la provincia de Castilla la Nueva, en vez del Marqués de Zambrano¹⁰⁰¹. Era don Javier Castaños un militar forjado en el campo de batalla, que había llegado a la Grandeza por su victoria en los campos de Bailén. Accedía así a la Presidencia de Castilla hombre de la milicia, que había de regir un Consejo formado mayoritariamente por letrados. Castaños era sin duda un hombre de confianza del Rey y tenía experiencia en labores de gobierno.

Otro nombramiento importante tuvo lugar el 14 de diciembre. Aquel día era nombrado Secretario de Gracia y Justicia un Consejero de Castilla: don Francisco Fernández del Pino¹⁰⁰².

El 30 de diciembre la Reina citaba a todos los altos dignatarios del Reino a presentarse en la Cámara del Rey al día siguiente a las doce¹⁰⁰³. Asistía entre otros el Presidente del Consejo Real don Francisco Javier Castaños, héroe de Bailén. En la enumeración de personalidades se le citaba en segundo lugar, tras el Cardenal Arzobispo de Toledo y antes del primer Secretario de Estado y Presidente del Consejo de Ministros. A todos entregó el Rey una declaración escrita que mandó leer en voz alta a Fernández del Pino¹⁰⁰⁴. Así empezaba la declaración, conservada en el expediente que sobre este asunto abrió el

¹⁰⁰⁰. Había habido también en este periodo algún Presidente interino, como fue el caso del Decano Sr. Colón de Larreátegui.

¹⁰⁰¹. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, págs. 375-376.

¹⁰⁰². BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, págs. 375-376.

¹⁰⁰³. BAYO, E.K., "Historia de la vida...", tomo III, págs. 383-385.

¹⁰⁰⁴. Fernández del Pino dejó de ser Secretario de Gracia y Justicia por Real Decreto aparecido en la Gaceta de Madrid del 26 de marzo de 1.833. Volvió entonces a su plaza del Consejo y Cámara de Castilla y fue desterrado a Antequera el 4 de agosto del mismo año (LEON Y PIZARRO, J., "Memorias", tomo II, págs. 13 y 37).

Consejo de Castilla"":

"Sorprendido mi Real ánimo en los momentos de agonía a que me condujo la grave enfermedad de que me ha salvado prodigiosamente la Divina Misericordia, firmé un Decreto derogando la Pragmática Sanción de 29 de marzo de 1.830 decretada por mi Augusto Padre, a petición de las Cortes de 1.789, para restablecer la sucesión regular en la Corona de España..."

Concluida la lectura, el Rey firmó y rubricó esta declaración suya en presencia de todas las personalidades convocadas. Inmediatamente el Consejo Real mandó su cumplimiento a todas las autoridades"". Este fue el último suceso relevante de 1.832.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.936 núm. 6.

"".. Así describía León y Pizarro la reacción de Fernando: "También el Rey hizo reunir en su cuarto, días pasados, varias personas, como los Ministros, etc., Consejeros de Estado, los más antiguos, dos de los otros Tribunales, Patriarca, Comisario de Cruzada, varios jefes, todo ello unas treinta personas o menos. El Ministro de Gracia y Justicia hizo de notario; delante de estas personas se leyó una declaración de Su Majestad, diciendo su enfermedad, el engaño con que le arrancaron la rúbrica para la sucesión sálica, y la infamia ejercida con la Reina nuestra Señora, y que su voluntad ahora, ya bueno, es que le suceda su hija, etc. A los circunstantes sólo se les preguntó si lo habín oído; pero ni juraron ni firmaron, etc."

7. La muerte de Fernando VII

1.833 fue un año importante. Fue el año de la muerte de Fernando VII, último Monarca del Antiguo Régimen. Con la desaparición de Fernando se extinguiría también el secular régimen de los Consejos y la forma de gobierno absolutista. Y era el comienzo también de una centuria no exenta de tensiones, conflictos y reformas, que concluiría fatalmente con nuestra Guerra Civil.

El 20 de junio de 1.833 fueron reunidas las Cortes en Madrid para jurar a la infanta Isabel como Princesa heredera. Contaba entonces con tres años. El infante don Carlos María de Isidro, que se encontraba en Portugal con su familia, se negó a jurarla, y aunque no se atrevió entonces a levantarse contra su hermano, lo dispuso todo para cuando Fernando muriese"". Sin embargo, el infante don Carlos sí que remitió una protesta contra el acto que se celebraba. Afirma Villa-Urrutia que como esta protesta no fue comunicada a todos los Soberanos de Europa, remitió con fecha 23 de mayo una copia de la declaración a los obispos, grandes y diputados, Presidentes o Decanos de los Consejos, etc., documentos que al parecer fueron extraídos del Correo y no llegaron a sus destinatarios"".

En el ceremonial de la jura de la infanta Isabel Luisa, conservado hoy en el Archivo del Palacio Real de Madrid"", no se mencionaba en los lugares preferentes al Presidente del Consejo Real ni a este Consejo. Y por el

"" VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Absoluto", pág. 201. Parece que se equivoca Villa-Urrutia al fechar este acontecimiento el 30 de junio, en vez del día 20.

"" VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto", pág. 209.

"" A.G.P., Sección Fernando VII, caja 445 expediente núm. 1.

contrario, sí aparecían en puesto preferente los Secretarios de Despacho y los Consejeros de Estado. En una segunda fila dentro del Protocolo se mencionaba a los Ministros del Consejo, que estarían situados en la ceremonia -que tuvo lugar en la iglesia de los Jerónimos-, detrás de los Embajadores, junto a los Mayordomos de Semana, el Secretario de la Cámara y los Escribanos Mayores del Reino. Esto confirma nuevamente la pérdida de relevancia del Consejo de Castilla, frente a un Consejo de Estado que mantenía y aumentaba su preeminencia.

El retraso en el despacho de los negocios fue un mal endémico del Consejo que se acentuó durante la llamada Década Ominosa. El 23 de julio el Presidente llamaba al Consejo al despacho para comunicar una Real Orden en la que S.M. pedía que las Escribanías de Cámara y de Gobierno formasen listas de los expedientes en que el Rey tenía pedida consulta al mismo Supremo Tribunal. El informe es interesante, en cuanto nos muestra el volumen de trabajo del Consejo en sus últimos momentos. Sabemos entonces que en aquel mes de 1.833 había 20 expedientes en los que S.M. tenía pedida consulta y estaban pendientes los informes de las Chancillerías, Audiencias y otras autoridades"".

En aquellos meses previos al fallecimiento del Monarca, el Consejo había presentado varias consultas interesantes. Por ejemplo, la realizada sobre la instancia presentada por don Manuel Godoy, hijo del exvalido, solicitando que de los bienes secuestrados a su padre se le entregasen los que éste mismo le cedió por escritura el 5 de septiembre de 1.806"".

León y Pizarro escribía el 26 de septiembre lo siguiente"": "Ayer volvió a estar incomodado el Rey en el paseo. Parece que la Regencia proyectada era la Reina Gobernadora, infante don Francisco, Infantado, Castaños, Arzobispo de Sevilla y que Cea ha obtenido ponerse en el lugar de Castaños..." El Rey estaba enfermo y su enfermedad no se prolongaría mucho. El día 29 de septiembre de 1.833, a las tres menos cuarto de la madrugada fallecía Fernando en el Palacio Real de Madrid de un ataque de apoplejía que duró

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.930 núm. 9.

"" A.H.N., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio del 18 de julio de 1.833.

"" LEÓN Y PIZARRO, J., "Memorias", tomo II, pág. 47.

cinco minutos"".

"Esa mañana han empezado los cañonazos de media en media hora. Grandes y frecuentes patrullas; Gaceta extraordinaria con la muerte del Rey y confirmación del Ministerio como Gobernadora.

Me aseguran que ayer, al instante de la muerte del Rey, se llamó al Presidente del Consejo de Castilla, dos camaristas, Marín y otro, y creo que uno o dos Secretarios; no se sabe a qué. Del testamento, sólo se dice que lo que el Rey escribía estos últimos años era su disposición; pero que no se debía firmar aquella misma tarde parece era formación del Consejo de Regencia de los dos infantes, Infanteado y Castaños. Cuando el Rey envió al Consejo en la Granja un papel cerrado, se devolvió y no se encuentra; además, cuando dijo al Consejo lo que decía S.M., entonces citaba un testamento anterior..."

Inmediatamente la Reina Gobernadora doña María Cristina aprobó un Decreto participando la muerte de Fernando VII a todos los españoles. Ese mismo día se reunió el Consejo de Castilla y acordó las disposiciones que en tales casos se acostumbraban y mandó expedir una provisión circular a todo el Reino para informar a toda la Nación"".

Ese mismo día acordaba el Consejo una consulta de oficio en la que manifestaba a la Reina Gobernadora su justo sentimiento con motivo de la muerte del Rey N.S.""", y declaraba luto oficial de nueve días y

"" A.H.N., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio del 30 de septiembre de 1.833; MESONERO ROMANOS, "El Antiguo Madrid", pág. 117 y ss.; VILLA-URRUTIA, "Fernando VII, Rey Absoluto", pág. 209.

"" G. DE LEON Y PIZARRO, J., "Memorias", tomo II, pág. 48, día 30 de septiembre de 1.833.

"" A.H.N., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio del 30 de septiembre de 1.833.

"" "Me sirve de consuelo los testimonios de dolor y de lealtad que recibo del Consejo", respondía al Consejo en aquella ocasión la Reina (A.H.N., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio del 30 de septiembre de 1.833; también en Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 21). La consulta acordada por el Consejo sería leída a la Reina Gobernadora el 15 de octubre.

suspensión de tribunales"".

El 2 de octubre la Reina Gobernadora mandaba a todas las autoridades establecidas continuasen en el ejercicio de sus funciones, y les encargaba la buena y pronta administración de justicia"".

El 4 de octubre se abrió el testamento del Rey -encontrado dos días antes en el secreto de una mesa y que estaba fechado el año 1.830-"". Ese mismo día se formó una Junta compuesta del Cardenal Marco, el Marqués de Santa Cruz, el Duque de Medinaceli, los Sres. Puig, Caro -del Consejo de Indias-, Castaños y Amarillas. Secretario era Heredia y suplentes los Sres. Arias, Cruz Garell, Infantado, España, Hevia, Cea y otros"".

También el 4 de octubre se hacía público el Manifiesto de la Reina Gobernadora a toda la Nación. En él expresaba la Reina sus intenciones y "los principios de seguridad y de ilustración que se proponía seguir en el gobierno de la Monarquía durante la menor edad de su Augusta Hija, la Reina N. Sra. Doña Isabel"". He aquí un fragmento de este Manifiesto:

"...Conozco los males que ha traído al pueblo la serie de nuestras calamidades y me

"". "Con motivo del fallecimiento del Rey Nuestro Señor, que en paz descanse, ha resuelto el Consejo en el Pleno celebrado hoy que por término de nueve días contados desde mañana incluso los feriados, se suspenda el despacho de los tribunales...30 de septiembre de 1833" (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 21, "Expediente formado con motivo del fallecimiento del Sr. Rey Don Fernando VII de Borbón".

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 21.

"". El 3 de octubre Castaños pedía a Llamazares que reuniera el Consejo pleno con asistencia de los tres Fiscales en la en el Palacio de su residencia para proceder a la lectura del testamento de Fernando VII (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.427 núm. 12. De este expediente dimanó "la pragmática-sanción para que se guarden y cumplan las soberanas disposiciones y última voluntad de Fernando VII sobre sucesión de la Corona).

"". G. DE LEON Y PIZARRO, "Memorias", tomo II, págs. 48 y ss, día 4 de octubre de 1.833.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.933 núm. 7.

afanaré por aliviarlos; no ignoro y procuraré estudiar mejor los vicios que el tiempo y los hombres han introducido en los varios ramos de la Administración Pública; y me esforzaré para corregirlos. Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el solo bien de un valor positivo para el pueblo, serán la materia permanente de mis desvelos. Yo los dedicaré muy especialmente a la disminución de las cargas, que sea compatible con la seguridad del Estado y las urgencias del servicio; a la recta y pronta administración de Justicia; a la seguridad de las personas y de los bienes; al fomento de todos los orígenes de la riqueza..."

Por Real Orden de 13 de octubre de 1.833 se mandaba al Consejo Real que dejase de remitir mensualmente al Ministerio de Gracia y Justicia los estados y relaciones de nóminas de Ministros y subalternos del Consejo. A cambio se le mandaba que fuera enviado uno por el todo y a fin de año. Para cumplir lo mandado, el Duque de Bailén, Presidente de Castilla, por Real Orden de 29 de noviembre de 1.833 encargaba al Escribano de Gobierno que advirtiera a los habilitados de los Ministros del Consejo y de los dependientes del mismo para que formasen dichos estados o razón de todo el año. Estas relaciones eran imprescindibles para la formación del Presupuesto del Ministerio de Gracia y Justicia con la debida exactitud".

A la ceremonia de proclamación de S.M. la Reina Isabel II también asistió el Consejo, según la tradición centenaria, desde los balcones principales de las Casas Consistoriales, en esta ocasión por última vez".

Aparentemente pocas cosas cambiaron en los meses siguientes al fallecimiento de Fernando VII. El Consejo Real continuó con sus restantes competencias y periódicamente hacía consultas con la Reina Gobernadora. Sabemos que el 21 de noviembre consultó a la Reina Madre la posibilidad de reducir a diez el número de Alcaldes de la

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.933 núm. 7.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

***. Aquella última ceremonia tuvo lugar el día 24 de octubre de 1833, a las once de la mañana (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.427 núm. 13).

Real Casa y Corte"". Entre otros expedientes tramitados aquel año se encontraban también varios relacionados con universidades, como la provisión de una cátedra de Teología de la Universidad de Salamanca"" o la variación de los estudios de las carreras de leyes""; o varios relativos a desórdenes públicos o crímenes"". También el 23 de octubre consultaba el Consejo a la Reina Gobernadora la variación de la fórmula del juramento, a consecuencia del Decreto de Amnistía que se concedió el 30 de octubre de 1.832"".

El 27 de noviembre acordaba el Duque de Bailén, Presidente del Consejo, que desde el lunes día 2 de diciembre se cambiaría el horario de despacho del Supremo Tribunal, que comenzaría a las 10 de la mañana"". Sería ésta la última vez en la historia del Consejo Real de Castilla que se establecía el horario de invierno, ya que pocos meses después desaparecería definitivamente.

Una última noticia nos la refiere García de León y Pizarro en sus Memorias"". Es una lacónica nota escrita el 17 de diciembre del mismo año: "Parece ha muerto Infanteado". Con la desaparición de él que fuera por muchos años Duque-Presidente se consumaba la pérdida de una gran

"". A.H.N., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio del 21 de noviembre de 1.833.

"". A.H.N., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio del 31 de octubre de 1.833.

"". A.H.N., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio del 31 de octubre de 1.833.

"". Por ejemplo, la gruesa causa sobre el asesinato del abad de San Basilio, en Madrid (legajo 6.110, consulta del 23 de septiembre de 1.833), o la causa sobre las muertes violentas en Jerez, en el Cortijo Casa Blanca, los días 10 y 11 de abril de 1.823 (consulta de oficio del 21 de noviembre de 1.833); o la causa formada en 1.827 sobre averiguación de los autores o individuos de una Junta Apostólica Revolucionaria o Carlistas que se decía existir en Almería (consulta de oficio del 24 de diciembre de 1.833).

"". A.H.N., Consejos, legajo 6.110, consulta de oficio del 23 de octubre de 1.833: antes de esta reforma, los que prestaban juramento debían jurar no haber pertenecido a sociedades secretas.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.910 núm. 9.

"". LEÓN Y PIZARRO, J., "Memorias", tomo II, pág. 48.

valedor del Consejo de Castilla y durante muchos años pilar del gobierno del Monarca fallecido, de quien fue sin duda un fiel colaborador. Infantado fue también uno de los protagonistas de su reinado y participó directamente en sus principales acontecimientos. Por ello mismo, la figura de Infantado también estuvo muy unida a la del Consejo de Castilla. Con la muerte del Rey y del Duque a finales de 1.833 parece anunciarse por fin la desaparición definitiva del Antiguo Régimen y de sus Consejos.

8. El Consejo Real en el año 1.834

La suerte del Consejo de Castilla estaba echada. Fernando VII quiso mantener el régimen de Consejos en su reinado pese a los muchos informes y consejos que en sentido contrario recibió. Desaparecido el Monarca, se vería a los Consejos como instituciones arcaicas que había que reformar. En este sentido fue la Real Orden de 13 de febrero de 1.834. En ella se avisaba de la próxima instalación de la Audiencia de Madrid y se mandaba que hasta que se produjera su instalación, admitiera el Consejo de Castilla las apelaciones que se le presentasen. Más tarde, por el Decreto de 17 de febrero siguiente, se instalaba la Real Audiencia de Madrid. Este Real Decreto fue inmediatamente comunicado al Presidente del Consejo de Castilla^{***}. La nueva Audiencia iba a absorber las competencias de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.

El 5 de noviembre de 1.832 había aparecido el Ministerio de Fomento, y el 5 de octubre de 1.833 se creaban los subdelegados de Fomento, antecesores de los actuales Gobernadores Civiles. En 1.834, ya empezada la guerra civil dinástica, fueron suprimidas definitivamente las antiguas instituciones administrativas. Señala Cos-Gayón^{***} cómo el

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951 núm. 2.

^{***}. COS-GAYÓN, F., "Historia de la Administración Pública en España", I.E.A., Madrid, 1976, págs. 249 a 251.

26 de enero de este año volvía a mandarse que no hubiera distinción entre los Tribunales superiores y que se aumentara el número de las Audiencias con dos más, que serían las creadas en Albacete y en Burgos. Más adelante fue establecida, como hemos visto, la Audiencia de Madrid. Ya sólo quedaba hacer desaparecer los Consejos.

De esta manera, por Real Decreto de 24 de marzo de 1.834 se suprimían los Consejos de Castilla, Indias, Guerra y Hacienda; el Consejo de Estado era también suprimido; y se creaba el llamado Consejo Real de España e Indias****. Por una Real Orden del mismo día se mandaba que su Presidente "continuara ejerciendo sus funciones como hasta aquí"****.

La supresión de los Consejos seculares se acompañaba a su vez de otra serie de reformas. Así el 13 de mayo se convertía el Ministerio de Fomento en Ministerio de lo Interior. Los Subdelegados principales de Fomento se convirtieron más tarde en Gobernadores Civiles de las provincias y los de partido en Subdelegados del Gobierno Civil. Tal fue la reforma que se llevó a cabo en nuestra Administración en 1.834.

****. Ver DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", documento XXXV, págs. 169 y 170.

****. A.H.N., Consejos suprimidos, legajo 11.887 núm. 1.

12. SUPRESION DEFINITIVA DEL CONSEJO EN 1.834.

Con los famosos seis decretos de 24 de marzo de 1.834 se acometió la reforma de la Administración Central, tal y como había anunciado Cea Bermúdez en su Manifiesto de 1 de octubre de 1.833^{***}. El Consejo de Estado quedaba en suspenso, por existir un Consejo de Gobierno para el periodo de la Regencia de la Reina Madre, por la minoría de edad de Isabel II; los Consejos de Castilla e Indias, con sus Cámaras respectivas, y los de

^{***}. Manifiesto de Cea del 1 de octubre de 1.833: "Conozco los males que ha traído al pueblo la serie de nuestras calamidades y me afanaré por aliviarlos: no ignoro, y procuraré estudiar mejor los vicios que el tiempo y los hombres han introducido en los varios ramos de la Administración pública y me esforzaré por corregirlos. Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el sólo bien de valor positivo para el pueblo, serán materia permanente de mis desvelos. Yo los dedicaré muy especialmente a la disminución de las cargas que sea compatible con la seguridad del Estado y las urgencias del servicio; a la recta y pronta administración de la justicia; a la seguridad de las personas y de los bienes; al fomento de todos los orígenes de la riqueza". (SANCHEZ BELLA, I., "La Reforma de la Administración Central en 1.834", Actas del III S.H.A., I.E.A., Madrid 1.974, pág. 659, nota núm.1).

Guerra y Hacienda fueron suprimidos; el Consejo de Ordenes fue reformado y se crearon los Tribunales Supremos de España e Indias, Guerra, Marina y Hacienda. Un sexto Decreto creaba un Consejo Real de España e Indias''''.

En cuanto a los motivos que llevaron a estas reformas administrativas, podemos decir en primer lugar que ya se encontraban perfiladas con anterioridad. No fue una novedad su introducción e incluso desde hacía tiempo se veían como necesarias. El profesor Alvarez Pinedo'''' concreta esta necesidad en tres motivos. De un lado, la preponderancia de las Secretarías de Estado frente a los caducos Consejos en sus competencias no judiciales; la confusión de competencias administrativas y judiciales en las mismas instituciones y autoridades hacía precisa su separación; y la misma independencia del poder judicial, que quedaba garantizada con la creación de los mencionados tres Tribunales''''.

Pero vayamos por partes. En primer lugar, veamos cómo se llevó a cabo la definitiva supresión del Consejo de Castilla.

Javier de Burgos había presentado en 1.826 una valiosa exposición sobre la necesidad de establecer un Ministerio del Interior. Tras señalar como posible objeción

'''''. El Consejo Real de España e Indias quedó configurado como un órgano asesor de carácter gubernamental. El Consejo se inspiraba especialmente en los antiguos Consejos de Estado español, el tradicional y el liberal, y en el nuevo tipo inaugurado en Francia con el Conseil d'Etat. Seguía especialmente el modelo constitucional español. Algunos de sus Consejeros lo habían sido anteriormente del Consejo de Castilla. Así, su Presidente -con los mismos honores que tenía antes el Presidente de Castilla- era el General Castaños, y su Decano de Gracia y Justicia era don Ramón López Pelegrín. (ARVIZU Y GALARRAGA, F., "El Consejo Real de España e Indias (1.834-1.836)", Actas del III S.H.A., I.E.A., Madrid 1.974, págs. 388, 389, 399 y 401.

'''''. ALVAREZ PINEDO, F.J., A.G.S., "Guía del Consejo Real de España e Indias", Simancas, 1.987, págs. 1 y 2.

'''''. Los mismos miembros del Consejo de Gobierno -que sustituyó al Consejo de Estado-, reconocían la necesidad de estas reformas, pero criticaban la falta de oportunidad por el mal estado del país en aquel momento: "conviene mucho, sin duda, que las facultades judiciales y administrativas estén separadas unas de otras y que se confíen a cuerpos distintos, más esta separación requiere oportunidad y pulso." (citado por ALVAREZ PINEDO, F.J., op. cit., págs. 1 y 2).

el que su establecimiento cortaría o destruiría 'las facultades que dan nuestras leyes al Consejo Real en materia de gobierno o de administración, exponía afirmaciones sobre el Consejo Real que no está de más recordar:

"Señor, yo no creo que alguno de los dignos jurisconsultos que pronuncian en vuestro Consejo Real los oráculos soberanos de la justicia niegue la exactitud de estas observaciones. Ellos lloran sin duda la necesidad en que se les pone frecuentemente de pronunciar sobre cosas de que no trata el Derecho, y en las cuales, para descargop de su conciencia, tienen que conformarse a veces con el dictamen de los subalternos, a los cuales puede haber engañado a su vez la enunciación fraudulenta de un hecho, la ocultación casual de alguna de sus circunstancias o las erróneas tradiciones de la Escribanía.

El Consejo no reclamará ciertamente la prerrogativa de continuar encargado de intereses sobre que no puede velar y cuyo constante abandono justifica la necesidad de encomendarlos a quien pueda promoverlos. Si tal situación se prolongase, los gérmenes de prosperidad que aún nos quedan se irían secando sucesivamente, y la España reducida a la miseria haría recordar con dolor sus antiguas épocas de abundancia..."; "Se necesitan vastos conocimientos, actividad infatigable y competente número de auxiliares..."; "Separando pues de las atribuciones del Consejo Real las que él no puede desempeñar, dispensa V.M. un beneficio insigne a la Nación que rige, removiendo el principal obstáculo de las mejoras que reclama, y hace al mismo tiempo más fácil a sus Consejeros el desempeño de sus funciones judiciales, y más expedita la marcha de la justicia. Siempre que lo creyeron conveniente el bienestar de sus pueblos, hicieron otro tanto los augustos predecesores de V.M., ora creando, ora suprimiendo Consejos, Juntas u oficinas, ora ampliando o restringiendo sus atribuciones. Los beneficios que deben resultar de la creación de un Ministerio de lo Interior no podrían, pues, ser retardados por el temor de quitar al Consejo Real facultades que no le es posible desempeñar, y a que aquel Cuerpo renunciará sin duda espontáneamente, cuando conozca las intenciones de V.M., dirigidas a promover la prosperidad y la ventura de sus vasallos"....

Esta importante Exposición, junto con otras ya mencionadas como las de Sainz de Andino, López Ballesteros o la misma de Infantado, crearon un ambiente propicio a las reformas de la Administración. Tras la creación del Ministerio de Fomento el 5 de noviembre de

.... MESA SEGURA, A., "Labor administrativa de Javier de Burgos", Madrid 1946, págs. 142 y ss., citado por SANCHEZ-BELLA, I., op. cit., pág. 662.

1.832, el 21 de octubre del año siguiente era nombrado Ministro de este ramo Javier de Burgos.

El 27 de febrero de 1.834, don Francisco Martínez de la Rosa dirigía a la Reina Gobernadora una Exposición, en nombre del Consejo de Ministros^{***}. He aquí su texto:

"Señora:

Las benéficas miras de V.M. en favor del buen régimen de la Monarquía no podrán producir los bienes que de ellas deben esperarse, ni caminar con desembarazo el Gobierno por la senda de las mejoras y adelantamientos, mientras subsista en pie la viciosa organización que en la actualidad tienen los cuerpos principales del Estado.

Hasta las mismas reformas que se están planteando, y de que tantas esperanzas se promete ya la nación, no llegarían a la madurez, y aún tal vez muchas de ellas se convertirían en perjudiciales, si al mismo tiempo no se cuidase de establecer la necesaria armonía y correspondencia entre las diferentes partes del sistema administrativo.

Entre las varias causas que han producido en él tanta confusión y desarreglo, pocos hay de mayor trascendencia y de influjo más pernicioso que la mezcla de atribuciones judiciales y administrativas en los mismos cuerpos y autoridades, resultando muchas veces de este vicioso origen, que mientras más providencias ha dictado el Gobierno para promover los varios ramos de la pública felicidad, mayores han sido las trabas que se han opuesto a su acrecentamiento y desarrollo.

Sin un plan acorde y sencillo, en que estén eslabonadas con la conexión necesaria todas las autoridades administrativas, de tal manera que correspondan las unas con las otras, sin obstáculos extraños que entorpezcan su acción y movimiento, no es humanamente posible que se establezca aquel orden y concierto que es de la esencia misma de un gobierno bien constituido.

Con el propósito y deseo de conseguir un fin tan importante, y después de habernos puesto de acuerdo con los demás Secretarios del Despacho, tengo la honra de proponer a V.M. las siguientes bases, que si logran merecer su augusta aprobación, tengo el íntimo conocimiento de que quedará más ordenada y expedita la Administración del estado, redundando en provecho común del Trono y de los pueblos.

***. Sánchez-Bella atribuye la iniciativa de la reforma a Martínez de la Rosa, Javier de Burgos y Nicolás María Garellí. De ellos Javier de Burgos debió ser sin duda el gran promotor de la reforma (op. cit., pág. 671).

Si V.M. estima que este proyecto merece tomarse en consideración, ruego a V.M. que me mande pasarlo al Consejo de Gobierno, para que después de oír, como es debido, sus observaciones y dictamen, tenga yo la honra de someterlo de nuevo a la augusta aprobación de V.M. Madrid, 27 de febrero de 1.834"****.

El mismo día Martínez de la Rosa enviaba al Consejo de Gobierno mediante Real Orden la exposición y las minutas de seis Decretos. Fueron estudiadas por este Consejo el 14 de marzo. A la reunión asistieron el Arzobispo de Méjico, el Marqués de Santa Cruz, el Duque de Medinaceli, el General Castaños, el Marqués de las Amarillas, don José María Puig, don Francisco Javier Caro y el secretario, Conde de Ofalia. Tras una larga discusión, no se llegó a la unanimidad. Por el contrario, hubo dos votos particulares en contra del proyecto: de los Consejeros de Castilla don José María Puig**** y don Francisco Javier Caro****. "En ambos,

****. SANCHEZ-BELLA, I., "La Reforma de la Administración Central en 1.834", op. cit., pág. 662.

****. Puig, señala Sánchez Bella citando a Burgos, tenía inclinaciones absolutistas. Había sido separado por Cea del Consejo de Castilla tras muchos años de dilatados servicios y conservaba el resentimiento. "Tenía ochenta años; su fibra, en otro tiempo enérgica, se había aflojado. Las vicisitudes que experimentara en el último período de su vida habían contribuido tanto como la edad a destruir el vigor que debió un día a su temperamento y a sus largos hábitos de mando" (BURGOS, J. de, "Anales", tomo I, págs. 185-186, citado por SANCHEZ-BELLA, I., op cit., págs. 666 y 667). Vemos por tanto que don José María Puig y Samper había sido rehabilitado nuevamente en el Consejo Real.

****. El General Francisco Javier Caro había sido general en jefe del Ejército del Pirineo occidental en la guerra contra la República francesa de 1.793. Cuando se le llamó para el puesto de miembro de la Junta de Gobierno era un anciano gravemente enfermo. Paso a todo se recuperó lo suficiente pues sabemos tomó postura enérgica contra las novedades que suponían los seis conocidos Decretos. Sánchez Bella recoge algunos pasajes de su voto particular: "me parece en las actuales circunstancias una novedad de tanta magnitud que por sí sola bastará para poner en inminente riesgo el Trono de la Reina Nuestra señora Doña Isabel II"; no encuentra tampoco qué ventajas pueden resultar "ni para la más pronta y recta administración de justicia, ni para el mayor acierto en las consultas. En tales reformas sólo ve una ocasión de aumentar los gastos y la angustia resultante por la pérdida de empleos; teme "la manía de mandarlo y trastocarlo todo"; afirma también que "conviene mucho, sin

su actitud es de suma prudencia y respeto a la tradición institucional"".

Transcurrieron tan sólo diez días desde que fue emitido el dictamen favorable de la Junta de Gobierno hasta la expedición de los seis Decretos reformadores de los Consejos"".

El momento era propicio para llevar a cabo esta importante reforma. Ya hemos visto en capítulos anteriores de esta Evolución Histórica el estado cadudo y rendido de los distintos Consejos en los últimos años. Fernando VII había muerto ya y en su lugar se había instalado un Regente. Un cambio de Monarca podría ser también una ocasión de introducir reformas. Por otro lado, el país se encontraba sumido en una guerra civil y las Cortes no estaban convocadas, a la vez que no había un Código o Constitución escrita. La ocasión se presentó y se llevó a cabo la reforma.

Si es cierto que para muchos fue una sorpresa, ya hemos visto que había estudios al respecto desde unos cuantos años antes. Quizá la mayor sorpresa fue el que no se respetaran los Consejos, en lugar de simplemente quitarles competencias. Señala Sánchez-Bella cómo para Javier de Burgos esta reforma no fue sino una pieza más del conjunto de reformas necesarias en la Administración Pública, incluso de menor importancia que

duda, que las facultades judiciales y administrativas estén separadas unas de otras, y que se confíen a cuerpos distintos, más esta separación requiere oportunidad y pulso; teme poner en peligro la Corona y no ve diferencia esencial y que pueda influir en la prosperidad de los pueblos el que este cuerpo consultivo se llame Sala de Gobierno del Consejo de Castilla o Sección de Gracia y Justicia: "Yo tiemblo, Señora, y me estremezco al considerar que este vano juego de palabras puede comprometer en gran manera el sosiego público". Puig se adhirió enteramente a este voto particular (SANCHEZ-BELLA, I., op. cit., págs. 667 y 668).

"" SANCHEZ-BELLA, I., op. cit., pág. 667.

"" Señala Sánchez-Bella cómo no fueron para nada tenidos en cuenta los votos particulares de Puig y Caro, como tampoco el deseo de los demás Consejeros de que se publicaran simultáneamente los Reglamentos de los tres nuevos Tribunales y del nuevo Consejo Real de España e Indias. El Consejo "continuaba actuando -añade- con la misma celeridad y con la misma actitud de indiferencia hacia los dictámenes del Consejo de Gobierno. Sólo fueron aceptados algunos retoques al texto". (SANCHEZ-BELLA, I., op. cit., pág. 671).

otras medidas como la organización provincial o el fomento del Reino"".

"Mis benéficas miras en favor del buen régimen de la Monarquía no pudieran producir los bienes que de ellas deben esperarse, ni caminar con desembarazo mi gobierno por la senda de las mejoras y adelantamientos, mientras subsista en pie la viciosa organización que en la actualidad tienen los cuerpos principales del Estado". Así comenzaba el preámbulo del Real Decreto por el que se suprimían los Consejos. Esta medida, aprobada por el Gabinete de Martínez de la Rosa -que había sustituido en la Presidencia del Consejo de Ministros a Cea Bermúdez, el 15 de enero de 1.834-, suponía una profundísima reforma de nuestra Administración. Era el fin del Antiguo Régimen y el tránsito del régimen consultivo antiguo al moderno"". Era además para Sánchez Bella una "consecuencia lógica de la aceptación por el Gobierno español del principio de separación de poderes y, concretamente, de la plena autonomía de los Tribunales y de la creciente personalidad de la Administración"".

Evidentemente, la supresión del sistema polisinodial que durante tantos siglos había conformado el organigrama de nuestra Administración Central, respondía a una nueva filosofía de gobierno. La separación de los poderes ejecutivo y judicial tomaba cuerpo ahora con esta reforma. De un lado estaría el ejecutivo, depositado en las figuras del Monarca y de las Secretarías de Despacho; y de otro el judicial, establecido sobre órganos genuinamente judiciales, como lo eran los tres Tribunales constituidos"". Este esquema de separación de poderes en órganos independientes es el que perdurará hasta nuestros días.

La reforma no responderá solamente a unas exigencias de eficacia administrativa. Con ella se buscó

"" SANCHEZ-BELLA, I., op. cit., pág. 673.

"" GARCIA MADARIA, J.M., "Estructura de la Administración Central (1.808-1.931)", págs. 95 y ss.; también CORDERO TORRES, J.M., "El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España", pág. 85.

"" A.G.S., Sección Consejo Real de España e Indias, legajo 2 bis; citado también por García Madaria, J.M., op. cit., págs. 95 y ss.

"" El Tribunal Supremo de España e Indias, el Tribunal de Guerra y Marina y el Tribunal de Hacienda, éste último suprimido más tarde, el 13 de septiembre de 1.835.

también un ahorro de gasto público, reduciendo el número de órganos y racionalizando sus funciones.

El Consejo de Castilla tuvo conocimiento inmediato del referido Decreto. El Secretario de Gracia y Justicia trasladó al Presidente del Consejo de Castilla el siguiente Decreto de la Reina Gobernadora****:

"Oído el dictamen del Consejo de Gobierno y del de Ministros, he venido en decretar lo siguiente, en nombre de mi muy cara y augusta hija:

Artículo 1: quedan suprimidos los actuales Consejos de Castilla y de Indias;

Artículo 2: en su lugar instituyo un Tribunal Supremo de España e Indias;

Artículo 3: el Tribunal Supremo de España e Indias tendrá por atribuciones: 1. Conocer de los recursos de nulidad de los procedimientos de los Tribunales Superiores en los casos y en la forma que establezcan las leyes; 2. Conocer de los recursos de injusticia notoria; 3. Conocer de los recursos llamados de Mil y Quinientas; 4. Conocer de los juicios sobre tanteo, incorporación y reversión a la Corona; 5. Juzgar a los magistrados de los Tribunales Superiores y a los empleados de elevada jerarquía, con arreglo a la ley de responsabilidad que se estableciere; 6. Conocer de los negocios contenciosos del Real Patronato; 7. Conocer de los recursos de fuerza de la Nunciatura Apostólica; 8. Conocer de los negocios judiciales en que actualmente entiende la Cámara como Tribunal Especial;

Artículo 4: El Tribunal Supremo de España e Indias se compondrá de un Presidente, quince Ministros y 3 Fiscales;

Artículo 5: Estos Ministros se distribuirán en 3 Salas, dos para los negocios de la Península e Islas Adyacentes y uno para los de las Provincias de Ultramar;

Artículo 6: La Sala de Indias queda habilitada para suplir a la de España en caso necesario;

Artículo 7: Mi Secretario de Despacho de Gracia y Justicia me propondrá un Reglamento para la Nueva Planta y organización de dicho Tribunal Supremo de España e Indias con arreglo a las bases precedentes.

Tendréislo entendido y dispondréis lo

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.960 núm. 2; también a DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", documento XXXV, Real Decreto suprimiendo definitivamente el Consejo Real de Castilla, Aranjuez, 1.834, págs. 169 y 170.

necesario a su cumplimiento"".

En la Real Orden por la que se comunicaba al Duque de Bailén este Real Decreto, el Secretario de Gracia y Justicia le informaba también que mientras se instalaba el Tribunal Supremo de España e Indias y la Sección del Consejo Real correspondiente a Gracia y Justicia, era voluntad de la Reina Gobernadora que el Presidente del suprimido Consejo de Castilla continuara ejerciendo sus funciones"".

El Consejo de Castilla tenía ya una cierta experiencia en decretos de suspensión. No en vano en el mismo reinado de Fernando VII había sido suprimido con anterioridad tres veces. En esta ocasión, sin embargo, debió ser muy distinto. La supresión era esperada y había sido acompañada en los últimos años de muchas medidas que lo anunciaban, aunque siempre debió suponer algún elemento de sorpresa por su rápida adopción. Por ello mismo el proceso que siguió al Decreto de 24 de marzo tuvo similitudes con lo actuado en momentos similares del pasado próximo: búsqueda de empleo por sus subalternos; reorganización de los expedientes y traslado de los necesarios a otros organismos; organización y custodia del archivo del Consejo y de sus Escribanías; y habilitación del edificio de la Casa de los Consejos para albergar a nuevas instituciones.

Muchos de los subalternos del Consejo de Castilla pasaron a servir en el Tribunal Supremo de España e Indias o en el Consejo Real de España e Indias. Por otro lado, como es sabido, hasta la instalación de ambas instituciones continuaron desempeñando su cometido en funciones dentro del suprimido Consejo de Castilla"":

"Excmo. Sr.: Es la voluntad de S.M. la Reina Gobernadora que mientras no se forme un reglamento que debe regir en este Supremo Tribunal y aprueba la nueva planta de dependientes del mismo, se administre la Justicia por sus tres Salas en la forma respectiva que lo hacían los extinguidos Consejos de Castilla e Indias, y con los mismos

"" El mismo día de la aprobación de este decreto se remitía a su vez al Consejo de Ministros el Estatuto Real, con el informe del Consejo de Gobierno para su aprobación. Sería sancionado por la Reina el 10 de abril del mismo año (CABRERA BOSCH, M. I., "Consejo Real de Castilla. Legislación y Revolución Liberal 1.808-1.834", pág. 140).

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.960 núm. 2.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.960 núm. 2.

dependientes que sirven en la actualidad..."

Los ministros del Consejo Real quedaron cesantes. Se les presevó todos sus honores y las dos terceras partes del sueldo que tenían como Consejeros, mientras no se les diese un nuevo empleo. En total quedaban cesantes 23 Consejeros"". El primero en quedar nuevamente empleado fue don José Hevia y Noriega, que por decreto de 1 de abril era nombrado primer Presidente del recién creado Tribunal Supremo de España e Indias"".

El 2 de abril de 1.834 se instalaba el Tribunal Supremo y ese mismo día aprobaba esta Real Orden y ordenaba que fuera comunicada a los dependientes de los suprimidos Consejos de Castilla e Indias. De esta manera, cada una de las Escribanías del Consejo fueron asignadas a una Sala concreta del Tribunal Supremo. Así, por ejemplo, los asuntos que se tramitaban en la Escribanía de Cámara de don Manuel Abad fueron asignados a la Sala primera del Tribunal Supremo. Y de esta manera, los subalternos de esta Escribanía pasaron a trabajar para la susodicha sala del Tribunal Supremo"".

El 9 de mayo de 1.834 se publicaba el Reglamento del Consejo Real de España e Indias y el 26 de fijaban las atribuciones del Supremo Tribunal de España e Indias. En la exposición de motivos de este último Decreto - publicada por Sánchez-Bella-, se justificaba nuevamente la reforma realizada:

"Concentrada en los Consejos y Cámaras de Castilla e Indias la acción gubernativa, económica y judicial de todos los dominios de estos reinos, eran tan numerosas y de índole tan distinta sus atribuciones, y tal el cúmulo de negocios pendientes de su conocimiento y decisión que al poner en ejecución mis Decretos de 24 de

"". Lista de Ministros cesantes: don Francisco Marín, don José Hevia, Arjona, don Vicente Borja, don José I. Llorens, don Domingo Barrafón, don Andrés Subira, don José Ayuso, don José Mier, don Juan Antonio Heredia, don Pedro Pérez Juana, don Francisco Redondo, don Ramón López Pelegrín, don Miguel Modet, don Dionisio Catalán, don Rafael Paz, don Esteban de Asís, don José Villanueva, don José Montemayor, don José Cabanilles, don José Martínez Areta, don Matías Herrero, don Teotimo Escudero (A.H.N., Consejos suprimidos, legajo 11.887 núm. 1).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 1.

"". A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.960 núm. 2.

marzo último, por los que tuve a bien suprimir dichos Cuerpos, creando en su lugar el Consejo Real de España e Indias y el Supremo Tribunal de España e Indias, para dar al gobierno de los pueblos y al ejercicio de la justicia la ordenada que tiempo ha reclamaban los adelantos en la ciencia de la Administración, han ocurrido dudas..."

Sabemos también que más adelante, el 27 de noviembre del año siguiente, 1.835, el Tribunal Supremo de España e Indias aprobó la medida provisional de asignar la Escribanía del difunto don Manuel Abad a don Manuel de Chasco. Esta medida fue consecuencia de la petición que hicieron a aquel Tribunal sus seis Escribanos de Cámara por el retraso que se traslucía en aquella Escribanía". Sabemos de otro lado que una parte de los pleitos pendientes en el Consejo y que correspondían al Tribunal Supremo de Justicia, fueron clasificados y ordenados y remitidos a aquel nuevo primer Tribunal de la Nación por el mencionado Escribano de Cámara del Consejo, don Manuel Chasco".

En cuanto a los papeles del Consejo, al suprimirse sus papeles tuvieron que repartirse en varios locales. Como veremos con detalle al estudiar el Archivo del Consejo, unos fueron a parar al Tribunal Supremo de Justicia; otros quedaron en el antiguo Palacio de los Consejos; otros, como los de la Casa de Alcaldes, se vendieron al peso; y otros se mandaron al archivo del Ministerio de Gracia y Justicia".

También se reorganizó el propio Archivo del Consejo. En 1.835 el Ministerio de Gracia y Justicia comunicaba a don Antonio López de Salazar, que fuera el

***. NIEVA, "Decretos", 19, Madrid, 1.835, recogido por Sánchez-Bálla, I., op. cit., págs. 677 y 678.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.960 núm. 6. Urrutia hizo entonces un inventario de pleitos pendientes, que resultaron ser 88.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.960 núm. 6, Orden del Supremo Tribunal de España e Indias a don Quintero de Urrutia como Oficial Mayor que fue de la Escribanía de Gobierno del Consejo para que entregase a don Manuel Chasco, Escribano de Cámara de dicho Tribunal, los pleitos que quedaban pendientes en aquella Escribanía. Hay noticias de remisiones de pleitos en las siguientes fechas: 30 de noviembre y 4 de diciembre de 1.835, y 20 de mayo y 2 de julio de 1.836.

***. Guía del Archivo Histórico Nacional, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, pág. 132.

Escribano de Cámara más antiguo del Consejo de Castilla, que quedaba nombrado por parte de dicho Ministerio para dirigir los trabajos de la comisión conferida por el Ministerio de lo Interior al Contador General de Propios relativa al inventario de los expedientes de la extinguida Escribanía de Gobierno del suprimido Consejo de Castilla. También le facultaba para que pudiera valerse de los empleados cesantes de la misma. El 18 de noviembre de 1.836 mandaba cesar esta comisión y nombraba para Archivero a don Santiago Cañizares"".

De los años siguientes y en lo correspondiente a los distintos empleados del Consejo de Castilla, podemos encontrar algunas referencias en los distintos apartados de la Estructura Orgánica del Consejo de Castilla, en este trabajo.

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte no sobrevivió mucho más al Consejo de Castilla. Por un Real Decreto de 1.835 también desaparecía aquella que fuera llamada Quinta Sala del Consejo, y sus funciones eran asumidas por la Audiencia de Madrid. Junto a esta medida vino una rectificación general del sistema de audiencias y chancillerías establecido desde antiguo.

De esta manera quedaba configurado el nuevo organigrama en la Administración Central española. El poder ejecutivo en manos de la Reina y de los Secretarios de Despacho, contaría con un nuevo órgano asesor, que era el Consejo Real. Este Consejo Real de España e Indias quedaba así como un órgano consultivo, sin atribuciones decisorias ejecutivas ni judiciales. Estaba estructurado en una Presidencia, una Secretaría General y siete secciones, correspondientes a los Ministerios de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina, Hacienda, Fomento, más una sección de Indias -cuyo Ministerio entonces no existía-. Este organismo dependía directamente del Consejo de Ministros.

Sin embargo, el Consejo Real de España e Indias no duró mucho. Por un decreto de 28 de septiembre de 1.836 era suprimido al restablecerse la Constitución de 1.812, y considerarse que era incompatible con esta Carta. De esta manera se reconocía el ejercicio del alto papel asesor al Consejo de Estado"".

Varias instituciones sucedieron en pocos años

"" A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo 17.704.

"" ESCUDERO, J.A., "Curso de Historia del Derecho", pág. 942.

a este Consejo Real de España e Indias -la más importante el Consejo Real, creado por ley de 6 de agosto de 1.845"" y que por decreto de 14 de julio de 1.858 pasó a denominarse Consejo de Estado-""", quien pasó a ocupar la sede material -el Palacio de los Uceda- que en su momento tuvieron el Consejo de Castilla y más tarde el Consejo Real de España e Indias y el Consejo Real. Por el contrario, el Tribunal Supremo se mantuvo invariable, aunque perdería más tarde el título "De España e Indias".

De todas aquellas instituciones dos actuales podrían ser consideradas como herederas del antiguo Consejo de Castilla. De un lado, el actual Tribunal Supremo. De otro, el también mencionado Consejo de Estado. El mismo Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de noviembre de 1.917 declaraba al Consejo de Estado como sucesor del Consejo Real de Castilla y de su Cámara"".

""". ALVAREZ PINEDO, F.J., "Guía del Consejo Real de España e Indias", págs 2 y ss. Perdía este Consejo Real parte de su titulación y ganaba competencias en asuntos contenciosos.

""". Artículo 1: "El Consejo Real se denominará en adelante Consejo de Estado."

""". CORDERO TORRES, J.M., "El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España", pág. 2.

III. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSEJO

III. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSEJO

El concepto 'naturaleza' implica el ser de una cosa en cuanto principio de operaciones. En este capítulo vamos a estudiar por tanto el ser del Consejo de Castilla, en cuanto institución que ejercía un vasto campo de competencias dentro de la Administración central de la Monarquía. No nos interesa aquí por tanto cuáles eran esas competencias -que perfilaremos en este capítulo y veremos con detalle en el capítulo siguiente-, sino las características de la institución que las sustentaba y ejercía.

En una consulta del Consejo Real de 28 de febrero de 1825^{***}, el mismo Consejo decía de sí mismo:

"Este Tribunal es el Supremo de toda la Nación, es el más antiguo, es verdaderamente el Consejo del Rey, el único centro en que se tratan y deciden las materias universales de Justicia, Gobierno, estado y Guerra. Es el alma del gobierno del Rey, fuente de sus resoluciones y el origen de la jurisdicción real ordinaria, de la que han dimanado y dimanar las demás jurisdicciones privilegiadas, incluso la que ejerce el Consejo de las Ordenes. Siempre se ha compuesto de prelados, ricos-hombres, caballeros y letrados, los más ilustres del

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.089, consulta del 28 de febrero de 1825.

Reino; siempre ha sido y es el último término a que éstos aspiran y como a tal han ascendido siempre y ascienden en el día los Ministros de los demás Consejos, por ser el Supremo de todos ellos, y el que supone más méritos y dignidad en sus ministros. Por esta razón todos han solicitado ansiosamente disfrutar de sus honores y antigüedad."

En primer lugar, el Consejo Real de Castilla era un Consejo del régimen polisinodial de la Monarquía hispánica. Era el Consejo más antiguo y en cierta manera el más estable de todos""', de los que podemos decir que fue madre y modelo de creación'''.

Tenía las características propias de un Consejo de la Monarquía''': la estructura semejante de un

'''. "En todos los momentos agitados por las innovaciones, el Consejo fue por esencia la institución permanente del Antiguo Régimen". No se inmutó ante los cambios de reyes o de dinastías (GIBERT, R., "El Antiguo Consejo Real de Castilla", pág. 24).

'''. Como parece más probable, el Consejo Real tuvo su origen en un decreto del Rey Juan I, en el año 1385. Más tarde serían creados otros Consejos hasta formar lo que conocemos como el Régimen de Consejos. El primero de todos fue por tanto este Supremo Consejo. El Consejo Real de Castilla tenía dos sobrenombres: Consejo Real, es decir, vinculado a la persona del Rey; y Consejo de Castilla, en cuanto que tuvo su origen en este Reino y sus competencias hasta el siglo XVIII estaban básicamente limitadas al territorio castellano. Como es sabido, desde la supresión del Consejo de Aragón por Felipe V por los Decretos de Nueva Planta, el Consejo de Castilla asumió las competencias de aquel Consejo en lo gubernativo y contencioso que correspondía a la Corona de Aragón.

'''. En muchos expedientes del Consejo Real correspondientes al reinado de Fernando VII, este Consejo se autocalificaba "el primero de la Nación", como Consejo del Rey por excelencia. Parece que este rango lo disputaba con el Consejo de Estado, el cual tenía preferencia sobre el Consejo de Castilla tanto en el protocolo de los actos públicos, como en la convalidación de juramentos. Ejemplos de todo ello tenemos los siguientes: del título de "Primer Consejo de la Nación", en A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6090, consulta del 27 de junio de 1825; un ejemplo de preferencia lo tenemos en A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.427 núm. 13, "Proclamación de S.M. la reina Doña Isabel II"; también en otro expediente del legajo 11.887, de la sección Consejos Suprimidos, un Consejero de Estado, recién nombrado Consejero de Castilla, se negó a volver a jurar, alegando haber

Presidente o Gobernador; un número de Consejeros; y un personal subalterno, entre los que se encontraban unos fiscales, unos escribanos, porteros, etc. Como los demás Consejos de la Monarquía, en tal papel era un órgano de gobierno. Si los Consejos nacieron con una función consultiva o de asesoramiento, muy unidos a la persona del monarca, el crecimiento de las potestades regias que se experimenta en la Edad Moderna hizo de ellos órganos burocráticos de gobierno con amplias facultades en lo gubernativo y más tarde en lo judicial"". De esta manera, el Consejo de Castilla llegó a convertirse, en expresión de Desdevises"", en 'el centro de la Administración'.

Hemos mencionado que uno de los apelativos del Consejo era la de Real. El Consejo de Castilla nació al lado del rey e inicialmente fue el Consejo por antonomasia. Posteriormente fueron apareciendo otros Consejos especializados territorialmente o funcionalmente, a medida que tenía lugar la extensión de la Monarquía. El Consejo Real quedó entonces como Supremo Consejo regio para los territorios de la Corona de Castilla. Órgano de confianza del monarca, "columna de estos reinos", como le llamó Carlos I, era según decían las crónicas, apoyo firme para el monarca en las resoluciones de gobierno"". Así vemos que

prestado ya juramento como miembro del Consejo de Estado.

"". "Los Reyes dividieron en un principio la carga pesada del gobierno público y la administración de justicia en los prelados y los grandes... Estos entonces componían el Consejo del Rey, el cual con la extensión de la Monarquía recibió aumentos en los negocios y en el número y calidad de sus vocales, a quienes se dispensaron las mayores honras y distinciones... Los monumentos de nuestra historia y legislación nos presentan en el Consejo un compañero de los Reyes para el despacho de los negocios más arduos de la Monarquía, pero cuerpo de vasallos obedientes, que ejerciendo las funciones augustas de un sacerdocio político, enseñaban con su ejemplo a la nación entera la sumisión al Monarca" (A.H.N., Estado, legajo 70-I, documento 173, "Memoria leída en la Junta Suprema de Valencia...", fols. 5, 6 y 10).

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "L'Espagne de l'Ancien Régime", op. cit., pág. 60.

"". "...ninguna Monarquía pudo existir sin Consejo o Senado, como un centro al cual los Sres. Reyes remitiesen los negocios generales para su consulta, y fuesen los de justicia por orden gradual de apelación o última sentencia..." (ESCOLANO DE ARRIETA, P. "Práctica del Consejo Real", pág. 1). "Los monumentos de nuestra historia y legislación nos presentan en el Consejo un compañero de los Reyes para el despacho de los negocios más arduos de la Monarquía; pero cuerpo de vasallos obedientes, que ejerciendo las funciones augustas de un sacerdocio político enseñaban con su ejemplo

esencialmente el Consejo Real nació para tareas consultivas y de gobierno por delegación del monarca"". Otras funciones se le sumarían más tarde, con un crecimiento paralelo al crecimiento de las mismas potestades regias"".

Como Consejo Real, este Supremo Tribunal obraba en representación del monarca y representaba por tanto a la suprema jurisdicción real. Esto quedaba reflejado en la propia terminología utilizada por el Consejo: "Real jurisdicción", "suprema jurisdicción perteneciente al rey", o en los mismos encabezamientos de bandos o disposiciones de gobierno"". El Consejo expresaba con orgullo su real condición y alardeaba de obrar en representación del rey"", con autoridad real delegada -cuasi-soberana-, y de

a la nación entera la sumisión al Monarca; y un cuerpo de consulta, es decir, Tribunal para aconsejar al rey lo que entendía convenir a su servicio, y al bien general del Estado: pero sin que sus dictámenes fuesen decisiones que ligasen al jefe supremo de la nación" ("Memoria leída en la Junta Suprema de Valencia por uno de sus vocales en defensa de la conducta del Consejo real en las actuales circunstancias", A.H.N., Estado, legajo 70, 1, documento 173, fol. 10; también aparece una copia manuscrita en A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.519 expte. núm. 2).

"". "El Consejo, Señor, funda sus consultas en hechos que aparecen justificados en los expedientes a los que se refiere, o en las órdenes que las motivan; en las leyes generales y en las razones de mejor servicio a V.M. y de conveniencia pública y bien general de todos los vasallos de V.M.; éste es su objeto, éstas sus atribuciones." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.084, consulta del 31 de agosto de 1818).

"". Por ejemplo, el Consejo asesoraba también al Monarca en las resoluciones judiciales que llegaban al Rey.

"". He aquí un encabezamiento de bando: "Manda el Rey y en su nombre el Supremo Consejo de Castilla y Alcaldes de su Casa y Corte..." Tomás y Valiente habla de una "soberbia institucional" en el Consejo, al considerarse este órgano "partícipe del poder del monarca absoluto" (Cfr. "El Gobierno de la Monarquía", pág. 139, citado por BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", pág. 174).

"". Señala R. Gibert, refiriéndose al Consejo en la Baja Edad Media, en el reinado de Alfonso XI, que "el poder de este Consejo era auténticamente Real: el reino debía prestarle pleito homenaje, servirle y obedecerle como a un Rey" (GIBERT, R., "El Antiguo Consejo Real de Castilla", pág. 12).

tener desde sus orígenes rango regio''''.

La jurisdicción emanada y derivada del rey era de alguna manera como una prolongación de éste: era por tanto jurisdicción del rey y el poder del Consejo era a su vez poder real'''''. Así lo manifestaba Luis de Salazar en un documento manuscrito relativo al Consejo:

"La suprema autoridad del Consejo es ordinaria y no pudiendo S.M. ejercer por sí, la comunica al Consejo, por lo cual, lo que éste determina, es determinado por el Rey, y así la jurisdicción del Consejo es como la del Rey, igualmente ordinaria, por ser ejecución de la misma jurisdicción del Rey que embarazado en otros negocios, resuelve las cosas pertenecientes a la soberanía por medio del Consejo...No es suprema, ni soberana la jurisdicción, sino delegada como ordinaria, reservada y dependiente como suprema..."''''.

Por el contrario, aunque el Consejo Real participaba de la soberanía regia, no era un órgano soberano de por sí. No tenía la representación nacional ni podía por sí mismo designar la Regencia ni suplantar el papel de la Nación reunida en Cortes, como se comprobó en los sucesos del otoño de 1808. Como en aquel momento se dijo en una memoria leída en la Junta Suprema de Valencia, "sus funciones eran consultivas y no ejecutivas, y carecía de fuerza para hacer cumplir las leyes a los Reyes, si se separaban de ellas."'''' Más adelante aquel informe añadía: "La facultad del Rey para seguir o no los dictámenes de su Consejo es tan absoluta, como que éste carece de fuerza para hacerle cumplir las leyes constitucionales si se separa de

'''''. Así, por ejemplo, señala también R. Gibert que cuando Carlos IV llegó a ordenar al Consejo que todas las sentencias dadas por la Sala de Mil y Quinientas no se ejecutaran sin previa aprobación del Secretario de Estado don Manuel Godoy, el Consejo protestó señalando que "el Consejo... es un soberano por su constitución nacional y como tal no deben sus Decretos ser juzgados por un particular..." (GIBERT, R., "El Antiguo Consejo Real de Castilla", págs. 28 a 31).

'''''. B.N., Mss. 7.102, pág. 37 bis.

'''''. B.N., Mss. 7.102, pág. 37 bis.

'''''. A.H.N., Consejos, Estado, legajo 70, I, documento 173.

ellas...".

La misma sede material del Consejo Real mostraba su especial vinculación al monarca. Originariamente tenía su establecimiento en el mismo Palacio Real, hasta que el Rey Felipe V, por Real decreto de 20 de enero de 1717 ordenó la reunión de los Consejos en una sola casa o palacio inmediato al del rey.

El Consejo se preciaba también de ser el primer defensor de los derechos del Trono y de la Monarquía, "el brazo real, el descanso del Rey y el alma del gobierno, como le llamaron los Reyes". Por ello mismo fue tenido como pilar del sistema de gobierno absolutista.

Y el Consejo Real tenía también el sobrenombre de Consejo de Castilla o Consejo Real de Castilla. En épocas esta denominación era útil para distinguirlo del Consejo Real de Aragón o el Consejo Real de Indias, aunque en la práctica el Consejo Real por antonomasia era el de Castilla. Hubo periodos en que se prefirió la denominación de Consejo de Castilla -los primeros años del reinado de Fernando VII, por ejemplo-, aunque en el resto del reinado se utilizó más el nombre de Consejo Real.

El Consejo de Castilla era por otro lado uno de los llamados Consejos Supremos, el más importante por

14. A.H.N., Estado, legajo 70-I, documento 173, fol.

"Por estas razones está mandado que la casa y cámara, donde el Consejo hubiere de estar, sea siempre en el Palacio en que reside S.M., y quando no pueda tener lugar allí, que los aposentadores den una nueva posada para ello, lo más cerca que se hallaren de Palacio..." (ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real...", pág. 8). Cfr. ESTRUCTURA ORGANICA, Palacio de los Consejos.

A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.084, consulta del 31 de agosto de 1818.

Por ello mismo este Consejo fue objeto directo de enconadas críticas por parte de los liberales y reformadores.

En la propia documentación del Consejo con frecuencia se le denominaba "el Supremo Tribunal", el "Supremo Tribunal de la Nación", "el primer Tribunal de la Nación", "el Supremo Consejo"...

F. BARRIOS define a los Consejos como "organismos pluripersonales de carácter consultivo, que por expresa delegación del monarca están investidos de una serie de

su antigüedad bajomedieval por el destacado relieve que su ámbito territorial ocupaba en el conjunto de la Monarquía hispana; y por la misma trascendencia de sus cometidos en tareas consultivas, de gobierno, administrativas, judiciales e incluso legislativas"". El Consejo era elemento de conexión entre el Monarca y el pueblo, entre las distintas autoridades territoriales y el poder central. Era así una pieza clave dentro de la complicada máquina de la Monarquía. Su presidente era el magistrado de más alta dignidad de la Monarquía después del rey y en convocatoria de Cortes le correspondía presidirlas. Llegar a consejero de Castilla fue habitualmente la más alta distinción de una carrera administrativa para cualquier oficial de la Monarquía.

El Consejo de Castilla era por tanto el verdadero corazón de la Monarquía, en expresión de Desdévaises"". Según este estudioso del Consejo de Castilla, este Supremo Tribunal tenía "fisonomía característica y eminentemente nacional", que quedaba reflejada en las siguientes notas: etiqueta rigurosa de sus miembros, inmutable regularidad de sus ocupaciones"", minuciosidad del preocedimiento, gravedad de la discusión,

competencias administrativas, actuando también, algunos de ellos, como órganos jurisdiccionales." (BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", pág. 45).

"". Disputaba el puesto de primer Consejo de la Nación con el Consejo de Estado. En muchas ocasiones en la documentación del Consejo de Castilla bajo Fernando VII, este Consejo se autotitula "el primero de la Nación", lo que no se ajustaba a la realidad propiamente, según los momentos. He aquí el texto del Preámbulo del Real Decreto de 14 de diciembre de 1798, en el que el Rey veía al Consejo de Estado como "el de mayor dignidad que hay en la Corona, ya por el alto carácter de las personas que lo componen, empezando por la mía como su Presidente, ya por la importancia y sublimidad de las materias que en él se tratan, y con cuyas plazas efectivas y honorarias premio a los vasallos que más se han distinguido en las carreras política, militar y de las letras, y algunas veces a los Ministros de otros Consejos." (recogido por ESCUDERO, J.A., en "Notas sobre el Consejo de Estado en los siglos XVIII y XIX", op. cit., pág. 614). O este texto de un Real Decreto de Fernando VII, de 20 de agosto de 1815: "ningún Consejero de Estado pueda concurrir a Consejo, corporación o junta alguna que no preceda a todos los individuos que lo compongan..." (ESCUDERO, J.A., op. cit., pág. 614).

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 68.

"". "Estaban hechos para ejecutar, con una regularidad casi automática, un cierto número de movimientos precisos y conocidos" (DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1808", pág. 78).

lentitud de las decisiones, simplicidad aparente de su organización, prodigiosa complejidad de los servicios, el pequeño número de consejeros que había en el Consejo y la multitud de subalternos que tenía. A estas notas podemos añadir otras muy características, como la de ser un cuerpo colegiado con un fuerte corporativismo""; la de estar compuesto mayoritariamente por letrados, que llegaban al Consejo tras una larga carrera administrativa; y la elevada edad de sus miembros, mayoritariamente ancianos.

Pero quizás de todas estas notas del Consejo, la que más llama la atención es la gran diversidad de competencias que detentaba este Supremo Consejo, que gozaba de 'la suprema inmediata jurisdicción de todo cuanto toca a justicia y a gobierno', en expresión del Conde-Duque de Olivares"". Apunta también F. Barrios el hecho de que este organismo gozase de forma indiferenciada de competencias gubernativas y contenciosas, que podían ser ejercidas en una misma Sala, aunque teóricamente había Salas de Gobierno y Salas de Justicia.

Sin embargo, en el reinado de Fernando VII los avatares por los que pasó el Consejo Real fueron mermando también buena parte de su prestigio y de sus competencias, como se ha visto en otros capítulos de este trabajo. Así lo indicaba también la Reina María Cristina en un decreto promulgado en 1832 durante la convalecencia del Rey"":

"Deseando yo que el Consejo de Castilla, célebre otro tiempo en los fautos de la Magistratura Europea, por su circunspección, rectitud y sabiduría, recobre todo su antiguo lustre y esplendor, y sea como en épocas de gloriosa memoria baluarte del Trono Español y apoyo firme del Estado..."

""... "Eran piezas, ruedas de la gran máquina administrativa de la que estaban orgullosos de ser los órganos y los resortes" (DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1808", pág. 78).

""... En el "Gran Memorial" de 1624, citado por BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", pág. 169.

""... A.H.N., Consejos, Libro de Plazas núm. 741.

IV. COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE CASTILLA

IV. COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE CASTILLA

1. Introducción

Decía el Conde Duque de Olivares que al Consejo Real de Castilla le correspondía "la suprema inmediata jurisdicción de todo cuanto toca a justicia y gobierno"****. Esta nota se mantendría a lo largo de los varios siglos de existencia del Supremo Tribunal. Como señala Feliciano Barrios, el Consejo de Castilla poseía de forma indiferenciada competencias gubernativas y contenciosas, que quedaban distribuidas y repartidas entre las distintas Salas del Consejo.

Estas Salas eran básicamente -salvo alteraciones temporales de este esquema- la primera de Gobierno, la segunda de Gobierno, la Sala de Mil y Quinientas, la de Justicia y la de Provincia. Estas tres últimas estuvieron en varios periodos refundidas en una o en dos. Finalmente existía también la llamada Sala de Alcaldes de Casa y Corte, considerada auténtica Sala del Consejo, aunque con ciertas peculiaridades que la asemejaban a una institución autónoma dependiente del Consejo de Castilla. La reunión de todas las Salas en la primera de Gobierno -salvo la Sala de Alcaldes- daba lugar a lo que se conocía como Consejo pleno.

****. Cfr. BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", op. cit., pág. 169.

A la hora de estudiar las competencias del Consejo vamos a seguir un doble esquema: de un lado, una distribución material de competencias: consultivas, gubernativas, de colaboración en lo legislativo y judiciales; de otro, la asignación de competencias por Salas. Lo primero que deducimos de este planteamiento de la cuestión es que las competencias asignadas a cada Sala podían ser de muy diverso género, de tal manera que una Sala de Gobierno podía tener a la vez competencias gubernativas, consultivas y judiciales.

2. Competencias del Consejo

1) Distribución material de competencias

a) El Consejo, órgano consultivo del Monarca

El Consejo de Castilla era en primer lugar un consejo de consulta del Monarca. Su primera misión era asesorar al Rey siempre que éste le pedía su parecer sobre un asunto. Su prestigio y la experiencia de los siglos de funcionamiento conferían a sus consultas un enorme peso e influencia en el ánimo real. La mayoría de sus consultas eran llana y simplemente aceptadas por el Rey.

Sin embargo, el Consejo no siempre tenía que consultar al Monarca en todos los asuntos. Por el contrario, salvo en unos específicos delimitados por la ley, tenía capacidad decisoria y no era precisa la consulta con el rey. Por otro lado, el considerable número de expedientes que el Consejo debía tramitar impedía que buena parte de ellos fueran sometidos a la consulta con el Monarca. Y todo ello sin contar las resoluciones judiciales. Por todo ello, se puede afirmar que el Consejo de Castilla tenía verdaderamente capacidad decisoria de por sí. Y estamos de acuerdo con S. de Dios que la jurisdicción del Consejo no era delegada de la jurisdicción real, en cuanto que no era ni excepcional ni transitoria. Era por tanto una

jurisdicción derivada de la del Rey, como brazo real o prolongación de la jurisdicción del Monarca

Ello también tenía sus inconvenientes. Al estar formado este cuerpo mayoritariamente por juristas, carecían habitualmente de otros conocimientos que los jurídicos. Sus decisiones estaban basadas con frecuencia en el sentido común, y como muchas veces se debían pronunciar sobre asuntos de que no trataba el Derecho, debían conformarse con relativa frecuencia con el dictamen emitido por sus subalternos"".

X El Monarca consultaba al Consejo Real todas las cuestiones espinosas. El Consejo podía igualmente motu proprio enviar consultas directamente al Rey sobre asuntos que considerase de interés, bien en las consultas de los viernes, o por la vía reservada. Igualmente podía el Consejo expresar su opinión con respecto a los decretos y órdenes aprobados por las distintas autoridades del Estado.

Sabemos por otro lado que en algunos supuestos era preceptiva la consulta al Rey. Evidentemente, siempre que el Rey reclamaba el conocimiento y asesoramiento en cualquier asunto de gobierno y de justicia; en los supuestos que las propias ordenanzas internas del Consejo estipulaban como obligada esta consulta""; y siempre que

"" Estas y otras críticas fueron recogidas por Javier de Burgos en su conocido informe del año 1826, dirigida al Monarca desde París (vid. SANCHEZ-BELLA, I., "La Reforma de la Administración Central en 1834", op. cit., pág. 661).

"" Por ejemplo, en la provisión de muchos cargos públicos, como eran los mismos Consejeros de Castilla o los Alcaldes de Casa y Corte; o el reparto de Consejeros en Salas para el año siguiente. A. Sánchez Santiago en la obra "Idea elemental de los tribunales de la Corte en su actual estado, y última planta", tomo II, obra publicada en 1787, señalaba los siguientes negocios consultivos: "1. Las facultades para pedir limosnas en estos Reynos y sus prorrogaciones, a excepción de las particulares que piden personas extranjeras; las venias de menores de 25 años para regir y administrar sus bienes; las facultades para repartimientos en los pueblos al pago de salarios de médicos, cirujanos, coste de pleitos del común y otros fines; en las que se pide la vista de aquellos, con Ministros de dos o más Salas; pero no las de una Sala, y el Presidente de la Chancillería o Regente de la Audiencia en que perdiera el pleito. 2. Las residencias de corregidores, alcaldes mayores, realengos; y las facultades para cortas y entresacas de montes; para imponer censos sobre propios y arbitrios de los pueblos; tanteos de jurisdicción de oficios; consumo de ellos y otros asuntos; plantío de viñas en tierras de labor o pasto; acotamientos de términos y sus prórrogas; gastos de canonizaciones de santos; ventas de jurisdicciones, dehesas, términos; y demás efectos de

en las deliberaciones del Consejo no se alcanzasen los dos tercios de los votos en una votación sobre un asunto. Fuera de estos casos quedaba un amplio campo de posibilidades de consulta al Monarca sobre cualquier género de asuntos"".

La generalidad de esta competencia -podía consultar al Monarca sobre cualquier tema- era un elemento más del vasto poder e influencia del Consejo"". De este Supremo Tribunal decía Mesonero Romanos que "no había para él asunto demasiado importante o demasiado pequeño"". Esta amplitud de materia objeto de conocimiento facilitaba la extensión de la autoridad regia a todas las facetas de la sociedad y era un instrumento regio para el gobierno absoluto. Máquina perfecta, a través de este cauce controlaba la administración de justicia, la economía, la administración territorial, las autoridades eclesiásticas, los pueblos, etc. El Consejo de Castilla era por tanto una típica institución del Antiguo Régimen"".

propios para redimir censos y otros fines. 3. Facultades para arbitrar sobre abastos de todas especies; romper y sembrar tierras que antes fueron de pasto y sus prorrogaciones; imponer arbitrios para fábricas y reedificaciones de iglesias, conventos, cuarteles, casas de ayuntamiento, fábrica de molinos de agua y viento, ferrerías, ventas y edificios públicos. 4. Facultades para imponer derechos sobre mercaderías y otros géneros; fábricas de puentes, calzadas, casas de niños expósitos, su manutención y vestuario; confirmaciones de ordenanzas que se hacen dentro de la Corte; las sentencias sobre pleitos de incorporación o reversión a la Corona, de cualquier estado, villa o lugar, antes de publicarse en el Consejo..." (SANCHEZ SANTIAGO, A., "Idea elemental...", tomo II, págs. 11 a 14).

"". "El Consejo, Señor, funda sus consultas en hechos que aparecen justificados en los expedientes a los que se refiere, o en las órdenes que las motivan; en las leyes generales y en las razones de mejor servicio a V.M. y de conveniencia pública y bien general de todos los vasallos de V.M.: éste es su objeto, éstas sus atribuciones." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.084, consulta del 31 de agosto de 1818).

"". Las consultas con el Rey podían referirse a toda clase de negocios de cualquier competencia, aunque el asesoramiento político general fuera en principio competencia del Consejo de Estado (BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", op. cit., págs. 62 y 63).

"". Citado por CORDERO TORRES, J., "El Consejo de Estado", pág. 62.

"". Con cierto gracejo comentaba Mesonero Romanos su omnipotencia y omnipresencia -"omnipotentes e inevitables, refiriéndose al Consejo, la Cámara de Castilla y la Sala de

b) El Consejo como órgano supremo de gobierno

Consecuencia inmediata de la originaria función consultiva del Consejo de Castilla fue la asunción de funciones de gobierno.

De esta manera fue adquiriendo el Consejo de Castilla un cuerpo de competencias gubernativas, que fueron en palabras del propio Tribunal, "su principal dotación... El Consejo de Castilla no se estableció para votar pleitos sino para el gobierno del Reino"^{***}. También la instrucción de Felipe II a su Presidente don Diego de Cavarrubias apuntaba esta idea: "el oficio del Consejo Real es tener cuidado del gobierno del Reino y los pleitos son accesorios al Consejo y no su propio objeto"^{***}.

Alcaldes"- en todos los actos de la vida pública y privada: "desde la sucesión al trono hasta el ejercicio de la caza y de la pesca con hurones; desde los bandos de buen gobierno para el orden político de la población hasta la tasa del pan y del tocino; desde el pase de las bulas pontificias hasta la censura de una novela o de un torneo de poesías; desde las causas de alta traición y lesa majestad, hasta los matrimonios contra la autoridad paterna y amancebamientos privados; desde los pleitos de tenuta, hasta los amparos y moratorias; desde la provisión o consulta para las altas dignidades de la Iglesia y de la Magistratura, hasta el examen de escribanos y alguaciles; desde la pragmática-sanción y leyes constitutivas del Reino hasta la presidencia de teatros y diversiones; desde la decisión de los litigios más graves, hasta el permiso para una feria o para una corrida de toros por Cédula Real..." (MESONERO ROMANOS, R. "El Antiguo Madrid", pág. 66).

^{***}. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6076, consulta del 5 de enero de 1816.

^{***}. Seguía añadiendo el Rey Prudente: "miedo tengo en que se ocupan más de lo accesorio que de lo principal, y entiendo que en lo principal del gobierno se ha de tener más cuidado que hasta aquí, y en los pleitos que es lo menos se podrá tomar acuerdo para que se tome en ellos el tiempo que

Ya hemos visto que las funciones gubernativas del Consejo eran muy amplias y se extendían a todos los sectores de la vida española.

El Consejo recibía todas las reclamaciones, consultas, súplicas y peticiones que eran enviados al Rey por los ciudadanos. Esta misión del Consejo es importante, en cuanto lo convertía en intermediario necesario entre el Rey y su pueblo, entre los súbditos y el Rey^{***}. Era el más directo y más inmediato de los poderes subordinados al Rey y representaba el primer grado de la autoridad real delegada. El que el Consejo fuera intermediario entre el pueblo y su soberano hacía de él un órgano muy popular y a la vez muy cercano al sentir de la calle. El Consejo de Castilla tenía así un cierto carácter de institución protectora de los fueros del Reino y de los derechos de los vasallos, función que era inherente al Monarca, pero que la ejercía en su nombre el Consejo Real: "Los vasallos le han reconocido como su inmediato tutor y protector después del soberano" (Escolano de Arrieta)^{***}.

El Consejo de Castilla era igualmente intermediario entre el Monarca y las autoridades provinciales y locales^{***}. Recibía sus quejas y peticiones y les remitía los escritos y respuestas del soberano. Igualmente transmitía órdenes directas del gobierno central a las demás autoridades del Estado y era el encargado de publicar y circular todas las leyes, órdenes y decretos^{***}. Organismo transmisor de la voluntad soberana, su colaboración era necesaria para publicar una disposición de gobierno en todo el Reino^{***}.

Esta amplia potestad gubernativa del Consejo se extendía también al nombramiento de oficiales y empleados

es posible y no más."

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1808", pág. (ficha 5112).

^{***}. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real...", citado por GIBERT, R., "El Antiguo Consejo Real de Castilla", pág. 28.

^{***}. Cada Consejero era responsable de una circunscripción.

^{***}. La fórmula era habitual: "Publicado en el Consejo pleno, ha acordado se guarde y cumpla la Real Orden que va inserta, y que todo se imprima, publique y circule en la forma acostumbrada."

^{***}. Así lo entendió Murat y el mismo Napoleón, cuando intentaron atraerse la voluntad y la colaboración del Supremo Tribunal.

públicos de la Monarquía. Designaba y proponía nombres de los corregidores"" y de otros muchos empleados públicos, como jueces, alcaldes, escribanos y alguaciles""; aprobaba las ordenanzas municipales"", las de los oficios y gremios; daba su visto bueno a los gastos extraordinarios de municipios, a los presupuestos para obras de calzadas y puentes, y para la creación de cementerios"".

Era por tanto misión suya el gobierno de los pueblos y la supervisión, vigilancia y control de las autoridades provinciales y municipales del Reino. Ordenaba igualmente las visitas oportunas y designaba los jueces visitadores; confirmaba las sentencias de los jueces visitadores, o las reformaba o casaba; mandaba también ejecutar las residencias, para las que nombraba los oportunos jueces, recibía los juicios ya instruidos y examinaba sus sentencias"". Le correspondía también la convocatoria de Cortes, verificaba los poderes de los diputados y les concedía o denegaba permiso para ausentarse de la Corte"".

Ejercía también el Consejo la superintendencia de la instrucción pública del Reino: nombraba maestros, redactaba planes de enseñanza, confería licencia de impresión de libros y ejercía la censura de

""", Según Artola, contaba con esta competencia desde tiempos de los Austrias (ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 125).

""". Por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.761 núm. 18 se recogen juramentos de procuradores que éstos prestaban en el Consejo; legajo 3.178 núm. 3, sobre el nombramiento del cordeor de mar y tierra de Aguilas.

""", A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.049 núm. 2: "Ordenanzas municipales sancionadas y mandadas cumplir por el Ayuntamiento sin haber pedido aprobación del Consejo".

""", Señalaba Cordero Torres cómo el Consejo de Castilla contribuyó también tenazmente a la creación de una doctrina administrativa: introdujo la revocación contenciosa de los actos de los corregidores, la rendición de cuentas, la revisión de inmunidades o fueros fiscales (CORDERO TORRES, J.M., "El Consejo de Estado", págs. 62 a 65).

""", Vid. SANCHEZ-ARCILLA, J., "La Administración de Justicia real en León y Castilla (1252-1504)", op. cit., págs. 687 a 692.

""", A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.381 núm. 5. En este expediente se recuerda a las ciudades la prohibición de nombrar diputados a la Corte sin licencia del Consejo.

imprentas, incluso llevaba a cabo la persecución de los delitos de imprenta"".

Hemos mencionado el papel rector de los pueblos que tenía el Consejo. Como administrador general de los bienes de propios y arbitrios"", contaba también con una destacada potestad económica: le estaba encomendado el gobierno económico del Reino"", lo que le daba autoridad para aprobar o no cualquier clase de obra pública en esos Reinos"".

"". Por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.323 núm. 37, se recoge el nombramiento de Juez de Imprentas en la persona del Consejero de Castilla don Francisco Marín; y el legajo 3.126 núm. 41 contiene el expediente del restablecimiento del Juzgado de Imprentas. Se refieren también a esta competencia del Consejo los legajos 3.954 a 3.959 de la Sala de Gobierno; el legajo 3.128 núm. 13 se refiere a un Real Decreto del Consejo por el que se mandaba comunicar al Juez de Imprentas que fueran recogidos los ejemplares del Diario de 11 de agosto de 1815.

"". "Los ramos de propios y arbitrios corresponden a la administración civil de los pueblos. El gobierno económico y gubernativo de los pueblos toca al Consejo, según las leyes, y en los casos que requiere la noticia de S.M., consulta este Supremo Tribunal por el Ministerio de Gracia y Justicia, y por éste se le comunican las Reales resoluciones. Por la conexión tan íntima que tiene este gobierno económico de los pueblos con el de los ramos de propios y arbitrios, se encargó al Consejo la dirección de éstos, y en unos y otros asuntos se versan negocios puramente de gracia y justicia, y de ningún modo de Real Hacienda o Rentas del Reino. El Consejo tuvo la gestión de los propios y arbitrios desde el año 1760 (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 4; también lo dice ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 125).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 8, nombramiento de Juez Conservador de Montes. Otro ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.979 núm. 15, expediente formado a consecuencia del decreto del Consejo para proporcionar trabajo a los jornaleros en obras públicas o particulares.

"". "Erigióse también en el ramo económico y manejó a su arbitrio los intereses de todos los pueblos, sobre no reconocer en la potestad judicial límites ni traba" (...). "Así acumulando en sí tan vasto poder, se remontaba a la cima de la autoridad soberana; y descendiendo después a entrometerse en la parte más ínfima, si no menos importante del gobierno, no podía construirse una fuente ni repararse un camino en la más retirada aldea o apartada comarca sin que antes hubiese dado su consentimiento" (CONDE DE TORENO, op.

El Consejo de Castilla centralizaba todos los problemas de gobierno del Reino: el fomento de la economía^{***}, de la cultura^{***} y las universidades^{***}; el orden público^{***}, ramo en el que ejercía funciones de un

cit., tomo II, págs. 86 y 87). Por otro lado, el propio Consejo llegó a explicar en diversos expedientes la necesidad que tenía de controlar económicamente a los pueblos y tener bajo su mano los medios indispensables para poder ejercer con éxito las obligaciones del gobierno interior del Reino. He aquí un texto fechado el 7 de agosto de 1814: "Los pueblos afligidos por el hambre, epidemias, langosta, inundaciones, apedreos y otras calamidades públicas acuden a buscar un alivio al Consejo: le manifiestan las necesidades en que se hallan de obras públicas, casas de ayuntamiento y misericordia, hospitales, iglesias, puentes, calzadas, cárceles y otras oficinas públicas, y en todos estos casos no podría el Consejo proveer a tales gastos si no le fuera dado tener un conocimiento exacto de los propios y arbitrios, y de las existencias y sobrantes en cada pueblo para socorrerlos con proporción a sus facultades. esto mismo se verificaría en otros varios ramos no menos precisos como son los de asignar salarios a las Justicias, a sus ministros, a los médicos, cirujanos, regidores, maestros que se ocupan de la enseñanza pública y otras personas que sirven al común y se emplean en la expedición de los negocios y defensa de sus derechos; concesión, prórroga y extinción de arbitrios, y todo lo demás que tiene una íntima conexión con el gobierno de los propios..." (A.H.N., Consejos suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 4). Por todo ello y como ha señalado muy acertadamente M. Artola, "la privación de las funciones gubernativas suponía para los Consejos un duro golpe" (ARTOLA, M., "Orígenes de la España Contemporánea", tomo I, págs. 426 y 427).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.983 núm. 4, "Sobre competencias del Consejo sobre caminos y puentes y sus modales al pedir informes a la Dirección General de Correos".

****. El legajo 3.148 contiene varios expedientes sobre el Teatro del Príncipe de Madrid; el legajo 3.132 núm. 1 trata sobre la formación de un nuevo plan del Diario de Madrid, publicado el 9 de mayo de 1808; o el legajo 4.186 incluye un memorial del Presidente del Consejo sobre un insulto al músico Carlos Spontoni en el Teatro del Príncipe.

****. Entre las competencias del Consejo se encontraba la designación de cátedras. Un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.082, consulta del 13 de marzo de 1818.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.590 núm. 4, sobre reintegrar las rondas en la Corte al sistema ordinario; o el legajo 3.106 núm. 8 en el que las autoridades



Ministerio del Interior; en la administración de las bulas eclesiásticas y en general en amplios campos relacionados con la Iglesia y obras pías""; en los abastos públicos, comercio, agricultura, ganadería, pastoreo, repoblación, rotulaciones, pósitos, caminos, minas, etc.""

Todas estas competencias se desempeñaban por la Sala de Gobierno. En realidad, el ejercicio de tan vasto campo de funciones requerían una excelente coordinación y distribución de competencias: en primer lugar, éstas se encontraban distribuidas por ramos. A cada Sala competían una serie de ramos y las materias gubernativas estaban especialmente encomendadas a las dos Salas de Gobierno, aunque en casos de agobio podían traspasarse también a alguna de las de Justicia. Por otro lado, estaba también la asignación de materias a los Fiscales y a sus Agentes, siguiendo criterios territoriales principalmente, y después funcionales; la distribución entre los Relatores, entre los Escribanos, etc.

Administrativamente también era misión del Consejo Real la interpretación de las leyes mediante los correspondientes autos acordados del Consejo. Y le competía una serie de funciones de confianza regia, como recibir el testamento del Rey y remitirlo a sucesor, tras la muerte del soberano"".

En definitiva, era misión del Consejo Real en el ejercicio y defensa de la potestad real: "la guarda y

de Laredo (Santander) solicitaban el apoyo del Consejo para ser respetados por la población.

"". Entre otros cometidos, defendía los derechos reales frente a la Iglesia, daba su pase a bulas y breves apostólicos, intervenía en las querellas entre eclesiásticos, protegía monasterios y hospitales, administraba bienes vacantes y los expolios de la Iglesia; promovía la creación de seminarios y en general defendía la moralidad pública y mandaba hacer rogativas por diversos motivos de interés general. Ejemplos de expedientes hay muchos: A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.816 núm. 18, "derecho de apelación directa en las causas de fe"

"". "Nuestras leyes han puesto al cuidado de los pueblos su gobierno económico y de policía, bajo la inmediata inspección del Consejo de Castilla" (A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.001 núm. 29); o el legajo 3.235 núm. 1, en el que se estudia el Plan General de Posadas.

"". Este cometido correspondía al Presidente o Gobernador de Castilla.

conservación de las leyes del Reino"****. Debía tener cuidado del gobierno del Reino y procurar que las autoridades y todos cumpliesen las leyes y órdenes. Como señalaba el propio Consejo, aquel Supremo Tribunal velaba "incansablemente por el gobierno interior del Reino y por mantener la paz y la justicia de sus pueblos"****. "Tenía autoridad para corregir lo que perjudicaba al interés general y para obtener los máximos beneficios para el Trono"****.

Las inmensas potestades gubernativas del Consejo de Castilla no fueron sin embargo siempre las mismas. Parece que eran tan genéricas y universales como la misma autoridad real al comienzo del reinado de Carlos I. Más adelante, con la creación de nuevos Consejos y después con las Secretarías de Despacho, se fue mermando su campo de competencias****, que pese a todo era todavía enorme en el reinado de Fernando VII****. Y por otro lado, la amplitud de competencias que el Consejo tenía en lo gubernativo era un obstáculo evidente a la propia eficacia de la institución. Javier de Burgos criticaba en 1826 la lentitud de decisión

****. A.H.N., Estado, legajo I-E, documento 173, "Memoria leída en la Junta Suprema de Valencia...", fols. 11 y 12.

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6079, consulta del 24 de diciembre de 1816.

****. En su famosa Exposición del año 1826, escrita en París y remitida al rey, Javier de Burgos proponía una serie de reformas para la restauración de la Monarquía: entre ellas, "separar de las atribuciones del Consejo de Castilla la administración superior del Estado y confiarla a un Ministerio especial". De Burgos se refería a la constitución de un Ministerio del Interior, como ya lo había habido anteriormente bajo José I (SUAREZ, F., "La creación del Ministerio del Interior en España...", págs. 5 a 19).

****. El propio Godoy en sus Memorias acusaba a Floridablanca de haber anulado el poder del Consejo en favor del despotismo ministerial. Por otro lado, J.A. Escudero señala a su vez cómo "se aprecia al término del siglo XVIII y en los inicios del XIX un postrer intento de rehabilitar a los Consejos" (ESCUDERO, J.A., "Curso de Historia del Derecho", pág. 172).

****. Llega a afirmar Martínez de Velasco que por la importancia que llegaron a alcanzar las Secretarías de Despacho en los reinados de Carlos III y Carlos IV, su labor se redujo a transmitir los decretos y órdenes a toda la Nación a través de los Capitanes Generales y de las Audiencias Territoriales. Era por tanto "un órgano político-administrativo". (MARTÍNEZ DE VELASCO, A., "La Formación de la Junta Central", págs. 40 y 41).

del Supremo Tribunal, "que no puede velar sobre necesidades que con mucha frecuencia exigen urgente remedio"....

El Consejo Real de Castilla era por tanto en lo gubernativo un supremo órgano de gobierno de la Nación, con amplísimas potestades, representante del ejercicio la autoridad regia y supremo tribunal administrativo del Reino.

c) Colaboración del Consejo en tareas legislativas

Ya hemos mencionado que correspondía al Consejo Real la publicación y circulación en el Reino de todas las leyes, decretos, instrucciones, Reales Ordenes, bandos y otras disposiciones de gobierno.

También aclaraba e interpretaba las leyes vigentes, mediante sus autos acordados, previa consulta al Rey.... El Consejo dictaba autos y autos acordados que, si teóricamente no eran leyes, en la práctica tenían una enorme autoridad por provenir de este Supremo Tribunal y por el respaldo real que implicaban. También sus consultas al Monarca tenían el enorme respaldo de la autoridad real....

.... "Limitado por su constitución a decidir los negocios de gobierno de que por su complicación e importancia debe dársele cuenta", al ser éstos muy pocos, "la generalidad de los intereses públicos queda abandonada a sí misma, sin que nadie los promueva o proteja". También criticaba la falta de un código administrativo, lo que le hacía irresponsable por el daño que pudiera causar una providencia poco acertada. El hecho de que estuviera encargado de intereses por los que no podía velar, hacía según Burgos que muchos sectores del país se encontrasen en un estado de abandono" (SANCHEZ-BELLA, I., "La Reforma de la Administración Central en 1834", op. cit., pág. 661 y ss., Informe de Javier de Burgos de 1826).

.... Incluso Artola habla de que los Secretarios de Estado y los Fiscales del Consejo eran los que asumían la iniciativa legal (ARTOLA, M., op. cit., pág. 125).

.... Señala S. de Dios lo siguiente: "la jurisdicción del Consejo Real es jurisdicción del rey; el poder del Consejo es poder real, si bien el Consejo, ciertamente, no

El Consejo participaba en el engranaje de la elaboración de las leyes. El Consejo tomaba parte en la elaboración de los borradores de muchas disposiciones de gobierno, y a través de las consultas de los viernes y de las que llevaba a cabo por la vía reservada, informaba al Monarca sobre la mayoría de los textos legales"". El Secretario de Estado o el Ministro de Gracia y Justicia comunicaba al Consejo el proyecto de norma legal. Este era estudiado por un Fiscal del Consejo quien emitía un dictamen, sobre el que a su vez emitía consulta el Consejo. Si era aprobado, el Consejo ordenaba su publicación. El Escribano de Gobierno hacía copia y lo llevaba al Registro y a la colocación del sello real"". 7

Por otro lado el Consejo tenían facultad para suspender la publicación de una norma que considerase poco beneficiosa para el interés general o con algún vicio de procedimiento"". 6

es el rey, pues las características de la jurisdicción de este organismo son diferentes a la del rey" ("El Consejo Real de Castilla (1385-1522)", págs. 240 y 241).

***. ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 125.

***. Una vez imprimida la ley, se enviaban cuatro ejemplares al Procurador General del reino, 12 al Ministro de Gracia y Justicia, 50 a cada uno de los Consejos de Indias, Ordenes, Hacienda y de la Guerra. El Consejo de Ordenes era el encargado de transmitir el edicto real a las autoridades del territorio sometidas a la jurisdicción de las órdenes militares. En los territorios de jurisdicción real (de realengo), la promulgación de la ley era confiada a la Audiencias, a los intendentes, a los corregidores, a los gobernadores de plazas, a los alcaldes mayores y a los alcaldes ordinarios. La publicación de la ley se hacía con trompeta y tambor, en presencia de los magistrados reales y municipales (Novísima Recopilación, III, II, 12 (1 abril 1767; 18 diciembre 1804; y DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", págs. 92 y 93).

***. Hemos visto en la EVOLUCION HISTORICA varios casos de suspensión de la publicación de Reales Ordenes y Decretos: por ejemplo, durante el periodo de la Lugartenencia del Gran Duque de Berg.

d) El Consejo de Castilla como Supremo Tribunal de Justicia

Este era otro de los rasgos fundamentales del Consejo de Castilla. Ya vimos al estudiar las funciones gubernativas del Consejo, cómo una de sus misiones fundamentales era la de velar por la paz y la justicia de sus pueblos. Judicialmente, por tanto, el Consejo Real tenía también las más altas atribuciones, lo que hacían de esta institución un órgano típico del Antiguo Régimen¹⁴⁴⁰: las funciones gubernativas se encontraban confundidas al menos orgánicamente con funciones de tipo legislativo o

¹⁴⁴⁰ Fayard ha recogido entre sus escritos una descripción de la naturaleza del Consejo tal y como la escribió Saint-Simon en sus Memorias: "para dar una idea aproximada de lo que es con respecto a los nuestros, diré que es un tribunal en el que se reúnen el poder, el conocimiento y la jurisdicción que aquí son compartidos por todos los departamentos y cámara de cuenta del Reino..., el Gran Consejo y el Consejo privado... Allí son remitidos en última instancia todos los asuntos públicos y privados, allí se registran las concesiones de títulos y grandezas; allí se publican los edictos y declaraciones, los tratados de paz, las mercedes, las gracias, en una palabra, por él pasa todo lo que es público y en él se juzga todo lo que es litigioso" (SAINT-SIMON, "Memoires", París 1891, pág. 142, texto recogido por FAYARD, J., "Les membres...", op. cit., págs. 12 y ss.).

Por otro lado, otras instituciones de rasgo más bien judicial, como las Audiencias borbónicas, fueron órganos con importantes competencias de tipo gubernativo, como es bien sabido. Por ejemplo, la Real Audiencia de Barcelona informaba al Consejo de Castilla sobre el nombramiento de funcionarios, arbitraba entre las diversas autoridades y se ocupaba de otros asuntos gubernativos y policiales. La Audiencia borbónica se convirtió en el organismo superior de gobierno de los países de la antigua Corona catalano-aragonesa, desde los decretos de Nueva Planta hasta el fin del Antiguo Régimen.

judicial"".

El Monarca y su Consejo eran la instancia suprema de la Administración de Justicia. Correspondía también al Monarca y a su Consejo la protección de los derechos y fueros de sus súbditos, y la vigilancia por la correcta administración de justicia en todo el Reino.

Las funciones judiciales de este "Supremo Tribunal" o "primer Tribunal de la Nación" -como gustaba llamarse a sí mismo el propio Consejo-, derivaban en su germen de aquella justicia de Corte medieval que impartía el Rey con su Consejo. A lo largo de los siglos fueron aumentando considerablemente sus competencias en este ramo, a costa de las Chancillerías y de las Audiencias, a pesar de las reiteradas protestas de las Cortes"". Aunque las Chancillerías y las Audiencias aparecían como los tribunales superiores de justicia del Reino, sin embargo el Consejo

"". He aquí un interesante texto fechado el 4 de enero de 1816, referido a las competencias gubernativas y judiciales del Consejo en el ramo de propios: "Cabalmente los asuntos de propios unos son de gracia, como señalamientos de salarios a los sirvientes de los mismos pueblos; concesiones de arbitrios donde no hay propios para pagar a dichos sirvientes, y otras cargas concejiles que tienen sobre sí, que se omite su pormenor por no dilatarse este informe, y pueden verse en los reglamentos que les están comunicados, cuyo importe deberían sufrir por repartimiento vecinal; resarcimientos de perjuicios o rebaja en los arrendamientos de sus ramos, y otros diferentes; y de justicia lo son aquéllos en que los propios tienen que salir en defensa de sus derechos, bien sean demandantes o demandados, los cuales se ventilan ante los corregidores o alcaldes mayores hasta sentencia definitiva con las apelaciones al Consejo; y también los en que se trata de ocultaciones y malversación de caudales públicos. En efecto, todos los negocios de propios son puramente de gracia y justicia, y si los otros que proceden del gobierno económico de los pueblos de que pertenece su conocimiento al Consejo, han corrido y corren cuando requiere consulta por la Secretaría o Ministerio de Gracia y Justicia, ¿por qué no ha de seguirse el mismo orden con respecto a los negocios de propios y arbitrios?" (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.994 núm. 4).

"". Para J. Sánchez-Arcilla, la facultad del Consejo de designar jueces pesquisidores y comisarios fue "una de las causas que contribuyeron en mayor medida a la atribución de competencias judiciales al Consejo Real" (SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., "La Administración de Justicia Real en León y Castilla (1252-1504)", pág. 687, U.C.M., Madrid 1980).

Real era el órgano supremo de la Administración de Justicia".

También la presencia de una serie de competencias judiciales ocasionó la división del Consejo en Salas de Justicia y Salas de Gobierno, aunque esta división no suponía necesariamente que en las primeras se trataran asuntos contenciosos y en las segundas asuntos gubernativos".

Siguiendo básicamente a Escolano de Arrieta y a la clasificación que hace al respecto A. Nieto", podemos establecer las funciones judiciales del Consejo en varias categorías:

A) El Consejo ejercía en primer lugar como Tribunal de Justicia en primera y única instancia. Así, su Sala de tenutas resolvía los asuntos de mayorazgos y de incorporaciones y reversiones a la Corona; en Sala de Mil y Quinientas, las demandas de tanteos y consumos de oficios públicos y de jurisdicciones, señoríos y vasallajes enajenados a la Corona; y las cuestiones referentes a diezmos y al concurso del estado de Osuna en su Sala de Justicia". En esta categoría se incluyen también una

"Vid. sobre el particular J. SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, "La administración de Justicia Real en León y Castilla (1252-1504)", págs. 660a 692, U.C.M., Madrid 1980.

La confusión entre la potestad judicial y gubernativa fue corriente en el Antiguo Régimen, "y ello acaecía lo mismo en el nivel estatal que en el provincial y local" (MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España", pág. 86). Señala este autor cómo con el régimen bonapartista se buscó deslindar claramente una justicia independiente del poder ejecutivo.

Por su parte, Cordero señaló lo siguiente: "los Consejos desarrollados en la época imperial española no eran meros organismos consultivos. Al contrario: bajo una subordinación, en principio al Rey, ejercían muchas atribuciones ejecutivas, administrativas y jurisdiccionales. Así, el de Castilla, que se fue fortaleciendo a costa de los demás, más que ninguno. Su división en Salas pone de manifiesto esta realidad, que hizo decir a Desdevises que 'hubiera tenido que ser descompuesto en varios ministerios, en un Tribunal Supremo de Justicia y en un Tribunal Contencioso-administrativo.' (CORDERO TORRES, J.M., "El Consejo de Estado", pág. 2).

NIETO, A., "Estudios Históricos sobre Administración y Derecho Administrativo", págs. 101 a 113.

NIETO, A., op. cit., citando a ESCOLANO DE ARRIETA, P., op. cit., tomo II, págs. 67 y ss., 79 y ss., 129 y ss., 190 y ss., y 215 y ss.

serie de delitos de especial gravedad, como alta traición y lesa majestad, que quedaban reservados directamente al enjuiciamiento del Consejo de Castilla"".

También detentaba el Consejo competencias en primera instancia como tutor de los Tribunales eclesiásticos, como los recursos por retención de breves, bulas y rescriptos pontificios; o los recursos de fuerzas de conocer y proceder en el modo, y de forma subsidiaria de no otorgar las apelaciones del Tribunal de la Rota española y demás jueces y Tribunales eclesiásticos"".

Esta competencia judicial en primera instancia parece podía ampliarse con la avocación a sí de cualquier asunto planteado en todo el Reino"".

En segundo lugar, el Consejo de Castilla era también un Tribunal de Justicia de apelación ordinaria de justicias ordinarias. En este sentido, y siguiendo también a Escolano y a Nieto, esta competencia incluía la segunda suplicación de las sentencias de las Chancillerías y Audiencias, en determinados supuestos"". También los

"". Este fue el caso del conocido 'Complot de El Escorial', cuya causa fue substanciada por una comisión formada por miembros del Consejo de Castilla. R. Gibert cuenta al respecto la siguiente anécdota: "Cuando el Príncipe Fernando estaba preso e iba a ser juzgado por una comisión especial, un miembro del Consejo de las Ordenes, don Eugenio Caballero, que estaba moribundo, había querido ir a Palacio en una litera para oponerse a esta irregularidad, sosteniendo que los infantes, príncipes y grandes debían ser juzgados por el Consejo de Castilla en pleno con todas sus cámaras y en audiencia pública, conforme a la regla del procedimiento, la primera de las cuales era que al menos el tribunal conociera al denunciador" (GIBERT, R., "El Antiguo Consejo Real de Castilla", op. cit., pág. 31). Igualmente correspondió al Consejo de Castilla la apertura de la causa al Príncipe de la Paz, en 1808.

"". NIETO, A., op. cit., pág. 108. También DESDEVEISE DU DEZERT, G., "Institutions", págs. 93 a 95. Por ejemplo, en A.H.N.; Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.367 núm. 30 se trata de las dispensas y si era necesario el pase del Consejo.

"". Así lo apunta, entre otros, ARTOLA, M., en "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 126.

"". Cuando la cuantía fuera superior a tres mil doblas de oro, previo depósito de 1500 doblas. Quedaban excluidas de esta segunda suplicación las causas criminales, las posesorias y de Hacienda (NIETO, A., op. cit., pág. 103, citando a ESCOLANO DE ARRIETA, P., op. cit., tomo II, págs.

recursos de injusticia notoria contra sentencias no interlocutorias de las Chancillerías y Audiencias'''; y en los negocios de propios y arbitrios cuyo conocimiento correspondiera en primera instancia a la justicia ordinaria, por ser contenciosos'''; la suplicaciones ordinarias de sentencias de la Real Audiencia de Mallorca'''; también los pleitos de la Real Audiencia de Mallorca que hubieran sido avocados por el Consejo Real en virtud de letras 'causa vivendi'''; las apelaciones de Alcaldes de Corte que fueran introducidas, entre otros motivos posibles, para ahorrar a los litigantes los gastos de acudir a la Chancillería de Valladolid'''; y finalmente las sentencias de la jurisdicción ordinaria de Madrid en materia de autorizaciones paternas para contraer matrimonio''', y en general, tenía jurisdicción civil en apelación para Madrid y un radio de 10 leguas.

En tercer lugar, y siguiendo en ello la clasificación que hace A. Nieto, el Consejo Real era también en lo judicial Tribunal de Justicia de apelaciones extraordinarias de las Justicias ordinarias. Este tipo de apelaciones no eran contra las sentencias de las Chancillerías y Audiencias, sino contra las de las justicias

92 y ss.; 11 y ss.).

'''. Se exigía un depósito previo de 50.000 maravedises y no se admitía en juicios posesorios y criminales, y cuando cupiera el recurso extraordinario de mil y quinientas (ESCOLANO, P., op. cit., tomo II, págs. 30 y ss.; NIETO, A., op. cit., pág. 103).

'''. También se incluían aquí aquéllos que eran de origen gubernativo y que por la naturaleza de las pretensiones deducidas, hechos y circunstancias, exigieran examen con audiencia formal de algunos interesados (ESCOLANO, P., tomo II, págs. 60 y ss.; NIETO, A., op. cit., pág. 103).

'''. Eran conocidas por la Sala de Justicia (ESCOLANO, P., op. cit., tomo II, págs. 203 y ss.; NIETO, A., op. cit., pág. 103).

'''. De éstos conocía también la Sala de Justicia del Consejo (ESCOLANO DE A., P., op. cit., tomo I, págs. 558 y ss.; y tomo II, págs. 208 y ss.; y NIETO, A., op. cit., pág. 103).

'''. De ellas conocía la Sala de Provincia del Consejo (ESCOLANO, P., op. cit., tomo II, págs. 332 y ss.; y NIETO, A., op. cit., págs. 103 y 104).

'''. De éstas últimas conocía la Sala de Provincia (ESCOLANO, P., op. cit., tomo II, págs. 350 y ss.; y NIETO, A., op. cit., pág. 104).

inferiores"".

En cuarto lugar, el Consejo era lo que Nieto llama Tribunal de apelación de magistrados especiales. Esta competencia respondía a la existencia de jurisdicciones especiales o privilegiadas, que de ordinario implicaban la inhibición de las justicias ordinarias. En ocasiones la inhibición de las justicias ordinarias se traducía en un recurso extraordinario, per saltum, al Consejo"".

En quinto lugar, el Consejo de Castilla conocía en su Sala de Justicia las apelaciones de las sentencias de sus jueces comisionados"".

Finalmente el Consejo tenía competencias judiciales como tutor de la Administración real. Ya hemos visto dentro de las competencias gubernativas del Consejo su facultad de nombrar multitud de oficiales públicos y de controlarlos. Aquí tenemos las residencias, las pesquisas y visitas y las aprobaciones de escribanos"". También señala Artola"" cómo el Juez de Ministros del Consejo tenía a su cargo también la inspección de los jueces y tribunales de Madrid. E igualmente se incluían las quejas contra magistrados.

La documentación del Consejo y las crónicas de la época nos hablan de la excesiva lentitud del Consejo

"". Las Audiencias y las Chancillerías se inhibían en estos casos, cuando en supuestos normales hubieran sido las competentes. Nieto pone el caso de las multas que pasaban de los 20 ducados y que eran impuestas por los corregidores en causas sobre talas, cortas, quemas y destrozos en montes y plantíos (NIETO, A., op. cit., pág. 104).

"". Nieto, basándose en Escolano, recoge como ejemplos las apelaciones contra providencias de los jueces académicos, las apelaciones contra el juez de aguas de Granada, etc. (NIETO, A., op. cit., págs. 104 y 105).

"". Vid. ESTRUCTURA ORGANICA, Consejeros, Competencias.

"". Señala también Nieto la resolución de los recursos en que a petición de parte, la Sala segunda de Gobierno podía ordenar a las Audiencias y Chancillerías que determinados pleitos fueran vistos por los Ministros de dos Salas conjuntamente y con asistencia del Presidente o Regente (NIETO, A., op. cit., págs. 108 y 109). Ejemplos de estas funciones aparecen muchos entre la documentación del Consejo. Por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.930 núm. 6 se recogen noticias de visitas a las Escribanías de Cámara del Consejo.

"". ARTOLA, M., "Orígenes", tomo I, págs. 113 a 115.

en la administración de justicia"". De un lado, la escasez de personal para resolver sin embargo un desmesurado volumen de pleitos que llegaban a su conocimiento; la necesidad de apoyarse en informes de autoridades territoriales a la hora de resolver un asunto originado lejos de la Corte""; el mecanismo lento y burocrático sobre el que descansaba el procedimiento ante el Consejo; y la propia complejidad de nuestro sistema legislativo, con "el más formidable cúmulo de pragmáticas, edictos, cartas, costumbres y códigos que se pueda imaginar"": todo ello eran quizás las causas principales de los largos retrasos que se producían en la resolución de los pleitos"".

Sabemos por otro lado que aunque el elenco de competencias del Consejo estaba relativamente bien delimitado -dentro de su evidente complicación y extensión-, eran frecuentes los errores a la hora de presentar un recurso, por lo que muchos pleitos que en realidad correspondían a tribunales territoriales eran presentados erróneamente al Consejo de Castilla para su substanciación y resolución"".

"". Vid. COMPETENCIAS: Funcionamiento del Consejo

"". Curiosamente parece que éste era el motivo más alegado para justificar el retraso en la resolución de los asuntos pendientes: los frecuentes recordatorios que debían hacer a las Audiencias, corregidores, alcaldes mayores, intendentes, etc., para que remitieran al Consejo los informes pedidos.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", págs. 88 a 90.

"". Por otro lado, ello obligaba a frecuentes recordatorios por parte del Monarca, para que se aligerase el retraso.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.076, consulta del 5 de enero de 1816. El Consejo presentaba frecuentes quejas por este motivo. También el Consejo devolvía muchos pleitos por no corresponderle su resolución. Un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.005 núm. 80: el obispo de Alcalá la Real solicitaba que sólo el Consejo conociese y resolviese sobre la obra pía que fundó su antecesor. El Supremo tribunal resolvió lo siguiente: "la protección del Consejo es solamente para aquellos casos en que pudiera padecer la economía y gobierno particular de la obra pía; pues los contenciosos y en que se procurase litigar sobre derechos particulares, salarios de los subalternos, dación de cuentas y de esta especie, están encomendados a los tribunales del territorio, aliviándose así en la administración de justicia el grave peso de las obligaciones del Consejo."

De otro lado, las convulsiones evidentes que produjeron en nuestras instituciones y en el propio Consejo las reformas varias durante la Guerra y las del Trienio Constitucional, ocasionaron un trastorno general en todos los ramos de la Administración Pública, cuyos síntomas perduraban en los lustros siguientes"".

En la llamada "Década Ominiosa" el Consejo Real va perdiendo poco a poco competencias gubernativas y como el mismo Consejo lo manifestaba en 1825, su función va erosionándose limitada a la de Supremo Tribunal de Justicia"". He aquí el texto de en tono de queja del Consejo de Castilla"":

"No parece sino que continúa el espíritu de novedad con respecto al Consejo, para ir anonadando paulatina y progresivamente las facultades y prerrogativas de su constitución, hasta reducirle a un tribunal puramente de justicia, como el establecido

""."El trastorno general que han sufrido todos los ramos de la Administración Pública y de la Justicia, la desorganización y poco respeto a las autoridades que por efecto de la revolución y los principios que posteriormente se adoptaron bajo el pretexto del bien o de reformas saludables, desquiciaron todo el sistema establecido con tanto acuerdo, y exige para restituirlo a su antiguo tono un plan constante y un centro respetable de autoridad conocida de donde se comuniquen las órdenes a los demás subalternos..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.076, consulta del 5 de enero de 1816). Incluso este hecho tuvo su reflejo en muchos de los expedientes que tuvo que tramitar el Consejo durante la Guerra, o en la especialización de la Sala de Alcaldes en asuntos de delincuencia y orden público. Ejemplos tenemos en A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.218 núm. 2, Nota sobre víctimas del 2 de mayo y gracias que S.M. se ha servido conceder a varios de ellos; o en el legajo 3.169 núm. 27, Indemnización por los daños causados por la partida de guerrilla de don Camilo Gómez en agosto de 1811.

""."También en las sustituciones del Consejo por un tribunal Supremo, en 1812, 1820 y 1834, este supremo órgano de justicia conocería todos los negocios contenciosos del Consejo. Sobre el particular se puede cfr., por ejemplo, A.G.P., Sección Fernando VII, caja 204, expediente núm. 26. Al menos en 1820, una porción considerable de negocios de tanteo, reversión, incorporación a la Corona y otros varios ramos de que conoció siempre el Consejo, pasaron a la Junta Suprema del Real Patrimonio.

""."A.H.N., Consejos Suprimidos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.090, consulta del 27 de junio de 1825.

con el nombre de Supremo por la ominiosa Constitución, y que se trata de remover la íntima unión que constantemente ha tenido con sus Reyes, conforme a las leyes del estado, y que debe repetirse, pues ya lo dijo el Consejo en consulta que hizo a S.M. a primero de octubre del año último, siendo su existencia inseparable de la de S.M., y que quien le ofende no puede hacerlo sin ofender a su Rey y Señor."

Son unos momentos de reflexión sobre la organización de la Monarquía. Tras muchos estudios^{***},

^{***}. Como hemos señalado en otras partes de este trabajo, abundaron los estudios y memoriales sobre reforma de la Administración. Incluimos aquí un fragmento del texto de un memorial privado de don José Manuel Regato, fechado el 26 de octubre de 1826: "...De poco serviría clasificar los Ministerios si continuase como hasta aquí la confusión de atribuciones en los primeros Jefes y Tribunales de la Nación. El mismo entorpecimiento, el mismo desorden y la misma falta de actividad seguiría si (...) a los Tribunales y jueces se les coupase con otras atenciones que las delicadísimas de juzgar y decidir de la vida, hacienda y honor de los demás hombres, y si los cuerpos establecidos para aconsejar se distrajeran de su propósito sentenciando pleitos, interviniendo en ramos económicos y ejerciendo funciones gubernativas. Así como en las grandes y complicadas máquinas se requiere una precisa colocación de todos los ejes y piezas que han de contribuir a su movimiento, y se exige tal independencia en cada una de ellas que ni se contrapongan unas a otras ni menos se separen del círculo que respectivamente tengan señalado para su acción, del mismo modo que en los grandes Estados bien gobernados deben estar señaladas con distinción e independencia las funciones de los encargados en su administración a fin de que no se confundan unas con otras, ni pueda retardarse el cumplimiento de lo mandado en todos y cada uno de sus ramos sin conocer al instante en donde se halle el entorpecimiento (...). La falta de encadenamiento en las atribuciones de tribunales y jueces, la ninguna proporción que se advierte en su distribución, los privilegios particulares de algunos y sobre todo las atenciones de otra especie que pesan sobre los Supremos Consejos que forman los primeros tribunales de España, ocasionan competencias, causan dilaciones y producen clamores, quejas y extorsiones que no han podido remediarse con las providencias aisladas que han dictado los predecesores de V.M. y aún V.M. mismo. Por todo lo cual considero importante que se clasifiquen las atribuciones de todos los jefes y tribunales de la Monarquía, de manera que en lo militar entiendan única y exclusivamente los Capitanes Generales; en lo político se establezca un Jefe cuyo cargo sea la tranquilidad del estado, el fomento de la riqueza y la ejecución de todas las medidas de buen gobierno; en lo

parecía claro que era necesario modernizar nuestra Administración". Se vio que había que deslindar las funciones gubernativas de las contenciosas y que un órgano donde esta confusión fuese mantenida era ya implantable". Fue por ello mismo por lo que el Consejo

judicial se gradúen uniformemente en todo el Reino las facultades de jueces y tribunales hasta el último superior que se establezca; y los Consejos no tengan más atenciones que la de proponer y consultar lo que estimen conveniente al mejor gobierno de la Monarquía y dar su parecer en los casos que V.M. se lo pida." (A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 70 núm. 15, "Bases sobre una Administración sencilla y expedita").

""", "El Consejo de Castilla era una institución anticuada que no correspondía al estado social y político de España a finales del siglo XVIII" (DESDE VISES DU DEZERT, G., "Institutions", págs. 105 y 106).

""". Así se le manifestaba por ejemplo al Conde de Villele, Presidente del Consejo de Ministros de Francia, en una Memoria confidencial que le fue presentada y que transmitió a Fernando VII. Está fechada el 12 de julio de 1826 y por su interés la reproducimos aquí nuevamente. Su título era "De l'urgente nécessité où se trouve le Roi d'Espagne d'être efficacement secouru par la France pour rétablir la tranquillité dans ses Etats et en organiser l'Administration." Decía así esta Memoria: "Le Roi d'Espagne est intimement pénétré que le bonheur de son peuple et la fiabilité de la Monarchie dépendent de la bonne administration de l'Etat: il fait que le Conseil d'Etat, le Conseil royal et Suprême du Roi ou de Castille, le Conseil Suprême des Indes, le Conseil Suprême de la Guerre et le Conseil royal des Ordres militaires ont été créés à des époques reculées où l'on ne connaissait nulle part en Europe la distinction et les limitations des fonctions judiciaires et administratives, et avant que l'on eut créé le Corps qui les exercent sans confusion et sans conflit de juridictions.

C'est ainsi que les Conseils Suprêmes d'Espagne sont encore appelés indistinctement Conseils ou Tribunaux, tous ils décident dans les matières judiciaires de leur report respectif; tous ils font confutir par le Roi dans les affaires d'Etat et dans la partie contentieuse qui s'y rapporte, et ce qui est plus encore, tous ils font confutir dans les affaires politiques graves en forte que dans un même cas le monarque entend des rapports des opinions contradictoires, sans qu'il puisse tranquilliser sa conscience et que les Ministres se trouvent echargés d'une responsabilité qui paralyse l'exercice de leurs fonctions. Aussi est-on très souvent forié d'avoir recours à différents performes prises hors des Conseils ou Tribunaux, si l'on veut faire disparaître les contradictions et rendre une résolution possible." (A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 70, núm. 8).

Real de Castilla, al ser suprimido definitivamente en el año 1834, fue sustituido a la vez por otras dos instituciones: el Tribunal Supremo de España e Indias, que recogía sus funciones como Tribunal Supremo de Justicia; el Consejo Real de España e Indias, que no existiendo un Consejo de Estado, recogía sus funciones como órgano supremo consultivo del Estado; en cuanto a las funciones gubernativas del Consejo Real, éstas eran meramente residuales en 1834, tras la constitución de un Ministerio del Interior, y tras la pérdida por el Consejo de ramos tan fundamentales como los propios y arbitrios, los pósitos o el ramo de montes"".

2) Competencias del Consejo pleno

El Consejo pleno estaba formado como hemos visto por la reunión de las cuatro primeras salas del Consejo de Castilla. Todos los días a primera hora de despacho se reunía el Consejo pleno en la Sala primera de Gobierno para la determinación de una serie de asuntos que eran propios y privativos de este Consejo pleno. Se reunía para tratar los asuntos graves, publicar las paces, pragmáticas, Reales Ordenes y otras disposiciones de gobierno, y para examinar breves apostólicos"".

Aparte de los negocios extraordinarios que pudieran ocurrir, los asuntos que ordinariamente eran competencia privativa de este Consejo pleno eran los siguientes"":

Al Consejo pleno le correspondía conocer de

"" R. Gibert apunta cómo el Consejo de Castilla realmente perduró a través de la Administración central española, al proporcionar a las Secretarías una tradición burocrática (GIBERT, R., voz "Consejo Real", Gran Enciclopedia Rialp, tomo VI, pág. 289).

"" MARTÍNEZ DE VELASCO, J.A., "La Formación de la Junta Central", pág. 42.

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", págs. 31 y 32.

las consultas que todos lo viernes del año se hacían al Rey"". Como vemos en el apartado de funcionamiento del Consejo, estas consultas eran ejecutadas por el Ministro del Consejo Real al que le tocaba por turno cada vez.

Todo lo referente a provisión de cátedras de Universidades se realizaba también el Consejo pleno"". Había a su vez varias cátedras que como excepción se proveían por la Sala primera de Gobierno: las de las Universidades de Granada, Valencia y los Reales Estudios de San Isidro.

El Consejo pleno veía también los asuntos correspondientes a fundaciones de conventos y hospicios de regulares; a los de nuevos rompimientos de dehesas y tierras montuosas; las pragmáticas y autos acordados""; y los pases de breves de facultades del Nuncio de SS.en España.

Y en general el Consejo pleno estudiaba todos aquellos asuntos que el Rey pidiera su vista y consulta, así como los asuntos que a juicio del Presidente o Gobernador merecieren la atención y resolución del Consejo pleno.

""El Consejo pleno veía también las consultas de residencias de jueces, que aunque se acordaban en la Sala de Mil y Quientas o en otra Sala, se llevaban y se daba cuenta de ellas en el Consejo pleno por el Ministro del Consejo a quien tocaba en turno. Este hacía la consulta al Rey en la ordinaria de los viernes (ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 32).

"" Un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.082, consulta del 21 de enero de 1818. En ella el Consejo hace propuesta al Rey para cubrir las cátedras de Prenociones Canónicas, Instituciones Canónicas y Elementos Matemáticos de la Universidad de Santiago.

"" Un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.131 núm. 1, Prohibición de reimprimir las reales Cédulas y tratados de paz en las capitales de provincia.

3) Competencias de la Sala primera de Gobierno

Correspondía esta Sala los asuntos relacionados con la jurisdicción eclesiástica, tutelas de Grandes del Reino, temporalidades y extrañamientos"". Así, conocía los asuntos relativos a la moral pública y la defensa de la religión, amparo de los monasterios, etc.; la reducción y conservación de los hospitales; la erección de seminarios conciliares; el buen gobierno de las universidades; el fomento del comercio, agricultura, labranza y cría de ganados; la conservación y aumento de pósitos y de los montes y plantíos""; precios; excesos de los tribunales de provincia en llevar derechos""; abastecimientos públicos; "ver las cartas, querellas e informaciones que vinieren al Consejo, en que se pidan jueces de comisión para remedio o castigo de delitos en los casos ocurrentes, y las prorrogaciones de término que ellos o las partes pidieren, todas las competencias y diferencias que tuvieran cualesquiera tribunales de estos Reinos (...)

"" MARTÍNEZ DE VELASCO, "La Formación de la Junta Central", pág. 40.

"". El legajo 12.002 expte. núm. 84 de la Sección Consejo reunido en Sevilla y Cádiz (A.H.N., Consejos Suprimidos) recoge un caso negativa del Consejo de Castilla a la venta de unas fincas de propios ya que "el expediente carece de la instrucción necesaria para que el Consejo pueda proceder a conceder la licencia de la venta de las tierras que se solicitan. Ignórase su cabida y extensión; cuánta la parte a las calmas y montuosas; cuánta la población de robles y quejigos; qué porción de ésta quiere venderse; cuál el valor de ambas en venta y renta; si en los pastos tienen comunidad algunos pueblos, a quiénes, si la tuvieran, se debe oír; y últimamente se necesita la Contaduría de Propios sobre el estado de los de aquel pueblo..." (Dictamen del Fiscal, asumido por el Consejo con fecha 18 de abril de 1.811).

"". Ejemplo en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.703 núm. 32 (libro de matrícula, pues el expediente no coincide con esta numeración).

entre sí, o con las justicias ordinarias, en que no estuviese dada orden, o se diere en adelante sobre ello, consultándose primero a S.M. lo que tocara a los tribunales"****.

También estudiaba esta Sala todo lo correspondiente al gobierno de las Universidades, así como al de las ciudades y pueblos; vigilaba del cumplimiento de las disposiciones del Consejo por las demás Salas del Consejo, y por los demás tribunales y justicias del Reino; "que se ejecuten con rigor todas las leyes que se hallaren promulgadas en lo del secreto, así antiguas como modernas; y finalmente todo lo que el Consejo tratase del gobierno, y lo que particularmente remitiese S.M. teniendo libertad de tratar y conferir lo que más les pareciese en bien del Reino, o reformation de costumbres y abusos, para consultar a S.M. lo que fuese de importancia"****. Correspondía también a esta Sala fijar los lugares donde podían residir los gitanos; el cuidado y limpieza de los edificios de Madrid, y el empedrado de la capital, así como dar licencia para la salida de las procesiones.

La Sala primera de Gobierno se componía aproximadamente de doce Ministros. Tras la reunión del Consejo pleno, quedaban estos Ministros en la Sala primera de Gobierno. Entonces se llamaba para el despacho de Gobierno a los Escribanos de Gobierno de Castilla y Aragón. Concluido el despacho de estos Escribanos, recogían del que presidía la Sala las consultas, órdenes del Rey y otros documentos que debían salir de la Sala. Seguidamente se retiraban y se mandaba llamar a los Relatores de Gobierno, quienes según el día debían dar cuenta de una clase de asuntos competencia de esta Sala. A las diez y media en invierno, y a las nueve y media en verano, el portero daba un golpe en la puerta y decía: "Señor, la media ha dado". Si no había más asuntos graves que despachar, entraban todos los Escribanos de Cámara y comenzaba el despacho de peticiones. Entonces entraban los Escribanos de Cámara, y daban cuenta de las peticiones que tenían, en audiencia pública. Las peticiones de que na haya habido tiempo de dar cuenta en la media hora concedida al efecto, se tramitaban ya por la Sala segunda de Gobierno o por otra si aquella estuviese ya saturada****.

Cuatro días a la semana estaban reservados para el despacho de determinados asuntos: así, lo martes

****. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 35.

****. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", págs. 35 y 36.

****. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 40.

veía la Sala primera de Gobierno el despacho de los asuntos académicos de la Universidades del Reino; los jueves se despachaban las fuerzas de dos Salas, los asuntos de hospicios y pobres y mendigos; los viernes se veían los asuntos de provisión de corregimientos y alcaldías mayores; y finalmente los sábados se estudiaban los asuntos de Propios y Arbitrios***.

En cuanto a los asuntos gubernativos que se despachaban por la Sala primera de Gobierno, eran los siguientes:

La Sala veía todos los asuntos referentes a juramentos de Secretarios del Rey, Escribanos de Cámara, Relatores, porteros y procuradores del Consejo, escribanos de provincia, corregidores, alcaldes mayores, receptores del Número, alguaciles de Corte, alcaldes-examinadores del protomedicato en lo referente a las Facultades de Medicina, Cirugía y Farmacia***.

También conocía de las representaciones de las chancillerías, audiencias, arzobispados y obispados, universidades, corregidores, intendentes y demás jueces y españoles en general sobre asuntos de policía y gobierno.

Estudiaba los recursos sobre pases de breves, bulas y otras letras apostólicas que debían presentarse al Consejo para su exequatur regio; también conocía las retenciones de bulas.

Iban a esta Sala los asuntos de Universidades y Estudios Públicos del Reino***; los expedientes sobre

***. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 41.

***. El auto acordado de 4 de agosto de 1.806 estipulaba que "todos los expedientes sobre elecciones de oficios de República pendientes en el Consejo, que no se hallen sentenciados en vista ni se hallan mandado retener ni traer por orden de S.M., se remitan a las Chancillerías y Audiencias adonde correspondan: y tanto el Repartidor como los Escribanos de Cámara no admitirán ningún recurso de esta clase" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 expte. núm. 29).

***. Sobre tramitación de expedientes sobre Universidades, se puede confrontar A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874 expte. núm. 18; e igualmente los autos acordados del Consejo de Castilla de 20 de diciembre de 1.768, dando reglas para facilitar el despacho en las consultas de cátedras de las Universidades (A.H.N., Colección de Reales Cédulas núm. 1.905); y el de 14 de febrero de 1.769, mandando guardar una instrucción para los Directores de Universidades cuyas cátedras consultaba el Consejo de

provisión de cátedras hasta que se ponían en estado de consulta""; los de los Estudios Reales de San Isidro de Madrid; los de establecimiento de Sociedades Económicas y las representaciones que por éstas se hacían para el fomento de las artes, agricultura e industria; los de composición de caminos y posadas; los de licencia de impresiones y reimpresiones de libros; los expedientes en que solicitaba título de maestro de primeras letras; los de agrimensores; los expedientes en que se solicitaba letras causa vivendi para los pleitos que estaban pendientes en la Real Audiencia de Mallorca.

Otros asuntos de la competencia de esta Sala primera de Gobierno eran los siguientes: la concesión de una comisión a un Alcalde de Corte para que asitiese al viaje de una Persona Real; los asuntos de competencia de jurisdicción; los de Real protección que se introducían por los Regulares u otros vasallos del Rey; las comisiones para examinarse los que pretendían ser admitidos en los colegios de Escribanos de la Corona de Aragón; los expedientes de curadurías de Grandes de España; los de los hospicios, hospitales y colegios seminarios; los de las visitas de Tribunales y Universidades, y las residencias de las Justicias; los de extinción de langosta; los de aumento y fomento de la población; los de riegos de acequias y canales; los de conmociones populares; apelaciones en las causas de los gremios y artesanos de Madrid, en lo referente a la interpretación de sus ordenanzas; los expedientes en que se daba comisión a la Sala para conocer y determinar las causas criminales remitidas al Gobernador del Consejo por las justicias de los pueblos fuera de las cinco leguas del rastro de la Corte; las instancias y recursos sobre abastos de Madrid; los asuntos de policía de pobres de Madrid"".

Finalmente todos los nombramientos realizados por el Presidente o Gobernador, en virtud de sus facultades y regalías, se hacían por esta Sala, quien mandaba despachar sus títulos. También se ocupaba de todos aquellos asuntos remitidos por el Rey para consulta y que no estuvieran radicados en otras Salas. Y en general también conocía de todos aquellos asuntos relativos a la buena administración

Castilla (A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 1.909); sobre la importancia de la labor de gobierno del Consejo de Castilla en las Universidades, cfr. intervención del profesor Peset en el Seminario de Historia de las Universidades, del XVII Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Madrid, agosto y septiembre de 1.990).

"" Y entonces iban al Consejo pleno. Había varias universidades -Granada, Orihuela, etc.-, cuyos expedientes sólo se tramitaban por la Sala primera de Gobierno.

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 43.

de justicia de los tribunales provinciales, orden público y abastos del Reino"".

Por el auto acordado del Consejo pleno de 4 de agosto de 1.806 se mandaba que la Sala primera de Gobierno entendiéndose en la confirmación de las ordenanzas municipales de los pueblos y en las de los gremios"". También se estipulaba que la Sala primera de Gobierno en los negocios de su dotación podría remitir a las otras Salas todos los asuntos que tuviera por conveniente para que se despachasen en su nombre"".

En los años 1.815/16 hubo varios intentos de reformar la distribución de competencias de las Salas del Consejo. En consulta de oficio de 5 de enero de 1.816 el Consejo llamaba la atención al Monarca sobre la inobservancia del auto acordado de 4 de agosto de 1.806, "por quanto a cada paso vienen a sus manos negocios cuyo conocimiento pertenece a los tribunales territoriales, en desprecio de nuestras sabias leyes". En aquella ocasión el Consejo propuso que se dictasen las providencias más eficaces para que no se admitiesen en el Consejo los negocios cuyo conocimiento no le correspondía"".

La pérdida del ramo de propios en el año 1.824 trastocó sensiblemente el organigrama de competencias de esta Sala, que se vio privada repentinamente de una importante fuente de ingresos para atender un vasto campo de actuación gubernativa del Consejo de Castilla"". Esta Real

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 43.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 29.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 expte. núm. 29; también legajo 2.980 expte. núm. 1.

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.076.

"" Dictamen del Fiscal con fecha 14 de abril de 1.824: "...El gobierno de los pueblos no puede tener por principal objeto el socorro pronto de sus necesidades, el fomento de su prosperidad y la remoción urgente de todas las causas que puedan impediria. Nada absolutamente podrá adelantar el Consejo en tan importantes objetos si se le priva del conocimiento de los medios y recursos que tienen los mismos pueblos para atender al remedio de sus urgencias y mejoras de su situación.

En efecto, de separarle de él de los propios, se seguirá infaliblemente el inconveniente de causar a sus Salas repetidos embarazos para el despacho de los expedientes de su respectiva dotación. La Sala primera tocará las

Resolución continuaría planteando conflictos y cuestiones de competencia en los años siguientes, especialmente con la Dirección General de Propios que asumió la titularidad de este ramo"".

dificultades precisas de no poder acudir al alivio de las necesidades en los casos de epidemia, hambres, langosta y otras semejantes, como también en las obras públicas, fiestas votivas y regocijos que ocasiones cualquier motivo de los que se estiman justos para concederlos o permitirlos; hallándose iguales embarazos en consignación y aumento de salarios de los Ministros y oficiales de Justicia y Ayuntamientos, y demás personas que dentro o fuera de los pueblos se empleen en beneficio de su común. Los encontrará asimismo en la concesión, prórroga y extinción de arbitrios; facultades para imposición de censos, ventas y enajenaciones de propios. No se verá menos embarazada en las elecciones de oficios para reconocer si los electos son o no deudores a caudales públicos. Y si por defecto de propios se hace justo el descender a los repartimientos que se piden por los pueblos; no siendo menor la dificultad en que tropezará de castigar a los alcaldes, regidores, mayordomos, escribanos de concejo y número por haber sido fiadores o abonadores de rentas de propios, o por haberlas arrendado; en declarar nulos los remates de ventas y caudales públicos, aunque no se halla observado en ellos lo dispuesto y prevenido por leyes del Reino; en administrar justicia a los postores, y tratar de si por tanto tiene o no prelación el que hizo la primera postura.

En la concesión de facultades para rompimientos de terrenos tan privativo del Consejo, que por ley del Reino está prohibido a todos los demás y cualquier Junta que se forme, es tan necesario el conocimiento de ser comunes o propios los sitios en que se pretenden, que de él depende la resolución de muchos puntos por dimanar de esta diferencia varios y distintos efectos..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7).

"" Así, por ejemplo, en consulta de oficio de 17 de enero de 1.828 el Consejo se quejaba de que sólo a él competía aprobar la dotación de corregidores y alcaldes. Y si ésta se sufragaba con los fondos de propios, tenía derecho el Consejo a conocer el estado de los fondos que debían pagar aquella dotación, "porque de lo contrario su conocimiento o facultades no tendría resultado alguno. A la Dirección General de Propios sólo se le ha concedido el gobierno económico y administrativo de los mismos; mas hasta ahora no tiene la facultad de librar a aquéllos de las cargas u objetos a que están destinados, y siendo una de ellas la dotación de varas, es consiguiente que en esta materia debe sujetarse a las decisiones del Consejo..." (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.094).

4) Competencias de la Sala segunda de Gobierno

Correspondían a la Sala segunda de Gobierno del Consejo de Castilla los casos de graves injusticias por parte de las Chancillerías y Audiencias territoriales, y lo referente a obras públicas'''. Así, conocía esta Sala de las fuerzas de conocer en el modo, y las de no otorgar; las facultades para repartimientos de las cantidades necesarias para las reparaciones de puentes y calzadas'''; los recursos de injusticia notoria; las provisiones para que en las Chancillerías y Audiencias se vieran los pleitos con los ministros de dos Salas y con la asistencia del Presidente o Regente; pleitos dentro de las cinco leguas de la circunferencia de la Corte, si hubiesen de verse en el Consejo y no en las Chancillerías'''.

Correspondía también a esta Sala segunda de Gobierno el conocimiento de algunas apelaciones: las del Asistente de Sevilla; las del Juzgado de Aguas de Granada; las del Juez de Imprentas; las del corregidor de Madrid en asuntos de policía y gobierno; las de los cancilleres jueces del estudio de las Universidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá, Cervera y Huesca; las de los jueces subdelegados de montes y plantíos; las instancias y recursos sobre obras públicas, abastos, elecciones y repartimientos de tierras; las apelaciones en asuntos de cómicos y teatros, cuando las sentencias del corregidor de Madrid y del Ministro del

'''. MARTÍNEZ DE VELASCO, J.A., "La Formación de la Junta Central", pág. 41.

'''. Sobre las reglas para la instrucción y resolución de los expedientes de pontagos, portazgos y demás derechos, se puede confrontar el Decreto del Consejo de 7 de junio de 1.782 (A.H.N., "Colección de Reales Cédulas" núm. 2.622).

'''. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 12.

Consejo al que van sus alzas no fueren conformes"".

También correspondía a esta Sala el conocimiento de otros asuntos: los pleitos de baldíos; las visitas de escribanos; las instancias y recursos relativos a la ejecución de la pragmática sobre gitanos y sobre dar vecindad a éstos; los pleitos y negocios sobre las temporalidades de los Regulares extinguidos"".

En general, podía conocer esta Sala de todos los asuntos o negocios que le fueran remitidos por la Sala primera de Gobierno, bien por haberse hecho contenciosos, o bien porque aquella Sala lo considerase conveniente"".

En el año 1.806 hubo una importante redistribución de competencias, destinada a aligerar el despacho de los negocios en las distintas Salas del Consejo"". Fruto de esta reforma fue la asignación a la sala segunda de gobierno de todos los expedientes de obras

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo",
pág. 12.

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo",
pág. 12.

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo",
pág. 12.

"" En el año 1.806 tuvo lugar un importante expediente titulado "Sobre arreglar el despacho de los negocios en las Salas del Consejo". De este expediente dimanó el auto acordado del Consejo de 4 de agosto de 1.806, importantísimo para conocer la planta que tenía el Consejo de Castilla en el año 1.806. Para la realización de esta reforma se nombró una Junta de Ministros compuesta por don Felipe Ignacio Canga Argüelles, el Marqués de Casa-García, don Sebastián de Torres, don José Navarro, don Domingo Fernández de Campomanes y don Ignacio de Cortabarría. Fue formada esta Junta por el entonces Gobernador del Consejo, Sr. Conde de Montarco. La Junta examinó el asunto de la distribución de negocios para las Salas del Consejo, para lo que tuvo en cuenta las distintas providencias dadas desde 1.775, y el expediente formado en aquel mismo año 1.806. "El objeto de la Junta era meditar el mejor medio de decidir con brevedad y acierto los muchos negocios que hay pendientes, estableciendo para ello un orden fijo libre de la arbitrariedad. En este arreglo deberá tenerse presente lo sobrecargadas que se hallan unas Salas y la escasez de negocios que hay en otras, como se observa generalmente en las de Mil y Quinientas y Justicia, para dotarlas de suerte que se repartan entre todas proporcionalmente, asignando a cada una las que sean más análogas a los que ya tienen ("Dictamen de la Junta especial", A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a).

públicas¹⁰⁰; los de abastos de los pueblos del Reino¹⁰¹; los de repartimientos de tierras, no siendo de nuevos rompimientos; los asuntos de partes que fueren o se hicieren contenciosos; los expedientes de insaculación y elecciones para los oficios de Justicia, los de cofradías y hermandades; los recursos de maestros de primeras letras y otros empleados de los concejos, para la manutención en sus oficios y cumplimientos en sus contratas¹⁰².

En general, la distribución de negocios entre las Salas del Consejo que se introdujo en 1.806 asignaba a esta Sala todos los negocios que fueran contenciosos por su propia naturaleza, o que se convirtieran en contenciosos, incluidos los de propios y arbitrios, y aquéllos en los que se disputara sobre si se debía pagar en vales reales o en

¹⁰⁰. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, legajo 3275 núm. 2a. La Junta exceptuó aquéllos que debieran instruirse y despacharse por la Contaduría General de Propios y Arbitrios.

¹⁰¹. Esta competencia fue incluida en el Dictamen de la Junta de 1.806, creada para redistribuir los asuntos entre las Salas del Consejo. El Consejo pleno estudió este dictamen seguidamente e introdujo en este punto la única modificación o explicación de que los negocios de abastos de los pueblos del Reino, fuera de la Corte, se deberían entender aquéllos en que se tratase de providencias dirigidas a que en ningún pueblo faltasen los mantenimientos necesarios, o a mejorar y rectificar el gobierno de este ramo. Se indicaba también que la Sala no debía conocer de los recursos e instancias particulares acerca del cumplimiento de contratas y condiciones de las subastas, ya fuera sobre el valor de éstas, sobre su rescisión o modificación. Tampoco conocería de otros asuntos que no tuviesen relación con las providencias generales o que no alterasen el sistema o modo de abastecer que se hubiera adoptado. Estas materias corresponderían a las respectivas chancillerías o audiencias. En ningún caso quedarían incluidos en este apartado los abastecimientos de la Corte (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 29, "Parecer del Consejo pleno al Dictamen de la Junta especial de 1.806 sobre distribución de negocios en las Salas del Consejo").

¹⁰². El auto acordado de 4 de agosto de 1.806 establecía que se pasasen a la Contaduría General de Propios y Arbitrios para su despacho todos los expedientes que se hallasen entonces pendientes en las oficinas del repartidor, de los Escribanos de Cámara y de Gobierno, y que no se hallan hecho contenciosos, relativos a concesiones, prorrogaciones o subrogaciones de arbitrios que solicitasen los pueblos, dotaciones de dependientes, moderaciones, aumentos, ayudas de costa, gastos de obras y reparaciones de edificios públicos, pago de réditos de censos, deudas y otras cargas. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 29).

moneda metálica"". Quedaban exceptuados aquellos asuntos de esta naturaleza que la Sala primera de Gobierno tuviera por conveniente retenerlos, bien fuera por su gravedad o porque pudieran causar providencia o regla general"".

El auto ya mencionado de 1.806 establecía también que la Sala segunda de Gobierno y la de Mil y Quinientas deberían despachar juntas las fuerzas en conocer y proceder, y las de Millones"".

En general, le correspondían todas las apelaciones que la ley asignaba a la Sala primera de Gobierno, de acuerdo con las modificaciones aprobadas por el Consejo pleno en 1.806"".

En Real Resolución de 27 de abril de 1.815 se contempló la acumulación de negocios gubernativos y consultivos en la Sala primera de Gobierno. Y se acordó que la Sala segunda de Gobierno se haría cargo en lo sucesivo para su instrucción, resolución o consulta de todos los expedientes causados en la primera que fueran de esta naturaleza"", cuyos interesados o asuntos perteneciesen a la Corona de Aragón"". También se disponía que esta Sala

"". Por Reales Ordenes de 18 de septiembre y 7 de noviembre de 1.805 se atribuyó al Consejo de Castilla el conocimiento privativo de los pleitos sobre pagos en vales reales por todo su valor o con moneda metálica.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2a.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 29.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275
núm. 2a.

"". Tanto si lo fueran a instancia de parte como de Real Orden.

"". Una nota a pie de página en el expediente citado señala que hubo algunas dificultades en la Sala primera de Gobierno para poner en ejecución lo dispuesto en la mencionada Real orden en cuanto al conocimiento por la Sala segunda de todos los asuntos pertenecientes a la Corona de Aragón. "Por lo cual, teniendo presentes las providencias que dio Carlos IV y el Consejo para que tuviesen el más pronto curso los negocios del Consejo, ha resuelto el Consejo que la citada Real Orden de 27 de abril y el decreto a ella dado por el Consejo se una a los antecedentes que se causaron desde 1.800 a 1.808 para la formación de listas de negocios pendientes..." El citado Real Decreto fue pasado a los Relatores, Escribanías de Cámara, Repartidor de negocios y a las Contadurías Generales de Propios y Pósitos del Reino,

conociese todos los asuntos relativos a pósitos del Reino"". Sin embargo, poco tiempo duró esta distribución ya que el propio Consejo decidió apenas dos semanas después suspender esta Real Orden y las reformas que contenía"".

La pérdida del ramo de propios en 1.824 también afectó sensiblemente a las competencias de esta Sala"".

para su inteligencia y cumplimiento (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a, "Real Orden de 27 de abril de 1.815 sobre distribución de competencias a las Salas del Consejo". Mandaba esta Real Orden que el Contador General de Pósitos acudiera a despachar a la Sala segunda dos días a la semana, a fijar por la misma Sala, y que debían ser distintos de los dos días en que el Contador General de Propios asistía a la Sala primera de Gobierno.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.077, consulta del 13 de mayo de 1.827. Dictamen del Consejo, en consulta de 5 de enero de 1.816: "Por lo que el Consejo es de dictamen que no conviene decir el despacho de los negocios gubernativos ni sacarlos de la Sala primera para fijarlos en la segunda, que no sería conforme a la buena política separar los negocios pertenecientes a la Corona de Aragón de la Sala donde se resuelven los demás del Reino, para que de este modo haya uniformidad y sistema, y de consiguiente que la Sala primera continúe como hasta ahora conociendo de los asuntos gubernativos de aquella Corona, como también de los que se despachaban por la Contaduría General de Propios, que por su gravedad o trascendencia puedan causar regla general, dándose cuenta enseguida de los que sean de interés privado. Que igualmente continúen las demás Salas despachando los negocios de sus respectivas dotaciones y que se cumpla puntualmente lo prevenido en el referido auto acordado de 4 de agosto de 1.806, usando la Sala primera de la facultad que éste le concede para remitir a las demás los negocios que no sean de su privativa o rigurosa inspección o dotación, cuidando vuestro Presidente del Consejo y respectivamente en sus Salas las que las presiden, de su ejecución, con lo que no duda el Consejo se llenarán los deseos a V.M. en el más pronto despacho de los negocios. V.M. se servirá resolver lo que sea de su soberano agrado". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a).

"". Extracto del dictamen del Fiscal de fecha 14 de abril de 1.824: "La Sala segunda vendrá a no tener arbitrio tampoco para que en los repartimientos de puentes en que por la infelicidad de los vecinos pide la equidad y la justicia no se les estreche el pago de sus cupos, se pueda echar mano del sobrante de propios; y habiendo sido éste en lo que

5) Competencias de la Sala de Mil y Quinientas

Según Escolano de Arrieta, en esta Sala se sustanciaban los pleitos de tenuta, los de segunda suplicación """, estados nobiliarios y mayorazgos y los

siempre han hallado los pueblos algún alivio, sirviendo para el socorro de sus necesidades y aún para la paga de reales contribuciones, sin embargo es que deba hacerse por repartimiento, podrá el sumo rigor de derecho a que está ceñido un Ministro particular o Director en quien no residen aquellas superiores facultades que tiene el Consejo para alterar el destino de su producto, declinar en una suma iniquidad que sea causa de la ruina de los pueblos, importando poco que sus propios tengan en arcas el mayor sobrante si por no necesidad se ven precisados a abandonarle sus vecinos... En la confirmación de ordenanzas en que el principal objeto es siempre dar reglas al uso de los pósitos, propios y comunes, como a la mejor administración y distribución del producto de sus rentas, consignación y aumento de salarios, nombramientos de guardas de montes, panes y viñas. Se detendrá igualmente la Sala segunda al ver las contingencias a que queda expuesta su aprobación si no se conforma con el dictamen del Director General encargado del cuidado de los Propios, estimando o del todo extrañado de su destino, o excesivos los salarios consignados, o menos proporcionadas las reglas de su administración..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.995 núm. 7).

""". Entre la documentación de la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla aparecen muchos expedientes relativos a este recurso de segunda suplicación. A título indicativo mencionaremos dos de ellos: la consulta de oficio de 9 de febrero de 1.827, en la que el Consejo estudia si cabe crear un recurso extraordinario aparte del de segunda suplicación, como especial gracia real (A.H.N., Consultas de Oficio, legajo 6.122); y el recogido en el legajo 3.232 núm. 4 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno) que abunda en el procedimiento de este recurso: concretamente este último expediente fue formado para que el Consejo consultase su parecer sobre si convendría que en 1.º grado de segunda suplicación y en el recurso de injusticia notoria no podrían tener voto los Ministros que votaron en el asunto que les

pleitos de incorporación y reversión a la Corona ""'. Además conocía de las residencias de corregidores, ministros y oficiales de justicia que le fueran encomendadas.

Las pesquisas y visitas, cuyas comisiones se despachaban por la Sala primera de Gobierno, se veían y determinaban también por la de Mil y Quinientas. Estaba mandado que estos pleitos y las residencias no se vieran con menos de cinco jueces, y que a falta de alguno se tomase el más antiguo de una de las otras dos Salas de Justicia que mejor pueda asistir a ello""'.

La Sala conocía también las apelaciones de las providencias del Juez protector de los privilegios y negocios del Número de receptores de la Corte, así como las de los jueces protectores de la Cabaña Real de Carreteros, de los Hospitales General y Pasión de la Corte, Convalecientes de Unciones, los de las Reales Casas de Niños Desamparados, los de la Inclusa, Beaterio de San José y Colegio de San Nicolás di Bari. Las apelaciones que se introducían de sus autos y providencias, en asuntos contenciosos, correspondían a la Sala de Mil y Quinientas. Esta Sala también conocía las apelaciones y recursos en los negocios relativos de la conservaduría de la Dehesa de la Serena; también las apelaciones y recursos en las causas dimanadas de la antigua visita del Consejo de Hacienda extinguida por Felipe V, y de las causas y negocios de las transacciones dimanadas del mismo Consejo de Hacienda; las instancias y pleitos sobre amparo y despojo de dehesas;

causó, en cualquiera de los grados anteriores, así como estaba mandado para iguales casos al Consejo de Guerra por Real Cédula de 10 de mayo de 1.797. Por otro lado, en las sesiones de la Asamblea de Bayona también se estudió este recurso. Entre las voces favorables a su mantenimiento se encontraba la de Vicente Alacalá Galiano, quien por el contrario se mostraba partidario de suprimir los recursos de fuerza (cfr. "Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808", Madrid, 1.874, págs. 84 y 85).

""'. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 112. "Pero hallándose conclusos, y en estado de definitiva, concurren a su vista y determinación los trece Ministros de las tres Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia, en el día lunes de cada semana". También MARTÍNEZ DE VELASCO, J.A., "La Formación de la Junta Central", pág. 42; un ejemplo de recurso al Consejo en grado de Mil y Quinientas lo tenemos en A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.985 núm. 26, acerca de la declaración de libertad de ciertos bienes que corrían por vinculados.

""'. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 114.

aquellas sobre posesiones de pastos de la Cabaña real de ganado lanar merino; las apelaciones de los residentes del Concejo de la Mesta; las de los alcaldes entregadores y los de cuadrilla, de cuyos asuntos estaban inhibidas las Chancillerías y Audiencias"".

La Sala expedía también las provisiones auxilatorias de los despachos de los Presidentes y Jueces de la Mesta. Y se despachaban también por esta Sala los pleitos de tanteo de oficios públicos y jurisdicciones de señorios"".

Era privativo de esta Sala todo lo contencioso en los asuntos de labor y pasto; la libertad de derechos de los ganaderos transhumantes, así como las instancias y recursos de queja de los sorteos para los diputados de Millones y procurador general del Reino"". En esta Sala se examinaban también los escribanos reales y numerarios, al igual que en las Salas de Justicia y Provincia, siempre que los expedientes hubieran sido tramitados por la Sala de Justicia. Le correspondía también las discordias de la Sala de Justicia, y todos los demás asuntos y negocios que le fueran encargados por el Rey o le fueran remitidos por la Sala primera de Gobierno"".

Por Real Cédula de 13 de julio de 1.803 se mandó que esta Sala se ocupara también de las causas civiles del Consejo de Castilla en apelación de mayor cuantía, a excepción de las causas referentes a hidalguías que eran de las Chancillerías"".

Por auto acordado del Consejo de fecha 4 de

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", págs. 116 y 117.

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 116; sobre este último punto -tanteo de jurisdicciones y otros oficios y derechos enajenados, se puede confrontar la Real Cédula de 10 de marzo de 1.778, por la que se declaraba la clase de pleitos y expedientes tocantes a tanteo de jurisdicciones, y otros oficios y derechos enajenados, que correspondía su conocimiento a la Sala de Mil y Quinientas del Consejo, y de los que debía tenerla el Consejo de Hacienda. (A.H.N., "Colección de Reales Cédulas", núm. 2.379).

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", págs. 117 y 118.

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 118.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089 núm. 14; y legajo 2.881 núm. 1.

agosto de 1.806 se agregó a esta Sala los recursos de injusticia notoria. Igualmente se le agregó la substanciación de los expedientes sobre facultades para nuevos rompimientos hasta ponerlos en estado de dar cuenta al Consejo pleno. También afirmaba el mencionado auto acordado que esta Sala conocería no sólo de los recursos y apelaciones del Sr. Juez Protector de la Real Cabaña de Carreteros cuando la disputa era sobre pastos, sino también en los casos de que hasta entonces conocía la Sala de Justicia"".

La anteriormente mencionada Real Orden de 27 de abril de 1.815 establecía que en lo sucesivo conocería esta Sala de los asuntos contenciosos sobre propios y arbitrios del Reino y montes, y sobre la legitimidad de pagos hechos en vales reales"".

Sabemos que entre las competencias que esta Sala perdió tras el Trienio Liberal -en 1.825- se encontraban los asuntos contenciosos de pósitos"". La Sala conocía de las apelaciones que venían del Subdelegado General del Ramo conforme a lo resuelto por Real orden de 25

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 29, auto acordado del Consejo de Castilla de 4 de agosto de 1.806.

c. "". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a, "Real Orden de 27 de abril de 1.815 sobre distribución provisional de competencias en las Salas del Consejo": "...que sin perjuicio de que la Sala de Provincia determine todos los pleitos radicados en ella, en lo sucesivo se repartirán de cada seis negocios de los de su atribución, los cuatro primeros a la misma Sala, el quinto a la de Mil y Quinientas y el sexto a la de Justicia, las que se despacharán por la de Provincia, pero sin que se haga novedad en las atribuciones actuales de las Salas en cuanto no se hayan alterado por esta resolución provisional...Palacio, 27 de abril de 1.815".

"". La constitución de la Contaduría General de Pósitos y la consiguiente privación al Consejo de esta competencia, por Real Decreto de 20 de mayo de 1.818, no se aplicó inicialmente, al encomendarse de forma provisional al Consejo el despacho de la Superintendencia del ramo. Sin embargo el Consejo fue privado de esta materia de forma definitiva por Real decreto de 31 de mayo de 1.824, de tal manera que el único conocimiento que le había quedado al Supremo Tribunal eran las apelaciones de los asuntos contenciosos del ramo, que venían a la Sala de Mil y Quinientas en última instancia. Por Real Orden de 25 de marzo de 1.825 el Consejo perdía también esta competencia residual, que le había sido preservada por el Real decreto de 25 de marzo de 1.825. (Cfr. A.H.N., Consejos, consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.090, consulta del 27 de junio de 1.825).

de junio de 1.818. Por nueva Real orden de 25 de marzo de 1.825 fue sustituida tal Sala del Consejo por un tribunal compuesto del Subdelegado General de Pósitos y dos Ministros de los Supremos Consejos"".

La pérdida del ramo de propios en 1.824 afectó sensiblemente a esta Sala especialmente en lo referente a lo contencioso en los asuntos de labor y pasto
1787.

""", A.H.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.070, consulta del 27 de junio de 1.825.

""", Extracto del dictamen del Fiscal del Consejo fechado el 14 de abril de 1.824: "...La Sala de mil y quinientas se hallará no menos vacilante en los pleitos que frecuentemenete ocurren entre el honrado Concejo de la Mesta por razón de sus privilegios y entre los pueblos del Reino con motivo de acotadas y rompimientos, daños y uso de los pastos, en los cuales consiste regularmente su decisión en ser comunes, particulares, propios o apropiados, y si siendo dehesas es la mayor parte de su fruto de labor o pasto, y si siendo boyales son auténticas o acotadas, para cuyo conocimiento contribuye el de los propios de los pueblos. Iguales dificultades le ocurrirán en los pleitos sobre oficios acrecentados, o su reducción de los perpetuos o anales, que según la ley debe ejecutarse a costa de los propios; y no habiendo punto ni pleito alguno en que sea parte el común de cualquiera pueblo que no se roce con el convencimiento de los propios, se descubre la razón que no expresan las leyes para haberle hecho privativo del Consejo y grande inconveniente en separarle de su mano... Si se restablecen las residencias que corresponden a esta Sala daría nuevos escollos, como por lo general los principales cargos que resultan contra los Corregidores y demás oficiales de Justicia y Ayuntamiento que deben darla, penden y dimanan de la mala administración de caudales públicos e inversión de su destino, ni podría tratar de su reintegración ni imponen la pena que correspondiese a sus excesos, recalando que cualquier providencia pudiese ser contraria a las que sobre los mismos cargos hubiese dictado el Director General en vista de las cuentas, y por lo mismo se detendría en acordar medidas de buen gobierno por más que reconociese necesitarlas el Juez o Ayuntamiento residenciado, habiendo de servir en la mayor parte de testigo de los daños sin libre facultad para la aplicación de su remedio..." (A.H.N., Consejos, Sala de gobierno, legajo 3.995 núm. 7).

6) Competencias de la Sala de Justicia

Escolano de Arrieta señalaba como asuntos de la competencia de esta Sala los siguientes"":

Correspondía a la Sala de Justicia la resolución de los pleitos de retención de breves, bulas y rescriptos pontificios; también los de retención de gracias que eran concedidas por el Consejo de la Cámara; los negocios de obras y bosques""; las apelaciones del juez conservador de corredores de lonja de Sevilla y las de jueces de comisión; los concursos de los estados de Osuna y Cañete; los negocios contenciosos que quedaron pendientes cuando se suprimió el Consejo de Aragón; las suplicaciones de sentencias de la Real Audiencia de Mallorca y los pleitos que venían de ésta por el llamado recurso de letras causa vivendi; las esperas de justicia; los pleitos de nuevos diezmos; la aprobación y confirmación de ordenanzas gremiales y de los pueblos.

También resolvía esta Sala los pleitos remitidos en discordia por las Salas de Mil y Quinientas y de Provincia.

Otros expedientes de los que conocía esta Sala eran los de aprobaciones de nombramientos de escribanos de número, de ayuntamiento y de juzgado y sus exámenes, así como los de escribanos reales; estudiaba los expedientes sobre construcción y reparación de iglesias, así como los de publicación de sínodos; las apelaciones de tasas y retasas de casas de Madrid; las de los jueces protectores y canales de Lorca, Manzanares y otros; las apelaciones del privilegio del juez conservador de los escribanos de provincia; los

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", págs. 162 y 163.

"" Cfr. "Real provisión...en que...se encarga la substanciación sumaria de las causas de denuncias en las obras, bosques y sotos reales y la forma de los recursos al Consejo en Sala de Justicia" (A.H.N., "Colección de Reales Cédulas" núm. 1.925", de 28 de abril de 1.769).

expedientes sobre arreglo de aranceles"".

Finalmente también señalaba Escolano que llegaban a esta Sala algunos pleitos remitidos por el Rey o por la Sala primera de Gobierno"".

El auto acordado de 4 de agosto de 1.806 introdujo modificaciones en el ámbito de las competencias de esta Sala. A partir de entonces se pasaron a esta Sala todos los expedientes que hubiera en las de Gobierno y los que apareciesen en los sucesivos sobre la construcción o reparación de las iglesias parroquiales, así como sobre la provisión de sus ornamentos y vasos sagrados a costa de los partícipes de diezmos. Igualmente se despacharían en los sucesivos por la Sala de Justicia -y no por la primera de Gobierno, como se hacía hasta entonces-, los pleitos pendientes en la Real Audiencia de Mallorca. A la Sala de Justicia correspondería por tanto la vista y determinación de dichos pleitos"".

7) Competencias de la Sala de Provincia

La Sala de Provincia era el tribunal de apelación de las causas civiles de que conocían los Alcaldes de Casa y Corte. De esta manera le correspondían todas las apelaciones y recursos de los juzgados de Provincia y de los tenientes de Villa, siempre que la cantidad litigada en los pleitos no bajase de trescientos mil maravedís en los pleitos de provincia y de mil ducados en los de Villa"".

"" Por ejemplo, a esta Sala correspondía el estudio de los expedientes generales de aranceles de los Escribanos de Cámara y de Gobierno del Consejo. (Cfr. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1).

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", págs. 162 y 163.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 29.

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", págs. 343 y 344; y MARTÍNEZ DE VELASCO, J.A., "La Formación de la Junta Central", pág. 42.

Así se recogía en la Novísima Recopilación:

"Por encima de la suma de 300.000 maravedís y hasta 350.000 maravedís ó 1.000 ducados los llamados a juicio por la Sala de Alcaldes de Casa y corte eran juzgados por dos miembros de la Sala de Provincia del Consejo de Castilla""". Por encima de los 1.000 ducados, la llamada era llevada delante de la Sala de Mil y Quinientas.

El auto acordado de 4 de agosto de 1.806 no varió las competencias de esta Sala, "porque todos los negocios de su dotación son privativos e inseparables de ella, y no se le pueden agregar otros, porque necesita toda su actividad e incesante fatiga para despachar los propios""".

La mencionada Real Orden de 27 de abril de 1.815 estipulaba que sin perjuicio de que la Sala de Provincia determinase todos los pleitos radicados en ella, en lo sucesivo de cada seis negocios de su atribución, cuatro se repartiesen a la misma Sala, el quinto a la de Mil y Quinientas y el sexto a la de Justicia, las cuales lo despacharían por la Sala de Provincia""".

8) Otros aspectos sobre la competencia del Consejo de Castilla

a) Competencias de la llamada Sala de Tenutas

Todos los lunes hábiles de cada semana tras el Consejo pleno se reunía esta Sala especial formada por los Ministros de las Salas de Justicia del Consejo, estos, es, los de la de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia.

12. """. Novísima Recopilación, Libro IV, Título VII, Ley

núm. 29. """. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275

núm. 2a. """. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275

Propiamente no tenía por tanto carácter de una Sala del Consejo ni tenía un personal subalterno específico. La Sala de Tenutas se reunía para resolver los asuntos que le estaban encomendados y seguidamente cada ministro acudía a despachar a su respectiva Sala del Consejo.

La Sala de Tenutas debía tener un número no inferior a nueve Ministros para poderse formar. En caso de que este número fuera menor, el Ministro más antiguo debía acudir al Presidente o Gobernador de Castilla, quienes designaba de la Sala primera de Gobierno los ministros restantes hasta completar aquel número de nueve.

En esta Sala de Tenutas se veían propiamente tres clases de pleitos: los llamados pleitos de tenuta, los pleitos de reversión e incorporación a la Corona y los pleitos en grado de segunda suplicación.

1) pleitos de tenutas y de posesión de mayorazgos

Este recurso era totalmente voluntario y a instancia de parte. El pleito de tenuta propiamente era un juicio atípico entre el plenamente posesorio y el declarativo de propiedad. Se podía encargar la administración de los estados y mayorazgos a una persona que podía ser parte en el pleito o no.

En cuanto al procedimiento que se seguía, se iniciaba con los escritos de demanda y su presentación en los despachos oportunos; seguidamente se pasaba a la ratificación de los testigos, se comprobaba y cotejaba los testimonios expresados en el juicio y se compulsaban los instrumentos y documentos. Finalmente el pleito concluía con la sentencia pronunciada por la Sala de Tenutas, firmada y publicada.

2) pleitos de reversión e incorporación a la Corona

Eran aquellos pleitos sobre un estado, ciudad, lugar o villa, jurisdicciones y otros derechos enajenados por la Corona en diferentes épocas, sobre los que se planteaba una cuestión de reversión e incorporación a la Corona, de acuerdo con lo estipulado en el auto acordado del Consejo de 11 de octubre de 1720^{***}, referente a las mercedes concedidas por Enrique II, así como para los casos de defecto de título posesorio.

En esta Sala se veían todos los pleitos de incorporación y reversión a la Corona de los señoríos, tierras, jurisdicciones y demás derechos que por falta de un título legítimo, su poseedor pudiese acreditar la justa propiedad, o en su caso, su posesión frente a la Corona, ya que siempre que faltaba dicho título legítimo para poseer se entendía que era una intrusión y usurpación de los derechos de la Corona^{***}. En tales casos actuaba el Fiscal del Consejo en defensa de los derechos reales.

En cuanto a la tramitación de estos pleitos, era similar a la de los pleitos de tenutas y grados de segunda suplicación, pero era preceptiva su consulta previa al Monarca, especialmente en los pleitos de reversión a la Corona.

^{***}. Decía lo siguiente: "Los mayorazgos de las donaciones reales del Rey Enrique II son limitadas para los descendientes del primer adquiriente o donatario, no para todos, sino para el hijo mayor del último poseedor, de forma que no dejando éste hijos o descendientes legítimos, aunque tenga hermanos u otros transversales, hijos legítimos de otros que hayan sido poseedores, todos descendientes del primer donatario, no se extiendan a ellos los mayorazgos y se entiendan excluidos, habiendo llegado en tales casos el de la reversión a la Corona."

^{***}. En los derechos reales inmemoriales no era posible ejercer o poseer jurisdicción, señorío o vasallaje sin título expreso de concesión o delegación regia.

3) pleitos en grado de segunda suplicación

Este pleito se planteaba ante la Sala de Tenutas, pero para ser admitidos en la Sala debían reunir una serie de requisitos legales: en primer lugar, debían haberse iniciado en los Consejos, Chancillerías y Audiencias Reales por vía de demanda y no por vía de nulidad, reclamación u otra similar; el objeto del litigio no debía tener un valor inferior a 3.000 doblas en oro en las causas de propiedad, y a 6.000 doblas en oro en las causas de posesión; tampoco debían ser confirmatorias las sentencias de revista, aunque hubiesen sido confirmatorias o revocatorias de las sentencias dictadas en primera instancia.

Este recurso tenía carácter de recurso extraordinario y sólo era factible en las causas civiles y nunca de las criminales. Tampoco era posible utilizar este recurso en los pleitos de la Hacienda Real.

En cuanto al procedimiento, este recurso se introducía suplicando por segunda vez de la sentencia de revista ante el Consejo, con la pena y fianza a la vez -se perdía- de las 1.500 doblas que exigía la ley. Se aceptaba igualmente una escritura de fianza de la misma cantidad"".

Presentado el escrito de segunda suplicación, se notificaba a ambas partes litigantes y al Rey. La causa iba al Consejo Real, para que allí se hicieran los correspondientes emplazamientos. La Sala de Tenutas estudiaba el asunto y resolvía, publicándose seguidamente la sentencia firme y definitiva"".

"".. Si el suplicante era pobre, presentaba la caución juratoria de que si era vencido en el pleito pagaría la pena cuando mejorase su fortuna.

"".. Cfr. ley XI, Título XX, Libro IV; Ley IV, cap. V, Título XI, Libro IX; y autos acordados III, IV y V, Título XX, Libro IV de la Novísima Recopilación. A la reforma de este recuso de segunda suplicación se refirió también A. Argüelles en su "Discurso preliminar a la Constitución de Cádiz", op. cit., pág. 104.

b) La Sala de Apelaciones de Pleitos de menor cuantía.

Dos Alcaldes de Corte nombrados por el Presidente o Gobernador componían esta Sala de Apelaciones del Consejo. Conocía según Martínez de Salazar"" los pleitos cuyo interés no excediese de 300.000 maravedís.

Todos los meses se renovaba la composición de esta Sala, y el Gobernador podía reelegir a sus componentes. Los Alcaldes continuaban en su cometido mientras no fueran nombrados otros Alcaldes para cubrir sus puestos. En ausencia o enfermedad de alguno de los nombrados despachaba el que quedaba con el más moderno de los que fueron de Apelaciones en el mes anterior. De todo ello -nombramientos, sustituciones, etc.-, se levantaba el asiento correspondiente en un libro conservado en el Acuerdo de la Sala del Crimen"".

Las peticiones y mejoras de apelación de los pleitos de menor cuantía eran decretadas por los Escribanos de Cámara de la Sala del Crimen. Para realizar este cometido estos Escribanos se turnaban semanalmente.

Los pleitos en discordia de la Sala de Apelaciones los decidía el Alcalde más antiguo que no hubiera participado en la sentencia apelada"".

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo",
pág. 182.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo",
pág. 183.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo",
pág. 183.

c) Algunas notas sobre las visitas de cárceles que hacía el Consejo Real

1) La visita ordinaria de Cárceles

Desde muy antiguo existía la costumbre de que todos los sábados dos miembros del Consejo Real fuesen a las Cárceles Reales a visitar a los presos allí retenidos. Estas visitas eran muy importantes, como garantía regia de los derechos del sometido a prisión real. El objeto de estas visitas era por tanto en primer lugar saber las causas y conocer la justicia o injusticia de las prisiones, así como averiguar el tratamiento que se daba a los presos y el buen orden y decoro de la Cárcel. El motivo de que fuera el Consejo de Castilla el que realizase estas visitas era consecuencia de la piedad real y del carácter de Consejo del Rey que tenía el primer Tribunal de la Monarquía. El Consejo Real ejecutaba entonces esta piadosa costumbre en nombre del Rey, como muestra de la misericordia y generosidad de nuestros Monarcas¹⁷⁷⁷.

Esta ceremonia se realizaba de la siguiente manera¹⁷⁷⁸:

¹⁷⁷⁷. Ejemplos de visitas de cárceles durante el reinado de Fernando VII tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4. 019 núm. 68.

¹⁷⁷⁸. En alguno de los numerosos expedientes de visitas de cárceles conservados en el Archivo Histórico Nacional, aparece un pequeño reglamento de régimen interno, para regular la designación de Ministros que habían de asistir a cada visita. He aquí el texto de uno de estos reglamentos: "Todos los sábados de cada semana o el día último de abril de ellas, hace el Consejo visita de cárceles por medio de dos Señores Ministros, uno antiguo y otro moderno, exceptuando los camaristas, y cada uno de los demás debe hacer dos visitas a menos que se excusen por enfermos, u otro motivo, o presida en aquel día el Consejo, en cuyo caso deberá ir el que le siga.

Para que haya en esto la debida igualdad, se formará a

El sábado***, reunido el Consejo pleno, el Escribano de Cámara más antiguo después del de Gobierno, una vez concluido el despacho de Semanería, informaba al Consejo del nombre de los dos Ministros a quienes correspondía hacer la visita de cárceles, siguiendo para ello un riguroso turno. El más antiguo de los dos Ministros fijaba la hora en el mismo Consejo y a través de un portero se informa de ello

principio del año y se extenderá en este libro una lista de los Sres. Ministros del Consejo por su antigüedad, poniéndolos en dos filas por mitad, que la primera contendrá los más antiguos, y la segunda los modernos, y si hubiere no se pondrá el moderno más antiguo en la lista de éstos, v.g. si fuesen 27, los 14 serán de la lista de antiguos y los 13 de la de modernos.

Es del cargo del Escribano de Cámara más antiguo excepto los de Gobierno el hacer presente al Consejo, en los días de visita, los Sres. que deben concurrir a ella, y lo ejecuta después que el portero de estrados haya dicho que hay o no excusados, y después también de haber manifestado al Consejo el mismo Escribano de Cámara que no hay semanería.

Cuando se hubiere excusado alguno de los Sres que deben hacer en el día la visita, irá el que le siga por antigüedad, y quando el antiguo fuere de primera visita, también el moderno cumple el antiguo, con aquella sola visita, las dos que en otro caso debía hacer, pues habiendo de quedar una visita a otra un Señor Ministro que haya asistido a la anterior, está declarado que sea el menos antiguo el que haga las dos.

Para que se sepa los Sres. que han de hacer la visita, se irá formando semanalmente otra en dos alas en esta forma: a la izquierda se pondrán los que deben hacerla, y a la derecha los que por su turno se les siguen para que con facilidad pueda decirse al Consejo los que son en caso de haberse excusado alguno.

Quando se acaben las listas de antiguos y modernos volverá a empezar el turno por el principio de cada lista, y si acaeciese que la una se acabe antes que la otra, volverá a empezar ésta desde el principio y la otra seguirá hasta concluirse.

Si acaeciese también hallarse vacante el principio del año alguna plaza de Ministro y se le nombrare en el discurso de él, se pondrá el último de la lista de los Modernos, a menos que no traiga antigüedad a algunos otros, que en este caso se le pondrá en el lugar que le corresponda; y si entonces saliese en la lista de su clase un Señor Ministro más, se le pasará a la otra por el orden de su antigüedad para que queden iguales." (A.H.N., Consejos, Consejo y Cámara de Castilla, legajo 51.432 núm. 2).

***. Si el sábado era fiesta, la visita se realizaba el día anterior (MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 299).

a la Sala de Alcaldes y a los Tenientes de la Villa"".

A la hora señalada, por la tarde, los dos Ministros iban por separado en primer lugar a la Cárcel de Corte. Allí eran recibidos por los cuatro Alcaldes más modernos y el Fiscal de la Sala. También asistían dos porteros del Consejo, que esperaban a los Consejeros en el Pórtico de la Cárcel.

Habiendo llegado ambos Ministros, el más antiguo mandaba comenzar la visita. Así la relataba Martínez de Salazar"":

"El Alcalde más moderno, a quien corresponde tener el libro, lee las partidas de los presos que se visitan; el alcaide los manifiesta y a su presencia se hace relación de las causas por el Relator, y las determinaciones de el Consejo las escribe en el libro el Alcalde; y si la causa está en sumario, se manda despejar la Sala, y se hace la relación apuerta cerrada; y de las providencias del Consejo se pone certificación en las causas por los Escribanos de Cámara del Crimen, en cuyas Escribanías penden".

Una vez concluida la visita de la Cárcel de Corte salían los Ministros del Consejo acompañados de los Escribanos de Cámara, Relatores y demás subalternos de la Sala.

Seguidamente se dirigían en coche a visitar la Cárcel de la Villa, acompañados de dos alguaciles de Corte a caballo. En el pórtico de la Cárcel eran recibidos por el Teniente de Corregidor, quien les conducía a la Sala de estrados. Sentados allí, comenzaba la visita:

"Formado así el Tribunal, el Señor Ministro que preside manda dar principio a la visita, el Teniente más moderno lee las partidas del Libro, en que se sientan los presos de visita, el alcaide presenta los reos y a su presencia se hace relación de las causas por los escribanos del número, estando en pie y con capa de ceremonia, y las determinaciones las escribe el Teniente, y los Escribanos ponen copia de la misma resolución en el proceso"".

Tras concluir la visita, los dos Ministros del Consejo tomaban sus capas y sombreros y eran acompañados

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 296.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 297.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 298.

por los Tenientes de Corregidor hasta que tomaban sus coches y volvían separadamente a sus respectivas casas.

También señalaba Martínez de Salazar cómo antes de iniciarse la visita de cárceles, se debía dar cuenta a los Ministros del Consejo, mediante memorial, del número de presos que habían ingresado esa semana y desde la visita anterior, señalando además las causas por las que fueron hechos presos, las sentencias dictadas contra ellos y otros datos"".

El Consejo en estas visitas ordinarias de cárceles no indultaba ni conmutaba penas, pues esto sólo correspondía a los jueces. Pero sí podía mandar soltar presos, si consideraba su prisión injusta, de lo que proveyesen los Ministros del Consejo en una visita de Cárceles no cabía apelación ni súplica. Por otro lado, las sentencias que el Consejo diese en Visita en las causas determinadas en vista por la Sala, causaban revista"".

Una nota a la Sala (17 de Mayo)

2) Visita General de Cárceles que hacía el Consejo la víspera de las Pascuas de Navidad, Resurrección y Espíritu Santo.

En estas fechas acudía todo el Consejo de Castilla a visitar las Cárceles de Corte y de Villa"".

El día anterior al de la Visita, el Escribano de Gobierno prevenía al Presidente o Gobernador para que señalase hora para la Visita del día siguiente. Normalmente los Ministros de las Salas de Gobierno acudían a las 9 de la mañana a casa del Presidente, y los demás a las 9 y media. Esto era así porque en esa media hora aquéllos despachaban con el Presidente los asuntos gubernativos pendientes y otras de urgente providencia.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 298.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 302.

"" Un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.033 núms. 31 y 35.

Concluido el despacho, salían los Ministros a oír la misa que el capellán del Consejo celebraba en el oratorio del Presidente. También asistía a esta misa el Alcalde Decano de la Sala. Finalizado el acto litúrgico, salían los Ministros a tomar los coches de dos en dos, según su antigüedad, empezando por el Alcalde Decano, los Fiscales y los Ministros del Consejo, de más modernos a más antiguo. De esta manera y con solemne ceremonia llegaban a la Cárcel de Corte, donde se reúnen solemnemente todos, junto con los Alcaldes de Corte, los Escribanos de Cámara y los Relatores del Consejo, con los de la Sala y otros subalternos. Y todo ello bajo la presidencia del Presidente o Gobernador del Consejo''''.

Así describía Martínez de Salazar la continuación de la ceremonia'''':

"Luego que se sienta el Consejo (...) se entrega al Señor Presidente o Gobernador del consejo un Memorial, con expresión de todos los presos de la Cárcel, y de orden de qué jueces; y otro igual memorial se pone en manos del Señor Ministro del Consejo que gobierna la Sala.

El señor Presidente o Gobernador del Consejo, haciendo señal con la campanilla, manda dar principio a la Visita con esta expresión: "Empiece la Visita", e incontinenti el Alcalde de Corte más moderno, a cuyo cargo está el libro de acuerdos, en alta voz, sin levantarse de su asiento, da principio a llamar a los presos conforme se hallan en el libro, en esta forma: "Presos por el Rey nuestro señor", y uno de los porteros de la Cárcel, que debe estar presente con la lista de los presos que se han de visitar, responde: "No los hay". Pero si los hubiere dice: "Presos hay y no piden Visita"; y la misma expresión se hace por lo respectivo a los presos de orden de los Consejos, Junta de Obras y Bosques, la del tabaco, Comercio y demás Tribunales Reales y Eclesiásticos. Siguense después los presos de la jurisdicción ordinaria de la Sala, y conforme están apuntados en el libro, se les llama uno por uno, y el portero responde al Consejo: "pide Visita". y puesto el reo a su presencia, si la causa no se puede ver en público por estar en sumario, lo hace presente el Relator, y se manda reservar para hacer la relación a puerta cerrada; pero no estando en sumario, se da cuenta en público, decreta el Consejo y el Alcalde más moderno escribe la determinación en el Libro de Acuerdos, y así se continúa hasta finalizar la Visita; y si los presos presentan algún pedimiento, corresponde dar cuenta al Escribano de Cámara de el Crimen a quien toca.

Para la visita de las causas que están en

'''' MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 306 y 307.

'''' MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 307 y 308.

sumario, el señor Presidente hace señal con la campanilla y manda despejar la Sala, y a puerta cerrada, hallándose presentes los Escribanos de Cámara y Relatores del Consejo, y los de la Sala, se hace relación de las causas y se determinan por el Consejo".

Una vez concluida la visita de presos, el Alcalde más moderno pedía el auto de Pascuas, que publicaba el Ministro más antiguo del Consejo. Este auto decía lo siguiente"":

"Todos los que se hallen presos en esta Real Cárcel por deudas, que no descuidan de delitos vel quasi, puedan salir por término de cuarenta días, dando fianza de la haz ante Escribano de Provincia, o Número, que sea dueño de su oficio, y tenga desembarazada la tercera parte. Los que están presos en sus casas, y los que tengan Villa y Arrabales por cárcel, puedan salir libremente unos y otros por el mismo término, todo en honor de estas santas Pascuas".

Terminado el acto, los Ministros en ceremonia se trasladaban a la Cárcel de Villa. Esta visita también se hacía por la mañana. Allí eran recibidos por los Tenientes de Corregidor y de dos en dos llegaban hasta la sala donde se formaría el Tribunal. Seguidamente el Presidente mandaba comenzar la Visita y el teniente más moderno llamaba a los presos. El Alcaide iba presentando a éstos uno a uno y la situación de su causa. El teniente escribía de su puño y letra en un libro lo que el Presidente determinase. A esta Visita asistía también el Escribano de Cámara más moderno del Consejo y le correspondía a él y no a los escribanos de número hacer las peticiones en favor de los presos"".

El corregidor de Madrid y sus tenientes no tenían voto en las Visitas de Cárcel de Villa para la concesión de libertad a los presos; pero sí podían informar y su asistencia era obligatoria"". Sólo a partir de 1.831 y a petición de los propios Tenientes de Corregidor de Madrid, se permitió que asistiese cada año solo uno de aquéllos, concurriendo alternativamente"".

""., MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 308 y 309.

""., MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 309 a 311.

""., MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 311.

""., A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.912 núm. 3, "Expediente sobre incomodidades que les causa a los tenientes de Corregidor de Madrid la concurrencia de ambos Tenientes a las visitas semanales que hace el Consejo a los

La Visita concluía también con el auto de Pascuas, tras el cual los Consejeros se retiraban a sus casas.

Así, por ejemplo, en el año 1.816 el Consejo hizo sus tradicionales Visitas de Cárceles por Pascua. En Resurrección la Visita tuvo lugar el 6 de abril y fue presidida por el Sr. Vilches, como decano del Consejo, pues el Presidente del Consejo se encontraba en Cádiz representando al Monarca en una boda real. En aquella ocasión no había ningún preso en la Cárcel de Villa por el Presidente de Castilla ni por el Consejo. Cuatro presos pidieron visita a los Ministros del Consejo. De toda la Visita se levantó el acta correspondiente, en el que se señalaba una relación nominal de los presos que estaban en aquella Cárcel¹⁷⁹⁹.

Existía una Visita de presos más. Era la realizada por el Consejo en las Pascuas del año, después de la Visita General. Esta visita particular se hacía a los que se hallaban presos por deudas¹⁸⁰⁰. El Rey contribuía todos los años con mil ducados para sufragar las deudas de los pobres y para ayudar con ello a los acreedores perjudicados por este motivo. Esta Visita la hacía el Ministro del Consejo más moderno. Iba a las nueve de la mañana solo a la Cárcel de Corte. Allí era recibido por el Alcalde de Corte más antiguo de la Sala, los Escribanos de Cámara del Crimen y dos porteros del Consejo de Castilla.

El transcurso de la Visita era similar a las anteriormente relatadas. Sentado el Ministro en una sala, iban pasando los distintos presos por deudas, llamados por el Alcalde, y el Escribano relataba las circunstancias de cada uno. tenía la peculiaridad que los acreedores estaban

presos de Villa". Resolvió en aquella ocasión el Consejo lo siguiente: "Dígaseles que en consideración a lo que exponen, permite el Consejo que a las visitas ordinarias de cárceles, concurre uno solo alternativamente a calidad de instruir a la visita de las causas o negocios de que hubiese de darla razón el que no concurre; pero debiendo asistir todos los Escribanos a quienes corresponda hacerlo."

¹⁷⁹⁹. La única novedad de aquella Visita fue que cuando el Ministro más antiguo tras Vilches, el Sr. Colón, se levantó para publicar el auto de Pascuas, se le dijo que no debía hacerlo y no lo hizo. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.033 núm. 31). Pocas semanas después tenía lugar la Visita por Pascua de Pentecostés. En aquella ocasión tampoco había ningún preso del Consejo en la Cárcel de Villa (legajo 4.033 núm. 35).

¹⁸⁰⁰. En A.H.N., Consejos, legajo 51.432 núm. 7, se recoge un caso de visita del Consejo por deduas e incluye las actas de una de estas visitas.

presentes y por unos jesuitas se les ofrecía una cantidad a cambio de redimir al cautivo y rescindir la deuda, y según los casos se llegaba a un acuerdo o no.

La Visita de presos por deudas continuaba seguidamente en la Cárcel de Villa, con una ceremonia parecida. El que llamaba a los presos en esta ocasión era el teniente de corregidor más moderno, y él también anotaba en el libro las determinaciones correspondientes. Y eran los escribanos de número los que hacían relación de los autos.

"Por la Escribanía de Cámara de Gobierno de la Sala se hace asiento de los presos por deudas en la Cárcel de Corte, en el libro por donde se hace la Visita; y en la Cárcel de la Villa lo ejecuta el Alcaide; y dos días antes de la Visita de deudas, los Alcaldes de una y otra Cárcel dan aviso por escrito a los Escribanos de Provincia y del Número para que ocurran a hacer relación de los autos"

3. Competencias de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte

La Sala de Alcaldes tenía funciones como tribunal criminal y como tribunal civil, entre las que destacaban las de juzgar casos de corte, mantener el orden público, vigilar el cumplimiento de las leyes, funciones de policía, otorgamiento de licencias para establecimientos públicos, etc. Correspondía también a la Sala la custodia y mantenimiento de la Cárcel de corte "".

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 315 y 316.

"" SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "Estudio institucional de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte", pág. 13. En consulta de oficio de 6 de agosto de 1.818 del Consejo de Castilla, se consultaba al Monarca sobre una petición del Ayuntamiento de Madrid para que se le exonerase de la manutención de los presos de la Cárcel de Corte, y que se entregase a la Sala como estaba en 1.808. Por lo visto en aquel año se hizo cargo el Ayuntamiento de estos gastos y debió entonces acudir a diversos arbitrios para sufragar este gasto (A.H.N., Consejos, consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.084, consulta del 6 de agosto de 1.818).

Básicamente correspondía a la Sala de Alcaldes el gobierno económico y político de la Villa y Corte, función que compartía con otras dos instituciones: el Ayuntamiento y la Superintendencia de Policía"". Las tres instituciones juntas constituían el régimen municipal"".

De esta manera quedaban bajo la supervisión de la Sala muchos aspectos de la vida cotidiana de Madrid: abastecimientos y precios de productos, limpieza y policía urbanas, higiene y salud pública"", vigilancia de calles

"". En algunos periodos la Superintendencia de Policía estuvo unida a la Sala de Alcaldes (A.H.N., Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 4.150: "Real Cédula (...) en que se manda guardar (...) el Decreto (...) por el que se crea un Juez de Policía para Madrid y su rastro, que siendo Gobernador de la Sala, desempeñe tan importante encargo con inhibición de todo otro juez o tribunal"). Así, el Gran Duque de Berg en decreto de 14 de junio de 1.808 resolvió que la Sala se encargase exclusivamente de la Dirección de la Policía Superior de la Corte. Debía para ello ponerse de acuerdo con el General Grouchy, Comandante General de las Tropas Francesas. Sabemos también que por aquella época el cargo de Superintendente de Policía estuvo unido al de Gobernador de la Sala y que en otras ocasiones lo ejerció un Alcalde de Corte (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.398, año 1.808).

"". DELEITO Y PINUELA, J., "Sólo Madrid es Corte", Madrid, Espasa Calpe, 1.942, pág. 138, citada por SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "Estudio institucional de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante el reinado de Carlos III", pág. 34. Al respecto señalaba Desdevises: "La municipalidad de Madrid no tenía en el gobierno de la ciudad más que una importancia en todo caso de tipo secundario; la autoridad real pertenecía al Corregidor de la Villa, a la Sala de Alcaldes y al Consejo" (DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1.808", pág. 83). El mismo autor, en su estudio sobre las instituciones españolas del siglo XVIII afirmaba: "El Rey había retirado poco a poco el gobierno de la Villa de Madrid al ayuntamiento y los verdaderos administradores de Madrid eran funcionarios reales: el Gobernador del Consejo de Castilla, los Alcaldes de Casa y Corte y los alcaldes de barrio" (DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 216).

"". Por ejemplo, cfr. A.H.N., "Colección de Reales Cédulas", núm. 5.234, Bando de 15 de junio de 1.815 de los Alcaldes de Corte mandando que los perros no andasen sueltos por las calles; en la misma línea, núm. 5.200, de 14 de abril de 1.815, "Bando de los Alcaldes de Casa y Corte, dando normas contra los perros sin dueño".

y establecimientos públicos, mesones y posadas""', recaudación de fondos y su distribución; funcionamiento de los hospitales de Madrid; asilos de mendicidad y escuelas; levas y reclutamiento""'; organización y mantenimiento del orden en los espectáculos públicos de Madrid: funciones de toros, teatros, etc. También colaboraba en la organización y orden de ceremonias religiosas como fiestas""' o procesiones""', y de las grandes solemnidades de la Corte.

[El origen antiguo de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte parece que estaba en el enjuiciamiento de los llamados casos de Corte, es decir, de los delitos que se cometían donde estaba instalada la Corte. Para ello estaba fijada una jurisdicción de la Sala, equivalente a un número de leguas alrededor de donde permanecía la Corte. Era el llamado Rastro del Rey.

Por una Real Cédula de 13 de junio de 1.803 se amplió este ámbito especial de jurisdicción otorgada a la

""'. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.094, consulta del 26 de enero de 1.828: "Consulta a S.M. su parecer acerca de la Sala de Alcaldes de la Real Casa y Corte y exposición del corregidor de una villa relativa a que se declare a quién corresponde dar o negar los permisos para establecer fondas, posadas y demás de que habla el artículo 13 del Reglamento de Policía y el 20 del Real Decreto de reforma de ella"; Sala de Gobierno, legajo 2.803, núm. 49, "auto y bando de la Sala de Alcaldes sobre posadas". Al parecer, esta competencia entre la Sala y el corregidor venía de años antes. En 1.827 hubo ya un expediente del Consejo de Castilla en el que se estudió este conflicto (cfr. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.761 núm. 16).

""'. A.H.N., "Colección de Reales Cédulas", núm. 2.578, de 19 de junio de 1.781, "Edicto del corregidor de Madrid haciendo saber a las justicias de las villas y lugares comprendidos en las siete leguas del rastro y contorno de la Corte, que las causas de levas de los pueblos se consulten con la Sala de Alcaldes de Corte, y se remitan los reos rematados".

""'. Por ejemplo, el 22 de junio de 1.815 publicaba un bando la Sala de Alcaldes prohibiendo el uso de sonajas, zambombas, etc., las noches de San Juan y de San Pedro (A.H.N., "Colección de Reales Cédulas", núm. 5.237).

""'. Por ejemplo, cfr. A.H.N., "Colección de Reales Cédulas del A.H.N.", núm. 5.189, 16 de marzo de 1.815, "Bando de los Alcaldes de Casa y Corte dando normas con motivo de la procesión de Semana Santa".

Sala de Alcaldes"". Hasta entonces, la jurisdicción pleno en lo civil y penal de la Sala estaba circunscrita a cinco leguas alrededor de la Corte. Fuera de este territorio, tenían jurisdicción las Chancillerías de Valladolid y de Granada. Como se planteaban muchos problemas con la estrecha delimitación territorial de las competencias de la Sala - problemas de competencias con las Chancillerías y problemas de eficacia en el cumplimiento de sus cometidos-, y tras varias consultas al Rey, por la Real Cédula de 13 de junio se extendía la jurisdicción exclusiva de la Sala a diez leguas alrededor de la Corte para las causas criminales y para las civiles en apelación de menor cuantía".

La Sala funcionaba en Sala plena y seguidamente en dos Salas llamadas de Corte"". En principio las dos entendían en materias penales. Las apelaciones civiles se distribuían entre las dos Salas de Corte".

"". A.H.N., "Colección de Reales Cédulas", núm. 4.009, de 13 de junio de 1.803, "Real Cédula mandando que la Sala de Alcaldes de casa y Corte (...) ejerza su jurisdicción criminal en (...) los pueblos comprendidos en las diez leguas (...) de Madrid (...)"; y núm. 4.311, de 22 de agosto de 1.806: "Lista de los pueblos de la nueva jurisdicción de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte ampliada a las diez leguas por Real Cédula de 13 de junio de 1.803". El geógrafo Tomás López elaboró la lista de los pueblos a los que se extendía la jurisdicción de la Sala. "En ella figuraban 2 ciudades, 237 villas, en su mayor parte de señorío, 26 lugares, 9 aldeas y algunas otras entidades de menor consideración, con una población de 45.619 vecinos" (BERMEJO CABRERO, J.L., "Dos notas sobre la Sala de Alcaldes de Casa y Corte", en Estudios de Historia del derecho y de las instituciones, Colección Aula Abierta, págs. 179 y 180).

"". Para las causas civiles de mayor cuantía tenía competencia sólo la Sala de Mil y Quinientas, a excepción de las causas de hidalguías, para las que era competente la Chancillería (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089 núm. 14; y legajo 2.881 núm. 1).

"". En ocasiones extraordinarias podían refundirse ambas Salas en una sola. Así ocurrió, por ejemplo, por Real Orden de 23 de marzo de 1.808, con motivo de la entrada de los franceses en la Corte (cfr. EVOLUCIÓN HISTÓRICA; A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1.808, fol 356 y ss.).

"". Por Real Cédula de 19 de abril de 1.785: "Cédula de S.M. (...) por la cual se manda en ampliación de lo dispuesto en la de 6 de octubre de 1.768, que en el despacho de las causas que vayan en apelación a la Sala segunda de Corte, ya sean de los juzgados de Provincia, de los Alcaldes, o de los Tenientes de Villa, seguarde turno entre la Sala primera y

La jurisdicción de la Sala estaba dividida en dos partes: por un lado, la Sala funcionaba como un Consejo y tenía jurisdicción absoluta y suprema para lo criminal, sin apelación ni súplica de sus sentencias. En esta línea conocía la apelación de las causas criminales juzgadas en primera instancia por los tenientes del Corregidor de Madrid. Y conocía de todas las causas de hurtos, robos y otros delitos. Para cumplir este cometido, podía imponer toda clase de penas, excepto la pena de muerte, para la que debía consultar antes al Rey;

Por otro lado tenía otra jurisdicción en que los Alcaldes, como jueces ordinarios civiles, conocían en primera instancia los pleitos entre partes. En este caso las apelaciones se presentaban ante el Consejo de Castilla".

Señalaba Martínez de Salazar" que existía una serie de pueblos que aunque incluidos en la extensión territorial de la jurisdicción de la Sala, se encontraban eximidos de esta jurisdicción en primera instancia. Eran los de Valdemoro, Chamartín, Maudes, Mejorada, Cubas, Villa del Campo, Fuente el Saz, Arganda, Algete, Daganzo de Arriba, Cobeña, San Martín de la Vega, Torrejón de Velasco, Alcobendas, Torrelodones, Daganzo de Abajo, Ciempozuelos, Polbaranca, Leganés, Villafranca del Castillo y Torrejón de Ardoz.

Era obligación suya hacer observar las leyes y pragmáticas y Reales Ordenes", así como todas las

la segunda empezando por ésta: de forma que de tres causas han de quedar dos para la Sala segunda y la tercera ha de ser para la primera" (A.H.N., "Colección de Reales Cédulas", núm. 2.841).

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 317, citado por SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "La Sala de Alcaldes de Casa y Corte en el reinado de Carlos II", pág. 44.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 319.

"" La correspondencia oficial entre la Sala de Alcaldes y los corregidores debía oficiarse, según antigua costumbre, por medio del Escribano de Gobierno de la Sala. En 1.814 se planteó un conflicto con el corregidor de Madrid, quien quería que las órdenes le fueran comunicadas por medio del Escribano de Gobierno del Consejo o alguno de Cámara, o directamente por el Gobernador de la Sala o por alguno de sus Alcaldes. Ante una Real Orden de 6 de octubre de 1.814 en la que se permitía al Gobernador de la Sala o a los Alcaldes pasar por sí los oficios que se presentasen al corregidor de Madrid, fue el Consejo de Castilla el que en esta ocasión protestó, en expediente de 11 de noviembre de 1.815, por ser

disposiciones de gobierno del Consejo de Castilla.

Entre las competencias de la Sala de Alcaldes, Martínez de Salazar mencionaba algunas otras: correspondía a la Sala mandar hacer las visitas de los gremios""; las apelaciones de las causas criminales de que conocieren los corregidores y tenientes de Madrid; igualmente era informada la Sala inmediatamente por los tenientes de corregidor de las causas emprendidas sobre aprehensión de armas de fuego prohibidas"".

Otros asuntos de los que conocía la Sala de Alcaldes eran los siguientes: había ciertos negocios referentes a toda la nación y causas de especial importancia. Rosa Isabel Sánchez Gómez"" -al igual que Martínez de Salazar""- menciona como ejemplos "el procedimiento contra espías, apresamiento de naves, alistamiento de tropas enemigas, entrega de cartas a ellas, rebeliones, conspiraciones, excesos de compañías de soldados alojados en los pueblos y, en general, todos aquellos asuntos que parecía conveniente remitirla. Asimismo, podía continuar y determinar algunos autos criminales, ya empezados anteriormente por los justicias de los pueblos situados fuera de las cinco leguas del rastro de la Corte. Estas causas se remitían primero al Presidente del Consejo de Castilla, que daba luego comisión a la Sala para que las continuase".

Para el logro de una mayor eficacia en el cumplimiento de los cometidos de la Sala, el territorio de su jurisdicción se encontraba dividido en varios cuarteles, de cada uno de los cuales era responsable un Alcalde que vivía en el término del mismo.

este Supremo Tribunal la autoridad superior de ambas. (A.H.N., Consejos, consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.075, consulta del 11 de noviembre de 1.815).

"" A.H.N., "Colección de Reales Cédulas", núm. 1.869, de 21 de junio de 1.768, "Real Cédula declarando las causas en que por apelación debe conocer la Sala de Alcaldes, tocantes a los gremios menores"; y núm. 1.877, de 24 de julio de 1.768, "Real Cédula declarando las causas que por apelación debe conocer y determinar la Sala de Alcaldes tocantes a los gremios menores".

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 334 y ss.

"" O.cit., pág. 45.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 320.

Por otro lado, la Sala funcionaba en algunas ocasiones como Quinta Sala del Consejo de Castilla que era. Así, asistía a las consultas de los viernes con el Monarca, participaba junto al Consejo en las ceremonias de la Corte y tenía facultad de consultar al Monarca asuntos de su competencia''''.

Incluimos también en este apartado de competencias algunas notas sobre el funcionamiento de la Sala. Sabemos que la Sala para la determinación de las causas criminales tenía lugar por las mañanas, de lunes a viernes, con el mismo horario del Consejo de Castilla. Antes de comenzar la audiencia los Alcaldes escuchaban misa en el altar instalado en una de las antecámaras del edificio y seguidamente pasaban a la Sala de Acuerdos.

En los días de audiencia, cuando acudía el Gobernador de la Sala, salían a recibirle a la puerta de la calle el Alcalde de la Cárcel y los alguaciles de guarda, quienes le acompañaban hasta la sala de estrados. Inmediatamente el portero le entregaba la lista de presos que habían ingresado en la Cárcel en las últimas 24 horas, junto con los datos de su causa. Todo ello se encontraba asentado en el Libro de entradas de presos''''.

En la Sala de Acuerdos entraba el Gobernador y tras él todos los Alcaldes de Corte. Tras una señal del Gobernador con la campanilla, el Escribano de Cámara semanero entraba a dar cuenta de las novedades comunicadas desde el reposo Mayor, así como de otras noticias sobre abastos, rondas, paseos, comedias y una relación de heridos en los hospitales de la Corte.

Delante de todos los Alcaldes, el Gobernador firmaba y sellaba el pliego de noticias que inmediatamente se enviaba al Rey, a través de un alguacil de guarda que lo llevaba al Consejo de Castilla''''.

En la reunión se informaba a los Alcaldes de

'''''. Así, por ejemplo, el 25 de junio de 1.825 la Sala consultaba la extinción de la comisión militar ejecutiva de la Corte entonces existente, por haber cesado las causas que habían motivado su creación (A.H.N., Consejos, consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.090).

'''''. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 322.

'''''. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 324. Concretamente lo entregaba a uno de los porteros de la Sala primera de Gobierno. En los días festivos el Alcalde Semanero firmaba dos pliegos -uno para el Rey y otro para el Gobernador del Consejo- y lo llevaba para su firma al domicilio del Gobernador de la Sala.

todas las novedades ocurridas desde la última reunión el día anterior. Leía la lista de los presos ingresados y el Alcalde semanero daba detalles de las circunstancias de cada uno.

Remitido el pliego diario al Rey y al Gobernador del Consejo, seguidamente se formaba la Sala criminal, para lo que tocaba la campanilla el Gobernador de la Sala. Seguidamente iba a la Sala de la audiencia, seguido por los Alcaldes correspondientes. Una vez instalada la audiencia, comenzaba el despacho de los asuntos pendientes y se votaba y determinaba las causas, sentencias y acuerdos. Parece ser que todo quedaría reflejado en los llamados Libros de Acuerdos, que llevaba el Alcalde más moderno"".

Tres días a la semana -lunes, miércoles y viernes- se hacía audiencia pública. Parece que inicialmente el Escribano de Gobierno presentaba las peticiones de la acusación pública y que seguidamente los Fiscales presentaban sus alegaciones. Eran conocidas las pruebas y los reos llevaban a cabo su defensa, ayudados por abogados probablemente. A continuación se hacía relación por los Relatores de las causas concluidas y finalizada la relación y los informes de los abogados, se levantaba la Sala"".

En la resolución de las causas civiles debían intervenir al menos cinco Alcaldes. Como en el caso de los Consejeros de Castilla, en caso de ausencia o enfermedad de alguno de los Alcaldes de un pleito, se buscaba un sustituto entre los restantes Alcaldes de Corte.

Levantada la Sala, se dirigían Gobernador y Alcaldes a la Sala del Acuerdo, donde continuaba la audiencia. Concluida ésta, se levantaba la sesión y los Alcaldes y subalternos del Consejo presentes acompañaban al Gobernador hasta la salida.

La resolución de las causas y expedientes por la Sala llevaba consigo una serie de gastos que se incluían en el presupuesto anual de la Sala. Sabemos por ejemplo que anualmente se empleaban aproximadamente unas 50 resmas de papel de oficio para el despacho de las causas y otras 70 resmas de papel de otras clases"". Por otro lado, el gasto

"" SANCHEZ GÓMEZ, R. I., op. cit., pág. 53.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 327 y ss.

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.398, año 1.808. En febrero de 1.808 se abonó una cuenta de 5.226 reales, correspondientes a 41 resmas de papel superfino de Romani, 7 resmas de marquilla fina, 20 resmas de taplete y 52 pliegos de calendarios. El año anterior la cuenta de papel había ascendido a 4.609 reales.

de cera ascendería anualmente a unos 18.000 reales"".

4. Funcionamiento del Consejo

1) Consejo pleno y Salas

En diciembre de cada año el Gobernador del Consejo de Castilla presentaba al Rey una lista de Consejeros y Alcaldes y las Salas donde ejercerían su ministerio al año siguiente. Aprobado el reparto por el Rey, el Gobernador leía a principio de año en Consejo pleno reunido en la Sala de Gobierno la Real Resolución. En esta lectura estaban también presentes los Escribanos de Cámara y Relatores del Consejo"". En este reparto se señalaba también el nombre del Gobernador de la Sala de Alcaldes y el del Juez de Ministros. Los nuevos Ministros que ingresaban en el Consejo una vez realizado el reparto eran distribuidos en las Salas donde hubiese vacantes por el Gobernador"".

Por otro lado, la distribución en Salas no era ni mucho menos inamovible: el Gobernador podía variar esta distribución o cambiar a algún Consejero de Sala, si las necesidades del servicio lo exigían"".

El horario de trabajo variaba de verano a invierno. Teóricamente había dos épocas. Desde principios de

"". De 21 de diciembre de 1.807 a 8 de abril de 1.808 la Sala consumió 262 libras de cera. Si cada libra costaba 18 reales, el gasto de cera en ese periodo fue de 4.716 reales. (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1.808, libro núm. 1.398).

"". MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 27.

"". CORDERO TORRES, "El Consejo de Estado", pág. 59.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 75.

mayo hasta finales de agosto. Y para verificar el cumplimiento de este horario había un reloj en la Sala primera de Gobierno y marcaba tanto la entrada como salida de la audiencia"".

Sin embargo, la medida de cambio de horario debía ser tomada por el Gobernador o por el Decano Gobernador interino en su caso, según las condiciones climáticas. En todo caso, las sesiones para los Consejeros y Fiscales duraban tres horas por las mañanas. Para los demás empleados, la jornada matutina se prolongaba al menos una hora o dos horas más, ya que al concluir sus trabajos los Consejeros se abría al público el Consejo durante dos horas"".

De esta manera, el horario habitual matutino de verano era desde las siete a las diez horas; y el de invierno, de ocho a once horas. En periodos de extrema dureza del invierno se retrasaba a veces una hora más el horario. Esto ocurrió por ejemplo el 2 de diciembre de 1.831, en que por la crudeza de la estación se fijó la jornada de trabajo de 10 de la mañana a 1 de la tarde"".

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", tomo I, pág. 26.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 47; y legajo 3.910 núm. 9. Sin embargo, en la práctica era frecuente que los empleados llegaran tarde al Consejo y que las dos horas que estaba estipulado que trabajasen en la burocracia del Consejo no se cumplieran. Muchas veces se llevaban trabajo a casa, donde preferían trabajar a hacerlo en las oficinas del Supremo Tribunal. Así lo manifestaba el Escribano de Gobierno don Valentín Pinilla en un escrito de 7 de agosto de 1.826: "Muchas veces los dependientes extraen de la oficina los negocios que han de despachar llevándolos a sus casas para hacerlo. A pesar de haber tratado de esto en el reglamento, prefiriendo las horas de asistencia, sirve de pretexto para no concurrir hasta la señalada para abrir la oficina al público, y aún mucho después, no siendo la primera vez que ha sucedido tener las gentes que esperar en la escalera a que vengan los dependientes para poder abrir y, aún abierta, a que concurra el oficial que ha de darles las razones que necesitan...Ha sucedido también alguna vez en las horas del Consejo necesitarse algunos papeles o noticias, mandar por ellas a la oficina con el que me asiste a la mano, y no poderse hallar ni llevar hasta otro día, por no encontrarse en dichas horas dependiente alguno en ella, y tener cada cual guardados en su papelería los papeles que se necesitan o ha de dar aquellas noticias".

"" En esta ocasión fue solicitado por los propios Consejeros y concedido por el Decano. Como motivos se alegaron, además de los climáticos, la avanzada edad de la mayor parte de los Ministros, la distancia de la casa de los

Parece ser que oficialmente no existía un horario de trabajo de tarde para los Consejeros, pero sí para los demás empleados del Consejo, quienes con frecuencia debían acudir a las oficinas del Consejo incluso en días festivos"". Sin embargo, sí parece que los Consejeros asistían con frecuencia a reuniones o comisiones por las tardes"", y que estas sesiones se prolongaban hasta las ocho de la tarde muchas veces. Por otro lado, por otras fuentes conocemos que los Ministros solían dormir siesta y que solían también llevar trabajo para casa, como lo demuestra la necesaria recogida de papeles en las casas

Consejos y el respetuoso respeto de las disposiciones legales y del Real Servicio con esta medida (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.910 núm. 9).

"". "(Los días de diario) los dependientes se deben presentar a las diez de la mañana y aprovechando dos horas en los trabajos antes de abrirse aquella para el público, atendiendo aquella con la misma puntualidad en las tres horas señaladas de la noche en invierno, y por la tarde en verano, refutándoseles la asistencia como una de sus principales obligaciones... Está prevenido igualmente en el Reglamento su concurrencia en las mañanas de los días festivos, no sólo por lo que puede ocurrir y ocurre del momento, sino porque en ellos se arreglan papeles, se hacen buscas de antecedentes antiguos que son necesarios y no están tan a la mano como los corrientes y hacen otros trabajos útiles que no pueden ni queda tiempo para ejecutarse en los días de labor. Pero, aunque efectivamente asisten, no se aprovecha el tiempo como corresponde por no guardar uniformidad en las horas de asistencia, viniendo cada uno a la que le parece. Y es igualmente de necesidad que otra de sus obligaciones sea la de concurrir en los referidos días festivos por lo menos desde las 9 hasta las 11. Sería útil establecer este sistema de un modo útil y conveniente, y que en los casos de urgencia y necesidad o que lo requiera un negocio en particular, lo ejecuten a las horas que lo señale un jefe sin exceptuar la noche... Valentín Pinilla, 7 de agosto de 1.826" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 47, informe del Escribano de Gobierno Pinilla con una serie de propuestas aprobadas por el Consejo pleno el 4 de noviembre de 1.826).

"". "Los Consejeros, además de asistir y votar en su Sala o en el pleno, desempeñaban -previa terna propuesta por el Presidente al Rey-, comisiones o encargos especiales; juzgado de ministros, especie de inspección de los funcionarios, representación en los Consejos de las Ordenes y Tribunal de Competencias, superintendencias de la Serena, Canales de Alcira y Valladolid, juzgados protectores de los ducados de Alcalá y Ayala, conservación de los hospitales de Madrid y de los viñadores de Valladolid, de cofradías, hospitales y colegios, y otros sin fin, incluso de las fundaciones de los jesuitas, al ser su Orden extinguida" (CORDERO TORRES, J., "El Consejo de Estado", págs. 64 y 65).

mortuorias de los Ministros''''.

Todos los días había audiencia en el Consejo, excepto domingos y festivos, y algunas fechas especiales'''''. La audiencia comenzaba por oír misa en la Sala de Mil y Quinientas. Tenía lugar como un acto más dentro de la jornada de trabajo. El horario habitual era las 7 de la mañana en invierno y las 8 en verano, de acuerdo con el horario fijado en el Consejo en cada estación. Desde antiguo había la costumbre que uno de los Ministros del Consejo que eran clérigos era el encargado de decir la misa. Si no había ninguno sacerdote o en otra circunstancia, decía la misa el capellán del Consejo. Las tres horas de despacho comenzaban a computarse desde el final de la misa'''''.

Oída la misa, los Consejeros, probablemente tras desayunar en el mismo Consejo, entraban a estudiar los temas. Pasaba el Presidente, Gobernador o en su caso el Decano a la Sala primera de Gobierno, subía al estrado y

'''''. Sobre la forma de trabajar de un Consejero, ver A.H.N., Consejos, legajo 3.951: contiene este legajo un prontuario de apuntes del Consejero Larrumbide, recogido por el Consejo a su fallecimiento. Nos da una idea aproximada de cómo llevaba sus asuntos un Ministro: clases de asuntos y expedientes que estudiaba (por ejemplo, en este caso, cementerios de los pueblos del Arzobispado de Toledo y del territorio de las Ordenes Militares, con expresión de su respectivo número y estado). Larrumbide añadía notas como "pendiente", "fenecido" y comentarios con letra pequeña.

'''''. Normalmente estos días en que no había audiencia coincidía con eventos importantes -bodas reales, ceremonias públicas, conmemoraciones, etc.-. Debía ser aprobado mediante decreto expedido por el Gobernador del Consejo. Así, por ejemplo, el 11 de agosto de 1.828 los Reyes regresaron a Madrid después de un viaje a Cataluña. Madrid decidió preparar festejos públicos para recibir al Monarca y el Consejo de Castilla acordó que el día de su llegada y los tres siguientes no habría tribunales (A.H.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.095, consulta del 4 de agosto de 1.828). Por ejemplo, por Decreto del Consejo de Castilla de 31 de octubre de 1.808, se declaraba día festivo el 1 de noviembre, Conmemoración de los Difuntos. En este Decreto se mandaba también que a partir de entonces se esterasesen aquel día todos los años las Salas del Consejo (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 49).

'''''. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 27.

tomaba asiento"". Seguidamente entraban los Consejeros y se sentaban correlativamente, según su antigüedad. Detrás pasaban los Relatores y los Escribanos de Cámara, que se quedaban de pie contra la pared, y enfrente de ellos.

Siempre que estaba presente el Presidente o Gobernador, éste presidía el Consejo pleno. Si no asistía, presidía el Decano y en su falta, el Ministro presente de más antigüedad. Si una vez formado el Consejo pleno llegaba un Ministro más antiguo, se le dejaba el asiento principal para que presidiera. Si iniciado el Consejo pleno entraba el Gobernador, todos los ministros se ponían en pie y los Fiscales bajaban del estrado, y el Presidente o Gobernador pasaba a ocupar la presidencia. Si por el contrario el que llegaba tarde era un Ministro, al entrar hacía reverencia y pasaba a ocupar el asiento que le correspondía"".

Seguidamente el portero de estrados hacía presente al Consejo pleno si había o no Ministros excusados, y el motivo de tal ausencia -enfermedad u ocupación-"". Y

""", Las sesiones eran habitualmente presididas Gobernador o Presidente. En caso de ausencia, su lugar era ocupado por el Decano o el más antiguo de los Consejeros. Como vimos en su momento, el Presidente podía asistir o no a las sesiones del Consejo pleno o de una Sala, y siempre que acudía era el que presidía la audiencia. También vimos el rico formalismo que rodeaba siempre la llegada del Presidente al Supremo Tribunal (Cfr. ESCOLANO DE ARRIETA, P., op. cit., págs. 22 y 23). Así relataba Martínez de Salazar el comienzo de la sesión: "Cuando asiste al Consejo el Sr. Presidente o Gobernador, antes que entre en la sala primera, uno de los porteros en voz alta dice: "Semanería". Con este aviso los Escribanos de Cámara y Relatores entran en la misma Sala y están en pie frente del estrado; y fuera de él esperan los Sres. Ministros a que el Sr. Presidente o Gobernador ocupe su lugar, y después por sus antigüedades suben al estrado a tomar sus asientos y sólo el Ministro Decano recibe en pie dentro del estrado al Sr. Gobernador". (MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 65 y ss.).

""", MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 65 y ss.

""", "Los Sres. Ministros se sientan en el Consejo guardando su antigüedad; y como también está mandado que no se excusen de asistir al Consejo si no es por causa de tener otro encargo o enfermedad que se lo impida, se observa que en los días que no concurren, lo avisan por medio de sus pajes o criados a uno de los porteros de la Sala de Gobierno, para hacerlo presente en Consejo pleno, porque tal vez, con motivo de esperar y no asistir, pudiera cesar el curso de los negocios presentes en las Salas donde estuviesen destinados, y se evita este perjuicio nombrando el Sr. Gobernador otro Ministro que concurra a la sala en lugar del que se excusa;

el Escribano de Cámara más antiguo después del de Gobierno daba cuenta allí mismo si había o no semanería. A continuación informa el Escribano de Gobierno si había previsto algún juramento -de un Ministro o Fiscal del Consejo, de un Alcalde de Corte o Ministro honorario de algún Tribunal-. Si lo había, procedía a prestar juramento en Consejo pleno con asistencia de Relatores y Escribanos de Cámara.

Después de la semanería juraban sus plazas los nuevos Alcaldes de Corte o Fiscal de la Sala, si los hubiere, y lo mismo los Ministros honorarios de las Chancillerías y Audiencias.

Concluida esta diligencia, el Presidente tocaba la campanilla y salían los Escribanos de Cámara y Relatores y quedaban solos los Ministros y Fiscales. Preguntaba por los asuntos y requería los papeles para firmar. A continuación el que presidía leía y publicaba en el Consejo pleno las Reales Resoluciones y Ordenes del Rey. Seguidamente tocaba la campanilla y entraba el portero de estrados, quien informaba si había que despachar de Consejo pleno y aquél lo ejecutaba en alta voz fuera de la Sala. Si había algún Relator o Escribano de Cámara que tenía un asunto del que debía dar cuenta en el Consejo pleno, pasaba al efecto^{***}. En caso contrario, el portero de estrados decía: "Señor, no hay que despachar de Consejo pleno", y el Presidente o Gobernador mandaba a cada Consejero que fuera a su respectiva Sala^{***}. Y el portero decía en alta voz en la puerta de la Sala: "Se aparta el Consejo". La única excepción a esta regla es cuando había fuerza de dos Salas. Cuando el portero informaba que había, los Ministros de la Sala segunda de Gobierno se quedaban en la Sala primera,

y si continuase el impedimento de asistir en el Consejo, no es necesario repetir la excusa y recado todos los días; pero siendo dilatado el tiempo porque dejasen de concurrir los Sres. Ministros se observa, como ceremonia precisa, que el día antes de volver al Consejo pasen a visitar en su Posada al sr. Presidente o Gobernador; y cuando con su licencia hacen ausencia de la Corte y se restituyen, también es ceremonia dirigirse a visitar al Sr. Presidente o Gobernador antes de entrar en sus casas; y lo mismo practican cuando las Chancillerías y Audiencias son promovidos para plazas del Consejo y entran en la Corte". (MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 65 y ss.).

^{***}. Por ejemplo, la publicación de una Real Orden, o de un bando o aviso público. En estos últimos casos, tras la publicación en Consejo pleno se pasaba a la Sala con la minuta y prevenciones correspondientes (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 11).

^{***}. CORDERO TORRES, "El Consejo de Estado", pág. 65.

donde comenzaba la audiencia"".

Concluido el Consejo pleno, los Ministros pasaban a sus correspondientes Salas, donde se veían los asuntos propios de cada una de ellas. Cada Sala tenía su Presidente, que era el primero de los Consejeros de la relación de distribución de Ministros aprobada por el Rey. Habitualmente el Presidente de cada Sala era el más antiguo de los Ministros en ella destacados.

La misión de los Consejeros en la Sala y en el Consejo pleno era estudiar y resolver los distintos expedientes que se presentaban. Habitualmente, los Consejeros decidían en relación con los dictámenes que los Fiscales sometían a su consideración"". Se debatía y se votaba, con la consiguiente aprobación de una resolución. Un Consejero era igualmente designado para redactar en su caso las consultas que eran elevadas al Rey.

Si un Ministro discrepaba de la opinión mayoritaria del Consejo o de la Sala, podía emitir un voto particular, que se añadía al dictamen del Consejo y sobre el que éste o la Sala correspondiente debía volver a pronunciarse"". La práctica del Consejo obligaba a ver nuevamente un pleito en otra Sala cuando entre los Consejeros había voces discrepantes sobre un dictamen. Estudiado el caso por la nueva Sala, se reunía con la que inicialmente dictaminó el caso y conjuntamente se votaba. En la práctica del Consejo estaba regulado este procedimiento detalladamente. Así, los asuntos de la Sala primera de Gobierno, se volvían a ver en la Sala segunda de Gobierno; y los de ésta, en la primera de Gobierno; los asuntos de la Sala de Mil y Quinientas, en la Sala de Justicia; y los de la Sala de Justicia, a la Sala de Provincia.

"". ESCOLANO DE ARRIETA, P. "Práctica del Consejo Real", pág. 31.

"". ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y revolución liberal", pág. 125.

"". Podemos citar como ejemplo los votos particulares de los Ministros don José navarro Vidal, don Pascual Quílez y don Justa María Ibar Navarro en relación con la consulta del Consejo sobre la autoridad de las Cortes, en 1811 (A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.129 núm. 1); o el voto particular emitido por don José Cabanillas en la Consulta de Oficio del Consejo de 23 de agosto de 1823 (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.086). Parece ser que se daba veinticuatro horas al Ministro discrepante para que emitiera su voto particular, de su puño y letra (Cfr. MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 559, en comparación con lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal Supremo).

En el caso de que la discrepancia se mantuviera incluso habiendo remitido un asunto a otra Sala, entonces intervenía para dirimirlo una tercera Sala: los asuntos de las Salas de Gobierno se remitían entonces a la de Mil y Quinientas; y los de ésta a la de Provincia; los de esta última se verían posiblemente en la segunda de Gobierno"".

Por otro lado, si un Ministro no podía acudir un día al Consejo, debía comunicarlo por escrito para excusar su asistencia. En caso contrario, el Consejo se interesaba por su inasistencia enviando un subalterno a su domicilio. También en ocasiones podía ocurrir que las ausencias en una Sala fueran numerosas y que no hubiera al menos los tres Ministros que se exigían para votar. En tal caso, no podía estudiarse un pleito hasta que el Gobernador o Presidente designará un Ministro más"".

El formalismo de las fuentes legales y doctrinales de la época no deja entrever los entresijos de estas reuniones, en ocasiones con debates acalorados y discrepancias entre los Consejeros. Para su conocimiento debemos acudir a otras fuentes, en especial a la literatura política"".

De todo lo actuado en una sesión debía levantar acta un Escribano de Cámara.

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 45.

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 46.

"" En este aspecto, son valiosos los diarios de Arias Teijeiro. Así nos describe la reunión del Consejo de 24 de marzo de 1828: "La sesión del Consejo sobre el obispo de Oviedo fue acaloradísima y los Consejeros se pusieron como trapos. El Sr. Gil dijo "que el Rey ni podía ni debía mandar, etc."; uno de los de la comparsa pidió que se anotase aquella proposición. Gil Contestó "que él mismo la pondría, si se le encargaba la consulta". "Usted, le dijo, trata de pillar, de atrapar, ¿eh?". "No, Señor," El Decano tocó la campanilla. "No, Señor, no callo", dijo Gil, "¿por qué no ha tocado Vd. la campanilla cuando el señor hablaba y me insultaba?" (ARIAS TEIJEIRO, J. "Diarios", tomo I, pág. 79).

2) Trámites de un pleito

Los pleitos y negocios de que conocía el Consejo de Castilla podían originarse en varias caminos: por una Real Orden se podía mandar al Consejo resolver una cuestión o elaborar un informe sobre un asunto; otra forma de iniciar un pleito era la presentación de una instancia. Esta podía ser una instancia fiscal, en los asuntos de interés público, o una instancia de parte, en los asuntos de esta naturaleza^{***}. Finalmente también cabía que el asunto hubiera sido ya visto por otra autoridad o por el mismo Consejo, y en apelación conociera de ellos el Supremo Tribunal^{***}.

Los particulares no presentaban sus denuncias o demandas directamente al Consejo^{***}. Acudían a las mesas de los Procuradores de los Reales Consejos, situadas al efecto en las antecámaras del Consejo de Castilla. Para la admisión de un recurso o demanda por los Escribanos de Cámara era requisito indispensable el acompañar el mismo de

^{***}. Con frecuencia aparecían quejas del Supremo Tribunal por las frecuentes instancias que se presentaban en el Consejo sobre asuntos cuyo conocimiento correspondía más bien a los Tribunales territoriales. El 19 de septiembre de 1.815, por ejemplo, solicitaban los Fiscales del Consejo que "se dicten las providencias más eficaces para que no se admitan en el Consejo los negocios cuyo conocimiento le está prohibido, a saber, los contenidos en el título VI libro IV de la Novísima recopilación, de que hace expresa mención el auto acordado de 1.806, como ni tampoco los comprendidos en las leyes VIII y IX, Título I, Libro V de la misma Recopilación, imponiéndose a los contraventores las penas correspondientes..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a).

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.881.

^{***}. Algunas sí que eran remitidas directamente al Gobernador del Consejo. por ejemplo, las presentadas por los alcaldes y los corregidores, así como los informes referentes a asuntos considerados de excepcional importancia (DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 299).

un poder otorgado a favor de uno de los rocuradores de Número de los Reales Consejos"".

Seguidamente debía presentarse la instancia o la demanda en la forma debida en la oficina del Repartidor de los negocios del Consejo, que dependía de los Escribanos de Cámara. Esta oficina era llevada por un empleado de las Escribanías, el Repartidor de Pleitos, que era contratado por los mismos Escribanos del Consejo.

Desde primera hora de la mañana y coincidiendo con los horarios de Tribunal, se encontraban los procuradores en sus mesas, en el Palacio de los Consejos. Sólo excepcionalmente -por tener pleito señalado en otros Consejos o en la Sala de Alcaldes-, podía ser reemplazado por un escribiente, que cumpliera su cometido"" e informara al Supremo Tribunal en todo momento de la localización del procurador. Creemos que los clientes no necesariamente debían acudir al Palacio de los Consejos a presentar sus instancias, pero siempre debían presentarlas mediante procurador, como hemos visto.

En cuanto a los llamados asuntos fiscales, al introducir el Fiscal la correspondiente instancia, el asunto sería igualmente presentado al Repartidor de Pleitos, quien lo adjudicaría a su vez a la Escribanía correspondiente.

También desde primera hora de la mañana se encontraba el Repartidor en la mesa que al efecto le estaba destinada en la sala de los Escribanos de Cámara, en el Palacio de los Consejos. A él acudían los procuradores con sus pleitos y peticiones. El Repartidor iba registrando las entradas de instancias y pleitos"", y por riguroso turno iba adjudicándolos a las distintas Escribanías. Debía llevar varios Libros, según la Sala a la que correspondía el nuevo pleito o según su materia: un Libro para asuntos del Consejo pleno, de la Sala primera de Gobierno, de la segunda, los de Mil y Quinientas, los de la Sala de Justicia, los de la de

"". La instancia debía estar firmada por la parte, por el Procurador y en su caso por un abogado de los Reales Consejos colegiado en la Villa y Corte. (ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", págs. 352 y 253).

"". sabemos que con frecuencia había problemas con los procuradores, pues no cumplían con el hortario de asistencia que había dispuesto el Consejo de Castilla.

"". Llevaba el repartidor de negocios varios libros en donde anotaba los datos de los recursos que a él iban llegando. Concretamente registraba la razón del día, mes y año en que se presentaba un recurso, nombre de los litigantes, su vecindad y Escribanía a la que se adjudicaba el pleito (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.074).

Provincia, y algún libro mes...

Sucedía también con frecuencia que como llegaban al Repartidor muchas instancias seguidas, los procuradores presionaban para dar preferencia a las suyas, o para que fueran adjudicadas a determinado Escribano de Cámara, aunque no estuviera de turno. En otras ocasiones, pretendían revisar los Libros de Repartimiento para informarse del estado de los turnos y lograr así presentar su recurso cuando le tocase en turno al Escribano que deseaba que le llevase el caso. A veces también incluso ofrecían gratificaciones con este fin. Por ello mismo se había establecido desde finales del siglo XVIII que los procuradores y agentes debían presentar sus instancias a primera hora de la mañana, para que el Repartidor tuviese el tiempo suficiente para verlos y repartirlos con tiempo.

Eran frecuentes también las disputas del Repartidor con los agentes y procuradores, ya que intentaban éstos que se les admitiese cuantas instancias presentaban. En ocasiones, el Repartidor se quejaba al Consejo de la actitud de tales agentes y procuradores. Habitualmente el Consejo daba la razón al Repartidor y no solía admitir las instancias por él rechazadas.

Reconocida y admitida una instancia o demanda, y registrada convenientemente en los libros correspondientes, a continuación el Repartidor asignaba el asunto a una Escribanía. E informaba mediante oficio a la Escribanía de esta adjudicación. En dicho oficio debía ponerse nota del día, mes y año en que se había presentado. También se informaba a la Sala a la que correspondía, dependiendo ésta de la naturaleza del asunto.

Entonces cabían muchas posibilidades, según la naturaleza de la petición. Podía simplemente solicitarse una certificación o un despacho. Sin embargo, el Escribano era un simple intermediario entre el particular y el Consejo y no podía aprobar un decreto o conceder una petición sin permiso de la Sala correspondiente. Para ello, en el momento de audiencia pública, avisada por el Portero de estrados, pasaba el Escribano correspondiente e informaba a la Sala de los asuntos en cuestión y era la Sala la que accedía o no a lo solicitado.

En la vista en la Sala, el Consejo decidía si el asunto seguía adelante -en caso de ser un pleito- o si se

... MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 718. En cada uno de estos Libros había que anotar los siguientes datos: clase de asunto, persona que presentaba la instancia, persona contra la que se presentaba la instancia, Escribano al que se adjudicaba, lugar de origen del peticionario y se concluía con el nombre y rúbrica del Repartidor.

concedía o no lo pedido por el solicitante -por ejemplo, una certificación-. Podía también la Sala solicitar una ampliación de información y remitir la causa a un receptor, por ejemplo, para que presentase una ampliación de datos"". Caso de que se admitiera a trámite, el Consejo encomendaba el asunto a un Relator para que presentase a su vez una relación o informe sobre el asunto. Antes el Escribano debía remitir los autos a cada una de las partes interesadas, a la vez que llevar registro de los documentos pertenecientes a cada sumario, para evitar extravíos. Igualmente debía remitir el expediente a un Relator de la Sala. Y finalmente se trasladaba a los demandados y se les emplazaba mediante provisión"".

"". La Real Cédula de 16 de junio de 1.767 recogía un auto del Consejo sobre el modo de despachar los expedientes los Ministros de la Sala primera de Gobierno. El mencionado auto afirmaba lo siguiente: "...acordaron y mandaron que los referidos Sres. Ministros, por sí solos tengan la facultad de instruir por medio de sus órdenes las noticias que se les dieran y comunicaren en todos los asuntos que concurrieren respectivamente para la comprobación de ellos; y después de dadas y evacuadas en la forma que tengan por más necesaria, entreguen los mismos señores los expedientes que se causaren en el Consejo, para que dándose cuenta, y pasándose al Sr. Fiscal, se proceda a dar las providencias más oportunas..." (A.H.N., Real Cédula núm. 148, con el número 1.782 del catálogo, de 16 de junio de 1.767).

"". He aquí un formulario de provisión de emplazamiento a personas particulares: "D. Fernando VII &, a los interesados en el asunto de que en nuestra carta se hará mención, salud y gracia: SABED que ante los de nuestro Consejo se presentó la petición del tenor siguiente (...). Y vista por los de nuestro consejo la referida petición, por decreto que proveyeron en (...) de este mes se acordó expedir esta nuestra carta: por la qual os mandamos que dentro de (...) días primeros, siguientes de como os sean notificadas en vuestras personas, pudiendo ser, y si no, diciéndolo a vuestras mujeres, hijos o criados, si los habéis y tenéis, o a uno o dos de vuestros vecinos más cercanos, para que os lo digan y hagan saber, de forma que llegue a vuestra noticia, y de ello no podáis alegar ignorancia alguna, vengáis o enviéis ante los de nuestro Consejo vuestro procurador suficiente, con poder bastante, bien instruido e informado, en seguimiento de la dicha instancia, y a decir y alegar en ella de vuestro derecho y justicia lo que decir y alegar quisiéreis, que si viniéreis o enviéreis, según dicho es, os la oirán y guardarán en lo que la tuviéreis; en otra manera, pasado el dicho término, en vuestra ausencia y rebeldía, habida por presencia la verán, y determinarán en ella lo que hallaren por justicia, sin os más citar ni llamar sobre ello, que por la presente os citamos, llamamos y emplazamos para todos los autos y diligencias que en él deban ser hechas, hasta la sentencia definitiva inclusive, y

Supongamos que la Sala ha dado su visto bueno y ha concedido el pase al asunto y manda el traslado a la otra parte. Las provisiones de emplazamiento a los demandados las debían ordenar los Escribanos de Cámara. Antes de expedirlas debían anotar aquéllos al pie los derechos que con arreglo al real arancel les correspondiesen. Así hecho debía ser llevado al Ministro Semanero para su firma, junto con el expediente. El Ministro Semanero antes de estampar su firma debía cotejar que todo estaba en orden.

A continuación debían firmar la providencia varios Ministros de Consejo más, aunque fuesen de otras Salas. No se podía despachar la providencia con menos de cuatro firmas de Ministros del Consejo. De cualquier providencia debía quedar copia en la misma Escribanía de Cámara, hecha por sus oficiales en el correspondiente papel sellado.

Hechos todos estos trámites se entregaba la providencia al procurador que firmó la solicitud, expidiendo el correspondiente recibo. Era por tanto el procurador el encargado de comunicar la providencia a la parte demandada"".

A la otra parte se le concedía un plazo para personarse"". En caso de no hacerlo dentro del mismo, a petición de la parte actora podía ser declarado en rebeldía y se continuaba el proceso en estrados, tras verificar el Escribano de Cámara que el demandado había tenido conocimiento del emplazamiento.

Por el contrario, lo normal sería que la parte demandada acudiera en la forma debida. Tras comprobar los poderes de su procurador, se le haría entrega de los autos y se registraría la misma en un libro destinado al efecto. Se le concedían al menos tres días para estudiar los autos. A partir de los tres días, la parte actora podía solicitar se le exigiera la devolución de los mismos: concedida esta petición, el procurador debía llevarla a los

tasación de costas, si las hubiere; y os señalamos los estrados de nuestro Consejo, donde se harán y notificarán, y os parará tanto perjuicio como si en vuestras personas se hiciesen y notificasen; que así es nuestra voluntad, &" (ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", págs. 353 y 354).

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 355.

"" Tanto los señalamientos como las vistas formales eran necesarios en todos los pleitos de partes. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 29).

porteros del Consejo para que hicieran el apremio"".

El siguiente paso sería la elaboración del informe del Relator. Ya hemos visto que la asignación de un pleito a un Relator se hacía por mandato de la Sala. Era efectuada por el Ministro Semanero de la misma, quien se encargaba de asignar por riguroso turno los pleitos a los Relatores. En un cajón de la antesala de las Salas primera y segunda de Gobierno había unos libros donde se asentaba el reparto efectuado. Los libros eran llevados por los oficiales segundos al Ministro Semanero, quien anotaba en ellos la asignación de los asuntos a cada Relator"", indicando fecha, número de piezas y número de folios de cada una.

En cada Sala había también un libro blanco en donde se anotaban los pleitos asignados a la misma"". Eran custodiados por los porteros de estrados y la anotación de los pleitos asignados se hacía por los Ministros semaneros.

Una vez asignado un pleito a un Relator, y a la vista de los documentos presentados y de las pretensiones de cada una de las partes, aquél debía presentar una relación que explicara a la Sala estas pretensiones, y los fundamentos de hecho y de derecho del asunto en cuestión. Sin embargo, antes de la elaboración de la relación existía un trámite posible más: la llamada a la prueba.

Antes de continuar conviene que hagamos un inciso. La propia mecánica del proceso ante el Consejo obligaba a las partes a promover en todo momento los pleitos en los que estaban interesados. De tal manera que eran las

"". ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", pág. 355.

"". Había también un procedimiento especial de reparto para los pleitos de tenutas, grados de segunda suplicación y algunos otros. Los oficiales segundos o despachantes llevaban estos pleitos directamente a la Secretaría de la Presidencia, en donde se llevaba registro de los documentos ingresados en unos libros especiales. Seguidamente era el mismo Presidente o Gobernador el que hacía el reparto de estos pleitos entre los Relatores. Efectuado este reparto y su anotación en los libros, pasaban nuevamente por la Secretaría los oficiales segundos, quienes llevaban los pleitos a los Relatores agraciados (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090 núm. 62).

"". En ocasiones se planteaban problemas al presentarse la duda de la Sala que debía conocer de un expediente. En tales casos, se daba cuenta del expediente en la Sala primera de Gobierno para su estudio (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089 núm. 14).

partes las que tenían que pedir en cada paso que el proceso continuara o que un determinado obstáculo fuera superado. En caso contrario, era fácil un proceso se eternizara. Así, por ejemplo, si una autoridad tardaba en remitir al Consejo un informe determinado, era la parte interesada la que debía solicitar el correspondiente recordatorio. De todo ello se deduce el papel primordial que en el proceso ante el Consejo tenían los procuradores.

Las partes podían solicitar que se recibiese a prueba. Los mismos Ministros aprobaban o no esta solicitud, por el tiempo que considerasen preciso, "según la calidad y circunstancias de los litigantes, y distancia de los sitios o parages donde se hayan de hacer las probanzas"***. Una vez notificado el auto de la recepción a prueba y su término, se pasaba certificación al repartidor del número de los receptores, para que realizaran la probanza: ésta podía consistir en un interrogatorio o ratificación de testigos, comprobación de testimonios, compulsa de instrumentos -partida, testamento, escritura, etc.-.

Las pruebas que solicitaban las partes que tenían lugar dentro de Madrid también podían ser hechas por los Escribanos de Cámara originarios. Normalmente se encomendaba entonces al oficial mayor y bien al escribiente de diligencias de la Escribanía de Cámara correspondiente. El Escribano de Cámara sólo intervenía personalmente en el caso de causas con personalidades de alto rango.

Las probanzas realizadas debían mantenerse en absoluto secreto, y no podían ser vistas por ninguna de las partes hasta que hecha la publicación de probanzas, se uniesen a los autos para entregarlos a las partes***. Concluido el término para practicar la prueba, se abría un nuevo plazo para poner tachas a los testigos. Concluido este plazo, se consideraba el pleito concluido y se remitía todo al Relator, para que hiciese la correspondiente relación.

Era frecuente que entre las pruebas solicitadas por el Supremo Tribunal se encontrase la petición de informes a otras autoridades: gobernadores, audiencias, autoridades eclesiásticas, etc***. Era

***. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 357. La recepción a prueba se realizaba tras la extensión del correspondiente auto por el Relator, auto que debía ser rubricado por el Ministro Semanero.

***. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 361.

***. Así, por ejemplo, a finales de agosto de 1.816, en la Escribanía de Gobierno del Consejo había informes solicitados a las siguientes autoridades: al Ministerio de

normalmente estos informes una de las principales causas del retraso de los negocios del Consejo, pues debía con frecuencia enviarse avisos y recordatorios a tales autoridades para su pronta remisión.

En los distintos trámites de cada expediente y en las diversas resoluciones de cada Sala era frecuente diariamente la expedición de varios despachos o provisiones. La firma de estos despachos por los Ministros del Consejo tenía también su procedimiento. De ello se encargaban los oficiales segundos o despachantes de las Escribanías de Cámara. En primer lugar acudían al Ministro Semanero y recogían su firma. Seguidamente registraban firmas indistintamente de cualquiera de los Ministros de las demás Salas, aunque no hubieran intervenido en la providencia. Y reunidas las firmas acudían al Presidente o Gobernador para recoger la suya. Curiosamente, existía la práctica de evitar molestar para este fin a los Ministros más antiguos del Consejo y especialmente a los que eran camaristas -miembros de la Cámara-. En total se exigía que cada despacho del Consejo tuviera cinco firmas, incluido en este número la firma del Gobernador"".

Gracia y Justicia se habían pedido los diarios, actas y discusiones de las Cortes que trataban sobre la expedición de un decreto de 1.811 (pedido el 15 de julio); se habían pedido informes a todos los prelados del Reino, al Colector General de Expolios (los días 29 y 30 de abril); a los gobernadores de Aranjuez, San Lorenzo, San Fernando, San Ildefonso y corregidor de Madrid (pedidos el 12 de diciembre de 1.815); por auto de 9 de febrero de 1.816 se mandó que enviasen informes las Chancillerías y Audiencias del Reino, a quienes se comunicaron las correspondientes órdenes con fecha de 5 de marzo del mismo año (en mayo sólomente habían contestado las Audiencias de Asturias, Sevilla y Cataluña); el 1 de agosto de había pasado informe al Honrado Concejo de la Mesta, a través de su Presidente, el Consejero de Castilla Sr. Vilches; el 3 de agosto se pasó informe a la Diputación General del Reino; entre otros muchos ejemplos, se habían pedido informes a la Junta Superior de Farmacia, al Director del Colegio de Boticarios, a la Contaduría General de Propios, a los Tribunales Superiores, a las Universidades del Reino, al Colegio de Abogados de Madrid, a los Capitanes Generales; etc.

"" He aquí un informe del Escribano de Gobierno del Consejo, fechado el 28 de enero de 1.826: "Habiéndose suscitado la duda de si pasados de Semanería los despachos que el Consejo manda expedir en los negocios de sus respectivas Salas, las restantes firmas deben completarse con las de los Sres. de la que los acuerda o indistintamente con las de los de otras Salas, es la voluntad de V.E. y ha tenido a bien mandarme le informe en razón de la práctica que en orden a este particular se haya observado hasta ahora en el Consejo, y en su cumplimiento lo que puedo manifestar a V.E.

es:

Que don Antonio Martínez de Salazar en su obra 'Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo', en el folio 211 vuelto dice: 'Que hacen de Semaneros los Sres. Ministros más modernos de cada una de las Salas, y que éstos hallando arreglados los despachos o provisiones mandadas expedir, las firman en el lugar que como más modernos les corresponden, que es a la mano derecha, y al pie ponen segunda rúbrica, que da a entender no ofrecérseles reparo; y con esta señal los demás Sres. Ministros firman sin el menor escrúpulo'.

Estas últimas palabras, aunque no expresan terminantemente si éstos deben ser los que asistieron a la Sala que acordó las providencias que causan dichos despachos, o cualquiera de los otros de las demás Salas, aunque no hubiesen concurrido a ellas, las considero apelativas a éstos y no a aquéllos, y así es que en más tiempo de treinta años que tengo el honor de servir al Consejo como su dependiente, he visto en práctica recoger la firma del Sr. Semanero en los referidos despachos y completarlos con las de los demás Sres., hayan sido o no de las Salas que se acordaron.

Para ser así concurre la razón de que el Sr. Presidente o Gobernador, y el Decano en sucaso, las firman todas, asistiendo sólo en Sala primera y aunque se acuerden en ésta en días que no hayan asistido.

Siendo cinco las firmas con que se autorizan dichos despachos, inclusa la del Sr. Presidente o Gobernador, o el Sr. Decano en su caso, si se hubiera de firmar por los Sres. Ministros de las Salas que las acuerdan, no se podrán completar los que se mandasen librar por cualquiera de aquéllas, cuando se compusiese de sólo tres Sres. Ministros como sucede con frecuencia, y lo mismo ocurriría con los despachos ejecutorios que de ordinario se solicitan y sacan, pasando mucho tiempo después de acordados y cuando, como ha sucedido más de una vez, no suelen existir alguno o algunos de los Sres. Ministros que dieron la providencia.

He observado asimismo tenerse en consideración a los Sres. Ministros más antiguos y ancianos, a los que son Presidentes de Salas con especialidad a los de la Cámara, para excusarles de esta molestia, aunque también he visto a los Sres. prestarse a firmar ya en el Consejo o en sus casas cuando lo ha exigido alguna perentoriedad.

Si bien me consta lo que dejo referido por notoriedad, sin embargo, na habiendo sido oficial segundo de Escribanía de Cámara, de cuyo encargo es pasar los despachos de semanería, completarlos con las demás firmas y después llevarlos al Sr. Presidente o Gobernador, debiendo por ésta razón estar éstos más instruidos en este particular, para acudir a cualquier mal concepto o equivocación que yo pudiera padecer, he preguntado a cuatro que existen de los más antiguos y que han sido tales oficiales segundos por muchos años, y por sus contestaciones e informes que acompaño a mayor abundamiento, se enterará V.E. de que la práctica observada ha sido la que queda expresada. 28 de enero de

En los despachos que extractasen o resumiesen las representaciones, memoriales y otros escritos de las partes, debían omitirse "expresiones satíricas y ofensivas"****.

El Relator recibía el expediente directamente de las Escribanías. Los oficiales segundos de éstas -llamados también oficiales despachantes-, eran los encargados de traer los pleitos desde las Escribanías a los Relatores. Efectuado el reparto, los oficiales segundos debían anotar también esta circunstancia en los mencionados libros de registro****. Como un Relator recibía asuntos con mucha frecuencia, debía él también establecer un turno u orden de despacho de sus asuntos. En primer lugar primaba el criterio cronológico o la antigüedad de recepción de un pleito. Sin embargo, también podía influir la mayor o menor urgencia de un asunto a la hora de fijar el orden. En los ocho primeros días de cada mes debía presentar una lista de los expedientes de oficio pendientes en su Relatoría a finales del mes anterior, y otra lista de los expedientes a instancia de parte pendientes también entonces****.

El Relator debía estudiar toda la documentación presentada y elaborar un informe escrito. Como tenían vistas casi todas las mañanas, con frecuencia dedicaban las tardes a elaborar sus relaciones.

Con carácter anecdótico podemos mencionar el estilo literario de estas relaciones y, en general, algunas notas del lenguaje de los escritos del Consejo. Como es familiar a todos los que hayan consultado expedientes de

1.826". (A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.705 núm. 29).

****. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 2.799, auto acordado del Consejo de 1 de octubre de 1.784.

****. Concretamente debían anotar el hecho mismo del reparto, los datos de las partes, el asunto en litigio, la Escribanía a la que pertenecía el pleito y el Relator nombrado. También se anotaba el día en que se hacía el repartimiento. Los oficiales segundos custodiaban además la llave de los cajones en que se guardaban los libros de registro. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090 núm. 62).

****. Debía expresar el día en que el expediente pasó a su poder, así como si el expediente era consultivo -por su propia naturaleza o porque el rey lo mandase-, o si había sido hecho recuerdo encargando la brevedad de su despacho (Auto acordado del Consejo de 4 de agosto de 1.806, "por el cual, para el más breve despacho de los negocios en el Consejo, se establece un repartimiento de ellos entre sus salas con lo demás que se expresa").

esta naturaleza, gustaba hacer ampulosas referencias históricas en las que el autor se remontaba hasta tiempos muy primitivos"". En ocasiones se incurría en evidentes errores históricos y se buscaba a toda costa encontrar una continuidad histórica desde los momentos más antiguos"". Por otro lado, eran frecuentes las contracciones, se abusaba de los gerundios y por el contrario eran muy parcos en el uso de signos de puntuación.

La vista pública comenzaba con la intervención de los Escribanos, que informaban acerca de las peticiones de sustanciación. Seguidamente el Presidente de la Sala mandaba a los Relatores dar cuenta de los pleitos y de las causas que habían recibido. A continuación hacían las relaciones"". En las Salas de Gobierno, los Relatores hacían sus informes de pie, y en las demás, sentados. Hablaban los Relatores por turno, por orden de antigüedad. Las partes podían asistir a la relación, si lo deseaban. Para ello, debían solicitarlo ambas partes por escrito y con anterioridad a su lectura. La fecha de la vista oral era fijada por la Sala, previa consulta al Relator quien informaba de ello a la Escribanía de Cámara para que se informase a las partes a través de sus procuradores.

En la vista oral, el Tribunal podía deliberar y sentenciar un caso inmediatamente, o aplazar la votación. Este último caso se daba siempre cuando los magistrados consideraban necesaria una "información en Derecho"". Antes de empezarse la vista se daba cuenta de las peticiones que era frecuente se hicieran por las partes para poder escribir en derecho. Si se concedía, ello permitía a las partes poder presentar un escrito alegatorio en el plazo de los dos meses desde aquella fecha. A partir de los dos

"". Así, por ejemplo, en una consulta de oficio de 7 de octubre de 1.814, el Consejo citaba entre otros a salomón, Esdras, Aristóteles, las leyes de los Decenviros griegos, los cónsules de Roma, Virgilio, los godos... (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111).

"". Por ejemplo, en la consulta de oficio de la nota anterior se hablaba de los Sres. Emperadores don Carlos y doña Juana; o se decía que en la antigua Roma para el gobierno del ramo de montes fueron nombrados unos cargos llamados cónsules (A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 7 de octubre de 1.814).

"". MORENO PASTOR, L., "Los orígenes del Tribunal Supremo", pág. 554.

"". En MORENO PASTOR, L., "Los orígenes del Tribunal Supremo", pág. 558, se puede confrontar con lo establecido para el Tribunal Supremo en los Reglamentos de 1.814 y de 1.835.

meses, presentado o no el escrito alegatorio, se señalaría día para votar el pleito. La licencia para escribir en derecho se concedía mediante auto del Relator que era comunicado inmediatamente a los procuradores de las partes, para que corriese el término. El Ministro semanero debía dar el visto bueno sobre el escrito alegatorio para su admisión e impresión, para evitar escritos denigratorios contra el honor y estimación de ninguna persona.

Los escritos en derecho de las partes se entregaban al Relator, quien comprobaba la veracidad de los hechos relatados y hacía al margen las anotaciones que creía pertinentes. Estos escritos con sus anotaciones se imprimían y se adjuntaban a los ejemplares del pleito que debían remitirse a los Ministros que debían votar el pleito.

Parece que la asistencia de abogados a las partes en la vista era preceptiva, de tal manera que era motivo de suspensión la inasistencia de una parte acompañada por abogado, salvo que se dispusiese otra cosa"". Sabemos también que en las Salas de Justicia los abogados hacían sus relaciones sentados"". La prueba se presentaría por escrito y las partes podrían estar presentes en la vista, pero habrían de solicitarlo.

Los Fiscales por su parte emitirían su dictamen en aquellos pleitos en que debían tomar parte, por ser de oficio o estar involucrado el interés público"". En cuanto al tiempo que empleaban los Fiscales en emitir sus dictámenes, podemos calcularlo a partir de los expedientes conservados de la época. Así, en 1.816 transcurría un término medio aproximado de un mes y medio entre el momento de recepción de un expediente por el Fiscal y la conclusión de su dictamen"".

"". En ocasiones, cuando se acumulaban los pleitos ante el Consejo, se permitía añadir a los señalamientos de pleitos o expedientes que se hubieran hecho contenciosos la cláusula de que la vista se verificaría con abogados o sin ellos. Al parecer, con frecuencia se provocaba la dilación o el aplazamiento de un pleito por este medio, en perjuicio de las partes y de otros pleitos pendientes que hubieran podido aprovechar este turno perdido. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.881).

"". MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 678-682.

"". La asignación de los pleitos a los Fiscales la hacía el oficio Fiscal (A.H.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.076, consulta del 30 de marzo de 1.816).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a.

Del estudio de la documentación conservada del Consejo de Castilla se desprende el inmenso volumen de expedientes que tenían que tramitar estos Fiscales y sus Agentes, considerando además su reducido número. Así, por ejemplo, en el periodo correspondiente a 1.815, los Fiscales despacharon 74 expedientes y sus Agentes 1.780 casos. En los seis primeros meses de 1.816 los Fiscales estudiaron 118 casos y sus Agentes 1.035 expedientes***.

Entregados en su caso en el plazo de los dos meses los papeles en derecho al Relator, o en caso contrario inmediatamente si no había estos escritos, se señalaba día para el voto en la Sala. Para el señalamiento era preceptiva una petición por las partes. Este señalamiento se hacía en la Sala originaria del negocio, y no importaba que faltase en ella alguno de los Ministros que vieron el pleito, pues se le mandaba llamar. Una vez reunidos los Consejeros, se procedía a la votación. Sabemos que ni los Relatores ni los Escribanos de Cámara podían estar presentes en el momento en que los Consejeros procedían a votar el pleito, salvo que el Consejo lo autorizase****. Y la votación siempre solía seguir a debates entre los Consejeros sobre el pleito en cuestión.

Por otro lado, la costumbre del Consejo Real era que una vez estaban reunidos los Consejeros para votar un pleito, no se separaban hasta dejar determinado el asunto y firmada y rubricada la sentencia o auto. Cabía la posibilidad de que alguno de los Consejeros no pudiera asistir y remitiera su voto por escrito. En tales casos se procedía a la lectura del voto escrito en el lugar que le tocaba votar****.

La votación comenzaba por los Consejeros más modernos hasta llegar a los más antiguos. En muchos pleitos tenía lugar inmediatamente después de la vista oral, sin necesidad de aplazar la votación a otro día: eran los pleitos en los que no había más necesidad de información. En los que era necesaria alguna probanza o las partes solicitaban presentar escritos en derecho, como hemos visto,

***. De los 3.007 expedientes que fueron pasados a los Fiscales y sus Agentes en aquellos dieciocho meses, 170 lo fueron despachados por los Fiscales, 2.731 por sus Agentes y 106 quedaban todavía pendientes en julio de 1.816 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a).

****. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 185.

****. Si el pleito se remitía a resolución de más jueces, entonces no se destruía y se guardaba en el cajón o escritorio donde se custodiaban los votos. En caso contrario, se quemaba en presencia del Consejo (MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del consejo", págs. 185 y 186).

la votación se aplazaba.

Antes de votar, cada Consejero en pie iba exponiendo los motivos o razones de su voto. La ley pedía que los Ministros no reiterasen argumentos y razones expuestos ya en votos anteriores. Cabía también la posibilidad que un Ministro presentase un voto particular. Así lo expresaba Martínez de Salazar^{****}:

"Cuando el dictamen de algún Señor Ministro no conforma con el de los demás, y quiere que en lo futuro conste el voto que dio separado, lo escribe, y pone su cubierta, con la nota siguiente: "Dictamen o voto de don N. en tal negocio". Y en esta forma se reserva en una arquita, que existe cerrada en la Sala primera de Gobierno, y esto se hace en cualesquiera pleitos o negocios que se determinan, bien sean de Gobierno o de Justicia, y de todos aquellos que corresponden, y de que deben conocer todas las Salas, según su respectiva dotación, y por lo mismo en ellas no hay libro secreto para extender los votos..."

Parece ser que si un Consejero caía enfermo o se sentía indispuesto durante la vista o antes de votar, la audiencia continuaba y no se suspendía, siempre que el número de magistrados presentes fuera al menos tres.

Podía ocurrir entonces que la propia naturaleza del pleito o porque así estuviera señalado hiciera de él un pleito consultivo, éste es, de preceptiva consulta al Rey^{****}. En tales supuestos solía intervenir el Fiscal con su dictamen y una vez escuchado éste y votado el pleito, se encomendaba a un Consejero la elaboración de la consulta acordada, que era materialmente redactada por un Relator^{****}. Aquella consistía en un pliego en el que se recogían los antecedentes del hecho -probablemente la relación del Relator-, el dictamen del Fiscal y la resolución del Consejo. La consulta se registraba en un libro especial^{****} y por la Sala primera de Gobierno se presentaba al Gobernador del Consejo, para que la remitiera

^{****}. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 188.

^{****}. Los expedientes consultivos solían ser habitualmente de oficio, pero en ocasiones había también algunos a instancia de parte. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 29).

^{****}. "Il fallait dire en vingt mots ce qu'un rédacteur ordinaire aurait dit en cent ou en mille. C'était un travail sérieux réservé aux bureaucrates les plus expérimentés". (DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 98).

^{****}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.881.

al Rey""", y se esperaba la Real Resolución. Esta solía tardar varias semanas e incluso varios meses""".

Pero lo normal era que un pleito concluyera con una sentencia o auto real, según el tipo de asunto. Era extendida por el Relator, y seguidamente firmada y rubricada por los miembros del Consejo. El mismo Relator la entregaba a continuación al Escribano de Cámara originario para su publicación, quien la leía inmediatamente en el salón del Consejo y extendía la correspondiente diligencia de publicación.

A partir de este momento y en las sentencias suplicables se concedía a la parte agraviada diez días desde la fecha de notificación para suplicar de ella. Transcurrido el plazo y una vez el auto o sentencia era firme, la parte beneficiada podía solicitar del Consejo se ordenara su ejecución. El Consejo lo ordenaba entonces mediante decreto"". Y en caso de súplica, el Consejo seguía el juicio de revista en los mismos términos y con las mismas formalidades que el de vista"".

Concluimos este apartado sobre la tramitación de los pleitos del Consejo destacando algunos aspectos de un problema anémico del Supremo Tribunal: el retraso en el despacho de los negocios.

Este problema no fue exclusivo del reinado de

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2.

""". Por ejemplo, en la Escribanía de Gobierno del Consejo de Castilla existían a finales de agosto de 1.816 tres expedientes pendientes de consulta con el Rey. Dos de ellos se habían presentado hacía más de tres meses (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a).

""". ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 363. Este decreto causaba ejecutoria y se libraba siempre que lo solicitaba la parte.

""". La sentencia de revista podía ser también suplicada, mediante el llamado recurso o grado de segunda suplicación, dentro del término de los veinte o cuarenta días, según los respectivos territorios, a partir del momento de su notificación. Por ello mismo la sentencia de revista debía ser notificada a los procurados inmediatamente, tras su publicación, para que pudieran presentar este recurso (ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 363).

Fernando VII^{***}. Ya pocos años antes, en 1.802, se hizo un importante estudio sobre las causas que ocasionaban esta lentitud del Consejo y se tomaron importantes medidas^{***}. Entre las medidas exigidas se encontraba, por ejemplo, la formación de listas mensuales y semestrales en las Escribanías y Fiscalías del Consejo. Entre las causas detectadas del retraso de la tramitación de los expedientes se encontraba la mala distribución de los pleitos entre las distintas Salas y entre los subalternos, así como los retrasos en las distintas autoridades a las que se solicitaban informes en remitirlos.

En 1.806 se volvió a estudiar nuevamente el

^{***}. Fueron constantes las medidas para corregir este mal en los reinados anteriores a Fernando VII. En los últimos años del reinado de Carlos IV hubo varias medidas dirigidas este fin (1.800, 1.802, 1.804 y 1.806). El 4 de marzo de 1.800 fue aprobado un Real decreto por el que se mandaba a todos los Escribanos de Cámara del Consejo a pasar semanalmente lista a los Fiscales, de aquellos negocios que les correspondían y que se hubieran pasado a los Agentes Fiscales en la misma semana. Y que concluido el Consejo informase al Rey de los negocios que existiesen sin despachar en poder de los referidos Agentes Fiscales (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.276, 2.881, 1.882 y 2.883).

^{***}. Una nota manuscrita contenida en el legajo 2.881, de la Sección Consejos, de la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla (A.H.N.), resume algunas de estas medidas: "para llevar con la exactitud y la minuciosidad debida los preceptos del Rey, dispondrá V.S. de acuerdo del Consejo se forme una lista de todos sus Ministros, con distinción de los que sean togados y los de capa y espada. Con ella expresará V.S. sus edades y estado de salud, individualizando si tal que les impida la continuación y diaria asistencia al Consejo y al desempeño de sus obligaciones. Con la indicada lista se comprenderá a los Fiscales y Secretarios y los subalternos del Consejo como son Escribanos de Cámara, Agentes Fiscales y Relatores, expresando por lo respectivo a éstos la aplicación, y prontitud con que desempeñan sus respectivos encargos. Asimismo dispondrá el Consejo que tanto por las Secretarías como por las Escribanías de Cámara se preparen a la mayor brevedad listas circunstanciadas de todos los pleitos y negocios, sea cual sea su naturaleza, expresando la persona en quien deben verse, qué día y el estado que en la actualidad tengan. Asimismo se expresará el día en que tuvieron principio, bien ser por Real Orden, bien a instancia fiscal o de parte, y si han venido por apelación se pondrá igualmente el día en que se recibieron en Escribanía de Cámara, todo esto con la mayor expresión y claridad de la instancia que haga (...)".

retraso en el despacho de los negocios"". Aquel año fue aprobada una instrucción que detallaba las reglas a seguir en la formación de las listas que había que remitir al Rey. Esta Instrucción"" es la que estaría vigente a principios de 1.808:

"Los Relatores y Agentes Fiscales el día dos de febrero y agosto de cada año presentarán al Consejo para dirigirla a manos de S.M. una relación sucinta de todos los negocios, así consultivos como de oficio, o en que tenga interés la causa pública, pendientes en sus estudios, poniendo de cada expediente el último estado y el día en que pasaron a su poder.

Las Escribanías de Gobierno y de Cámara presentarán en los mismo dos días igual relación, expresando el principio de cada expediente y su actual estado.

Lo mismo ejecutarán los Contadores Generales de Propios y Pósitos, manifestando desde qué día tienen en su poder los expedientes en estado de dar cuenta al Consejo, y dispondrán que sus respectivos oficiales observen uniformidad en la extensión de las listas, sin incluir los asuntos en que haya informado la Contaduría y se hallen pendientes en el Relator o en algunas de las Escribanías de Cámara.

Además, a principio de todos los meses los Relatores y los Escribanos de Cámara y Gobierno formarán listas de la misma clase de negocios pendientes de cada Sala y la presentarán al Sr. Presidente respectivo con igual expresión de fechas y último estado.

Esta lista mensual presentarán igualmente los Contadores de Propios y Pósitos en la Sala primera.

Con esta lista mensual de los expedientes consultivos y de oficio, y presentando los Relatores otra lista de los expedientes promovidos a instancia de parte, cumplen las dos listas que previene el auto acordado de 4 de

"". El motivo fue, al parecer, que el Rey notó a principios de aquel año -1.806- que eran pocas las consultas que el Consejo le remitía para el Despacho, cuando por el contrario tenía entendido que en la Sala primera de Gobierno se encontraban retenidos varios asuntos de oficio. Por Real Orden de 25 de febrero de 1.806 mandaba que los negocios fueran activados. En él se mandaba dar cuenta de los asuntos en que se interesase la causa pública y de aquellos de parte consultivos por su naturaleza o por haberlo mandado el Rey. También debían dar cuentas de los expedientes pendientes de informes, que se deberían recordar de oficio sin esperar petición de las partes. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2, "Instrucción de lo que se ha de observar para que sean uniformes las listas de expedientes que se han de dirigir a S.M. y presentar al Consejo en cumplimiento de la Real Orden de 21 de abril de 1.806.

este mes.

En las listas que se han de dirigir a S.M., los Escribanos de Cámara y Gobierno no incluirán los expedientes pasados a los sres. Fiscales, Relatores y Contadores de Propios y Pósitos, porque comprendiéndose en las relaciones de éstos, no deben repetirse por los Escribanos de Cámara.

Se incluirán en las listas semestrales aquellos expedientes que tengan providencias definitiva o suspensiva, aunque no se hayan librado los despachos o se halle pendiente su ejecución.

Asimismo se excluirán los remitidos en consulta a S.M. y pendientes de su Soberana Resolución.

Aquéllos en que S.M. haya pedido consulta se incluirán todos así de partes como de oficio. Pero se omitirán los que son consultivos solamente en su caso, cuando no tiene interés la causa pública, como las venias o suplementos de edad para la administración de sus bienes, las vistas de pleitos con dos Salas y otros de igual naturaleza.

Así en las listas semestrales como en las mensuales, en los expedientes remitidos a informe de Sres. Ministros, Cuerpos, Jueces o particulares, se expresará el día en que se les pasaron, y cuando estén pendientes las diligencias se dirá la fecha en que se encargaron y a quién, y los recuerdos que se hayan hecho.

En las listas semestrales, cuando se procede en virtud de Real Orden, se expresará la Secretaría de Estado por donde se ha comunicado.

Las cabezas y partidas de las listas deben tener concisión, excusando superfluidades y repeticiones.

Los Relatores se pondrán entre sí de acuerdo para que en la formación de sus listas se observe la posible uniformidad, y los mismo ejecutarán respectivamente los Agentes Fiscales y los Escribanos de Cámara y Gobierno (...). Madrid, 21 de agosto de 1.806"....

Otra de las causas del retraso de la tramitación de negocios parece ser era la propia división de asuntos de parte y asuntos de oficio. Como resultaba que en estos segundos no se cobraban derechos, los propios subalternos daban con frecuencia preferencia a aquellos expedientes en cuya tramitación podían obtener beneficios pecuniarios".... Y junto a ello, el hecho de que los

"... A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2.

"... También nos ha llegado alguna referencia a recomendaciones y preferencias a la hora de dilucidar un pleito, que sin duda también debieron existir. (por ejemplo, vid. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.995, "Delaciones y cartas de varios confidentes"). He aquí un fragmento de una carta de 1.808: "...No obstante de no acostumbrarse como dejo dicho a poner al despacho tales

expedientes a instancia de parte eran promovidos por las partes interesadas, mientras los de oficio debían ser principalmente promovidos por el propio Consejo"". Sin embargo, también es verdad que los de oficio eran los menos en número y calidad. En 1.806 una de las medidas tomadas fue precisamente la agilización de la expedición y curso de los expedientes consultivos y de oficio en que estuviera interesada la causa pública"".

Sin duda una de las causas principales del lento caminar burocrático del Consejo eran sus extensísimas competencias. También una limitación de las mismas fue estudiado en varios momentos del reinado de Fernando VII"", y se hizo efectiva esta limitación paulatinamente

solicitudes de Regente, siendo el oficial amigo mío y hermano de un Sr. N. que me estima sobremanera, me ha ofrecido ponerla, desentendiéndose de que no se hace con otras para el próximo Despacho el Domingo, y veremos lo que sale, teniendo yo cuidado en saber si efectivamente el que hace de oficial mayor (en quien no tengo confianza) la pone al Ministro, para si así no lo hace valernos de otro medio: desconfío de éste, por cuanto habiéndole yo hablado como próxima y mera curiosidad si había llegado la solicitud de V.I., me respondió en términos poco satisfactorios a nuestros deseos, por lo tanto hice el indiferente: por lo que conviene caminar con precaución con él, al mismo tiempo que sabiendo cómo está el Ministro con V.I. de concepto no es el caso tocarle nada, hasta después si fuere necesario poner yo en su misma mano la solicitud..."

"". "...También ha reparado S.M. que son muchos los expedientes que obran en las Escribanías de Cámara y se están instruyendo con diligencias o informes pedidos hace algún tiempo, sin que se haya hecho los recuerdos correspondientes, que deben ejecutarse de oficio y sin esperar petición de parte, pues siendo de la clase dicha, es la principal la causa pública y de ella debe ser agente el mismo Consejo... Aranjuez, 21 de abril de 1.806". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.276).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2.

"". Por la Real Resolución de 11 de junio de 1.814, el Rey restablecía el Consejo y le mandaba propusiese lo más conveniente para el pronto despacho de los negocios de su dotación. De esta manera, el 3 de septiembre de 1.814 aprobaba el Consejo el siguiente Decreto: "Se nombra a los Sres. don José María Puig, don Sebastián Torres, don Domingo Fernández de Campomanes, don Ignacio Antonio de Cortabarría, don Tomás Moyano y don Nicolás María de Sierra para que en cumplimiento de lo resuelto por S.M. en el real decreto de 27 de mayo de este año, propongan lo que consideren así acerca de los negocios de la actual dotación del Consejo que

a partir de 1.823.

A título indicativo puede sernos útil algún dato estadístico sobre los expedientes que tramitaba el Consejo. Así, el año siguiente desde el restablecimiento del Consejo"" en 1814, fueron resueltos los siguientes expedientes de oficio: Sala primera de Gobierno: 4.950 expedientes (y 1.718 pendientes); Sala segunda de Gobierno, 136 resueltos (y 114 pendientes); Sala de Mil y Quinientas 136 resueltos (y 4 pendientes); Sala de Justicia, 136 resueltos (y 15 pendientes); y Sala de Provincia, 136 resueltos (y 1 pendiente)"".

Y junto a ello, se señalaba entonces el desarreglo en que se encontraba la oficina de las Escribanías de Gobierno. Esta reforma no sería llevada a cabo hasta la restauración del Consejo en 1.814"". A partir de aquel año el Escribano en funciones don Valentín Pinilla acometería esa importante y ardua labor.

En 1.817 y tras dictamen del Juez de Ministros, el Consejo acordaba dar preferencia en la tramitación de pleitos a aquellos de mayor interés"".

juzguen podrán despacharse con mayor utilidad del público por otros Tribunales, como sobre la más cómoda distribución de los demás en sus Salas, autorizándoles para servirse en el desempeño de este encargo del Relator y demás subalternos que crean conducentes. Pásenseles los expedientes y noticias que pidieren y con lo que dijeren se dé cuenta." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2a).

"" Concretamente desde el 4 de junio de 1.814 hasta el 31 de julio de 1.815.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.276. La Sala segunda de Gobierno despachaba por la primera la mayoría de los días cuantos recursos se hacían en la Audiencia pública; y cuando estaba ocupada en la vista de los pleitos lo hacía la de Mil y Quinientas. Y todas las Salas despachaban también por la primera de Gobierno los asuntos que le remitía.

"" El Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz había promovido este expediente en 1.796. En la década siguiente y tras muchas reiteraciones, fue estudiada esta reforma en dos ocasiones por la Sala primera de Gobierno, que encargó finalmente en abril de 1.806 a Muñoz la elaboración de un Reglamento de la Escribanía. Parece que este reglamento fue aprobado en el año 1.807. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 núm. 2).

"" "...Los expedientes señalados con los números (...) (15 en total) merecen recomendarse a los Sres. Fiscales para su pronto despacho..." (A.H.N., Consejos, sala de Gobierno,

Parece sin embargo que los problemas de tramitación de pleitos perduraron hasta bien entrada la década de lo veinte"". Los años que siguieron al Trienio Constitucional, el Consejo padeció los trastornos que ocasionó aquella pequeña revolución"". En los primeros meses hubo una sensible reducción de pleitos. A ello se añadió las vacantes entre los subalternos"" y las purificaciones políticas"". Así, por ejemplo, el Consejo el 23 de diciembre de 1.824 informaba al rey que para facilitar la más pronta expedición de los negocios que entonces estaban pendientes en el Consejo, de las cinco Relatorias entonces vacantes se proveyesen dos con designación a las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia"".

En ocasiones, el retraso en la tramitación de los pleitos venía por la propia incompetencia de algún empleado o por el desorden crónico de las oficinas. Hubo un conocido caso de incompetencia en la persona del oficial don Rafael Díez de Vega, a quien sus compañeros, tras pedir

legajo 3.275 núm. 2a).

"". El problema burocrático del Consejo de Castilla fue bien difundido entre los contemporáneos. Por ejemplo, Labra hablaba de "la burocracia y el expedienteo glorificados en el Consejo de Castilla..." (LABRA, R.M., "La España del siglo XIX", pág. 226).

"". "Los negocios que quedaron pendientes en el Consejo antes de 1.820 y repartidos a Relator, cuando en el día las partes los han promovido se han repartido de nuevo, lo que ha causado gran trastorno en los papeles, que si el Consejo no corta, quizá le ocupará demasiado" (Informe del Relator Juan Fernández de Llamazares, 17 de octubre de 1.829, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64).

"". Sobre todo entre los Relatores: de los siete de dotación del Supremo Tribunal, había en 1.824 sólo dos. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 19).

"". En los meses que siguieron al restablecimiento del Consejo muchos empleados del Supremo tribunal no pudieron entrar en el ejercicio de sus plazas en tanto no obtuviesen purificación. "Esta circunstancia incapacitaba para hacer propuesta alguna, (...) y para atender al despacho de los negocios que fueren ocurriendo, que entonces aún no eran muchos fueron nombrados (...), sin designación de plaza determinada. Entre otras perturbaciones del momento, era notorio el retraso existente en el pago de los sueldos: 10 meses, y aún más tiempo a los jubilados (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 47).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64.

reiteradamente su jubilación, acordaron pagar de su bolsillo una parte de ésta con tal de que fuera jubilado"".

En 1.825 se tomaron algunas medidas importantes, como la elaboración de listas de pleitos y expedientes de las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia"", o la modificación del reparto de negocios entre los Relatores, por Real Orden de 15 de marzo del mismo año.

En los últimos años de la década se reduce sensiblemente el volumen de expedientes tramitados por el Consejo, como consecuencia de la pérdida paulatina de competencias por el Supremo Tribunal"". Pese a todo, se siguen estudiando reformas y fruto de ello fue el expediente de octubre de 1.829, que afectó especialmente a los Relatores y al reparto de negocios"". Así relataba su objeto un documento de este expediente:

"El objeto del expediente de octubre de 1.829 es arreglar el despacho de los negocios del Consejo y evitar al Consejo, si es posible, el disgusto que le causan los recuerdos que se le hacen por el Gobierno"".

Sabemos que en aquella época se quejaban los Relatores que había variado el tipo de expedientes que habitualmente se trataba en el Consejo. Habían desaparecido los expedientes relativos a propios, arbitrios, repartimientos, instrucción pública, escuelas, cañinos reales, etc., y sin embargo se habían multiplicado los de oficio y que tenían carácter consultivo. Estos últimos daban mucho más trabajo que el habitual y producían menores

"". A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 47.

"". En ejecución de lo dispuesto en el decreto de 5 de agosto de 1.825 se mandó formar listas de los pleitos y expedientes de las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia, exceptuando las que estuviesen en estado de vista y de los que tuviesen hecho apuntamiento, manifestando en la lista si están o no encomendados. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64).

"". "En el día (17 de octubre de 1.829) no se puede decir (...) que el Consejo tiene más negocios que en el año de 1.824..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64).

"". Cfr. ESTRUCTURA ORGANICA, RELATORES.

"". A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64.

ingresos, pues no devengaban derechos''''.

''''', A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 64.

3) Pleitos que se remitían en discordia a
varios Ministros

Cuando al estudiar los miembros de una Sala un pleito, la mayoría de ellos no llegaban a un acuerdo sobre su resolución, estaba previsto que fuera visto nuevamente el pleito por los Ministros de otra Sala, de forma que finalmente fuera resuelto mediante reunión y votación conjunta de ambas Salas.

Hasta el año 1716 en que fue erigida la Sala segunda de Gobierno, las remisiones de la Sala primera de Gobierno eran vistas y decididas por la Sala de Mil y Quinientas. Desde aquella fecha, sin embargo, este papel fue asumido por la Sala segunda de Gobierno.

Cabía sin embargo la posibilidad de que tampoco se pusieran de acuerdo ambas Salas. Esta posibilidad también estaba prevista por el Consejo, de forma que sucesivamente tal pleito debía pasar a la Sala de Mil y Quinientas, después a la de Justicia y a la de Provincia^{***}.

Los pleitos que por la Sala segunda de Gobierno se remitían a más Ministros se enviaban a los de la Sala primera de Gobierno, y si no llegaban a una resolución mayoritaria, a los de la de Mil y Quinientas.

Cuando la Sala remitente fuese la de Mil y Quinientas, se debían ver en la de Justicia, y en su caso seguidamente en la de Provincia^{***}.

Si después de verse un pleito por los Ministros, remitidos y antes de haberse votado hubiera fallecido alguno, se exigía que quedaran como mínimo tres Ministros, número imprescindible para poderse emitir un voto. Si no hubiera ese número mínimo de tres, se debía pasar el pleito al Presidente o Gobernador del Consejo para

^{***}. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 45.

^{***}. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 45.

que nombrase nuevo Ministro que lo viese"".

Martínez de Salazar completaba esta doctrina con algunas puntualizaciones: los pleitos que fueran vistos por todo el Consejo, podían ser revistos por tres Consejeros; las discordias de los pleitos de tenutas, y demás que eran vistos por las tres Salas de Justicia, se veían con todos los Ministros de ellas que no lo fueron de la remisión, aunque bastaba el número de tres Ministros""; las discordias de los pleitos de segunda suplicación eran vistas también por tres Ministros nombrados por el Presidente del Consejo; las remisiones de pleitos de menor cuantía se veían por un Consejero nombrado por el Gobernador; las remisiones en discordia de las fuerzas de conocer y proceder, y millones, que se veían en la Sala primera de Gobierno, correspondía a los Ministros de las tres Salas que no fueron Jueces de ellas; en las remisiones de pleitos de segunda suplicación, el Presidente o Gobernador nombraba también tres Ministros de los de las tres Salas de Justicia que no fueran jueces en la discordia. Si no había tres Ministros hábiles para ser jueces de las tres referidas Salas, podía nombrar los que faltaban de las otras dos Salas"".

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 46.

"" "Y si no huviere en las tres Salas, tres que puedan ser jueces, los ha de nombrar el Señor Presidente, o Gobernador de los de las dos Salas de Gobierno (MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 181).

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 180 y 181.

4) Las consultas de los viernes con el Rey

Desde muy antiguo tenía el Consejo de Castilla el privilegio de concurrir con el Rey los viernes de cada semana para consultar los negocios que pedían dispensación de ley"".

El Escribano de Cámara más antiguo después de los de Gobierno pasaba todos los jueves al Palacio Real, acompañado de un portero de Cámara, para informarse de la hora de la consulta con el Rey al día siguiente. Se preguntaba al monarca, quien fijaba una hora para consulta. Seguidamente el Escribano de Cámara informaba al Consejo, entrando en la Sala primera de Gobierno. Sin por casualidad era ya muy tarde o no había tribunal, lo manifestaba al día siguiente por la mañana en Consejo pleno, antes de empezar el despacho de semanería. Caso de que el Presidente o Gobernador no acudiese al Consejo cualquiera de esos días, el Escribano de Cámara debía ir a su casa para informarle. Igualmente un portero del Consejo informaba a la Sala de Alcaldes"".

La consulta tenía lugar los viernes por la mañana, después del despacho de semanería. Reunido a este fin el Consejo pleno, el portero de estrados ponía delante del asiento del Ministro consultante"" -los Ministros se sucedían en este encargo por turno- una mesilla. El Ministro escribía sobre el pliego de la consulta la fecha, un "como parece" y su rúbrica. Levantado el Consejo, entraban en la Sala de Gobierno los cuatro Alcaldes de Corte más modernos, venidos desde la Sala al efecto. Los Ministros del Consejo

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 287.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 290.

"" Por ejemplo, en la consulta de 10 de junio de 1.814 el Consejero de Castilla don Antonio Alvarez Contreras era Ministro consultante, y del expediente de la consulta dio cuenta en el Consejo pleno de ese día (A.H.N., Consejos, consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.111, consulta del 10 de junio de 1.814).

y los Fiscales, por su parte, se reunían en la Sala primera de Gobierno. De dos en dos iban saliendo con capas y sombreros para tomar los coches. Los Alcaldes iban delante sin capa, con gorra y vara. En el zaguán del Palacio de los Consejos se ponían las capas para tomar los coches.

El primero era el coche del Presidente o Gobernador del Consejo. Iba en su carroza, acompañado de los dos Ministros más antiguos del Consejo. Delante del coche iban dos alguaciles de Corte a caballo y otros dos detrás de la carroza del Gobernador. Detrás de ésta iba el coche del Escribano de Cámara de Gobierno.

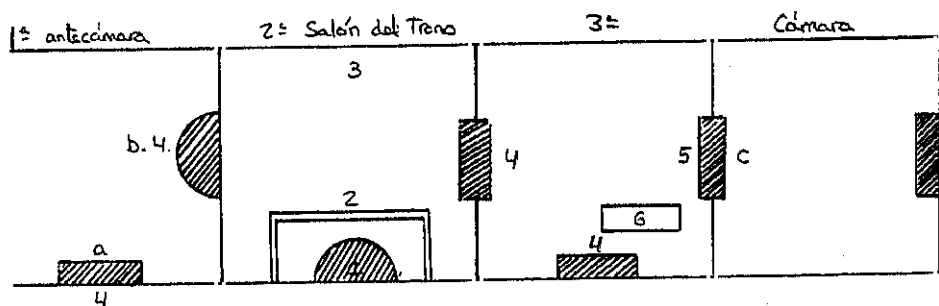
La comitiva se dirigía al Palacio Real. En la puerta de la sala donde se encontraban los guardias de corps, los Consejeros se quitaban las capas y tomaban las gorras. Los Alcaldes por su parte hacían lo mismo pero tomando sus varas****.

Un escrito conservado en el Archivo General de Palacio**** describía con detalle esta ceremonia, según el ceremonial que fue establecido por Carlos III. He aquí el relato:

"Colocados los individuos que se citan y despejadas las tres piezas ya demostradas, llega el Consejo con los Alcaldes de Casa y Corte, y su Secretario de Gobierno, aquellos sin varas, y llaman a la Puerta de la letra (a) y dice el Secretario: "El Consejo". El Ugier de Saleta núm. 4 abre la puerta y entran por su orden, y hacen lo mismo en la Sala letra (b), y entra en el salón todo él, quedándose con el Ugier segundo 4. de la puerta letra (b), y con el Alcalde más antiguo y el Secretario, saliéndose los demás Alcaldes. Ya el Consejo en el Salón, se sientan en el Bancal 2 y se cubren, y el Presidente si es Grande se pone el sombrero y lo mismo hace el Ugier de Cámara núm. 3, y así esperan a que salga S.M. Sale S.M. de la Cámara por la Puerta letra (c), acompañado del mayordomo Mayor y Capitán de Guardias de Corps hasta el Dosel donde ya colocado se retiran por la puerta (c), y también el Ugier de Cámara haciendo tras cortesías a S.M. a la española sin volver la espalda, y se cierran las puertas para no entender lo que se trata en la consulta. Acabada ésta se entra S.M. por la puerta por donde salió a la pieza tercera donde estará puesta una mesa, silla para S.M. y el banquillo para el Presidente o Gobernador núm. 6. Ya despejada se cierran las puertas hasta su conclusión, quedando por afuera de esta pieza los Ugieres de Saleta para el silencio y que nadie entre".

****. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 292.

****. A.G.P., Sección Fernando VII, Caja 212, expediente núm. 23.



"Números:

1. Lugar del Dosel
2. Bancal del Consejo
3. Ugier de Cámara
4. Ugieres de Cámara y Saleta
5. Ayuda de Cámara
6. Sitio donde está puesto para el Banquillo y Silla de S.M. "1800"

En la Cámara entraba en primer lugar el
Escribano de Cámara, seguido por los Ministros del Consejo

.... A.G.P., Sección Fernando VII, Caja 212, expte. núm.
23.

y el Presidente o Gobernador, que pasaba el último. El Presidente tomaba asiento en el banco del lado derecho donde se sentaba el Rey. Le seguía el Ministro consultante y seguidamente el Decano del Consejo: son ellos los tres que ocupaban el banco situado a la derecha del Monarca. A continuación se sentaban por orden de antigüedad los demás Ministros del Consejo, en los bancos de enfrente y del lado izquierdo, de tal forma que los últimos puestos correspondían a los Fiscales del Consejo.

De esta manera, durante la consulta el Consejo permanecía sentado y los Alcaldes de Corte y el Escribano de Cámara de pie. El Ugier cerraba la puerta y se quedaba de la parte de adentro y cubierto hasta que llegaba el Rey. Tras la entrada del Monarca, todos quedaban con rodilla en tierra hasta que éste tomaba asiento y les mandaba levantarse, sentarse y cubrirse. Seguidamente abandonaban la Sala los Alcaldes, el Escribano de Cámara y el Ugier, quienes esperaban fuera por si ocurría alguna novedad"".

Era entonces cuando comenzaba la consulta con el Rey propiamente dicha. Se levantaba el Ministro consultante y tras hacer una profunda reverencia, exponía el caso de la consulta. Estaba descubierto. Terminada la relación, hacía igual reverencia y se volvía a sentar. Este mismo Ministro debía anotar la resolución de S.M. y al día siguiente entregaría el expediente al Escribano de Cámara de Gobierno para que fuera dado curso a la Real resolución.

La primera parte la consulta concluía como empezó. Levantado el Rey, todos se ponían rodilla en tierra. El Ministro más antiguo después del Decano -el llamado Vicedecano- se adelantaba y hacía señal en la puerta por la que iba a salir el Rey para que se abriera. Al salir el Monarca, puesta la rodilla en tierra besaba la real mano. Detrás del Rey salía el Presidente o Gobernador, quien mantenía con el Monarca una audiencia secreta. En esta conversación se estudiaban los asuntos más graves, se informaba al Monarca de temas secretos y se recomendaba al Monarca nombres para cargos públicos importantes"". Mientras tanto los demás Consejeros y fiscales se marchan de Palacio sin ceremonia. Sólo quedan esperando al Presidente

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 293.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 99: "C'est dans cette audience que le Président entretenait le roi des affaires les plus graves, lui donnait les informations les plus secrètes, lui recommandait les candidats aux fonctions publiques et lui lisait les remontrances du Conseil".

el Alcalde más antiguo y el Escribano de Gobierno"".

5) Otras ceremonias en que tomaba parte el Consejo de Castilla

En general, el Consejo participaba en todas las grandes ceremonias y festejos de la Corte, cuando las principales autoridades del Estado eran invitadas. A título de ejemplo podemos mencionar algunas de las ceremonias en las que tradicionalmente era invitado el Consejo, aparte de las ya estudiadas.

En primer lugar, los grandes acontecimientos relativos a la Corona: bautizos de infantes o príncipes, matrimonios de la Familia Real, entradas públicas de un nuevo Monarca, besamanos en las grandes fiestas de la Corte, ceremonias religiosas como Te Deums o procesiones, festejos públicos con luminarias, corridas de toros, cenas de gala, recepciones oficiales, etc., y finalmente las honras fúnebres y sepelio del Monarca, o de algún miembro de la Familia Real, de alguna autoridad del Estado o de algún miembro del mismo Consejo.

Por la importancia del Consejo de Castilla dentro del sistema de gobierno de la Monarquía, sus Consejeros tenían sitio preferente al de los demás miembros de los Consejos. Solamente aquellos Consejos que por ser Supremos tenían la consideración del Consejo de Castilla veían a sus Consejeros colocados indistintamente con los Consejeros de Castilla, según su respectiva antigüedad en el cargo. Por otro lado y como apunta el profesor Escudero"", "tradicionalmente los Consejos de Estado y de Guerra -únicos presididos por el Monarca mismo- no tenían lugar señalado en los actos públicos, y especialmente en los que tenían lugar con motivo de fiestas reales". Las fuentes nos confirman que al menos el Consejo de Estado tuvo durante el reinado de Fernando VII lugares preeminentes por delante del mismo

"". MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 294 y 295.

"". ESCUDERO, J.A., "Notas sobre el Consejo de Estado entre los siglos XVIII y XIX", pág. 610.

Consejo de Castilla''''.

Las festividades de la Corte o días en que la Corte se vestía de Gala se clasificaban en dos tipos. Galas mayores con uniforme y besamanos, y Galas menores sin uniforme. Fueron Galas Mayores durante el reinado de Fernando VII los días siguientes: 24 de marzo, aniversario de la entrada del Rey en sus dominios de vuelta de su cautiverio; 13 de mayo, aniversario de la entrada del Rey en Madrid de vuelta de su primer cautiverio; 30 de mayo, onomástica del Rey; 1 de octubre, aniversario de la libertad del Rey y de la Familia Real en Cádiz, en 1.823; 14 de octubre, cumpleaños del Rey; también eran Gala Mayor los días de la onomástica y del cumpleaños de la Reina''''.

Más abundantes eran por el contrario los días de Gala Menor. En ellos no había besamanos ni era necesario llevar el uniforme de Gala. Entre estos días se incluían los de los cumpleaños y santos de los infantes -12 de enero, onomástica del Infante Rey de las Dos Sicilias; 20 de enero, de Infante D. Sebastián; o 31 de enero, cumpleaños del Infante don Carlos Luis María, etc.-; así como el día 26 de diciembre, fecha en que los Tribunales acudían a Palacio a besar la mano del Monarca''''.

Con relativa frecuencia acudía el Consejo de Castilla a felicitar al Rey o a la Reina por algún acontecimiento de la Real Familia'''' o por festividad

'''. Cfr. por ejemplo el ceremonial de la jura de Doña María Isabel Luisa como princesa heredera de la Corona, que se celebró el 20 de junio de 1.833 (Archivo de Palacio, Sección de Fernando VII, caja 445 expte. 1).

'''. Archivo de Palacio, Sección Fernando VII, Caja 206 núm. 32, "Días en que la Corte se viste de Gala".

'''. Archivo de Palacio, Sección Fernando VII, Caja 206 núm. 32, "Días en que la Corte se viste de Gala".

'''. Por ejemplo, la felicitación al Rey el 22 de agosto de 1.817 por el feliz alumbramiento de la Reina (A.H.N., Consultas de oficio, legajo 6.080); la anterior de fecha 10 de septiembre de 1.816 por la boda del Infante Carlos María de Isidro en Cádiz (legajo 6.078); la enhorabuena al Monarca el 29 de agosto de 1.818 por el anuncio del embarazo de S.M. la Reina (legajo 6.084); la respetuosa enhorabuena del Consejo el 13 de junio de 1.824 por el feliz alumbramiento de la Infanta Doña Luisa Carlota (legajo 6.087); la felicitación al Monarca el 15 de febrero de 1.832 por haber concedido al Infante don Sebastián permiso para casarse con la Princesa de Dos Sicilias Doña María Amalia (legajo 6.107), etc.

pública***; y en ocasiones también expresaba su pésame*** o declaraba por algún motivo jornada de luto público***.

Eran igualmente frecuentes las ceremonias religiosas organizadas por el mismo Consejo. En ocasiones el motivo era una misa de acción de gracias o Te Deum por algún acontecimiento favorable***. Fueron especialmente frecuentes los días de la Guerra, cada vez que era conocida una victoria de los ejércitos españoles***. Y por otro lado, también se hacían con frecuencia rogativas

***. Ejemplos los tenemos en la proclamación del Rey y entrada en público (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.221); la de Murat como lugarteniente del Reino (A.H.N., Invasión francesa, legajo 5.511 núm. 8); la de José Bonaparte, a cuya recepción no asistió el Consejo (legajo 5.511 núm. 19); o en cualquiera de las festividades de San Fernando (por ejemplo, la del año 1.824, en A.H.N., Consultas de Oficio, legajo 6.087, consulta del 29 de mayo de 1.824); otro ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.876 núm. 11.

***. Ejemplos tenemos en A.H.N., Consultas de oficio, legajo 6.121 núm. 54: el Consejo manifiesta su pésame al Rey el 21 de abril de 1.817 por la muerte del infante don Antonio; el pésame del Consejo por la temprana muerte de la Reina, en consulta de oficio de 27 de diciembre de 1.818 (legajo 6.085); otro pésame por fallecimiento de la Reina, el 18 de mayo de 1.829 (legajo 6.097); o el pésame por el fallecimiento de la hermana del Rey, la Reina viuda de Portugal Doña Carlota Joaquina de Borbón, manifestado el 15 de enero de 1.830; o "el justo sentimiento con motivo de la muerte del rey Nuestro señor", de fecha 30 de septiembre de 1.833 (legajo 6.110).

***. Por personal decisión real, en abril de 1.815 el Consejo manda celebrar a partir de entonces jornada de luto el día dos de mayo en homenaje a las víctimas de aquel suceso (Archivo de Palacio, Sección Fernando VII, caja 199 núm. 12);

***. Así, el miércoles 10 de octubre de 1.832, a las doce del mediodía, hubo un solemne Te Deum en la Real Iglesia de Santa María, con la asistencia entre otras autoridades de los Presidentes de los Consejos y Tribunal de la Contaduría (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.912 núm. 7); otro ejemplo del año 1.826 lo tenemos en A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 3.

***. Por ejemplo, el te Deum celebrado en la iglesia de Santa María el día 7 de agosto de 1.808 (A.H.N., Consejos, Invasión francesa, legajo 5.525 núm. 19).

públicas"" o funciones de desagravio"".

Todos los años asistía también el Consejo en cuerpo a los sermones de Cuaresma, que se predicaban en alguna de las principales iglesias de la Villa y Corte"". Y en la procesión del Corpus Christi por las calles de Madrid, asistía el Consejo en pleno, formando parte de la solemne comitiva del Santísimo Sacramento"".

"". Un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, de 1.808, núm. 1.398 (también aparece en Consejos, Invasión francesa, legajo 5.525 núm. 19): el 5 de agosto de 1.808 hubo una rogativa del Consejo en la iglesia de Santa María, a las 9:00 de la mañana. Asistieron los Alcaldes vestidos de golilla y en la forma ordinaria los alguaciles. hubo una nueva rogativa el martes 4 de octubre, desde la iglesia de Santa María hasta la de Atocha. Sobre el procedimiento de estas rogativas públicas se puede ver MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 563 y ss.).

"". En virtud de un decreto del Consejo de fecha 31 de agosto de 1.808 se hicieron funciones de desagravio de los ultrajes hechos por las tropas francesas en los templos. El Consejo de Castilla asistió en la Iglesia de santa María a una misa de desagravio al Santísimo Sacramento, a la que también asistió la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. La solemne ceremonia tuvo lugar el 4 de septiembre de aquel año. (A.H.N., Consejos, Invasión francesa, legajo 5.525 núm. 16).

"". Por ejemplo, A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 4.400: "Sermones que se han de predicar al Consejo durante la Cuaresma de 1.807". Cfr. también MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 585 y ss.

"". Un ejemplo atípico lo tenemos en la procesión del Corpus el 16 de junio de 1.808, a las diez de la mañana, que tuvo lugar en el interior de la iglesia de Santa María, por mandatao expreso del gran Duque de Berg. En aquella ocasión sólo asistieron la Cruz de la parroquia, la Cofradía de la sacramental de ella, varios franciscanos capellanes de Madrid, autoridades de la Villa, la Vicaría Eclesiástica y los Consejos de Castilla -que presidía-, Indias, ordenes y hacienda, por el orden y forma en que se hacía cuando se celebraba públicamente la festividad y procesión. (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 9; cfr. también MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 542 y ss.).

4. Funcionamiento de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.

1) el despacho en la Sala

Incluimos también en este apartado de competencias algunas notas sobre el funcionamiento de la Sala. Sabemos que la Sala para la determinación de las causas criminales tenía lugar por las mañanas, de lunes a viernes, con el mismo horario del Consejo de Castilla. Antes de comenzar la audiencia los Alcaldes escuchaban misa en el altar instalado en una de las antecámaras del edificio y seguidamente pasaban a la Sala de Acuerdos.

En los días de audiencia, cuando acudía el Gobernador de la Sala, salían a recibirle a la puerta de la calle el Alcalde de la Cárcel y los alguaciles de guarda, quienes le acompañaban hasta la sala de estrados. Inmediatamente el portero le entregaba la lista de presos que habían ingresado en la Cárcel en las últimas 24 horas, junto con los datos de su causa. Todo ello se encontraba asentado en el Libro de Entradas de Presos^{***}.

En la Sala de Acuerdos entraba el Gobernador y después él todos los Alcaldes de Corte. Tras una señal del Gobernador con la campanilla, el Escribano de Cámara semanero entraba a dar cuenta de las novedades comunicadas desde el repeso mayor, así como de otras noticias sobre abastos, rondas, paseos, comedias y una relación de heridos en los hospitales de la Corte.

Delante de todos los Alcaldes, el Gobernador firmaba y sellaba el pliego de noticias que inmediatamente se enviaba al Rey, a través de un alguacil de guarda que lo

^{***}. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo".
pág. 322.

llevaba al Consejo de Castilla"".

En la reunión se informaba a los Alcaldes de todas las novedades ocurridas desde la última reunión el día anterior. Leía la lista de los presos ingresados y el Alcalde semanero daba detalles de las circunstancias de cada uno.

Remitido el pliego diario al Rey y al Gobernador del Consejo, seguidamente se formaba la Sala criminal, para lo que tocaba la campanilla el Gobernador de la Sala. Seguidamente iba a la Sala de la audiencia, seguido por los Alcaldes correspondientes. Una vez instalada la audiencia, comenzaba el despacho de los asuntos pendientes y se votaba y determinaba las causas, ayudas y acuerdos. Parece ser que todo quedaría reflejado en los llamados Libros de Acuerdos, que llevaba el Alcalde más moderno"".

Tres días a la semana -lunes, miércoles y viernes- se hacía audiencia pública. Parece que inicialmente el Escribano de Gobierno presentaba las peticiones de la acusación pública y que seguidamente los Fiscales presentaban sus alegaciones. Eran conocidas las pruebas y los reos llevaban a cabo su defensa, ayudados por abogados probablemente. A continuación se hacía relación por los Relatores de las causas concluidas y finalizada la relación y los informes de los abogados, se levantaba la Sala"".

En la resolución de las causas civiles debían intervenir al menos cinco Alcaldes. Como en el caso de los Consejeros de Castilla, en caso de ausencia o enfermedad de alguno de los Alcaldes de un pleito, se buscaba un sustituto entre los restantes Alcaldes de Corte.

Levantada la Sala, se dirigían Gobernador y Alcaldes a la Sala del Acuerdo, donde continuaba la audiencia. Concluida ésta, se levantaba la sesión y los Alcaldes y subalternos del Consejo presentes acompañaban al Gobernador hasta la salida.

La resolución de las causas y expedientes por la Sala llevaba consigo una serie de gastos que se incluían en el presupuesto anual de la Sala. Sabemos por ejemplo que

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 324. Concretamente lo entregaba a uno de los porteros de la Sala primera de Gobierno. En los días festivos el Alcalde Semanero firmaba dos pliegos -uno para el Rey y otro para el Gobernador del Consejo- y lo llevaba para su firma al domicilio del Gobernador de la Sala.

"" SANCHEZ GÓMEZ, R. I., op. cit., pág. 53.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 327 y ss.

anualmente se empleaban aproximadamente unas 50 resmas de papel de oficio para el despacho de las causas y otras 70 resmas de papel de otras clases"". Por otro lado, el gasto de cera ascendería anualmente a unos 18.000 reales"".

2) La Sala de Apelaciones de Pleitos de menor cuantía.

Dos Alcaldes de Corte nombrados por el Presidente o Gobernador componían esta Sala de Apelaciones del Consejo. Conocía según Martínez de Salazar"" los pleitos cuyo interés no excediese de 300.000 maravedís.

Todos los meses se renovaba la composición de esta Sala, y el Gobernador podía reelegir a sus componentes. Los Alcaldes continuaban en su cometido mientras no fueran nombrados otros Alcaldes para cubrir sus puestos. En ausencia o enfermedad de alguno de los nombrados despachaba el que quedaba con el más moderno de los que fueron de Apelaciones en el mes anterior. De todo ello -nombramientos, sustituciones, etc.-, se levantaba el asiento correspondiente en un libro conservado en el Acuerdo de la Sala del Crimen"".

Las peticiones y mejoras de apelación de los

"". A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.398, año 1.808. En febrero de 1.808 se abonó una cuenta de 5.226 reales, correspondientes a 41 resmas de papel superfino de Román, 7 resmas de marquilla fina, 20 resmas de taplete y 52 pliegos de calendarios. El año anterior la cuenta de papel había ascendido a 4.609 reales.

"". De 21 de diciembre de 1.807 a 8 de abril de 1.808 la Sala consumió 262 libras de cera. Si cada libra costaba 18 reales, el gasto de cera en ese periodo fue de 4.716 reales. (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1.808, libro núm. 1.398).

"". MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 182.

"". MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 183.

pleitos de menor cuantía eran decretadas por los Escribanos de Cámara de la Sala del Crimen. Para realizar este cometido estos Escribanos se turnaban semanalmente.

Los pleitos en discordia de la Sala de Apelaciones los decidía el Alcaide más antiguo que no hubiera participado en la sentencia apelada^{***}.

^{***}. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo",
pág. 183.

R.d 91820

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Derecho

Departamento de Historia del Derecho

BIBLIOTECA UCM



5303408138

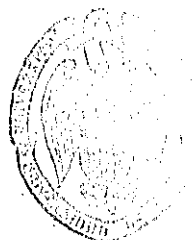
XI-9
Puy
can

EXCLUIDO DE PRESTAMO

EL CONSEJO REAL DE CASTILLA EN EL
REINADO DE FERNANDO VII

DONATIVO

TOMO II



BIBLIOTECA
DE DERECHO

José María Puyol Montero

Madrid, 1992

Historia
71820

Colección Tesis Doctorales. N.º 260/92

© José María Puyol Montero

Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía.
Escuela de Estomatología. Ciudad Universitaria.
Madrid, 1992.

Ricoh 3700

Depósito Legal: M-29106-1992

na X-53 - 086664 - 0

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL DERECHO

EL CONSEJO REAL DE CASTILLA EN EL REINADO DE FERNANDO VII

(TOMO II)

TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR
JOSÉ MARÍA PUYOL MONTERO

DIRIGIDA POR EL DR. D. JOSÉ
SANCHEZ-ARCILLA BERNAL,
CATEDRÁTICO DE HISTORIA DEL
DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID.

TABLA DE ABREVIATURAS

ACD	Archivo del Congreso de los Diputados
AGP	Archivo General de Palacio
AGS	Archivo General de Simancas
AHDE	Anuario de Historia del Derecho Español
AHN	Archivo Histórico Nacional
AMAE	Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores
AMJ	Archivo del Ministerio de Justicia
AVM	Archivo de la Villa de Madrid
BAE	Biblioteca de Autores Españoles
BAM	Biblioteca del Ateneo de Madrid
BCD	Biblioteca del Congreso de los Diputados
BCE	Biblioteca del Consejo de Estado
BN	Biblioteca Nacional
BPR	Biblioteca del Palacio Real
BS	Biblioteca del Senado
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas
FUE	Fundación Universitaria Española
HM	Hemeroteca Municipal
IEA	Instituto de Estudios de la Administración
IEAL	Instituto de Estudios de la Administración Local
IEP	Instituto de Estudios Políticos
INAP	Instituto Nacional de la Administración Pública
RAH	Real Academia de la Historia
REP	Revista de Estudios Políticos
SHA	Symposium de Historia de la Administración
SHM	Servicio Histórico Militar
SIEA	Symposium del Instituto de Estudios de la Administración
UCH	Universidad Complutense de Madrid

INDICE

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	6
II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.....	26
1. El Consejo en 1808. La abdicación de Carlos IV y la llegada al trono de Fernando VII.....	28
2. El Consejo de Castilla y la Junta de Gobierno..	50
3. El Consejo de Castilla en el primer reinado de José I.....	109
4. El Consejo de Castilla y las Juntas Provinciales La Junta Central Suprema y gubernativa.....	154
5. Supresión del Consejo de Castilla por Napoleón.	234
6. Supresión de los Consejos y creación del Consejo y Tribunal Supremo de España e I. (Consejo reunido).....	269
7. Restablecimiento de los Consejos (1810).....	278
8. El Consejo de Castilla desde 1810 hasta la promulgación de la Constitución de 1812 y su supresión.....	283
9. Restablecimiento del Consejo de Castilla en la etapa 1814-1820.....	325
10. Supresión del Consejo de Castilla al restablecerse la Constitución de 1812 en 1820..	384
11. El Consejo de Castilla en la década 1823-1833..	394
12. Supresión definitiva del Consejo en 1834.....	502
III. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSEJO.....	515
IV. COMPETENCIAS.....	524
a) Competencias del Consejo.....	526
b) Competencias de la Sala de Alcaldes.....	580
c) Funcionamiento del Consejo.....	588
d) Funcionamiento de la Sala de Alcaldes.....	629

V. ESTRUCTURA ORGANICA	638
1) Gobernador del Consejo.....	640
2) Decano.....	676
3) Consejeros.....	683
4) Fiscales.....	750
5) Escribanos de Gobierno.....	776
6) Escribanos de Cámara.....	792
7) Relatores.....	840
8) Agentes Fiscales.....	893
9) Archiveros.....	919
a) Superintendente.....	920
b) Archivero.....	925
c) Oficiales de Archivo.....	931
10) Porteros.....	936
a) de Cámara.....	938
b) de Estrados.....	959
c) habilitado.....	967
d) de Escribanía de Gobierno.....	970
11) Otros subalternos.....	974
a) Capellán.....	975
b) Ayuda de oratorio.....	981
c) Mozo de estrados.....	983
d) Tasador General de Pleitos.....	986
e) Registrador del Sello.....	991
f) Impresor.....	995
g) Contadores y Receptor de Penas de Cámara..	998
h) Relojero.....	1001
12) Empleados de Escribanía.....	1002
a) Oficiales.....	1003
b) Escribientes.....	1037
c) Repartidor de Pleitos.....	1046

V. ESTRUCTURA ORGANICA (cont.)

13) Sala de Alcaldes de Casa y Corte.....	1054
1) Gobernador.....	1056
2) Alcalde Decano.....	1063
3) Alcaldes.....	1065
4) Otros empleados de la Sala.....	1079
a) Fiscales.....	1079
b) Agentes Fiscales.....	1082
c) Escribanos.....	1084
d) Relatores.....	1087
e) Escribanos Oficiales.....	1089
f) Porteros.....	1091
g) Alguaciles.....	1093
h) Otros subalternos.....	1096
14) Dotación material del Consejo.....	1097
a) Palacio de los Consejos.....	1098
b) Otros establecimientos.....	1108
c) Archivos del Consejo.....	1112
d) Archivo de la Sala de Alcaldes.....	1133
e) Biblioteca.....	1049

VI. PERSONAL RELACIONADO CON LA LABOR DEL CONSEJO....1143

1) Abogados.....	1145
2) Procuradores.....	1160
3) Receptores.....	1178
4) Agentes en Corte.....	1188

VII. EL CONSEJO Y TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA E INDIAS (CONSEJO REUNIDO).....1192

VIII. CATALOGO DE CONSEJEROS Y FISCALES.....1226

IX. CONCLUSIONES.....1275

X. FUENTES BIBLIOGRAFICAS.....1277

XI. FUENTES DOCUMENTALES.....1304

V. ESTRUCTURA ORGANICA

ESTRUCTURA ORGANICA DEL CONSEJO DE CASTILLA

=====

GOBERNADOR

DECANO

CONSEJEROS

FISCALES

ESCRIBANOS DE GOBIERNO

ESCRIBANOS DE CAMARA

RELATORES

AGENTES FISCALES

ARCHIVERO

SUPERINTENDENTE

ARCHIVERO

OFICIALES

PORTEROS

DE CAMARA

DE ESTRADOS

HABILITADO

DE ESCRIBANÍA DE GOBIERNO

OTROS EMPLEADOS

CAPELLAN

AYUDA DE ORATORIO

MOZO DE ESTRADOS

TASADOR GENERAL DE PLEITOS

REGISTRADOR DEL SELLO

IMPRESOR

CONTADOR DE PENAS DE CAMARA

RECEPTOR DE PENAS DE CAMARA

RELOJERO

EMPLEADOS DE ESCRIBANIA

OFICIALES

ESCRIBIENTES

REPARTIDOR DE PLEITOS

SALA DE ALCALDES

GOBERNADOR

ALCALDE DECANO

ALCALDES

FISCALES

AGENTES FISCALES

ESCRIBANOS

RELATORES

ESCRIBANOS OFICIALES

PORTEROS

ALGUACILES

OTROS EMPLEADOS

DOTACIÓN MATERIAL DEL CONSEJO

PALACIO DE LOS CONSEJOS

ARCHIVO

BIBLIOTECA

ARCHIVO DE LA SALA DE ALCALDES

PERSONAL RELACIONADO CON LA LABOR DEL CONSEJO

ABOGADOS

PROCURADORES

RECEPTORES

AGENTES EN CORTE

GOBERNADOR DEL CONSEJO

1. Introducción

"La autoridad, jurisdicción y manejo universal que concurre en los Señores Presidentes o Gobernadores del Consejo es de tan alta esfera y singularidad, que no se pueden puntualizar ni señalar sus límites, porque como representan inmediatamente a la Persona del Rey, entienden en todos los negocios de Justicia y Gobierno de la Monarquía, con jurisdicción para mandar sobre los demás Ministros, Sala de Alcaldes de Corte, Chancillerías y Audiencias, constituyéndose vigilante centinela para que todos puntualmente cumplan con sus respectivos encargos y observen las leyes del Reino"".

Así describía Martínez de Salazar en el año 1.764 la dignidad del magistrado que era la cabeza del Consejo de Castilla"". El Gobernador o, en su caso, el Presidente del Consejo -conocido en tal caso generalmente como el Presidente de Castilla"" o sencillamente el

"". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 19.

"". FAYARD, Janine: "Les membres du Conseil de Castille à l'époque moderne (1621-1746)", pág. 141.

"". Así, por ejemplo, se le menciona con este nombre al Duque del Infantado -entre otros muchos expedientes o documentos citables- en el legajo 11.995 del Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, Sección Consejos Suprimidos, A.H.N. de Madrid.

Presidente -, era tras el Rey la persona más importante del Reino y ocupaba tras aquél el segundo lugar en la curia administrativa de la Monarquía hispánica"". Del prestigio e importancia de esta autoridad dan testimonio el amplio abanico de preeminencias y potestades que le estaban reconocidas.

Desde siglos atrás se había ido perfilando la figura singular del Presidente de Castilla. Ya un escritor sobre la Corte de Madrid en el siglo XVII, González Dávila"", decía de él que era "el Capitán General de la justicia de España". Ejercía vicarialmente sus poderes en nombre del Soberano"".

Los Presidentes eran grandes figuras: Consejeros de Estado, arzobispos, grandes de España, jurisconsultos"", y con seguridad habría de ser hombre de gran erudición y de gobierno, a la altura del puesto que desempeñaba"".

"". BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", op. cit., pág. 160. Esta idea es también apuntada, entre otros, por Gounon, Desdevizes y Cordero, ops. cit.

"". GONZALEZ DAVILA: "Teatro de las Grandezas de Madrid", pág. 338, mencionado por BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", op. cit., pág. 160.

"". "El Presidente tiene despacho ordinario de provisiones, gobierno y justicia. Consulta a su Majestad el modo de proceder de sus Consejeros, y como vicario suyo hace lo que conviene para cumplir con su cargo goza del honor que se debe a la persona que representa. En los actos públicos sale con sus Consejeros, para mostrar, no sólo el Ornato Real, sino también el de la providencia de que está dotado el Reino en su gobierno político. Su despacho ordinario es el mismo que su Majestad debiera tener y hacer por su persona, si el tiempo y diversidad de negocios lo permitieran" (GONZALEZ DAVILA, op. cit., pág. 355, citado por BARRIOS, op. cit., págs. 160 y 161).

"". CORDERO, op. cit., pág. 64.

"". JOLY, "Viaje por España", en "Viajes", tomo II, pág. 111, citado por BARRIOS, op. cit., pág. 161. Así se expresaba Joly: "Está compuesto de un presidente, llamado Presidente de Castilla, que hay costumbre de que sea un prelado o señor de título u hombre de gran erudición y de gobierno; hoy es el conde de Miranda. Cuando ocurre que no es eclesiástico ni doctor, sino príncipe seglar, tiene dos asistentes letrados para los asuntos. La calidad que le dan en justicia es 'muy poderoso señor', 'sepa vuestra alteza', etc., correspondiendo de su parte a esa grandeza, de suerte que jamás va a visitar a nadie por la ciudad sino a las personas reales, saliendo muy de tarde en tarde fuera y

En el reinado de Fernando VII, la figura del Gobernador del Consejo sigue una evolución paralela a la de toda la institución: lenta pero inexorable pérdida de prerrogativas y de prestigio, hasta la definitiva extinción del Consejo en 1834. Este proceso de decadencia se acentúa a partir de la Restauración de 1814, en que las prerrogativas de la Presidencia de Castilla se verán muy recortadas, como veremos más adelante.

En este periodo, por otra parte, no encontramos ningún prelado en la Presidencia, con excepción del Sr. Inguanzo****, que fue Gobernador interino. Hubo sí varios nobles que fueron Presidentes: el Duque del Infantado y el General Castaños, Duque de Bailén. Abundarían también los nobles entre aquéllos que interinamente ocuparon la Presidencia o la Gobernación del Consejo. Así, llegó a ser Presidente interino don José Joaquín Colón de Larreátegui. Y fueron Gobernadores interinos don Arias Mon, don Bernardo Riega, don José María Puig y don Juan Antonio Inguanzo. Predominaría entre ellos la formación jurídica los juristas, llegando la mayoría de ellos a la cabeza del Consejo tras una brillante carrera profesional****. Todos los que ocuparon el Gobierno de l Consejo interinamente eran los Decanos o Consejeros más antiguos, y la interinidad se ejercía por vacante o ausencia del Presidente o Gobernador efectivo.

siempre con algún motivo, no vistiendo de manera corriente, porque representa la majestad del rey".

****. "Don Pedro Inguanzo y Rivero fue diputado por Asturias. Caserote de suma ilustración y buena palabra, llegó a ser, después de 1.814 y sucesivamente, obispo de Zamora, arzobispo de Toledo y Decano del Consejo Real. Murió en Toledo en 1.836. Era de opiniones muy monárquicas y ultramontanas, que defendió vigorosamente en Cádiz. Discutió mucho y siempre con corrección sobre señorías, proyecto de Constitución, la Inquisición y el restablecimiento de los conventos..." (BELDA, J., y LABRA, R.M. (hijo), "Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San Felipe", Madrid, 1912, Imprenta Fontanet, pág. 104).

****. Bien podría aplicarse a sus máximos dignatarios la siguiente afirmación de Fernando VII, escrita de su puño y letra en uno de sus papeles: "El Consejo de Castilla...se halla compuesto en el día de una sola clase de personas, esto es, de jueces letrados". (A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, folio 199).

2. Nombramiento

Juan de Moriana señalaba ya en el siglo XVII las excelentes cualidades que debía reunir un Presidente de Castilla''''.

Por su parte Martínez de Salazar destacaba en su "Noticias del Consejo" el singular medio de elección que se seguía con los Presidentes o Gobernadores de Castilla:

"Una de las principales preeminencias que tienen los Señores Presidentes o Gobernadores del Consejo Real consiste en el modo de su elección, pues para distinguirlos de los demás Ministros del Reino no se hace en la forma común por Título, Despacho o Cédula Real, sino es por medio de un papel, escrito todo de la Real mano de S.M. dirigido al sujeto que se destina al empleo, por lo que no puede dudarse que la elección de la persona que ha de ocupar tan alta dignidad es sola del Soberano"''''.

Lo primero que llama la atención es el motivo por el que el Rey unas veces nombraba un Presidente y otras un Gobernador. Muchos autores han intentado dar una explicación a este curioso fenómeno, a lo que esperamos dar una respuesta definitiva.

Tratados de los siglos XVII y XVIII como los de Moriana, Martínez de Salazar o Escolano mencionaban indistintamente a Presidente o Gobernador sin incidir en la explicación de esta doble diferenciación. Por otro lado, es evidente que ambos títulos representaban funciones similares y que en la literatura jurídica de la época y en los

'''''. "Para ser Presidente se necesitan personas doctas, sabias y entendidas, y de muchas partes de linaje y letras, y de buena vida y costumbres, y que hayan estudiado en muchas Audiencias, Chancillerías y Consejos, y así cuando llegan a este punto son consumados varones" (MORIANA, J. de, "Ceremonial y práctica del Consejo de Castilla", pág. 80).

'''''. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 61.

documentos oficiales se usaban indistintamente, como sinónimos. Así lo expresaba Fayard:

"Tous les textes (actes de nomination, listes des présidents ou gouverneurs) conduisent à penser que cette distinction entre président et gouverneur n'avait aucune importance sur le plan de la réalité des pouvoirs du titulaire. D'après les actes de nomination, privilèges, pouvoirs et traitements étaient identiques. Pour le président, comme pour le gouverneur, la durée de leurs fonctions était entièrement soumise à la volonté royale. L'un et l'autre pouvait garder leur rang et leur traitement, après avoir quitté la présidence ou le gouvernement du Conseil"".

Desdevises du Désert apuntaba la tesis de que la distinción entre el cargo de Presidente o Gobernador consistía en la inamovilidad del primero, mientras que el segundo era revocable"". Otros autores como G. Anes siguen esta teoría de Desdevises"". Fayard, por su parte, no acepta

"" FAYARD, J., "Les membres du Conseil de Castille à l'époque moderne", op. cit., pág. 142: "Todos los textos, [actas de nombramiento, listas de Presidentes o Gobernadores] llevaban a pensar que esta distinción entre Presidente y Gobernador no tenía ninguna importancia sobre el plan de la realidad de los poderes del titular. Además las actas de nombramiento, privilegios, poderes y sueldos eran idénticas. Para el Presidente como para el Gobernador, la duración de sus funciones estaba enteramente sometida a la voluntad real. Uno y otro podían guardar su rango y su sueldo, después de haber dejado la presidencia o el gobierno del Consejo".

"" DESDEVISES DU DZERT, G., "L'Espagne de l'Ancien Régime. Les Institutions", Paris, 1899, pág. 63; y "Le Conseil de Castille au XVIII^e siècle", en Revue Historique, t. 79, 1902, pág. 27. Extractamos la opinión de Desdevises de una moderna edición del primer libro citado: "El rey terminó finalmente por no nombrar más Presidentes de Castilla. Nombraba en cambio un Gobernador del Consejo, el cual tenía exactamente los mismos poderes, que podía revocar en cualquier momento. En 1804 el Consejo tenía solamente un simple Gobernador" ("La España del Antiguo Régimen", Fundación Universitaria Española, Seminario Cisneros, Madrid 1989, pág.297).

"" G. ANES afirma lo siguiente: "Hasta Carlos III el Presidente del Consejo de Castilla era nombrado por el Rey con carácter inamovible. Al sustituir el título de Presidente por el de Gobernador, el cargo fue hecho amovible a voluntad

esta tesis ya que uno y otro se nos presentan como cargos revocables y tras su cese podían incluso conservar aquel rango"". No había por tanto, según Fayard, diferencia desde este punto de vista entre Presidente y Gobernador.

Tampoco influyó en esta dicotomía el hecho de que los personajes en cuestión fuesen prelados o seculares, o que tuvieran título nobiliario o no. Basta con repasar la lista de Presidentes y Gobernadores que tuvo el Consejo"". Con el mismo argumento desechamos la teoría de Cordero"", de que fue a partir de Carlos III cuando la figura de un Presidente fue sustituida por la de un Gobernador: antes y después de Carlos III hubo Presidentes y Gobernadores.

Fayard, por su parte, apunta una tesis que se aproxima en cierta manera a la que parece ser la correcta. Según la historiadora francesa, se trataba ante todo de una cuestión de prestigio. El Rey diferenciaba a los personajes de la alta nobleza de aquéllos que tenían un origen más modesto. El título de Presidente podía así consagrar a la vez una alta alcurnia o unos méritos personales eminentes.

Parece que la clave para resolver definitivamente esta cuestión podría estar aquí, en la alcurnia o grado de nobleza del que ocupase la cabeza del Consejo. Un curioso expediente fechado en 1819 nos aporta nuevas luces sobre esta cuestión: al establecer el Presupuesto del Consejo para 1.819 presentaba en dos partidas diferenciadas la del Presidente y la del Gobernador. Y añadía la siguiente nota:

"El Gobernador cobra habitualmente lo mismo que el Presidente y sólo existe la diferencia de que el Presidente ha de ser

del Rey".

"". FAYARD, J., op. cit., pág. 142. FAYARD cita un clarividente texto de Saint-Simon, escrito en el XVIII, que confirma su opinión. Saint Simon recoge las palabras de don Miguel Francisco Guerra, que no había aceptado ser gobernador del Consejo de Castilla " qu'à condition de n'être point tenu d'en garder le rang, s'il venait à quitter cette grande place, parce que... il ne prétendait pas mourir d'ennui pour y avoir passé" (SAINT-SIMON, "Memorias", Edt. Boislisle, t. XXXIX, París, 1927, pág. 285).

"". Todos los Presidentes fueron seculares. Como ya hemos visto, uno de los pocos clérigos que hubo en este periodo en el Consejo, el Sr. Inguanzo, que llegó a ser arzobispo de Toledo, fue Decano Gobernador interino.

"". CORDERO, op. cit., pág. 64.

Grande de España"".

Esta afirmación concuerda plenamente con otra recogida por Fayard, extraída de una memoria del Embajador de Francia Vauréal, obispo de Rennes, fechada el 6 de diciembre de 1747:

"La présidence de ce tribunal est la (plus) grande dignité qu'il y ait en Espagne. Ferdinand VI l'a donnée à l'évesque d'Oviedo, non sous le nom de président, mais de gouverneur, parce que pour être président, il faut être Grand""."

Esta teoría, que se basaría en una práctica habitual del Consejo, tiene al parecer su confirmación en todos los Presidentes y Gobernadores que tuvo el Consejo desde mediados del siglo XVIII y en los del XIX. Quizás fue en el XVIII cuando esta práctica se consolidó, o si existía anteriormente pudo tener alguna excepción por expreso deseo real"". Y así mismo queda confirmada en el reinado de Fernando VII: los únicos que llegaron a la Presidencia del Consejo eran de la alta nobleza, Grandes de España: el Duque del Infantado, don José Joaquín Colón "" -descendiente del Almirante de las Indias- y el General Castaños, éste último, Grande de España por su victoria en los Campos de Bailén"".

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, legajo 3.333 expte. núm. 11.

"". A.A.E., París, Corr. pol., Espagne, vol. 496, fol. 282, citado por FAYARD, op. cit., pág. 143: "El Presidente de este Tribunal es la más alta dignidad que había en España. Fernando VI la concedió al obispo de Oviedo, no bajo el nombre de Presidente sino de Gobernador, porque para ser Presidente es necesario ser Grande."

"". FAYARD apunta que en el siglo XVII ningún Presidente fue Grande de España en el momento de acceder al cargo. Por otro lado, ni Felipe V ni Fernando VI nombraron ningún Presidente: quizás "ils voulurent montrer que le Conseil de Castille n'était plus l'organe essentiel de la monarchie", (FAYARD, op. cit., pág. 143).

"". Colón fue solamente Decano del Consejo y Presidente interino -no Gobernador interino-.

"". Parece también que había una sustancial diferencia económica entre un Presidente y un Gobernador. El sueldo que se abonaba a un Gobernador era menor y los gastos que llevaba consigo un título así parece que también eran inferiores. Así se desprende también de un memorial localizado entre los papeles reservados de Fernando VII. Este documento de 1.824 expresaba la necesidad de sustituir al Presidente Infantado,

En cuanto al perfil humano y profesional de los Gobernadores, lo primero que podemos destacar es que no existía ningún requisito previo para su elección. El Rey podía designar libremente a la persona que habría de desempeñar esta alta magistratura. Debía eso sí ser persona cualificada y de la máxima confianza del Monarca. Su origen social era habitualmente elevado, aunque no necesariamente noble, aunque en la práctica era raro el Gobernador -incluso los interinos- que no pertenecían a la Nobleza. Era frecuente que el Rey designara para este puesto una persona de su confianza, que a la vez fuera experto en las labores de Gobierno.

Durante el reinado de Fernando VII, hubo básicamente cuatro Presidentes o Gobernadores y varios más que lo fueron por breves espacios de tiempo de forma interina, en su condición de Decanos. Los principales máximos mandatarios del Consejo fueron el Duque del Infantado, Presidente desde 1.808 hasta 1.823 -salvo en los periodos turbulentos de la Guerra y el Trienio, en los que el Consejo fue suprimido o se trasladó a Cádiz-; don Ignacio Martínez de Vilela, desde 1.824 hasta 1.827; don José María Puig y Samper, en un corto periodo de tiempo en el año 1.832""; y el General Castaños, desde finales de 1.832 hasta la definitiva supresión del Consejo en 1.834. A ellos se añadía los que ostentaron esta alta magistratura de forma interina por ser Decanos y estar vacante la plaza.

De esta manera, la lista de los Presidentes o Gobernadores efectivos o interinos del Consejo en el reinado de Fernando VII fue la siguiente: El Duque del Infantado"", don Arias Mon, don Ignacio Martínez de

que había dimitido del cargo, por un Gobernador que fuera un Consejero experimentado dentro del propio Consejo. El Rey parece siguió al pie de la letra las indicaciones contenidas en este memorial, ya que designó para el puesto al Consejero Martínez de Vilela (A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, folios 198-200).

"" A.H.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.108, consulta del 3 de octubre de 1.832. El Real decreto llevaba fecha de 1 de octubre y fue publicado en Consejo pleno el día 2 del mismo mes.

"" Don Pedro de Alcántara Toledo Salm-Salm Hurtado de Mendoza y Orozco, Duque del Infantado, Grande de España, Duque de Pastrana y de Lerma, Marqués de Santillana y de Saldaña, Príncipe de Eboli y otros títulos (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sección Invasión Francesa, legajo 5.517 núm. 20). Fue nombrado Presidente del Consejo por R.D. de 3 de junio de 1814 (A.H.N., Reales Cédulas, núm. 2.205; y Consejos, Libro 1.505 núm. 23). No obstante, un año más tarde la Presidencia recayó, en defecto de la presencia del Monarca, en alguno de los Infantes, hermano y tío del Rey (GARCIA

Villela, don Bernardo Riega y Solaner, don Francisco Fernández del Pino, don Juan Antonio Inguanzo, don José María Puig Samper Domenech y el General don Javier Castaños.

Los Decanos del Consejo convertidos en Gobernadores interinos estaban siempre en una situación de provisionalidad, como Consejeros promovidos en el escalafón. En general, en la última etapa del Consejo de Castilla se observa una victoria de la profesionalidad en esta institución: se tenderá a dejar en la Gobernación del Consejo -como titular o como interino- a uno de sus Ministros más expertos: así, desde la dimisión de Infantado en 1.823 y con la única excepción de Castaños, todos los demás Gobernadores se contaban entre los más veteranos Consejeros de Castilla****. Pudo influir en ello la pérdida

MADARIA, J.M., "Estructura de la Administración Central (1808-1931)", mencionando el Real Decreto de 31 de marzo de 1815).

Por su parte, Villa-Urrutia juzgaba así al Duque-Presidente: (VILLA URRUTIA, Marqués de: "Fernando VII, rey absoluto", págs. 76 y 77): "El Duque del Infantado era un amigo del Rey desde los aciagos días del proceso de El Escorial. Su esclarecido linaje, su cuantiosa hacienda, su esmerada educación, su apuesta figura y su hidalga caballerosidad habían servido a su ambición para llegar a los más altos destinos del Estado, la Presidencia del Consejo de Castilla, el mando en jefe del Ejército, la Embajada de Londres, la Presidencia del Consejo de Regencia. Pero en ninguno de ellos estuvo a la altura de los deberes de su cargo, porque su inteligencia, además de corta, era confusa y quimérica, y su desmayado ánimo, incapaz de continua aplicación". Y en otra de sus publicaciones afirmaba también: "Gozaba a la sazón Infantado de altísimo concepto y hubiera quizás acaudillado y regido a los españoles durante la Guerra de la Independencia en nombre del cautivo rey Fernando VII y hasta donde la indisciplina y la envidia nativas lo consintieran, si al esclarecido linaje, la cuantiosa hacienda, la esmerada educación, la apuesta figura y la hidalga caballerosidad, hubiere juntado en igual medida la inteligencia y el carácter. Mas era aquélla corta, además de confusa y quimérica, y desmayado el ánimo e incapaz de sostenida aplicación, por lo que nunca estuvo a la altura de sus deberes en ninguno de los elevados cargos que hubo de desempeñar en tal revueltos tiempos". (VILLA-URRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Constitucional", págs. 58 y 59).

****. En esta circunstancia se encontraban Gobernadores interinos como Martínez de Villela, Riega o Inguanzo. Fue patente la adopción de este criterio en el caso de la designación de don Ignacio Martínez de Villela para Gobernador: se tuvo muy en cuenta esta circunstancia al escogerle el Rey como Gobernador en 1.824. Y por otro lado no siempre el designado para este puesto era el Decano del Consejo: Villela no era el Consejero más antiguo de Castilla.

de relevancia política del Consejo y de su máxima magistratura, dentro del sistema de la Administración española del primer tercio del siglo XIX. El Consejo era cada vez más una institución técnica que política. Y el Monarca buscaba ahora, más que un Consejo fiel y sujeto a la persona del Rey, una institución de expertos, eficaz, gobernada con profesionalidad.

Como dato anecdótico, podemos destacar que en una ocasión no hubo ni Presidente ni Gobernador: fue cuando se constituyó el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, al que se nombró como cabeza un Decano"', ignorando la Junta Central los merecimientos que al respecto parecía tener el Duque del Infantado.

Volviendo al procedimiento de designación del Presidente o Gobernador, ya hemos visto cómo era exclusiva prerrogativa regia. Por una simple carta manuscrita del Rey dirigida al interesado se le expresaba a éste la decisión real. Desde mediados del siglo XVIII existía un modelo oficial, con espacios puntuados para rellenar según las circunstancias de cada caso''''.

El cargo de Decano lo ostentaba entonces don Bernardo Rieqa.

'''. "Este Consejo los han compuesto los Ministros del antiguo, escapados de Madrid, y aún algunos de los que fueron a Bayona a jurar al rey José, en lo que se ha murmurado mucho. Debe también repararse que han nombrado un Decano sin advertir la ofensa que en esto hacen al digno don Arias Mon, cuando tan acreedor se ha hecho a toda la atención de España por haber sostenido la vida y el honor del rey en El Escorial con tanto riesgo suyo, y que ahora está en Bayona, donde inicualemente le llevaron prisionero de guerra, sacándole de Madrid con engaños; y para que Infantado no fuera Presidente, abolieron esta dignidad. Infantado ha hecho muchas y agrias representaciones sobre el nombramiento que del rey tenía, pero ninguna ha sido atendida, y en Sevilla se decía públicamente, con harto fundamento, que la Junta Central atiende poco a los méritos contraídos con el rey en sus calamidades". (Memorias del Marqués de Averbé, B.A.E., tomo XCVIII, Cap. IV, pág. 264).

'''. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 62, recogía la siguiente fórmula: "Por la satisfacción que tengo de vuestra Persona, y del zelo con que me serviréis, os he nombrado por Gobernador del Consejo, de cuyo empleo pasaréis a tomar posesión, y espero que cumpliréis con sus obligaciones, de modo que desempeñéis mi conciencia y la vuestra".

En el nombramiento del Duque del Infantado como Presidente del Consejo el 22 de marzo de 1808, Fernando VII le remitió la siguiente carta: "Por la satisfacción que tengo de vuestra persona y celo con que me serviréis, os he nombrado por Presidente del Consejo, y tomaréis la posesión

La cortesía y el protocolo exigían que el candidato elegido enviase a su vez una contestación al Rey, expresando su agradecimiento por la merced concedida.

La categoría de esta importante figura de la Administración Central exigía que el Presidente o Gobernador reuniera en su persona unas especiales condiciones personales:

"Para tan principal empleo siempre se ha buscado sujeto en quien concurra una consumada prudencia y sabiduría, acreditada por sus operaciones en el manejo de los negocios y experimentada en el ejercicio de otros empleos, de un notorio zelo y propensión a la administración de justicia y, sobre todo, de una cabal independencia con los grandes y poderosos, para que libremente y sin ningún respeto se dedique todo a lo que sea del servicio de Dios y del Rey y a la mayor utilidad y bien de la República..."

Era por tanto un puesto de especial confianza del Monarca, al que se encomendaba altas responsabilidades en el gobierno de la Monarquía."

mañana. Y espero cumpliréis con las obligaciones del oficio, de manera que descargaréis mi conciencia y la vuestra. Aranjuez, 22 de marzo de 1808. Yo el Rey". Infantado tomó posesión aquel día 22 de marzo. (A.H.N., Sección Biblioteca, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1.398, fol. 330).

""". "Memorial anónimo sobre la composición y competencias del Consejo de Castilla y atribuciones de su Presidente", en A.H.N., Estado, legajo 3.148, mss., año 1713?, publicado por S. DE DIOS en "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", documento XXXVII, págs. 194 y ss.

""". "La Presidencia de Castilla constituyó durante los reinados de las Casas de Austria y de Borbón, un cargo especial enclavado en la planta del cuerpo. Libre así éste de toda ingerencia extraña, gozaba del mayor desembarazo para fiscalizar la conducta de los gobernantes (CONDE DE TORREANAZ, "Los Consejos del Rey durante la Edad Media", tomo I, Madrid 1984, pág. 220). Más adelante añadía este autor: "No vemos en Europa personaje parecido al que ocupa aquel puesto en los reinados de nuestras Casas de Austria y de Borbón. Hállase en contacto perenne y secreto con el monarca: recibe noticia directa de todo cuanto ocurre; interviene en todo; es obedecido con la misma puntualidad que el Rey; suspende la ejecución de las sentencias; manda verbalmente

3. Toma de posesión

Seguidamente, después de verificado el nombramiento, tenía lugar la toma de posesión del nuevo Presidente o Gobernador". Martínez de Salazar, en sus Noticias del Consejo, describía con detalle esta ceremonia:

"Con el Real Decreto de S.M. sin más Título ni preceder juramento, se ponen en posesión; y lo que se practica en el acto de su recibimiento se reduce a que la noche antes del día en que ha de tomar la posesión, se les remite por la vía reservada el Real Decreto, y al Señor Ministro Decano se le da noticia por el Señor Presidente o Gobernador electo, para que la participe al Consejo y se halle prevenido.

Al día siguiente, entrando los Señores Ministros en el Consejo, se manda a uno de los Porteros se ponga de Guarda, para dar aviso cuando llega el Señor

prender y desterrar; nadie le precede; y para que no decaiga su prestigio hasta necesita ajustarse en la vida privada a fórmulas solemnes y misteriosas. Por eso retrocedieron ante él tantos validos y primeros ministros; los cuales, como escribe el Sr. Cánovas, nunca ejercían el poder con eficacia sino teniendo la Presidencia de Castilla" (pág. 233).

"... El legajo 51.433 núm. 15 del A.H.N., Sección Consejos, recoge el acta de nombramiento del Presidente Infantado, que tuvo lugar el 22 de marzo de 1808. Infantado se encontraba confinado en Ecija, como consecuencia de la famosa Causa de El Escorial. Vino inmediatamente a Madrid tras conocer la voluntad real, adonde llegó el día 24 de madrugada. Ese mismo día informó al decano Mon su intención de tomar inmediatamente posesión de la Presidencia. Pasó al Consejo, después de decirse la misa y hecha la semanería, entró de ello al Consejo. "Siendo cerca de las 10 de la mañana entró S.E. en una silla de manos hasta la entrada de la puerta de la sala primera como es de regalia y habiéndolo yo hecho presente al Consejo, se levantó el Ilmo. Sr. don Arias Mon y demás Sres. Y los Sres. Fiscales bajaron la tarima para recibir a S.E. y acompañarle como lo hicieron hasta que ocupó el lugar preeminente..." (Extracto del acta de aquella ceremonia, levantada por el Escribano de Gobierno del Consejo, don Bartolomé Muñoz).

Presidente o Gobernador; y luego que su Ilustrísima está a la puerta de la Sala, el Escribano de Cámara de Gobierno entra a participarlo al Consejo, pero sin detención se introduce también el Señor Presidente, y a un tiempo unos y otros Señores se quitan las gorras, ponen en pie y le salen a recibir hasta el extremo del estrado; y si ha sido Ministro del Consejo el Señor Presidente, bajan la primera grada y vuelven con su Ilustrísima hasta dejarle en el lugar que le toca, que es en medio, con almohadas en el asiento, bufete y Escribanía delante; y los Señores Fiscales, cuando entra el Señor Gobernador, bajan la primera grada del Estrado; y si ha sido del Consejo, bajan la segunda.

El Escribano de Cámara de Gobierno conduce y guía a la Sala al Señor Presidente, luego que deja la silla, y los porteros acercan o arriman la mesa que su Ilustrísima ha de tener delante. Y hecho, se salen de la Sala.

Estando solo el Consejo pleno, manifiesta el Señor Presidente o Gobernador el Decreto de S.M. y le entrega al Señor Ministro Decano, quien lo lee estando sentado y después lo besa y pone sobre la cabeza en señal de obediencia. Y para esta ceremonia se pone en pie y también los demás Señores Ministros.

Síguese a éstos el razonamiento o arenga que regularmente hace al Consejo el Señor Gobernador, a que responde el Señor Ministro Decano, e inmediatamente toca la campanilla, se llama a Semanería en la forma acostumbrada y entran en la Sala los Relatores y Escribano de Cámara, y el que de éstos sigue al más antiguo expresa si ocurre o no despacho de Semanería. Y haciendo señal con la campanilla el Señor Gobernador, despejan la Sala todos los subalternos. Y éste es el acto de posesión y el Real Decreto se entrega al Escribano de Gobierno, a efecto de colocarlo en el Archivo del Consejo"".

Puesto en posesión el Presidente, a continuación se escribían cartas generales por la Secretaría de la Presidencia a todas las autoridades del Reino, exhortándoles al buen gobierno y administración de justicia"". Y el nuevo Presidente o Gobernador comenzaba

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 63 y 64.

"" También Moriana nos ha dejado una descripción de la ceremonia de toma de posesión del Presidente del Consejo Real: "Quando a de ir al Consejo a tomar la posesión el señor presidente de Castilla nombrado por S.M., el Consejo le espera todo junto en el lugar y asiento que acostumbra, que es en su sala mayor, en el quarto que tiene señalado en palacio.

Ba el señor presidente desde su casa al Conssejo, y llegado a la puerta de la sala mayor, dándose la primera vista a un tiempo, los unos y los otros señores se quitan las gorras y se le levantan en pie y le salen a rezivir asta el extremo del estrado donde está, y si a sido del Conssejo bajan la primera grada, y buelben con su señoría ilustrísima

a ejercer las funciones de su cargo"".

4. Competencias

El Presidente o Gobernador del Consejo lo era también de la Cámara"" y de la Sala de Alcaldes"". Al

hasta dejarle sentado en el asiento que le toca, que es en medio, con almoadas en el asiento y a los pies y bufetes y escribanía delante; y asimismo se sienta el Conssejo. Adviértese que el señor fiscal, quando entra el señor presidente, baja la segunda grada hasta el plan de la sala, haviendo si de el Conssejo el señor presidente, y si no la primera grada.

El señor presidente saca la orden que lleva de S.M., que da al señor decano del Conssejo, que la toma (quando esto se hace están a solas) ya despejada la sala, que lee en público al Conssejo bien nombrado por presidente de Castilla, que toman y besan y ponen sobre la cabeza. Y en señal de que es admitido hace una plática al Conssejo el señor presidente, a que responde el señor decano a su nombre, como se acostumbra, toca la campanilla y llámase a semanería, a que se entra.

En lugar de posesión es reservado de juramento el señor presidente, y todos los demás señores del Conssejo le hacen quando entra, con que cessa esta zeremonia" (MORIANA, J. de, "Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo", op. cit., págs. 223 y 224, publicada por S. DE DIOS en "Puentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", Salamanca 1986.

"".. El legajo 51.433 de Consejos Suprimidos (A.H.N.) recoge una serie de expedientes relativos a los Presidentes o Gobernadores del Consejo Real. Concretamente el expediente 15 se refiere al nombramiento de Infantado como Presidente del Consejo; y el expte. 14 recoge el nombramiento de don Arias Mon como Gobernador interino del Supremo Tribunal.

"".. "Presidía la Real Cámara, que era una sección privilegiada del Consejo de Castilla, establecida por Felipe II en 1588. La Cámara convocaba las Cortes para tomar juramento al rey y al príncipe de Asturias, verificaba los poderes de los diputados de las ciudades, expedía los nombramientos de regidores, corregidores, secretarios y otros funcionarios que el Consejo no nombraba personalmente".

mismo tiempo era también Consejero del Rey, con el que tenía entrevistas periódicas.

El Gobernador del Consejo además estaba al frente de una importante oficina que dependía del Supremo Tribunal: la Secretaría de la Presidencia del Consejo. Esta Secretaría era una oficina con entidad propia y con sus peculiares atribuciones y empleados, que coordinaba las amplias competencias atribuidas al Gobernador e incluso otras muchas"". Los nombramientos del personal de esta oficina los hacía el Rey, parece que a propuesta del Presidente de Castilla o Gobernador"".

A la hora de estudiar el amplio elenco de competencias de que gozaba este supremo magistrado, vamos a seguir la clasificación que al respecto hace Fayard, distribuyéndolas en competencias administrativas y competencias políticas"".

En la segunda mitad del siglo XVIII Martínez de Salazar afirmaba lo siguiente: "Los Señores Presidentes o Gobernadores (...) entienden en todos los negocios de Justicia y de Gobierno de la Monarquía, con jurisdicción para mandar sobre los demás Ministros, Sala de Alcaldes de Corte, Chancillerías y Audiencias, constituyéndose vigilante

(DESDEVISES, "Institutions", pág. 106).

""". La Sala de Alcaldes de Casa y Corte estaba incorporada al Consejo como una Sala más.

""". De la importancia de esta oficina nos da una idea el dato aportado por M.J. Alvarez-Coca: el enorme volumen de documentación que conservan los Archivos del Consejo relativos a esta Secretaría (ALVAREZ-COCA, M.J., "La Corona de Aragón: documentación en el Consejo y Cámara...", pág. 920 y 921).

""". En la Secretaría de la Presidencia de Castilla había al menos en 1823 cinco oficiales, cinco escribientes y un archivero. Cada oficial percibía alrededor de 5000 reales anuales, y un escribiente sobre los 400 reales, todo pagado por Tesorería General (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 4). En esta oficina se llevaban los registros de las reales Ordenes, de los Reales Decretos y consultas que pasaban al Consejo y a la Cámara de Castilla por la vía reservada; los registros de las consultas del Consejo y de la Cámara de Castilla que la Secretaría de la Presidencia elevaba al Rey; los registros de asuntos despachados por la misma Secretaría de la Presidencia y otros expedientes de esta oficina; los expedientes de las masas; recogía y tramitaba las instancias remitidas al Gobernador del Consejo, etc.

""". FAYARD, J, op. cit., pág. 145.

centinela para que todos puntualmente cumplan con sus respectivos encargos y observen las leyes del Reino"****.

1) Respecto del Consejo Real

Su primera misión era velar por el buen funcionamiento del Consejo de Castilla****. En diciembre de cada año presentaba al Rey la propuesta de reparto de Consejeros para cada una de las Salas, para el año siguiente****. Ahí se incluía el candidato a Gobernador de la Sala de Alcaldes, el Juez de Ministros, así como los Alcaldes de Casa y Corte****. También designaba el Presidente libremente a los jueces de las distintas comisiones del Estado así como a buena parte de los

****. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 19.

****. "Para ello importa el buen ejemplo que vos daréis, que sea el que habéis dado hasta aquí, y se vele en el gobierno de todo, y en la Corte saber cómo cumplen los Ministros con su obligación, y será bien traer advertidos a los Alcaldes de Corte, que no sean remisos en lo que les toca..." (MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 47, "Instrucción de el Señor Felipe Segundo al Ilustrísimo Señor Don Diego de Covarrubias, Obispo de Segovia, Presidente de Castilla").

****. "Es privativo del Sr. Gobernador proponer a S.M. por medio de consulta que anualmente hace a S.R.P. en principios de diciembre los Sres. Ministros que han de asistir en cada una de las salas del Consejo, proponiendo uno para Gobernador de la Sala de Alcaldes de Corte..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.430 núm. 3, "Instrucción de algunos puntos correspondientes al Empleo de Excmo. Sr. Gobernador del Consejo"). Reunido el Consejo pleno en Sala de Gobierno, en presencia de los Escribanos de Cámara y Relatores, el Presidente leía la Resolución del Rey sobre la distribución de las Salas. (MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 27).

****. En el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sección Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, se conservan la mayoría de las propuestas de reparto de Salas del Presidente o Gobernador para los años del reinado de Fernando VII.

empleados subalternos del Consejo -por ejemplo, el archivero"" o el portero de estrados"". Ningún Consejero o empleado del Consejo podía ausentarse de la Corte sin su permiso"".

Desde el 2 de diciembre de 1769 el Presidente tenía reconocida la facultad de asistir a las audiencias y sesiones de cualquier Sala del Consejo, cuando lo estimase conveniente, ordenando asimismo la vista de los pleitos"". Presidía siempre las reuniones del Consejo a las que asistía, ya fuera en Consejo pleno o por Salas"".

Con frecuencia se le encomendaba la presidencia de Comisiones y Juntas de Ministros de varios Consejos"". Estas se realizaban habitualmente en el domicilio del Presidente, lo que hacía de éste uno de los centros neurálgicos de la Corte"". Siempre que un Ministro

"". Este privilegio lo perdió durante el reinado de Fernando VII.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, legajo 3.148 núm. 13.

"". El legajo 9.362, expediente núm. 5, Sección Consejos Suprimidos del Archivo Histórico Nacional contiene buen número de solicitud de licencias o pasaportes para ausentarse de la Corte por enfermedad.

"". A.M.A.E., Mss. 133 pág. 114.

"". En ausencia del Gobernador hacía las funciones de Gobernador o Presidente interino el Ministro más antiguo, el Decano, y en su defecto el siguiente Ministro más antiguo. Se puede ver, por ejemplo, en el legajo 3.916 núm. 21, del A.H.N., Consejos suprimidos, Gobierno, en el que hay una Real Orden de 1.832 mandando que el Ministro del Consejo don Francisco Fernández del Pino presidiese el Consejo en ausencia de su Presidente.

"". Por ejemplo, la creada por Real Decreto de 11 de abril de 1783 para resolver el pleito creado entre el Colegio Mayor de San Ildefonso y la Universidad de Alcalá de Henares sobre la independencia de ésta y otros derechos. Esta Junta estaba formada por siete Ministros de varios Consejos y estaba presidida por el Presidente del Consejo Real. (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, la de 24 de septiembre de 1816).

"". Así lo afirma Feliciano Barrios refiriéndose a la actividad del Presidente en el siglo XVII y debió mantenerse con las debidas matizaciones en los siglos XVIII y XIX. Bajo Fernando VII continuaban las frecuentes reuniones en la Casa del Presidente de estas Comisiones. (BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", pág. 161). Vid., por ejemplo, los sucesos

del Consejo visitaba al Presidente debía entrar con capa y toga.

Tenía la facultad de convocar el Consejo Real y el de la Cámara, en reunión extraordinaria, siempre que fuera preciso. Y también cualquiera de las Juntas que presidía"". Además, le correspondía repartir la vista y determinación de las residencias en las Salas segunda de Gobierno, de Mil y Quinientas y de Justicia"".

También era cometido del Presidente o Gobernador informar a los Ministros de los actos a que debía asistir el Consejo. Y comunicarles el fallecimiento de cualquier Ministro del Supremo Tribunal"".

Podía el Presidente designar algunos importantes cargos del Consejo, como el de Archivero, y entre sus prerrogativas estaba también la de elegir seis porteros de Cámara anualmente para la servidumbre del Consejo de entre el número de porteros de Cámara de S.M."".

Además, correspondían también al Gobernador, entre otros, los siguientes nombramientos: Ministros para la visita de las oficinas y subalternos del Consejo, Secretarías del Consejo de la Cámara y Universidad de Alcalá de Henares""; elegía todos los meses dos Alcaldes de Corte que componían la Sala de Apelaciones para los pleitos de menor cuantía; nombraba interinamente personas que cubriesen las vacantes de Escribanías de Gobierno y de Cámara,

políticos desde marzo a noviembre de 1808.

"". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág.25.

"". Real Decreto de Fernando VI de 24 de marzo de 1756.

"". Texto de la invitación enviada por el Presidente del Consejo con motivo de los funerales del Consejero don Nicolás María de Sierra: "El Duque del Infantado, Presidente del Consejo, por sí y en nombre de éste, ...Suplica a V.S. se sirva encomendar a Dios al Sr. don Nicolás María de Sierra, que santa gloria haya, y asistir a su funeral que se ha de celebrar en la Iglesia Parroquial de San Sebastián el martes 8 de abril del corriente al anochecer; en que recibirán merced. Sr. don José Antonio de Larrúmbide." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.267, expediente núm. 57).

"". A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.026 núms. 46 y 47.

"". Vid. A.M.A.E., mss. 113, pág. 375.

Relatorías y Contadurías del Consejo hasta hacer provisión""; designaba gobernadores de las Salas del Crimen de las Chancillerías; nombraba interinamente al Fiscal de la Sala de Alcaldes de Corte e igualmente en las Relatorías y Agencias Fiscales; designaba los capellanes que celebraban Misa al Consejo; predicadores para los sermones de Semana Cuaresma y otras ceremonias; también Jueces de Residencia para las pesquisas y Comisiones del Consejo; jueces y revisores para las visitas de Escribanos; elegía seis porteros de Cámara que asistiesen en el Consejo; nombraba jueces para el cumplimiento de todo lo que dimanaba de providencias del Consejo; le correspondía nombrar Escribanos para Jueces de Residencia en los lugares donde le pareciese conveniente; nombraba un Ministro que cuidase de la exacción y distribución de los gastos de Justicia.

Tenían la facultad de nombrar Ministros que decidiesen las competencias que se ofrecían entre los Tribunales y Jueces de la Corte.

Era también regalía privativa suya las elecciones y nombramientos de administradores de los estados y mayorazgos que se litigaban en el Consejo y se mandaban secuestrar, y el de los demás empleos concernientes a los mismos mayorazgos, como eran alcaldes mayores, jueces de residencias, alguaciles, escribanos, presentaciones de curatos y beneficios eclesiásticos, sin que en tales provisiones tuviera intervención el Consejo. Nombraba también administradores, contadores y demás empleos para la servidumbre y administración de los hospitales General, Pasión, Casas de Covalecencia, la de Niños desamparados y la de la Inclusa de la Corte.

Era privativo suyo repartir las comisiones particulares correspondientes a los oidores y ministros de las Chancillerías; también el nombramiento de los aposentadores para que con los Alcaldes de Corte y Regidores de Madrid asistiesen a las casas.

Obtuvieron la regalía de hacer el nombramiento de los cuatro concertadores de privilegios.

A su vez el Presidente debía mantener un estrecho contacto con el Monarca. Diariamente le remitía un informe escrito sobre los acontecimientos ocurridos en la

"" Vid. por ejemplo el expediente formado en 1816 en virtud de Decreto del Presidente del Consejo por el que condescendiendo a las instancias hechas por don Bartolomé Muñoz, habilitó a don Valentín Pinilla para el despacho de los negocios de Escribanía de Gobierno; a don Cosme de Miguel García para los de justicia a cargo del mismo Muñoz; y a don Rafael de Yarza para los de la Escribanía de Cámara de Pinilla. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 núm. 40).

Corte, y todos los viernes, después de la Consulta del Consejo, el Rey le concedía una audiencia secreta, donde se despachaban importantes asuntos de Estado y donde el Presidente podía aconsejar e influir en decisiones y nombramientos del Soberano"". Podía representar por sí sólo sobre un asunto de interés al Monarca, sin necesidad de la concurrencia del Consejo"".

Estrechamente unidas a la persona del Rey había otra serie de atribuciones del Presidente, en relación con la vida de los Soberanos y del Estado. Testigo del otorgamiento de testamento por el Rey y albacea suyo, a su muerte debía llevar su testamento a su sucesor y hacerlo abrir. Nombraba también los dos Alcaldes que asistirían a los funerales regios"". Y en el caso de fallecimiento de personas reales, el Presidente nombraba también uno o dos Alcaldes que asistan al Mayordomo Mayor.

En caso de ausencia del Príncipe heredero, elegía con el Consejo el día de la proclamación del nuevo Soberano. En la entrada oficial del nuevo Rey, esperaba en Palacio, besaba su Real Mano y acompañaba al Monarca desde el principio de la escalera.

El Gobernador era el encargado de convocar al Consejo para besamanos, rogativas, actos públicos y funciones de iglesia a las que acudían el Rey y el Consejo, entre ellos también los Bautismos de Príncipes o Infantes"".

El Presidente o Gobernador asistía al Palacio Real a despedir al Rey en las ocasiones de Jornadas y

"" Vid. también A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.430 núm. 3, ceremonial que corresponde al Presidente del Consejo contenido en "Instrucción de algunos puntos correspondientes al Empleo de Excmo. Sr. Gobernador del Consejo".

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 20.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 36: "En el acompañamiento y entierro de los Señores Reyes asisten dos Señores Alcaldes de Corte; y previene la Etiqueta de Palacio, que el Señor Mayordomo Mayor escriba Papel de aviso al Señor Presidente para que los nombre..."

"" Vid. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.430 núm. 3, "Instrucción de algunos puntos correspondientes al Empleo de Excmo. Sr. Gobernador del Consejo". En los casos de bautizos de Príncipes o Infantes el Presidente del Consejo Real debía informar de la celebración de la ceremonia a los Consejos de la Filiación, que eran los de Indias, Órdenes y Hacienda.

también acudía a recibirle a su regreso"". Otras ceremonias a las que asistía este magistrado eran los besamanos con el Rey en la Pascua de Navidad; las visitas generales de las cárceles de Corte y Villa en las tres pascuas del año; los actos de la publicación de la bula de la Santa Cruzada, Fiesta de la Inmaculada Concepción de Santa María, procesión del Corpus, Fiesta de Santiago, la de la Asunción, la de la Virgen del Pilar, a los sermones de Cuaresma en los viernes y sábados; y las ya mencionadas consultas de los viernes del Consejo al Monarca cuando éste se encontraba en la Corte"".

Importante papel desempeñaba el Presidente en las convocatorias de Cortes. Cuando el Rey decidía reunir las comunicaba Real Orden al Gobernador del Consejo Real y por la Secretaría de la Cámara se expedían las Cédulas de convocatoria y los Procuradores de los Reinos se presentaban ante el Gobernador del Consejo y a los dos Ministros de la Cámara que nombraba para reconocer los poderes. Reunidas las Cortes, los procuradores no podían ausentarse sin licencia del Presidente. Llegada la hora de disolver las Cortes, despedía a los procuradores en nombre de S.M., dándoles de 20 a 30 días para que acabasen de cerrar las Cortes"". Una vez disueltas, mandaba el Rey aviso al Gobernador para que lo comunicase a todo el Reino"".

La competencia del Presidente no se extendía propiamente al campo judicial.

"". "El Sr. Gobernador asiste al Real palacio a despedir a SS.MM. en las ocasiones de jornadas, y concurre para recibirlos, y acompaña a sus reales Personas desde la escalera: pero de este acto, y del lugar que ocupe dentro del Palacio podrán informar a S.E. los principales jefes de él, o personas de su confianza de la servidumbre de SS.MM." (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.430 núm. 3, "Instrucción de algunos puntos correspondientes al Empleo de Excmo. Sr. Gobernador del Consejo", instrucción mandada elaborar a finales del siglo XVIII para informar a los Gobernadores entrantes en el Consejo del ceremonial a seguir).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.430 núm. 3.

"". A.M.A.E., mss. 133, págs. 245-250; A.H.N., Consejos, legajo 9.362.

"". DESDEVISES, "Institutions", pág. 93; y MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", op. cit., pág. 38.

2) Respecto a la Sala de Alcaldes

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte y su Gobernador estaban bajo la dependencia del Presidente del Consejo de Castilla. Diariamente la Sala le remitía a su Posada un informe, en donde le tenía al tanto de todo acontecimiento grave ocurrido en la Corte.

Todas las consultas y representaciones que se hiciesen al Rey por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte o por el Ayuntamiento de Madrid se debían dirigir al Monarca a través de él^{***}.

Correspondía también al Presidente realizar y presidir la visita de Cárceles de Corte y Villa en las vísperas de Navidad, Resurrección y Espíritu Santo^{***}.

El Presidente era en último extremo el gran responsable del orden público en la Corte^{***}. Es más, apunta Desdevises que el Rey había llegado a retirar poco a poco el gobierno de la Villa de Madrid al Ayuntamiento y los verdaderos administradores de la Villa y Corte eran el Gobernador del Consejo de Castilla, los Alcaldes de Casa y Corte y los Alcaldes de Barrio^{***}.

En los periodos que existió una Superintendencia General de Policía^{***}, este organismo funcionaba bajo la supervisión directa del Gobernador del Consejo y del Primer Secretario de Estado y del Despacho.

Su papel de garante del orden público se extendía a todo el Reino. Todas sus autoridades debían

***. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 22.

***. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 34.

****. FAYARD, J., op. cit., pág. 146.

***. DESDEVISES DU DEZERT, "Institutions", pág. 216.

****. Creada por vez primera por Real Cédula de 30 de marzo de 1782, siguiendo en algún rasgo el modelo francés.

mantenerle informado y darle cuenta de todas las muertes, incendios y otras calamidades que pudieran ocurrir dentro de sus respectivas jurisdicciones""'. Igualmente los tribunales y justicias del Reino le consultaban en las dudas y negocios que por su gravedad necesitasen de superior providencia y obedecían sus órdenes como leyes""'.

Por otro lado, ya hemos visto como tradicionalmente el Presidente del Consejo era considerado como la segunda autoridad del Estado. Las literaturas jurídica y política de la época nos descubren un personaje capital de la vida nacional, cuyas competencias, como institución típica del Antiguo Régimen, abarcaban amplios sectores de la vida de la nación""'. La importancia de sus decisiones, su proximidad al Monarca y a las principales autoridades del Reino le permitían desempeñar un importante papel político. Esto lo supo ver Napoleón, que se apoyó en la autoridad del Consejo para intentar instalar en el trono a su hermano José.

Sin embargo, ya hemos visto que desde el siglo XVI el Consejo de Castilla no cesó de perder relevancia política, por la aparición de otras instituciones que rivalizaban con el Gobernador del Consejo: los Validos, los Secretarios de Estado y los Consejeros de Estado. Junto a ello, la ausencia de muchos Gobernadores de valía, de auténtica talla política, colaboró a esta decadencia.

Bajo el reinado de Carlos III, la Presidencia del Conde de Aranda revalorizó la figura del Gobernador del Consejo. Pero la suerte estaba echada. La Guerra de la Independencia fue la piqueta que terminó dejando al

""'. FAYARD, J., op. cit., pág. 146.

""'. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 21.

""'. Conservamos, por ejemplo, una carta de recomendación del Gobernador interino del Consejo, don Arias Mon, en favor de don Isidro Vera, para una plaza vacante de Alguacil de Corte en la Audiencia de Asturias, dirigida a don Francisco I. de Leiva: "Muy Sr. mío y estimado amigo: Si Vmd. se halla en términos hábiles, le estimaré muy particularmente que atienda en la plaza vacante de Alguacil de Corte en esa Audiencia a Isidro Vera, y asimismo que me haga el favor de hacer igual súplica a los demás Señores a quienes no escribo por excusarles una contestación con este motivo; pero les agradeceré mucho esta condescendencia porque el Pretendiente está casado con una que fue criada mía y casi pereciendo por tener bastante familia.

Deseo que Vmd. se mantenga con salud y queda a su disposición su más af. servidor y amigo que s.m.b. Arias Mon 22 de septiembre de 1807, Madrid." (A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido de España e Indias, legajo 11.995, "Delaciones y cartas de varios confidentes").

Presidente en un segundo plano.

Tras la caída de Godoy, la situación del Estado había exigido que el Rey se apoyase especialísimamente en el Consejo Real, haciendo de él su principal colaborador en el gobierno"". Pero aunque en 1814 el Consejo recuperó sus competencias en términos generales, su Presidente no. Sus poderes fueron limitados"". "La intención del Monarca era que el Presidente solamente usara de las facultades inherentes a su cargo y de ningún modo tuviera despacho separado. Es decir, el Presidente quedaba reducido a las funciones de dirección del Consejo, perdiendo la preeminencia que le venía caracterizando desde mucho tiempo atrás. Parece como si el Monarca recelara de la excesiva autoridad del Consejo"".

En esta línea se expresaba Fernando VII en el Real Decreto de restablecimiento del Consejo, de 27 de mayo de 1814":

"...de manera que sea el mi Consejo, como lo espero de su fidelidad, medio por donde se verifiquen mis Reales intenciones del más acertado gobierno de mis súbditos, pronta y recta administración en la justicia, y el adelantamiento en los ramos de pública prosperidad de que le han encargado los Reyes mi predecesores y en que Yo por este Real Decreto le confirmo. Pero no es de mi ánimo confirmar por él las facultades de que usaban el Presidente o Gobernador, despachando por sí y separadamente por su Secretaría recursos, pleitos y otros negocios de los que

"" BARRIOS, F., "El Consejo de Estado de la Monarquía Española 1521-1812", pág. 206.

"" El Decreto de 27 de mayo de 1814 restablecía el Consejo con dos modificaciones respecto a la planta de 1808: la primera de ellas estaba justificada por la necesidad de un más rápido y menos costoso despacho de los negocios y afectaba a la distribución de competencias entre las Salas; la segunda estaba referida a los poderes del Presidente del Consejo, "el único que no era repuesto en sus antiguas prerrogativas". (vid. Decretos del Rey Fernando VII; FAYARD, J., op. cit., pág. 12; y DE DIOS, S., op. cit., pág. XCI).

"" DE DIOS, S.: "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", pág. XCI. En defecto del de Castilla resultarían revalorizados el Consejo de Estado y los Secretarios de Estado y del Despacho.

"" A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, legajo 3.026 núm. 46.

abusivamente acudían a ella; porque mi intención y mi voluntad es que el Presidente o Gobernador que nombrare, únicamente tenga y use de las facultades que le están declaradas en las leyes para el gobierno y decoro del Consejo, y por sola esta consideración y respeto. Finalmente es mi voluntad que el Consejo me proponga todo lo demás que convenga al bien y felicidad de mis reinos"****.

La Guerra de la Independencia había supuesto un duro golpe para el Consejo y su Presidencia. La actitud del Consejo bajo la ocupación francesa, si bien más tarde justificada, había dañado seriamente la imagen del Consejo. Tras la restauración, el claro respaldo hacia la institución y su Presidente por parte de Fernando VII, reparó parcialmente aquel daño. Pero la desaparición de Infantado de la Presidencia del Consejo al concluir el Trienio dejó al descubierto una institución herida de muerte. Ya no habría más Presidentes y todos sus sucesores lo serían interinamente. En los actos públicos el Gobernador del Consejo empezaría a ocupar un lugar secundario en el Protocolo, detrás incluso de los Consejeros de Estado y de los cardenales. La institución y su Presidente, aunque mermados de competencias, sin embargo mantuvieron unas funciones importantes dentro del organigrama del Antiguo Régimen, hasta su definitiva extinción en 1834.

5. Privilegios y honores

El Gobernador del Consejo representaba inmediatamente a la persona del Rey y ejercía todas las funciones reales en ausencia del Soberano. La segunda autoridad del Reino estaba necesariamente acompañada de unos privilegios y un protocolo acorde con su importante puesto. Así lo manifestaba Martínez de Salazar:

"Gozan los Señores Presidentes y Gobernadores del Consejo la honorífica y particular distinción de tener audiencia secreta con S.M., quedándose sólo con su Real

****. Por Real Decreto de 4 de junio de 1814 Fernando VII nombró Presidente del Consejo al Duque del Infantado.

Persona luego que el Consejo concluye la consulta que le hace todos los viernes de las semanas y sentado en taburete raso, que se dice el banquillo, participa a S.M. los casos que han ocurrido; y acordado lo que conviene hacer para la buena administración de justicia y gobierno de la Monarquía, recibe de S.M. las órdenes verbales de lo que se debe ejecutar"****.

Entre las prerrogativas del Gobernador del Consejo se contaban las siguientes: presidía el Consejo Real y de la Cámara****, la Junta de Obras y Bosques, la de Sanidad, la de Abastos, entre otras****; el Consejo de la Cámara se reunía habitualmente en su casa****; presidía las procesiones y actos públicos en que el Rey no solía asistir y sí los Supremos Tribunales. En estas ceremonias públicas estaba situado en lugar preferente, en medio de los Presidentes de los demás Consejos; la Sala de Alcaldes le remitía a su casa diariamente un informe dando cuenta de lo acaecido en las rondas aquel día; también se le mantenía al tanto de todo lo que ocurría en el Reino y era igualmente el encargado de informar diariamente al Rey de todo lo que sucedía en la Corte****, para lo que podía él por sí mismo representar al Monarca, sin la concurrencia del Consejo; todas las consultas y representaciones que se hiciesen al Rey por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y por el Ayuntamiento de Madrid, se debían dirigir a las reales manos de S.M. por medio del Presidente o Gobernador del Consejo.

El ceremonial que rodeaba al Presidente era también acorde con su categoría. Cuando los Ministros del Consejo le visitaban, entraban con capa y gorra, dejando el sombrero en la antecámara, y los oidores de Audiencias,

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 20.

****. Vid. DESDEVISES, G., "Institutions", pág. 106.

****. Podemos citar, por ejemplo, la Junta para restablecimiento de los Colegios Mayores de San Bartolomé en Salamanca, de Santa Cruz en Valladolid y de San Ildefonso en Alcalá de Henares (A.H.N., Reales Cédulas, núm. 5.175, de 20 de febrero de 1815); o diversas Juntas de Competencias (A.H.N., Sala de Gobierno, legajo 3.656 núm. 37); el Presidente era también protector de instituciones benéficas y de colegios, como el de Nuestra Señora del Amparo, de Monterrey (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.046).

****. Por singular privilegio del Rey don Felipe III.

****. Real Cédula de 15 de mayo de 1788, que mandaba dar cuenta al Presidente del Consejo de las ocurrencias graves. Recordada por circulares del Consejo de 27 de julio de 1814 y de 25 de enero de 1815 (A.H.N., Reales Cédulas, núm. 5.159). Esta última acompaña modelo para dar cuenta al Presidente de las causas criminales.

Chancillerías y demás togados entraban sin capa y con gorra, y los Alcaldes de Corte entraban también con gorra y sin capa y no llevaban vara, como Ministros subalternos de su autoridad.

Según el ceremonial antiguo, el Presidente no podía salir en público si no era con el Consejo y cuando iba a en su coche debía llevar las cortinas corridas. Sin embargo, en el reinado de Fernando VII las tornas parecen haber cambiado y el Presidente de Castilla, dentro de su rango, parece superar este rígido protocolo. Prueba de ello es la conocida conducta del Gobernador interino del Consejo, don Arias Mon, en el trágico día"" del dos de mayo de 1.808.

Era siempre acompañado por los Ministros del Consejo, al acabar la Audiencia, hasta el lugar donde tomaba la silla de manos. Y después dos porteros y dos alguaciles iban delante iban delante facilitando el paso hasta el zaguán donde tomaba el coche o hasta su casa; dos alguaciles de Corte enviados por la Sala de Alcaldes, y dos porteros de Cámara asistían diariamente en la casa del Presidente prestos a cualquier encargo que se les encomendase.

También en sus desplazamientos era acompañado por unos y otros; en las visitas de Monumentos el Jueves y Viernes Santo le acompañaba el Alcalde de Corte más antiguo, sin capa y con vara y sombrero, y también el Escribano de Cámara de Gobierno del Consejo, porteros de Cámara y alguaciles de Corte que estuviesen de guardia; saliendo en público, un Alcalde de Corte iba en el estribo del coche.

La carroza del Gobernador tenía el privilegio exclusivo de permanecer en el zaguán del Consejo"" , durante la hora de Audiencia, para recogerle allí a su salida"". Este privilegio era extensivo a quienes habían sido con anterioridad Presidentes o Gobernadores del Consejo; asimismo se reconocía este privilegio al Ministro que aquel día presidiese la sesión del Consejo, cuando no

"" , Cfr. EVOLUCION HISTORICA.

"" . FAYARD, al hablar de este privilegio y citar a Martinez de Salazar, confunde el zaguán del Consejo y la hora de Audiencia con el zaguán del Palacio Real en las audiencias con el Monarca (FAYARD, J., op. cit., pág. 149).

"" . El 24 de octubre de 1.786 se había dispuesto el modo de colocarse los coches con orden en el distrito de la Casa de los Consejos, para que el tráfico rodado no estorbara el coche del Presidente (A.H.N., Consejos Suprimidos, Libro 1.527 núm. 24).

asistía el Presidente"".

Cuando el Presidente o Gobernador salía en público con el Consejo, entraban en su carroza y se sentaban a la parte del cristal los dos Ministros más antiguos, ocupando solo la testera el Gobernador; lo mismo hacía cuando entraban en su coche obispos y otros prelados, porque nunca cedía el lugar preeminente.

Entre otros privilegios se contaban la guarda de una llave del Real Sitio de la Casa de Campo, para entrar a pasear en él; la guarda de la llave de la urna o escritorio donde los Ministros del Consejo emitían sus votos; tenían asiento preferente en todos los actos públicos y fiestas, y sitio fijo reservado en los balcones del Ayuntamiento de Madrid; en las noches de luminarias públicas, tres copias de clarines acudían a tocar a la casa de los Presidentes o Gobernadores del Consejo"".

Hasta 1814, en todas las funciones públicas y particulares a las que asistía el Presidente, cuatro pajes le hacían el honor de asistir con sendas hachas de cera encendidas. Pero el Duque del Infantado desde que se renovó su nombramiento para la Presidencia de Castilla, decidió no tener pajes y encargó que cuatro porteros de Cámara hiciesen las veces de aquéllos y así se verificó desde aquel año"" de 1814.

El Presidente o Gobernador asistía al otorgamiento de los testamentos y últimas voluntades de los Reyes y normalmente eran nombrados sus albaceas; era invitado con lugar preferente a todas las ceremonias reales"", e incluso era habitual que el Soberano le

"". Esta antigua costumbre se practicaba al menos desde 1748 y al parecer siempre se había observado. En la documentación del Consejo se conservan referencias a varios incidentes motivados por el desconocimiento de esta regalia por parte de porteros o por los oficiales de la Guardia (vid., por ejemplo, A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 2.803 núm. 35).

"". Por razones de economía se suprimió este privilegio por disposición del Presidente Infantado, en agosto de 1817, "pues ninguna influencia ni realce da a las luminarias el que se toquen o no los clarines" (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 4.034 núm. 26).

"". A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.811 núm. 15, expediente de 7 de diciembre de 1827.

"". En los ceremoniales previstos para los bautismos de una Infanta hija de Fernando VII, o para el caso de que fuera niño y Príncipe de Asturias, en junio de 1817, se establecía una lista de invitados. Entre ellos destacaba el Presidente

enviase una carta, notificándole la boda de los infantes y príncipes. Igualmente el nacimiento de un Príncipe heredero era comunicado al Presidente del Consejo mediante un Real Decreto¹⁰⁰⁰.

También el 16 de febrero de 1815 el Rey resolvió que los Presidentes de varios Consejos¹⁰⁰¹, entre ellos el de Castilla, tuviesen entrada en su Real Cámara del mismo modo que las demás personas que gozaban de esta preeminencia¹⁰⁰². Este expediente se volvió a reiterar en Real Resolución de 22 de enero de 1829¹⁰⁰³.

Eran corrientes también los conflictos entre Ministros de distintos Consejos por un lugar preferente en los actos públicos y ceremonias. No así entre los Presidentes de los Supremos Tribunales, ya que le estaba reconocida preferencia al de Castilla y este privilegio fue reiteradamente manifestado en la documentación del Consejo correspondiente a aquel reinado¹⁰⁰⁴.

del Consejo Real, aunque ya le vemos situado después de los Secretarios de Despacho, del Decano y Consejeros de Estado y de los Cardenales (A.G.P., Sección Fernando VII, Caja 302 núm. 2).

¹⁰⁰⁰. A.H.N., Consejos Suprimidos, Consulta de Oficio de 5 de noviembre de 1818, "Sobre quién ha de comunicar el nacimiento de un Príncipe heredero": "Dictamen: se debe hacer como en 1791, cuando nació la Infante doña María Teresa, comunicándose el Decreto directamente al Presidente o Gobernador del Consejo para que la Cámara lo noticie a los Tribunales y Presidentes que dependen de ella, y a los prelados y cabildos, y a las comunidades religiosas y a las villas y ciudades del Reino por cartas circulares firmadas por V.M. y refrendadas por el Secretario de ella..."

¹⁰⁰¹. Los Presidentes de los Consejos de Castilla, Inquisición, Indias, Ordenes y Hacienda.

¹⁰⁰². A.G.P., Sección Fernando VII, Caja 216, expediente núm. 2; Real Decreto de 16 de mayo de 1788 sobre las personas que debían obtener los honores de la Antecámara de los Cuartos del Rey; y Real Orden de 16 de febrero de 1815.

¹⁰⁰³. A.G.P., Sección Fernando VII, Caja 309, expediente núm. 16.

¹⁰⁰⁴. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág.46: "Con la dignidad de los Señores Presidentes o Gobernadores del Consejo no se debe intentar competencia, como lo declaró el Señor Rey Don Felipe Quarto en el año de 1641, en la resolución de una consulta...quando S.M. dentro de su Real Casa y Aposento daba al Presidente lugar preeminente a todos, (...) declaraba bien el no ser posible que otro Ministro pudiese formar competencia con él."

Los Presidentes o Gobernadores estaban exentos de cumplimientos y ceremonias de visitas y cartas políticas. Toda visita que se le fuera a hacer debía ir precedida de expresa licencia de S.M. y únicamente respondían por escrito a los prelados, Presidentes de las Chancillerías y Audiencias, Ministros y Corregidores, y para darles gracias de lo que hubiesen ejecutado en servicio del Rey. En la Corte respondían por escrito a los Presidentes de otros Consejos y Ministros, sólo en lo referente al Real Servicio. Y nunca hacían visitas a prelados, ministros, títulos o embajadores²⁰⁰⁴.

El ceremonial de las recepciones y visitas que hacía el Presidente estaba perfectamente establecido, detallándose sitios, prelaciones y cortesías según la dignidad del invitado²⁰⁰⁵. Desde un Real Decreto de 7 de julio de 1784, los Presidentes o Gobernadores de los Consejos estaban autorizados para subir con capa la escalera del Real Palacio²⁰⁰⁶.

También las honras fúnebres de un Presidente del Consejo tenían la relevancia que correspondía a su cargo: funeral solemne, asistencia de las autoridades del Reino en pleno, carrozas y alabarderos formaban un recogido

²⁰⁰⁴. Estos honores y precedencias llamaron la atención en el siglo XVII a algunos escritores que pasaron por la Corte. Así se expresaba, por ejemplo, Núñez de Castro: "El Presidente asiste en Sala de Gobierno; levántanse todos quando entra, y le salen acompañando hasta baxo de la escalera, donde toma la silla; y no vuelve al Consejo hasta que ha partido. El Presidente no visita a nadie, y en cualquier Junta que aya de hallarse, se haze en casa". (NUÑEZ DE CASTRO, "Sólo Madrid es Corte", citado por BARRIOS, F., en "Los Reales Consejos", op. cit., págs. 160 y 161). Por su parte, también autores extranjeros cayeron en la cuenta del considerable prestigio de este alto Magistrado. Así se expresaba Joly: "La calidad que le dan en justicia es 'muy poderoso señor', 'sepa vuestra alteza', etc., correspondiendo de su parte a esa grandeza, de suerte que jamás va a visitar a nadie por la ciudad sino a personas reales, saliendo muy de tarde en tarde fuera y siempre con algún motivo, no vistiendo de manera corriente, porque representa la majestad del rey" (JOLY, "Viajes en España, en Portugal y en otros países", en "Viajes", tomo III, pág. 85, recogido por BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", pág. 161).

²⁰⁰⁵. Ver al respecto MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 40-45.

²⁰⁰⁶. CORDERO, op. cit., pág. 59.

y a la vez vistoso espectáculo^{***}.

sin embargo, si bien es cierto que oficialmente le estaban reconocidos al Presidente del Consejo todos estos honores y privilegios, no es menos cierto que los honores y prerrogativas de esta institución sufrieron desde la segunda mitad del siglo XVIII una lenta e inexorable evolución. Por un lado, las reformas ilustradas modificaron el antiguo sabor hierático del cargo^{***}; por otro y como ya hemos visto, la evidente decadencia de esta institución influyó también correlativamente en el prestigio de su Presidente. Veíamos en el mencionado ceremonial del bautismo de un infante Real, en junio de 1817, que varias personalidades -los Secretarios de Despacho, el Decano y Consejeros de Estado y los Cardenales-, antecedían al

^{***}. Vid. FAYARD, op. cit. pág. 150. Así nos lo describe: "Era natural que los funerales del Jefe del Consejo estuvieran rodeados de formalidades particulares. Después de la muerte del Presidente, uno de los miembros de la Cámara asistido de un secretario iba a buscar los papeles oficiales que se encontraban en la casa del difunto. Se colocaban unos altares ("autels") y unos soldados de la guardia en la cámara mortuoria. Después de haber conocido el testamento, para conocer el lugar de inhumación escogido, se organizaba la ceremonia. El día del entierro el Consejo pleno con los Ministros subalternos acudían al domicilio del Presidente; el sarcófago era llevado por los Consejeros que más recientemente habían ingresado en el Consejo, ayudados de varios Escribanos y Relatores, que le ponían en una carroza para llevarle a la iglesia, con los halabarderos delante, el cuerpo de Ministros y los nobles detrás. Todos entraban en la iglesia y se instalaban según su entender. Sólo el Decano del Consejo y el nuevo Presidente tenía un lugar reservado. Un año más tarde se decía generalmente una Misa solemne a la que asistía una multitud numerosa y que llegaba a revestir un acontecimiento con frecuencia de un aspecto tan grandioso como el entierro mismo..." (FAYARD lo ha obtenido de MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 656, que a su vez cita el libro "Honras del Cardenal Molina", donde se relata la ceremonia celebrada en 1745, en el aniversario de la muerte de este Cardenal Gobernador del Consejo).

^{***}. El Conde de Aranda, por ejemplo, buscando la popularidad por todos los procedimientos, establece que el Gobernador del Consejo iría a pie por las calles, cuando hasta entonces sólo se le veía salir en coche cerrado con las cortinas echadas. Aranda presentó varias proposiciones al Rey en esta línea, por medio de Roda, el 3 de mayo de 1766. (RODRIGUEZ CASADO, V., "La política y los políticos en el reinado de Carlos III", pág. 205). Esta medida se confirma en la célebre fecha del dos de mayo de 1808 cuando el Presidente en compañía de otras autoridades recorre a pie las calles de Madrid (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.512, expediente núm. 7).

Presidente del Consejo en la lista de invitados y en preferencia. El Presidente ya no era por tanto la segunda autoridad del Reino después del Rey.

Fueron así las pujantes Secretarías de Despacho y el renovado y prestigioso Consejo de Estado, las instituciones que marcaron la contrabalanza del prestigio del Consejo de Castilla. Aunque el Duque del Infantado como mano derecha del Monarca, preservó parte del reconocimiento que tenía el Presidente de Castilla, la decadencia del cargo era evidente. Incluso podría ser sintomático el que el Monarca desde el cese de Infantado dejase con frecuencia al frente del Consejo Gobernadores interinos que se sucedieron en el cargo con una cierta rapidez, lo que era contrario al estilo tradicional de aquella Presidencia.

Como veremos más adelante con detalle al estudiar sus competencias, cuando por el Decreto de 27 de mayo de 1814 es restablecido el Consejo, el único que no fue repuesto en sus antiguas prerrogativas fue el Presidente del Consejo^{***}.

Esta línea descendente de la dignidad del Presidente aparece confirmada en otro expediente del Archivo del Palacio Real. En el bautizo del Príncipe de Asturias en 1830 había perdido ya el lugar preferente^{***}. Más adelante, en el ceremonial de la jura de doña María Isabel Luisa -futura doña Isabel II- como Princesa Heredera de la Corona, que se celebró el 20 de junio de 1833, no se mencionaba ni siquiera entre las autoridades preferentes al Gobernador Consejo de Castilla. Nuevamente se citaba a los Secretarios de Despacho y Consejeros de Estado, y sólo detrás de los Embajadores se colocaba "a los Ministros del Consejo". Así vemos que por aquellas fechas ni siquiera se incluía al Gobernador del Consejo en una lista de las personalidades del Estado.

Finalmente podemos decir que los honores que tenía el Presidente de Castilla fueron heredados por el Presidente del Consejo Real de España e Indias, sustituto

^{***}. FAYARD, Janine, op. cit., pág. 12. Véase también "Decretos del Rey don Fernando VII", Año primero de su restitución al trono de las Españas, t. I, Madrid, 1818, pág. 45.

^{***}. En aquella ocasión le fue designado el banco del lado izquierdo de las tribunas que daban entrada a la Real Capilla. Quedaban situados por delante los cortesanos, Nuncios, Grandes de España, Cuerpo Diplomático, etc. El Consejo, con su Gobernador interino don José María Puig al frente, quedaba ya en un segundo plano (A.M.A.E., Protocolo, legajo 3.256).

del Consejo de Castilla¹⁰⁰².

6. Retribución

La retribución de un Gobernador del Consejo se componía de un sueldo fijo y de unos complementos variables.

El sueldo fijo parece que era el mismo tanto si tenía el título de Presidente como si tenía el de Gobernador¹⁰⁰³. Al acabar la Guerra de la Independencia sus haberes anuales eran de 90.000 reales (3.060.000 maravedíes)¹⁰⁰⁴. Este sueldo se mantuvo hasta la subida de salarios del año 1824.

En 1823 se había planteado la posibilidad de una subida, pero por la Real Resolución de 29 de diciembre de 1823 el Rey ordenaba al entonces Gobernador interino -don

¹⁰⁰². ARVIZU Y GALARRAGA, F., "El Consejo Real de España e Indias". Actas del III Symposium de Historia de la Administración, I.E.A., Madrid, 1974, pág. 401.

¹⁰⁰³. Sin embargo, un expediente conservado en el Archivo General de Palacio, ya mencionado, parece indicar que resultaba más cara a la Monarquía la presencia de un Presidente del Consejo (vid. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, folios 198-200).

¹⁰⁰⁴. Aunque el Gobernador de Castilla era tradicionalmente el ministro mejor pagado del Antiguo Régimen, hubo también algunas quejas al Rey, ya que en la práctica el sueldo era algo menor a lo que podía cobrar un Consejero de Castilla que a la vez fuera camarista. Así, el Gobernador interino del Consejo, don Ignacio Martínez de Villela, en el cargo desde el 2 de diciembre de 1823, solicitaba el 18 de enero de 1824 que se le eximiese del pago de la media annata. El Rey contestó lo siguiente: "Que el Gobernador del Consejo Real goce el mismo sueldo que los Secretarios de Despacho, sin diferencia alguna y sin gravamen ni media annata por considerarse un maximum, comparado con el de su dotación" (A.H.N., Consejos, legajo 9.399 núm. 7; y legajo 6.086, Consulta de Oficio de 3 de diciembre de 1823).

Bernardo Rieqa- "que siguiera la práctica nacida con el Conde de Campomanes y el de la Cañada a finales del siglo XVIII", percibiendo sólo los 90.000 reales, debido a las circunstancias políticas y el caótico estado de la Real Hacienda.

Subido el sueldo a 120.000 reales en 1824, para equiparar su retribución a la de los Secretarios de Despacho^{***}, en los Presupuestos del Consejo para 1826^{***} y 1829^{***} aparecía ya la nueva retribución del Gobernador del Consejo, consignada en el Real Tesoro. En 1832 se mantenía este sueldo^{***} y parece que así continuó hasta la extinción definitiva del Consejo.

El hecho de que el cargo fuera interino si influía en los haberes del Gobernador, ya que su sueldo seguía siendo el del Decano del Consejo. Continuaba participando de los beneficios de las diversas comisiones que tenía como tal. Cobraba, por tanto, como Consejero Camarista, y no propiamente como Gobernador del Consejo.

El sueldo del Presidente o Gobernador se había visto tradicionalmente complementado con ciertas sumas bajo el concepto de "ayudas de costa", aparte de otros beneficios concedidos por la munificencia regia^{***}. Estos ingresos complementarios suponían habitualmente fuertes incrementos en la retribución. Además era frecuente que desempeñasen Comisiones como Ministros del Consejo y de la Cámara, puesto que, como hemos visto, muchos de ellos actuaron en el reinado de Fernando VII como Gobernadores interinos^{***}.

En ocasiones, el sueldo del Presidente se veía mermado por gastos extraordinarios que incluso no le

^{***}. Consecuencia de la mencionada consulta de 18 de enero de 1824.

^{***}. A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.698 núm.6.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.781, expediente núm. 11: "Informe de 1832 sobre los empleados del Consejo, sueldos, funciones, si está enajenado o no, antecedentes y situación actual".

^{***}. BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", op. cit., pág. 164. Por ejemplo, hábitos y sustanciosas encomiendas en las órdenes militares.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 9.399 núm. 7.

correspondían propiamente. Así, por ejemplo sabemos que el Duque del Infantado estuvo sufragando de su bolsillo los gastos de la Secretaría de la Presidencia de Castilla en los primeros años tras la restauración del Consejo en 1814⁷⁰³, hasta el año 1819 al menos.

Con todo, podemos afirmar con Fayard que el Presidente de Castilla de hecho en los siglos XVII y XVIII había sido el cargo castellano mejor retribuido de la Monarquía⁷⁰⁴, aunque durante el reinado de Fernando VII estaría ya tan sólo entre los mejor retribuidos.

7. Remoción y jubilación

El Presidente o Gobernador del Consejo en principio era designado de forma vitalicia por el Rey. Aunque, como afirma Desdevises, el Presidente no podía ser destituido de su cargo, pero sí exiliado, sin embargo ya hemos visto que en la práctica el Monarca podía cesarle o jubilarle a su libre arbitrio.

Un Presidente que caía en desgracia o era jubilado conservaba su título y su rango y permanecía sometido al mismo ceremonial que si hubiera estado en su ejercicio⁷⁰⁵. Así, don José María Puig y Samper, jubilado como Gobernador del Consejo en 1.832, conservaría este rango y derechos cara a la percepción del retiro⁷⁰⁶. Y esta nota se aplicaba no sólo a los Gobernadores efectivos sino también a aquellos que por nombramiento lo habían sido interinos. El título que mantenía era el de Gobernador

⁷⁰³. Estos gastos debían satisfacerse por el fondo de Penas de Cámara y gastos de Justicia del Reino. En 1819 ascendieron a 18.740 reales de vellón, que pagaba Infantado de su bolsillo, sin que hasta aquella fecha se hubiera hecho ninguna indicación sobre su reintegro (A.H.N., Consejos suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11).

⁷⁰⁴. FAYARD, op. cit., pág. 148.

⁷⁰⁵. DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 296.

⁷⁰⁶. Ver Guía de Forasteros del año 1.834, pág. 129.

jubilado del Consejo Real.

También estaba regulado legalmente el régimen de pensiones de los Gobernadores del Consejo. Carlos III, por Ley de 12 de enero de 1.763, establecía la pensión que correspondía a las viudas y a los huérfanos de los oficiales del Estado y entre ellos, la de los Presidentes del Consejo. A éstos fijaba pensión de 100.000 reales al año; a sus viudas, 20.000 reales anuales^{***}.

^{***}. Novísima Recopilación, Ley XV, Tít. II, Libro IV. Las viudas de los Presidentes o Gobernadores de los Consejos de Indias, Ordenes y Hacienda tenían asignada una pensión de 18.000 reales anuales. Sabemos también que por una Real Orden de 17 de enero de 1808 se rebajó a una tercera parte la pensión de viudedad.

EL DECANO DEL CONSEJO DE CASTILLA

"En las vacantes de la Presidencia y Gobierno del Consejo regularmente se expide Real Decreto, nombrando por Gobernador interino al Señor Ministro Decano, con declaración "de no haber de tener otras autoridades y preeminencias que las que por tal Ministro más antiguo le corresponden...Y en las ocasiones que los Señores Presidentes o Gobernadores se hallan ausentes o enfermos, corresponde al Señor Ministro Decano presidir y ocupar el lugar preeminente en el Consejo Real, en el de la Cámara, siendo Ministro de ella, y no se pone almohada en su asiento como se practica con los Señores Gobernadores"****.

El título de Decano de Castilla lo ocupaba el Ministro del Consejo más antiguo****. Era un cargo

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 87. Por su parte Moriana decía del decano lo siguiente: "El señor Decano del Consejo, a falta del señor presidente, por bacante u enfermedad u de otra manera, es la suprema dignidad en él, a quien los demás señores y ministros de los estrados abajo an de obedecer y guardar sus órdenes en todas las cosas que se las diere, y ansimismo en la sala de alcaldes de corte, y todos los ministros de pluma y bara de lo criminal y civil der aquel tribunal, y del de la Villa, corregidor y thenientes, y todos los demás del reyno de Audiencias, Chancillerías y corregidores que an sido. Lo he visto platicar y hacer en las vacantes, de más de veinte y ocho años, que las ha avido de cinco y de seis meses" (MORIANA, J. de, "Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo", op. cit., pág. 272).

****. Ver DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 75.

honorífico y no especialmente retribuido, con especiales competencias dentro del Consejo. Su autoridad y prestigio eran grandes^{***} y en ausencia del Gobernador hacía sus veces^{***}.

Entre las atribuciones y competencias que estaban consignadas al Decano del Consejo podemos mencionar las siguientes:

a) Como Gobernador interino del Consejo

Tras fallecer el Presidente o Gobernador del Consejo, o cesar en su empleo, asumía sus competencias interinamente^{***}. Habitualmente se hacía cargo del Gobierno interino mediante una Real Orden del Rey^{***}. Entre sus

^{***}. De la autoridad de los Decanos hay frecuentes referencias en la documentación del Consejo. Mencionaremos someramente dos episodios donde aparece esta autoridad. Uno de ellos fue el 2 de mayo de 1808, cuando el Decano con otras autoridades recorrieron las calles de Madrid pidiendo calma a la población (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.512, expediente núm. 7); el otro fue un episodio similar fechado el 2 de abril del mismo año, cuando hubo un pequeño motín antifrancés en la Plaza Mayor y el Decano en persona fue a pie a la Plaza para dispersar a la gente y persuadirles que se retirasen, cosa que consiguió (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.513 núm.1).

^{***}. Ya hemos visto cómo tenía un enorme interés para los Consejeros guardar su antigüedad dentro del Consejo, ante la expectativa de poder llegar a ser Decano del Consejo.

^{***}. Así, por ejemplo, le correspondía establecer los horarios de verano e invierno del Consejo (se puede ver un oficio de este estilo, de 2 de diciembre de 1831, en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.910 expte. núm. 9).

^{***}. Un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 14: en este expediente el Rey resolvía que don Arias Mon gobernase interinamente el Consejo con las regalías y preeminencias que le correspondían a un Gobernador interino del Consejo. Otro ejemplo lo tenemos en 1827, cuando tras el fallecimiento del Gobernador Martínez de Villela en Aranjuez el 12 de mayo de 1827, fue nombrado Gobernador interino el decano don Bernardo Riega (cfr. Guía

prerrogativas se encontraban entonces que los porteros del Consejo y los alguaciles de Corte pasasen a su casa a hacer la guardia. El Secretario de la Presidencia asistía también a su domicilio desde ese momento a despachar sus asuntos y los demás tribunales inferiores acataban también sus órdenes.

Por otro lado, es importante señalar cómo el Gobierno interino no sólo ocurría por fallecimiento del Presidente o Gobernador. En ocasiones era motivado por ausencia o enfermedad de aquél^{****}. En tales casos de vacante del Presidente o Gobernador por el motivo que fuera, correspondía entonces al Decano hacer los nombramiento de jueces para las comisiones y negocios referentes al Consejo y a la Sala de Alcaldes.

En las situaciones de vacante de la Presidencia, o en ausencias o enfermedades de los Presidentes o Gobernadores, tenía facultad de representar al Rey lo que convenía para la buena administración de justicia y gobierno del Reino. Esto no estaba permitido a los demás Ministros, excepto aquéllos encargados de especiales comisiones.

El Decano practicaba las mismas ceremonias que observaban los Presidentes o Gobernadores en los besamanos reales. Tenía asimismo la facultad de mandar convocar a los Ministros para formar el Consejo, Cámara y Juntas extraordinarias, siempre que le pareciera conveniente. A este fin, estando vacante la Presidencia, se reunían en una de las Salas del Consejo^{****}. Presidía igualmente cualquier reunión del Consejo en ausencia del Presidente^{****}.

de Forasteros de 1828 y A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 44).

^{****}. Un caso lo tenemos en A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 13.

^{****}. Un ejemplo lo tenemos en la reunión extraordinaria del Consejo del día 6 de mayo de 1808, convocada por don Arias Mon. En aquella ocasión, pese a no ser día de Tribunal, el Decano mandó llamar a los Ministros y Fiscales del Consejo, para estudiar los escritos de Carlos IV a Napoleón y a Fernando VII En el primero de ellos, Carlos IV pedía al Emperador su protección. En el segundo, reprochaba la conducta de su hijo y no reconocía la abdicación de Aranjuez, por haber sido hecha con fuerza. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12).

^{****}. En los Diarios de Arias Peñateiro, tomo I, pág. 85 se describe una sesión del Consejo, presidida por el Decano, donde tuvo que intervenir para poner orden con la campanilla en un tenso debate entre Consejeros. En ausencia del

En las vacantes, enfermedades o ausencias de los Presidentes, era misión suya fundamental velar por el Gobierno del Consejo y de los Tribunales de Justicia, así como del cumplimiento de las leyes, pragmáticas, autos acordados y providencias del Consejo. A este fin quedaba subrogado en las facultades del Gobernador.

b) Facultades en cuanto Decano

El Decano del Consejo gozaba como tal de amplias facultades. Podía, por ejemplo, solicitar de cualquier autoridad o particular cualquier informe o noticia^{***}. También le correspondía, como señalaban Moriana^{***} y también Martínez de Salazar, la custodia de la llave del escritorio o arca donde estaban guardados los votos que daban por escrito los Ministros en los pleitos vistos. Asimismo se constituía en garante del secreto de aquellos votos.

Distribuía los distintos pleitos entre los Relatores, para que hicieran relación en el Consejo por turno. E igualmente otorgaba asuntos a los Ministros del Consejo de los negocios de por la tarde^{***}.

Sabemos también que correspondía al Ministro más antiguo del Consejo el nombramiento mensual de los dos

Presidente y del Decano, el Ministro más antiguo u otro designado debía presidir la reunión (vid. un ejemplo en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.916 núm. 21, que contiene una Real Orden mandando que el Ministro don Francisco Fernández del Pino presidiese las reuniones del Consejo). '

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.815 expte. núm. 8: La Real Orden de 25 de mayo de 1829 mandaba que las autoridades y demás personas a quienes el Sr. Decano pidiese informe o noticias, "cumplan sin la menor omisión lo que por ellas se previene, so pena de incurrir en el desagrado de S.M. y más que haya lugar".

^{***}. MORIANA, J de, op. cit., pág. 273.

^{***}. MORIANA, J. de, op. cit., pág. 272.

Alcaldes de Corte que componían la Sala de apelaciones de los pleitos de menor cuantía. Y que aquél debía asistir a la Sala primera de Gobierno con la preeminencia de estar exento de concurrir a las visitas de cárceles que por el Consejo se hacían todos los sábados. Sólo acudía, al igual que el Gobernador del Consejo, a las visitas generales de Navidad, Resurrección y Espíritu Santo.

Le correspondía asimismo tratar con el Presidente o Gobernador la forma de recoger y poner en custodia las consultas y papeles que existiesen en las casas mortuorias de los Ministros, al fallecimiento de uno de éstos.

Por otro lado, la firma del Decano era importante en los expedientes del Consejo. Debía firmar todos los despachos y provisiones que se expedían por el Consejo, para completar las cinco firmas que legalizaban los mismos.

El Decano hacía las veces de intermediario entre el Consejo y las instituciones dependientes del Supremo Tribunal, así como de sus empleados. Por ejemplo, en el caso de las Reales Ordenes, Decretos y Providencias del Rey, se comunicaban al Decano, quien las hacía presentes a continuación en el Consejo y en la Cámara.

Veamos algunos ejemplos más. El informe que diariamente remitía la Sala de Alcaldes al Consejo para dirigirlo al Rey era recibido por el Decano, a quien correspondía abrirlo y comunicar su contenido. También dirigía al Rey las consultas, representaciones, informes de la Sala, testimonios de rondas y otras noticias de que debía ser informado el Monarca. Le correspondía también hacer el día primero de cada año la consulta o representación proponiendo al Rey los Ministros que debían asistir a las Salas del Consejo el año siguiente"".

También el Decano por Real Orden informaba periódicamente al Rey del estado de los negocios del Consejo, número de expedientes tramitados, etc."".

"". En la práctica esta consulta solía tener lugar alrededor del día de Navidad de cada año, de tal manera que con el comienzo del nuevo año ya estaba aprobado el plantel de Ministros del Consejo.

"". Para ello, todos los lunes los Fiscales y Relatores debían remitirle listas de los expedientes que tenían para su despacho. He aquí un oficio del Sr. Decano con fecha 28 de octubre de 1829: "A fin de que pueda yo cumplir la soberana voluntad de S.M., según el particular encargo que de su Real Orden me está hecho, prevengo a Vd. recoja de todos los Escribanos de Cámara y de Justicia del Consejo una lista comprensiva de todos los expedientes y pleitos

Podía hacer pasar a Ministros de otras Salas a la primera de Gobierno, si para el despacho de los negocios de ésta fuese preciso algún Ministro más.

Con respecto a la Sala de Alcaldes, el Decano tenía también otras prerrogativas: estando vacante el Gobierno del Consejo, cuando el Decano llamase a algún Alcalde de Corte o éste le fuese a visitar, entraría en su casa sin capa, con gorra y vara; en los días de consulta, estando vacante la Presidencia del Consejo, acudía a la casa del Decano un Alcalde de Corte, para acompañarle hasta el lugar donde se reunía el Consejo. Llevaría al Alcalde en su coche, con el acompañamiento de alguaciles de Corte a caballo. Lo mismo se hacía en los besamanos reales; también en momentos de vacante de la Presidencia, en ceremonias y fiestas públicas, el Decano era acompañado por un Alcalde y alguaciles de Corte hasta el lugar donde se reunía el Consejo; en las visitas de cárceles de Corte y de Villa le acompañaba el corregidor de Madrid, sus tenientes y alguaciles; en las fiestas de toros en la Plaza Mayor, le acompañaba el Alcalde más antiguo, y varios alguaciles de Corte a caballo, desde su casa hasta la plaza.

Otras regalías suyas que señala Martínez de Salazar eran la de guardar su coche en el zaguán del Consejo los días en que no acudía el Gobernador, o la de guardar una de las llaves del arca del cuerpo de San Isidro²⁰⁰⁰.

Era frecuente, igualmente, que el Decano del Consejo Real fuera miembro de importantes comisiones y Juntas. Por ejemplo, formaba parte de la Junta Suprema de Gobierno que dejó Fernando VII en su partida hacia Bayona, en abril y mayo de 1808²⁰⁰¹. En ocasiones había reuniones de los Decanos de los distintos Consejos, o de éstos con autoridades del Estado²⁰⁰².

Fue frecuente también en el reinado de

pendientes en ellas que se hallen en poder de los Fiscales, o sea, de sus Agentes, y de los Relatores, con expresión del día en que hayan tenido la entrada y los nombres de los Agentes Fiscales y Relatores que los tengan; cuyas listas inclusas, las de las Escribanías de Gobierno, me remitirá Vd. desde luego y continuará dándomelas todos los lunes de cada semana sin falta alguna, expresándose también en las que correspondan al primer lunes después de dadas y demás que subsigan, los expedientes y pleitos que hayan tenido salida durante la semana intermedia..."

²⁰⁰⁰. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 87 y ss.

²⁰⁰¹. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.512 núm. 15.

²⁰⁰². ARIAS TEIJEIRO, "Diarios", tomo I, pág. 231.

Fernando VII que el Consejo de Castilla estuviera presidido por sus Decanos como Gobernadores interinos¹⁰⁰⁰. Por otro lado, las fuentes nos hablan también de un "Subdecano del Consejo", que era el segundo Ministro en antigüedad y que sustituía al Decano a la vacante de éste¹⁰⁰¹. Por otro lado, es comprensible la creación de esta figura de Subdecano del Consejo. Si con frecuencia el Decano debía hacer las veces de Gobernador interino del Consejo, las funciones del Decano pasaban automáticamente al Ministro más antiguo que le seguía o Subdecano.

Al igual que a los demás Consejeros de Castilla, a la muerte de un Decano del Consejo se recogían de su casa todos los documentos de interés¹⁰⁰². Sabemos por algún otro expediente del Archivo Histórico Nacional que existía un ceremonial especial al producirse el fallecimiento de un Decano del Consejo¹⁰⁰³.

¹⁰⁰⁰. Como ya hemos visto, en el reinado de Fernando VII hubo varios Gobernadores del Consejo que lo fueron de forma interina. Ocuparon plaza efectiva de Presidente los Duques del Infantado y de Bailén, y de Gobernador don Ignacio Martínez de Vilela y don José María Puig y Samper. Por el contrario fueron Decanos Gobernadores interinos en este periodo, entre otros, don Arias Antonio Mon, don Bernardo de Riega, don Gonzalo José Vilches, don Francisco Fernández del Pino y don Juan Antonio de Inguanzo.

¹⁰⁰¹. El 5 de diciembre de 1808, recién concluida la capitulación de Madrid ante Napoleón, el Consejo designó una diputación que fuera a cumplimentar al Príncipe de Neuchatel, compuesta por el Sr. Vilches, Subdecano, y los cuatro Ministros del Consejo más modernos y dos Alcaldes de Corte (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, leg. 5.526 núm. 20); otro ejemplo de referencia al Subdecano lo encontramos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.591 núm. 12.

¹⁰⁰². Así se hizo, por ejemplo, cuando falleció don Gonzalo José Vilches (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.453 núm. 48). Otro ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 45: Recolección de papeles en casa mortuoria del Decano don Bernardo Riega, el 6 de febrero de 1830. También en otra ocasión en este reinado hubo un recogimiento de papeles sin que hubiera fallecido el Decano: fue en febrero de 1809, cuando el Decano don Arias Mon se encontraba prisionero en Francia y por Real Orden de 14 de febrero, a instancia de su mujer, se mandó levantar los sellos de su casa y reconocer los papeles que en ella hubiera (A.G.S., Sección Gracia y Justicia, Gobierno Intruso, legajo 1.088; también en A.H.N., Fondos Contemporáneos, Ministerio de Justicia, legajo 4.391 núm. 783).

¹⁰⁰³. En A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.433 núm. 40 se recoge el ceremonial que se practicaba en los entierros de los Decanos del Consejo.

CONSEJEROS DE CASTILLA

1. Introducción

"Como de los Ministros y Consejeros pende la administración de Justicia y Gobierno del Reino, los Señores Reyes, para confiar y depositar en ellos tan grande cargo, se han esmerado siempre en elegir personas sabias, prudentes, versadas en la judicatura y práctica de todos los Tribunales, de buena sangre y costumbres..."¹¹²⁰⁴¹.

El Consejero era un magistrado o ministro con plaza en el Consejo. Al hablar de Ministro, vemos que esta palabra tuvo durante varios siglos el sentido de oficial del Rey, abarcando desde el corregidor al virrey. Ya existente en la Baja Edad Media, por influencia franca, se extiende por España durante la Edad Moderna, cuando la doctrina y la legislación lo utiliza en relación con los Consejos. Sin embargo, el término "ministros" es utilizado en el Consejo con una gran amplitud, alcanzando en general a relatores, escribanos de Cámara, alguaciles, alcaldes de Corte, abogados, procuradores, porteros, etc. Todos éstos son "ministros subalternos" o "ministros inferiores", frente a los propiamente "Ministros" que son los Consejeros¹¹²⁰⁴².

¹¹²⁰⁴¹. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", pág. 81.

¹¹²⁰⁴². LALINDE ABADIA, J., "Los medios personales de gestión del poder público en la historia de España", pág. 11. En esta categoría de Ministros del Consejo se incluía habitualmente también a los Fiscales del Consejo.

Los miembros del Consejo de Castilla o Consejeros de Castilla asistían al Monarca en funciones de gobierno y de administración de justicia¹⁰⁰⁰. Con el Rey Carlos III el ejercicio de las tareas consultivas recobra nueva vida y se desarrolla toda una nueva jerarquía oficial preponderantemente consultiva. Los Consejeros como oficiales de asesoramiento al Monarca y de administración de Justicia, cobraron nueva fuerza como personas de decisión política y de gobierno de los pueblos dentro de esa importante máquina administrativa que era el Consejo Real. Como todos los Consejos de la Monarquía Hispánica, ya hemos visto que el Consejo de Castilla no era un mero organismo consultivo, sino que bajo la subordinación al Rey ejercía amplias atribuciones ejecutivas, administrativas y jurisdiccionales. Y sin duda, el peso de las grandes decisiones y resoluciones de esta institución era soportado por un grupo de hombres, un número reducido de consejeros, cuya reunión dio precisamente nombre a esta importante institución de nuestro régimen polisinodial.

Lo primero que llama la atención es la asombrosa diversidad de problemas que tenía que resolver un grupo tan reducido de consejeros. Como apuntaba Fayard, hubiera sido fácil simplificar su tarea aumentando su número y precisando las tareas de cada uno, pero la Monarquía se mostró reticente en el empleo de estas soluciones. Fayard encontraba su explicación en la idea que del juez se tenía en España: "Aumentar su número habría puesto en entredicho su prestigio"¹⁰⁰¹.

Por la importancia y los cometidos del Consejo quizás las Consejeros de Castilla tuvieron que desempeñar esta pesada labor aún en mayor medida que los Ministros de otros Consejos. Tenían que ser "los más doctos del Reino, personas que saben aconsejar"¹⁰⁰².

Es bien conocido que los Ministros Consejeros de Castilla ya desde mediados del siglo XVIII y durante desde el reinado de Fernando VII eran especialmente juristas, expertos en leyes, formados previamente en otros Consejos y Tribunales, que de alguna manera podían ser considerados escalones previos en sus carreras

¹⁰⁰⁰. Así comentaba Cordero Torres la función consultiva: "Solicitar un asesoramiento y prestarlo son dos acciones naturales, corrientes, tan viejas como el hombre...El que gobierna buscó siempre el complemento de su capacidad mediante la ilustración proporcionada por extraños". (CORDERO TORRES, J.M., "El Consejo de Estado", pág. 11).

¹⁰⁰¹. FAYARD, J., "Los miembros del Consejo de Castilla en la Edad Moderna", págs. 3 y 4.

¹⁰⁰². GONZALEZ DAVILA, "Teatro de las Grandezas de Madrid", pág. 356.

administrativas^{***}.

En 1808, la mayor parte de los miembros del Consejo de Castilla eran magistrados de carrera. Y como es bien conocido y señalaba Desdevides, "obtenir en fin de carrière et comme récompense suprême de longs services un siège au Conseil de Castille, était l'ambition de tout juge et de tout administrateur castillan"^{****}.

Un estudio detenido sobre el grupo social que forman los miembros del Consejo de Castilla, tanto en lo referente a Ministros como a los subalternos siempre ha supuesto un cierto reto, por el desconocimiento general del funcionamiento y de la actividad de esta institución jurídica. Este desafío fue afrontado brillantemente por Janine Fayard^{****}, con sus estudios sobre los miembros del Consejo en la Edad Moderna, que tantas luces nos han dado sobre la caracterización social de estos importantes empleados públicos.

En este capítulo profundizaremos algo en esta importante faceta de la estructura orgánica del Consejo en el siglo XIX, dejando a un lado aspectos de formación, estudio social y vida de los Consejeros, que quedan fuera del objetivo de este trabajo.

^{***}. BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", op. cit., pág. 164. La formación jurídica de los Consejeros de Castilla era también reconocida en un importante memorial sin firma de 1.824 que el Monarca conservó en su Archivo reservado: "El Consejo de Castilla...se halla compuesto en el día de una sola clase de personas, esto es, de jueces letrados". (A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24, folio 199).

^{****}. DESDEVIDES DU DEZERT, "Le Conseil de Castille en 1808", pág. 67: "obtenir au final de la carrière y como recompensa suprema de largos servicios un asiento en el Consejo de Castilla era la ambición de todo juez y de todo administrador castellano".

^{****}. FAYARD, Janine: "Les membres du Conseil de Castille a l'époque moderne", op.cit., Paris 1979.

2. Nombramiento y designación

a) Consejeros efectivos o numerarios

El nombramiento de un nuevo Consejero correspondía naturalmente al Rey. Las plazas se daban a veces por favoritismo, pero también es verdad que el Monarca y sus asesores de gobierno eran los primeros interesados en llevar a cabo una cuidadosa selección, que fuese precedida de una detenida información previa sobre la calidad de los candidatos****.

Antes de la designación de un candidato se realizaban unos informes detallados sobre sus cualidades y capacitaciones. Habitualmente eran realizados por la Cámara de Castilla, que en su selección parece ser que atendía a los siguientes criterios: 1. la literatura, o sea, los conocimientos jurídicos; 2. el cumplimiento de las obligaciones propias del cargo; 3. el carácter; 4. el trato social y el porte exterior****.

Las frecuentes carencias de alguno de los mencionados puntos se compensaban, al parecer, con una conducta correcta o aceptable en los demás****. Los informes concedían también una gran importancia al carácter del

****. DESDEVISES DU DEZERT, G., "El Consejo de Castilla en 1808", pág. 68.

****. MOLAS RIBALTA, P., "La Administración española en el siglo XVIII", en Historia General de España y América, ed. RIALP, tomo X-2, "La España de las Reformas hasta el final del reinado de Carlos IV", pág. 124.

****. A Consejeros como a don Arias Díaz de Campomanes, algo anterior a nuestro periodo de estudio, el hecho de ser "sujeto de más habilidad que literatura", que salió "cortísimo de la Universidad por su ninguna aplicación", no le impidió llegar a ser ministro del Consejo (op. cit., pág. 124).

candidato. Se prestaba también atención a la condición social de las esposas e incluso a las condiciones físicas de los candidatos, principalmente a la estatura.

Gracias a los trabajos de Fayard, conocemos también con un cierto detalle las vías de acceso ordinarias a un puesto de Consejero, que parecen confirmarse en los datos aparecidos en la rica documentación conservada del reinado de Fernando VII. Los magistrados ascendían a través de uno de los cuatro caminos siguientes: 1. paso de una Audiencia a otra de mayor categoría, o a una Chancillería; 2. ascenso a Regente de un tribunal^{****}; 3. ascenso a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte^{****} o a algún Consejo; 4. ascenso directo a algún Consejo o al Consejo Real^{****}.

El propio Supremo Tribunal, en un dictamen de sus Fiscales, reconocía como carrera más común para los miembros del Consejo la siguiente: empezar por Ministros de las Audiencias, ser después Regentes o Alcaldes de Casa y Corte; y por último, ascender al Consejo de Castilla, cuando no se había pasado antes por otro Consejo^{****}.

Este sistema de designación correspondería a lo que Lalinde Abadía denomina un "sistema de designación libre", el más generalizado entre las formas de ingreso en la administración suprema e intermedia de la época, en las que el Rey se reservaba la designación^{****}.

^{****}. Los Regentes solían ser ascendidos a miembros de un Consejo.

^{****}. La Sala de Alcaldes constituía un verdadero semillero de la magistratura superior. Los jueces solían permanecer en ella poco tiempo y rápidamente ingresaban en algún Consejo.

^{****}. Vid. por ejemplo EVOLUCIÓN HISTÓRICA, jubilación de miembros del Consejo Real en 1824 y sustitución por nuevos Consejeros.

^{****}. A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.658 núm. 15. Esta regla no era al parecer tan común en las carreras de otros Tribunales, con la excepción de los Ministros del Consejo de Indias.

^{****}. "En su forma pura, el sistema ofrece el problema de cómo realizar el promotor la designación, que sólo es de fácil solución cuando se trata de sociedades reducidas o cuando se trata de altos cargos, pues en el primer caso está en condiciones de conocer a todos los promocionables, y en el segundo, de conocer también a los que se han distinguido hasta el punto de que puedan aspirar a una alta dignidad". (LALINDE ABADIA, J., "Los medios personales de gestión del poder público en la historia de España", pág. 91).

En general, la excelente calidad de sus Ministros era norma habitual del Consejo, lo que era necesario "no sólo por las importantes atribuciones y papel del Consejo Real dentro de la Administración, sino también por el propio prestigio del Consejo"****.

La Novísima Recopilación mencionaba como calidades de sus Ministros las siguientes:

"(...) Que sean varones expertos en virtudes, temerosos a Dios, en quien haya verdad; y sean ajenos de toda avaricia y codicia; y amen el servicio de los reyes y guarden su hacienda y provecho común de su tierra y señorío; y sean naturales del reino y no sean desamados de los naturales (...), y asimismo, que sean personas sabias, viejos y expertos, y doctos en las leyes y derechos; porque según dice la Escritura, en los antiguos es la sabiduría y en el mucho tiempo es la prudencia y la autoridad y pericia de las cosas; y digna cosa es a la Real magnificencia, según su loable costumbre, tener tales varones del Consejo cerca de sí, y hacer y ordenar todas las cosas por consejo de los tales"*****.

Por su parte Moriana establecía como requisitos para un Consejero de Castilla el ser "personas doctas, savias y entendidas, y de muchas partes, de linage y letras, y de buenas bidas y costumbres, y que ayan estado en muchas Audiencias, Chancillerías y Consejos, y así quando llegan a este punto son consumados barones los que le ocupan, de quien todos tienen que aprender, porque su propia virtud y letras los a puesto en tantas dignidades que no ay más que acender"*****.

Anualmente la Cámara de Castilla, en el mes de enero, enviaba una carta -firmada por el Presidente y dos Camaristas- a los Presidentes de las Chancillerías de Valladolid y Granada, a los Regentes de las Audiencias de

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.977, expediente núm. 11.

*****. Ley I, Título III, Libro IV, Novísima Recopilación. Otros muchos autores de distintas épocas han escrito sobre las cualidades requeridas en un buen Consejero de Castilla. Entre ellos podemos citar a Diego de Saavedra (en su obra "Empresas Políticas", pág. 55: Diccionario Jurídico-Administrativo, voz Consejero, t. II, Letra C, pág. 524); Juan Márquez (en su obra titulada "El Gobernador Cristiano", libro I, capítulo 5); el cronista oficial Núñez de Castro (en su obra "Sólo Madrid es Corte y el cortesano en Madrid", pág. 76); o Valladares (en su "Semanario Erudito", t. XI, pág. 197).

*****. MORIANA, J. de. "Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo", op. cit., en "Fuentes...", pág. 271.

Sevilla y Galicia, al Obispo de Salamanca, y al Abad de Alcalá de Henares. Estos a su vez remitían a la Cámara un dossier minucioso sobre los candidatos recomendados. A partir de estos informes, el Consejo de la Cámara proponía al Monarca los nombres de los aspirantes para las plazas vacantes****.

Fayard añade cómo era posible también, al igual que para otros puestos de empleados públicos, la presentación de candidaturas individuales solicitando un cargo. En todo caso y como es obvio, el Rey podía elegir libremente a cualquier individuo para cubrir una vacante, sin necesidad de sujetarse a ninguna de las propuestas presentadas por la Cámara****.

Por tanto, realizada la previa información, el Rey designaba al nuevo ministro****. Para ello, remitía su decisión en una carta al Gobernador del Consejo o a veces al mismo elegido. Esta carta era distinta de la Real Cédula de nombramiento**** y solía seguir un modelo preestablecido****.

****. En 1815, por ejemplo, cuando don Tomás Moyano fue promovido a la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, fue propuesta a Fernando VII la siguiente terna: en primer lugar, don Sancho de Llamas, Ministro del Consejo de Hacienda; en segundo lugar, don Felipe Gil de Taboada, Fiscal del Real Consejo de las Ordenes; y en tercer lugar, don José de Hevia y Noriega, Regente en Comisión de la Chancillería de Granada. El Duque del Infantado, Presidente del Consejo, presentó por su parte a don Manuel de Torres-Cónsul, Fiscal del Consejo Real, que fue el designado por el Rey.

****. "Parece cierto que los Heredias pidieron al Ministro de Gracia y Justicia hiciera Consejero de Castilla al otro hermano de Granada" (G. DE LEON Y PIZARRO, F., "Memorias", tomo II, pág. 4).

****. Sin duda el Monarca se apoyaba en los consejos de los colaboradores más allegados a la hora de nombrar un nuevo Consejero de Castilla. Un ejemplo confirmatorio de ello puede ser una simpática carta inédita y sin firma reconocible, fechada en Aranjuez el 22 de enero de 1.808. Lo que parece cierto es que era escrita por una alta autoridad del Estado. Tras afirmar que el Ministro iba a premiar a un individuo por sus servicios, haciéndole Regente, escribe: "y concluyó (el Ministro) con decir es uno de los primeros que tengo que traer al Consejo; a lo que le repuso su mujer: hombre, si es tan bueno el recetario, no lo traigas tan pronto, para que acabe de entonar aquello" (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 11.995).

****. Se pueden ver ejemplares de estas cartas de nombramiento, notificaciones, aceptaciones, etc. en A.H.N., Estado, legajos 6.379 y 6.380.

A su vez el nuevo Ministro dirigía al Presidente o Gobernador de Castilla una misiva de cortesía, en la que le testimoniaba su aceptación y agradecimiento por la designación.

Por escritos de la época sabemos que el nombramiento de un nuevo Consejero iba unido a previsiones, expectativas y recomendaciones en los conciliábulos políticos²²¹⁰.

²²¹⁰. A.H.N., Estado, legajo 6.380-2. He aquí un modelo de la carta que solía remitir el Rey: "Excmo. Sr.: Por Decreto de este día se ha servido el Rey de conferir una plaza en el Consejo Real a don _____, Consejero en _____; y siendo la voluntad de S.M. que sea con el sueldo de la dotación de los de aquel Tribunal, lo participo a V.E. de Real Orden para que se tenga entendido en la Cámara, para su cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde a V.E. ms. as. Aranjuez, a _____."

²²¹¹. De los Diarios de Arias Teijeiro extraemos algunas referencias a nombramientos de Consejeros, correspondientes a los últimos años del reinado de Fernando VII: El día 20 de febrero de 1828 relataba lo siguiente: "En efecto, vino nombrado Consejero el Sr. Lamas; y su reemplazo como anunció el Mayor. Gran alegría de Company y Milla; y sentimiento de todos los demás. Los porteros lloraban. Pero el Sr. Lamas lleno de alegría. (...) Al mismo tiempo reponen a Llorens en la plaza de Larrumbide, para la que iba consultado Pelegrín; esto, supongo, para neutralizar la injusticia del Sr. Don José, y para darle gusto. Lloraba el infeliz de Llorens" (pág. 59, tomo I). Seis días después, el 26 de febrero de 1828, el Diario apunta: "Gordon dijo al Sr. Lamas que pensaba consultarlo para la vacante de Torres-Cónsul; pero él le disuadió y con razón" (pág. 62, tomo I). Las notas correspondientes a los días 9-13 de noviembre del mismo año contienen la siguiente referencia: "Llegó Salelles. Ya no recela de la necesidad de que lo hagan Consejero de Castilla" (pág. 133, tomo I); la siguiente anotación interesante corresponde a los días 14-30 de noviembre: "Oller ha sido repuesto en la Alcaldía de Corte. Diputado menos malo en las Cortes extraordinarias, individuo del Tribunal Supremo de Justicia, repuesto en la Alcaldía en 1824, pero sin efecto por oposición de la Sala, lo ha logrado ahora, con escándalo y haciendo volver atrás al pobre Cid Miranda, a quien, por ser realista más que por lo que dicen que robó, no sólo le han postergado nombrando para el Consejo a dos Alcaldes más modernos, sino que ahora le sacan del Decanato con sus comisiones, etc., que tenía más ha de un año, para dárselo a Oller. Este es pariente de la viuda de Eroles, y con ella vivía. Company va por allí de tertulia. (...) Escudero tiró a degüello a Salelles en sus dos declaraciones: no le pudo hacer más mal. Pero él, en sus voluminosas contestaciones, se defendió perfectamente. En premio habrán dado a Escudero

La verdadera Cédula de nombramiento era expedida por la Cámara de Castilla y en ella constaba el nombre del elegido, el cargo que ocupaba, el salario futuro y el que venía percibiendo y la estimación de la media anata. Con esta certificación el nuevo Ministro se dirigía al Consejo de Castilla a prestar juramento, puesto que sólo desde ese momento le corrían los honorarios correspondientes al cargo y la antigüedad en su puesto de Consejero, para la preferencia de asientos, voto y decanato^{***}.

En cuanto al número de los Consejeros^{***}, no fue siempre el mismo durante el reinado de Fernando VII, oscilando habitualmente entre 20 y 30 miembros^{***}. En 1804,

la plaza en el Consejo" (pág. 137, tomo I). El día 9 de septiembre de 1829 escribía Arias Teijeiro: "Dicen que si harán a Campmany Consejero de Castilla; puede ser, pero lo dudo". La última anotación que recogemos corresponde al día 14 de septiembre de aquel 1829: "Se ha esparcido la voz de que a Nicolás Gómez Villaboa, Regente de la Audiencia Real de Valencia, le hacen Consejero de Castilla" (pág. 240, tomo I).

(ARIAS TEIJEIRO, J., "Diarios", Documentos del Reinado de Fernando VII). También incluimos aquí un extracto de una carta firmada por don Antonio María Izquierdo y enviada al Regente de la Audiencia de Asturias, fechada en Aranjuez el 22 de enero de 1808: "Le cuenta que el Ministro va a premiar a uno haciéndole Regente "y concluyó con decir que es uno de los primeros que tengo que traer al Consejo; a lo que repuso su mujer: hombre, si es tan bueno el recetario, no lo traigas tan pronto, para que acabe de entonar aquello". (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.995).

^{***}. En la Escribanía de Gobierno se registraba en un libro los juramentos y tomas de posesión de los Ministros del Consejo, así como las defunciones (cfr. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 2.840, auto acordado de 11 de abril de 1.785). En 1805, por la expedición de dicha Real Cédula tenían que pagar 12 reales, más 40 maravedías del papel sellado, esto es, en total, 448 maravedías, que iban a parar a las arcas de la Cámara de Castilla (LÓPEZ GÓMEZ, M.A., "El Consejo Supremo de Castilla durante el Antiguo Régimen", pág. 262).

^{***}. En el Archivo Histórico Nacional, en la sección Fondos Contemporáneos, Ministerio de Justicia, se conserva lo que queda de los expedientes personales de la mayor parte de los Consejeros de Castilla bajo Fernando VII.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 expte. núm. 6. "El número de Consejeros no ha sido siempre el mismo, habiendo conocido hasta 33".

todavía bajo Carlos IV, el Consejo tenía 28 Consejeros^{***}. En 1.807 eran 30 los Consejeros de Castilla^{****}. Y el año del comienzo del reinado de Fernando VII, 1808, el número de Consejeros quedaba situado en 30^{***}. Aquel mismo año hubo

^{***}. La Guía de Forasteros de 1804 nos informa del número de Consejeros existente entonces en cada Sala: la Primera Sala de Gobierno contaba con once Consejeros; la Segunda Sala de Gobierno contaba por su parte con cuatro Consejeros; la Sala de Mil y Quinientas tenía cinco; la de Justicia cuatro Consejeros, el mismo número que la Sala de Provincia.

^{****}. He aquí una relación de Consejeros de 1.807: Sr. Conde de Isla, Decano Gobernador interino, don Arias Antonio Mon, don José Antonio Fita (fallecido al parecer ese año), don Antonio Villanueva y Pacheco, don Bernardo Riega, don Juan de Morales, don Felipe Ignacio Canga, don Antonio González Yebra, el Marqués de Casa-García, don Manuel del Pozo -también fallecido ese año, según parece-, don José María Puig, don Sebastián de Torres, el Marqués de Fuerte Híjar, don José Navarro Vidal, don Domingo Fernández de Campomanes, don Andrés Lasauca, don Antonio Alvarez Contreras, don Antonio Ignacio de Cortabarría, don Ignacio Martínez de Villela, don Francisco Domenech, don José Marquina y Galindo, don Adrián Marcos Martínez Arjona, don Francisco Javier Durán, don Miguel Alfonso Villagómez, don Vicente Duque de Estrada, don Antonio González Carrillo, don Tomás Moyano, don Juan Antonio de Inguanzo y don Alfonso Durán y Barazábal. (A.H.N., Libro de Matricula de las Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, año 1.808, libro número 2.847, tomo 3).

^{****}. Guía de Forasteros de 1.808, págs. 72 a 75. Según Desdeseis entonces eran 35. (DESDEISES DU DEZERT, "Le Conseil de Castille en 1808", pág. 67; A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46). Por su parte, el libro de matrícula de las Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, del Archivo Histórico Nacional, presenta una lista de 29 Consejeros con el epígrafe: "Lista de los Señores del Consejo Pleno por el orden de su antigüedad año de 1.808" (A.H.N., Libro 2.847, tomo 3). Los Consejeros que recoge esta lista son los siguientes: don Arias Antonio Mon, Decano Gobernador interino; don Gonzalo José de Vilches, don Antonio Villanueva Pacheco, don Bernardo Riega, don Juan de Morales, don Felipe Ignacio Canga, don Antonio González de Yebra, don Gabriel Achutegui, Sr. Marqués de Casa García, don José María Puig, don Sebastián de Torres, Sr. Marqués de Fuerte Híjar, don José Navarro, don Domingo Fernández de Campomanes, don Andrés Lasauca, don Antonio Alvarez Contreras, don Antonio Ignacio de Cortabarría, don Ignacio Martínez de Villela, don Francisco Domenech, don José Marquina Galindo, don Adrián Marcos Martínez, don Francisco de Arjona, don Francisco Javier Durán, don Miguel Alfonso Villagómez, don Vicente Duque de Estrada, don Juan Antonio González Carrillo, don

varios nombramientos de Consejeros de Castilla, entre ellos uno bajo el mandato de Murat, el día dos de junio """. Todos los datos indican que fue éste don Torcuato Antonio Collado"".

La Asamblea de Notables reunida en Bayona estudió entre otros muchos puntos el número de Consejeros con que debía contar el Consejo Real de Castilla. Don Luis Meléndez de Bruna, entonces miembro del Consejo de las Ordenes, proponía en aquella ocasión el número de 36

Tomás Moyano, don Juan Antonio Inguanzo, don Alfonso Durán Barazábal.

""". DESDEVISES DU DEZERT, "Le Conseil de Castille en 1808", pág. 83, citando expedientes del A.H.N., Cámara de Castilla, Sección Invasión Francesa.

""". Un interesante expediente del Archivo Histórico Nacional nos informa que Collado fue sometido a causa de infidencia y absuelto de la misma en diciembre de 1.809. He aquí el texto de la Real Resolución de la Junta Central: "...La Junta Suprema Gubernativa del Reino ha visto la causa formada en este Tribunal de Seguridad Pública a don Torcuato Antonio Collado y queda S.M. enterada de que no resulta motivo para tenerlo por sospechoso en las actuales circunstancias, sin que estos procedimientos puedan perjudicar su buena opinión, como lo ha declarado el Tribunal en su sentencia de 23 de noviembre próximo que obra en el expediente original que devuelvo adjunto.

Y teniendo S.M. en consideración la honrosa renuncia que Collado hizo de la plaza del Consejo que le confirió el Duque de Berg, protestando voluntariamente, invalidó su nombramiento, y las circunstancias apuradas que no le dieron lugar para haberlo realizado con más antelación cuando ejecutó la del destino de Superintendente General de Policía que le fue provisto a un mismo tiempo; y teniendo también presente S.M. que cuando la capital estuvo por primera vez dominada por el enemigo acreditó Collado sus sentimientos de fidelidad a la justa causa, sosteniendo, los días que asistió al Consejo, las opiniones patrióticas, oponiéndose a las injustas pretensiones del Gobierno intruso, se ha servido S.M., en nombre del Rey don Fernando VII, que se conserve al enunciado don Torcuato Antonio Collado su plaza de Teniente primero de Corregidor de la Villa y Corte de Madrid, para cuyo destino fue nombrado por el Sr. Rey don Carlos IV". Podemos añadir que Collado huyó a Baza, a una casa de campo situada a una legua de distancia de esta Ciudad. Allí fue mal recibido por algunos paisanos, que dudaron de su patriotismo. Ante el mal trato de sus paisanos decidió trasladarse a Sevilla y unirse al Gobierno legítimo (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.991 núm. 9).

Consejeros, "según los destinos que se les asignan"^{****}. Finalmente en el texto constitucional definitivo no se fijaba el número de Ministros que habían de componer el Supremo Tribunal.

Tras la supresión del Consejo de Castilla por Napoleón, fue creado un Consejo Supremo de España e Indias, que contaba con 20 Ministros y dos Fiscales^{****}. Poco después, tras la creación del Tribunal Supremo en virtud de lo dispuesto en el nuevo texto constitucional, este supremo organismo de la administración de justicia contaba con 17 magistrados^{****}.

En 1814, fecha de restablecimiento del Consejo, había en el Supremo Tribunal 23 Ministros, nombrados por Fernando VII el 11 de noviembre de aquel año^{****}. Este número se mantuvo oscilante entre los 22 y los 25 miembros hasta el llamado Trienio Constitucional^{****}.

^{****}. "No se determina el número de Consejeros de Castilla, que convendría que no baje de 36, según los destinos que se les asignan" (Propuesta de don Luis Meléndez de Bruna al artículo 96 de la Constitución de Bayona, "Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1.808", Madrid, 1.874, pág. 81).

^{****}. Guía de Forasteros del año 1.812, págs. 123 a 129.

^{****}. Guía de Forasteros del año 1.813, págs. 175 a 177.

^{****}. FAYARD, J., "Los miembros del Consejo de Castilla", pág. 12; A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46: este expediente nos facilita la lista de Ministros entonces designados: don Gonzalo José Vilches, don José Joaquín Colón, don Manuel de Lardizábal, don Antonio Villanueva, don Bernardo de Riega, el Conde del Pinar, don José María Puig, don Sebastián de Torres, don Domingo Fernández de Campomanes, don Andrés Lasauca, don Antonio Alvarez Contreras, don Ignacio Antonio de Cortabarría, don Ignacio Martínez de Villela, don Francisco Arjona, don Miguel Alfonso Villagómez, don Juan Antonio Carrillo, don Tomás Moyano, don Juan Antonio Inguanzo, don Benito Arias de Prada, don Jerónimo Díez, don Nicolás María Sierra, don José Antonio Larrumbide, don Luis Meléndez Bruna. Vid. entre otras fuentes Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 6 y Guía de Forasteros de 1815.

^{****}. En 1.815 eran 22 los Consejeros de Castilla (Guía de Forasteros de 1.815, págs. 71 a 73); en 1.816 eran 25 (B. Senado, Guía de Forasteros de 1.816, págs. 73 a 75); en 1.817 eran 25 (Guía de Forasteros de 1.817, págs. 78 a 78); en 1.818 eran 24/25 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 expte. núm. 11, "Presupuesto General de los Sueldos y Gastos del Consejo Real"; Guía de Forasteros de 1.818, págs. 79 a 83); en 1.819 eran también 25 los Consejeros de Castilla

En el Trienio quedó constituido el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados quedaron cifrados en unos 20 -18 en 1.821^{***} y 20 en 1.822^{***}.-.

En el periodo 1820-1823 fallecieron seis Ministros del Consejo, uno de los cuales, don Pedro de la Puente^{***}, había jurado su plaza el 3 de enero de 1820. Por otro lado, el 27 de noviembre de 1823 era publicado el Real Decreto para que se economizara el número de empleados y el de sueldos de los empleados en todos los ramos del Estado, cuyo informe consiguiente en el Consejo supondría una limitación del número de sus Consejeros^{***}.

En los años siguientes al restablecimiento del Consejo en 1.823 varió mucho el número de los Consejeros^{***}. En 1.824 fueron jubilados de golpe dos

(A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.085, consulta del 9 de diciembre de 1.818; Guía de Forasteros de 1.819, págs. 79 a 81); finalmente en 1.820 eran 23 los miembros del Consejo (Guía de Forasteros de 1.820, págs. 51 y 52).

^{***}. Guía de Forasteros de 1.821, págs. 51 y 52.

^{***}. Guía de Forasteros de 1.822, págs. 53 y 54.

^{***}. A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

^{***}. A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.781 núm. 11. Fue informada por el Fiscal en providencia de 16 de mayo y comunicada por Real Orden al Juez de Ministros en fecha de 18 de mayo. La consecuencia inmediata fue un fabuloso informe en 75 folios sobre empleados del Consejo y propuesta de remodelación de la estructura orgánica del Consejo.

^{***}. En la llamada Década Ominosa se redujo sensiblemente el número de los Ministros del Consejo. Fueron respectivamente, contabilizamos para ello los datos referidos al principio de cada año, según las Guías de Forasteros, los siguientes: 15 Consejeros en 1.924 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608 núm. 48); 16 en 1.825 (Guía de Forasteros de 1.825, págs. 79 y 80); 16 en 1.826 (Guía de Forasteros de 1.826, págs. 80 y 81); 20 en 1.827 (Guía de Forasteros de 1.827, págs. 82 y 83); 19 en 1.828 (Guía de Forasteros de 1.828, págs. 82 a 84); 20 en 1.829 (Guía de Forasteros de 1.829, págs. 82 a 84); 18 en 1.830 (Guía de Forasteros de 1.830, págs. 84 y 85); 19 en 1.831 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6; también en la Guía de Forasteros de aquel año, págs. 85 a 87, que se puede consultar en las Bibliotecas de la Real Academia de la Historia y del Senado); 19 en 1.832 (Guía de Forasteros de 1.832, págs. 85 a 87); 22 Consejeros en 1.833, y finalmente otros 22 en el año 1.834, último año de existencia del Supremo Tribunal (Guía de Forasteros de 1.834, págs. 128 y

tercios de los Consejeros de Castilla¹⁰⁰⁰. En 1826 comenzó el Consejo con 16 magistrados y unos meses después eran ya 21 los Ministros en activo del Consejo de Castilla¹⁰⁰¹. Más adelante, por el Real Decreto de 28 de abril de 1828 se fijó el número ordinario de Consejeros en 20, que parece fue el que más o menos se trató de mantener hasta el fin del reinado¹⁰⁰². En ese mismo año de 1.828 quedaban en ejercicio 19 Consejeros, incluidos dos que servían respectivamente el Gobierno de la Sala de Alcaldes y la Asistencia de Sevilla¹⁰⁰³.

Aparte de los Ministros efectivos o numerarios del Consejo, podían existir también Ministros jubilados¹⁰⁰⁴, Ministros supernumerarios y Ministros honorarios.

129).

¹⁰⁰⁰. Entre ellos los Ministros don Bernardo Riega, decano del Consejo; don José María Puig de Samper, don Juan Antonio González Carrillo, don Manuel de Torres-Cónsul, don Ramón López Pelegrín, don José Montemayor, don Francisco Javier Adell, don Alejandro Dolarea y don José Ignacio Llorens (Guía de Forasteros del año 1.826, pág. 81). Vid. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

¹⁰⁰¹. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

¹⁰⁰². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

¹⁰⁰³. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.695, núm. 6.

¹⁰⁰⁴. Veremos la jubilación de los Consejeros en el subcapítulo titulado "Remoción y jubilación".

b) Ministros supernumerarios

Según el Diccionario de la Real Academia Española, supernumerario en sentido objetivo significa "que excede o está fuera del número establecido". Sustancialmente podría ser por tanto un Consejero que trabajaba en el Consejo sin figurar en plantilla. Fayard lo define como un Consejero nombrado aparte de los normalmente previstos por la ley. La razón de su existencia radicaba en una falta de efectivos, añadido ello a la indisponibilidad de algunos de los miembros.

Su fórmula de nombramiento era idéntica a la de los numerarios, con una pequeña diferencia: en vez de decirse "seáis de nuestro Consejo mandamos", era reemplazado por "seáis de nuestro Consejo en plaza supernumeraria con que en su lugar se consuma la primera que vacare, mandamos". Apunta Fayard que de esta fórmula se desprende que un Consejero supernumerario tenía derecho a cubrir la primera vacante que se diera en el Consejo¹⁰⁹⁹. Así rigió también con otros empleados supernumerarios subalternos del Consejo bajo Fernando VII.

Debió haber pocos Ministros supernumerarios en el reinado de Fernando VII. Entre la documentación consultada solo hemos encontrado una referencia a uno de ellos, que por otra parte pudo ser el único del periodo. Nos referimos a don Nicolás María Gareli, nombrado al parecer Ministro supernumerario del Consejo en el año 1.833¹¹⁰⁰ y que debió continuar siendo hasta la definitiva supresión del Consejo de Castilla en 1.834.

Un Consejero supernumerario desempeñaba el mismo trabajo, horario, protocolo, etc., que los numerarios. Parece que su sueldo era bajo Fernando VII también idéntico al de los Consejeros efectivos, y estaban también sometidos al pago de la media anata.

¹⁰⁹⁹. FAYARD, J., "Les membres du Conseil...", págs. 24 y 98.

¹¹⁰⁰. Guía de Forasteros del año 1.834, pág. 128.

c) Ministros honorarios^{***}

Por especial concesión regia, un particular podía obtener el importante honor de ser considerado Ministro honorario del Consejo, con todas las prerrogativas y dignidades que tal consideración comportaba. Su número evidentemente no era fijo, sino que dependía de las circunstancias. Así, en 1804, por ejemplo, sabemos que había 8 Ministros honorarios en el Consejo de Castilla^{****}; en 1.815 eran cuatro^{****}; diez en 1.816^{****}; trece en 1.817^{****}; catorce en 1.818^{****}; once en 1.819^{****}; diez

^{****}. Esta categoría aparece desarrollada dentro del subcapítulo "Privilegios y honores".

^{****}. Guía de Forasteros de 1804.

^{****}. Don José Pérez Caballero, Ministro del Consejo de Hacienda; don José Ibarra, también Ministro del Consejo de Hacienda; don Joaquín Palacín, ex-Decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura; don Pedro María Ric, barón de Valdeolivos, Regente de la Real Audiencia de Aragón. (Guía de Forasteros de 1.815, pág. 73).

^{****}. Don José Pérez Caballero, don Joaquín Palacio, don Francisco Valle Roldán, don Pedro María Ric; don Fernando Melgarejo de los Cameros, Regente jubilado del Consejo Real de Navarra, don Cristóbal Bencomo, confesor de S.M.; don José María Despujol, canónigo mayor de las Descalzas Reales; don Miguel de Oliván, Auditor General de la Real Capilla y del Vicariato de los Reales Ejércitos; don Martín José de Ceverio, Receptor de la Real Capilla; don Francisco Javier de Olea y Carrasco, Regente de la Audiencia de Barcelona. (Guía de Forasteros de 1.816, págs. 75 y 76).

^{****}. Don José Pérez Caballero, don Joaquín Palacín; don Francisco Valle Roldán; don Pedro María Ric; don Cristóbal Bencomo; don José María Despujol; don Miguel de Oliván; don Martín José de Ceverio; don Francisco Javier de Olea y Carrasco, don Joaquín Antonio de rada; don Andrés García Fernández, Arcediano de Vivero en la catedral de Mondoñedo; don Antonio María Izquierdo, conventual de Justicia en la Orden de San Juan y Secretario de Cámara de S.A.R. el Sermo. Sr. Infante don Carlos; don Pedro de la Puente, corregidor

en 1.820""; tras el Trienio Constitucional se reduce sensiblemente el número de estos Ministros honorarios. Hasta el punto que hasta 1.833 eran tan sólo dos los agraciados con este privilegio""; finalmente en 1.834, último año del Consejo de Castilla, el número de Consejeros de Castilla honorarios se elevó a cuatro"".

Cuando se quería compensar los servicios prestados por cualquier súbdito, era frecuente recurrir a la gracia de nombrarle Consejero honorario de Castilla. Este puesto no llevaba aparejada ninguna retribución y a la vez era compatible con cualquier otra plaza oficial. No suponía al privilegiado un derecho especial a plaza de Consejero numerario en el Consejo.

Finalmente parece que existió también una figura denominada "Ministro adjunto al Consejo de Castilla", que no sería propiamente un Consejero de este Supremo Tribunal sino un oficial público cualificado adscrito al Consejo para una determinada causa o misión"".

político de Lorca y juez administrador de la Real Empresa de los Pantanos (Guía de Forasteros de 1.817, págs. 78 y 79).

"". A la lista de 1.817 se incorporaron don Felipe Gil Taboada, Fiscal jubilado del Real Consejo de las Ordenes; y don Tadeo Soler, alcalde decano de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte; y dejó de serlo don Joaquín Antonio de Rada (Guía de Forasteros de 1.818, págs. 81 y 82).

"". En el año anterior no fue nombrado ningún Ministro honorario nuevo y fallecieron los Sres. don Joaquín Palacín y don Francisco Valle Roldán, y fue ascendido a Consejero de Castilla efectivo don Tadeo Soler (Guía de Forasteros del año 1.819, pág. 82).

"". Fallecieron don José de Ceverio y don Pedro de la Puente; se incorporó a esta categoría don Vicente Ruiz Albillos, Auditor de la Rota de la Nunciatura Apostólica (Guía de Forasteros de 1.820, págs. 83 y 84).

"". Don José María Despujols y don Clemente Barbajero (Guías de Forasteros de los años 1.828, 1.829 y 1.830); en 1.833 eran don Clemente Barbajero y don Antonio Villagrasa (Guía de Forasteros de 1.833, pág. 89).

"". Don Clemente Barbajero, don Antonio Villagrasa, don José Muñoz Maldonado, don Nicolás Gómez Villaboa, este último Regente de la Audiencia de Valencia (Guía de Forasteros de 1.834, pág. 130).

"". A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.275 núm 29: En un expediente que consta estaba en el Consejo a finales de agosto de 1816 y que pasó a manos de los Fiscales el 30 de abril de aquel año, encontramos el siguiente título:

3. Juramento y toma de posesión

"Está prevenido y mandado que a los Señores Ministros del Consejo, antes de entrar a ejercer sus plazas, se les reciba el juramento acostumbrado, el que hacen en Consejo pleno, en manos del Escribano de Cámara de Gobierno"".

Expedida la Real Cédula, que servía de título, el Ministro que debía prestar juramento, acompañado de otro Consejero que hacía las veces de padrino, debía visitar en sus casas a los demás Consejeros, dejando una tarjeta con membrete en la que pedía la venia para prestar juramento. También hacía visita de ceremonia al Escribano de Cámara de Gobierno y le entregaba la Real Cédula.

La recepción de un nuevo magistrado tenía lugar con una extrema solemnidad. El espíritu formalista del Consejo se revelaba en todos y cada uno de los detalles de la ceremonia"", que con cuidadoso detalle describía Martínez de Salazar"":

"El día del Juramento, antes que se forme el Consejo, el señor Ministro que

"Expediente en virtud de Real Orden sobre nombrar ministros adjuntos al Consejo de Castilla para determinar la causa del Sr. Acuña".

⁷¹⁰⁴. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 83. Ya hemos visto anteriormente que del juramento y toma de posesión del nuevo Consejero de Castilla se levantaba acta en un libro especial que custodiaba el Escribano de Gobierno del Consejo. En este libro se registraban también los fallecimientos de Consejeros y probablemente de aquellos que eran separados del cargo (cfr. auto acordado del Consejo de 11 de abril de 1.785, núm. 2.840 de la Colección de Reales Cédulas del A.H.N. de Madrid).

⁷¹⁰⁵. DESDEVISES DU DEZERT, C., "Le Conseil de Castille en 1808", pág. 68.

⁷¹⁰⁶. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 83 y ss.

ha de jurar, sin capa y con gorra, entra en la Sala segunda de Gobierno, donde se mantiene con los demás señores Ministros hasta que llega el señor Gobernador y se forma el Consejo pleno, como diariamente se hace; y concluido el despacho de semanería, el Escribano de Cámara de Gobierno, a presencia de todos los subalternos del Consejo, y a puerta abierta, hace esta expresión: "El Señor Don N., a quien S.M. ha concedido plaza de Ministro, se halla en el Consejo para jurar". Y el Señor Gobernador, o Ministro que preside, le manda entrar a presencia del Consejo, haciendo señal con la campanilla; e incontinenti el portero, que se nombra de estrados, conduce al señor Ministro desde la Sala segunda (donde se mantiene solo), a la primera, donde ha de hacer el juramento; y después de una profunda reverencia, estando en pie fuera del estrado y a la mano derecha del Escribano de Cámara de Gobierno, por éste se lee la Real Cédula y después el señor Gobernador, o el que preside, hace señal con la campanilla y el señor Ministro que jura se restituye otra vez a la Sala segunda, y el Escribano de Cámara sube al estrado, entrega la Cédula al señor Gobernador, o al que preside, quien la recibe, besa y pone sobre su cabeza; y a este acto todos los Señores Ministros están en pie y después que se sientan se hace señal con la campanilla, y el portero conduce otra vez al señor Ministro a presencia del Consejo; y estando en la misma postura, que al tiempo de leerse la Cédula, por el Escribano de Cámara se le recibe el juramento, dándole el tratamiento de Vos; y concluido este acto, el señor Ministro sube al estrado a ocupar el puesto que le corresponde"".

""". También Moriana en sus escritos se refirió a esta ceremonia en los siguientes términos: "Todos los ministros superiores y ynferiores, así de ropa como de vara o en otra manera, que están devajo de la obediencia del Conssejo, que requieren sus ejercicios para usarlos que se les tome juramento, an de venir a jurar a él a la sala de govierno, a donde asiste el señor presidente, a quien tienen obligación las personas o ministros que juran de ir a pedir licencia y señores del govierno. Este juramento tiene obligación de tomar el escribano de cámara más antiguo de el Conssejo, que

De la ceremonia de juramento y toma de posesión se levantaba acta en un Libro, del que también se sacaban las certificaciones solicitadas por los Ministros del Consejo"".

Las palabras que pronunciaba en el acto de investidura eran éstas:

"JURAI A DIOS y a esta señal de Cruz, y a las palabras de los Santos Cuatro Evangelios que como buen y católico cristiano, usaréis bien y fielmente de este cargo (siempre que entréis en el Ministerio) que os es encomendado, y guardaréis el servicio de Dios y de S.M. y bien del Reino, y donde quiera viereis su servicio, lo expondréis y allegaréis, y dondequiera que viereis lo contrario, lo estorbaréis, y se lo haréis saber por vuestra persona si pudierdes, y si no por vuestras cartas y mensajeros, y guardaréis el secreto del Consejo y las leyes y ordenanzas del Reino, y que diréis y daréis vuestro voto libremente y que por ningún respeto no dejaréis de decir lo que en Dios y en vuestra conciencia os pareciere que conviene al servicio de Dios y del Rey y bien del Reino, y en todo haréis y cumpliréis lo que bueno y fiel Consejero debe y es obligado a hacer.

Responda: SI JURO.

le toca por razón de su oficio, y en lo razonado de el juramento siempre a de tratar de bos al ministro o persona que jura, aunque sea para consejero de el mismo Conssejo, o título de marqués o conde para asistente, o corregidor u otro oficio; si fuere ministro de ropa, para conssejero o alcalde de corte o fiscalía. En acavando de leer el escribano de cámara la caveza de el título hasta donde dice el nombre de tal persona y en cuyo lugar entra y la fecha, le sube al señor presidente para que le obedezca, que descubierta la caveza le toma en la mano y pone sobre ella. Y en tal intermedio el tal ministro de ropa que ba a jurar se a de salir de la sala, porque comunica el señor presidente con el Conssejo si a de ser admitido, y diciendo que sí, buelbe y jura, y si es para el Conssejo sube a los estrados y se sienta en el lugar que le toca, haciéndole cortesía el señor presidente..." (MORIANA, J. de, op. cit., en "Fuentes...", op. cit., pág. 286).

""". Como ejemplo podemos citar al Consejero don Francisco Marín, que solicitaba en 1.817 certificación de ser Ministro del Consejo. El Escribano de Cámara de Gobierno, tras haberlo aprobado la Sala primera, expidió la correspondiente certificación. Don Francisco Marín había jurado y tomado posesión de su puesto el 27 de agosto de 1814. En aquella ocasión presentó un título que llevaba fecha de 15 de agosto (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.034, expediente núm. 20).

Si así lo hicieredes, Dios os ayude y si no os lo demande, como aquél que jura su santo nombre en vano.

Responda: AMEN"".

Los Ministros honorarios del Consejo juraban también en la misma ceremonia, si bien no gozaban su antigüedad desde el día del Juramento, como los numerarios, salvo expresa orden de S.M. En la práctica, todo Consejero recién nombrado estaba interesado en jurar lo antes posible, ya que sólo empezaba a cobrar sus emolumentos después de la fecha de su juramento"". En el caso de los Ministros honorarios, aunque habitualmente debían jurar en el Consejo, excepcionalmente se les podía permitir jurar ante otra autoridad si les era imposible pasar a la Corte a jurar"".

Normalmente, como ya se vio, un nuevo Consejero de Castilla provenía de otro cargo de la Administración del Estado y hubiere prestado juramento al posesionarse de esas plazas, no se encontraban por ello eximidos de ratificar de nuevo el juramento de fidelidad y guardar secreto de las deliberaciones del Consejo.

Sin embargo, si un Fiscal del Consejo era designado para la plaza de Ministro, no se le exigía volver a prestar el juramento que en su momento hizo. Y por el contrario, cuando el Rey nombraba a alguno de los Ministros del Consejo por Asistente de Sevilla u otro empleo que requiriera juramento, sí debían prestarlo nuevamente aunque hubiesen jurado su plaza en el Consejo.

Quando un Ministro tomaba posesión de su empleo en el trascurso del año, y ya se había efectuado el reparto de los Ministros por Salas, se les destinaba provisionalmente a la Sala primera de Gobierno, donde por lo regular cubrían las vacantes de asistencia de los ministros que se ausentaban en cualquiera de las otras Salas"".

"" A.H.N., Expedientes Reservados, leg. X/32.

"" FAYARD, J., "Les membres du Conseil...", pág. 103.

"" Esto ocurrió, por ejemplo, con don Pedro de la Puente, Corregidor de Lorca en 1817. Por Real Cédula le fue permitido jurar ante el obispo de Cartagena, de lo que se dio cuenta al Consejo. Su juramento fue anotado por el Escribano de Gobierno en el Libro de Juramentos del Consejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, legajo 4.034, expediente núm. 52).

"" Ley XXI, Título III, Libro IV, Novísima Recopilación.

4. Competencias

"Los Consejeros escuchaban la lectura de los informes que les eran sometidos y votaban sobre el fondo del proceso. Estaban repartidos por el Presidente entre las diferentes Salas del Consejo. Pero esta repartición no tenía nada de inamovible: el Presidente podía hacer pasar un Consejero de una Sala a otra, o separar Consejeros de una Sala para formar el número de magistrados necesario en otra Sala. Los más graves asuntos eran juzgados en sesión solemne, con todas las Salas reunidas. Los arzobispos, obispos, duques y condes eran miembros natos del Consejo, pero no tenían derecho a aparecer más que para asistir al juicio de sus propios procesos. Debían abandonar la Sala cuando el Consejo pasase al examen de un asunto en donde no estuvieran muy interesados"".

La primera misión que estaba encomendada a un Consejero de Castilla era la de asistir a las sesiones de su Sala o del Consejo pleno, estudiar los asuntos debatidos y emitir su voto.

Previamente, a principio de cada año, por un Real Decreto se establecía la distribución de los Consejeros entre las Salas, así como los cargos de Presidente de la Sala de Alcaldes, Juez de Ministros y Alcaldes de la Sala. Por un auto de 19 de noviembre de 1769 se facultó al Presidente del Consejo para destinar a los nuevos Ministros que entrasen en el Consejo en la Sala donde hubiera vacantes o a la de Gobierno"". En todo caso, el Presidente estaba facultado para trasladar a un Consejero de Sala para cubrir una vacante por enfermedad o defunción.

Los Ministros del Consejo concurrían al mismo todos los días, con excepción de los festivos y algunas fechas especiales. El calendario venía fijado por una

"" DESDEVISES DU DEZERT, G. "Institutions", pág. 75.

"" CORDERO TORRES, "El Consejo de Estado", pág. 59.

antigua ley recogida en la Novísima Recopilación""; por las mañanas, desde principios de octubre hasta finales de marzo, el horario era de ocho a once horas. Y desde principios de abril hasta finales de septiembre, de siete a diez horas. Por las tardes, parece que había sesiones de trabajo todos los días, hasta las 8 de la tarde"". Los Consejeros estaban por tanto sometidos a un horario de trabajo estricto, que variaba con la época del año y dependiendo también de las circunstancias climatológicas.

Junto a la asistencia y votación a los asuntos y pleitos planteados en el Consejo pleno o en las distintas Salas, los Consejeros participaban también en otros cometidos, juzgados, comisiones, etc., y se les asignaba muy diversos encargos.

Finalmente, participaban junto con los demás Consejeros de Castilla en las distintas ceremonias públicas del Consejo, e igualmente preparaban consultas y dictámenes para el Monarca, participaban en la aprobación de las diversas disposiciones de gobierno y en general ejercían preferentemente las facultades y prerrogativas del Consejo de Castilla"". Entre las ceremonias a las que asistía junto con los demás miembros del Consejo, son de destacar las consultas de los viernes"" y las visitas generales de las cárceles de Corte y Villa. Junto a ello, participaban habitualmente en un cierto número de comisiones especiales y en los llamados "encargos extraordinarios".

Un parte importante del trabajo de los Consejeros de Castilla se empleaba en las llamadas comisiones, a las que se refirió en su momento Desdeseis"".

"". Ley VII, Título II, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"". Vid. COMPETENCIAS: Funcionamiento del Consejo.

"". Vid. COMPETENCIAS: Funcionamiento del Consejo.

"". Por riguroso turno, cada semana había un Ministro consultante que presentaba los asuntos al Monarca. "Previamente a la reunión vespertina de los viernes con el Monarca, el Consejo pleno celebraba una sesión matutina en la que se acordaban los asuntos a ver por la tarde, sirviendo también para seguir la marcha de los procesos que se encontraban introducidos en las distintas Salas y pedir explicaciones, en su caso, a los oficiales culpables de omisiones o dilaciones" (BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", op. cit., pág. 177).

"". DESDEISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 75: "Algunos Consejeros estaban encargados de cometidos especiales que daban relevancia a aquéllos que los ejercían."

El Presidente o Gobernador proponía al Rey una terna de Consejeros para que se encargasen de cada una de las comisiones especiales, y el Monarca designaba al que consideraba más adecuado. Los beneficios económicos que reportaban estas comisiones eran normalmente sustanciosos. Por ello, había auténticas pugnas entre los Ministros a la hora de adjudicarse las mismas. La adjudicación a los Consejeros de Castilla era realizada anualmente por el propio Monarca.

Para impedir que estas comisiones fuesen objeto de intrigas, el Rey se había reservado el nombramiento de los jueces-comisarios. El Presidente de Castilla le enviaba una lista de tres nombres, entre los cuales elegía uno. Se aseguraba también que el comisionado nombrado por él no se ocupase de ningún otro asunto.

No contando más que las comisiones permanentes, se queda uno asustado de las cargas que pesaban sobre los treinta Consejeros de Castilla. Uno de ellos presidía la Sala de Alcaldes; otros dos estaban delegados en el Consejo de las Ordenes; otros dos formaban una especie de tribunal de conflictos (Jueces de Competencias); otro era inspector general de las personas de justicia empleadas por el Consejo y los tribunales de Madrid (Juez de Ministros); cada año enviaba al Rey un informe sobre su conducta. Para ser igualmente informado sobre los magistrados provinciales, el rey había dividido España en siete circunscripciones, a cada una de las cuales había asignado un Consejero de Castilla. Este magistrado mantenía correspondencia con todas las autoridades de las provincias que correspondían a su Superintendencia. Se informaba con discreción de la conducta de los intendentes, corregidores y alcaldes. Las autoridades eclesiásticas tenían para ellos una oficina de información. Como este repugnante espionaje exigía tanto trabajo para estar al día, los Consejeros actuaban de ordinario con negligencia en esta parte de sus funciones. De los 30 Consejeros, un número menor a 13 llevaban cada año comisiones tan difíciles que hubieran bastado para tenerles completamente ocupados. Si añadimos a esas grandes comisiones el control y la vigilancia de numerosos comités, establecimientos o fundaciones pías, y se comprenderá que el magistrado castellano no podía soportar la aplastante atención que se le exigía". Los autos acordados de 1 de octubre de 1784 y de 23 de enero de 1785 regularon la forma y destino de los despachos. Por los de 26 de febrero y 16 de junio de 1767 a los Ministros de la Sala de Gobierno, como Superintendentes de los pueblos, se les facultó para mantener correspondencia con los corregidores e instruir expedientes, dando cuenta luego al Consejo.

Entre las Comisiones Especiales o permanentes cabe mencionar las siguientes:

1. Ministros Superintendentes de Partidos y Provincias del Reino"".

Esta comisión se encomendaba a los once Ministros de la Sala primera de Gobierno del Consejo. Su finalidad era la de fiscalizar la actuación de Corregidores, Justicias y otras autoridades, y la administración de propios y arbitrios y otros bienes de las provincias. Para ello debían mantener una correspondencia con los Corregidores y autoridades territoriales.

Estos Ministros Superintendentes de los Partidos podían recibir representaciones o instancias de autoridades o particulares. Cualquier persona o pueblo podía denunciar ante el Consejo las irregularidades, excesos o perjuicios causados por la actuación de los poderes públicos locales"".

Por auto acordado del Consejo de 16 de junio de 1767 y ratificado por resolución de don Carlos IV de 18 de diciembre de 1804, se le dio la facultad para instruir por medio de sus órdenes los expedientes, y después dar cuenta de ello al Consejo"".

Sabemos que durante los días de la Guerra de la Independencia el Consejo de Castilla establecido en Cádiz acordó distribuir las provincias libres entre los Ministros de las Salas primera y segunda de Gobierno"".

"".. Título XV, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"".. Por ejemplo, la del A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.007 núm. 42: el Ministro don Ignacio Cortabarría remite la exposición que le han hecho los vecinos de Palo (Málaga), sobre que se les conceda término para sus edificios y ganados.

"".. Ley V, Título XV, Libro IV, Novísima Recopilación.

"".. En la resolución se establecía que se encargasen de mantener la "correspondencia con los corregidores y demás autoridades, para conciliar la pública tranquilidad y atender a las necesidades urgentes". (A.H.N., Consejos, Consejo

2. Juez Visitador de Subalternos del Consejo
o Juez de Ministros.

Anualmente, en la designación de los Ministros para cada una de las Salas del Consejo, se nombraba un Juez de Ministros. Su misión era investigar si los pleitos, expedientes y papeles de las Escribanías de Cámara y oficios de número y provincia se hallaban metidos en legajos, matriculados, bien colocados y preservados de incendios, humedad y otras contingencias; si los libros de conocimiento de los Relatores, Agentes Fiscales y Procuradores estaban coordinados en el papel correspondiente y firmados los recibos;; si tenían libros separados, uno para anotar las condenaciones y penas de Cámara, otro para registrar las Reales Cédulas, Títulos y Consultas; y otro para llevar cuenta de los emolumentos que producían las Escribanías de Cámara, a fin de dar una relación anual al Consejo de ello. Comprobaban también que las sentencias originales de los pleitos estaban en custodia y con separación, y que estaba puesta una copia certificada en los pleitos que las produjeron"".

Este Ministro había de comprobar igualmente la conducta de los subalternos del Consejo: si habían causado algún perjuicio a los litigantes por negligencia u omisión, y si cobran los aranceles establecidos y no más. Y en general, si los subalternos del Consejo cumplían con lo establecido en las leyes del Reino y con sus obligaciones"".

Un ejemplo lo tenemos en las visitas que el Juez de Ministros efectuaba a las Escribanías de Cámara del Consejo. Comprobaba el cumplimiento de las Reales resoluciones sobre el servicio de las escribanías, el pago de salarios y de los arrendamientos del local, pensiones a los propietarios -cuando los oficios se encontraban

reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.006, expediente núm. 20).

"".. Título XVII, Libro IV, Novísima Recopilación.

"".. Así, por ejemplo, el 3 de abril de 1830 el Consejo designó al Juez de Ministros del Consejo para realizar la visita a las Escribanías de Cámara, según lo establecido en la Instrucción de 3 de julio de 1827. Una vez realizada la visita debía dar cuenta de ello a la Real Hacienda (A.H.N, Consejos, Gobierno, legajo 3.930 núm. 6).

enajenados de la Corona-, forma de proveer los tenientazgos, nombramiento de oficiales y escribientes, etc.""'. Una Real orden de abril de 1.830 establecía que estas visitas a las Escribanías de Cámara se efectuasen al menos de tres en tres meses""'.

Ante la noticia de una infracción de este tipo, el Juez Visitador estudiaba el caso y tenía potestad sancionatoria. Para tener su conocimiento, anunciaba mediante edicto público la realización de la correspondiente visita, para que los perjudicados pudieran presentar sus alegaciones.

Con sus investigaciones elaboraba un auto que presentaba en el Consejo pleno, para su resolución definitiva""'.

3. Ministro Presidente del Honrado Concejo de la Mesta

Cada dos años y siguiendo el criterio de antigüedad era designado uno de los Ministros de Castilla como Presidente de la Mesta. Dos veces al año había una reunión del Concejo, presidida por este Ministro. Entre sus cometidos estaba el de nombrar al Fiscal del Concejo y a otros oficiales, y velar por los fines propios de esta institución""'.

Del papel de este Ministro nos habla así Desdevises:

"El honorable Concejo de la Mesta, presidido por un Consejero de Castilla... juzgaba en primera instancia, con apelación al Consejo de Castilla, todos los asuntos relacionados con la Mesta. Esta poderosa asociación de propietarios de ganados había perdido muchos de sus antiguos privilegios y la presencia de un Consejero de Castilla en su

""'. Dos ejemplos los tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.456 núm. 59 y 3.930 núm. 6.

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.930 núm. 6.

""'. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 218 y ss.

""'. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 221 y ss.

gran Consejo era como una marca de su dependencia"".

4. Ministro Superintendente General de Imprentas o Juez de Imprentas

Cuidaba de velar por la pureza doctrinal de los libros y obras que se imprimieran en España, así como la de aquéllos que fueran introducidos en esos reinos. Debía cuidar por tanto del fiel cumplimiento de la normativo entonces vigente sobre el tema. Despachaba las licencias de impresión de libros, de venta o de importación; igualmente imponía las correspondientes sanciones por infracción. Todas las publicaciones requerían un previo examen y el pago de unas tasas, para poder obtener la correspondiente licencia de impresión"".

Era nombrado por el Presidente o Gobernador del Consejo"". Se le despachaba Real Cédula por la Cámara y no tenía asignación alguna de sueldo, ayuda de costa u otro emolumento. Subdelegaba su comisión en Jueces particulares en todas las capitales de provincia y en lugares y villas de mayor importancia. Igualmente tenía facultad para nombrar un Escribano, que despachaba los asuntos y causas que le correspondían. Sus autos y providencias y los de los jueces particulares podían ser apelados en la Sala segunda de Gobierno del Consejo"".

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 147.

"" En A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990 núm.8, se contiene un curioso expediente de un error en el otorgamiento de la licencia de impresión por parte del Juez de Imprentas, don Manuel de Lardizábal. Consecuencia de ello fue la publicación en plena Guerra (6 de abril de 1810) de una proclama atribuida a los franceses para la Serranía de Ronda, en la que se incitaba a los españoles a deponer las armas y colaborar con los franceses.

"" Por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.324 núm. 37 se contiene el nombramiento para este Juzgado de don Francisco Marín.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 237 y ss.

5. Ministro Consultor en la provisión de Cátedras de Universidades

El auto X, Título VII, Libro I de la Nueva Recopilación establecía que las Cátedras de Universidad fuesen proveídas por el Consejo.

Este Ministro preparaba las consultas que se hacían al Consejo pleno en materia de provisión de cátedras, e informaba de las resoluciones del Consejo pleno a las Universidades correspondientes y a los elegidos^{***}.

6. Jueces de Competencias

La resolución de las competencias entre el Consejo Real, el de Hacienda y demás Tribunales de la Corte estaban confiadas a dos Ministros del Consejo Real, nombrados por su Presidente, para que junto con otros dos Ministros las resolviesen. Había reglas específicas según los Tribunales que intervinieran en la competencia. En todo caso, quedaban excluidas de sus cometidos las competencias que se producían entre los Tribunales ordinarios y los jueces de comisión, o entre los Tribunales y los mismos comisionados, pues éstas se recurrían en la Sala de Justicia.

Para ver las competencias entre el Consejo Real y los demás Tribunales de la Corte se reunían los Ministros en una de las Salas del Consejo, una vez concluida la hora de Audiencia^{***}.

***. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 272 y ss. Ejemplos de expedientes sobre provisión de cátedras aparecen muchos en la documentación del Consejo. Podemos citar el legajo 12.001, expte. núm. 59, sobre exclusión de candidaturas en la Universidad de Valencia para provisión de catedráticos (27 de julio de 1811; A.H.N., Consejos Suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz).

***. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 275 y ss.

7. Jueces de Comisiones del Consejo de Ordenes

Existía una Junta de comisiones, compuesta de dos Ministros del Consejo de Castilla y otros dos del de Ordenes, para conocer de los recursos que se interponían en grado de súplica ante el Rey, en lo referente a la jurisdicción real. La razón era que la jurisdicción del Consejo de Ordenes se limitaba a las materias eclesiásticas y temporales de las Ordenes Militares, pasando las causas civiles de los caballeros de las Ordenes militares, así como las criminales, a la jurisdicción ordinaria, representada por el Consejo de Castilla, las Chancillerías y demás Tribunales^{***}.

Quizás podríamos identificar este cargo con la Real y Suprema Junta Patrimonial de Apelaciones de los Juzgados de la Real Casa, Capilla, Cámara, Caballeriza y demás del Real Patrimonio^{****}.

A principio de cada año nombraba el Rey los cuatro ministros, que componían la Junta. Los dos de Castilla eran habitualmente caballeros de hábito de alguna de las Ordenes Militares.

Los miembros del Consejo participaban también en Juntas formadas por miembros de distintos Consejos. Veamos a continuación algunos ejemplos significativos.

8. Jueces de la Junta Apostólica

Esta Junta estaba formada por cuatro Ministros del Consejo de Castilla, elegidos de forma vitalicia, uno del de Ordenes y un Fiscal y un Secretario

^{***}. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs.283 y 284.

^{****}. En la Guía de Forasteros de 1826 se recoge los nuevos nombramientos de don Francisco Marín y don Tadeo Ignacio Gil para esta Junta. Vid. también A.G.P., Sección Fernando VII, Caja 207, expediente 20.

que ordinariamente eran de este Consejo de Ordenes****. Se formaba en la Sala de Justicia del mismo Consejo de Ordenes. Sus resoluciones eran consultadas al Rey y expedidas en Real Cédula.

Esta Junta conocía los pleitos suscitados entre las Ordenes Militares y los eclesiásticos del Reino sobre el derecho a pasar diezmos de las tierras, ganados y otros bienes****.

9. Junta de Viudedades

Establecida en 1660, esta Junta estaba formada por tres Consejeros de Castilla, cuyo nombramiento hacía el Rey por medio de Real Orden que comunicaba el Secretario del Despacho Universal de Gracia y Justicia. Regularmente se formaba en la Sala segunda de Gobierno del Consejo, después de concluida la hora de la Audiencia.

Esta Junta conocía las instancias interpuestas por los los poseedores de mayorazgos, solicitando se consignase una pensión de viudedad a sus mujeres a expensas de sus mayorazgos por el tiempo que conservasen la viudedad.

Lo resuelto por la Junta se consultaba al Monarca, se notificaba a la Cámara de Castilla, que expedía una Real Cédula refrendada por su Secretario de Gracia y Justicia****.

****. El Rey nombró por Real Orden de 31 de agosto de 1824 a don Miguel Modet, Consejero de Castilla, para esta Comisión de Ministro de la Real Junta Apostólica, que había quedado vacante por la jubilación de don Antonio Alvarez de Contreras. Al día siguiente se reunieron los Ministros que componían la Junta para darle posesión. En A.H.N., Consejos, Consulta de Oficio del 28 de febrero de 1825 se contiene una interesante disputa entre los Ministros miembros de la Junta Apostólica por la Presidencia y preferencia de asientos.

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 284 y 285.

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 286 y 287.

10. Ministro Semanero

En cada una de las Salas del Consejo había un Ministro Semanero encargado de la redacción y formalidades de las providencias que en cada una de ellas se dictaban. Así describe Barrios el papel de este Ministro, basándose en relatos de escritores del siglo XVII^{***}:

"El control de las disposiciones del Consejo -cédulas y provisiones-, corre a cargo de los Ministros que reciben el nombre de Consejeros semaneros, pues semanalmente se produce el relevo de los mismos por orden de antigüedad en el Consejo. Ellos son los encargados de rubricar en primer lugar las cédulas y provisiones del Consejo, para que el Presidente y los Consejeros en número suficiente lo hagan a continuación sin detenerse demasiado en el documento rubricado".

No parece sin embargo que semanalmente se produjera el relevo siguiendo el orden de antigüedad en el Consejo, sino que en esta época hacían siempre de semaneros los Ministros más modernos de cada una de las Salas. Todos los días había semanería y tenía lugar a primera hora en la Sala primera de Gobierno^{***}.

El pasar de semanería los despachos consistía en que antes de comenzar las audiencias en el Consejo, los Ministros Semaneros leían y cotejaban los decretos y autos con las provisiones de que dimanaban. Tras ello, firmaban y rubricaban por dos veces a la derecha y al pie. A continuación firmaban los Ministros ya sin el menor reparo, sin necesidad de revisar detenidamente el documento rubricado^{***}.

^{***}. BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", págs. 177 y 178.

^{***}. Como recoge F. Barrios en "Los Reales Consejos", op. cit., pág. 178, citando a Núñez de Castro, antiguamente el encargo de ministro semanero iba turnándose entre los ministros de cada Sala por orden de antigüedad: "los semaneros van baxando por antigüedad, hasta dar buelta al número" (NÚÑEZ DE CASTRO, "Sólo Madrid es Corte", pág. 53).

^{***}. BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", pág. 178. Cita a Núñez de Castro, "Sólo Madrid es Corte", pág. 53, quien en el siglo XVII contemplaba en su obra la posibilidad de que se produjera una disconformidad de los semaneros con el texto presentado a la rúbrica. Así lo describía entonces:

Para comprobar las provisiones con los decretos y autos, se añadían a los expedientes los poderes bastanteados de los pleitos aportados por las partes. Acompañaban en esto al Ministro Semanero los oficiales segundos de las Escribanías de Cámara"".

11. Ministro Protector, Comisario Regio o Juez Protector

Era corriente que a cada Ministro del Consejo se le encomendasen varias de estas Comisiones.

El nombramiento de Juez interventor para cualquier vasallo del Rey era una gracia real, que se acordaba y comunicaba por la Secretaría de Estado y del despacho Universal de Gracia y Justicia. Aunque tales nombramientos habían recaído generalmente y desde muy antiguo en Ministros del Consejo Real, podían ser nombrados ministros de cualquiera de los Consejos"".

Existían muchas comisiones de este género. Se le encomendaba la tutela de un ramo, hospitales, hospicios, colegios o beaterios. Por ejemplo, entre los más importantes se encontraban: Ministro Protector de la Cabaña Real de Carreteros; Juez interventor de la Casa y Estados del Conde de Montijo""; Juez Protector del Banco de San

"...reconocido por el semanero no estar el despacho corriente, si el yerro toca al Escrivano de Cámara, se le dize en qué consiste, para que le reforme; y si toca al Consejo, le lleva a la Sala donde fue expedido, da cuenta de él, y resuelve sobre ello el Consejo, si ha de correr o enmendarse..."

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.705 núm. 23: Expediente formado sobre las prácticas que se observa para firmar los despachos y Reales Cédulas por los Señores Ministros de dicho Supremo Tribunal, Corte, 1826; y MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 65 y ss.; 211 y ss.

"" A.H.N., Consejos, Consulta de Oficio del Consejo de Castilla de 17 de septiembre de 1828. Es interesante también la Real Orden de 25 de agosto de 1817.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.789, expediente núm. 16.

Fernando""; Ministros Conservador de los Montes Públicos""; Ministro Conservador de Caza y Pesca""; Ministros Protectores del Estado de Ayala; Ministro Protector de los Baños de Trillo""; Ministro de las Apelaciones del Juzgado de Aguas de Granada.

12. Juez de Comisión, Juez Comisionado o Juez Comisario

Cuando en un proceso estudiado en el Consejo, se llegaba a una instancia en la que el Tribunal necesitaba un suplemento de información o una especial consulta sobre un punto especial de la causa, entonces cabía nombrar un Juez de Comisión. El Consejo tenía toda libertad para designar a la persona a la que quería confiar esta misión pero, en general, los Consejeros de Castilla no aceptaban

"" ARIAS TEIJEIRO, J., "Diarios", págs. 203 y 204. Así relata en sus notas una referencia a este cargo: "Días 4 y 5 de agosto de 1829: "Por un nuevo reglamento, el Banco de San Carlos se llama de San Fernando, y Puig es nombrado Comisario Regio o Juez Protector, con 33.000 reales. ¿Qué tal? Antes era Galindo, con 500 ducados, creo. Todo va así". Sobre esta Comisión nos refiere Desdeveses en "Institutions..." pág. 337: "Si aparecía cualquier dificultad sobre el gobierno interior del Banco (de San Carlos), sobre los poderes del Consejo de Administración o sobre la interpretación de los Estatutos, la causa debía ser confiada a un Consejero de Castilla, nombrado por el Rey". Podemos ver también, entre otros, A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.006 núm. 18: recoge una solicitud para que el Consejo nombre Ministro de su confianza para asistir a las Juntas del Banco.

"" Estaba al frente de la Conservaduría de Montes y Plantíos. Por Real Orden de 17 de julio de 1823 se restableció esta Contaduría, tal y como estaba el 7 de marzo de 1820, cuando fue abolida por el Gobierno Constitucional. El Rey nombró al frente de ella a don Ignacio Martínez de Villela.

"" Al frente del Juzgado de Caza y Pesca. Sobre su restablecimiento tras la Guerra, se puede ver A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.126 núm. 19.

"" Vid., por ejemplo, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.958 núm. 1. Incluye correspondencia de los sres. Ministros del Consejo que fueron protectores de los Baños.

más que comisiones reales'''. El nombramiento de un juez-comisario entrañaba, al parecer, unos gastos enormes. Por ello el Rey había recomendado dar preferencia en estas comisiones a los magistrados locales, corregidores o alcaldes, que no tenían que desplazarse y podían recoger sobre el lugar todas las informaciones necesarias. Sin embargo, vemos que este sistema no era siempre aplicable'''.

Por otro lado, muchas de estas comisiones no eran sino encargos peculiares a Ministros del Consejo para que estudiara y resolviera un determinado problema o conflicto, con autoridad delegada del Consejo de Castilla.

Muchas de estas comisiones eran creadas por solicitud de los particulares, que deseaban que un determinado Ministro del Consejo estudiara el caso, con supresión de todo procedimiento y, oyendo a las partes, administrase justicia'''. El Consejo sólo autorizaba estas medidas en casos de verdadera necesidad. Por otro lado, cabía también recusaciones de Ministros del Consejo por diversos motivos, parentesco, amistad manifiesta o interés en la causa, etc.'''.

Parece probable que en la mayoría de estas comisiones, el Ministro designado resolvía el tema en muchos casos: las sentencias de estos jueces eran apelables al

'''. Algunos ejemplos de estas Comisiones reales serían la que se formó para la revisión de los apéndices de la Novísima Recopilación efectuada en 1815 (A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.089 núm.21); o la creada por un Real Decreto de 1814 en el que se nombraba una Comisión en que participaban dos Ministros del Consejo, para estudiar el modo de proceder en las causas del Santo Oficio (mencionada en la Consulta de Oficio de 2 de mayo de 1832, legajo 6.107, A.H.N.).

'''. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág 81. Un ejemplo de este tipo de comisiones lo tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.143 núm.1.

'''. Por ejemplo, la solicitud de que el Ministro don Rafael Paz y Fuertes hiciera de Juez Comisionado para entender en una testamentaria, con supresión de todo otro procedimiento ante el Consejo, en demanda de nulidad de testamento. Está recogida en la Consulta de oficio de 18 de agosto de 1831 (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.105).

'''. Sobre recusación de Ministros del Consejo por parentesco, se puede ver por ejemplo el legajo 51.425 núm. 6 (A.H.N., Consejos Suprimidos).

Consejo"".

Por la frecuencia de estas comisiones, podemos citar muchos ejemplos durante el reinado de Fernando VII. Así, por Real Orden de 4 de junio de 1.810 se establecía en la Isla de León un comisión de Policía presidida por el Conde del Pinar""; "una comisión del Consejo de Castilla jugaba el papel de Comité Director de la Caja Real de Descuento de Vales de Madrid, bajo el nombre de Comisión Administrativa de los Vales y Cajas de Extinción y Descuento"".

13. Otras Superintendencias, Comisiones o Juntas

Entre las Superintendencias podemos mencionar la del Archivo del Consejo Real""; la Superintendencia General de Policía""; Superintendente General de Correos y Caminos"".

En ocasiones se establecían comisiones

""". Aquí tendríamos, por ejemplo, la sentencia que dictó el Ministro don Dionisio Catalán como Juez Comisionado en los autos de la testamentaria de los difuntos Duques de la Roca (A.H.N., Consejo de Castilla, Consulta de Oficio de 29 de octubre de 1832); otro caso podría ser el recogido por la Real Cédula núm. 5.064, de 30 de junio de 1814, en que se distribuían los territorios de varios arzobispados entre Consejeros para la resolución de expedientes sobre construcción de varios cementerios.

""". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.999 núm. 37.

""". DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 344.

""". Vid. el apartado correspondiente al Archivero del Consejo. "Otro Consejero tiene a su cargo el archivo del Consejo, donde se custodian las 'Pragmáticas originales, Cédulas Reales y otros despachos de importancia'" (BARRIOS, F., "Los Reales Consejos", pág. 178).

""". Ver, por ejemplo, A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.215 núm. 2: menciona el nombramiento por el Duque de Berg de un particular para este puesto para Madrid, con plaza efectiva en el Consejo.

""". Se puede ver uno de estos nombramientos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.126 núm. 37.

especiales de Ministros del Consejo para la consecución de un determinado fin, como la propuesta por el Ministro Modet en su voto particular de 28 de junio de 1829 para juzgar las causas de masones""; o la creada para el examen y revisión trimestral de los estados y relaciones de las causas criminales pendientes en los tribunales del Reino"".

Había otras Juntas en que participaban Ministros del Consejo. Eran las llamadas "Juntas de Ministros". Un caso significativo fue el de la Junta Consultiva de Gobierno, creada por decreto de 13 de septiembre de 1825: en ésta Junta había seis representantes de los Consejos de la Monarquía, de los que dos eran del Consejo Real"". Por oficio del Rey fechado en San Lorenzo el 24 de septiembre de 1825 "quedó sancionada la prioridad de las reuniones de la Junta sobre las de los Consejos, para los vocales que formaran parte de ellos".

Algunos ejemplos de Juntas de Ministros fueron la creada por Real Decreto de 1 de febrero de 1.815, para la formación de un Plan de Estudios""; la anteriormente formada en noviembre de 1.814, para el reintegro de los bienes confiscados por el Gobierno intruso"".

Otros ejemplos de conocidas Juntas de Ministros fueron la Junta de Lotería ""; la Junta de Ministros para fijar los límites de Jurisdicción de la Orden

"" ARIAS TEIJEIRO, J., "Diarios", tomo I, pág. 173.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874 núm.2: Se encomendó al Ministro más moderno del Consejo.

"" ESCUDERO, J.A., "La Real Junta Consultiva de Gobierno", págs. 29 y ss. Estos dos Ministros del Consejo eran don Francisco Marín y don José Hevia y Noriega.

"" Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 5.166: "Real Decreto mandando formar una Junta de Ministros para formar un plan de estudios y nombrando para esto a varios Ministros del Consejo Real y del de Indias".

"" Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 5.144: "Circular del Consejo comunicando el nombramiento de los Ministros que han de componer la Junta, para el reintegro de los bienes confiscados por el Gobierno intruso".

"" Así nos la refiere Desdevises: "La lotería tuvo mucho éxito en España y se convirtió en una verdadera institución. Tuvo su Junta, formada por Consejeros de Castilla y de Finanzas, y presidida por el Excmo. Sr. D. José Godoy, hermano del Príncipe de la Paz " (DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 299).

de San Juan de Jerusalem ""; o la Junta Suprema de Represalias"".

La proliferación de estas comisiones planteaba también diversos problemas a la labor del Consejo, tanto por su número como por la acumulación de trabajo que suponía para los Consejeros"".

En virtud de Real Orden de 4 de abril de 1818 se recordó a los Ministros de los Consejos que tuviesen las comisiones para las que hubiesen sido nombrados después de las horas de tribunal, con arreglo a la ley:

"Para evitar toda duda de si alguno de los Ministros de los Consejos para atender al despacho de los asuntos, ajenos a sus principios y atribuciones, paralizan los del Tribunal, ha resuelto S.M. que la asistencia para las comisiones para las que hubiesen sido nombrados, la tengan después de las horas del Consejo con arreglo a la ley..."

Palacio, 4 de abril de 1818.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.661, expediente núm. 39.

"" Creada por Real Cédula de 6 de junio de 1793. En Consulta de Oficio de 5 de junio de 1816 el Consejo propuso a Lardizábal y Riega para esta Junta (A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.077).

"" En 1815 el Consejo dictó providencia para que las Escribanías de Cámara y de Gobierno diesen listas de las comisiones que tuviesen en ellas los Ministros del Consejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.455 núm. 56).

5. Honores y Privilegios

Los Consejeros de Castilla tenían reconocidos una serie de privilegios acordes con la alta dignidad de su oficio: asiento preferente frente a otros funcionarios de la Corona en todos las ceremonias y actos públicos; especial formalismo y protocolo en todas sus acciones; determinadas exenciones y garantías; y otros privilegios económicos y sociales, que iban paralelos a un considerable prestigio social.

Los miembros del Consejo de Castilla, así como los de los demás Consejos Supremos, cuando concurrían a una ceremonia o acto público tenían asiento preferente a los de cualquier otro Consejo o empleado público:

"La supremacía del Consejo de Castilla y la mayor dignidad de sus Ministros han hecho siempre indisputable la precedencia que les corresponda en concurso con otros de diferentes Tribunales. Mas la circunstancia de haber conseguido los de Indias, Guerra y Hacienda el carácter de Supremos, con los honores y antigüedad del de Castilla, hace que en las concurrencias de Ministros de estos Tribunales Supremos únicamente se atienda a la mayor antigüedad de sus títulos, y que ésta decida el orden de precedencia"***.

Como durante el siglo XVIII, e incluso durante el XIX, los conflictos entre Consejos por este motivo fueron frecuentes***, se hizo necesario arbitrar una serie de reglas que definieran la preferencia de cada

***. A.H.N., Consejos, Consulta de Oficio del Consejo de Castilla de 28 de febrero de 1825.

***. Parece que en el siglo XVIII abundaron los conflictos entre Consejos por este motivo, mientras que en el XIX se volvieron a renovar estos conflictos, pero esta vez individualmente, entre Consejeros.

Consejo". Así, individualmente los Consejeros de los Consejos titulados Supremos -Castilla, Guerra, Indias y Hacienda"- serían equiparados en honores y privilegios a los de Castilla, precediéndose en el asiento según su respectiva antigüedad de toma de posesión. Y ello con la única excepción de los casos en que concurriesen en comunidad o en representación o diputación de su respectivo Consejo, lo cual se entendería sólo cuando expresamente en el Decreto o Real Orden expedida para su nombramiento. En este último caso los Consejeros de Castilla tendrían siempre preferencia".

Los Consejeros se diferenciaban entre ellos dentro del Consejo por su antigüedad, de tal manera que cada uno de ellos tenía un número de orden que indicaba el lugar que tenía en el escalafón general".

De esta manera, cuando un Ministro de un Consejo pasaba al de Castilla, su antigüedad se reputaba desde el momento de la toma de posesión, con respecto a los demás Consejeros de Castilla". Esta norma respetaba

Podemos mencionar, entre otros, los Reales Decretos de 29 de junio de 1773, de 11 de abril de 1783 y de 9 de diciembre de 1784.

Por Real Decreto de 1803 se concedió a los Consejeros de Hacienda los mismos privilegios que a los de Guerra y de Indias. Ver también A.H.N., Consejos, Consulta de Oficio de 24 de Septiembre de 1.816. En su dictamen de 9 de septiembre de 1.815, reiterado más tarde en septiembre de 1.816, el Fiscal proponía hacer extensivos tales privilegios también a los Ministros del Consejo de Almirantazgo.

Ley XVIII, Título III, Libro IV de la Novísima Recopilación, aprobada por don Carlos III, por Real Decreto de 11 de abril de 1783. Incluso esta excepción planteada por el mencionado Real Decreto sería fuente de controversias. Por ejemplo, la disputa del Consejo de las Ordenes por el asiento preferente en la llamada Junta Apostólica (A.H.N., Consejos, Consulta de Oficio del 28 de febrero de 1825).

DESDE VISES DU DESERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 298.

He aquí, por ejemplo, la antigüedad de los Ministros del Consejo en abril de 1.808, consignada por su fecha de juramento y toma de posesión: 1. Vilches, el 22 de junio de 1.791; 2. Colón, el 17 de octubre de 1.791; 3. Hernida, 20 de septiembre de 1.792; 4. Lardizábal, 27 de septiembre de 1.792; 5. Codina, el 20 de noviembre de 1.792; 6. Villanueva, el 8 de mayo de 1.794; 7. Riega, el 27 de marzo de 1.795; 8. Morales, el 15 de junio de 1.795; 9. Canga, el 24 de septiembre de 1.795; 10. Cebra, el 1 de octubre de 1.795; 11. Achutegui, el 27 de mayo de 1.796 (en

derechos adquiridos y expectativas de preeminencias tan honrosas como llegar a ser Decano del Consejo Real o a presidir alguna de sus Salas"".

Sin embargo, esta doctrina tuvo sus matizaciones, especialmente a partir de 1.819, con el llamado caso Sisternes: en aquella ocasión, por resolución del Consejo de 30 de abril de 1.819 quedó terminantemente declarado que debían gozar de la antigüedad que tuvieran cuando pasasen al de Castilla. Más adelante tenemos los casos de don José Manuel Arjona y de don León de la Cámara Cano, quienes solicitaron conservar la antigüedad que tenían en sus respectivos Consejos cuando pasaron al Consejo de Castilla, como parece había sido ya concedido en ocasiones anteriores"".

Cuando varios Ministros eran nombrados por resolución o decreto de un mismo día, gozaba de mayor antigüedad el designado para la plaza primera y el que fuera nombrado primero en el decreto"".

Otros privilegios estaban reconocidos a un Ministro del Consejo: exención de derechos del título,

que cumplió los 3 años de Fiscal)); 12. Pinar, el 20 de agosto de 1.796; 13. Casa-García, al que se le declaró la antigüedad desde que se le concedió con honores y que precediese al Sr. Urquijo; 14. Urquijo, el 26 de septiembre de 1.798; 15. Altamirano, el 27 de febrero de 1.799; 16. Puig, el 25 de febrero de 1.801; y 17. Torres, el 12 de junio de 1.801.

"" A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.658, expediente núm. 15. Este cómputo de la antigüedad desde cero al llegar al Consejo Real no se daba en los demás Consejos Supremos cuando por Real Decreto un Consejero era trasladado de un Consejo Supremo a otro: en estos casos se les guardaba la antigüedad desde que se se tomó por primera vez posesión de Consejero de un Supremo Tribunal. Pero con el Consejo de Castilla no sucedía esto y no había reciprocidad con aquellos Consejos.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658, expediente núm. 15: Por Real Decreto de 30 de mayo de 1.823 se nombró a don José Manuel Arjona para la plaza efectiva de Ministro del Consejo Real, en lugar de la que tenía desde el 7 de marzo de 1.820 en el Supremo de Guerra. Solicitó el 6 de febrero de 1.824, al igual que más tarde don León de la Cámara Cano el 23 de febrero siguiente, que se le concediese la antigüedad que tenía de Consejero desde que lo fue de los Consejos Supremos del Almirantazgo y de la Guerra, conforme a las Reales Resoluciones expedidas en orden a los dichos Consejos y como el Rey había concedido ya en otras ocasiones.

"" Ley XVII, Título III, Libro IV de la Novísima Recopilación.

propinas y otros gastos, como del pago de la media anata""; estaban exentos de la obligación de alojar huéspedes""; derecho a no ser sometidos a tormento; se les reconocía también el derecho a gozar de la preeminencia que sus pleitos se viesan en los Tribunales de la Corte""; el derecho a no declarar en un proceso sino mediante informes o certificaciones escritos, y sólo excepcionalmente se les podía tomar declaración pasando a su casa el Juez de la causa, avisando antes por medio de oficio""; derecho a ser considerado el atentado contra su vida como delito de alta traición; derecho a subir con capa la escalera de Palacio""; etc. Todo esto se complementaba con el tratamiento que recibían, al ser llamados Señorías, Señores""; Muy Magníficos Señores... También se les

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658, expediente núm. 15.

"" El 4 de abril de 1.808 se planteó un interesante caso referente a este derecho, cuando el Consejo encomendó a la Sala hacer distribución de los oficiales franceses y demás miembros de la comitiva del Ejército francés entre el vecindario de Madrid. El Consejo, en su resolución de aquel día, encargó a la Sala y sus Alcaldes que no hicieran "distribución alguna a los Señores Ministros del Consejo por las consideraciones que son notorias" (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.513, expediente núm. 3).

"" Un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.861 núm. 56: En este expediente del Consejo se cita y emplaza, "con la formalidad y decoro que a su clase pertenece, al Sr. Don José Cabanilles, del Consejo de Castilla, como padre y administrador de sus hijos y de su difunta mujer, Doña Josefa Centi Argüelles, para que en término de nueve días concurra a decir su derecho... en el pleito" que se seguía en la Audiencia de Oviedo.

"" El oficio debía estar firmado por el Juez de la causa y debía entregarlo en propia mano el Escribano. El fundamento de este privilegio residía en que la jurisdicción que ejercían los Ministros era propia del Rey (Reales Resoluciones de 9 de diciembre de 1798, de 3 de mayo de 1803 y de 30 de septiembre de 1804). En noviembre de 1811 se planteó un interesante contencioso referido a este privilegio, cuando tres Ministros del Consejo se negaron a declarar oralmente ante el Tribunal Especial constituido por las Cortes, amparándose en este privilegio (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129, expediente núm. 1).

"" Ley XVI, Título III, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"" Los Consejeros de Castilla debían ser distinguidos con el tratamiento de Señor en todos los Consejos y Tribunales (vid. Real Decreto de 19 de octubre de 1.787,

reconocía el derecho a venir en coche al Consejo y se les reservaba sitio para su colocación"".

Los Ministros honorarios del Consejo gozaban de todas las prerrogativas de los Ministros propietarios o efectivos"". Por ello mismo, era muy preciada una concesión regia de esta naturaleza y, como también veremos, produjo en algunas ocasiones pequeños conflictos de preferencia.

El honor de Ministro honorario del Consejo se concedía por Real Resolución de S.M. Tras su juramento, asumía todas las preeminencias de Consejero. Por ejemplo, un Consejero de Indias, honorario del Consejo de Castilla, tenía automáticamente preferencia sobre sus compañeros del Consejo de Indias"". Desde una resolución de 31 de julio de 1693, el juramento no llevaba incorporada una antigüedad pareja a los Consejeros propietarios, para que éstos guardaran siempre preferencia frente a los honorarios"". Sí que se guardaba el orden de antigüedad entre los Ministros honorarios.

Desde una Real Resolución de 31 de agosto de 1743, el Rey Don Felipe V decidió conceder a todos los Fiscales que sirviesen las Fiscalías del Consejo los honores de Ministro del mismo desde que entrasen a servirlos y la antigüedad después de que las hubiesen servido tres

A.H.N., Colección de Reales Cédulas núm. 2.980).

"". Cfr. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 2.915, de 24 de octubre de 1.786, "Edicto del Consejo dando normas para los coches de los Ministros de los Consejos, dónde se han de colocar en la calle, etc."

"". Algunos ejemplos de estas concesiones regias fueron la de don Francisco Javier Larripa, Director de los Reales Canales de Aragón, agraciado con estos honores en 1.802 (A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 4.021 núm. 35); la de don Pedro de la Puente, Corregidor de Lorca, en 1817 (A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 4.034 núm. 52); o la de don Antonio Villagrosa, al que se concedió por Real Resolución de 21 de febrero de 1830 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6.107, Consulta de Oficio de 8 de junio de 1832).

"". FAYARD, J., "Les Membres du Conseil de Castille...", pág. 101.

"". Confirmada, por ejemplo, por Real Resolución a consulta del Consejo fechada el 8 de junio de 1832 (A.H.N., Consejos, legajo 6.107, Consulta de Oficio de 8 de junio de 1832).

años""-. En tales supuestos, no se les exigía el juramento de los Ministros honorarios del Consejo.

En 1832 se planteó una interesante cuestión de preferencia, a instancia de los Fiscales del Consejo de 31 de marzo de aquel año. Estos solicitaban que como Ministros honorarios del mismo, debían preceder en los actos oficiales a los demás Ministros honorarios, cuando concurrieran a cualquiera de los actos a que podían hacerlo. El Consejo no reconoció su derecho, lo que así fue confirmado por S.M. en la consulta. He aquí lo que entonces argumentó el Consejo al Rey""-:

"En los honores no hay incompatibilidad ni en sí mismos ni con los oficios públicos, sino que todo se reúne sin confusión en la persona en quien se han concedido o dispensado. El carácter de Fiscal no debe ser impedimento para poderlos disfrutar. Y las gracias y mercedes reales deben entenderse de modo que produzcan efecto y no sean vanas e ilusorias.

Es de parecer el Consejo que V.M. podrá dignarse declarar que los Fiscales de V.M. en el Consejo deben preceder a los Ministros honorarios en los actos a que pueden éstos concurrir, cuando sean más antiguos que los honorarios""-.

""-. Ley V, Título XVI, Libro IV de la Novísima Recopilación.

""-. A.H.N., Consejos, legajo 6.108, Consulta de Oficio de 8 de Junio de 1832.

""-. Tiene también su interés el voto particular presentado a esta resolución del Consejo por los Ministros don José Cabanilles y don Tadeo Ignacio Gil, rechazado por el Consejo. Recogemos aquí este voto particular: "El honor concedido a los Fiscales, de Ministros del Consejo, es una cualidad accesoria y como tal debe seguir la condición de su principal. Y como los Fiscales concurriendo con el Tribunal tienen su lugar determinado para salir de él y tomar el que pudiera corresponderles como Ministros honorarios, sería indispensable que posterguen su carácter y representación de Fiscales convirtiéndose en principal lo que solamente es accesorio y anejo a su oficio de Fiscal. Además de esta irregularidad podría diferenciar notablemente la posición del oficio, siempre que un Fiscal fuese más moderno que los Ministros honorarios y el otro más antiguo que ellos, en cuyo caso debería ir el Fiscal más moderno delante de los honorarios y detrás de ellos el Fiscal más antiguo. Las consideraciones y respetos particulares debidos a los Fiscales están en su propio oficio y en concepto de los Ministros de este voto son preferidos a los de un mero

También los Consejeros de Castilla podían utilizar un uniforme propio de los magistrados del Supremo Tribunal. Los Consejeros de Castilla portaban un rico y elegante traje^{***}: zapatos negros con hebilla de plata, medias de seda, pantalón corto ajustado a la rodilla, casaca abotonada a partir del cuello, un poco ajustada y bastante larga para cubrir la mitad del abdomen; bolsillos a los lados, vuelillos de encaje al borde de las mangas, golilla, toga y una capa grande o abrigo por encima de todo^{***}. En la mano o bajo el brazo llevaban un gran bastón o vara con pomo y borla de oro; en la otra mano el sombrero, sin poner para no estropear su venerable peinado^{***}. Martínez de Salazar, por su parte, hacía hincapié en que como señal de

honorario.

El Consejo es un cuerpo compuesto de tres miembros, Fiscales, Ministros y Gobernador o Presidente, y cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde para que este cuerpo no se presente monstruoso. Así, los Ministros honorarios no tienen preferencia a los efectivos. E igualmente no deben tenerla a los Fiscales efectivos de V.M."

^{***}. La mayoría de los trajes de los magistrados se confeccionaban en la Real Fábrica de Medias, Telas y Sastrería, que en el siglo XVIII se encontraba en la Puerta del Sol de Madrid. (VINDEL, F., "El Madrid de hace 200 años", pág. 47 y ss.).

^{***}. Por un expediente del Archivo Histórico Nacional conocemos también los rasgos más generales del uniforme de luto de los Consejeros de Castilla, en los lutos por personas reales: en invierno llevaban toga entera de bayeta, capa del mismo tejido, chupa y calzón de paño sin bolsillos, y en la manga de la chupa una vuelta que llamaban 'de cazador'; en el verano llevaban el mismo traje 'con la diferencia de ser de lanilla'. También había un luto cuando no vestían de largo: era un vestido de luto riguroso, en el primer mes sin polvos en la peluca o peluquín, velo de gasa en el sombrero y espadín, y todo ello sin vueltas; en los dos meses siguientes se llevaban polvos en el pelo, y se quitaban las gasas del sombrero y espadín. Llevaban vueltas lisas con sobradillo ancho; en los dos meses primeros de alivio, el vestido era negro con botón de seda, evillas, espadín blanco y las vueltas con flecos; en el tercer y último mes de alivio llevaban medias blancas (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 6).

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Les Institutions...", págs. 70 y 71. Desdevises recoge aquí una descripción que hizo Meléndez en el prólogo de su poema "El Magistrado", hoy perdido.

autoridad usaban la toga o garnacha"".

Para concluir este capítulo no debemos olvidar la creciente importancia del Consejo de Estado, que siempre fue reconocido como el primer Consejo de la Monarquía. Así, en el Preámbulo de un Real Decreto de 14 de diciembre de 1798 veía el Rey en este Consejo "el de mayor dignidad que hay en la Corona""". En un Real Decreto de 20 de agosto de 1815 se decía: "ningún Consejero de Estado pueda concurrir a Consejo, corporación o junta alguna en que no preceda a todos los individuos que lo compongan..."". Frente al prestigio tradicional de la condición de Consejero de Estado, desde la restauración del Consejo de Real en 1814 paralelamente asistimos también a un proceso de debilitamiento de las preeminencias del Consejero de Castilla.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", pág. 81. Sabemos también que el Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia del año 1.814 asignaba a sus magistrados "el mismo traje que usaba el extinguido Consejo de Castilla" (Cfr. Reglamento de 13 de marzo de 1.814, art. 17, en Colección de Decretos, año 1.812, tomo II, pág. 194, citado por MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 510).

"" ESCUDERO, J.A., "Notas sobre el Consejo de Estado en los siglos XVIII y XIX", pág. 614.

"" J.A. ESCUDERO, en "Notas sobre el Consejo de Estado entre los siglos XVIII y XIX", pág. 610, afirma: "Tradicionalmente los Consejos de Estado y de Guerra -únicos presididos por el Monarca mismo- no tenían lugar señalado en los actos públicos -y especialmente en los que tenían lugar con motivo de las fiestas reales-, ni su rango -por supremo- entraba normalmente en juego a la hora de dilucidar el complejo sistema de precedencias previsto para los Consejos de la Monarquía". Cfr. también F.BARRIOS, "Los Reales Consejos", op. cit. págs. 55 y ss.; y "El Consejo de Estado", op. cit.

6. Retribución

a) sueldo

"Los miembros del Consejo recibían del Rey un sueldo fijo. Durante mucho tiempo ellos había recibido recompensas, casas de aposento, propinas ordinarias, ayudas de costa, etc. La ordenanza de 1717 suprimió, al menos en principio, todos estos beneficios, y dio 150.000 reales al Gobernador de Castilla y 44.000 reales a cada uno de los Consejeros y a los Fiscales. En 1763 el sueldo de los Consejeros fue elevado a los 55.000 reales...El Rey organizó un Montepío nutrido por las retenciones sobre el sueldo de los miembros del Consejo, y destinado a asegurar a sus viudas pensiones que variaban entre 12.000 y 20.000 reales"²⁰⁰⁴.

Por el Real Decreto de don Carlos III de 12 de enero de 1763 se elevó el sueldo de un Consejero de Castilla a 55.000 reales. Por un nuevo Decreto, fechado en San Ildefonso el 9 de agosto de 1766, fue incrementado el número de Ministros del Consejo, "para el más pronto y acertado despacho de los pleitos y negocios". Se creaban cinco plazas más y se fijaba para su dotación el sobrante del fondo y caudal del 2% de propios y arbitrios, que también se ingresó en Tesorería Mayor.

Don Carlos IV, por Real Instrucción de 28 de junio, inserta en Cédula de 23 de julio de 1794, tuvo a bien aplicar a su Real Hacienda el arbitrio del aumento del duplo del precio del papel sellado que se había emitido, con el fin de aumentar la escasa y pobre dotación de los Ministros de los Tribunales. Estos fondos fueron igualmente ingresados en las arcas de Tesorería General.

También un Real Decreto de 20 de septiembre de 1.795 resolvía que todos los empleados con varios sueldos

²⁰⁰⁴. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions de l'Espagne", pág. 70, citando a A. FERRER DEL RÍO, en "Historia de Carlos III", tomo III, pág. 109.

que no llegasen a exceder de los 800 ducados, no tuvieran descuento alguno. Los que tuvieran ingresos superiores a los 800 ducados se les debía descontar el 4%²²⁰⁰.

Ya en el reinado de Fernando VII, tenemos la primera noticia de interés en el mismo 1808, cuando tras la primera retirada de los franceses, una de las medidas tomadas por el Consejo fue la retirada de sueldos a los Consejeros que habían emigrado con los franceses. Así fue aprobado por el Consejo en resolución de 11 de agosto de aquel año²²⁰¹.

Al final de la Guerra, el estado de penuria general de la nación repercutió también en los sueldos de los Consejeros. Estos fueron mantenidos, pero la Administración encontraba problemas para abonarlos puntualmente. Como estos sueldos eran abonados con el producto de la venta del papel sellado u oficial, el 11 de febrero de 1815 fue nombrado un Subdelegado que se encargase de todo lo referente a este papel²²⁰².

En el periodo inmediatamente siguiente al restablecimiento del Consejo en 1814, la situación económica de los Ministros del Supremo Tribunal fue objeto de especial atención. Los retrasos en el cobro de sus sueldos eran patentes²²⁰³. Después de la promulgación de los Reales

²²⁰⁰. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 3.434, Real Decreto de 20 de septiembre de 1795.

²²⁰¹. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm.21.

²²⁰². A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 5.172, de 11 de febrero de 1815: "Real Cédula...por la que se nombra un Subdelegado General que particularmente se encargue de todo lo concerniente al ramo del Papel Sellado...Se establece lo que se ha de observar en su uso en los pliegos intermedios, y en su calidad, y la aplicación que ha de darse a su producto en el pago de los sueldos de los Ministros y dependientes de los Tribunales de la Corte y de las provincias".

²²⁰³. En diciembre de 1816 los atrasos de sueldos de los Ministros del Consejo superaban los diez meses. En aquel mes recibieron la mesada correspondiente a enero, en libramientos contra diferentes provincias que tuvieron que negociar, con pérdida de un 2% de su sueldo, en la Oficina del Crédito Público. Esta Oficina, además, en aquella fecha no quiso entregarles más que 3/4 partes de la mesada correspondiente a enero, quedando por tanto en descubierto de once meses (A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.379, consulta del 24 de diciembre de 1.816). También en 1.828 había grandes retrasos en el abono de estos sueldos -al

Decretos de 16 de enero de 1816""", se acudió para el pago de los sueldos de los Ministros a nuevas fuentes: además de los productos de los ramos de propios y arbitrios, el beneficio del uso del papel sellado en los pliegos intermedios de las compulsas fue dedicado a este fin, conforme a lo que había consultado el Consejo y había sido sancionado por el Rey en Real Cédula de 11 de febrero de 1815""".

Sin embargo, estas medidas parece no se respetaron mucho tiempo y continuaron los agobios. En Consulta de Oficio de 24 de diciembre de 1816, el Consejo suplicaba a S.M. que se restituyera la venta del papel sellado a los mismos términos que los recogidos en el Decreto de 11 de febrero. En representación anterior de fecha 5 de diciembre, los Ministros manifestaron el triste pero verdadero estado de pobreza y necesidad a que se veían reducidos: sufrían atraso en el pago de sus sueldos, "los únicos y menoscabados recursos con que los más de ellos cuentan para vivir y mantener sus respectivas familias. Además, las leyes les quieren exentos de todo otro cuidado y ocupación productiva capaz de distraer su atención o resfriar su celo""". Los mismos Consejeros apuntaban cómo estas incompatibilidades eran necesarias para el mantenimiento del prestigio del Consejo Real.

menos 8 meses- (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6).

""". Por el Real Decreto de 16 de enero de 1816 se establecía que se ingresasen en Tesorería General todos los fondos correspondientes al papel sellado, para satisfacer a los Sres. Ministros y Subalternos de los Tribunales, con destino preferente para el pago de los sueldos de los Ministros y Subalternos de los Tribunales de la Corte y Provincias (A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.267, expediente núm. 46).

""". A.H.N., Consejos, Consejo de Castilla, legajo 6.079, Consulta de Oficio de 24 de diciembre de 1816: en el Real Decreto de 16 de enero de 1816 se mandó volver a la venta del papel sellado al estado anterior sin alteración ninguna, por no haber correspondido los resultados a las esperanzas concebidas en virtud de la consulta del Consejo de 5 de febrero de 1815. Se achacaba de un lado a la impaciencia y la inconsideración de unos, y de otro a la obstinación y resistencia de otros a la organización de la empresa y oportuna recaudación de los verdaderos productos. De esta manera, la Real Resolución de 1815 se vio incumplida: decía que los miembros del Consejo fuesen pagados exclusivamente y con preferencia con la venta del papel sellado, lo que no se realizó.

""". A.H.N., Consejos, Consejo de Castilla, legajo 6.079, Consulta de Oficio de 24 de diciembre de 1816.

En esta consulta del Consejo de diciembre de 1816, que había sido motivada por una petición real, en Real Orden del mismo año""", el Consejo le propuso asignar el 1% impuesto sobre propios y arbitrios del Reino para la composición de la Casa de los Consejos"". Además de esto, insuficiente a todas luces para la dotación del Consejo y de la Casa de Alcaldes, el Consejo propuso imponer otro 3% sobre los Propios del Reino"".

Por su parte vemos que desde 1763 hasta 1808 el sueldo de un Consejero de Castilla había permanecido invariable en los 55.000 reales anuales. Sabemos que esta retribución se mantenía en 1816, ya que fue confirmada por resolución de 30 de agosto de 1816. Tan sólo a los Ministros Camaristas, esto es, miembros de la Cámara de Castilla, esta retribución se les complementaba con 11.000. reales anuales más.

El Presupuesto del Consejo de 1818 mantenía el sueldo de 55.000 reales, añadiendo el dato de que de ellos, sólo unos pocos alcanzaban los 40.000 reales, el máximo según la legislación entonces vigente"".

El Presupuesto del año siguiente incluía también los 11.000 reales que percibían los Ministros camaristas, siete en total, cuyo sueldo quedaba en los 66.000 reales anuales"".

La supresión del Consejo en 1820 afectó sin duda a los sueldos de sus Consejeros. Por el decreto de las

"". En la resolución de febrero de 1816 el Rey mandaba que el Consejo le propusiera medios para la dotación de sus Ministros, "sin perjudicar los intereses de la Hacienda y sin gravar a sus amados vasallos".

"". El otro 1% se destinaría para premio de cada fanega de trigo o maíz que se introdujesen de fuera del Reino.

"". Sería recaudado por la Contaduría General de Propios, bajo la inspección del Consejo y con la obligación de llevar la oportuna cuenta y razón de su producto e inversión, y de hacer presente al Rey si quedaba algún sobrante para que se le diera destino. Con ello la Tesorería General se descargaba de gastos y la venta del papel sellado quedaba más libre en las provincias para poder atender al pago de los sueldos de sus respectivos tribunales.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333, expediente núm. 11.

"". Estos Ministros Camaristas eran entonces los siguientes: don Gonzalo José Vilches; don José Joaquín Colón; don Manuel de Lardizábal; don Bernardo Riega; el Conde del Pinar; don Sebastián de Torres; el Marqués de Negrón.

Cortes constitucionales de 3 de septiembre de 1820 sus haberes quedaron rebajados:

"Los que han sido Ministros efectivos de los Consejos Suprimidos gozarán de 33.000 reales; 24.000 los Alcaldes de Casa y Corte y Regentes de las Chancillerías y Audiencias, y 16.000 los Ministros de las mismas".

Restablecido el Consejo y la situación de sus Consejeros en 1820, dispuso el Real Decreto de 27 de noviembre de aquel año***, para que se economizase el número de empleados y el de sueldos de la Administración. Este Decreto había de afectar sin duda al Consejo. Aparte de la consiguiente limitación del número de Consejeros a 20, sus sueldos fueron igualmente congelados en los 55.000 reales****.

También en ese año de 1823 parece que los Consejeros fueron eximidos en la práctica del derecho de la media anata cuando entraban a ejercer sus cargos dentro del Consejo****. Así se deduce también de un expediente conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid****.

Por Real Decreto de 28 de abril de 1.828 se mandaba que a partir del 1 de mayo siguiente los Consejeros

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781, expediente núm. 11.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm.11. Así reza un extracto de este Real Decreto: "...Convencido de estas verdades y de que por ahora no hay otro medio que el de establecer orden y economía, para que así sean menores los desembolsos, he venido en mandar que en todos los ramos de la Administración del Estado se reduzcan los empleados al número absolutamente preciso, y los sueldos y asignaciones a lo necesario, para que no se aventure la fidelidad y que se conserve el decoro de los funcionarios del Gobierno; y que según ésta mi soberana voluntad, se me propongan inmediatamente las expresadas reformas de empleos y sueldos..." Al comunicar el Decreto al Consejo, se pedía que con la mayor brevedad se propusiesen "las más austeras economías en todas sus respectivas dependencias".

****. A.M.A.E., Mss. 44, fol. 225.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expte. núm. 6: desde la ley del máximo hasta la fecha de este expediente -1830-, no se hacía a los Ministros del Consejo otro descuento que el de la media anata, pero según nota dada por el habilitado para el percibo de los sueldos, no se había descontado a ninguno de ellos este derecho en los últimos años.

de Castilla percibieran la cantidad de 50.000 reales al año¹⁰⁰⁰. De esta manera, ya en los Presupuestos del Consejo de 1829 y años siguientes nos encontramos un sueldo efectivo de los Ministros de 50.000 reales anuales. Este sueldo no estaba por tanto sometido al descuento del 4% y 18 maravedíes en escudo de contribución ni al descuento del montepío, como antiguamente. Como hemos visto, desde la llamada ley del máximo habían quedado exentos de esta contribución, a excepción de la media anata, que al parecer no se cobraba¹⁰⁰¹. En virtud de la Real Orden de 10 de diciembre de 1830, enviada al Escribano de Gobierno del Consejo, se le pide que informe con detalle sobre estos descuentos en Ministros y subalternos¹⁰⁰².

De la documentación del Consejo de aquella época parece deducirse también que el cobro de los salarios de un año se realizaba al año siguiente, es decir, con un año de retraso.

Por Real Orden de 12 de abril de 1829 se mandó al Escribano de Gobierno "que remitiese mensualmente un estado expresivo con presencia de la nómina que se formase para el pago de los sueldos de los Ministros y dependientes del Consejo, especificando las vacantes que hubiesen ocurrido, en qué día, qué había correspondido a ellas y dónde había ingresado, con indicación de cuándo entraron al goce del haber de las plazas vacantes los nuevos agraciados con ellas". Estos estados fueron remitidos puntualmente hasta 1.833. En aquel año y por Real Orden de 13 de octubre, la Reina María Cristina ordenó dejar de hacerlo mensualmente y ejecutarlo desde entonces a fin de año, de la forma establecida en la Real Orden de 12 de abril de 1829¹⁰⁰³.

En 1833 fueron aprobados dos importantes Reales Decretos: el de 13 de junio de 1833 y otro de 21 de julio del mismo año, que establecían descuentos especiales

¹⁰⁰⁰. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

¹⁰⁰¹. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expediente núm. 6.

¹⁰⁰². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm.6.

¹⁰⁰³. A.H.N., Consejos, Sala de gobierno, legajo 3.698 núm.6. Una Real Orden de 26 de febrero de 1834 del Secretario de Despacho de Gracia y Justicia comunicaba que "no habiéndose aún remitido dicho estado, que produce un retraso considerable en la formación del Presupuesto del Ministerio de mi cargo, para lo que se hace indispensable tenerlo a la vista, se ha servido resolver S.M. que V.E. lo remita a la mayor brevedad posible".

para los Consejeros que servían dos destinos""'. Así, si un Ministro ostentaba otro cargo público retribuido, el sueldo de este segundo destino se le descontaba de su sueldo como Consejero de Castilla. Dos ejemplos serían los de don Teotimo Escudero, de cuyo sueldo se rebajaban los 22.000 reales que percibía como Gobernador de la Sala de Alcaldes; o don Domingo Barrafón, que al percibir 71.000 reales como Corregidor de Madrid, el Consejo no le abonaba cantidad alguna.

b) Otros complementos

Aparte del sueldo fijo, los Consejeros de Castilla podían percibir otras cantidades por distintos conceptos, en especial por otros cargos retribuidos en la Administración y por dietas y beneficios de las Comisiones.

En relación con el primer concepto, ya hemos

""'. De esta manera, los sueldos de los Ministros del Consejo a partir de los mencionados Reales Decretos quedaron establecidos de la siguiente forma: don Francisco Marín gozaba un sueldo de 60.000 reales, percibidos por el Real Tesoro. Se le descontaban en cumplimiento de dichos Reales Decretos 19.000 reales, que percibía en esta forma: los 11.000 de los fondos de Cámara y los 8.000 reales de correos. Sólo cobraba una mesada de 3.416 reales y 22 maravedíes; don Ramón López Pelegrín, descontados los 11.000 reales de la Cámara sólo percibía de mesada 4.083 reales y 11 maravedíes; don José Hevia y Campomanes, descontados los 11.000 reales de los fondos de Cámara y 8.000 como Subdelegado de los fondos de Cámara, le correspondían de mesada 3.416 reales y 22 maravedíes; don José Manuel de Arjona, descontados los 11.000 reales de la Cámara y 10.000 que goza como Asesor de Cruzada, le corresponde de mesada 3.250 reales; don Teotimo Escudero, de los 50.000 reales que gozaba como Ministro del Consejo, se le rebajaban 22.000 que percibía como Gobernador de la Sala. Le correspondía una mesada de 3.983 reales y 11 maravedíes; don Domingo María Barrafón no percibía ninguna cantidad por disfrutar 71.000 reales del fondo municipal de propios como Corregidor de Madrid; los demás Ministros percibían una mesada íntegra de 4.166 reales y 22 maravedíes. (A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.936 núm. 17; este expediente lleva fecha de 18 de octubre de 1.833. La cantidad líquida que percibía cada Ministro era variable. He aquí otros ejemplos: Marín, 3.416 reales y 22 m.; Pelegrín, 4.083 reales y 22 m.; Montemayor, 4.166 reales y 22 m.; Cabanilles, 4.166 reales y 22 m.; Modet, 4.166 reales y 22 m.; etc.).

ido viendo varios de estos cargos: un Consejero de Castilla era el Gobernador de la Sala, por lo que percibía en 1833 la cantidad de 22.000 reales; varios más eran Ministros Camaristas, miembros de la Cámara, por lo que incrementaban sus ingresos en 11.000 reales; podían ocupar otros cargos retribuidos, como Subdelegado de Fondos de Cámara o Asesor de Cruzada. En 1829, por ejemplo, Puig recibía 33.000 reales como Comisario Regio o Juez Protector del Banco de San Fernando"".

Era habitual que los Ministros del Consejo gozasen de subvenciones y complementos sobre penas de cámara o sobre cualquier otro fondo por vía de sobresueldo, regalía, gratificación o ayuda de costa. Por ejemplo, uno de los que percibieron hasta bien entrada la Década Ominosa era el que recibía el título de suminarias, equivalente a 150 reales cada una y percibido por penas de cámara"".

Por Comisión del Real Servicio se entendía un encargo particular hecho con objeto de utilidad pública a unos Ministros del Rey. En la retribución de estas comisiones otorgadas a los Consejeros de Castilla, también existía una partida en concepto de dietas. Su cuantía dependía de la importancia de la comisión y del desplazamiento exigido. Así, por ejemplo, a los Ministros del Consejo comisionados en la Asamblea de Notables de Bayona, Colón, Lardizábal, Torres y Martínez de Villela, se les asignó unas dietas de 300 reales de vellón diarios a cada uno"".

En estas comisiones todos los participantes -escribanos, escribientes, etc.- cobraban dietas y no sólo los Ministros. Se pagaba una dieta por cada cierto número de leguas de desplazamiento que se estimaba recorrerían los comisionados en un día. También se les asignaba una cantidad por gastos de escritorio, que los comisionados pagaban del

"" ARIAS TEIJEIRO, J., "Diarios", tomo I, págs. 203 y 204, días 4 y 5 de agosto de 1829.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

"" A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511, expediente núm.9: para su pago, se comunicaba la Orden correspondiente al Subdelegado de Penas de Cámara, ya que se satisfacía de los fondos de penas de Cámara y gastos de Justicia. En el mencionado caso, se planteó un conflicto ante el Consejo, ya que, por providencia del Consejo de 20 de mayo, a Colón y a Lardizábal les fueron abonadas las dietas desde que salieron de Madrid, mientras que a Torres y a Martínez de Villela sólo se les pagó desde su entrada en Francia. Tras la reclamación de éstos, el Consejo confirmó la cantidad estipulada en aquella providencia.

dinero de sus dietas y que posteriormente descontaban en el Consejo^{***}.

Para la asignación de dietas parece no había una legislación establecida ni tan siquiera unas reglas fijas. Se acudía a los usos del Consejo y a lo estipulado en casos anteriores, y seguidamente el Consejo decidía.

^{***}. Veamos otros dos ejemplos: por Real Orden de 26 de marzo de 1784 se sirvió S.M. nombrar a don Felipe Rivero y Valdés, Ministro del Consejo de las Ordenes, para que averiguase qué había de cierto en los abusos introducidos en el disfrute de pastos comunes a las veintitrés villas del suelo y campo de Montiel. Recibió 16 ducados de vellón por cada uno de los días que se ocupó en ella, incluidos los de ida y vuelta, computando seis leguas por cada dieta. Al Promotor-Fiscal que había nombrado se le asignó 100 reales en cada día y 6 ducados de vellón al Escribano con tal de que éste no pudiera llevar derecho alguno. Estas cantidades se repartirían y exigirían a prorrata de los pueblos y ganaderos de las villas y lugares de que se componía el campo y suelo de Montiel, a cualquier otro interesado en sus pastos y a quien hubiera de comprender el arreglo que en ellos se hiciera. En este caso no se les abonó cantidad alguna por gastos de escritorio ni de oficial escribiente.

En otra comisión regia de septiembre de 1816, a la que asistieron un Ministro del Consejo y un secretario -en esta ocasión no hubo oficial de Escribanía-, las dietas fueron respectivamente de 16 y 6 ducados. Por gastos de escritorio se estipuló una asignación de 18 reales diarios, "por lo que cuesta la vida en 1816", incluyendo en esta tasación el coste del correo y del papel. Sabemos que en aquella ocasión, estos gastos de escritorio ascendieron a 10 ducados, que fueron satisfechos inicialmente por el Ministro de sus dietas y posteriormente abonados por el Consejo. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.033, expediente núm. 29; libro de matrícula 2.699 núm.5: legajo 4.033, expediente núm. 28).

7. Remoción y Jubilación

La remoción o separación de un Consejero de su cargo debía venir motivada por una causa bien determinada: por incapacidad física o avanzada edad, por promoción o por sanción. Evidentemente, los motivos políticos influyeron en diversos momentos del periodo que estudiamos para llevar a cabo jubilaciones anticipadas, purificaciones y otras separaciones de Ministros del Consejo. Estudiaremos en primer lugar un catálogo de prohibiciones impuestas por ley a los Consejeros de Castilla.

a) Prohibiciones e incompatibilidades

Las prohibiciones e incompatibilidades que afectaron a los Consejeros de Castilla fueron de diversos tipos. Entre las más importantes podemos destacar la obligación de guardar fidelidad y secreto de las deliberaciones y votos que se realizaban en el Consejo^{***}. Ante el delito de perjurio se aplicaba la pena de privación de oficio (inhabilitación para desempeñar cargos públicos) y la que el Monarca estimase según la calidad del sujeto y la gravedad del asunto en cuestión. El procedimiento seguido en tales casos era sumarisimo, bastando como prueba el testimonio de testigos oculares singulares^{***}, y en su defecto indicios y sospechas verosímiles: la presunción de violación del secreto debido era suficiente para procesar a

^{***}. Ley VI, Título III, Libro IV de la Novísima Recopilación.

^{***}. Ley VIII, Título I, Libro II de la Novísima Recopilación.

un magistrado"".

Tenían prohibido recibir dádivas, presentes u otras cosas de los litigantes, prohibición extensiva también a sus familiares, allegados y criados"". Igualmente se les prohibía solicitar negocios ajenos a sus ministerios, de los otros Consejos o de Tribunales en general. Tampoco podían dirigir cartas, provisiones ni cédulas que pudieran influir en las decisiones de jueces en otras causas. Ni ellos mismos tenían necesidad de solicitar un ascenso, porque sólo era concedido en función exclusiva de su eficacia y sus méritos.

Como señalaba también Desdevises, les estaba prohibido hacerse los intendentes o gerentes de los asuntos de los grandes, de los nobles de Castilla o de las comunidades"".

También tenían prohibido abogar en los pleitos por persona física o jurídica alguna sobre causas civiles ni criminales"". Quedaban exceptuados los casos en que abogaren en causa real, o con real licencia y expreso mandato"".

Ninguno de los Ministros podía dejar de asistir los días y horas destinados para el despacho, ni

"". Ley XII, Título II, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"". Ley X, Título II, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 298.

"". Las cartas de recomendación de empleos o de intercesión por causas pendientes debieron ser práctica habitual en el Consejo. Un ejemplo de una época algo anterior a la que es objeto de este trabajo es la recomendación del Decano don Arias Mon en favor de don Isidro Vera, casado con una criada, suya, para una plaza vacante de Alguacil de Corte en la Audiencia de Asturias. Llevaba fecha de 22 de septiembre de 1807. (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.995, Apartado "Delaciones y Cartas de Varios Confidentes"); en el mismo legajo aparecen dos cartas más de recomendación sobre dos casos vistos por el Consejo, fechadas en Aranjuez los días 22 de enero y 2 de febrero de 1808: amabas están firmadas por don Antonio María Izquierdo.

"". Ley XIII, Título III, Libro IV de la Novísima Recopilación.

ocuparse en empleos eclesiásticos""; no podían ausentarse de la Corte sin permiso real o la licencia del Presidente"".

Entre los demás tipos de prohibiciones estaban la de no salir a recibir al Rey ni a otra persona, salvo en día de fiesta o por real mandato""; la de utilizar otras dependencias que las de su instituto, en especial si las reuniones tenían lugar en dependencias de casas de Grandes, Títulos o Comunidades""; no podían ejercer tampoco dos oficios incompatibles ni llevar por ellos diversos salarios"".

"" Ley VIII, Título III, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"" Por Real Orden de 7 de febrero de 1799, mandada cumplir por el Consejo por auto de 18 de agosto de aquel año. He aquí un extracto de esta Real Orden: "Enterado el Rey que muchos Ministros de los Tribunales de las Provincias se hallan ausentes de sus destinos bajo varios pretextos, con gravísimo perjuicio del servicio y causa pública...". Se conserva en la documentación del Consejo guardada en el Archivo Histórico Nacional varios ejemplos de estas concesiones. Podemos mencionar la licencia concedida al Consejero don Francisco Javier Adell en 1827, para retirarse temporalmente a los Baños de Sacedón (A.H.N., Consejos, legajo 3.732, núm.22); o la interesante concesión a don Juan Antonio López Altamirano, por el Duque de Berg, el 11 de mayo de 1808, para que se pudiera "trasladar a donde sea más oportuno para su quebrada salud y que sólo asista al Consejo cuando se lo permita su estado" (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm.1). Habitualmente los permisos de ausentarse se concedían tras una solicitud del interesado. Por una Real Orden de S.M. de 14 de marzo de 1817, comunicada por Infantado en oficio del día 18, se dispuso que los Ministros del Consejo, Chancillerías y Audiencias que desearan ausentarse de su distrito, no debían acudir directamente al Rey sino por el conducto del Presidente de dicho Tribunal, quien lo pasaría a S.M. expresando su parecer (A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.337 núm. 37).

"" Ley X, Título III, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"" Ley XIV, Título III, Libro IV, Novísima Recopilación.

"" Ley XIII, Título II, Libro IV de la Novísima Recopilación.

b) Jubilación

La mayor parte de los Consejeros de Castilla que terminaban su carrera en el Consejo morían en activo y con frecuencia a una edad avanzada^{***}. Pocos Consejeros eran jubilados en el ejercicio de sus funciones. De hecho, a la Monarquía no le gustaba la jubilación de los empleados públicos, por lo costoso que era para el Erario. Por ello mismo, si el titular contraía una enfermedad grave era mantenido en su puesto sin cubrir la vacante. Sólo excepcionalmente era nombrado un Ministro supernumerario o un sustituto que cubriera sus funciones.

En el reinado de Fernando VII tenemos noticias de que las jubilaciones fueron ejercidas con frecuencia por motivos políticos. Es más, se usaba más bien este término para designar la separación de un Consejero de su cargo y normalmente parece que no se hacía por motivos de edad. Así, por ejemplo, tras el Trienio Constitucional, en 1.824 fueron jubilados de una vez siete Ministros del Supremo Tribunal y al menos dos más en los meses siguientes^{***}. Por otro lado, sabemos que algunos Consejeros ocuparon sus plazas a edades muy avanzadas. Así, don José María Puig era Consejero de Castilla con una edad próxima a los ochenta años. Y a los ochenta años era del Consejo Real de España e Indias.

Más frecuentes que las jubilaciones por edad debían ser las jubilaciones por salud o incapacidad, que tampoco debieron ser frecuentes. Es más, ya hemos visto que en ocasiones se concedían permisos de descanso o se excusaba a un Consejero de sus funciones una larga temporada.

^{***}. FAYARD, J., "Les membres du Conseil...", pág. 131.

^{***}. Lista de Ministros del Consejo que se encontraban en la condición de Ministros jubilados a finales de diciembre de 1.825: don Bernardo Riega, don José María Puig, don Juan Antonio González Carrillo, don Manuel de Torres-Cónsul, don Ramón López Pelegrín, don José Montemayor, don Francisco Javier Adell, don Alejandro Dolarea y don José Ignacio Llorens (Guía de Forasteros del año 1.826, pág. 81). Muchos de estos Ministros recuperarían en los años siguientes su plaza en el Consejo (cfr. EVOLUCION HISTÓRICA).

En principio, los Consejeros de Castilla retirados tenían derecho a la mitad de su sueldo. En cuanto a sus viudas, éstas no tenían en teoría ningún derecho, pero el Rey les atribuía con frecuencia una gratificación o incluso una pensión, en especial para permitirles concluir la educación de sus hijos^{***}. Sin embargo, por especial concesión real podía un Ministro ser jubilado con una parte mayor de su sueldo. Así, don Pascual Quílez Talón fue jubilado en 1.814 con dos terceras partes de su sueldo^{***} y don Justo María Ibar Navarro con la totalidad en 1.818^{***}.

Por Real Decreto de 4 de julio de 1826 S.M. concedió a don Ramón López Pelegrín la pensión completa por el máximo de 40.000 reales. Sin embargo, don Felipe Sobrado cobraba tan sólo la mitad de los 55.000 de la dotación de su plaza (27.501 reales), y don Alejandro Dolarea por la Real Orden de su jubilación tenía asignado en 1828 la mitad del sueldo máximo que percibía (en total, 20.000 reales mensuales)^{***}. Como vemos, en cada caso se concedía a cada Consejero una pensión que oscilaba entre el máximo establecido de 40.000 reales y la mitad del sueldo.

En cuanto al número de Ministros en retiro, éste siempre fue reducido, entre tres y cinco Consejeros. En los últimos años del reinado anterior, en el año 1804, eran cinco los Ministros jubilados^{***}.

En 1818 encontramos tres Consejeros jubilados, con las siguientes pensiones^{***}: don Justo María

^{***}. FAYARD, J., op. cit., pág. 134.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.591, núm. 10.

^{***}. Así criticaba Arias Teijeiro en sus Diarios las pensiones de los Consejeros: Días 16-20 de abril de 1828: "Todos se quejan menos los Consejeros, Directores, etc., a quienes dan 50.000 reales; éstos, aunque se jubilen al día siguiente de su nombramiento, perciben 40.000 reales. Los demás jubilados no cobran la mitad hasta 25 años de servicio. Fuera sueldos personales, montepíos, etc. El tiempo doble, abonado a los militares por la Guerra de la Independencia, anulado. En fin, bastaba esto para promover la revolución. ¡Pobre España!" (ARIAS TEIJEIRO, J., "Diarios", tomo I, pág. 99).

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expediente núm. 6.

^{***}. Guía de Forasteros de 1804.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333, expediente núm. 11.

Ibar Navarro percibía 40.000 reales y 14 maravedís; don Pascual Quílez y Talón cobraba 26.666 reales y 22 m.; y don José Navarro Vidal la cantidad de 18.000 reales y 22 m. De la confrontación de estos datos se observa que la pensión de un Consejero variaba según los casos. La explicación es muy sencilla. En el decreto de jubilación quedaba especificada la cuantía de la misma. Era más elevada en aquellos casos en que el Monarca quería premiar una vida de fieles servicios. Por el contrario, en las jubilaciones políticas se establecía una pensión mínima -la mitad del sueldo-, a la vez que se solía confinar o desterrar al ministro jubilado.

Como ya apuntábamos, en 1824 excepcionalmente fueron jubilados un buen número de Consejeros: los Sres. Riega, Puig, Contreras, Marín, González Carrillo, Villagómez, Torres-Cónsul, Hermosilla, Larrumbide y Adell****; don Ramón López Pelegrín y don José Montemayor****. Así vemos que del 6 de febrero al 4 de marzo de 1824 habían sido jubilados todos los Ministros de las Salas de Justicia y de Provincia menos don Tadeo Soler****. En los meses siguientes parece fue jubilado algún Consejero más. Y sin embargo, dos años después eran tan sólo cinco los Ministros jubilados que había en el Consejo, al parecer por rehabilitación de varios de ellos****.

Otra noticia del año 1.828 nos da idea de las pensiones que percibían los Ministros del Consejo que estaban entonces en situación de retiro: don Ramón López Pelegrín gozaba de 40.000 reales de pensión, según había quedado fijado por Real orden de 4 de julio de 1.826; a don Felipe Sobrado se le había concedido la mitad de la dotación de su plaza: en total, 27.501 reales; don Alejandro Dolarea percibía 20.000 reales y de don José Montemayor sabemos que cobraba por la Dirección General del Tesoro****.

****. A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.658, expediente núm. 15; también legajo 3.659 expediente núm. 21.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.659 núm. 21.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, Consulta de 2 de noviembre de 1824. El motivo de esta medida fue una depuración política propuesta por el recientemente nombrado Gobernador del Consejo Sr. Martínez de Villela, tras una sugerencia en esta línea por el propio Monarca.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expediente núm. 6. Sobre este particular, vid. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

Aprobada la jubilación de un Ministro por Real Decreto, el Consejo pleno mandaba recoger los papeles que obrasen en poder del Ministro jubilado"". Previamente se les enviaba un oficio en el que se les comunicaba esta resolución y la fecha de recogida de la documentación.

También existieron supuestos de revocación de una jubilación decretada. Así, don Pascual Quilez Talón había sido suspendido por las Cortes y en 1814 solicitó su rehabilitación en el Supremo Tribunal. Entonces fue jubilado con todos los honores y 2/3 de su sueldo como pensión. No conforme con esta medida, y considerando que sus demás compañeros habían continuado en activo en el Consejo, el 16 de febrero de 1.816 volvía a solicitar su rehabilitación. El Consejo le concedió la plaza, ya que había vacante"". También otro ejemplo lo tenemos en el año 1.829, en que fueron repuestos en sus cargos los Ministros jubilados don Ramón López Pelegrín y don José Montemayor"".

Los Ministros jubilados conservaban todos los privilegios y honores de su cargo. Existía también la peculiaridad, prevista en la Ley IX, Título VIII, Libro IV de la Novísima Recopilación, de que un Ministro jubilado continuara con un proceso comenzado hasta su conclusión: a los Ministros separados de sus empleos que hubiesen visto un proceso les corresponde votarlo y sentenciarlo, aunque interin fueran jubilados. Bien es verdad que esta regla se aplicaba a los Ministros jubilados, pero no a los separados. Sin embargo, si un Ministro jubilado votase indebidamente un pleito, podría elevarse la correspondiente reclamación e impugnación al Rey"".

Caso distinto de la jubilación era la llamada "Cédula de Preeminencia" o dispensa de asistencia al Consejo, por las cuales los Ministros seguían en activo, pero estaban dispensados de acudir al Consejo, habitualmente

****. Real decreto del Consejo pleno de 22 de abril de 1824: "Recójase de poder de los Sres. Ministros de este Supremo Tribunal a quienes S.M. ha tenido a bien jubilar todos los papeles que obren en su poder pertenecientes a él y a las Comisiones y encargos que les estaban confiados para que puedan dárseles el destino correspondiente; y a este efecto se les pase respectivamente el oficio oportuno". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm. 15; también en el legajo 3.659 núm. 21).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.591, expediente núm. 10.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expediente núm. 6.

****. A.H.N., Consejos, Consulta de Oficio de 2 de noviembre de 1824.

por motivo de enfermedad****. También aquí podríamos incluir el curioso caso del Ministro Sierra, a quien por su seguridad personal el Consejo recomendó su salida de la Corte el 23 de septiembre de 1808****.

c) Separación

Al hablar de separación, nos referimos a la remoción de un Consejero por motivos de interés político, que ya hemos visto en parte al tratar de las formas de jubilación. Durante el reinado de Fernando VII encontramos varios ejemplos de estas medidas.

Por motivos políticos se podía anticipar la jubilación de un Consejero sin existir una causa objetiva que diera motivo a ello. Un claro ejemplo fueron algunas de las jubilaciones de Ministros del Consejo efectuadas por Godoy**** en octubre de 1798, 1799 y agosto de 1802 y que fueron reparadas y los Consejeros restituidos al Consejo por Decreto de 23 de marzo de 1808****, de 23 del mismo mes, y

****. Por ejemplo, la licencia a don Francisco Javier Adell para retirarse temporalmente a los Baños de Sacedón en 1827 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.732, núm. 22).

****. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521, expediente núm. 41.

****. Por ejemplo, el legajo 51.433 de Consejos Suprimidos (A.H.N.) estudia las jubilaciones de Consejeros de Castilla que tuvieron lugar en 1799.

****. A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521, expediente núm. 1. Otro ejemplo fue la jubilación política de los Ministros del Consejo Colón y Lardizábal. En junio de 1794 fueron separados de sus plazas con la mitad del sueldo. En aquella ocasión se les mandaba también que saliesen inmediatamente de Madrid: el primero a Burgos, "donde fijará su residencia sin poder salir de ella sin expresa Real Orden, permitiendo al segundo elegir un pueblo donde resida, con tal que esté a distancia de veinte leguas de Madrid y Sitios Reales...Aranjuez, 4 de junio de 1794. El Duque de Alcudia" (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 4). También don Antonio Cano Manuel fue Ministro del Consejo bajo Carlos

de 3 de abril de 1808. Un total de siete Ministros fueron rehabilitados en aquella ocasión, uno de ellos entonces ya fallecido****.

En otra ocasión la separación tuvo carácter de suspensión: fue la decretada por las Cortes Generales y Extraordinarias en Cádiz, el 15 de octubre de 1811, sobre catorce Ministros del Consejo Real que elaboraron una presunta consulta acerca de la autoridad de aquéllas****. En aquella ocasión, la suspensión tuvo un carácter de separación temporal, hasta que un Tribunal especial de las Cortes diera sentencia definitiva sobre el asunto.

Fueron separaciones políticas las que se hicieron a los Ministros del Consejo de Castilla que huyeron con el Gobierno de José Bonaparte a finales de julio de 1.808. También tuvieron visos de separación política los retardos en la rehabilitación de algunos Consejeros de Castilla, tras el restablecimiento del Consejo en 1.814. Por el contrario, no consta ninguna declaración de impurificación política tras el Trienio Liberal****. De éstas separaciones políticas se ha tratado más extensamente en el apartado correspondiente a la Evolución Histórica del Consejo de Castilla.

La Real Cédula de 25 de febrero de 1.795 declaraba que los Ministros de los Consejos y demás Tribunales a quienes el rey hubiese separado de sus empleos no debían votar en los pleitos que hubieran visto antes de su separación, pero sí los Ministros jubilados, si se hallaban en disposición de hacerlo****.

IV y sufrió entonces prisión y destierro. Como se sabe, Cano Manuel llegaría a ser Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (legajo 11.887 núm. 4).

****. El Marqués de los Llanos (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 1). Es por todo ello que los historiadores hablan de una animadversión o enfrentamiento del Consejo de Castilla con el Príncipe de la Paz. Es significativo que los Ministros perseguidos por el Valido fueran inmediatamente rehabilitados tras la accesión al Trono de Fernando VII, gran enemigo de Godoy.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.129, expediente núm. 1. La sentencia final absolutoria fue dictada por un Tribunal Especial creado por las Cortes y fue firmada en Cádiz con fecha 29 de mayo de 1812.

****. A.G.P., Papeles Reservados de Fernando VII, tomo 24; A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040, expediente núm. 2.

****. A.H.N., Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 3.404.

d) Fallecimiento

En el caso de fallecimiento de un Ministro del Consejo, estaban prescritas por el protocolo las características de las honras fúnebres. Así nos lo refería Martínez de Salazar en sus Noticias del Consejo"":

"Cuando fallece alguno de los Señores Ministros del Consejo se da noticia en él por el Escribano de Cámara de Gobierno y previene a los porteros para que avisen a los Escribanos de Cámara y Relatores la hora y paraje donde se hace el entierro: concurren a la casa mortuoria y lo mismo los señores Ministros más modernos, y en el tiempo oportuno los porteros toman la caja donde está el cadáver y la entregan a los señores Ministros, quienes la conducen hasta la puerta de la última pieza. Allí la reciben los Escribanos de Cámara y Relatores, y llegan con él hasta la puerta de la calle, y los porteros le introducen en el coche, le sacan de él en la puerta de la iglesia, le reciben los Escribanos de Cámara y Relatores, se agregan los señores Ministros y entre todos se le pone en el féretro y en la misma forma se le conduce a la bóveda. E iguales ceremonias se observan cuando fallecen las mujeres de los señores Ministros, pero siendo en público, si no concurren los Hermanos de la Orden Tercera, llevan el cadáver en hombros los Escribanos de Cámara y Relatores, y en la puerta de la iglesia le entregan a los señores Ministros hasta llegar al féretro, en la misma conformidad que se ejecuta con los señores Presidentes.

Se da aviso también a la Sala de Alcaldes de Corte, quienes concurren a la iglesia y entran en el circo con capa, sombrero y vara. Y el señor Ministro más antiguo del Consejo de los que allí concurren ocupa el primer lugar en el banco travesero, en medio de los testamentarios o personas que hacen el duelo; y los asientos y bancos que forman el circo los ocupan indistintamente los señores Ministros togados, Marqueses, Grandes de España y personas de graduación que asisten al entierro".

El Presidente o Gobernador del Consejo enviaba a las personalidades correspondientes una invitación para el funeral oficial organizado por el Consejo. He aquí

"".. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 656 y 657.

el texto de una de ellas, enviada por el Presidente del Consejo con motivo del funeral de don Nicolás María de Sierra, fallecido el 6 de julio de 1817:

"El Duque del Infantado, Presidente del Consejo, por sí y a nombre de éste,

Suplica a V.S. se sirva encomendar a Dios al Sr. D. Nicolás María de Sierra, que santa gloria haya, y asistir a su funeral que se ha de celebrar en la iglesia parroquial de san Sebastián el martes 8 del corriente al anochecer; y en que recibirán merced"".

Por auto del Consejo de 4 de abril de 1712 se mandaba que falleciendo cualquiera de los señores del Consejo, se procediese por el Ministro más antiguo de acuerdo con el Presidente o Gobernador, a tratar del orden que más conveniese para recoger y poner en recaudo los papeles que dejare el señor difunto. Una vez recogidos los

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.267 núm. 57. Este expediente contiene un interesante relato de lo operado con motivo del fallecimiento del Ministro Sierra: "El día 6 de julio de 1817 falleció don Nicolás María de Sierra. El día 7 el Duque del Infantado envió un oficio manifestando su sentimiento para que se hiciese presente en el Consejo. También comunicó el Decano en funciones Lardizábal una orden del mismo día para la recolección de los papeles que hubiesen quedado en la casa mortuoria.

Se trató con los herederos de la custodia y recolección de los mismos, que se hiciese de ellos inventario y entrega correspondiente. También quedó entendida la esquila del Consejo para el funeral y la celebración del mismo el día 8.

Todo se hizo presente en el Consejo pleno el día 8 de julio y quedó en asistir a él en forma de ceremonia como ha sido costumbre al anochecer, mandando se avisase a la Sala para el mismo fin, dándose aviso a los Sres. que no hubiesen asistido en este día, concurriendo igualmente los Escribanos de Cámara, Relatores y Porteros. Se previno al de estrados que cuidase de su ejecución en lo que correspondiese.

El Consejo y Sala de Alcaldes se reunieron a la hora prevenida. Se presentó el Sr. Presidente con vestido negro y ocupando su preeminente lugar mandó que inmediatamente se diese principio al funeral, al que concurrió un numeroso concurso de Sres. Ministros de los demás Consejos y personas de distinción. Concluido el oficio se puso en pie S.E. y el Consejo y el Sr. Presidente dio lugar para que los concurrentes hiciesen la demostración de su asistencia, correspondiendo S.E. con demostración de gratitud a aquella atención, con lo que salió el Consejo acompañándole hasta la puerta de la iglesia, y después de ella le acompañaron todos los subalternos hasta que tomó el coche..." (Informe de don Bartolomé Muñoz, Escribano de Gobierno del Consejo, en 8 de julio de 1817).

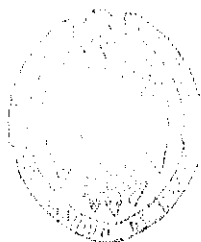
papeles se dictaba providencia destinando cada uno de los expedientes al lugar que le correspondiese. Igualmente se enviaban oficios a los interesados informando del destino que se hacía de tal expediente"".

Por otro lado, en el Consejo Real existía la costumbre de tributar las mismas honras fúnebres cuando fallecía la esposa de un Consejero de Castilla.

También estaba previsto legalmente la concesión de pensiones a las viudas y huérfanos de los Consejeros, desde la creación del Montepío por Carlos III en 1763"". La aportación del capital fue inicialmente prestada por el Monarca y posteriormente se sostenía con los descuentos que se hacían de los salarios de los Ministros en activo.

En cuanto a la tramitación de estas pensiones, los interesados, una vez ocurrido el óbito se dirigían a la Junta de Pensiones Civiles de Ministerio de Hacienda, donde se abría un expediente tras la presentación de los correspondientes documentos. Posteriormente la Junta declaraba su acuerdo definitivo sobre la concesión o denegación de la misma y se trasladaba al Monarca, quien normalmente la aprobaba y se promulgaba una Real Orden.

En cuanto a la percepción de la pensión, aunque la prestación tenía carácter anual, sin embargo la Tesorería General pagaba por mensualidades.



BIBLIOTECA
DE DERECHO

"". A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.453 núm. 48: "Fallecimiento del Sr. Vilches. Recogimiento de papeles"; también en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089 , expediente número 8, encontramos el procedimiento de recogida de papeles a la muerte del Ministro don Jerónimo Antonio Díez, fallecido el 2 de mayo de 1815. Se hizo un inventario de oficio de los papeles existentes: hecho éste, unos se mandaron al Archivo del Consejo, otros al Ministerio de Gracia Y Justicia, otros al Ministro nombrado para suceder en la comisión que tenía el difunto, etc.

"". Ley XV, Título II, Libro IV de la Novísima Recopilación.

FISCALES DEL CONSEJO

1. Introducción

"Los Señores Fiscales... defienden y promueven las causas y pleitos en que tiene interés la Corona, el Real Erario y la vindicta pública"^{***}.

Lázaro Dou estudió en sus "Instituciones"^{****} este importante ministro de nuestros tribunales. Lo definía como "una persona autorizada para pedir en nombre del público lo que a él le interesa en lo que toca a la jurisdicción respectiva". Y a ésta corresponde mandar que se oiga al Fiscal siempre que un asunto afecte al bien o interés de la causa pública.

Los Fiscales tenían un importante papel dentro del Consejo de Castilla. Les estaba encomendada la defensa de los derechos del Rey y de la sociedad^{****}. Era su misión "pedir y demandar, acusar y defender todas aquellas cosas, y cada una de ellas que convinieren (al servicio del

^{***}. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 94.

^{****}. DOU, L., "Instituciones del Derecho Público General de España, con noticia del particular de Cataluña", tomo III, pág. 22.

^{****}. FAYARD, J., "Les membres du Conseil de Castille...", pág. 164.

Monarca), y a la guarda y defensa del (Real) Patrimonio y ejecución de la justicia" real^{***}.

Los Fiscales o Procuradores Fiscales del Consejo de Castilla entendían habitualmente en todos los asuntos importantes tratados por el Consejo, de los que eran sus informadores ordinarios^{***}, y formaban parte de sus cinco Salas -incluyendo aquí también la Sala de Alcaldes^{***}-, aunque nominalmente estuvieran asignados a la Sala primera de Gobierno. También eran miembros de la Cámara de Castilla^{***}. De esta manera, tras los Consejeros de Castilla eran sin duda los magistrados más importantes del Consejo Real^{***}.

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 expediente núm. 51.

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág.73.

^{***}. Cfr. por ejemplo A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 51.

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág.297.

^{***}. Los Fiscales del Consejo han sido hasta la fecha una institución relativamente poco conocida dentro de las del Consejo. A ello ha contribuido también el hecho que la mayor parte de los expedientes de la Sala de Gobierno del Consejo referidos a los Fiscales no se encuentran en sus legajos. La publicación de un inminente trabajo del profesor S.M. Coronas sobre estos Fiscales del Consejo de Castilla, despejará la mayor parte de las interrogantes sobre esta institución.

2. Nombramiento. Su número.

"El ejercicio en el Consejo Supremo de Justicia del procurador fiscal de S.M. es una plaza de mucho lustre y confianza y siempre la han ocupado y ocupan personas de mucha calidad, letras y partes personales, que así conviene para tal puesto y son escojidos entre muchos cuando se deve proveer"***.

El nombramiento de un Fiscal del Consejo Castilla era realizado por el Rey. La Cámara de Castilla realizaba el correspondiente estudio de los candidatos más idóneos, presentando la correspondiente terna. Esta terna era consultada por el Consejo Real al Monarca, quien realizaba la designación. Una vez designada la persona que habría de ocupar la vacante, tras el correspondiente informe y propuesta de la Cámara, el Monarca comunicaba su decisión al candidato. Al igual que ocurría con los Consejeros de Castilla, los Fiscales del Consejo recibían una carta del Rey que informaba al candidato de los deseos del Monarca****.

****. MORIANA, J. de, "Discursos generales y particulares de el gobierno general y político de el Consejo Real y Supremo de Justicia de estos Reynos de Castilla y León y ceremonias de él, advertidos por Juan de Moriana, portero de Cámara de S.M., que sirve en el mismo Consejo, y en el de la Cámara y estado de Castilla, desde el año de 1614 hasta el de 1654, que es quando se cerró", publicado por S. DE DIOS en "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", op. cit., documento XXXIX, pág. 273.

****. He aquí un modelo de esta Real carta: "Por quanto por Decreto señalado de mi Real mano de..., he venido en nombrar à vos NOMBRE para la Fiscalía de mi Consejo, que dejará vacante NOMBRE (por su promoción à plaza de él). Por tanto, confiando de vuestra suficiencia, fidelidad y letras, por la presente mi voluntad es, que durante ella seáis mi Procurador Fiscal y Promotor de mi Justicia en mi Casa y Corte, y en el dicho mi Consejo para todos los negocios y dependencias, con calidad de que hayáis de servir esta Fiscalía tres años por lo menos antes de ser promovido a Plaza de él: Y que como tal mi Procurador Fiscal, podáis

Campomanes cifraba las condiciones de un buen Fiscal del Consejo en las siguientes: "Amor al Rey, literatura universal y fertilidad de ideas públicas". Debía ser "de genio laborioso y feliz explicación, espíritu de imparcialidad y firmeza y edad todavía robusta para sufrir el trabajo"^{***}.

Bajo Fernando VII ninguno de los doce Fiscales de Castilla que parece hubo en total en su reinado pertenecía a la alta nobleza. Eran básicamente juristas que tras una larga carrera profesional accedían a estos relevantes puestos de la Administración. Eran expertos en Derecho, ya que sobre ellos recaía el peso de los dictámenes y provisiones importantes del Consejo. Nunca se tomaba una resolución importante sin oír antes el dictamen del Fiscal.

Tras la consulta de las distintas Guías de Forasteros y otros expedientes del Archivo Histórico Nacional de Madrid podemos intentar reconstruir el plantel de Fiscales con que contó el Consejo de Castilla bajo Fernando VII. Fueron los siguientes: don Simón de Viegas, don Jerónimo Antonio Díez, don Nicolás María Sierra, don Antonio Cano Manuel (Consejo reunido), don Manuel de Torres-Cónsul, don Ramón López Pelegrín, don Francisco Gutiérrez de la Huerta, don José Hevia y Noriega, don Mateo Zendoquiz, don José García de la Torre, don Ramón Feliú, don Juan de la Dehesa y don Manuel Encina (los tres del Supremo Tribunal de Justicia), don Juan Antonio Heredia, don Pedro Pérez Juana y don Francisco Redondo.

pedir y demandar, acusar y defender todas aquellas cosas, y cada una de ellas que convinieren a mi serbicio, y a la guarda, y defensa de mi Patrimonio y execución de mi Justicia, según y como lo han hecho, y pudieron y debieron hacer, así el referido NOMBRE, como los otros Procuradores Fiscales que han sido y son en mi Casa y Corte, y en el expresado mi Consejo. Y mando al Gobernador, y los del dicho mi Consejo, reciban de vos el juramento y solemnidad que en tal caso se acostumbra, el qual así hecho os reciban, hayan y tengan por mi Procurador Fiscal, y ellos y todos los Jueces de mi Corte, usen con vos el dicho oficio, y todo lo a él anejo y concerniente, según y como lo han hecho y debían hacer con los otros mis Procuradores Fiscales..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 51).

***. MOLAS RIBALTA, P., "La España de las Reformas", op. cit., Historia General de España y América, RIALP, tomo X-2, pág. 95. Ya anteriormente Moriana, en el siglo XVII, los había descrito así: "Han de ser personas de calidad, letras, que pasen de 28 años, que hayan servido de Fiscales, que hayan servido a los Señores del Consejo y se hayan destacado por su talento" (MORIANA, "Fuentes...", op. cit., págs. 80 y ss.).

Casi todos los Fiscales del Consejo en este periodo acabarían accediendo a una plaza de Consejero de Castilla, y algunos como Sierra o Cano Manuel llegaron a puestos aún más importantes****.

En cuanto al número de estos Fiscales, varió según las épocas. Por el Decreto de 9 de junio de 1769 se había aumentado a tres el número de Fiscales del Consejo de Castilla. Hasta entonces la división del trabajo entre los dos Fiscales se hacía según los criterios de lo civil y lo criminal. Desde aquella fecha y hasta la supresión del Consejo en 1820, serían tres los Fiscales del Consejo Real****, con el paréntesis del llamado Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, que tuvo sólo dos Fiscales****.

A partir de 1.823 la Fiscalía del Consejo participó de los recortes de empleados en todas las oficinas del Consejo****. Durante el llamado Trienio Constitucional había fallecido uno de los Fiscales del Consejo, don Francisco Gutiérrez de la Huerta****. Tras el restablecimiento del Consejo en 1823, una de las Fiscalías del Consejo permanecería ya siempre vacante hasta el año 1832, en que volvemos a encontrar tres Fiscales****. El 16 de diciembre de aquel año tomó posesión como Fiscal tercero

****. Nicolás María Sierra llegó a ser Secretario de Gracia y Justicia y Antonio Cano-Manuel fue Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

****. Ver, por ejemplo, A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 51.

****. Cfr. Guía de Forasteros del año 1.812, pág. 125.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm. 5; Guías de Forasteros de los años 1.824 a 1.832.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975, expediente núm. 45.

****. Decreto de S.M. la Reina Gobernadora D^a María Cristina, de 25 de octubre de 1832: "Deseando yo que el Consejo de Castilla, célebre en otro tiempo en los fautos de la Magistratura Europea, por su circunspección, rectitud y sabiduría, recobre todo su antiguo lustre y esplendor, y sea como en épocas de gloriosa memoria baluarte del Trono Español y apoyo firme del Estado, he venido en uso de las facultades que mi muy caro amado Esposo me tiene conferidas, en restablecer la plaza tercera de Fiscal y nombro para ella al que lo es actualmente de la Audiencia de Valencia, don Francisco Redondo, reservándome para más adelante reintegrar a dicho Supremo Tribunal en el pleno goce y posesión de todas sus atribuciones según le competen por las leyes y otras soberanas resoluciones..." (A.H.N., Consejos, Libro de Plazas núm. 741).

del Consejo don Francisco Javier Redondo, hasta entonces Fiscal de la Audiencia de Valencia****. Por tanto, desde 1823 hasta 1832 el número de Fiscales del Consejo quedará reducido a dos miembros**** y desde esta fecha habría nuevamente tres Fiscales, hasta la definitiva supresión del Consejo en 1.834****.

3. Juramento y toma de posesión

El Fiscal designado por el Rey debía prestar juramento ante el Consejo, en la Sala Primera de Gobierno. El juramento prestado por los Fiscales era algo diferente del que realizaban los Consejeros:

"Que juráis a Dios y a esta señal de la Cruz, y a las palabras de los santos cuatro Evangelios que usaréis bien y fielmente de este encargo que os es encomendado, guardando el servicio de Dios y de S.M. y el secreto del Consejo, y las leyes y ordenanzas del Reino, y que procuraréis y seguiréis los pleitos y causas reales tocantes a la preeminencia y jurisdicción real y a su hacienda y patrimonio, y tendréis cuidado y diligencia de saber por todas las vías que pudiereis de las cosas que

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expte. núm. 6. En 1832 eran Fiscales del Consejo: don Juan Antonio Sánchez Heredia, Fiscal 1; don Pedro Pérez Juana, Fiscal 2; don Francisco Redondo, Fiscal 3.

****. Este dato queda sobradamente confirmado por varios expedientes del A.H.N.: Sala de Gobierno, legajo 3.698, núm. 6; legajo 3.658, núm. 5; legajo 3.781, núm. 11. El motivo de esta vacante podría residir con toda probabilidad en la economía de empleados en toda la Administración, y concretamente en el Consejo, consecuencia del Real Decreto de 27 de noviembre de 1823 y Reales Ordenes de 18 de mayo de 1824 y de 3 de diciembre de 1825 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11).

****. Guías de Forasteros de los años 1.833 y 1.834.

convenzan para el derecho de S.M., y que los pleitos no los dejaréis indefensos y os informaréis de las cosas que están tomadas de la Corona Real, y las pediréis y demandaréis y avisaréis de ello a S.M. y a los su Consejo, y que no dejaréis de pedir ni acusar los pleitos fiscales que justamente se debieren seguir, y los fenecer, por deudo ni amistad que tengáis con ningunos Consejos, ni Grandes, ni caballeros, ni otras personas. Y en todo haréis lo que buen Fiscal de S.M. debe y es obligado hacer.

Responde: Sí, juro.

Si así lo hiciéreis, Dios os ayude y si no os lo demande mal y caramente, como aquel que jura su santo nombre en vano.

Responde: Amén"".

Un Fiscal de Castilla debía prestar juramento ante el Consejo aunque con anterioridad ya lo hubiese prestado al ingresar en otro órgano de la Administración. Sin embargo, el juramento prestado como nuevo Fiscal ante el Consejo sí que le eximía de volverlo a prestar en el caso de pasar a ser Consejero de Castilla. Por otro lado, estaba exento de prestar juramento de Ministro honorario del Consejo cuando adquiría este rango por sus tres años en el desempeño de la Fiscalía.

En cuanto al procedimiento de aquella jura, era muy similar al de los Consejeros y Alcaldes de Corte. El Escribano de Gobierno lo hacía presente en el Consejo pleno tras haber indicado si había o no semanería. Informado el Consejo pleno"", el que lo presidía mandaba que entrase. Seguidamente salía el portero e iba a la Sala segunda de Gobierno, donde aquél esperaba. Le acompañaba a la Sala primera de Gobierno. El Fiscal se situaba a la derecha del Escribano de Gobierno, quien leía el título con la gorra puesta"". Todo el acto se celebraba con la asistencia también de los Relatores y Escribanos de Cámara del Consejo. Seguidamente el portero acompañaba al nuevo Fiscal a la Sala segunda de Gobierno y el Escribano de Cámara traía y subía

""". DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1808", pág. 73. Cita como fuente el A.H.N., Expedientes Reservados, legajo X, núm. 32.

""". "Señor, D. N. está a jurar la plaza del Consejo" (ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", págs. 28 y 29).

""". Se la quitaba cada vez que nombraba a Dios, al Rey, al Príncipe o al Consejo (ESCOLANO, op cit., pág. 29).

al estrado el título y lo entregaba al Presidente, Gobernador o Decano. Este lo recibía en pie, al igual que lo estaban todos los asistentes, lo ponía sobre su cabeza, lo besaba y lo devolvía al Escribano de Gobierno diciéndolo: "Cúmplase lo que S.M. manda, y entre a jurar". El portero volvía a traer al Fiscal y lo ponía a la derecha del Escribano de Gobierno, quien le recibía juramento. A continuación tomaba asiento en el lugar que le correspondía".

La figura del Fiscal era también, como hemos apuntado, un cargo de entrada en el Consejo, previo a la obtención de una plaza de Consejero". Era frecuente, como ya hemos visto, que un Fiscal del Consejo pasara pronto a ocupar un sillón en el Consejo". Floridablanca encarecía el ascenso de los Fiscales a Consejeros "por la multitud de negocios que han pasado por sus manos, el interés que estaban acostumbrados a tomar por regalías y bienes públicos y la particular aptitud que regularmente se busca para estos empleos".

La inmediatez con que un Fiscal solía pasar de la Fiscalía a una plaza de Consejero dificultaba la continuidad necesaria en estos importantes empleos públicos. De ahí que Felipe V, en el decreto fechado en San Ildefonso

****. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo", págs. 28 a 30.

****. "Y así de los que he conocido en el tiempo que a que sirvo, que pasan veinte y ocho años, an salido de fiscales para señores del Consejo y manifestando sus talentos en grandes juezes y consumados consejeros" (J. de MORIANA, "Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo", op. cit., en DE DIOS, "Fuentes...", pág. 273).

****. Es indicativo que la Ley concediera al Fiscal del Consejo los honores de Consejero "si a los tres años de nombramiento no había sido designado Consejero efectivo".

****. MOLAS RIBALTA, P., "La Administración española en el siglo XVIII", en Historia General de España y América, RIALP, tomo X-2, "La España de las Reformas", págs. 92-98. Muchos Fiscales del Consejo terminaban ascendiendo a un puesto de Consejero. Ejemplos en el reinado de Fernando VII tenemos varios. Así, don Manuel de Lardizábal, don Jerónimo Antonio Díez, don Nicolás María Sierra, don José de Hevia y Noriega, don Manuel de Torres-Cónsul y otros, comenzaron sus carreras en el Consejo de Castilla como Fiscales. El caso de don Nicolás María Sierra nos ofrece además el interés que siendo Fiscal del Consejo fue promovido el 6 de marzo de 1.810 al cargo de Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, para pasar más tarde a un puesto de Consejero de Castilla (GÓMEZ-RIVERO, R., "Los Orígenes del Ministerio de Justicia", pág. 47).

el 31 de agosto de 1743 hubiera concedido los honores y antigüedad del Consejo a sus Fiscales, con relevación de la media anata al acceder en propiedad al puesto de Consejero efectivo "".

Prestado el correspondiente juramento, desde ese momento era ya considerado Fiscal de Castilla, con los correspondientes derechos, prerrogativas y honores. Seguidamente se debían realizar algunos trámites burocráticos. Así, de la real carta de nombramiento se debía tomar la razón en las Contadurías Generales de Valores y Distribución de la Real Hacienda, a la que estaba agregada la del derecho de la media annata"". Debía registrarse el nombramiento igualmente en el Libro General de Mercedes y en el Montepío de Viudas y Pupilos del Ministerio.

4. Competencias

"Los Procuradores o Fiscales del Consejo de Castilla entendían normalmente en todos los asuntos importantes, y podrá comprenderse el alcance de su poder por el hecho de que eran miembros de las cinco salas del Consejo. Asimismo participaban en una asamblea menos numerosa denominada Cámara de Castilla; finalmente porque tenían derecho a encargarse de todos los asuntos que ellos juzgaran conveniente"". "

La misión fundamental de un Fiscal del Consejo era la de estudiar los asuntos importantes sometidos al Consejo y emitir sus dictámenes, sobre los cuales

"" Ley V, Título XVI, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"". En la Contaduría General de Valores debía pagarse el derecho de la media annata, requisito indispensable para que tuviera virtualidad el real nombramiento (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 51).

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", op. cit., pág. 297.

posteriormente decidían y votaban los Consejeros de Castilla^{***}. Aparte de ello debían velar por los intereses de la causa pública en la vindicta de los delitos, y los del Estado en todos los casos^{****}. No eran por tanto, como llega a afirmar Desdevises, simplemente "los relatores ordinarios de todos los asuntos graves"^{*****}.

En realidad, propiamente en la mayoría de los casos los dictámenes no eran elaborados por los Fiscales, sino que éstos se apoyaban en su labor en los Agentes Fiscales. Los Fiscales eran así los jefes de unos departamentos u oficinas -las Fiscalías-, que eran pieza clave en el engranaje orgánico del Consejo. No consta que existieran empleados subalternos específicos de estas Fiscalías -aparte de los propios Agentes Fiscales-, aunque sí se apoyaban para su labor en otros empleados del Supremo Tribunal, como los Relatores o las Escribanías. Los Fiscales y sus Agentes sí debían contar con un equipo de escribientes contratados a su cargo.

Por otro lado, cada Fiscalía o departamento debía tener sus reuniones o despachos para estudiar y aprobar los dictámenes a presentar. Parece lógico pensar que estos dictámenes debían ser aprobados exclusivamente por el Fiscal jefe, con cuya firma se presentaría al Consejo de Castilla. La responsabilidad de los dictámenes sería así exclusivamente suya. Alguna fuente nos habla también de despachos de tres Fiscales, quizás para resolver los

^{***}. ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", pág. 125. Del estudio de los abundantísimos dictámenes fiscales conservados entre la documentación del Consejo de Castilla, en el Archivo Histórico Nacional, se observa que en una gran mayoría de los casos el Consejo sigue sus opiniones. Sólo en contadas ocasiones discrepan los Consejeros y se emite una opinión diferente. Ello también es muestra del prestigio y cualificación profesional de estos altos magistrados del Consejo. Ejemplos de dictámenes seguidos fielmente por el Consejo tenemos en A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.074, consulta del 3 de febrero de 1815 sobre reglas para el uso del papel sellado; o el dictamen recogido en el legajo 3.975 núm. 48 (A.H.N., Consejos), de mayo de 1829, en el que los Fiscales propugnaron aceptar la petición del Escribano de Gobierno Pinilla para poder firmar las reales Cédulas y circulares expedidas por el Consejo con firma impresa.

^{****}. DOU, R.L., "Instituciones del Derecho Público General de España", tomo III, pág.25.

^{*****}. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 73.

dictámenes de más envergadura y relevancia"".

De todas las operaciones en que intervenía un Fiscal se debía levantar asiento en un libro especial guardado por los Escribanos de Cámara"". Allí anotaban éstos todos los asuntos pasados a los Fiscales. De estos libros se extraían los informes periódicos que semanalmente debían ser remitidos al Consejo de los asuntos pendientes en las Fiscalías"". Igualmente se basaba el Fiscal en estos libros a la hora de elaborar sus memoriales e informes"".

Ya hemos visto que tras la reforma aprobada por el Rey Carlos III el 19 de junio de 1769, fue creada una tercera plaza de Fiscal del Consejo. Con ello desaparecía la tradicional distribución de competencias según el criterio de lo civil y lo criminal. A partir de este momento la asignación de competencias se realizará por territorios y no

"". Así, en el legajo 6.076, A.H.N., consulta de oficio de 30 de marzo de 1816, al hablar del mal estado de salud del Agente Fiscal Alfaro, señalaba lo siguiente: "otra consecuencia del mal estado de Alfaro es la confusión y extravío de los expedientes. Así el Fiscal segundo ha prescindido enteramente de su intervención en el despacho de los de su departamento, y todos habrán de hacer lo mismo 'en los despachos de tres Fiscales', cuya trascendencia y gravedad va haciendo cada vez más interesante y deseado el reemplazo de Alfaro".

"". Eran los llamados 'libros de conocimiento', en los que se asentaban los pleitos y expedientes remitidos al fiscal, agentes fiscales, a los procuradores o a los relatores. En realidad eran registros de los expedientes remitidos por las escribanías a estas oficinas.

"". Estos informes se pasaban con periodicidad semanal. Tenemos noticias de que en algunas épocas eran los sábados, en otras los lunes. Los legajos 2.881, 2882 y 2.883 de Sala de Gobierno (A.H.N., Consejos), tratan sobre estas listas semanales: "Expediente formado en virtud de Real Orden de 4 de marzo de 1800 en que S.M. ha resuelto que sea precisa obligación de todos los Escribanos de Cámara del Consejo pasar semanalmente lista a los Sres. Fiscales de los negocios que les corresponden y se hayan pasado a los Agentes Fiscales en la misma semana, y que concluido el año pase el Consejo a las Reales manos de S.M. noticia cierta de los negocios que existan sin despachar en poder de los referidos Agentes Fiscales".

"". Ley III, Título XVI, Libro IV de la Novísima Recopilación.

por materias"".

La distribución territorial de los negocios correspondientes a cada Fiscalía fue la siguiente:

1. Las provincias de Castilla la Vieja, con los territorios de la Chancillería de Valladolid y Audiencias de la Coruña y Oviedo correspondían a la primera Fiscalía;

2. A la segunda Fiscalía correspondían todos los negocios fiscales de las provincias de Castilla la Nueva, incluyendo los territorios de la Chancillería de Granada y Audiencias de Sevilla y Canarias.

3. La tercera Fiscalía se ocupaba de los asuntos fiscales de los Departamentos de Aragón, incluyendo los territorios de las Audiencias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca.

La primera Fiscalía no correspondía necesariamente al Fiscal más antiguo del Consejo. La conveniencia de evitar continuos traslados, en detrimento de la experiencia acumulada y del buen servicio al Consejo, imponía la regla de que cada Fiscal debía permanecer en la Fiscalía asignada de forma estable y sin traslados. No podía, por tanto, cambiar de departamento y administraba la misma circunscripción todo el tiempo que ocupara Fiscalía en el Consejo"". Los asuntos dudosos o indiferentes quedaban asignados al Fiscal más antiguo, según quedaba establecido por antigua costumbre.

"". Ley VII, Título XVI, Libro IV de la Novísima Recopilación. Esta reforma vino motivada por la búsqueda de una más pronta y conveniente expedición de los negocios. Una síntesis de la distribución territorial de las competencias que regía a principios del reinado de Fernando aparece en A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 51.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág.73. Esto explica también por qué en las Guías de Forasteros, al recogerse la relación de Fiscales según antigüedad, difiere frecuentemente el orden de las Fiscalías del que aquí hemos recogido. Así, por ejemplo, en la Guía de Forasteros de 1.817, aparecía como Fiscal más antiguo don Francisco Gutiérrez de la Huerta, que era "Fiscal de este Consejo y del de la Cámara por lo tocante a las provincias de la Corona de Aragón; el segundo Fiscal era don José de Hevia y Noriega, a quien correspondían "las provincias de Castilla la Vieja, Asturias, Galicia, Madrid y partido de Plasencia, con las provincias vascongadas"; y el tercer Fiscal don Mateo Sandoquis, a quien correspondían los territorios de la primera Fiscalía del Consejo: "los Reinos de Andalucía, Mancha, Cuenca, Murcia y el resto de Extremadura" (Guía de Forasteros de 1.817, pág. 76).

Aparte de esto, los tres Fiscales estaban encargados de despachar los asuntos de la Cámara correspondientes a sus respectivos Departamentos"".

Los asuntos de incorporación o reversión a la Corona, y otros que pudiera el Consejo estimar de gravedad, en Castilla los veían los dos Fiscales de estos Reinos, y los de la Corona de Aragón de igual naturaleza o gravedad, los veía el Fiscal de Aragón junto con el más moderno de los dos de Castilla. En casos excepcionales como hemos visto, por su gravedad, podían intervenir en el dictamen los tres

""". Guía de Forasteros de 1.808, pág. 73. Desde septiembre de 1786 se estableció, según se observaba ya desde tiempos antiguos, que los Fiscales del Consejo lo había de ser del Consejo de la Cámara. Debían despachar en ésta con igualdad los negocios respectivos al departamento que tenían señalados para el Consejo. Cada uno de ellos gozaría de los 11.000 reales que tenían de sueldo los ministros de la Cámara. También debían procurar que asistiese siempre alguno de los mismos Fiscales según establecieran entre sí, para que siempre hubiera al menos un Fiscal presente en la Cámara en el despacho de los asuntos. En principio no tenían derecho a voto en la Cámara, aunque el Rey podía conceder esta gracia al Fiscal que hallase acreedor a esta distinción. De esta manera los Fiscales del Consejo de Castilla desempeñaron también la Fiscalía de la Cámara de forma casi ininterrumpida hasta la primera supresión del Consejo de Castilla por Napoleón en diciembre de 1808.

Por Real decreto de 5 de junio de 1814 Fernando VII restableció el Consejo de la Cámara tal y como estaba en 1808. Declaró entonces el Monarca que los Fiscales del Consejo lo fuesen también de la Cámara, y que despachasen cada uno los asuntos que en las respectivas provincias de su encargo en el Consejo ocurriesen del Patronato Real y demás que pertenecían a la Cámara. Sin embargo, los Fiscales no disfrutaban entonces de ninguna de las ventajas de los Fiscales de la Cámara, ni siquiera del sueldo previsto de 11.000 reales, ni ayudas para papel y plumas, como en otras épocas. Los Fiscales reclamaron entonces al Consejo se les reconocieran las prerrogativas y emolumentos del Real decreto de Carlos III de 8 de septiembre de 1786, confirmado el 5 de junio de 1814 (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.078, consulta del 30 de agosto de 1816).

A consulta del Consejo de 30 de agosto de 1816, el Rey decidió que los tres Fiscales del Consejo, mientras lo fueren de la Cámara y como tales, despachasen en ella los negocios respectivos al departamento que tuviesen señalado por los del Consejo y gozasen cada uno de los mencionados 11.000 reales, sueldo de los Ministros de la Cámara. También pedía la Real resolución que diariamente acudiese a la Cámara alguno de los Fiscales, "según éstos arreglasen entre sí, para que se hallasen pendientes al despacho de los negocios" (A.H.N., Consejos Suprimidos, Libro de Plazas núm. 741).

Fiscales.

Esta distribución de competencias entre las Fiscalías no permaneció invariable hasta la definitiva supresión del Consejo en 1834. Tras la restauración del Consejo en 1823 y al permanecer vacante la Fiscalía de la Corona de Aragón, fue preciso hacer una nueva distribución de territorios entre los dos Fiscales, repartiéndose los de la Corona de Aragón. Así quedó entonces (25 de enero de 1824)***:

a) Don José de Hevia y Noriega no podía dejar según ley el repartimiento que le cupo a entrar en su destino, es decir, Castilla la Vieja, Asturias, Galicia, Madrid, partido de Plasencia con las provincias vascongadas y Navarra. Entonces, de los territorios de la Corona de Aragón le fueron encomendados Cataluña y Baleares;

b) Don Juan Antonio de Heredia eligió el despacho de los territorios de los Reinos de Andalucía, la Mancha, Cuenca, Murcia, el resto de Extremadura e Islas Canarias. De la Corona de Aragón le correspondió Aragón y Valencia****.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 expediente núm. 5. El 25 de enero de 1.824 los dos Fiscales del Consejo remitían una instancia relativa al reparto de negocios entre ambas Fiscalías: "Los dos Fiscales de S.M., habiendo conferenciado sobre la distribución de negocios pertenecientes a su oficio, teniendo presente que el primero no puede dejar con arreglo a la Ley el repartimiento que le cupo al entrar en su destino, a saber, el de Castilla la Vieja, Asturias, Galicia, Madrid y partido de Plasencia con las provincias vascongadas y Navarra; y que el segundo ha elegido el despacho de los de los Reinos de Andalucía, Mancha, Cuenca, Murcia, el resto de Extremadura e Islas Canarias, han convenido en dividir en tres los del departamento vacante de la Corona de Aragón, encargándose el primero de los de Cataluña e Islas Baleares, y el segundo de los de Aragón y Valencia. En esta atención, piden que siendo esta distribución del agrado del Consejo, se sirva mandar se cumpla, guarde y ejecute; y que a este fin las Escribanías de Gobierno y de Justicia, Contaduría de propios y arbitrios, concursos y obras pías y demás oficinas dependientes de este Supremo Tribunal pasen directamente a sus manos con arreglo a dicho repartimiento todos los expedientes, autos y papeles correspondientes a su oficio; o acordar sobre todo lo que fuere más acertado. Madrid, 25 de enero de 1.824".

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm.5. El Consejo aprobó esta distribución, a instancia de los Fiscales del Consejo y mandó su cumplimiento y ejecución, e informó a todas las oficinas dependientes del Consejo e interesadas ("pasen directamente a sus manos con arreglo a dicho repartimiento todos los expedientes, autos y papeles

Aparte de la distribución territorial de los negocios, los Fiscales podían formar parte de comisiones o de Juntas de trabajo, al igual que los Consejeros, aunque de forma más ocasional. Encontramos por ejemplo que en 1815 al Fiscal más antiguo del Consejo le estaba encomendada la elaboración de los apéndices a la Novísima Recopilación, cuando falleciere don Juan Reguera Valdelomar. También este Fiscal participaba en la Comisión de revisión de los apéndices a aquel monumento legislativo"". Por otro lado, podemos mencionar la presencia del Fiscal del Consejo don Nicolás María de Sierra en la Junta Suprema de Gobierno formada en abril de 1808, a la partida de Fernando VII hacia Bayona"".

Ya hemos visto que el Fiscal estaba obligado a defender el cumplimiento de la ley y los intereses del Rey, de la sociedad y del bien público. En ocasiones acudían a ellos particulares en defensa de sus derechos. En otras, eran los Fiscales los que denunciaban el incumplimiento de la ley"".

En otras ocasiones, la intervención del Fiscal era la búsqueda de unas mayores garantías procesales en un pleito y seguridad jurídica"". Igualmente era misión

correspondientes a su oficio...". Entre oficinas se encontraban las Escribanías de Gobierno y de Justicia, las Contadurías de propios y arbitrios, concursos y obras pías, Contador general de pósitos, etc.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.089, expediente núm. 21.

"". A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.512, expediente núm. 15.

"". Se puede ver, por ejemplo, una antigua denuncia de aguas a instancia del Fiscal del Consejo don Juan Antonio Pastor, en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.698, expediente núm. 4.

"". Por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.989, expediente núm. 10: el Consejo de Regencia de España e Indias había autorizado en nombre de Fernando VII a la Audiencia de Asturias para conocer en apelación en los pleitos civiles sobre intereses que llegasen a mil ducados, así como en las causas criminales en que recayese sentencia de muerte, mientras en aquellas circunstancias no fuera posible acudir a la Chancillería de Valladolid. El Fiscal informó que la revista había de ser con la precisa asistencia del Regente y tres Ministros de dicho Tribunal, salvo en aquellos casos en que por legítimo impedimento no pudiera acudir el Regente. En tales casos, precediendo su Visto Bueno por escrito, se podría verificar la revisión por los otros cuatro Ministros de que se componía

suya velar por que los expedientes tuvieran la instrucción necesaria antes de su final resolución"".

También podía un Fiscal motu proprio presentar un dictamen o una propuesta, que podría ser aprobada o no por el Consejo"". En otras ocasiones obraba a instancia de particulares"", que denunciaban al Consejo una injusticia y presentaban un memorial solicitando una gracia.

Aparte de estos casos, los Fiscales también intervenían en otros supuestos, con las siguientes obligaciones"": debían poner cuidado en pedir y recaudar las penas pertenecientes a la Real Cámara y Fisco en las operaciones en que interviniesen; no podían poner demanda civil en nombre del Rey a concejo ni persona particular sin

dicha Audiencia (16 de agosto de 1810).

"". Un ejemplo claro lo tenemos en A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.002 núm. 84. En este expediente, los Alcaldes de Galaroza (provincia de Sevilla) representaban sobre una facultad para la venta de unas fincas de propios. En aquella ocasión el dictamen del Fiscal fue el siguiente: "el expediente carece de la instrucción necesaria para que el Consejo pueda proceder a conceder la licencia de la venta de las tierras que se solicitan. Ignórase su cabida y extensión; cuánta la parte a las calmas y montuosas; cuánta la población de robles y quejigos; qué porción de ésta quiere venderse; cuál el valor de ambas en venta y renta; si en los pastos tienen comunidad algunos pueblos a quienes, si la tuvieran, se debe oír; y últimamente se necesita el informe de la Contaduría de Propios sobre el estado de los de aquel pueblo..." El Consejo de Castilla resolvió en aquella ocasión "como lo dice el Fiscal" (18 de abril de 1811).

"". Un ejemplo claro, de importantes repercusiones, fue la propuesta del Fiscal don Jerónimo Antonio Díez para que se declarase "nulo todo lo decretado en Francia por los Sres. don Carlos IV y don Fernando VII, los tratados de Bayona, la Constitución y lo demás dispuesto por el gobierno intruso, actos de proclamación de José I, etc." (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 25). Esta propuesta, presentada el 9 de agosto de 1808, fue aprobada por el Consejo. Fue probablemente causa de encolerizamiento de Napoleón contra el Consejo y dio origen a los llamados Decretos de Chamartín de diciembre de 1808, uno de los cuales suprimía por primera vez el Consejo Real de Castilla.

"". En el legajo 2.757 de Sala de Gobierno (A.H.N., Consejos), tenemos un ejemplo de expediente creado en virtud de una denuncia anónima presentada en el Consejo.

"". Como recoge A. MARTÍNEZ DE SALAZAR, en sus "Noticias del Consejo", págs. 97 y ss.

que hubiera delator, salvo en los hechos notorios o en negocios en que por Real Orden se mandara pesquisa, precediendo que el delator afianzase de seguridad, y que no probando las delaciones, fueran condenados en las costas y penas establecidas por derecho; en las causas criminales en que se procediese de oficio debían intervenir hasta su resolución, solicitando las penas correspondientes a los contraventores.

Habían de cuidar también de que los pleitos en que hubiese condenación de penas para la Cámara, y los de las visitas de jueces, escribanos, y residencias, se vieses y determinasen con brevedad, teniendo libro y memoria de todas las causas que se siguiesen. El Escribano de Cámara más antiguo debía informar al Consejo cada viernes, antes de repartirse las Salas, de los expedientes pendientes y vistos.

Los Fiscales debían asistir a los pleitos que se seguían por las ciudades, villas y lugares sobre términos jurisdiccionales y propios. Debían defender la jurisdicción real de los corregidores y jueces de residencia. Para el seguimiento de los pleitos que afectasen a la Corona, Patrimonio Real y Rentas Reales, se debía librar a los Fiscales las cantidades que necesitasen, del producto de penas de Cámara.

Por otro lado, los expedientes e instancias sobre permisos de labranza y siembra se debían comunicar primero al Juez de Rompimientos, después al Procurador General del Reino y finalmente al Fiscal.

Tampoco se debían registrar ni sellar provisiones para Jueces de comisión, en que pudiera haber condenaciones para la Cámara, sin que tomaran razón los Fiscales en el libro que a ese fin debían tener.

Las prórrogas que se dieran a los Jueces de comisión y ejecutores debían ser vistas antes por los Fiscales, por si convenía concederlas. Igualmente las ejecutorias de las residencias secretas, dentro de los diez días de consultarse, se debían despachar y entregar al Fiscal correspondiente, así como las licencias que diese el Consejo para la saca y extradición de granos.

Debían estudiar también los papeles que presentasen los que se hubiesen de examinar de escribanos de número, los de señorío y los de pueblos de realengo, pero no los de los escribanos reales. Y les estaba encomendado también el cuidado de los pleitos sobre lo enajenado de la Corona.

Por otro lado, los Fiscales debían asistir también a la vista de las residencias y combatir los abusos de los regidores en los pueblos, y conocían de los pleitos y demandas de nuevos diezmos, que una vez terminados, debían

pasar a manos del Fiscal; también todas las instancias que promovían los pueblos sobre concesiones de arbitrios, facultades, prórrogas, ordenanzas de gremios, de los pueblos y otras, etc.

Cada Fiscal tenía a su cargo dos Agentes Fiscales, que le ayudaban en su despacho. Cada uno de estos Agentes mandaba, a su vez, según Desdevises, sobre un elevado número de oficiales****. También les asistían en los negocios despachados por los Fiscales en la Cámara***.

Ya hemos visto que los Fiscales del Consejo lo eran también de la Cámara. En septiembre de 1786, Carlos III, para facilitar la pronta y conveniente expedición de los muchos negocios que pasaban por el Consejo y por la Cámara, y atendiendo a la dificultad de que un sólo Fiscal despachase los de la Cámara juntamente con los de su respectivo departamento en el Consejo, había establecido, según se observaba ya en tiempos antiguos, que los Fiscales del Consejo de Castilla lo habían de ser también del Consejo de la Cámara. Despacharían en ésta con igualdad los negocios respectivos al Departamento que tenían señalados para el Consejo, y gozarían cada uno 11.000 reales de sueldo, lo que cobraba un Ministro de la Cámara. Debían organizarse para que siempre asistiera uno de los Fiscales a la Cámara para atender al despacho de los negocios. En principio, sólo tendría voto en la Cámara cuando el Rey quisiera concedérselo.

Esta disposición de Carlos III se mantuvo hasta 1792 en que fue restablecida la única Fiscalía de la Cámara y dejaron de entender en estos negocios los Fiscales del Consejo****. La medida duró hasta el Real Decreto de 29 de agosto de 1802, en que el Rey suprimió esta Fiscalía de la Cámara y se confirió la Fiscalía vacante del Consejo Real a don Simón de Viegas: este Real Decreto manifestaba la Real Voluntad de que los tres Fiscales del Consejo Real se repartiesen los negocios de la Cámara, de igual forma que estaban repartidos los del Consejo. Pero aunque al parecer ejercieron estas funciones, sin embargo nunca se hacía

****. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 73. Volvemos a reiterar que no existían propriadamente empleados de las Fiscalías, pero que por la propia importancia y autoridad de los Fiscales, muchos de los empleados del Consejo estaban subordinados en su labor diaria a los Fiscales y sus Agentes.

****. Ley VII, Título XVI, Libro IV de la Novísima Recopilación.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.078, consulta de 30 de agosto de 1816. Por el Real Decreto de 19 de agosto de 1792 se destinó para servir la Fiscalía de la Cámara a un Ministro del Consejo de Castilla, como se practicaba anteriormente.

mención en los Reales nombramientos del Consejo a esta circunstancia de ser también Fiscales de la Cámara. Así quedó la cosa hasta el estallido de la Guerra en 1808.

En 1814, por Real Decreto de 5 de junio de 1814, el Rey restableció el Consejo de la Cámara, manifestando claramente su voluntad sobre el particular:

"...quiero que el Presidente de él, que lo es del Consejo Real, y los que le sucedieren que no sean letrados, no tengan voto en la Cámara en los negocios de Justicia pero sí en todos los demás, y que los Fiscales del Consejo Real lo sean también de la Cámara, despachando cada uno los que en las respectivas provincias en cuyos negocios entienden en el Consejo, ocurran del Patronato Real y demás que pertenecen a la Cámara, según las instrucciones que se le dieron en distintos tiempos."****

Aunque los Fiscales repartían su tiempo con igual intensidad entre ambas instituciones, sin embargo manifestaban entonces no disfrutar de ninguna ventaja como Fiscales de la Cámara: no tenían entonces entrada ni asiento aún cuando era necesario para la defensa del Real Patronato y regalías; no gozaban de la asignación de 11.000 reales con que se retribuía a los demás Ministros de la Cámara****; incluso tenían que poner de su bolsillo los gastos de papel y escritorio****. Pedían entonces los Fiscales del Consejo**** las prerrogativas y emolumentos del Real Decreto de 8 de septiembre de 1786, concedidos por el Rey Carlos III y confirmados por Fernando VII el 5 de junio de 1814****.

Periódicamente, los Fiscales debían remitir

****. A.H.N., Consejos, legajo 6.078, Consulta de Oficio de 30 de agosto de 1816.

****. A ello se añadían los habituales atrasos en el pago de sus sueldos.

****. Los Fiscales del Consejo y Cámara de Indias disfrutaban por entonces de todas las distinciones y emolumentos que les correspondía como Fiscales de la Cámara: entrada y asiento, 11.000 reales como los demás Ministros, una ayuda de costa por vía de socorro en los apuros que experimentaran por el atraso de sus sueldos, etc.

****. Entonces eran don Francisco Gutiérrez de la Huerta, don José Hevia y Noriega y don Mateo Zendoquis.

****. A.H.N., Consejos, legajo 6.078, Consulta de Oficio de 30 de agosto de 1816.

al Consejo un informe de los expedientes recibidos y de los despachados. Estos informes eran elaborados por los Escribanos de Cámara del Consejo, en virtud de la Real Orden de 4 de marzo de 1800****. Con ellos se elaboraban resúmenes anuales****.

Sabemos que esta costumbre seguía viviéndose en 1829. Por aquel año todos los lunes se pedían listas de los expedientes y pleitos que se hallaban pendientes para su despacho en poder de los Señores Fiscales y Relatores****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.276: en virtud de la mencionada Real Orden, el Rey resolvió que fuera precisa obligación de todos los Escribanos de Cámara del Consejo pasar semanalmente lista a los Fiscales de los negocios que les correspondiesen y se hubieran pasado a los Agentes Fiscales en la misma semana: y concluido pasase el Consejo a las Reales Manos noticia cierta de los negocios que existiesen sin despachar en poder de los referidos Agentes Fiscales.

****. He aquí el resumen de pleitos pasados a los Fiscales en el año 1802 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.164: "Resumen de pleitos pasados a los Señores Fiscales en 1802"):

Sala	expedientes pasados	expedientes despachados	expedientes pendientes
----	-----	-----	-----
Sala I de Gobierno	3.514	3.368	146
Sala II " "	361	355	6
Sala de 1.500	155	146	9
Sala de Justicia	509	507	2
Sala de Provincia	18	18	--
	<u>4.557</u>	<u>4.394</u>	<u>163</u>

Otros ejemplos posteriores de estos resúmenes los tenemos en los siguientes expedientes: legajo 3.930, núm.9; legajo 3.819 núm. 16; legajo 3.850 núm.8.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.819 núm. 16: Oficio al Señor Decano con fecha de 28 de octubre de 1829: 'A fin de que pueda yo cumplir la soberana voluntad de S.M. según el particular encargo que de su Real Orden me está hecho, prevengo a Vd. recoja de todos los Escribanos de Cámara y de Justicia del Consejo una lista comprehensiva de todos los expedientes y pleitos pendientes en ellas que se hallen en poder de los Fiscales, o sea, sus Agentes, y de los Relatores, con expresión del día en que hayan tenido la entrada y los nombres de los Agentes Fiscales y Relatores que los tengan; cuyas listas inclusas, las de las Escribanías de Gobierno me remitirá Vd. desde luego y continuará dándomelas todos los lunes de cada semana sin falta alguna, expresándose también en las que correspondan al primer lunes después de

5. Honores y Privilegios

"Tienen asiento en el Consejo para formar Tribunal; concurren a la consulta con S.M. los viernes de todas las semanas; asisten a las funciones de iglesias, procesiones, actos, fiestas, regocijos públicos y visitas generales de cárceles; visten la toga o garnacha como los demás ministros; se les da tratamiento de Señor a presencia del Consejo y en todos los escritos"".

Los Fiscales del Consejo tenían el rango de Ministros honorarios del Consejo, como ya hemos visto"". Se establecía como requisito el haber ejercido el cargo por un tiempo no inferior a tres años"". Pasado este periodo, si eran promovidos a un puesto de Consejeros de Castilla, se les eximía del pago de la media anata"". Pasa a que tras los tres años de servir la Fiscalía gozaban ya de la antigüedad de Consejero, en los actos públicos y ceremonias no precedían ni a los Ministros efectivos"" ni a los Consejeros honorarios"", "aunque fueran menos antiguos,

dadas y demás que subsigan los expedientes y pleitos que hayan tenido salida durante la semana de intermedio..."

"". MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 95.

"". "El trato que se les hace en el Conssejo cassi es el mismo que se hace a los señores de él" (J. DE MORIANA, op. cit., pág. 273).

"". Ley V, Título XVI, Libro IV de la Novísima Recopilación; DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág.73.

"". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág.95. Por el contrario, si antes de haber servido tres años eran promovidos a Consejeros, debían satisfacer la media anata.

"". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 95 y 96.

"". A instancia de los Fiscales del Consejo, de fecha 31 de marzo de 1832, se planteó una interesante cuestión sobre si debían o no preceder en los actos públicos a los

porque siempre asisten en calidad de Fiscales, ocupando el lugar que por este empleo les compete. Pero siempre preceden a los Alcaldes de Corte"".

En cuanto a su prestigio, ya hemos visto que desde el momento en que ocupaban su puesto, disfrutaban de parecidos honores a los de los Consejeros"". Tenían la consideración de Ministros del Consejo Real y su rango era indudablemente muy elevado dentro del Consejo"". En los actos públicos o secretos tenían asiento a continuación del Consejero más moderno"".

Los Fiscales de Castilla se regían por el criterio de la antigüedad, en concurrencia con otro Fiscal de los otros Consejos en cualquier acto público, junta o reunión, según establecía la Novísima Recopilación"". En tales situaciones debían colocarse por antigüedad y hablaba

Ministros honorarios. El Consejo dictaminó negativamente, lo que ratificó el Monarca en la consulta de 8 de junio de 1832 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6.107; cfr. el apartado de honores y privilegios de los Consejeros, donde se recoge esta consulta, votos particulares y sus implicaciones).

""., MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 96. Moriana amplía esta información: los Fiscales del Consejo en los actos secretos del Supremo Tribunal y en los públicos tenían mejor lugar, "porque son jueces que hacen cuerpo con el Consejo" (J. DE MORIANA, op. cit., pág. 273).

""., DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 297. Esta afirmación debe ser tenida con las restricciones mencionadas en este subcapítulo. Esta equiparación en el tratatamiento y consideración se dio también en el Tribunal Supremo de Justicia. En los Reglamentos de 1814 y 1835 se imponía a los Fiscales la asistencia alguna Sala como jueces, cuando el número de Ministros fuera insuficiente. Incluso en el artículo 36 del Reglamento de 1835 se afirmaba explícitamente que los Fiscales del Tribunal tendrían igual tratamiento y consideración que los Ministros (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 513).

""., "Las ordenanzas del Consejo le ponen en un lugar muy grande..." (MORIANA, op. cit., pág. 275).

""., MORIANA, op. cit., pág. 273.

""., Ley VI, Título XVI, Libro IV de la Novísima Recopilación.

primero el Fiscal que hubiera formado la competencia"".

Cuando el Consejo de Castilla iba a las consultas con el Rey, los Fiscales hacían cuerpo con él, lo mismo que en los demás actos públicos del Consejo"". Los Fiscales tenían también asiento en el Consejo de la Cámara, después de los secretarios"".

Los Fiscales tenían también la regalía de nombrar a sus propios Agentes Fiscales"".

6. Retribución

En el año 1808 los Fiscales percibían un sueldo de 66.000 reales, superior a los 55.000 reales que recibían los Consejeros de Castilla"". La razón estriba en que los Fiscales eran también miembros de la Cámara y percibían los tres la signación de 11.000 reales, según lo dispuesto por Carlos III en septiembre de 1786 por Carlos

"". Así parece que lo había confirmado el Consejo a representación del que fuera Fiscal del Consejo de Castilla don Jacinto Moreno de Montalvo, ante una Junta a la que asistiría un Fiscal del Consejo de Indias (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.663, expediente núm.5).

"". Durante las consultas con el Monarca permanecía toda la consulta junto al Consejo hasta la salida del Rey, lo que no ocurría, por ejemplo, con los Alcaldes de Corte.

"". MORIANA, op. cit., págs. 274 y 275.

"". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 96.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1808", pág. 67. Este sueldo fue fijado por Carlos III por Real Decreto de 12 de enero de 1763 (Novísima Recopilación, Ley XV, Título II, Libro IV), y confirmado más tarde en 1766. En aquel Real Decreto se aumentaban también los sueldos de los Fiscales de otros Consejos: Fiscal de Guerra, 55.000 reales; Fiscales de Indias, 48.000 reales al año; Fiscales de Hacienda, 44.000 reales; etc.

III"".

Sin embargo, tras la restauración del Consejo en 1814, sus sueldos volvieron a los 55.000 reales. Aún restablecido el Consejo de la Cámara, los Fiscales dejaron de percibir también la asignación de 11.000 reales. Reclamaron este derecho en representación de 30 de agosto de 1816"".

En el Presupuesto de Sueldos y Gastos del Consejo Real y de sus oficinas subalternas para 1819 les estaba asignada la cantidad de 55.000 reales abonables por Tesorería General. En la práctica y por la llamada ley del máximo sólo percibían 40.000 reales"". Por aquella fecha los Fiscales percibían ya también los 11.000 reales de su condición de camaristas.

Por Real decreto de 28 de abril de 1.828 se disponía que a partir del 1 de mayo siguiente los Fiscales del Consejo de Castilla debían percibir un sueldo anual de 50.000 reales de vellón. Este sueldo se mantendrá hasta la definitiva extinción del Consejo, según se desprende de los Presupuestos del Consejo para los años siguientes "". De esta manera, en 1833 los Fiscales del Consejo recibían una mesada de 4.083 reales"".

Por otro lado, sabemos también que entonces el abono de sus salarios sufría un considerable retraso, en ocasiones superior al año. Esta situación se mantuvo hasta la desaparición del Consejo en 1834, ya durante la Regencia de María Cristina"".

"". Sobre el salario de los Fiscales se puede ver A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 51. Es interesante apuntar cómo más tarde los Fiscales del Tribunal Supremo de Justicia fueron equiparados en sueldo por las Cortes a los Magistrados del Tribunal. Sus salarios eran entonces de 80.000 reales anuales (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 512).

"". A.H.N. Consejos, Consulta de oficio de 30 de agosto de 1816.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333, expediente núm. 11.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.698 núm.6 y 3.781 núm.11.

"". A.H.N. Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.936 núm. 17.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781, expediente núm.3.

7. Remoción y Jubilación

A la hora de estudiar la remoción y la jubilación de un Fiscal, podemos asumir y aplicar todo lo recogido al respecto para los Consejeros de Castilla, a los que estaban asimilados en este aspecto. Nos remitimos por tanto a las cuestiones genéricas allí contenidas. Podemos hacer la salvedad de que la función del Fiscal era menos política y por sus frecuentes ascensos, de menor duración en el cargo.

En principio, el cargo de Fiscal del Consejo era vitalicio, pero en la práctica no solían acabar su vida profesional en este puesto, sino que se les destinaba en puestos más relevantes, habitualmente como Consejeros de Castilla. Ya hemos mencionado el caso de don Nicolás María Sierra, Ministro de Justicia, o el destacable ejemplo del Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia don Vicente Cano Manuel, que llegó a ser Presidente de aquel Tribunal constitucional durante el Trienio Liberal.

También algún Fiscal falleció sin alcanzar el ascenso: podemos mencionar el caso de don Francisco Gutiérrez de la Huerta, primer Fiscal del Consejo, fallecido en la villa de Salinas durante el Trienio Constitucional -y por tanto, una vez suprimido el Consejo de Castilla ----.

Parece que los Fiscales del Consejo no se vieron sometidos a los mismos vaivenes políticos que los Consejeros. No tenemos noticias de jubilaciones anticipadas o destituciones bajo Fernando VII. Tampoco las purificaciones políticas afectaron a ningún Fiscal del Consejo. Sí cabe mencionar la especial persecución política de que fueron objeto los Fiscales del Consejo de Castilla tras la supresión de este Tribunal por Napoleón----. El

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975, expediente núm. 45: Gutiérrez de la Huerta estaba entonces en la condición de cesante, tras desaparecer el Consejo Real.

****. En un escrito remitido a las Cortes en 1811, el Fiscal Díez contaba que el 8 de diciembre de 1808 fue llevado "por la fuerza a Chamartín con el Decano don Arias de Mon;

motivo fue el destacable papel que habían desempeñado en la actitud del Consejo en los días difíciles de 1.808.

después de ser allí humillados e insultados por Napoleón Buonaparte, se nos condujo a Francia con escolta, en donde permanecemos cautivos casi tres años..." (A.H.N., Fondos Contemporáneos, Ministerio de Justicia, legajo 4.391, expte. núm. 2.307).

ESCRIBANOS DE GOBIERNO

1. Introducción

A los Escribanos de Cámara más antiguos del Consejo se les encomendaba habitualmente las Escribanías de Gobierno del Consejo Real****.

El Consejo contaba con dos Escribanías de Gobierno. Una relativa a los asuntos de la Corona de Castilla y la otra para los asuntos de la Corona de Aragón. Sus titulares eran Escribanos de Cámara del Consejo, quienes desde su designación para ejercer esta plaza continuaban

****. "El Escrivano de Cámara más antiguo de el Consejo a de estar tan asido a sus acciones como el anillo al dedo, porque como por él, y no por otra persona, se a de ejecutar lo que se resuelve, así de ejecución de premáticas y derogación de ellas como de las órdenes generales y particulares que se dan para esta corte y los reynos de los casos y cosas que suceden, es necessario adonde concurriere el Consejo esté siempre allí, y así le toca en todos los actos públicos y generales y particulares de ir con el Consejo" (MORIANA, J. de, "Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo", op. cit., en "Fuentes", op. cit., pág. 277).

ejerciendo la titularidad de su propia Escribanía de Cámara****. De ahí que fueran designados con el título de Escribanos de Cámara y de Gobierno, ya que eran titulares de las dos Escribanías****.

De los dos Escribanos, sin duda el de la primera Sala de Gobierno era el más importante. Ambos tenían el rango de Secretarios del Consejo y sus competencias eran sumamente importantes dentro de la mecánica del Supremo Tribunal. La oficina de la primera Escribanía era también, con diferencia, la Escribanía más relevante dentro del Consejo de Castilla****.

****. Es importante destacar una diferencia esencial entre ambas Escribanías de Gobierno: la de Castilla no llevaba incorporada una Escribanía de Cámara, aunque su titular sí que lo era también de una Escribanía de Cámara de las del Consejo; pero ambas Escribanías eran completamente distintas y, habitualmente, tenían sedes distintas -Bartolomé Muñoz, sin embargo, tuvo las dos Escribanías en el mismo local, aunque separadas-. Por ello mismo, la provisión de ambas Escribanías era distinta y no existía una Escribanía de Cámara específica de la que debiera ser titular el Escribano de Gobierno de Castilla. Por el contrario, la Escribanía de Gobierno de Aragón llevaba incorporada una Escribanía de Cámara. Ambas oficinas formaban prácticamente una sola Escribanía: estaban siempre unidas y eran provistas por el Rey conjuntamente. (Por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.976 núm. 71; Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.122, consulta del 22 de mayo de 1.827; legajo 6.082, consulta de oficio de 6 de marzo de 1.818). Por otro lado, la Ley hacía especial incapié en que debía existir una total separación entre los asuntos de Gobierno y los de Cámara, incluso con oficinas distintas. (Novísima Recopilación, Libro IV, Título XVIII, Ley I).

****. "Los asuntos políticos que tenían repercusión en la Sala primera de Gobierno del Consejo tenían tal importancia que pareció necesario dar a esta Sala un Escribano especial. Pero como el Rey no quería aumentar el número de Escribanos de Cámara, también se contentó con nombrar a uno de los dos Escribanos de Gobierno. El Escribano de Cámara y de Gobierno del Consejo tenía entonces dos Escribanías bajo su dirección (...). Estas dos Escribanías eran absolutamente distintas: tenían sus lugares separados y su personal propio..." (DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", págs. 77 y 78). Fue al parecer en 1717 cuando se nombró por primera vez a uno de los seis Escribanos de Cámara para el despacho de los negocios gubernativos, como apuntaba Martínez de Salazar en sus "Noticias del Consejo" (op. cit., pág. 672).

****. La Escribanía de Gobierno para Aragón, por su parte, gozaba de las mismas distinciones que la de Gobierno de Castilla, con la ventaja además de no tener tantos asuntos de oficio como ésta -producido por el gobierno económico del

Se diferenciaba de los Secretarios de los demás Consejos y Tribunales en que los de éstos tenían asiento en ellos y estaban presentes cuando se votaban los pleitos, mientras que el Escribano de Gobierno del Consejo de Castilla era propiamente un Escribano de Cámara que despachaba los asuntos consultivos, gubernativos y los que eran peculiares del Consejo****.

2. Nombramiento

Los destinos de Escribano de Gobierno del Consejo eran de provisión privativa del Rey, a propuesta del Consejo pleno. En la práctica, el nombramiento del primer Escribano de Gobierno del Consejo Real recaía habitualmente en el Escribano más antiguo de los de Cámara de Justicia del Consejo -que solía ser también Escribano de Gobierno para Aragón-, pero excepcionalmente podía serlo también otro que pareciese más a propósito para el despacho de tales asuntos.

Por ello mismo el Real Título de Escribano de Cámara era el que le constituía en persona capaz de acceder a la plaza de Escribano de Gobierno.

Como el nombramiento era privativo de S.M., el Consejo pleno debía presentar en consulta una terna de candidatos**** y un resumen de los méritos de cada uno, y

Reino, lo asuntos generales o de la política interior, o por el ceremonial del Tribunal-. Sin embargo, sus rendimientos económicos eran menores, al igual que sus cargas y gravámenes. Por todo ello y en especial por sus menores cometidos, no tenía la relevancia de la Escribanía de Gobierno para Castilla. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 expte. núm. 11).

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 672.

****. Como en todas las propuestas del Consejo, debía acompañar a ésta los resultados de las votaciones efectuadas en el Consejo pleno: así, debía recoger en su informe los tres nombres propuestos en primer lugar, con sus votos respectivos; los tres propuestos en segundo lugar y sus votos y lo mismo para la propuesta en tercer lugar. Veamos un

tras la designación regia se le expedía el correspondiente título. Parece ser que su juramento como Escribano de Cámara bastaba y no debía volver a jurar.

Este procedimiento de designación se aplicaba tanto para el Escribano de Gobierno de Castilla como para el de Aragón. La diferencia era que habitualmente era designado para la primera plaza -Escribanía de Gobierno de Castilla- el que detentaba la segunda -Escribanía de Gobierno de Aragón-. Esta última Escribanía tenía además la peculiaridad de llevar aneja otra Escribanía, la de Cámara de Aragón, por lo que se convertía en la única Escribanía de Cámara que era provista por el Rey****.

Si repasamos brevemente la evolución de estas plazas de Escribanos durante el reinado de Fernando VII, sorprende en primer lugar la estabilidad de estos oficios en relación con las demás Escribanías del Consejo. Evidentemente, estos destinos eran término de carrera y se podrían considerar como cargos vitalicios****. En la Escribanía de Gobierno de Castilla hubo en el reinado de Fernando VII tan sólo tres Escribanos, el último de los cuales fue nombrado en 1830: fueron don Bartolomé Muñoz****, don Valentín Pinilla**** y don Manuel Abad. Sabemos además,

ejemplo. Al ascender don Manuel Abad en 1830 a la Escribanía de Gobierno de Castilla, por fallecimiento de don Valentín Pinilla, se presentaron a cubrir su vacante en la Escribanía de Gobierno de Aragón ocho candidatos. Las votaciones de las propuestas presentadas a S.M. entonces fueron las siguientes: en primer lugar, don Antonio López de Salazar con 13 votos y don Manuel de Carranza con 2 votos (no se votó a nadie para el tercer puesto); en segundo lugar, don Gil de Ayala con 13 votos, don Antonio López de Salazar con 1 voto y don Antonio Granados con 1 voto; en tercer lugar, don Manuel de Carranza con trece votos, don Gil de Ayala con 1 voto y don Ventura López de Carpio con 1 voto (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.976 núm. 71).

****. Esta provisión era propia y privativa del Rey, y era la única Escribanía de Cámara que no estaba enajenada de la Corona. Su provisión se hacía, por tanto, conjuntamente con la de la Escribanía de Gobierno para Aragón.

****. Sus detentadores no aspirarían probablemente a ascender a un puesto mejor, salvo el paso habitual de la Escribanía de Aragón a la de Castilla.

****. Falleció en marzo de 1.824, tras setenta años de servicios al Consejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 46).

****. Falleció en abril de 1830 y fue sustituido por don Manuel Abad (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 49).

que en 1816 Pinilla fue habilitado por el Consejo para el despacho de su Escribanía de Gobierno, a petición de Muñoz y por motivos de salud"".

De la Escribanía de Gobierno para Aragón, sabemos que en 1808 era detentada por don Manuel Antonio de Santisteban"". Tras la supresión del Consejo pasó a ejercer esta plaza en la Junta de Negocios Contenciosos"". Por la Real Resolución de 30 de marzo de 1815 fue purificado y rehabilitado en su plaza, que detentó hasta su fallecimiento a finales de febrero de 1.818"". En la consulta de oficio de 6 de marzo de aquel año fue propuesto don Manuel de Carranza y don José de Ayala, los dos Escribanos de Cámara más antiguos"". Al parecer, fue designado entonces don José de Ayala, que quedó cesante en 1820"", siendo repuesto en su plaza tras el restablecimiento del Consejo tres años después. En 1830 había fallecido ya Ayala y detentaba esta plaza don Manuel Abad, que aquel mismo año pasó a la de Gobierno de Castilla"", por fallecimiento de Pinilla. En consulta al Rey de fecha 16 de julio de 1.830 el Monarca eligió a don Antonio López de Salazar para la plaza de Escribano de

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 expediente núm. 40: "Expediente formado en virtud del Real Decreto del Presidente del Consejo por el que condescendiendo a las instancias hechas por don Bartolomé Muñoz, habilitó a don Valentín de Pinilla para el despacho de los negocios de Escribanía de Gobierno; a don Cosme de Miguel García para los de Justicia al cargo del mismo Muñoz; y a don Rafael de Yarza para los de la Escribanía de Cámara de Pinilla".

"". Sustituyó a don Juan Antonio Rero Peñuelas.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 núm. 38. Así decía la Real Resolución de 30 de marzo de 1815: "Y es la voluntad de S.M. que el haber servido los expresados en la Junta de Negocios Contenciosos y especialmente los dos Escribanos de Gobierno del Consejo, no les pueda perjudicar en su buena opinión ni para obtener las gracias a que sean acreedores por sus buenos dilatados servicios."

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.082, consulta del 6 de marzo de 1818.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45. Don Manuel de Carranza falleció en 1.819 siendo entonces todavía Escribano de Cámara. Por el contrario, don José de Ayala era Escribano de Gobierno por aquella época.

"". Por auto acordado de 13 de abril de 1.830. Ver también, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 49.

3. Juramento

Ninguna de las fuentes consultadas nos menciona la necesidad de que el nuevo Escribano de Gobierno jurase de nuevo su cargo ante el Consejo. Suponemos por tanto que, como ya sucedía en otras ocasiones, bastaba el juramento ya prestado ante el Consejo al acceder a la plaza de Escribano de Cámara. Si aparece precisado por las fuentes que debía haber prestado el correspondiente juramento, requisito sin el cual no podía ejercer el oficio"".

Realizada la propuesta a S.M. y la designación por parte del Monarca, el Escribano de Cámara más antiguo del Consejo levantaba la correspondiente acta y se le expedía el Real Título.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.976 núm. 71.

"" "Sin su fee al pie de los títulos de S.M. de los tales oficios de haver jurado en el Consejo no pueden exercer sus oficios" (MORIANA, J., op. cit., pág. 278).

4. Competencias

Los cometidos del Escribano de Gobierno del Consejo eran de suma importancia. Participaba en la organización de todas las ceremonias públicas del Supremo Tribunal y ejercía, como hemos visto, funciones de Secretario del Consejo de Castilla.

A la hora de estudiar sus atribuciones, vamos a establecer una doble clasificación: misiones del Escribano de Gobierno dentro de la burocracia del Consejo, y funciones en actos públicos y ceremonias. Apuntamos que estas funciones correspondían en principio al Escribano de Gobierno para Castilla, salvo que fueran misiones específicas para los territorios de la Corona de Aragón****.

Empezando por sus obligaciones burocráticas, mencionamos en primer lugar los registros que debía realizar: el Escribano de Gobierno debía llevar un libro donde se recogiesen las Reales resoluciones, decretos y órdenes del Rey referentes al régimen y gobierno del Consejo, y sus formas de resolver los pleitos y asuntos; y en otro libro debía copiar todas las consultas hechas por el Consejo al Monarca****.

Era también misión suya remitir al Rey el informe diario que elaboraba la Sala de Alcaldes sobre lo ocurrido en las rondas nocturnas que se hacían en la Corte. Le correspondía también elaborar las listas de Consejeros de Castilla, en orden a su publicación en la Guía de Forasteros.

También informaba al Consejo pleno de los cambios de horario de audiencia a finales de abril y agosto. Y del fallecimiento de cualquier Ministro o subalterno del Consejo.

****. Y entonces las ejercía el segundo Escribano de Gobierno.

****. El motivo era conservar un registro en caso de pérdida, así como facilitar la expedición de duplicados o el control en caso de lentitud en su cumplimiento.

Debía comunicar también a todos los Escribanos de Cámara y Relatores, para su cumplimiento, las providencias, autos acordados, decretos y órdenes que se diesen por el Consejo para el mejor funcionamiento de la institución.

El Escribano de Gobierno despachaba todo lo referente a revisión licencias para impresiones de libros, y también era el encargado de rubricar los libros originales que se presentaban. También correspondía al Escribano de Cámara extender el decreto para poner el pase de los breves de Su Santidad expedidos en favor de los Nuncios, así como llevarles personalmente los mencionados breves. Igualmente era misión suya extender los autos acordados y las providencias del Supremo Tribunal****. Los Escribanos de Gobierno tenían que autorizar, firmar y rubricar las Reales Cédulas y circulares impresas del Consejo****.

Otras misiones que llamamos burocráticas del Escribano de Gobierno, eran similares a las de los Escribanos de Cámara: dar cuenta de las peticiones de los particulares, provisiones o despachos ordinarios, copias de documentos; cédulas o despachos en que se mandaba ver los pleitos en las Chancillerías o Audiencias, así como su registro y copia, comisiones para tomar residencias, comisiones para visitas de escribanos, pesquisas, envío de avisos para el pago de la media annata y registro de su abono****.

Otros despachos emitidos por los Escribanos de Gobierno eran: para que uno que no estuviera ordenado in

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 671-676.

****. El 24 de mayo de 1.829 el Escribano de Gobierno Pinilla informaba al Consejo de los problemas que le planteaba este cometido: habitualmente eran más de 800 ejemplares los que tenía que autorizar y firmar, y 1.200 si también se remitían a los eclesiásticos. En los años inmeditamente anteriores a 1.829 se expidieron de cuarenta a cincuenta de estas órdenes, con lo que el Escribano se había visto obligado a firmar de su puño y letra cerca de 50.000 ejemplares. Calculaba Pinilla que un millar de ejemplares le llevaba unas siete horas de trabajo, que por sus muchas obligaciones debía realizar en horas nocturnas. Solicitaba entonces Pinilla poder firmar también con firma impresa con rúbrica, como hacían otras Audiencias, Consejos y Ministerios. El Consejo aprobó esta solicitud y extendió esta gracia al Escribano de Cámara y Gobierno para Aragón. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 48).

****. La Escribanía de Gobierno del Consejo era la encargada del cobro de la media annata con dependencia del Supremo Consejo de Hacienda (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.966 núm. 1).

sacris pudiera recibir el grado de Doctor en Teología; dispensas de estatutos de Universidades, ordenanzas, etc.; sobre competencias de jurisdicción; sobre curadurías de Grandes; intervenían así mismo en varias diligencias, entre ellas fianzas, discernimientos, juramentos y expedición de certificados; también expedían los despachos concediendo facultad para fundar o trasladar algún convento.

Era obligación del Escribano de Gobierno de Castilla realizar la distribución anual de los porteros que servían cada año en el Consejo****; designación de los porteros de cada Sala, de los porteros de puertas y de recados****.

También al menos desde 1.818 le estaba encomendada la formación anual de los presupuestos de ingresos y gastos del Consejo, que se encargó de realizar cada año hasta la definitiva extinción del Supremo Tribunal en 1834****.

Otro grupo de gestiones en que tomaba parte eran: escribir cartas-órdenes en vez de despachos, cuando el Consejo lo estimaba más convenientes; adjudicación de un pleito a un Relator y su recogimiento; entrega de cualquier expediente al Relator o Agentes Fiscales, expedición del recibo correspondiente y su anulación; llevaba o recogía en su caso las escrituras de la Cámara; búsqueda de antecedentes cuando venían informes solicitados o por nuevas instancias; compulsas; expedición de títulos para maestros de niños; expedición de certificaciones de consultas de los viernes y otros tipos de certificaciones****.

En cuanto a las misiones que el Escribano de Gobierno tenía encomendadas como Maestro de Ceremonias del Consejo, las más importantes eran las siguientes: debía recibir juramento a todos los Ministros y subalternos del Consejo; asistía con el Consejo a la consulta de los viernes con el Rey, así como a procesiones, celebraciones

****. Por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13, aparece la distribución de porteros en el Consejo para 1.816, realizada por el Escribano de Gobierno Muñoz Torres.

****. Cfr. al respecto el capítulo correspondiente a los porteros del Consejo.

****. Se puede ver el primero de estos presupuestos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11. Otros, por ejemplo, aparecen otros en el legajo 3.698 núm. 6.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1: extraído del Arancel de 1769 de los Escribanos de Cámara y de Gobierno del Consejo.

litúrgicas, visitas de cárceles, fiestas y otros actos públicos a los que acudía el Consejo; de todas estas ceremonias debía encargarse de su buen funcionamiento y de informar puntualmente al Consejo de sus horarios; en general, se encargaba de la organización de las consultas de los viernes con el Rey: entrega de papeles, publicación de las Reales resoluciones en la Sala correspondiente, envío de los originales al Archivo y expedición de certificaciones; en otras ceremonias públicas a que asistía el Gobernador y otros actos piosos, le acompañaba****.

5. Honores y privilegios

"Y por ello, y por el cuydado que ha de tener en todo, ansí de las cosas de adentro como de afuera de el Conssejo, y por lo que despacha de oficio, que es mucho entre año de cartas, provisiones y otras órdenes que se dan por la de S.M., y de todo a su costa, el Consejo, en consideración desto, demás de el salario, le tiene echa merced y le pertenecen para sí las ympresiones de las premáticas, cédulas y despachos generales que se han de promulgar y ejecutar en la corte y en todo el reyno. Tócale el hacer señalar las consultas que hace el Conssejo, y que se cieren y lleven a S.M. Con que es este oficio muy prehemimente y autorizado y de mano, y tiene lugar con el Consejo después de los Fiscales en las fiestas públicas; y en las comidas públicas que da el señor presidente al Consejo se les solían dar dos platos de regalo. En fin, es un oficio muy calificado y que deve estar muy advertido en todo el que le tuviere" (Mariana)****.

Sin duda era grande la relevancia de estos Escribanos de Gobierno, -y más propiamente del de Gobierno de Castilla, que era el primero y más antiguo de los Escribanos-. En todas las ceremonias públicas, como hemos visto, tenían el rango y consideración de Secretarios del Consejo. Entre otras prerrogativas, se contaba, por ejemplo, la toma de juramento a los Ministros del Consejo, Alcaldes

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs 671-676. Por ejemplo, la visita de monumentos en Semana Santa.

****. MORIANA, J. de, "Discursos", op. cit., en "Fuentes", op. cit., pág. 278.

de Corte, corregidores, alcaldes mayores, escribanos de provincia, procuradores, receptores y demás empleados del Consejo. Además tenía la regalía de que todos los que ante él iban a jurar, le hacían previamente una visita de cortesía.

Asistía con el Consejo a la consulta de los viernes con el Rey, y también a todos los actos y ceremonias públicas en que el Consejo participaba****, en los que se situaba a continuación de los Consejeros y Fiscales del Consejo. Su papel de este Escribano era siempre de especial relevancia y responsabilidad en todos estos actos, con el carácter de Maestro de Ceremonias.

Y en general cabe decir de él que era el empleado del Consejo más importante y de más categoría entre todos los demás subalternos del Supremo Tribunal.

6. Retribución

Los Escribanos de Gobierno del Consejo percibían, como los demás Escribanos del Consejo, una doble retribución. Por un lado, un sueldo fijo abonado por Tesorería General; y por otro, unos derechos o emolumentos percibidos conforme a un arancel aprobado por el Consejo.

El sueldo fijo de un Escribano de Gobierno estaba fijado en 1.808 en 28.241 reales anuales, tanto para el Escribano de Gobierno de Castilla como para el de Aragón.

En 1818 el sueldo de ambos Escribanos de Gobierno estaba estipulado en 11.685 reales y 10 maravedís****. Más adelante, en los años 1824, 1825 y siguientes encontramos un sueldo de 7.286 reales****, sin

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 674.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11.

****. Llama la atención que con el paso de los años el sueldo de estos empleados públicos fuera decreciendo. La explicación parece vendría dada por la situación caótica de

contar sus ingresos de Escribano de Cámara****. Este sueldo se mantuvo invariable al menos hasta el año 1830.

En cuanto a los emolumentos o derechos variables, dependían del volumen de negocios que pasara por la Escribanía de Gobierno, en función de un arancel aprobado por el Consejo****. En 1808 habían aumentado los asuntos públicos y de oficio con respecto a épocas anteriores. Esto suponía mayor trabajo que no era especialmente retribuido, ya que los emolumentos y derechos se percibían por los asuntos de parte. Aún así, los ingresos entonces eran bastante sustanciosos. Un informe de 1825 nos indica que por aquella época se habían perdido los libros de la Escribanía de Gobierno de Muñoz, por lo que no era posible saber los verdaderos ingresos de su oficina. Sin embargo, por un cálculo en alzada o aproximado podríamos cifrar tales derechos por aquel entonces en unos 44.000 reales anuales****.

Las cargas de la Escribanía de Gobierno de Castilla eran también bastante importantes. Por una Real Resolución del Rey Carlos IV se estipulaba que el titular de esta Escribanía debía vivir en una casa inmediata a la del local de esta oficina****. Por otra Real Resolución**** de 16 de abril del año 1.800, quedó resuelta la colocación permanente de la Escribanía de Gobierno y su archivo en una casa propiedad del segundo Monasterio de la Visitación de la Corte, sita en la Plazuela de las Descalzas Reales número 6,

nuestra economía, así como por la pérdida de competencias y de asuntos por el Supremo Tribunal. Sin duda, éste es un signo evidente del declive en que se encontraba por aquella época la institución entera, aún cuando fuera probable que esta medida se extendiera también a otras instituciones del Estado.

****. Que como vimos en su momento era de 4.400 reales anuales.

****. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 1.884, de 27 de agosto de 1.768: "Arancel aprobado por S.M. a consulta de los Señores del Consejo pleno que deben observar... los Escribanos de Cámara y de Gobierno de él".

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 47.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

cuarto principal****. Como el titular vivía en esta casa y era a sus expensas, debía pagar una alquiler de 9.000 reales. Así se estipuló que una parte de ello fuera abonada del fondo de los 2 reales y 8 maravedís % de los propios y arbitrios del Reino que entrasen en el Real Tesoro****, debiendo pagar a su costa el Escribano de Gobierno de Castilla 6.986 reales anuales en concepto de alquiler de vivienda.

Aparte de ello, Muñoz debía pagar a su costa también un portero o mozo de aseo que se encargase del orden de la oficina. Aunque en resolución de 1 de agosto de 1815 el Consejo aprobó la creación de una plaza de portero para esta Escribanía****, más tarde y por oposición de la Dirección General, terminó suprimiéndose esta plaza, de forma que en 1825 Pinilla debía sostener a su costa un criado. Su sueldo suponían 4.400 reales anuales****.

El Escribano de Gobierno tenía también una antigua regalía: la Contaduría General de Penas de Cámara y Gastos de Justicia solía regalarle 24 resmas de papel blanco para atender al despacho de los asuntos de oficio. Este ingreso desapareció con el restablecimiento del Consejo en 1.814, por lo que el Escribano de Gobierno debía satisfacer a su costa estos gastos, estipulados en el año 1.825 en 1.800 reales****.

También debía sufragar a su costa el Escribano de Cámara de Castilla otros gastos de escritorio: plumas, tinta, polvos, cordel, oblea, lacre, papel, encuadernación de libros de conocimientos, libros de consultas, el de órdenes del Rey; los gastos de dos braseros diarios durante la temporada de invierno; 24 luces diarias; el esterado y otros menores, todo lo cual ascendía en 1.825 a unos 5.000 reales anuales.

La circulación de órdenes generales y de

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 19.

****. Por el común interés que tenía el Reino de que fuesen conservados los importantes papeles de aquella Escribanía.

****. Cfr. ESTRUCTURA ORGANICA, capítulo correspondiente a porteros del Consejo.

****. Incluía manutención y y cuatro reales diarios de sueldo.

****. Por entonces se gastaban 30 resmas de papel blanco fino, más el papel para minutas o borradores y el que se gastaba en la circulación de órdenes generales y Reales Cédulas.

Reales Cédulas también suponían una serie de gastos: sobres, impresión de éstos, propina al mozo de la imprenta, papel de marquilla para los pliegos que se hacían para los Ministerios y Tribunales de la Corte, etc. Una estimación anual de estos gastos ascendería a unos 5.187 reales.

En ocasiones, aunque no era lo habitual, el Escribano de Gobierno se veía en la necesidad de contratar también uno o varios escribientes, especialmente cuando los oficiales de la Escribanía no se encontraban en condiciones de costearlos. Un gasto de esta naturaleza pudo suponer la cantidad de 2.000 reales anuales. Aparte de aquéllos, tras el Trienio era corriente que el Escribano de Gobierno contratase a su costa un escribiente o paje de bolsa****, que le costaba 4.400 reales más.

Por tanto, resumiendo todos estos datos, resultaban en 1.825 unas cargas de 29.773 reales. Los ingresos por derechos eran de 44.926 reales, por lo que resultaba la cantidad líquida de 15.153 reales****.

En cuanto a la Escribanía de Cámara y de Gobierno de Aragón, ésta no tenía el gravamen de tanto asunto de oficio como tenía la de Castilla. Sus emolumentos eran menores, pero también las cargas que debía soportar el Escribano. En 1820 estos emolumentos ascendían a 40.000 reales al año en la Escribanía de Gobierno de Aragón, sin contar los 32.000 reales por lo correspondiente a la Escribanía de Cámara de Aragón****. Las cargas o gravámenes que debía soportar el Escribano de Gobierno eran en 1.824 los siguientes: 6.600 reales por una pensión que debía pagar a las hijas huérfanas de su antecesor don Juan Antonio Rero; 6.600 reales por el alquiler de la casa que ocupaba para vivienda, oficina y archivo; y 800 reales más por gastos de escritorio****.

De esta manera, el Escribano de Gobierno para Aragón sacaba 14.077 reales vellón de producto líquido en 1.824, a los que unía los 11.685 reales de sueldo****. Vemos por tanto que no había gran diferencia entre los beneficios que producían finalmente una y otra Escribanía de Gobierno,

****. Para escribir a mano documentos y para otros servicios.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

****. A.C.D., Serie General, legajo 32 núm. 63.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

****. Los 685 reales suponían su contribución al Montepío.

pese a la gran diferencia de cometidos y de cargas entre una y otra²⁴⁰⁰.

7. Remoción y jubilación

En ausencias y enfermedades, la práctica que seguían los Escribanos de Gobierno del Consejo era muy similar a la de los Escribanos de Cámara del Consejo y al correspondiente capítulo nos remitimos. Precisamos solamente que cualquier compañero indistintamente podía hacerse cargo de los negocios de la Escribanía, sin necesidad de que fuera precisamente el Escribano de Gobierno de Aragón. El sustituto requería, eso sí, una especial orden de habilitación del Consejo²⁴⁰¹.

En lo referente a remoción, apuntamos aquí lo correspondiente a las purificaciones políticas a las que se vieron sometidos los Escribanos de Gobierno y que pasaron todos satisfactoriamente. Tras el restablecimiento del

²⁴⁰². Suponemos que en todo caso los beneficios debían ser claramente superiores en la Escribanía de Gobierno de Castilla. El autor del informe principal en que nos basamos para estudiar tales ingresos, era el propio Escribano de Gobierno de Castilla, interesado quizás en abultar sus propios gastos. Aparte del mayor prestigio social y categoría que suponía la Escribanía, parece deducirse de la documentación de la época que también superaba la primera Escribanía de Gobierno a la segunda en ingresos netos.

²⁴⁰³. El legajo 3.026, expediente núm. 46 de Sala de Gobierno (A.H.N., Consejos Suprimidos) recoge la instancia de don Manuel de Santisteban, del año 1814, solicitando una licencia para salir de la Corte un mes. Sin duda otro caso singular fue el mencionado de don Bartolomé Muñoz, que en 1.816 pidió fuese habilitado don Valentín Pinilla para ejercer su plaza de Escribano de Gobierno de Castilla. Muñoz tenía entonces 78 años y su estado de salud no era muy bueno. Pinilla ejerció la plaza como sustituto, hasta la muerte de Muñoz en mayo de 1.824. Don Cosme de Miguel García fue habilitado entonces, por su parte, para el despacho de la Escribanía de Cámara de Muñoz, y don Rafael de Yarza para los asuntos de la Escribanía de Cámara de Pinilla. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 núm. 40).

Consejo en 1814, ambos fueron purificados por la Real Resolución de 30 de marzo de 1.815. Otro tanto ocurrió tras el llamado Trienio Liberal.

En cuanto a las jubilaciones, aparte de las normas generales aplicables a todos los Escribanos, sabemos que tanto Muñoz como Santisteban estaban en el Montepío de Oficinas Reales y que fueron los únicos Escribanos del Consejo que pagaron cantidades al Montepío^{***}, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 1808.

^{***}. Abonaron 2.910 reales vellón cada uno, a razón de 970 reales cada mes. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180).

ESCRIBANOS DE CAMARA DEL CONSEJO

1. Introducción

El origen de los Escribanos es tan antiguo como el propio Consejo. Desde tiempo inmemorial se tienen noticias de la presencia de estos subalternos en la configuración orgánica del Consejo de Castilla^{***}. Y su papel dentro de la labor del Consejo era también fundamental: eran los encargados de recibir los pleitos de los particulares y encauzarlos dentro de la mecánica del Supremo Tribunal. Recibían las quejas de los particulares - normalmente a través de los procuradores -, preparaban y distribuían los asuntos, tomaban nota del desarrollo de los juicios y enviaban copia a los particulares interesados^{***}. Eran, por tanto, una pieza clave en la labor del Consejo, y su rango era el mayor entre los subalternos del Consejo^{***}.

El número de las Escribanías de Cámara estaba

^{***}. FAYARD, J., "Les membres du Conseil du Castille à l'époque moderne", pág. 25.

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 298.

^{***}. Gobernador, Consejeros y Fiscales tenían la consideración de ministros. El resto de los empleados del Consejo eran ministros subalternos o simplemente subalternos.

fijado en seis por una Real Cédula del año 1565, que a su vez permitía a sus propietarios designar a sus sucesores. De esta manera las Escribanías quedaron enajenadas de la Corona y eran servidas por tenentes que adquirirían el derecho a servir la Escribanía a cambio de un canon anual pagado a los propietarios.

Más adelante el Rey decidió crear una Escribanía especial: los asuntos políticos dependientes de la primera Sala de Gobierno del Consejo eran de especial importancia. El Monarca no deseaba incrementar el número de Escribanos y decidió encomendar estos asuntos a uno de los Escribanos de Cámara, que lo sería también de Gobierno. De esta manera quedaba al frente de dos Escribanías completamente distintas, con locales y oficiales en principio diferentes^{***}.

Veremos inicialmente la figura de los Escribanos de Cámara, para luego analizar con detenimiento la figura especial del Escribano de Gobierno o Secretario del Consejo.

2. Designación y su número

a) Escribanos efectivos

Las Escribanías no estaban sujetas a examen, sino que su procedimiento de designación era propio y peculiar.

Como hemos visto, las Escribanías de Cámara tenían el carácter de oficios enajenados de la Corona, y por tanto eran considerados bienes patrimoniales susceptibles de transmisión o arrendamiento. Los propietarios gozaban por tanto de la facultad de nombrar tenientes de estas

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 299; "Institutions", págs. 77 y 78. Sin embargo, las Escribanías de Gobierno y de Cámara servidas por don Bartolomé Muñoz tuvieron una misma sede, en la citada Plazuela de las Descalzas Reales número 6, cuarto principal.

Escribanías, facultad que no podía ser considerada de forma absoluta, sino tan sólo relativa: no es que tuvieran un derecho absoluto para nombrar tenientes a su libre arbitrio, sino que suponía se les reconocía el derecho a no exigírseles que las sirvieran personalmente, so pena de perder el oficio, como ocurría habitualmente con otros empleos. Es decir, el Escribano propietario podía tener una persona que ejerciera el oficio en su nombre, recibiendo a cambio un canon anual de esta persona.

Este planteamiento de la propiedad de la Escribanía de Cámara suscitó algunos problemas en el periodo que estudiamos. Los propietarios nunca se conformaron con una mera participación en la designación de los Escribanos y persiguieron con ahínco un derecho de libre designación que no les fue reconocido por el Consejo, más interesado éste en la existencia de unos buenos profesionales que ejercieran cuidadosamente estos importantes oficios de la Administración***.

En repetidos decretos y resoluciones reales*** estaba regulado que los dueños de las Escribanías

***. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.083, consulta del 27 de abril de 1818.

***. Por providencia del Consejo Real de 15 de abril de 1722 -Ley XVI, Libro IV, Título XXI de la Novísima Recopilación-, por Decreto de 12 de febrero de 1737, Real Orden de 30 de julio de 1745 a consulta del Consejo, etc. (A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.087, consulta del 17 de mayo de 1824). Las principales disposiciones legales mostraban la paulatina modelación de la postura oficial al respecto. Veamos esta evolución: por el auto del Consejo de 15 de abril de 1722 se mandó que en lo sucesivo los dueños no nombrasen persona de su satisfacción sino que tan sólo propusiesen tres personas al Consejo; en una resolución posterior de 1728 se ordenaba que en las proposiciones se tuviera presente a los oficiales mayores; en la resolución de 12 de abril de 1737 se daba preferencia a los oficiales mayores, salvo concurrir en otra persona especial circunstancia; el Real Decreto de 14 de marzo de 1747 establecía que el Consejo propusiera a S.M. una terna de tres sujetos que juzgase más hábiles, prefiriendo a los oficiales mayores en la proposición si en ellos encontrase la aplicación y suficiencia necesaria; también solicitaban entonces los oficiales mayores que tuvieran preferencia en los supuestos de ausencia o enfermedad del teniente. Esto tampoco les fue concedido. Pero fue sin duda un paso importante en la configuración de la normativa vigente bajo Fernando VII la resolución del Consejo de 15 de septiembre de 1749, en la que se decía así: "(...) En el caso que la ausencia, indisposición o impedimento de los Escribanos de Cámara sea corta o ligera y por tiempo no considerable, debe (como hasta aquí se ha hecho) despachar por el ausente o

vacantes que sucediesen, cuando ellos mismos no tuvieran la aptitud para servirlos, propusiesen al Consejo tres sujetos que juzgasen hábiles. Tenían un plazo de 30 días para presentarse a servirlos o, en su caso, para hacer la propuesta de sujetos para servirlos con arreglo a las leyes. Si pasado ese plazo no habían efectuado designación, habitualmente el Consejo designaba libremente al sustituto"".

En realidad, la designación de los Escribanos seguía el siguiente procedimiento: el Consejo debía presentar al Rey una terna de candidatos, entre los que el Monarca elegía habitualmente al señalado en primer lugar. Esa terna era formada por los propietarios de las Escribanías"", quienes debían elegir a los candidatos más

indispuesto uno de los otros Escribanos de Cámara, sin que haya motivo para alterar en este caso el referido antiguo estilo del Consejo, pues pudiera ser perjudicial cualquiera novedad en esta parte como medio acaso de descargar los Escribanos de Cámara con poco o ningún motivo en sus oficiales mayores todo el despacho de sus oficios. Y que cuando por ser dilatada la ausencia o larga enfermedad de los Escribanos de Cámara se estime conveniente el nombramiento de interino o sustituto, deberá el Gobernador del Consejo preferir en este caso a los oficiales mayores de las Escribanías si encontrase en ellos la aplicación y suficiencia que se necesita en conformidad de lo que V.M. tiene resuelto por su Real Decreto que queda referido para el caso de vacante de estos oficios" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

"". A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.107, consulta del 28 de febrero de 1832. Recoge varios casos de finales del reinado de Fernando VII. En esta ocasión, el Consejo hizo saber a los dueños de las Escribanías vacantes, o bien a sus apoderados en la Corte, que tenían 30 días para presentar a servirlos o, en su cargo, hacer la propuesta correspondiente. Se hizo saber esta providencia a don José Alonso de Tejada, como apoderado del Conde de Toreno, dueño de la Escribanía de Cámara que sirvió don Manuel Abad. También se notificó a los testamentarios de don Valentín Pinilla, pero su Escribanía la servía ya don Manuel Mejía. Otro caso fue el de la Escribanía de Cámara que el 4 de junio de 1814 servía interinamente don Segundo García Cid y a cuya provisión definitiva no acudieron a hacer la propuesta los propietarios de la Escribanía. El Consejo juzgó entonces que habían perdido su derecho. (A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.120 núm. 23, consulta del 12 de septiembre de 1814).

"". Cuya propiedad había sido confirmada por varias resoluciones, en especial por las nuevas Cédulas Reales que se le expidieron en virtud de la que se preceptuó en Real Decreto de 6 de noviembre de 1799 (A.H.N., Consejos, Sala de

hábiles de entre los oficiales mayores de las Escribanías"". Sin embargo, si el dueño era apto y deseaba servirlo de por sí, ya no había aquella propuesta. Y en uno y otro caso el Consejo proponía al Rey los que le parecían más dignos, bien entre los propuestos por el dueño, o bien al mismo dueño si lo era y quería servir la Escribanía. Pero era finalmente el Rey quien nombraba al nuevo Escribano de Cámara"".

Al agraciado como dueño o teniente se le expedía por la Cámara el Real título correspondiente, con el juramento en el Consejo pleno. Seguidamente se le ponía en posesión y por este hecho quedaba incorporado en el Montepío de las Reales Oficinas, empezando a cobrar su sueldo y emolumentos"".

En ocasiones los propietarios proponían personas poco adecuadas para el desempeño de las Escribanías, o dejaban a un lado los derechos de los oficiales mayores de las Escribanías, atendiendo más a intereses particulares que de otro género. Estas designaciones parecían contrarias al interés de la utilidad pública, o al menos a una práctica que reconocía unos derechos adquiridos a los oficiales mayores. Por este motivo, fueron varias las reclamaciones de estos oficiales

Gobierno, legajo 3.974 núm. 36).

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.979 núm. 40: los dueños debían preferir a los oficiales mayores de las Escribanías, si tenían la suficiencia necesaria. También el Consejo debía atender los méritos y circunstancias de estos oficiales en las consultas que hiciese a S.M. para la provisión de dichas Escribanías. Esta práctica contaba por lo menos con un siglo de antigüedad en 1814, aunque en ocasiones no se cumplió. Así Martínez de Salazar, en sus "Noticias del Consejo", contaba que él fue nombrado Escribano de Cámara por el Rey sin propuesta del dueño ni consulta del Consejo Real (MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 659). Fue oficialmente reconocida por el mencionado auto acordado del Consejo de 1722 (Ley XVI, Título XXI, Libro IV de la Novísima Recopilación), confirmado poco después por otro nuevo, en 1725 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 expte. núm. 36).

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11. Pagaba por su ingreso una cantidad superior a los 14.000 reales.

quejándose de las designaciones de los propietarios"".

En alguna ocasión incluso los oficiales mayores llegaron a proponer que se les permitiera comprar la Escribanía para preservar su derecho"".

Por tanto, no sólo las provisiones de vacantes provocaron conflictos con los oficiales mayores, sino también las sustituciones temporales y las interinidades, para las que los propietarios nombraban muchas veces a personas de su confianza ajenas a la

""". Sus argumentos eran evidentes: "En el continuado ejercicio y manejo de las dependencias del Consejo en el paso de tantos años los calificaban de más prácticos y experimentados y sin género de duda de mayor suficiencia en estas materias que los que se habían criado en otras distintas; tanto esto como porque parecía no ser conforme a equidad que los que llevan sirviendo con desempeño y probación en el mismo tribunal durante 20 ó 30 años quedan destituidos del premio a que eran acreedores. Y que se diese a los de fuera, por lo que cesaría aquel honesto estímulo del mayor aprovechamiento de los individuos de estas oficinas, a los que anima la adquisición de ascensos..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3026 núm. 46. "Como la Escribanía de Santisteban salió de la Corona por precio, en cuyo caso no puede dudarse de la acción que existe para tantearla, no con el fin de que se consuma según está mandado con respecto a los oficios de Regidores y otros, sino con el justo objeto de que se incorpore a la Corona y el de evitar por este medio legal los gravísimos perjuicios que sufren los oficiales mayores en que los referidos oficios se sirvan por otras personas cuando repetidas veces está mandado que se provean en aquellos en justo premio de los afanes y trabajos que han emprendido en lo más florido de sus días para el desempeño de las mismas, quedando con el desconsuelo de no poder ser nombrados en las respectivas vacantes por la interposición de los dueños que a la sombra y título del dominio han logrado de pocos años a esta parte la preferencia a los oficiales mayores para servirlos, con detrimento acaso de la causa pública (...). Penetradas las partes de los justos fines a que se dirigen los últimos Reales Decretos, especialmente el que a consulta de V.A. proveyó S.M. y se comunicó el 28 de junio de 1817 sobre la forma y medio de llevar adelante las incorporaciones de alhajas enajenadas de la Corona (...) Si la Dirección del Crédito Público no se hallase en disposición de pagar el precio de la egresión con la prontitud que se requiere, estarían dispuestos a satisfacer el que hay recibido la Corona por la concesión o enajenación de dicha Escribanía, para acabar cuanto antes con la perjudicial situación presente".

Escribanía***.

En 1815 hubo representación de los Escribanos de Cámara dueños de estos oficios pidiendo que no se les impidiese ejercer la facultad de nombrar tenientes libremente y sin restricción ninguna para servir las Escribanías de Cámara. El Consejo estudió esta instancia y emitió una importante resolución, con fecha 17 de abril de 1818. En ella reconocía el indudable derecho de propiedad que correspondía a los propietarios, pero que no salvaba el fin de utilidad pública para el que fueron creados tales oficios: interesaba al interés general que tales oficios fueran desempeñados por los sujetos más hábiles e idóneos***, y su facultad de nombrar tenientes debía pues circunscribirse al bien público y a lo que más conviniera a la mayor eficacia de la labor de los Escribanos de Cámara. Finalmente, el Consejo propuso y el Rey resolvió aprobar la ya mencionada regla general, por la cual en adelante en las vacantes que ocurriesen en las Escribanías de Cámara propondría el Consejo al Rey tres sujetos hábiles e idóneos para el puesto, dando preferencia al dueño -si reunía tales condiciones- y a los oficiales de las Escribanías de Cámara

***. Así don Juan Pico Santisteban fue comisionado en Lisboa por muchos pueblos y particulares de España para liquidar y cobrar los créditos procedentes de suministros hechos a las tropas inglesas y portuguesas, así como por daños causados a las mismas. Le sustituyó al frente de la Escribanía un tío suyo, don Manuel Antonio de Santisteban, en perjuicio del oficial Mayor don Antonio Granados. Este en representación a la Real Hacienda proponía que la Escribanía fuera tanteada por la Corona, satisfaciendo a su costa los gastos de la incorporación. Como consecuencia, esperaba ser a continuación designado para ejercerla por parte de S.M., por su antigüedad y experiencia. Abierta una investigación por el Consejo, don Manuel Antonio de Santisteban comunicó no poder seguir despachando los negocios de la Escribanía, para la que había sido habilitado por el Consejo, y entonces seguidamente fue habilitado Granados mientras durase la indisposición de Pico (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 46).

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 expte. núm. 36: "El Consejo siempre fijó sus miras en estos dos puntos. Cortó todos los abusos que la experiencia o la perspicacia le hizo ver o prever. Tales oficiales se instituyeron para el servicio del público y del Estado y aunque se hayan considerado susceptibles de propiedad particular, nunca podían perder su primitiva naturaleza ni considerarse como las otras cosas corpóreas en que cabe dominio, y para cuya posesión, uso y disfrute no se necesita de ninguna particular habilidad, ni requieren ninguna especial cualidad moral".

del Consejo"".

Los Escribanos de Cámara no propietarios ejercían su oficio en virtud de un contrato de arrendamiento realizado con el propietario. Por auto acordado"" de 1722 y por otro de 1825 se establecía que los Escribanos de Cámara debían pagar sólo a los propietarios la cuota de 7.000 reales anuales, sin que pudieran hacer por su parte ningún otro convenio particular ni exigir gratificación alguna"". Los 7.000 reales de vellón eran en razón de los emolumentos que en justicia correspondían a los dueños de los oficios"".

En el reinado de Fernando VII los asuntos que pasaban por las manos de los Escribanos de Cámara fueron reduciéndose paulatinamente, consecuencia especialmente de "las convulsiones políticas y trastornos que ha padecido la nación" "", así como la progresiva pérdida de competencias por el Consejo. De esta manera, hubo también en ocasiones quejas de Escribanos de Cámara de no poder sufragar los 7.000 reales a los propietarios, ya que los ingresos ni siquiera alcanzaban esta cantidad"".

"". Esta práctica fue confirmada definitivamente en una consulta del Consejo de 27 de abril de 1818, en la quedó aprobada una regla general: "en las vacantes que ocurriesen en las Escribanías de Cámara proponga el Consejo a S.M. tres sujetos hábiles e idóneos para su desempeño, prefiriendo al dueño si se encontrase con estas cualidades y a los oficiales mayores de las Escribanías de Cámara del Consejo". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 expte. núm. 36).

"". Ley XVI, Título XXI, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 expte. núm. 36.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456 expte. núm. 59. Cada uno de los Escribanos de Cámara debía llevar libro de cuenta y razón donde se sentaban todos los emolumentos y útiles percibidos, para dar cuenta de ellos al Consejo a fin de año. Los 7.000 reales fueron calculados de razón de ser un tercio de los emolumentos aproximados que proporcionaba entonces una Escribanía.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456 expte. núm. 59.

"". En 1824 el Escribano de Cámara don Antonio Martínez solicitaba que el Consejo declarase que cumplía con pagar al dueño de la Escribanía de Cámara que regentaba la tercera parte del producto que había rendido en los últimos siete meses del año anterior (1823), según resultaba de los libros de cuentas semanales. En aquel período y por la paralización

El dueño de la Escribanía también tenía que pagar algunos gastos. Una nota del año 1832 nos indica que el Conde de Toreno había satisfecho la contribución de frutos civiles de los años 1830 y 1831, correspondiente al oficio de Escribano de Cámara del Consejo propio de aquel Conde; e igualmente satisfizo la contribución de 5% sobre dicho oficio correspondiente a 1830 y al primer medio año de 1831; también había pagado "14.575 reales por cuentas en las lanzas consignadas hasta fin de 1827"***.

Conocemos los nombres de algunos de los propietarios de las Escribanías de Cámara del Consejo. Una de ellas pertenecía a don Juan Pico Santisteban; otra, la Escribanía de Cámara de Justicia que servía don Bartolomé Muñoz, pertenecía al Marqués de Lara***; la que sirvió Peñarredonda pertenecía en 1814 a la Congregación de Nuestra Señora de la Cabeza la Antigua, sita en la iglesia parroquial de San Justo de la Corte***; el Conde de Toreno era el dueño de la Escribanía de Cámara que servía don Manuel Abad; el Escribano don Manuel Pinilla era el propietario de la Escribanía que servía, y que poco después de su muerte pasó a don Manuel Mejía, que también la sirvió personalmente***.

Ya hemos visto algunos casos en que la Escribanía de Cámara era servida personalmente por el propietario de la misma. Este derecho incontestable, reconocido por el Consejo siempre, estaba sometido a una serie de requisitos, en especial lo referente a la titularidad y a la idoneidad: debía demostrar con título la propiedad efectiva del oficio, e igualmente contar con un caudal equivalente al menos a un tercio de su valor; y por

de los negocios sólo le había producido su Escribanía los 3.000 reales escasos, de los que debía además restar diversos gastos y cargas (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456 expte. núm. 59).

***. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.107, consulta del 28 de febrero de 1832.

***. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.087, consulta del 17 de mayo de 1824.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.979 núm. 40.

***. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.107, consulta del 28 de febrero de 1832.

otro lado demostrar capacidad suficiente para su desempeño"".

En cuanto al número de Escribanías de Cámara, según la Guía de Forasteros del año 1808 parece había seis de estas Escribanías -había siete en 1804, bajo Carlos IV, y en años anteriores-. Evidentemente, la Guerra trastocó la organización y funcionamiento del Consejo.

El primer nombramiento de un Escribano de Cámara durante el reinado de Fernando VII fue al parecer el de don Valentín de Pinilla, que entró en esta plaza el 4 de abril de 1808"".

En plena Guerra de la Independencia, la Junta Central en consulta de 4 de agosto de 1809 nombró los subalternos de las Escribanías de Cámara del Consejo Supremo de España e Indias (Consejo reunido). De todos los Escribanos de Cámara que servían en el Consejo en 1808, ninguno huyó a Sevilla y todos se quedaron en Madrid"". De esta manera la Junta Central debió nombrar nuevos Escribanos de Cámara. Sabemos que al separarse los Consejos, y restablecerse el Consejo de Castilla, don Sebastián Salcedo fue nombrado para la Escribanía de Cámara más antigua, e

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.083, consulta del 27 de abril de 1818. Martínez de Salazar en sus "Noticias del Consejo", pág. 658, fijaba la idoneidad del Escribano en las siguientes notas: "Y así como para ejercer las Escribanías de Cámara no precede examen, es indispensable que las personas que las obtengan sean inteligentes y hábiles para dar a entender los asuntos, responder con reflexión, despachar con presteza, sin confusión ni interés, manifestándose afable, cortés y caritativo con los litigantes, y acomodar su genio al de unos y otros, para acreditar que el concepto del hombre juicioso consiste en la conversación, buen trato y compostura con los demás, de lo que muchas veces pende el alivio de los litigantes, a quien es más permitida la falta de sufrimiento y cordura porque padecen sentimientos, dilaciones, malos sucesos, gastos e incomodidades, y para consuelo necesitan el agrado de aquéllos que entienden en sus pleitos".

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180. Pinilla era oficial tercero de esta Escribanía desde el 17 de diciembre de 1795. Fue Escribano de Cámara del Consejo hasta su fallecimiento en abril de 1830 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3975 núm. 49).

"" De ellos, don Manuel de Peñarredonda falleció el 1 de noviembre de 1809 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180).

igualmente Tasador General de Pleitos"". Por su parte, el Gobierno intruso realizó también algunos nombramientos de Escribanos"".

El Reglamento del Tribunal Supremo de 1814 le asignaba cuatro Escribanos "de los que hay", es decir, nombrados entre los Escribanos de Cámara del extinguido Consejo de Castilla. Fueron nombrados por la Regencia, a propuesta directa por el Tribunal, fijándose que en lo sucesivo tal facultad quedaría exclusivamente en manos del Rey o de la Regencia en su caso"".

En 1814 los que habían sido Escribanos de Cámara antiguos volvieron a tomar posesión de sus cargos"". A mediados de aquel año había dos Escribanos de Gobierno y de Cámara de Justicia - don Bartolomé Muñoz y don Manuel Antonio de Santisteban-; y cinco más de Cámara de

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46. El restablecimiento del Consejo de Castilla en 1808 trajo consigo el problema de qué hacer con los subalternos que sirvieron en el Consejo reunido en Sevilla y Cádiz y en el Tribunal Supremo de Justicia. Se resolvió dar preferencia a los subalternos que servían en el Consejo en 1808, según antigüedad y sin tacha legal. Ello planteó que subalternos de grado inferior, que como consecuencia de seguir al Consejo en el exilio se habían promocionado, se veían ahora relegados injustamente a puestos inferiores a los que servían en Cádiz, con el agravante de que aquéllos que quedaron en Madrid sirviendo al Gobierno intruso, quedaron por delante en el escalafón. Si bien es verdad que por Real Decreto fueron nombrados interinamente mientras no se les fijara un procedimiento decisorio a perpetuidad, ello levantó protestas e instancias al Consejo de algunos subalternos de Cádiz, que se consideraban relegados. También fueron presentadas instancias por incumplimiento injusto del Real Decreto, ya que se dio destino a gente más moderna en el escalafón frente a los más antiguos.

"". Así sabemos que bajo el Gobierno intruso falleció don Manuel de Peñarredonda, que servía la Escribanía de Cámara del Consejo cuya propiedad pertenecía a don Manuel de Santisteban. Por las Juntas de Negocios Contenciosos se encargó a éste el cuidado de los papeles de esta Escribanía, con vista a la propuesta que debía hacer el dueño (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3026 expte. núm. 47).

"". MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo (1812-1838)", pág. 525.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 expte. núm. 13.

Justicia"" -don Manuel de Carranza, don José de Ayala""", don Manuel de Santisteban, don Valentín Pinilla y don Segundo García Cid""-.

El Consejo pleno el 19 de julio de aquel año aprobó la Real Orden siguiente:

"Hágase saber a todos los subalternos que servían en el año 1808 en el Consejo y se hallan habilitados interinamente acrediten su purificación en el preciso término de un mes, a cuyo fin la activen ante los Sres. Ministros encargados de esta comisión. Dígase al Escribano de Cámara don José Ayala y demás habilitados interinamente que se hallan ausentes se presenten al mismo término, con apercibimiento que pasado se darán por vacantes sus destinos. Hágase saber a los actuales Escribanos de Cámara no despachen los asuntos de otros compañeros sin expresa orden de habilitación""-.

""", A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 46.

""", Conducta del Escribano de Cámara don José de Ayala durante la ocupación francesa: no quiso admitir destinos que le propusieron los franceses ni continuar como Escribano de Cámara en el Tribunal Supremo. Se vio entonces obligado a marchar a su pueblo refugiado y fue allí mantenido por su hermano. En 1814 se encontraba al parecer arruinado y en estado de abandono, también enfermo, cuando fue llamado por el Consejo para cubrir la Escribanía de Cámara (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

""". Al fallecer don Manuel de Peñarredonda, el Consejo habilitó interinamente para servir esta Escribanía a don Segundo García Cid, por decreto de 4 de junio de 1814. García Cid había servido este mismo oficio durante la Guerra, en Sevilla y Cádiz. Más adelante, por Real Orden de 6 de julio del mismo año el Consejo nombró para servir de forma definitiva esta Escribanía a don Juan Garrido. Ante la reclamación de García Cid, el Consejo consultó al monarca proponiendo que don Segundo García Cid siguiera sirviendo este oficio en propiedad, "pagando no obstante al dueño de dicho oficio la pensión anual que le corresponde y está asignada a su favor...". (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.120, consulta del 12 de septiembre de 1814).

""", A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46. Los Escribanos de Cámara eran entonces don Manuel de Carranza, don José de Ayala, don Manuel de Santisteban, don Valentín Pinilla y por haber vacado la de don Manuel de Peñarredonda, don Segundo García Cid, que lo había sido del

Todos los Escribanos del Consejo fueron purificados^{****} y habilitados, y los ausentes acudieron a sus destinos, según pedía la Real Orden. Sin embargo, alguno también quedó sin plaza, como fue el caso de don Manuel Abad^{****}, que servía la Escribanía de Cámara desde 1809 en propiedad, por concesión de la Junta Central^{****}. Había por

Consejo de Castilla en Cádiz.

^{****}. Lo fueron por Real Orden de 30 de marzo de 1815 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180).

^{****}. Don Manuel Abad solicitó en un memorial de 1817 que según lo proveído con don Segundo García Cid, con los porteros de dicho Tribunal y otros, se dignara S.M. declarar que debía entrar a servir la Escribanía de Cámara que le confirió la Junta Central en la primera vacante que ocurriera en el Consejo, ya fuera de nombramiento real, o ya de dominio particular, mandando que se le guardasen los honores y preeminencias correspondientes al mismo destino, así como el sueldo que le estuviera asignado. El Consejo lo consultó a S.M., que lo concede por Real Resolución de 24 de noviembre de 1817, publicada en Consejo pleno de 8 de enero de 1818 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 expte. núm. 41).

^{****}. Como hemos visto en la nota anterior, en la consulta con el Rey de 24 de noviembre de 1817, se resolvió favorablemente la petición de don Manuel Abad sobre entrar a servir la primera Escribanía de Cámara vacante. Abad era en 1808 primer Escribiente de la Escribanía de Gobierno de Muñoz. Emigró a Sevilla, donde la Junta Central le nombró Escribano de Cámara del Consejo reunido; servía por tanto una Escribanía de Cámara del Consejo en propiedad desde el 6 de agosto de 1809, fecha en que se le despachó el Real Título correspondiente. Continuó después en el Tribunal Supremo de Justicia hasta el restablecimiento del Consejo, verificado el 4 de junio de 1814. El Consejo en Decreto de esta fecha decidió habilitar a los Escribanos de Cámara que desde 1808 continuaron en sus puestos sirviendo al Gobierno enemigo con tal de que no tuviesen tacha legal para continuar en sus destinos, y mandó que los demás ocupasen las plazas que faltasen en sus respectivos oficios y ocupaciones conforme a su antigüedad. De esta manera don Manuel Abad quedó sin plaza en la Escribanía, ya que en la época de restablecimiento del Consejo existían tres clases de subalternos: unos que habían servido sus destinos antes de 1808 y continuaron durante la dominación enemiga; otros, como fue el caso de Abad y sus compañeros, que siguieron al Gobierno legítimo; y otros nombrados por éste para cubrir las vacantes de los que se consideraron necesarios para la atención del Tribunal. Así el Consejo en su Real Decreto de 4 de junio de 1814 decidió habilitar a los primeros, con tal de que saliesen purificados y no tuviesen tacha legal. (A.H.N., Consejos,, Consultas de Oficio del Consejo de

tanto seis Escribanías de Cámara y dos de Gobierno en 1814.

Una noticia de 1816 nos indica que el Presidente del Consejo, a petición de don Bartolomé Muñoz, Escribano de Gobierno y de Cámara de Justicia -ya vimos al principio de este capítulo que el titular de la primera de Gobierno era también titular de una Escribanía de Justicia-, aprobó un interesante decreto: en su virtud habilitó a don Valentín Pinilla para el despacho de los negocios de la Escribanía de Gobierno, y a don Cosme de Miguel García para la de Justicia, a cargo del mismo Muñoz; y a don Rafael de Varza para los de la Escribanía de Cámara de Pinilla****. Sin duda eran motivos de salud los que llevaron al veterano Muñoz a proponer sustitutos en sus Escribanías.

En 1818 fallecía el Escribano de Gobierno don Manuel Antonio de Santisteban y su vacante fue cubierta por el Escribano de Cámara don José de Ayala****. Su plaza en la Escribanía de Cámara fue cubierta a su vez en Consulta de 29 de abril de aquel mismo año.

Por Real Resolución de S.M. de 24 de noviembre de 1817 tuvo a bien declarar que don Manuel Abad debía ser tenido y reputado por Escribano de Cámara efectivo del Consejo, y que sin necesidad de nuevo título ni nombramiento especial entrase a ejercer su destino en la primera Escribanía de Cámara que vacase. Así se verificó el 30 de marzo de 1818, tras la renuncia de don Manuel Pico Santisteban el 26 de marzo****. El 21 de abril era don José de Ayala nuevo Escribano de Cámara del Consejo, y el 20 de noviembre de aquel mismo año fallecía don Segundo García Cid.

En el presupuesto del Consejo para el año siguiente, 1819, continuaban siendo seis los Escribanos de Cámara del Consejo****. El 19 de enero fallecía don Manuel de Carranza y el 21 de enero de aquel mismo año juraba plaza de Escribano de Cámara del Consejo don Damián Juárez, por ascenso de don José de Ayala a la Escribanía de Gobierno de Aragón. El 27 de febrero de 1819 era promovido a Escribano

Castilla, legajo 6.081, consulta del 24 de noviembre de 1817; y Sala de Gobierno, legajo 4.180).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 expte. núm. 40.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.082, consulta del 6 marzo de 1818.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 expte. núm. 11.

de Cámara don Antonio Martínez"".

La supresión del Consejo en 1820 tuvo importantes consecuencias para las Escribanías de Cámara del Consejo: don Bartolomé Muñoz, Escribano de Cámara y de Gobierno quedó cesante, lo mismo que don José de Ayala y don Valentín Pinilla. Don Manuel Abad fue nombrado en propiedad para el Tribunal Supremo de Justicia y también Secretario de Gobierno de aquel Tribunal""; don Antonio López de Salazar y don Antonio Martínez Abad también quedaron cesantes y fueron habilitados posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia para auxiliar a los Escribanos de Cámara de este Tribunal; por su parte, don Damián Juárez quedó también cesante y falleció en 1822"".

El Tribunal Supremo tenía previsto inicialmente mantener la estructura orgánica del Reglamento de esta institución de 1814. Sin embargo, en 1820 se introdujeron algunas modificaciones, como consecuencia del excesivo trabajo que se había acumulado en el Tribunal. El 25 de julio de 1820 el mismo Tribunal Supremo dirigió la siguiente petición a la Secretaría de Gracia y Justicia"": "Los Relatores y Escribanos de Cámara que señala el Reglamento no son suficientes en la actualidad para el pronto y expedito despacho de los negocios judiciales: porque además de los que les corresponden por sus privativas atribuciones, se hallan sobrecargados con el gran número de los contenciosos que pendían en los Consejos suprimidos".

Las Cortes concedieron esta petición y se dotó al Tribunal Supremo con dos Relatores y dos Escribanos más procedentes del extinguido Consejo de Castilla, tras un informe favorable de la Comisión de Legislación y del

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

"" Don Manuel Abad fue encargado en los años anteriores al Trienio Constitucional de la llamada Causa de El Escorial, nombrado por los Sres. Conde del Pinar y don Sebastián de Torres -ministros comisionados en esta Causa y de los bienes de Godoy-, por lo que toda la documentación estaba al parecer en su poder en 1820 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45).

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 45.

"" La recoge el profesor Moreno en su estudio sobre los orígenes de este Tribunal (MORENO PASTOR, L., "Los orígenes del Tribunal Supremo", op. cit., págs. 527 y 528, citando el legajo 33, expediente núm. 11, del Archivo del Congreso de los Diputados).

Gobierno****.

Desde el restablecimiento del Consejo comenzó un proceso de purificaciones de la conducta política de los Escribanos bajo el Trienio. Así, por ejemplo, el 23 de julio era purificado don Antonio Martínez, el día 30 don Antonio

****. Poco tiempo después se suscitó un conflicto entre el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo, por una discrepancia en el modo de llevar a cabo la correspondencia entre ambas instituciones. El problema fue ocasionado precisamente por el papel de Secretario del Supremo que ejercía don Manuel Abad, el Escribano más antiguo, lo que era rechazado de plano por el Congreso. Finalmente fue resuelto todo por una orden de 23 de mayo de 1821 en la que se declaraba Secretario al Escribano de Cámara más antiguo del Supremo. El profesor Moreno Pastor ha publicado el texto completo de esta Orden: "Excmo. Sr.: Las Cortes se han enterado por el expediente que V.E. les dirigió con fecha 1 de marzo último de las contestaciones ocurridas entre el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo de Justicia, de resultas de haber éste contestado con un oficio firmado del más antiguo de sus Escribanos de Cámara a otro que le pasó aquel cuerpo, para que le remitiese los informes prevenidos en el artículo 31 del Decreto de las Cortes de 24 de marzo de 1813, de que dimanó pretender el primero que el conducto de su correspondencia recíproca fuese el de sus Secretarios; y sostener el segundo que por su parte debe serlo el Escribano más antiguo, a menos que aquélla se dirija por su Presidente y el Decano del Consejo. Y teniendo las Cortes en consideración las razones alegadas por ambas corporaciones, y que si bien el Reglamento del Consejo de Estado previene expresamente que toda su correspondencia sea dirigida por sus Secretarios, en el del Tribunal Supremo de Justicia sólo se previene que el Escribano de Cámara más antiguo corra con los negocios generales que causen consultas al Rey, y tenga con la debida separación los papeles relativos a los expedientes de esta clase, consultas y Reales Ordenes; considerando asimismo que esta atribución es más propia de un Secretario que de un Escribano, como que no corresponde a los negocios contenciosos, sino a los gubernativos o económicos que ocurren; y que aunque no se le da aquel título cuando se le encargan estas funciones, ellas mismas se lo atribuyen por su naturaleza, faltando sólo en la ley la material expresión de que las ejerza en calidad de Secretario del Tribunal; se han servido hacer esta formal declaración, mandando se le expida el título correspondiente, al que deben estar anejos los honores de Secretario del Rey; con la prevención de que dirija la correspondencia del Tribunal Supremo de Justicia con el Consejo de Estado en el concepto de Secretario, y no de Escribano. Y se lo comunicamos a V.E. de acuerdo de las Cortes para que se sirva ponerlo en noticia de S.M., a fin de que disponga su cumplimiento". (MORENO PASTOR, L., op. cit., pág. 529, citando "Colección de decretos", 1821, págs. 112-140).

López de Salazar y el 31 don Gil de Ayala, que servía interinamente la Escribanía de Cámara de don Damián Juárez"".

En consulta al Rey de 8 de enero de 1824 el Consejo hizo propuesta de individuos para la provisión de la Escribanía de Cámara de don Damián Juárez. El propuesto en primer lugar y finalmente designado fue don Gil de Ayala"", oficial mayor de aquella Escribanía"".

En virtud de Real Orden de 13 de noviembre de 1824 se formó expediente para informar del número y personal de las Escribanías de Cámara y de Gobierno del Consejo"". En los primeros meses de aquel año los Escribanos de Cámara del Consejo eran los siguientes: don Bartolomé Muñoz -fallecido en mayo-, don Valentín Pinilla, don Antonio Martínez Abad, don José de Ayala, don Antonio López de Salazar -como encargado del despacho de la Escribanía de Cámara de don Manuel Abad- y el mencionado don Gil de Ayala"".

En 1826 don Antonio López de Salazar servía ya la tercera Escribanía de Cámara del Consejo como dueño propietario que era de ella; la quinta Escribanía de Cámara era servida como teniente por don Manuel de Carranza; también en la sexta se produjeron variaciones por el fallecimiento de don Antonio Martínez, de forma que fue habilitado para servirla interinamente don Manuel Eugenio

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 expte. núm. 2.; y Real Decreto sobre purificaciones de 27 de junio de 1823; también vid. consulta de oficio de 19 de enero de 1824 (A.H.N., legajo 6.087).

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.087, consulta del 8 de enero de 1824.

"" El mismo año hubo una nueva vacante entre las Escribanías de Cámara del Consejo de Castilla. En consulta de oficio del 17 de mayo de 1824 fue estudiada la propuesta que hizo el Marqués de Lara para cubrir la vacante producida en su Escribanía de Cámara por fallecimiento de don Bartolomé Muñoz (A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.087).

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 19.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 expte. núm. 5. Obsérvese cómo se repiten determinados apellidos en las Escribanías de Cámara: Abad, Salazar -el conocido Martínez de Salazar fue también Escribano de Cámara-, Ayala... Parece que en algunos de estos casos se daban vínculos familiares que ayudaron sin duda a facilitar el ingreso en alguna oficialía de Escribanía de Cámara.

sánchez Escariche, anteriormente Escribano de Cámara de la Sala de Alcaldes; en cuanto a la segunda, continuaba sirviéndola interinamente don Antonio López de Salazar por enfermedad de don Manuel Abad""; la cuarta la servía don Gil de Ayala"".

En 1827 ascendía don Manuel Abad a la segunda Escribanía de Cámara y de Gobierno del Consejo"". Su Escribanía continuaba vacante dos años después sin que el dueño propietario hubiese hecho propuesta alguna, de forma que el Consejo decidió por el momento habilitar a un oficial mayor de forma interina"". Por otro lado, este desinterés manifiesto por las Escribanías de Cámara, que reconoce el propio Consejo en un informe de 1829, queda demostrado en la Escribanía de Cámara del fallecido don Antonio Martínez, que no fue provista en propiedad hasta 1828"".

Al año siguiente, el 11 de abril de 1830, fallecía don Valentín Pinilla. Su Escribanía de Gobierno fue cubierta por don Manuel Abad el 22 de abril de aquel año, día en que tomó posesión del oficio"". Para cubrir su Escribanía de Cámara de Justicia el Decano nombró por Decreto a don Manuel de Carranza""; tras ascender don Antonio López de Salazar el 26 de julio, juró su destino de Escribano de Cámara don Vitores Vicario, el 30 de septiembre

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 expte. num. 11. Aunque en alguna ocasión se utiliza en los documentos oficiales del Consejo esta numeración -primera, segunda, tercera Escribanía-, habitualmente eran conocidas por el nombre del titular -Escribanía de don Manuel Abad, Escribanía de don Valentín Pinilla...-.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 expte. núm. 6: Presupuesto del Consejo Real para 1826.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.122, consulta del 22 de mayo de 1827.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 expte. núm. 6.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.094, consulta del 1 de febrero de 1828.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 49; cfr. auto acordado del Consejo de 13 de abril de 1830.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 50.

de aquel año****.

El 20 de agosto de 1831 el oficial mayor de una de las Escribanías de Cámara del Consejo hizo presente al Supremo Tribunal que los dueños de las dos Escribanías vacantes entonces (la de don Valentín Pinilla y la de don Manuel Abad) no habían hecho la propuesta correspondiente, a pesar de haber tenido tiempo suficiente para ello. El Consejo mandó el 22 de agosto que se hiciese saber a los dueños de las Escribanías vacantes, o en su caso a sus apoderados en la Corte, que los oficios no tenían teniente. Les concedía 30 días para presentarse a servirlos o para hacer la propuesta de sujetos con arreglo a las leyes, Reales Resoluciones y acuerdos del Consejo que trataban del asunto, con apercibimiento de que pasado sin hacerlo se procedería a lo que hubiese lugar. Se hizo saber esta providencia a don José Alonso Tejada, como apoderado del Conde de Toreno, dueño de la Escribanía que sirvió don Manuel Abad. También se notificó a los testamentarios de don Valentín Pinilla, aunque su Escribanía pasó poco después a don Manuel Mejía y la servía por entonces.

El apoderado don José Alonso Tejada presentó testimonio de un poder a su favor del Conde de Toreno para proponer tres sujetos para la expresada Escribanía, ejecutando la propuesta en la forma establecida. Sin embargo el Consejo no aceptó esta propuesta, sino que exigió al apoderado que en 30 días acreditase que el Conde de Toreno se encontraba en Francia. Como no lo acreditó, el Consejo procedió a proponer tres nombres por su cuenta****, en

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6; "Estado de descuentos hechos a los subalternos del Consejo en el año pasado de 1830 por razón de las clases que a continuación se expresan, según la nota dada por el habilitado para el percibo de sueldos".

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.107, consulta del 28 de febrero de 1832. Este curioso caso requiere una meditada explicación. El Consejo no aceptó una propuesta en regla del apoderado del Conde de Toreno y suponemos que fue por motivos políticos. Era ya conocida y destacada la conducta política de este señor y el Consejo supuso quizás que el Conde estaba escondido y no se atrevía a presentar personalmente una propuesta. Quizás en el poder se alegaba que Toreno estaba en Francia y por ello el Consejo exigió se demostrase ese alegato, que por lo visto no se pudo demostrar. En este caso, además, el Conde de Toreno había satisfecho diversos gastos y contribuciones en los últimos años, lo que fue también alegado por su apoderado. Pero el Consejo hizo caso omiso a estos argumentos y privó a Toreno de este derecho de proponer candidatos, que le estaba reconocido por las leyes.

consulta al Monarca de fecha 28 de febrero de 1832***.

b) Sustitutos, interinos y supernumerarios

Hemos mencionado en diversas fases de este capítulo las sustituciones e interinidades que se daban con relativa frecuencia en las Escribanías de Cámara. Bien sea por fallecimiento o ascenso del titular, o bien por ausencia o incapacidad***, el Consejo tenía facultad mediante Decreto del Decano de habilitar temporalmente a un tercero para que desempeñase el papel de Escribano de Cámara. Habitualmente estas sustituciones se encomendaban a otro Escribano de Cámara o a un oficial mayor, ya que éstos eran los que podían desempeñar eficazmente estos importantes oficios.

En caso de vacante, el Consejo proveía un sustituto que quedaba habilitado para ejercer el puesto, de tal forma que cobraba los emolumentos correspondientes - descontados impuestos y los cánones a pagar a los propietarios-, pero no percibía el sueldo de Escribano, ya que no tenía Real Nombramiento y su habilitación era interina.

Si un Escribano se hallaba enfermo era costumbre que sus compañeros le hicieran el trabajo para que no quedara sin manutención. Sin embargo, cuando era una enfermedad larga debía proponer al Consejo sustituto en personas adecuadas, habitualmente un hombre experimentado, un oficial mayor, etc. El designado lo era interinamente

***. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.107, consulta del 28 de febrero de 1832.

***. Hemos visto el caso de don Bartolomé Muñoz, al que el Presidente del Consejo concedió mediante decreto que don Valentín Pinilla fuera habilitado para el despacho de los negocios de la Escribanía de Gobierno; y a don Cosme de Miguel García para los de justicia que estaban a cargo del mismo Muñoz. También mediante decreto fue designado entonces don Rafael Yarza para sustituir a Pinilla en su Escribanía de Cámara (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3974 núm. 40).

hasta el restablecimiento del titular. Con frecuencia, en caso de enfermedad de un Escribano, los demás Escribanos de Cámara despachaban todos sus asuntos.

Por otro lado, el ejercicio de una interinidad o una sustitución implicaba un mérito cualificado para acceder al puesto en caso de vacante. De aquí el interés de los oficiales mayores que ningún particular se interfiriera en su carrera profesional y en sus legítimos intereses³⁴⁰, aparte de que ello supondría una marginación de su experiencia y antigüedad.

De esta manera, la doctrina sobre sustituciones vigente en el Consejo se ajustaba a una antigua resolución del Supremo Tribunal de 15 de septiembre de 1749. Decía así:

"...en el caso de que la ausencia, indisposición o impedimento de los Escribanos de Cámara sea corta o ligera y por tiempo no considerable, debe (como hasta aquí se ha hecho) despachar por el ausente o indispuesto uno de los otros Escribanos de Cámara, sin que haya motivo para alterar en este caso el referido antiguo estilo del Consejo, pues pudiera ser perjudicial cualquiera novedad de esta parte como medio acaso de descargar los Escribanos de Cámara con poco o ningún motivo en sus oficiales mayores todo el despacho de sus oficios. Y que cuando por ser dilatada la ausencia o larga enfermedad de los Escribanos de Cámara se estime conveniente el nombramiento de interino o sustituto, deberá el Gobernador del Consejo preferir en este caso a los oficiales mayores de las Escribanías si encontrase en ellos la aplicación y suficiencia que se necesita en conformidad de lo que V.M. tiene resuelto por su Real Decreto que queda referido para el caso de vacante de estos oficios".

Por otra parte, el Consejo tenía mandado en Sala segunda de Gobierno que los Escribanos de Cámara siempre que diesen cuenta de cualquier negocio correspondiente a la de otro compañero, debían manifestar previamente y en el acto quién era éste y el motivo por el

³⁴⁰ A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 46. En 1796, ante la enfermedad de un titular de Escribanía de Cámara, fue presentada una instancia de los oficiales mayores de las siete Escribanías de Cámara del Consejo. Alegaban que muchas veces ante la enfermedad del titular se les mandaba hacerse cargo de la Escribanía, como paso a un ascenso inmediato. Pedían entonces que se les tuviera presente su mérito y suficiencia en estos casos.

que hacían la sustitución"".

Así el Consejo en auto de 19 de julio de 1814 mandó hacer saber a los Escribanos de Cámara que no despachasen asuntos de sus compañeros sin expresa orden de habilitación. Por otro lado, no suponía ello que las sustituciones por compañeros pudieran hacerse indistintamente por cualquiera de ellos, sino que debía ser uno determinado. En caso contrario sería muy difícil que no se causase algún desorden en el despacho de los expedientes.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 46. Así pasó en un caso fechado el 16 de septiembre de 1815, cuando don Manuel Pico Santisteban dejó de asistir a su Escribanía de Cámara. Un certificado del doctor don Juan Manuel Castroviejo, médico de familia de S.M., acreditaba las enfermedades que le aquejaban. Todo el expediente fue remitido al Juez de Ministros, así como un certificado de la Escribanía de Cámara acreditando no haber entonces ningún expediente pendiente del mes anterior. Estas medidas podían significar que se daban con frecuencia casos de abandono o descuido de las propias funciones por los Escribanos, y quizás también fueran medidas de control para evitar retrasos en estas importantes oficinas. Pero siguiendo con el caso, el dueño de la Escribanía, don Manuel Antonio Santisteban inquirió sobre las causas que asistían a don Manuel Pico para no acudir al despacho de los asuntos de la citada Escribanía de Cámara, por haberle preguntado al respecto confidencialmente el Gobernador de la Sala segunda, Colón. En el caso de Pico había estado indispuerto más de 15 meses, lo que no podía ser considerado una ligera indisposición, y por tanto no parecía muy justo que sus compañeros se vieran precisados a realizar su trabajo durante tantos meses sin nombrarse sustituto. Además no podemos olvidar que el Consejo por auto de 19 de julio de 1814 había establecido la incorporación inmediata de los habilitados interinamente, y se mandó también que los entonces Escribanos de Cámara no despachasen los asuntos de otros compañeros sin expresa orden de habilitación. El titular de la Escribanía, don Manuel de Santisteban, había al parecer encubierto a Pico y no se habían cumplido las órdenes del Consejo. Es interesante también el informe final del Sr. Juez de Ministros, de fecha 23 de diciembre de 1815, en el que entendía "que el Consejo debe tomar una providencia para que los subalternos obedezcan y cumplan exactamente las del Consejo, y las que sean necesarias para evitar la falta de cumplimiento y arbitrariedad que se observa en don Manuel Pico, y el perjuicio que sufren así los negocios del Consejo".

El Fiscal, por su parte, propuso que don Manuel Pico obtuviese habilitación especial para que otro Escribano de Cámara u otro sujeto hábil e idóneo pudiera despachar en su lugar los negocios de su Escribanía, o que en otro caso hiciera dejación del oficio a fin de que se nombrase sucesor según las reglas entonces establecidas.

El mismo Escribano sustituido debía proponer sustituto al Consejo, para que una vez aprobado pudiese constar quién era el sustituto responsable del despacho de los negocios de la Escribanía y, en su caso, del retraso o defecto en el mismo¹²².

Frete a la figura de la sustitución estaba la de la interinidad. En esta situación no existía un titular de la Escribanía y la titularidad de esta oficina debía ser ejercida de forma provisional por una persona habilitada por el Consejo. Se diferenciaba, por tanto, de la sustitución, en que ésta tenía un carácter más temporal o limitado, y que en la sustitución había un titular que no podía ejercer sus funciones transitoriamente, por estar enfermo, ausente u otro motivo. Tanto las sustituciones como las interinidades debían ser aprobadas por el Consejo.

Ejemplos de interinidades hemos visto ya algunos. Así, al restablecerse el Consejo en 1814 fueron habilitados de forma provisional o interina muchos subalternos que habían servido al Consejo desde 1808¹²³; otro de sustitución fue el de don Antonio Granados, oficial mayor de la Escribanía de don Juan Pico Santisteban que en la ausencia de éste solicitó ser habilitado para ejercer la Escribanía, en vez de otro pariente, lo que el Consejo le concedió¹²⁴.

Finalmente, para concluir este capítulo de la designación de los Escribanos y su número, mencionaremos la figura del Escribano supernumerario. Entre la abundante documentación consultada del Consejo, tan sólo hemos encontrado una referencia a esta figura. No es propiamente un reconocimiento de que en este periodo del reinado de Fernando VII hubiese tales Escribanos, pero nos indica que pudo haberlos. El mencionado texto viene a decir que todas las habilitaciones eran siempre interinas y que cuando una persona servía un destino con carácter interino, al dejar de servirlo y si no había una vacante efectiva para encargarle su despacho, podía ser más conforme y equitativo dejarle en clase de supernumerario¹²⁵.

¹²². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 46.

¹²³. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 46.

¹²⁴. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6.026 expte. núm. 46.

¹²⁵. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

3. Juramento y toma de posesión

Ha aparecido ya en el capítulo anterior alguna referencia al juramento de los Escribanos. Realizada la consulta al Rey y designado el nuevo Escribano, se hacía el Real Nombramiento y la Cámara expedía el Real Título. Comunicado al interesado pasaba a jurar con él en Sala primera de Gobierno.

El procedimiento de juramento de los Escribanos de Cámara, como el de los demás subalternos del Consejo, fue descrito por Escolano de Arrieta²⁴⁷⁶:

"Cuando hay alguna persona o sujeto que se presente a jurar sus empleos o comisiones es lo primero que despachan los Secretarios (Escribanos) de Gobierno, haciéndolo presente al Consejo en esta forma: "Señor, Don N. viene a jurar el empleo de tal", y el Sr. Presidente, Gobernador o Decano, toca la campanilla, y luego que entra el portero le manda que llame a Don N. para jurar tal empleo, y en su consecuencia dice el Portero en alta voz desde la puerta de la misma Sala: "Que Don N. entre a jurar tal empleo". Entrado en la Sala el que ha de jurar le pone el portero al lado del Secretario de Gobierno y entonces se lee por éste el título hasta la firma de S.M., y concluido dice: "Está tomada la razón, y viene en forma", y el Sr. Presidente, Gobernador o Decano dice: "Cúmplase lo que S.M. manda y jure"²⁴⁷⁷. El Portero entrega el libro de Juramentos al Secretario (Escribano) de Gobierno, quien le recibe según la fórmula que en él se halla, y hecho esto se sale de la Sala el

²⁴⁷⁶. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 44.

²⁴⁷⁷. En estos juramentos se omitía el subir el título al Sr. Ministro que presidía, como sí se hacía en el Consejo pleno.

juramentado y se pone a continuación del título una certificación como la que sigue:

"Don N. &c. Certifico que ante los Sres. del Consejo de S.M. en Sala de Gobierno juró Don N. para tal empleo, en consecuencia del Real Título antecedente. Ya para que conste lo firmo en Madrid &c."

En el Libro de Juramentos que había en las Escribanías de Gobierno se ponía una anotación indicando la fecha, nombre del que jura, empleo, fecha de la anotación y nombre y firma del que la hacía.

Seguidamente tomaba posesión de su Escribanía sin que procediese examen²⁻⁷⁸ y empezaba a ejercer su papel de Escribano, y desde el mismo momento del juramento y toma de posesión quedaba incorporado en el Montepío de Reales Oficinas. Ya vimos que por su ingreso en este Montepío pagaba en 1826 una cantidad superior a los 14.000 reales²⁻⁷⁹.

Añadía Martínez de Salazar en sus "Noticias del Consejo" algún dato más sobre la ceremonia de juramento y toma de posesión²⁻⁸⁰:

"Para entrar a despachar en el Consejo los Escribanos de Cámara, se ponen capa de bayeta u otra tela negra, y esta ceremonia tuvo su origen desde que cesó el antiguo traje de las golillas; y también obtienen la regalía de entrar con gorra y cubrirse cuando se recibe el juramento a los que lo deben hacer en el Consejo".

²⁻⁷⁸. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 658.

²⁻⁷⁹, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 expte. núm. 11.

²⁻⁸⁰. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 659.

4. Privilegios y Honores

En algunos expedientes del reinado de Fernando VII aparecen instancias de Escribanos de Ayuntamientos que solicitaban les fueran concedidos los honores de Escribanos de Cámara del Consejo****.

Evidentemente estos honores no debían ser sólo el poder vestir el uniforme de estos Escribanos de Cámara en las ceremonias públicas, o aquel que mencionaba Martínez de Salazar de poder entrar con gorra y cubrirse cuando se recibía el juramento a los que lo debían hacer en el Consejo. Tampoco a la facultad de poder designar oficiales o tenientes para la Escribanía. Tales instancias se referirían más bien a otros privilegios de tipo honorífico: asiento preferente a otros oficiales públicos en las ceremonias, ya que los Escribanos eran considerados los primeros subalternos del Consejo de Castilla. Incluso es posible que uno de estos honores pudiera ser un mérito para aspirar a una Escribanía de Cámara vacante.

En todo caso no tenemos ningún testimonio de la naturaleza de estos privilegios. Pero sí podemos afirmar que enorme prestigio de estos subalternos, a los que se encomendaba siempre labores de especial confianza o responsabilidad. No en vano el empleo de Escribano de Cámara era considerado término de carrera y para llegar a ellos se requerían muchos años de trabajo, grandes servicios y un ascenso por vía de escala rigurosa****.

Entre los derechos que, por ejemplo, les estaban reconocidos, uno de ellos era el de participar en los beneficios de negocios de parte y no sólo en los de oficio.

****. Ver, por ejemplo, en A.H.N., Consejos suprimidos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990 núms. 64 y 74: respectivamente corresponden a Escribanos de Puerto Real e Isla de León (Cádiz).

****. A.C.D., Serie General, legajo 32, expediente núm. 63.

5. Competencias

"Por diferentes leyes reales y autos acordados"" está prohibido que ningún otro que no sea Escribano de Cámara de él pueda despachar en el Consejo"".

Los Escribanos del Consejo recibían las denuncias o peticiones de los particulares a través de los procuradores"". Los distintos expedientes eran repartidos por riguroso orden entre cada uno de los Escribanos del Consejo, por medio de un empleado de las Escribanías que era el Repartidor del pleitos.

Desde el mismo momento que un Escribano recibía un pleito, debía velar por el mantenimiento del secreto con la máxima discreción. Debía el Escribano de Cámara encauzar el asunto dentro de la maquinaria del Consejo, informando a las partes del expediente o a sus procuradores, trasladándolo a los Relatores, a los Agentes

"". Ley del Reino I, título XIX, libro II: otro que no sea Escribano de Cámara no entienda en los negocios del Consejo.

"". Así, para hacer relación, los escribanos de provincia y número y otros cualesquiera, procede el que las partes entreguen a los Escribanos de Cámara los recursos de apelación y, admitidos por el Consejo, dado el decreto ordinario, en virtud de él, vienen a hacer relación de los autos y providencias apelados (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.873 núm. 7).

"". El Escribano de Cámara no recibía todas las denuncias: las presentadas por los alcaldes y los corregidores, y los informes referentes a asuntos considerados de excepcional importancia se remitían al Gobernador del Consejo (DESDEISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 299).

Fiscales o directamente a los Fiscales****. Otros muchos cometidos eran asignados a estos Escribanos: era importante su papel en las ceremonias del Consejo, en las labores burocráticas del Supremo Tribunal -compulsas, registros, expedición de despachos, sentencias y copias, etc-. Veremos con más detalle todas estas funciones.

En primer lugar, los Escribanos de Cámara eran los encargados de recibir las peticiones de los particulares: instancias, demandas, solicitudes eran presentadas en el Consejo y distribuidas entre los Escribanos por el Repartidor de Pleitos.

Consecuencia de estas peticiones podía ser la expedición de un despacho o de una certificación. Un Escribano de Cámara no podía extender decretos sin informar previamente al Consejo de la petición realizada. Si una Sala denegase una petición, no debía llevarse el asunto a otra Sala, y lo mismo en el caso de una suplicación a alguna providencia dictada: debía ser despachada con los mismos Ministros que la dieron****.

En cuanto a los despachos ordinarios que podía expedir un Escribano, éstos eran de muy diverso género: emplazamientos y compulsas -tanto con remisión al Consejo como a otros tribunales-, inserción de leyes, pragmáticas, autos acordados, condiciones de millones y órdenes generales; despachos y órdenes en que se mandaban guardar aquéllas, aunque no se insertasen; ordinarias de fuerza de conocer y proceder, de no otorgar, y de ambos casos, con remisión al Consejo o a la Chancillería para que se prorrogase el término de la absolución****.

****. "Se informa a cada Escribanía de Cámara para que a través de ella se pasen directamente a las manos del Fiscal (...) todos los expedientes, autos y papeles correspondientes a sus respectivas Fiscalías..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm. 5).

***. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 661.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1. Otros posibles despachos emitidos por los Escribanos de Cámara, podían ser: para recoger títulos de los que se pedía retención; la que la Justicia la hiciera; para que informase un Juez, Rector o una Universidad; auxilioria de Alcaldes de Corte, Corregidores, Jueces de Comisión; para que un corregidor o alcalde mayor diese fianzas de residencias; para que cesase un alcalde mayor de señorío, cumplido su término; para que no se nombrasen ministros naturales de los pueblos; para que no se acotasen los términos públicos y concejiles; para impartir el auxilio real; para apea o deslindar; para aposentar un ministro; para dar residencia por poder; para que se pudiese hacer concejo abierto; para que se excusase a un vecino de cobranzas y cargas; para

Ejemplos de despachos y providencias emanados del Consejo a través de sus Escribanos de Cámara eran: para que no se hicieran adjudicaciones, para que un juez no cobrase costas hasta que se vieses los autos; las providencias para que alguien jurase o declarase en el Consejo como consecuencia de una demanda o una petición; o las providencias en que se da comisión a un juez para que ejecutase carta ejecutoria, y de las que se daban para que informasen Audiencias y Alcaldes del Crimen de las Chancillerías"". No debían remitir papeles o documentos a otros Tribunales sin un especial mandato del Consejo"".

Los Escribanos de Cámara emitían a veces despachos o certificaciones por especiales conceptos: exceptuando a algún pueblo temporalmente de contribuir en puentes; sobre elecciones de justicia estando en secuestro, o nombramiento de algún otro oficio que estuviese anejo al

cubrir huecos donde no había número de hijosdalgo; providencias de amparo de embargo de bienes; providencias de insertar las leyes de nuevos diezmos y rediezmos; para que entrase escribano de fuera a hacer diligencias; para que no se eligiesen los que tenían pleitos o deudas al concejo; para que los ejecutores cobrasen las deudas a los morosos; para que no se molestase a uno o se le soltase dando fianzas; para que a uno se le diese vecindad; para que se le diese estado o se le mantuviese en el que había tenido; para que no entrasen ganados en montes nuevos, en olivares y viñas, así como para que no se arrendase la hoja de ellas; para avecindar gitanos; para que los terrenos sometidos a rompimientos se redujesen a pastos; para que no se mancomunasen culpas; para que no se hiciesen adjudicaciones, etc. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1: extraído del Arancel de los Escribanos de Cámara de 1764).

"". Otros casos eran los siguientes: para que un juez recusado fuese acompañado; para descubrir tesoros; para que un pueblo pudiera comprar trigo para su abasto; para matar lobos y zorros; para poder pesar ovejas; para convertir en pan el trigo de un pósito; para que se hicieran elecciones y proposiciones de oficios en un lugar; para que un concejo no costeara pleitos de particulares; para que el que había litigado con poder de un concejo se lo pagase; provisión de desagravio de repartimientos, y para que se hiciesen con igualdad, o sobre costas; provisiones en las que se daba comisión en materia civil o criminal a petición de parte, o de materia civil a juez realengo o persona particular; providencias para averiguar algo o con facultad además para sentenciar, teniendo o no la calidad de reasumir la jurisdicción; provisiones para recoger bulas; para diligencias de receptores para hacer probanzas, etc. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1: extraído del Arancel de Escribanos de Cámara de 1768).

"". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 665.

secuestro; despachos de facultad para limpia y entresaca de montes, o para usar de arbitrios o repartimientos prorrogándolos; despachos aprobando ordenanzas, transacciones y acuerdos de pueblos, cuentas y otras clases de escrituras; provisiones de diligencias para venias, así como dar cuenta de ellas; también intervenían en las venias firmadas por el Rey; emitían también los libramientos que se mandasen despachar por el Consejo en pleitos de expolios, concursos, secuestros y otros caudales depositado; se encargaban también de emitir la provisión en que se encomendaba la administración de los mayorazgos a un litigante.

Con respecto a los exámenes de abogados, reconocían los papeles de los abogados que venían al Consejo a examinarse, y de dar cuenta de esta petición; entregaban el pleito que se asignaba al abogado, e igualmente cuidaban de recogerlo; también le tomaban juramento, y emitían la certificación de su aprobación, junto con la nota que se había mandado poner.

También intervenían en los exámenes de escribanos reales: reconocían los papeles de los que venían a examinarse al Consejo para este oficio o de los que se examinaban con Cédula de la Cámara; daban también cuenta de la aprobación y expedían el título correspondiente. Igualmente intervenían en los despachos aprobando los de señorío o los nombrados por los pueblos.

En todos los despachos y certificaciones que hicieren los Escribanos de Cámara debían poner los legítimos derechos que devengasen por tal operación, con arreglo al Arancel vigente. De ello cuidaban los Ministros semaneros****. Y siempre debía darse, antes de expedir una certificación o decreto de remisión, una orden o decreto previos del Consejo. Igualmente, antes de llevar a firmar ni llevar los despachos al Ministro semanero, debían comprobar y manifestarle los poderes de las partes, así como corregir, señalar y rubricar los despachos y poner los derechos de su mano. Y antes de pasar a la firma al Gobernador un despacho o provisión, debían ser firmadas por cuatro Ministros del Consejo****. Estaban sujetos también a algunas reglas especiales en las apelaciones y en los autos definitivos****.

Ya hemos visto que los Escribanos recibían las quejas de los particulares. Esto podía ser bien directamente o bien a través de sus procuradores. Les estaba

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 661.

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 667.

****. Ver A.H.N., Colección de Reales Cédulas, num. 2.716, de 9 de octubre de 1783.

encomendada entonces la custodia y el secreto de todos los documentos presentados. Era misión suya entregar los autos a cada una de las partes. Para ello, debía tomar conocimiento de los autos, especificando número de piezas y folios, para evitar extracciones o extravíos de documentos al ser devueltos por los particulares^{***}. Lo mismo en los pleitos de segunda suplicación o de injusticia notoria.

También les correspondía entregar y recoger los autos de un asunto al Relator al que hubiese correspondido^{***}; también en su caso al Agente Fiscal, o al Ministro o Juez de Comisión^{***}. En los pleitos y expedientes debía sentarse el día en que se encomendaba al Relator, para que éste hiciera su relación por orden de antigüedad.

Otros cometidos eran su intervención en las residencias y pesquisas a las ciudades, villas y lugares; las compulsas de autos, escrituras y otros instrumentos; su intervención en los pleitos eclesiásticos que venían por vía de fuerza, con la certificación o despacho correspondiente, a su devolución; pleitos apelados a los juzgados de número o de provincia, que se mandasen entregar o retener en el Consejo^{***}; la entrega de certificaciones de cualquier petición, de la consiguiente provisión o de cualquier expediente o pleito; la expedición de sentencias de tenutas, entretanto se despacha la ejecutoria; buscas de pleitos; remisión de autos de tenutas a las Chancillerías o

^{***}. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 660 y 661; y A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1.

^{***}. Por el auto acordado del Consejo de 24 de noviembre de 1783 se mandaba "que dentro del día en que se rubricasen los autos y acuerdos del Consejo, los pasen los Relatores con sus respectivos expedientes a la Escribanía de Cámara, y que los Escribanos de Cámara cuiden de que se notifiquen a los procuradores" (A.H.N., Colección de Reales Cédulas núm. 2.728).

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1.

^{***}. La legislación vigente a finales del siglo XVIII (Ley I, Título XIX, Libro II) establecía que ningún Escribano que no fuera de Cámara podía entender de los negocios del Consejo. Con posterioridad a esta ley se concedió a los Escribanos de Provincia el que pudiesen venir a hacer relación a la Sala de Provincia de los pleitos aprobados, cuyo interés no llegase a 1.000 ducados y pasase de los 300.000 maravedís. Se les permitió entonces venir a hacer relación para la revocación o confirmación del auto apelado, prescindiendo como requisito especial del mandato del Consejo expedido por un Escribano de Cámara. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.873 núm. 7).

Audiencias; tomas de autos; otorgamiento de poderes; llevar a los domicilios de los Ministros despachos para su firma; reconocimiento y recepción de los autos que venían del Consejo por grados o recursos de las Chancillerías o Audiencias"".

Cuando un pleito o asunto llegaba al Consejo, era repartido por turno entre los cinco Escribanos de Cámara correspondientes a Castilla, ya que los pleitos de la Corona de Aragón eran conocidos privativamente por el Escribano de Cámara creado a tal fin"". Asignado el pleito, lo estudiaba y presentaba un resumen al Consejo, ante la Sala correspondiente. Tras la lectura de este resumen, "el Consejo podía rechazar pura y simplemente la petición o confiarla para una más amplia información a una persona competente, o bien admitirla en principio y decidir que el expediente sería confiado a un Relator. En el primer caso, todo estaba terminado. El Escribano no tenía derecho a llevar el asunto delante del Consejo. En los otros dos casos, debía poner todas las piezas del proceso a disposición del consultante o del Relator, tan pronto como hubiera recibido la orden del Presidente"".

En estos dos últimos casos, seguidamente informaba a las partes o a sus procuradores y, devueltos los documentos, en caso de proceso los remitía al Relator y, más tarde, al Agente Fiscal"". Comunicaba a las partes o a sus procuradores cualquier novedad relativa a la marcha del asunto. Dictaba por mandato del Consejo la correspondiente provisión o despacho, que antes de expedirlo comunicaba siempre a los procuradores de las partes"".

Los Escribanos de Cámara se encargaban

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1.

"". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 662.

"". DESDEVICES DU DEZERT, G., "Institutions", op. cit., págs. 77-80.

"". Por Real Orden de 25 de enero de 1824 se mandó que las Escribanías de Gobierno y las de Justicia pasasen los expedientes correspondientes a los Agentes Fiscales y Fiscales de acuerdo con la nueva distribución territorial de negocios aprobada (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.658 núm. 5).

"". El mismo día en que se rubricasen los autos y acuerdos del Consejo, debían pasarlos los Relatores con sus respectivos expedientes a la Escribanía de Cámara, y los Escribanos de Cámara debían cuidar de que fueran notificados a los Procuradores (A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 2.728, de 24 de noviembre de 1783).

también de la redacción de las sentencias, así como de su custodia y registro oficial. En su debido momento se encargaban de enviar a las partes la copia correspondiente"".

Sus cometidos estaban también sometidos a una serie de prohibiciones: no debían recibir peticiones de los regidores y personas que acudieran al Consejo en nombre de algún pueblo, sin que primero manifestasen la instrucción y poderes que tuviesen; no debían recibir depósitos de dinero y alhajas en sus Escribanías; tampoco debían poner a consulta con el Rey ningún negocio que no hubiera visto y se hubiera hecho relación de él en el Consejo; no debían despachar comisiones para jueces sin que les constase que el nombrado había hecho relación al Consejo de las que había tenido y dado cuenta al Fiscal; no podían llevar derechos de los despachos de oficio y fiscales que se les entregaren, así como de las causas y despachos de pobres; tampoco podían poner al pie de los despachos, donde correspondía poner los derechos, la palabra "gratis" en vez de tales derechos.

Los Escribanos de Cámara estaban obligados a llevar una serie de libros: uno donde asentar los negocios fiscales y cosas que se proveyesen en relación con sus oficios, y lo que se mandare a los jueces; otro para sentar los pleitos y expedientes de oficio que pasaban a los Relatores, en papel de oficio; otro para sentar los propios negocios que pasasen a los Agentes Fiscales; otro para sentar las condenaciones de penas de cámara, en el mismo papel; otro para sentar los estados y mayorazgos que se ponían en secuestro, en papel de oficio; otro para registrar las Reales Cédulas que se expedían de oficio en ese papel; otro para sentar los pleitos que se entregaban a los procuradores, en papel de a diez cuartos; otro libro para sentar los pleitos y expedientes de parte que pasaban a los Relatores, en el mismo papel; y finalmente uno más para sentar los negocios de parte que pasaban a los Agentes Fiscales, en el mismo papel"".

Aparte llevaban también un libro en el que diariamente anotaban todos los ingresos y emolumentos percibidos por su Escribanía"".

Anualmente debían hacer inventario de todos

"" DESDEVICES DU DEZERT, G., "Institutions", págs. 77-80.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 666 y 667. Cita aquí un auto del Consejo de 28 de julio de 1764. Los libros de oficio debían costearse de los gastos de justicia y, en su defecto, de los de penas de cámara.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456 núm. 59.

los pleitos y expedientes finalizados, y colocarlos en legajos separados. Del mismo estilo serían los Libros de Conocimientos de Relatores, Agentes Fiscales y Procuradores. También cada cuatro meses debían formar relaciones o certificación de las retenciones de bulas o breves apostólicos que hubiera habido.

Y en virtud de Real Orden de 4 de marzo de 1800, todos los Escribanos de Cámara debían pasar semanalmente lista a los Fiscales de los negocios que les correspondían y se hubieran pasado a los Agentes Fiscales en la misma semana. Otro oficio del Decano de 28 de octubre de 1829 pedía listas todos los lunes de todos los expedientes y pleitos que se hallasen para su despacho en poder de los Fiscales, de sus Agentes o de los Relatores, "con expresión del día en que hayan tenido su entrada y los nombres de los Agentes Fiscales y Relatores que los tengan"****.

En virtud de auto de fecha 4 de agosto de 1806 se pedían listas mensuales y anuales de los negocios pendientes en poder de los Agentes Fiscales y en cada Sala respectivamente****. También a fin de año debían remitir un informe al Rey, de los negocios que existiesen sin despachar en poder de los referidos Agentes Fiscales****.

En ocasiones el Consejo les mandaba también informar de otros aspectos relacionados con su Escribanía, así como de pleitos o documentos allí contenidos****. Así,

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.819 núm. 16. Las primeras listas fueron remitidas el 9 de noviembre de aquel año.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.275 expte. núm. 29: los Escribanos de Cámara en los ocho primeros días de cada mes debían presentar a los Fiscales listas de los pleitos y expedientes que a finales del mes anterior hubiesen quedado sin despachar en poder de los Agentes Fiscales. También debían pasar a fin de año a la Escribanía de Gobierno listas duplicadas de los expedientes de oficio que hubiera pendiente en cada Sala, una para presentarla en el Consejo pleno, y la otra para pasarla a la Sala que correspondiese, incluyendo aquí los negocios en que el Rey había pedido consulta, aún cuando fueran promovidos a instancia de parte. Debían expresar en cada caso el estado que tuviera cada expediente.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 2.881, 2.882 y 2.883.

****. Un ejemplo de esto último lo tenemos en A.H.N., Consejos Suprimidos, sala de Gobierno, legajo 3.732 núm. 25: "Expediente causado a consecuencia de oficio de S.I. el Sr. Decano del Consejo previniendo a los Escribanos de Cámara de él, que si el Alcalde de la Real Casa y Corte don Mariano

un ejemplo lo tenemos en el envío de listas de las comisiones que los Ministros tenían en ellas"". O bien se solicitaba un resumen de pleitos"". La proliferación de estas listas de pleitos, no sólo en éstas sino en todas las oficinas del Consejo, indica la lentitud que había en el despacho de sus negocios y la evidente acumulación de expedientes en estas oficinas"".

Rufino González, comisionado para entender de Real Orden en cierto negocio, necesitase algunos conocimientos o noticias por los papeles que existan en dichas Escribanías de Cámara, se le faciliten".

"". Como ocurrió a finales de 1814 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.455 núm. 56).

"". Nos puede servir a título orientativo, por ejemplo, este oficio enviado en 1803 a cada Escribanía de Cámara solicitando un resumen de pleitos: "Para que tenga su debido cumplimiento lo resuelto por S.M. en Real Decreto de 4 de agosto del año último pasado, prevengo a Vd. que antes de concluirse el próximo mes de diciembre me remita listas circunstanciadas de todos los pleitos y expedientes correspondientes a la Escribanía de Cámara de su cargo, así como de los que se hubiesen terminado en el presente año como de los que quedasen pendientes, clasificándolos en la forma siguiente: pleitos y expedientes entre partes resueltos y pendientes; expedientes de oficio resueltos y pendientes: en la clase de estos últimos se comprenden todos aquellos negocios en que tengan parte los Fiscales, los gubernativos y demás que no sean de particular justicia entre partes. (...) En éstos y en todos los demás pendientes se ha de expresar su actual estado, día en que tuvieron principio, día en el que entraron en poder de Vd., y el motivo de no haberse terminado, omitiendo incluir en sus listas los que existan en los Relatores y Agentes Fiscales, a fin de no duplicarlos, pues vendrán en las de éstos. (...) Vd. pondrá las suyas con la debida claridad, separación y distinción de Salas y negocios, sacando al fin un resumen exacto del número de los de cada clase que resulte de ellas mismas, de suerte que inmediatamente puedan acomodarse a los dos planes que he remitido al Escribano de Gobierno Bartolomé Muñoz con encargo de que los manifieste a Vd. para que se arregle a ellos puntualmente." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.883).

"". He aquí, por ejemplo, las listas de expedientes pendientes en tres Escribanías de Cámara del Consejo a finales del año 1807, correspondientes a pleitos de oficio de interés de la causa pública. Estas listas pueden orientarnos sobre la situación en que se encontraban las Escribanías en el momento de entrar a reinar Fernando VII: a) Escribanía de Cámara de Carranza: Sala primera de Gobierno (1 expte.); Sala segunda de Gobierno (10); Sala de Mil y Quinientas (3); Salas de Justicia y Provincia (ninguno); b)

Otras funciones de los Escribanos de Cámara eran las siguientes: habitualmente no salían de la Corte para comisiones, si no era con algún Ministro del Consejo o en asuntos de especial confianza. Sin embargo, con relativa frecuencia han sido designados para asuntos especialmente importantes como visitas y causas criminales a personalidades y ministros superiores"".

Al Escribano de Cámara que seguía en antigüedad al de Gobierno le correspondía pasar al Palacio Real los jueves de cada semana para conocer la hora de la consulta de los viernes del día siguiente. Otros cometidos suyos son el despacho de los negocios correspondientes al examen de abogados""; debía prevenir diariamente al Consejo pleno si iba a haber o no despacho de semanería; los sábados y días de fiesta debía informar al Consejo pleno los Consejeros a quienes correspondía la visita de cárceles.

Al Escribano de Cámara más moderno le correspondía asistir a la publicación de las pragmáticas, así como asistir con el Consejo a las visitas generales de presos de la Cárcel de Villa. A la visita general de la Cárcel de Corte también asistían estos Escribanos, manteniéndose en la Sala cuando allí se hacía relación de las causas en sumario.

El Escribano de Cámara más moderno era también el encargado de asistir con un portero a casa del Gobernador, cuando éste estaba enfermo, para informarse de su estado de salud y reportarlo a cada una de las Salas del Consejo. Otra misión suya era informar a los Consejos de Indias, Ordenes y Hacienda de la hora de las funciones y actos públicos"".

Escribanía de Cámara de Reboles: Sala primera de Gobierno (3); Sala segunda de Gobierno (25); Sala de Mil y Quinientas (4); Sala de Justicia (2); Sala de Provincia (ninguno); c) Escribanía de Cámara de don Manuel Picó Santisteban: Sala primera de Gobierno (4 y 1 consultivo); Sala segunda de Gobierno (7); Sala de Mil y Quinientas (5); Sala de Justicia (2 consultivos); Sala de Provincia (1 consultivo).

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 668.

"" Esta materia no era por tanto objeto de reparto entre los demás Escribanos de Cámara.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 669 y 670. En tales Consejos debía entrar el Escribano de Cámara con capa de ceremonia y gorra. Si era en un día de fiesta debía acudir al domicilio de los Presidentes de aquellos Consejos para informar de tal convocatoria. Así, por ejemplo, en junio de 1808 el Escribano de Cámara más moderno informó a los demás Consejos de que la celebración de la festividad del

6. Retribución

Los Escribanos de Cámara percibían un sueldo fijo y unos emolumentos variables en función de un arancel y del volumen de trabajo despachado por su Escribanía. Tanto el sueldo como el arancel formaban la dotación del Escribano.

El sueldo fijo retribuía la intervención de los Escribanos en los negocios de oficio y de interés general. Por este concepto se les abonaban en el año 1808 la cantidad de 12 reales diarios, que a fin de año suponían la cantidad de 4.380 reales (400 ducados)"".

Este sueldo se mantuvo estable en los años siguientes"". En 1818 un Escribano de Cámara percibía 4.341 reales y 6 maravedís, pagados por Tesorería General"". Otros documentos de los años siguientes, hasta la extinción del Consejo, nos hablan de una dotación de 4.400 reales anuales"".

Corpus sería a las 10:00 de la mañana del 16 de junio, en la iglesia de Santa María de la Almudena. Asistieron entre otras autoridades los Consejos de Castilla, Indias, Ordenes y Hacienda. (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 9).

"" A.C.D., Seie General, legajo 32, expte. 63.

"" Una noticia de la documentación de las Juntas Contenciosas nos informa que en 1811 los salarios establecidos para los Escribanos de Cámara de aquellas Juntas eran los siguientes: 11.685 reales para los que llevasen más de cuarenta años de servicios; y 4.341 reales para los que llevasen menos tiempo (A.H.N., Consejos, Juntas Contenciosas, legajos 51.583 y 51.584, año 1811).

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11.

"" Por ejemplo, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6, referente a los años 1825, 1826, 1829 y 1830.

Y por otro lado estaban los emolumentos, que eran la parte más sustanciosa de los ingresos del Escribano de Cámara, y que correspondían a sus derechos en los negocios de parte"". La suma de ambas cantidades daba la estimación de valor de la Escribanía. Cuando un Escribano tomaba posesión de su cargo e ingresaba en el Montepío de Oficiales, se valoraba o estimaban sus ingresos por una cantidad en alzada. Esta cantidad era en 1808 la de 22.000 reales, por cuya proporción se les descontaba en Tesorería para el Montepío, anualmente, la cantidad de 776 reales"". A su ingreso en el Montepío también se le descontaba una cantidad inicial global, equivalente a más de 14.000 reales"".

En 1820 continuaba el sueldo en los 22.000 siendo por entonces el global de lo que percibía un Escribano de Cámara 32.000 reales"", que eran tan sólo 19.223 en 1824 en la Escribanía de Cámara de don Valentín Pinilla"". De ellos debía sufragar una serie de gastos y cargas: en primer lugar, el arrendamiento que correspondía pagar al propietario -las Escribanías de Cámara estaban enajenadas de la Corona-. En el siglo pasado se dictó el ya mencionado auto acordado de 15 de abril de 1722, estipulando este precio en 7.000 reales anuales, equivalente a un tercio de los emolumentos de la Escribanía"". Estos 7.000 reales

"". Sobre todos los actos del procedimiento en los que intervenían, percibían derechos considerables. Pero no podían tomar nada, antes de que el Tasador de Pleitos comprobase y aprobase sus cuentas. Debía también firmar registrar en un cuaderno todos los ingresos que entrasen en caja (DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", págs. 77-80).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180. A su vez por la Tesorería se hacía la correspondiente Carta de Pago y de ella se tomaba razón en la Contaduría.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

"". Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, legajo 32 núm. 63. Ya vimos en su momento como a la extinción del Consejo, sus Escribanos de Cámara conservaron el sueldo, pero no sus emolumentos, aunque seguían cotizando en el Montepío por 22.000 reales.

"". Que resultaban de la suma de 14.823 reales de vellón como emolumentos, unidos a los 4.400 reales de vellón del sueldo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11).

"". El motivo por el que el Consejo fijó en esta cantidad los arrendamientos de Escribanías de Cámara, era porque se multiplicaban los continuos abusos que se experimentaban para conseguir los nombramientos de tenientes.

se mantuvieron durante el reinado de Fernando VII, con algunas excepciones en los momentos de crisis política o económica"".

Ya hemos mencionado que los Escribanos se encontraban gravados con algunas cargas y gravámenes. Vamos a abundar en este tema. Aparte de los citados 7.000 reales por razón de arrendamiento, había que sufragar los censos con que al parecer estaban gravadas todas o casi todas las Escribanías de Cámara. También debían satisfacer estos censos los propietarios que servían por sí mismos la Escribanías de Cámara"".

Otra de las cargas era el alquiler de la casa u habitaciones utilizada para la colocación y conservación del archivo de la Escribanía, con un coste aproximado de 3.000 reales; los gastos de escritorio ocupaban también un concepto importante, incluyéndose entre ellos los de papel, plumas, tinta, oblea y lacre, polvos, cordel, luces, brasero en la temporada de invierno, esterado y otros gastos menores, que podría ascender en 1826 a unos 1.000 reales anuales, ó 3.000 reales, según la Escribanía""; junto a estos gastos, otros por el correo y la correspondencia, los a 1.000 ducados por salario del Repartidor dotado a sus expensas. Si sumamos todos estos gastos, sin contar los

Los propietarios obligaban a éstos a hacerles continuas gratificaciones con el nombre de "guantes". Desde esta fecha también se estipuló que los propietarios no designasen un teniente sino tres, entre los que elegiría el Consejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456 expte. núm. 59).

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456 núm. 59. En julio de 1824 se quejaba don Antonio Martínez de no poder pagar al propietario de su Escribanía los 7.000 reales correspondientes a 1823, por los cortos ingresos percibidos en aquel periodo. El Consejo resolvió el 29 de julio de 1824 que cumplía "don Antonio Martínez con pagar al dueño de su Escribanía de Cámara la tercera parte de lo que ésta ha producido en los siete meses de 1823".

"" Como era el caso de la de don Valentín Pinilla. Cuando en estos casos los censos no absorbían los 7.000 reales, la cantidad sobrante debía ser considerada, en opinión de Pinilla, premio del capital invertido en ella.

"" Ascendían a 1.000 reales en la Escribanía de Cámara de don Valentín Pinilla, y a 3.000 reales en la de don Antonio Martínez (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.781 núm. 11 y 3.456 núm. 59).

censos ascendían a la cantidad de 12 ó 14.000 reales anuales****.

De esta manera, en 1824 la Escribanía de Justicia de don Valentín Pinilla produjo un beneficio líquido, deducidos cargas y gravámenes, de 10.487 reales.

Al año siguiente, en la misma Escribanía, se produjeron emolumentos de 12.942 reales, de los que deducidos los 8.736 reales por cargas, daban un líquido de 4.206 reales, más los 4.400 reales por razón del sueldo, de los cuales en febrero de 1826 sólo se habían pagado la mitad. Por tanto, ascendían a 8.606 reales, 1.881 menos que en el año anterior de 1824.

Aparte de esto, algunas Escribanías se encontraban beneficiadas con memorias que proporcionaban también algún ingreso adicional. En la Escribanía de Cámara de Pinilla se hallaban radicadas las memorias que fundó en Murcia y en otras partes el Cardenal Belluga y Moncada, que eran del Real Patronato y por las que gozaba de 200 ducados de asignación anual****. También se encontraban radicadas en 1825 en esta Escribanía otras dos memorias, con la asignación una de 50 ducados anuales y la otra con 500 reales****.

La segunda Escribanía del Consejo, a cargo de don Manuel Abad, produjo en 1825 la cantidad de 5.600 reales, incluido ahí el sueldo de 400 ducados, y deducidas las siguientes cantidades: 7.000 reales por razón de arrendamiento, 4.400 por habitación y oficina en que estaban los papeles, y 1.400 por gastos de oficina y salario del Repartidor. Este Escribano de Cámara, con importantes cometidos dentro del Consejo por ser el más antiguo de los de Cámara, tenía en recompensa la comisión de exámenes de Abogados en el Consejo, que le producía unos 200 ducados anuales.

Por otro lado, en esta Escribanía se hallaban radicados los autos del concurso del estado de Cañete, por el cual tenía una asignación de 1.100 reales. De ellos desde

****. No es de extrañar por tanto la queja del Escribano Antonio Martínez en 1824, quien afirmaba haber percibido 3.478 reales, en concepto de los derechos percibidos por su Escribanía desde primero de junio hasta fines de diciembre de 1823, según constaba en el libro de asiento semanal que obraba en la misma Escribanía de Cámara.

****. Desde 1815 sólo se percibió media anualidad como consecuencia de la decadencia de sus rentas.

****. Por entonces, en la práctica ambas habían caducado en 1826 por consistir sus rentas en frutos y en capitales impuestos en los cinco gremios mayores.

1819 a 1825 sólo percibió una anualidad. El valor estimado de estos autos era en 1825 de 7.800 reales.

La tercera Escribanía del Consejo estaba encomendada en 1825 a don Antonio López de Salazar, que percibía un beneficio anual de 15.000 reales, de los cuales había que deducir 7.000 por razón de arrendamiento o censos con los que estaba gravada. Como gastos tenía 4.400 reales por la habitación y oficina para la custodia de la documentación de la Escribanía, así como 1.400 reales más por gastos de escritorio y salario del Repartidor****.

En esta Escribanía se hallaba radicada también la Comisión de Protección de la Real Cabaña de los Carreteros del Reino, por la cual gozaba de la asignación de 380 reales.

La cuarta Escribanía de Cámara del Consejo estaba encomendada en 1816 a don Gil de Ayala, que la servía en concepto de teniente del dueño propietario. Sus emolumentos anuales habían ascendido a 13.461 reales, de los que se debían descontar los 7.000 por razón de arrendamiento, 3.000 por el de la casa para oficina y archivo, y 1.036 por gastos de escritorio y salario del Repartidor. El beneficio líquido anual de la Escribanía era por entonces de 2.400 reales, que unidos a los 400 ducados por razón de sueldo, daban un valor total de 6.800 reales.

En esta Escribanía de Cámara estaba radicado el concurso de Osuna, por el que le estaban consignados 200 ducados que en la práctica no se percibían y eran, por tanto, nominales.

Don Manuel de Carranza servía con Real Título y en concepto de teniente del propietario la quinta Escribanía de Cámara del Consejo. En 1825 produjo unos emolumentos de 14.925 reales, a los que había que sumar los 400 ducados de su sueldo, que hacían la cantidad de 18.425 reales, y descontar la cantidad de 7.000 reales por arrendamiento, 4.400 del inquilinato de oficina y archivo, y 1.486 por la sexta parte del salario del Repartidor y gastos de escritorio. El beneficio líquido de esta Escribanía era, por tanto, 5.539 reales.

También en esta Escribanía estaban radicada la Protección de las Memorias del Sr. Embajador don Juan de Vargas Mejía, por las que gozaba de una asignación anual de 1.650 reales. También estaban las fundadas en la Villa de Algete por el Obispo que fue de Málaga don Juan Alonso Moscoso, por las que gozaba de una asignación anual de 300 reales, que desde hacía años no se pagaban por falta de fondos. También se encontraba el Concurso del Estado de

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
núm. 11.

Ayala por el que gozaba la asignación de 1.100 reales anuales. El total de ingresos de esta Escribanía era, por tanto, de 8.289 reales vellón. Sin embargo, el sueldo de 400 ducados no se percibió en 1.825 y años siguientes, hasta que se reintegró totalmente al Monte Pío de Reales Oficinas los 14.000 reales con que su titular contribuiría a su ingreso en él. Aparte de ello, en 1825 también su titular tuvo importantes gastos con motivo del traslado de su oficina y archivo, desde la sede que durante tantos años había ocupado su antecesor, don Bartolomé Muñoz, en la Plaza de las Descalzas Reales número 6.

La sexta Escribanía de Cámara era servida en 1826 de forma interina por don Manuel Eugenio Sánchez Escariche, quien en tanto no se le proveyese la plaza en propiedad no gozaba de los 400 ducados de sueldo que le estaban consignados. En 1.825 los emolumentos de su oficina ascendieron a la cantidad de 16.000 reales, de los cuales deducidos 13.236 reales por razón de arrendamiento de casa, salario para el Repartidor y gastos de escritorio sacaba un producto líquido de 2.764 reales.

En esta Escribanía se hallaban radicadas las Memorias fundadas por don Alonso de Mondaño y su mujer doña María Escobar, por las cuales gozaba de la asignación de 300 reales al año. Igualmente estaban las Memorias fundadas por don Juan Díez de Torres, por las que percibía otros 300 reales, aunque teóricos pues no llegaba a recibirlos****. Finalmente también se hallaban allí las Memorias fundadas en la villa de Roda por el Doctor Encina, con la asignación de otros 300 reales anuales, los cuales también eran teóricos, por no producir rentas. De esta manera, el producto total líquido de esta Escribanía de Cámara en 1825 ascendió a la cantidad de 3.074 reales, deducidas las correspondientes cargas. El titular tampoco percibía el sueldo de 400 ducados por no ser efectivo sino interino****.

En los últimos años del reinado de Fernando VII encontramos una doble tónica. De un lado, se mantienen estables los sueldos de los Escribanos de Cámara en aquellos 400 ducados anuales; de otro, con la pérdida de competencias por el Consejo se reducen paulatinamente los emolumentos, ya que son cada vez menos los negocios de partes que llegan al Consejo.

Mencionábamos anteriormente el origen de los emolumentos de una Escribano de Cámara. En 1768 fue aprobado

****. El motivo era que sus rentas consistían en capitales impuestos en la Diputación de los Cinco Gremios y hacía entonces (1826) varios años que no se pagaban.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

un arancel****, que sustancialmente siguió vigente en las décadas siguientes con, al parecer, al menos dos modificaciones parciales, una a finales del siglo XVIII y otra a principios del siglo XIX. No nos consta ninguna reforma del arancel de Escribanos de Cámara durante el reinado de Fernando VII****. En el arancel se detallaba cada una de las operaciones en que podía intervenir un Escribano de Cámara y lo que debía percibir por cada intervención. Era bastante metódico, estableciendo, por ejemplo, tarifas distintas según unos máximos y unos mínimos de extensión que tuviese una copia de un documento; o bien baremos distintos según la distancia del desplazamiento.

Por otro lado, cada uno de los Escribanos de Cámara debía llevar un libro de cuenta y razón donde sentaban todos los emolumentos y útiles percibidos por su Escribanía, para dar cuenta de ellos al Consejo a fin de año****.

Finalmente y para concluir este capítulo de los Escribanos de Cámara del Consejo de Castilla, vamos a hacer una breve referencia a otros ingresos eventuales que podían percibir estos empleados. Nos referimos concretamente a las dietas que se les abonaba por las comisiones en las que participaban. No era propiamente un ingreso, sino una indemnización o compensación por un trabajo extraordinario, que muchas veces exigía un desplazamiento fuera de la Corte. Según un expediente del Consejo conservado en el Archivo Histórico Nacional, las dietas por estas comisiones para un Escribano de Cámara estaban cifradas en 6 ducados día****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1; Colección de Reales Cédulas, núm. 1.884, de 27 de agosto de 1768.

****. Si sabemos que hubo alguna queja por las elevadas tarifas que cobraban los Escribanos de Cámara (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.703 núm. 32; este expediente, localizado en el libro de matrícula correspondiente, no se halla en su legajo).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456 expte. núm. 59.

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 59. A título orientativo no puede servir el dato de que un Escribano de Cámara de una Chancillería percibía por el mismo motivo cinco ducados diarios.

7. Remoción y jubilación

No parece se ejercitara en el Consejo con mucha severidad la sanción por incumplimiento de trabajo, como se desprende de la actitud tomada por aquel Supremo Tribunal en algún caso claro de tales incumplimientos****. No hemos encontrado tampoco ningún caso de sanción o remoción de un Escribano de Cámara en este periodo, ni siquiera que un Escribano de Cámara no pasase debidamente las purificaciones de los años 1815**** y 1823 y siguientes. Indudablemente, el Consejo podía retirar a un Escribano o no reconocer un derecho de presentación, como hizo con el propietario Conde de Toreno en el año 1832.

Sólo podemos mencionar una noticia recogida de unas memorias de la época que refieren un conflicto por una Escribanía de Cámara entre dos individuos, Cid y Velandía, interviniendo en su resolución la Comisión de Justicia de las Cortes****. El sucedido tuvo lugar en el año

****. Por ejemplo, el mencionado del Escribano Pico Santisteban en el año 1815.

****. El legajo 3.974, expediente núm. 38, del Archivo Histórico Nacional, recoge las conclusiones de los procedimientos de purificación de empleados de las Escribanías de Gobierno y de Cámara del Consejo de Castilla. Se menciona tan sólo un oficial de Escribanía de Cámara, don Vitores Vicario, que no resultó inicialmente purificado, siendo acreedor más tarde a la piedad del Rey. Las conclusiones tenían fecha del 30 de marzo de 1815.

****. He aquí el texto: "En la sesión secreta de las Cortes de 28 de junio de 1811 se dio cuenta del recurso del Escribano de Cámara del Consejo, Cid, contra don Jacinto Velandía, sobre ser conservado en posesión de la primera Escribanía. Habló el Sr. Luján en favor de Cid y oponiéndose al dictamen de la Comisión de Justicia, que favorece a Velandía. Se difirió para otro día la resolución" (VILLANUEVA, "Mi viaje a las Cortes", pág. 211). Por ser sesión secreta no quedó constancia de este asunto en el Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias ("Diario de Sesiones", sesión de 28 de junio de 1811, núm. 269, págs. 1.351-1360).

Si conocemos un caso de renuncia voluntaria a la Escribanía de Cámara en este periodo. Fue el de don Manuel Pico Santisteban, que el 26 de marzo de 1818 renunció a su Escribanía y fue nombrado para sustituirle don Manuel Abad, Escribano de Cámara que fue del Consejo reunido en Sevilla""", en el año 1809.

En cuanto a la jubilación, sabemos que los Escribanos estaban incorporados al Montepío de Oficinas de los Reales Consejos, y que tanto ellos como sus viudas y huérfanos en caso de fallecimiento percibían la correspondiente pensión. En su caso, por acuerdo del Consejo, que podía dejarle todo o parte del sueldo; en el segundo caso, mediante instancia a la Junta de Pensiones Civiles, en virtud del Reglamento de Montepíos.

Una vez incorporado al Montepío, el Escribano de Cámara veía descontada anualmente una cantidad de su sueldo, antes de ser abonado éste, que era ingresado en la Tesorería General del Montepío de Oficinas Reales. Así, un Escribano de Cámara veía reducido su sueldo en 776 reales"" en 1808.

Por otro lado, al fallecer un Escribano su viuda no comenzaba a cobrar inmediatamente la pensión, sino que al parecer le eran descontadas de su pensión cuatro mesadas, llamadas de supervivencia"". En 1808, la pensión de viudedad que correspondía a un Escribano de Cámara era de 4.000 reales anuales.

Un caso curioso de pensión de viudedad fue el de la viuda de don Manuel Pico Santisteban, que fue Escribano de Cámara del Consejo"" hasta su dimisión en 1818, y que falleció el 22 de mayo de 1828. Poco después su viuda solicitó la correspondiente pensión y se le mandó presentar, entre otros documentos, uno que acreditase la purificación y rehabilitación que obtuvo su difunto marido en 1814, a fin de liquidar su pertenencia. Solicitó esta certificación al Consejo, que se la expidió en la forma

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.978 expte. núm. 23.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

"" Santisteban tenía en propiedad la plaza de Escribano de Cámara por Real Cédula de 28 de abril de 1803, habiendo jurado en el Consejo el día 18 de mayo de 1803.

debida****.

En 1799 fue creado también un Montepío de Escribanías de Cámara que englobaba a todos los oficiales de estas Escribanías****.

Otro interesante caso fue sin duda el de los Escribanos de Cámara del Consejo al tiempo de la extinción del Supremo Tribunal por Napoleón. Desde aquel momento quedaron todos sin sueldos ni emolumentos y, por tanto, no pudieron satisfacer cantidad alguna al Montepío de Oficiales Reales****. Otra noticia nos añade que por aquellas fechas el Sr.D. Francisco Martínez Dávila recibió de la heredera y testamentarios del Escribano de Cámara don Manuel de Peñarredonda 1.488 reales que le faltaba pagar a este Montepío****.

Bajo la dominación del Gobierno intruso el Escribano don Juan Manuel de Reboles y otros no llegaron a recibir las tres mesadas de supervivencia que les correspondía recibir por Tesorería General por las repetidas órdenes que se comunicaron a aquella Tesorería por el Gobierno intruso para que no lo hiciesen****.

Sabemos también que los Escribanos de Cámara del suprimido Consejo de Castilla que pasaron a servir en el Consejo Supremo de España e Indias (Consejo reunido), quedaron incorporados en el Montepío de Reales Oficinas por la cantidad de 2.000 ducados por sueldo y emolumentos.

Otro peculiar caso de jubilación fue el de los Escribanos de Cámara del Consejo que servían en el Consejo en 1820, al comenzar el Trienio Constitucional. Algunos cde ellos continuaron en el Tribunal Supremo y otros como cesantes fueron jubilados. Cobraban los Escribanos de Cámara solamente los sueldos que percibían por los negocios de oficio y de interés general, que ascendían a 12 reales diarios. Mandaron representación a las Cortes manifestando su situación y el incumplimiento de los derechos inherentes

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026
expte. núm. 46.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.973
expte. núm. 29.

****. Tan sólo don Bartolomé Muñoz y don Manuel Antonio de Santisteban contribuyeron con 2.910 reales de vellón cada uno por tres mesadas de enero, febrero y marzo del año 1808, a razón de 970 reales cada mes.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180:
Montepío de Oficiales Reales.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

al puesto, ya que los derechos de parte formaban siempre parte de su dotación****. Considerando que la dotación de un Escribano de Cámara consistía en sus emolumentos, estaban incluidos en el Montepío de Viudas de Oficinas Reales, con respecto al sueldo de 22.000 reales anuales, a cuya proporción se les había obligado a pagar y descontado en Tesorería la cantidad correspondiente, lo que no se podía efectuar si su sueldo fuera el mencionado de 12 reales diarios****.

Por otro expediente localizado en el Archivo del Congreso de los Diputados, antes mencionado, sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia pidió que dos Escribanos de Cámara y dos Relatores cesantes del Consejo de Castilla asistiesen en dicho Tribunal. Las Cortes lo aprobaron en la sesión de 14 de agosto de 1820****. Los cuatro asistirían al

****. Según alegaban los Escribanos de Cámara del extinguido Consejo de Castilla en su representación a las Cortes de 11 de julio de 1820. Consideramos que esta afirmación fue una exageración realizada para reforzar los argumentos que sustentaban su petición. Sin embargo, del conjunto de la documentación del Consejo parece desprenderse que el término dotación era utilizado exclusivamente para referirse al sueldo fijo o derechos correspondientes a las causas de oficio y fiscales.

****. Archivo del Congreso de los Diputados, legajo 32, expte. núm. 63. La instancia continuaba afirmando: "No puede ocultarse a la superior penetración de las Cortes que los empleos de Escribanos de Cámara son de término; que son jefes de unas oficinas públicas y que para obtener tales destinos han invertido lo florido de su estado, haciendo grandes servicios a la patria, y ascendiendo por una escala rigurosa, y que en este último caso se hallan igualmente todos los oficiales del Consejo de Castilla: Ya se les considere en la clase de cesantes, ya en la de jubilados, pues algunos por sus muchos años y trabajos no podrán servir nuevos empleos, son acreedores de justicia, a que se les pague un sueldo equivalente a los emolumentos que constituían su dotación, a que se les indemnice a virtud del pacto y promesa hecha por un gobierno legítimo, bajo cuya garantía y seguridad admitieron de buena fe los empleos e hicieron en ellos señalados servicios. De otro modo serían los únicos empleados abandonados de la Nación, serían los únicos a los que no se recompensasen sus trabajos, se les expondría a la mendicidad, y sería no tener en consideración el carácter y distinción de sus empleos, pues el escribiente más inútil de cualquiera otra oficina goza mayor sueldo sobre el Erario..." Madrid, a 11 de julio de 1820.

****. A.C.D., Serie General, legajo 33 núm. 11. Sólo las Cortes podían modificar el Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia y eran en general reacias a la creación de nuevos empleos.

Tribunal Supremo con la dotación de sus respectivas jubilaciones y con opción a cubrir las vacantes de sus compañeros.

RELADORES DEL CONSEJO

1. Introducción

"Las pretensiones de las partes, aunque vayan dirigidas por los abogados, suelen contener algunas cosas impertinentes o superfluas. El establecimiento de los Relatores facilita que no se ocupe la atención de los magistrados sino en lo sustancial y correspondiente, pudiendo por este medio lograrse el más pronto despacho de los pleitos y expedientes. Fuera de esto, en los tribunales colegiados sería embarazoso o imposible el que todos sus individuos de una vez se informasen de los autos no habiendo Relatores, y negocio muy largo y penoso que cada uno los viese separadamente por sí"".

Las leyes españolas habían concedido enorme importancia al desarrollo del procedimiento escrito: todo proceso se basaba en informes escritos, notándose quizás en ello una cierta influencia del Derecho Romano. Esta práctica había llevado a la creación de este oficial singular y muy común dentro del personal subalterno de la administración de justicia"", institución de gran arraigo en nuestro Derecho Histórico. Había así Relatores en los Consejos, en las Chancillerías y en las

"" DE DOU, R.L., "Instituciones del Derecho Público General de España con noticia del de Cataluña", tomo III, pág. 30.

"" DESDEVISES DU DESERT, G., "La España del Antiguo Régimen", págs. 309 y 301.

Audiencias.

En 1808 servían en el Consejo siete Relatores, conforme a lo mandado por Felipe V el 20 de abril de 1718. Quedaban repartidos tres -los más antiguos- en las Salas primera y segunda de Gobierno; otros dos -que eran los que seguían a aquéllos en antigüedad-, en las Salas de Justicia y de Provincia; y los dos restantes en la Sala de Mil y Quinientas****.

2. Nombramiento y su número

a) Relatores propietarios

1) Designación. Juramento.

La documentación del Consejo de Castilla conservada en el Archivo Histórico Nacional nos permite reconstruir con un cierto detalle bastantes aspectos de la figura del Relator del Consejo de Castilla durante el reinado de Fernando VII. En este apartado estudiaremos los sistemas de oposición entonces vigentes, así como las principales vicisitudes históricas producidas en las Relatorías del Consejo en este reinado.

En primer lugar debemos hacer una precisión. Al hablar de Relatoría del Consejo nos estamos refiriendo a una singular oficina del Consejo Real, formada esencialmente por un Relator. No era por tanto necesario que existiese en ella ningún otro empleado o subalterno del Consejo. Sin embargo, era frecuente que los Relatores contaran con ayudantes, sustitutos y escribientes que, en número reducido, asistían al titular de la oficina. Pero propiamente dicho, la Relatoría quedaba identificada con la persona del Relator, único miembro de la

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, expediente núm. 46.

Relatoría que era considerado subalterno del Consejo""

"El ejercicio en el Consejo de los Relatores es muy relevante y de mucha confianza, porque en sus relaciones consiste el derecho y justicia de las partes por donde el Consejo la da a quien le pertenece, es necesario y muy conveniente que sean personas tales que llenen este lugar. Y así el Consejo en esta consideración siempre a procurado atentamente poner en estos oficios personas en calidad, partes y muy versados en los derechos, atendiendo que conforme al estilo tienen obligación estos sujetos de llevar dirigido el hecho de los pleytos, ajustándolos con la verdad y el derecho para que pueda proveer mejor justicia en el Consejo" (Mariana)"".

El cargo de Relator no era hereditario ni vendible. Se accedía a él mediante una oposición especialmente fuerte, y los que la superaban obtenían la propiedad de la plaza de forma vitalicia"". Sin embargo, no siempre que había una vacante, se cubría ésta por oposición. La práctica constante seguida en el Consejo era que cuando la vacante era en las Salas de Gobierno, Justicia o Provincia, tenían preferencia para acceder a ella los demás Relatores propietarios del Consejo -es decir, los destinados en las demás Salas-, según su escalafón o antigüedad. Habitualmente en la práctica el escalafón de opción preferente a las Relatorías era el siguiente"": Sala primera de Gobierno; Sala segunda de Gobierno; Sala de Justicia; Sala de Provincia; y Sala de Mil y Quinientas.

De esta manera, habitualmente en la práctica sólo se convocaban oposiciones para cubrir plazas de la Sala de Mil y Quinientas, ya que cuando se producía una vacante de Relator en otra de las Salas, automáticamente solía producirse el ascenso

"". A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en las Escribanías. Los demás dependientes eran contratados por el Relator, a costa de su sueldo. No entraban por tanto dentro de los Presupuestos del Consejo de Castilla ni formaban parte de las relaciones de empleados de este Supremo Tribunal.

"". MORIANA, J. de, "Discursos sobre el Consejo y el ceremonial del mismo", op. cit., pág. 279.

"". DESDEVEISES DU DETERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 301; v en "Institutions", pág. 80.

"". Propiamente dicho, la Sala de Mil y Quinientas tenía mayor rango que la de Justicia y la de Provincia. Pero en la práctica, por rendir menos emolumentos, era menos preferida por los Relatores más antiguos, quedando así siempre reservado a los de más reciente ingreso en el escalafón.

a la vacante por un Relator más antiguo de la Sala siguiente"".

Así describía Escolano de Arrieta en 1791 el procedimiento seguido al producirse una vacante en una Relatoría de la Sala de Gobierno"":

"La práctica que constantemente se observa cuando se verifica vacante de alguna Relatoría de Gobierno es que la solicita el que es más antiguo de las Salas de Justicia y Provincia la opción a ella, y que se le pasen todos los autos y papeles que le corresponden, en cuyo caso acuerda el Consejo que en efecto se le pasen a dicho Relator más antiguo. Y manda al mismo tiempo se pasen al Relator de la Sala de Mil y Quinientas que por su antigüedad asciende a las de Justicia y Provincia, los papeles que aquél deja, y los de éste se mandan entregar al sustituto que nombra el Sr. Gobernador para la Relatoría última de la Sala de Mil y Quinientas, que es la que resulta vacante y se provee por concurso. Esta práctica se ha observado sin interrupción desde 1767 y así resulta de los respectivos expedientes que desde aquella época se formaron sobre la opción a las Relatorías de Gobierno y provisión de las vacantes que ocurrieron. 28 de noviembre de 1790. Escolano de Arrieta."

Esta graduación de Salas planteó también algún conflicto en el periodo que estudiamos. Al nombrarse en 1814 seis Relatores simultáneamente, los de la Sala de Mil y Quinientas solicitaron al año siguiente que se les reconociera una mayor antigüedad, de acuerdo con la prerrogativas históricas de esta Sala frente a las de Justicia y Provincia"". El

"".. Martínez de Salazar relataba así este proceso : "Si la vacante de la Relatoría fuese causada por alguno de los Relatores que despachasen en Sala primera de Gobierno, no debe suceder ni ocupar esta Relatoría el Relator nuevamente nombrado. Porque está establecido y recibido en práctica que los Relatores por antigüedad vayan mudando la asitencia a las Salas, hasta que los tres más antiguos queden asignados en la primera y segunda de Gobierno. De forma que los cuatro más modernos despachan en la Sala de Mil y Quinientas, en la de Justicia y Provincia; y los tres más antiguos en la primera y segunda de Gobierno. Y por esta regla el nuevo Relator sucede en todos los pleitos y negocios del Relator más moderno de los que despachan en la Sala de Mil y Quinientas." (MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 678).

"".. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.969, expediente núm. 43.

"".. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expediente núm. 61: Don Joaquín Latorre y don Cayetano Burriel, Relatores de la Sala de Mil y Quinientas del Consejo, presentaron instancia en 1815, con los de las Salas de Justicia y Provincia, sobre que se les declarase las prerrogativas y opción que les correspondiera. Nombrados los

Consejo, en su resolución de 1618 declaró que ya no existía diferencia de antigüedad entre las seis Relatorías provistas y atendió al orden de los nombramientos para establecer una distinción por antigüedad entre los Relatores.

Sabemos que hasta 1718 los Relatores del Consejo despachaban indistintamente en todas las Salas. En aquella fecha se mandó que en lo sucesivo tuvieran destino fijo de Sala,

seis Relatores simultáneamente en 1814, habiendo tomado posesión los agraciados en un mismo acto, los firmantes afirmaban que ninguno de los seis tenía mayor antigüedad ni por nombramiento ni por posesión, y como era la costumbre optar en las vacantes por antigüedad, solicitaban se aclarase a quién correspondían las prerrogativas de antigüedad: "Los recurrentes piensan que ellos son más antiguos (los de Mil y Quinientas), pues la de Mil y Quinientas es la tercera Sala del Consejo, la de Justicia la cuarta y la de Provincia la quinta: este orden es claro y así se pone en la Guía de Forasteros, y la antigüedad de los respectivos Sres. Presidentes, siendo los Relatores una parte de las Salas como adictos a ellas, observándose igual colocación en cuanto a Relatores en las Guías del año 1808 y anteriores en que preceden los de Sala de Mil y Quinientas a los de Justicia y Provincia; sin que deje de ser comprobante el que en las indisposiciones y ausencias de los Relatores de Gobierno, el Sr. Presidente o Gobernador ha acostumbrado habilitar para el despacho de los asuntos del enfermo o ausente a uno o a los dos Relatores de la Sala de Mil y Quinientas. Ello no obstante, si no se examina el fondo de las causas que han mediado, el haber optado los Relatores de Mil y Quinientas a Justicia y Provincia parecerá contradecir su preferencia, pero no sucederá teniendo presente que en razón de estimación y honor, todos los Relatores de V.A. están en un mismo grado dentro de su clase y así en las vacantes sólo se ha nombrado ascenso el pase a la Real Cámara; no es así en cuanto a las utilidades, las que han sido el móvil de las opciones y la justa causa para que de la Sala de Mil y Quinientas se haya pasado a las de Justicia y Provincia, si se miran los acontecimientos de alguna antigüedad, que constan en la Escribanía de Gobierno (...). En lo antiguo y hasta 1718 los Relatores del Consejo despachaban indistintamente en todas las Salas. Y se mandó que en lo sucesivo tuvieran destino fijo de Sala en la que despachasen los asuntos de la dotación de la misma y no en otra (...). En 1789 se propuso por el Sr. Juez de Ministros una graduación de los Relatores y los de Mil y Quinientas estaban detrás de los de Gobierno. Pero después que fueron a menos las utilidades y crecieron las de Justicia y Provincia, eran las últimas en la estimación de los que las optan. De modo que aún existían dos pensiones, una de 800 ducados y otra de 300 en 1800 (...). De todos estos antecedentes se deduce que en el momento en que se acordó que los Relatores tuviesen destino fijo de Salas, ocupaban el primer lugar en orden los de Gobierno y en segundo los de Mil y Quinientas..."

sistema que perduró hasta bien entrado el reinado de Fernando VII****.

Planteada una vacante en alguna de las Relatorías del Consejo y producidos los correspondientes ascensos por antigüedad, como ya hemos visto quedaba habitualmente plaza libre en alguna Relatoría de la Sala de Mil y Quinientas, o en su caso también de la de Provincia y de la de Justicia, y muy raramente de las de Gobierno****, según el número de plazas convocadas.

Con anterioridad a la convocatoria pública de la plaza o plazas vacantes, el Consejo nombraba a los Relatores que habían ascendido de Sala para su nuevo destino****. Al que le correspondía por antigüedad la opción a otra Relatoría vacante debía mandar en Decreto se le pasasen los papeles pertenecientes a la nueva Relatoría: autos y expedientes con los apuntamientos que de ellos estuvieren hechos, los cuales le eran entregados por el que hubiera hecho de sustituto. También se le habían de entregar las minutas de consultas que la Sala a la que pasaba hubiese formado durante el tiempo de la vacante, para que por aquélla se colocasen en el Archivo.

Por otro lado, el nuevo Relator de la Sala de Gobierno no debía olvidarse de su anterior Sala: por el contrario, en el Decreto del Consejo se le encomendaba cuidase de despachar los pleitos o expedientes que se hallasen vistos pertenecientes a la Relatoría que dejaba****.

Seguidamente, el Consejo mandaba publicar un edicto de convocatoria para cubrir la plaza vacante. La Escribanía de Cámara y de Gobierno del Consejo era la encargada de formalizar e imprimir este edicto. El Escribano de Diligencias era el encargado de hacer fijar los ejemplares en los pasajes públicos y acostumbrados de la Corte. La Escribanía también remitía ejemplares a las Chancillerías y Audiencias de la Península, cuyos Presidentes y Regentes solían avisar su recibo

****. Concretamente, hasta la supresión del Consejo en 1820.

****. En 1814, al cubrirse las mencionadas seis vacantes, también se convocaron para las Salas de Gobierno.

****. Un ejemplo lo tenemos en el año 1818: el Relator de la Sala de Gobierno don Vicente Pedrosa pasa a la Cámara. Don Leandro Gil López -el más antiguo de las Salas de Justicia y Provincia- pasó a la Sala de Gobierno, y su plaza fue cubierta a su vez por el Sr. Gil Reinoso, que estaba en la Sala de Mil y Quinientas. Nombrados Gil López y Gil Reinoso, se convocaron seguidamente oposiciones para la Relatoría vacante en Mil y Quinientas (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, expediente núm. 63).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 56.

remitiendo una certificación de haberlos fijado públicamente****.

Impreso el Edicto de convocatoria, se fijaba en Madrid en varios sitios estratégicos donde pudiera ser conocido por el público: en las oposiciones de 1814 fue colocado en las puertas principales de la Casa de los Consejos, en las de la Sala de Alcaldes, Tribunal de la Nunciatura y Casa Consistorial de la Villa y Corte; en las oposiciones de 12 de noviembre de 1832, además de en las entradas del Consejo Real, de la Sala de Alcaldes y del Tribunal de la Rota, así como la "esquina de las Casas Consistoriales", también se fijó en la entrada del Supremo Consejo de Guerra****. En cuanto a otras provincias, solía fijarse en las puertas de la Chancillería o Audiencia, en las de la Universidad o en otros sitios públicos acostumbrados en el lugar****.

Veremos a continuación dos ejemplos de edicto distantes en el tiempo. Ambos fueron publicados durante el reinado de Fernando VII: uno lleva fecha de 20 de septiembre de 1814; el otro de 19 de diciembre de 1832:

EDICTO

"Se hace notorio hallarse vacantes 6 Relatorias del Consejo, dos de la Sala primera y segunda de Gobierno, otras dos de las Salas de

****. En las oposiciones de seis plazas de Relator, del año 1814, contestaron inmediatamente las Chancillerías y Audiencias de Cáceres, Granada, Valladolid, Sevilla, Coruña y Oviedo. No las cinco restantes, aunque lo harían más tarde (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expediente núm. 58). He aquí el texto de la carta remitida por la Escribanía de Gobierno a los Presidentes y Regentes de Chancillerías y Audiencias en 1803, probablemente similar a las que con el mismo motivo se remitirían en los años siguientes: "De acuerdo del Consejo remito a Vd. los adjuntos seis ejemplares del Edicto por el cual se llaman opositores a una Relatoria vacante en él; a fin de que Vd. disponga se fijen en ese Tribunal y demás parajes públicos de esa ciudad; y del recibo se servirá Vd. darme aviso para noticia del Consejo. Madrid, 18 de marzo de 1803". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expediente núm. 56). Fueron remitidos ejemplares a los Presidentes de las Reales Chancillerías y Audiencias de Granada, Valladolid, Sevilla, Cáceres, Valencia, Cataluña y Aragón, y para los Regentes de Galicia y Asturias.

****. A.H.N., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 65.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, exppte. núm. 56.

Justicia y Provincia, y otras dos de la de Mil y Quinientas; y para su provisión se manda por los Señores del Consejo que los Relatores de las Chancillerías y Audiencias del Reino, y los Abogados en quienes concurren los requisitos prevenidos por las leyes, que quisieren oponerse y leer a dichas Relatorías vacantes, parezcan y presenten sus títulos en la Escribanía de Gobierno del Consejo, e igualmente documentos que acrediten en bastante forma la calificación de su conducta política en el tiempo del gobierno intruso; todo en el preciso término de treinta días, que se han de contar desde la fecha de este Edicto, pues pasado sin haberlo hecho, no serán admitidos a la oposición. Madrid, 20 de septiembre de 1814. Bartolomé Muñoz"****.

Este edicto tenía varias particularidades: aparte de la mencionada de que en esta ocasión eran seis las plazas convocadas, -incluso dos eran para las Salas de Gobierno-, vemos que se exigirá el requisito de la purificación política a los aspirantes. Otros requisitos eran los de ser Relator en alguna Chancillería o Audiencia -de ahí que se remitan ejemplares a estos tribunales-, o bien abogado de los Reales Consejos.

En cuanto al plazo para presentar la solicitud, leemos en el Edicto que éste era de 30 días desde la fecha del mismo. Aquí solía plantearse una situación curiosa cuando se remitía un ejemplar a la Audiencia de Canarias. Concretamente este Edicto de 20 de septiembre de 1814 fue remitido a aquella Audiencia, adonde llegó a principios de noviembre. Por tanto, había pasado ya el término de 30 días estipulado en el edicto. En aquella ocasión, la Audiencia contestó al Consejo en escrito de fecha 4 de noviembre que "era inútil su fijación por el corto número de letrados que hay en estas Islas, que como naturales agraciados no quieren abandonarlas..."****. Los seis ejemplares se resguardaron en el Archivo de la Audiencia.

El otro edicto que recogeremos aquí lleva fecha de 19 de diciembre de 1832. Es un modelo clásico, con la novedad de que ya entonces una misma Relatoría servía tres Salas del Consejo: Mil y Quinientas, Justicia y Provincia. Nótese el orden por el que se mencionaban estas tres Salas, muy de acuerdo con la resolución del Consejo de 1818 sobre graduación de Salas, visto anteriormente****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 58.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expte. núm 58.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 6.

EDICTO

"Se hace notorio que por fallecimiento de don Manuel Romero Yagüe y opción que en consecuencia ha declarado el Consejo a don Manuel Foz, resulta vacante y ha de proveerse una Relatoría de las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia (con calidad de que por ahora hayan de turnar en los negocios de ellas los dos actuales Realatores de las de Gobierno), y al efecto ha mandado este Supremo Tribunal que los de las Chancillerías y Audiencias del Reino, y los abogados de los Reales Consejos en quienes concurran los requisitos prevenidos por las leyes, que quisieren oponerse y leer a dicha Relatoría vacante, parezcan y presenten sus títulos en la Escribanía de Gobierno del mismo en el preciso término de 30 días contados desde la fecha de este edicto, pues pasado sin haberlo hecho no serán admitidos a la oposición.

Madrid, 19 de diciembre de 1832"".

Un edicto publicado debía contar en su reverso con la correspondiente compulsa o autenticación, realizada por el Escribano de Gobierno del Consejo"".

Los interesados en acceder a alguna de las plazas convocadas debían presentar en la Escribanía de Gobierno una instancia alegando los méritos que en ellos concurrían y manifestando sus deseos de opositar. Igualmente debían presentar sus títulos correspondientes. Aunque la convocatoria nada decía al respecto, señalaba Martínez de Salazar cómo era requisito para presentarse el haber estudiado diez años y tener la edad mínima

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, expte. 66.

"" Aquí tenemos una compulsa recogida en el edicto de convocatoria de 18 de marzo de 1803: "Don Pedro Barrero, Escribano del Rey n. Señor, del Real Colegio de esta Corte, de la Comisión de Imprentas y Librerías del Reino, de diligencias de la Secretaría del Real Patronato y Escribanía de Gobierno del Consejo: (...) Doy fe: Que hoy, día de la fecha, hice fijar cuatro edictos como éste en las Puertas principales de la Casa de los Consejos, en las de la Sala de Señores Alcaldes, Tribunal de la Nunciatura y Casa Consistorial de esta Villa, y para que conste doy el presente que signo y firmo en Madrid, a 18 de marzo de 1803" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 56).

de 26 años""'. Dou por su parte mencionaba el requisito de haber terminado una carrera universitaria y demostrar haber realizado cuatro años de práctica "con algún abogado, o asesor, o con algún juez o bachilleres aprobados, y recibidos de abogados", en este caso, de los Reales Consejos""'.

En cuanto a la procedencia de los aspirantes, eran en su mayoría Relatores interinos del Consejo o efectivos de otras instituciones. También podían presentarse abogados de los Reales Consejos, aunque esto era mucho menos frecuente. Un ejemplo extraído de las oposiciones a seis Relatorías del Consejo, del año 1814, nos puede ser bastante orientativo: entre los firmantes había: 3 Relatores interinos del Consejo; 1 Relator de la Sala de Alcaldes; 3 Relatores de la Chancillería de Valladolid; 25 Relatores de Audiencias; 1 Relator interino de la Sala de Alcaldes; el Corregidor de Illescas; un asesor militar del clérigo comandante de partida don Juan de Tapia, recomendado por el General Castaños, etc.

Concluido el plazo estipulado en el edicto, el Escribano de Gobierno formaba la lista de los candidatos y la remitía al Gobernador o Presidente del Consejo, a fin de que señalase el día en que debía comenzar la oposición. Fijada esta fecha, se anunciaba por medio de edicto, en donde se indicaba también cuántos opositores debían leer cada día. La Real Orden del Consejo mandando fijar este edicto solía aparecer unos cinco días después de la conclusión del plazo de inscripción""'.

El orden de lista se establecía según la antigüedad de los candidatos en el ejercicio de la abogacía. La Escribanía de Cámara proporcionaba unas listas impresas de los candidatos junto con un breve resumen de sus biografías y curriculum. Previamente un Ministro del Consejo debía reconocer los papeles y comprobar si los aspirantes habían cumplido con lo mandado en el edicto""'.

""'. MARTINEZ DE SALAZAR, A. op. cit., pág. 681.

""'. DE DOU, R.L., op. cit., tomo III, pág. 32.

""'. He aquí un ejemplo de estas Reales Ordenes: "Fíjese edicto a las puertas del Consejo, señalando el lunes dos de mayo próximo para dar principio a los ejercicios de oposición a la Relatoría que se halla vacante, continuándose todos los días seguidos a excepción de los miércoles y los sábados. Los opositores leerán dos en cada un día por su antigüedad, quienes reciban en pleito que les tocase por suerte, de forma que sólo le han de tener en su poder el término de 24 horas, conforme se ha hecho en otras ocasiones; y dése a los Sres. Ministros lista de los opositores que se han presentado" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expte. núm. 56).

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 58.

Sabemos que en la convocatoria primera tras la restauración del Consejo en 1814, se exigió a continuación que 21 de los aspirantes acreditaran su conducta política en un plazo de 15 días; otro fue excluido automáticamente y a 10 más se les dio por presentados por hallarse ya en los requisitos correspondientes****.

Aprobadas las listas provisionales de opositores admitidos, se publicaba y fijaba un nuevo edicto en la forma acostumbrada. He aquí el que se publicó con fecha 3 de noviembre de 1814:

"Se hace notorio a los opositores de las 6 Relatorias vacantes en el Consejo que los Sres. de él han señalado el martes 8 de este mes para dar principio a las oposiciones de las citadas Relatorias, que se continuará los días martes y jueves útiles de cada semana. Los opositores leerán dos en cada día comenzando por los más modernos en la abogacía. Y para que llegue a noticia de todos y concurren a la Escribanía de Gobierno a recibir el pleito que les tocara por suerte, el que sólo han de tener en su poder el término de 24 horas, se fija este edicto, que firmo en Madrid a 3 de noviembre de 1814".

Los que ejercían interinamente una Relatoria del Consejo y se presentaban a una plaza, tenían el privilegio de ser siempre colocados en los últimos días, aunque propiamente no les correspondiera por su antigüedad en la abogacía. Esta práctica al parecer se empezó a hacer en 1803, según informa un expediente**** del año 1814.

Por otro lado, en cuanto al promedio de candidatos a una de estas oposiciones, variaba bastante de una oposición a otra. Veamos algunas cifras comparativas: en la oposición del año 1803 se presentaron 31 candidatos****; once años más tarde, en 1814 fueron 35 los candidatos presentados****; en las de 1818 el número bajó a 27 aspirantes****; tras el Trienio Constitucional,

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 58.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expediente núm. 58: en el Consejo pleno de 31 de octubre de 1814 se hizo presente que en la oposición que se había hecho en el año 1803 resultaba haber hecho los últimos ejercicios los que habían sido nombrados interinamente por sustitución y vacante.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 56.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 58.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 58.

en 1825 se presentaron 5 opositores****; hubo 20 opositores**** en 1832; y 25 en 1833****.

En cuanto al número de plazas vacantes que se convocaron en cada oposición, varió de una convocatoria a otra: así, en 1803, todavía bajo Carlos IV, hubo sólo 1 plaza; en las de 1814 fueron 6 plazas; en la de 1818 hubo 1 plaza también; en 1825 eran 2 las plazas vacantes; y 1 plaza también en cada una de las oposiciones de 1832 y 1833.

Volviendo al sistema de oposiciones que se observaba, el siguiente paso era el examen: el Consejo reunía una colección de pleitos, por medio de su Ministro más moderno, como lo mencionaba en sus "Noticias del Consejo" el Escribano de Gobierno Martínez de Salazar****:

"Cumplido el término de los edictos, da cuenta al Consejo pleno el Escribano de Gobierno para asignar el día en que se ha de dar principio a leer, y después el Señor Ministro más moderno del Consejo señala los pleitos sobre que han de hacer la lección los opositores, y se les entrega por término de 24 horas".

A título de ejemplo no pueden servir algunos que hemos encontrado en un expediente de oposiciones del año 1803. Semejantes a estos serían los que se utilizaron durante las oposiciones a Relator del reinado de Fernando VII. Da la impresión de que son expedientes antiguos resueltos ya por el Consejo, que se presentaban ahora al estudio de los candidatos****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, núm. 63.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, núm. 64.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, núm. 65.

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias de Consejo", pág. 677.

****. Tienen las características típicas de los expedientes que llegaban Consejo para su resolución. Veamos los enunciados de algunos de ellos: El primero es de Aguilar de la Frontera: "Don Juan Manuel Aguilar, vecino de la villa de Aguilar de la Frontera, con el ayuntamiento de la ciudad de Córdoba, sobre que no se le despoje de la posesión del cortijo llamado "Ingenieros", no obstante la postura hecha por don Rafael Arroyo vecino de Santaella"; otro ejemplo es de Zamora y Corrales: "El Sr. Fiscal y don Andrés de Antón Hernández, vecino de la ciudad de Zamora con don Francisco Arroyo, natural de la ciudad de Salamanca: sobre retención de cierta bula obtenida por don Francisco para la obtención

El examen comenzaba el día establecido, por la mañana. Por orden de antigüedad iban pasando los candidatos, a quienes se les entregaba elegido a suertes un expediente con un pleito, que debían estudiar y resolver, quizás en una pieza del Consejo, en el término de 24 horas. Sin embargo, cabe también la posibilidad que le fuera entregado el expediente el día antes de la lectura y pudiera llevárselo a casa -que es la que nos parece más probable****-. Tenía entonces 24 horas para componer su relación, por escrito, que debía leer delante del Consejo pleno -delante de las cinco Salas reunidas****-, al día siguiente por la mañana.

Era frecuente, por otro lado, que alguno de los admitidos en la lista provisional no acudiera al Consejo el día que le tocara examinarse. En las oposiciones de 1814, de los 35 opositores firmantes, fueron 10 los candidatos que no se presentaron finalmente.

Seguidamente los opositores iban leyendo por turno delante del Consejo pleno sus ejercicios. Según la práctica

de una capellanía fundada en la villa de Corrales por don Agustín Turuelo. Dos piezas"; otro caso está localizado en la Corte y en Villaluenga: "El Duque de Arcos y las cuatro villas de la Serranía de Villaluenga sobre aprobación de cierta escritura de convenio celebrada entre dicho duque y villa. Una pieza";

otro es de la Corte: "El Marqués de Grimaldo, poseedor de unas casas en la plazuela del Angel de esta Corte con don Carlos Richar, cirujano en ella e inquilino de cuarto principal de dichas casas sobre despojo de dicho cuarto. Tres piezas"; el último que citamos está fechado en Cuenca: "Don José Fernández Reluz, Administrador del Hospital de Santiago de la Ciudad de Cuenca, sobre que el corregidor interino de dicha ciudad suspendiere la causa y procedimientos que practicó contra varios dependientes de dicho hospital, con motivo de atribuirles corta de árboles" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 56).

****. Parece deducirse de las relaciones de los expedientes de la Sala de Gobierno: se entregaba a los candidatos un expediente y se les concedía un plazo de 24 horas para estudiarlo y escribir su informe. No nos parece probable, como según L. MORENO PASTOR sucedía en las oposiciones a Relator del Tribunal Supremo de Justicia, que en las del Consejo se encerrara el candidato en una habitación con un escribiente, "extendiendo y fundando la sentencia que crea arreglada a justicia en el preciso término de veinticuatro horas". Creemos más bien que al igual que como se hacía con los opositores a sustituto de Relator, se les permitía llevarse el expediente y presentarse para leer su ejercicio delante del Consejo pleno.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 56.

entonces observada, se oían dos exámenes por mañana, empleando en cada uno una hora al menos. Como las cinco Salas quedaban reunidas en el Consejo pleno, en el que los opositores leían sus exámenes, en los días de oposición se resentía el despacho de los negocios del Consejo, "con perjuicio de los particulares interesados y del público"****.

Por otro lado, también era habitual que algunos de los presentados a un examen de Relatoría que no aprobasen, solicitaran del Consejo un certificado de haberse presentado a la oposición, "para los fines que puedan convenirle en su carrera"****.

En su ejercicio escrito, cada opositor debía realizar un informe, dando en su exposición un profundo estudio del caso y su resolución motivada, sobre fundamentos de hecho y de derecho****. Concluida la lectura, no parece probable que el Consejo examinara oralmente al candidato sobre su ejercicio y sobre todo lo tocante al puntual desempeño de la referida Relatoría**** -como sí se hacía con los sustitutos de Relator-, lo que también confirma Martínez de Salazar en sus "Noticias del Consejo", quien parece indicar que no existía este cuestionario oral****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 56.

****. A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.971, expediente núm. 66; también en Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.098, expediente núm. 19 aparece un caso de un particular que había opositado en dos ocasiones a Relator del Consejo y que lo alegaba como mérito para ingresar ahora en el Colegio de Abogados de Valencia.

****. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 80.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.969, expediente núm. 49.

****. "El día señalado a la primera hora, después de hacerse la semanería, estando formado el Consejo pleno en Sala primera de Gobierno, se manda entrar al opositor, quien lleva el pleito que se le ha señalado, y sin quitarle la cinta lo pone sobre el banco que sirve para lo mismo a los Relatores cuando hacen su relación. El Señor Presidente o Gobernador manda que el opositor haga su relación y concluida se hace señal con la campanilla, se sale el opositor y la misma ceremonia se observa en los demás días hasta que concluye la oposición" (MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 677). Por su parte, el profesor Moreno Pastor ha estudiado el procedimiento de acceso de los Relatores al Tribunal Supremo de Justicia, según su Reglamento de 1814. En aquella ocasión los candidatos eran examinados durante treinta minutos sobre "la Constitución, orden y método de enjuiciar y demás que tenga conducencia con las obligaciones

De la documentación del Consejo consultada parece deducirse por tanto que el examen era básicamente la relación oral o informe de cada candidato, simulando desempeñar ante el Consejo el papel clásico de uno de sus Relatores. Sobre este trabajo, el Consejo valoraba las aptitudes del candidato, junto con su curriculum vitae.

Otro interesante expediente del Archivo Histórico Nacional aporta nuevas luces sobre el objeto y los criterios de evaluación de estos exámenes:

"El objeto (...) es para asegurar el acierto de la elección por medio del juicio comparativo no sólo en la aptitud y pericia de relaciones verbales y por escrito con la formación de apuntamientos, memoriales ajustados y consultas, sino también en la positiva noticia de la fidelidad, secreto, desinterés y demás moralidades de que deben estar adornados unos ministros subalternos y que tienen una parte tan inmediata en el despacho de los negocios.

(...) Se tienen en cuenta la prueba de la oposición y los informes y noticias extrajudiciales que se tomen de todos y cada uno de los pretendientes, así como sus conocimientos y cualidades"".

Excepcionalmente el Consejo podía dispensar de concurso para cubrir una plaza. Para ello, debía reunir el beneficiado unos méritos muy excepcionales.

Durante el periodo de vacante de una Relatoria, se daba orden de que todas las Escribanías de Cámara pasasen los expedientes al Relator de Gobierno más moderno, que hacía de sustituto, salvo que el Consejo hubiera nombrado ya un sustituto.

Durante la lectura, el Escribano de Cámara de Gobierno iba anotando los días en que cada opositor hacía su lectura"". Finalizada la lectura de los ejercicios y publicadas las listas definitivas de examinados, se aprobaba Decreto convocando a los Ministros del Consejo a una sesión para realizar la votación"".

El día de la votación en Consejo pleno se votaba

y oficio del Relator" (MORENO PASTOR, L, "Los Orígenes del Tribunal Supremo de Justicia", págs. 522 y 523.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expediente núm. 56.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, op. cit., pág. 677.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 56; He aquí un ejemplo: "Para el voto de la provisión de la Relatoria vacante en la Sala de Mil y Quinientas se señala el martes siete de este mes y pásese aviso a los Sres. que no han concurrido en este día"

primero al que se iba a proponer en la consulta en primer lugar. Seguidamente, sin suprimir ninguno de las candidatos, se votaba para elegir el candidato propuesto en segundo lugar; y finalmente una tercera votación para designar al propuesto en tercer lugar. Si eran varias las plazas a cubrir, con toda probabilidad se haría así con cada una de ellas. En cada propuesta podía emitir cada Consejero un sólo voto.

A título orientativo de cómo obraba el Consejo nos pueden servir los resultados de una votación efectuada unos años antes, el 3 de junio de 1803:

Primer lugar: don Santiago A. Benito, 12 votos; don Manuel Sedano, 4 votos; don José Vega Ordóñez, 1 voto; don Francisco Mancheño, 1 voto.

Segundo lugar: don José María Zorraquín, 6 votos; don Manuel Sedano, 4 votos; don Francisco Mancheño, 3 votos; don José Vega Ordóñez, 2 votos; don Luis Bayle Obregón, 2 votos; don Santiago Antonio Benito, 1 voto;

Tercer lugar: don Manuel Sedano, 4 votos; don José María Zorraquín, 4 votos; don José Genovés, 3 votos; don Antonio María Segovia, 2 votos; don José Vega Ordóñez, 1 voto; don Miguel A. Zumalacárregui, 1 voto; don Santiago Zapata, 1 voto; don Luis Obregón, 1 voto; don Juan Tomás Cabello, 1 voto.

En la consulta se presentaban al Rey las votaciones completas y S.M. solía elegir siempre el que tenía más votos de los propuestos en primer lugar. En la Real Resolución que seguía a la consulta en la que se cubría la vacante, se mandaba expedirle el título correspondiente, en la forma ordinaria, dándose también aviso a las Escribanías de Cámara para que le pasasen los papeles correspondientes a la Relatoría. También se mandaba que se pasase aviso a la Secretaría de la Presidencia para que en ella constase la designación****.

La Real Cédula de nombramiento mandaba también al Gobernador y a los del Consejo que le admitieran y le tuvieran por tal Relator, con todos los derechos y honores inherentes a la plaza. También que le fuera tomado juramento de que guardaría secreto en los asuntos que lo requirieran y que cumpliría con todas las obligaciones de su cargo, incluido el pago de la media annata****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expte. núm. 56. Real Resolución de 9 de enero de 1815.

****. "...Y asimismo mando se le acuda con su sueldo, derechos y emolumentos que le correspondan como tal Relator, y que se le guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquicias, libertades, preeminencias y exenciones que le sean debidas. Que es así mi voluntad. Y de ésta mi Cédula se tome razón en la Contaduría General de Valores y Distribución de mi Real Hacienda y en la Contaduría

Por tanto, una vez hecha la designación, el Escribano de Cámara de Gobierno lo participaba al designado para que pudiera prestar el correspondiente juramento. Como los demás subalternos del Consejo, lo prestaban en la Sala primera de Gobierno^{***}. Entonces era acompañado por el Escribano de Cámara de Gobierno y seguidamente era presentado a los Ministros de las demás Salas, a los que se anunciaba que había ya prestado juramento en la forma acostumbrada^{***}.

Por la Escribanía de Gobierno se le despachaba certificación en que constaba el nombramiento de Relator y el haber prestado el correspondiente juramento ante el Consejo. Con ello ya podía percibir el sueldo asignado a su nuevo empleo^{***}.

Sin embargo, como hemos mencionado el nuevo Relator propietario debía pasar todavía un importante trámite: de su sueldo debía pagar el derecho de la media annata. Entonces se le hacían los asientos correspondientes para que esta cantidad le fuera descontada en el término de un año. Igualmente hemos mencionado que se había de tomar razón de la certificación que se le diese en las Contadurías Generales de Valores y Distribución de la Real Hacienda, a las que estaba incorporada la media annata.

del Montepío del Ministerio, expresando la primera haberse satisfecho o quedar asegurado el derecho de la media annata. Sin cuya circunstancia ha de ser nula y de ningún valor ni efecto..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, núm. 56).

^{***}. El ceremonial que se seguía era prácticamente el mismo que el de los Escribanos de Cámara. Sólo parece que variaba en que el nuevo Relator iba acompañado del Escribano de Cámara de Gobierno en el acto de presentación ante los Ministros de las demás Salas del Consejo.

^{***}. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", op. cit., págs. 677 y 678. Martínez de Salazar hablaba aquí de que "el Escribano de Cámara" acompañaba al nuevo Relator. Sin embargo, hemos entendido por el contexto que en realidad se refería al Escribano de Cámara de Gobierno, quien era el que habitualmente realizaba estas funciones en calidad de Secretario del Consejo.

^{***}. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 677 y 678.

2) Número de Relatores

En el Real Decreto de Felipe V de 20 de abril de 1718 se estipulaba que el número de Relatores del Consejo quedaría en siete: tres de ellos servirían en las Salas primera y segunda de Gobierno, y los otros en las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia****. Ya vimos al comienzo de este capítulo dedicado a los Relatores del Consejo cómo en el año 1808 este número se mantenía****.

Por aquella fecha, los Relatores del Consejo Real de Castilla eran los siguientes: en las Salas primera y segunda de Gobierno se encontraban destinados don Juan Fernández de Quesada, don Manuel Viergol y don Vicente Pedrosa; en las Salas de Justicia y Provincia estaban don Juan de Santander y don Manuel Luján; en la Sala de Mil y Quinientas trabajaban don José Antonio Carballo y don Antonio Benito.

Entre los cuatro Relatores de las Salas de Justicia, Provincia y Mil y Quinientas se repartían además los pleitos de tenutas y los grados de segunda duplicación****.

En el mismo 1808 quedó vacante la Relatoría de don Juan Fdez. de Quesada, siendo sustituido entonces por don José de Zorraquín. A don Manuel Luján le sustituyó en Cádiz don Miguel Cornejo.

En 1814 quedaban solamente dos de aquellos Relatores: don Manuel Viergol y don Vicente Pedrosa****. Fueron

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 676.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, núm. 46. r

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

****. D. Manuel Viergol había permanecido en Madrid; Pedrosa fue conducido prisionero a Francia y acababa de regresar a la Corte; don Juan Antonio Fernández de Quesada había ascendido a Fiscal de la Audiencia de Madrid y más tarde a Ministro del Consejo de Hacienda; don Manuel Luján falleció en Cádiz; don Juan Crisóstomo Santander falleció en Madrid; don José de la Vega Carballo ascendió a Oidor de la

nombrados entonces don Juan María de Segovia -sustituto de don José de Zorraquín-, don Miguel Cornejo y don Manuel Mazarambroz -quien había servido también en Cádiz una Relatoría-. Todos obtuvieron nuevo título y prestaron nuevo juramento****.

De esta manera, tras la inmediata restauración del Consejo se planteó el problema de que al existir sólo cinco Relatorías, era preciso hacer una nueva redistribución de sus competencias, en especial todo lo referente a la asignación de los pleitos de tenutas, los de los grados de segunda suplicación y los de los negocios que estaban repartidos a las dos Relatorías suprimidas****.

En un primer momento se decidió mantener en cinco las Relatorías del Consejo y dejar por tanto dos vacantes, "hasta que el número de recursos de que tenga que conocer el Consejo necesite su provisión". Sabemos que muy pronto don Manuel Viergol pasó a la Relatoría de la Cámara y que poco después, por edicto de 20 de septiembre de aquel año fueron convocadas seis plazas de Relator del Consejo, para cubrir otras tantas vacantes: dos de las Salas primera y segunda de Gobierno, dos de las Salas de Justicia y Provincia, y dos de la de Mil y Quinientas****.

Chancillería de Granada; y don Antonio Benito había pasado a Jefe de División en la Secretaría de la Justicia del Rey intruso. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expediente núm. 58).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148, núm. 13.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, núm. 46. El 14 de junio de 1814 fue aprobada la siguiente providencia del Consejo: "Despachen en las Salas primera y segunda de Gobierno los Relatores Viergol y Pedrosa, repartiéndose entre éstos los negocios correspondientes a la Relatoría que sirvió en dichas Salas don Juan de Quesada; y lo mismo ejecuten en las de Justicia, Provincia y Mil y Quinientas por el orden de su antigüedad los Relatores don Fernando María de Segovia, don Miguel Cornejo y don Manuel de Mazarambroz, distribuyéndose entre estos tres los pleitos de tenuta, los grados de segunda suplicación y los negocios que estaban repartidos a la Relatoría que quedó vacante por cesación de don Antonio Benito; y todo se entienda con la calidad de por ahora. Hágase saber esta providencia a los referidos Relatores y se pasen los avisos correspondientes a las Escribanías de Cámara para su inteligencia y cumplimiento, y para que luego pasen a dichos Relatores los pleitos y expedientes que les corresponden según la asignación que les va hecha".

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expte. núm. 58. Entre los nombrados en esta ocasión sabemos que estaban don Joaquín Latorre y don Cayetano Burriel, quienes accedieron a las Relatorías de la Sala de Mil y

En noviembre de 1817 fallecía don Juan Tomás Cabello, quedando entonces vacante la sustitución de la Relatoría del Consejo propia de don Vicente Pedrosa. El Decano nombró a don Francisco de Paula Isnart, Abogado de los Reales Consejos, para que durante la indisposición del Sr. Pedrosa sirviera en sustitución la Relatoría con sueldo, derechos y emolumentos que conviniese con el propietario. Recibió el despacho o certificación correspondiente por la Escribanía de Gobierno***.

En 1818 fallecía don Manuel Viergol y pasaba a ocupar su plaza en la Cámara el Relator don Vicente Pedrosa. Accedió a su plaza en la Sala de Gobierno don Leandro Gil López, cuya plaza cubrió el Relator de Mil y Quinientas Sr. Gil Reinoso. Por providencia de 15 de enero de 1818 se convocaba oposiciones para cubrir la plaza vacante***.

A finales de aquel año estaba cubierta la dotación de las siete Relatorias: tres de Gobierno y cuatro de Justicia***. Al suprimirse el Consejo en 1820, las siete plazas de Relator tenían titular propietario. Cuatro de los ellos pasaron a servir una Relatoría del Supremo Tribunal de Justicia***: dos de ellos al menos inicialmente y quizás otros dos el 14 de agosto de aquel año, tras la aprobación de las

Quinientas del Consejo.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 63.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.970 núm. 58 y 3.971 núm. 63.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333, núm. 11.

***. Don Manuel Fernández Mazarambroz, don Miguel Cornejo, don Leandro Gil López y don Simón de Reinoso (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45). Don Manuel Fernández Mazarambroz era Relator de la Sala primera de Gobierno al tiempo de su extinción y aunque pasó a servir una Relatoría del Supremo Tribunal de Justicia, más tarde cesó en su ejercicio; don Miguel Cornejo fue Relator del Consejo en Sala primera de Gobierno y después lo fue del Supremo Tribunal de Justicia, desde donde pasó a servir una de las Fiscalías de la Audiencia de Valladolid; don Leandro Gil López también fue Relator del Consejo en Sala primera de Gobierno y después pasó a serlo en el Tribunal Supremo; don Simón de Reinoso también era Relator en la Sala de Justicia y habiendo quedado cesante pasó a servir una Relatoría en el citado Supremo Tribunal.

Cortes, a petición del Tribunal Supremo a la Junta de Gobierno"". De los tres restantes, dos quedaron cesantes y fallecieron durante el Trienio Constitucional"" y otro, habiendo quedado cesante, pasó a una Relatoría de la Audiencia de Madrid"".

El Real Decreto de 27 de noviembre 1823 para economizar el número de empleados y el de sueldos en todos los ramos del Estado"", no afectó a las Relatorías del Consejo, que continuaron siendo siete: tres con asignación a las Sala primera y segunda de Gobierno, dos para la Sala de Mil y Quinientas y otros dos para las de Justicia y Provincia. La novedad era ahora que los cuatro Relatores de Justicia se turnaban en los negocios de las tres Salas.

Un interesante escrito del Consejo del año 1824 nos describe la situación entonces de sus Relatorías:

"La dotación de Relatores ha sido desde tiempo muy antiguo la de siete. Tres con designación a las Salas primera y segunda de Gobierno; dos a la de Justicia y otros dos a la de Mil y Quinientas y Provincia; y éstos últimos turnan en los negocios de tenutas, grados de segunda suplicación y demás que son de la dotación de las tres Salas reunidas.

Pero en la actualidad sólo están dos en ejercicio y sirven indistintamente en todas sus Salas, porque el número de negocios ha ofrecido hasta hoy la necesidad de proveer las cinco

"". A.C.D., Serie General, legajo 33 núm. 11: "Propuesta del Tribunal Supremo de Justicia para que se nombren dos Relatores y dos Escribanos de los que pertenecían a los extinguidos Consejos, a fin de que auxilien los trabajos de dicho Tribunal (1820)": el 25 de julio de 1820 lo pidió el Tribunal Supremo a la Junta de Gobierno, para que asistiesen a dicho Tribunal como auxiliares, por no ser suficientes. Como sólo las Cortes podían modificar el Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia, la petición fue elevada a las Cortes. Y aunque éstas eran reacias a la creación de nuevos empleos, en la sesión de 14 de agosto de 1820 fue aprobada esta reforma. Los nuevos Relatores del Tribunal Supremo asistirían con las dotaciones de sus respectivas jubilaciones y con opción a cubrir las vacantes de sus compañeros.

"". Don Cayetano Burriel y don Francisco Iznar, Relatores de la Sala de Mil y Quinientas.

"". Don Joaquín Latorre, Relator del Consejo en Sala de Justicia.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

plazas restantes que se hallan vacantes"".

Desde el restablecimiento del Consejo hasta junio de 1824, don Leandro Gil López y don Simón Gil Reinoso eran los únicos Relatores adscritos a las Salas de Gobierno. Sirvieron también todas las demás Salas, hasta que se vio que no podían llegar a todo el trabajo de las siete Relatorías y entonces, tras una nueva oposición, se nombró otros dos Relatores en junio de 1825: don Manuel Romero Yagüe y don Juan Martínez Llamazares, que se encargaron de las Salas de Justicia. Sin embargo, teniendo en cuenta que los Relatores de Gobierno se hallaban muy sobrecargados de trabajo -"negocios gravosos y de oficio"- y los pocos negocios de parte que a su vez tenían, se les concedió un turno a cada uno de aquellos dos en los negocios de las Salas de Justicia"".

Volviendo al año 1823, por aquel entonces habían tenido que someterse los entonces Relatores del Consejo a la correspondiente purificación: sabemos que entre otros, el 23 de julio fue repuesto don Simón Gil Reinoso en su Relatoría y en la misma fecha don Leandro Gil López. Don Manuel Mazarambroz lo fue el siguiente 6 de agosto; por su parte, don Joaquín Latorre no pasó la purificación, lo que le fue comunicado en fecha 11 de septiembre de 1823 y perdió su plaza en el Consejo"".

Por una Real Orden de noviembre de 1824, el Gobernador del Consejo pidió noticia de número de Relatores que entonces había en el Consejo Real y de los que debía de haber de acuerdo con la planta del Consejo. En virtud de este expediente se remitió oficio al Rey con fecha 4 de enero, y oído el parecer del Juez de Ministros se estimó conveniente proveer dos Relatorías con destino a las Salas de Mil y Quinientas, Provincia y Justicia, en orden a las más pronta expedición y despacho de los negocios:

"...Los negocios pendientes en la actualidad en el Consejo son en notable menor número que los que ordinariamente ha habido; el número de dependientes es el mismo menos en el de Relatores, que hoy sólo hay dos y la dotación es de siete, y aunque a primera vista se presente deberse equilibrar los operarios con los trabajos, no es así. Despáchase a un tiempo en todas las Salas y es por lo mismo necesario que los dependientes sean los que en la actualidad y a más se provean una o dos Relatorías. Los dos que las desempeñan darían más trabajos, pero no pueden dar cuenta a un tiempo cada uno en diversas Salas, y se observa que por estar despachando suele estar sin ejercicio

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 19.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040, núm. 2.

alguna de ellas; tanto más frecuente cuando alguno de ellos está indispuesto, como ha sucedido con ambos en poco tiempo. Por todo ello es de sentir que se proponga a S.M. la provisión de una o dos Relatorías más de las previstas en la actualidad sin hacer novedad en los restantes empleados por considerarlos precisos..."".

El Rey, oído el informe del Consejo, resolvió convocar oposiciones para cubrir dos plazas de Relator del Consejo de Castilla, uno para las Salas primera y segunda de Gobierno, y otra para las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia. Celebradas las oposiciones, don Manuel Romero Yagüe y don Juan Fernández Llamazares adquirieron plaza en propiedad de Relator del Consejo"". Asumieron los negocios de las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia, permitiendo que participasen en sus negocios también los Relatores de las Salas de Gobierno, por turno.

Por Real Resolución de 17 de enero de 1825 quedaron suprimidas tres de las siete Relatorías que había habido en el Consejo desde 1718 hasta el 7 de marzo de 1820"". De esta manera, acaba el Consejo el año 1825 con una dotación de sólo cuatro Relatorías"". También fueron cuatro en 1826"" y años siguientes, y al parecer así se mantuvo hasta la definitiva extinción del Consejo en 1834.

Hubo desde 1826 varias convocatorias de oposiciones: en 1829 por fallecimiento de don Simón Gil Reinoso"", en 1832 por fallecimiento de don Manuel Romero Yagüe"", y en el mismo año por promoción a la Secretaría de la Presidencia de Castilla de don Juan Fernández Llamazares"". Fueron nombrados respectivamente nuevos Relatores don Jorge

"". A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.972, expte. núm. 19.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, núm. 64.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, expediente núm. 64.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333, expte. núm. 11.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expte. núm. 6.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, expte. núm. 64.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, expte. núm. 66.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, expte. núm. 65.

Martínez y don Cayetano Alcnso.

Mencionaremos una última disposición importante que afecta a la distribución de negocios de los cuatro Relatores del Consejo. Nos referimos a la Real Resolución publicada en el Consejo pleno de 16 de marzo de 1830, en la que se acordaba "que todos los negocios de las respectivas Salas que se remitan o promuevan en adelante, se dividan por ahora para su despacho entre los cuatro Relatores de este Supremo Tribunal, entendiéndose como una medida provisional dirigida a remover el atraso que se ha advertido en el despacho de los negocios gubernativos"***.

2) Otros Relatores: interinos, sustitutos
y supernumerarios

Era frecuente en las Relatorías del Consejo que en ausencia, enfermedad o vacante de un Relator, la oficina fuera confiada por Decreto a otro Relator o a un particular, que quedaba habilitado para servirla. Incluso aparece con frecuencia el caso de ser un Abogado de los Reales Consejos el designado para este oficio interino.

Evidentemente, la asignación de una interinidad o de una sustitución era un mérito importante para acceder a una plaza en propiedad. Vimos además en su momento cómo los Relatores interinos y los sustitutos tenían el privilegio de examinarse en último lugar dentro del orden de lista establecido por el Escribano de Gobierno del Consejo, lo que evidentemente era un interesante privilegio.

Podemos distinguir entre las figuras de sustituto de Relator y Relator interino.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971, núm. 64.

a) Relator sustituto

El sustituto era un tercero al que el Consejo encomendaba suplir una imposibilidad física de servir la Relatoría, normalmente por ausencia o enfermedad del titular. No era por tanto Relator propietario, ni siquiera titular de la Relatoría. Sí que podía ser otro de los Relatores del Consejo, o bien un particular designado al efecto.

El sustituto no era tampoco un subalterno del Consejo en toda regla y no cobraba ningún sueldo del Supremo Tribunal, sino que su sueldo, derechos y emolumentos debían ser negociados o convenidos con el propietario de la plaza. Este fue el caso, por ejemplo, de don Francisco de Paula Isnart, Abogado de los Reales Consejos, al que se nombró sustituto de don Vicente Pedrosa en 1817.

Curiosamente, la documentación del Consejo nos habla de que al fallecer don Juan Tomás Cabello en noviembre de 1817, quedó "entonces vacante la sustitución de la Relatoría del Consejo propia de don Vicente Pedrosa". Es decir, la existencia de sustitutos era algo habitual en las Relatorías, incluso con el carácter de ayudante del Relator propietario, aunque la plaza no estuviera vacante. Esta idea aparece confirmada en otro expediente del Archivo Histórico Nacional:

"Si tiene un ayudante o sustituto el propietario de la Relatoría, se reparten los expedientes y cada uno lleva cuenta de los que despacha, y por esta doble lista es fácil al fin de la semana ajustar cuenta y percibir cada uno lo que le corresponde"****.

Sin embargo, sabemos que el sustituto sí era designado por el propio Consejo, aunque su retribución corriera a cargo del propietario de la plaza.

Era frecuente, e incluso en ocasiones lo habitual, que a un Relator propietario también se le encomendase una sustitución en otra Relatoría: así, por ejemplo, ante la indisposición de salud del Relator Pedrosa, el Consejo decidió en 1815 que se distribuyeran entre sus dos compañeros Relatores

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 52.

de las Salas primera y segunda de Gobierno del Consejo los expedientes que obraban en poder de aquél, y les fuera tocando por turno para que los despachasen indistintamente. También podía encomendársele como cargo anejo una sustitución en otra Relatoría, por ejemplo de la Cámara****, para el caso de indisposición de su titular.

En los casos de enfermedad, ausencia o simple imposibilidad temporal para acudir al Consejo, era corriente que el Supremo Tribunal acudiera inicialmente al Relator del Consejo más moderno -normalmente de la Sala de Mil y Quinientas-, para que durante su indisposición pudiera hacerse cargo de los negocios pendientes y llevarlos a despachar a las Salas que correspondiesen. Normalmente se encargaba este sustituto de los asuntos de oficio y de partes de mayor urgencia. La habilitación se hacía a veces por instancia del Relator de Mil y Quinientas -quizás a causa del interés económico que proporcionaban estas habilitaciones-; en otras ocasiones, era el mismo Gobernador del Consejo quien informado de la situación en la Relatoría designaba un sustituto****.

El habilitado para hacerse cargo de los pleitos y expedientes de la Relatoría -los que se le hubiesen pasado y los que en lo sucesivo se le pasasen durante la ausencia del titular-, podía firmar a su nombre los correspondientes recibos, con la obligación de que observase y guardase el correspondiente sigilo en los asuntos que lo requiriesen, y de que no se demorase el pronto curso de dichos expedientes tanto para su despacho como para su entrega. Se había de pasar igualmente el correspondiente aviso a todas las Escribanías de Cámara para que por ellas se entregasen y recibiesen los expedientes que respectivamente le correspondiesen****.

Como hemos visto, en principio lo previsto era que las sustituciones se hicieran por los propios compañeros Relatores del Consejo. Sólomente si estaban muy agobiados de trabajo como para hacerse cargo interinamente del trabajo de su compañero, se acudía a un particular. Se le nombraba sustituto para evitar retrasos en los negocios, hasta el completo restablecimiento del titular. Vemos que en la práctica también era frecuente el nombramiento de estos "sustitutos de Relatores" o "Relatores substitutos"*****.

****. Este era el caso de don Manuel Fernández Mazarambroz, que tenía a su cargo la sustitución de la Relatoría de la Real Cámara.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 52.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 52.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.149 exppte. núm. 1.

Sabemos también que la designación de un sustituto de Relator tenía su propia regulación dentro del Consejo. Así rezaba la Real Orden^{***} de 23 de enero de 1791:

"No quiere S.M. que sea admitido nadie como sustituto de Relator sin que antes haya hecho oposición a Relatorías y se le haya aprobado sus ejercicios, o sin que preceda un riguroso examen por tres Ministros del Consejo en el caso de no haber sujetos en quienes concurren dichas circunstancias, cuyo examen no ha de servirles para obrar a la propiedad de las Relatorías, que es la Real Voluntad de S.M. se provean por oposición, como previenen las leyes del Reino..."^{****}.

Habitualmente se acudía a la forma de examen por un Tribunal de tres Ministros del Consejo, "que examinaban al candidato de todo lo tocante al puntual desempeño de la referida Relatoría"^{****}. Evidentemente, este examen no se haría a los Relatores sustitutos que servían ya una Relatoría del Consejo, sino a las particulares que accedían a una plaza como sustitutos de Relator.

He aquí un relato del propio Consejo, de las características de este examen:

"Se entregaba al candidato por el término acostumbrado un pleito de los que se hallaban ya determinados en el Consejo, para que en presencia de los tres Ministros hiciese relación de lo substancial de él, en una de las Salas del Consejo.

Para probar aún más su idoneidad se le hacían diferentes preguntas referentes al asunto de que se trató en el proceso y a lo que sobre ello estaba resuelto y prevenido en varias órdenes

^{***}. Mencionada también por J.M.CORDERO TORRES, op. cit., págs. 59 y 60: Variaciones en el Consejo bajo Carlos IV.

^{****}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.969, expte. núm. 43. Así lo establecía la Ley II, Título XX, Libro IV de la Novísima Recopilación: "Ninguno sea admitido por sustituto de Relator sin que antes haya hecho oposiciones y se le hayan aprobado sus ejercicios, o sin que preceda un riguroso examen por tres Ministros del Consejo que depute su Gobernador para ello, en el caso de no haber sujetos en quienes concurren dichas circunstancias: cuyo examen no ha de servirles para optar a la propiedad de las Relatorías, que han de proveerse por oposición como previenen las leyes del Reino". También sobre el particular se puede ver el legajo 51.425 núm. 39 de Consejos Suprimidos (A.H.N.).

^{****}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.969, núm. 49.

generales.

Se le entregaba un pleito un día y 48 horas después había de presentarse en el Consejo para someterse a examen^{***}.

Hecho el examen, los Ministros debían informar al Gobernador acerca de su habilidad y suficiencia para el desempeño de este oficio y, en su caso, quedaba designada la persona más adecuada.

Seguidamente se realizaba el correspondiente nombramiento, para que se encargase de los pleitos, papeles y expedientes de la Relatoría, durante la indisposición del propietario, con el sueldo, derechos y emolumentos que se conviniese con el mismo, previo el juramento y solemnidades de estilo. Por la Escribanía de Gobierno del Consejo se le daba el despacho o certificación que correspondiese a este nombramiento, para entrar en el ejercicio de la sustitución^{***}.

A partir de ese momento se pasaba comunicación a las Escribanías de Cámara para que en adelante remitiesen al sustituto de Relator todos los pleitos y expedientes que perteneciesen al propietario, "bajo del recibo correspondiente en el libro de conocimientos"^{***}.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 52.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.149 expte. núm. 1.

^{***}. Por Real Orden del Consejo pleno de 28 de enero de 1786, mencionada en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 52. Ejemplos de sustituciones por particulares hubo muchos en este periodo. Ya hemos visto algunos de ellos. Veamos otro caso nuevo: por decreto del Gobernador del Consejo, en 1833 fue nombrado el licenciado don Ventura Carcano, sustituto del Relator don Cayetano Alonso, con licencia para ausentarse a Valladolid por enfermedad. Estuvo de sustituto desde el 12 de agosto de 1833 hasta fines de febrero de 1834 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 65).

b) Relator interino

En cuanto a los interinos, formaban una figura distinta a los sustitutos de Relator o Relatores sustitutos. Mientras en una vacante temporal -ausencia, enfermedad, etc.- desempeñaba la Relatoría un sustituto, en caso de vacante -por muerte, por ejemplo-, el Gobernador o Presidente nombraba un Relator para el despacho interino de la Relatoría. Quedaba por tanto al frente de la oficina, como titular, aunque por nombramiento interino hasta su definitiva provisión.

Sin embargo, esta distinción teórica entre Relator sustituto y Relator interino con frecuencia se confundía en la práctica en los expedientes de la época, de tal manera que Relatores sustitutos aparecen a veces llamados interinos y viceversa^{***}.

Era frecuente además que un sustituto de Relatoría de Gobierno que hubiera hecho su papel con eficacia pudiese aspirar con mayor mérito a una plaza de Relator interino de Mil y Quinientas, y más tarde a una provisión definitiva^{****}.

No aparecen, por otro lado, unos requisitos especiales ni un examen para acceder a una de estas plazas. Por ello mismo, parece probable que para cubrir las se acudiera a sustitutos de Relatores.

Realizado el nombramiento de Relator interino por el Gobernador del Consejo, se le daba la correspondiente certificación y entraba a jurar. A continuación se le daban los papeles correspondientes a la Relatoría.

Ejemplos de Relator interino hubo muchos en el reinado de Fernando VII. Veamos algunos de ellos: don Manuel Fernández Mazarambroz fue nombrado Relator interino en Cádiz el 3 de diciembre de 1810; también don Fernando Segovia fue nombrado de forma interina por el Consejo pleno de 24 de septiembre de

^{***}. Un caso lo tenemos por ejemplo en A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 39.

^{****}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 56.

1810. Ambos desempeñaban una Relatoría de forma interina^{***} en 1814; otro caso interesante fue el de la habilitación interina de aquellos subalternos del Tribunal Supremo de Justicia que habían servido como Relatores de aquel Tribunal de forma interina^{***}; citaremos como último ejemplo en don Cayetano Alonso, nombrado por el Consejo el 23 de octubre de 1832 como Relator interino, hasta la provisión de la plaza en propiedad en favor del mismo don Cayetano Alonso.

Finalmente mencionaremos la figura del Relator supernumerario. Al estudiar otros Ministros y subalternos del Consejo, ya hemos visto las características básicas de esta figura. La nota común es que este subalterno ejercía la plaza con derecho a futura sucesión a la primera de número que vacase^{***}. No conocemos ningún caso expreso de Relator supernumerario en el reinado de Fernando VII, aunque alguna referencia a la existencia de esta figura podría ser indicio de que sí pudo haber alguno en este período. En los diversos presupuestos del Consejo que hemos consultado desde 1818, en ninguno de ellos se menciona uno de ellos. También podría darse el caso -no confirmado documentalmente-, de que alguno de los sustitutos tuviera el carácter de Relator supernumerario.

3. Competencias

a) Introducción

Ya vimos al comienzo de este capítulo dedicado a los Relatores cuál era su importante misión dentro del Consejo. Al igual que hacían en sus exámenes de ingreso, los Relatores debían informar al Supremo Tribunal de forma clara y sucinta de lo esencial de un caso o pleito. Su papel era hacer una relación de las pretensiones de las partes y de los fundamentos de hecho y de derecho del asunto en cuestión. Era por tanto el informador

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expediente núm. 58.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.966, núm. 1.

del Consejo.

Junto a ello, parece que se encargaban también de redactar los apuntamientos a los pleitos y que debían velar por la expedición de las sentencias, sin que hayamos encontrado más referencias que las que hace Desdevises al respecto"".

b) Ejercicio de sus competencias

Cada Relator debía estar asignado a una Sala, cuyos pleitos debía informar. Sin embargo, las competencias de los Relatores en este periodo no fueron siempre las mismas, si no que todo dependió del número de Relatores que hubiera en cada momento. Por otro lado, como los Relatores cobraban en función de los pleitos informados, su asignación se hacía por riguroso turno por parte del Consejero semanero, designado a dicho efecto cada semana"".

Presentada una demanda de un pleito al Consejo, el primer paso era su admisión o no. El Consejo lo estudiaba y podía, o bien rechazar pura y simplemente la petición, o confiarla para una más amplia información a una persona competente -un receptor, por ejemplo-, o bien admitirla en principio y decidir que se confiase a un Relator su informe"".

Por las Escribanías de Cámara se pasaban a los Relatores los expedientes recibidos. En la Relatoria se estudiaban y se establecía un orden, según dos criterios:

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions": "Los Relatores estaban encargados igualmente de supervisar la expedición de sentencias. El mismo día en que la sentencia era firmada, debían enviarla al Escribano de Cámara, y les estaba prohibido retrasar la presentación bajo el pretexto de que no habían percibido sus honorarios".

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 301. Mencionaba también Desdevises en su obra "Les Institutions de l'Espagne au XVIIIe. siècle", un auto acordado de 1780 a partir del cual se distribuyó incluso a cada Relator un día para leer sus informes, puesto que los más antiguos que habían comenzado a informar hacían esperar frecuentemente a los nuevos durante semanas antes de concederles el turno (auto acordado del 16 de marzo de 1780).

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 78.

antigüedad de presentación, o bien la mayor o menor urgencia del asunto. Un escribiente llevaba habitualmente sientos puntuales de los expedientes que entraban y salían de la Relatoria. Como ya vimos, estaba mandado desde 1786 que las Escribanías de Cámara pasasen en su caso directamente a los sustitutos de Relatores los pleitos y expedientes que hubiera, bajo el correspondiente recibo en el libro de conocimientos^{***}. Si el Relator propietario tenía un ayudante o sustituto, se repartían el trabajo y cada uno llevaba cuenta de los expedientes que despachaba, y al final de la semana hacían cuentas de los beneficios que a cada uno correspondían.

Por su parte, el escribiente concurría a primera hora de la mañana al Tribunal por si se ofrecía poner algunos autos o providencias al sustituto, o el Consejo pedía repentinamente algún negocio de los que no se llevasen ese día^{***}.

En los ocho primeros días de cada mes, los Relatores debían presentar dos listas de todos los pleitos y expedientes que hubieran quedado en su poder a finales del mes anterior, con distinción de Salas. La primera lista debía ser de los expedientes promovidos a instancia de parte, la segunda de los de oficio, expresando el día en que pasaron a su poder y anotando la circunstancia de los que fueran consultivos, bien por su propia naturaleza o porque el Rey lo mandase, así como cuando hubiera recuerdo encargando la brevedad de su despacho^{***}.

Ya hemos visto en diversos lugares que la misión principal del Relator era facilitar a los Ministros del Consejo la fácil comprensión de la parte esencial de un proceso. Para ello, una vez recibido el pleito, debían estudiarlo y elaborar un informe escrito que se leería posteriormente en el Supremo Tribunal^{***}. El tiempo que empleaban en elaborar un informe dependía, lógicamente, del volumen y complejidad del caso en cuestión. Sabemos que en una mañana de trabajo podían resolver

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 52: Real Orden del Consejo pleno de 28 de enero de 1786.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970, expediente núm. 52.

^{***}. Auto acordado del Consejo, de 4 de agosto de 1806: "Auto acordado de los Señores del Consejo consultado con S.M., por el cual, para el más breve despacho de los negocios en el Consejo, se establece un repartimiento de ellos entre sus Salas con lo demás que se expresa".

^{***}. Previamente debían reconocer los poderes de las partes, antes de llevar a cabo su relación (MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 680).

dos a tres expedientes****. Aunque lo normal es que las horas de vistas les ocupasen una buena parte de la mañana y su ritmo de dictámenes diario fuese menor al citado****, dependiendo de cada Relatoría****.

El Relator debía ver siempre el pleito de por sí: como "personas públicamente autorizadas para relatar a los magistrados todo lo que se alega y resulta de los autos"****. No podía por tanto delegar en nadie su misión, aunque sí podía verse ayudado por un sustituto o ayudante, con la autorización del Consejo.

En las Salas primera y segunda de Gobierno hacían sus relaciones de pie; por el contrario en las de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia, tanto los Relatores como los abogados hacían sus relaciones sentados en banco raso, con un mesa delante, el Relator en medio y los abogados a los lados. Siempre hacen sus relaciones por orden de antigüedad. Por otro lado, de los pleitos que se hubiese hecho relación y estuviesen por votar, es posible que tuvieran que dar memoria dos días cada semana a los Presidentes o Gobernadores y Ministros del Consejo

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64.

****. Nos pueden ser útiles unas estadísticas elaboradas por el mismo Consejo en los años 1802, 1805 y 1807: en 1802 fueron resueltos por los Relatores 9.165 expedientes; quedaban 5.184 pendientes y se hicieron 305 consultas a S.M. En enero de 1805 el Relator Santander tenía en su poder 15 pleitos y expedientes de la Sala de Tenutas, 18 de la Sala de Justicia y 6 de la Sala de Provincia. En total 39 pleitos y expedientes, los mismos que en julio de aquel año. El Relator don Juan Fernández de Quesada en agosto de 1807 tenía pendientes 57 expedientes (2 del Consejo pleno, 45 de la Sala primera de Gobierno y 10 de la Sala segunda de Gobierno). Nos pueden ser útiles también algunos datos de la Relatoría de Viergol, de fecha de septiembre 1807: expedientes pendientes de despacho entonces (Sala primera de Gobierno): 19; expedientes de oficio para pasar al Fiscal: 4; expedientes en estado de acordarse diligencias: 5; expedientes de oficio que podrían pasarse a otra Sala que el Consejo estimase: 1; expedientes de oficio que quedaban para providencia definitiva: 39; expedientes de partes que podrían pasar al Sr. Fiscal: 13; expedientes de partes que tenían que remitir a Tribunales provinciales o juzgados inferiores: 8; expedientes de partes que tenían de acordarse diligencias: 4; expedientes que podrían pasarse a la Sala de Mil y Quinientas o a otra que estimase el Consejo: 2; etc. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.882).

****. Los Relatores de Gobierno tenían un volumen de trabajo superior a los de las Salas de Justicia.

****. DE DOU, R.L., "Instituciones", pág. 31.

que los hubiesen visto, y todos los sábados informarían al Presidente de los pleitos que estuvieran fuera de tabla y de la antigüedad que tuvieran, para que se vieran en la siguiente semana****.

Hecha la relación de un pleito debían recoger los nombres de los Ministros que lo vieron, firmando los Relatores y anotando los días en que se dio principio a la vista del pleito y los Señores con quienes se continuó. Por otra parte, no debían estar presentes en el Consejo cuando se estuvieran votando los pleitos.

Por un expediente**** del año 1816 podemos conocer algún detalle más de la labor de estos empleados del Consejo:

Hemos visto que principalmente su labor consistía en hacer apuntamientos o memoriales. De éstos había dos clases: los más frecuentes eran aquéllos que se hacían en los pleitos y en algunas clases de expedientes y que no requerían un mandato expreso del Consejo. Tampoco requerían citación ni concurrencia de partes, ni de sus abogados, procuradores y agentes.

Por otro lado estaban aquéllos que se formaban con todos estos requisitos. Se solían imprimir después de estar concordados y firmados, para lo que habitualmente se realizaban varias reuniones previas en casa del Relator. Los de esta segunda clase se formaban con decreto del Consejo, y citación y concurrencia de las partes. También solían imprimirse.

Los pleitos o expedientes que provenían de la Corona de Aragón exigían una regla especial, "ya porque los primeros vienen en compulsa, ya porque todos traen la mayor parte de aquel idioma"****.

En los pleitos de filiación muchas veces el Relator debía formar árboles genealógicos, que exigían muchos días de atento trabajo y "meditación".

Buena parte de la labor de los Relatores se empleaba en el cotejo y reconocimiento de papeles: de los propios memoriales y apuntamientos; de los papeles, manuscritos y certificaciones adjuntados; debían dar certificación de estar conforme al auto acordado sobre impresiones, para que la Escribanía de Cámara expidiera a su vez la correspondiente para el impresor; el reconocimiento de papeles en derecho ya impresos, poner las notas precisas a su margen y certificar al fin que

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 678-680.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 2, "Arancel de Relatores del año 1816".

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 2.

estaba conforme con ellos o con los hechos.

Al parecer, los juicios de residencias comportaban prolijos trámites por parte de los Relatores: primeramente debían hacer el memorial ajustado, que debía realizarse con citación y concurrencia del receptor; a continuación venían las reuniones con el receptor, que al parecer solían ser largas. Seguidamente venía la formación del decreto; la relación en el Consejo; la consulta al Rey, donde era preciso resumir en ella la comprobación de los cargos y la satisfacción de los descargos, con sus pruebas. Finalmente debía hacer el auto de reparos, después de resuelta la consulta por el Rey****.

Otros cometidos de los Relatores eran: en pesquisas y visitas debían realizar también apuntamientos; después de despachar las ordenanzas se encargaba al Relator el ordenarlas, según lo decretado en cada una por el Consejo; y por otro lado, la redacción de consultas originadas a instancia de parte, exigían una especial pericia, ya que los Relatores debían considerar en la redacción que el que hablaba era el Consejo, y para ello necesitaba estudiar y trabajar el asunto "con la mayor concisión y claridad de los hechos, a la vez que dirigir con idea la narrativa al punto del dictamen del Consejo"****.

Martínez de Salazar mencionaba por su parte algunas otras de las obligaciones de los Relatores: debían fijar cédulas en la puerta del Consejo con la lista de asuntos que se fuesen a ver próximamente; de un día para otro debían también sacar relación de los expedientes que se fuesen a despachar; debían también escribir a mano y firmar los autos o decretos de los pleitos, así como los expedientes que se despachasen. Las partes no los recibirían si no era a través de las Escribanías; debían tener en el Consejo cajones con sus llaves para la custodia de los procesos y papeles que a él se llevasen****.

Cuando se mandaba hacer un memorial ajustado con citación de las partes, correspondía a los Relatores señalar día y hora para que acudieran a su domicilio.

Dou mencionaba otras reglas que debían respetar los Relatores en su labor****:

"Deben tener los Relatores un particular cuidado en no apasionarse a ninguna de las partes, huyendo no sólo de las pasiones feas, que nacen de interés, amistad o

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879
núm. 2.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879
núm. 2.

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 681 y 682.

****. DE DOU, R.L., "Instituciones", pág. 31.

enemistad, parentesco u otras de esta naturaleza, sino aún de la pasión o celo, con que parece que a veces se enardece uno por la sola causa de la justicia, de lo que a él le parece serlo. Lo que arma al Relator no cuadra muchas veces al juez: y lo que en el parecer de éste será despreciable, tendrá quizá mucho peso en la opinión del Relator. Por este mismo motivo no puede el Relator omitir nada substancial, porque la misma variedad de opinar insinuada, que puede haber entre el Relator y el juez, se verifica cada día entre los mismo jueces. Todo deben exponerlo los Relatores con una suma imparcialidad, igualdad, exactitud e indiferencia, porque no son ellos más que conductos públicos y puros, por los cuales se ha de guiar e introducir la solicitud de los litigantes en el santuario de la justicia. No sólo deben los Relatores esta fidelidad a los litigantes, sino también el pronto despacho, y por el orden que les corresponde (...), guardando el secreto sin divulgar lo que pueda redundar en perjuicio de las partes o del mismo tribunal o de su decoro".

Los Relatores, como otros subalternos del Consejo, tenían la obligación de asistir diariamente al Supremo Tribunal, hasta acabadas sus sesiones"".

Finalmente mencionaremos en este subapartado la asistencia de los Relatores a otras comisiones del Consejo, en donde con frecuencia quedaba destacado o se asignaba un Relator, o bien quedaba fijado un turno de Relatores que sirvieran en aquella comisión"".

c) Asignación de pleitos a los Relatores

Es cierto que una parte del retraso que se daba en el despacho de los negocios del Consejo era causado en las Relatorias. El al parecer desigual reparto de expedientes entre unas y otras, muchas veces parece que fortuitamente, producía atascos en los pleitos. Como sabemos, los expedientes que llegaban a los Relatores podían ser clasificados en expedientes de oficio y a instancia de parte. Los primeros a su vez se

"" Ley IV, Título XX, Libro IV, de la Novísima Recopilación.

"" Por ejemplo, éste era el caso de la Junta de Competencias, en donde estaba fijado un turno de asistencia de los Relatores del Consejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.752 núm. 19).

dividían en comunes y ordinarios de oficio****, y expedientes de oficio generales, llamados estos últimos así porque de su determinación era de esperar que resultasen reales pragmáticas, cédulas, circulares o autos acordados, aparte de ser siempre por su naturaleza consultivos al Rey. Pues bien, al parecer, el reparto de los expedientes comunes y ordinarios -por su naturaleza más sencillos de resolver y menos trabajosos- era cuidado por los Ministros semaneros de cada Sala y ahí no había problema.

El problema se planteaba con los expedientes de oficio generales, cuyo reparto a veces ocasionaba un auténtico atasco de trabajo en la Relatoría que recibía más de éstos. Al parecer, en unas Relatorías había más expedientes generales que en otras y ésta era la causa principal de la obstrucción de los negocios de las Relatorías. Por otro lado, las Reales Ordenes recomendaban despachar con preferencia los expedientes generales y de oficio, lo que ocasionaba también un atasco considerable en el despacho de los negocios de partes.

Otro defecto en el reparto de negocios que se daba en los primeros años del siglo XIX era la vinculación a una Relatoría de todos los casos emanados de la aplicación de una misma ley, normalmente a la Relatoría por la que se dio una providencia general. Aunque era un criterio válido el unir al expediente que causó la ley todas las incidencias o expedientes ocasionados con su aplicación o ejecución, esto evidentemente era fuente de desigualdades entre unas y otras Relatorías****.

Para conocer el volumen de trabajo de un Relator se podía acudir a tres fuentes o elementos de constancia de los expedientes tramitados: los cuadernos o manuales de recibos de pleitos; los borradores de providencias de los expedientes que despachaban los Relatores en el Consejo; y los borradores de las repetidas listas mensuales y semestrales que los Relatores presentaban en el Consejo pleno desde el año 1802.

¿Cómo llevaban a cabo su trabajo los Relatores hasta la primera extinción del Consejo en 1808? Hasta aquella fecha siempre se habían llevado y tenido en un cajón de los que se encontraban en la habitación grande que servía de antesala a las Salas primera y segunda de Gobierno unos libros

****. Se consideraban expedientes comunes y ordinarios de oficio los referentes a obras públicas; cátedras de universidad; colegios, magisterios de primeras letras y latín; ordenanzas municipales de los pueblos y gremiales; juntas de caridad; competencias entre tribunales y jueces ordinarios; arreglo de hospitales y obras pías; seminarios; repartimientos para dotar médicos, cirujanos y demás dependientes de los concejos; y otros de esta naturaleza (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874 núm. 4).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874 núm. 4. Año 1806.

empergaminados compuestos de papel blanco, donde se sentaban los pleitos y expedientes que se repartían a los Relatores por los Ministros Semaneros de cada Sala. La llave de este cajón la tenía el oficial segundo de cada una de las Escribanías de Gobierno y Cámara. A este oficial, llamado también oficial despachante, correspondía como una de las principales obligaciones de su destino, llevar al Consejo los expedientes y pleitos que había que encomendar a los Relatores. Debía presentarlo con dichos libros a los semaneros, quienes eran los encargados de asignarlos a los Relatores según el turno. Seguidamente los Ministros Semaneros devolvían los libros a los oficiales segundos, que anotaban en dichos libros el reparto realizado, junto con datos sobre las partes y asuntos contenidos en ellos, así como anotaciones al margen sobre la Escribanía a que pertenecía el pleito y el Relator nombrado, y algunas veces la expresión del día en que se hacía el repartimiento"".

Siempre se practicaba de esta manera, con lo que los Ministros Semaneros conocían todos los expedientes y se evitaba la arbitrariedad que de otro modo podía seguirse. Se obraba igual con los negocios de oficio y de pobre propios de cada Sala.

Esta era por tanto la situación de trabajo para los Relatores en 1808, al tiempo de la primera extinción del Consejo por los Decretos de Chamartín de Napoleón.

De la etapa de la Guerra, en que el Consejo de Castilla estuvo suprimido, también nos han llegado noticias referentes a la labor de sus Relatores: por el Real Decreto de 18 de agosto de 1809 quedaron extinguidos los Consejos de Guerra, Marina, Indias, Ordenes, Hacienda y las Juntas de Comercio y Moneda y la Real y Suprema Junta de Correos. En su artículo V se afirmaba lo siguiente:

"Se observará en el despacho y clasificación de los negocios pendientes en los Tribunales suprimidos el mismo método que se ha seguido para los asuntos del Consejo Real. Los Secretarios, Escribanos de Gobierno y Relatores de los citados Consejos se conformarán a sistema que hayan practicado la Escribanía de Gobierno y los Relatores del mencionado Consejo Real"".

Por tanto, la labor de los Relatores del Consejo de Castilla sirvió de modelo para otros Tribunales, aún estando ya suprimido este Supremo Tribunal.

Restablecido el Consejo Real, en mayo de 1814 se mandó por el Escribano de Gobierno Muñoz que el Juez de Ministros acordase la preferencia y orden con que los Relatores debían

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090 núm. 62.

"" A.H.N., Consejos, Libro 1.400, folio 365.

informar al Consejo del Estado de sus Relatorias****.

En aquel año, cuatro Relatores se encargaron inicialmente del despacho de los negocios, pero pronto quedó uno sólo y fue necesario proveer inmediatamente las seis Relatorias vacantes entonces. Formado el correspondiente expediente por el Consejo, por Real Orden de 20 de enero de 1815 el Consejo pleno estableció el modo y forma de repartir los negocios entre los Relatores. Así rezaba esta Real Orden:

"Con arreglo a la práctica anteriormente observada, fórmense por ahora en papel de oficio los libros correspondientes a cada Sala del Consejo, así para los de parte como para los de oficio y de pobre, en donde se sienten todos los que de cada clase se repartan por los Sres. Ministros Semaneros a los Relatores de cada una de ellas; cuyos libros permanezcan como siempre en el cajón cerrado que para su custodia se destine, teniendo la llave de ellos los oficiales segundo de las Escribanías de Gobierno y Cámara a quienes corresponde por su destino llevar dichos expedientes y pleitos al Consejo para presentarlos con su respectivo libro de los Sres. Ministros Semaneros a quien pertenece su encomienda o repartimiento. Y ejecutado, dichos oficiales segundos sienten o anoten con la debida claridad y expresión la partida del contenido de cada expediente, partes que litigan y su vecindad, poniendo a las dos márgenes, en una la Escribanía de Cámara a la que pertenece y en otra el Relator a quien ha tocado; y también el día en que se hace dicho repartimiento. Recójense de poder de los Relatores los expedientes que se hallen en su poder sin despachar y se hubiesen promovido desde el restablecimiento del Consejo, así de parte como de oficio y de pobres, para que presentándolos dichos oficiales segundos con los mencionados libros al Sr. Ministro Semanero de cada Sala a que pertenezca, los reparta a los Relatores de ellas según les corresponda. Y los pleitos y asuntos que por su naturaleza corresponde su repartimiento a S.E. el Sr. Presidente, así antiguos como modernos que no tengan asignación, los pasen a la Secretaría de la Presidencia, todo en la forma que se practicaba hasta el año de 1808. Y los recojan de ella luego que esté hecho, para su distribución. Comuníquese esta resolución a los Escribanos de Cámara y de Gobierno para que cuiden de que los oficiales segundos cumplan exactamente con lo que está mandado, de forma que no se padezca el más leve retraso, perjuicio ni queja, así de parte como de los Relatores, y a éstos para su inteligencia, y que no pongan detención ni reparo en el recibo de los que así se les reparta y pase, además de los que a cada uno pertenezca, de los que se promuevan y estuvieren repartidos anteriormente a las respectivas Relatorias en que han sido provistos. Y prevéngase al Portero de estrados que como lo hacía hasta el año de 1808 forme para cada Sala un libro en blanco encuadrado en que se anoten por los Sres. Ministros de su letra, como siempre se ha acostumbrado, los señalamientos de los pleitos que se hagan, para lo que deberá contar sólo los días

****, A.H.N., Consejos,, Sala de Gobierno, legajo 3.026
núm. 47.

útiles del año, con exclusión de los feriados"****.

Esta interesante Real Orden de 20 de enero de 1815 nos describe con un cierto detalle el proceso de asignación de pleitos a los Relatores por parte de los Ministros Semaneros. Unos oficiales segundos de la Escribanías y Cámara eran los encargados de llevar al Ministro Semanero los pleitos que se iban presentando en el Consejo, junto con los libros en donde se asentaba el reparto o asignación de cada uno de estos pleitos. Realizado el reparto, los oficiales segundos anotaban con claridad el enunciado de cada expediente, junto con los datos de las partes litigantes y su vecindad, y el día en que se efectuó el reparto. En un margen se anotaba la Escribanía de Cámara a la que pertenecía el pleito y en otra el Relator a quien había tocado.

También mencionaba el Decreto un procedimiento especial de reparto, ya existente hasta 1808, en el cual participaba el Gobernador del Consejo: a él quedaba reservado el señalamiento y repartimiento de los pleitos de tenutas, grados de segunda suplicación y algunos otros, que eran pasados por los mencionados oficiales segundos a la Secretaría de la Presidencia, en donde se anotaban en los correspondientes libros o asientos. Y de ella los volverían a recoger los citados oficiales segundos para distribuirlos a los Relatores.

Aparte de esto, recogía otras medidas para asignar aquellos pleitos no resueltos, en poder de los Relatores y promovidos desde el restablecimiento del Consejo, a los cuales se aplicaría el mismo procedimiento de asignación.

Por otro lado, en cada Sala había un libro blanco en donde se apuntaban los señalamientos de pleitos en dicha Sala, por parte de los Ministros de su puño y letra. Si aquellos libros de reparto de pleitos eran custodiados por los oficiales segundos de la Escribanía de Cámara, de la custodia de éstos se encargaba el portero de estrados.

Hemos visto en otros lugares de este trabajo la asignación de cada Relator a Salas del Consejo. Evidentemente, si había tres Relatores asignados a la Sala primera de Gobierno, el Ministro Semanero de esta Sala distribuía entre los tres los pleitos y casos que por los oficiales segundos de Escribanía fuesen llevados a esta Sala. Por otro lado, resulta también evidente la especialización de estos Relatores en las materias que eran de competencia de estas Salas, si bien también es verdad que el rápido tránsito o ascenso de los Relatores de unas Salas a otras era un obstáculo importante a esta especialización.

Un expediente de 1817 nos informa que aquel año se observó un notable incremento en el número de expedientes que llegaron a la Relatoría del Sr. Pedrosa del Consejo de Castilla

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090
núm. 62.

con respecto al año anterior (1816)"".

De las fuentes consultadas deducimos que hasta 1820 -época de la tercera extinción del Consejo-, el reparto de competencias fue el tradicional: tres Relatores para las Salas de Gobierno, dos para la de Justicia y otros dos para las de Mil y Quinientas y Provincia. Estos dos últimos turnaban además en los negocios de tenutas, grados de segunda suplicación y demás que eran de la dotación de las tres Salas de Justicia reunidas"".

Sin embargo, desde la restauración del Consejo en 1.823 los dos Relatores en ejercicio servían indistintamente en todas las Salas, también porque el número de negocios entonces era exiguo"". Poco a poco fue creciendo el número de asuntos que llegaban al Supremo Tribunal, de tal forma que el Secretario de Despacho de Gracia y Justicia, en oficio de 27 de noviembre de aquel año, pedía al Gobernador "que el Consejo proponga los subalternos precisos para que los negocios no sufran atraso"".

Los asuntos que quedaron pendientes en el Consejo antes de 1.820, y habían sido repartidos a un Relator, muchos de ellos fueron posteriormente promovidos por las partes y se repartieron de nuevo. Ello supuso un cierto caos y confusión entre los Relatores, según informaba en 1829 el Relator Juan Fernández Llamazares"".

Todavía en enero de 1.825 los Relatores del Consejo de Castilla tenían poco trabajo. Veamos, por ejemplo, la situación de las Relatorías de Gobierno por aquel entonces. Por el Libro de Señalamientos de Pleitos se podía comprobar que sólo hubo 6 u 8 pleitos en el año 1824; por el Libro de Conocimientos de la Escribanía de Gobierno se veía el corto número de expedientes a instancia de parte, respecto del que había a principios de 1.820; y por el de Registro de Consultas se veía que los de oficio despachados desde el 1 de junio de 1.823 hasta enero de 1.825 habían sido bastante penosos y costosos. Tan cierta era esta escasez que en los primeros días de enero no hubo un sólo expediente de Gobierno que pasar a los Fiscales ni a los

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 63.

"". Ley V, Título XX, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972
núm. 19.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expediente núm. 19.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 64.

Relatores, y éstos, al parecer como algo inaudito en la historia del Consejo, pidieron dejar las Salas de Gobierno y pasar a las de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia, y que conservándoles su antigüedad se proveyeran las de Gobierno"".

También es verdad que en todo ello influyeron varias causas circunstanciales: la pérdida por el Consejo de algunas de sus ancestrales competencias, como por ejemplo, el ramo de propios, que producía amplios beneficios tanto en lo gubernativo como en lo contencioso; por otro lado, la miseria general del Reino influyó en un retraimiento de las reclamaciones judiciales, que muchas de las veces que se intentaban era por medio de instancias o reclamaciones, "para disputar y casi siempre negar el pago de derechos", por otro lado, sí que se dio un aumento de los negocios de oficio o gravosos.

Dos Reales ordenes de 1825 tienen para nosotros especial interés: la de 17 de enero, por la que se suprimían tres de las siete Relatorías del Consejo; y la de 15 de marzo de 1825 que mandaba que los Relatores de Gobierno turnasen en el despacho de los negocios de las otras Salas bajo la condición de que no hubiese ningún retraso en los asuntos de oficio o en los gubernativos"".

Así quedaron distribuidos los asuntos entre los Relatores, de tal forma que los dos más antiguos asumían todos los asuntos de Gobierno y todos - ya eran cuatro los Relatores, al proveerse dos plazas más-, por cuartas partes los negocios de las demás Salas"".

Hasta 1829 sabemos que fueron frecuentes las advertencias y recordatorios del Gobernador interino del Consejo a los Relatores, por el retraso en el despacho de sus negocios. Por aquel entonces (1.829), había cuatro Relatores en el Consejo. Dos se encargaban de los asuntos de Gobierno y estos dos y los dos restantes asumían también los asuntos de Justicia. Por aquel entonces se plantearon varias cuestiones: brevedad en el despacho de los negocios; igualdad de intereses económicos de los cuatro Relatores y cómo auxiliarse mejor los Relatores en sus enfermedades y ocupaciones.

Aquí nos interesa especialmente la primera de

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 74.

"" Esta Real Orden la motivó una exposición de los Relatores Gil López y Gil Reinoso en que solicitaban esta gracia fundándose en la escasez de negocios de su dotación, ya por haber salido del Consejo esas atribuciones, ya por otras causas procedentes de la falta de numerario para activar los negocios.

"" El Consejo por aquella época contaba sólo con tres salas: Gobierno; Justicia y Mil y Quinientas; y Provincia.

estas cuestiones: la búsqueda de una mayor brevedad en el despacho de los negocios. Ya hemos mencionado cómo se habían adoptado en los últimos años diversas medidas para mejorar el despacho de los negocios y cómo el Ministerio había remitido diversos recordatorios instando a una mayor rapidez en el despacho de los asuntos, en especial los de oficio. Por su parte, acabamos de mencionar también las frecuentes amonestaciones a los Relatores de dichas Salas de Gobierno por el Gobernador para que propusieran las medidas más convenientes****.

La dificultad del despacho consistía en opinión de los Relatores más antiguos, no tanto en faltar tiempo u ocasión para dar cuenta de los negocios gubernativos, sino más bien en el largo y complejo trabajo de la extensión material de las numerosas consultas que el Rey pedía. El Consejo Real había perdido asuntos de su tradicional competencia como propios, arbitrios, repartimientos, instrucción pública, escuelas, caminos reales, etc., pero en su lugar se habían aglomerado otros muchos de calidad consultiva, que ocupaba sin cesar al Consejo y a sus dependientes****. Junto a ello, también producía retrasos la necesidad que tenían los Relatores de Gobierno de despachar indistintamente en todas las Salas del Consejo: donde se producían más retrasos era precisamente en las Salas primera y segunda de Gobierno, que estaban reunidas en una****.

Vemos que ya por entonces los dos Ministros más antiguos servían las Relatorías de Justicia y los dos más modernos la Sala de Gobierno. En una primera propuesta, los Relatores sugirieron se estableciese una tercera Relatoría de Gobierno, con el fin de agilizar el despacho de los negocios de Gobierno. Pronto se vio que esta solución no sería suficiente para resolver el pronto despacho de los negocios: el nuevo Relator habría de serlo uno de las otras Salas, con lo que la de Gobierno no estaría servida como exigían las circunstancias.

En una nueva propuesta de los Relatores de Gobierno de 17 de noviembre de 1829, aquéllos pedían que se repartieran por igual todos los negocios de las Relatorías del Consejo, por cuartas partes entre los cuatro Relatores, aún cuando sucediera el caso de que los cuatro estuvieran a un mismo tiempo, uno lo ejecutaría en la Sala de Mil y Quinientas y Justicia, otro en la de Provincia y los otros dos quedarían a disposición de las Salas de Gobierno.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.100, consulta del 20 de febrero de 1830.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64: Informe del Fiscal de 6 de diciembre de 1829. Por ejemplo, todas las consultas emanadas de la Comisión de Causas de Estado se remitían a consulta del Consejo.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64: Informe del Relator Fernández Llamazares.

Por su parte, el Relator Llamazares proponía que se respetase el sistema establecido por el Consejo en el año 1718, en el que se adscribió a cada uno de los Relatores a una de las Salas. Junto a ello, se podría conferir a los de Gobierno la dotación de la Sala de Mil y Quinientas.

El Consejo era partidario de la propuesta de los Relatores de Gobierno: repartir entre los cuatro Relatores todos los negocios indistintamente, lográndose así que quedasen diariamente dos Relatores que pudieran atender al despacho de lo consultivo. Daba el Consejo como argumento también la ya citada Real Resolución de 17 de enero de 1825, por la que suprimían tres de las siete Relatorías del Consejo; y la de 15 de marzo del mismo año por la que se estipuló que los dos Relatores de Gobierno turnasen con los otros dos en todos los asuntos pertenecientes a las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia, bajo la condición de no resultar retraso en los asuntos de oficio y gubernativos.

El Consejo propuso finalmente "que por vía de ensayo y sin perjuicio de cualquiera alteración que pueda haber en lo sucesivo en cuanto a la distribución de Salas, se adopte la reflexiva propuesta de los dos Relatores más antiguos en razón a que se ofrece menos inconvenientes que otra alguna en las actuales circunstancias y en esta suposición opina: que todos los negocios de las respectivas Salas que se remitan o promuevan en adelante se dividan por ahora para su despacho entre los cuatro Relatores de este Supremo Tribunal, entendiéndose como una medida provisional, dirigida a remover el atraso que se ha advertido en el despacho de los negocios gubernativos..."

Elevado todo a consulta con el Rey por el Consejo el 20 de febrero de 1830, oído el Fiscal, y conformándose con la opinión del Consejo, se aprobó la importante resolución para reforma de competencias de los Relatores****.

El Gobernador reunió el 29 de marzo a los Relatores del Consejo y acordó que desde el 1 de abril empezasen a repartirse los negocios de las Salas primera y segunda de Gobierno que se remitiesen o promoviesen en adelante, empezando por el más antiguo, a cuyo efecto se anotarían en los libros que estaban formados para ello, exceptuando los negocios que tuviesen Gil López y Romero en su poder para despachar y los que les estuviesen encomendados.

Por aquellas fechas continuaba la costumbre de remitir al Decano todos los lunes listas de los expedientes y pleitos que se hallaban para su despacho en poder de los Fiscales

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971
núm. 64.

y Relatores del Consejo****. Se vio que por aquellas fechas el Consejo tenía menos negocios y asuntos que en 1824**** y 1825****.

No hemos encontrado entre los documentos del Consejo ningún otro que pueda inducirnos a pensar que este sistema de asignación de competencias fuera variado posteriormente. De esta manera, parece que se mantuvo el reparto de asuntos a los Relatores del Consejo por partes iguales hasta la definitiva extinción del Consejo en 1834.

4. Honores y privilegios

Contamos con escasos datos que hagan referencia a especiales preeminencias u honores que correspondiesen a estos subalternos del Consejo.

"El ejercicio del relator es muy preeminente y onrado, y en particular en el Consejo Supremo de Justicia, porque par entrar en él an de ser graduados por una de las Universidades mayores de estos reynos y muy cursados en la ynteligencia de su oficio"****.

****. Estas listas eran recogidas a los Escribanos de Cámara y de Justicia del Consejo, por el Escribano de Gobierno, que a su vez añadía las listas de la Escribanía de Gobierno. Debían expresar el día en que hubieran tenido su entrada y los nombres de los Agentes Fiscales y Relatores que los tuviesen (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.819 núm. 16).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64, Informe del Relator Fernández de Llamazares, del 17 de octubre de 1829.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.100, consulta del 20 de febrero de 1830. Listas de aquellos años de expedientes en poder de los Relatores podemos encontrar en los legajos 3.819 núm. 16; 3.850 núm. 8; y 3.930 núm. 9.

****. MORIANA, J. de, "Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo", op. cit., pág. 279.

Aparte de sus emolumentos y derechos, sabemos que tenían la misma consideración que los Escribanos de Cámara en los acompañamientos y ceremonias del Consejo"". También sabemos que en las Salas de Justicia y en la llamada de tenutas podían informar al Consejo permaneciendo sentados.

Por otro lado, es sabido que el oficio de Relator era un trampolín a puestos de mayor responsabilidad en la Administración. Buena muestra de su elevada consideración profesional eran sin duda los destinos a los que tenían acceso: hubo, por ejemplo, en este periodo algunos casos de ascenso a Ministros de otros Consejos"", Oidores de Audiencia o Chancillería"", o Relatores de la Cámara"". Sobre este particular Moriana decía en el siglo XVII de ellos: "son en sí tan preheminentes estas plazas que dellas suben a las de las Audiencias y Chancillerías y a las de Alcaldes de Casa y Corte y Fiscales de los tribunales, a donde han estado haciendo relaciones. Y todo por sus letras, calidad, méritos y servicios"".

Es posible que su indumentaria oficial en el Consejo fuese todavía la que también nos describe Moriana, es decir, una larga capa con una capilla sobrepuesta y el gorro. Al parecer, éste era el traje que usaban antiguamente los Consejeros antes de empezar a usarse las garnachas o togas"".



"". MORIANA, J. de, "Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo", op. cit., pág. 279.

"". Caso, por ejemplo, del Relator Fernández de Quesada, que pasó de Relator del Consejo a Fiscal de la Audiencia de Madrid, y más tarde a Ministro del Consejo de Hacienda.

"". Caso por ejemplo, del Relator Carballo, que ascendió a Oidor de la Chancillería de Granada durante la Guerra.

"". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 678 y 679.

"". MORIANA, J. de, "Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo", op. cit., pág. 280.

"". MORIANA, J., "Discursos generales y particulares de el govierno general y político de el Consejo Real y Supremo de Justicia de estos Reynos de Castilla y León...", op. cit., pág. 279.

5. Retribución

"Demás de los derechos que llevan de las partes de los pleytos que han de hacer relación conforme al arancel t leyes del reyno, tienen salario de S.M. situado en lo nómina de los Conssejos" (Mariana)****.

Los Relatores percibían por la Real Tesorería un sueldo fijo en retribución a su trabajo, y unos emolumentos variables en función del volumen de trabajo, en relación con un arancel oficial aprobado por el propio Consejo de Castilla****. La aplicación de ese arancel oficial era realizada por un Tasador de Pleitos, Ministro del Consejo a quien se habían de presentar las relaciones concluidas para su tasación ****. Estos derechos eran los únicos que podía cobrar el Relator, no pudiendo recibir tampoco por su labor otras concesiones o regalos en especie.

Al parecer, el arancel vigente para los Relatores del Consejo debió ser aprobado por el mismo Consejo en 1783, y sustituyó al que estaba en vigor desde el año 1722. Más adelante debió aprobarse un nuevo arancel, que sabemos que el 28 de junio de 1816 "todavía estaba pendiente de resolución"****.

Tradicionalmente había una cierta distinción entre

****. MORIANA, J. de, "~~Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo~~", op. cit., págs. 279 y 280.

****. No parece cierta por tanto la afirmación de Desdevises que "la gratuidad de los oficios de Relatores parece haberse mantenido sin gran esfuerzo, hasta el final del Antiguo Régimen" (DESDEVISES DU DEZERT, G., "~~La España del Antiguo Régimen~~", pág. 301). Aunque en otra de sus obras, el autor reconocía que "percibían derechos sobre los procesos de los que se ocupaban" ("~~Institutions~~", pág. 81).

****. Ley VIII, Título XX, Libro IV de la Novísima Recopilación; también DESDEVISES DU DEZERT, G., "~~Institutions~~", pág. 81.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 2.

los sueldos de los Relatores de Gobierno y los de Justicia. Aquellos debían cobrar en 1808 la cantidad de 6.000 reales anuales y los de Justicia 400 ducados anuales (4.400 reales)²⁷⁰⁰. En el Presupuesto del Consejo para 1819 los tres Relatores de Gobierno percibían los 6.000 reales anuales cada uno y los cuatro de Relatores de Justicia alcanzaban los 4.411 reales con 26 maravedís (400 ducados)²⁷⁰¹. Estos sueldos se mantenían en los años 1824 y 1825, y al parecer se mantuvieron hasta la extinción del Consejo bajo Isabel II.

Por otro lado, más complejo es el estudio de los emolumentos o ingresos variables según arancel. Tradicionalmente, y así se mantuvo hasta el Trienio Constitucional, los Relatores preferían también por motivos económicos acceder a las Salas de Gobierno, donde estos emolumentos eran mayores. Sin embargo, a partir de 1.823 se produce una cierta conmoción en estos ingresos. De un lado, la disminución de negocios y expedientes por la falta de dinero para litigar; de otro, la pérdida de competencias del Consejo, que ayudó a disminuir los casos que se planteaban en el Consejo.

No todos los casos que pasaban por las manos de un Relator producían beneficios económicos. Los expedientes de oficio, los consultivos, los mandados realizar por el Fiscal y las causas de pobre no llevaban anejo directamente rendimiento económico²⁷⁰². Tampoco los pleitos iniciados y no continuados. Por el contrario, los asuntos que más beneficio proporcionaban eran los negocios de partes en justicia.

Un interesante informe de 1825 nos describe con detalle los ingresos que percibía entonces un Relator del Consejo:

"Desde el restablecimiento del Consejo hasta junio del año próximo pasado don Leandro Gil López y don Simón Gil Reinoso, únicos que pertenecen y están asignados a las Salas de Gobierno, sirvieron también en todas las demás, pero no pudiendo concurrir a todas, sin hacer más de una vez falta en alguna de ellas, se nombraron otros dos que los fueron don Manuel Romero Yagüe y don Juan Martínez Llamazares para que lo hicieran en las

²⁷⁰⁰. Son datos extraídos de un expediente de 1803, que se podrían aplicar al mencionado año de 1808 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 56). Por otro lado, el sueldo que tenían estipulado en el Tribunal Supremo de Justicia, según el Reglamento de 1814 era de 20.000 reales anuales, mientras que los derechos con arreglo a arancel experimentaron una considerable reducción (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 524).

²⁷⁰¹. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11.

²⁷⁰². Ley IX, Título XX, Libro IV de la Novísima Recopilación.

de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia, y teniendo consideración a que los de Gobierno se hallaban muy sobrecargados de negocios gravosos y de oficio, y a los pocos de parte que se promovían se les concedió un turno a cada uno en los negocios de las otras Salas.

Queda dicho que los expresados dos Relatores que actualmente sirven y pertenecen a las Salas de Gobierno gozan por razón de sueldo 6.000 reales cada uno.

Las obviaciones o emolumentos de dichos destinos en la actualidad, deducidos gastos de pasantes y escribientes, las fijan por las consideraciones que son notorias y hacen en sus contestaciones (...) la cantidad de 16.000 y 18.000 reales cada uno. (También se calcula) de 8 a 10.000 reales las obviaciones de los negocios de las Salas de Mil y Quinientas, Justicia y Provincia en que se les concedió su turno o cuarta parte a cada uno; y el otro de 7 a 9.000 reales, (estando las) de los otros dos Relatores de dichas Salas en la cantidad de 10.000 reales.

Por la demostración antecedente resulta que los expresados Relatores de las Salas de Gobierno por razón de sueldos y obviaciones de sus destinos en los dos conceptos que quedan manifestados, han debido ganar en el año último 34.000 reales cada uno, y con tanta razón habiendo servido solos en todas las Salas el primer medio año hasta que fueron nombrados los otros.

(...) Por la antecedente demostración resulta que el haber anual de estos dependientes (ya siendo cuatro), por la que ofrecen en su contestación debe ser el de 11.000 reales anuales por razón de sueldos y emolumentos¹⁷⁶³.

Conocemos también el proyecto de arancel de Relatores elaborado en el año 1815¹⁷⁶⁴, del que podemos extraer algunos datos: en la consultas, cobraban por pliego de consulta 40 reales; por la vista y reconocimiento de cada papel en derecho manuscrito, y certificación de estar conforme al auto acordado sobre impresiones, cobraban 60 reales; y también sabemos, por ejemplo, que cobraban derechos distintos según fuese el pleito vistas, revistas, remisiones en discordia, expedientes de facultades, manutención, reintegros, pleitos o expedientes extraordinarios, residencias, etc. Y todo ello según lo estipulado en el arancel vigente.

La gran cuestión del periodo llamado "Década Ominosa", en lo referente a los Relatores, es conseguir una adecuada distribución de los asuntos entre el corto número de Relatores, de tal manera que se consiga el difícil equilibrio de proporcionar parecidos emolumentos y no sobrecargar a ninguna de las Relatorías, de forma que se atasque o retrase el despacho de los negocios. Se barajaron así diversas fórmulas, desde hacer turnos para los asuntos de Justicia entre todos los Relatores,

¹⁷⁶³. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

¹⁷⁶⁴. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 2.

conservando los de Gobierno sus cometidos, hasta la resolución final de repartir todos los expedientes -con independencia de la Sala- entre los cuatro Relatores por partes iguales, como ya vimos anteriormente.

En todo caso, no parece que la retribución de un Relator del Consejo fuese muy mala, pese a las frecuentes quejas que éstos presentaron en el Consejo²⁷⁰⁰. En 1829, por ejemplo, un Relator de la Sala de Crimen de la Audiencia de Sevilla ganaba entre los 1.500 y los 4.000 reales anuales²⁷⁰¹.

Por otro lado, aunque la Relatoría era básicamente la figura del Relator, sin embargo éste debía habitualmente costear el papel utilizado así como contratar algún escribiente que le asistiera en sus cometidos²⁷⁰². En opinión del Relator Fernández de Llamazares, manifestada en un informe de 1829, "sólo el costo de papel y escribientes no era sufragado por los 6.000 reales de dotación que gozaban..."²⁷⁰³.

También vimos en su momento cómo en caso de existir un Relator interino, éste cobraba del Consejo como si fuese propietario; y en caso de ser un sustituto, debía ponerse de acuerdo con el propietario tanto en lo referente al sueldo como a los emolumentos.

Y por otro lado, como todo empleado público, en el primer año en su destino de Relator del Consejo se le descontaba la mitad del sueldo en concepto de media annata: se le descontaba esta cantidad proporcionalmente en cada una de las mesadas del primer año²⁷⁰⁴.

²⁷⁰⁰. Así opinaba el Consejo el 18 de marzo de 1830: "Si no rinden grandes emolumentos, al menos pueden sufragar con algún sobrante para los gastos que indispensablemente ocasionan a los Relatores." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64).

²⁷⁰¹. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.096.

²⁷⁰². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.971 núm. 64.

²⁷⁰³. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.100, consulta del 20 de febrero de 1830.

²⁷⁰⁴. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.969 núm. 43; por ejemplo, al caso de don Manuel Romero Yagüe y don Juan Fernández Llamazares, a quienes tras aprobar la oposición de ingreso a Relator del Consejo en 1825, "el Consejo les expidió los títulos correspondientes y satisficieron las medias annatas respectivas al sueldo de 400 ducados anuales" (A.H.N., Consejo, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.100, consulta del 20 de febrero

6. Remoción y jubilación

En la documentación del Consejo y bibliografía consultada referente a este periodo no aparecen grandes novedades con respecto a la remoción y jubilación de Relatores. Quizás el dato de más interés sean las purificaciones a las que se vieron sometidos estos subalternos, y los demás del Consejo, a partir de 1814 y posteriormente de 1823. En ambos periodos se exigió el informe de purificación de la conducta política anterior, tanto para continuar en una plaza de Relator en el Consejo como para acceder a una vacante por oposición.

El 23 de julio de 1823 fueron repuestos don Simón Gil Reinoso y don Leandro Gil López en sus Relatorias; el 6 de agosto lo fue don Manuel Fernández Mazarambroz; don Joaquín Latorre no fue purificado, por resolución de 11 de septiembre de 1823 ("No ha lugar a la reposición"): no parece que Latorre recurriese a esta resolución"".

No aparece en la documentación del Consejo ningún dato que nos lleve a deducir la separación de ninguno de los Relatores del Consejo por motivos profesionales o disciplinarios. Parece que de estos casos no hubo ninguno. Sí aparecen por el contrario abundantes referencias a amonestaciones de las autoridades, del Ministerio de Hacienda o del Decano del Consejo por el retraso en el cumplimiento de sus cometidos, en especial a partir de 1823.

En lo referente a los traslados de Sala, éstos debían ser aprobados por el Gobernador, y aunque frecuentes por ascensos, se debían siempre al lógico "cursus honorum" de estos subalternos, y eran por motivos profesionales o crematísticos ordinariamente. El traslado de Sala no implicaba ni mucho menos el olvidarse de los expedientes de su anterior Sala: por el contrario, en el Decreto de traslado del Consejo se le encomendaba habitualmente que cuidase de despachar los pleitos o expedientes que se hallasen vistos pertenecientes a la

de 1830.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040, expediente núm. 2.

Relatoría que dejaba"". Incluso hasta que quedase cubierta la vacante con un nombramiento interino o definitivo se daba orden a todas las Escribanías de Cámara que pasasen los expedientes al que acababa de ascender a otra Sala"".

En cuanto a las jubilaciones, los Relatores habían sido incluidos por Carlos III en el Montepío de funcionarios civiles y percibían la correspondiente pensión por jubilación, fijada en cada caso por el Consejo 2/3 del sueldo habitualmente-. También sus viudas y familiares próximos tenían asignada pensión en caso de fallecimiento del Relator. Al parecer, esta prestación económica anual estaba fijada en los 4.000 reales (¿136.000 maravedís?)"". Conocemos también que tras la supresión del Consejo en 1820, varios de los Relatores quedaron sin destino y fueron jubilados, al igual que Relatores de otros Consejos. Más adelante, por Decreto de las Cortes de 14 de agosto de 1820 algunos fueron incorporados al Tribunal Supremo de Justicia con la dotación de sus respectivas jubilaciones"".

Fallecido un Relator, se hacía inventario de todos sus papeles y eran mandados recoger por el Decano del Consejo"". Sus herederos o predecesores tenían la obligación de remitir todos los documentos, procesos e informes relativos

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 expte. núm. 56.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 56. Parece ser que en las convocatorias oficiales sólo se reputaba ascenso el pase a la Real Cámara, y no el de una Sala a otra. Sin embargo, en el lenguaje ordinario de los expedientes del Consejo sí aparecen muchas referencias al ascenso de una Sala del Consejo a otra (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.970 núm. 61).

"". De estas pensiones de viudedad y orfandad se beneficiaron muchos familiares de Relatores de Fernando VII. Por ejemplo, doña Rafaela de Páez, viuda de don Francisco de Paula Ismart (Pensión declarada por R.O. de 2 de mayo de 1822; doña Angela Rosa Villanueva, viuda de don Simón Gil Reinoso (R.O. de 25 de junio de 1829); don Gregorio Romero y Larrañaga, huérfano de don Manuel Romero (pensión declarada por la Junta el 18 de julio de 1833 y aprobada por R.O. de 23 de octubre de 1833); doña Eutigiana Grova, viuda de don Leandro Gil López (R.O. de 10 de julio de 1837); doña Carmen Villanueva, huérfana de don Ramón Gil, etc. (A.H.N., Consejos, Hacienda, legajo 528, expedientes núms. 45, 51, 46, 35, 58 respectivamente).

"". A.C.D., Serie General, legajo 33 núm. 11.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 80.

a su oficio, sin poder pretender por ello la menor gratificación"". Por otro lado, sabemos que el cargo de Relator no era en ningún caso hereditario. La Ley"" prohibía taxativamente que las vacantes de las Relatorias se cubriesen por los sucesores del fallecido o dimisionario, ni tampoco por los oficiales que tuviese a su cargo.

"". Por ejemplo, el expediente número 29 del legajo 3.133 de la Sala de Gobierno, Consejos Suprimidos, fechado en 1815, tiene el siguiente enunciado: "Varios legajos de expedientes y papeles entregados por las viudas de Agentes Fiscales y Relatores".

"". Ley II, Título XX, Libro IV de la Novísima Recopilación.

AGENTES FISCALES

1. Introducción

"El empleo de Agente Fiscal del Consejo es también de mucha confianza...En lo antiguo los Señores Fiscales, para dar pronto expediente a los negocios, tenían dos personas que les asistían y a éstas se les satisfacía el importe de sus consignaciones por su Majestad"''''.

Antiguamente los Fiscales del Consejo se apoyaban para el ejercicio de sus funciones en unos oficiales. A partir de la Presidencia del Cardenal Trejo fueron nombrados dos Agentes Fiscales fijos, elevados al número de tres posteriormente por auto acordado del Consejo del año 1736'''''. El rey Carlos III, al crear una tercera Fiscalía por Decreto de 19 de junio de 1769, estableció que

''''', MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 683.

'''''. Auto XCVI, Título IV, Libro II de la Nueva Recopilación; y A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 2: la razón de esta nueva Agencia Fiscal fue el no poder dar el pronto despacho a todos los negocios que se presentaban. Se habían añadido a las dependencias del antiguo instituto las de la Corona de Aragón y habían crecido entonces los asuntos de oficio, con el consiguiente retraso de éstos. Poco antes había señalado el Consejo dos días a la semana para despachar estos negocios.

cada uno de los tres Fiscales del Consejo contara con dos Agentes Fiscales para su ayuda. De esta manera, desde aquella fecha quedaron en seis los Agentes Fiscales del Consejo Real.

2. Nombramiento y su número

1) Agentes Fiscales numerarios

"Son seis de su dotación...El nombramiento lo hace el Consejo a consulta con S.M., previa propuesta de los Sres. Fiscales"¹¹²⁷⁰.

La rica documentación sobre los Agentes Fiscales conservada en el Archivo Histórico Nacional nos permite reconstruir con algún detalle los principales avatares a que se vio sometida esta figura de la estructura orgánica del Consejo. Iremos repasando la evolución de estos Agentes a lo largo del reinado de Fernando VII y al mismo tiempo irán apareciendo peculiaridades de la designación y nombramiento de estos importantes subalternos.

La primera noticia a la que nos vamos a referir es una Real Orden del año 1.800. En ella se proponían sujetos idóneos para cubrir la vacante de don Francisco Mendoza, Agente Fiscal del Consejo"¹¹²⁷¹.

Tradicionalmente, y así lo refleja Martínez de Salazar"¹¹²⁷², se había concedido a los Fiscales la regalía de poder nombrar a sus Agentes. Sin embargo, y por la mencionada Real Orden de 30 de agosto de 1800 se estableció que no se proveyese en adelante plaza alguna de Agente Fiscal del Consejo sin que aquel Tribunal propusiese para

¹¹²⁷⁰. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781. expte. núm. 11: "Informe sobre el Consejo en 1826".

¹¹²⁷¹. Esta Real Orden llevaba fecha de 30 de agosto del año 1800.

¹¹²⁷². MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 683: Dice así: "a estos Agentes los nombran los Señores Fiscales".

ella tres sujetos en consulta a S.M. Presentada la propuesta, el Rey designaría a la persona que estimase más conveniente para cubrir la plaza. En la misma Real Orden se establecía que los Fiscales procediesen a proponer al mismo Consejo en los casos de vacante a quienes considerasen más idóneos. También se apuntaba en la Real Orden lo ya mencionado de que el Consejo en ningún caso se encontraría vinculado a consultar al Monarca los candidatos que propusieran los Fiscales.

De esta manera sería el Rey quien cubriría esta vacante, pero a consulta del propio Consejo de Castilla. En adelante los Fiscales tan sólo tendrían el privilegio de presentar propuesta de candidatos, aunque también es verdad que en la práctica sus propuestas serían habitualmente aceptadas por el Consejo y por el Rey.

Era por tanto el Monarca quien designaba y nombraba a los Agentes Fiscales en última instancia. He aquí un extracto del Real nombramiento de don Mateo Zendoquis y Aldana como Agente Fiscal del Consejo:

"Mando que se le tenga por Agente Fiscal, que el Gobernador y los del Consejo le reciban juramento de usar bien y fielmente dicho empleo, recibiendo de las Escribanías de Cámara y Justicia y de Gobierno del Consejo los pleitos y expedientes que se pasaron al Fiscal o Fiscales a quienes corresponda despacharlos, llevándoselos para este efecto sin la menor instrucción, bien instruido de los hechos y con la correspondiente apuntación de ellos, extendiendo los dictámenes que hubieren tomado de los referidos Fiscales y les encargaren, guardando en todo secreto y sin llevar derechos alguno de las partes. Y precedido dicho juramento recibirá por la Tesorería General 22.000 reales que están asignados anualmente a dicha plaza. De este título se ha de tomar la razón en las Contadurías Generales de Valores, y distribución de la Real Hacienda, expresándose en la primera haberse satisfecho o quedar asegurado el derecho de la media annata, sin cuya formalidad no será de ningún valor ni efecto. 30 de noviembre de 1800"".

En 1804 la sexta Agencia Fiscal se encontraba vacante por promoción del Agente don Manuel Echevarría. El Rey, a consulta del Consejo de 13 de agosto de aquel año,

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 11.

decidió restablecer y confirmar esta sexta Agencia Fiscal, para la que nombró a don Vicente Ramón de Vigo, por Real Orden firmada en Aranjuez el 3 de junio de 1805^{***}. Poco después, el 22 de junio de aquel año, falleció otro de los Agentes Fiscales del Consejo, don Lorenzo Guardicla.

En julio de 1807 los seis Agentes Fiscales del Consejo eran los siguientes: don Juan Pedro Delgado, don Antonio Alfaro, don Jerónimo Antonio Díez, don Mateo Sandoquis, don José Ruiz Barriopedro y don Vicente Ramón de Vigo^{***}.

Por otros expedientes de aquella época sabemos que don Jerónimo Antonio Díez ascendió por aquella época a Consejero de Castilla, siendo sustituido por don Wenceslao Argumosa, que a su vez dimitió en aquel mismo 1808. De los restantes sabemos que Delgado y Alfaro pasaron a Cádiz durante la Guerra y sirvieron más tarde en el Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, Sandoquis ascendió a Fiscal de la Sala de Alcaldes y Barriopedro y Vigo permanecieron en Madrid^{***}. Estos dos últimos fueron empleados como Agentes Fiscales en la llamadas Juntas Contenciosas que sustituyeron al Consejo de Castilla^{***}.

Tras la restauración del Consejo en 1814, en el mismo había sólo cuatro Agentes Fiscales^{***}: Delgado, Alfaro, Barriopedro y Vigo. Quedaban por proveer las vacantes de Argumosa y Sandoquis, que quedaron sin provisión por el momento a causa del reducido número de recursos y

^{***}. A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 11.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.882.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, expediente núm.46; este expediente nos refiere también que en 1808 había seis Agentes Fiscales en el Consejo y que tras la dimisión de Argumosa esta Agencia Fiscal quedó vacante. El legajo 3.972, expte. núm. 11 de la Sala de Gobierno nos refiere, por su parte, la siguiente noticia: "el 30 de agosto de 1809 acudió don Mateo Sandoquis a la Junta creada para la decisión de los asuntos pendientes en el Consejo Real, manifestando que con su expatriación a Bayona se le habían extraviado sus títulos y necesitando para presentar el de Agente Fiscal al Sr. Decano, solicitó certificado de haber sido nombrado Agente Fiscal. Así lo acordó la Junta y se lo dio".

^{***}. A.H.N., Consejos, Juntas Contenciosas, legajo 51.584.

^{***}. Habilitados con la calidad de por ahora para el despacho de los negocios del Consejo, a consecuencia del Real Decreto de 27 de mayo de 1814.

negocios que todavía llegaban al Consejo, por su inmediato restablecimiento.

Sin embargo, en agosto de aquel mismo año el crecimiento de los asuntos del Consejo llevó a proveer ambas plazas, convocadas por providencia de 19 de julio. El sistema de provisión era el de convocatoria pública de candidatos""", y propuesta de tres candidatos por los Fiscales, entre los que habitualmente el Consejo elegía a los propuestos en primer lugar y así lo consultaba al Rey"". De esta forma, los designados entonces fueron don Benito Fernández de la Garrida"" y don Mariano Lafuente y

"". Para la plaza vacante dejada por Argumosa se presentaron en total 12 pretendientes.

"". La propuesta presentada por los Fiscales don Manuel de Torres y don Francisco Gutiérrez de la Huerta, para cubrir la plaza de Argumosa, fueron los siguientes: en primer lugar, a don Benito Fernández de la Garrida, Abogado del Colegio de esa Corte; en segundo lugar, a don Simón de la Plaza y Prado, Abogado de los Reales Consejos; en tercer lugar, a don José Sánchez Cucto, Abogado. El Consejo nombró al propuesto en primer lugar.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 12: He aquí los méritos y curriculum de este nuevo Agente Fiscal. Nos da sin duda una idea aproximada del origen, formación y carrera profesional de estos oficiales: natural de la Villa de Cuerva, Arzobispado de Toledo; hijo legítimo de don Juan Fernández de la Garrida y doña Manuela Sánchez; nacido el 12 de enero de 1852. Estudia gramática latina en el Colegio de San Ildefonso de su villa natal, donde obtiene beca numeraria. Estudia tres años de Filosofía en la Real Universidad de Toledo. Concluidos estos estudios cursa tres años de leyes en la misma Universidad, desde el 18 de octubre de 1778 hasta 1780. El 15 de mayo de 1780 recibe en esta Universidad el grado de Bachiller en Derecho Civil. Posteriormente gana tres cursos de cánones en la misma Universidad. Pasa a la Corte a instruirse en la práctica, siendo admitido en la Academia de Derecho de Nuestra Señora del Carmen, sita en el Oratorio de Padres de San Felipe Neri. Es recibido de Abogado de los Reales Consejos en 27 de julio de 1784. Es admitido en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el 21 de noviembre de 1785. Había desempeñado los cargos de Abogado de pobres en los tribunales eclesiásticos, de la Cárcel de Corte y del Supremo Consejo de Guerra; y el de examinador en el año de 1797. Gobernador por seis años de la villa y pueblos del estado de Barajas, por nombramiento del Conde Fernán-Núñez, señor jurisdiccional. Había desempeñado diversas comisiones encargadas por el Gobernador del Consejo, la Sala de Alcaldes y otros tribunales de la Corte. Abogado de Cámara de las Casas de los excmos. sres Marqueses de Villena, Duque de Frías, Príncipe de Castelfranco, Conde de Fernán-Núñez, Duque de Osuna y Marqués

Poyanos****.

Veamos a esta altura un ejemplo de cómo se convocaba una plaza de Agente Fiscal. Según el sistema establecido en la Real Resolución de 30 de agosto del año 1800, se había de fijar aviso en el Salón del Consejo, haciendo saber al público dichas vacantes para que en el término fijado desde la fecha de dicho aviso los letrados que aspirasen a ellas acudieran al Tribunal a presentar sus candidaturas****.

de Camarasa. Nombrado Agente Fiscal del Consejo por Real Decreto del Consejo pleno de 22 de agosto de 1814, publicada en 2 de septiembre.

****. He aquí su currículum vitae tenía 35 años de edad en 1814; sigue la carrera de la escuela, graduándose de doctor en cánones en la Universidad de Zaragoza, en la que desempeñó el oficio de Fiscal por espacio de dos años; regentó varias cátedras de la misma; era individuo de la Real Academia Jurídico Práctica, en la que obtuvo los empleos de Presidente y Fiscal; socio de mérito literario de la Real Sociedad Aragonesa; secretario de la misma en la clase de Artes y catedrático por S.M. de Filosofía Moral; abogado de la Real Audiencia de Aragón e individuo del Real Colegio de San Ibo; incorporado a los Reales Consejos de Castilla, desde 1804 tuvo abierto despacho en la ciudad de Zaragoza, llevando toda clase de causas. Abogado defensor de los Excmos. Sres. Duque de Medinaceli y Condesa de Aranda, el ilmo. obispo de Barbastro y del reverendo Cabildo de Jaca. También de las Reales Casas de san Cayetano y san Ignacio, y asesor de varios alcaldes y ayuntamientos. Desempeñó varias comisiones civiles y criminales para las Salas de la Audiencia de Aragón. En 1799 fue nombrado por S.M. alcalde mayor de la ciudad de Almuñécar, cuyo destino desempeñó hasta 1804, en que fue promovido a la vara de la villa de Yepes, en la Mancha, que abandonó a la entrada del Gobierno intruso. El Gobierno legítimo le nombró Fiscal del Tribunal de Secuestros establecido en Madrid, cuyo destino desempeñó hasta la nueva invasión de la capital, emigrando a la villa de Infantes. Fue nombrado Agente Fiscal de la Audiencia de Madrid que se instaló en esta villa, cuyo destino sirvió sin dotación hasta que se instaló la Sala de Alcaldes, en cuyo acto se le nombró también Agente Fiscal de ella. Era también académico de la Real Academia de la Historia de esta Corte. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 12).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 19. Aquí tenemos por ejemplo el que se publicó el 21 de abril de 1815 para cubrir la plaza de don Juan Pedro Delgado, que acababa de jubilarse:

Como datos de especial interés debemos señalar de un lado el plazo de 8 días para presentar las candidaturas, desde la fecha del Aviso, en la Escribanía de Gobierno del Consejo"". Y el requisito adicional de calificar suficientemente la conducta política bajo el gobierno intruso. Estos avisos no eran impresos, sino escritos a mano en pliego grande.

En 1815 hubo dos nuevas vacantes en las Agencias Fiscales del Consejo. Vamos viendo la extraordinaria movilidad de estas plazas y cómo en muchas ocasiones eran un peldaño para acceder a puestos de mayor responsabilidad en la Administración. En aquel 1815 dejaron sus plazas don Juan Pedro Delgado, mencionado arriba, jubilado a petición propia; y don Vicente Ramón del Vigo, por ascenso a Alcalde del Crimen de la Real Chancillería de Valladolid. Fueron nombrados para cubrir sus plazas don Ramón de Argós y don Juan Nepomuceno Fernández. El nombramiento llevaba fecha de 12 de julio de 1815"".

La vacante creada por la promoción del Agente don José Barriopedro tiene para nosotros un especial

Se halla vacante la plaza de Agente Fiscal del Consejo por jubilación de don Juan Pedro Delgado, con el sueldo anual de veintidós mil reales vellón.

Las personas a quienes convenga hacer pretensión a dicha plaza, presentarán sus títulos y memoriales en la Escribanía de Gobierno, e igualmente documentos que acrediten en bastante forma la calificación de su conducta política en el tiempo del gobierno intruso; lo que ejecutarán en el preciso término de ocho días contados desde la fecha de este aviso: en inteligencia de que la que fuere nombrada para dicha plaza, no es de poder ejercer la Abogacía en el tiempo que la sirviere.

Madrid 21 de abril de 1815.

"". Las candidaturas debían venir acompañadas de una instancia, solicitando la plaza y los título y documentos justificativos (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, Consulta de 21 de mayo de 1825). Las instancias y la documentación debían ser presentadas en la sede de la Escribanía de Gobierno del Consejo, sita en la plazuela de las Descalzas Reales, número 6, cuarto principal (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expte. núm. 19).

"". A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 13: este expediente contiene la documentación completa de la convocatoria, candidatos y nombramientos.

interés, en cuanto que replantea los criterios de designación de los nuevos Agentes Fiscales. En la Consulta de Oficio de 11 de mayo de 1816 -en la que se propusieron al Rey los candidatos para cubrir la vacante-, se hablaba así sobre los criterios de selección a seguir:

"Para su elección se tiene en cuenta ante todo el mejor servicio del Rey y del público, y la responsabilidad personal que tienen del pronto y arreglado despacho de los negocios.

Supuesta la inmensa multitud de éstos, no puede verificarse su objeto sin unos Agentes Fiscales que al conocimiento de nuestra legislación unan la facilidad de presentar los hechos con claridad: conocer el punto o los puntos de la disputa en los expedientes y autos que se ponen a sus cuidados; y saber entender los dictámenes que se les diesen.

Los méritos y servicios literarios de los pretendientes sin más noticias particulares y sobre todo sin un conocimiento práctico de su idoneidad y suficiencia son muy equivocados y por su sola calificación es muy fácil errar en la elección"".

En la práctica sabemos que los Ministros y Fiscales utilizaban un cuestionario impreso con el que examinaban a los candidatos a la Agencia Fiscal. El examen constaba de un caso igual para todos y 56 preguntas que al parecer debían ser respondidas por escrito"". Posteriormente los Fiscales formaban unas ternas a los Consejeros. Estos estudiaban la propuesta y finalmente sobre ella formaban las ternas definitivas que se presentaban a la consulta con el Rey"".

"" A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.077, Consulta de 11 de mayo de 1816.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expte. núm 18. Este expediente contiene uno de estos cuestionarios con las respuestas dadas por uno de los examinandos. Son cuestiones esencialmente jurídicas.

"" El procedimiento de designación de candidatos a plazas de Agente Fiscal fue al parecer distinto al empleado en el Tribunal Supremo de Justicia, según su Reglamento de 1814. Este Reglamento establecía el sistema de oposición, cuya convocatoria se hacía mediante edictos por término de sesenta días: eran circulados a las Audiencias y por éstas a los Juzgados de Primera Instancia de sus distritos. El día de la oposición se destinaba una Sala del Tribunal durante por orden de antigüedad permanecería cada opositor por espacio de cuarenta y ocho horas. Nadie podía acceder a la Sala a excepción de un escribiente. En ese lapso de tiempo debería preparar una disertación sobre una materia de su

En aquella ocasión el Consejo propuso a dos sujetos, don Manuel Ruiz Alonso -que fue el elegido- y don José del Valle y Refart. El primero, Abogado de los Reales Consejos, había trabajado para otras dos Agencias Fiscales del propio Consejo y su idoneidad venía acreditada por las veces que había despachado con el Fiscal segundo; por su parte, Del Valle era Abogado del Colegio de aquella Corte y Agente Fiscal de la Comisión de Causas de Estado, nombrado por la misma a propuesta del que entonces era Fiscal tercero del Consejo, miembro de aquella comisión, con el que trabajaba.

El 30 de marzo de 1816, a petición de los demás Agentes Fiscales del Consejo, era jubilado por el Rey, en consulta del Consejo^{***}, el Agente don Antonio Alfaro. El motivo era la incapacidad física manifiesta para desempeñar sus cometidos. Había en ese momento tres Agentes Fiscales en el Consejo. Para sustituirle se nombró a don Isidro Rovira^{***}.

Dos años después, en 1818, dimitía el Agente Fiscal don Mariano de la Fuente Poyanos^{***}. El Consejo estudió y votó las propuestas presentadas por los Fiscales, junto con los demás candidatos presentados y el resultado fue el siguiente:

elección. Terminado el tiempo previsto, se procedía a la lectura pública del ejercicio ante el Tribunal pleno, con asistencia de los Fiscales. Seguidamente Fiscales y Ministros examinaban al candidato por espacio de una hora. Acabados los ejercicios, el Tribunal formaba las ternas que se presentaban al Rey, oídos antes los Fiscales (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", págs. 518-520).

^{***}. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.076, Consulta de Oficio de 30 de marzo de 1816.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expte. núm. 13.

^{***}. Veamos aquí a título de ejemplo la propuesta de candidatos que se realizó por parte de los Fiscales y algunos datos más sobre los trámites de su designación: 1. Don Vicente Javier Vinuesa, Abogado de los Reales Consejos, Consultor perpetuo por S.M. del Consulado de San Sebastián y Supernumerario de la provincia de Guipúzcoa (recibió 11 votos de los Fiscales); 2. Don Juan García Becerra, Agente Fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (recibió 9 votos); 3. Don Andrés Fernández de Ramila, Relator de la Sala de Alcaldes. Este candidato, al parecer según nota añadida por los Fiscales, no aparecía en la lista oficial de candidatos "por no haber sabido la vacante, según ha asegurado a los Fiscales".

1. Don Francisco Javier Vinuesa: 11 votos;
don Juan García Becerra, 9 votos;

2. Don Juan García Becerra: 15 votos; don
Vicente Javier Vinuesa, 2 votos; don Andrés
Fernández de Ramila, 1 voto; don José del Valle
Refart, 1 voto; don Martín de Pineda, 1 voto;

3. Don Andrés Fernández de la Ramila, 8 votos;
don Valentín Bernardo de Moratilla, 3 votos; don
Juan García Becerra, 2 votos; don Juan Pérez de
Marure, 2 votos; etc."

Como ya hemos apuntado anteriormente, el
procedimiento de votación era el siguiente en ambos casos:
se reunían todos los Fiscales -o todos los Consejeros en el
segundo caso- y se realizaba una votación para designar al
propuesto en primer lugar. Previamente se había repartido a
cada Fiscal o Consejero dos listas impresas con los nombres
de los candidatos: una formaba un cuadernillo con dichos
nombres y sus méritos y curriculum; la otra tenía sólo los
nombres y debajo un espacio en blanco para que tomase las
notas oportunas". A continuación y con los mismos
candidatos, votaban el que sería propuesto en segundo lugar
y finalmente igual procedimiento con el tercero. Este era el
sistema habitual de votación para la elección de subalternos
dentro del Consejo y se aplicaba en los demás casos de
selección de candidatos a plazas dentro del Supremo
Tribunal.

Como era corriente también, el Rey designó al
propuesto en primer lugar por el Consejo, don Francisco
Javier Vinuesa".

En 1819 tenemos dos novedades más: fallece
don Isidro Rovira y es sustituido por don Juan García
Becerra, que ya había sido consultado en varias ocasiones
más. Y renuncia don Francisco Javier Vinuesa a su plaza,
siendo reemplazado por don Juan Martín Esperanza". A
finales de este año por tanto nos encontramos en el Consejo
con un total de seis Agentes Fiscales efectivos y dos

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo
de Castilla, legajo 6.084, Consulta de 14 de agosto de 1818.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. núm. 20. Se puede ver un ejemplar de estas listas
dentro del mismo legajo, en los exptes. núms. 11 y 13.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. núm. 13.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972,
expte. núm. 13.

jubilados"".

Con la supresión del Consejo de Castilla en 1820, todos sus Agentes Fiscales quedaron cesantes y pasaron a ocupar otros destinos: don Ramón de Argós pasó a Juez de Primera Instancia de Madrid; don Manuel Ruiz Barriopedro pasó a ser Agente Fiscal de la Audiencia de Madrid; don Juan Nepomuceno San Miguel pasó a ser oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia y después a servir la plaza de Oidor de la Audiencia de Oviedo; don Juan Esperanza se retiró a Alcalá de Henares; don Juan Becerra pasó a ser Agente Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia; don Vicente Fernández de la Garrida quedó en principio sin empleo"".

Tras la restauración del Consejo en 1823, sus empleados fueron sometidos a purificación, y por tanto, también los Agentes Fiscales"". Incluso los Agentes Fiscales jubilados tuvieron que pasar por esta prueba para poder seguir cobrando sus pensiones"". Dos Agentes Fiscales del Consejo no fueron purificados y perdieron sus plazas. Nos referimos a don Juan Nepomuceno San Miguel y don Juan Becerra"". El primero ni siquiera hizo instancia para su purificación, "pese al dilatado tiempo transcurrido"; y el segundo, aunque la hizo y le fue denegada en primera instancia, por providencia de 26 de septiembre de 1824, no reclamó posteriormente ni solicitó ser oído en nueva instancia"".

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333, expte. núm. 11.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975, expte. núm. 45.

"". Así, don Ramón Argós fue purificado en su destino el 30 de julio de 1823 y don Manuel Ruiz Alonso el 13 de agosto de 1823 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040, expte. núm. 2).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040, expediente núm. 3: éste fue el caso de don Antonio Alfaro, que había sido Agente Fiscal durante 26 años y que fue jubilado en 1816 con 2/3 de su sueldo. Tuvo que someterse a purificación, que le fue concedida por el Consejo el 14 de marzo de 1825, a instancia suya.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 2: la purificación de don Juan Nepomuceno Fernández de San Miguel fue denegada el 9 de septiembre de 1825; la de don Juan García Becerra fue rechazada igualmente el 26 de septiembre del año anterior.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 19.

Declaradas ambas plazas vacantes, fueron convocadas para su provisión, en edicto de fecha 7 de febrero de 1825. Se presentaron en los ocho días siguientes trece candidatos. Instruido el expediente en la forma ordinaria y conformándose el propio Supremo Tribunal con la propuesta de los Fiscales, elevó al Rey el 21 de mayo la correspondiente propuesta, en la que fueron elegidos don Francisco Candel Molina y don Simeón García Pericacho, aunque otra fuente indica que fue elegido para una de las plazas don Antonio Sánchez Ocaña^{***}. El 14 de junio siguiente se les expidió el título correspondiente^{***}.

Sin embargo, pocos meses después de esta convocatoria había ya otra en curso, por promoción del Agente Fiscal don Manuel Ruiz Alonso a una Agencia Fiscal del Consejo de la Cámara. De los diez candidatos presentados^{***} a la convocatoria del 16 de octubre de 1825,

^{***}. Otra noticia aparecida entre la documentación del Consejo afirma que en esta ocasión fue nombrado para la plaza don Antonio Sánchez Ocaña. Este documento incluso incluye el curriculum vitae de este empleado. He aquí, según el documento en cuestión, los méritos presentados por Sánchez Ocaña: Era Abogado de los Reales Consejos y del Ilustre Colegio de Madrid; natural de la villa de Béjar, diócesis de Plasencia, hijo legítimo; precedido el estudio de latinidad, siguió su carrera literaria en la Facultad de Filosofía, en la que recibió el grado de Bachiller por la Universidad de Alcalá en agosto de 1818, previos los correspondientes ejercicios, que fueron aprobados nemine discrepante; incorporó y aprobó también en la universidad de Salamanca un curso de Elementos Matemáticos, otro de Lógica y Metafísica, otro de Filosofía Moral, dos de Instituciones Civiles y otro de Instituciones Canónicas, manifestando en todo la mayor aplicación y aprovechamiento; recibió igualmente por la Universidad de Salamanca el grado de bachiller en la Facultad de Leyes, precedidos los ejercicios de Estatuto, que fueron aprobados nemine discrepante; el 7 de febrero de 1824 fue recibido de abogado de los Reales Consejos y el 24 del mismo se incorporó al Ilustre Colegio de la Corte, después de practicadas, vistas y aprobadas las diligencias prevenidas por los estatutos y acuerdos de él; durante el gobierno de la rebelión no solicitó ni obtuvo empleo ni comisión alguna ni perteneció a la milicia llamada nacional voluntaria. Según la mencionada fuente, en la consulta aprobada por S.M. en 21 de mayo de 1825 fue elegido para ocupar plaza de Fiscal del Consejo de Castilla. Contaba entonces con 26 años (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 18).

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 19; y Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.090, consulta de 21 de mayo de 1825.

^{***}. Obsérvese que paulatinamente año tras año son cada vez menos los aspirantes a estas plazas del Consejo.

el Monarca designó a don Ignacio Fernández Moscoso, en consulta de 27 de abril de 1826"". Al concluir aquel año eran también seis los Agentes Fiscales efectivos en el Consejo"", número que se mantuvo estable en los años siguientes"".

Ya no hemos hallado más noticias en la documentación consultada del Consejo, hasta el año 1831, en que sabemos que falleció el Agente Fiscal don Benito Fernández de la Garrida. Tras el correspondiente edicto de convocatoria -de fecha 18 de noviembre de 1831- y elección, fue designado para cubrir la plaza don José María Cambronero, que había estado desempeñando la misma Agencia Fiscal desde el 1 de mayo de 1829 hasta el 26 de enero de 1832, por enfermedad de Fernández de la Garrida"". En esta ocasión ya hubo 19 pretendientes a esta plaza""..

Por tanto vemos que los Agentes Fiscales del Consejo fueron una institución bastante estable dentro de la estructura orgánica del Consejo. Las propias necesidades del servicio y la dificultad de ascender a una plaza de Fiscal -por el limitado número de éstas-, hacían de este oficio con frecuencia un auténtico término en la carrera administrativa de los que lo ejercían. Sin embargo, muchos también se promocionaban desde aquí a plazas de Oidor o Fiscal en otros Tribunales, como Chancillerías, Audiencias o a la misma

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 20: este expediente habla de la consulta de 24 de abril, cuando en realidad tuvo lugar el día 27; A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, Consulta del 27 de abril de 1826.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expediente núm.6; legajo 3.781, expte. núm. 11.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expte. núm. 6: podemos ver aquí los presupuestos del Consejo para 1826, 1829 y 1831.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 13: este expediente afirma que el designado fue don Pablo Martínez Toledano, cuando en realidad fue don José María Cambronero (ver A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, consulta de 26 de enero de 1832).

"". La última noticia sobre un Agente Fiscal del Consejo la encontramos en un expediente hallado en marzo de 1834, tras la supresión definitiva del Consejo, en el que se recoge una exposición de don Juan Nepomuceno Fernández de San Miguel, remitida al Consejo desde Oviedo, solicitando se le acreditase el sueldo como Agente Fiscal cesante de dicho Supremo Tribunal (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.945, expte. núm. 2).

2) Otras figuras de Agente Fiscal

Para finalizar este apartado podemos mencionar otras dos figuras de Agente Fiscal: el supernumerario y el extraordinario:

a) Agente Fiscal supernumerario

No nos consta que hubiera ninguno de esta clase durante el reinado de Fernando VII, pero sí que los hubo en tiempos anteriores. Un caso próximo lo tenemos en don Wenceslao Argumosa y Bourke, a quien S.M. concedió por Real Orden de 6 de enero de 1797 la gracia de poder incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid sin que precediese examen ni otro requisito, así como plaza de Agente Fiscal supernumerario en el Consejo.

Esta cualidad confería opción preferente a la primera vacante de Agente Fiscal que hubiera en el Consejo, e igualmente permitía sustituir a cualquiera de los Agentes Fiscales propietarios en ausencias y enfermedades^{***}.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expte. núm. 22. Un antecedente de esta figura lo tenemos en la llamada "futura". En un expediente de 1739, S.M. concedía en él "la futura" de cualquiera de las tres Agencias Fiscales. Esta gracia suponía que en caso de quedar vacante una de ellas, sería para el agraciado con la futura. Pero entonces se establecía la peculiaridad de que si la vacante era la Agencia Fiscal de lo Civil, los otros Agentes Fiscales tenían preferencia a ascender a ésta, entrando entonces el beneficiario de la futura en la que quedase vacante (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expte. núm. 3).

b) Agente Fiscal extraordinario

Las Guía de Forasteros de 1804 mencionaba al parecer la existencia en el Consejo de cuatro Agentes Fiscales ordinarios y otros cuatro extraordinarios. También menciona este particular Desdevises en su obra sobre el Consejo en 1808^{***}, basándose probablemente en la misma fuente. Sin embargo, la Guía de Forasteros de 1.808 y las siguientes nada hablan sobre este particular.

Al parecer, en un principio sólo había Agentes Fiscales ordinarios, que eran los ayudantes ordinarios de los Fiscales en el desempeño de sus funciones y elaboración de dictámenes. Pero en ocasiones, el volumen de expedientes desbordaban a los ayudantes fiscales y con ánimo de no demorar su despacho, se permitía a los Agentes Fiscales nombrar a su vez oficiales que se encargasen del trabajo excedente, en calidad de ayudantes interinos.

En la documentación del Consejo del reinado de Fernando VII no hemos encontrado en ningún lugar una mención expresa de estos Agentes Fiscales extraordinarios. Sin embargo, en diversos pasajes se menciona como mérito de un Abogado el haber trabajado a las órdenes de un Agente Fiscal en su oficina, o el haberle sustituido en sus funciones durante una ausencia o enfermedad^{***}. No parece que estos ayudantes tuvieran un nombramiento oficial, pero sí que tenían una cierta consideración y protección por parte del Consejo, aunque no estaban incluidos en los presupuestos del Supremo Tribunal y por tanto no eran empleados efectivos del Consejo. Pero ciertamente fue un mérito evidente para acceder a una plaza de Agente Fiscal del Consejo.

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1808", pág. 67.

^{***}. Por ejemplo, don José María Cambronero, nombrado Agente Fiscal en consulta de 26 de enero de 1832, que había estado desempeñando la misma Agencia Fiscal por enfermedad de don Benito de la Garrida desde el 1 de mayo de 1829 hasta el 26 de enero de 1832 (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.107, consulta de 26 de enero de 1832).

3. Juramento y toma de posesión

Desde una Real Orden de 30 de agosto de 1800, al parecer el régimen de nombramiento y toma de posesión de los Agentes Fiscales del Consejo había variado sustancialmente. Señalaba Martínez de Salazar en su obra "Noticias del Consejo", fechada en 1764, que los Agentes Fiscales no hacían juramento para entrar a ejercer sus empleos, pues bastaba el nombramiento que recibían de los Fiscales. Evidentemente, esto ya no fue así durante el reinado de Fernando VII.

Designado un nuevo Agente Fiscal, debía prestar juramento "de usar bien y fielmente dicho empleo, recibiendo de las Escribanías de Cámara y Justicia y de Gobierno del Consejo los pleitos y expedientes que se pasasen al Fiscal o Fiscales a quienes correspondía despacharlos, llevándose los para este efecto sin la menor instrucción, bien instruido de los hechos y con la correspondiente apuntación de ellos, extendiendo los dictámenes que hubieren tomado de los referidos Fiscales y les encargaren, guardando en todo secreto y sin llevar derecho alguno de las partes"".

El juramento se prestaba siempre en la Sala primera de Gobierno, habitualmente en la semana siguiente a la aparición de la Real Providencia de nombramiento.

Tras la prestación del juramento adquiría derechos de antigüedad, así como al correspondiente sueldo, que recibía por Tesorería General. Del título expedido había que tomar cuenta de razón en las Contadurías Generales de Valores y de Distribución de la Real Hacienda, expresándose en la primera haberse satisfecho o quedar asegurado el derecho de la media annata. Este requisito era tan importante que sin tal formalidad no tenía ningún valor ni

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expta. núm. 11: Real Nombramiento ya mencionado de don Mateo Zendoquis, de 11 de noviembre de 1800.

efecto el nombramiento"".

4. Competencias

Así nos refería Ramón Lázaro de Dou el papel de los Agentes Fiscales de nuestros tribunales:

Su misión era "informar a los Fiscales y acudir a todas las diligencias necesarias:...deben sustituirse también recíprocamente; deben estar bien instruidos en el estilo y práctica de la Audiencia; asistir a los Fiscales en todo lo que se ofrece; acudir as los oficios de los escribanos por los pleitos; dar recibo y conocimiento de los que se les entreguen; entregar las peticiones fiscales, buscar, comparecer y presentar los testigos en las causas de oficio y emplearse en las demás ocupaciones que no son compatibles con la dignidad de Fiscal de S.M., habiéndose por esto introducido en nuestra y en otras Audiencias y en los Consejos, en unas partes con el nombre de Agente, en otras de Teniente y en otras de Solicitador Fiscal..."

Las atribuciones de los Agentes Fiscales eran esencialmente jurídicas. De ahí que fuera un requisito indispensable para aspirar a una de estas plazas el ser letrado. Sus competencias se resumían entonces en asistir a los Fiscales en el estudio e informe de los casos: recibían los pleitos, los reconocían y examinaban, hacían los consiguientes apuntamientos y extendían las respuestas que los Fiscales acordasen". Tenían que tener por tanto la capacitación necesaria para poder informar instructivamente a los Fiscales en cada uno de sus dictámenes, con la claridad y precisión que debían tener todas las respuestas fiscales. ,

Era su obligación también proponer medidas

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno,, legajo 3.972, expte. núm. 11.

"", ~~DE DOU Y DE EASOLS, R.L., "Instituciones del Derecho Público General de España", págs. 26 y 27.~~

"". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 684.

para un más breve y eficaz despacho de los negocios de sus oficinas. Además debían visitar diariamente a los Fiscales en sus domicilios, para recibir los despachos y órdenes necesarios en la tramitación de la documentación en las Fiscalías. También era frecuente que después de concluidas las horas de Audiencia en el Consejo se quedasen en él los Fiscales y se reuniesen en cualquiera de las Salas del Consejo con los Agentes para acordar el despacho de los pleitos y expedientes"".

El Rey Carlos III por resolución de 19 de junio de 1769 estableció la distribución por territorios de los negocios entre los tres Fiscales y sus Agentes. Como cada Fiscal tendría dos Agentes para el despacho de sus negocios, los asignados a cada Agente estarían en función del Fiscal con quien trabajase.

Pero por el auto acordado del Consejo de 10 de enero de 1785, sobre señalamiento y distribución de negocios entre sus Agentes Fiscales, se dispuso por el contrario lo siguiente:

"De los asuntos y negocios que despachan los actuales Agentes Fiscales en las provincias de estos Reinos, según el repartimiento que se hizo en el año de 1769, cuando se creó la cuarta plaza de Agente Fiscal, se segrequen y separen por ahora los que se encargan desde luego a los cuatro del extraordinario, en la forma siguiente:

Al primero para despachar todos los asuntos y negocios de las provincias de la Mancha, Murcia y Cuenca; y además las competencias que ocurran en todo el Reino sin distinción de territorios.

Al segundo para despachar los Reinos de Galicia, Principado de Asturias y Provincias Vascongadas.

Al tercero los de las provincias de Segovia, Avila, Guadalajara y Extremadura del Tajo acá.

Y al cuarto los de la Corona de Aragón, relativos al establecimiento y arreglo de seminarios conciliares, hospicios, casas de misericordia y corrección, construcción y reparación de iglesias, caminos o puentes, y los de aprobación de ordenanzas de pueblos, gremios y cualquier otro cuerpo, a excepción de las Audiencias de aquellos Reinos.

Por consecuencia, ha de quedar al cargo de los Agentes Fiscales del Consejo, conforme a la distribución de negocios que se les hizo en el mismo año de 1769, el despacho en esta

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 684.

forma:

Al primero, los pleitos y expedientes de las provincias de Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla, Canarias y presidios.

Al segundo, los de las provincias de Castilla la Vieja, excepto las de Segovia y Avila, que quedan asignadas al de lo extraordinario, y también los de la Montaña y provincias de Burgos y Soria.

Al tercero los de las provincias de Toledo y Madrid, los de Extremadura del Tajo allá; y los de las poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, y los expedientes de montes y plantíos.

Y al cuarto todos los de la Corona de Aragón, incluso los de los breves, letras y bulas de Roma, excepto los destinados al de lo extraordinario.

Los expedientes sobre pases de breves, letras y bulas de Roma se despacharán por los referidos Agentes Fiscales, según las referidas provincias que les van señaladas. Y en cuanto a lo indiferente, se reserva el Consejo tomar providencia"".

Esta asignación de competencias tuvo posteriormente diversas variaciones. Sabemos que ya a finales del año 1800 el Agente Fiscal primero tenía a su cargo, además de los que ahí se citan, los expedientes generales e indiferentes"".

Sabemos que tras la Restauración del Consejo en 1814 hubo en los años siguientes -1815 ó 1816- una reforma de la asignación de negocios a los Agentes Fiscales del Consejo"". Sí tenemos alguna noticia que los Agentes Fiscales no estaban asignados a un sólo Fiscal, sino que por las materias que despachaban podían estar trabajando para

"". Libro IV, Título XVI, Ley VII de la Novísima Recopilación.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expediente núm. 11: menciona que al fallecimiento de don Francisco Mendoza, el 8 de noviembre de 1800, tenía a su cargo los negocios de Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén, Canarias, los presidios, y además los generales e indiferentes.

"". Esta reforma fue recogida en el expediente 26 del legajo 3.452 de la Sala de Gobierno del Consejo, en el A.H.N. Este expediente no ha aparecido entre la documentación de este Archivo y se halla hasta la fecha ilocalizado.

varios Fiscales a la vez"". Concretamente sabemos que el Agente Fiscal más antiguo tenía la prerrogativa exclusiva de despachar expedientes correspondientes a los tres Fiscales.

En las Escribanías de Cámara del Consejo habrían de formarse unos libros para cada uno de los Agentes Fiscales, en donde se extenderían los conocimientos de los pleitos y expedientes que debían despachar"", pasando en cada momento a cada uno directamente los negocios que les

"". Así nos lo refiere el expediente de jubilación de don Antonio Alfaro: "Ctra consecuencia del mal estado de Alfaro es la confusión y extravío de los expedientes. Así el Fiscal segundo ha prescindido enteramente de su intervención en el despacho de los de su departamento, y todos habrán de hacer lo mismo en el despachos de los tres Fiscales, cuya trascendencia y gravedad va haciendo cada vez más interesante y deseado el reemplazo de Alfaro. (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.076, consulta de 30 de marzo de 1816).

"". Los libros de conocimiento eran aquéllos en los que quedaban asentados los pleitos y expedientes remitidos al Fiscal, a los Agentes Fiscales, a los Procuradores o a los Relatores. Eran registros de los expedientes enviados a estas oficinas por las distintas Escribanías del Consejo. Estaban hechos en papel, encuadrados en pergamino o en pasta de papel. La mayor parte de ellos estaban cosidos y sin cubierta, aunque también había algunos más trabajados. Habitualmente oscilaban entre los 100 y los 200 folios de extensión, habiendo también algunos que apenas llegaban a los 10 folios. Por medio de estos libros las Escribanías del Consejo controlaban la situación administrativa de los distintos autos y expedientes que se había recibido para su tramitación, ya que se conocía en todo momento la persona u oficina que se había hecho cargo del mismo. Para ello se asentaba en el libro el correspondiente recibí. En cuanto a la organización de los asientos, en el margen del libro aparecía el nombre de la ciudad en donde se había originado el expediente en cuestión y el empleado del Consejo -Relator, Procurador, Agente Fiscal o Fiscal- que lo recibía. El nombre de los Fiscales no solía aparecer casi nunca y de los demás sólo aparecía el primer apellido. En el asiento se incluía un breve resumen del asunto que motivaba el expediente, el nombre de las personas interesadas, el número de piezas que lo componían y la fecha en que quedaba registrado. Todo ello ocupaba habitualmente unas ocho o diez líneas. En los asientos también quedaba registrada la fecha de recepción y en ocasiones también la de devolución del expediente a la Escribanía. Un expediente devuelto a la Escribanía era cruzado siempre con tres o cuatro rayas verticales. Finalmente podemos señalar que estos libros venían regulados por la real orden de 28 de julio de 1764 y por los autos de 10 y de 15 de enero de 1785. (extractado de la Guía del A.H.N., documentación sobre el Consejo de Castilla).

estaban asignados"". Los Agentes Fiscales, por su parte, debían rubricar dichos conocimientos y devolver los expedientes cuando estuvieran despachados"".

"". Los oficiales terceros de las Escribanías de Cámara llevaban los pleitos y expedientes a las casas de los Agentes Fiscales y éstos firmaban los Libros de conocimiento (MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 684).

"". Libro IV, Título XVI, Ley VII de la Novísima Recopilación. Las listas de expedientes que fueron pasados a los Agentes Fiscales por los Escribanos de Cámara en 1804, que todavía quedaban por despachar a finales de aquel año, pueden sernos indicativas del volumen de trabajo que pasaba por una Agencia Fiscal:

	AGENTES FISCALES					
	DELGADO	GUARDIOLA	ALFARO	SENDOQUIS	ARGUMOSA	
BARRIO						
ESC.GOBIERNO	61	7	9	4	21	
E.GOB.ARAGON						
E.CAM .MUÑOZ 2	2	1	1			
E. "CARRANZA	5*					
" " REBOLES	4		4			
" "PENARANDA 1	3		3			
" " AYALA	5					
" " PICO	3			1		
-	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL PTES.:	83	8	17	5	0	24

* De los Escribanos de Cámara se pasaban expedientes a los Agentes Fiscales. Así, por ejemplo, de los que pasó Carranza pasó al Agente Fiscal Delgado, 5 quedaban sin resolver a finales de 1804.

5. Retribución

Los Agentes Fiscales percibían un sueldo fijo anual, pagado por mesadas o cantidades mensuales. No recibían otros emolumentos y les estaba prohibido por ley llevarse derechos de los clientes en las causas en que interviniesen"". Así se expresaba también el dictamen del Fiscal del Supremo Tribunal en un expediente promovido con motivo de la solicitud hecha por un Agente Fiscal del Crimen de la Audiencia de Valencia:

"El Ministerio Fiscal conoce que los subalternos de los Tribunales deben estar completamente dotados para evitar los abusos a que puede obligar la miseria en el desempeño de sus oficios. Igualmente entiende que es más honroso y propio de la dignidad de un Agente Fiscal el que su dotación sea fija y no eventual"."".

La plaza llevaba consigo una incompatibilidad, tanto de tipo profesional -ejercicio de la Abogacía-, como económico -ejercicio de cualquier otra

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 683. Queda confirmado también, entre otros sitios, en el Presupuesto del Consejo para 1826 e informe adyacente (A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.781, expte. núm. 11).

"" A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.985, expte. núm. 11. Así continúa el citado dictamen del Ministerio Fiscal: "Pero no permitiendo las circunstancias del día hacer tal proposición, es de dictamen de que se aumenten los derechos del Agente Fiscal del Crimen de la Audiencia de Valencia en los términos que propone aquel Fiscal -fecha 15 de agosto de 1811-." El Consejo, por su parte, dictaminó así: "Por ahora y sin perjuicio de lo que se determine en el expediente general de aranceles, se declara que el Agente Fiscal del Crimen de la Audiencia de Valencia debe percibir doce maravedís por toga útil de los procesos que despache, además de los otros asignados por la misma Real Audiencia en la providencia de 4 de diciembre de 1770". Cádiz, 27 de agosto de 1811".

actividad retribuida-"".

Los Agentes Fiscales del Consejo percibían anualmente 22.000 reales (2.000 ducados anuales o 750.000 maravedís)""; que les pagaba por Tesorería General. Esta cantidad se mantuvo invariable durante todo el reinado de Fernando VII. Aunque en el presupuesto del Consejo para 1818 se mencionaba la cantidad de 22.058 reales, sin embargo en los de los años 1825 y siguientes, en incluso en otros documentos anteriores y posteriores se mencionan sólo 22.000 reales, que parece era el sueldo que siempre recibieron"".

6. Remoción y jubilación

El nombramiento de un Agente Fiscal tenía el carácter de vitalicio. Sólo por causas excepcionales podía ser removido de su cargo. Algunas de estas causas excepcionales se dieron durante el mandato de Fernando VII, que encuadramos en dos clases o apartados: motivos de salud o competencia profesional, y motivos políticos. Queda evidentemente aparte de esta remoción forzosa la jubilación o renuncia voluntaria, así como la habitual posibilidad de promoción o ascenso.

Casos de jubilación por edad, salud o

""". Esta disposición también se aplicó a los Agentes Fiscales del Tribunal Supremo de Justicia, según se desprende de su Reglamento de 1814. (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo, 1812-1838", pág. 518).

""". Igual cantidad percibían los Agentes Fiscales de la Cámara (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expte. núm. 6); por su parte, los Agentes Fiscales del Tribunal Supremo de Justicia tenían asignada en el Reglamento de 1814 la importante cantidad de 30.000 reales anuales. En 1835 el nuevo Reglamento del Tribunal Supremo establecía un sueldo de unos 20.000 reales al año. (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 518).

""". Ver, por ejemplo, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.698 núm. 6; legajo 3.972 núm. 11; o dentro de las Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, la de 30 de marzo de 1816.

incapacidad física hubo varios en este periodo. En apartados anteriores han aparecido algunos ejemplos, como el de don Juan Pedro Delgado, jubilado a petición propia por Real Orden de 14 de febrero de 1815. En aquella ocasión el Agente Fiscal fue jubilado con todo su sueldo, lo que no era del todo infrecuente. Pero quizás hubo un caso de especial interés, que ya hemos mencionado anteriormente, y sobre el que nos compensará abundar algo más. Es el del Agente Fiscal del Consejo don Antonio Alfaro, jubilado por Real Orden de 30 de marzo de 1816^{***}. Lo más curioso del caso es que fueron sus compañeros los que solicitaron del Consejo esta jubilación anticipada^{***}.

En representación de 24 de marzo de 1816, los Agentes Fiscales del Consejo informaban así al Consejo sobre el estado físico de Alfaro:

"En septiembre de 1815 este Agente Fiscal, el más antiguo del Consejo, había solicitado en representación a S.M. una licencia de 4 meses para pasar a su país a recobrar su quebrantada salud. De este permiso había usado otras veces, por ser tal el estado de sus fuerzas intelectuales que le era imposible atender a las tareas de su empleo sin ese desahogo. Se había ausentado varias veces y en ese año de 1815 incluso algunos meses, sin que se observase ningún efecto favorable respecto al estado de sus potencias y aptitud para el despacho. Con esta nueva licencia prometió dejar un sustituto capaz, pero el que designó se excusó de encargarse de los negocios por encontrarse achacoso"^{***}.

Los Agentes Fiscales continuaban su representación quejándose de estar abrumados por el trabajo, al verse obligados a hacer también el trabajo de Alfaro. Verificado su regreso a Madrid al cabo de dos meses, todavía no pudo presentarse al despacho por no estar totalmente repuesto. Padecía "debilidad cerebral y pronto cansancio, y

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expte. núm. 13.

^{***}. Tampoco es la única vez bajo Fernando VII que la jubilación de un empleado es promovida por los propios compañeros. En el capítulo de las Escribanías se puede encontrar un caso de un oficial al que sus compañeros se propusieron pagar de su bolsillo la jubilación, con tal que dejara el puesto libre. En aquel caso, los motivos eran de incompetencia manifiesta e ineptitud para el puesto.

^{***}. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.076, consulta de 30 de marzo de 1816.

le costaba entender".

Alfaro había prestado 26 años de servicio como Agente Fiscal del Consejo. Aunque un Agente podía solicitar en cualquier momento de S.M. una licencia temporal", evidentemente la reiteración de estas peticiones podría ser considerada por el Consejo como una muestra clara de incapacidad física. Por otro lado, el Agente Fiscal más antiguo o Decano tenía además especiales responsabilidades entre los Agentes Fiscales. Alfaro era Agente Fiscal Decano no podía desempeñar este cometido. A ello se añadía la confusión y extravío de los expedientes, por lo que al menos un Fiscal había prescindido ya de su intervención en el despacho de los asuntos de su departamento.

El Consejo estudió el asunto Alfaro y en consulta de 30 de marzo se aprobó su jubilación. La consulta se ajustó a las peticiones de los Agentes Fiscales, con la excepción de la jubilación: en vez del sueldo completo, como pedían sus compañeros, se le concedieron sólo 2/3 partes****.

Otro de los supuestos de exclusión era la jubilación política o la simple separación. Dos casos evidentes fueron los de don Juan Nepomuceno Fernández de San Miguel y don Juan Becerra, que resultaron impurificados tras el Trienio Liberal, el segundo por evidentes motivos políticos y el primero quizás por éstos o por falta de interés en el puesto****. Aparte de estas especiales circunstancias, no era desde luego frecuente apartar a un Agente Fiscal de su puesto por motivos profesionales -incumplimiento de sus obligaciones o incapacidad- o políticos, siendo los pocos casos, como vemos, absolutamente excepcionales.

Renuncias voluntarias también hubo varias, como la de Argumosa**** en 1808 o la de don Francisco Javier Vinuesa**** en 1819. Implicaban la renuncia a todo derecho de jubilación u de otro tipo y dejaban vacante una

****. Se dio además el detalle curioso ya mencionado de que Alfaro tuvo que someterse a purificación tras el Trienio Constitucional, para seguir cobrando su pensión (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm.3).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.945, expte. núm. 2. Lo cierto es que Fernández San Miguel solicitó más tarde que se le acreditase el sueldo como Agente Fiscal cesante del Supremo Tribunal.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, expte. núm. 46.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972, expte. núm. 13.

plaza en propiedad en el Consejo. A estas renunciaciones podríamos asimilar también los ascensos profesionales, muy diversos y orientados hacia otros órganos como la Cámara de Castilla, Sala de Alcaldes, una Audiencia o Chancillería. El ascenso no solía ser tanto por el órgano al que se pasaba, sino por desempeñar una categoría profesional superior a la de Agente Fiscal -Oidor de Audiencia Fiscal de la Sala o Alcalde de Corte, por ejemplo-. Hemos mencionado también algún caso de ascenso a otro órgano como la Cámara de Castilla, conservando plaza de Agente Fiscal''''.

Tras el fallecimiento de algún Agente Fiscal en ejercicio, el Consejo solicitaba mediante oficio la entrega de expedientes y papeles que el fallecido pudiera tener en su poder''''.

También estaba prevista una pensión para las viudas y huérfanos de los Agentes Fiscales. Su situación mejoró sensiblemente con la creación de los Montepíos por Decreto de Carlos III de 12 de enero de 1763. Entonces les estaba asignada la cantidad de 4.000 reales al año (136.000 maravedís anuales)''''', al igual que a todos los Agentes Fiscales de los Supremos Consejos''''.

'''''. Este fue el caso de don Mateo Zendoquis, durante el periodo de ocupación francesa (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, expediente núm. 46).

'''''. El legajo 3.133 núm. 29 de la Sala de Gobierno del Consejo recoge una colección de legajos con expedientes y papeles entregados por viudas de Agentes Fiscales y Relatores.

'''''. En el A.H.N., Consejos, Hacienda, legajos 530 núm. 5 y 528 núm. 31 se conservan respectivamente los expedientes completos formados tras el fallecimiento de los Agentes Fiscales del Consejo de Castilla don Pedro Alcántara García y don Juan García Recerra.

'''''. Libro IV, Título II, Ley XV de la Novísima Recopilación.

ARCHIVEROS DEL CONSEJO

1. Introducción

Al hablar de archiveros del Archivo del Consejo se incluye en esta voz todos los oficiales que trabajaban en esta importante Oficina del Consejo. Sin embargo, archivero propiamente dicho, en sentido estricto, era un subalterno cualificado, Jefe de la Oficina del Archivo, dependiente directamente de un Ministro del Consejo, el llamado Superintendente del Archivo.

Orgánicamente, el Archivo contaba también con un equipo de oficiales asignados a esta Oficina, dependientes del archivero.

2. EL SUPERINTENDENTE DEL ARCHIVO

a) Designación

"Los Señores Presidentes o Gobernadores del Consejo tienen la regalía de nombrar un Señor Ministro, a cuyo cargo esté la guarda y custodia de los papeles del Archivo, y el disponer se coloque con buen método y separación de asuntos y negocios"".

Esta es la figura del Ministro Superintendente del Consejo, responsable máximo del funcionamiento de esta Oficina, cuyo cargo iba siempre unido por Comisión a un Consejero, aunque sin emolumentos especiales por ello. Era por tanto un Ministro protector del Archivo, del que dependían directamente una serie de subalternos del Consejo: el Archivero y sus oficiales.

El Superintendente del Consejo era nombrado por el Presidente o Gobernador del Consejo. Sin embargo, en los últimos años del siglo XVIII dejó de practicarse esta costumbre. El Marqués de Hinojosa fue designado directamente por el Rey en el año 1796, a consulta del Gobernador del Consejo. Igualmente, en 1804 fue nombrado para el cargo don Ignacio Cortabarría, quien lo seguiría ostentando hasta bien entrado el reinado de Fernando VII"".

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., Capítulo LXVII, págs. 685 y 686.

"". El 12 de marzo de 1804 el Rey nombraba a don Antonio Ignacio de Cortabarría para el cargo de Superintendente del Archivo, sustituyendo al recién

Sin embargo, el 15 de febrero de 1818 el Duque del Infantado, a la sazón Presidente del Consejo, consultaba al Rey sobre la perduración de esta regalia"". Fernando VII confirmó en este derecho a Infantado, pero sólo mientras el Duque fuera Presidente del Consejo. Por la citada regalia podría nombrar a su arbitrio para esta Comisión al Ministro que juzgara más capaz, "sin que sirviera de regla en lo sucesivo"".

En aquella ocasión, Infantado designó al Ministro Torres-Cónsul para suceder a Cortabarría en la plaza de Superintendente del Archivo"". Suprimido el Consejo en 1820, Torres-Cónsul continuó sin embargo como Superintendente del Archivo del Consejo, conservando las

fallecido Marqués de Hinojosa. Cortabarría desempeñaría este encargo hasta el año 1818. (A.H.N., Consejos, Archivo Antigo del Consejo de Castilla, legajo 17.704, fol. 24).

"". El 15 de febrero de 1818, el Presidente Duque del Infantado exponía a S.M. lo siguiente: " ...Sin embargo de ello, he observado alterado este orden pues que así don Ignacio de Cortabarría como su antecesor el Marqués de Hinojosa fueron nombrados sucesivamente por S.M. en los años 1796 y 1804 a consulta de los Señores Gobernadores del Consejo que eran a la sazón, según los antecedentes que se hallan en la Secretaría de la Presidencia, pero sin que conste de ellos el origen de la novedad. (...) Dudoso de tal estado y deseando saber la voluntad de S.M. en esta parte para cumplirla con exactitud, espero que V.E. se servirá hacérselo presente para que se digne prevenirme si he de consultarle Ministro para esta Comisión conforme se observó en los últimos tiempos o si en uso de las facultades que dice Salazar corresponderme como Presidente del Consejo deberé proceder al nombramiento de Ministro que sirva dicha Comisión de Superintendente del Archivo del Consejo". (A.H.N., Consejos, Archivo Antigo del Consejo de Castilla, legajo 17.704).

"". De esta manera, aquella antigua regalia de los Presidentes resultaba definitivamente abolida, y sólo permanecería temporalmente en la persona del Duque del Infantado, mientras ostentase la Presidencia, "en demostración del aprecio que le tiene". (A.H.N., Consejos, Archivo Antigo del Consejo de Castilla, legajo 17.704).

"". El Ministro del Consejo don Manuel Torres-Cónsul fue Superintendente del Archivo desde el 2 de febrero de 1818 hasta 1824. Accedió al puesto tras la muerte del Superintendente Cortabarría. (A.H.N., Consejos, Archivo Antigo del Consejo de Castilla, legajo 17.704, fols. 26 y 27).

llaves de la Oficina"". Desempeñó este destino hasta 1824, año en que fue jubilado. El nuevo Gobernador del Consejo -ya no era Infantado sino don Ignacio Martínez de Villela- propuso al Rey una terna para cubrir la vacante"". El Rey nombró al propuesto en primer lugar, don José Cabanilles.

Con la definitiva extinción del Consejo en 1834 desaparecía también la figura de Ministro Superintendente del Consejo. Sin embargo, por Real Orden de 24 de diciembre de 1836 quedaban los Archivos de los Consejos suprimidos bajo la inmediata inspección y dependencia del Tribunal Supremo de Justicia, "a cuyo celo y prudencia dejó la Reina Gobernadora el designar uno de los Ministros que en calidad de Comisionado especial cuidase de la buena conservación y arreglo del Archivo"". Este Comisionado especial del Tribunal Supremo de Justicia substituyó definitivamente a la figura de Superintendente del Archivo del Consejo.

"". Intervino personalmente en las salidas de los documentos que por las Secretarías de Estado se iban solicitando, según informaba don Bartolomé Muñoz el 30 de mayo de 1823.

"". Terna de Ministros del Consejo que fue propuesta al Rey el 19 de marzo de 1824: a) en primer lugar: don José Cabanilles; b) en segundo lugar: don Tadeo Ignacio Gil; c) y en tercer lugar: don Gabriel Suárez Valdés. (A.H.N., Consejos, Archivo Antiquo del Consejo, legajo 17.704).

"". Parece ser que inicialmente el Tribunal Supremo de Justicia eligió por Comisionado especial al Decano del mismo don Ramón Giraldo, y que más adelante se designó al Ministro don Joaquín Sedano. Una de sus primeras medidas fue el tomar noticias y recoger los papeles que se hallaban dispersos en diversos sitios. (A.H.N., Sección Códices, Libros 796B y 797).

b) Competencias

A su cargo estaba "la guarda y custodia de los Papeles del Archivo, y el disponer se coloquen con buen método y separación de asuntos y negocios"****.

Entre otras funciones, el Superintendente del Archivo debía velar por su orden, limpieza, estado óptimo de los documentos y buen funcionamiento. Debía igualmente autorizar toda salida de documentos. Estaba también obligado a informar periódicamente al Consejo de las novedades de su oficina.

El Superintendente debía establecer los medios y las reglas más apropiadas para el gobierno y organización de la Oficina****. A él correspondía también la designación de los oficiales subalternos****.

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., Capítulo 65, pág. 685.

****. Martínez Bara resume estas reglas en las siguientes:

1. Prohibición de sacar del Archivo originales y que las copias autorizadas debían ir precedidas de licencia expresa del Consejo, sin que bastase la del Presidente o Gobernador del mismo, ni la del Superintendente; 2. Si ocurriese al Presidente o Gobernador del Consejo o a los Fiscales un caso tan ejecutivo que les fuera forzoso sacar algún papel original, todos, sin excepción posible, debían dejar recibo en forma, con expresión por menor en un libro de conocimientos existente para este fin; 3. Que fuera de cargo del Superintendente, cuando muriera algún Ministro del Consejo, revisar dicho libro de conocimientos y, si resultase por el mismo tener en su poder algunos papeles del Archivo, ponerlo en conocimiento del Presidente o Gobernador y pasar a recogerlos. (MARTINEZ BARA, J.A., "Visicitudes del Archivo del Consejo de Castilla en los siglos XVII y XIX", págs. 363 y 364).

****. Don Francisco de la Mata Linares, Superintendente del Archivo en 1763, reiteraba el 29 de octubre de aquel año los medios y las reglas más conformes con los que se había

c) Retribución

Como ya hemos apuntado, esta Comisión no llevaba aneja ningún salario ni complemento.

de gobernar aquél, y recordaba tanto la facultad que competía al Gobernador del Consejo de nombrar Archivero como la que correspondía al Superintendente de elegir los oficiales.

3. EL ARCHIVERO

a) Designación

El archivero, según Martínez de Salazar, era el Jefe de la Oficina del Archivo²⁰⁰².

El 28 de enero de 1765 se dispuso que en lo sucesivo no pudiera ser nombrado para archivero del Consejo ninguno de los Escribanos de Cámara y de Gobierno ni los oficiales de dichas Escribanías, si no era dejándolas para entrar en las plazas del Archivo.

En 1808 era archivero del Consejo don Leandro Gil López, que presentará su dimisión en 1814. En realidad, durante todo el periodo de invasión francesa Gil López no acudió a la atención de la oficina y el propio Gobierno intruso excluyó de plantilla a todos los empleados del Archivo²⁰⁰³.

²⁰⁰². "También eligen los Señores Presidentes o Gobernadores la persona a quien con el nombre de Archivero se le da este encargo, bajo la dirección del señor Ministro a quien se encomienda el Archivo..." (MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., Capítulo LXVII, pág. 685).

²⁰⁰³. El Escribano de Gobierno más antiguo del Consejo, don Bartolomé Muñoz de Torres, quedaría durante este periodo al frente del Archivo del Consejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.026 núm. 47 y 3.975 núm. 45). Una consulta de oficio conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid menciona que el Escribano de Cámara del Consejo don Manuel de Carranza, que fue uno de los que

A partir de 1814 y hasta la definitiva supresión del Consejo en 1834 quedó vacante el empleo de archivero. Sus funciones eran realizadas por el oficial mayor don Miguel Jerónimo Ramírez, a quien en algún documento oficial se llega a denominar archivero^{****}. Sin embargo, en la estructura orgánica del Consejo se contemplaba la existencia de este puesto de archivero y la figura aparecía dotada en todos los presupuestos del Consejo posteriores a 1823^{****}.

En 1834 es suprimido definitivamente el Consejo de Castilla y sustituido por el Consejo Real de España e Indias^{****}. El Reglamento de este nuevo Consejo, de 20 de diciembre de aquel año^{****}, encomendaba al archivero del Consejo Real la custodia de los Archivos de los Consejos suprimidos y de las dependencias o comisiones del Antiguo Consejo Real de Castilla^{****}.

Sabemos que quedó un funcionario con el título de Archivero de los Consejos Suprimidos, cuyo lugar de trabajo fundamental se hallaba en el Palacio de los Consejos y quizás en el Palacio Real^{****}.

despacharon en la Junta de Reposición, tenía por uno de sus cometidos la conservación del Archivo de los papeles del Consejo (A.H.N., Consejos, legajo 6.081, Consulta de Oficio de 22 de diciembre de 1817).

^{****}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46; lista de subalternos del Consejo el 21 de julio de 1814; y Archivo Antiguo del Consejo de Castilla, legajo 17.704.

^{****}. Así, por ejemplo, el Presupuesto del Consejo para 1829 contemplaba la existencia de un archivero y tres oficiales de archivo (A.H.N., Consejos, legajo 3.698 núm. 6). El motivo de que no se cubriera este encargo era que estaba pendiente desde 1790 el expediente sobre arreglo del Archivo y aumento de dotaciones del personal (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11).

^{****}. Cfr. R.D. de 24 de marzo de 1834, en "Gaceta de Madrid" de 25 de marzo; y en NIEVA, J.M. "~~Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su Augusta Madre la Reina Gobernadora~~", núm. 19, Madrid 1835, págs. 163-166.

^{****}. Arts. 46, 54 y 55 de este Reglamento.

^{****}. ARVIZU y GALARRAGA, Fernando, "~~El Consejo Real de España e Indias~~", Actas del III S.H.A., pág. 404.

^{****}. A.G.S., Sección Consejo Real de España e Indias, legajo núm. 33. En este legajo se contienen, entre otros, expedientes sobre sueldos de Archiveros y documentos

En 1836 la Reina Gobernadora nombraba Archivero y un oficial para la conservación del Archivo del extinguido Consejo de Castilla^{***}. El designado fue don Santiago Cañizares, a quien puso bajo la inmediata inspección y dependencia del Supremo Tribunal de Justicia^{***}. En 1845 don Santiago Cañizares continuaba todavía al frente de este Archivo^{***}.

b) Competencias

La primera misión del archivero era la de hacer inventarios e índice de todos las disposiciones y expedientes que entraban en el Archivo, para su utilización por el propio Consejo.

Era misión suya también asegurarse que las resoluciones y disposiciones de gobierno que se publicasen, los pleitos, expedientes y demás papeles llegados al Consejo pasaran a su debido tiempo al Archivo del supremo Tribunal. Igualmente era responsable del préstamo y recuperación de

relativos a la correspondencia de los Archivos de los Consejos Suprimidos. En 1835 se quejaba el archivero de estar trabajando solo y solicitaba dos empleados con experiencia.

^{***}. Por Real Orden de 18 de noviembre de 1836. (A.H.N., Sección Códices, libros 796 B y 797: "Papeles referentes a la conservación del Archivo del suprimido Consejo de Castilla y su Presidencia. Años 1837-1853").

^{***}. Por Real Orden de 24 de diciembre de 1836 (A.H.N., Consejos, Archivo Antigo del Consejo de Castilla, legajo 17.704; y Sección Códices, libros 796 B y 797, "Papeles referentes a la conservación...". Sabemos que en 1837 el Comisionado don Joaquín Sedano hizo entrega a don Santiago Cañizares del Archivo de la Presidencia de Castilla, que estaba dentro del local de la Escribanía de Cámara de Indias (A.H.N., Códices, libros 796B y 797).

^{***}. MARTINEZ BARA, J.A., op. cit., pág. 376. Cañizares era entonces archivero jubilado de la Secretaría de Despacho de Estado (A.G.S., Sección Consejo Real de España e Indias, legajo núm. 33).

los documentos facilitados por el Archivo"".

En el Archivo del Consejo Real entraban diariamente documentos de muy diverso género. El archivero debía mandar clasificar e inventariar cada documento que ingresaba en su Oficina, según orden de materias y cronológico. Era finalmente el responsable de su custodia y pronta localización. Por ello también era el único autorizado para la expedición de los correspondientes recibos de toda nueva entrada de documentos en el Archivo.

El archivero tenía también que organizar un eficaz servicio de préstamo de sus fondos: debía llevar un control eficaz de toda salida de documentos del Archivo. Ningún documento podía salir sin una orden del Consejo -concretamente, firmada por el Ministro Superintendente- y sin su correspondiente registro en el Libro de Conocimiento existente al efecto"". La práctica demostraba que el descuido de los oficiales había permitido que se perdiera la

""". "El Archivero anualmente debe hacer formal inventario y índice, con expresión de los Decretos, Ordenes, Consultas, Pragmáticas, Autos acordados, Reales resoluciones y Providencias del Consejo, así por lo respectivo a los Reinos de Castilla, como lo tocante a la Corona de Aragón, Valencia y Cataluña, y coordinarlos con separación, para que con puntualidad se puedan dar las noticias que se necesiten y pidan por el Consejo. (...) Debe asistir el Archivero diariamente al Consejo y estar pronto para recibir los Decretos, consultas y Providencias que se publicasen, y ponerlos en el Archivo, como para manifestar los documentos que se le pidan y fuesen necesarios para resolver los casos y dudas que se ofreciesen en el Consejo. (...) Está mandado que el Archivero no entregue papeles del Archivo a ningún Señor Ministro, ni a otra persona, sin expresa orden y mandato del Señor Ministro a quien esté encomendado el mismo Archivo; y que cuando los entregue hayan de dejar recibo en el Libro de Conocimientos que ha de tener en él, siendo de su cargo volverlos a recoger; y falleciendo alguno de los Señores Ministros, en cuyo poder constase parar algunos papeles, debe pasar el Archivero a recogerlos, valiéndose de los medios convenientes para conseguirlo; y si se ofreciese dificultad para la entrega, ha de dar cuenta al Consejo para que se tome providencia". (MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág 686; Auto acordado 68, Título IV, Libro II, Novísima Recopilación).

""". Esta medida podía granjearle fácilmente la enemistad de Ministros que esperaban un trato de favor por su parte, como nos lo relaciona el Superintendente Certabarría en su Reglamento sobre Arreglo del Archivo del Consejo, fechado en 1806. (A.H.N., Consejos, Archivo Antiquo del Consejo de Castilla, expte. "Reglamento que convendrá adoptarse para el mejor arreglo del Archivo del Consejo y de sus individuos").

pista a muchos documentos de los que salían del Archivo. El archivero era entonces responsable de la localización y reclamación de estos documentos, incluso en las visitas a las casas mortuorias de los Ministros fallecidos. En estas visitas el archivero acompañaba al Ministro del Consejo designado y se hacía cargo personalmente de los papeles recogidos.

En una resolución del Consejo de 28 de enero de 1765 se estableció que en lo sucesivo archivero y oficiales debían trabajar con la mayor aplicación en las operaciones que el Superintendente les señalase, prefiriendo las más precisas y urgentes"".

En tercer lugar hemos visto que el archivero debía velar igualmente por la entrada de todos los documentos, impresos y libros que deberían formar parte del Archivo. Así, completas colecciones legislativas, tramitados los expedientes y concluidos por las oficinas del Consejo, los originales de los Reales Decretos y de las Ordenes, así como los manuales básicos de consulta debían hallarse en los estantes de esta oficina.

Era suya, finalmente, la función de informar al Superintendente y al Consejo de Castilla de las novedades que ocurriesen en el Archivo y de las mejoras que en él se pudieran introducir.

En cuanto al horario de trabajo, el archivero y sus oficiales debían asistir al Consejo todos los días laborables desde que entraba el Consejo a la audiencia hasta una hora después de la salida de aquél.

""". Especialmente la de concluir el nuevo índice o adición al anterior inventario hasta que estuviese perfecto. De él debía haber dos copias para que, aunque fuera preciso extraer una de ellas del Archivo, quedase la otra siempre en él (MARTINEZ BARRA, J.A., op. cit., pág. 364).

c) Retribución

Según el auto 88, título IV, libro II de la Novísima Recopilación, el archivero tenía asignado un salario de 250 ducados de vellón anuales para sí y para tener un oficial que le ayudase. El 21 de julio de 1798 se aprobó un aumento de sueldos que equiparaba al Archivero del Consejo con los archiveros de los Consejos de Indias, Ordenes y Hacienda, y a la vez, con los honores concedidos a los archiveros de las Secretarías de Estado^{***}. De esta manera, en 1798 el sueldo del archivero era ya de 600 ducados anuales (6.600 reales), que no se satisfacían por Penas de Cámara porque los cobraba por Tesorería Mayor.

Un informe de 1826 mantenía el sueldo de 6.600 reales para el archivero, aunque por estar vacante el destino quedaban sin abonar^{***}.

Aparte del sueldo, tanto al archivero como a sus oficiales se les acostumbraba a librar por Navidad una ayuda de costa que por aquella fecha y todavía en 1814 era de 400 reales a cada uno^{***}. Es probable también que en las certificaciones que le mandase dar el Consejo a instancia de parte pudieran también llevar derechos^{***}.

^{***}. Las medidas fueron aprobadas por el Decano Sr. Vilches en tal fecha. Previamente había informado la Contaduría y el Subdelegado de Penas de Cámara.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.699 expediente núm. 6.

^{***}. A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo de Castilla, legajo 17.704.

^{***}. A.G.S., Tribunal Supremo de España e Indias, legajo 33, expte. núm. 1.

4. OFICIALES DEL ARCHIVO

a) número y su designación

El archivero del Consejo contaba a su servicio con una serie de oficiales o personal subalterno del Archivo, cuya designación era prerrogativa del Ministro Superintendente del Archivo****.

En 1808, la plantilla constaba de dos oficiales y un oficial agregado****. El oficial primero era don Miguel Jerónimo Ramírez; el oficial segundo don Bonifacio Gutiérrez; el oficial agregado, don Simón de Navedo Herrera, era un anciano de 70 años ocupado desde 1775 en la saca de copias de órdenes y otros documentos.

Establecidas las llamadas Juntas de Contenciosas por el Decreto de 6 de febrero de 1809, los subalternos del extinguido Consejo de Castilla pasaron a servir en aquéllas como lo hacían en el Consejo de Castilla. Sin embargo, de los dependientes destinados en el Archivo, sólo acudió a su puesto durante el periodo de ocupación francesa el oficial más antiguo, don Miguel Jerónimo

****. Así lo reiteraba el 29 de octubre de 1763 el entonces Superintendente del Archivo del Consejo, don Francisco de la Mata Linares.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46. Esto era conforme a lo establecido en el auto del Consejo de 28 de enero de 1765 (A.H.N., Consejos, legajo 17.704, Informe Cortabarría).

Ramírez, que servía en el Archivo desde el 6 de mayo de 1790. Tras la reducción de empleados por el Gobierno intruso, fueron excluidos de la plantilla todos los oficiales****.

Con el restablecimiento del Consejo en 1814 se equiparó la plantilla del Archivo del Consejo a la que tenía en 1808. Ramírez continuaba en su puesto****, rehabilitado en su destino por Real Orden de 30 de marzo de 1815, tras haber sido sometido a purificación****.

También el oficial segundo don Bonifacio Gutiérrez fue rehabilitado y continuó en su destino hasta 1820. Por su parte, el oficial agregado don Simón Navedo y Herrera había fallecido en octubre de 1812. En 1814 dimitía el archivero del Consejo don Leandro Gil López y se quedaba como archivero en funciones el oficial mayor Ramírez, aunque no con el título de archivero sino el de oficial mayor del Archivo****.

Durante el Trienio constitucional continuó sólo Ramírez como único subalterno del Archivo y dependiendo del Superintendente Torres-Cónsul****. Ramírez era denominado todavía con el título de oficial mayor del Archivo.

A partir de 1824 encontraremos sólo a Ramírez

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, expte. núm. 47. Por Orden del Gobierno intruso se entregó las llaves del Archivo a don Bartolomé Muñoz, Escribano de Gobierno. El Gobierno intruso redujo el número de empleados y Ramírez quedó excluido, en situación de franca miseria. Un informe del Consejo de 1814 proponía la continuación en sus funciones del Oficial más antiguo del Archivo, don Miguel Ramírez, que hemos visto fue el único de los dependientes del Archivo que continuó en su puesto durante la invasión. Según lo propuesto, Ramírez quedaba al cuidado del Archivo y de sus llaves.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, expte. núm. 47.

****. Purificación realizada de acuerdo con la Real Orden del Consejo pleno de 19 de julio de 1814.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, expte. núm. 46; Archivo Antiguo del Consejo de Castilla, legajo 17.704.

****. Así informará don Bartolomé Muñoz el 30 de mayo de 1823.

como único oficial del Archivo""'. La situación continuó así hasta la definitiva extinción del Consejo en 1834.

b) Competencias

Los cometidos de los oficiales del Archivo abarcaban todos los aspectos relativos al buen orden y funcionamiento de esta Oficina. Debían seguir fielmente las indicaciones establecidas por el Consejo y por el archivero.

La labor diaria de esta Oficina recaía en estos empleados subalternos y por tanto, todos los aspectos organizativos y del servicio que hemos visto eran propios del Archivo.

Parece que los oficiales podían también expedir certificaciones en algunos casos. Igualmente sabemos que les estaba vedado el señalamiento o apuntamiento de los documentos, defecto en el que caerían con alguna frecuencia. Eran los encargados de la búsqueda y clasificación de los documentos, llevaban Libros de Conocimientos. También les estaban encomendados la limpieza material de los estantes y el buen estado de los legajos.

Entre la documentación del Consejo existen múltiples referencias al desorden de los Archivos del Consejo, debido en buena parte al descuido de estos oficiales en el ejercicio de su delicada misión.

Su horario de trabajo era idéntico al del archivero. Es decir, debían asistir al Consejo todos los días de trabajo, desde que entraba éste hasta una hora después de su salida.

""'. En el Presupuesto del Consejo para 1825 se añadía la siguiente nota al capítulo Archivo del Consejo: "En la actualidad sólo existe un oficial, por hallarse pendiente el arreglo de dicho Archivo" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expte. núm. 6).

c) Retribución

El 28 de enero de 1765 se dispuso que en lo sucesivo el sueldo de un oficial del Archivo del Consejo de Castilla sería de 300 ducados anuales a cada uno, que sería pagadero por el caudal de gastos de Justicia y Penas de Cámara. En 1798 se les subió al primer oficial a 600 ducados y al segundo a 500 ducados anuales. El oficial agregado don Simón de Navedo fue destinado al Archivo con un sueldo de 600 ducados anuales. Todo se seguía pagando por gastos de Justicia.

En el Presupuesto General de los Sueldos y Gastos del Consejo para 1818 se indicaba que los 3.300 reales del sueldo de los oficiales primero y segundo del Consejo se pagaban por el Fondo de Penas de Cámara****.

Por Real Orden de 30 de junio de 1820 se dispuso que se abonasen los sueldos de los oficiales del Archivo por Tesorería Mayor. El 23 de abril del mismo año la Junta del Montepío de Oficinas reclamaba al Consejo el ingreso de las cantidades descontadas de los sueldos de algunos oficiales del Consejo y todavía no ingresadas. Entre ellas se menciona expresamente cantidades descontadas a los oficiales del Archivo del Consejo, que todavía no habían sido ingresadas.

En 1824 continuaba cobrando Ramírez 300 ducados anuales (3.300 reales) por Tesorería Mayor****. El Presupuesto del Consejo para el año 1829, preveía una dotación de 9.900 ducados anuales para los tres oficiales con que debía contar el Consejo. Continuaba cubierto sólo un destino, cuyo sueldo era de 3.300 ducados anuales, cantidad

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333, expte. núm. 11.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781, expte. núm. 11. Un escrito del Superintendente del Consejo Cabanilles informaba que desde 1790 se hallaba pendiente el expediente sobre arreglo del Archivo y aumento de dotaciones del personal. Cabanilles, a petición del Presidente del Consejo, dictaminaba "que ni puede suprimirse el empleo de Ramírez ni rebajarse el sueldo".

mantenida hasta la definitiva extinción del Consejo en 1834****.

Por otro lado, tenemos noticias de que por Navidad había costumbre de librarles una ayuda de costa que en 1814 era de 400 reales a cada uno****. También parece probable que en las certificaciones que les mandase dar el Consejo a instancia de parte pudiesen llevar también derechos****.

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, núm. 6.

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 17.704.

****. A.G.S., Tribunal Supremo de España e Indias, legajo 33, expediente núm. 1.

PORTEROS DEL CONSEJO

1. Introducción

Cada año, el Consejo elegía entre los veintiséis porteros de la Corte, los doce porteros del Consejo de Castilla. Eran los encargados de vigilar el buen orden del Palacio, de acompañar a los magistrados en gestiones oficiales fuera del recinto del Consejo, o cuando se desplazaban en corporación, y de ejecutar sus encargos o comisiones"". Su jefe era el portero de estrados, al que estaba encomendada la dirección del cuerpo, la custodia del mobiliario del Consejo y a la vez ejecutaba las funciones de ecónomo del Consejo.

Cuidaban de no dejar pasar a nadie sin la debida acreditación tanto en las Salas del Consejo como en las Escribanías, e igualmente atendían las Salas o Cámaras del Consejo que les estaban asignadas"".

Antiguamente, los porteros de Cámara del Consejo -éste es su nombre- servían en el Palacio Real y pertenecían al Cuerpo de Porteros de Cámara del Rey. Asistían a actos públicos, juramentos reales, Cortes y en

"".. DESDEVISES, "Institutions...", págs. 84 y 85.

"".. FAYARD, J.: "Les membres du Conseil de Castille à l'époque moderne", pag. 28.

los Consejos, bajo las órdenes del Mayordomo Mayor de Palacio^{***}. Desde el traslado del Consejo a un palacio separado de la morada del Rey, el Cuerpo de Porteros por singular privilegio continuó vinculado a la Real Casa, como más adelante tendremos ocasión de ver con detenimiento.

En este capítulo de los porteros del Consejo estudiaremos cuatro figuras: los porteros de Cámara, el portero de estrados, el portero habilitado para el cobro de sueldos de los subalternos del Consejo y el portero de la Escribanía de Gobierno. Aparte mencionaremos también a otro empleado del Consejo de Castilla, el último en la graduación jerárquica: los mozos de estrados, así como un peculiar encargo adicional que correspondía a uno de los porteros del Consejo: el habilitado para la cobranza de los salarios de los demás subalternos del Supremo Tribunal.

^{***}. MARTINEZ DE SALAZAR, op. cit., págs. 703 y 704. En la Real Cédula de 12 de julio de 1662 se expresaba que en aquella época había en este cuerpo 50 porteros, de los que 12 servían en el Consejo Real y dos en la Saleta de Señores Alcaldes de Corte. En 1745 el cuerpo de Porteros estaba reducido a 28, de los que 16 servían en el Consejo, "aunque estaba mandado que en el Consejo sólo sirviesen doce porteros" (op.cit. pág.706).

2. PORTEROS DE CAMARA

1) Número y su designación

La clase de Portereros de Cámara destinados a la servidumbre de los cuartos del Rey, Capilla y Consejo se componía de 26 plazas****. Por la Ley**** estaba establecido que el número de portereros del Consejo debía ser un máximo de doce, "como los ha habido siempre". Según lo mandado por auto**** del Consejo de 10 de enero de 1783, la designación de portereros de Cámara para la servidumbre del Consejo se hacía por el Mayordomo Mayor de S.M. y por el Presidente o Gobernador del Consejo****. Anualmente el Sr.

****. Sin contar al portero de estrados.

****. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXIII, Ley I: auto acordado del Consejo de 24 de noviembre de 1621; y por resolución de don Carlos IV, a consulta del Consejo de 18 de diciembre de 1804.

****. Este expediente fue promovido a instancia del portero de estrados y de los demás de Cámara. Regulaba, entre otros aspectos, todo lo referente a obligaciones y emolumentos de los portereros de estrados y de Cámara (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13).

****. Al parecer, Fernando III el Santo concedió al Consejo el privilegio ininterrumpido de que los portereros que asistieran al Consejo fueran de su Real Servicio, alternando esta servidumbre con la de los Reales Cuartos, Cámara y Capilla. Este privilegio era exclusivo del Consejo de Castilla (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno,

Presidente y el Sr. Mayordomo Mayor distribuían la servidumbre que habían de hacer aquellos 26 porteros: éste designaba veinte y el Presidente los seis restantes^{***}. No cabía excluir individuos ni incluir a otros, sino que simplemente su misión era asignar a cada uno el destino que le parecía más a propósito, para el mejor servicio del Rey y del Consejo. El Mayordomo Mayor del Rey elegía seis porteros que servirían en el Consejo, y otros dos con destino a la Sala de Apelaciones^{***}. El nombramiento lo remitía firmado a la Contaduría y Oficio de Contralor de la Real Casa, y por aquella oficina se dirigía original al Gobernador del Consejo.

Este, por su parte, designaba sus seis porteros^{***} "que siempre le han correspondido, reeligiendo los dos que asisten en Sala primera de Gobierno, para que como prácticos en las ceremonias, instruyan a los demás". Estos nombramientos se pasaban de la Secretaría de la Presidencia a la Escribanía de Cámara de Gobierno, y por ella se daba certificación a los porteros para que percibiesen sus sueldos^{***}. Seguidamente, el Escribano de Gobierno daba a los porteros nombrados para la servidumbre del Consejo el destino que le parecía más a propósito para la buena atención del servicio^{***}. Sólo podían ser sustituidos en caso de ausencia o enfermedad, ya que la

legajo 3.148 núm. 13).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 6.074 núm. 3. En esta distribución no precedía informe del Escribano de Gobierno ni éste tenía intervención alguna en ella.

^{***}. MARTINEZ DE SALAZAR, op. cit., págs. 705 y 706. Los dos porteros destinados a la Sala de Apelaciones también servían en el Consejo, "porque no han asistido, ni asisten, de muchos años a esta parte, a la Sala de Apelaciones, y lo hacen en su lugar los porteros de la Sala de Señores Alcaldes de Corte".

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 47.

^{***}. Los dos porteros que quedan para completar los 16 que sirven en el Consejo "son los que, como queda prevenido, se mandó por Real Orden de 6 de diciembre de 1755 que sirviesen en el Consejo con los demás, por no haberse éstos comprendido en la incorporación de los doce, mandada hacer por Su Majestad en 27 de agosto de 1751" (MARTINEZ DE SALAZAR, op. cit., pág. 706).

^{***}. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13. Es lo que estaba mandado por el auto recopilado núm. 10 y el 3, tit. XXI, libro II de los acordados, y por otro proveído en 10 de enero de 1783.

clase de porteros de Cámara estaba bajo la dirección y órdenes de S.M.

Por tanto, al ser el colectivo de porteros reales un cuerpo único, un mismo portero podía servir un año en el Palacio del Rey y al año siguiente en el Consejo, si así era establecido en la distribución que se hacía a principio de cada año. En esta distribución se valoraba también las preferencias de cada portero, ya que sabemos que algunos prestaban sus servicios en el Palacio Real "por voluntad propia"****.

Para aspirar a un puesto de portero de Cámara del Consejo era frecuente la presentación de instancia al Consejo solicitando la concesión de la plaza. El Gobernador del Consejo valoraba las solicitudes presentadas y designaba al candidato elegido****.

Hemos mencionado al portero de estrados, que era el jefe de los porteros del Consejo. Este portero, distinto de los de Cámara con servicio en el Consejo, era nombrado entre los de la clase de porteros de Cámara por el Presidente o Gobernador del Consejo en virtud de una peculiar regalía. Este portero asistía habitualmente en la Sala primera de Gobierno**** y tenía a su servicio un mozo de estrados****. En un subcapítulo aparte estudiaremos esta peculiar figura. Aquí solo mencionaremos que en 1808 la "Portería de Estrados, llaves y gastos del Consejo" se

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.267 núm. 52.

****. Se puede ver un ejemplo de este tipo de solicitudes en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.666, expediente núm. 14.

****. A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 6.074, núm. 3; y también legajo 3.148 núm. 13.

****. Entre otras muchas fuentes, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11: "Presupuesto General de sueldos y Gastos del Consejo Real y sus Oficiales Subalternos para 1819". En los Reglamentos del Tribunal Supremo de Justicia de los años 1814 y 1835 el mozo de estrados queda definido como un empleado al servicio del portero mayor o más antiguo, con un sueldo de 300 ducados de vellón en 1814 y 3.300 reales en 1835, y cuyo cometido era el de realizar la compra y distribución de los utensilios necesarios al servicio del Tribunal y las Escribanías, así como su aseo, según las indicaciones recibidas del portero mayor. (Reglamento de 1814, Cap. VI, art.4; y Reglamento de 1835, Cap. VI, art.96, mencionado por MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo: 1812-1838", págs. 540 y 627)).

hallaba vacante por muerte de don Francisco de Paula Valdés****. Y al menos desde 1816 hasta la extinción definitiva del Consejo era portero de estrados don Matías Fernández Pato****.

De todos los porteros de Cámara destinados en el Consejo, uno de ellos ostentaba el título de "Decano de la clase de porteros de Cámara de S.M.", y era siempre el más antiguo de los porteros de esta clase****. Era portavoz y representante ante el Consejo de este colectivo de subalternos.

En 1808, el número de porteros de Cámara del la Real Servidumbre destinados en el Consejo era de catorce, de los que ocho eran designados por el Mayordomo Mayor y seis por el Gobernador del Consejo. En diciembre de 1808 eran trece las plazas ocupadas efectivamente****. La Junta Militar y Política que gobernaba en Madrid acordó que asistieran continuamente tres porteros del Consejo en la Casa de Correos, donde estaba aquella reunida permanentemente y tenía sus sesiones****. Los demás hacían el turno ordinario de las tres horas en la Casa de los Consejos, asistían a la Posada del Presidente y otras gestiones que se les encomendaba. También asistieron tras de ellos al Consejo todo el tiempo que duró la Permanente que por secciones se formó****.

Tras la extinción del Consejo por Napoleón en

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46. Don Francisco de Paula Valdés la sirvió por especial gracia de S.M. a consulta del Consejo, en atención a los servicios de su padre hechos en la misma portería.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.267 núm. 52; y 3.148 núm. 13.

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 12. Los porteros de la servidumbre del Consejo los días 2 y 3 de diciembre de 1808 eran: López, Sánchez, Regidor, Montiel, Fernández, Noriega, Pozo, Díaz, Espina, Ceza, Revestido, Nafría y González.

****. Se formaron turnos entre ellos, para que nunca faltase un portero en la Casa de Correos -actual sede de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid-, para que nunca faltase uno de servicio. Se relevaban cada tres horas. (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.526, expediente núm. 12).

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 12.

dicieembre de aquel año, al parecer ninguno de los porteros que tenía el Consejo de Castilla en Madrid se presentó en Sevilla****. Por este motivo, la Junta Central se vio en la necesidad de nombrar nuevos porteros de Cámara para el Consejo reunido****, que más tarde sirvieron en el de Castilla y luego, al ser extinguido éste, pasaron al Tribunal Supremo de Justicia**** y finalmente de nuevo al de Castilla, donde fueron habilitados para continuar sus cometidos****. Como resulta que aquellas cuatro plazas fueron de nueva creación****, se planteó desde la restauración del Consejo un cierto conflicto con los propietarios de las antiguas porterías del Consejo****. Como

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13. El legajo 6.074 núm. 3 de la misma sección afirma probablemente por confusión que se presentaron cuatro de aquellos porteros.

****. En el Real Decreto de 25 de junio de 1809, por el que se creó un Consejo reunido, se mandaba entre otras cosas que hubiera cuatro porteros de Cámara, con honores y uniformes de porteros de la Real Persona. Instalado el Consejo, en consulta de 22 de julio de 1809 se propuso las personas que eran estimadas más beneméritas para servir las citadas porterías. La consulta fue publicada en el Consejo pleno de 27 de julio y acordado su cumplimiento (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13).

****. El Reglamento de 1914 del Tribunal Supremo de Justicia establecía en cinco el número de los porteros de este Tribunal. (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 538).

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13. Al parecer, los porteros del Tribunal Supremo de Justicia se presentaron en una audiencia a S.M. solicitando se les nombrase porteros de Cámara efectivos. El Rey les contestó que eran plazas que tenían sus dueños y que sus propiedades debían ser respetadas. Debían por tanto llegar a un acuerdo con los propietarios, pues tal gracia no podía serles concedida.

****. Fueron creadas cuatro porterías con declaración expresa de ser estas plazas de nueva creación, al insistirse en consulta de dicho Consejo reunido. En consecuencia, se les expidieron sus Reales Títulos por los respectivos Gobiernos en nombre de Su Majestad (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13).

****. "Los dueños de las porterías vacantes en virtud de las facultades omnímodas que les concede su dominio, ni quieren contratar con los que exponen ni en justicia se les puede obligar a ello, ni reconocen otra ley que la mayor utilidad que saquen a sus plazas, haciendo arrendamientos ventajosos para ellos, pero muchas veces inadmisibles para

consecuencia de ello, en 1815 tres de estos porteros de Cámara nombrados por la Junta Central fueron excluidos por el Consejo en el reparto de las Salas, después de llevar varios meses sirviendo al Consejo en virtud de sus antiguos nombramientos y títulos. Tras su reclamación, fue considerado su derecho"". Una consulta de oficio de 28 de agosto de 1817 nos informa que por aquella fecha Quirico Díaz y Manuel Alzada estaban sirviendo su clase de supernumerarios con las mismas prerrogativas, derechos y

los que las sirven" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13).

"". Benito Corona, Querico Díaz y Manuel de Alzada solicitaron les fueran reconocidos los títulos expedidos por la Junta Central y los méritos contraídos. Estudiado el caso, el Fiscal propuso que de las cinco plazas de portero de Cámara entonces vacantes, tres fueran para ellos, "por su fidelidad al Consejo en Sevilla, Cádiz y ahora aquí, y que no sean servidos por sus propietarios, conviniéndose con éstos el tanto con que deben contribuir" (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.074 núm. 3). Los tres porteros excluidos habían presentado queja al Juez de Ministros contra el Escribano de Cámara y de Gobierno don Bartolomé Muñoz, por haberles separado del ejercicio de sus plazas por "por su sola voluntariedad". El Juez de Ministros informó que estos subalternos no podían quedar sin destino y que el Consejo debía evitarlo: en las cinco plazas vacantes deberían entrar con preferencia a otros, caso de que no se sirvan por los propietarios. Así fue resuelto por el Consejo. Los porteros, por su parte, pidieron seguir sirviendo las plazas en clase de supernumerarios, bien fuera de por vida o hasta que vacasen alguna de las porterías de las que pertenecían al Real Patrimonio (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148, núm. 13). A consulta del Consejo Pleno de 16 de febrero de 1815 se sirvió el Rey resolver que Benito González Coronas, Quirico Díaz y Manuel Alzada entrasen a servir con preferencia a otros en las cinco plazas de porteros que se hallaban vacantes en dicho Supremo Tribunal, caso de que no se sirviesen por los propietarios. Como no se ponían de acuerdo sobre la cuota que habían de satisfacer, por Real Orden se decidió que la señalase el Consejo, "sin perjuicio del derecho de los propietarios de arrendar en lo sucesivo sus oficios por pactos convencionales". Por ejemplo, la portería de la que es propietaria la Madre Abadesa de la Casa Beaterio de San José, tenía aneja una carga de una Misa diaria con la limosna de seis reales y el resto para el tenente: la propietaria se conformaba, siempre que pagase la mitad de la dotación que entonces disfrutaba cada uno de los porteros de Cámara o de la que en lo sucesivo disfrutasen (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13).

sueldos que todos los otros porteros de Cámara****.

Algunas de las porterías de Cámara destinadas a la servidumbre de los cuartos de Rey, Capilla y Consejo estaban enajenadas de la Corona. Particulares eran propietarios de tales plazas y podían proveer a su designación en caso de vacante, bien sirviéndola personalmente o bien arrendándola, al estilo de otros destinos enajenados****. El propietario de una portería otorgaba escritura de arrendamiento de ésta por un precio convenido. Una vez concluida la escritura, ya no tenía facultades para innovar este arrendamiento en favor de terceros****.

En caso de vacante, el puesto era desempeñado, por mandato del Consejo, por los que existían en activo, entre tanto entraban a servirlos los propietarios o tenientes. Tanto éstos como aquéllos los servían en virtud de albalá que les expedía el Rey a través del Mayordomo Mayor y Contralor y Grefier de su Real Casa. En virtud de este albalá y del juramento que hacían ante el Mayordomo Mayor y en el Consejo, entraban a servir sus obligaciones según el destino encomendado****. El título les era expedido a su favor por la Real Cámara.

Existía también la figura de portero supernumerario. Era una plaza de portero fuera del número establecido y por tanto no lo era de las plazas efectivas existentes en el Consejo. Sin embargo, el portero supernumerario debía ejercer función de portero con los correspondientes emolumentos, a la espera de pasar a ser numerario en cuanto hubiese una vacante entre las plazas de número. Cabía también la posibilidad de continuar en la situación de supernumerario de por vida, parece que por

****. A.H.N., Consejos, legajo 6.080, Consulta de Oficio de 28 de agosto de 1817.

****. Antiguamente tenía señalado el Consejo que los porteros pagasen tres reales diarios por el arrendamiento de cada portería. Sabemos que en 1815 una propietaria lo tenía arrendado en 7 reales diarios; y otra ya mencionada con una Misa diaria con la limosna de seis reales (A.H.N., Consejos. Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13).

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13. Este expediente menciona los nombres de algunos propietarios de estas porterías: doña Florencia Mojón, viuda de don Antonio Fernández, portero que fue de Cámara de S.M.; don Santiago Ruiz Alvarez; don José Galiano; doña María Fernández; don Raimundo Manuel de Quirós.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.074 núm. 3.

especial concesión del Consejo****.

Sabemos que en 1814 habían fallecido ya seis de los catorce porteros que servían en el Consejo en 1808. De los restantes, estaban incorporados en el servicio del Consejo otros seis****. El 1 de septiembre de 1814 fue calificada la conducta política de trece porteros****. Una nota conservada dentro de la documentación del Consejo nos da los resultados de estas purificaciones: "Nota de los porteros de Cámara que han calificado su conducta política ante la Comisión de Jueces nombrada por S.M. en 21 de mayo último, según aparece de la consulta que ha pasado aquélla en 26 de julio pasado y merecido Real aprobación en este día:

NOMBRE	CLASE EN QUE ESTAN COMPRENDIDOS
* don Manuel Benayas	Primera
* don Francisco Martín García	"
* don José Collada	"
* don Gregorio Antonio Escolar	"
* don Julián Pastor García	"
* don Antonio Fernández	"
* don Julián Alvarez	"
* don Ignacio Pérez	"
* don Tomás González	"
* don Matías González Pato	"
* don Santiago Domínguez	Segunda
* don Antonio Regidor	"
* don Antonio José García	Segunda y Tercera

Palacio, 1 de septiembre de
1814"

Ya hemos visto cómo en 1815 quedaban cinco vacantes de porterías, tres de ellas por las mencionadas exclusiones, y cómo se dio preferencia a éstos que habían

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148
núm. 13.

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46: continuaban en sus puestos don Antonio Regidor, don Matías Fernández del Pato, don Gregorio Antonio Escolar, don Antonio José García, don Julián Pastor y don Santiago Domínguez.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.031
núm. 20.

sido nombrados durante la ocupación francesa"".

De esta manera encontramos que el 20 de diciembre de 1815 es aprobada la lista de los quince porteros que habían de servir en las Salas del Consejo en 1816, "en vista de los nombramientos que se han hecho por S.E. el Sr. Duque Presidente y por el Sr. Mayordomo de S.M.""". Una vez aprobada la lista oficial, el Excmo. Notario de los Reinos del Ilustre Colegio de Madrid, de diligencia de la Escribanía de Gobierno y en cumplimiento por lo mandado por el Consejo, hacía convocar y reunir a todos los porteros de la lista y les notificaba el aprobado auto, mediante su lectura. A continuación los porteros debían manifestar quedar enterados del mismo, y tras su previa lectura por todos ellos, lo firmaban en su presencia"". Esta ceremonia tenía lugar habitualmente en el primer día lectivo del año.

Las fuentes consultadas nos mencionan la existencia en 1815 de otras dos peculiares figuras de porteros: de un lado, la llamada "Portera y Alcaldesa de la Casa titulada de los Consejos", empleada del Consejo

"". Un expediente del Archivo Histórico Nacional nos facilita también una curiosa lista del porteros de Cámara del Consejo, con fecha de 2 de septiembre de 1815. Recoge once nombres -y por tanto, coincide con las mencionadas cinco vacantes-, pero de ellos sólo cuatro porteros se repiten con respecto a la anterior lista, y apenas cinco con la lista de diciembre del mismo año. He aquí esta curiosa lista: "Porteros de Cámara y del Consejo en 1815: don Julián Alvarez; don Joaquín Díaz Inclán; don Gregorio Escolar; don Santiago Domínguez; don Julián Pastor García; don Angel Román Seseña; don Manuel López; don Ramón Pérez; don Manuel Díaz; don Luis del Valle; don Felipe Martos. 2 de septiembre de 1815". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090 núm. 37).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13. La distribución por Salas era la siguiente: Sala primera de Gobierno: don Matías Fernández Pato (portero de estrados), don Julián Alvarez Sánchez y don Manuel López; Sala Segunda de Gobierno: don Gregorio Antonio Escolar y don Tomás González San Julián; Sala de Mil y Quinientas: don Ignacio Pérez de Noriega y don Joaquín Díaz Iselán; Sala de Justicia: don Isidoro Aguado y don Francisco Pérez; Sala de Provincia: don Antonio Regidor y don Manuel de Paz; Recados: don José Aznar y don Gregorio José Montiel; Puertas: don Quirico Díaz y don Manuel de Alzaga.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148, expte. núm. 13.

distinta de los Porteros de Cámara****. Y por otro, el llamado Portero de la Escribanía de Gobierno del Consejo****, plaza que aparece aquel mismo año por primera vez. Este destino, que veremos con detenimiento más adelante, fue al parecer creado por las exigencias del servicio. Evidentemente debía ser un puesto de mucha confianza, pues se le confiaba la custodia de las llaves de las oficinas de la Escribanía****.

La supresión del Consejo en 1820 dejó en situación de cesantes a la mayor parte de los porteros de Cámara del Consejo****. Tan sólo don Quirico Díaz**** y don Manuel Alzaga**** parece que continuaron en sus puestos y fueron nombrados porteros del Tribunal Supremo de Justicia. Otro portero, don Manuel Díaz, falleció durante el Trienio.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090 núm. 37: doña Felipa Gijón, Portera y Alcaldesa de la Casa de los Consejos en 1815, cobraba entonces un sueldo de 40 cuartos. Con fecha de 1 de febrero de aquel año le fue subido el sueldo a 7 reales y medio diarios, que percibiría por la Tesorería Mayor.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090 núm. 85. El puesto fue creado a propuesta del portero don Gaspar del Río. Se le dio la dotación de 300 ducados sobre el fondo de 2 y 8 maravedíes por ciento. Por el arrendamiento del cuarto-habitación que acupaban la portería y sus papeles se abonaban 9000 reales.

****. Y por tanto, no es de extrañar que se pusieran reparos a que tal puesto fuera cubierto por un empleado recién ingresado en el cuerpo.

****. Al momento de la supresión del Consejo de Castilla en 1820, la distribución de porteros de Cámara era la siguiente: Sala Primera de Gobierno: don Matías Pato, portero de Cámara y de los estrados, don Ignacio Pérez Noriega, don Santiago Domínguez y don Quirico Díaz; Sala Segunda de Gobierno: don Tomás González y don Isidoro Aguado; Sala de Mil y Quinientas: don Manuel Díaz y don Manuel Paz; Sala de Justicia: don Manuel Alzaga y don José Aznar; Sala de Provincia: don Francisco Pérez y don José Montiel; Puertas: don Joaquín Díaz Inclán y don Felipe Gómez de Martos; Recados: don Francisco García, don Joaquín Hernáiz y don Félix Martín.

****. Aunque en mayo de 1823 ya no desempeñaba este puesto (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45, Informe sobre el Consejo en el periodo 1820-1823, folios 26b y 27a).

****. Don Manuel Alzaga se encontraba ausente de la Corte desde el día 7 de julio de 1822 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45, Informe cit., fol. 27).

También el mozo de estrados quedó como cesante y sin sueldo"". Tras la restauración del Consejo, sus porteros fueron restablecidos en sus puestos y cubiertas las vacantes existentes.

El Presupuesto del Consejo para el año 1829 señalaba en número de dieciséis los porteros de Cámara con que contaba entonces el Consejo Real"".

Otro expediente fechado en febrero de 1830, nos facilita la lista de porteros de Cámara sirvientes entonces en el Consejo, por riguroso orden de antigüedad"". Es una lista de trece empleados, a la que hemos de añadir el nombre de Matías Fernández del Pato, portero de estrados del Consejo"".

Concluimos este subcapítulo del número y designación de los porteros del Consejo de Castilla haciendo una breve referencia a la separación de éstos de sus empleos. En general, se les aplicaba la normativa general sobre jubilaciones y sanciones a empleados del Consejo Real.

Para separar a uno de los porteros se necesitaba un mandato o providencia del mismo Consejo"". Sin embargo, en la práctica cuando un portero no aparecía en las listas anuales de distribución de destinos se consideraba que quedaba destituido. Podía entonces reclamar al Consejo si consideraba que su derecho quedaba perjudicado. Como ya hemos visto, en caso de vacante, los porteros existentes realizaban por turnos sus funciones hasta que la plaza fuera provista, por entrar a servirla sus

"". Aniceto Fernández Valero era su nombre.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 expediente núm. 6.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.267 núm. 52: "Razón de los individuos de la clase de porteros de Cámara de S.M. que tienen su servidumbre en el Real y Supremo Consejo en este presente año de 1830 por el orden riguroso de su antigüedad para la formación del turno de remisiones de autos a las Reales Audiencias y Chancillerías: don Joaquín Díaz Inclán, don Santiago Domínguez, don Quirico Díaz, don Isidoro Aguado, don Ramón Pérez, don Gregorio José Montiel, don Manuel Francisco Paz, don Joaquín Herráiz, don Diego García, don Félix Martín, don Francisco Sánchez Bueno, don Luis Martín. 18 de febrero de 1830".

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 expte. núm. 6.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 6.074 expte. núm. 3.

mismos propietarios o en su caso los tenientes designados****. Por otro lado, para ausentarse un portero de su empleo necesitaba, como los demás subalternos del Consejo, una Real Licencia****.

2) Competencias

La distribución de los porteros en los distintos destinos del Consejo era fijada por el Escribano de Cámara de Gobierno más antiguo, teniendo presente la antigüedad y circunstancias de cada uno. Hecha la distribución en cada Sala, puerta y recados, y formada la lista, debía dar cuenta de ella el día 7 de enero en Consejo pleno para su reconocimiento, poniendo al pie el auto de aprobación y en los libros de cada Sala los nombres de los porteros que quedaban allí destinados. Los porteros señalados a cada Sala, puerta y recados debían permanecer fijos en su destino todo el año, para así ser conocidos por los Ministros que componían cada Sala****.

Dos porteros asistían en cada una de las Salas: primera y segunda de Gobierno, la del Mil y Quinientas, la de Justicia y la de Provincia; otros dos porteros se destinaban para llevar pliegos y recados, y son denominados "porteros de recados"; otros dos para guardar las puertas primeras de las piezas anteriores a las Salas, en que se hacían las audiencias; y otros dos eran destinados a la Saleta de Apelaciones.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 5.074, expte. núm. 3.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expte. núm. 6: ello de acuerdo con el Real Decreto de 3 de abril de 1808.

****. Auto acordado del Consejo pleno de 10 de enero de 1783.

a) Porteros de la Sala primera de Gobierno

Cuando el Presidente no asistía, habían de estar con el oficial de guardia que estuviere encargado de la del Consejo para que conforme a lo que anteriormente estaba mandado en el Libro del Cuerpo de Guardia no impidiese que entrase el coche del Sr. Ministro que presidiese la Sala primera en el zaguán o portal grande, y que acabada la jornada se le recogiese en el mismo zaguán****.

Los porteros que asitían en esta Sala cuidaban de tomar la bolsa en que se custodiaban los papeles, que conducía al Consejo el portero de guardia, cuando el Presidente o Gobernador no asistía. Concluida la Audiencia la recogían y conducían a la Secretaría de la Presidencia. Si asistía el Gobernador, la entregaban a uno de sus pajes****.

Algunas otras de sus funciones en esta Sala primera de Gobierno eran las siguientes: cuando el Presidente o Gobernador entraba en el Consejo, cuidaban de ponerle la almohada en que se sentaba, le acercaban la mesa o se la retiraban cuando se levantaba; daban aviso media hora antes de concluirse la audiencia, para el despacho de los Escribanos de Cámara; avisaban al Consejo cuando era la hora en que debía terminarse la audiencia; recogían la bolsa de los papeles, que se llevaba el Presidente.

Los porteros cuidaban de que estuviera corriente el reloj de campana, que se hallaba en la Sala primera, para que señalase puntualmente las horas de comienzo y fin de la audiencia****. Al llegar la hora, uno

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148, expte. núm. 13.

****. MARTINEZ DE SALAZAR, op. cit., pág. 707.

****. Ramón Rodil, artífice relojero, fue llamado el 31 de mayo de 1823 por el portero de estrados Fernández del Pato para componer y colocar una péndula propia del Consejo que se hallaba fuera de él. Fernández del Pato le ordenó que

de los porteros decía desde la puerta en voz alta: "La hora", y lo mismo otros porteros en las demás Salas. Uno de los porteros de cada Sala avisaba a los pajes o criados, diciendo en voz alta a la puerta de cada Sala: "Capas a Sala de Provincia", etc.

Los porteros debían dar aviso en Consejo pleno, antes de comenzar el despacho de semanería, de los Consejeros que no asistirían ese día. Hacían presente si había o no despacho de Consejo pleno, después de haber llamado a los Escribanos de Cámara y Relatores. Presentaban a los Ministros las consultas para su firma. Igualmente les estaba encomendado la quema de los votos emitidos por el Consejo por escrito, lo que hacían en presencia del Consejo estando las puertas cerradas.

Eran los únicos que podían subir al estrado a dar papeles y recados a los Ministros, salvo que el Consejo o algún Ministro llamasen a otro subalterno.

b) Porteros de las demás Salas

Debían estar puntuales en las respectivas puertas de cada una, mientras el Consejo estuviera reunido, dispuestos a acudir cuando los Ministros llamasen y tocasen la campanilla. Si se les mandaba avisar a los Escribanos de Cámara, Relatores, procuradores, abogados y partes para el despacho de pleitos y solicitudes, lo debían hacer en voz alta.

continuase dándole cuerda y asistiendo diariamente como lo hacía antes el relojero don Francisco Pando, entonces ausente de la Corte. Anecdóticamente, la crónica nos informa que no le fue pagada la reparación. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15).

c) Porteros de Recados

Entre sus cometidos, podemos destacar los siguientes: llevaban los que el Consejo enviaba a los ministros cuando estaban enfermos, y los pliegos, pepelos y Ordenes que el Consejo mandaba enviar; daban aviso a la Sala de Alcaldes de la hora señalada para la visita de cárceles los sábados de cada semana. Tenían además la regalía de entrar en el Acuerdo de la misma Sala con la espada puesta a dar personalmente el recado.

También se encargaban de acompañar al correspondiente Escribano de Cámara para informar a los Consejos de Indias, Ordenes y Hacienda los días y horas en que tenían que acudir todos los Consejos a funciones públicas; y también cuando se hallaba enfermo el Presidente o Gobernador y el Consejo enviaba recado con el Escribano de Cámara y uno de estos porteros.

Acompañaban a los Escribanos de Cámara a Palacio siempre que éstos debían realizar allí alguna gestión o encargo.

Igualmente debían presentarse diariamente, incluso en días festivos, a los dos Secretarios de S.M. y Escribanos de Cámara de Gobierno, para la conducción de pliegos y demás recados que les mandase el Consejo.

Cuando alguno o algunos de los Porteros destinados a las Salas se hallaban enfermos, o ausentes a la conducción de autos u otras comisiones del Consejo, les sustituían por turno y, en defecto de los porteros de recados, los de puertas****.

****. Auto acordado del Consejo pleno de 10 de enero de 1783.

d) Porteros de Puertas

Estos dos porteros cuidaban de las puertas principales de las antecámaras de las Salas del Consejo, para impedir el paso de mendigos, vendedores o transeúntes, así como para cuidar el decoro en el vestir de todos los que entrasen en el Consejo.

Sus obligaciones principales eran: el día que el Presidente no asistía al Consejo, era encargo de ellos llevar al Consejo y recoger la bolsa en que se custodiaban los papeles que el Presidente remitía al Consejo para hacerlos allí presentes. Tras entregarlos a un Portero de la Sala Primera, debía comunicarle que el Presidente no asistiría, para que informase al Ministro Decano.

Otra misión suya era acompañar al Presidente o Gobernador siempre que salía en silla de manos y cuando en Semana Santa visitaba iglesias^{***}. Igualmente debían estar puntuales en la Casa del Presidente para llevar los pliegos, papeles y órdenes que se les diesen^{***}. Finalmente sabemos que los dos porteros de puertas asistían a las visitas

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811, expte. núm. 15: en 1814, el Presidente Duque del Infantado decidió suprimir sus pajes y estableció que cuatro porteros de Cámara hicieran las veces de aquéllos en lo referente al alumbrado con cera, en las funciones públicas y privadas. Esta medida continuaba vigente en 1827. Por otro lado, parece que en el protocolo del Presidente del Consejo de Castilla, bajo Fernando VII, ya no se utilizaba la silla de mano. En toda la documentación consultada sobre este periodo no ha aparecido una sola referencia a este antiguo privilegio.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 expte. núm. 13. "Y en consecuencia de lo mandado en Decreto de 8 de junio de 1807, hágase también saber a todos los porteros que al que le correspondiese traer de la Posada del Señor Presidente la bolsa de los papeles que se han de publicar en el Consejo, lo haga con anticipación de un cuarto de hora antes de formarse el Tribunal y anótese en los libros de cada Sala los nombres de los porteros destinados a ellas".

ordinarias de cárceles"".

Todos los porteros del Consejo de Castilla, además de cumplir con sus deberes, en ocasiones debían desempeñar las obligaciones de alguna portería que estuviera vacante. Para ellos se fijaban turnos, alternativamente entre todos como se hacía para la servidumbre del Presidente, salvo que se hubiera mandado otra cosa"".

Todos igualmente debían asistir a las funciones de iglesia, procesiones y demás actos públicos a los que acudiese todo el Consejo"".

Ninguno de los porteros, estando formadas las Salas y cerradas, debía entrar en ellas sin llamar. En tal caso debía dar golpes en la puerta y esperar que se hiciera señal con la campanilla. Lo mismo se practicaba cuando los Escribanos de Cámara y Relatores necesitaban entrar para el despacho de algún asunto.

Los porteros debían estar preparados en las puertas antes de que el Consejo se reuniese, y una vez concluida la audiencia, al salir los Ministros, les acompañaban hasta la salida hasta subir a sus coches. Los porteros más modernos, por su parte, permanecían en las Salas recogiendo los documentos e impidiendo el paso a toda persona ajena a los pleitos de los que se hubiese hecho relación.

Quando fuese algún notario o escribano a hacer relación al Consejo, el portero de la puerta primera debía comunicarlo al Presidente. No así con los procuradores, quienes debían entrar a dar las peticiones y salir sin dilación alguna.

A los porteros les correspondía ejecutar los apremios contra los procuradores para la devolución de los pleitos a las Escribanías de Cámara y las demás diligencias que emanaban de las providencias del Consejo"". Igualmente les correspondía hacer los emplazamientos a los Señores y Grandes del Reino, de las demandas que se les ponían en el Consejo.

"". Auto acordado del Consejo Pleno de 10 de enero de 1783.

"". Ver auto acordado del Consejo pleno de 10 de enero de 1783.

"". Sabemos, por ejemplo, que a cada portero de Cámara del Consejo se le proporcionaba una Guía Eclesiástica en pasta común para estos fines. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15).

"". MARTINEZ DE SALAZAR, op. cit., pág. 711.

También era de su encargo recoger lo votos por escrito de los Ministros en los pleitos vistos, a costa de las partes litigantes. E igualmente era misión suya conducir a las Chancillerías y Audiencias los pleitos que el Consejo mandaba se les remitiese****.

Estaba mandado por Real decreto de 1750 que se formase un turno de los porteros que se hallasen de servidumbre en el Consejo para la devolución de autos a las Chancillerías y Audiencias del Reino. El vigente en 1808 había sido aprobado en junio de 1784 e incluía en él a todos los porteros con servicio en el Consejo. Cuando un portero fallecía, el que entraba en su puesto ocupaba también su lugar en el turno. En 1815 se formó el nuevo sistema de turnos que regiría durante la segunda mitad del reinado de Fernando VII****. Tras muchos estudios e iniciativas, en febrero de 1830 se modificó este sistema, formando dos turnos de porteros que servirían en el Consejo en años alternativos****.

Estando formado el Consejo, no debían permitir que entrase persona alguna con espada, porque debían dejarla fuera y entrar desarmados. Y en general debían velar por el buen orden y decoro de las ceremonias del Consejo****.

Todos los porteros turnábanse mensualmente para hacer guardia en el domicilio del Presidente del Consejo. Asistían mañana, tarde y noche hasta la hora en que se les mandase retirarse. Le acompañaban desde su casa al Consejo si iba en silla de manos, pero no si iba en coche****.

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones llevaba consigo un apercibimiento con

**** MARTINEZ DE SALAZAR, op. cit., pág. 712.

****. Se formaba un turno sólo entre los porteros que servían en el Consejo y concluido ése se volvía formar otro entre los mismos.

****. Tras muchas instancias en sentido diverso por parte de los porteros, por providencia del Consejo de 7 de septiembre de 1832 se confirmó el método de 12 de febrero de 1830 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.267 núm. 52).

****. MARTINEZ DE SALAZAR, op. cit., págs. 713 y 714.

****. Auto acordado del Consejo pleno de 10 de enero de 1783.

posibilidad de multa para los contraventores""', de lo que se encargaba el Juez de Ministros. También el Secretario Escribano de Cámara y de Gobierno debía estar al tanto y dar cuenta al Juez de Ministros de los porteros que faltaran a dichas providencias.

3) Retribución

En la retribución de un portero de Cámara había dos partidas: una dotación fija de la plaza, que no variaba aunque el número de plazas aumentara o disminuyera. Aparte de esta retribución fija aparecían otros derechos, emolumentos, preeminencias y demás de naturaleza variable y que se repartían entre todos los porteros existentes. Estos derechos variables evidentemente eran privativos del teniente o detentador efectivo de la plaza y, por tanto, no se repartían con el propietario de aquélla. Suponían un incentivo que se correspondía con el volumen de trabajo despachado en cada momento por los porteros. La dotación fija, por su parte, sí se podía repartir con el propietario, bien en cantidad fija - por ejemplo, 7 ó 12 reales diarios-, bien estipulando que la mitad de la dotación sería para el propietario""'.

La dotación de una plaza de portero de Cámara hasta 1808 era de 300 ducados anuales""'. Al restablecerse el Consejo en 1814 se mantuvo esta retribución, aunque pronto se vio la necesidad de elevar estos sueldos por el enorme incremento de coste de la vida que ocasionó la Guerra. En 1815 recibían ya 400 ducados y ese mismo año se

""'. Como estaba prevenido en los autos acordados del Consejo de 10 de enero de 1783 y de 29 de enero de 1806, donde se regulaban las obligaciones de los porteros de Cámara del Consejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148, expte. núm. 13).

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 expte. núm. 13.

""'. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090 expte. núm. 37. Estaban sujetos a los mismos descuentos que los demás empleados del Consejo. Es decir, el 4%, maravedíes en escudo, media annata, mesadas para el Montepío, etc. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, leg. 3.698 núm. 6).

les aumentó 200 ducados más^{***}. Sabemos que en 1826 y años sucesivos continuaban con un sueldo de 600 ducados, que cobraban por Mayordomía Mayor^{****}. Comparativamente con otros porteros de Cámara, parece que los del Consejo no andaban mal retribuidos: en 1812 un portero de Cámara de la Audiencia de Asturias cobraba 500 ducados en total, sumados dotación y derechos^{***}; o los de la Sala de Alcaldes percibían entre 200 y 250 de dotación^{***}.

También es verdad que no siempre sus salarios eran abonados puntualmente. Así, por ejemplo, en enero de 1815 se quejaban los porteros de que no se les pagaba sus sueldos desde la instalación del Consejo el año anterior. Con fecha 31 de enero daba orden el Rey de que por la Tesorería Mayor de Hacienda se les abonasen los atrasos debidos^{***}. Sin embargo, el 29 de febrero del año siguiente todavía no se les había pagado^{***}.

Percibían también derechos con arreglo a un arancel^{***} en todos los juramentos que se hacían en el

^{***}. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.075, consulta de oficio de 30 de octubre de 1815.

^{***}. Por este motivo, los sueldos de los porteros de Cámara del Consejo no aparecían en los presupuestos de sueldos y gastos del Consejo, pues éstos recogían los suministrados por Tesorería General. Por el contrario, sí aparecía una partida correspondiente al sueldo que percibía el portero de estrados (ver, por ejemplo, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333, núm. 11, Presupuesto para 1818; y 3.698 núm. 6, Presupuesto para 1829).

^{***}. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.989, expte. núm. 12.

^{***}. A.H.N., Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.075, consulta del 30 de octubre de 1815.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.031 expte. núm. 20.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.335 núm. 15: No se les podía poner al corriente de sus pagos mientras los subalternos del Consejo no designaran un habilitado para el cobro de aquéllos (Resolución del Consejo pleno de 2 de marzo de 1816).

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 expte. núm. 13: Un expediente formado en 1753, a instancias del portero de estrados y demás de Cámara, trató sobre aprobación del arancel de derechos que habían de percibir por sus destinos, nombramiento de éstos y cesación de las propinas que llevaban. Nuevamente fue estudiado en un expediente de 1783, formándose un nuevo arancel de derechos,

Consejo, incluidos los de los abogados que en él se recibían. Y también en los que se aprobaban y recibían de Escribanos. También percibían 8 reales por ejecutar cada apremio de los que se mandaban hacer para que los procuradores devolviesen los autos y expedientes a las respectivas Escribanías de Cámara. Todos estos derechos formaban un ingreso que se distribuía en partes iguales entre todos ellos, que podía suponer una cantidad alrededor de los 300 ducados más a cada uno".

Los porteros tenían prohibido percibir dinero en metálico o regalos de los litigantes, bajo pena de suspensión de oficio por espacio de 10 años". "No obstante, puede asegurarse que la ley no era cumplida". Sabemos por diversas fuentes que era corriente que recibieran propinas en las vistas de los pleitos; también ocurría a veces que cobraban cantidades excesivas e indebidas en las sentencias, autos y decretos que se daban en los pleitos; o que permitiesen sobornos por hacer favores o dejar pasar a personas indebidamente.

que pudo ser retocado en 1794 y que al parecer estaba vigente en el año 1808 (Providencias de 10 de enero de 1783 y de 29 de enero de 1800).

"A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 expte. núm. 11, Informe de don Valentín Pinilla de 15 de febrero de 1826.

"Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXIV, Ley IV.

"DESDEVISES DU DEZERT, G.: "La España del Antiguo Régimen", pág. 303; A.H.N., Consejos, Libro 1.475/35, fol. 75.

"A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.075, consulta de oficio de 30 de octubre de 1815: curiosamente, en este expediente se recoge una queja de los porteros de la Sala de Alcaldes contra los de Cámara del Consejo destinados a la Sala, que cobraban "las más de las propinas de las vistas de los pleitos civiles".

3. EL PORTERO DE ESTRADOS

1) Su designación

El "Portero de Mayor o de Estrados" era el jefe de los porteros del Consejo, nombrado en propiedad entre los porteros de Cámara por el Presidente o Gobernador del Consejo. Así lo recogía Martínez de Salazar en sus Noticias del Consejo:

"Los Señores Presidentes del Consejo, que han sido, considerando que para la guarda y custodia suya, y disponer las cosas de su servicio, era conveniente que asistiese persona capaz, de calidad, y buenas costumbres, que fuese portero de Cámara de S.M. y de aquéllos que servían en el Consejo, por lo que siempre han elegido uno de los doce que allí sirven, para que acudiese a este Ministerio, que tuviese las llaves del Consejo para su guarda y dar el recado para su servicio, y hacerlo componer, limpiar, y guardar la plata, libros y demás aderezos de los estrados, colgaduras y lo que es anejo y concerniente a tal Ministerio. Este portero de Cámara era siempre nombrado por el Señor Presidente de tiempo inmemorial, escogido por su Señoría Ilustrísima en uno de los seis que nombraba para el servicio del Consejo..."

El portero de estrados debía ser "de

***. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 714. El texto mencionado está extraído a su vez del libro antiguo "Colección de Noticias".

arreglada conducta, instrucción y de toda confianza""", y al comienzo de su empleo debía dar fianza"". Juraba en la Sala primera de Gobierno, en manos del Escribano de Cámara de Gobierno"".

Al existir una figura distinta del portero de estrados, el Decano de los Porteros de Cámara, que era el más antiguo de éstos, deducimos que el portero de estrados o portero mayor no era necesariamente el más antiguo de tales porteros, aunque también es probable que habitualmente sí lo fuese. No olvidemos, sin embargo, que el cargo de portero de estrados era un puesto de confianza y que el Gobernador designaba libremente al que consideraba más idóneo.

2) Competencias""

Este portero tenía a su cargo el aseo y limpieza de estrados, bancos, mesas, tapicerías, pinturas, escribanías, ornamentos, alhajas y las demás cosas del

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo expte. 3.026 núm. 46.

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 47.

""". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 716.

""". Sobre las competencias del portero de estrados del Consejo de Castilla, ver A.H.N., Consejos, legajo 51.425 núm. 43, que incluye un "Prontuario de todo cuanto mensualmente ocurre para la puntual y exacta servidumbre del oficio del portero de estrados, gastos y llaves del Consejo Supremo de Castilla; y asimismo de lo que diariamente se ejecuta y pueda ocurrir apara la puntual servidumbre de todas las cinco Salas de el Consejo, y en el oratorio con motivo de la Misa Diaria que se ha establecido en los últimos años, y se previene que se debe anotar en este u otro, cuanto pueda ocurrir de nuevo y extraordinariamente así en el Consejo, como en Palacio y en la Corte. También el expediente 40 del mismo legajo contiene un oinforme fechado en 1799, bajo el título "Porteros del Consejo, su arancel y otras obligaciones".

Consejo""". De todo ello se le hacía entrega cuando entraba a ejercer esta plaza, por medio de inventario que formaba la Contaduría de Penas de Cámara, con intervención del Escribano de la misma comisión. Este Escribano es quien había de recibir la correspondiente fianza""".

El portero de estrados trabajaba en la Sala primera de Gobierno. Entre otros encargos tenía los siguientes: cuidaba del reloj, para avisar la entrada en el Consejo y la hora en que finalizaba la Audiencia; excusaba a los Ministros que no acudían ese día a las sesiones del Supremo Tribunal; presentaba para su rúbrica todas las consultas; era el encargado de quemar los votos que se daban por escrito; daba aviso al Gobernador de si las Salas estaban o no completas de Ministros; también tenía a su cargo la provisión de todos los gastos ordinarios y extraordinarios para las cinco Salas del Consejo, y los gastos de todas las ceremonias -fiestas dotadas, procesiones, sermones, rogativas, óperas, fiestas de toros en la Plaza Mayor, etc.""", la provisión de carbón"" y de madera, esteras, alfombras, ornamentos, tapices, colgaduras y cuanto era necesario para la buena presencia de

""". En una exposición del portero de estrados Fernández del Pato, poco después de la restauración del Consejo en 1.823, manifestaba la imposibilidad en que se hallaba de poder proporcionar y suplir los gastos hechos en la habilitación de las Salas, funciones de iglesia celebradas, demás gastos de estrados y otros. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm.15).

""". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 715.

""". Por ejemplo, han aparecido varios expedientes donde se recoge el encargo que tenían los porteros de estrados de suministrar la cera necesaria para la iluminación de las ceremonias, así como el de recoger la cera sobrante para devolverla al proveedor (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 2.803 núm. 20; y 3.811 núm. 15). O el expediente de queja del portero Fernández del Pato ante la imposibilidad de suplir los gastos de estrados y otros como las fiestas de Desagravios y Concepción, "once rogativas por la libertad del Rey, seis funciones de iglesia de Te Deum y la del Pilar en acción de gracias por las victorias conseguidas sobre los constitucionales, en las cuales ha habido música, cera, bancos del estrado y otros gastos indispensables al efecto". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm.15).

""". El portero de estrados guardaba la llave de las carboneras del Consejo y estaba a su cuidado el suministro diario del carbón utilizado en los 7 braseros del Consejo (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15).

los estrados del Consejo"".

Cuando fallecía algún Ministro, se informaba del Escribano de Cámara de Gobierno de la hora y forma del entierro, para comunicarlo a los demás porteros y que éstos lo comunicasen a los Ministros, Escribanos de Cámara y Relatores.

Era encargo suyo poner los bancos para el Consejo y sitio para el Presidente o Gobernador, cuando acudía a las ceremonias de iglesia, fiestas y regocijos públicos a las que también asistía el portero de estrados acompañado de algunos porteros de Cámara designados al efecto.

Acompañaba junto con dos porteros de guarda al Presidente o Gobernador, cuando el Jueves Santo salía a visitar los Monumentos en los templos. Tenía también otros cometidos importantes en las procesiones y ceremonias a que asistía el Consejo"".

Formaba para cada Sala un libro blanco encuadernado en el que se anotaban por los Ministros de su puño y letra los señalamientos de los pleitos que se hicieran, contando solamente los días laborables, con exclusión de los feriados"".

Estaba a su cargo la custodia de lo que podría considerarse la Biblioteca del Consejo y era el encargado del suministro de libros a las distintas oficinas del Tribunal"".

El portero de estrados estaba exento de hacer guardias, de llevar pliegos ni recados al Retiro, ni ejecutaba apremios contra procuradores ni las diligencias que producían los negocios, ni las providencias del Consejo, ya que todo ésto pertenecía a los porteros de Cámara.

Este subalterno era también considerado el ecónomo del Consejo. Debía presentar al Supremo Tribunal anualmente una cuenta de gastos de estrados, y dar cuenta también anualmente de los ya realizados con cargo a las

""., MARTINEZ DE SALAZAR, op. cit., pág. 716; DESDEVISES DU DEZERT, "Institutions", págs. 84 y 85.

""., Por ejemplo, hacía funciones de maestro de ceremonias en las procesiones del Corpus (MARTINEZ DE SALAZAR, op. cit., pág. 552).

""., A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090, expte. núm. 62.

""., A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.268 núm. expte. núm. 40.

cantidades percibidas para atenderlos""; anualmente debía formar por su orden progresivo la data y el cargo de todas estas cantidades recibidas por libramiento del Juez de Ministros y su empleo. Estaba igualmente obligado a expedir recibo de toda cantidad percibida"". En ocasiones, en especial después tras la restauración de 1823, el Consejo encontraba problemas para afrontar muchos gastos ordinarios y extraordinarios del Consejo, como ocurrió en el año"" 1824.

De la cuenta de gastos del Consejo del año 1824 podemos extraer a título de ejemplo algunos gastos de estrados que eran abonados por el portero de estrados: 40 reales a los cuatro mozos por el barrido y limpieza del Consejo los días 28 y 29 de mayo; 7.220 reales por el aseo del escritorio y Misas diarias; 1.100 reales por la asignación anual al relojero don Ramón Prodziz; 994 reales de propinas a los cocheros de los coches para el Consejo.

En el mismo 1824 el portero de estrados Fernández del Pato solicitaba no hacer ningún gasto que no fuera exclusivamente de estrados, consultando desde ese momento toda gasto extraordinario que ocurriese"".

Como portero de Cámara de la Sala primera de Gobierno, el portero de estrados tenía varias obligaciones:

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15. Este expediente incluye las cuentas de gastos de estrados del Consejo correspondientes al período 1823 a 1825, presentadas por el portero de estrados Matías Fernández del Pato.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 expte. núm. 15.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811, expte. núm. 15: Acuerdo del Consejo de 7 de abril de 1824: "Se aprueban en la forma ordinaria las cuentas presentadas por el portero de estrados don Matías Fernández del Pato; y por medio de oficio de S.E. al Sr. Gobernador al Ministro de Gracia y Justicia se recuerde el que se le dirigió en 8 de enero de este año ampliándole a manifestar la urgente necesidad de que S.M. se sirva resolver que ya sea por la Tesorería General o por el fondo que fuese de su Real agrado, le facilitasen al Consejo los caudales necesarios a cubrir los créditos y gastos causados en su servidumbre según las expresadas cuentas, como también los que se causen en lo sucesivo y se abonaban anteriormente por la Contaduría General de Penas de Cámara y Gastos de Justicia, y sin cuyo auxilio no puede atender al desempeño de las funciones de su instituto".

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811, expte. núm. 15.

por ejemplo, cuando no asistiese al Consejo el Presidente, debía estar con el oficial de guardia que estuviese encargado de la del Consejo, para que no impidiese la entrada en el zaguán o portal grande del Consejo al Ministro que presidiese la Sala primera de Gobierno""; la preceptiva asistencia a todas las funciones y actos públicos a que asistiese el Consejo, etc.

El portero de estrados tenía a su cargo un mozo de estrados, dedicado al aseo de las oficinas del Tribunal y Escribanías, y a los recados y compra de los utensilios necesarios para el trabajo de aquéllas. En ocasiones un mozo de estrados se quedaba encargado de cerrar el Consejo cuando acababa tarde el despacho de alguna de sus oficinas"". Su sueldo debía ser de 300 ducados en el año"" 1814. En 1826 cobraba 1.100 reales anuales"", sueldo que se mantendría en los años sucesivos hasta la definitiva extinción del Consejo.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 expte. núm. 13.

"". Un mozo de estrados del Consejo de Castilla, don Pedro José Cadanes, que en enero de 1808 se encontraba destinado en dicho lugar para el aseo y cuidado de las Salas donde la Diputación del Reino tenía sus Juntas, como de las demás del Consejo, solicitaba por aquellas fechas una ayuda de costa. La Diputación en 14 de enero acordó "concederle 100 reales por vía de aguinaldo en consideración al trabajo que tiene en estar esperando todos los días de Junta hasta que se disuelve para cerrar el Consejo". (A.C.D., Serie Cortes de Castilla, legajo 171 núm. 29).

"". Este sueldo era el que cobraba un mozo de estrados del Tribunal Supremo de Justicia en 1814. En 1835 uno de estos mozos destinados en el Tribunal Supremo de España e Indias cobraba 3.300 reales. (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo de Justicia", pág. 540).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expte. núm.6.

3) Retribución

En los emolumentos de un portero de estrados había dos partes: un sueldo fijo y unos derechos de naturaleza variable.

El Presupuesto General del Consejo Real de 1818 le atribuía anualmente la cantidad de 6.320 reales y 4 maravedís, que cobraba por Tesorería General****. El sueldo de que gozaba en 1826 era también de 6.230 reales****, de los cuales el que entonces servía este encargo -don Matías Fernández Pato-, tenía que contribuir con tres reales diarios a la viuda de su antecesor y con otros dos para pagar a un mozo o criado que tenía para la servidumbre del Consejo. Gozaba también de un sueldo de 600 ducados como portero de Cámara de S.M., que cobraba por la Tesorería de Palacio****.

Aparte de ello, en los juramentos que se hacían en el Consejo y en que los otros porteros tenían derecho de arancel, también los tenía él por otro arancel particular****, obteniendo alrededor de 400 ducados por esta

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11, "Presupuesto General de los Sueldos y Gastos del Consejo Real y de sus Oficinas Subalternas", "Sueldos que se pagan por Tesorería General".

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6: "Sueldos anuales de los Sres. Ministros, Subalternos y Dependientes del Consejo Real que están consignados en el Real Tesoro".

****. El portero de estrados del Tribunal Supremo de Justicia cobraba en 1814 un sueldo de 6.000 reales anuales; en 1835 el Portero Mayor del Tribunal Supremo de España e Indias cobraba 6.000 reales de vellón anuales. (MORENO PASTOR, L., "Orígenes del Tribunal Supremo de Justicia", pág. 538).

****. Ver auto del Consejo de 21 de abril de 1769 sobre Arancel del portero de estrados y su certificación (Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núms. 1.921 y 1.927).

fuentes^{***}. También percibían cantidades menores por otros conceptos. Por ejemplo, por cada hacha de cera utilizada en las funciones públicas^{***}; o los 66 reales diarios que se abonaban al portero de estrados los días de desestero del Consejo^{***}.

Era frecuente también que el portero de estrados fuera el portero habilitado por el Consejo pleno para el percibo y entrega mensual de los sueldos de los subalternos del Consejo. En su caso, este encargo le proporcionaba 2.400 reales más^{***}.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11, Informe de 1826 sobre los empleados del Consejo.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 expediente número 15.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811, expte. núm. 15.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 47.

4. PORTERO HABILITADO PARA LA COBRANZA DE SUELDOS DE LOS SUBALTERNOS DEL CONSEJO

1) Introducción

Este cargo no se adjudicaba propiamente a una nueva figura dentro de la estructura orgánica del Consejo de Castilla. Era sólo un encargo especial que se encomendaba a uno de los porteros de Cámara del Consejo y que llevaba consigo una serie de obligaciones, como habilitado de todos los subalternos del Consejo -y no sólo de los porteros de Supremo Tribunal-. Este encargo llevaba consigo una serie de complementos adicionales al sueldo de portero.

2) Designación

Su nombre oficial es "Cobrador de las mesadas a los subalternos del Consejo", "Habilitado" o "Cobrador de los sueldos de los subalternos del Consejo"....

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.026 expte. núm. 47; y 3.335 núm. 15.

Esta misión se encomendaba habitualmente a un Portero de Cámara del Consejo y con frecuencia al mismo portero de estrados. Se le habilitaba para que ejecutase en la Tesorería General la cobranza de sueldos de Escribanos de Cámara. Relatores, Agentes Fiscales, Porteros de Cámara y Estrados y demás subalternos del Consejo.

El habilitado era designado por una Junta general de subalternos del Consejo reunida con este fin. Por mayoría de votos era elegido un representante de los subalternos que realizara esta importante misión. Sabemos, además, que esto era costumbre y práctica habitual en todos los tribunales de la época. El habilitado debía ser además representante de todos los subalternos del Consejo, y no de una clase concreta (por ejemplo, de los mismos porteros).

3) Competencias

Su misión no se limitaba a la percepción en la Tesorería General de S. M. de las mesadas vencidas de los subalternos, sino que también debía realizar la distribución y entrega a cada uno de lo que le correspondiese. El encargo en sí contenía cierta complejidad, por ser en ocasiones las nóminas muy complicadas por las continuas variaciones que ocurrían todos los meses, por los ascensos, decretos de medias annatas, mesadas y maravedíes en escudo para los mentes de propios y 4% que sufrían estos interesados. Este encargo era tan delicado, que el designado para cubrirlo debía prestar fianza para su desempeño***.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.335 núm. 15. El 4 de marzo de 1816 fue elegido habilitado de los subalternos del Consejo don Joaquín Díaz Inclán, portero de Cámara del Consejo que llevaba más de 18 años ejerciendo este puesto con los Diputados de los Reinos y Subalternos. En 1833 continuaba desempeñando este encargo y en representación solicitó que se le nombrase un sustituto para casos de enfermedad o ausencia, para no causar a los subalternos graves perjuicios.

4) Retribución

Por el ejercicio de este especial cometido, el habilitado percibía un sueldo de 2.400 reales, acumulativos al sueldo que ya percibía como portero de Cámara del Consejo.

5. PORTERO DE ESCRIBANÍA DE GOBIERNO

1) Designación

El encargo de portero de Escribanía de Gobierno fue creado por Real Orden de 1 de agosto de 1815 a propuesta del Duque Presidente del Consejo^{***}. En su informe de 28 de septiembre de aquel año, siguiendo la propuesta del Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz y del portero de Cámara don Gaspar del Río, solicitó la creación de esta nueva plaza, respondiendo a las especiales atenciones que una oficina de tanta importancia exigía^{***}.

Dicha Real Resolución fue publicada el día 7 del propio mes de agosto. Desde entonces hasta la jubilación de Del Río en 1824 estuvo funcionando esta portería. En 1825 estaba la plaza vacante, pese a ser "de absoluta necesidad", por falta de fondos. De los presupuestos del Consejo para los siguientes años parece deducirse que esta plaza ya no se

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expediente núm. 6.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090 expediente núm. 85 (en el correspondiente libro de matrícula 2.690 núm. 2 aparece consignado como el legajo 3.090 núm. 54). Gaspar del Río ejerció este destino hasta 1824, en que se jubiló con una pensión de cinco reales diarios, de los nueve que estaban señalados a ese fin. Los cuatro reales restantes quedarían para el nuevo portero.

volvió a cubrir"".

Era sin duda un puesto de mucha confianza, pues se le encomendaba la custodia de las llaves de la Escribanía. Por ello siempre se buscaba para su ejercicio un portero de Cámara del Consejo suficientemente experimentado.

En su corta existencia, se dio esta plaza en propiedad; y después de 1824 parece que la ejerció un portero del Consejo de forma interina, sin que existiera tal plaza efectivamente.

2) Competencias

Sus cometidos eran cuidar del aseo de aquella oficina, llevar los pliegos y realizar puntualmente los encargos que se le encomendasen. Además, debía vivir en la misma portería. A veces debían llevar la correspondencia a la Administración del Correo o conducir pliegos al Consejo, incluso a horas extraordinarias en que ya no estaban los porteros de recados del Consejo.

El Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz, como Secretario del Consejo, fue encargado por el Supremo Tribunal para elaborar un Reglamento Provisional para esta nueva portería, que recogiera sus obligaciones. A continuación reproducimos este interesante Reglamento, que explica con gran claridad el papel de este subalterno:

"Reglamento que debe observar un portero de Escribanía de Gobierno del Consejo":

1. La Escribanía de Gobierno, por sus circunstancias, necesita tener una persona que a excepción de las horas de descanso asista a ella, no sólo para el desempeño de las obligaciones que le dieren, sino también para dar avisos y llevar pliegos y recados en horas extraordinarias. El portero con este motivo deberá permanecer en ella: en la temporada de invierno, desde las 8 de la mañana hasta las 2 ó 3 de la tarde, y desde las 5 de ella hasta las 10 en que salen los oficiales; y en la de verano, una hora antes y otra menos en su salida. A su venida se le darán las llaves.

""", A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expte. núm. 6; y legajo 3.781 expte. núm. 11.

2. No facilitará la entrada a ningún litigante por la mañana hasta las horas en que sale el Consejo sino en casos extraordinarios, ni permitirá que formen ni que estén en la pieza anterior sin necesidad, y por ningún motivo permitirán la entrada si no estuviesen los oficiales....

3. Cuidará asimismo diariamente en todo tiempo por la mañana del aseo y limpieza de la Escribanía de Gobierno y del lugar común, de manera que esté todo corriente para la hora en que los oficiales vengan a desempeñar sus obligaciones.

4. Cuidará asimismo de encender los braseros y de la limpieza de los tinteros y belones, colocando éstos en las mesas de los oficiales antes de la hora de su entrada por la noche, y de recogerlos y colocarlos en su lugar.

5. También tendrá cuidado de comprar y suministrar el papel de todas clases que se necesitase, plumas, lacre, tinta, polvos, oblea, ingredientes para la tinta y de hacerla conforme a la receta sin que se verifique su falta, y aunque se le dará el dinero para lo que necesite llevará cuenta de todo con la distinción debida, expresando el día en que lo compre; y todo lo demás necesario para la puntual servidumbre de dicha oficina, llevando cuenta semanal de lo que compre y gaste.

6. Llevará los pliegos y órdenes del Consejo a la persona que se le diga, guardando en esto la mayor puntualidad y exactitud, por lo que en ello interesa el Real Servicio (sobre lo cual se le hace responsable).

7. Será de su obligación el recoger las cartas del Correo los días señalados: sellar las que se cierran en la oficina y llevarlas al mismo Correo, cuidando de devolver los sobreescritos que vengan certificados con el recibo correspondiente.

8. También lo será de llevar al Consejo los papeles que se le den, correspondientes al despacho diario y estará pronto a la hora de la salida para recogerlos.

9. No faltará un momento a las horas en que las oficinas estén abiertas. Y sólo se le dispensará cuando se le haya hecho algún otro encargo urgente referente a su oficio.

.... Un borrador de este artículo dice así: Fuera de las horas en que los litigantes acostumbran a acudir a tomar razón de sus instancias, no permitirá que entre persona alguna no estando los oficiales (no abrirá a nadie la puerta de las oficinas a no ser a individuos de ellas). (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090 núm. 85).

10. No debe entrar en las oficinas sino cuando los oficiales le llaman o sea necesario dentro de ellas.

11. Tratará con la moderación y decoro correspondiente a los oficiales y dependientes de la oficina. Y lo mismo hará con todos los litigantes y personas que concurrieren a ella.

12. Además de las obligaciones expresadas, tendrá también la de estar pronto en toda hora a ejecutar lo que le mande su Jefe respectivo en dicho oficina, bajando y colocando legajos de papeles que haya necesidad de reconocer en dicha oficina"****.

3) Retribución

Se asignó a este portero una dotación de 300 ducados sobre el fondo de 2 y 8 maravedies por ciento, pasándose la correspondiente certificación a la Contaduría General de Propios, quien sería la encargada de abonarle sus sueldos todos los meses. Del Río percibió puntualmente sus mesadas hasta su fallecimiento en octubre de 1824.

En el presupuesto para 1825 tenía consignada la cantidad de 3.300 reales, aunque la plaza no fue cubierta efectivamente, por falta de fondos para atender a este gasto****.

También se le satisfacía la cantidad de 9.000 reales anuales más por el arrendamiento del cuarto-habitación que ocupaban sus papeles y en el que se hallaba situada la Portería****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090
expte. núm. 85.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698,
expte. núm. 6.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.090,
expte. núm. 85.

OTROS SUBALTERNOS DEL CONSEJO

En este capítulo estudiaremos varios subalternos menores del Consejo de Castilla: capellán, ayuda de oratorio o sacristán, mozo de estrados, tasador general de pleitos, registrador del sello, contador de penas de cámara y gastos de justicia y el impresor del Consejo.

EL CAPELLAN DEL CONSEJO

La capilla del Consejo de Castilla se encontraba situada en la parte de la Casa de los Consejos correspondiente a la Sala de Mil y Quinientas****. Quizás fuera una capilla de uso común para todas las instituciones del Palacio, aunque el titular de la misma o capellán era un subalterno del Consejo Real.

El capellán del Consejo era un sacerdote católico que decía diariamente misa en la capilla y asistía espiritualmente a los miembros del Consejo. El capellán decía misa al Consejo pleno todos los días a la misma hora: en verano a las ocho de la mañana y en invierno a las siete, es decir, una hora antes de que el Consejo pleno iniciase su audiencia en la Sala primera de Gobierno.

En otras épocas fue frecuente que algunos de los Ministros o el mismo Gobernador fuesen eclesiásticos. En tal caso, era habitual que uno de éstos fuera el que

****. En agosto de 1773 el Consejo acordó hacer una capilla para el Consejo en la Sala de Mil y Quinientas. La primera misa se celebró el 18 de noviembre de aquel año. La capilla estuvo allí situada hasta 1834 con el breve intervalo del Trienio Constitucional, en que se hicieron obras en la Sala de Mil y Quinientas y se trasladó la capilla a la zona correspondiente al Consejo de las Ordenes. Tras la restauración del Consejo, se hicieron nuevamente obras y la capilla volvió a su sede la de la Sala de Mil y Quinientas. (A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo 17.704).

ejerciera la titularidad de la capellanía. En el reinado de Fernando VII, sin embargo, ningún miembro del Consejo de Castilla fue capellán, pese a que algunos Consejeros sí fueron clérigos"". Esta misión fue siempre encomendada a un sacerdote designado por el Presidente del Consejo"". Como subalterno que era, una vez nombrado puraría su cargo delante del Consejo pleno, a continuación se le despacharía título por el Escribano de Gobierno y estaría quizás también sometido al requisito del pago de la media annata.

Durante la invasión francesa la capilla del Consejo fue expoliada"", pero al parecer tanto el capellán como su sacristán no fallecieron, ni fueron sustituidos por otros en ese periodo"". Por aquel entonces, el capellán del Consejo era don Alonso Gabino Moreno, que ejercía esta plaza desde 1803 y tenía entonces 53 años. Suprimido el Consejo de Castilla, continuó en su puesto en las llamadas Juntas Contenciosas"".

Tras la restauración del Consejo se mantuvo siempre esta figura del capellán. En ocasiones fue necesario designar un sustituto, como ocurrió en los meses siguientes

"". Por ejemplo, don Juan Antonio de Inguanzo, que fue Decano del Consejo de Castilla y llegó a ser Arzobispo de Toledo.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11: "El capellán disfruta de un sueldo de 3.300 reales y lo nombra el Consejo"; también en el legajo 3.698 núm. 6.

"". Entre los ornamentos y otros bienes destinados al culto se contaba un crucifijo, seis floreros de altas, cuatro candelabros triangulares de plata, una palmatoria, una paz, un plato pequeño para el servicio del altar, una bandeja con sus vinajeras, una campanilla de plata, un cáliz, una patena y un copón de plata. Por Real Orden de 16 de septiembre de 1809, todos estos bienes fueron trasladados desde la Casa de los Consejos a la Casa de la Moneda, exceptuándose el cáliz y su patena. Parece que todo lo demás fue sustituido por enseres de cristal (unos candelabros, vinajeras y bandeja) o de metal (dos campanillas). (DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil en 1808", págs. 365 y 366, citando el legajo I, expediente de 19 de septiembre de 1809, en A.H.N., Juntas de Negocios Contenciosos. Este legajo debe ser el 51.577 de la sección Consejos Suprimidos).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

"". A.H.N., Consejos, Juntas Contenciosas, legajo 51.584.

al restablecimiento del Consejo**** en 1823, ya que el entonces titular quedó inhabilitado hasta quedar sometido a la purificación política****. Este capellán, todavía don Alonso Gabino Moreno -en algunos documentos oficiales llamado también don Alfonso Moreno-, había servido durante el Trienio en el Tribunal Supremo de Justicia**** y al parecer pasó bien el requisito de la purificación****. Continuó así sirviendo esta plaza en el Consejo desde el 12 de septiembre de 1823**** hasta el año 1831 en que dimitió y fue sustituido por su Ayuda de Oratorio, el también sacerdote don Manuel Delgado****.

En cuanto a su retribución, como todos los subalternos del Consejo percibía un sueldo fijo****. Recibía

****. Don Felipe Rodríguez sirvió la plaza de capellán del Consejo desde el 30 de mayo hasta el 12 de septiembre de 1823, sustituyendo al entonces titular, don Alonso Gavino Moreno (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 10 de noviembre de 1831.

****. En el año de 1717 se asignó al capellán del Consejo Real el sueldo anual de 200 ducados, que posteriormente le fue aumentado a 280. Pero el trascurso del tiempo hizo insuficiente esta dotación y el primero de septiembre de 1785 don Luis Polaina y Marqui, capellán desde 1774, solicitó se le diese alguna pensión, préstamo o beneficio. El Consejo, en consulta de primero de octubre siguiente, previa audiencia del Juez de Ministros, propuso a Carlos III se sirviese aumentar dicha dotación hasta 500 ducados, que era la menor que tenían los capellanes de los demás Consejos. Y, en consecuencia, se dignó concederle una pensión y después una ración.

Le sucedió en la capellanía don José Martínez Ramírez y como el sueldo no se había alterado se produjo la solicitud de su antecesor para que se completase el de 500 ducados. El Consejo acordó repetir la consulta de primero de octubre de 1785, elevada a Carlos IV el 15 de marzo de 1796, quien dio la siguiente resolución: "Atenderé al capellán del

del Supremo Tribunal 280 ducados de sueldo, complementado en algunas ocasiones -por especial concesión del rey, personal y vitalicia- con otros 220 ducados sobre la mitra de León -que en la práctica se cobraban con varios años de retraso-. Desde que don Alonso Gabino Moreno sustituyó en 1803 a don Narciso González, hasta su dimisión en 1831, reclamó en innumerables ocasiones una subida salarial del Consejo o al menos la pensión sobre alguna mitra, lo que no llegó a conseguir. El sueldo del capellán del Consejo permaneció por tanto invariable en los 280 ducados, siendo al parecer el más bajo de todos los capellanes de los Reales Consejos.

Sabemos que cuando servía en las Juntas Contenciosas percibía en 1811 un salario de 3.088 reales anuales -104.992 maravedís-, aparte de otras ayudas de costa y tres propinas por cada una de las tres Pascuas anuales****. En el Presupuesto de 1819, por su parte, tenía fijado un sueldo de 3.308 reales y 28 maravedís****.

Por otro lado, el capellán sustituto de la capellanía hasta la purificación de don Alonso Gabino Moreno, percibió desde el 30 de mayo hasta el 12 de septiembre de 1823 la cantidad de 1.050 reales, a razón de

Consejo con una pensión de 250 ducados sobre la Mitra de Santiago". Del referido capellán Ramírez fue sucesor don Narciso González de Arango, que en julio de 1800 hizo la misma petición que sus antecesores. El Consejo consultó al Rey en los mismo términos que lo hizo en 1785 y recayó su Real Resolución consignando sobre la Mitra de León los 220 ducados para complemento de los 500 de sueldo que se solicitaban. El interesado Arango acudió al Rey exponiendo que la expedición de bulas y demás gastos para poder entrar al disfrute de aquella gracia ascenderían o pasarían de 9.000 reales, que no podría hacer sin empeñarse, y agregando a esta circunstancia el atraso con que aún los más puntuales obispos pagaban las pensiones, iba a resultar que en cinco años no percibiría cosa alguna. Y para que no fuera ilusoria dicha asignación solicitó se le hiciese sobre el fondo de penas de Cámara hasta que entrase en el goce de aquella o pudiese pagar los 9.000 reales. Esta instancia se remitió a consulta con Real Orden de 10 de octubre de 1800, y habiendo oído sobre ella a su Fiscal, dio el Consejo respuesta negativa a la consulta de 17 de noviembre siguiente por no haber méritos y por el perjuicio que ello traería para el futuro. La Real Resolución fue publicada y acordada en 17 de diciembre de 1800 (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 10 de noviembre de 1831).

****. A.H.N., Consejos, Juntas Contenciosas, legajo 51.584.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11.

10 reales diarios, que era lo que se daba al suplente de Capellán en estos casos"".

A partir de 1823 se sucedieron las reclamaciones de atrasos de sueldos, como pasaba con otros subalternos del Consejo"".

El 20 de febrero 1831 el titular de la capellanía dimitió y pasó a ocupar una plaza de capellán de número del Hospital General de la Corte, dotada con un sueldo de 6.000 reales. Sustituyó a don Alonso Gabino Moreno el que durante dieciséis años había sido presbítero ayuda de oratorio del Consejo, don Manuel Delgado, nombrado por Real cédula de 21 de febrero de 1831.

Con fecha de 7 de octubre de 1831, don Manuel Delgado acudió al Consejo solicitando un aumento de su dotación de 280 ducados, ya que no era "suficiente para vivir y presentarse diariamente con la decencia correspondiente"".

El Consejo consideró muy justa la petición del Sr. Delgado, "no sólo por ser necesario este aumento para su decente subsistencia, sino porque cree muy decoroso a V. Majestad que su primer Tribunal de la Nación no tenga un funcionario como éste con menos dotación que los demás Consejos". En su consulta, el Consejo solicitó del Rey que le fuera aumentado el sueldo en 220 ducados anuales sobre los fondos de penas de cámara para que le fuera completado el sueldo hasta los 500 ducados"". El Ministro don José Hevia y Noriega presentó también un voto particular en contra"". El Rey se conformó con la opinión mayoritaria

"". En la práctica, don Felipe Rodríguez tuvo que solicitar reiteradamente el pago de esta cantidad al Consejo. El retraso en el abono de los salarios a los subalternos del Consejo fue algo habitual desde 1823 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15).

"". Por ejemplo, la reclamación de 9 de marzo de 1824 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15).

"". Alegaba también que todos los capellanes de los demás Consejos gozaban de un sueldo superior y que no le alcanzaba el suyo para pagar un sustituto en caso de enfermedad.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 10 de noviembre de 1831: en todo caso, 500 ducados se igualaba al menor sueldo de entre los capellanes de los demás Consejos.

"". Don José Hevia y Noriega hizo voto particular con dictamen de que en este asunto se estuviera a lo establecido en la Real Resolución que recayó a la consulta del Consejo

del Consejo y concedió el mencionado aumento.

de 17 de noviembre de 1800. En ella el Consejo opinaba que no había méritos suficientes para tal incremento y que ello traería al Consejo perjuicios para el futuro.

SACRISTAN O AYUDA DE ORATORIO

El capellán del Consejo contaba a su servicio con un sacristán o ayuda de oratorio. También era subalterno del Consejo de Castilla y cobraba de éste su salario.

Entre otros cometidos, debía velar por el buen estado de los ornamentos y vasos sagrados, limpieza y decoro de la capilla, así como encargar el lavado y planchado y repaso de la ropa de oratorio, y también atender y proporcionar todo lo necesario para las misas del Consejo.

En 1808 había un sacristán en el Consejo, como lo corrobora la Guía de Forasteros de aquel año. Por aquel entonces era don Pedro Pinilla, que a la extinción del Consejo en aquel año continuó sirviendo en las Juntas Contenciosas, con una remuneración anual de 1.100 reales -37.400 maravedís-****.

Tras la restauración del Consejo, sabemos que desde 1815 ejercía la plaza de ayuda de oratorio el sacerdote don Manuel Delgado. En 1818 cobraba en asignación de penas de cámara 494 reales anuales por Tesorería General. Durante el Trienio, al parecer continuó prestando sus servicios de sacristán en el Tribunal Supremo de Justicia****. En 1824 el Sr. Delgado cobraba al parecer

****. Don Pedro Pinilla tenía en 1811 cincuenta y tres años y llevaba sirviendo veinticinco en el oratorio del Consejo (A.H.N., Consejo, Juntas Contenciosas, legajo 51.584).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

1.005 reales y 30 maravedís anuales****, y 1.500 reales al año siguiente****, sueldo que se mantendría hasta la definitiva supresión del Consejo en 1834.

A partir del 20 de febrero de 1831 pasó a ocupar la plaza de capellán, siendo sustituido por don Francisco de la Cárcel****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811
núm. 15.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781
expte. núm. 11.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
expte. núm. 6.

MOZO DE ESTRADOS

Se ocupaba de mantener limpias y ordenadas las salas y antesalas donde se celebraban las audiencias y en general, todas las instalaciones del Consejo. Igualmente ayudaba a preparar las ceremonias de iglesia y dirigía el trabajo de otros mozos en limpiezas, traslados y desesteros, y realizaba las compras de utensilios necesarios para el Consejo, todo ello bajo la dirección del portero de estrados****.

El número de estos mozos de limpieza o mozos de estrados era variable. En principio, había uno sólo que fuera subalterno del Consejo y cobraba un sueldo anual por Tesorería General. Sin embargo, el Consejo contrataba eventualmente otros mozos para operaciones de desestero, corrimiento de bancos de iglesia y otras operaciones diversas de orden y limpieza donde estos mozos fuesen necesarios.

En 1808 había un mozo de limpieza, como lo corrobora la Guía de Forasteros de aquel año. Su nombre era

****. En los dos Reglamentos del Tribunal Supremo de Justicia, de 1814 y 1835, quedaba definido como un empleado público al servicio del portero mayor o más antiguo, con un sueldo de 300 ducados de vellón en 1814 y 3.300 reales en 1835, con la misión de realizar la compra y distribución de los utensilios necesarios al servicio del Tribunal y las Escribanías, así como su aseo y limpieza. (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", pág. 540).

Pedro Cadanés y prestaba sus servicios desde 1807****. Tras la supresión del Consejo, pasó a servir la Juntas Contenciosas, también como mozo de limpieza único. En 1811 contaba con treinta años de edad y percibía un salario anual de 1.220 reales (41.480 maravedís).

En 1818 cobraba sin embargo 100 ducados (unos 1.100 reales anuales)****, sueldo que se mantendría invariable hasta la supresión del Consejo en 1834. Este sueldo se cobraba por penas de cámara y era pagado por Tesorería General.

En 1831 era otro individuo el mozo de estrados del Consejo: don Francisco de Arias****.

Por las cuentas de estrados del Consejo Real, llevadas por el Portero del mismo nombre, podemos conocer la retribución de trabajos eventuales que el Supremo Tribunal satisfacía a estos mozos. Veamos algunos ejemplos de los años 1823 y 1824: por quitar y poner todos los días los bancos la la capilla para las misas diarias se le pagó en 1823 la cantidad de 280 reales; por el aseo de retretes, 16 reales mensuales (119 reales en 1823); a los 6 mozos que se couparon en barrer y limpiar todos los salones del Consejo los días 28 y 29 de mayo de 1823 y otros trabajos consiguientes para habilitar las Salas se les pagó por su trabajo 20 reales diarios; al mozo se le dieron 8 reales por el tiempo de desestero, como venía siendo habitual.

En 1824 por ejemplo se le pagó una cuenta de 1.934 reales para repartir entre varios mozos contratados eventualmente, por los siguientes menesteres: 40 reales a cuatro mozos por el barrido y limpieza del Consejo los días 28 y 29 de mayo; 6 reales por cada banco que se trasladaba a las funciones de iglesia; 8 reales por traer las bolsas de

****. Un expediente localizado en el Archivo del Congreso de los Diputados nos proporciona algún dato más sobre este mozo de estrados del Consejo de Castilla, don Pedro José Cadanes. En enero de aquel año se encontraba destinado en la Casa de los Consejos para el aseo y cuidado de las Salas donde la Diputación del Reino tenía sus Juntas, así como de las demás Salas del Consejo. En enero de aquel año solicitó una ayuda de costa. La Diputación del Reino el 14 de enero acordó concederle 100 reales por vía de aguinaldo "en consideración al trabajo que tiene en estar esperando todos los días de Junta hasta que se disuelve para cerrar el Consejo". (A.C.D., sección Cortes de Castilla, legajo 171 expte. núm. 29).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333, expte. núm. 11.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698, expte. núm. 6.

casa del mangüitero y otros 6 por devolverlas; 40 reales a cada uno de los tres mozos que asistieron los días 3 y 4 de noviembre al estero del Consejo; además otros 40 reales para el propio mozo de estrados, a quien se abonaban también 6 reales por cada día que había función en la iglesia****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811
expte. núm. 15.

EL TASADOR GENERAL DE PLEITOS

La Guía de Forasteros del año 1808 mencionaba esta figura del Tasador General de Pleitos o de Derechos, subalterno del Consejo encargado de evaluar y tasar los derechos que debían percibir los Escribanos, Relatores y Receptores del Número por su intervención en un proceso o por una escritura****. Aquellos empleados no podían cobrar derecho alguno que no fuera tasado y aprobado por el Tasador del Consejo, quien para ello debía evaluar la calidad del proceso o escritura y aplicar el arancel correspondiente que estuviera en vigor.

El Tasador era designado por el Consejo, quien le habilitaba para el puesto. Tras el correspondiente nombramiento, pasaba a jurar su cargo ante Consejo pleno en la Sala primera de Gobierno****.

Este oficio, aunque antiguamente fue enajenado de la Corona, sin embargo quedó incorporado a ella durante el reinado de Fernando VII. En aquella etapa fue Tasador General de Pleitos del Consejo don José de Toledo, quien ocupaba la plaza desde 1805. Pasó también a las Juntas Contenciosas como Tasador de Pleitos en 1809, teniendo en 1811 cuarenta y cuatro años de edad. Percibía entonces un

****. Ley I, Título XXII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

suelo anual de 4.400 reales y contaba con un empleado, don Luis Berzosa, de sesenta y cinco años y treinta de servicio. Berzosa cobraba por aquella época también la misma renta, es decir, 4.400 reales (149.600 maravedís)****.

En el Tribunal Supremo de Justicia el oficio de Tasador General de Pleitos estaba unido al de Repartidor de Negocios****.

El 6 de junio de 1814 el Consejo decidió habilitarle provisionalmente, "al hallarse en la Corte don José Toledo, Tasador General que era en 1808, y a fin de que no padezca el público atraso alguno en las tasaciones de las diligencias judiciales que se ofrezcan hacer, se habilita a don José Toledo para que por ahora y sin perjuicio de lo que se acordare, ejecute las tasaciones y entre a jurar"****. No llegó a verificarse el juramento pues se consideró válido el que tenía antes de la invasión francesa.

Sabemos que José Toledo solicitó una licencia temporal, a través del Ministro Tadeo Soler, al Presidente del Consejo en abril de 1819, para ausentarse de la Corte por espacio de cuatro meses y trasladarse a Valdepeñas y Ciudad Real. Alegó para ello motivos de salud y su intención de cobrar unos intereses que se le adeudaban. En su lugar quedó el oficial mayor don Luis Berzosa, que había quedado habilitado por el Consejo para firmar las tasaciones****.

Una noticia de 1829 indica que continuaba entonces don José de Toledo como Tasador de Pleitos del Consejo Real, y que se encontraba autorizado por el Supremo Tribunal para servir este puesto de por vida, en

****. A.H.N., Consejos, Juntas Contenciosas, legajo 51.584.

****. Así describe su función el profesor L. Moreno Pastor: "Actuaba en su calidad de Tasador para aplicar los aranceles que regían para tasar los derechos en los casos de condena en costa o quejas de las partes contra los subalternos. Si hubiera exceso en lo cobrado o anotado, debía moderarlo con arreglo a arancel, y si aún después de hecha la tasación y publicación, se alegara disconformidad por alguna de las partes, existía la vía del recurso a la Sala que hubiera conocido del asunto, la cual resolvería oído el Tasador. Este tenía obligación de llevar los libros correspondientes para anotar las tasaciones e informes que se pidieran (MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", págs. 537 y 538).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 46.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 9.363 expte. núm. 3.

representación de su mujer, a quien perteneció este oficio"". Al parecer, fue oficio enajenado de la Corona hasta que, puesta la demanda de reversión al que lo servía en representación de su mujer, don José Toledo, fue incorporado a la Corona. Entonces le fue concedido continuar sirviendo el oficio de por vida. Fue nombrado por el Rey para su uso y ejercicio, para lo que se le expidió el correspondiente Real Título por la Cámara de Castilla"". Al menos en 1831 continuaba Toledo ejerciendo este oficio"".

Sabemos que en este periodo el Tasador no sólo lo era del Consejo de Castilla, sino que trabajaba también para otras instituciones: Real Sala de Alcaldes, Juzgados de Provincia, Número y demás a ellos anejos. José de Toledo también era Tasador del Consejo de Guerra y Juzgados Militares"".

La ley establecía que debía presentar periódicamente ante el Consejo Real de Castilla una relación y memoria de las tasaciones efectuadas. Igualmente llevaba un libro de las condenas de las tasaciones realizadas, y también de las de los procesos y probanzas hechas por los Escribanos fuera del recinto de la Corte"".

Concluido un proceso o una probanza de comisión, el Escribano, Relator o Receptor debía acudir en los tres días siguientes a su conclusión ante el Tasador de Pleitos, quien debía examinar la labor realizada y los derechos cobrados. Su misión era ratificar la justicia de estos derechos y en su caso moderarlos, imponiendo incluso la pena contenida en el arancel para tales supuestos. Debía el Tasador levantar asiento o registro en cada proceso de su tasación y consiguiente resolución, de su propio puño y letra y firmarlo. Las decisiones del Tasador eran de obligado cumplimiento so pena de una multa accesoria.

Caso de que el Tasador decretara la devolución de dinero a las partes, el Escribano, Relator o

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 expte. núm. 6.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6: en aquel año le fueron abonadas 10 mensualidades y le fueron retenidas dos en virtud de orden del Intendente.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 expte. núm. 11.

"" Ley II, Título XXIII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

Receptor afectado debería comunicarlo a los perjudicados inmediatamente y restituir lo indebidamente cobrado.

La Ley también facultaba a los Tasadores para visitar los procesos y probanzas en poder de los Escribanos, para así evitar el posible fraude de que no se acudiera al trámite de la tasación****. Y especialmente para los procesos que pasaban ante los Escribanos de Provincia, así como hacer todas las diligencias que considerasen oportunas a este fin.

Para el ejercicio de sus cometidos, estaba auxiliado por un oficial mayor**** y por un escribiente****.

En cuanto a los derechos que le correspondían, el Tasador General del Consejo no podía percibir derechos de las hojas de los autos, piezas, títulos o instrumentos que fueran unidos y no se necesitasen ver para las tasaciones, pero sí debía cobrar derechos de las que necesitase ver y reconocer, según lo establecido en el correspondiente arancel.

Por otro lado, de los derechos que tasaba y cobrase, debía poner recibo rubricado al pie de la tasación, sin que pudiera dejar de cobrar derechos en ningún caso****.

El Tasador cobraba derechos sobre las tasaciones en que intervenía. Aparte de ello, percibía un sueldo fijo de 4.400 reales anuales, que se mantuvo durante todo el reinado de Fernando VII. Un informe de 1825 sobre los ingresos del Tasador de Pleitos nos aporta algunos datos interesantes****:

"Por su contestación y minuta..., resulta que los derechos que ha percibido por los negocios que se le han pasado pertenecientes al Consejo, Real Sala de Alcaldes, Juzgados de Provincia, Número y demás a ellos anejos, según resulta del libro de entradas expresivo

****. Ley II, Título XXII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

****. Que al menos hasta 1819 fue el mencionado don Luis Berzosa.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 expte. núm. 11.

****. Ley IV, Título XXIII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

de los productos en los últimos tres años, se calcula aproximadamente en 8.000 reales, cada uno de los cuales, deducidos 3.300 reales por alquiler de casa que ocupa y tiene la oficina en sitio cómodo a las partes y tribunales; otros 3.000 reales que paga a un oficial mayor de inteligencia y capacidad; 1.460 reales a un escribiente al respecto de 4 reales diarios y 256 reales por gastos de escritorio y demás que expresa. Le han quedado líquidos 4.384, que unidos a los 4.400 de sueldo, es el total valor de este destino el de 8.784 reales".

Por tanto, el Tasador tenía instalada una oficina, cuyo alquiler, así como el sueldo de sus dos ayudantes, debía pagar a su costa. Aún así le quedaban líquidos 4.384 reales anuales por derechos, aparte del sueldo anual de 4.400 reales.

EL REGISTRADOR DEL SELLO DEL CONSEJO

El Canciller Mayor y Registrador del Sello del Consejo era un empleado que tenía como misión registrar y sellar las Reales Cartas y provisiones del Consejo^{****}.

El Registrador era nombrado por el Consejo, ante quien juraba en la Sala primera de Gobierno. Podía igualmente contar con un Teniente o Lugarteniente que le ayudara o sustituyera en caso de ausencia o enfermedad. Así, por ejemplo, en 1808 servía este oficio un Teniente, don José Alegre, que falleció durante la ocupación francesa y fue sustituido el 6 de junio de 1814 por otro Teniente, don Fernando Iturmendi^{****}.

En 1820 el destino de Canciller y Registrador del Consejo pertenecía en propiedad al Marqués de Valera y Fuentehermosa, quien seguiría siendo propietario hasta el final del reinado^{****}. Tenía este marqués como Teniente a

^{****}. Ley I, Título XIII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

^{****}. En aquella ocasión fue habilitado como Teniente para evitar que el servicio sufriera retraso alguno (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46). Iturmendi fue habilitado por el Consejo de forma interina por decreto de 6 de junio de 1814 (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.897 núm. 4).

^{****}. Por una noticia de 1831, la Cancillería de Castilla fue concedida a la Casa que entonces la poseía en recompensa de la del Consejo de Cruzada, que detentaba cuando fue

don Aquilino Escudero, quien a su vez contaba con un oficial mayor -don Salvador María Granés-, habilitado por el Tribunal para las ausencias y enfermedades de Escudero. Ambos fueron interrumpidos en el ejercicio de sus funciones por el Gobierno constitucional, cuando el Consejo fue suprimido. En aquella ocasión Escudero fue nombrado Canciller y Registrador del Sello del Consejo de Estado, y su oficial mayor Granés fue a igual destino en el Tribunal de Justicia¹⁰⁰².

Tras el restablecimiento del Consejo Real en 1823, fue abierto expediente para que el Decano habilitase de forma interina persona que sirviera este destino. Estudiado por el Consejo, fue nombrado Teniente de Canciller don Fernando Iturmendi¹⁰⁰³, el 12 de junio de 1823.

Dos últimas noticias tenemos sobre este destino en los últimos años del reinado de Fernando VII. La primera es de 1826 y nos informa que en aquel año era Teniente Canciller del Consejo don Salvador María Granés¹⁰⁰⁴, quien continuaba en este destino en el año 1831¹⁰⁰⁵.

La segunda noticia viene fechada también en 1831. Al parecer, por aquel entonces se habían producido una serie de abusos "en la oficina del Teniente Canciller Mayor del Real Sello de Castilla y Registrador General" que obligaron al Consejo a tomar cartas en el asunto¹⁰⁰⁶.

Hemos visto por tanto que el cargo de

suprimido este Consejo, "como por la egresión de más de 80.000 duros con que entonces y después ha servido a la Corona". La misma noticia indicaba que por entonces la suerte del propietario era lamentable, pues "carecía de indemnización competente" (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de 1831).

¹⁰⁰². A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 4.

¹⁰⁰³. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 4.

¹⁰⁰⁴. Granés solicitó entonces al Consejo que le fuera remitido un tórculo de sellar que fue del extinguido Tribunal Supremo de Justicia (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.705 núm. 42).

¹⁰⁰⁵. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de 1831.

¹⁰⁰⁶. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de 1831.

Canciller y Registrador del Sello del Consejo era un destino enajenado de la Corona y, por tanto, perteneciente a un particular que podía designar un Teniente. En especiales circunstancias, el Decano del Consejo podía designar a su vez un Canciller interino, e igualmente podía nombrar un suplente o sustituto para casos de enfermedad o ausencia¹⁰⁰⁷.

En cuanto a sus cometidos, el registro de cartas y provisiones lo realizaba poniendo su nombre completo en la carta que registrase e igualmente llevaba libro donde anotaba los datos de cada una de estas cartas o provisiones: título, personas que la firmaron, día, mes y año en que se despacharon¹⁰⁰⁸. Debía haber un libro para cada año. Una vez registrada, colocaba el sello del Consejo en la disposición ya aprobada.

Las cartas y privilegios emanados del Consejo también debían ser registrados por el Canciller o su Teniente. En su reverso debían constar los derechos correspondientes a sufragar y debían venir firmados por cuatro Ministros y refrendados por el Escribano de Cámara que lo despachara¹⁰⁰⁹.

Entre otras razones, era muy importante que los títulos y despachos reales contuvieran el Sello del Registro. En caso contrario, era frecuente que las autoridades locales dejaran de cumplimentarlos por falta de registro y los devolvieran a la Corte. Ello además era causa de dilaciones y perjuicios para sus apoderados o encargados¹⁰¹⁰.

El Registrador y Canciller Mayor y su Teniente debían guardar secreto del registro y sello de los despachos y provisiones del Consejo que se libraren de oficio por mandato del Consejo. No podían sacarlos ni dar copia auténtica o cualquier otra forma, ni participar su contenido extrajudicialmente a persona alguna, salvo orden expresa y licencia para ello del Consejo¹⁰¹¹.

¹⁰⁰⁷. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 4.

¹⁰⁰⁸. 'Ley IV, Título XIII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

¹⁰⁰⁹. 'Ley VI, Título XIII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

¹⁰¹⁰. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de 1831.

¹⁰¹¹. 'Ley X, Título XIII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

Por su labor de registro, el Canciller llevaba unos derechos conforme a un arancel aprobado por el Consejo. Debía hacer constar de su puño y letra en el reverso del documento los derechos que se llevaba en cada operación de registro". En 1831 regía el arancel contenido en una Real Cédula de 1740, aclarada posteriormente por nueva Real Cédula de 1758. Al parecer, la antigüedad de este arancel provocaba diversos desajustes en la percepción de derechos y hacía que los ingresos fueran realmente exiguos, según representaba en 1831 el entonces Teniente de Canciller, Sr. Granes". Entre otras razones, Granes alegaba que se había introducido la corruptela en la oficina de que muchas provisiones ya no pasaban por el Registro de la Corte".

1831. Ley VIII, Título XIII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

1831. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de 1831. Granes indicaba también cómo "las tres quintas partes de los despachos que mencionan los aranceles no solamente no existen ni se conocen, sino que el teniente en diez y seis años de oficina no ha oído hablar de ellos ni visto consignados sus antiguos nombres sino en dichos aranceles".

1831. "...la arbitrariedad, la sucesiva variación de atribuciones en los Tribunales, la expedición de órdenes por despachos y cédulas por títulos, no estando aquéllas por abuso sujetas al sello, han hecho no sólo sustraerse a la Cancillería multitud de provisiones, más aún desaparecer enteramente o expedirse en otras formas o por otras oficinas no sujetas al Registro de la Corte, todo en detrimento de los intereses de la oficina" (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de 1831). Las medidas propuestas por Granes fueron las siguientes: "1ª, que en las cláusulas generales de los despachos y títulos, al prevenir la toma de razón después de las palabras 'y de esta mi Carta', se añadan las siguientes: 'sellada con mi Sello Real', como se ejecuta en los que son para el sello de Navarra, cuya medida si la Cámara la contemplase correglada, podría aprobarla desde luego en sus Secretarías; 2ª, que se mandase observar en ellas igual prevención con respecto a las reales Cédulas que con firma de S.M. se despachan, y por abuso o al menos sin razón que se alcance, no están sujetas al sello; y 3ª, que se recordase a dichas Secretarías lo prevenido para que no se admita en ellas para renovación de reales Títulos de oficios enagenados y demás otras certificaciones, que las despachadas por el archivo del Registro instituido para este objeto, con exclusión de las de Contaduría General de Valores y otras oficinas..." Sobre las Reales Cédulas, el informe fiscal añadía que aprate de ser costumbre que las Reales Cédulas no fueran selladas, "se ocasionarían mayores desembolsos con gravamen de los intereses de las partes"

EL IMPRESOR DEL CONSEJO

El Consejo tenía también un impresor oficial, que era designado por la Sala primera de Gobierno. Señalaba Desdevises^{***}, mencionando a Martínez de Salazar, el dato curioso de que no le era exigido juramento especial para entrar a servir su plaza en el Consejo. Sin embargo, sí podía exigírsele en un caso determinado, cuando se deseara guardar secreto de una disposición que conociera por su oficio, antes de su publicación oficial. En tales casos, era el Escribano de Gobierno el que podía exigirle este juramento. En todo caso, el secreto de oficio era una exigencia aneja al puesto^{***}.

(A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de 1831). El Consejo, desatendiendo algunas sugerencias de los Fiscales, no accedió a las peticiones de Granes. El Consejo alegó en su consulta al Monarca que el perjudicado principal y quien debía reclamar era el propietario Marqués de Valera y no Granes; que no era necesario incluir la expresión 'sellada con mi Sello real' después de las Cartas, y que en todo caso sólo se hiciera respecto a los Reales despachos o títulos y nunca respecto a las Reales Cédulas, "que nunca se han sellado" (A.H.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 27 de septiembre de 1831).

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 85.

^{***}. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 739.

El único requisito para entrar a servir su oficio era por tanto la correspondiente Certificación de Nombramiento expedida por el Consejo.

El Consejo de Castilla necesitaba contar con un impresor de su confianza, que en cualquier momento pudiera imprimir con rapidez y eficacia las disposiciones del Supremo Tribunal, de tal forma que en un mismo día pudiera circular una Orden por toda España. Señalaba Martínez de Salazar cómo esta oficina debía contar con los medios adecuados para realizar eficazmente esta misión^{***}.

Las impresiones de Reales Cédulas o Circulares se ordenaban en virtud de Reales Ordenes o Providencias del Consejo, mandadas a través de sus Escribanías de Gobierno^{***}.

En cuanto a su retribución, no gozaba más sueldo que lo que le producían las impresiones que le encargaba el Consejo, que en ocasiones podían ser también vendidas al público en general. Aunque en las Guías de Forasteros aparece como un miembro de la estructura orgánica del Consejo, no cobraba propiamente como vemos un sueldo del Consejo^{***}.

La Imprenta del Consejo pasaba sus cuentas a la Contaduría General de Penas de Cámara, de quien recibía su importe. No sólo cobraba por la impresión realizada, sino también por el coste del papel blanco empleado en ella. No iba incluido por tanto el papel de oficio empleado para la impresión de las Reales Cédulas, ya que este último se lo facilitaba la Escribanía de Gobierno del Consejo.

La Imprenta Real percibió 2.634 reales desde el 1 de julio hasta finales de diciembre de 1816^{***}. Sin embargo, esta cantidad aumentaría sensiblemente en los años siguientes. El coste anual medio aproximado de estas impresiones en la segunda mitad del reinado de Fernando VII llegó a ser de 23.923 reales^{***}. He aquí, por ejemplo, los importes que tuvieron las impresiones de Reales Cédulas y

^{***}. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 739.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 expte. núm. 6.

^{***}. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 740.

^{***}. A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de 1816, folio 1.244.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6; las impresiones efectuadas en los años 1819, 1824, 1825, 1826 y 1827 ascendieron a la cantidad de 119.616 reales y dos maravedís.

Circulares en la Real Imprenta en el servicio del Consejo Real: año 1816, 20.291 reales; año 1817, 26.537 reales; año 1818, 30.121 reales; año 1819, 26.450 reales; año 1823, 25.218 reales; y año 1824 35.845 reales****. El coste medio de las impresiones de aquellos años fue de 27.848 reales, lo que es indicativo que el volumen de las mismas decreció ligeramente en la segunda mitad del reinado de Fernando VII, en especial a partir de 1825.

****. A.H.N., Consejo, sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6: los gastos de impresión, junto con otros como papel sellado o correo, son indicativos del volumen de trabajo que tenía el Consejo en un determinado momento.

CONTADORES GENERALES DE PENAS DE CAMARA Y DE GASTOS DE
JUSTICIA DEL CONSEJO. EL RECEPTOR DE ESTE RAMO

Relataba Martínez de Salazar que había en el Consejo de Castilla dos Contadores, uno para lo perteneciente a las penas de cámara y otro para los gastos de justicia y obras pías del Consejo. Y junto a ellos un Receptor común para ambos.

El primero recibía el nombre de Contador General de Penas de Cámara y el segundo el de Contador General de Gastos de Justicia. Ambos tenían a su vez una oficina común en la propia Casa de los Consejos, en la que trabajaba el Receptor General de Penas de Cámara y Gastos de Justicia del Consejo^{****}. Esta oficina o Contaduría constaba de una serie de empleados o subalternos propios, aunque propiamente empleados del Consejo sólo lo eran los tres anteriormente citados. Ambos cargos de Contador y el de Receptor pertenecían por tanto a la estructura orgánica del Consejo de Castilla.

La misión del Contador General de Penas de Cámara era la de controlar las cuentas que anualmente debía presentarle el Receptor General de Penas de Cámara y controlar las multas que se imponían y de las cantidades que eran percibidas por este concepto. Todo ello según una instrucción en la que se especificaba el uso y destino de

^{****}. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 667.

estos fondos. Parece que la vigente en el año 1808 era una instrucción de 1803 "para la administración y beneficio de las penas de cámara"²²².

La Contaduría de Gastos de Justicia era oficio enajenado de la Corona, servido por un teniente con la calidad de Contador. La Contaduría de Penas de Cámara, por el contrario, no estaba enajenada de la Corona y su nombramiento era realizado por el Rey.

La Contaduría despachaba y acordaba con el Ministro Superintendente de este ramo las cartas-órdenes que debían expedirse a los demás subdelegados del Reino, y le daba cuenta de las novedades en torno a la cobranza, satisfacción y buen recaudo de las penas de cámara, así como de dudas que pudieran plantearse en las cuentas de este ramo. También por la misma Contaduría se expedían las órdenes correspondientes²²³.

La Contaduría se encargaba también de tomar razón de todos los libramientos que fueran expedidos por el Superintendente y asimismo de las cantidades percibidas por el receptor por el mismo concepto²²⁴.

El Contador de Penas de Cámara debía llevar cuenta de las comisiones que se encomendaban a los corregidores y justicias tanto dentro de su jurisdicción como fuera de ella. Los corregidores, por su parte, en el término de un mes después de la conclusión de una comisión, debían remitir testimonio al Contador en el que debían constar las condenaciones que se hubiesen hecho o en su caso constancia de no haberlas habido²²⁵.

En la Contaduría debía haber igualmente un libro en el que constasen los lugares a los que pertenecían las penas de cámara y los beneficiarios de ellas por especiales Reales Cédulas.

El Contador debía controlar también las condenas puestas por el Consejo, así como de los títulos de corregidores, alcaldes mayores y jueces de residencia.

También era misión de la Contaduría realizar anualmente un inventario de todas las alhajas pertenecientes

²²². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.724.

²²³. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 689.

²²⁴. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 689. Sobre destino de gastos en el Consejo por penas de cámara puede verse A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811, expte. núm. 15.

²²⁵. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 689.

al Consejo. Este inventario debía entregarse al portero de estrados cada vez que se nombraba uno para el cargo, quien debía prestar una fianza en garantía de estos bienes al Ministro Superintendente de Penas de Cámara.

Por otro lado existía como hemos visto la figura del Receptor General de las Penas de Cámara, encargado de percibir el importe de todas las condenas por este motivo, así como el de pagar las libranzas que se dieran. El Receptor de Penas de Cámara ejercía al mismo tiempo el cargo de Receptor y Depositario de Gastos de Justicia del Consejo"".

El Receptor General de Penas de Cámara debía pagar al contado y de ello debía tomar la correspondiente razón el Contador. Otras obligaciones suyas eran: satisfacer sueldos, ayudas de costa y otros gastos""; cada año junto con el Contador debía reconocer las cuentas y relaciones, y para ello debía tener un libro de cargo y data; igualmente debía tomar razón de las comisiones del Consejo, y en su caso debía informar de las cantidades que hubiesen percibido y satisfecho; también debía tomar razón de las cantidades libradas al Receptor; debían despachar ejecutorias para la cobranza de penas de cámara y gastos de justicia; toda carta de pago dada por el receptor de lo que recibiere debía ser comunicada al Contador para su toma de razón"".

El Receptor y Contadores debían llevar un libro de cuenta y también razón separada de las condenaciones que se hicieran por el Consejo de Castilla y por los jueces de comisión, tanto en las residencias y visitas como en las causas criminales. En ningún caso debían mezclar estos efectos con los demás pertenecientes a penas de cámara.

Los Contadores de Penas de Cámara y Gastos de Justicia cobraban mediante arancel y señalamiento de derechos"".

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 690.

"" Antes de realizar cualquiera de estos gastos debía recibir la correspondiente certificación del Contador (MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 691).

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 691.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 692. Entre los empleados de esta Contaduría señalaba Martínez de Salazar la figura de un Agente asalariado, que tenía la obligación de asistir diariamente a las Escribanías de Cámara del Consejo a pedir y recoger certificación de las multas y condenaciones que se hubieran impuesto. Las certificaciones reunidas las debía presentar en la Contaduría para que por ella se dieran las órdenes correspondientes para la exacción

EL RELOJERO DEL CONSEJO

Finalmente vamos a mencionar solamente la existencia de un empleado del Consejo de Castilla conocido como el Realjero del Consejo. Pocas cosas sabemos de él, por las escasísimas referencias que nos han llegado. No parece fuera propiamente un empleado del Consejo de Castilla, sino más bien un artesano que hacía trabajos para el Consejo. Sin embargo, parece sí tenía una asignación anual por sus servicios, de forma que no cobraba por reparación realizada, sino de forma global al año. En 1824 esta asignación estaba cifrada en 1.100 reales de vellón al año y sabemos que su nombre era don Ramón Prodiz. Sus cometidos eran velar por el buen funcionamiento de los relojes del Consejo -muy especialmente del reloj de la Sala primera de Gobierno que daba hora a la entrada y salida del Supremo Tribunal-. Además del mantenimiento, sería llamado cada vez que hubiera alguna reparación.

Figuras parecidas a esta del Relojero del Consejo debió haber varias más en el Supremo Tribunal. Otras fuentes hablen del "carpintero del Consejo"****, encargado del montaje de estrados, reparaciones y fabricación del mobiliario del Consejo.

y cobranza.

****. Ver por ejemplo el legajo 2.874 núm. 5 de la Sala de Gobierno (A.H.N., Consejos).

EMPLEADOS DE ESCRIBANIA

Los empleados de las Escribanías de Gobierno y de Cámara del Consejo eran de varias clases: la categoría de los oficiales, graduados en oficial mayor o primero, oficial segundo y oficial tercero, los oficiales escribientes y, finalmente, la figura del portero de Escribanía de Gobierno, figura ya estudiada en el capítulo correspondiente a los porteros del Consejo. A estos empleados hemos de añadir el oficio de Repartidor de Pleitos del Consejo.

OFICIALES DE ESCRIBANIA

1. Designación. Número

Estudiamos aquí a los subalternos más importantes de cada Escribanía después del titular o Escribano. Eran nombrados por éste, como una de sus prerrogativas anejas al cargo. Entiéndase bien que este privilegio correspondía al que ejercía efectivamente el oficio de Escribano -fuese teniente o propietario-, y no al dueño de la Escribanía.

La carrera profesional de estos oficiales seguía, como era habitual en los subalternos del Consejo, un cursus honorum. Ingresaban en la oficina como escribientes -incluso había varias categorías de escribientes- e iban ascendiendo poco a poco hasta situarse en la menor de las oficialías^{***}. Seguía aquí el cursus honorum, de tal forma que los oficiales primeros o mayores tenían enormes posibilidades de ascender a un puesto de Escribano de

^{***}. "Unos y otros (oficiales y escribientes), en las respectivas vacantes ascienden por orden de antigüedad y la propuesta ha recaído siempre en la última plaza de escribiente, que es la que supuestos dichos ascensos viene a resultar vacante, siendo el orden observado hasta ahora, a menos que alguno no se haya hecho acreedor a ser ascendido, bien sea por su ineptitud u otra causa que le incapacite" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 45).

Cámara, para lo que el Consejo les había reconocido en diversas ocasiones esta preferencia¹⁰²⁴.

Por ello mismo, sólo muy extraordinariamente era convocado un concurso público para cubrir una plaza de oficial¹⁰²⁵. Habitualmente era el ascenso en escala lo que regía, no sólo en las Escribanías de Cámara y de Gobierno del Consejo, sino en otras muchas oficinas de nuestra Administración de entonces¹⁰²⁶.

Apuntamos aquí también que vamos a estudiar conjuntamente los oficiales de Escribanía de Cámara y los de la de Gobierno, por los múltiples aspectos comunes que presentan ambas figuras. Solamente señalaremos ahora brevemente algunas diferencias entre los oficiales de ambos tipos de Escribanía:

a) En las Escribanías de Cámara de Justicia se observó siempre el orden de oficiales habitual: estaban dotadas de un oficial mayor, un segundo y un tercero. Cada uno de ellos tenía marcadas sus exclusivas obligaciones, yendo de menor a mayor complejidad según la clase de oficial: eran muy sencillas las obligaciones de un oficial tercero, y los muchos años que distaban entre los ascensos¹⁰²⁷ permitían al agraciado adquirir progresivamente los conocimientos necesarios para desempeñar las otras oficialías. Ello también proporcionaba al Escribano un perfecto conocimiento de sus empleados, a la hora de proponer un determinado ascenso.

¹⁰²⁴. Vid. ESTRUCTURA ORGANICA, capítulo correspondiente a los Escribanos de Cámara.

¹⁰²⁵. Un caso fue el que ocurrió en 1823/1824 en la segunda oficialía de la Escribanía de Gobierno de don Bartolomé Muñoz. Se hizo convocatoria pública para cubrirla. Se plantearon muchas dudas -pues suponía saltarse el escalafón-, y oído el informe del Sr. Juez de Ministros el Consejo decidió mantener la convocatoria. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 46).

¹⁰²⁶. El ascenso en escala estaba previsto en todas las Secretarías, incluidas las de Despacho, en las Contadurías y, en general, en todas las oficinas del Reino. Se hacía así para ir adquiriendo la práctica y las fórmulas de rutina que constituían la labor de un empleado público.

¹⁰²⁷. Los avatares políticos del reinado de Fernando VII permitieron en ocasiones rápidos ascensos, no habituales en la larga historia del Consejo de Castilla. Estos ascensos fulminantes se dieron especialmente durante la Guerra de la Independencia y primeros años tras el restablecimiento del Consejo en 1814, y tras el Trienio Constitucional (1820-1823).

b) En las Escribanías de Gobierno no sucedía así. Por reglamento estaba establecida una distribución de negociados por provincias y no por materias o funciones, sistema complejo difícil de modificar. Así cada oficial era independiente uno de otro y lo era todo en su negociado. La única diferencia entre el oficial mayor y el último oficial escribiente era que el primero tenía a su cargo más provincias y negocios que despachar que el segundo. Por ello mismo, a la hora de designar un nuevo oficial de Escribanía de Gobierno, se exigía que al acceder tuviera ya los conocimientos precisos para su ejercicio. De esta manera, las propuestas de candidatos debían ser especialmente cuidadas, ya que una vez ingresados ascendían por antigüedad^{****}. Habitualmente, sin embargo, solía designarse preferentemente a los oficiales escribientes primeros^{****}.

Hemos mencionado que los Escribanos proponían libremente al Consejo los candidatos a cubrir una oficialía. Habitualmente los oficiales en las respectivas vacantes ascendían por orden de antigüedad y la propuesta recaía normalmente en la última plaza de escribiente, que era la que, supuestos dichos ascensos, solía quedar vacante^{****}. A ello añadimos que el Consejo era el que debía aprobar estos

^{****}. Evidentemente se intentaba evitar por todos los medios las discriminaciones que suponían dejar a un lado del cursus honorum a un oficial, por su demostrada incompetencia. Por ello mismo compensaba cuidar especialmente estas propuestas para acceder a oficial. Veamos un ejemplo que tuvo lugar en las Escribanía de Gobierno de don Bartolomé Muñoz, en 1823. Decía así entonces un informe de Muñoz en que se refería a uno de sus oficiales: "...don Rafael Díaz de la Vega, oficial cuarto, aún cuando califique su conducta, tampoco puede ascender a dichas plazas, porque es notoriamente inepto, sin que jamás se le haya podido confiar trabajo alguno mental ni otro que hay sido muy material... 25 de junio de 1823". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975, núms. 45 y 47).

^{****}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975, expte. núm. 45.

^{****}. A menos que excepcionalmente, como ya hemos visto, uno no se hiciera acreedor a ser ascendido por su manifiesta ineptitud o por otra causa que le incapacitase (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975, expte. núm. 45). La experiencia de muchos años aconsejaba a los Escribanos del Consejo que no dudasen en excluir a un oficial que no reuniese las condiciones necesarias para la plaza a desempeñar: las propias exigencias del despacho de las Escribanías exigían esta eficiencia. Por otro lado, la exclusión de un oficial del ascenso debía ser motivada. El Consejo realizaba muchos informes antes de aprobar una exclusión de un oficial de una propuesta de ascenso.

nombramientos²⁰⁰⁰ y que habitualmente siempre aceptaba las propuestas de los Escribanos. A los nombrados se les expedían los títulos correspondientes y juraban en el Consejo pleno²⁰⁰¹.

A finales de 1807, la Escribanía de Gobierno de don Bartolomé Muñoz tenía cuatro oficiales y tres escribientes. Los oficiales eran don Damián Juárez (oficial mayor), don Manuel Sande (oficial segundo), don Santos Sánchez (oficial tercero) y don Segundo García Cid (oficial cuarto). Su Escribanía de Cámara de Justicia tenía tres oficiales: don Cosme Miguel García (oficial mayor), don Francisco Poza (oficial segundo) y don Antonio Merendón (oficial tercero).

La Escribanía de Cámara y de Gobierno correspondiente a la Corona de Aragón, servida entonces por don Manuel Antonio Santisteban, contaba con tres oficiales y un oficial escribiente jubilado. Los tres oficiales eran don Pedro Zabala, don Jacinto Velandia y don José Pico²⁰⁰². A ellos parece hemos de añadir dos oficiales más: López, oficial de consultas y con opción a las vacantes de aquéllas; y Rexo, oficial agregado a la Escribanía²⁰⁰³.

Por su parte, la Escribanía de Cámara de don Manuel de Carranza contaba con otros tres oficiales: don Juan Aguado (oficial mayor), don Francisco García y don Manuel Salvador de Carranza. Los tres oficiales de la Escribanía de don Juan Manuel de Reboles eran don Rafael Varza (oficial mayor), don Clemente Reboles y don Valentín Pinilla²⁰⁰⁴.

²⁰⁰⁰. Este sistema aseguraba al Consejo tener buenos oficiales. Por otro lado, el Consejo cuidaba que fueran elegidos aquéllos de mayor honradez y de más mérito. Y esa misma esperanza estimulaba a los oficiales a granjearse el concepto y la estima del Tribunal.

²⁰⁰¹. Al parecer, la práctica de la libre designación por los Escribanos de Cámara se observó fielmente hasta fines del siglo XVIII. Desde entonces se fue fomentando el mencionado cursus honorum que daba paso a los escribientes a las oficialías de las Escribanías. Con ello se conseguía que estas oficinas claves del Consejo estuvieran formadas por personal altamente cualificado y experimentado, tras muchos años de servicio en los entresijos de una Escribanía.

²⁰⁰². A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

²⁰⁰³. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 46.

²⁰⁰⁴. Obsérvese la repetición de apellidos entre estos oficiales y sus Escribanos: Pico, Reboles o más adelante Ayala, Abad o Salazar. Era corriente conseguir el ingreso de

Nos quedan por mencionar tres Escribanías de Cámara: la de don Manuel de Peñarredonda, con otros tres oficiales: don Tomás de Ayala (oficial mayor), don Antonio Martínez Abad y don Vitores Vicario; la de don José de Ayala, con don Dionisio del Campo (oficial primero), don Pedro Antonio Echevarría y don Manuel José de Villegas; y la de don Manuel Pico Santisteban, con don Florentín Yanguas, don Félix Rey y don Pedro Ceza****.

Vemos por tanto que la estructura habitual de una Escribanía era la de tener tres oficiales. Sólo las Escribanías de Gobierno, por su importante volumen de trabajo, tenían cuatro o cinco oficiales****.

La Guerra afectó a todos los subalternos del Consejo y los oficiales de Escribanía no fueron una excepción****. La consecuencia fue la promoción de algunos

parientes en el Consejo a través de estas oficinas. Un documento de la época nos confirma esta idea: los empleos de las Escribanías de Cámara estaban muy vinculados a la tradición familiar. Este era el caso, por ejemplo, de don Antonio Martínez Martín, oficial primero de la Escribanía de Cámara en 1814, al restablecerse el Consejo. Su tío don Francisco López Navamuel fue Escribano de Cámara. También su padre don Antonio Martínez Abad lo fue durante cuarenta años; él mismo, a la edad de quince años, fue escribiente de su padre por espacio de catorce años; en 1803 fue nombrado oficial tercero y en 1806 oficial segundo. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

****. En 1808, como hemos visto, la de Gobierno de Aragón tenía concretamente cinco oficiales: aparte de los tres primeros, tenía un cuarto llamado de consultas, y un quinto agregado con sueldo de 300 ducados anuales. Incluso aquel año vino un sexto oficial a la primera de Gobierno, con el carácter de supernumerario, que había estado empleado en La Coruña en el Real Servicio. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 46).

****. Así, por ejemplo, en la Escribanía de Cámara de Gobierno de Muñoz cada uno tomó su propio camino: don Damián Juárez, el oficial mayor, permaneció en Madrid; don Manuel Sande salió de Madrid, pero no siguió al Consejo; el oficial tercero don Santos Sánchez pasó a Cádiz y fue colocado por la Regencia, pasando a ser oficial segundo de la Secretaría de Estado; el oficial cuarto don Segundo García Cid pasó a Cádiz, donde sirvió al Consejo de Castilla de Escribano de Cámara y posteriormente en el Tribunal Supremo de Justicia. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46). De la Escribanía de Gobierno de Aragón sabemos que el oficial primero, Zabala, quedó en Madrid, lo mismo que el oficial agregado Rero; otros dos fallecieron durante la Guerra:

oficiales de Escribanía a puestos de Escribanos, así como el nombramiento de nuevos oficiales para cubrir las vacantes***.

De todos los oficiales de Escribanía del Consejo de Castilla, tan sólo cinco huyeron con las instituciones del gobierno legítimo a Sevilla y Cádiz. El Consejo reunido se valió de éstos con arreglo a sus méritos y antigüedad. Nombró el Supremo Tribunal a otros oficiales**** valorando los méritos de la emigración, los conocimientos de la práctica del Consejo y la disposición para desempeñar el destino que se les encargaba.

Al suprimirse el Consejo reunido, sus dependientes optaron por seguir en cualquiera de los

Velandía en Cádiz y José Pico en Madrid; y López, oficial de consultas, huyó a provincias para regresar a la Corte en 1814. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46). Como dato anecdótico citaremos también lo ocurrido a don Dionisio Antonio del Campo, oficial de pleitos de la Escribanía de Cámara de don José de Ayala, que en la Bajada de San Felipe el Real el día de San Lorenzo de 1812, cuando tenía 73 años, fue atacado por un soldado francés que le propinó un culatazo, cayendo gravemente herido con la cabeza abierta y sangrando abundantemente. Estuvo 24 días convaleciente. Su casa fue saqueada tres veces antes y dos después de su llegada. Su mujer se accidentó, enfermó y murió a los nueve días. En 1814 fue reclamado por el Consejo, encontrándose entonces gravemente enfermo. Falleció el 7 de marzo de 1818. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 3.026 expte. núm. 46; y 4.180).

***. Así, por ejemplo, la Junta Suprema Central, en consulta de 4 de agosto de 1809, nombró a las personas que estimó más idóneas la el desempeño de las funciones de oficiales de Escribanías de Cámara, del Consejo reunido, a propuesta de los Escribanos de Cámara. Por resolución de la Junta Central quedó nombrado don Sebastián Salcedo oficial primero de la Escribanía de Cámara de este Consejo Supremo de España e Indias, que estaba a cargo de don Jacinto Velandía -Velandía en 1808 era oficial segundo de la Escribanía de Gobierno para Aragón-. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 46).

****. En consulta de 4 de agosto de 1809 hizo presente el Consejo de Castilla a la Junta Central las personas que estimó más idóneas para desempeñar las plazas de oficiales de Escribanía, precedida la propuesta de los Escribanos de Cámara. Entre otros nombramientos, destacamos el de don Sebastián Salcedo oficial primero de la Escribanía de Cámara del Consejo reunido. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

Consejos restablecidos^{***}. Unos fueron al Consejo de Castilla, otros al de Indias^{****}, etc. Al suprimirse los Consejos, algunos se incorporaron al Supremo Tribunal de Justicia^{****}.

Ya hemos visto en otras figuras de la estructura orgánica del Consejo cómo al restablecerse éste en 1814 se optó por dar preferencia a los empleados que lo servían en 1808, según su antigüedad. De esta manera, todos los promocionados durante la Guerra como consecuencia de las vacantes creadas se vieron postergados y perjudicados en sus derechos. Incluso algunos que se quedaron en Madrid sirviendo al Gobierno intruso quedaron por delante en el escalafón. Todo ello levantó protestas y distintas instancias y representaciones ante el Consejo de Castilla.

Restablecido el Consejo por Decreto de 27 de mayo de 1814, se verificó su instalación el 4 de junio siguiente. En aquel día fueron habilitados los subalternos que servían en el Consejo en 1808, que no tuvieran tacha legal, y para los que faltasen se acudiría a los que sirvieron al Consejo en Sevilla y Cádiz, por orden de

^{***}. Así, al mencionado Salcedo se le confió en el Consejo de Castilla la plaza de oficial mayor más antiguo y de la primera y más antigua Escribanía de Cámara. También se le concedió en propiedad la de Tasador de Pleitos del mismo, (A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.026 núm. 46). Al restablecerse el Consejo en 1814, los empleados que sirvieron al Consejo en Cádiz sufrieron la suspensión y postergación de sus oficios. Según el Decreto de 1814, se cubrirían las plazas con los empleados que tenía el Consejo en 1808 y para cubrir las vacantes se acudiría a los empleados en Cádiz. En el caso del mencionado Salcedo parece que ni siquiera se cumplió el decreto, ya que se dio el destino de oficial mayor de la Escribanía de Cámara a un oficial segundo de los que quedaron en Madrid.

^{****}. Por ejemplo, don Gregorio Vicente y Gil, oficial de la Secretaría de Cámara del Consejo a principios de 1809 que, instalado el Consejo de Castilla, pasó a ser oficial de la Secretaría del Consejo de Indias por lo correspondiente a Nueva España; también don Santos Sánchez, oficial tercero de la Escribanía de Gobierno de don Bartolomé Muñoz, fue nombrado por la Junta Central oficial mayor de la Secretaría del Consejo reunido. Después fue promovido a oficial mayor de la Secretaría del Consejo de Indias, también por lo correspondiente al Reino de Nueva España. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180).

^{****}. Fue el caso, por ejemplo, de don Manuel Abad, que habiendo sido primer oficial escribiente de la Escribanía de Gobierno de Muñoz, pasó al Consejo reunido y luego al Supremo Tribunal de Justicia con el rango de Escribano de Cámara (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180).

antigüedad"".

Por Real Orden del Consejo pleno de 19 de julio de 1814 se mandó a los subalternos del Consejo que servían en 1808 que se sometieran a un proceso de purificación:

"Hágase saber a todos los subalternos que servían en el año 1808 en el Consejo y se hallan habilitados interinamente acrediten su purificación en el preciso término de un mes, a cuyo fin la activen ante los Sres. Ministros encargados de esta Comisión"".

Concluidos los procedimientos de purificación, en Real resolución de 30 de marzo de 1815 se daba a conocer los resultados del dictamen de la Comisión de Purificación"". Todos los oficiales del Consejo quedaban

"". Todo ello con el carácter de habilitación provisional. De esta habilitación se dio noticia a S.M. por medio de oficio del Presidente del Consejo, acompañando una lista de los subalternos que existían y debían incorporarse al Consejo. El Rey la aprobó por Real Orden de 9 de junio de 1814 y acordó el Consejo que se hiciese saber a todos los comprendidos en ella, para que se incorporasen a sus puestos. Así se hizo. En la primeras Escribanía de Gobierno, por ejemplo, don Bartolomé Muñoz pasó los oficios correspondientes a don Manuel Abad, oficial cuarto, a quien se había habilitado para desempeñar la Escribanía de Cámara vacante por muerte de don Manuel Peñarredonda; a don Sebastián Salcedo, nombrado escribiente primero; y a don Gregorio Gil Vicente, escribiente segundo y ausente en la ciudad de Sevilla. Don Santos Sánchez presentó un recurso pidiendo se le tuviese por exonerado y se le borrara de la lista; don Manuel Abad pidió se le habilitase de Escribano de Cámara; don Sebastián Salcedo que se le concediese plaza de oficial mayor de la Escribanía de Cámara vacante; y don Gregorio Vicente Gil contestó que no podía aceptarlo en la forma que se le había asignado: los tres quedaron colocados de oficiales de la Secretaría del Consejo de Indias, por lo correspondiente a Nueva España. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 expte. núm. 35).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

"". He aquí un fragmento de esta Real Resolución:
"Conformándose el Rey con el dictamen de la Comisión de Purificación, relativo a algunos subalternos del Consejo Real, se ha servido declarar comprendidos en la segunda clase a don Bartolomé Muñoz, Escribano de Cámara y de Gobierno, y a los oficiales don Cosme de Miguel, don Damián Juárez, don Manuel Sande, don Francisco Pozo, don Antonio Merendez y en la primera al escribiente don Rafael

purificados, con excepción de don Víttores Vicario Jorge, "sin perjuicio de que acredite en juicio competente las circunstancias que puedan hacerle acreedor a la piedad de S.M." Los oficiales purificados fueron seguidamente rehabilitados en sus empleos³⁸.

Díez Vega.

En la tercera a don Víttores Vicario Jorge, sin perjuicio de que acredite en juicio competente las circunstancias que puedan hacerle acreedor a la piedad de S.M., y en la segunda a don Antonio Martínez, ambos de la Escribanía de Cámara de don Segundo García.

En la segunda a don Valentín Pinilla, don Rafael Varza y don Clemente Reboles.

En la segunda don Manuel de Carranza, don Juan Aguado Moreno, don Francisco García y don Manuel Salvador Carranza.

En la segunda a don Manuel Pico Santisteban, y en la primera a don Manuel Payo, pero con la calidad de que se le reduzca a la segunda si resulta que sirvió su destino en tiempo del Intruso.

En la segunda a don José Ayala, don Dionisio Antonio del Campo y don Antonio Echevarría, y en la primera a don Manuel Abad.

En la segunda a don Manuel Antonio de Santisteban, Escribano de Cámara y de Gobierno del Consejo, a don Pedro Zabala, don Santiago Reso y don Lucas López (...).

Y es la voluntad de S.M. que el haber servido los expresados en la Junta de Negocios Contenciosos y especialmente los dos Escribanos de Gobierno del Consejo, no les pueda perjudicar en su buena opinión ni para obtener las gracias a que sean acreedores por sus buenos dilatados servicios...30 de marzo de 1815".

***. He aquí un fragmento de la Real Orden de 5 de abril de 1815: "...Se rehabilita y se repone en sus empleos que servían en el año 1808 a los comprendidos en la primera y segunda clase, y se les da pase el oficio correspondiente para su satisfacción; y que continúen en el ejercicio de dichas plazas o de las que hubiesen optado por nombramiento interino del Consejo. Y a los nombrados para servir interinamente las que estaban vacantes, se les expidan los títulos en la forma ordinaria para su continuación y percibo de los sueldos asignados a sus destinos y entren a hacer el juramento correspondiente. Por lo que hace a don Víttores Vicario y don Tomás Payo, los respectivos Escribanos de Cámara les hagan saber la Real Resolución de S.M. para los efectos convenientes. Pásese certificación de ella a la Tesorería General y demás oficinas que corresponda para el abono de sueldos desde la instalación del Consejo y demás sucesivos a dichos interesados, y se haga presente en las demás Salas".

(A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 expte. núm. 38). Al parecer, tanto don Víttores Vicario como don Tomás Payo fueron finalmente también purificados. El primero

También sabemos por algunos de estos documentos que algunos de estos oficiales colaboraron activamente con los ejércitos españoles durante la Guerra"".

Ya vimos en su momento, al estudiar las Escribanías de Cámara, cómo fueron frecuentes las instancias de los oficiales mayores de las Escribanías defendiendo sus derechos preferentes a la hora de cubrir plazas de Escribanos de Cámara, tanto de forma efectiva como en interinidades"".

Una noticia de 1815 nos dice que en aquel año fue creada la quinta plaza de oficial en la Escribanía de Gobierno de don Bartolomé Muñoz"". Igualmente fueron cubiertas todas las vacantes en las distintas oficialías de ésta y de las demás Escribanías del Consejo"".

ascendió a oficial segundo de la Escribanía de Cámara de don Manuel Peñarredonda el 27 de febrero de 1819; el segundo continuaba en 1819 como oficial segundo de la Escribanía de Cámara de Pico Santisteban (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180).

"". Don Antonio Martínez Martín, oficial primero de la Escribanía de Cámara, envió a la Artillería de los Ejércitos Españolas 21 mulas que eran de su propiedad y que fueron apresadas en las desgraciadas batallas de Almonacid y toma de Málaga; Santiago Rexo Peñuelas sacó de la Corte para el Ejército de Valencia con riesgo de ser capturado por los franceses, un carro de fusiles, otro de monturas, cañanas, municiones y uniformes para las partidas; en otras ocasiones llevó pliegos y noticias, y fue perseguido por el Ministro de policía Arribas y le fue formada causa por el Comisaire Lafabrier, según constaba en el acta de purificación que se conservaba en el Ayuntamiento de Madrid (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3026 núm. 46).

"". Vid. capítulo correspondiente de Escribanos de Cámara. Un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, expte. núm. 46.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 45. Ya antes de 1808 Muñoz había informado en diversas ocasiones al Consejo sobre la necesidad de aumentar las plazas en dicha Escribanía, "por no ser suficientes las que entonces eran de su dotación". Después de 1814, los asuntos del Consejo aumentaron considerablemente y se hizo necesaria la creación de esta nueva plaza. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 núm. 35).

"". En agosto de 1814 había en la Escribanía de Gobierno de Muñoz dos vacantes de oficiales y dos de escribientes: para oficial tercero fue propuesto don Francisco Poza y Muñoz, oficial segundo de la Escribanía de

El Trienio Constitucional afectó nuevamente a este capítulo de la estructura orgánica del Consejo, distribuyéndose muchos de estos oficiales por otras instituciones del Estado^{****}.

Cámara de Justicia desde la instalación del Consejo; y para oficial cuarto se propuso a don Roque García Teresa, durante muchos años escribiente en dicha Escribanía de Gobierno. También por entonces fueron creadas dos plazas más de escribientes.

^{****}. Veamos con detalle el destino de estos oficiales de Escribanía en aquellos años: la Escribanía de Gobierno del Consejo por lo referente a los Reinos de Castilla y León presentaba la siguiente situación: Muñoz quedó cesante; el oficial mayor don Francisco Pozas quedó cesante también, con crecida familia, y después de algún tiempo se le destinó a la Contaduría del Crédito Público de la ciudad de Toledo; don Roque García, oficial segundo, quedó cesante y pasó a servir de oficial en la Secretaría del Jefe Político de Madrid. Falleció durante el Trienio; don Manuel Cerezal quedó cesante; don Rafael de Vega quedó cesante y después de algún tiempo fue empleado en la Contaduría de Encomiendas; don Ventura Rubio quedó cesante y fue empleado en la Secretaría del Jefe Político de Madrid, y al parecer después pasó a servir la Secretaría del Gobierno Político de la provincia de Soria. Por su parte, la Escribanía de Cámara de Justicia de Muñoz tenía en 1820 tres oficiales. El mayor era don Cosme de Miguel García, que estaba habilitado por el Duque Presidente para despachar en sus ausencias y enfermedades. Falleció el 6 de enero de 1823; don Antonio Merendón era oficial segundo y habiendo quedado cesante pasó a ser oficial de una de las Escribanías de Cámara de la Audiencia Territorial de Madrid; don Marcelino García, oficial tercero, quedó cesante con familia numerosa y avisó desde Avila el 3 de mayo de 1820 que habiéndose restablecido en aquel día la Diputación Provincial, se le había repuesto por la misma en el destino de Secretario, que ya había ejercido en 1814. La Escribanía de Cámara y de Gobierno de la Corona de Aragón era ejercida en 1820 por don José de Ayala, que quedó cesante, así como los tres oficiales de la Escribanía, don Pedro Zabala, don Lucas Bartolomé López y don Santiago Rero. Los tres continuaban en el Consejo en junio de 1823. La Escribanía de Cámara de don Valentín de Pinilla quedó también vacante. Su titular fue propuesto por el Tribunal Supremo de Justicia para auxiliar a los Escribanos de Cámara de aquel Tribunal, aunque Pinilla se excusó. En 1823 tenía los mismos subalternos que componían su Escribanía en 1820, estando sólo sujeto a purificación don Clemente Reboles, por haber servido el destino de oficial segundo del Archivo de Tesorería General. Don Manuel Abad fue cesado como Escribano de Cámara del Consejo y se le nombró Escribano de Cámara en propiedad del Tribunal Supremo de Justicia, así como Secretario de Gobierno de este Tribunal. No hemos encontrado noticias sobre los oficiales de esta Escribanía durante el Trienio. En

A partir de 1823 se inició un proceso de purificaciones políticas. Obedeciendo a lo mandado en la Real Cédula de 1 de julio de 1823, el Consejo pleno, en su reunión de 9 de julio, mandó a la Escribanía de Gobierno que formase listas de todos los empleados del Supremo Tribunal, con vistas a su purificación***.

Así, desde el 31 de julio de 1823 en que era purificado don Gil de Ayala, oficial mayor de la Escribanía de Cámara que ejercía en marzo de 1820 don Damián Juárez, la práctica totalidad de los oficiales de Cámara del Consejo pasaron la purificación***.

cuanto a la Escribanía de don Antonio Martínez Abad: el titular fue cesado y después habilitado por el Tribunal Supremo, para auxiliar a los Escribanos de Cámara de aquel Tribunal. Falleció el oficial primero don Juan Aguado Moreno el 12 de noviembre de 1822 y también el segundo, don Francisco García, el 8 de julio de 1821. En 1823 estaba sólo el oficial tercero, don Manuel de Carranza, que fue declarado cesante por el Gobierno constitucional y continuó como tal hasta el restablecimiento del Consejo Real. No obtuvo destino ni nombramiento alguno del Gobierno Constitucional. En la Escribanía de don Damián Juárez, su oficial primero, don Gil de Ayala, quedó cesante y fue nombrado con destino al Archivo de la Secretaría de los Reinos de Nueva España; don Tomás Velandía, oficial segundo, quedó también cesante y fue nombrado oficial en la Real Biblioteca; don Francisco de Paula Robles era oficial tercero, quedó cesante y por no haberle correspondido más que una escasa renta, se retiró a su tierra natal.

***. Con fecha 9 de julio de 1823 fue aprobado en Consejo pleno el Real Decreto siguiente: "La Escribanía de Gobierno tomando razón de los dependientes de este Supremo Tribunal y de sus oficinas subalternas, forme listas expresivas de ellos, por clases y oficinas; igual diligencia practique respecto de los dependientes de las Secretarías de la Cámara y de los de la Presidencia, a cuyo fin se pasen los oportunos oficios a los respectivos señores secretarios, haciendo saber a aquéllos inmediatamente que los que se hallen en los casos que señala la Real Cédula de primero del corriente mes, ocurran a este Supremo Tribunal por el conducto de la misma Escribanía de Gobierno con las solicitudes que crean convenientes, a efecto de que tenga cumplimiento la expresada Cédula y puedan acordarse las providencias que correspondan". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608 expte. núm. 9).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 expte. núm. 2. Algunos oficiales purificados fueron los siguientes: don Rafael Díez de Vega, oficial cuarto de la Escribanía de Cámara de don Bartolomé Muñoz, el 9 de agosto; don Vitores Vicario, oficial segundo de la Escribanía de Cámara de don Antonio López de Salazar, el 7 de agosto; don

Otros informes de 1823 y 24 nos describen la situación de estos oficiales y de las Escribanías en aquellas fechas posteriores al Trienio Constitucional^{***}. Eran momentos de purificaciones sucesivas y de propuestas para cubrir las vacantes que iban quedando. Llama la atención que las resoluciones de la Comisión de Purificación iban apareciendo casi semanalmente^{***}.

Algunos, sin embargo, no fueron purificados: don Tomás Payo Sanz^{***}, oficial segundo de la Escribanía de don Manuel Abad, a quien fue comunicada la negativa el 12 de mayo de 1824 -"No ha lugar"-, y a quien más tarde, tras recurrir, el Consejo confirmó la impurificación; el otro fue

Antonio Joaquín Merendón, oficial segundo de la Escribanía de justicia de Muñoz, el 25 de agosto; don Tomás Velandía, oficial segundo de la Escribanía de Cámara de don Damián Juárez, el 27 de septiembre; don José de la Riva y Peña, oficial tercero de la Escribanía de Cámara de don Manuel Abad, el 24 de agosto; don José Valcárcel, oficial cesante de la Secretaría del Consejo reunido, repuesto el 9 de junio de 1825.

^{***}. Estos informes respondían a lo mandado en el decreto de 7 de junio de 1823. Por ejemplo, así describía la situación de su Escribanía don Gil de Ayala el 25 de mayo de 1824: "En ella sólo existe actualmente el oficial tercero de la misma don Francisco Robles y un paje o escribiente indispensable para la atención de los despachos, certificaciones, etc., y sus minutas que le dicto en el día y cuyo cargo pertenece al oficial mayor que en las de su clase debe haber. Por la mucha escasez de negocios y un poco más de ataeramiento mío, no padecen hoy atraso alguno aquéllos, más en el caso, como es de esperar, que se aumentasen, no sobrarían oficial mayor, segundo y tercero, que es su dotación fija con cargos determinados a cada uno, como son buscas, ordenatas, entrega de autos a las partes y arreglo de papeles..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 expte. núm. 11).

^{***}. Así, el 31 de julio de 1823 era purificado, como hemos visto, don Gil de Ayala; el 1 de agosto don Tomás García Cid, junto con otros dos oficiales, don Clemente Reboles (1 agosto 1823) y don Mateo José López (1 agosto 1823); seguidamente don Vitores Vicario (7 de agosto 1823), don Rafael Díez de Vega (9 agosto 1823), don Antonio Joaquín Merendón (25 agosto 1823), don Tomás Velandía (27 septiembre 1823) (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 expte. núm. 2).

^{***}. Recordemos la Real Orden de 5 de abril de 1815, en la que don Tomás Payo Sanz aparecía con algunas prevenciones por sus servicios al Gobierno intruso. En aquella ocasión resultó finalmente purificado. Ahora, en 1824, quizás un tribunal más severo no permitió su nueva purificación.

don Francisco Poza, oficial mayor de la Escribanía de Gobierno del Consejo, quien recurrió su impurificación, que le fue confirmada por el Consejo el 16 de septiembre de 1824""; y don Ventura Rubio, oficial cuarto de la Escribanía de Gobierno de Muñoz, quien no llegó a solicitar su purificación"".

Debemos destacar que también se sometió a purificación un oficial cesante de la Secretaría del Consejo reunido, don José Valcárcel Data, quien fue repuesto el 9 de junio de 1825.

Como mientras no fueran purificados los oficiales de las Escribanías no podían ejercer sus empleos, los Escribanes debieron valerse de personas idóneas mientras se iban purificando sus empleados"".

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 expte. núm. 2.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 expte. núm. 11.

"" Así, por ejemplo, en la Escribanía de Gobierno de Muñoz fueron habilitados por el Consejo, a propuesta de éste, don Juan Rubio Carrillo, don José Pérez y don Vicente Vizcaino, sin designación de plaza determinada y con la dotación de 300 ducados (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 expte. núm. 11). He aquí una interesante descripción de la situación de la primera Escribanía de Gobierno, escrita de puño y letra de su titular, don Valentín de Pinilla, fechada el 9 junio de 1824: "Estado actual que ésta (la Escribanía) tiene: El oficial mayor don Francisco Poza no se halla en ejercicio por estar impurificado hasta hoy. Lo está también el oficial quinto don Ventura Rubio, y el escribiente primero don Pedro García Teresa, y se halla vacante la plaza de oficial segundo por fallecimiento de don Roque García Teresa; y entre tanto no se decida la suerte de dichos dependientes impurificados, no es fácil el arreglo de esta oficina ni la resolución del expediente pendiente en solicitud de él. Tampoco pueden saberse las vacantes que deberán resultar y si podrán ser atendidos en ellas don Vicente Vizcaino, don Juan de Dios Rubio Carrillo y don José Pérez, que en los principios del restablecimiento del Consejo fueron habilitados sin consideración a plaza determinada e interinamente, para poder atender al despacho de los negocios del momento, habiéndoles concedido el goce de 300 ducados para atender a su subsistencia, y aunque desde aquella época se han purificado y repuesto en sus destinos el oficial cuarto don Rafael Díez Vega y el escribiente segundo don Agustín Montañano, todavía no son gravosos aquéllos al Estado; porque aún resultan por purificar el oficial mayor, el oficial quinto y el escribiente primero, y está vacante la plaza de oficial segundo..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 expte. núm. 11). Se puede ver otro

En alguna Escribanía no se notaron los efectos del Trienio ni de las purificaciones. Fue el caso, por ejemplo, de la de Gobierno y Justicia de la Corona de Aragón a cargo de don José de Ayala: tenía por dotación tres oficiales, que se hallaban en 1824 en ejercicio sin que hubiera habido vacante alguna"".

Las vacantes que resultaron en amplics estratos de la Administración y concretamente en el Consejo de Castilla y en sus Escribanías, llevaron al Secretario de Gracia y Justicia a pedir al Gobernador del Consejo que propusiese los subalternos necesarios para el buen funcionamiento de las Escribanías del Consejo y de sus Relatorías"".

Una noticia fechada en los años 1823 y 1824 nos indica que por aquel entonces hubo un largo expediente por la convocatoria pública para cubrir una plaza de oficial segundo de la Escribanía de Gobierno. Esta convocatoria suponía saltarse materialmente el tradicional ascenso por escalafón. El motivo de esta decisión, realizada a petición del titular de la Escribanía de Gobierno, era al parecer la incapacidad de los oficiales aspirantes. El Consejo, tras muchos informes, decidió respetar esta convocatoria pública, siguiendo en ello el dictamen del Sr. Juez de Ministros"". En este curioso y excepcional caso, se acudió como en otras

informe parecido en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 expte. núm. 19.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 1; y legajo 3975 núm. 46. Los tres oficiales que trabajaban en esta Escribanía el 30 de junio de 1823 eran don Pedro Zabala, don Lucas Bartolomé López y don Santiago Rexo.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 expte. núm. 19. He aquí el oficio del Secretario de Despacho de Gracia y Justicia: "Excmo. Sr.: Enterado el Rey N. Sr. de la razón que V. E. ha dirigido al Ministerio de mi cargo del número de Relatores que hay en la actualidad en el Consejo, de los que debe haber por dotación y de las Escribanías de Cámara, de Gobierno y de Justicia, con expresión de los oficiales que faltan en ellas, se ha servido resolver que el Consejo proponga los subalternos precisos para que los negocios no sufran atraso; y al mismo tiempo resultando también de la expresada razón que don Manuel Carranza, nombrado para una Escribanía de Cámara en 29 de mayo último no ha tomado todavía posesión de ella por no habersele expedido el título, que la Cámara diga la razón que haya tenido para no haberlo verificado... Madrid, 24 de noviembre de 1824."

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 46.

convocatorias públicas a la publicación de un edicto"".

Sabemos que en 1826 fue jubilado don Rafael Díez de Vega, oficial cuarto de esta Escribanía, por su quebrantada salud y impericia"". Fue sin duda un caso curioso ya que la jubilación se produjo a petición de sus compañeros, quienes debían soportar los continuos errores y olvidos de aquel oficial"".

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 46: He aquí el texto del mencionado edicto: Aviso público para cubrir plaza de oficial segundo de la Escribanía de Gobierno del Consejo:

AVISO

"Hallándose vacante por fallecimiento de don Roque García Teresa la plaza de oficial segundo que obtuvo en la Escribanía de Gobierno del Consejo por lo perteneciente a los Reinos de Castilla, dotada con 400 ducados de sueldo anual y los derechos y demás emolumentos correspondientes a los negocios que deben pasar por ella, los cuales no pueden sujetarse a cantidad específica y determinada; con el objeto de que la elección que en su consecuencia se haga por el Consejo en los términos acordados, recaiga en sujeto de inteligencia y de buena conducta moral y política, ha acordado dicho Supremo Tribunal se anuncie dicha vacante para que los que se hallen adornados de dichas característica y deseen obtenerla, ocurran con sus solicitudes a la misma Escribanía de Gobierno sita en la Plazuela de las Descalzas Reales núm. 6, cuarto principal, en el preciso término de 9 días contados desde la fecha de este aviso, en inteligencia de que el que fuera nombrado quedará sujeto a lo prevenido en el artículo 8 de la Real Cédula de 1 de julio último. Madrid, 21 de agosto de 1823".

"". Así informó el Escribano de Gobierno Muñoz el 25 de junio de 1823: "...don Rafael Díez de Vega, oficial cuarto, aún cuando califique su conducta, tampoco puede ascender a dichas plazas, porque es notoriamente inepto, sin que jamás se le haya podido confiar trabajo alguno mental ni otro que no haya sido muy material..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45; también en el expediente núm. 47 del mismo legajo).

"". Sus compañeros propusieron incluso al Consejo pagar entre todos ellos la jubilación del mencionado Díez de Vega. Entre sus continuos errores destacaban el retraso habitual en la ejecución de los primeros decretos; que jamás se presentaba una minuta "que no tuvieran que hacerla de nuevo"; estar habituado a "mendigar trabajo" a sus compañeros; indocilidad e insubordinación habituales. A veces parece que se equivocaba por falta de atención o impericia: "En 1.816, en un negocio grave de la villa de Orcajada, en que mandado expedir órdenes a un comisionado de la Chancillería de Granada y a este Tribunal, la de aquél la dirigió a éste y

Por otro lado, el recorte de personal que afectó a todas las oficinas del Consejo, no supuso la supresión de oficialías y sobre todo afectó a los escribientes de estas Escribanías^{***}.

Un Presupuesto del Consejo para el año 1829 nos ayuda a distinguir en la Escribanía de Gobierno de Castilla entre dos clases de oficiales: los de plaza jurada -es decir, los que han debido prestar juramento para acceder a su plaza-, y los de plaza no jurada. Entre los primeros se encontraban los conocidos cinco oficiales de la Escribanía, y de la segunda clase había un sexto oficial, que en realidad era un escribiente primero con opción a aquellas oficialías^{***}. Al parecer, todas las Escribanías del Consejo conservaron su número de dependientes u oficiales hasta la extinción definitiva del Consejo en 1834.

Concluimos este subapartado mencionando dos figuras peculiares de oficial de Escribanía que nos citan las fuentes: de un lado, el oficial agregado, del que sólo sabemos que había uno en 1808, en la Escribanía de Gobierno de Santisteban^{***}, con un sueldo de 300 ducados anuales cobrados sobre los efectos de penas de Cámara y gastos de justicia del Consejo; y por otro, la figura del oficial supernumerario, de los que sabemos hubo varios durante el reinado de Fernando VII^{***}. Por otro lado sabemos que el oficial cuarto de la Escribanía de Gobierno del Consejo era denominado "oficial de consultas".

viceversa, por cuya razón, instruido el Consejo por Muñoz, en providencia de 7 de agosto de dicho año, le multó con 10 ducados con la prevención oportuna de que se le relevó por benignidad en otra del siguiente día 8". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 47).

^{***}. Así, por ejemplo, en la Escribanía de Gobierno de Castilla fueron suprimidas las plazas de escribientes segundo, tercero y cuarto (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6).

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46.

^{***}. En 1808 había uno empleado en La Coruña en el Real Servicio. Y en 1814 encontramos otro en la Escribanía de Cámara de Pico Santisteban, al que se le reconocía derecho a opción a la primera vacante de oficial que se diese en la Escribanía (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

2. Juramento

Ya hemos visto lo particular sobre este punto. Se les expedía los correspondientes títulos y debían jurar su plaza en el Consejo, en la Sala primera de Gobierno^{***}. Seguidamente tomaban posesión de la plaza respectiva en su Escribanía. Frente a otros subalternos de las Escribanías, los oficiales recibían todos el nombre de "oficiales jurados", pues para acceder al cargo debían prestar el debido juramento ante el Consejo.

3. Competencias

1) Oficiales de Escribanía de Cámara

"Corresponde a los Escribanos de Cámara nombrar tres oficiales: el primero entiende en la formación de todos los despachos, coordinar, entregar y recibir pleitos y expedientes y cuidar de su custodia y colocación; hace las notificaciones y demás diligencias que ocurren y a este fin se le aprueba de Escribano, con la limitación de no poder hacer más autos, ni diligencias que las que produzcan las instancias y pleitos pendientes en las Escribanías de Cámara; y está mandado que los escribanos oficiales mayores no sienten las notificaciones por solo la relación que hagan a los procuradores, porque las deben hacer en persona y con

^{***} Por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

toda formalidad"".

El oficial segundo tiene a su cargo el cuidado de firmar y poner corrientes los despachos y cédulas que se expiden, y que se encomienden los pleitos a los Relatores a quienes toca.

El oficial tercero tiene a su cargo llevar y recoger de los Relatores, Agentes Fiscales y otras oficinas, los expedientes y pleitos, tomando recibos que con toda distinción escriben en los Libros de Conocimientos, que tienen formados con separación, uno para los Relatores y otro para los Agentes Fiscales"".

Por diversos informes de las Escribanías, conocemos algún detalle más sobre la labor de estos oficiales: cada uno tenía perfectamente delimitadas sus competencias, por territorios y materias específicas. Sin embargo, la propia dinámica del trabajo exigía que se ayudasen mutuamente en el despacho de los asuntos, en especial en la formación de extractos y ordenación de Reales Cédulas, provisiones, certificaciones, órdenes y oficios, así como en su extensión, recogimiento de firmas, pases de expedientes a los Fiscales, Relatores y demás dependencias del Consejo y búsquedas de antecedentes. También en la formación de los asientos que se llevaban para gobierno y seguridad de las Escribanías. Sin duda el peso mayor del trabajo de los oficiales recaía en su oficial mayor"".

Un informe de la Escribanía de Cámara de don Gil de Ayala y Ayala, con fecha 25 de mayo de 1824, describía sucintamente las competencias que por aquel entonces tenía el oficial segundo: al oficial mayor le ayudaba en la recogida de firmas en despachos y de pliegos del Correo y Cámara, así como el pase de pleitos a los Relatores; también le ayudaban en todas las funciones propias del oficial mayor, en especial en los asuntos de oficio, que interrumpían en gran manera el curso de los negocios de partes; al tercero ayudaban en los pases y recogidas a los Sres. Fiscales, a los Relatores y a todas las oficinas dependientes del Consejo, así como devolución a los juzgados inferiores de los autos que por apelación venían al Consejo. Y en general, se encargaban de buscas, ordenaciones, entregas de autos a las partes y arreglos de

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 660.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 660.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11: "Informe de don Antonio López de Salazar sobre el estado de la Escribanía de Cámara a su cargo, fechado el 24 de mayo de 1.824". Una noticia de 1.824, de la Escribanía de Cámara de don Antonio Martínez nos indica que su oficial mayor era el encargado de la recaudación de los productos de las Escribanías de Cámara en el año 1.818 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456 núm. 59).

papeles''''.

2) Oficiales de Escribanía de Gobierno

Del estudio de la documentación del Consejo en este período podemos conocer con más detalle el importante papel de estos oficiales, mucho más complejo que el desarrollado por los oficiales de Cámara, en relación directa con la labor ejercida por las Escribanías de Gobierno. Para ello vamos a clasificar los oficiales por su rango o categoría dentro de la oficina. Después veremos también algunas notas sobre horarios y forma de trabajo de estos empleados en sus Escribanías de Gobierno.

Los oficiales de las Escribanías de Gobierno se regían por un Reglamento aprobado el 30 de septiembre de 1804, retocado posteriormente por su autor, don Bartolomé Muñoz, con algunas pequeñas modificaciones. En 1816 don Valentín Pinilla, habilitado para el desempeño de la Escribanía de Gobierno, propuso 16 Reglas para el arreglo de aquella oficina, muy desorganizada tras la Guerra y ocupación francesa. El objetivo de estas reglas fue en primer lugar el arreglo y rectificación de matrículas desde la Nueva Planta de 1717. Después se formaron los correspondientes índices e inventarios, y todo ello con el objetivo de evitar retrasos en el despacho de los negocios de la Escribanía.

De esta manera, y utilizando para ello varias fuentes de diversas épocas (1816, 1819 y 1825) podemos reconstruir la asignación de competencias de los oficiales de la Escribanía de Gobierno de Castilla:

1. Al oficial mayor le correspondían en 1816 los asuntos de las provincias de Burgos, Ciudad Rodrigo, Córdoba, Cuenca, Granada, Jaén, Murcia, Extremadura, La Mancha, Sevilla, Salamanca, Valladolid, y la comisión de medias annatas y fiadores. En 1819 llevaba también la extensión de las cédulas y circulares y el despacho de cualquier expediente general que le encargase el Jefe de la Escribanía, así como la revisión de minutas que le fueran enseñadas por sus compañeros.

1804. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

2. El oficial segundo estaba al cargo en 1816 de los negocios de Toledo, universidades de Castilla, registro material de las consultas, e impresiones. En 1819 eran mayores sus atribuciones: los de la Villa de Madrid, de los de la provincia de Toledo, los de las universidades de los Reinos de Castilla y provisión de cátedras; el registro de las consultas de todas clases; las licencias de impresiones; las encomiendas de expedientes y de las cédulas y circulares que le fueran encomendadas por el Jefe de la Escribanía o por el oficial mayor. También las conmutaciones de grados y dispensas de cursos de estudios. En 1825 tenía a su cargo, además, los seminarios y establecimientos de educación e instrucción pública.

3. El oficial tercero no tenía a su cargo en 1816 ninguna provincia, pues sus importantes cometidos exigían dedicación total. Cuidaba de los libros de conocimiento de la oficina, así como de todo documento que salía de ella para los Fiscales, sus Agentes, Relatores y demás subalternos del Consejo. En un informe de 1825 se añadía que debían velar por la exactitud de los asientos de cuanto entraba o salía de la Escribanía, y de extender los correspondientes recibos en los libros existentes al efecto y anular estos recibos al retorno de los papeles.

Un interesante informe fechado el 7 de agosto de 1826 nos da nuevas luces sobre este puesto:

"La plaza de oficial tercero de la Escribanía de Gobierno en nada puede compararse con las de las otras Escribanías de Cámara de Justicia, en las que fácilmente se desempeñan. Esta es la llave maestra de la oficina. La frecuente complicación de unos negocios con otros, y la común y ordinaria unión de antecedentes y de ejemplares o resoluciones en casos que tienen relación con ellos, la hacen sumamente embarazosa. Debe estar en manos de un dependiente con buena memoria y mucha exactitud y discernimiento para hacer en los recibos o conocimientos las indicaciones oportunas y suficientes, con el fin de llegar a conocer lo que cada uno de aquéllos comprende. Es consiguiente y cierta la confusión y la imposibilidad de dar curso a la multitud de Reales Ordenes e instancias que se comunican y presentan, entre tanto que dichos negocios están fuera de ella en poder de los Sres. Fiscales, Relatores u otras oficinas; deben tener el conocimiento necesario de si tienen o no antecedentes a que deban unirse, porque es harto común que los interesados los ocultan o los ignoran... La ordinaria perentoriedad de no pocos

negocios exige mucha actividad y diligencia³⁶⁶⁶.

4. Al oficial cuarto estaban encomendados en 1816 los asuntos de la Villa de Madrid, de maestros de primeras letras y de latinidad, maestras y revisores, consultas de los viernes, entrega de pleitos y expedientes a los procuradores y curadurías de Grandes. En 1819, por el contrario, sus competencias eran las provincias de Madrid, Guadalajara, Canarias, Salamanca y Avila, el asiento del correo, y los maestros de primeras letras, excepto de las provincias vascongadas. En 1825 le correspondía el negociado de maestros y maestras de primera educación y preceptores de latinidad, y las consultas de los viernes o personales con el Rey. También buscar antecedentes y cerrar cartas o pliegos en la comunicación de órdenes generales.

Aparte de ello, también eran funciones suyas en 1826 el registro de Reales Ordenes, la ejecución de los Reales Decretos y la extensión de juramentos de corregidores y alcaldes mayores³⁶⁶⁷.

5. El oficial quinto tenía los asuntos de las provincias de Guadalajara, Islas Canarias y provincia de Madrid menos la Corte. Evidentemente, esto había cambiado en 1819, ya que le correspondía asuntos muy distintos: registro de Reales Ordenes, sus certificaciones y juramentos de corregidores y alcaldes mayores; preceptores de gramática, maestros de niños, y abogados. En el informe de 1825 se mencionaba también que recibía el correo y que le estaban asignadas una o dos provincias.

En todo caso existía la prevención de que todos los oficiales podrían despachar indistintamente los negocios que les fueran encomendados por su Jefe. En el caso de los asuntos generales, copias de las minutas, acuerdos con los Ministros, sería obligación de todos ayudar a oficial mayor en lo que les encargase.

Cada uno entendía de las consultas en las provincias de su cargo, revisándolas el oficial segundo y también el oficial mayor. Este también debía cuidar cuando ocurriesen trabajos extraordinarios de señalar las horas de asistencia para su expedición, y del reparto por igual de estos trabajos entre todos. En los negocios urgentes de la Villa de Madrid debían ayudar todos al oficial encargado. En 1819 se estipulaba también que la dirección de los trabajos del Archivo serían del oficial mayor y segundo.

³⁶⁶⁶. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 47.

³⁶⁶⁷. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núm. 47.

Ocurría con frecuencia que en los casos gravosos o de interés de la causa pública que se agolpaban al cuidado de un solo dependiente, por pertenecer a la provincia o provincias que por el Reglamento le estaba asignada, el oficial se encontraba abrumado de trabajo, mientras sus compañeros se excusaban de ayudarle alegando que aquellos negocios no correspondían a sus mesas. De esta manera, si no intervenía el Escribano o el oficial mayor, con frecuencia muchos expedientes tardaban excesivo tiempo en ser despachados****. Por otro lado, cooperando todos se aprovechaban mejor los correos.

En los dos años siguientes al restablecimiento del Consejo, en 1814, el despacho de los negocios se hizo en común y no por distribución de provincias y materias. Inicialmente el método dio buen resultado. Tras la asignación de materias a cada plaza se notó que cada oficial se limitaba y encerraba en las suyas y se desentendía de las de los demás.

En cuanto a los horarios de trabajo de los oficiales, era de 9:00 am a 12:00 am de la mañana en el Consejo -muchas veces seguían trabajando hasta la 1:00 pm e incluso más tarde-. Seguidamente acudían a la Escribanía, que para el público se abría de 12:00 am a 2:00 pm. Se quejaban por aquel entonces los oficiales que durante aquel tiempo poco o nada podían trabajar. Lo mismo sucedía en las tres horas por la noche en el invierno, y por la tarde en el verano, ya que era continua la afluencia de interesados en relación con sus negocios. Dedicaban todo ese tiempo a darles las oportunas noticias del estado de los mismos.

Con frecuencia los oficiales sacaban de sus oficinas expedientes para llevarlos a sus casas y trabajar allí. En el Reglamento se especificaba que debían evitar el llevarse trabajo a sus domicilios. Sin embargo, esto les servía de excusa muchas veces para no concurrir al trabajo hasta la hora señalada para abrir la oficina, e incluso con frecuencia acudían mucho después****.

Así se expresaba en 1826 don Valentín, Pinilla, Escribano de Gobierno, sobre el trabajo en su

****. Así, por ejemplo, en noviembre de 1826 a la mesa del oficial mayor correspondían las provincias de Extremadura y Andalucía. Por aquel entonces padecían la calamidad de la langosta. Con este motivo, ocurría con frecuencia que debía dictar a veces varias providencias al día para su ejecución, así como veinte, treinta o más órdenes. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 47).

****. Con relativa frecuencia ocurría que la gente debía esperar en la escalera a que viniesen los dependientes para poder abrir la Escribanía, o aún abierta, esperar a que viniese el oficial que podía atender sus asuntos.

Escribanía:

"Ha sucedido también alguna vez en las horas del Consejo necesitarse algunos papeles o noticias, mandar por ellas a la oficina con el que me asiste a la mano, y no poderse hallar ni llevar hasta otro día, por no encontrar en dichas horas dependiente alguno en ella, y tener cada cual guardados en su papelería los papeles que se necesitan o que han de dar aquellas noticias..."

"Por el contrario, los dependientes se deben presentar a las 10:00 de la mañana y aprovechando dos horas en los trabajos antes de abrirse aquélla para el público, atendiendo aquélla con la misma puntualidad en las tres horas señaladas de la noche en invierno, y por la tarde en verano, refutándoseles la asistencia como una de sus principales obligaciones".

"Está prevenido igualmente por Reglamento su concurrencia en las mañanas de días festivos, no sólo por lo que puede ocurrir y ocurre del momento, sino porque en ellos se arreglan papeles, se hacen buscas de antecedentes antiguos que son necesarios y no están tan a la mano como los corrientes y hacen otros trabajos útiles que no pueden ni queda tiempo para ejecutarse en los días de labor. Pero, aunque efectivamente asiste, no se aprovecha el tiempo como corresponde por no quedar uniformidad en las horas de asistencia, viniendo cada uno a lo que le parece. Y es igualmente de necesidad que otra de sus obligaciones sea la de concurrir en los referidos días festivos por lo menos desde las 9:00 hasta las 11:00. Sería útil establecer este sistema de un modo útil y conveniente, y que en los casos de urgencia y necesidad o que lo requiera un negocio en particular, lo ejecuten a las horas que lo señale su jefe sin exceptuar la noche... Valentín Pinilla. 7 de agosto de 1.826"""".

Concluimos este estudio de las competencias de los oficiales de Escribanía de Gobierno haciendo referencia al caso de don Quiterio Urrutia, oficial mayor de la Escribanía de Gobierno que ejercía al mismo tiempo el cargo de alcalde barrio de las Descalzas Reales -barrio en el que, por otra parte, se encontraba la Escribanía de Gobierno-. En el año 1828 solicitó del Consejo ser exonerado del cargo de alcalde de barrio, para dedicarse exclusivamente a su labor en el Supremo Tribunal""".

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 47.

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.759 expte. núm. 24.



4. Honores y privilegios

En 1802 le fueron concedidos a don Cosme Miguel García el grado y honores de oficial mayor de Escribanía de Cámara del Consejo, siendo tan sólo un oficial segundo. Dos años después, en 1804 le fue concedida plaza de oficial mayor en propiedad****.

Los oficiales de Escribanía eran unos importantes subalternos del Consejo. Fundamentalmente por la importante misión que desempeñaban y el cursus honorum que debían seguir hasta llegar a una de estas oficialías: eran sin duda expertos empleados, de cuya pericia y experiencia dependía en buena parte el despacho de los asuntos del Consejo. Esta pericia y el carácter de puesto de confianza que tenían aquellos empleos dotaban a estos oficiales de una relevante consideración pública.

De entre ellos, eran sin duda los oficiales mayores puestos de gran responsabilidad en las Escribanías. Como prerrogativa tradicional, les estaba reconocido el derecho a acceder a una plaza de Escribano de Cámara como culminación de su carrera profesional. E igualmente tenían la facultad de organizar y distribuir el trabajo entre los demás empleados de la Escribanía.

Buena prueba del prestigio y reconocimiento público de estos empleados eran los destinos a los que algunos de ellos tuvieron acceso durante los periodos de convulsión política y en especial durante la Guerra de la Independencia****.

Mencionamos aquí también, para concluir este subcapítulo, la figura del oficial meritorio, que identificamos con una forma de oficial honorífico. No sería propiamente un oficial, pero le estarían reconocidos derechos para aspirar a una plaza efectiva, y en la práctica

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.082, consulta del 29 de abril de 1818.

****. Por ejemplo, don Gregorio Vicente Gil fue colocado por la Regencia de Secretario del Jefe Político de Sevilla.

ese periodo se le computaba como oficial del Consejo. Quizás incluso pudiera ser identificable con la figura de oficial supernumerario. Sabemos, por ejemplo, que don Rafael de Yarza pudo estar ocho años de oficial meritorio en la Escribanía de Cámara de don Bartolomé Muñoz^{***}.

5. Retribución

Los oficiales de las Escribanías del Consejo de Castilla, al igual que los Escribanos, percibían un sueldo fijo y unos emolumentos variables en función de los negocios que pasasen por sus manos y de acuerdo a un arancel^{***} aprobado por el Consejo^{***}.

El sueldo estaba graduado según la categoría que tuviera el oficial. En 1808 un oficial mayor de Escribanía de Gobierno percibía 6.600 reales anuales; un oficial segundo, 4.400 reales y los oficiales tercero y cuarto, 3.300 reales cada uno. Estos sueldos eran iguales en las demás Escribanías del Consejo^{***}. Ya vimos en su momento cómo de estas cantidades era descontada una parte que se entregaba en la Tesorería General del Montepío de Oficinas Reales. Dependiendo de cada caso, habitualmente a un oficial mayor se le descontaban 234 reales; al oficial

^{***}. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.082, consulta del 29 de abril de 1.818.

^{***}. En una representación de los oficiales de las Escribanías del Consejo de 19 de junio de 1.800 pedían un nuevo arancel (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 1).

^{***}. Los derechos devengados según el Real Arancel se cobraban en las mismas Escribanías y no eran firmes hasta su aprobación por el Tasador General de Pleitos.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180. Cfr. también legajo 3.781 expte. núm. 11, "Informe de don Valentín Pinilla sobre la situación de su Escribanía de Cámara, de 9 de junio de 1824".

segundo 156 reales, y al tercero 117 reales"".

Curiosamente, no todos los oficiales cobraban por Tesorería General. En 1818 cobraban por esta Tesorería el oficial mayor y el oficial cuarto de la Escribanía de Gobierno de Castilla, los oficiales primero, segundo y tercero de la Escribanía de Gobierno de la Corona de Aragón y los oficiales primero, segundo y tercero de las Escribanías de Cámara (dieciocho en total). Los demás oficiales cobraban por penas de Cámara (los oficiales segundo y tercero de la Escribanía de Gobierno de Castilla)"".

El Trienio Constitucional influyó necesariamente de forma negativa en los sueldos de los oficiales del Consejo. Al suprimirse el Supremo Tribunal en el año 1820, sus oficiales quedaron como cesantes, con la dotación oficial correspondiente al sueldo -o de los asuntos de oficio e interés general que tramitaban-. Así, un oficial mayor de Cámara percibía entonces 9 reales diarios, 6 los oficiales segundos y 3 los oficiales terceros"".

Un informe"" del Consejo del año 1826 describía con bastante detalle los ingresos de cada oficial de Escribanía en aquella época:

En la primera Escribanía de Gobierno, el oficial mayor gozaba de un sueldo de 8.950 reales pagados por el Real Tesoro. A este sueldo había que añadir los derechos y emolumentos correspondientes y deducir el pago de tres escribientes. De esta manera, sus ingresos quedaban entonces en unos 30.000 reales.

El oficial segundo gozaba a su vez de un sueldo de 4.400 reales. Debía sostener a su costa dos

""". Estas cantidades eran descontadas antes del abono de los sueldos. Una vez ingresadas, por la Tesorería General se hacía la correspondiente carta de pago y de ella se tomaba razón en la Contaduría.

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.333 núm. 11.

""". Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, legajo 32 núm. 63. Ya vimos al hablar de los Escribanos del Consejo cómo presentaron una instancia a las Cortes en 1.820 protestando por sus cortos ingresos, considerando además que cotizaban al Montepío también por sus emolumentos, quer ahora no percibían. Pedían entonces a las Cortes un sueldo superior, proporcionado al que recibían antes de la supresión del Consejo de Castilla.

""". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

escribientes, que deducidos a sueldo y emolumentos le dejaban una cantidad de 22.000 reales.

El sueldo del oficial tercero era algo inferior: percibía 3.300 reales. Debía mantener también un escribiente a su costa, con lo que el valor de la plaza quedaba estimado entonces en otros 22.000 reales.

El oficial cuarto percibía también 3.300 reales de sueldo, más 550 por el encargo de registro de las consultas de los viernes con el rey. Su producto total estaba estimado entonces en 16.000 reales.

También había una plaza de oficial quinto. Fue creada en 1815, con un sueldo de 3.300 reales, y estaba valorada en 10.000 reales. Debía sostener a su costa un escribiente.

En cuanto a la Escribanía de Gobierno para Aragón, las cantidades variaban: el oficial mayor percibía por sueldo 5.300 reales, y por emolumentos o derechos 7.600; el oficial segundo recibía 200 ducados de sueldo y 4.000 reales de emolumentos (total: 6.200 reales); el oficial tercero percibía un sueldo de 1.100 reales, más otros cinco mil por emolumentos^{***}.

Los oficiales de las Escribanías de Cámara cobraban distintos derechos y retribuciones, según su destino y categoría:

En la Escribanía de Cámara de don Valentín Pinilla, un oficial mayor percibía en 1824 la cantidad de 6.600 reales de sueldo y 4.150 reales de emolumentos. Estos derechos pasaron a 3.770 reales al año siguiente (10.370 reales en total en aquel año); el oficial segundo percibía 2.125 reales de emolumentos en 1824 y 1.809 en 1825. Su sueldo permanecía en 4.400 reales anuales; el oficial tercero ganaba 3.100 reales de emolumentos en 1824, y 2.600 en 1825. Aquel año sólo cobró la mitad de su sueldo, por los problemas económicos generales que entonces encontraba nuestra Administración para el abono de sueldos a empleados públicos.

En la Escribanía de Cámara de don Manuel Abad, el oficial mayor percibía en 1825 los 3.300 reales de sueldo, más 2.900 por emolumentos, a los que había que añadir 320 reales anuales por el concurso del Estado de

^{***}. Estos bajísimos sueldos no guardaban proporción alguna con lo que fueron en otra época. Aparte de ello hemos de añadir los retrasos considerables que sufrían los oficiales de todas las Escribanías en el abono de sus sueldos. En 1826 lo habitual eran 10 meses de retraso (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 47).

Cañete^{***}; el oficial segundo tenía un sueldo de 2.200 reales, con unos emolumentos de 1.300.; el oficial tercero tenía un sueldo de 1.100 reales, que junto con los emolumentos formaban 3.000 reales anuales.

En la Escribanía de Cámara de don Antonio López de Salazar, aquel año su oficial mayor cobró 4.000 reales de emolumentos, más los 3.300 reales de sueldo; el oficial segundo 2.200 de sueldo más 1.500 de emolumentos; y el tercero 1.100 de sueldo más 2.400 de emolumentos y derechos.

En la Escribanía de Cámara de don Gil de Ayala, el oficial mayor ganaba 3.300 reales de sueldo y 3.720 de emolumentos; el segundo, 2.200 y 2.025 respectivamente; el tercero 1.100 y 2.120 reales^{****}.

^{***}. Asignación que por entonces tenía simple carácter nominal y que no se cobraba efectivamente.

^{****}. Así se expresaba don Gil de Ayala en un informe conservado en el Archivo Histórico Nacional, con fecha 25 de mayo de 1.824: "...Todos estos cargos en ocasiones de abundancia de negocios son suficientes a que cada uno respective se halle atareado y no ocioso, observando, como que he desempeñado por escala las tres plazas, que la del segundo es en mi concepto la menos dotada, y únicamente siendo el que la obtenga aplicado, puede dedicarse a la extensión en limpio de las provisiones u otros escritos que puedan ofrecerse, y así suplir en algún modo el corto haber que le producen los cargos que tiene, pues no dedicándose al escrito generalmente se produce menos que al oficial tercero, porque aunque éste tiene sólo señalado de sueldo fijo ad honorem 100 ducados y el segundo 200, los pases y recogidas como apreciación más frecuente hace junto a aquél más haber en los derechos que el oficial segundo. El mayor se halla dotado con 300 ducados y los trabajos de su obligación son más continuos y por consiguiente de mayor producto, aunque éste no puede asegurarse de fijo cuál sea pues la abundancia o escasez de litigios lo determinan. Y agregándose a esto, como va dicho, los muchos negocios de oficio que continuamente se ofrecen, puede asegurarse no corresponda al trabajo el haber que resulta. En caso en que por enfermedad faltase alguno de los tres individuos referidos, con la unión y política que corresponde en los de su clase, suplen los unos los cargos de los otros; más esto no quita para que como va dicho antes, teniendo suficiente trabajo dotado o señalado cada uno, en ocasiones que abunden los negocios, sólo haciendo un esfuerzo se pueda conciliar el rápido y expedito curso de los mismos con el corto haber que tienen estas plazas, que es decir que su dotación, faltando asuntos de litigio, no es ni aún mediano para subsistir estos individuos con el decoro que corresponde a los dependientes del Consejo. Por tanto lo cual opino que no es susceptible minoritar el número de oficiales ni acortar la miserable dotación con que

Los ingresos de los oficiales de la Escribanía de Cámara de don Manuel Carranza eran aún inferiores: el oficial mayor cobraba en total 5.332 reales (3.300 de sueldo); el oficial segundo 3.374 reales (2.200 de sueldo); y el oficial tercero 2.718 reales (1.100 de sueldo).

Por su parte, los sueldos de los oficiales de la Escribanía del entonces recientemente fallecido don Antonio Martínez eran los siguientes: oficial mayor, 6.824 reales (3.300 de sueldo); el oficial segundo, 4.650 reales (2.200 de sueldo); y el tercero 4.650 reales (1.100 de sueldo).

De todos estos datos podemos extraer una serie de conclusiones: evidentemente, la progresiva reducción de los sueldos y de los emolumentos de los oficiales de Escribanía fueron consecuencia de la pérdida de competencias por el Consejo y de la reducción de los negocios que pasaban por sus manos^{***}. Ello también es indicador de la patente pérdida de relevancia de esta institución dentro del conjunto de nuestra Administración. De otro lado, es significativo el retraso importante en el pago de los sueldos, así como que éstos con frecuencia se abonaban sólo por la mitad de su valor. Si a ello añadimos que los ingresos colaterales por memorias y rentas de estados tampoco solían dar frutos, comprobamos cuál era el estado real de nuestra Administración y de la economía nacional por entonces, así como sus repercusiones en el Consejo Real.

Si estudiamos comparativamente los emolumentos y derechos de las Escribanías de Gobierno y las de Cámara, se observa una gran diferencia entre la primera Escribanía de Gobierno y las demás^{***}. Aún así, los ingresos de todas las Escribanías se vieron muy mermados a partir del Trienio Constitucional, en un proceso que desde entonces tendría un carácter descendente.

Otro dato que debe despertar nuestro interés es la diferencia de sueldos entre los empleados de unas Escribanías y otras. Así, los sueldos de los oficiales de la primera de Gobierno eran muy superiores a los de los demás,

se hallan. 25 de mayo de 1.824. Gil de Ayala y Ayala". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11).

^{***}. Cfr. al respecto por ejemplo el informe de don Valentín Pinilla sobre su Escribanía de Cámara en junio de 1824 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11).

^{***}. Vid. ESTRUCTURA ORGANICA, Escribanos de Gobierno del Consejo.

y también los de la de Cámara de don Valentín Pinilla cobraban sueldos mucho más sustanciosos que los de las demás Escribanías de Cámara.

6. Remoción y jubilación

La remoción de un oficial era figura poco corriente. Salvo los mencionados casos de purificaciones, no conocemos ningún caso en el periodo del mandato de Fernando VII en que un oficial de Escribanía fuese destituido. El único caso mencionable sería el ya visto del oficial cuarto de la Escribanía de Gobierno de Castilla, don Rafael Díez de Vega, al cual el Consejo jubiló anticipadamente por su manifiesta incapacidad e ineptitud^{***}.

En cuanto a las jubilaciones de oficiales, éstas podían ser forzosas por incapacidad o voluntarias. En ambos casos el Consejo asignaba la pensión correspondiente (todo o parte del sueldo)^{***}. Sabemos que en 1826 estaban vigentes unas providencias generales para la reducción de las jubilaciones^{***}.

Los oficiales de las Escribanías del Consejo formaban parte de un Montepío propio de esta clase de

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núms. 45 y 47.

^{***}. Un ejemplo lo tenemos en el mencionado don Rafael Díez de Vega. Le jubiló el Consejo con todo su sueldo (350 ducados anuales), "por su consideración a sus muchos años de servicio y por lo limitado de su sueldo" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6). Sus compañeros propusieron entonces jubilarle con los 350 ducados de su dotación más 250 que abonarían por cuartas partes el mismo Escribano Pinilla y los tres primeros oficiales. Otro caso fue el de don Santiago Rero, oficial escribiente jubilado de la Escribanía de Gobierno de Castilla y agregado a la de Aragón, a principios de 1808 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180)

^{***}. Así el sueldo de Vega quedaba reducido en enero de 1831 a 10 cuartos diarios. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 52).

subalternos"". En él estaban incluidos todos los oficiales de las Escribanías del Consejo de Castilla, más el Repartidor de Negocios, considerado con la categoría de oficial tercero. Su objetivo era asegurar un fondo con el que socorrer a sus viudas y huérfanos después de su fallecimiento.

Al ingresar en este Montepío, todo oficial debía aportar una cantidad inicial: el oficial primero, 300 reales; el oficial segundo, 250 reales y el oficial tercero 200 reales. Después, semanalmente cada oficial contribuía con una cantidad: según los estatutos"" del Montepío de 1776, el oficial mayor aportaba nueve reales de vellón; cada uno de los segundos siete reales de vellón y cada oficial tercero cinco reales. En 1799 el Consejo propuso algunas reformas. Así, los oficiales mayores pagarían 7 reales semanales; los segundos 5 reales y los terceros 4 reales"".

Igualmente iban a parar a este fondo los emolumentos producidos por una plaza de oficial que estuviese vacante.

De este fondo se destinaban cantidades para sufragar pensiones a viudas y huérfanos de los oficiales de Escribanía. La viuda de un oficial mayor percibiría diariamente siete reales de vellón; seis las de los oficiales segundos y cinco las de los terceros. Esta percepción comenzaría desde el día siguiente al fallecimiento de su marido.

Acaecido el óbito, la viuda debía acudir con

"". En 1776 los oficiales de las Escribanías de Cámara solicitaron del Consejo el establecimiento de un Montepío, "para evitar la mucha miseria a que quedan reducidas sus viudas, expuestas algunas de ellas a la mendicidad, con descrédito muy grande de estas oficinas; cuyos individuos tienen el honor de servir en el Tribunal más autorizado y respetable del Reino..." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.973 núm. 29).

"". A.H.N., Reales Cédulas, núm. 2.311, de 17 de diciembre de 1776: "Real Provisión aprobando las Ordenanzas para el gobierno del Monte Pío, que se establece, de las viudas y huérfanos de los oficiales de las Escribanías de Cámara y de Gobierno del Consejo"; también en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.973 núm. 29.

"". Una noticia referida al periodo de la Guerra de la Independencia nos informa que tras la extinción del Consejo de Castilla por el Gobierno intruso, sus oficiales no pudieron satisfacer cantidad alguna a este Montepío, al no recibir ninguna clase de sueldos o emolumentos (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180).

un memorial a la Junta particular creada al efecto, presentando el acta de defunción o partida de entierro de su marido, indicando la pensión que por la categoría de su marido le correspondía. Debía acompañar también una certificación del Escribano de Cámara declarando haber fallecido este oficial que estaba a su servicio. Por su parte, la Junta recibía la instancia y anotaba al margen el Decreto asignando la pensión correspondiente.

Una Junta de Claveros, nombrada anualmente, se encargaba de pagar a la viuda por mesadas. Cada seis meses, por su parte, cada viuda debía presentar certificación demostrando continuaba viuda, como requisito para seguir percibiendo la pensión"".

Si un oficial había dejado de abonar su contribución en alguna vez, no se abonaba pensión alguna hasta no satisfacer el descubierto, salvo acuerdo en otro sentido de la Junta General del Montepío.

En caso de que el fallecido no dejase viuda sino huérfanos, se repartía la pensión que le correspondía a la viuda entre éstos por partes iguales. Esta pensión se recibiría hasta que el beneficiado llegase a la edad de veinte años los varones y veinticinco las mujeres, salvo que antes hubiesen cambiado de estado o aquél estuviese colocado en empleo.

Un oficial que pertenecía al Montepío podía darse de baja de éste en cualquier momento, pero entonces perdía todas las cantidades abonadas al Montepío y perdía también todo derecho a pensión de viudedad. Si después de retirarse deseaba regresar, debía abonar entonces todas las cantidades que en el intervalo había dejado de pagar.

La viuda que contraía nuevo matrimonio perdía todo derecho a pensión del Monte, incluso en el caso de volver a enviudar.

Los jubilados debían seguir contribuyendo semanalmente al Monte, aunque con tan sólo la mitad de la cuota. Pero si su jubilación fue voluntaria porque así le convenía, había de contribuir con la cuota íntegra.

Los oficiales que ascendían a Escribanos, podían continuar en este Fondo con la calidad de oficiales mayores. También los que pasasen a empleo distinto de las Escribanías de Cámara, pagando semanalmente lo que les correspondía. Cuando el ascenso era de oficial tercero a oficial segundo, etc., debían abonar los reales de diferencia de la contribución inicial de una y otra

"". Algunos particulares sobre el goce de la viudedad y varias órdenes generales que causaron regla en el Montepío aparecen en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

categoría: por ejemplo, de oficial segundo a primero, 50 reales^{***}.

^{***}. Datos extraídos de los Estatutos del Montepío de Oficiales de Escribanías del Consejo, fechado en 1776 (A.N.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.973 núm. 29).

ESCRIBIENTES DE ESCRIBANIA

1. Introducción

Como escala de inferior categoría a los oficiales de Cámara, encontramos en el Consejo esta figura de subalternos que son los escribientes u oficiales escribientes. Graduados al igual que los oficiales en varias categorías, primero, segundo, tercero..., podían ser a su vez de dos clases: los propiamente subalternos del Consejo, que recibían sus sueldos por Tesorería General; y los escribientes contratados por Escribanos y oficiales de Escribanía para su ayuda y asistencia.

Escribientes dotados por el Rey y nombrados por el Consejo sólo había propiamente en la Escribanía primera de Gobierno. Y además no todos los escribientes que allí trabajaban tenían esta categoría.

Por otro lado, ya vimos en el apartado anterior cómo era frecuente que algunos oficiales empleados en oficinas de mayor trabajo contratasen a su costa uno o varios de estos escribientes. De esta clase eran algunos de los escribientes de la Escribanía primera de Gobierno y todos los de las Escribanías de Cámara del Consejo. Sin embargo, para nuestro estudio nos interesan fundamentalmente los primeros, que eran propiamente empleados del Consejo y parte de su estructura orgánica.

2. Nombramiento y número.

Los oficiales escribientes de la Escribanía primera de Gobierno eran designados por el Escribano correspondiente, quien hacía la propuesta al Consejo. El nombramiento era realizado por tanto por el Consejo, quien le expedía el título correspondiente, en la misma forma que en el caso de los oficiales.

Estas plazas seguían también un cursus honorum. Los escribientes de nuevo ingreso ocupaban el último lugar en el escalafón e iban ascendiendo en escala progresivamente. De esta manera, la propuesta solía recaer siempre en la última plaza del escalafón, que supuestos tales ascensos era la que siempre quedaba vacante. En la práctica era muy excepcional un salto en el escalafón por motivos de incapacidad o ineptitud para el puesto***.

Se buscaba por tanto escribientes que, desde su ingreso en la base de la pirámide de la Escribanía, estuviesen bien formados y capacitados para el ejercicio de sus cometidos****, de forma que si demostraban su aptitud podían optar a oficiales****.

La provisión de una plaza de escribiente

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975
núm.
45.

****. "Porque la experiencia ha acreditado que lo que conviene es el que se crien al lado de los jefes y oficiales de las mismas Escribanías escribientes de talento, buena conducta y expedición para la sustanciación y curso de los autos, y extensión de las provisiones y órdenes; y con estas circunstancias, si recayere en ellos la provisión de las plazas vacantes, resulta un buen servicio al Rey, al Consejo y al público, y la observancia de los buenos usos y prácticas del Tribunal". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456, núm. 59).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456
núm. 59.

estaba sometida también a un expediente previo abierto por el Consejo Real"". En ocasiones también los particulares presentaban instancias solicitando una de estas plazas. Sabemos por otra parte que funcionaban las recomendaciones"".

La Escribanía de Cámara de Gobierno de don Bartolomé Muñoz se componía en 1808 de tres escribientes nombrados por el Consejo. De ellos dos se ausentaron de Madrid cuando la invasión francesa -don Manuel Abad"" y don Gregorio Vicente Gil, escribientes primero y segundo-, que sirvieron al Rey en Sevilla y Cádiz. Don Rafael Díez, escribiente tercero, por el contrario, quedó en Madrid.

También en 1808 nos encontramos el caso curioso de don Santiago Rero, oficial escribiente jubilado de la Escribanía de Gobierno de Castilla y agregado a la de Aragón. Tiene algún interés en cuanto confirma algunos antecedentes que demuestran que hubo en ocasiones también algunos de estos oficiales escribientes en la Escribanía de

"". En A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 núm. 39 se puede ver un ejemplo de expediente para provisión de la plaza de escribiente último de la Escribanía de Gobierno del Consejo, vacante entonces (1815) por haber pasado a oficial de la Contaduría General de Pósitos don Juan Manuel Gómez. Fue nombrado escribiente último de aquella Escribanía don Quintero de Urrutia.

"". Por otra parte, un indicio de ello era la evidente repetición de apellidos entre los distintos oficiales de las Escribanías. He aquí otra prueba: el texto de una recomendación al Consejo de un joven de 18 años, presentado por don Bartolomé Muñoz, con fecha 30 de mayo de 1823: "E igualmente hace presente a V.A. con el más humilde respeto que en la elección y nombramiento de oficiales y escribientes de las Escribanías de Gobierno y la de Justicia que habrá de hacerse por el fallecimiento de los que expresa, se digne tener presente a don José María Juliá, que se halla en la edad de diez y ocho años: ha estado y está en su compañía hace cinco, conduciéndose con arreglado porte y aplicación, sirviéndole de escribiente y ayudando en lo que se ha ofrecido en las citadas Escribanías, y que con su buena memoria e instrucción que ya tiene, de que carecerá cualquiera otro que no sea de la oficina, podrá ser muy útil y salir un oficial de conocida expedición." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45).

"". Sorprende la fulminante promoción del escribiente primero don Manuel Abad, que en Cádiz ya era Escribano de Cámara y más tarde también lo fue del Tribunal Supremo de Justicia.

Gobierno de Aragón***.

Al acabar la Guerra y restablecerse el Consejo Real, estaban vacantes las plazas de escribientes segundo y tercero. Para cubrir sus plazas, fueron propuestos el 14 de agosto de 1814 don Ventura Rubio y don Pedro García. También fue propuesta por Muñoz, y aprobada por el Consejo, la creación de dos plazas más de escribientes, con el carácter de supernumerarios: don Agustín Montijano (escribiente cuarto) y don Juan Gómez (escribiente quinto)***, con un sueldo de 200 ducados anuales.

Una noticia referente a la situación de la Escribanía de Gobierno en el periodo 1820/23 nos habla de que al restablecerse el Consejo eran sólo cuatro los escribientes de número asignados a esta Escribanía***. En 1823 estaban todavía pendientes de purificación política don Agustín Montijano, oficial escribiente primero, y don Pedro García Teresa, escribiente segundo. El primero fue purificado y reintegrado en su destino. A don Pedro García Teresa le fue denegada en segunda instancia y entre tanto falleció. Don Remigio Crespo, oficial escribiente cuarto, fue trasladado de oficial segundo a la Escribanía de Gobierno de la Corona de Aragón. En 1824 quedaban así vacantes las plazas de oficial escribiente primero y cuarto.

En 1825 esta Escribanía gozaba de una dotación de cuatro oficiales escribientes. Pero los inmediatos ascensos para cubrir las vacantes de oficiales hicieron que en aquel año sólo estuviera cubierta la plaza de oficial escribiente primero, por don Vicente Vizcaino, y al parecer, de forma provisional****.

En los años siguientes se dejaron de proveer las tres plazas de oficiales escribientes denominadas con los títulos de primera, segunda y tercera, por no considerarse necesarias en el estado de escasez de negocios

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 54. Así, por ejemplo, en 1793 y 1797 había un escribiente en la Escribanía de Gobierno de Aragón, que estaba asignado a la Comisión de Pósitos.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.974 núm. 35. Parece probable que la quinta plaza de escribiente fuera suprimida en 1.819, según refiere una noticia de marzo de aquel año. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 43).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

que llegaban al Consejo"".

Vizcaino continuaba como único escribiente de la Escribanía en 1830"", con lo que parece que definitivamente quedó reducido el número de oficiales escribientes del Consejo a uno"".

3. Juramento

Las plazas de oficiales escribientes del Consejo no tenían el rango de plazas juradas y, por tanto, no debían prestar juramento en Sala primera de Gobierno, aunque sí eran nombrados por el rey"".

"". Las razones de que llegasen al Consejo Real pocos asuntos son bien conocidas: la pérdida de competencias por el Consejo, que hacía que muchos asuntos tradicionalmente estudiados por este Supremo Tribunal fuesen llevados ahora a otros tribunales, a Comisiones particulares o a Juntas creadas para su estudio y resolución. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6).

"". Un estado del Consejo de Castilla del año 1831, referente al año anterior, situaba ya a Vizcaino como oficial quinto de la Escribanía de Gobierno, colocando en su plaza de escribiente a don Santiago Cañizares (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

4. Competencias

En el aspecto competencias, la única diferencia entre el oficial mayor y el último escribiente de la Escribanía de Gobierno era que el primero tenía a su cargo más provincias y negocios que despachar que el primero.

Así, en 1819, al escribiente primero don Ventura Rubio le estaban encomendados los asuntos del Principado de Asturias, los del Señorío de Vizcaya y los de Segovia. También le estaban encomendados los asuntos de Sande, a quien sustituía.

El escribiente segundo don Pedro García despachaba los asuntos de Galicia, de Burgos, las dispensas matrimoniales, las bulas y breves de todas clases, y se encargaba también de entrega de pleitos a las partes.

Al escribiente tercero don Agustín Montijano estaban encomendados los asuntos de León, Zamora, Alava y Valladolid, aparte de la permanente asistencia a su Jefe en los encargos que le encomendase.

Finalmente al escribiente cuarto don Quintero de Urrutia le correspondían los asuntos de Palencia, Soria, Guipúzcoa y Ciudad Rodrigo, así como los de maestros de primeras letras de las provincias vascongadas. Para todos ellos regían las reglas generales ya vistas al estudiar los oficiales de Escribanía****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 43.

5. Honores y privilegios

Quizás el privilegio más destacable concedido a estos escribientes era el derecho que se les reconocía poder optar a la plaza de oficial último de la Escribanía de Gobierno en cuanto ésta quedara vacante. La consecuencia era que habitualmente el que era propuesto en primer lugar para cubrir esta plaza era el escribiente primero de la Escribanía^{***}.

6. Retribución

El sueldo de los escribientes de Escribanía de Gobierno del Consejo estaba consignado por penas de Cámara. En 1808 éste era de 3.300 reales anuales^{***} los dos primeros escribientes y 2.200 reales (200 ducados) los demás. Esta retribución se mantenía en 1824^{***}, 1826^{***}, y 1830.

Aparte del sueldo, los escribientes

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.180.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11: "Informe del Escribano de Gobierno Pinilla", fechado el 9 de junio de 1.824.

^{***}. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.781 núm. 11.

participaban de unos derechos o emolumentos conforme a un arancel aprobado por el Consejo, que devengaban los negocios de partes. En 1825 el producto de estos emolumentos de un oficial escribiente, deducidos los gastos del cuarto de oficio, era de 1.560 reales, resultando un valor total de su plaza aquel año de 4.860 reales"".

7. Remoción y jubilación

Parece son aplicables las reglas generales referentes a la remoción y jubilación de oficiales de Escribanía. Aquí recogeremos sólo dos especialidades.

La primera es la no mención en los Estatutos del Montepío de Oficiales de Escribanía"", de 1776, de esta figura. Entendemos que por aquel entonces no existía, o al menos no tendría la configuración que tenía en el reinado de Fernando VII de empleado público. Lo cierto es que encaja perfectamente en los requisitos exigidos por el artículo II, referente al Repartidor, al que "mediante ser uno de sus subalternos y gozar"" de un sueldo anual, era considerado oficial tercero de Escribanía a los efectos del Montepío. Por tanto, es bastante probable que los oficiales escribientes tuviesen también esta categoría dentro del Montepío.

En segundo lugar, lógicamente los escribientes del Consejo de Castilla se vieron sometidos a un proceso de purificación política tras los periodos de la Guerra de la Independencia y el Trienio Constitucional. Del primero podemos decir que tanto don Manuel Abad, como don Gregorio Vicente y Gil y don Rafael Díez de Vega fueron rehabilitados por Real Orden de 30 de marzo de 1815. Del

"" Evidentemente, estos datos coinciden con un periodo de crisis del Consejo, con lo que podemos suponer que los emolumentos serían sensiblemente superiores en el periodo anterior al Trienio Constitucional.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.973 núm. 29.

"" Estatutos del Montepío de Oficiales de las Escribanías del Consejo, pág. 2, art. II.

proceso subsiguiente al Trienio sabemos, por ejemplo, que don Pedro García Teresa''' no fue purificado por resolución de 27 de octubre de 1823 y le fue denegado también en segunda instancia'''.

Una noticia correspondiente al periodo del Trienio nos dice que don Remigio Crespo, el último escribiente de la Escribanía de Gobierno, quedó cesante entonces con doce cuartos diarios de sueldo. Pese a la extinción del Consejo, siguió ayudando en los asuntos que se le encargaba'''.

'''. Había sido nombrado oficial escribiente tercero el 8 de septiembre de 1814, junto con don Agustín Montijano y don Quintero Urrutia (éste el 1 de julio de 1815).

'''. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 2.

'''. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 45.

REPARTIDOR DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTES A LAS
ESCRIBANIAS DE CAMARA DEL CONSEJO

1. Introducción

"El repartimiento de negocios entre Escribanos de Cámara del Consejo produce buena armonía, facilita puntuales noticias a los procuradores, abogados y agentes, pues hallan razón en los Libros del Repartimiento de las instancias y recursos introducidos en el Consejo, con expresión del día, mes y año, nombre de los litigantes y del pueblo de su vecindario"***.

Establecido el repartimiento por Consejo pleno de 8 de octubre de 1.742, a propuesta de los Escribanos de Cámara se nombró un Repartidor****. Se le

***. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 717.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2874 núm. 18. "Desde muy antiguo los Escribanos de Cámara y de Justicia del Consejo no despachaban los negocios que sus tenientes adquiriesen por conocimientos u otros motivos, sino los que le tocasen según el arreglo que por clases se hizo. Antes del 1543 se estableció el reparto de negocios en el Consejo y después en Real Cédula de 11 de junio de 1564 se mandó continuar; y lo mismo providenció el Consejo pleno en auto de 10 de noviembre de 1611 y que cada Escribano de Cámara fuese repartidor dos meses y que esto se hiciese con

dieron entonces unas reglas para el ejercicio de su encargo, que fueron rectificadas y amoldadas en diversas ocasiones, a petición de los Escribanos de Cámara. Parece ser que una de los últimos ajustes de estas reglas fue la que se acordó por el Juez de Ministros don Dionisio Catalán el 8 de agosto de 1825. En esta resolución se aprobó que por semanas se llevaría un libro entre los Escribanos de Cámara en donde antes de procederse al repartimiento se anotase por el que estuviese de semana todo recurso sujeto a repartimiento, poniendo número y fecha de su presentación. A continuación se llevaba al Repartidor para que en el mismo día lo repartiese al Escribano que estuviese de turno. Todo ello conforme a lo que se practicaba en el año 1819, en que se estableció así por convenio de todos los Escribanos de Cámara de entonces"".

En resolución"" del Consejo de 17 de mayo

justificación. En los días 10 de enero de 1611 y 12 de junio de 1615 los Escribanos de Cámara hicieron su acuerdo y obligaron con juramento a hacer el repartimiento de todos los negocios y pleitos que en el Consejo se tratasen y continuaron algún tiempo haciendo el repartimiento ellos. Se invirtió este orden y formalidad, y siguieron despachando, sin que de la mayor parte de negocios se hiciese repartimiento, porque los procuradores, agentes y partes los radicaban en las Escribanías de Cámara que les parecía, de lo que resultó que unas Escribanías se hallaban con muchos negocios y otras carecían de ellos, y no sólo se originó este perjuicio, sino es que con motivo de ignorarse las instancias y recursos pendientes, y de hacerse mención de ellas en el relato de los pedimentos y pretensiones, muchas veces se daban providencias opuestas a las que anteriormente tenía dadas el Consejo por distintas Escribanías, y esto dio motivo a que los Escribanos de Cámara hiciesen representación al Consejo exponiendo lo conveniente que sería establecer la continuación del repartimiento de negocios y disputar persona a propósito para este encargo; y el Consejo pleno de 8 de octubre de 1742 lo mandó así. Y a propuesta de los Escribanos de Cámara se nombró Repartidor que corriese con el cargo de su oficio con la mayor escrupulosidad a fin de que no padeciesen los unos la escasez de negocios y por el contrario abundasen los otros de ellos, al cual se satisface la cuota de 400 ducados anuales entre los seis Escribanos de Cámara sujetos a repartimiento" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 51).

"".. También entonces se pasó oficio a los Relatores para que no fuera admitido asunto alguno que no hubiera sido repartido en la forma indicada, o al menos lo hiciese presente al Juez de Ministros para que tomara las correspondientes medidas.

"".. Ver A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 51.

de 1830, y a petición de los Escribanos de Cámara, fue nuevamente rectificado el método de reparto, haciéndose por sorteo: en una caja se introducían seis bolas, cada una con el nombre del Escribano titular de la Escribanía. La primera sacada se quedaba con el primer pleito; la siguiente -ya eran sólo cinco bolas- con el siguiente pleito y así hasta concluir las bolas y vuelta a empezar. Tras cada extracción de bola el Repartidor sentaba el reparto correspondido en el Libro de Repartos"".

Estudiamos aquí por tanto esta figura del Repartidor de Negocios, que no era propiamente un empleado del Consejo sino de sus Escribanos. Sin embargo, hemos considerado interesante incluirlo en este trabajo, pues el Repartidor trabaja en el Consejo y su estudio va a proporcionarnos datos de interés sobre el funcionamiento de una Escribanía de Cámara.

2. Nombramiento

Desde su creación en 1.742, el Repartidor de Negocios era persona designada por los propios Escribanos de Cámara, quienes costeaban su sueldo con sus propios ingresos. Era por tanto un encargo de confianza de aquellos Escribanos de Cámara. Por otro lado, nunca el Consejo ni otra autoridad intervino en su nombramiento, que era así privativo de aquellos Escribanos"".

Sabemos que don Manuel Gutiérrez ejerció el empleo de Repartidor de Pleitos del Consejo de Castilla desde 1793 hasta la primera extinción"" del Supremo

"".. El objetivo de esta medida era sin duda evitar que unas Escribanías tuvieran exceso de negocios y otras al mismo tiempo escasez.

"".. El elegido no tenía de este modo ningún título, sino un simple nombramiento de los propios Escribanos, en cualquier momento revocable por éstos, que eran quienes le pagaban.

"".. Se fugó de Madrid en septiembre de 1809 por no querer servir al Gobierno intruso. Fue nombrado por el Gobierno legítimo para varios empleos, habiendo sido

Tribunal en diciembre de 1808. Restablecido el Consejo en 1.814, se hizo indispensable habilitar el Repartimiento para que el público pudiera acudir con sus instancias y se les diese curso por las Escribanías de Cámara a las que por turno correspondieran. Gutiérrez había encontrado un destino mejor, por lo que reunidos los Escribanos de Cámara, decidieron designar a don Manuel Cerezal Dávila""", que había ejercido de escribiente en la Escribanía de Gobierno del Consejo por muchos años y reunía los conocimientos oportunos para el puesto""".

3. Competencias

Su primera obligación era tener los libros de negocios, donde anotaba los distintos repartimientos, según sus clase, así como las Salas a las que correspondían.

También tenía obligación de reconocer todos los recursos e instancias que llegasen al Repartimiento, y

designado Teniente Canciller, Repartidor y Tasador de la Audiencia de Granada cuando en enero de 1.812 se había trasladado a Cartagena. (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.074).

""". Desde 1.793 hasta la Guerra había servido en la Escribanía de Gobierno del Consejo. Durante la Guerra había desempeñado la Secretaría de la Junta de Armamento de la Villa de Alba de Tormes. Permaneció en la Escribanía de Gobierno hasta que restablecido el Consejo se le asignó la vacante de Repartidor de los Negocios del Consejo.

""". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.074. Este expediente recoge un curioso pleito. Ante el nombramiento de Cerezal, Gutiérrez se molestó y presentó queja al Consejo solicitando la reposición en la plaza. En su informe el Fiscal hizo hincapié en la necesidad de que el Repartidor fuera de la confianza de los Escribanos de Cámara, para asegurar el secreto y la reserva, así como para que hubiera la imparcialidad e igualdad debidas. El Consejo consultó a S.M. dar a Cerezal plaza de oficial quinto y último de la Escribanía de Cámara del Consejo, con la dotación de 300 ducados. Sabemos además que el 13 de febrero de 1815 era ya oficial quinto de la Escribanía, y que falleció en 1.825 siendo oficial tercero.

examinar la clase a que correspondían, si traían poder suficiente y si cabía admitirlas en el Consejo. Si el Repartidor advertía que un recurso o instancia no traía poder suficiente; o bien si trataban puntos de derecho o citando en ellos leyes o autos acordados, y no venían firmados por abogados; o bien trataban puntos que pertenecían a otros Consejos, Chancillerías o Audiencias, o que debían venir por otras oficinas, como la Contaduría de Propios, Penas de Cámara, o por la Escribanía de Cámara del Gobierno; o si bien se citaban antecedentes que hubieran sido causados en el Consejo: en todos estos casos el Repartidor no debía admitirlos ni repartirlos''''.

Algunas instancias y recursos que antiguamente venían al Consejo, como los recursos de injusticia notoria en causas criminales, las esperas de multas y costas, en causas criminales también, las esperas de deudas que procedían de diezmos; de rentas del voto de Santiago; de caudales pertenecientes a propios y arbitrios; las apelaciones en causas de montes; residencias, visitas y otras en que se hacían condenaciones aplicadas a la Cámara del Rey sin que constase primero hallarse pagadas o depositadas; los recursos relativos a revendedores y otros relativos a abastos de Madrid; los que se solicitase aprobación de reelección de diputados y personeros, y en los que se pretendiese Notaría de Reinos para la provincia de Alava: todos estos expedientes eran rechazadas por el Repartidor de Pleitos, y no los distribuía por tanto entre las Escribanías''''.

Eran frecuentes las disputas con los agentes y procuradores, ya que intentaban éstos que se les admitiese cuantas instancias presentaban. En ocasiones, el Repartidor se quejaba al Consejo de la actitud de tales agentes y procuradores. Habitualmente el Consejo daba la razón al Repartidor y no solía admitir las instancias por él rechazadas''''.

Sucedía también con frecuencia que como llegaban al Repartidor muchas instancias seguidas, los procuradores presionaban para dar preferencia a las suyas, o para que fueran adjudicadas a determinado Escribano de Cámara, aunque no estuviera de turno. En otras ocasiones, pretendían revisar los libros de repartimiento para informarse del estado de los turnos y lograr así presentar su recurso cuando le tocase en turno al Escribano que desea

'''' A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874
núm. 18.

'''' A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874
núm. 18.

'''' A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.874
núm. 18.

que lleve el caso. A veces también incluso ofrecían gratificaciones con este fin. Por ello mismo se había establecido desde finales del siglo XVIII que los procuradores y agentes debían presentar sus instancias a primera hora de la mañana para que el Repartidor tuviese tiempo suficiente para verlos y repartirlos con tiempo"".

El Repartidor de Negocios asistía todos los días al Consejo desde primera hora de la mañana. Estaba en la habitación destinada a los Escribanos de Cámara, donde tenía una mesa al efecto. Allí asistían los procuradores trayendo los pleitos e instancias, de los que el Repartidor tomaba la correspondiente razón.

El Repartidor debía llevar siete libros: uno recogiendo todos los asuntos que se despachaban en el Consejo pleno, en el que se incluía el repartimiento de visitas de Escribanos y visitas de sacas; otro para los asuntos de la Sala de Gobierno; otro para el repartimiento de las venias y dispensas de edad para administrar sus bienes los menores de 25 años; otros para repartir los asuntos de la Sala segunda de Gobierno, de Mil y Quinientas, de Justicia y de Provincia"".

Los datos que debían ser anotados en cada uno de estos libros eran los siguientes: clase de asunto, persona que presenta la instancia, persona contra la que se presenta la instancia, Escribano adjudicatario -al margen-, lugar de origen del petionario y, finalmente, el nombre y rúbrica del Repartidor.

En algunos casos cabía anular una adjudicación ya realizada. Así, por ejemplo, cuando se unían dos expedientes adjudicados a distintos Escribanos, uno de ellos debía perder el turno sobre el suyo; o bien cuando se rechazaba una pretensión o se mandaba que las partes acudiesen a la Chancillería o Audiencia"".

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2874 núm. 18.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 718.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 720.

4. Retribución

Ya hemos visto anteriormente que el Repartidor recibía un sueldo abonado entre todos los Escribanos de Cámara a su costa. Cuando se creó esta figura en 1742, su sueldo estaba fijado en 400 ducados anuales -4.400 reales-***.

En el reinado de Fernando VII parece que estaba estipulado que cada Escribanía de Cámara debía pagar al Repartidor 100 ducados, lo que hacía un total de 600 ducados -6.600 reales anuales-****. Aparte del sueldo, el Repartidor tenía prohibido percibir cualquier otra clase de derecho o emolumento y, por supuesto, ninguna clase de gratificación por parte de los Escribanos de Cámara o de los particulares.

5. Remoción y jubilación

El artículo II de los Estatutos del Montepío de Oficiales de Escribanía, del año 1776, incorporaba a este Montepío al Repartidor de Negocios de las Escribanías del Consejo, y le equiparaba a los oficiales terceros del Consejo. Así rezaba este artículo:

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajos 2.874 expte. núm. 18; y legajo 3.975 expte. núm. 51.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.456 núm. 59; también en el legajo 3.781 núm. 11: esta cantidad de 600 ducados aparece confirmada en documentos de los años 1823, 1824, 1825 y 1826.

"También se comprende en este Monte, y en la clase de tercero, a el Repartidor de los negocios del Consejo, mediante ser uno de sus subalternos, y gozar el sueldo anual de quatrocientos ducados, con que se contribuye por su empleo, y en estos términos compondrán el número de diez individuos los oficiales terceros"".

Se pueden aplicar por tanto todas las reglas generales recogidas en el capítulo correspondiente a los oficiales de Escribanía. Vamos a recordar tan sólo que de acuerdo con los mencionados Estatutos, el Repartidor debía pagar al Montepío con la contribución semanal de 5 reales. Tras las reformas introducidas por el Consejo en 1.799, esta cantidad quedó reducida a cuatro reales semanales.

Por otro lado, recordamos aquí también que las pensiones estipuladas para las viudas de los oficiales terceros de Escribanía estaban cifradas en 5 reales diarios, derecho que era devengado a partir del día siguientes del fallecimiento del marido"".

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.973 núm. 29.

"". Para todas las demás especialidades sobre jubilación y pensiones del Repartidor, vid. ESTRUCTURA ORGANICA, el capítulo correspondiente a remoción y jubilación de oficiales de Escribanía.

LA SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE

1. Introducción

La Sala de Alcaldes de Casa y Corte tenía la consideración de Quinta Sala del Consejo de Castilla""", como le gustaba autotitularse a la propia Sala y como le era reconocido por el propio Consejo. Sin embargo, era una Sala distinta y peculiar"". No participaba exactamente de la estructura orgánica del Consejo de Castilla, sino que en

""". "Tiene la Suprema Jurisdicción Criminal, sin que haya apelación, ni suplicación sino para ellos mismos, y ésta es la causa de darles nombre de quinta Sala del Consejo, y de tener lugar en él las veces que van a informar de algún negocio como también su Fiscal, y en todos los actos públicos" (SANCHEZ SANTIAGO, A., "Idea elemental de los Tribunales de la Corte", tomo II, pág. 43).

""". Muchos cronistas coinciden en la gran antigüedad de esta institución, formada por los llamados Alcaldes del Rey (GONZALEZ DAVILA, G., "Teatro de las Grandezas de Madrid", pág. 403; SALAZAR Y CASTRO, I., "Institución, origen y autoridad del Consejo de Castilla"; SANCHEZ SANTIAGO, A., "Idea elemental de los Tribunales de la Corte", tomo II, pág. 42). Según E. de Tapia, el mismo don Alfonso X el Sabio hacía ya mención de la Sala (DE TAPIA, E., "Febrero Novísimo o Librería de Jueces, abogados y escribanos, refundida, ordenada bajo nuevo método y adicionada con un tratado del juicio criminal y algunos otros", tomo VII, Valencia 1829).

todos los aspectos tenía una propia estructura y organización. La Sala de Alcaldes era así de alguna manera una institución dependiente del Consejo Real, con su propio Gobernador, sus Alcaldes o Ministros, sus Fiscales, y otra larga serie de subalternos que componían la estructura orgánica de esta institución. Todos estos subalternos no pertenecían propiamente a la estructura orgánica del Consejo de Castilla, sino de la Sala. No aparecían en las nóminas del Consejo y sus empleados prestaban juramento en la propia sala. De ellos tan sólo el Gobernador era miembro del Consejo -un Consejero de Castilla- y los Alcaldes eran nombrados y juraban en el Consejo Real, y cada año eran distribuidos en las distintas Salas de la propia Sala de Alcaldes por el Decano, y tras la propuesta del Gobernador, ésta era definitivamente aprobada en consulta al Monarca.

En este capítulo vamos a ver por tanto algunas notas sobre los Ministros y subalternos de esta peculiar Sala del Consejo Real de Castilla.

2. EL GOBERNADOR DE LA SALA

a) Nombramiento

Hasta el año 1.632 el Gobernador de la Sala era habitualmente el Alcalde de Corte más antiguo. En aquel año Felipe IV decidió designar para este puesto a un Ministro del Consejo de Castilla. Por lo tanto, un primer requisito para ser Gobernador de la Sala era el ser Consejero de Castilla"".

La designación del Consejero que habría de ejercer el destino de Gobernador de la Sala iba incluida en la propuesta anual que el Gobernador del Consejo presentaba al Monarca"". De esta forma, el puesto de Gobernador de la Sala era un destino posible más para los Consejeros de Castilla, y anualmente era confirmado o renovado.

"" SANCHEZ GOMEZ, R.I., "Estudio institucional de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante el reinado de Carlos II", Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, Madrid, 1.989, págs. 73 y 74; "un Consejero presidía la Sala de Alcaldes de Casa y Corte" (DESDEISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 108).

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticia del Consejo...", págs. 372 y 373.

Señalaba Martínez de Salazar"" que tras la aprobación real, la disposición era publicada en Consejo pleno en presencia de los subalternos, y que esta publicación habitualmente se hacía antes de Navidad. Si el Gobernador de la Sala había sido reelegido, no necesitaba acudir al Consejo, y aunque avisado oficiosamente antes, no se le comunicaba oficialmente hasta el primer día tras las vacaciones de Navidad.

En el reinado de Fernando VII hubo según González Palencia y Varón Vallejo"" siete Gobernadores de la Sala de Alcaldes. Fueron los siguientes: don Adrián Marcos Martínez (nombrado el 15 de diciembre de 1.807); don Benito Arias de Prada (6 de junio de 1.814); don Domingo Fernández de Campomanes (el 1 de enero de 1.816); don Juan Benito de Hermosilla (el 1 de enero de 1.819); don Felipe Sobrado (el 4 de junio de 1.823); don Esteban de Asta (el 3 de enero de 1.831); y finalmente don Teótimo Escudero (el 2 de enero de 1.833), que fue el último de los Gobernadores de la Sala. Vemos por tanto que salvo don Felipe Sobrado, que fue Gobernador durante ocho años, lo habitual en los Gobernadores durante el reinado de Fernando VII estuvieron dos o tres años al frente de la Sala.

b) Juramento

Por ser un Consejero de Castilla no debía prestar un nuevo juramento de su empleo, pues le valía el prestado en su momento. Era por tanto un destino más, con un rango teórico equivalente a los presidentes de las distintas Salas del Consejo de Castilla. En la práctica era más relevante que aquéllos, por la independencia e importancia que tenía la sala como peculiar Tribunal de la Corte.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", pág. 373.

"" GONZALEZ PALENCIA, A. y VARON VALLEJO, E., "Guía de la Salas de Alcaldes del A.H.N.", págs. 782-801.

c) Competencias

En este cargo existían dos tipos de funciones o cometidos: por un lado las protocolarias, y por otro, las gubernativas y procesales.

El Gobernador de la Sala representaba a esta institución en todos los actos públicos y conmemorativos. Como tal acudía a la audiencia con el Rey de los viernes y a ceremonias reales -bautizos, matrimonios, entierros de monarcas, etc.- y a otros actos públicos -festividades, Te Deums y otras ceremonias religiosas, etc.-".

De otro lado se encontraban sus funciones gubernativas. El Gobernador de la Sala asistía diariamente a su despacho en el Palacio de Santa Cruz -entonces Sala de Alcaldes de Casa y Corte-, donde presidía las audiencias. A su llegada al edificio era recibido por el Alcalde de Cárcel de Corte y los alguaciles de guardia, que le acompañaban a estrados. Diariamente se le entregaba por uno de los porteros una memoria con noticia de los presos que hubieran ingresado en la Cárcel de Corte el día anterior. Los días de fiesta le era remitido este informe a su domicilio, mediante un escribano oficial de la Sala. En otra memoria que le entregaba el Escribano de Cámara se le indicaban también las incidencias y novedades más relevantes del día anterior. Seguidamente los Alcaldes de Corte le informaban de los resultados de las rondas y de los motivos de las prisiones realizadas".

Concluida la hora del Acuerdo y con ella la audiencia, se acompañaba al Gobernador a la calle, hasta que había tomado el coche que le llevaría a su domicilio.

Entre sus facultades se contaban la de convocar la Sala en casos extraordinarios, en el propio

***. SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "La Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante el reinado de Carlos II", págs. 74 y 75.

***. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", págs. 317 y ss.; SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "La Sala de Alcaldes en el Reinado de Carlos II", pág. 75.

palacio de la Sala o en su domicilio"". Igualmente siempre que estaba presente presidía la Sala en pleno o reunida por Salas.

Contaba el Gobernador con la llave del cajón y de la mesa que se encontraba en la Sala de Acuerdos, en donde era custodiado el sello y los votos que por escrito remitían los Alcaldes. También custodiaba la llave del archivo secreto. Según Martínez de Salazar"", en los días de sesión en que no pudiera asistir, debía enviar la primera de las mencionadas llaves al Alcalde que por antigüedad presidiese. Otra de sus facultades era la posibilidad de mandar detener y abrir causa a cualquier persona, pero no podía imponer las penas por sí solo, sino con la Sala en pleno"".

Por lo demás, el Gobernador permanecía en un estrecho contacto con el Presidente o Gobernador del Consejo, de quien diariamente recibía oficios y órdenes"", y a quien debía remitir también diariamente un parte de incidencias, antes de las nueve de la mañana"". Este pliego diario era remitido inmediatamente por el Gobernador del Consejo al Rey"". También cada semana enviaba al

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", pág. 379. Los Alcaldes a motu proprio no podían convocar la Sala. Sólo en ausencia del Gobernador podía reunirla el Alcalde que hiciera las veces de Decano, y por un motivo grave.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", pág. 379.

"" SANCHEZ GÓMEZ, R.I., op. cit., pág. 75.

"". Así, por ejemplo, en los agitados días que siguieron al Motín de Aranjuez, la Sala tuvo especial trabajo en aras al mantenimiento del orden público. El 20 de marzo el Decano del Consejo, don Arias Mon, hizo saber al Gobernador de la Sala que sin falta reuniese de forma extraordinaria a los Alcaldes para que cada uno formase en su respectivo cuartel una ronda numerosa. Y al día siguiente Mon pedía al Gobernador de la Sala que esa misma noche se le informase en su casa de todo lo que hubiese ocurrido ese día en Madrid. (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1.808).

"". El Corregidor y sus tenientes diariamente debían darle cuenta por escrito de haber o no novedad en la Corte (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.398, año 1.808).

"". El pliego era elaborado por un Alcalde de Corte -el que hiciera de Alcalde semanero-, quien a su vez debía preparar otro informe de incidencias para el Gobernador de

Consejo de Castilla un informe recapitulación sobre todos los asuntos de los que ella se ocupaba"".

Cualquier informe, expediente o Real Orden que se pedía o comunicaba a la Sala, era notificado en primer lugar al Gobernador de la Sala, quien a su vez lo transmitía a los Alcaldes reunidos en Sala en pleno. De todo lo tratado y acordado en la Sala debía igualmente informar al Gobernador o Presidente del Consejo de Castilla y, en su caso, al Monarca"".

Era también cometido suyo encomendar comisiones a los Alcaldes y asimismo autorizar y dar licencia a cualquier empleado de la Sala que debiese o desearse salir de la Corte con cualquier fin. Igualmente le correspondía comunicar diariamente a la Sala las órdenes y noticias pertinentes, así como mandar comunicar órdenes y oficios a otros órganos y autoridades"".

En ocasiones le eran encomendadas misiones especiales o se añadía a su cargo algún otro puesto. Así sabemos que por Decreto de 14 de junio de 1808 la Sala de Alcaldes queda encargada con exclusividad de la Dirección de Policía Superior de Madrid, y se ordenaba que el Gobernador de la Sala ejerciera de Juez de Policía para aquella Corte,

la Sala, "notificándole las novedades ocurridas o que no la hay". Por orden del Gobernador de la Sala de 5 de marzo de 1.808 se mandaba a todos los escribanos oficiales de ella que con arreglo a lo que estaba mandado, cuando ocurriera una novedad de robo, muerte, heridas, incendios u otras ocurrencias graves, diesen cuenta inmediatamente al Gobernador de la Sala por medio de un parte, según era costumbre, "pena al que sea omiso de tomar contra él la providencia que corresponda". Dos días después se mandaba a los escribanos oficiales de la Sala que estuviesen del reposo mayor, que tras la firma por parte del Alcalde semanero del pliego destinado al Rey y al Gobernador del Consejo, remitiesen otro firmado al Gobernador de la Sala informándole de las novedades que incluyese el pliego u otras. (A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1.398, año 1.808, folios 338 y ss). Sobre el modo de remitir la Sala al Consejo el pliego diario de lo ocurrido en ella, cfr. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, Ley XII.

""". DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", págs. 111 a 113.

""". SANCHEZ GÓMEZ, R.I., op. cit., pág. 75.

""". Una Real Orden de 6 de octubre de 1.814 mandaba que el Gobernador de la Sala o los Alcaldes pasasen por sí los oficios que se ofreciesen al Corregidor de Madrid (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.075, consulta del 11 de noviembre de 1.815).

con inhibición de todo otro Juez y Tribunal"". El Gran Duque de Berg resolvió en aquella ocasión que el Gobernador de la Sala ejerciera como Superintendente General de Policía de Madrid"".

Eugenio de Tapia resumía así las principales prerrogativas del Gobernador de la Sala en el año 1829: "1. El Sr. Gobernador tiene facultad para mandar prender, formar causas y seguir las, si quisiere, o nombrar para ello al alcalde que le parezca, aunque no puede determinarlas por sí solo, pues esto pertenece a la Sala; 2. Todos los informes que se piden a la Sala, y cuantas órdenes expiden Su Magestad y el Consejo, se participan al Sr. Gobernador para que se tengan presentes en aquélla; 3. Los oficiales de la Sala y alguaciles no pueden salir de la Corte a practicar diligencia alguna de orden de los señores alcaldes u otros tribunales sin participarlo al señor gobernador; el señor gobernador tiene la preeminencia de participar diariamente a Su Magestad, por medio de un pliego que firma, todas las novedades que hayan ocurrido en las veinticuatro horas anteriores, de lo cual se trata ante todo cada día en el Acuerdo"."".

"" A.H.N., Colección de Reales Cédulas del A.H.N., núm. 4.150 del catálogo; también A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1398, año 1808.

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, año 1.808, núm. 1.398. El entonces Gobernador de la Sala, don Adrián Marcos, decidió poco después dimitir del cargo de Superintendente General de Policía por motivos de salud. Murat no aceptó inicialmente esta dimisión, pero el 25 de julio siguiente nombraba a un Alcalde de Corte, don Pablo Arribas, para ejercer este destino.

"" "En ese pliego se comunican al Soberano las sentencias y penas corporales que se han ejecutado, los heridos de gravedad que ha habido, comprendiendo los que se hallan en todos los hospitales de la Corte, las muertes aún casuales que se han cometido, los incendios y desgracias que han acontecido, &c. También se da noticia en el pliego de si en la plaza mayor, carnicerías y demás puestos públicos están abastecidos de comestibles, y de los precios a que se venden. Igual y separado pliego se remite al señor presidente o gobernador del Consejo, acompañado de los testimonios de rondas, comedias, paseos y fe de hospitales, y todo se pone bajo una cubierta con sobrescrito para dicho gefe. El escribano de Cámara semanero cierra y sella este pliego que, como está mandado, se ha de remitir por la mañana temprano, a fin de que pueda dirigirse con puntualidad al Soberano" (DE TAPIA, E., "Febrero Novísimo", tomo VII, págs. 209 y 210).

d) Sueldo, remoción y jubilación

En todo lo demás referente a su sueldo, remoción y jubilación estaba sujeto a lo establecido para los restantes Consejeros de Castilla. Cobraba una asignación especial por ser Gobernador de la Sala, además del sueldo como miembro que era del Consejo de Castilla"". Su remoción estaba sujeta a las propuestas anuales que el Presidente del Consejo de Castilla presentaba al Monarca.

"". En la abundante documentación consultada sobre el Consejo de Castilla y la Sala de Alcaldes durante el reinado de Fernando VII no aparece en ningún momento dato alguno que indique que el sueldo del Gobernador de la Sala fuese mayor. En los presupuestos del Consejo y otros estados de sueldos de los Ministros del Consejo el tratamiento es equivalente al de los demás Consejeros. Sin embargo, la Sala de Alcaldes tenía su propio presupuesto y sí parece que aquí se le incluía un plus por la categoría del empleo, como se desprende de la cuota asignada a la Sala de Alcaldes, dentro de una cuenta de gastos del Ministerio de Gracia y Justicia del año 1.828: existía una partida independiente para sufragar los sueldos del Gobernador, Alcaldes y Fiscal de la Sala, aparte de la de los Consejeros de Castilla. Sabemos así que la remuneración específica de un Gobernador de la Sala de Alcaldes era la de 22.000 reales, a los que se añadía el sueldo de Consejero de Castilla (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6). En 1833 disfrutaba una dotación de 500 ducados, "mientras ejerce este empleo, por su extraordinario trabajo, importancia de sus funciones, eminente servicio que presta a V.M. y al bien público, decoro de su clase, identidad de su destino inseparable del de Consejero de Castilla por sus funciones y naturaleza" (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1833).

2. EL ALCALDE DECANO

El Alcalde Decano era el más antiguo por escalafón de los Alcaldes de Corte de la Sala. El cargo confería al detentador importantes preeminencias, que hacían de él la segunda autoridad de la Sala, tras el Gobernador, a quien sustituía en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Martínez de Salazar en su obra sobre el Consejo de Castilla^{***} dedicó un capítulo a la figura del Decano de la Sala, en el que fundamentalmente señalaba sus preeminencias: no asistía a la capilla, visitas de cárcel que hacía el Consejo de Castilla los sábados ni a las comedias; no tenía rondas, semanerías, repartimientos de cuartel; podía ir con el Presidente o Gobernador del Consejo de Castilla después de la consulta y estaba exento de asistir a la publicación de pragmáticas.

Acompañaba al Consejo de Castilla en las procesiones del Corpus; y acompañaba también al Consejo los días que había visita general de cárceles.

Entre sus cometidos estaba también la vigilancia del buen estado del edificio de la Cárcel de Corte, del que era Protector. Y en general cuidaba de la atención de los presos y asistía al Gobernador de la Sala en la dirección de la institución.

^{***}. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo", Madrid, 1.764, págs. 390 y ss.

En todas las peculiaridades de juramento, retribución y remoción se le aplicaban las normas establecidas para los Alcaldes de Corte, por ser uno de ellos.

3. LOS ALCALDES DE CORTE

a) Nombramiento

Los miembros de la Sala de Alcaldes recibían el título de Alcaldes de Casa y Corte. Sobre ellos decía Martínez Marina^{***} que durante cinco siglos fueron depositarios de toda la jurisdicción civil y criminal, y que "eran los únicos magistrados que debían y podían librar las causas y los pleitos de la Corte y su rastro, y las apelaciones de los pueblos de todo el reino".

Martínez Marina, basándose en antiguas leyes reales y ordenanzas del Consejo, mencionaba algunos requisitos que debían reunir los Alcaldes: en primer lugar debían ser "personas de honor y de saber, desinteresados, justos y temerosos de Dios"; en segundo lugar, habrían de ser "naturales de estos reinos"; y tercero, "cuando el Rey hubiese de proveer alguno de estos oficios hiciese el nombramiento en uno de los propuestos por su Consejo"^{***}.

Producida la vacante por ascenso, fallecimiento o renuncia, se solicitaba a la Cámara de Castilla la provisión de la plaza. La Cámara proponía entonces tres candidatos al Monarca, quien normalmente

^{***}. MARTÍNEZ MARNA, F., "Teoría de las Cortes", tomo I, pág. 816.

^{***}. MARTÍNEZ MARINA, F., "Teoría de las Cortes", pág. 824.

elegía a aquel candidato presentado en primer lugar, por haber sido el que en la Cámara obtuvo mayor número de votos. Sin embargo, es posible que el Monarca gozara de plena libertad para elegir a un tercero no recogido en la terna, o conceder una plaza de Alcalde no prevista para agradecer un servicio.

Por otro lado, el hecho de que muchos Alcaldes pasaran más tarde a los Consejos, hacían de este destino en muchas ocasiones un lugar de paso en la carrera administrativa. Por ello mismo era frecuente la movilidad y las vacantes en las plazas. Y en cuanto a la procedencia, la Sala normalmente se nutría de oidores de las Chancillerías o Audiencias, de Fiscales de la Cárcel, corregidores o abogados de los Reales Consejos.

En cuanto al número de Alcaldes de Corte, éste era variable. Había al menos un Alcalde por cuartel, es decir, por lo menos diez Alcaldes. La Novísima Recopilación^{***} especificaba que el número de Alcaldes debía ser el de nueve, cuando los cuarteles eran ocho. Y más adelante nos informa que el número de Alcaldes estaba a finales del siglo XVIII en doce^{***}. Sin embargo, ya hemos visto que el Monarca podía nombrar libremente Alcaldes, como forma de concesión de gracias y mercedes. Por ejemplo, sabemos que en 1.828 eran catorce los Alcaldes que había en el Consejo^{***}.

Durante el reinado de Fernando VII el número ordinario de Alcaldes estuvo fijado en doce^{***}. Sin embargo, por Real Orden de 13 de agosto de 1833 se mandó al Consejo Real consultar al Monarca sobre si podría reducirse a diez el número de Alcaldes. El Consejo de Ministros hacía esta propuesta con el fin de poder incrementar sus sueldos y reducir gastos al Erario Público. En su consulta de 21 de noviembre del mismo año, el Consejo defendió el número de doce Alcaldes como el más conveniente para el servicio^{***}.

***. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, Ley III.

***. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, Ley IV.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6, Gaceta de Madrid de 24 de mayo de 1.828.

***. Basta confrontar las distintas Guías de Forasteros del reinado de Fernando VII. También E. de Tapia señala en "Febrero Novísimo" que en 1829 el número de Alcaldes era doce (op. cit., tomo VII, pág. 26).

***. Por decreto del Consejo de 4 de septiembre se pidió a la Sala de Alcaldes que informase al Consejo sobre si la disminución del número de Alcaldes a diez ocasionaría graves

Este número respondía a la división de la Corte en diez cuarteles -al frente de cada uno había un Alcalde-, más dos Alcaldes más que quedaban libres para las obligaciones comunes de asistencia a la Sala, presidencia de teatros, semana mayor de repeso, etc., más las propias de sustitución de vacantes o comisiones particulares del Presidente del Consejo de Castilla****. Finalmente el Consejo señaló que la planta de doce individuos era la que parecía más conveniente y la que había subsistido a pesar de las vicisitudes y de las variaciones que habían ocurrido a pesar "de haberse mandado reducir sus plazas a nueve, lo que nunca se había

perjuicios al servicio público. La Sala evacuó informe por decreto de 16 de septiembre: "Que una ligera observación sobre las obligaciones de este destino, la continua experiencia de su ejercicio, sus multiplicadas incumbencias y la misma notoriedad por todos reconocida manifestaba desde luego que las ocupaciones de los Alcaldes eran muchas e importantes". Tras manifestar que no llegaban a cumplir debidamente sus deberes, indicaban que una disminución del número de Alcaldes a diez "podría ser causa de que el servicio no se cumpliera con la exactitud y puntualidad con que los doce Alcaldes, singularmente en circunstancias extraordinarias, por lo que pudiera la supresión de estas plazas ser desventajosa al bien público". (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1833).

****. "La división de la Corte y sus arrabales en diez cuarteles, que en el día tenía, era en su número la más conveniente para la mejor administración de justicia, como que era el resultado de la experiencia de muchos años, y la extensión y vecindario de cada uno, de necesidad exigía de que estuviese al cargo de un Alcalde, por lo que no podía disminuirse el número de éstos. (...) Que tampoco convenía lo fuesen los dos Alcaldes que quedaban sin cuartel, pues sobre que éstos eran iguales con los demás en las comunes obligaciones de asistencia a la Sala, presidencia de teatros, semana mayor de repeso, concurrencia a los fuegos, rondas y otros actos, servirán estos Ministros para despachar los cuarteles en las vacantes, ausencia y enfermedades de los que le tenían, y si no existiesen sería necesario en muchas ocasiones que algunos Alcaldes tuviesen dos cuarteles a su cargo, con entorpecimiento del servicio. Que se ocupaban también estos Alcaldes sin cuartel en comisiones particulares del Presidente del Consejo, de la Sala u otras autoridades, y formaban los expedientes necesarios para informar a la Sala de Gobierno, a la Real Cámara y al Consejo, y en otros interesantes objetos del público interés". (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1833).

realizado"".

b) Juramento

Producido el nombramiento de un Alcalde de Corte"", debía prestar solemne juramento delante del Consejo de Castilla reunido en Consejo pleno.

Fórmulas para prestar ese juramento hubo varias, variando según las épocas"". En este trabajo vamos a incluir tres textos, por orden cronológico. El primero es la fórmula de juramento tradicional, que se encontraba escrita en el Libro de Juramentos del Escribano de Gobierno del Consejo de Castilla, don Bartolomé Muñoz. Esta fórmula decía así:

"¿Que juráis a Dios y a esta señal de la Cruz y a las palabras de los santos Evangelios que usaréis bien y fielmente de este oficio y cargo que se os es encomendado y guardaréis el servicio de Dios y de S.M. y las leyes y ordenanzas del Reino y el secreto de la Cárcel y tendréis cuidado de despachar brevemente los pleitos de los presos de la Cárcel y los otros negocios que ante vos ocurrieren, especialmente los pobres, y administraréis justicia sin excepción de

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1833.

"". He aquí el acta de nombramiento de varios Alcaldes de Corte, fechada el 20 de febrero de 1824: "En consideración a la acreditada lealtad hacia mi Real Persona de don José Hernán Pérez, don Manuel García Cordell y don Pedro Pérez Juana, Abogados del Colegio de esta Corte, he venido en nombrarlos Alcaldes de mi Casa y Corte. Tendréislo entendido para su cumplimiento y lo comunicaréis a quien corresponda..." (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 11.887 núm. 3).

"". La fórmula de juramento que se utilizaba durante el reinado de Carlos III viene contenida en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4015 expediente núm. 25.

persona alguna, y visitaréis la Cárcel a los tiempos y según y como sois obligado, y no consentiréis que los Escribanos y alguaciles y oficiales de la Cárcel lleven derechos demasiados, y que veréis y guardaréis las ordenanzas que se hicieron por la Majestad del Emperador nuestro Señor en Zaragoza el año de 18, que disponen la orden que habéis de tener en el usar y ejercer vuestros oficios y tendréis cuidado de que esté proveída la Corte de los mantenimientos necesarios y avisaréis a S.M. y al Consejo de lo que os pareciese que conviene proveer, y en todo haréis aquello que buen Alcalde de Corte debe y es obligado hacer?"".

Tras la supresión del Consejo de Castilla por Napoleón en diciembre de 1.808, el juramento de los Alcaldes se realizaba en el Acuerdo de la Sala Plena, de pie, con la mano sobre la Cruz. El texto entonces era:

"¿Juráis a Dios y a esa señal de la Cruz defender el misterio de la limpia y pura Concepción de María Santísima, de guardar bien y fielmente las leyes del Reino, autos acordados y en todo cumplir las obligaciones de vuestros oficios de Alcaldes de Casa y Corte para que habéis sido nombrados?"".

Una tercera fórmula de juramento de Alcaldes fue la llamada "fórmula constitucional de Bayona", que se aplicó probablemente en los últimos meses de 1.809 y en

***. A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.400, año 1.809. El Alcalde debía responder: "Sí, juro", a lo que el escribano oficial respondía: "Si así lo hicieredes, dios os ayude y si no os lo demande mal y caramente como aquel que jura su Santo Nombre en vano". Finalmente el Alcalde de Corte decía: "Amén".

****. A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.400, año 1.809, fórmula utilizada en el juramento de Alcaldes el día 16 de febrero de 1.809. En aquella ocasión los Alcaldes respondieron "Sí, juramos", a lo que el Escribano de Gobierno añadió: "Si así lo hiciéssis, Dios os ayude y si no os lo demande". "Amen". Sabemos también las fechas y nombres de los Alcaldes que juraron en el año 1.809: el 19 de marzo, don Antonio Cortés y Zabalza; el 15 de junio, don Diego José Salazar; el 6 de julio, don Francisco Juan Díaz Lavandero; el 14 de septiembre don Juan Loresecha; y el 7 de noviembre los Alcaldes don Andrés Alfonso Choya, don Martín de Villalaz, don Manuel Silvela y don Francisco Iturribarria. También el 18 de febrero de 1.809 prestaba el correspondiente juramento don Manuel Camino, para Fiscal de la Real Casa y Corte.

1.810 hasta la supresión de la Sala. Su texto era el siguiente:

"¿Juráis a Dios nuestro Señor y a esa señal de Cruz cumplir las obligaciones de Alcalde de la Real Sala de Corte con el solo objeto de la felicidad de la Nación y de la gloria del Rey, conforme a las disposiciones de la Constitución"****.

Finalmente llegaba el día asignado para el juramento. Debía estar en el Consejo con la suficiente antelación y esperar en la parte de afuera de la Sala primera de Gobierno. El procedimiento de este acto era por tanto igual que el caso de los miembros del Consejo, con la única diferencia que tanto Alcaldes como Fiscal de la Sala**** esperaban en la parte de afuera de la Sala primera de Gobierno y no en la Sala segunda de Gobierno****. Una vez formado el Consejo pleno y estando presentes los subalternos del Consejo, tomaba la palabra el mismo Escribano de Gobierno: "Señor, viene al Consejo a jurar la plaza de Alcalde de Casa y Corte don..." El Presidente o Gobernador le hacía entrar****. Acabado de leer el título y tras hacer sonar una campanilla el Presidente, salía de la Sala el Alcalde acompañado por el portero, y después de haber dicho el que presidía la Sala que se guardase y cumpliese lo que S.M. mandaba y que entrase a jurar, el portero de estrados daba una vara al Presidente****. Nuevamente hacía sonar la campanilla el Presidente y volvía a entrar el Alcalde y se ponía a la derecha del Escribano de Gobierno, quien le recibía el juramento****. Hecho esto el Alcalde o Fiscal de la Sala subía a la tarima y haciendo tres cortesías se presentaba con una rodilla en tierra al que presidía el

****. A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1.400, año 1.809, folio 63. Tras decir: "Sí, juro", el que recibía el juramento respondía: "Si así lo hiciérais, Dios os ayude, y si no os lo demande, como quien jura su Santo Nombre en vano". "Amén".

****. El procedimiento de jura de los Fiscales de la Sala era igual al de los Alcaldes de Corte.

****. Martínez de Salazar en sus "Noticias del Consejo", decía sin embargo que esperaban en el despacho del Escribano de Gobierno. (Op. cit., págs. 382 y 383).

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", pág. 383.

****. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 30.

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", pág. 383.

Consejo pleno para que le entregase la vara, "que es el signo de la jurisdicción". Recibida la vara hacía nuevamente tres cortesías y se retiraba"". Ahadía Martínez de Salazar que concluido el acto se retiraba al despacho del Escribano de Gobierno"".

La ceremonia tenía su fase siguiente en la Sala de Alcaldes. El nuevo Alcalde y su padrino llegaban a la Sala. Entraba primero en el Acuerdo el padrino e informaba públicamente del hecho. Seguidamente la Sala le mandaba entrar al nuevo Alcalde, quien pasaba por la puerta principal de estrados y tomaba posesión del asiento que le correspondía por ser el más moderno. Esta toma de asiento equivalía a la toma de posesión del cargo"". A continuación se formaba la Sala y se le entregaba el Libro de Acuerdos"". En este Libro el Alcalde más moderno debía anotar todas las decisiones tomadas por la Sala. También parece que para evitar errores y para que aprendiera el manejo del Libro, existía la costumbre antigua de que el predecesor conservase el Libro durante la primera semana y que durante ese tiempo le enseñase su manejo"". Seguidamente se despachaban asuntos pendientes de Sala plena"".

La ceremonia del juramento del nuevo Alcalde iba acompañada de otros formalismos. Cuando por la Secretaría del Consejo de la Cámara se despachaba el título correspondiente, antes de la ceremonia de jura, el Alcalde designado debía visitar al Presidente o Gobernador y a los Ministros del Consejo acompañado de otro Alcalde que hacía las veces de padrino. Parece ser que este padrino solía ser el Alcalde de Corte más moderno -es decir, el último nombrado antes que él mismo-.

"" ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", pág. 30.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", págs. 382 y 383.

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.400, año 1.809.

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", pág. 383.

"" SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "La Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante el reinado de Carlos II", págs. 82 y 83.

"" A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.400, año 1.809.

c) Competencias

Los Alcaldes eran autoridades importantes en la Villa y Corte. Como hemos visto, la capital estaba dividida en una serie de cuarteles o circunscripciones y al frente de cada cuartel se encontraba un Alcalde^{***}, lo que delimitaba la jurisdicción propia de cada uno de éstos. El Alcalde debía vivir en él^{***} y era responsable de su buen orden y funcionamiento. "Los Alcaldes tienen a su cargo el Gobierno de la Corte, y hacen en ella oficio como de Corregidores"^{***}.

A la hora de estudiar las competencias de un Alcalde de Corte, podemos clasificarlas en dos categorías. Aquellas obligaciones que eran comunes a todos los Alcaldes, y las obligaciones propias y peculiares de los Alcaldes que estaban al frente de un cuartel.

Entre sus cometidos de los diez Alcaldes de Cuartel se encontraba en primer lugar la organización de las

^{***}. La división de Madrid en diez cuarteles provenía del año 1802 -en lugar de los ocho que antes había-. En aquella ocasión estaban subdivididos en un total de 54 barrios. A la cabeza de cada cuartel había, como hemos visto, un Alcalde de Corte, y a al frente de cada barrio un alcalde de barrio. (MARTÍNEZ DE VELASCO, A., "La Formación de la Junta Central", op. cit., pág. 42; y A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 3.925, Real Cédula de 18 de junio de 1.802, por la que se dividía la población de Madrid en 10 cuarteles en lugar de 8, bajo los títulos y con la asignación de barrios).

^{***}. "Los Alcaldes eran los únicos empleados de la Corte a los que se obligaba a vivir en determinadas localidades dentro de sus cuarteles y donde los alquileres de las casas eran más elevados" (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1833).

^{***}. SANCHEZ SANTIAGO, A., "Idea elemental..." tomo II, pág. 43.

rondas y la vigilancia del orden público""; cuidado de la higiene pública, basuras, alcantarillado, etc.; visita a los establecimientos públicos, hospitales, mercados etc., y vigilancia de los abastos.

Otros cometidos de los Alcaldes en sus respectivos cuarteles eran los siguientes: formación de las matrículas del vecindario; cuidado de las posadas públicas y secretas; dar parte al Presidente de los forasteros que entraban, las licencias y los pasaportes expedidos; llevar los libros de los puestos de ropas usadas y dar informes para el otorgamiento de licencias a las posadas, a las tiendas de ropa vieja, etc.; reconocimiento de casas de bebidas, fondas, bodegones, botillerías, etc."".

Un segundo grupo de funciones hacía referencia a las comisiones de gobierno o pesquisas. Parece ser que éstas podían ser de dos clases: unas para averiguar y castigar ciertos delitos, y otras para la resolución de diferentes cuestiones por orden del Rey. Para las primeras, los Alcaldes iban acompañados de un alguacil y de un escribano"".

Los Alcaldes ejercían también funciones de policía de cuartel. La Policía conocía a prevención en muchos delitos comunes y pasaban a la Sala instruidas las primeras diligencias. Todavía recaía en 1833 sobre los

""". "Guardan en las horas y asuetos el orden..." (SANCHEZ SANTIAGO, A., "Idea elemental...", tomo II, pág. 45). Un curioso expediente conservado en el Archivo General de Palacio menciona un incidente ocurrido entre los guardias de Palacio y los Alcaldes encargados de las rondas nocturnas, acaecido en el año 1815. Como Alcaldes de Casa de S.M., los Alcaldes estaban facultados para penetrar en el Real Palacio y continuar allí su ronda hasta donde había sido costumbre desde antiguo. El 18 de noviembre de 1.815 la Sala enviaba una exposición al Mayordomo Mayor de S.M. en la cual solicitaban quedasen expeditas las facultades de los Alcaldes reconocidas en lo relativo a asistir con sus rondas en Palacio para impedir desórdenes. (A.G.P., Sección Fernando VII, caja 199, expediente núm. 22). Conflictos como éste habían sido frecuentes en el siglo XVIII, según consta en algunos expedientes del Archivo Histórico Nacional. En 1784 fue formado un expediente por una Real Orden, en el que el Rey declaraba que los Alcaldes de Corte podían entrar en Palacio con toga y vara levantada para rondar y prender (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 7).

""". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1833.

""". SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "La Sala de Alcaldes de Casa y Corte en el reinado de Carlos II", pág. 86.

Alcaldes gran parte del ramo de Policía en lo judicial y en todo lo relativo al orden y tranquilidad pública en sus respectivos cuarteles"".

Nos interesan especialmente las que hemos denominado obligaciones de los Alcaldes de Corte.

La primera de éstas es lo que se llamaba el Alcalde semanero. Entre los Alcaldes existía un turno semanal, establecido por antigüedad, para la visita de los mercados de abastos. El Alcalde semanero asistía diariamente al repeso de la Plaza Mayor, para asegurar el respeto de los pesos y medidas de productos y la legalidad de los precios fijados"". Cuidaban también de los abastecimientos y de la higiene en los productos. Para ello, el Alcalde semanero era cada semana el encargado de designar a los alguaciles, escribanos y porteros que debían asistir a esta función en los distintos mercadillos de la capital. Era misión suya también conocer las querellas y denuncias de este género presentadas por tratantes y vendedores, y llevar registro de todo ello en un libro especial. Por otro lado, el Alcalde semanero era el encargado de fijar semanalmente los precios de los productos que se vendían en los mercados de Madrid"".

Otra misión ordinaria de los Alcaldes de Corte era la asistencia a las ceremonias y actos públicos: procesiones, en las que participaban en un detallado ceremonial""; funciones religiosas, bien las ordinarias de diario, que visitaban los Alcaldes de ronda para comprobar el decoro y orden de la ceremonia; o bien las celebraciones extraordinarias por acción de gracias, funerales o cualquier otro motivo; visita diaria a los teatros de comedias para

""". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1.833.

""". Esta tradicional función del repeso sabemos que todavía se practicaba en 1808 (vid. por ejemplo el libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1398, de 1808, fols. 338 y ss., en el A.H.N.). Sin embargo, en 1833 ya no era preciso repesar el pan, la carne y otros comestibles, que siempre habían hecho muy penoso el repeso. Entonces ya sólo se repesaba a instancia de parte. (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1833).

""". MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 421 a 439.

""". Cfr. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 454 a 462.

comprobar el buen orden de las representaciones"".

Como garantes del orden público, debían velar también los Alcaldes por el cumplimiento de las disposiciones de seguridad en caso de incendios y otras catástrofes públicas, hundimientos, epidemias, etc. y caso de producirse eran los encargados de organizar las operaciones de salvamiento y rescate de heridos"".

Igualmente conocían los Alcaldes las causas de conspiración en todo el Reino, de forma que la Sala tuvo conocimiento de muchas causas políticas y de Estado"".

Los dos Alcaldes que no tenían cuartel ejercían, como hemos visto, algunas competencias peculiares. Despachaban los cuarteles en las vacantes, ausencias y enfermedades de los titulares de un cuartel; realizaban determinadas comisiones particulares del Presidente del Consejo Real y se les encomendaba otras labores del interés público"".

"". MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", págs. 462 a 473.

"". MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", págs. 473 a 492.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1.833.

"". Así, por ejemplo, en 1833 los dos Alcaldes sin Cuartel tenían dos cargos que incluso les imposibilitaba asistir ordinariamente al Tribunal: uno tenía a su cargo la Asesoría de la Comisión Militar, y el otro la Subdelegación de Policía de Madrid (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1833). Por su parte A. Sánchez Santiago apuntaba lo siguiente: "Ningún Alcalde por sí solo, sin juntarse con los demás, tiene conocimiento de causa criminal, ni puede castigar, ni hacer soltura; sólo tiene poder para prender. De todas las causas criminales que conocen los corregidores y sus tenientes en las partes donde reside la Corte, van las apelaciones a ellos, y no pueden los jueces ordinarios ejecutar ninguna pena corporal, en que se incluye la de tormento, sin consultarlo con los Alcaldes que les toca el Gobierno de la Corte, y para ello la tienen dividida en (...) cuarteles, y a cada uno le toca visitar el que le pertenece, y el registro de los que vienen a ella: visitar las casas de posadas, guardar no se cometan en él delitos; rondarle con dos o más alguaciles y escribano que tiene señalados para que le asistan en lo que toca a su oficio; pertenecerles el abasto de mantenimientos, poner precios en ellos; averiguar los delitos, y tener de día y de noche en seguridad la Corte, y hacer acuerdos de proveer Autos de buena gobernación,

d) Honores

En cuanto a los honores y prerrogativas de los Alcaldes de Corte, recibían el tratamiento de "Señor"; asistían a todas las ceremonias y actos públicos a los que acudía el Consejo Real de Castilla, entre otras a los juramentos y entradas de Reyes y Príncipes, ceremonias de bautizo, entierros y honras fúnebres, viajes reales, besamanos, visitas de cárceles y también a la consulta que todos los viernes hacía el Consejo con el Monarca^{***}.

Por otro lado, la Sala de Alcaldes estaba dividida a su vez en dos Salas. La primera era presidida por el Alcalde Decano y la segunda por el Alcalde Subdecano, según precisaba la Novísima Recopilación^{****}.

agravan sus mandatos con penas pecuniarias y corporales; y lo que mandan con pregón se obedece como pragmática o ley; y para que se ejecute tienen cien alguaciles de Corte..." (SANCHEZ SANTIAGO, A., "Idea elemental...", tomo II, págs. 46 y 47).

^{****}. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo...", págs. 383 y 384.

^{***}. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, Ley IV. "La Sala de Alcaldes venía funcionando con dos Salas, con un reparto desigual de materias. En un principio las dos Salas -a pesar del tenor literal de alguna disposición sobre la materia- entendían en materias penales. Pero la Sala segunda corría con las apelaciones en lo civil, que -aunque de escasa utilidad económica- eran numerosas y causaban muchas dilaciones." (BERMEJO CABRERO, J.L., "Dos notas sobre la Sala de Alcaldes de Casa y Corte", Estudios de Historia del Derecho y de las Instituciones, Universidad de Alcalá, Secretaría General, Servicio de Publicaciones, Colección Aula Abierta núm. 4, Madrid 1.989, pág. 185).

e) Retribución

Sobre la retribución de los Alcaldes, las Cortes decretaron el 3 de septiembre de 1.820 que éstos gozasen en adelante de un sueldo de 24.000 reales -idéntico al de los Regentes de las Chancillerías y las Audiencias-. Sin embargo, no parece que los sueldos de estos Ministros fuesen muy holgados. Parece ser que lo Alcaldes de Corte proporcionalmente estaban peor pagados que los oidores y alcaldes del crimen de las Chancillerías y Audiencias****. Lo cierto es que Fernando VII, haciendo caso probablemente a las peticiones de los propios Alcaldes en esta línea, acordó por resolución de 22 de agosto de 1831 que desde esa fecha a les abonase a todos los Alcaldes el sueldo íntegramente sin descuentos, "como se hacía con las demás clases de los otros Ministerios", gracia de la que todavía no habían llegado a disfrutar en octubre de 1833****. Por aquella fecha, por tanto, el sueldo de un Alcalde quedaba cifrado en 41.500 reales anuales****.

A los bajos sueldos se añadía el habitual retraso en el abono de aquéllos, según consta en distintas noticias a lo largo del reinado****.

Señalaba Desdevises que "el Rey había retirado poco a poco el gobierno de la Villa de Madrid al Ayuntamiento, y los verdaderos administradores de Madrid eran funcionarios reales: el Gobernador del Consejo de

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1833.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6110, consulta del 21 de noviembre de 1833.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110, consulta del 21 de noviembre de 1833.

****. Vid. por ejemplo A.H.N., Consejos Suprimidos, Secretaría de la Presidencia de Castilla, libro 1.734.

Castilla, los Alcaldes de Casa y Corte"" y los alcaldes de barrio"". Y Rosa Isabel Sánchez añade que eran los que controlaban la vida política y económica de Madrid"".

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 216.
En otra obra suya, "Le Conseil de Castille en 1.808",
reafirmaba la misma idea incluyendo al Corregidor de la Villa
entre estas autoridades (op. cit., pág. 83).

"". Madrid estaba dividido en 10 cuarteles y 64
barrios, al frente de cada cual había un alcalde de barrio,
que dependía de la Sala de Alcaldes (A.H.N., Consejos,
Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.110,
consulta del 21 de noviembre de 1833).

"". SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "La Sala de Alcaldes de Casa
y Corte en el reinado de Carlos II", pág. 85.

4. OTROS EMPLEADOS DE LA SALA DE ALCALDES

A) EL FISCAL DE LA SALA

No parece que el Fiscal de la Sala fuese tan relevante en su instituto como lo eran los Fiscales del Consejo de Castilla en aquel Tribunal. Aparece en pocos documentos y las referencias encontradas tampoco son muy abundantes. Lo que es innegable es que era un cargo importante dentro de la Sala, el siguiente detrás de los Alcaldes. Y la propia carrera administrativa de éstos demuestra que, como ocurría en el Consejo de Castilla, los Fiscales solían terminar pasando a ocupar un puesto de Alcalde de Corte.

Parece que el número de estos Fiscales era muy reducido y se limitaba a uno o dos****. En la Novísima

****. Así se menciona en un documento de 1814 que en aquel año se elevó el número de los Fiscales a dos, aunque pensamos que se refiere más bien a la figura de Agente Fiscal, a quien muchas veces los documentos de la época denominaban también Fiscal (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 9) pudiera ser también que en 1.808 llegara a haber dos Fiscales, ya que la Sala de Alcaldes estaba a su vez dividida en dos Salas. Esta situación pudo durar hasta la supresión de una de estas dos

Recopilación se especificaba que debería haber un Fiscal****.

Su designación la realizaba el Consejo de Castilla y tendría unas características muy similares a la de los Fiscales del Consejo. Por otro lado, también era frecuente que siguiendo la carrera administrativa, pasara a ocupar la plaza de Fiscal de la Sala alguno de los Agentes Fiscales del Consejo de Castilla o de la Sala de Alcaldes****. También sabemos que en ausencia o enfermedad de un Fiscal, se solía nombrar un Fiscal sustituto, y que era frecuente que este sustituto fuera un Agente Fiscal****.

En cuanto a sus competencias, sabemos que tenía una función activa en el proceso ante la sala, emitiendo dictámenes o asistiendo a las declaraciones de presos o testigos****. Recibía también el nombre de oficio fiscal****. Una noticia de 1814 nos informa cómo tras el

Salas por Fernando VII, por Real Orden de 23 de marzo de 1.808 (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1.808, folios 356 y ss.; vid. también EVOLUCIÓN HISTÓRICA). Lo que parece comprobado es que en junio de 1808 había tan sólo un Fiscal de la Sala, ya que en una noticia fechada el 8 de junio se habla de que "el Fiscal de la Sala pasó a Bayona para asistir al Congreso que allí se iba a celebrar" (A.H.N., Libro de gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1399, año 1808). Con seguridad sabemos también que en el año 1.828 había sólo un Fiscal de Sala (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698 núm. 6, Gaceta de Madrid de 24 de mayo de 1.828; así también lo refiere E. DE TAPIA en "Febrero Novísimo", tomo VII, pág. 201, obra fechada en 1828).

****. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, Ley III.

****. Así ocurrió, por ejemplo, con don Mateo Zendoquis, Agente Fiscal del Consejo de Castilla. Zendoquis debió ascender a Fiscal de la Sala a finales de 1.808. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46; y legajo 3.572 núm. 12).

****. Así, por ejemplo, cuando el Fiscal de la Sala pasó en 1.808 a Bayona para asistir al Congreso que allí se iba a celebrar, en su sustitución fue nombrado por Mon el Agente Fiscal de la misma don Manuel Norberto Pérez del Camino, con el título de Fiscal sustituto (A.H.N., Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.399, año 1.808, 8 de junio).

****. DE TAPIA, E., "Febrero Novísimo", tomo VII, págs. 206 y 207.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 9.

restablecimiento del Consejo se encomendó a la Sala unas especiales funciones de restablecimiento del orden público. Ello implicaba un considerable incremento del volumen de trabajo de la sala y de sus Fiscales. Así lo representaba entonces su Fiscal, don Mateo Zendoquis:

"S.M., conociendo esto mismo (el estado de corrupción, desórdenes y delincuencia al final de la Revolución), acordó por su Real Decreto de 23 de mayo restablecer ante todas cosas esta Sala y mandó se ocupase principalmente de la formación de causas y castigo de criminales, desembarazándola por lo propio de muchas atenciones que antes tenía a su cargo: atenciones que antes eran peculiares a los Sres. Alcaldes, pero de que no entendía el oficio fiscal"".

En los demás aspectos relativos a competencias, nombramiento, remoción y jubilación remitimos a la normativa general sobre los Fiscales del Consejo recogida en aquel apartado. No hemos encontrado ningún dato relativo al sueldo que percibían estos Ministros.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 9. Y añadía Zendoquis: "el que habla comparando lo que ha trabajado este mes, con lo que ha despachado siendo Fiscal de la extinguida Audiencia de Madrid y Agente del Consejo de Castilla por espacio de catorce años, prevé y conoce que según el incremento progresivo que van tomando las causas y demás asuntos de la Sala, o no podrá examinarlas con la debida escrupulosidad o padecerán mucho retraso, si no se añade otro Agente Fiscal al solo que hay por ahora" (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 9).

B) AGENTE FISCAL DE LA SALA

Pocos datos tenemos sobre los Agentes Fiscales de la Sala de Alcaldes. Sabemos que existían también en la Sala y que según la Novísima Recopilación debía ser uno también****. Sin embargo, en varias etapas del reinado de Fernando VII pudo haber dos o incluso alguno más****. También parece que también hubo dos Agentes Fiscales en momentos en que sólo había un Fiscal en la Sala.

Por un importante expediente de julio de 1814 sabemos que tras el restablecimiento del Consejo, el Fiscal de la Sala don Mateo Zendoguis solicitó fuera creada una segunda plaza de Agente Fiscal, así como una redotación de los dos que en tal caso habría. En su dictamen, tanto la propia Sala como los Fiscales del Consejo coincidieron en que no era necesaria la creación de esta segunda plaza, "pues pronto se reduciría el número de causas y este empleado sería gravoso al Erario, y no necesario para el

****. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, ley III.

****. Un expediente de la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, del año 1814, referido a los Agentes Fiscales tenía el siguiente enunciado: dotación de los Agentes Fiscales de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte: nombramiento de un segundo Fiscal. Localizado este expediente, en realidad no se refiere a la creación de una segunda plaza de Fiscal sino de Agente Fiscal. El expediente está en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 rúm. 9. Tras su consulta se observa que finalmente no fue creada esta segunda plaza de Agente Fiscal.

despacho de los asuntos"****.

En cuanto a las características de este empleado, sabemos que el destino era "de mucha confianza", y que su cualificación y preparación debía ser importante, semejante a la que tenían los Relatores****.

Asistente y sustituto del Fiscal, sus funciones serían similares a las mencionadas en el capítulo relativo a los Agentes Fiscales del Consejo****. Era por tanto una figura estrechamente vinculada a la del Fiscal de la Sala, de quien era el más directo colaborador.

En cuanto a su sueldo, sabemos que hasta 1814 percibía una dotación de 15.000 reales. Desde diciembre de aquel año se le sube a 20.000 reales, que cobraría "por Tesorería Mayor, como los demás oficios de justicia"****.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 9.

****. "Las calidades de que deben estar adornados esta clase de subalternos son bien sabidas, como qual deba ser su instrucción", comparable a la de los Relatores (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 9).

****. Cfr. ESTRUCTURA ORGANICA, Agentes Fiscales del Consejo. ,

****. El Fiscal don Mateo Zendoquis había propuesto que para dotar a los Agentes Fiscales se adoptase el mismo medio que se eligió para redotar a los Relatores en 1784. Pedía el Fiscal de la Sala que en las causas en que estos subalternos llevaban derechos, también los llevase el Agente Fiscal con arreglo a arancel. En su dictamen, los Fiscales del Consejo propusieron que la redotación no fuera según arancel, sino con cantidad fija -20.000 reales-, con cargo a Tesorería Mayor (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 9).

C) ESCRIBANOS DE LA SALA

Eran conocidos también como Escribanos del Crimen o Escribanos de Cámara del Crimen^{***}, aunque en la documentación del Consejo se suele usar aquella denominación^{***}. Desde tiempos antiguos hay noticias de la existencia de estos subalternos en la Sala de Alcaldes^{***}.

Según la Novísima Recopilación^{***} debía haber cuatro Escribanos de Cámara del Crimen. Anteriormente

^{***}. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, Ley III.

^{***}. Un expediente del A.H.N. sobre estos Escribanos - hoy ilocalizado- era: Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.268 núm. 34.

^{***}. En 1.518 Carlos I ordenó que los Alcaldes de Corte nombraran y presentaran los Escribanos y que éstos fueran "personas expertas y de confianza, idóneos y suficientes; a los quales trayan ante los de nuestro Consejo, para que por ellos sean vistos y conocidos, y seyendo tales, los aprueben, para que puedan usar de los dichos oficios... para que juren que guardarán nuestro servicio, y usarán bien y fielmente..." (SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "La Sala de Alcaldes en el reinado de Carlos II", pág. 115, citando la Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXX, Ley I).

^{***}. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, Ley III.

había un Escribano por cuartel****, pero esto parece fue reformado a principios del siglo XVIII.

La Novísima Recopilación especificaba las condiciones que debían reunir tales Escribanos: debían ser honrados y eficaces, no ser propietarios de una tienda ni taberna, no desempeñar oficios manuales ni ejercer otra profesión que pudiera impedirles el cumplimiento de sus cometidos****.

Los Escribanos de la Sala debían jurar y ratificar cada año su juramento el día 7 de enero en la Sala de Corte. Este era un requisito esencial para poder ejercer su oficio****.

Cada Escribano estaba sujeto a una serie de obligaciones y prohibiciones: debía servir personalmente su cargo y no podía por tanto dejar un sustituto, salvo que tuviera licencia judicial; tampoco podía nombrar sin permiso tenientes ni arrendar ni vender su oficio; era propio de su encargo el asistir por mandato de los Alcaldes a actos públicos, ceremonias, procesiones y festejos****; tampoco se les permitía recibir obsequios de los litigantes, bajo importantes sanciones****; por otro lado, los Escribanos no debían cobrar ninguna clase de derechos a los pobres; y en general no cobraban más derechos que los establecidos en su arancel; igualmente debían rubricar todos los asuntos que despachaban, indicando los derechos que percibían.

Los Escribanos del Crimen tenían una oficina a la que los Alcaldes y Alguaciles podían acudir para hacer las causas, averiguaciones y prisiones que se les ofreciese. Como parece que el número de los Escribanos era sensiblemente inferior al de cuarteles, probablemente correspondería a cada Escribano un número de cuarteles -unos dos o tres por Escribano-. Por otro lado, cada Escribano tenía un número de escribanos oficiales -figura equivalente a los oficiales de Escribanía en el Consejo de Castilla-.

En cuanto a sus ingresos, parece que tenían

****. Novísima Recopilación, Libro III, Título XX, Ley I, Ley de 3 de mayo de a.604, art. 3.

****. Novísima Recopilación, auto 7, Título 23, Libro IV.

****. Novísima Recopilación, capítulo I, Ley VII, Título XXIII, Libro IV; y Ley IV, Título XXX, Libro IV.

****. Novísima Recopilación, auto 7, Título XXIII, Libro IV.

****. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXIII, auto VII, capítulo II; y Libro IV, Título XXX, Ley XIII.

una parte fija más los derechos que cobrasen por los expedientes que tramitasen a instancia de parte. Estos derechos cobrados tenían que estar taxativamente reflejados en el expediente para poder ser cobrados. Y estos derechos debían sujetarse al arancel vigente, so pena de multa y suspensión en el oficio^{***}.

^{***}. Novísima Recopilación. Libro IV, Título XXVII, Ley XVII.

D) RELADORES DE LA SALA

Según la Novísima Recopilación^{****}, la Sala debía tener dos Relatores. Sabemos que por Real Resolución posterior de 28 de noviembre de 1.771, fue aumentado a tres el número de estas Relatorías y se aumentó el sueldo de estos subalternos a 15.000 reales de vellón al año, por las causas de oficio, más los derechos correspondientes obtenidos en las causas a instancia de parte. En todo lo demás parece podrían aplicarse las normas generales de los Relatores del Consejo de Castilla (lo referente a nombramiento por oposición y concurso; funciones, remoción y jubilación, etc.).

Otra noticia fechada en el año 1814 nos informa que por Real resolución comunicada a la Sala el 12 de febrero de 1784 se había concedido permiso a sus Relatores para llevar derechos en ciertas y determinadas causas que allí se expresaban, ya que su dotación de 15.000 reales no era suficiente. Por tanto, a esta dotación se añadía otra cantidad supletoria, según arancel. Esta retribución la conservaban todavía los Relatores de la Sala a finales de 1814, según consta en un expediente de aquella fecha^{****}.

En los casos en que se tramitaban las causas

****. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, Ley III.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 9.

sumariamente, su relación se atribuía a los propios Alcaldes, puesto que éstos conocían todas sus diligencias y podían hacerlo más brevemente y mejor"".

Por lo demás, vemos que los Relatores de Sala, como los del Consejo de Castilla, estaban presentes en las audiencias y eran pieza trascendental en el proceso ante la Sala"".

"" . Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, Ley XV.

"" . Cfr. ESTRUCTURA ORGANICA, Relatores del Consejo.

E) ESCRIBANOS OFICIALES DE LA SALA

Parece ser que cada Escribano de Sala tenía dos oficiales que le ayudaban. Entre otras obligaciones debían concurrir todos los días a la audiencia, vestidos con traje de golilla, para cumplir las órdenes que la Sala, el Gobernador o los Alcaldes le encomendasen**** También debían asistir diariamente a las Escribanías de Cámara de la Sala.

Unos y otros -Escribanos y Escribanos oficiales- debían estar presentes en cada una de las obligaciones que tuviera que cumplir el Alcalde: tanto en la audiencia, repeso, rondas, asistencia a comedias etc. En muchas ocasiones este oficial representaba también al Escribano de Cámara. Y debía dar cuenta y fe de las novedades producidas en la visita o salida.

Debía llevar también un inventario de todos los documentos creados en la Sala y era el encargado de su

****. Así, el 5 de marzo de 1808 el Gobernador de la sala mandó a todos los escribanos oficiales de ella "que con arreglo a lo que está mandado, luego que ocurra alguna novedad de robo, muerte, heridas, incendios u otras graves, den cuenta inmediatamente a ss. por medio de un parte, según se acostumbra, pena al que sea omiso de tomar contra él la providencia que corresponda". También se mandaba en la misma Orden a los escribanos oficiales de la Sala que estuvieran en el repeso mayor, que inmediatamente que el Alcalde semanero firmase el pliego del Rey y el del Gobernador del Consejo, remitiesen otro firmado al Gobernador de la sala, en el que le informasen de las novedades que incluía el pliego y otras que hubiera habido (A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, núm. 1.398, fols. 338 y ss., 7 de marzo de 1.808).

autentificación"". También contaban con procuradores, quienes eran los encargados de recibir las denuncias y de los cuales uno debía estar presente en las audiencias.

Otras obligaciones suyas eran las siguientes: debían asistir a los Alcaldes y demás ministros de la Sala escribiendo las causas criminales, las denuncias y los demás delitos que les encargasen; atendían los asuntos que el Rey o el Consejo remitían a la Sala, con la comisión de perseguir y determinar las causas, así como las que iban en apelación de las sentencias de los tenientes de corregidor, etc.; en ocasiones se les encomendaban comisiones o realizar fuera de la Corte por orden de la Sala; y en caso de enfermedad o ausencia, se sustituían unos oficiales a otros; también debían asistir a las publicaciones de los bandos y de los autos, que les ordenaba publicar el Consejo o la Sala.

Todos los jueves debían presentar al Escribano de Cámara correspondiente un Memorial de las causas que se seguían en la Sala desde el jueves anterior. Hecho este Memorial, era leído por los Escribanos de Cámara en la Sala en pleno: allí daban cuenta de las causas pendientes en su Escribanía, informando de su estado.

También debían elaborar un testimonio diario de los heridos que entraban en los hospitales de la Corte. Para ello se basaban en un libro especial de registro que había en cada hospital, donde se registraba cada entrada de personas que habían sido heridas violentamente y un informe de su estado y causas. En ocasiones debían tomar declaración jurada a testigos, cirujanos, etc. Esta lista era elaborada por el oficial semanero"".

****. SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "La Sala de Alcaldes en el reinado de Carlos II", pág. 116.

****. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXVII, Ley XIV.

F) PORTEROS DE LA SALA

Según la Novísima Recopilación había treinta y seis porteros de vara, que cobraban un salario de cinco reales diarios****.

Las obligaciones de estos porteros de vara eran las siguientes: en primer lugar, vemos que el cargo era personal e intransferible, y sin licencia judicial no podían nombrar sustitutos; tampoco podían nombrar sin permiso tenientes ni arrendar tácita ni expresamente sus oficios; asistían a las rondas, actos públicos, procesiones, etc., a los que asistían los Alcaldes; no podían recibir dinero ni ninguna otra cosa de los litigantes; tenían que ejecutar los cometidos que les fueran encomendados por la Sala, el Gobernador o los Alcaldes, y tenían que denunciar cualquier hecho que fuera contravención de norma; debían asistir por las mañanas y tardes a los Alcaldes y acompañarles en sus visitas, paseos, etc.

Un expediente fechado el 30 de octubre de 1.815**** nos informa de algunos detalles interesantes sobre los porteros de la Sala. En aquella fecha había tres porteros de Cámara y de Estrados de la Sala de Alcaldes, don Antonio Ferreiro, don Juan Rodríguez Redín y don Tomás Ruiz del Hoyo. Al parecer, esta figura de los porteros había existido siempre en la Sala de Alcaldes. Por otro lado, el trabajo de los tres destinos era idéntico.

Los ingresos de estos Porteros eran

****. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXX, Ley III.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.075, consulta del 30 de octubre de 1.815.

inferiores a los percibidos por los que servían en el Consejo de Castilla, pese a la consideración teórica que tenía la Sala de Alcaldes de Quinta Sala del Consejo de Castilla. En 1.815 dos Porteros cobraban 250 ducados anuales y el tercero 200 ducados, aparte de los importantes derechos de arancel"".

Por su parte, los Porteros de la Sala de Alcaldes no tenían arancel ni derechos señalados. Por el contrario, gozaban del auxilio de propinas, papeles y emolumentos por las vistas de los pleitos civiles, aunque muchas de ellas eran cobradas por los Porteros de Cámara del Consejo destinados en la Sala. Por lo demás, los emolumentos de los Porteros de la Sala estaban reducidos entonces, además del sueldo, a la habitación que se les daba dentro del edificio de la Sala de Alcaldes, a 10 ducados de gratificación que se les daba en cada una de las tres Pascuas del año y el sobrante de las cantidades asignadas a los esterados de invierno y de verano.

Por petición de la Sala de Alcaldes, parece que en aquella ocasión les fue subido el sueldo a los Porteros hasta 10 reales diarios al primero; 8 al segundo y 7 al tercero"".

En las demás peculiaridades de la figura del Portero de la Sala nos pueden valer las normas generales recogidas en el capítulo sobre los Porteros del Consejo de Castilla.

""". Por aquella época, los Porteros del Consejo de Castilla cobraban 400 ducados anuales y se les acababa de aumentar el sueldo en 200 ducados más (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.075, consulta del 30 de octubre de 1.815).

"". A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.075, consulta del 30 de octubre de 1.815.

G) ALGUACILES

Cada Alcalde de cuartel parece que contaba con un número de alguaciles, cifrado aproximadamente en diez****. Como los Escribanos y sus oficiales, parece que debían prestar un juramento anual ante la Sala el día 7 de enero de cada año, requisito indispensable para ejercer su oficio. Por otro lado, debían ejercer sus funciones personalmente.

Su principal misión eran las rondas. Con estos paseos vigilaban día y noche la Corte y evitaban la comisión de delitos (robos, escándalos, etc.). Para ello debían seguir fielmente las indicaciones de los Alcaldes y de los Escribanos, de los cuales dependían jerárquicamente. En ocasiones se les encomendaba hacer un embargo, un registro o detener a una persona.

Varios alguaciles servían diariamente en el Consejo de Castilla. Dos de ellos asistían diariamente al Consejo en los días de tribunal; otros dos asistían al Sr. Gobernador o a quien presidiese el Tribunal****. En los días

****. Novísima Recopilación, Libro IV, Título XXI, Ley I. Sin embargo, ~~este~~ número de alguaciles no debía ser fijo, sino que variaba según las épocas. Ello explicaría por qué el Consejo aprobó un decreto en 1814 "para averiguar el número de alguaciles y porteros que hay en la Sala de Alcaldes de Corte, tanto numerarios como supernumerarios" (A.H.N., Corte, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 3).

****. Debían acompañarle en traje de golilla y con vara hasta que entrase en la Sala. Y debían permanecer toda la mañana en el Consejo estando a disposición del Gobernador o del Decano para lo que se le ordenase (A.H.N., Consejos, Sala

festivos los cuatro acudían a la casa del Gobernador, al no haber esos días tribunal. El horario era de las 8 de la mañana hasta el mediodía, volviendo por la tarde hasta la noche"".

Los alguaciles asistían a las rondas, comedias, procesiones y demás funciones que los Alcaldes les encomendaban. También cuando se mandaba fijar un bando se hacía con asistencia del alguacil de la Real Casa y Corte"". También acompañaban siempre varios alguaciles a los Consejeros de Castilla o a los Alcaldes, cuando asistían a alguna ceremonia pública.

En cuanto a su vestimenta, parece iban con golilla y con la vara descubierta en señal de autoridad pública"". No podían realizar detenciones salvo flagrante delito. En estos casos podían encerrar al reo en la cárcel dando cuenta inmediata al juez correspondiente. En todo caso se les conminaba a no ejercer medios violentos para practicar la detención de los delincuentes.

Vivían en los cuarteles que tenían destinados sus respectivos Alcaldes. Eran por tanto responsables del orden público, aseo, abastecimientos, etc. en ese cuartel que les correspondía, y dependían en todo de su Alcalde de cuartel. Se les encomendaba frecuentemente hacer inspecciones a locales públicos, mesones, tabernas, posadas, mercados y comercios. De sus visitas y pesquisas debían dar cuenta al Alcalde correspondiente.

En las ceremonias públicas del Consejo y algunos actos del Supremo Tribunal o de la Sala asistían siempre varios de estos alguaciles. Así, por ejemplo, a los sermones de Cuaresma y en las consultas de los viernes con el Rey acompañaban al Consejo algunos alguaciles montados a caballo"". También intervenían en ceremonias públicas de

de Gobierno, legajo 51.425 núm. 7).

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 51.425 núm. 7.

"". A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 2.

"". Novísima Recopilación. Libro IV, Título XXX, Ley XI.

"". El 3 de abril de 1808 el Consejo de Castilla se quejó ante la Sala de Alcaldes mediante Real Orden por la inasistencia de estos alguaciles a varias ceremonias del Consejo. He aquí el texto de esta Real Orden dirigida al Gobernador de la Sala: "Muy Sr. mío: En cada uno de los días miércoles y viernes de la semana próxima pasada han dejado de asistir los alguaciles montados de los que están señalados

la Corte, festejos, corridas de toros, etc

Por otro lado, una noticia de 1808 nos informa que en aquella época era corriente la mala práctica entre los alguaciles de la venta de los servicios: asignados los cometidos a cada alguacil, otro hacía su servicio en su lugar a cambio del correspondiente estipendio****.

En cuanto a su sueldo, parece que tenían un salario fijo y otra parte según un arancel. Así, por ejemplo, parece que en las ejecuciones que participaban, cuando las causas de remate estaban sentenciadas y ejecutadas, percibían la décima parte de los efectos que habían de pagar los sueldos****.

para acompañar al Consejo al sermón de la iglesia de San Gil y a la consulta que hace a S.M. (...) Lo aviso a V.I. para que se sirva disponer lo conveniente a que no se verifiquen unas faltas en que interviene el debido decoro del Consejo". Para acompañar al Consejo de Castilla en estas ceremonias los alguaciles debían estar en la Casa de los Consejos a las nueve de la mañana. (A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de la sala de Alcaldes, núm. 1398, año 1808, fol. 364).

***. "Cuando se mandaba fijar un bando se hacía con asistencia, del alguacil de la Real Casa y Corte" (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 2). Todavía hoy en día se conserva la figura de los alguacillillos en las corridas de toros. Estos alguacillillos conservan hoy en día la vestimenta tradicional de aquellos alguaciles.

***. A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes, libro núm. 1.398, año 1808, fol 367.

***. A.H.N., Sección de Osuna, legajo 3.117 núm. 26. citado por LÓPEZ GÓMEZ, M.A., en su tesina "Sala de Alcaldes de Casa y Corte", pág.120.

H) OTROS SUBALTERNOS DE LA SALA

Aquí sólo mencionaremos la existencia de otros empleados de menor rango, como el llamado mayordomo de pobres, destinado al mejor gobierno del patrimonio destinado para la manutención de los presos pobres; el contador de la Sala, que recibía cuentas del mayordomo de pobres y controlaba los ingresos por penas impuestas; el capellán, que decía misa a la Sala los días de audiencia, y los domingos a los presos, y cuyos ingresos eran el propio salario más algunos estipendios por misas celebradas; el verdugo, que parece cobraba por pena ejecutada; el pregonero; y los abogados y procuradores que trabajaban en la Sala de Alcaldes, éstos últimos no propiamente subalternos de la Sala.

A modo de resumen podemos recoger los datos que menciona un documento del año 1828 resumiendo la estructura orgánica de la Sala de Alcaldes: entonces había un Gobernador, doce Alcaldes, un Fiscal y un total de ciento ocho subalternos"".

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.698
núm. 6.

DOTACIÓN MATERIAL DEL CONSEJO

En este subcapítulo incluimos una serie de elementos materiales de que disponían el Consejo Real y su Sala de Alcaldes para el desempeño de sus cometidos. En él quedan analizados someramente los edificios en que tenían su sede los distintos órganos pertenecientes al Consejo. Y también los archivos y bibliotecas de que disponían los ministros y subalternos de esta institución.

EL PALACIO DE LOS CONSEJOS

1. El Palacio de los Uceda

El Palacio del Duque de Uceda o Palacio de los Consejos fue la sede material del Consejo Real de Castilla desde 1717 hasta su definitiva extinción en 1834. Las características del Consejo Real como institución estrechamente vinculada a la persona del Rey, propiciaban un establecimiento geográfico próximo al Palacio del Monarca.

En las Reales Ordenanzas de Castilla y Recopilación de Leyes que mandaron hacer los Reyes Católicos^{***}, se dispuso que el Consejo habría de reunirse en el Palacio del Rey, "y no habiendo comodidad, que fuese en la Posada más cercana del Palacio"^{****}. Por abundantes fuentes sabemos que el Consejo Real de Castilla y otros Consejos en el siglo XVII tenían su sede física en el viejo Alcázar de los Austrias. "en las Casas Reales del gran Palacio, en que hacen sus juntas todos los Consejos y

^{***}. Según constaba en la Nueva Recopilación, Ley I, título III, Libro II, y en la Ley II, Título IV, Libro II.

^{****}. MARTINEZ DE SALAZAR, A.: "Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo", Imprenta de don Antonio Sanz, Madrid, 1764, página II.

Tribunales""". Sólo dos Consejos, los de Inquisición y Cruzada, estaban ubicados fuera del recinto"".

Y por Real Decreto de 20 de enero de 1717, el Rey Felipe V ordenaba la reunión de los Consejos en un edificio. Deseando el Rey poner en sus asuntos el mejor orden, resolvió que todos "sus Consejos se junten para el despacho, según su instituto, y como lo hacían antes, en el Palacio que habitó la Reina doña María de Austria, mi tía y Señora, con todas las Secretarías y Contadurías, a fin de la más breve solicitud de sus dependencias, por lo distantes que se hallan unas oficinas de otras""". Este fue, por tanto, el motivo del traslado de los Consejos al Palacio de Uceda y no el incendio del Alcázar de Madrid, como apuntan otros documentos"".

""". NUÑEZ DE CASTRO: "Sólo Madrid es Corte", pág. 8.

""". BARRIOS, F., "Los Reales Consejos. El gobierno central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII", Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, Madrid 1988, pág. 47. El autor recoge una interesante cita extraída de GONZALEZ DAVILA: "Viaje de España", de "Viajes, II", pág. 420: "En el segundo patio de Palacio se reúnen, en varias salas, diversos Consejos. El de Estado está establecido bajo las habitaciones del rey, donde tratan del bien general de todos sus estados; el de la Guerra se reúne también allí, donde resuelven los medios para ejecutarla bien, después de que en el de Estado ha sido decidida. Al lado está el Consejo de Castilla, que llaman Real, y que es de gran importancia, teniendo diecisiete consejeros y un presidente; muchos asuntos de los otros Consejos pasan por sus manos, y sobre todo del de las Indias, a causa de los grandes intereses que tienen allí los pueblos de ambas Castillas. Hay uno para Aragón; Italia tiene el suyo, y Flandes también. El de las Indias se reúne en otro sitio, lo mismo que el de Finanzas, que se llama de Hacienda; otro el de las Ordenes, que trata de los asuntos de las Ordenes de Caballería, y juzga de las pruebas de nobleza de los que las pretenden, se reúnen en el mismo lugar de estos dos últimos. De todos ellos no hay más que uno que no esté en el recinto del Palacio. El de la Inquisición tiene su Tribunal en la casa del presidente del Santo Oficio. El de la Cruzada, que trata de las dispensas para comer carne los sábados y de las rentas que el rey obtiene por la ocasión de los Papas, se reúne en la casa del Presidente".

""". Ley I, Tít. II, Libro IV Novísima Recopilación.

""". A.H.N., Consejos Suprimidos, Invasión Francesa, legajo 5.511 núm. 18: "Desde el incendio de Palacio, el Consejo se separó de dicho Real Palacio -antes el Consejo estaba en el mismo Palacio-, y se continuaban los recados a Su Majestad para las consultas de los viernes y funciones públicas". El incendio del Alcázar de Madrid tuvo lugar en

El Palacio del Duque de Uceda, que formaba parte del Mayorazgo del mismo nombre y que al parecer se encontraba ahora entre las propiedades del Duque de Osuna, reunía los requisitos de majestuosidad y proximidad a la residencia real. Según varias fuentes, en 1717 Felipe V adquirió el edificio a censo reservativo y dispuso que se trasladasen a él los Consejos Supremos de Castilla e Indias, de Ordenes y de Hacienda, la Contaduría Mayor y Tesorería General***, hasta entonces asentados en el Alcázar****, y sin duda no sólo graduadas entre las principales instituciones de la Villa y Corte****, sino de la misma Monarquía. Si consideramos que el incendio del Alcázar no tuvo lugar hasta la Navidad de 1734, hacía ya diecisiete años que los Consejos se reunían en la Casa de los Uceda cuando ardió el Alcázar.

A partir de ese momento, el Palacio pasó a denominarse "Casa de los Consejos" o "Palacio de los Consejos". Todavía hoy una de las calles laterales del edificio conserva el nombre de Pretíl de los Consejos, recordándonos el destino que sirvió aquel noble edificio. Este callejón servía habitualmente de aparcamiento para los coches de los magistrados y personalidades que asistían a estos supremos organismos. Sólo el Gobernador del Consejo de Castilla tenía el privilegio de estacionar su vehículo en el zaguán de entrada, zaguán que ha llegado hasta nuestros días preservado en toda su antigua nobleza****.

En el siglo XIX, a comienzos del reinado de Fernando VII en 1.808, el Palacio de Uceda continuaba siendo la sede de los Consejos de Castilla, de Indias, de Ordenes, de Hacienda y otras oficinas menores****. En los días

la Nochebuena de 1734.

***. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Colección de Memorias y Noticias del Gobierno General y Político del Consejo", op. cit., pág. 11.

****. MESONERO ROMANOS, R., op. cit., pág. 170.

****. BARRIOS, F., "Los Reales Consejos...", op. cit., págs. 52 y 53 refiere: "lord Ross, en su Carta a su tío abuelo Lord Salisbury, fechada en Bayona el 27 de julio de 1610: "en cuanto a la Corte de España, hay que tener en cuenta en primer lugar que no llaman la Corte al lugar donde está la persona del Rey, sino donde sus Consejos residen".

***. MARTIN ARTAJO, A., op. cit., pág. 36.

****. Por un expediente conservado en el Archivo de las Cortes Generales tenemos evidencia, por ejemplo, que la Diputación del Reino se reunía en enero de 1.808 en las Salas del Consejo de Castilla, donde tenía sus Juntas. Estas debían tener lugar a última hora de la tarde, pues había un mozo de

críticos del año 1.808, los Ministros del Consejo tuvieron sus reuniones en las salas de este Palacio, y los mismos hechos del dos de mayo de aquel año fueron conocidos inmediatamente por los miembros del Consejo, por su proximidad al Palacio Real"". Anecdóticamente, de aquel mismo año podemos citar también una disposición del Consejo de 31 de octubre por el que se establecía el completo esterado de las Salas del Consejo, en el día de la conmemoración de los Difuntos, que desde entonces se iba a tener por feriado"". A finales de 1.808, tras la supresión del Consejo por Napoleón por los Decretos de Chamartín, fueron impuestos sellos en las puertas de las salas del Consejo de Castilla"" y en las de sus Escribanías"".

Estos sellos se levantaron poco después para acoger a las Juntas de Negocios Contenciosos creadas por el Gobierno Intruso y que tuvieron su sede física en el Palacio de los Consejos, en las mismas salas que tuvo el Consejo de Castilla"". Por su decreto de 6 de febrero de 1.809, el Rey intruso creó dos Juntas de Ministros para que conociesen los asuntos contenciosos que habían quedado pendientes en el Consejo Real. El Ministro de Gracia y Justicia señaló el día 16 de febrero de 1.809 para instalarlas en el Palacio de los Consejos. Comunicó orden al que fuera Escribano de Gobierno del Supremo Tribunal extinguido, don Bartolomé Muñoz, para que tal día asistiese y para que pasase aviso a los subalternos y dependientes del Tribunal al mismo efecto. En aquel acto, se les previno a todos ellos que habían de despachar en las Juntas como lo habían hecho antes en el Consejo"".

estados del Consejo que esperaba todos los días de Junta a que ésta terminase, para cerrar el Consejo. (A.C.D., serie Cortes de Castilla, legajo 171 núm. 29).

"". Ver las referencias contenidas en el apartado Evolución Histórica. Algún autor muestra su extrañeza de que las noticias recibidas en el Consejo no llegaran simultáneas al trascurso de los acontecimientos del día.

"". A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.521 núm. 49.

"". A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.026 expte. núm. 47.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 45.

"". A.H.N., Consejos, Gobierno, legajos 3.148 núm. 13; y 3.026 núm. 47.

"". A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 45.

Cuando el 2 de noviembre de 1.812 regresó el Rey intruso a Madrid, se mandó a Bartolomé Muñoz, el más antiguo de los Escribanos de Gobierno del Consejo, que formase inventario de los efectos que existían en el Palacio de los Uceda. El 6 de noviembre volvía a salir José Napoleón, pero el 3 de diciembre del mismo año regresan de nuevo los franceses a Madrid. Sin embargo, no se establecieron inmediatamente las Juntas de Negocios Contenciosos en el Palacio de los Consejos, por haber quedado en Valencia y Zaragoza algunos de los Ministros que componían tales Juntas y que habían seguido a José Bonaparte.

A principios de mayo de 1.813, el Ministro de Gracia y Justicia acordó se formase una de estas Juntas con los jueces que se hallaban presentes, para conocer de los asuntos de injusticia notoria pendientes y que se promoviesen en adelante. La Junta tuvo su reunión en el Palacio en tres sesiones semanales hasta el 26 de mayo, en que el Gobierno intruso resolvió su marcha, que se verificó el día 27****.

Habiendo resuelto la Regencia el traslado a Madrid del Tribunal Supremo de Justicia, creado en virtud de la Constitución de 1.812, se dispuso que para celebrar sus sesiones diarias le fuese franqueado el edificio que había ocupado el Supremo Consejo de Castilla. Por Real Orden de 19 de octubre de 1.813 se pidió a Bartolomé Muñoz que facilitase dichas habitaciones -de las que conservaba las llaves por comisión o encargo de las Juntas- y todo lo demás que se necesitase para habilitar sus dependencias****. A consecuencia de esta orden, Muñoz entregó a don Segundo García Cid, Escribano de Cámara más antiguo de dicho Tribunal Supremo de Justicia, las referidas salas y los efectos que sirvieron al Consejo. Se informó entonces a las autoridades que las piezas de plata que tenían las Escribanías, y demás de su servidumbre, habían desaparecido por orden del Rey intruso, y habían pasado a la Tesorería

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 47.

****. Cfr. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.425 núm. 25, "Expediente formado para que de la Casa llamada de los Consejos se faciliten las piezas que sirvieron a los suprimidos de Castilla y Ordenes para que sirvan al Tribunal Supremo de Justicia". Por esta Real Orden se pidió a don Bartolomé Muñoz que acudiese con las llaves del edificio al despacho de la Tesorería General el 9 de octubre de 1813, a las once de la mañana. Por su parte, don José María Puig comisionó a don Segunda García Cid para que dispusiera lo conveniente en las salas destinadas a las sesiones del Tribunal de Justicia. Parece que hubo a este fin visitó el edificio el Jefe Político de la Villa el día 20 de octubre de 1813.

General****. El expolio del Palacio de los Consejos no se redujo a la platería****. Sabemos por otras fuentes que la sala de Alcaldes y oficinas de Escribanos y Relatores se enriquecieron con muebles y utensilios procedentes de Consejos disueltos por el régimen bonapartista****.

También bajo el Gobierno intruso un decreto ordenaba sustituir en los edificios oficiales las armas de los reyes legítimos por las de la nueva dinastía. Quizás entonces hubiera sido necesario esculpir en la fachada del Consejo la aborrecida águila imperial. Pero, al parecer, José Bonaparte ordenó que no se llevara a cabo la sustitución en caso de que pudiese padecer la arquitectura de las edificaciones. En todo caso, este decreto afectaba en menor medida al Palacio de los Consejos, pues no era el de su fachada un escudo real, sino el escudo de los Uceda****.

Restablecido el Consejo Real por el Real Decreto de 27 de mayo de 1.814****, el Supremo Tribunal recuperó su sede material.

Tras la nueva supresión del Consejo en 1.820 por el Gobierno Constitucional, el Palacio fue nuevamente sede del restablecido Supremo Tribunal de Justicia. Hemos encontrado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid algunos expedientes que describen detalladamente las obras y reformas realizadas en el edificio durante el Trienio Constitucional****. Las cinco Salas tradicionales del Consejo de Castilla habían quedado reducidas ahora a tres, y se habían realizado importantes obras de albañilería y

****. A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.026 núm. 47. Ello fue motivado por una Real Orden del Rey José I para que todos los Tribunales y oficinas remitiesen la plata y los objetos de valor a la Tesorería General para hacer frente a las urgencias del Rey.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.268 núm. 40: La rapiña francesa llegó incluso a los libros del Consejo. Las estanterías quedaron muy descabaladas y desapareció la mayor parte de las obras. Sólo quedaron los libros de menor valor.

****. ALTEA, Conde de, "Historia del Palacio de Santa Cruz (1.629-1.983)", Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, Gráficas Cóndor S.A., Madrid, 1983, pág. 134.

****. ALTEA, Conde de, "Historia del Palacio de Santa Cruz", op. cit., pág. 134.

****. A.H.N., Colección de Reales Cédulas núm. 2.197; y Consejos Suprimidos, Libro 1.505 núm. 18.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15.

remodelación de tabiques en distintas dependencias. Sabemos también que las habitaciones habían sido despojadas de todo mueble y menaje allí existente antes de la rebelión, quedando sólo las paredes"". Muy pocos de los efectos de sus servidumbres fueron recuperados tras el restablecimiento del Consejo en 1.823. Fue necesario, por tanto, reponer lo absolutamente preciso para poderse reunir el Consejo Real y ejercer allí sus supremas funciones.

Inicialmente se habilitó la Sala primera de Gobierno y más adelante las demás"". Tampoco el oratorio se encontraba en condiciones de servicio pues habían desaparecido sus enseres. Tuvo que ser atendido, con todo lo preciso para las misas diarias, por la cercana parroquia de Santa María de la Almudena"".

Se hicieron varios presupuestos en 1.824 de rehabilitación del edificio. Un informe de 2 de junio de 1.824 precisaba que según el Arquitecto Mayor de las obras, éstas no bajarían de 30.000 reales. Parece que el presupuesto definitivo pudo superar los 46.000 reales.

Otro problema fue conseguir las cantidades necesarias para llevar a cabo las importantes reformas que el edificio necesitaba. En Real Orden del Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda don Francisco Tadeo de Colomas, del 9 de febrero de 1.824, comunicada al Gobernador del Consejo, informaba haber dado cuenta a Su Majestad de la exposición del Decano del Consejo sobre la entrega de los fondos necesarios para la rehabilitación del Supremo Tribunal. Pedía al Gobernador un informe de la suma indispensable necesaria para que la Tesorería General atendiese a su entrega en proporción a sus ingresos y obligaciones, con calidad de reintegro de dichos fondos de penas de cámara y gastos de justicia del Consejo"".

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 expte. núm. 15.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 expte. núm. 15.

"". A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.811, expte. núm. 15.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15: "El Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda dijo a don Tadeo de Colomas el 9 de febrero de 1.824 lo siguiente: "Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey Nuestro Señor de la exposición del Decano del Consejo Real que Vuestra Excelencia me pasó con fecha 26 de diciembre último, a fin de que informase lo que tuviese por conveniente sobre la entrega de fondos necesarios para ejecutar las obras precisas para la formación de sus cinco Salas y compra de los efectos y utensilios de que carece, por haber desaparecido

Conocemos algún detalle más sobre el estado del edificio y las obras que durante el trienio se habían realizado. Sólo se conservaban estas tres Salas: la primera de Gobierno, la de Provincia y la de Mil y quinientas, y no en muy buen estado"". El Consejo urgió en diversos llamamientos la realización de las obras de rehabilitación de las cinco Salas, "pues no es posible despachar entres solas lo que se ha de hacer en cinco". El oratorio también había sido cambiado de lugar. Al parecer fue trasladado a la zona del consejo de Ordenes, donde se rompieron varios tabiques con este fin. En la sala del vestíbulo se levantaron al parecer dos tabiques y alguna obra más se hizo en la Sala de Mil y Quinientas. Es posible también que varias Salas grandes fueran divididas en habitaciones menores, para albergar dependencias del Tribunal Supremo de Justicia, como también se hizo en épocas posteriores"".

los que tenía antes de la rebelión; y Su Majestad ha resuelto, con presencia de lo expuesto por el Sr. Tesorero General que respecto a que desde el 12 de octubre que dijo el Decano se carecía de todo, puede haberse recuperado algunos efectos y también que en este intermedio las penas de cámara y gastos de justicia habrán producido algunas cantidades. Y que aún suponiendo que no se haya verificado ni lo uno ni lo otro, no se designa la cantidad que pueda necesitarse para un cálculo aproximado para las obras y demás objetos, a fin de determinar con acierto, mayormente en las actuales escaseces, disponga Vuestra Excelencia que se fije la suma indispensable para que la Tesorería General atienda a su entrega en proporción de sus ingresos y obligaciones, con calidad de reintegro de dichos fondos de penas de cámara y gastos de justicia del Consejo. De Real Orden lo digo a V.E. para el fin expresado...6 de mayo de 1.824. Francisco Tadeo de Colomas."

""". A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.811 núm. 15. Conocemos por este expediente las medidas de las tres Salas del Consejo que entonces se conservaban: Sala primera de Gobierno: altura, 6 varas y media y 4 dedos; de largo, 11 varas y media y 6 dedos; ancho, 9 varas y cuarta y 2 dedos; Sala de Provincia: altura, 6 varas y media y 4 dedos; de largo, 13 varas y media y 5 dedos; ancho, 9 varas y 12 dedos; Sala de Mil y quinientas: altura, 6 varas y media y 4 dedos; de largo, 12 varas y media y 6 dedos; ancho, 9 varas y cuarta. Sabemos además que las tres Salas tenían todas ellas una tarima en el suelo de madera, de una altura de media vara. por tanto, cada una de las Salas tenía en la práctica una vara menos de altura de lo ahí descrito.

""". Mesonero Romanos aseguraba que el Palacio carecía de la regularidad que debió tener en la época de su construcción, ya que se tabicaron las espaciosas salas para dar lugar a las muchas oficinas que requerían los organismos allí instalados en el siglo XIX. (LIBREROS SALVADOR, op.

Parece también que fueron abiertas dos puertas grandes en la Portería del Consejo de Ordenes. en todo caso, un estudio detenido de los mencionados presupuestos daría nuevas luces sobre las reformas llevadas a cabo desde 1820 y a partir de 1824.

Del año 1826 ha aparecido un nuevo expediente, formado en virtud de Real Orden y oficio del Director General del Tesoro, manifestando la necesidad de que se trasladasen a otros edificios los Archivos que existían en el Palacio de los Consejos. Estos Archivos estaban situados en la parte alta de la Casa y ayudaban "a la ruina del edificio, ya de por sí en mal estado"***.

En 1834 era suprimido definitivamente el Consejo Real. El edificio sería a partir de ese momento sede de nuevas instituciones, como el Consejo Real de España e Indias, el Instituto de Reformas Sociales, el Tribunal de las Ordenes o la Capitanía General de Madrid***. Nunca dejó de ser morada del Consejo de Estado, propietario del edificio*** y legal heredero del Consejo Real de Castilla***.

cit., pág. 17).

***. A.H.N., Consejos Suprimidos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo 17.704: en sus informes de 1 de febrero de 1826 y de 14 de septiembre del mismo año, el arquitecto de la Dirección General del Real Tesoro don Antonio López Aguado informaba que había peligro de hundimiento del edificio si no se bajaban aquellos papeles. Por Real orden de 12 de septiembre del mismo año, el Monarca mandaba trasladar tales Archivos al cuarto principal de la casa sita en la Plazuela de Santa María, llamada de las Niñas de Leganés, entonces desalquilado.

***. Pascual Madoz señalaba durante el reinado de Isabel II que en el edificio se hallaba el Ministerio de Gracia y Justicia, el Consejo Real y su Archivo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Mayor de Cuentas, el Tribunal de las Ordenes y su Archivo, la Intendencia y Subdelegación de Rentas, la Tesorería de la Corte, la Dirección General de Lotería, el despacho de los Procuradores y el Archivo de la Cámara de Castilla (LIBREROS SALVADOR, D., op. cit., pág. 17).

***. MARTÍN ARTAJO, A., op. cit., pág. 35.

***. LIBREROS SALVADOR, D., op. cit., pág. 17. Así lo declaró el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de noviembre de 1917 (CORDERO TORRES, J.M., "El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1944). Decía Cordero en la pág. 2: "El Tribunal Supremo... declaró al Consejo de Castilla sucesor del de Castilla y de su Cámara". El Capitán General

Hoy en día se conserva el soberbio zaguán en que antaño permanecía, durante las sesiones del Consejo, la carroza del Presidente o Gobernador. También la noble y ancha escalera principal y un vestíbulo anco y bien proporcionado que sirve de arranque a las galerías de toda la planta principal. En su frente aún se conserva un antiguo retablo barroco que enmarca un cuadro de la Inmaculada. Este retablo y ese cuadro siempre estuvieron en el Consejo, pero se hallaban en otra escalera secundaria. Fue restaurado por el Consejo de Estado en el año 1882****.

El Palacio de los Consejos o del Duque de Uceda fue, por tanto, parte importante del conjunto monumental denominado "Madrid de los Austrias". Desde su construcción a principios del siglo XVII hasta nuestros días ha sido sede de importantes instituciones de nuestra Administración Central y sereno espectador de nuestra moderna historia política. Por albergar al más importante Consejo de nuestra Monarquía, fue por mucho tiempo identificado con el Consejo Real y se le denominaba también por ello el Palacio del Consejo, al igual que hoy se encuentra popularmente identificado con la institución que allí reside, Capitanía General.

de Madrid se trasladó al Palacio desde su sede instalada en la calle de Leganitos y en la actualidad comparten el edificio ambos organismos.

****, MARTÍN ARTAJO, A., op. cit., pág. 36. La pintura fue colocada en el Consejo Real de Castilla en el año 1732, el adorno el 1 de diciembre de 1746 y el retablo el 30 de septiembre de 1761, según registran unas inscripciones que pueden leerse en el dorso del cuadro.

2. Otros establecimientos relacionados con la labor del Consejo de Castilla

No podemos concluir este capítulo dedicado al edificio que albergó durante varios siglos al Consejo de Castilla, sin hacer una breve referencia a otros establecimientos relacionados con la labor del Consejo. Nos referimos de un lado al Palacio de Santa Cruz, sede de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, y a los locales de oficinas del Consejo situadas fuera del Palacio.

Por mucho tiempo y durante todo el reinado de Fernando VII, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte estuvo incorporada al Consejo de Castilla como una de sus Salas dependientes. La Sala -como era conocida en la documentación oficial del mismo Consejo Real- tuvo su sede en el Palacio de Santa Cruz, actualmente sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. El palacio es un hermoso edificio de fachada escurialense, con ciertos elementos que anuncian el barroco. Fue construido para Cárcel de Corte por el arquitecto Juan Bautista Crescendi, en los años 1629-1634^{***}. Este soberbio Palacio merecería un capítulo aparte por su historia y por

^{***}. Posee dos altas torres con chapiteles y un frontón central rematado con la figura de un ángel, lo que en un tiempo dio origen a la expresión popular de "ir a dormir bajo el ángel", para indicar el hecho de ser llevado preso. Su interior se organiza en dos patios situados a ambos lados de la gran escalera y se destina hoy a Ministerio de Asuntos Exteriores (CHANES, R. y VICENTE, X., "Madrid Antiguo", Madrid 1988, págs. 19 y 20). El edificio fue considerablemente ampliado tras la Guerra Civil.

su calidad arquitectónica y artística"". Por lo demás, nos remitimos a los datos mencionados en el Capítulo de la Evolución Histórica del Consejo y de su Sala de Alcaldes, así como al de la Estructura Orgánica de esta quinta Sala del Consejo.

También mencionaremos someramente algunos apuntes sobre los locales donde tenían su sede las Escribanías y Relatorias del Consejo de Castilla. Si el Palacio de los Consejos pertenecía al Estado, las oficinas externas al Palacio estaban emplazadas en locales habitualmente alquilados por los titulares o tenientes de la oficina. Estos locales eran habitualmente pisos nobles y espaciosos donde los Escribanos y Relatores fijaban sus establecimientos. Nos remitimo también a lo ya mencionado al estudiar la organización y funcionamiento de estas importantes figuras dentro del Consejo, así como a lo tratado en el capítulo de "Archivo del Consejo". Simplemente citaremos aquí algún ejemplo orientativo. así, la Escribanía de Cámara de Gobierno y de Justicia de don Bartolomé Muñoz estaba situada en el piso principal de un edificio situado

"". Entre la bibliografía existente sobre este Palacio, se puede consultar el libro "Historia del Palacio de Santa Cruz (1626-1983)", del Conde de Altea, editado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1983. Por su parte, Mesonero Romanos, en "El Antiguo Madrid", hablaba así de este palacio: "Entre los edificios civiles de la calle Atocha merece la preferencia el conocido con el nombre de la Cárcel de Corte, y que más propiamente debe llamarse Palacio de la Audiencia, y anteriormente de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, pues la carcelería a que al principio estuvo, sin duda, destinada, para los nobles y sujetos distinguidos, se relegó para toda clase de presos al edificio contiguo, que daba a la calle de la Concepción Jerónima y que fue ante Oratorio y Casa de Padres del Salvador; a pesar de ello, quedó en la portada del Palacio la inscripción: 'Reinando la magestad de Felipe IV, año de 1634, con acuerdo del Consejo, se fabricó esta cárcel de Corte para comodidad y seguridad de los presos'. (...) Este edificio, obra del marqués de Crescenci, es uno de los pocos buenos de aquella época que quedan en Madrid. La escalera principal, colocada entre ambos patios, es elegante y aún magnífica, y éstos ofrecerían también una buena perspectiva, a no haber sido cerrados con tabiques y vidrieras los arcos que los rodean, para colocar los juzgados y escribanías. La fachada que da a la Plazuela de Provincia es severa y magestuosa, y es lástima que no se reponga el chapitel de una de las torres laterales que se quemó en el pasado siglo..." (MESONERO ROMANOS, R., "El Antiguo Madrid. Paseos Histórico-Anecdóticos por las calles y plazas de esta Villa", Madrid 1987, págs. 154 y 155).

en la Plaza de las Descalzas"" núm. 3; la Escribanía de Cámara de Justicia de don Damián Juárez estaba en una casa de la calle de las Urosas, señalada con el número 23 de la manzana 156, en el cuarto principal de mano derecha de dicha casa. Este local constaba al menos de cinco habitaciones grandes. Sabemos, por ejemplo, que Juárez pagaba 4.400 reales anuales por el alquiler de este piso"". Muñoz, por su parte, satisfacía un alquiler de 9.000 reales anuales, lo que nos da una idea del tamaño de esta importante y prestigiosa Escribanía"".

Era corriente por otro lado que los Ministros del Consejo de Castilla trabajasen en sus propios domicilios, al igual que hacía con frecuencia el propio Presidente o Gobernador del Consejo. Todos ellos tenían en

"". En el Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, legajo 54 núm. 198 se menciona el número 6 de esta Plaza, por su parte, Martínez Bara, en su obra "Visicitudes del Archivo del Consejo de Castilla en los siglos XVIII y XIX" sitúa esta Escribanía de Gobierno en la Plazuela de las Descalzas, casa de Villena núm. 3. Afirma Martínez Bara que constaba de al menos trece habitaciones de bastante dimensión (op. cit., Actas del III S.H.A. I.E.A., Madrid 1974, pág. 374). este dato parece recibir confirmación en el legajo 17.704, "Expediente formado para proporcionar locales para los Archivos", conservado en la serie Consejos Suprimidos del Archivo Histórico Nacional.

"". A.H.N., Consejos, sala de Gobierno del Consejo de Castilla, legajo 3.619 núm. 23. En los periodos de suspensión del Consejo se planteó el problema de ver qué se hacía con los locales de las Escribanías y de las Relatorías, y con los ricos Archivos de aquéllas, pues los caseros respectivos reclamaban el pago de los alquileres o, en su caso, el desalojo de los locales. Así, los alquileres correspondientes al Trienio fueron satisfechos por el Estado tras el restablecimiento del Consejo de Castilla en 1.823. Tras la definitiva extinción del Consejo en 1.834 los alquileres pendientes fueron satisfechos por el Estado, en cumplimiento de la Real Orden de 3 de agosto de 1835.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.619 núm. 23; este expediente estudia el traslado de los Archivos de las distintas Escribanías del Consejo a un lugar común en el año 1835. Menciona los alquileres que pagaban por sus locales otras Escribanías del Consejo, que incluimos aquí a título orientativo: Escribanía de don Antonio López de Salazar, 2.500 reales; Escribanía de don Antonio Granados, 2.920 reales; Escribanía de don Manuel de Carranza, 2.920 reales; Escribanía de don Vitores Vicario, 2.100 reales; Escribanía de don Manuel Sánchez Escariche, 2.200 reales; y Escribanía de don Gil de Ayala, 2.520 reales.

sus casas un despacho de trabajo"". Sin embargo, la amplitud del Palacio de los Consejos permitía albergar también oficinas y despachos donde podían trabajar los Consejeros y subalternos del Supremo Tribunal, así como salas donde se atendía al público o donde se despachaban los múltiples asuntos de la atención del Consejo Real.

"". Como ya hemos destacado en otros lugares de este trabajo, este particular se encuentra ampliamente documentado por los abundantes expedientes sobre recogida de papeles en la casa mortuoria de un Ministro del Consejo tras su fallecimiento (Cfr. ESTRUCTURA ORGANICA, Consejeros y Archivo del Consejo).

ARCHIVO DEL CONSEJO

A) Introducción

Existe una inexplicable carencia de textos legales referidos al Archivo del Consejo de Castilla. En la Novísima Recopilación"" se hablaba solamente de entrega de papeles del Archivo del Consejo a sus ministros bajo recibo y recogimiento de los que por muerte de alguno quedasen en su poder"".

Por ello, para conocer esta importante oficina del Consejo debemos acudir a otras fuentes. De un lado, a tratadistas de la época y posteriores, algunos de los cuales realizaron una importante labor de estudio del Consejo y de su funcionamiento; y por otro, y especialmente, acudiremos a la propia documentación del Consejo, donde abundan las referencias y disposiciones sobre el Archivo del Consejo, ya que, como señala Martínez Bara, "las disposiciones que sobre el Archivo del Consejo se han tomado son de carácter interior"".

"" Novísima Recopilación, libro IV, título III, ley XX.

"" Esta noticia es el resultado de un auto de 24 de mayo de 1712 y de una resolución de Carlos IV de 18 diciembre de 1804.

"" MARTINEZ BARA, J. A., "Visicitudes del Archivo del Consejo de Castilla en los siglos XVIII y XIX", pág. 360.

Los dos tratadistas por excelencia del Consejo de Castilla fueron Escolano de Arrieta y Martínez de Salazar. El primero de ellos, en su "Práctica del Consejo Real en el despacho de negocios consultivos, instructivos y contenciosos", obra póstuma publicada en 1796, curiosamente tampoco hace referencia alguna al Archivo ni a sus funcionarios"". Por su parte, Martínez de Salazar, en su "Colección de Memorias y Noticias del Gobierno General y Político del Consejo", del año 1764, dedica un breve capítulo de dos páginas a la figura del Archivero del Consejo"". Esta obra, junto con alguna otra y diversos expedientes y legajos del Archivo Histórico Nacional y del de Simancas, nos aportan bastantes datos interesantes sobre la estructura, evolución y organización de esta oficina interna y esencial para la labor del Consejo de Castilla.

Uno de los principales cometidos de todo Tribunal es la custodia de los distintos procesos y expedientes que por él han tenido curso, para garantía de derechos públicos y privados y como fundamento para una buena labor de gobierno y de administración de justicia. Para ello, no basta conservar los documentos de los pleitos y expedientes concluidos, sino organizarlos eficazmente para que puedan ser utilizados por los funcionarios del Consejo. Sin duda, contar con un Archivo organizado es señal de la eficacia y buen funcionamiento de la institución que lo sustenta.

B) Los Archivos del Consejo.

Dentro del Consejo de Castilla funcionaban tres clases de archivos. El primero, el Archivo propio y determinado del Secreto del Consejo; el segundo, constituido por la de la Secretaría o Sala de Gobierno de Castilla; y el tercero, que contenía los papeles de las distintas Escribanías de Gobierno y de Cámara de Castilla y de Aragón. A esta clasificación elaborada por Martínez Bara hay que añadir un cuarto archivo, según testimonió Santiago Agustín Riol en un informe elevado al Rey en el siglo XVIII. Nos

""". MARTINEZ BARA, op. cit., explica esta omisión por el carácter del Archivo, "que no le merece los honores de una exposición pública".

""". MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., Capítulo LXVII, págs. 685 y 686.

referimos a toda la documentación correspondiente a una oficina dependiente del Consejo: la Presidencia de Castilla, con los documentos privativos del manejo del Presidente del Consejo Real"".

Martínez Bara, en su trabajo sobre el Archivo del Consejo de Castilla"", recoge un estudio de los tres primeros tipos de archivos del Consejo -los correspondientes propiamente al Consejo de Castilla-, que fue realizado por seis de sus Escribanos de Cámara en el año 1780"". Tiene el gran interés de exponernos sucintamente el contenido y características de cada categoría:

1. "Los papeles de la primera clase consisten en las Consultas que hace el Consejo al Rey y sus resoluciones: Reales Ordenes y Decretos de S.M.; Acuerdos del Consejo y otras providencias de gobierno y regalía, cuyos papeles padecieron en lo antiguo tanto descuido, desaliño y extravío, que obligó al Consejo a tomar para su arreglo las providencias que constan en los autos acordados 68 y 88, título 4, libro II; pero, sin embargo, no fueron suficientes y se estrecharon más, últimamente, a pedimento del ilustrísimo señor Fiscal don Pedro Rodríguez de Campomanes, a cuyo celo y vigilancia se ha hecho casi de planta la pieza donde se hallan colocados y una cajonera nueva, de manera que dichos papeles se hallan ya con el debido orden y seguridad, pues así para su colocación, como para su arreglo y custodia están tomadas las más acertadas disposiciones con un archivero, dos oficiales y de superintendente un Señor Ministro del Consejo".

2. "Los papeles de la Secretaría de Gobierno, que son los de la segunda clase, y también de mucho interés y secreto, se colocan en dos piezas que hay en el Consejo, una muy reducida y amenazando ruina, y otra más capaz, donde tienen su despacho diario las dos Secretarías de Gobierno, en las que apenas caben ya más papeles, y los que hay están expuestos a una sustracción, irremediable por la multitud de gentes de todas clases que entran en dicha pieza con motivo de preguntar y saber de sus negocios".

3. "La tercera clase de papeles es más exterior y pública, porque consiste en todos los pleitos y

****. ALVAREZ-COCA, M.J., "La Corona de Aragón: documentación en el Consejo y la Cámara de Castilla (1707-1834). Fuentes en el Archivo Histórico Nacional", Hispania, XLIX/173 (1989), págs. 895-948.

****. MARTÍNEZ BARA, J.A., "Visicitudes del Archivo del Consejo de Castilla en los siglos XVIII y XIX", Actas del III S.H.A., I.E.A., Madrid 1974, págs. 357-382.

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, Archivo Antigo del Consejo de Castilla, legajo 17.704.

expedientes de partes que se despachan y siguen por las Escribanías de Cámara, y en éstos es en los que ha habido mayores abusos, más desorden y más extravío, y que, aunque en el día está corregido en mucha parte, necesita de un pronto y eficaz remedio, por la importancia de los mismos papeles, por ser las deliberaciones del primer Tribunal de la Nación y muy interesantes a todo el público. En lo antiguo fueron ocho las Escribanías de Cámara del Consejo, pero por Real Cédula de 15 de noviembre de 1565 se suprimieron dos, declarándose el valor de cada una en 4.000 ducados, cuya cantidad se entregó a los respectivos dueños por los de las restantes y, desde dicho año, quedaron reducidas las Escribanías de Cámara de Castilla al número de seis hasta principios del siglo XVIII en que, extinguido el Consejo de Aragón y unido e incorporado al de Castilla, se creó otra Escribanía para los negocios y dependencias de Justicia y Gobierno de aquellos reinos comprendidos bajo el nombre de Aragón. El principal abuso y desorden de los papeles de dichas Escribanías consiste, sin duda, en que, enajenadas éstas de la Corona y concedida facultad a los propietarios para nombrar tenientes, sólo atendieron en las elecciones al que les daba mayor arrendamiento, y los tenientes no pensaron otra cosa que en disfrutar los oficios y sacar de ellos la utilidad posible, sin tener unos ni otros el amor debido a los papeles ni el cuidado de su custodia, agraándose a esto el que, como en aquellos tiempos" -siglos XVI y XVII- "no había repartimiento" -es decir, el funcionario y la función de distribuir los asuntos a cada Escribanía ""-, "procuraban los tenientes o arrendatarios tener sus oficios en las calles del comercio público, para que así les llevasen las dependencias y negocios, y como en estos barrios estaban muy subidos los alquileres de las casas y no podían costear las grandes, se acomodaban en las pequeñas, poniendo la multitud de las pequeñas en cuevas y desvanes, donde la humedad, el polvo y los ratones los consumió. Los documentos que no les cabían en dichos sitios los colocaban en casas pequeñas de los arrabales de Madrid donde, mudando de mano en mano, o se quedaban allí olvidados y perdidos o eran hurtados para venderlos a tiendas y coheteros".

Los Archivos General del Consejo y de la Secretaría de Gobierno estaban ubicados en el siglo XVIII y principios del XIX en el propio Palacio de los Consejos, mientras los de cada Escribanía de Cámara se encontraban emplazados en el local de cada una de éstas.

""". Aquí utiliza Martínez Bara una terminología a nuestro juicio impropia, pues el funcionario es figura que corresponde más a los siglos XIX y XX, que a aquella época.

C) Organización y funcionamiento del Archivo del Consejo

a) Archivo General

De las tres secciones en que inicialmente clasificamos el Archivo del Consejo o Archivo Reservado del Consejo, Archivo de la Secretaría de Gobierno y Archivos de las Escribanías de Cámara, estudiaremos con detenimiento seguidamente el primero de estos Archivos. Hasta el momento, sin embargo, los múltiples aspectos tocados podrían considerarse comunes o generales a todos los Archivos del Consejo.

El Archivo propio y determinado del Secreto del Consejo parece que podemos identificarlo con el que otras ocasiones se denomina Archivo Reservado o con el Archivo General del Consejo ****. Guardaba las Consultas que hacía el Consejo al Rey y sus resoluciones; las Reales Ordenes y Decretos de S.M; los Acuerdos del Consejo y otras providencias de gobierno y regalía ****. El archivero y sus oficiales debían colocar ordenadamente en esta oficina todas estas disposiciones que se mandase guardar en el Archivo. De todo documento de nueva entrada se había de formar un inventario de cada uno de estos ramos, por años, y dentro de estos por meses y fechas. Posteriormente, los bloques de consultas y resoluciones se encuadernaban en libros que con facilidad permitiesen su uso y manejo, sin extravío.

En el Archivo del Consejo entraban diariamente documentos de muy diverso género, que habían de ser clasificados e inventariados según orden de materias y cronológico, de forma que fuese fácil su pronta localización. De todo documento entrado en el Archivo debía levantarse anotación, a la vez que se expedía el correspondiente recibo por parte del archivero.

****. Quizás también podríamos identificarlo con lo que se llama Archivo Antiguo del Consejo.

****. MARTINEZ BARA, J.A., op. cit., págs. 360 y 361.

El Archivo era esencialmente un fondo de consulta y de custodia de documentos. Para la elaboración de dictámenes y para la garantía de los derechos recogidos en los distintos expedientes era necesaria la conservación de los mismos y su correcta organización. Igualmente el acceso a la documentación debía concretarse en la organización de un eficaz servicio de préstamo, que debía incluir un control de toda salida de documentos del Archivo. Así vemos que ningún documento podía salir sin una orden del Consejo - concretamente, firmada por el Ministro Superintendente- y sin su correspondiente registro en el Libro de Conocimiento existente al efecto****. En la práctica muchos libros y documentos del Consejo que salían del Archivo terminaban extraviándose por el descuido de los oficiales y la ausencia de un control riguroso. Con más cuidado se llevaba el recogimiento de documentos en las casas mortuorias de Ministros y subalternos, aunque la proliferación de estos expedientes indica que era práctica habitual sacar expedientes de este Archivo o de los de las Escribanías para trabajar en casa.

El Archivo General era un instrumento imprescindible para la labor del Consejo. Para cumplir sus cometidos debía contar con completas colecciones legislativas, Reales Decretos, Ordenes y providencias, así como los manuales básicos de doctrina y jurisprudencia legal****. Eran relativamente frecuentes las remisiones de monumentos legislativos nacionales y extranjeros para su custodia****. Incluso en ocasiones eran donativos privados

****. Esta medida podía grangearle fácilmente la enemistad de Ministros que esperaban un trato de favor por su parte, como nos relaciona el Superintendente Cortabarría en su Reglamento sobre Arreglo del Archivo del Consejo del año 1806 (A.H.N., Consejos, legajo 17.704, Expediente: "Reglamento que convendrá adoptarse para el mejor arreglo del Archivo del Consejo y sus Individuos").

****. En una consulta de oficio fechada el 16 de febrero de 1818 se mencionaba, por ejemplo, la abundante documentación que sobre la Mesta se conservaba en el Archivo del Consejo. Allí se guardaban "infinitas Reales Provisiones", que recogían todos los privilegios reales de aquella institución. (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.082).

****. Así, por ejemplo, ya mencionamos anteriormente que en 1817 fueron mandados al Archivo del Consejo 550 ejemplares de las Constitución de Cádiz y 1.100 de los "Apuntes para la Historia", para que fueran allí conservados. Ya vimos que el Consejo decidió distribuir dos ejemplares de estas dos obras a los Ministros del Consejo Sres. Torres, Sierra, Marín y al Sr. Presidente, y que los restantes se colocasen en el Archivo del Consejo. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 4.034 núm. 20). O el 9 de noviembre del año

o testamentarias los que ponían a disposición del Consejo nuevas colecciones legislativas o bibliográficas"".

Sin embargo, no siempre llegaban al Archivo todas las leyes o decretos promulgados. Cuando la Secretaría de Estado y de Gracia y Justicia el 13 de abril de 1820 pidió al Archivo del Consejo que le remitiera seis ejemplares de la colección de decretos de las Cortes, por si los hubiere entre los libros referentes al régimen constitucional archivados en el Consejo, el entonces Superintendente del Archivo, Sr. Torres-Cónsul, contestó que no los había, "porque no fueron de los que se mandaron recoger"". Esta noticia tiene para nosotros importancia, en cuanto nos apunta el prestigio que tenía el Archivo del Consejo, que hacía que otras instituciones acudiesen a la consulta de su Archivo.

En el Archivo del Consejo entraban diariamente documentos de muy diverso género, que habían de ser clasificados e inventariados según orden de materias y cronológico, de forma que fuese fácil su pronta localización. De todo documento entrado en el Archivo debía levantarse anotación, a la vez que se expedía el correspondiente recibo por parte del Archivero.

El Archivo era esencialmente un fondo de consulta y de custodia de documentos. Para la elaboración de dictámenes y para la garantía de los derechos recogidos en los distintos expedientes era necesaria la conservación de los mismos y su correcta organización. Igualmente el acceso a la documentación debía concretarse en la organización de un eficaz servicio de préstamo, que debía incluir un control de toda salida de documentos del Archivo. Así encontramos que ningún documento podía salir sin una orden del Consejo - concretamente, firmada por el Ministro Superintendente- y sin su correspondiente registro en el Libro de Conocimiento

siguiente sabemos que se pasaron al Archivo, de acuerdo del Consejo, 186 ejemplares de la Constitución francesa decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en los años 1789, 1790 y 1791, impresa en Madrid y recogida reservadamente de orden del Consejo (A.H.N., Consejos, Archivo Antigo del Consejo, legajo 17.704). Estas constituciones francesas fueron impresas en Madrid por don Miguel de Burgos en 1814. El A.H.N. de Madrid conserva varios ejemplares de esta impresión.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.621, expte. núm. 13: nos informa de una testamentaria otorgada en la Villa y Corte que ponía a disposición del Consejo "Colecciones de pragmáticas, Reales Cédulas, providencias y noticias curiosas que tenía para mejor servicio".

"". A.H.N., Consejos, Archivo Antigo del Consejo de Castilla, legajo 17.704.

existente al efecto""'. En la práctica muchos libros y documentos del Consejo que salían del Archivo terminaban extraviándose por el descuido de los oficiales y la ausencia de un control riguroso. Con más cuidado se llevaba el recogimiento de documentos en las casas mortuorias de Ministros y subalternos, aunque la proliferación de estos expedientes indica que era práctica habitual sacar expedientes del Archivo para trabajar en casa.

El Archivo era un instrumento imprescindible para la labor del Consejo. Para cumplir sus cometidos debía contar con completas colecciones legislativas, Reales Decretos, Ordenes y providencias, así como los manuales básicos de doctrina y jurisprudencia legal""'. Eran relativamente frecuentes las remisiones de monumentos legislativos nacionales y extranjeros para su custodia. Así, por ejemplo, tenemos noticias de que en 1817 fueron mandados al Archivo del Consejo 550 ejemplares de las Constituciones de Cádiz y 1.100 de los "Apuntes para la Historia", para que fueran allí conservados""'. O el 9 de noviembre del año siguiente sabemos que se pasaron al Archivo, de acuerdo del Consejo, 186 ejemplares de la Constitución francesa decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en los años 1789, 1790 y 1791, impresa en Madrid y recogida reservadamente de orden del Consejo""'.

""'. Esta medida podía grangearle fácilmente la enemistad de Ministros que esperaban un trato de favor por su parte, como nos relaciona el Superintendente Cortabarría en su Reglamento sobre Arreglo del Archivo del Consejo del año 1806 (A.H.N., Consejos, legajo 17.704, Expediente: "Reglamento que convendrá adoptarse para el mejor arreglo del Archivo del Consejo y sus Individuos").

""'. En una consulta de oficio fechada el 16 de febrero de 1818 se menciona, por ejemplo, la abundante documentación que sobre la Mesta se conservaba en el Archivo del Consejo. Allí se guardaban "infinitas Reales Provisiones", que recogían todos los privilegios reales de aquella institución. (A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.082).

""'. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 4.034 núm. 20. Eran ejemplares editados en rústica, impresos en Vich por el Jefe Político de aquella ciudad catalana. Todos ellos formaban un fardo recogido hacía ya tiempo. El Consejo decidió distribuir dos ejemplares de estas dos obras a los Ministros del Consejo Sres. Torres, Sierra, Marín y al Sr. Presidente, y que los restantes se colocasen en el Archivo del Consejo.

""'. A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo 17.704: estas constituciones francesas fueron impresas en Madrid por don Miguel de Burgos en 1814. El A.H.N. de Madrid conserva varios ejemplares de esta impresión.

Sin embargo, no siempre llegaban al Archivo todas las leyes o decretos promulgados. Cuando la Secretaría de Estado y de Gracia y Justicia el 13 de abril de 1820 pidió al Archivo del Consejo que le remitiera seis ejemplares de la colección de Decretos de las Cortes, por si los hubiere entre los libros referentes al régimen constitucional archivados en el Consejo, el entonces Superintendente del Archivo, Torres-Cónsul contestó que no los había, "porque no fueron de los que se mandaron recoger"****. Esta noticia tiene para nosotros importancia, en cuanto nos da idea del prestigio del Archivo del Consejo, cuando otras importantes instituciones acudían a su consulta.

De esta manera, el Archivo cumplía con una mayor o menor eficacia con una misión importante para la labor de todo el Consejo. Facilitar para los informes, recursos, instrucciones de expedientes por los Fiscales o resoluciones por el Consejo, los ejemplares necesarios de aquellas importantes disposiciones****. El Archivo del Consejo debía tener ejemplares de toda cuanto fuese impreso por el Consejo o le fuera remitido desde afuera a cualquiera de sus Ministros.

Ya hemos visto que todo solicitante de algún documento del Archivo deberá contar con una Orden por escrito del Consejo. Ello era registrado en un Libro de Conocimientos en donde se expresaba la naturaleza del documento que se facilitaba y la persona a la que se entregaba, quien debía firmar a continuación del asiento correspondiente. De esta manera, se podía conocer el destino del libro y recogerlo en caso de necesidad o de fallecimiento del depositario. En esta cuestión se haría incapié en varios momentos del periodo que estudiamos, ya que existía el mal hábito de los Ministros de extraer documentos y llevarlos a sus domicilios sin dejar levantado el correspondiente asiento.

El Registro de las Consultas que el Consejo acuerda, era tarea previa a su remisión a la Secretaría de la Presidencia, por la cual eran dirigidas al Rey. Siempre, a fin de año, los expresados Registros se encuadernaban en uno, dos o más tomos según su volumen. Igualmente estaba mandado que a fin de año estos Registros, el de las Ordenes

****. A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo de Castilla, legajo 17.704.

****. Sin embargo, el desorden y desarreglo de esta oficina hacían frecuente -incluso diariamente, nos dicen las fuentes-la no localización de algún ejemplar de Reales Cédulas, Decretos o Autos del Consejo por no haberse remitido el correspondiente ejemplar al Archivo (A.H.N., Consejos Suprimidos, Archivo Antiguo, legajo 17.704, Reglamento para el mejor arreglo del Archivo del Consejo).

del Rey -que igualmente se llevaba y encuadernaba- y las Consultas originales -con las que se hacía un legajo con una tarjeta expresiva del tiempo al que pertenecían- se pasasen al Archivo del Consejo.

Sin embargo, al parecer esto no se observaba tampoco con exactitud y sólo se llevaba a cabo de tiempo en tiempo. Así explicaba don Valentín Pinilla, Escribano de Gobierno del Consejo, en 1825, los motivos de esta inobservancia, en relación con el Archivo de la escribanía de Gobierno:

"porque el Archivo no está organizado ni tan expedito como debiera, y porque si el oficio no tuviese a las manos estos documentos y las noticias y conocimientos que ofrecen, se hallaría a cada momento embarazado para el despacho ordinario y corriente de los negocios, con el que suelen enlazarse y tener íntima relación, y ya también para poder dar al Consejo con perentoriedad las razones necesarias y mucho más para contestar a los informes y noticias que con frecuencia se le piden por el Sr. Presidente o Gobernador en horas en que no es posible mendigarlas del Archivo. Sin duda por estas causas se ha establecido el sistema de no pasar a éste y conservar en la Escribanía de Gobierno los Registros de los seis últimos años"****.

Los originales de Reales Decretos, Ordenes y Provisiones debían conservarse en el Archivo General, de tal manera que si alguno llegaba a las Escribanías de Gobierno o de Cámara, debían remitirse inmediatamente a aquel Archivo, entregándose simultáneamente por el Archivero el recibo correspondiente. Las Escribanías debían conservar sólo copias certificadas o simples de tales Decretos, Ordenes y Provisiones que se comunicasen para unir e instruir los expedientes. De la misma manera se entiende que no debía sacarse del Archivo Consulta, Decreto ni otro papel original y que si fuese precisa alguna copia autorizada, la había de proporcionar el Archivero en papel sellado y precediendo auto del Consejo****.

Concretamente, en lo referente a las Reales Ordenes, las reglas eran las siguientes: 1. había que poner

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.976 núm. 71. Contiene un informe de don Valentín Pinilla sobre la Escribanía de Gobierno de Aragón, fechado el 15 de noviembre de 1825.

****. Este precepto había ido descuidándose poco a poco. En su informe del estado del Archivo en 1806, manifiesta Cortabarría que desde 1801 no habían pasado las Escribanías de Gobierno al Archivo ningún Real Decreto original.

certificación con inserción de ellas en todos los expedientes, con lo que se entorpecía bastante el Real Servicio; 2. se debían copiar íntegramente todas por las Escribanías de Gobierno en el Libro destinado al efecto para las de cada año y pasar este Libro después al Archivo; 3. "y que habiendo de existir también en él las originales, al paso que se trasladan a esta oficina los expedientes fenecidos, queda asegurado bastantemente su conservación""".

Como vemos, los originales de las Reales Pragmáticas, Cédulas y Provisiones Reales que establecían ley y se imprimían para su observancia debían colocarse igualmente en el Archivo del Consejo, e igualmente las providencias del Consejo en cuya virtud se expiden órdenes circulares. De estas leyes se guardaban en el Archivo cierto número de ejemplares impresos, tanto de las que proceden del Consejo mismo como de las que se expiden por los demás Tribunales. El motivo es que frecuentemente el Consejo juzgaba conveniente tenerlas presentes en sus providencias y determinaciones""".

En el Archivo del Consejo se guardaban también los pleitos y expedientes de cualquier clase, ya terminados y que hubieran causado y causaran todavía estado o ejecutoria""". Las Escribanías de Gobierno y de Cámara,

""". Informe Cortabarría, de 16 octubre 1806, pág. 10, en A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 17.704.

""". La costumbre vigente hasta 1806 era que de las que se imprimían de orden del Consejo se pasaban al Archivo 100 ejemplares, 50 de ellos rubricados por el Escribano de Gobierno. Sin embargo, esta norma no se observaba bien. Eran muy pocas las Reales Cédulas, Provisiones y Ordenes circulares impresas de Orden del Consejo de las que había ejemplares en el Archivo. De alguna de ellas se guardaban muchos ejemplares a veces y de otras muchas ninguno. No había a finales de 1806 ninguna de las que se pasaban por los demás Tribunales, de los que debería haber al menos dos o tres de cada. Esta costumbre, si bien muy conveniente y necesaria, perdió importancia con la publicación de la Novísima Recopilación.

""". En su informe de 1804, El Superintendente Cortabarría mencionaba cuatro categorías de papeles del archivo del Consejo a recuperar: 1. En primer lugar, los que estando en el Consejo, fueron sacados de él y no se devolvieron después. Sobre esta primera clase, manifestó el archivero Peñafiel en su representación de 9 de mayo de 1797 que aún de los legajos existentes faltaban muchos papeles que se habían sacado por las Escribanías de Cámara, aparte de los que habían sacado Ministros y subalternos del Consejo; 2. Los que debiendo haberse pasado al Consejo por los Escribanos de Gobierno y demás de Cámara en cumplimiento de lo mandado por

una vez concluido un pleito o expediente, cesaban en sus funciones, y los autos bajo recibo pasaban al Archivo del Consejo, donde se garantizaba mejor su conservación. De tales autos debía expedirse por el archivero el correspondiente recibo que se guardaría en la Escribanía que los entregó. De esta manera se evitaban también confusiones, extravíos o abusos y se aseguraban todos los frutos de las disposiciones y reflexiones del gobierno del Consejo. E igualmente podrían ser fácilmente utilizables para la resolución de expedientes posteriores similares.

Por otro lado, era frecuente en aquella época la destrucción de bibliotecas o archivos por causa de incendios. La prevención de estos accidentes era mayor en el Archivo del Consejo que en las Escribanías, donde por estar situadas en una casa particular el riesgo era siempre mayor^{***}.

Finalmente, vemos también que la centralización de los expedientes facilitaba su localización

el Consejo en el auto de 28 de enero de 1765, no se habían pasado; 3. Los que se debieron pasar después de aquel año al Consejo conforme a las reglas establecidas en dicho auto. Este auto fue cumplido en lo referente a Consultas, pero no en lo referente a Reales Decretos y Ordenes, especialmente desde el año 1801; 4. Aquéllos que aunque no se hubieran mandado expresamente hasta ahora, convenía al servicio del Rey y del Público que estuvieran custodiados en esta Oficina.

^{***}. Las casas particulares donde se localizaban las Escribanías no tenían habitualmente las condiciones de seguridad precisas para contener un archivo. Además, era frecuente la pérdida de documentos en las frecuentes traslaciones que se hacían de los archivos de las Escribanías, cada vez que se trasladaba de local el Escribano titular.

Así ve el Superintendente Cortabarría en su informe de 1804 las ventajas del Archivo del Consejo frente a los de las Escribanías: "Que colocándose en el Archivo como disponen las leyes, se excusarán estos inconvenientes y existirán siempre dentro de la Casa de los Consejos en piezas construidas de intento para este fin, y con las precauciones que exige todo paraje destinado a custodia de papeles, lo cual es imposible se verifique en las Escribanías, así por la inevitable entrada y roce de los que acuden a ellas para procurar el despacho de asuntos propios o ajenos, como porque no se puede excusar en estas oficinas de unos braseros en el invierno y el de luz artificial en las de noche destinadas al trabajo. Finalmente que (...) se podrá excusar al menos en parte la cantidad que abona la Real Hacienda por el inquilinato de las Casas que ocupa, e igualmente el coste de las frecuentes traslaciones".

a la hora de instruir o promover las demandas****.

Sin embargo, también es verdad que de cumplirse al pie de la letra las disposiciones sobre reunión de documentos en el Archivo del Consejo, no habría espacio para contener los innumerables expedientes e impresos que a allí deberían remitirse. Sabemos que en varios ocasiones se hizo preciso enviar parte de los documentos depositados en el Archivo al de Simancas.

Los papeles se colocaban en armarios, cajones o estantes****, formando legajos o libros. Estos estaban distribuidos por materias, tomadas en la denominación propia y natural de los mismos papeles y guardando en cada una su orden cronológico. Cada legajo debía contener tantos expedientes como bastasen para formar un cuerpo regular que pudiera manejarse sin incomodidad notable****.

Para la mejor conservación de los legajos y evitar que se perdiesen o maltratasen, tenía cada legajo una carpeta de cartón forrada en pergamino por la parte inferior y otra por la superior****. Cada legajo estaba atado por una cinta proporcionada a su peso y volumen, y llevaba un cartel pendiente en el que se estampaba el título del legajo y número, tan claro como fuera posible****. Los papeles contenidos en cada legajo debían estar numerados correlativamente y clasificados probablemente según un orden

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo 17.704, Reglamento para Arreglo del Archivo del Consejo.

****. Además, existía en el Archivo un mobiliario auxiliar. Una noticia del año 1787 nos informa que había una mesa grande de pino y dos pequeñas, las tres con cubiertas de guadamacil; y había también tres taburetes. (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 17.704).

****. A.G.S., Sección Tribunal Supremo de España e Indias, legajo 33, expediente número 1: Este expediente recoge el Reglamento Provisional del Archivo del Consejo de Hacienda, del año 1803, que nos facilita muchos datos sobre la organización de los papeles de un archivo de la época muy similar al del Consejo de Castilla. Parece que bastantes artículos de este Reglamento Provisional se aproximan a las reglas que rigieron para el Archivo del Consejo de Castilla.

****. Que hoy en día todavía conservan los legajos de la documentación del Consejo depositados en el Archivo Histórico Nacional.

****. A.G.S., Tribunal Supremo de España e Indias, legajo 33 núm. 1.

cronológico****; empezando desde el número uno, que se ponía al más antiguo****.

Debía existir igualmente un inventario de los papeles que contenía cada legajo, expresando sucintamente su calidad, objeto principal y circunstancias notables, y se ponía al margen de cada partida el número correspondiente a cada documento. Estos inventarios o libros de matrícula posteriormente se encuadernaban en libros. De tales inventarios solían conservarse varias copias.

Una vez ordenados los legajos en la forma predicha, probablemente no podrían ser aumentados o disminuidos con más papeles, salvo causa extraordinaria que lo exigiese -haberse colocado en los legajos algún documento por error material o inadvertencia que por su fecha y naturaleza debiera estar en otro lugar; o el haber aparecido después de la formación del libro algún papel que por sus circunstancias debiera conservarse en él-. En estos casos extraordinarios se hacía en el libro de matrícula las anotaciones convenientes con las correspondientes rúbricas.

Tanto el Gobernador del Consejo como los Fiscales necesitaban muchas veces tener presentes muchos documentos de los conservados en el Archivo para la más completa instrucción de los negocios y causas. Les eran facilitados todos los expedientes y papeles que solicitaban, sin exigirles que expresasen el objeto para el que lo pedían. El Presidente o Gobernador lo pedía a través de su Secretario, los Fiscales por medio de sus Agentes, quienes firmaban el correspondiente Libro de Conocimiento.

El archivero y sus oficiales debían además evitar poner notas o apuntamientos en los documentos originales, y en cualquier papel que hiciera las veces de tales****, por más precisa y necesaria que les pareciese. Si

****. Esta regla contenida en el Reglamento del Archivo del Consejo de Hacienda se confirma en muchos legajos de la documentación del Consejo. Vid. por ejemplo los legajos de la Sección Invasión Francesa.

****. Una nota de la documentación del Archivo del Consejo Real de España e Indias, fechada en 1834, nos puede servir de referencia para conocer algunos utensilios que necesitaba un archivo similar de la época y su valoración: 2 resmas de papel sin cortar, 88 reales; 1 resma de papel cortado, 56 reales; 4 manos de papel de oficios 14 reales; 200 varas de cinta blanca para legajos, 32 reales; 2 piezas más finas pequeñas, 9 reales; 6 piezas de bacotúque (?), 7,5 reales. (A.G.S., Consejo Real de España e Indias, legajo 2 bis).

****. A.G.S., Tribunal Supremo de España e Indias, leg. 33 núm. 1.

parece que podían hacerlo probablemente en pliego adjunto separado o en el que servía de carpeta al documento.

A pesar de todas estas medidas, ya sabemos que muchas veces se extraviaban papeles del Consejo. El Superintendente Cortabarría, en un informe fechado el 16 de octubre de 1806 analizaba este problema. Por las Escribanías de Cámara y por los Ministros y Subalternos se habían sacado muchos documentos que no habían sido devueltos. Aún teniendo registradas estas salidas en los Libros de Conocimiento, no se instaba su devolución"".

b) Archivos de las Escribanías del Consejo

En este breve apartado vamos a repasar algunas notas de las otras dos clases de archivos que pertenecían también a la estructura del Consejo. Nos referimos a los que había en cada una de las Escribanías de Gobierno y en las de Cámara del Supremo Tribunal. Muchas de las reglas vistas en la organización del Archivo General podrían ser aplicables a estos pequeños archivos. Incluso han ido apareciendo a lo largo de los capítulos anteriores muchas referencias a estas importantes oficinas de las Escribanías.

Cada Escribanía ocupaba habitualmente un local separado del Consejo. Así la primera Escribanía de Gobierno tenía su sede en un local de la Plazuela de las Descalzas Reales núm. 6. Concretamente en el cuarto principal de este inmueble"". Cada escribano debía sufragar a su costa los gastos que el alquiler del local de la Escribanía llevaba consigo. Así, por ejemplo, la Escribanía de Cámara de don Manuel de Peñarredonda pagaba al

"". Aparte de estos Libros de Conocimiento, otras fuentes para localización de documentos eran, entre otras, cualquier asiento del Archivo o de las Escribanías de Gobierno y Cámara que diera noticias del destino de papeles, y las diligencias de reconocimiento de papeles relativos al Supremo Tribunal que se practicaban cuando moría cualquiera de los Ministros del Consejo de Castilla.

"". Entre otros sitios, este dato aparece en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.972 núm. 19.

arrendatario del local 583 reales mensuales en el año 1.808****.

Las Escribanías recibían y tramitaban diariamente un cierto número de pleitos y peticiones. Por ello mismo debían contar con una o varias habitaciones destinadas a la clasificación y archivo de los expedientes. El criterio general parece que era que solamente un número limitado de dichos expedientes se conservaba en uno de estos archivos: aquellos expedientes y pleitos de cualquier clase no terminados o que no hubieran causado todavía estado o ejecutoria. De esta manera, los expedientes "fenecidos" o concluidos terminaban pasando al Archivo General del Palacio de los Consejos.

Pese a todo, el valor documental de estos archivos de Escribanía era considerable. Alguno como el de la Escribanía de Gobierno del Consejo ocupaba varias habitaciones. Por el valor de los documentos allí conservados había dispuesto el Rey Don Carlos IV que el Escribano de Gobierno debía vivir en una casa inmediata a la ocupada por esta oficina de gobierno****.

El desarreglo y desorden de estos archivos eran cosa manifiesta. Los Escribanos buscaban preferente la consecución de unos ingresos económicos y se despreocupaban fácilmente de proporcionar a sus sucesores un archivo asequible a la consulta. Por ello mismo, cuando don Valentín

****. A.H.N, Consejos, Consultas de Oficio, legajo 6.081, consulta del 22 de diciembre de 1817. En los periodos de supresión del Consejo se plantearon conflictos entre los dueños de las Escribanías y los dueños de los locales que ocupaban, ya que al no funcionar las oficinas los propietarios se negaban a abonar a su costa los gastos de alquiler. En el pleito planteado por este motivo por la viuda e hijos de don Manuel Peñarredonda, auquéllos alegaron haber pagado a los propietarios de la Escribanía 9000 reales a cuenta de los 11083 que importaban los 19 meses de arrendamiento de la Escribanía de Cámara que Peñarredonda sirvió desde el 2 de abril de 1.808 hasta el 1 de noviembre de 1809. La jurisprudencia del Consejo parece fue en la resolución de estos casos el criterio general de que si al restablecerse el Consejo continuaba como titular de la Escribanía, se suponía una continuidad en el derecho y también en las obligaciones de ese derecho. Así, el Consejo condenó en 1817 al Escribano de Cámara Carranza al pago de la mitad de lo pedido por el propietario del local, es decir, a 19288 reales y 12 maravedís en efectivo metálico. Para ello se apoyó el Consejo en la real cédula de 31 de mayo de 1815 que afirmaba que Carranza se mantuvo con el nombramiento para usar de él restablecido el Consejo.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 47.

pinilla se hizo cargo de la Escribanía primera de Gobierno en el año 1.816 y se propuso una completa reforma de la oficina, una de las medidas propuestas fue el arreglo del Archivo. Para ello se valió de la contratación de dos oficiales que rectificaron los distintos inventarios y matriculas y reorganizaron los expedientes en sus correspondientes legajos****. Los trabajos continuaron hasta el 7 de marzo de 1820, fecha en que todos los empleados del Consejo fueron suspendidos junto con el mismo Supremo Tribunal****.

Una noticia del 6 de marzo de 1823 nos informa que en aquella fecha fueron reunidos los papeles de la Escribanía de Cámara vacante por fallecimiento de don Damián Juárez****.

****. Se comenzaron los trabajos el 8 de abril de 1818. Empezaron por el examen y reconocimiento de los muchos papeles que había en la Escribanía de Gobierno, recogidos de las casas mortuorias de los Ministros del Consejo. Desde el 8 de abril al 30 de junio del mismo año se reconocieron varios legajos que había de expedientes sin estar matriculados, de los que se separaron 31 correspondientes a otras Escribanías de Cámara. No se hizo entrega de ellos por si entre los demás que quedaban pendientes había alguno o algunos que no correspondiesen a la Escribanía de Gobierno. de todo ello se formaron ciento cincuenta expedientes, que se añadieron a las matrículas de sus respectivos años. Igualmente se restituyeron a sus legajos treinta expedientes que estaban matriculados y fuera de ellos, aparecidos entre los papeles. El relato de la memoria de estos trabajos sigue añadiendo: "También se vieron y reconocieron otra gran porción de papeles de los recogidos de las casas mortuorias de varios Sres. Ministros, colocando cada expediente en su lugar correspondiente, y separando los sueltos que entre ellos se encontraron, de contestaciones, borradores, apuntamientos, etc., formando legajos de éstos y poniendo sus carpetas". Seguidamente se hizo una matrícula de catorce legajos compuestos de cuatrocientos expedientes generados en tiempos de Tribunal Supremo de Justicia por las Escribanías de Cámara de dicho Tribunal. Básicamente los trabajos realizados se podían resumir en lo siguiente: en una primera fase se reconocieron y ordenaron los papeles, y una vez metidos en sus correspondientes legajos se formaron los libros de matrícula. (A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 42).

****. Sin embargo, por aquellas fechas los trabajos de reforma del Archivo estaban prácticamente concluidos (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 expte. núm. 42).

****. El Escribano de Gobierno don Bartolomé Muñoz recibió en aquella fecha la siguiente Real Orden: "El Rey se ha servido resolver que poniéndose V.S. de acuerdo con el archivero de esta Secretaría don Fernando Ibarrola y el

Los empleados de la Escribanía de Gobierno -y probablemente harían lo mismo los de las demás Escribanías del Consejo-, se dedicaban los días de vacaciones de Navidad y en los primeros días del año a reconocer y arreglar la oficina. Hacían inventario de los asuntos despachados y pendientes en cada año y colocaban los pleitos y expedientes concluidos en sus respectivos legajos. También el jefe y oficiales de la Escribanía de Gobierno dedicaban un domingo de febrero**** y los tres días siguientes feriados en la extensión de listas de los asuntos pendientes en la Escribanía****.

También periódicamente se hacían visitas o inspecciones a las Escribanías. Una parte importante de estas visitas era la revisión del estado del archivo de la Escribanía y el orden entre sus papeles. Estas visitas solían durar varios meses y solían ser realizadas por un Ministro del Consejo, muchas veces el llamado Juez de ministros. Al final de la misma se emitía un informe que era presentado al Consejo. Así, por ejemplo, el 17 de octubre de 1824 fue realizada una visita a la primera Escribanía de Gobierno del Consejo. Por los informes emitidos en marzo del año siguiente sabemos algunos datos interesantes sobre el estado del archivo de la Escribanía: las piezas del archivo estaban bien colocadas en sus anaqueles; los libros de matrícula de las consultas de oficio regían desde 1817 hasta el 7 de marzo de 1820, y desde el restablecimiento del Consejo hasta la fecha de la visita****; sabemos, por

Pagador de este Ministerio, disponga inmediatamente la traslación a su habitación de los papeles pertenecientes a la Escribanía de Cámara del extinguido Consejo de Castilla que sirvió el difunto don Damián Juárez, procurando observar la más severa economía tanto en la operación de trasladar dichos papeles como en la compra de estantes en que hayan de colocarse, cuyos gastos deberá satisfacer el pagador del Ministerio de los fondos del imprevisto del mismo; igualmente que los alquileres devengados de la casa ocupada en el día con dichos papeles, cuando las circunstancias lo permitan, al administrador de la misma don Manuel Martínez Novales. Lo comunico para su inteligencia y cumplimiento...Palacio, 6 de marzo de 1823". (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3975 núm. 45).

****. Concretamente el quinto domingo del tiempo ordinario según el calendario litúrgico, es decir, alrededor del 13 de febrero de cada año.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975 núm. 55.

****. Esto explica por qué hoy en día no existen libros de matrícula de los años anteriores a 1817 en el Archivo Histórico Nacional: porque fue desde la reforma de la Escribanía por Pinilla cuando comenzaron a hacerse estos

ejemplo, que los expedientes de 1818 ocupaban diez legajos - del 1440 al 1449- y que sólo faltaba un expediente; y que los de 1823 ocupaban cuatro legajos -del 1562 al 1565 inclusive-"". Un auto final del Ministro que realizó la visita nos expone la situación de aquella oficina:

"Constando por el reconocimiento que resulta de las diligencias anteriores hallarse corrientes y arreglados los asientos de consultas, el de expedientes generales y prontuario de providencias urgentes, como también que desde el año de 1818 inclusive hasta el presente se hallan conformes los inventarios y libros de sacas de pleitos con los legajos a que se refieren, sin haberse advertido otra falta que la de los pendientes que constan en la segunda y sexta diligencia, los cuales se hallaron después unidos a otros que estaban en curso, y resultando igualmente que desde el año 1814 hasta 1817 inclusive no se advierte la misma formalidad y arreglo, pues se han notado muchas faltas de expedientes, por cuya razón se viene en conocimiento que el desorden se halla en los papeles antiguos, y que para su organización e inventarias los expedientes interesantes deben invertirse muchos meses y hacerse por personas destinadas a este solo objeto diariamente..."".

Los años siguientes continuaron por tanto las reformas en el archivo de esta Escribanía de Gobierno.

Tras la extinción del Consejo de Castilla, ninguno de los papeles de sus Escribanías pasó al Archivo del Consejo Real de España e Indias. Al parecer, el Archivo de aquel nuevo Consejo se nutrió especialmente con los documentos del Archivo General del Consejo y del Archivo del Consejo de Hacienda"".

Por un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional conocemos con cierto detalle la situación y características de cada una de las Escribanías de Cámara del Consejo por aquella época. Ya hemos visto en otros pasajes la situación y descripción de la Escribanía de Gobierno de don Bartolomé Muñoz, situada en la Plaza de las Descalzas número 6, cuarto principal. La Escribanía de Gobierno de Aragón tenía su sede en la calle del Burro núm.

libros.

"". De los legajos 1450 a 1463 estaban todos los expedientes.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.975, expte. núm. 55.

"". A.G.S., Sección Consejo Real de España e Indias, legajo 2 bis.

9. Sus papeles ocupaban seis habitaciones de diverso tamaño""; la Escribanía de Cámara del Sr. Carranza estaba situada en la calle y casa de la Cruzada y constaba a su vez de siete habitaciones""; la Escribanía de Cámara del Consejo que sirvió don Gil de Ayala tenía su establecimiento en la Plazuela del Clavel y constaba de cinco habitaciones y un sótano""; la de don Antonio Granados se situaba también en la Calle de la cruzada, frente a Santiado: esta Escribanía era de mayores dimensiones, pues contaba con 9 habitaciones y dos sótanos""; finalmente la Escribanía de Cámara que sirvió don Manuel Escariche tuvo sus locales en la calle de Atocha núm. 98 y parece constaba también de 9 habitaciones"".

Por otras fuentes sabemos que los archivos de cada una de las Escribanías del Consejo pasaron a depender del Supremo Tribunal de Justicia. Inicialmente se continuaron conservando en los respectivos locales de las Escribanías, pero sin duda pronto se pensó en otra solución por lo gravosos que eran los alquileres para el erario Público. De esta manera y por Real Orden de 3 de agosto de 1835 se mandaba que el Gobierno satisficiera los alquileres devengados y los que por esta razón se devengaren en el futuro, hasta el completo desalojo de los locales ocupados por tales archivos. En esta misma Real Orden se pedía que fuera aminorado al máximo el gasto para la conservación de tan interesantes documentos y se buscara local para guardar

"". Una habitación tenía 30 pies de largo por 18 de ancho; otra era de 27x18; otra de 7x9; otra pieza era interior; otra era de 15 pies por 11; y una última de 15x9. (A.H.N., Consejos, Archivo antiguo del Consejo, legajo 17.704).

"". Una habitación de 15 por 17 pies; otra de 12 por 15; otra interior de 7 por 32; otra de 14 por 7; otra de 9 por siete; otra de 12 por 9, un pasillo de 7 por 5 y una última habitación de 7 por 9. (A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo 17.704).

"". Tenía una habitación de 10x11 pies; otra de 21x16; otra de 16x16; otra "de mayores dimensiones"; otra de 12x16; un pasillo, "largo"; y un sótano de 7x16. (A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo 17.704).

"". Una pieza de 18 pies de largo por 12 de ancho; otra igual a continuación; otra de 10 por 12; otra de 7 por 7; otra de 7x9; otra de 21x11; otra de 9x7; "otra más pequeña"; otra de 7 por 15; y dos habitaciones en el sótano de 26x15. Al frente de estos locales se encontraba el Sr. Calatraveño.

"". Al frente de estos locales estaba un tal Sr. Montijano. (A.H.N., Consejos, Archivo Antiguo del Consejo, legajo 17.704).

estos papeles****.

Más adelante y con fecha 6 de junio de 1837, la Comisión Especial de las Cortes para el Examen del Presupuesto del ministerio de Gracia y Justicia estudió un informe del Tribunal Supremo "sobre las localidades para custodiar los papeles de los extinguidos Consejos de Castilla, Hacienda e Indias****". La citada Comisión visitó los locales del Tribunal Supremo de Justicia, todos los que sirvieron a los extinguidos Consejos de Castilla, Hacienda e Indias; y aquél en que se conservaba el archivo de la Escribanía de Gobierno del Consejo. En total, el alquiler de este último local costaba 9000 reales anuales y el costo de los demás locales ascendía a 17.715 reales anuales. Para estudiar este asunto la Comisión decidió nombrar a tres comisionados para que asistieran a visitar los referidos locales****. También sabemos que más adelante, en la sesión secreta de 27 de julio de 1837, las Cortes volvieron a examinar esta cuestión, sin resolver nada especial****.

Finalmente sabemos que los papeles de la primera Escribanía de Gobierno del Consejo pasaron al Archivo de la Secretaría de Gracia y Justicia y que tras la constitución del Archivo Histórico Nacional en 1866****, éstos y los demás documentos del Consejo de Castilla fueron reunidos en este gran archivo de archivos localizado en Madrid.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.619 núm. 23, documento de 31 de agosto de 1835.

****. A.C.D., Serie General, legajo 54 núm. 198. Este informe del Tribunal Supremo de Justicia había sido remitido a la Secretaría de Gracia y Justicia.

****. Concretamente fueron los Sres. García Blanco, Díaz Gil y Almanán (A.C.D., Serie General, legajo 54, expite. núm. 198).

****. "Se dio cuenta en la sesión secreta de 27 de julio de 1837 y después de haber hablado el Sr. Blanco, no habiendo bastantes diputados presentes para continuar la discusión, el Presidente levantó la sesión, anunciando antes que las Cortes no resolvían otra cosa en el interin se llevaba a efecto lo establecido en dicho oficio". (A.C.D., Serie General, legajo 54 núm. 198).

****. Fue creado en virtud de Real Decreto de 28 de marzo de 1.866 como "archivo público general del reino" (CRESPO NOGUEIRA, C., "Guía del Archivo Histórico Nacional", Madrid 1989, pág. 5).

ARCHIVO DE LA SALA DE ALCALDES

Conocemos la existencia de este Archivo casi exclusivamente por las referencias que Martínez de Salazar hizo en su obras sobre el Consejo Real de Castilla"" y alguna otra publicación"". Sin embargo, era del todo lógico que una institución como la Sala de Alcaldes que, aunque quinta Sala del Consejo de Castilla"", se comportaba en muchos aspectos como una institución peculiar pero dependiente del Consejo: tenía su propio Gobernador, sus Ministros, sus Salas y subalternos. También tenía unas competencias muy propias y determinadas. Si a todo ello añadimos que en muchos periodos de su historia la sala dejó de depender del Consejo de Castilla, incluso en momentos del

"". MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", op. cit., págs. 360 a 362.

"". En la obra "Consejo de Castilla. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Catálogo por materias", de E. Varón Vallejo y A. González Palecia, hay una introducción a la historia del Archivo de la Sala en la que se ñaden algunos datos de interés sobre esta desconocida oficina.

"". Vid. al respecto A.H.N., Consejos, Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes núm. 1399, año 1808, folios 893 y ss.; y Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.075, consulta del 30 de octubre de 1.815, expedientes en los que se hace referencia al carácter de quinta Sala del consejo de Castilla que tenía la Sala de Alcaldes.

reinado de Fernando VII""", por todo ello, se hacía indispensable para esta institución la formación de un Archivo propio y distinto del del Consejo de Castilla.

El Archivo de la Sala de Alcaldes"" tenía dos partes: el llamado Archivo secreto, bajo la custodia del Gobernador de la sala, y en donde se guardaban las consultas, Reales resoluciones, Ordenes del Consejo, causas reservadas y otros documentos de estas características. De todos los documentos guardados en este Archivo secreto existían unos índices o inventarios duplicados. Unos se guardaban en el propio Archivo secreto y la copia en la sala del acuerdo, bajo llave.

Aparte del Archivo secreto estaba lo que se llamaba Archivo Público. Allí se conservaban de forma ordenada los libros de acuerdos, los de gobierno, los pleitos de gremios y causas criminales antiguas y modernas, etc. Los papeles del Archivo público los llevaba el Escribano de Cámara archivero, quien debía cuidar que los índices no salieran del Archivo, y que los libros de acuerdos y de gobierno estuvieran colocados por orden. Era

""". Aparte de los momentos de suspensión del Consejo de Castilla, en los que en principio la Sala continuó sus funciones, el mismo Consejo de Castilla trataba a la Sala como organismo independiente. Así, al decretar el Consejo en 1808 que fueran informados de un sucedido todos los Tribunales de Madrid, incluía en la lista todos los Consejos de la Corte, el Tribunal de Comercio y Moneda, el de la Nunciatura y la Sala de Alcaldes (A.H.N., Consejos, Invasión Francesa, legajo 5.526 núm. 20). Por supuesto que el tratamiento a esta Quinta Sala del Consejo era muy distinto del otorgado a las demás Salas del Supremo Tribunal de la Nación! Por ejemplo, la Sala de Alcaldes no participaba del Consejo pleno y tenía sus propias reuniones de la Sala en pleno.

"". Los antecedentes de este Archivo se remontan a la mitad del siglo XVIII. En 1748 fueron sacados de las torres del Palacio de Santa Cruz y otros parajes, y colocados en una habitación del edificio para su archivo. A partir de entonces comenzó una lenta ordenación y clasificación de documentos, y se fueron formando los correspondientes libros de matrícula.. De esta manera, en 1762 se habían ordenado ya papeles correspondientes a 1200 legajos, que incluían todas las causas criminales de los dos últimos siglos. En 1766 fue formado un compendio o índice alfabético general de los Reales Decretos, órdenes, cédulas, pragmáticas, autos y providencias del Consejo y de la Sala y de otros asuntos que componían los 155 libros de gobierno desde 1579, que eran custodiados en este Archivo de la Sala (VARON VALLEJO, E., y GONZALEZ PALENCIA, A., "Consejo de Castilla, sala de Alcaldes de Casa y Corte. Catálogo por materias", pág. V y ss.).

misión suya también vigilar que las causas finalizadas fueran ordenadas, y que los Escribanos de Cámara entregasen puntualmente los pleitos de gremios y otros expedientes que debían custodiarse en el Archivo"".

La finalidad del Archivo era facilitar la consulta de los documentos allí custodiados: Reales Ordenes, consultas y providencias del Consejo, tanto cuando se buscara facilitar prontas noticias, como cuando hubiera que realizar un determinado informe"".

Al frente del Archivo se encontraba un Alcalde de Corte que, que conforme a lo que se practicaba en el del Consejo de Castilla, debía cuidar de que los papeles allí conservados y los nuevos ingresados se inventarían con la debida puntualidad, y fueran colocados ordenadamente para su fácil localización y consulta. El papel de este Alcalde se asemejaba al del Consejero superintendente del Archivo, en el Consejo de Castilla.

De Archivero hacía un Escribano de Cámara de la Sala, que era nombrado por la misma Sala de Alcaldes. Martínez de Salazar señalaba que su sueldo estaba estipulado en 100 ducados anuales para gastos de escritorio, así como para mantener a un escribiente o papalista. Era también misión del Archivero cuidar de que los índices e inventarios del Archivo público no saliesen de él; igualmente debía colocar por su orden a fina de cada año los libros de acuerdos y los de gobierno, las causas finalizadas, los pleitos de gremios y demás expedientes, que debían ser entregados por los escribanos de Cámara. El 1 de enero de cada año debía levantar acta de estar todos los expedientes entregados e inventariados, y colocados junto a sus índices. El Escribano de Cámara debía dar cuenta a la Sala de ser esto así y debía asistir diariamente al Archivo en las horas de Sala para enterarse de las causas y papeles que se mandaban archivar y presentar aquellos que le fueran pedidos. No podía entregar ninguna causa, libro ni otro papel a un Alcalde ni a otra persona sin expresa orden de la Sala, del Gobernador o del Alcalde Superintendente del Archivo. También estaba estipulado que de todo documento entregado debía levantar asiento en el libro de conocimiento que había a este efecto. Igualmente era misión suya recoger los papeles y devolverlos a su sitio"".

Como ocurría en el Consejo de Castilla, cuando fallecía un Alcalde, Escribano de Cámara, Relator o

"" VARÓN VALLEJO, E., y GONZALEZ PALENCIA, A., op. cit., pág. VIII.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 360.

"" MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", op. cit., pág. 361.

Oficial de Sala, si constaba en el libro de conocimiento que el fallecido habia recibido alguna causa o papeles, el Archivero debia pasar a recogerlos"".

El Gobernador de la Sala conservaba y custodiaba la llave del Archivo secreto, mientras que la del Archivo público era guardada por el Escribano de Cámara Archivero.

""". También estaba previsto que si encontraba alguna dificultad a la hora de recoger estos documentos, debía inmediatamente informar a la Sala para que fueran tomadas las medidas oportunas, siguiendo la práctica que se seguía en el Archivo del Consejo de Castilla (MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", págs. 361 y 362; también lo cita VARÓN VALLEJO, E., y GONZALEZ PALENCIA, A., op. cit., pág. VIII).

BIBLIOTECA DEL CONSEJO

La Biblioteca del Consejo no era propiamente una oficina ni tenía una peculiar entidad dentro del Consejo. De hecho no existía un local exclusivamente destinado a este efecto, pues sus libros estaban distribuidos en estantes por toda la sede del Consejo de Castilla: muchos se hallaban en los armarios o estantes de las Salas de Despacho"" y los demás en otras habitaciones de la Casa de los Consejos o en las Escribanías. Por tanto,

"". Por ejemplo, un expediente fechado en 19 de octubre de 1813 nos informa que por entonces había en la Sala de Justicia un estante con libros, otros dos en la de Provincia, un estante de nogal en la Sala segunda de Gobierno. Otra noticia del mismo expediente nos informa que había en total siete estanterías en las cinco Salas del Consejo. Una relación nos describe los títulos de algunos de los libros existentes en un armario de la Sala primera de Gobierno, ahora pertenecientes al Supremo Tribunal de Justicia: "Solórzano, cinco tomos en pergamino; Partidas de Gregorio López, quatro tomos en pasta; Ordenanzas del Consejo de Indias, un tomo media pasta; Curia Filípica, seis tomos en pasta; Ordenanza General de Intendentes de Indias, un tomo en pasta; Cobarrubias, Recursos de Fuerza, un tomo en pasta; Colón, Juzgados Militares, seis tomos en pasta; Instrucción de Intendentes de Buenos Ayres, un tomo en pasta; Comercio de Bilbao, un tomo en pergamino; Ordenanzas e Instrucción de Intendente de Ejército y Provincia en el Reino de Nueva España, un tomo a la rústica". Aparte de libros, había también en las Salas otros papeles sueltos: "Redactores desde el año de 1811 al presente, Diarios, Gacetas, Procuradores, Concisos y Universal todo en un complejo". (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 25).

al hablar de la Biblioteca nos referimos más bien a la colección de libros del Consejo Real, bajo la responsabilidad y custodia del portero de estrados****.

El Consejo no tenía como hemos apuntado una colección bibliográfica****. Distribuidos entre sus Salas y habitaciones había un cierto número de libros impresos, muchas de ellos obras jurídicas de consulta. Así sabemos que los estantes del Consejo albergaban libros sobre las materias más variopintas, lo que se explica por lo que estaba mandado acerca de los ejemplares que debían ser presentados ante el Consejo para su censura y aprobación. De esta manera, muchas nuevas publicaciones pasaban a engrosar los estantes de sus Salas. Aparte de ello existía al parecer una interesante colección de libros depositados en el Archivo, mandados retirar de la circulación pública por orden del Consejo****.

Desdevises en su estudio sobre el Consejo de Castilla en 1808 dedicó dos páginas a describir las características de esta Biblioteca****. La colección de obras jurídicas del Consejo apenas ocupaba seis pequeños armarios. El libro más antiguo era un ejemplar de las Siete Partidas del año 1555, en cuatro volúmenes****. Según Desdevises, había en 1808 dos obras del siglo XVI, ocho del siglo XVII y un gran número de obras pías**** o de

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3268 expte. núm. 40. En la documentación de esta institución han aparecido escasas referencias a la Biblioteca del Consejo como tal, al número de sus volúmenes o sus visicitudes. En ocasiones incluso esta figura aparecía vinculada a la figura del Archivo del Consejo.

****. No incluimos aquí las encuadernaciones de expedientes y los inventarios.

****. Una noticia de 1787 nos dice que había entonces en el Archivo del Consejo 274 libros (A.H.N., Consejos Suprimidos, Archivo Antiguo del Consejo de Castilla, legajo 17.704).

****. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1808", op. cit., págs. 364 y 365.

****. Todo indica que éstas son las Partidas de Gregorio López, de cuatro tomos en pasta, que se encontraban en un armario de la sala primera de Gobierno en octubre de 1813 (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 51.424 núm. 25).

****. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Le Conseil de Castille en 1808", pág. 364. Desdevises mencionaba algunas otras obras allí conservadas: un "Breviario Romano" de 1782, "La Historia del Martirio del santo Niño de la Guardia" por el padre don Matías, el "Retiro Espiritual de Peñarola" (1787), el

literatura"", muchas de ellas provenientes como apuntábamos de los preceptivos depósitos legales.

El Informe Cortabarría"", del año 1806, demuestra una preocupación del Consejo por formar una buena Biblioteca. Se trataba por un lado de recuperar los libros perdidos y por otro de organizar eficazmente las obras entonces existentes. Para lo primero se tomaron medidas de formación de inventarios de libros entregados en las Escribanías en los últimos diez años y de los entregados con anterioridad a esa fecha, para seguidamente formar inventarios exactos de los existentes"". También habría que buscar un paraje para colocar esta Biblioteca y designar un empleado que se encargase de su custodia y conservación, así como aprobar unas reglas para el funcionamiento de esta institución y el uso de sus libros.

Ya hemos visto que fue encomendada al portero de estrados la responsabilidad de los libros del Consejo y su custodia"". Era también el encargado de las nuevas adquisiciones y era también su misión dotar de obras de consulta a las distintas oficinas del Consejo. Era cometido suyo la custodia de las llaves de las distintas vitrinas de

"Trabajo de los apóstoles en la fundación de la iglesia de Madrid" por Cañaveras (1783), las "Gracias de la gracia, delicadezas espirituales de los santos", de Boneta (1787), el "Directorio Místico" (1791) y el "Directorio Ascético" también de Boneta (1799), el "Sepulcro de las delicias del Mundo" de Puget (1792), y la "Revista Eucarística", publicada en Madrid en 1806 (op. cit. págs. 364 y 365).

"". Señalaba Desdevises entre otras las siguientes: "Aventuras de Telémaco"; "Los Viajes de la Joven Anacharsis a Grecia"; el "Coloquio de los Ruiseñores" (1784); "El Arte de Agradar", de M. Prévost (1787); "La Filosofía por amor" de Tojar (1799); "El Rapto de Proserpina" (1806); o la novela "De la Eufemia o la mujer instruida" (1806). (Mencionados por DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 365, citando A.H.N., Consejos, Junta de Negocios Contenciosos, legajo I).

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Archivo Antigo del Consejos de Castilla, legajo 17.704.

"". Estos inventarios eran actualizados por el portero de estrados, quien debía llevar control de los nuevos volúmenes ingresados en la Biblioteca del Consejo.

"". A.H.N., Consejos, sala de Gobierno, legajo 3268 expte. núm. 40. Los libros del Consejo estaban inventariados. Este inventario lo realizaba el Contador de Penas de Cámara cada vez que un nuevo portero de estrados entraba en su puesto (ver MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 690).

las Salas. Sin embargo, no podemos olvidar que algunos libros no formaban parte propiamente de la Biblioteca sino del Archivo, por lo que aquéllos quedaban bajo la tutela del Archivero del Consejo****.

Muchos libros habían desaparecido bajo la ocupación francesa, en especial los de mayor valor, al parecer por orden del Gobierno intruso. En 1816, por ejemplo, al formarse inventario de los libros existentes en la Escribanía de Gobierno de Pinilla, sólo quedaban tres de los once más frecuentemente consultados en el Consejo. Parece que las secciones de la Biblioteca más dañadas fueron las de las Escribanías, para las que hubo que comprar la mayor parte de los libros de uso común para su despacho****.

Sin embargo, una noticia del año siguiente, 1817, ya nos informa que por aquella época se había mejorado y acondicionado la Biblioteca del Consejo, y proveído de libros a las distintas Escribanías.

Parece sin embargo que la causa principal de la pérdida de libros eran las salidas de obras para su consulta domiciliaria. Con frecuencia Ministros y subalternos del Consejo tomaban prestada una publicación, pero descuidaban posteriormente su retorno****.

Un interesante expediente de la documentación de la Sala de Gobierno del Consejo****, describe con un cierto detalle los libros básicos que eran utilizados en el Consejo Real y sus Escribanías para el despacho de los asuntos, además del precio de muchos de estos libros y las

****. Aquí incluiríamos tanto las encuadernaciones de expedientes como los inventarios y libros de matrícula. Igualmente vemos que eran remitidos al Archivo para su custodia libros retirados de la circulación, ejemplares de los distintos monumentos legislativos que se iban produciendo en España o en el extranjero. También había ejemplares de todas las Ordenes y Reales Cédulas que se expedían, y otras impresiones de interés. En muchos legajos se incluían igualmente volúmenes, como constituciones y reglas de instituciones religiosas, obras remitidas al Consejo para su estudio, etc.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.268 expte. núm. 40.

****. Por ejemplo, señalaba Desdevises que don Luis Pereyra y más tarde don Pedro Flóres recibieron de las Juntas Contenciosas la orden de buscar la devolución de libros que habían sido adquiridos a costa del Consejo (DESDEVISES DU DEZERT, G., op. cit., pág. 365).

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.268 expte. núm. 40.

librerías donde el Consejo de Castilla solía adquirirlos****. Entre tales obras destacaban ya entonces las de Escolano de Arrieta****, Martínez de Salazar**** y varias ediciones de cuerpos legislativos, en especial la Novísima Recopilación. Sabemos que estas obras en 1817 continuaban estando todas ellas a cargo del portero de estrados, y que habitualmente el Consejo tenía varios ejemplares de cada una, en especial los de mayor uso****. Y a través del portero de estrados se encargaba de proveer de ellas a las Escribanías y demás oficinas del Consejo, a

****. He aquí su relación:

LIBRO	PRECIO	LIBRERIA
Novísima Recopilación		
Práctica de Escolano		
Salazar, Noticias del Consejo		
Nomenclator	85 reales	Imprenta Real
Censo Español	51 "	" "
Guías de todos los Estados		" "
Diccionario de Lengua Cast.	126 "	L. Academia
Colección de todas las Reales Cédulas y Circulares de don Santos Sánchez	84 "	
Colección de Providencias sobre Propios y Arbitrios del Reino		L. de Soj6
Diccionario Geográfico Gral. de España	150 "	"
Colección de Providencias sobre consolidación de vales	26 "	L. Arribas

****. ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos: con distinción de los que pertenecen al Consejo pleno, o a cada Sala en particular: y las fórmulas de las cédulas, provisiones y certificaciones respectivas", Madrid 1796, dos tomos.

****. MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Colección de Memorias y Noticias del gobierno general y político del Consejo: lo que observa en el despacho de los negocios que le competen: los que corresponden a cada una de sus salas: regalias, preeminencias y autoridad de este Supremo Tribunal, y las pertenecientes a la sala de Señores Alcaldes de Casa y Corte", Madrid 1764, 740 págs.

****. Los de mayor uso en el Consejo de Castilla eran precisamente los mencionados de Martínez de Salazar, Escolano de Arrieta y la Novísima Recopilación. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.268 expte. núm. 40).

petición de cada una de éstas¹⁰⁰.

¹⁰⁰. Entre la documentación del Consejo de Castilla conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid aparecen hoy en día ejemplares de algunos de estos libros que pertenecieron en su momento a la Biblioteca del Consejo. Un estudio pormenorizado de los ejemplares que han llegado hasta nosotros en esta colección permitirá conocer algún dato más sobre los libros que integraban esta Biblioteca.

VI. PERSONAL RELACIONADO CON LA LABOR
DEL CONSEJO REAL DE CASTILLA

VI. PERSONAL RELACIONADO CON LA LABOR DEL CONSEJO REAL DE CASTILLA

1. Introducción

En este capítulo vamos a analizar algunas profesiones que intervenían directamente en la labor del Consejo de Castilla, aunque no eran propiamente empleados o subalternos de aquel Consejo, y no formaban parte de su estructura orgánica. Concretamente analizaremos las figuras del abogado, el procurador, el receptor y los agentes en Corte.

ABOGADOS DE LOS REALES CONSEJOS

1. Introducción

"O ya se atiende la utilidad del público, o la de los particulares, es evidente la necesidad de los abogados, esto es, de una clase de hombres destinados por su profesión a defender delante de los magistrados el honor, la vida y los intereses de los particulares y del Estado"¹⁻²⁻³.

Los abogados existieron desde los mismos orígenes del Consejo. El desarrollo del procedimiento escrito les había llevado a ser unos simples abogados-consultores, que sólo se pronunciaban sobre la oportunidad de emprender un proceso, aunque también les estaba permitido participar en las sesiones del Supremo Tribunal y tomar la palabra⁴⁻⁵⁻⁶. Incluso parece estaba obligado a asistir a la audiencia cuando se juzgara el proceso en el que había

¹⁻²⁻³ DOU, R.L. de, "Instituciones del Derecho Público General de España, con noticia del particular de Cataluña", tomo III, pág. 8.

⁴⁻⁵⁻⁶ FAYARD, J., "Les membres du Conseil de Castille à l'époque moderne", pág. 28.

aconsejado a las partes¹⁰⁰⁰.

Sin embargo, también podría ser entendido según Desdevises como un consejero oficial, facilitado a ambas partes por la ley y destinado a detener después de los primeros pasos un proceso inútil¹⁰⁰¹.

Ramón Lázaro de Dou describía en sus Instituciones de forma magistral el papel y misión del abogado en el pleito¹⁰⁰²:

"Para vencer en un juicio no basta tener razón: debe probarse. Y el juez ha de desentenderse de todo lo que no conste en autos, como queda dicho en su lugar. Por otra parte es claro que para probar la pretensión no basta saber los hechos, sino entender los que son conducentes para justificarlos y ganar el pleito. El conocimiento de quienes lo son o dejan de serlo depende de la inteligencia del derecho. Todo esto es necesario aun en caso de saber la parte que tiene razón. Y cuando lo duda debe antes de resolverse a poner demanda consultar a un abogado para que le diga si es o no justa su solicitud, de modo que el abogado antes de patrocinar la causa es juez respecto de la parte que le consulta. El público también interesa en que haya esta clase de hombres, no sólo por los abogados fiscales, que deben defender la causa del Estado..., sino también porque no corresponde al decoro de los magistrados...el que se les presente quien no sepa hablar, ni pedir lo mismo a quien tiene derecho, ni moderarse...Interesa también porque de otro modo se atrasaría muchísimo la expedición de los negocios, mientras los magistrados con autos para bien proveer procurarían guiar a buen camino a los pleiteantes desviados, o deshacer los enredos, que causaría la ignorancia de las partes".

Los abogados eran entonces, por tanto, unos expertos en leyes que asesoraban a sus clientes sobre las posibilidades de éxito en un pleito, así como sobre la forma de llevar éste de una forma correcta a buen término.

Los abogados de Madrid constituían un Colegio Profesional, cuyos estatutos habían sido aprobados por auto

¹⁰⁰⁰. DESDEVICES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 303.

¹⁰⁰¹. DESDEVICES DU DEZERT, G., "Institutions", págs. 86 y 87. Los abogados daban sus pareceres sobre la oportunidad de un proceso y firmaban la memoria introductoria de la instancia.

¹⁰⁰². DE DOU, R.L., "Instituciones", tomo III, págs. 8 y 9.

del Consejo de 30 de agosto de 1732^{***}. Todo que quisiera ejercer su profesión en la Villa y Corte debía inscribirse en el Colegio de Abogados de Madrid^{***}.

Los abogados no formaban por tanto parte propiamente de la estructura orgánica del Consejo de Castilla. Eran profesionales colegiados que realizaban un importante papel dentro de los trámites procesales de un pleito ante el Consejo de Castilla. Al igual que los procuradores, no limitaban su ámbito de actuación al Consejo Real, sino que podían actuar también en otros Consejos y tribunales de la Corte.

2. Nombramiento

Los abogados de los Reales Consejos accedían a esta plaza mediante examen realizado en el Consejo en Sala de Gobierno^{***}. Una vez examinados y aprobados, debían jurar su plaza en el Consejo, también en la Sala primera de Gobierno, y a continuación inscribirse en el Colegio de Madrid -si todavía no estaban inscritos- dentro de los ocho días siguientes a su aprobación^{***}.

Durante la estancia del Consejo en Sevilla y Cádiz bajo la ocupación francesa, la incorporación de

^{***}. DESDEVICES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 303. Por el mencionado auto se confirmaron y aprobaron los estatutos formados por el Colegio y Congregación de Abogados de la Corte para su régimen y gobierno (ver Ley I, título XVIII, Libro IV de la Novísima Recopilación, nota 1).

^{***}. Ley III, Título XIX, Libro IV de la Novísima Recopilación. Se admitía por tanto que los abogados recibidos en las Audiencias pasaran a abogados de los Consejos, con el requisito de la inscripción en el Colegio de Madrid.

^{***}. Al Escribano de Cámara más antiguo del Consejo después del de Gobierno le correspondía el despacho de los asuntos correspondientes al examen de abogados, materia por tanto no sujeta al reparto entre los demás Escribanos de Cámara (MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 670).

^{***}. Un ejemplo lo tenemos en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.664 núm.13;

abogados se tuvo que hacer en los Colegios de aquellas dos ciudades"".

Para acceder a la profesión de abogado, según el plan vigente en 1806, debían realizar el alumno los cursos efectivos establecidos para obtener el grado de bachiller en una Universidad española"". La ley establecía también un periodo de prácticas en alguna pasantía, cifrado en cuatro años"". Durante la Guerra y por las especiales circunstancias, fueron abundantes las instancias solicitando dispensa de algún año de estudios o de prácticas para ser recibido de abogado"".

Todo aquel que se hubiera examinado de abogado en alguna chancillería o audiencia y hubiera sido aprobado, podía ser habilitado si lo deseaba para ejercer la abogacía en los Consejos y demás tribunales y juzgados de la Corte. Para ello debía solicitar su incorporación presentando su título con una instancia"".

"". Algunos ejemplos lo tenemos en A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990, expediente núm. 28: "Comunicación de concesión por la suprema Junta Central de incorporación al Colegio de Abogados de Cádiz"; o en el legajo 11.985 núm 19: contiene varias solicitudes de ingreso en el Colegio de Abogados de Sevilla, formalizados ante el Consejo reunido; o en el 11.990 núm. 33: "Expediente de examen de abogado de don José Oller".

"". Así se expresaba el Consejo en su circular de 14 de septiembre de 1802: Los que quieran ser abogados estudien cuatro años las leyes del Reino y después tengan una pasantía en el estudio de algún abogado (A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm 3.946).

"". Ver, por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido, legajo 11.990, núm.19.

"". Ejemplos de dispensas hubo muchos: de dispensa de algún curso por el Consejo de Castilla, en A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.985, expediente núm. 22: solicitud de dispensa por méritos de guerra; de dispensa concedida por las Cortes Generales tras la extinción del Consejo, en el legajo 11.987, núm.37; por el Consejo reunido, en el legajo 11.990, núm. 96; un caso de dispensa de edad tenemos, por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.724 núm. 2.

"". ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real", págs. 676 y 677. La instancia tenía la siguiente forma: M.P.S.N. en nombre de D.N., natural de ..., ante V.A. parezco y digo que mi parte fue examinado y aprobado de abogado por la Real chancillería o audiencia de..., dándole facultad y permiso para usar y ejercer en ella de dicha facultad, como consta de la certificación que exhibe, dada

Si el interesado presentaba título de chancillería no pagaba la media annata, porque ya la había abonado allí. Pero si el título era de una Audiencia, como en ellas no se acostumbraba a pagarlas, debía pagar la media annata ahora aquí"".

Entregada la carta de pago de la media annata en la Escribanía de Cámara, se daba al interesado o al procurador que firmó la instancia una certificación"", bajo recibo.

Parece, por tanto, que lo habitual era que los abogados de los Reales Consejos provinieran de una

por D.N., secretario del Acuerdo de la misma chancillería; y deseando habilitarse para poderla practicar también en los Consejos, tribunales y juzgados de esta Corte, y en los demás de estos Reinos, a V.A. suplico se sirva incorporarle de tal abogado en los Consejos, en la forma ordinaria, que es justicia &c". De esta instancia se daba cuenta en la Sala primera de Gobierno y se acordaba el Decreto correspondiente: "Madrid, a... Hásele por incorporado en los Consejos en la forma ordinaria".

"". Se ponía entonces un papel de aviso, dirigido al Secretario de Hacienda, en la siguiente forma: "D.N., recibido y aprobado de abogado por la Real Audiencia de..., ha sido incorporado de tal en los Reales Consejos, por lo que debe pagar el derecho de la media annata 110 reales y 10 maravedís vellón, de que doy aviso a V.S. para que se sirva dar orden de que se reciban en la Tesorería General, y que de la carta de pago que se diere se tome razón en la Contaduría General de Valores de la Real Hacienda. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid &c. Sr. D.N.". (ESCOLANO DE ARRIETA, P., op. cit., pág. 677).

"". Se expedía en la siguiente forma: "D.N., Secretario de Cámara del rey nuestro señor &, certifico que por N., natural del Reino de..., se ha representado a los Sres. del Consejo que fue recibido de abogado en la Real Chancillería o Audiencia de..., según constaba de la certificación que presentaba, dada por D.N., Secretario del Acuerdo de dicha Real Audiencia, y pidió se le hubiese por incorporado en los Reales Consejos en la forma ordinaria. Y visto por los Sres. del Consejo por decreto que proveyeron en &, hubieron al citado D.N. por incorporado en los Consejos, con calidad de que no abogue en ellos ni en los demás tribunales de esta Corte sin estar recibido en el Colegio de Abogados de ella: y de esta certificación se ha de tomar la razón en la Contaduría General de Vlores de la Real Hacienda, a que está incorporada la media anata, expresando haberse pagado este derecho, con declaración de lo que importare, sin cuya formalidad manadron fuese de ningún valor ni efecto esta certificación. Y para que conste la doy en Madrid, a...&". (ESCOLANO DE ARRIETA, P. op. cit., pág. 677).

chancillería o audiencia. En caso de que no proviniera de tales tribunales, debía entonces el Consejo realizar el correspondiente examen que habitualmente se realizaba en aquéllos.

En provisión del Consejo de Castilla de 12 de julio de 1770 se había mandado que se nombrasen por el Colegio de Abogados de Madrid nueve o seis individuos que alternativamente formasen cada semana los tribunales para recibir abogados, de tal forma que hubiera siempre al menos tres en cada tribunal"". Sabemos también que durante la estancia del Consejo reunido en Sevilla se siguió la práctica de examinar a los candidatos por los tres ministros más modernos del Consejo, asistidos en cada ocasión por uno de los tres Escribanos de Cámara, por turno"". De estos exámenes en el Consejo se conservan abundantes expedientes en el Archivo Histórico Nacional"".

La organización de los exámenes de abogados la realizaba una Comisión del Consejo que tenía el título de Sala de Abogados. Estaba también a su cargo la instrucción de los expedientes hasta la conclusión de los exámenes en el Consejo. Los miembros del Tribunal examinador eran Ministros del Consejo, que se turnaban por antigüedad, de tal manera que todos eran examinadores. Sólo se admitía por turno un examinando.

Sobre el modo de realizarse los exámenes de abogado en el Consejo reunido, sabemos que se nombraba también un tribunal, pero formado por al menos tres abogados de los Reales Consejos, que examinaban a los candidatos sobre temas de Jurisprudencia y práctica jurídica"".

"". Por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Consejo reunido, legajo 12.987 núm. 41.

"". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.991 núm. 0.d.

"". Ver, por ejemplo, el legajo 11.991, núm. 0-d, del Consejo reunido en Sevilla y Cádiz: recoge una colección de expedientes sobre exámenes de abogados en el Consejo. Hay también algún documento curioso, como el de don Anselmo Rodríguez Tejedor, que se autotitula "asesor del Empecinado" y solicita título de abogado tras el correspondiente examen por tres abogados que se comisionen (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.987 núm. 41).

"". Ver, por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido, legajo 11.990 núm. 32 y núm. 33; un ejemplo de examen con tribunal formado con cuatro Abogados de los Reales Consejos lo tenemos en A.H.N., Consejos, Consejo reunido, legajo 11.990 núm. 33. La Guía de Forasteros del año 1812 informaba sobre los abogados residentes en Cádiz aquel año: 10 de ellos pertenecían al Colegio de Madrid y se encontraban

También le era entregado para su estudio un caso real de los vistos por el Consejo****.

Designado el Tribunal, se convocaba la fecha de examen. Previamente debía el examinando hacer en el Consejo un depósito de 1.280 reales, de los que 960 eran para los Ministros examinadores, y lo restante se repartía entre el Escribano****, alguacil -que estaría vigilando las 24 horas del ejercicio escrito- y el portero que hubiera asistido al aspirante****.

Aquel día se le entregaba al candidato un caso real, designado por el Presidente o Decano de la Comisión de Exámenes de Abogados. Era un caso de los vistos habitualmente por el Consejo: tenía que ser de derecho civil, criminal o eclesiástico. Se le daban 24 horas para escribir la demanda, autos y notificaciones hasta la sentencia definitiva o auto correspondiente, y en el caso de ser un caso de segunda instancia, todos los trámites necesarios hasta la confirmación o revocación de la sentencia inferior. Estas diligencias o autos se habían de escribir en el espacio de 24 horas por el examinando, sin comunicación****, en una habitación del Supremo Tribunal y con los libros necesarios para su resolución****.

huídos en Cádiz; 7 habían sido habilitados para ejercer la profesión por el Consejo de Castilla; 53 pertenecían al Colegio de Abogados de Cádiz. A su vez la Guía de Forasteros los clasificaba en Decano, ex-Decanos, abogados de asistencia a las visitas de cárcel por turno de meses y abogados de pobres. (Guía de Forasteros de 1812).

****. Por ejemplo, en el expediente para examen de abogado de don Judas Tadeo Capablanca consta la resolución del Consejo de Castilla en Cádiz por la que se le señalaba "el pleito de don José Muchada del comercio de esta Plaza con don José Rey de la misma vecindad, sobre cobro de cantidad, Cádiz, 3 de noviembre de 1810". (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990 núm. 32).

****. Correspondía a este Escribano establecer los turnos de los Ministros examinadores y llevar en un libro registro de estos turnos; convocar a examen a los candidatos; avisar a los Ministros; etc.

****. Podía proporcionarle luz. lumbre en época de frío, tintero y plumas. No podía recibir por éste u otros servicios cantidad alguna, fuera de los 100 reales que estaban estipulados.

****. El Escribano de examen debía velar por que el aspirante permaneciera incomunicado.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.104, consulta del 10 de enero de 1.831.

Concluido el ejercicio, el examinando era convocado a una sesión con el Tribunal dentro de las siguientes 24 horas: leía el proceso y el Tribunal juzgaba y enviaba al Consejo su dictamen sobre la aptitud del candidato****. Caso de que el dictamen fuera favorable se informaba al Consejo para que mandase expedir el título correspondiente.

De la materia objeto de examen podemos añadir también con Dou que debía ser "acerca de las acciones, demandas, recursos, método y forma de libelar, contextualizar, deducir excepciones, dirigir y substanciar toda clase de juicios, poner acusaciones en los criminales y todo lo conducente a formar concepto de si se hallan instruidos en la práctica, para que quedando habilitados y con la certificación de cuatro años de práctica y con los documentos necesarios, en cuyo número se comprenden sin duda el grado de bachiller, se manden presentar"****.

Muchos abogados fueron examinados por el Gobierno intruso. Tras la restauración, el Consejo estudió la validez de aquellas habilitaciones****.

De 1831 tenemos también un expediente importante. En la Consulta de oficio de 10 de enero de 1831, se estudió el modo de hacer los exámenes de abogado****. Se acordó entonces, a consulta del Consejo, la variación del método de examen: se formaría un Cuaderno de Leyes, con las 83 Leyes de Toro y las principales de los Libros I, II, III, V, X, XI y XII de la Novísima Recopilación. Una vez formado este repertorio, se extraería a suertes una ley, sobre la que el candidato debía disertar por espacio de 25 minutos, exponiendo sus fundamentos y excepciones. Tendría para preparar su disertación un cuarto de hora. Concluida la disertación, sufriría las observaciones y argumentos que cada juez examinador tuviera por oportuno hacerle sobre el

****. Este sistema no tanto probaba unos profundos conocimientos jurídicos, como capacidad de memorizar algún formulario y facilidad y soltura al escribir. Por ello era bastante criticado y fue sometido a estudio por el Consejo en varias ocasiones. Por otro lado, examinaba sobre cometidos que no eran completamente específicos del abogado, ya que incluía diligencias que realizaban los Escribanos y actuaciones que correspondían a los procuradores.

****. DOU, R.L. de, op. cit., pág. 15.

****. Ver A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 5.201, Circular del Consejo de 14 de abril de 1815; también, por ejemplo, Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.128, núm. 14.

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.104, consulta del 10 de enero de 1831.

método, explicación, doctrina y lenguaje usados****.

Realizado el examen y superado éste, se debía jurar ante el Consejo. El juramento se hacía en la Sala primera de Gobierno, donde juraban todos los empleados del Supremo Tribunal. Una vez prestado el juramento, ya se le podía expedir el correspondiente título. Para recibir este título debía presentarse previamente el justificante de haber pagado la media annata****.

En cuanto a la edad para ejercer la abogacía en principio no se requería ni siquiera la mayoría de edad para el ejercicio de la profesión, con tal que precediesen los requisitos expresados. No obstante, menciona Dou una ley que confirma una ley romana, que fijaba la edad mínima en los diecisiete años****.

Fue frecuente también la solicitud de títulos de abogado al Consejo, bien por haberse producido su extravío**** o por no haberse llegado a solicitar en su momento por causas diversas****.

Era competencia también del Consejo todo lo referente a creación de Colegios de Abogados y a su regulación****. Sabemos que por un expediente formado en

***. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.104, consulta del 10 de enero de 1.831. A su resolución, el Rey añadió de su puño y letra: "...y quiero que los grados de Doctor que dan las Universidades no sirvan para recibirle de Abogados; y así lo he mandado".

***. En A.H.N., Consejos, Consejo reunido, legajo 11.997 estaban las Cartas de Pago de medias annatas por la expedición de títulos de abogados y escribanos por el Consejo, durante la Guerra: este expediente falta hoy de su legajo; otro ejemplo lo tenemos en Sala de Gobierno, legajo 3.966 núm. 1: entre otras cosas contiene un cuaderno de pago de medias annatas de abogados y escribanos de los meses de enero y febrero de 1816, y varios cuadernos más del mismo concepto.

***. DOU, R.L. de, "Instituciones", págs 15 y 16: la mencionada ley es la Ley II, Título VI, Parte III de la Nueva Recopilación.

***. Por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido, legajo 11.988 núm. 12; legajo 11.990 núm. 21.

***. Ver al respecto A.H.N., Consejos, Consejo reunido, legajo 11.987, núm. 15.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.651 núm. 12 recoge una solicitud de permiso para erigir el Colegio de Abogados de Badajoz.

1828 se reconoció el derecho de los miembros del Colegio de Abogados de Madrid a tener asientos en todos los tribunales""; en otro se confirma en su puesto al Decano de este Colegio de Abogados""; y en una resolución del Consejo, del año 1826 se estipulaba también que los abogados no exceptuados del indulto debían volver a sus Colegios"".

En cuanto al número de abogados establecidos en la cada Colegio, venía regulado por los propios Estatutos del Colegio, que a su vez eran aprobados también por el Consejo de Castilla"". En ocasiones se podía limitar el número de abogados en un Colegio"" o en todo el Reino, como ocurrió con la Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia del año 1831"", lo que indica que con frecuencia no había numerus clausus en estos Colegios profesionales.

Ya hemos visto como los abogados que estaban acreditados en las diversas audiencias y chancillerías podían desempeñar su oficio en el Consejo de Castilla, pero cumpliendo la condición de inscribirse en el Colegio de Abogados de Madrid"". También hubo de ocuparse el Consejo en varias ocasiones del ejercicio de la profesión por los abogados que se vieron obligados a volver de América tras la Emancipación. En consulta de oficio de 24 de septiembre de 1831 aprobó unas reglas para que aquellos abogados pudieran ejercer su profesión en España"".

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.763, expediente núm. 26.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.621, núm. 4; también sobre el Colegio de Abogados de Madrid, el legajo 3.266 núm. 6.

"". A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.724, expediente núm. 3.

"". En A.H.N., Consejos, Consejo reunido, legajo 12.001, expediente núm. 27 se incluyen los Estatutos del Colegio de Abogados de Cádiz, vigentes desde el 2 de julio de 1790 y durante toda la estancia del Consejo de Castilla y del Consejo reunido en la ciudad gaditana.

"". Ver A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.993, expediente núm. 13.

"". A.H.N., Consultas del oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.105, consulta del 31 de agosto de 1831.

"". DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 303.

"". A.H.N., Consejos, Consultas de oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.106, consulta del 24 de septiembre de 1831; también sobre este tema Sala de Gobierno, legajo 3.887,

También hubo una consulta del Consejo de Castilla, de diciembre de 1826, acerca de si entre otros, los que fueron milicianos voluntarios podían recibirse de abogados, etc. El Consejo de Ministros estudió esta consulta en su sesión de 29 de diciembre de 1826 y acordó proponer al Rey que aprobase la consulta del Consejo de Castilla^{***}.

3. Competencias

A lo largo de la exposición han ido apareciendo diversos cometidos de los Abogados de los Consejos. Era su misión esencialmente -veíamos- asesorar al cliente a lo largo de un proceso. Veíamos también cómo esa misión venía respaldada por la ley, haciendo de él un elemento y requisito para la eficacia y validez del proceso: toda instancia o demanda presentada en el Consejo debía venir siempre firmada por un abogado, como garantía de legalidad de ese proceso.

Es cierto que el papel del abogado era con frecuencia pasivo dentro de un proceso. Sin embargo, también veíamos cómo un abogado tenía potestad para acompañar a su cliente a la audiencia del Consejo, -en ocasiones incluso era preceptivo-, y allí se le permitía intervenir y dar explicaciones verbales, e incluso discutir, aunque no hasta llegar a hacer una defensa legal del pleito. Estaban presentes durante la lectura de la demanda de su cliente, hecha por el Escribano de Cámara, y la de la memoria del Relator, y podían realizar aclaraciones o bien asesorar al cliente durante la vista. Sabemos también que los abogados y relatores informaban al Consejo permaneciendo de pie sólo en las Salas primera y segunda de Gobierno, y que en las demás salas lo hacían sentados^{***}.

La actuación del abogado, por tanto, era fundamental dentro del engranaje de nuestros tribunales y

expediente núm. 11.

^{***}. Actas del Consejo de Ministros. Fernando VII. Tomo II (1826 y 1827). Sesiones del 27 y 29 de diciembre de 1826, págs. respectivamente 82; y 85 y 86.

^{***}. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 2.

también dentro del Consejo de Castilla, y su labor requería para ello una especial cualificación. Así nos describe Dou el papel de los abogados en un pleito:

"Ellos son los prudentes que antes de llegar las causas a los tribunales, deben sentenciarlas a los particulares, desengañándolos de sus prejuicios y pasiones. Ellos han de ser sabios para conocer el derecho, moderados para no excederse, elocuentes para hacer triunfar la buena causa, cautos y avispados para no dejarse sorprender y, en fin, ellos son los órganos y la voz que, supliendo la ignorancia y defectos de otros, han de llevar al Rey y a los que en su nombre están sentados en el trono de la justicia, las súplicas de los pueblos"****.

Sobre la actuación de los abogados añadía Dou las siguientes reglas: no podían defender causas injustas ni ejercer la profesión cuando sus parientes fueran jueces o escribanos de la causa; no debían aconsejar a partes opuestas ni enredar con incidentes o detener con largas el curso del pleito para cansar y fatigar a las partes; desde el principio de la causa debían estar perfectamente instruidos del Derecho relativo a ella, y debían ser elocuentes, atentos y moderados sin abandonar la causa; un buen abogado debería saber hablar y escribir con propiedad, método, concisión, energía y elocuencia; debían también en sus escritos e informes guardar la urbanidad debida a la parte con quien se litigaba y al juez a quien se hablaba; debían guardar secreto de oficio y absoluta fidelidad a su cliente, y procurar su bien buscando la prontitud del despacho, y proporcionando a su cliente tutela y protección****.

Ya vimos en su capítulo correspondiente cómo había profesiones -como las de Fiscal o de Agente Fiscal del Consejo- que llevaban anejas la incompatibilidad para el ejercicio de la abogacía. Para la profesión de Agente Fiscal vimos también en su momento cómo era uno de los requisitos de acceso el ser letrado****.

Anualmente el Consejo proponía a uno o más de los abogados del Colegio de Madrid, como abogados de pobres

****. DOU, R.L. de, "Instituciones", págs. 9 y 10.

****. DOU, R.L. de, "Instituciones", tomo III, págs. 16-20.

****. Vid., por ejemplo, el edicto de convocatoria de plaza de Agente Fiscal de 26 de mayo de 1815 (A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.972, núm. 13).

o letrados de pobres""'. Parece que éstos pudieron incluso llegar a formar una clase o categoría dentro de los abogados de la Corte""'. Eran retribuidos directamente por el Rey y su misión consistía en asistir y asesorar a los litigantes pobres""'. La ley exigía que los letrados de pobres de la Corte residieran aquí, y que no se ausentaran salvo real permiso o por razón de una comisión que les fuera encomendada. La ausencia prolongada sería causa de sustitución en el empleo""'.

En general, da la impresión que cualquier abogado estaba obligado a llevar personalmente y con plena profesionalidad una causa de pobres si su cliente acreditaba esta condición. En este sentido parecía responder una circular del Consejo expedida el 4 de noviembre del año 1800: "Los letrados como los demás curiales, se encarguen de promover la justicia en las causas de oficio, trabajando en ellas sin interés alguno cuando los reos no puedan satisfacer sus honorarios""'.

Instancias solicitando abogado de pobres al Consejo de Castilla eran relativamente frecuentes, según se desprende de la documentación del Supremo Tribunal""'.

Concluimos este capítulo de competencias con otra definición de la misión del abogado, esta vez recogida de una consulta de oficio del propio Consejo Real, de fecha 9 de junio de 1815: "En éstos (los abogados) se halla la defensa del inocente y los conocimientos del derecho que a cada uno corresponden según nuestras leyes""'.

""'. Ver, por ejemplo, A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.789, expediente núm. 1.

""'. Cfr. Guía de Forasteros de 1812, Biblioteca del Congreso de los Diputados. No sabemos si un abogado de pobres tenía dedicación exclusiva a este menester, aunque probablemente no fue así, asemejándose a los modernos turnos de oficio de los colegios de abogados españoles.

""'. DESDEVISES DU DEZERT, G, "Institutions", pág. 87.

""'. Libro IV, Título XVIII, Ley II de la Novísima Recopilación.

""'. A.H.N., MORENO GARBAYO, N., "Colección de Reales Cédulas del A.H.N.", núm. 3.771.

""'. Por ejemplo, podemos ver un caso en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.395 núm. 8; otro en el legajo 3.789 núm. 1.

""'. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.074, consulta del 9 de junio de 1815.



BIBLIOTECA
DE DERECHO

4. Retribución

Así se refería Dou al derecho de una retribución justa que correspondía a los abogados: "Los que trabajan son dignos de remuneración, y es justo que se la dé el público, cuando se sirve inmediatamente a él, y los particulares, cuando a éstos redunda casi todo el fruto del particular servicio. Con esto se ve también que no deben los abogados desmerecer nada por recibir el premio u honorario"".

El abogado tenía derecho a la percepción de una cantidad por los servicios prestados a su cliente, con independencia del resultado del proceso. El cobro de sus honorarios era fijado al principio de la asistencia, de mutuo acuerdo entre abogado y cliente. También cabía que el magistrado de la causa fuera el que fijara la cantidad justa por los servicios prestados.

En el caso de condena a costas a una de las partes, ésta se encontraba obligada a satisfacer al abogado de la parte vencedora los honorarios que le correspondían, según costumbre inmemorial de nuestro Derecho"".

Un abogado de los Consejos, por tanto, no recibía un sueldo fijo, sino que los honorarios de un caso dependían de las características y magnitud del servicio prestado"".

En algunos casos los abogados debían asesorar

"" DOU, R.L. de, "Instituciones", tomo III, pág. 10.

"" DOU, R.L. de, "Instituciones", tomo III, págs. 11 y 12.

"" Sabemos que en algunos Colegios de Abogados existía la figura de abogado titular, que recibía al menos una dotación fija. Así los abogados gaditanos don Juan Pedro Morales y don Laureano José Donado recibían por este concepto al parecer hasta 800 ducados anuales cada uno en julio de 1811 (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.001, expediente núm. 79).

y defender gratuitamente a sus clientes, en caso de pobreza***. Como hemos visto, en todas las chancillerías y audiencias y también en la Corte había abogados de pobres, para este menester, y que recibían sus honorarios directamente del Rey, probablemente en función del número de casos llevados.

***. Otro expediente sobre abogados de pobres lo encontramos en A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.789 núm. 1.

PROCURADORES DE LOS REALES CONSEJOS

1. Introducción

"El Número de Procuradores de los Consejos se compone de cuarenta y ocho, y estos oficios, como enajenados de la Corona, pertenecen a varias personas y para la servidumbre se despachan los títulos por la Secretaría de la Cámara, y para el ejercicio juran en el Consejo en la Sala primera de Gobierno. Tienen sus mesas y asistencia diaria en el mismo Consejo, para estar puntuales cuando se les llama por los porteros para presenciar la vista de los pleitos y expedientes que defienden. Y deben concurrir a primera hora de la Audiencia para entregar y hacer se repartan los pedimentos y nuevas demandas que hubiesen de presentar"".

Los procuradores de los Consejos formaban un colegio o corporación que regulaba el ejercicio de este oficio. Al igual que existían colegios de procuradores para ciudades con Chancillería o Audicencia, Madrid contaba con un colegio específico para los procuradores de los Reales Consejos"". El número de sus miembros era limitado y el

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 721.

"" Existía también una Hermandad de Procuradores del Número de la Corte y de los Reales Consejos, conocida como "Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora la Virgen María", sita en el convento de Santo Tomás de la Villa y Corte. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.761,

Colegio regulaba su acceso. Estaban fijados en 48 los miembros de esta Corporación o Colegio -entendido este número como el máximo permitido- aunque en la práctica el número de miembros solía ser menor y variaba según las épocas****.

Las razones que justifican la existencia de estos empleados públicos son fáciles de entender. De esta manera nos explica Dou su necesidad y utilidad: Los particulares interesados en una causa no sabrían "fácilmente moderarse para pedir con el respeto debido, ni acertarían a seguir el orden judicial con todas las formalidades y pasos indispensables en los procedimientos de un juicio, fuera de que las partes no están siempre en el lugar del juzgado. Los abogados son para defender a la parte, pero no para representar su persona, ni para dar los pasos que a la misma corresponden, compareciendo con la demanda ante el juez, presentando testigos, instando el despacho y practicando las diligencias conducentes para su solicitud. De este trabajo alivian a las partes los procuradores para pleitos"****.

Los procuradores de los Reales Consejos, como hemos visto, servían fundamentalmente en los Consejos, pero también en Juntas, Sala de Alcaldes y otros juzgados y tribunales de la Corte****.

Como representantes de las personas se constituían en dueños y principales directores de los

núm. 18: contiene unas Ordenanzas de esta Hermandad, fechadas en 1716).

****. Veamos dos ejemplos de esto cronológicamente cercanos: el 18 de julio de 1823 el Colegio de Procuradores de los Reales Consejos contaba con 40 miembros (A.H.N., Sala de Gobierno, legajo 3.608, expediente núm. 9); unos meses después, 11 de noviembre de 1824, eran 33 miembros de esta Corporación (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.667, expediente núm. 14).

****. DOU Y BASSOLS, R.L. de, "Instituciones del Derecho Público General de España", tomo III, pág. 20.

****. Así los menciona Martínez de Salazar: "en el Consejo Real, en el de Guerra, Inquisición, Indias, Ordenes y Hacienda, tribunales de la Nunciatura, el de la Asamblea, Junta de Obras y Bosques, la de Incorporación, la de Comercio, Tabaco, Viudedades y demás establecidas por S.M.; asimismo actúan en los negocios que se ofrecen en la Sala de Señores Alcaldes de Corte y oficios de escribanos de provincia, en el Real Bureo y ante los señores ministros, asesores de las Reales Caballerizas, Comisaría General de la Santa Cruzada y en los demás Juzgados que por S.M. se establecen, y comisiones que confiere a ministros superiores..." (MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 721).

pleitos -según apelativo de Martínez de Salazar-, y como tales eran "citadores y agentes de todos los pleitos, causas y negocios en que actuaban"****. Para el ejercicio de sus funciones contaban además con locales y mesas al efecto dispuestas en el Consejo.

Hemos de indicar también que los procuradores no formaban parte del Consejo propiamente, ni pertenecían a su estructura orgánica. Eran tan sólo empleados públicos que ejercían sus cometidos en los Tribunales de la Corte y Reales Consejos. Por tanto, no había propiamente procuradores del Consejo de Castilla, aunque el papel fundamental de estos procuradores hacía, como hemos visto, que tuvieran mesas reservadas en las oficinas del Consejo y que el Supremo Tribunal velara por el cumplimiento exacto de sus cometidos.

Concluimos esta breve introducción recogiendo una precisa definición de los procuradores que nos dio Ramón Lázaro de Dou: "personas públicas y públicamente autorizadas para en nombre y con mandato de otros comparecer en juicio y estar a derecho y juzgado"*****.

2. Nombramiento y Juramento. Su número.

El acceso al Cuerpo de Procuradores de los Reales Consejos se hacía mediante la correspondiente solicitud y el Real nombramiento por S.M.****. No se accedía por tanto a este Cuerpo mediante un examen, como si ocurría en el caso de los procuradores de las Chancillerías y Audiencias, sino simplemente se presentaba la correspondiente solicitud o habilitación y el Consejo elegía a los candidatos más idóneos. Los candidatos debían ser previamente procuradores de algún colegio de procuradores español, lo que explica que no hubiera examen de admisión y que una vez admitidos ingresasen tras haber prestado el

****. A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 2.879, expte. núm. 3.

****. DOU, R.L. de, "Instituciones", tomo III, pág. 20.

****. Tenemos un ejemplo de expediente sobre habilitación de un procurador de los Reales Consejos en A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 2.689, expediente núm. 4.

correspondiente juramento.

Inicialmente debía jurar su plaza en Junta General del Número de Procuradores de la Corte y Reales Consejos. Prestado el juramento, obtenía el título de S.M. de procurador de número de la Corte y Reales Consejos. A partir de ahí ya podía acudir al Consejo, para mediante nuevo juramento -el llamado juramento de estilo, distinto del que hizo ante el Número de Procuradores- entrar en posesión de su oficio"".

Los procuradores generalmente prestaban juramento en el Consejo en la Sala primera de Gobierno. Para entrar a jurar se les exigía una serie de documentos: el Real Título, la correspondiente licencia del Gobernador y certificaciones de todas las Escribanías de Cámara del Consejo de estar al corriente el oficio para el que era nombrado el interesado en la devolución de los autos por el antecesor sirviente.

Para sacar el Real Título debían presentar los demás documentos citados en la Secretaría de la Cámara. Presentada esta documentación, aquella Secretaría les despachaba su Real Título"". De esta manera eran admitidos a jurar sin más requisitos y con el juramento entraban en posesión de su oficio"". Tampoco se les exigía justificar el previo juramento de acceso en el Colegio de

"" A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.602, expediente núm. 41.

"". Un caso excepcional lo tenemos en aquellos procuradores habilitados por el Consejo de Castilla o el Consejo reunido en Sevilla o Cádiz. Algunos, como don José María de Rojas y don Lorenzo Cisneros fueron habilitados de procuradores, con la calidad de por ahora, pero sin título. Estuvieron ejerciendo el oficio de tales en los Tribunales Superiores de Sevilla y Cádiz durante la Guerra y recibieron la habilitación también del Consejo reunido. En 1814 solicitaron se les admitiese jurar en el Supremo Tribunal de Justicia, donde hubo cierta oposición a sus pretensiones por no ser propiamente procuradores de la Corte y Consejos (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.021, expediente núm. 16). También hubo algún caso en que se solicitó que las habilitaciones de procurador concedidas en Sevilla y Cádiz por el Consejo reunido se entendiesen extensivas también para los demás Tribunales de la Corte (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.021, expediente núm. 1).

"". Un expediente sobre el juramento como procurador de los Reales Consejos lo tenemos, por ejemplo, en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.021 núm. 43.

Procuradores"".

Las leyes exigían que aquéllos que accedieran a estas plazas gozaran de la cualificación y pericia necesaria para su buen desempeño. Los que ejerciesen este destino debían ser expertos en leyes y buenos conocedores de la práctica de los tribunales, como refería Martínez de Salazar"".

Aparte de otros requisitos intelectuales y morales, que nos refiere también Martínez de Salazar "", Dou añadía también un requisito general de edad: debían ser mayores de 25 años"".

Concluimos este apartado relativo a la designación y número de los procuradores mencionando algunas noticias históricas de este Cuerpo bajo el reinado de Fernando VII. Del periodo de la Guerra, las principales noticias hacen referencia a las solicitudes de aumentos de derechos por parte del Número de Procuradores. Estas solicitudes se presentaron tanto en el Consejo de Castilla"" como ante el Consejo reunido. También en esta época encontramos alguna solicitud de purificación, como la presentada por los procuradores don Diego García Tobra y don Tomás Casado, solicitando se concluyese la purificación de sus conductas para que se les permitiese venir a la Corte a ejercer sus destinos en el Consejo (Sevilla, 20 de

""", A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.761, expediente núm. 9.

""", "Es medio para obtener la justicia la buena conducta y dirección de los procuradores en formalizar las pretensiones y demandas con arreglo a las razones que estimulan a introducir los recursos, y ante todas cosas el procurador se debe hacer cargo de la justicia que asiste a las partes, informándose de sus abogados, para quedar asegurado en ambos fueros, y no faltar al cumplimiento de su encargo; porque si en el introducir las demandas o recursos se procediese con ligereza y sin el conocimiento que este caso pide, en lugar de defender a las partes se las perjudicaría" (MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 722).

""", Debían ser "inteligentes, íntegros, legales, solícitos y vigilantes, para que por impericia, omisión o descuido no se oscurezca la razón y justicia de los litigantes, ni se les originen malos sucesos y extorsiones" (MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 722).

""", DOU, R.L. de, "Instituciones", tomo III, pág. 22.

""". Por ejemplo, la solicitud de los procuradores de número de Cádiz de 23 de agosto de 1811 (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990, expediente núm. 38).

septiembre de 1809)"".

Más adelante, tras la restauración del Consejo,, una Orden de 31 de mayo de 1814 mandaba que los Procuradores de los Consejos entregasen los autos que tenían tomados al tiempo de la invasión francesa de las respectivas Escribanías de Cámara y de Gobierno de Castilla y Aragón; y que igualmente formasen inventarios de los documentos que faltasen"".

El Consejo de Castilla, a resultas de la lentitud con que los procuradores de los Reales Consejos iban acudiendo a él para su purificación, dictó el 20 de septiembre de 1823 el siguiente Decreto:

"Dése Orden al número de los Procuradores por el conducto de su Decano, para que les haga saber que en el preciso y perentorio término de 8 días ocurran a este Supremo Tribunal los que no lo hubieren ejecutado en solicitud de su purificación como está mandado, en inteligencia de que transcurrido dicho término, el que o los que no lo hubieren verificado, quedarán en el mismo hecho suspensos en el uso y ejercicio de sus respectivos oficios"."".

La documentación del Archivo Histórico Nacional contiene buen número de solicitudes y expedientes relativos a estas purificaciones"". El 18 de julio de 1823 eran 39 los miembros de este Número, siendo tan sólo 33 el 10 de noviembre del año siguiente"".

"" A.H.N., Estado, legajo 28.A, núms. 35-53.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026, expediente núm. 47.

"" A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608, expediente núm. 9.

"" Están contenidas en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 4.040, expediente núm. 9: "Expediente General de Purificaciones del Consejo".

"" Me aquí, por ejemplo, la lista de Procuradores que componían el Número de los Procuradores de los Reales Consejos el 18 de julio de 1823, por el orden de su antigüedad: don Domingo González Espinosa, don Ventura González, don Felipe Santiago Gallo, don Esteban Peirón Merino, don José Ferné de Caso, don Vicente Trancho Gutiérrez, don Fermín Antonio Lumbrero, don José Antonio Díaz, don Félix García Alvarez, don Santos del Molino, don Benigno Mariano Santos, don Tomás Antonio Portocarrero, don Lázaro de Soto, don Baltasar Martínez de Ariza, don José Charco Gutiérrez, don Estanislao Godino y Muñoz, don Francisco Florez, don Juan de Dios Briebea, don Tomás de Casado, don Ramón Fernández, don

3. Competencias

Los procuradores debían asistir diariamente al Consejo, a sus respectivas mesas o en las antesalas del Supremo Tribunal en las tres horas de audiencia, aunque no tuvieran señalado pleito para su vista en ese día^{***}. Solamente podían dejar de asistir cuando tuvieran pleito señalado en alguno de los otros Consejos, o en la Sala de Alcaldes. En estos casos, su escribiente debía permanecer en la mesa las tres horas de audiencia para dar razón al Tribunal de dónde se hallaba el procurador^{****}.

Sin embargo, parece que los procuradores tenían problemas para cumplir este horario. En 1824 se planteó un pequeño conflicto con el Número de Procuradores en razón de este horario de trabajo de los procuradores. Por un oficio del Gobernador del Consejo de fecha 4 de noviembre, los procuradores fueron avisados bajo multa del

José María de Chozas, don José Menesa, don Lorenzo Cisneros y Toledo, don Policarpo Vela (ausente), don Nicolás Martínez Ambite, don Saturnino González, don José Hurtado de Jaracho, don Damián Isán y Hugarte, don Francisco López Muñoz, don Manuel de San Millán, don Andrés Gutiérrez, don Matías Martínez de Rivavellosa, don Sebastián Ortiz de Lanzaagorta, don Sinfoniano de Bartolomé Barona, don José Raimundo de Nágera, don Mauricio José de los Mártires, don Lázaro Ramírez de Arellano, don Cayetano Salbani, don José García Tovar. Se hallaban ausentes nueve oficios. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608, expediente núm.9).

^{***}. Debían estar en sus mesas desde primera hora de la mañana cuando se reunía el Supremo Tribunal, sin que pudieran salir o retirarse hasta que lo hiciera el Consejo: es decir, debían estar al menos las tres horas del Tribunal.

^{****}. Para avisarle en su caso para realizar alguna notificación u otra diligencia urgente, para evitar todo perjuicio a las partes litigantes.

preceptivo cumplimiento del horario fijado"".

El 20 de noviembre contestaba el Número de Procuradores, señalando cómo era casi imposible la observancia de esta Real Orden, sin al menos causar perjuicios a tercero, y sin que los procuradores faltasen al cumplimiento de sus obligaciones y desempeño de su oficio en los demás Consejos Supremos, Juntas, Sala de Alcaldes, Juzgados y Comisiones de la Corte, en donde actuaban conforme a sus títulos. Continuaban así los procuradores su escrito:

"El día que no tienen señalado pleito en el Consejo de Castilla nada hacen ni adelantan en los asuntos aunque concurran desde la primera hora de tribunal, porque bien es sabido que hasta la última no se les notifica las providencias a no ser una cosa extraordinaria, ni aún los apremios para la vuelta de autos, porque hasta aquella misma hora en ningún tribunal ni juzgado se rubrican aquéllas, y así es que tienen que estarse los procuradores muchos días hasta la una para recibirlas, después de la salida del Consejo, siendo no menos cierto que antes de bajar y ponerse en sus mesas tienen necesidad forzosa de recorrer los Abogados, Escribanías, juzgados y Agentes Fiscales para recoger los pleitos y hacer las demás diligencias anejas a su oficio, cosas que no pueden ejecutar en las horas restantes del día y de la noche. Y he aquí por qué se dijo al principio que causaba perjuicio a tercero y aún retrasaba el cumplimiento de sus obligaciones. Justo es el día que tengan vista de pleito u otra diligencia personal en el Consejo Supremo de Castilla, la prefieran al de cualquier otro y concurran desde primera hora, y esto mismo es lo que acordó en otra época el mismo Tribunal y mandó que concurriesen a las 11:00, esto es, a última hora, y que en las anteriores estuviese el escribiente en la mesa para sentar en el libro las notificaciones que hubiese, y de este modo quedan removidos todos los obstáculos sin causar perjuicio alguno y los individuos del número expeditos para

.... "He observado por mismo y además se me ha dicho también que los procuradores del Consejo no asisten en aquellas horas que deben hacerlo y son cuando menos las mismas en que se halla reunido el Tribunal, y como tengo presente que no es esta la primera vez que se les ha advertido el descuido, prevengo a Vm disponga u intime a todos que deben concurrir a sus puestos o mesas desde la primera hora en que se reúne el Consejo y que no podrán salir o separarse hasta que lo haga el Tribunal, advertidos todos que la primera falta que cometan será castigada con la multa de 25 ducados y que a la segunda serán suspendidos del oficio. Hágalo Vm así y avisese de la ejecución diciendo nominalmente los individuos procuradores a quienes haya notificado esta mi disposición. Dios guarde a Vm muchos años.(...) Madrid, 4 de noviembre de 1824." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.668 núm. 14).

desempeñar las obligaciones en que por sus oficios se hallan constituidos en todos los demás tribunales y cargos anejos a él"****.

A la vista de esta representación, el Consejo estableció el horario de asistencia de los procuradores desde 10:30 de la mañana hasta después de la salida del Consejo.

Por Decreto del Consejo de 23 de septiembre de 1828 se dispuso también que los procuradores de número cuando acudiesen a las Salas de Mil y Quinientas y de Justicia debían concurrir a las mismas, cualquiera que fuera el motivo, en traje de ceremonia****.

Hemos visto que en el Consejo cada procurador tenía una mesa de trabajo, donde podían acudir los clientes. Es posible también que en cada Escribanía hubiera también mesas para los procuradores, lo que era corriente al menos en las escribanías de provincia.

Por lo demás, las funciones de un procurador se concretaban en representar a sus clientes y seguir el desarrollo del proceso hasta su final conclusión. De cada pleito debían constituir un dossier que presentaban al Escribano correspondiente****. Debían estar al tanto de todos los autos y acuerdos del Consejo, e informar a sus clientes de la marcha del proceso, así como prestarle asesoramiento y consejo****.

Un informe del Juez de Ministros de 2 de diciembre de 1815, relativo al nuevo arancel de los procuradores, no facilita con algún detalle las operaciones en que solían intervenir estos oficiales públicos****:

***. A.H.N., Consejos, Gobierno, legajo 3.668, expediente núm. 14.

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.761, expediente núm. 9.

***. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 87.

***. El auto acordado del Consejo de 24 de noviembre de 1783, mandaba que dentro del día en que se rubricasen los autos y acuerdos del Consejo, los pasasen los Relatores con sus respectivos expedientes, a la Escribanía de Cámara, y que los Escribanos de Cámara cuidasen de que se notificasen a los procuradores (A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 2.728).

***. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148, expediente núm. 8. También nos es útil al caso el antiguo arancel de procuradores, aprobado el 15 de octubre de 1.790 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879 núm. 3).

1. aceptación de poderes, que había de poner el procurador con fecha del día en que lo ejecutaba y lugar donde había de ser presentado;

2. elaboración de memoriales a la Real Cámara: con vista y presentación de documentos en aquel Tribunal, en solicitud de Reales facultades, expedición de títulos enajenados, aprobación de concordias, ventas, dispensaciones;

3. peticiones de hecho: con presentación de documentos para aprobaciones, nombramientos y examen de Escribanos, despachos para remisión de autos o con inserción de la ley, venias, emancipaciones, facilidades, rompimientos, provisiones ordinarias, grados de segunda suplicación, recursos de notoria injusticia y otros de iguales circunstancia. Una noticia de 1828 nos informa que por aquel entonces se había generalizado la corruptela de que fueran realizados peticiones o presentados documentos en el Consejo con el nombre de algún procurador, pero con la firma de otros compañeros suyos. El Consejo^{****}, por decreto de 24 de marzo de 1831 mandaba que fuera suprimida tal práctica mientras no se acreditase la habilitación o sustitución general, según estaba previsto en el artículo 20 de las Ordenanzas del Número de Procuradores^{****}.

4. peticiones de substanciación, de mostarse parte, contradicción, apremios, término, prórrogación, señalamientos y demás en todos los juicios ejecutivos, ordinarios, civiles y criminales, de testamentarias y concursos, los que forman para pase de bulas o rescriptos de la Corte de Roma, y para nombramiento de tasadores;

5. recibir autos o expedientes y tomarlos en las Escribanías; así como pasar autos o expedientes al letrado, recogerlos de éste y devolverlos a la Escribanía; e igualmente recoger certificaciones, testimonios, supletorias, requisitorias o compulsas;

6. avisar a la parte y letrado los señalamientos de día para la vista de los pleitos, suspensiones de aquéllas, términos de pruebas y sentencias definitivas e interlocutorios;

7. firma de demandas, de los alegatos, recursos y conclusiones;

8. expedir recibos de despachos, certificaciones, requisitorias, súplicas, mandamientos

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.861 núm. 40.

****. Hay un ejemplar de estas Ordenanzas en A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.861 núm. 40.

compulsorios, testimonios o ejecutorias;

9. asistencia a cotejos, formación de inventarios, tasación de bienes, reconocimientos de libros y pagarés, y demás diligencias;

10. asistencia a juramentos de testigos; presentación de testigos para las probanzas y justificaciones de sus partes;

11. asistencia a las vistas de pleitos o de expedientes;

12. aceptaciones de curadurías, nombramientos de tasadores y peritos;

13. aceptaciones de defensorías de menores o ausentes; obligación o fianza de ellos, asistencia a inventarios, tasaciones de bienes, reconocimiento de libros y papeles y demás;

14. consentimientos de particiones;

15. intervención ante prisiones por apremio.

Dou mencionaba otras prescripciones o prohibiciones en que incurrían los procuradores en su actuación; no podía ser procurador el padre, hijo, hermano ni el cuñado del escribano ante el que pendía el pleito o el expediente; no podían los procuradores presentar pedimento sin poder dado por bastante y petición firmada de abogado; sólo podían dar por sí peticiones cortas que sirvieran únicamente para sustanciar el pleito; no podían hacer ajuste de seguir los pleitos a su costa por cierta suma; no se podían concertar con los abogados. Las leyes prohibían el pacto de quota litis con las partes a abogados y procuradores; los procuradores debían dar recibo de los procesos que tomaren contando las hojas"".

A estas prescripciones o prohibiciones añadía Dou el deber de guardar secreto, solicitud y fidelidad a favor de las partes"".

"" DOU, R.L. de, "Instituciones del Derecho Público General de España", tomo III, pág. 22. Añadía también Dou la siguiente consideración: "Las que he referido, aunque prescritas a los procuradores de las Audiencias, Chancillerías y Consejos, se fundan todas o casi todas en principios de una equidad, que puede entenderse común y general a los procuradores de todos los tribunales".

"" "Es propio también y común a todo procurador una solicitud continua en no malograr los términos concedidos, en velar continuamente sobre los procedimientos de la causa y formalidades del juicio, instando el despacho, guardando

Sabemos también que en 1814, todos los procuradores que lo eran de la Corte fueron recibidos también en el Tribunal Supremo de Justicia. En el Reglamento de aquel año se les exigía tener tres libros: un Libro de Poderes y Cuentas, donde anotaban los poderes que se diesen, así como otros datos identificadores del poderdante, y junto a cada anotación la cuenta de cada interesado; un Libro de Notificaciones, donde se asentaban las que se hacían; y un Libro de Conocimientos, donde se registraban las entregas de procesos por los abogados"".

Por su parte, Martínez de Salazar, en sus "Noticias del Consejo", mencionaba otras obligaciones y deberes de estos profesionales, entre los que cabe destacar los siguientes: los procuradores no se podían concertar con los receptores ni con las partes para abreviar o alargar las conclusiones, ni recibir interés por esta razón; debían entregar puntualmente a los abogados las escrituras y documentos que las partes les remitiesen, y del dinero que recibiesen debían satisfacer los derechos que los mismos abogados devengasen; no debían firmar peticiones de alegación, sin que lo hicieran también los letrados; si en alguna Sala del Consejo se denegase la pretensión que introdujeran, no podían acudir a otra Sala distinta a pedir lo mismo; no podían entregar los procesos y documentos para hacer relación y conseguir provisiones a otro Relator que aquel a quien estuviese encomendado el pleito; debían servir sus oficios personalmente; si se denegaba una pretensión en una Escribanía de Cámara del Consejo, los procuradores no podían presentar la misma pretensión en otra Escribanía de Cámara; e igualmente para la presentación de súplica sobre lo proveído; el poder general para la defensa de todos los pleitos no bastaba para proponer todo género de demandas ni para contestarlas, porque era necesario especial poder para introducir los grados de segunda suplicación con las mil quinientas doblas; lo mismo para los recursos de fuerza, demandas de nuevos diezmos, retenciones de bulas, demandas de capítulos y asuntos semejantes. No bastaba tampoco presentar testimonio de los mismos poderes, porque había de

el secreto y fidelidad a sus principales, y finalmente en no excederse de las facultades del mandato, ni en faltar a lo que él prescribe" (DOU, R.L. de, tomo III, "Instituciones", pág. 23).

"".. MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", págs. 540 y 541. Estos tres libros debían tener la primera y la última hoja de papel del sello correspondiente, y debían estar rubricados los dos primeros por el ministro más moderno del Tribunal. Los llamados "Libros de conocimiento", expedidos por las Escribanías de Cámara, permitían llevar control de cada uno de los expedientes o pleitos entregados a los procuradores o a otros empleados del Consejo (A.H.N., "Guía del Consejo de Castilla").

ser copia íntegra***.

En cuanto al volumen de negocios en que participaban los procuradores, nos puede quizá dar una idea de ello la siguiente estadística de principios del siglo XIX****: de un total de 594 pleitos y expedientes consignados, los procuradores tomaron 115, que quedaron distribuidos por Salas de la siguiente manera: en la Sala primera de Gobierno vieron 57 expedientes; 42 en la segunda de Gobierno y 11 en la de Mil y Quinientas; y finalmente tomaron 4 en la Sala de Justicia****.

Recogemos aquí también un interesante expediente referente a la intervención de los procuradores en los expedientes de pase de breves y bulas expedidos por la Corte de Roma, que nos dará sin duda nuevas luces sobre la misión judicial del procurador.

Por Real Cédula de 7 de septiembre de 1806 se mandó, entre otras cosas, que el Consejo no diese pase a ninguna bula, breve o rescripto pontificio que no fuese presentado por el Agente General en Madrid, y en su nombre por el procurador don Felipe Gallo, a quien se había nombrado en exclusividad para este efecto. El motivo de esta disposición era cortar con los repetidos abusos que se cometían negociando las gracias pontificias de todas clases.

El 29 de noviembre de 1814 se dispuso por el Consejo que para evitar en lo sucesivo las contravenciones que se advertían en el cumplimiento de esta y otras Reales Cédulas, se reencargase por circular su puntual cumplimiento y se hiciese saber a los procuradores del Consejo que en lo sucesivo no admitiesen recurso alguno sobre el pase de gracias pontificias, y que don Felipe Gallo continuase como único habilitado por S.M. para el desempeño de este encargo.

En marzo de 1830 se planteó consulta de oficio ante este privilegio de exclusividad detentado por un procurador. El Fiscal en su informe consideraba "que pedidas y obtenidas las gracias de S.S., y una vez llegadas a la agencia general en la Corte, no debe hacerse por un solo procurador la presentación de ellas al Consejo, por el perjuicio que se causa a toda la corporación, pues el comisionado se lleva toda la agencia, cuando es igual en todo a los exponentes -los demás procuradores-. Citan en su apoyo el contexto de sus respectivos títulos y la amplia facultad que se les da en ellos para representar a la parte

***. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 724-728.

****. Fechada en diciembre de 1802.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.881: "Pleitos y expedientes tomados por los procuradores a finales de diciembre de 1802".

de quien tuviesen el correspondiente poder"****.

Al parecer, desde la creación del oficio de procurador, todos los procuradores que tenían poder suficiente y merecían la confianza de sus representados podían recoger las gracias pontificias de la Agencia General de la Corte y presentarlas al Consejo y obtener el oportuno pase. Las que eran de oficio las tenía un solo procurador para entenderse con el Consejo directamente.

En su representación de 1830, los procuradores pedían que el privilegio que tenía Gallo y su sucesor don Damián Isasi, para presentar al Consejo y obtener el pase de las bulas y breves pontificios, se limitase en lo sucesivo a las que fueren de oficio, y que las que se obtuviesen a instancia de parte pudiera recogerlas cualquiera de la Agencia General, como se hacía antiguamente y hasta el año de 1814.

La jurisprudencia emanada de esta consulta y resolución del Consejo tiene para nosotros bastante interés. Si bien el Consejo no privó propiamente a Isasi de aquel privilegio o comisión -por haberlo ejercido interinamente durante doce años-, sin embargo reconoció que los procuradores tenían razón en su pretensión, cuando afirmaban que "con la comisión que se confirió al procurador Gallo se les privaba de una de las principales facultades de sus oficios". Así se expresaba entonces el Consejo:

"Ahora ya se evitan los abusos que se producían en 1805 y 1806, bien porque los títulos que se expiden a los procuradores a su ingreso les autorizan cumplidamente para gestionar en todos los negocios, siempre que tengan a favor los correspondientes poderes de los interesados; y ya finalmente porque a los vasallos del Rey se les priva de que se valgan de la persona que sea de su confianza para una pretensión ordinaria cual es presentar al pase del Consejo los breves respectivos que han alcanzado de la Santa Sede y han sido conducidos a la Agencia General establecida en esta Corte por el conducto que señalan las leyes"*****.

Esta interesante doctrina del Consejo sienta un público reconocimiento de dos facetas de la misión de procurador: el derecho a tramitar toda clase de pleitos y el derecho del ciudadano a acudir libremente a un procurador de

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.100, consulta del 10 de marzo de 1830.

*****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo, 6.100, consulta del 10 de marzo de 1830.

su confianza.

Para concluir este apartado podemos citar también unas ideas apuntadas por Desdevises. Afirmaba el historiador francés que la ley desconfiaba de los procuradores. Les obligaba a obtener el concurso y la firma de un abogado para todo acto introductorio de instancia, o para presentar una recusación de un miembro del Consejo. También les prohibía entenderse con los abogados para compartir los honorarios, o bien ofrecer a las partes el hacerse cargo de los gastos del proceso, aconsejar a las dos partes a la vez, llevar a un escribano una solicitud ya presentada por otro escribano y quizás desechada por los magistrados, etc. Concluía Desdevises, que a pesar de la severidad de las leyes, los procuradores no tenían muy buena fama, aunque sí que ofrecían más garantías que otros profesionales como los agentes de Corte^{***}. Lo cierto es que se detectaban abusos en la conducta de estos procuradores, quizás por la libertad de movimientos que afecía esta función pública, y que se tuvieron que tomar medidas en aras de una mayor seriedad profesional, como las mencionadas anteriormente en cuestiones de horarios o de derechos en los pases de bulas y rescriptos.

Finalmente y para concluir este apartado de competencias de los procuradores, debemos recordar que al igual que existían los llamados 'abogados de pobres', también se daba esta categoría entre los procuradores, para la atención de aquellos que quisieran pleitear y no gozasen de unos mínimos recursos económicos^{***}.

^{***}. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 88. Confirman esta tesis de Desdevises dos noticias aparecidas en sendos expedientes del Archivo Histórico Nacional. La primera está contenida en el legajo 2.805 núm. 17 (Consejos Suprimidos), que contiene un expediente abierto a los procuradores por desconocer los privilegios reconocidos al Número de Receptores, a los que con frecuencia se saltaban en la práctica de una comisión. El segundo expediente es también de finales del siglo XVIII. En esta ocasión eran los porteros los que se quejaban de la lentitud de los procuradores a la hora de devolver los pleitos (A.H.N., Consejos, suprimidos, legajo 51.425 núm. 31). Junto a ello hemos visto a lo largo de este capítulo otros expedientes que contenían quejas sobre la labor de estos profesionales.

^{***}. Sobre la figura del procurador de pobres se puede ver A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.861 exppte. núm. 33.

4. Retribución

Los Procuradores de los Reales Consejos cobraban según un arancel oficialmente aprobado por el Consejo, en su Sala de Justicia. Sabemos que en 1782 fue presentado un proyecto al Consejo por el Número de Procuradores de la Corte. Tras diversas reformas, fue aprobado en 1790 un arancel conjunto para los escribanos de número de Madrid, escribanos de provincia, escribanos reales, procuradores, alguaciles y demás subalternos de los juzgados^{***}.

Anteriormente había existido un arancel de derechos para todos los subalternos de los Consejos, Chancillerías, Audiencias y tribunales, establecido por Real Pragmática de 9 de enero de 1722. Sin embargo, en aquella ocasión no se comprendió al Número de Procuradores, por lo que se hacía necesario fijar unas reglas claras y actualizadas que evitaran contiendas y disputas con los litigantes y personas que manejaban negocios, lo que hasta entonces era bastante frecuente.

Se tuvieron como fuentes principales para la elaboración de este arancel las siguientes: el proyecto del Número de Procuradores; la práctica hasta entonces observada; aranceles modernos, particularmente el formado por el Consejo de Hacienda, por Real Cédula de 7 de mayo de 1782, para sus subalternos, entre los que se incluía a los

^{***}. La Real Provisión que aprobaba el de los Procuradores llevaba este titular: "Real Provisión por la cual se aprueba el arancel formado por el Número de los Procuradores de la Corte y Reales Consejos para la exacción de sus derechos. 24 de diciembre de 1790" (A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 3.201); cfr. también A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879, "Arancel del Número de Procuradores de la Corte y Reales Consejos para la exacción de derechos". El enunciado del proyecto que había presentado el Número de Procuradores era el siguiente: "Arancel que ha formado el Número de Procuradores de los Reales Consejos de los derechos que han de percibir en lo sucesivo sus individuos por los respectivos trabajos y agencia de los negocios en que actúen en el Supremo Consejo de la Cámara, el de Castilla y demás juntas, Tribunales, Juzgados ordinarios y de comisión de esta Corte"

procuradores; el arancel para los procuradores de Villa de 1782; lo determinado por el Consejo en los recursos verificados sobre remuneración y satisfacción de Agencias; el arancel aprobado por el Consejo en 6 de mayo y junio de 1782 para los escribanos del número, provincia y receptores****.

Los pasos para la aprobación de un arancel de esta clase eran los siguientes: se presentaba la correspondiente solicitud en la Sala de Justicia del Consejo. Esta Sala pasaba el proyecto al Tasador General de Pleitos, quien emitía un informe y pasaba todo al Juez de Ministros, quien también emitía su informe. Finalmente pasaba todo al Fiscal, quien hacía dictamen para la resolución del Consejo probablemente en Sala de Justicia, que seguidamente lo pasaba a la Sala de Gobierno del Consejo. De esta manera, por auto del Consejo de 5 de octubre de 1790 y resolución publicada el 16 de diciembre de aquel año, quedó aprobado el arancel de los procuradores de la Corte y Reales Consejos****.

Este arancel estuvo vigente hasta plena Guerra de Independencia. Como resultado de la guerra, de los perjuicios que padecieron las personas que siguieron al Gobierno legítimo y por la carestía de la vida, fue aprobado por el Consejo reunido en Cádiz, a petición de los procuradores allí presentes, el nuevo arancel interino de sus derechos. Este arancel continuó vigente hasta la restauración del Consejo en 1814. Entonces, el Número de los Procuradores solicitó la continuación de su vigencia y, por tanto, su aprobación definitiva y su observancia indefinida y sin ninguna limitación.

El Consejo estudió entonces ambos aranceles - el de 1790 y el de 1811-. El Fiscal en su informe afirmó lo siguiente: "Al Fiscal le basta notar la diferencia que ofrece a primera vista del último aprobado por el Consejo y sancionado por S.M. en 1790, para no apartarse del método adoptado entonces"****.

El Consejo creyó justo que debía ser examinada la cuestión por el Tasador General de Pleitos, quien efectivamente dio un largo y meditado informe sobre todo su contenido. Después lo mandó pasar al Juez de Ministros con el mismo fin, quien conforme con las observaciones del Tasador general lo remitió todo a la Sala

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879, expediente núm. 3.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.879, expediente núm. 3.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148, expediente núm.8.

de Justicia.

Nuevamente volvió a informar el Fiscal: "Las circunstancias extraordinarias del arancel de 1811 ya no se dan: guerra, sitio por tierra, asilo de innumerables personas, etc., hacían que aquellas reglas fueran puramente interinas hasta que la variación de circunstancias permitiese la observación de reglas y aranceles vigentes. Tuvieron entonces, sin duda, un trato de favor y condescendencia pues cuando a los empleados se les relajaba una considerable parte de sus sueldos, pese a la carestía de víveres y enormes sacrificios de cada uno, los procuradores lograron un aumento de derechos, superior en más de la cuarta parte a lo que se les había aprobado en 1790""".

El Consejo resolvió finalmente rechazar la petición del Número de Procuradores, mantener vigente el arancel de 1790 y remitir el expediente para su resolución definitiva al expediente general sobre aranceles (6 de julio de 1816)"".

""", A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148, núm. 8. Por ejemplo, al Fiscal le parecía excesivo cobrar 8 reales por cada firma de demanda de cualquier clase, e igualmente devengar otros 8 por el acto material de recibir despachos, certificaciones, requisitorias y otros documentos; y que por recoger autos, pasarlos al letrado y volver a recogerlos de éste, después de abonarles 4 reales para el mozo, que era quien únicamente trabajaba, todavía repartían la utilidad de 9 reales; igualmente los derechos dobles que habían de pagar todas las comunidades de cualquier clase o condición.

""", Ofrece un indudable interés la consulta de los textos completos de ambos aranceles de 1790 y de 1811 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148, expediente núm. 8).

LOS RECEPTORES DE LOS CONSEJOS

1. Introducción

Desdevises du Dezert comentaba así el papel de esta figura de nuestros Consejos: "Desempeñaban las funciones de comisarios del Consejo, realizaban investigaciones sobre la conducta de los agentes del gobierno, verificaban sus cuentas, y determinaban las cantidades de dinero de las que podían ser deudores con respecto al fisco y con respecto a los particulares"****.

El cuerpo de Receptores del Número de Castilla se creó el 13 de junio de 1614. Por aquella época eran cien los miembros de este Cuerpo "al servicio de la Corte, Consejo, Juntas y demás tribunales de estos Reynos"****. Era su misión principal el encargo de repartirse por turno todas las comisiones de Escribanos para las Administraciones, pesquisas, cuentas, residencias, diligencias y negocios que se ofrecieren en el Consejo Real y en otros Consejos****. Este Cuerpo tenía un Juez

***. DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 302.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.805 núm. 17, Real Cédula del Juez Conservador del Número de Receptores de 30 de abril de 1759.

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., "Noticias del Consejo", pág. 730.

Conservador, que era Ministro del Consejo de Castilla****.

Sin duda fue un cuerpo importante en el momento de su creación. Formaban una corporación y elegían a un Consejero de Castilla como Juez Protector. Pero pronto se convirtieron los receptores en oficios enajenados por la Corona****. Unos eran servidos por los mismos propietarios y otros por personas a su servicio o tenientes****.

Por Real Resolución de 8 de julio de 1769 y Real Cédula**** de 5 de abril de 1770, Carlos III redujo el Número de los Receptores de los Consejos a cincuenta miembros. Como apunta Desdevises comentando esta ley, la reducción habría de hacerse por el procedimiento de la extinción, y el derecho de presentación correspondía mediante turno riguroso al propietario del oficio conservado o bien al propietario del oficio suprimido. Parece probable que una medida de este género respondiera a la cierta animadversión que parece que sentía Carlos III por este

****. Este privilegio se encontraba confirmado por una Real Cédula de 20 de enero de 1725. Este Juez Conservador usaba y ejercía esta protección y amparo privativamente en primera instancia de todas las causas y asuntos relativos al oficio de dichos receptores. Tenía plena jurisdicción, con inhibición de todos los Tribunales excepto el mismo Consejo de Castilla. El Juez Conservador era nombrado por el Rey, quien le otorgaba la correspondiente Real Cédula de Conservaduría: "...Y que como tal Juez Conservador conozcáis en primera instancia de todo lo que a los dichos oficios del Número de Receptores tocare, y procedáis contra los que contravinieren a el ejercicio de los dichos oficios, y lo demás dependiente de ellos, egecutando en ellos las penas que hallaredes por Derecho, según, y de la manera, y con las mismas calidades que se contienen y declaran en las Provisiones y en las Cédulas..." Las apelaciones a las resoluciones del Juez Conservador se elevaban a la Sala de Mil y Quinientas del Consejo de Castilla (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.805 núm. 17).

****. Por tanto quedaron constituidos en propiedades particulares que formaban parte de patrimonios y eran susceptibles de transmisión jurídica.

****. La venta de los oficios desvirtuó en parte la labor de estos receptores. De ellos decía Fayard que sus poseedores eran con frecuencia absolutamente ignorantes, pero ávidos de obtener fuertes sumas a costa de este oficio (FAYARD, J., "Les membres du Conseil du Castille", pág. 27).

****. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 1.977; Libro IV, Título XXII, Ley I de la Novísima Recopilación: esta ley recoge el procedimiento de reducción de su número y nueva forma de acceso al cuerpo de receptores.

Cuerpo, de cuya utilidad dudaba"".

El párrafo 9 de la mencionada ley establecía además que en cualquier momento el Rey podría confiar los encargos a cualquier escribano de su elección e incluso se reservaba el Monarca el derecho de suprimir este oficio cuando lo considerase conveniente. Sin embargo, no fue suprimido este Cuerpo y ejerció sus funciones por lo menos hasta la extinción del Consejo de Castilla en 1.834. Igualmente sabemos que muchas comisiones e investigaciones relativas a pleitos eran encomendadas a estos receptores. Peso a todo afirmaba de Desdevises que "en realidad se había llegado al convencimiento de que un cuerpo de investigadores reconocidos no tenía razón de ser"".

Prueba de ello había sido una petición del Número de Receptores de 1778 en la que solicitaban que fueran respetados sus privilegios, ya que en la práctica se hacía habitual en los tribunales que no se acudiera a receptores en los casos establecidos por la Ley. Ello mismo pudo justificar la drástica reducción de receptores que se había obrado en este Cuerpo.

2. Nombramiento

Martínez de Salazar señalaba en sus "Noticias del Consejo" el procedimiento para la designación de un nuevo receptor de los Reales Consejos. Previamente debían realizarse informes sobre limpieza de sangre y buenas costumbres del candidato. Debería justificar estudios superiores y haber trabajado al menos cuatro años en una escribanía -de los Consejos, de Provincia o de Número en la Villa y Corte-. Finalmente debía pasar un examen ante tres examinadores designados por el Número de Receptores y en

"" A ello se añade la corrupción en que había caído el ejercicio de la profesión de Receptor (FAYARD, J., "Les membres du Conseil de Castille à l'époque moderne", págs. 27 y 28).

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 302.

presencia del Ministro del Consejo examinador****.

Tras la reducción del Número de los Receptores de los Reales Consejos, la ley se vio obligada a precisar unas complejas reglas prácticas para no perjudicar derechos adquiridos y para que los cincuenta receptores asumieran las competencias y funciones de los que quedaban suprimidos.

Junto a ello se estableció un control taxativo sobre el ingreso de los nuevos receptores, que a partir de ese momento deberían acceder mediante un sistema de oposición, consistente en dos exámenes: uno ante una comisión formada por tres examinadores del Cuerpo de Receptores bajo la presidencia del Juez Conservador; el otro ante al mismo Consejo. También se regulaba alguna incompatibilidad como la de no tener o ejercer cargo público que requiriera su asistencia personal.

Realizadas y superadas las pruebas pertinentes, los designados eran nombrados por el Secretario de la Cámara de Castilla y prestaban el debido juramento en el Consejo.

3. Juramento

Los nuevos Receptores aprobados debían prestar juramento en la Sala primera de Gobierno. Previamente debían presentar un memorial al Presidente o Gobernador, donde debía constar el Decreto de éste al Gobernador de la Sala solicitando información sobre antecedentes penales del pretendiente -que hubiera sido procesado por causas que impidieran admitirle al oficio de

****. "Para admitir desde ahora a alguno por receptor del Número de los cincuenta, han de proceder los convenientes informes de limpieza de sangre, buena vida y costumbres. Ha de ser examinado en latinidad y en leer letras antiguas. Ha de haberse ejercitado en cualquiera de las Escribanías de Cámara de los Consejos, de Provincia o Número de esta villa por espacio de cuatro años. Y además de ser examinado en el Consejo de escribano real y de receptor, lo será igualmente a presencia del Ministro Conservador, por los tres examinadores que el Número ha de nombrar cada año a este fin". (Ley I, Título XXII, Libro IV de la Novísima Recopilación).

Receptor-; e igualmente el informe del Gobernador de la Sala sobre el particular.

A la vista de esta Memoria, el Presidente o Gobernador del Consejo concedía o no al candidato la licencia para jurar. Estos trámites eran similares, por tanto, a los establecidos para el acceso a otros oficios como era el caso de los procuradores de los Reales Consejos"".

4. Competencias

Cuando llegaba una causa al Consejo, con frecuencia el Supremo Tribunal ordenaba la apertura de un proceso de información o una investigación sobre algún punto particular del caso, no plenamente aclarado por los Relatores. A este fin se solicitaban las ya estudiadas comisiones presididas por un juez de comisión. Sin embargo, por su elevado gasto con frecuencia solía acudir en estos casos a este Cuerpo especializado de oficiales de los Consejos que con el carácter de comisarios realizaban investigaciones. Los receptores no obraban por lo demás sólo por encargo del Consejo de Castilla, sino también para los demás Consejos y tribunales de la Corte.

Los receptores, por tanto, se trasladaban al lugar de la pesquisa o investigación y elaboraban in situ los pertinentes informes, que a su regreso a Madrid remitían a los Escribanos de Cámara. Seguidamente se nombraba un Relator y finalmente el Consejo dictaminaba sobre la causa pendiente.

Las comisiones se encomendaban a los receptores por turno riguroso. Diariamente se reunían los receptores en uno de los patios de la Cárcel de Corte destinado a la Audiencia de los Alcaldes de Corte que conocían de lo civil. El repartidor nombrado por la Corporación de los Receptores"" hacía en presencia de

"" MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., págs. 735 y 736.

"" Este Repartidor no podía ser Receptor ni tampoco oficial ordinario de la Audiencia. También quedaba establecido por la ley que, aparte de su sueldo, no podía percibir de los Receptores ni de cualquier otra persona cosa

todos el repartimiento de negocios. Previamente un agente había recorrido las Escribanías de Cámara a informarse de las receptorías o comisiones que el Consejo mandaba realizar. Efectuado el repartimiento se confería a cada receptor designado un certificado con el que podría acudir a la Escribanía de Cámara a recoger la receptoría.

En principio a un Receptor sólo le podía corresponder un asunto o receptoría por reparto, y no podía encomendársele nueva comisión sin haber presentado el informe de la anterior. Se admitía la excepción de que le tocara en el repartimiento un asunto de pobre. En tal caso sí podría llevar ambos asuntos, aunque por este último sólo percibiría el salario ordinario, sin cargar cosa alguna por razón del informe escrito o probanza. Recibida una receptoría, el beneficiado no podía ya excusarse de su cumplimiento****.

Los receptores no eran utilizados en los procesos que tuvieran un interés superior a los 100.000 maravedís. En estas causas realmente importantes las investigaciones se encomendaban a los Escribanos de Cámara****.

Quedaba expresamente prohibido por la ley que en sus desplazamientos en comisión llevaran consigo escribierte; todo debían redactarlo por su propio puño y letra, so pena de privación perpetua del oficio****.

Sobre sus informes, había también algunas reglas particulares: por cada cuestión de los interrogatorios no podían presentar más de treinta testigos; debían mantener el secreto del informe hasta su publicación por el Consejo; no debían permitir ni admitir presentación de escrituras ni incorporarlas a sus informes o probanzas; sólo podían incorporar a éstas poderes de las partes, prórrogas y presentaciones de testigos examinados.

Como ya hemos visto, toda la investigación debía ser escrita por su propia mano. En sus informes o probanzas debían anotar además la fecha en que fue concluida la receptoría, así como consignar al pie de la probanza los derechos que percibían y su firma.

Se establecían también algunas incompatibilidades para la aceptación de una receptoría,

alguna por sus operaciones.

****. MARTINEZ DE SALAZAR, A., op. cit., pág. 736.

****. DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions", pág. 83.

****. Ley II, Título XXII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

bien por parentesco con alguna de las partes o por otros intereses con ellas o en la cuestión objeto del proceso****.

En principio, era preceptiva la asistencia de un receptor en cada una de las comisiones del Consejo y de los demás tribunales. En cuanto a los tipos de comisiones en los que intervenía un receptor, éstas eran muy variadas: jueces particulares, visitas de Escribanos, residencias, pesquisas, querellas a petición del Fiscal o de parte, probanzas en pleitos civiles y criminales, en las que se incluían las tachas legales, compulsas, cotejos, comprobaciones, ratificaciones, examen de testigos, vistas oculares, medidas de tierras y pastos, ventas de jurisdicciones, apeos, deslindes y amojonamientos, posesiones de villas y lugares. En general, en todas las comisiones que con cualquier título, causa o nombre fuesen expedidas y despachadas por cualquier Consejo, Junta Tribunal o Ministro en que hubiera de intervenir Escribano; igualmente debía participar un receptor del Número cuando se expidiera una Cédula, Comisión o Despacho en que incluyera comisión de asuntos e interviniera Escribano****.

Los procuradores debían acudir al Número de Receptores dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de los pleitos a prueba, las certificaciones, los avisos, etc., en que fuera necesaria la realización de una comisión, bajo la multa de 50 ducados. Para ello debían dejar en el Número de Receptores una copia autorizada de la petición, para que se asegurase siempre que fuera un receptor quien practicase la correspondiente comisión****.

****. Así, por ejemplo, el haber vivido con alguna de las partes dentro del último año; o que se diese el caso de que un hermano del receptor interviniese como abogado en la causa.

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 2.805 núm. 17, Auto del Juez Conservador del Número de Receptores, de 29 de abril de 1778.

****. A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 2.805 núm. 17, Auto del Juez Conservador del Número de Receptores, de 29 de abril de 1778.

5. Privilegios

Los receptores de los Reales Consejos tenían el fuero de conocer y entender su Juez Conservador en todos los pleitos civiles y criminales que ocurrieran contra sus individuos.

Las Reales Cédulas de 20 de enero de 1725 y de 30 de abril de 1759 fueron confirmatorias de algunos de los privilegios que correspondían a la Corporación de Receptores****. Por la primera se concedía, como ya hemos visto, amplia facultad al Juez Conservador para conocer en primera instancia de todos y cualesquiera negocios y causas concernientes al ejercicio de los oficios de Receptores y todo lo dependiente del mismo. Por la segunda Real Cédula se ponía el Número bajo la protección y amparo del Juez Conservador, para que conociera en primera instancia de todo lo que a dichos oficios de Receptores tocase, así como para proceder contra los que contraviniesen el ejercicio de los mismos oficios. Quedaba también claro que la jurisdicción del Juez Conservador quedaba limitada a los casos relativos al Número en general o al libre uso de los oficios por todos o cualesquiera de sus individuos, y a las incidencias y dependencias que de ellos se derivasen, pero de ninguna manera se hacía extensiva a los asuntos ajenos del expediente ejercicio de sus oficios e incidencias que correspondiesen a los jueces ordinarios****.

Existía por tanto, un Juzgado de Conservaduría. Por auto de 13 de noviembre de 1778****, dictado por don Francisco de la Mata Linares, Ministro del

****. El Cuerpo de Receptores tenía desde su creación una serie de privilegios concedidos por los Monarcas, en especial por Real Cédula de 13 de junio de 1662. Por la también Real Cédula de 20 de enero de 1725 se permitía el nombramiento de Juez Conservador para la custodia de estos privilegios (A.H.N., Consejos Suprimidos, legajo 2.805 núm. 17, Real Cédula de 30 de abril de 1759).

****. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.099, consulta del 6 de noviembre de 1829.

****. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 2.392.

Consejo y Juez Conservador del Número de los Receptores, se había mandado que los que hubiesen de demandar a alguno de sus individuos lo hiciesen ante este Juez Conservador. Este privilegio fue confirmado por el Consejo el 29 de diciembre de 1828. En aquel entonces, el Consejo mandó que informase el Ministro don Dionisio Catalán, el entonces Juez Conservador del Número de los Receptores. A su informe se añadió lo que informaron el Escribano de la Comisión y el Repartidor del Número de los Receptores. De la consiguiente resolución del Consejo podemos extraer lo siguiente:

"Se da la amplia facultad al Juez Conservador para conocer en primera instancia de todos y cualesquiera negocios y causas concernientes al enterro uso de los oficios de receptores y lo dependiente ellos. En este mismo sentido se explica en la Real Cédula de 30 de abril de 1754. Aparece que la jurisdicción del Juez Conservador está circunscrita a los casos que tengan relación con el Número en general o con el libre uso de los oficios por todos o cualesquiera de los individuos que le constituyen, y a las incidencias y conexiones que se deriven de los mismos principios. Pero esto no favorece la idea de que en un asunto civil enteramente ajeno del libre uso de los oficios y sus incidencias, goce cada receptor la independencia de los jueces ordinarios"***.

Sabemos que los privilegios de los Receptores llevaron a remitir al Consejo otras representaciones y se plantearon varias consultas al respecto. Por ejemplo, la consulta a S.M. de 19 de abril de 1773, recordada el 12 de enero de 1787 -entonces aún sin resolver- sobre algunos de estos privilegios; o la nueva consulta de 10 de marzo de 1803 en la que los receptores pedían que en observancia de sus privilegios se les concedieran las visitas y residencias de los escribanos, fieles de fechos, jueces e individuos de Justicia****.

***. A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.099, consulta del 6 de noviembre de 1829.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 2.983.

6. Retribución

Al igual que los Escribanos y los Relatores, los receptores percibían derechos sobre los trámites de procesos en los que intervenían. Estos derechos que llevaban por las comisiones estaban establecidos en el arancel real.

El Consejo por resolución de 10 de mayo de 1771 reguló las dietas de los receptores de la Corte en comisiones. Quedaron entonces establecidas en 40 reales, más 30 reales diarios por cada uno de los días que se ocuparen en el camino de ida y vuelta en concepto de ayuda de costa, contando a ocho leguas por día"" -lo equivalente a 40 kms diarios"".

Dictada la sentencia en el asunto en cuestión, los Escribanos de Cámara realizaban las correspondientes ejecutorias y las remitían al Fiscal, que se ocupaba a su vez de la percepción de los fondos"". Las sumas percibidas por los Receptores alimentaban dos cajas: la de las Penas de Cámara y la de los gastos de Justicia y obras pías. Cada una era administrada por un Receptor General"".

"" A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 2.079; Ley II, Título XXII, Libro IV de la Novísima Recopilación.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., "Les Institutions de l'Espagne", pág. 84.

"" Auto acordado de 17 de octubre de 1704.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., "Institutions".

AGENTES EN CORTE

"Los personajes importantes, las provincias y las ciudades mantenían en Madrid agentes en corte, cuya misión consistía en velar por sus intereses, urgir la sentencia de sus casos y solicitar la intervención de personas influyentes en favor suyo"****.

De esta manera describía Desdevises du Dezert esta peculiar figura de los Agentes y Solicitadores de Negocios en Corte, verdaderos representantes en la Corte de personajes e instituciones para la defensa de sus intereses en Madrid. Evidentemente, no todo el mundo podía costearse un Agente de Corte, un lujo del que sólo unos pocos podían disponer****.

Eugenio de Tapia estudió a principios del siglo XIX con detenimiento la figura del agente de negocios. Para él eran "aquellas personas que en la Corte y ciudades donde residen las chancillerías y audiencias, se hallan dedicadas a practicar las diligencias conducentes en los pleitos y asuntos agenos, como las pretensiones de empleos u otros en virtud de orden, aviso o poder de los

**** DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 303.

****. Esta figura típica de los siglos XVII y XVIII, aunque no de especial relevancia, sabemos que todavía continuará en uso durante el siglo XIX. Sin embargo, en la documentación consultada sobre el Consejo aparecen curiosamente muy pocas referencias a esta figura, aunque sabemos de su existencia a lo largo de todo el reinado.

interesados"".

La Novísima Recopilación"" les denominaba solicitadores, ya que su misión era solicitar o presentar solicitudes. A diferencia de los procuradores, no podían presentar en juicio ninguna pretensión. Apunta también Tapia"" cómo sí estaban facultados para designar procurador que le defendiese en el pleito.

El número de los procuradores en Corte era excesivo. El motivo que alegaba Tapia era que en la Corte se llamaba agente a todo el que tenía algunos poderes"".

La propia naturaleza de estos Agentes en Corte, personajes cuya misión era solicitar en su favor la intervención de personas influyentes, o la obtención de prevendas, muchas veces mediante la gratificación, el soborno y la intriga, lo que hacía que las autoridades públicas desconfiasen de ellos. En no pocas ocasiones contribuirían, según Desdevises"", a falsear las decisiones de la justicia, en sus intentos de acelerar las sentencias o de conseguir resoluciones favorables"".

"" TAPIA, E. de, "Novísimo Febrero o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos, refundida, ordenada bajo nuevo método y adicionada con un tratado de juicio criminal y algunos otros", 7 tomos, Madrid 1828.

"" Novísima Recopilación, ley XII, título XXVI, libro IV.

"" TAPIA, E. de, "Novísimo Febrero", tomo VII, pág. 384.

"" TAPIA, E. de, "Febrero Novísimo", tomo VII, pág. 384.

"" DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 303.

"". A título de ejemplo de esta actitud relativamente frecuente de los agentes podemos citar una noticia recogida en el legajo 2.874 expediente número 18 (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno), en donde en una instancia el Repartidor de Pleitos se quejaba de que eran "frecuentes las disputas y altercados de los agentes y procuradores sobre intentar éstos se les admitan cuantas instancias presentan". Más adelante afirmaba que sucedía "también amenudo que como llegan al Repartidor muchas instancias y es indispensable irias repartiendo por su orden, para no perjudicar a los Escribanos de Cámara en sus turnos, solicitan algunos procuradores y agentes se antepongan sus recursos a los que llegaron primero y no solamente hacen estas solicitudes, sino que pretenden que sus negocios se repartan a los llamados Escribanos de Cámara aunque no estén en turno, y otras veces

Buena prueba de esta desconfianza real son algunas disposiciones destinadas al control y registro de estos Agentes. Veamos dos de ellas, contenidas en la Novísima Recopilación:

La Ley I, Título XXVI, Libro IV se refería al registro obligatorio de todos los agentes de negocios en la Escribanía de Gobierno del Consejo y los datos que tenían que aportar al mencionado Registro. Sus cláusulas eran prueba evidente del deseo de control real sobre estos agentes****.

La segunda disposición exigía un Real Título para el ejercicio de la profesión de Agente en Corte****.

Sabemos también que el Tribunal Supremo de Justicia no concedió a estos agentes intervención legal en los asuntos del Tribunal. Su misión entonces, como

procuran registrar los libros de repartimiento para tomar noticias del estado de los turnos y logran así presentar su recurso cuando se halle en turno aquel a quien desea le toque". Seguía quejándose el repartidor de que jamás había condescendido con tales pretensiones, "aunque para ello se le ha intentado gratificar. De aquí nace que muchos procuradores y agentes se han exasperado contra él, con expresiones no correspondientes, a lo que también ha contribuido el no permitirles que se echen sobre la mesa el repartimiento, para que no adviertan el estado de los turnos". Finalmente pedía el repartidor que "el repartimiento se hiciese en disposición de que los procuradores y agentes no pudiesen acercarse a la mesa, lo cual en las presentes circunstancias es dificultoso". Estos fragmentos nos dan una idea del comportamiento habitual tanto de procuradores como de agentes para conseguir sus objetivos.

****. "Todos los solicitadores y Agentes de negocios que hay en esta Corte, dentro de los quince días primeros siguientes a la publicación de este auto, se registren en la Escribanía de Gobierno del Consejo, declarando de dónde son naturales, por qué salieron de sus tierras, cuánto ha que están en la Corte, en qué negocios, con qué salarios y en qué Tribunales negocian y asisten: lo qual cumplan pena de privación de oficio y de cuatro años de destierro preciso de esta Corte y cinco leguas a la redonda" (el Consejo por auto acordado de 20 de junio de 1625; y D. Carlos IV, por resolución a consulta de 18 de diciembre de 1804).

****. "Sin especial Real Título no pueda haber Agentes ni solicitadores de pleitos, pretensiones y negocios; pues deben ser personas conocidas por los evidentes perjuicios y daños que resultan al público en común y a los individuos en particular" (Novísima Recopilación, Ley II, Título XXIV, Libro IV, por Dcn Felipe V en Madrid, el 10 de enero de 1707).

seguramente sería en los años siguientes, era la de promover y activar las solicitudes o negocios que radicaban en las Escribanías del Tribunal""'. En los años siguientes del reinado de Fernando VII, sería en las Escribanías de Gobierno y de Cámara donde tendrían su labor principal estos gestores y promotores en favor de sus clientes.

Por otro lado, al parecer estos Agentes debían percibir fuertes sumas por sus cometidos, de forma que no mucha gente podía mantener uno de estos comisionados en la Corte. Señala Desdevises cómo aquellos que no eran lo suficientemente ricos para contratar un agente, acudían a los servicios de un abogado""'.

""'. MORENO PASTOR, L., "Los Orígenes del Tribunal Supremo", págs. 541 y 542.

""'. DESDEVISES DU DEZERT, G., "La España del Antiguo Régimen", pág. 303.

VII. EL CONSEJO Y TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA E
INDIAS (CONSEJO REUNIDO)

VII. EL CONSEJO Y TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA E INDIAS (CONSEJO REUNIDO)

1. Introducción

La institución del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias es muy poco conocida. Pocos autores han estudiado la actuación de este Consejo y sólo de forma colateral al analizar el momento histórico en el que tuvo su existencia. Para estudiar su estructura y composición contamos con escasas fuentes. En primer lugar, el único trabajo que analiza esta estructura, el ya mencionado del profesor Sánchez-Arcilla; por otro lado, toda la documentación existente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, con el epígrafe genérico de "Consejo reunido en Sevilla y Cádiz"****; finalmente, el Decreto de 25 de junio de 1.809, que aporta interesantes datos sobre la forma que había de adquirir la nueva institución; y algunas referencias recogidas en trabajos y monografías sobre aquel periodo.

Ha sido por otro lado un inconveniente a la hora de estudiar las características internas de esta institución el que los principales expedientes sobre su

****. Esta documentación se compone de 28 legajos (del 11.982 al 12.008, más el 50.127 y el 50.129. Por el legajo 3.617 expediente núm. 1 del Archivo Histórico Nacional sabemos que al crearse la Secretaría de la Gobernación de la Península se le remitieron 33 legajos del Consejo reunido, actuados desde 1.809 a 1.812. Al extinguirse esta secretaría, se enviaron estos papeles al Archivo del Consejo de Castilla, el 10 de octubre de 1.814.

creación se encuentren hoy perdidos. Probablemente se encuentran colocados en algún legajo de la época correspondiente a alguna oficina relacionada con el Consejo de Castilla. Sabemos que fueron extraídos de su correspondiente lugar a petición de las Cortes Generales, según consta en un expediente del Archivo del Congreso de los Diputados****.

A la hora de crear un nuevo Consejo, se tomó como modelo a los hasta entonces existentes. No parece que quepa duda que el nuevo Consejo reunido era esencialmente la continuación del Consejo de Castilla, al que se le habían incorporado nuevas competencias de otros Consejos. Así parece haber sido entendido por los contemporáneos, que incluso identificaban a este Consejo con el Consejo de Castilla****. No es de extrañar por tanto que la mayoría de los Consejeros y empleados de esta institución provinieran del de Castilla, que la documentación del Consejo reunido se incorporara al archivo de esta institución y que tras su supresión una buena parte de sus empleados pasaran a servir sus plazas en el secular Supremo Tribunal.

****. Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, legajo 3 núm. 16. El 28 de marzo de 1.811 las Cortes Generales y Extraordinarias resolvieron que el Consejo de Regencia remitiera el expediente formado por el la Junta Central para el establecimiento del Consejo reunido, así como el formado después al restablecer los refundidos Consejos. Las Cortes solicitaron estos expedientes a la Secretaría de Gracia y Justicia. Concretamente el del Consejo reunido constaba de 56 piezas, junto con algún expediente más de la Secretaría General de la Junta Central. La Secretaría de Gracia y Justicia reunió los documentos e inmediatamente los pasó a las Cortes. Sabemos también que las Cortes devolvieron a la Regencia la consulta del extinguido Consejo de Castilla de 24 de marzo de 1.811, relativa a las solicitudes de los oficiales antiguos de la Secretaría de la Cámara. Una comisión de las Cortes fue encargada de examinar el expediente sobre reunión y separación de los extinguidos Consejos Supremos. Se dedicó desde el momento de su nombramiento a reconocer cuantos papeles le fueron pasados relativos a este punto, así como otros que posteriormente le pasó el Gobierno. Las Cortes estudiaban esta documentación con el objeto de estudiar la reforma de los tribunales de Justicia. Tras la aprobación de la Constitución, fueron devueltos a la Regencia toda esta documentación. Una parte se había devuelto ya entre el 21 y 29 de diciembre de 1.811; el resto fue devuelto desde Cádiz el 13 de junio de 1.812.

****. Por ello mismo esta circunstancia ha inducido a error a autores modernos, lo que ha provocado que en ocasiones no se distinga bien entre ambas instituciones. A ello también ha ayudado el escaso conocimiento existente sobre el Consejo reunido.

El Consejo reunido fue estructurado por su decreto de creación**** en tres Salas, dos de Gobierno y una de Justicia. Aunque el decreto de creación propiamente no decía nada, inmediatamente fue asignada una de las Salas de Gobierno para los asuntos de gobierno de la Península (de España) y la otra para los de gobierno de Indias.. Inicialmente quedaban constituidas dos comisiones, formadas por tres del ministros del mismo tribunal cada una. La primera para los asuntos relativos a las Ordenes Militares****. Por otro lado, "para evitar confusión y tardanza del despacho en las consultas de los demás empleos seculares, y provisiones eclesiásticas de España e Indias, nombrará igualmente S.M. otra comisión de tres individuos, a la que también asistirá el Decano"****

2. Estructura orgánica

b) Los Consejeros

También serían creadas dos Secretarías, regidas cada una por un Secretario General. La primera para los asuntos y expedientes de España y la segunda para los de las Indias. En cuanto al sello de las provisiones, inicialmente cumpliría este cometido la Cancillería de la Real Audiencia de Sevilla, y cuando fuera necesario se sellaría en la oficina en la Casa del propio Consejo****.

Los Consejeros del Supremo Tribunal lo serían

**** Este decreto se encuentra en la Colección de Reales Cédulas del A.H.N., matriculado con el número 45.221, y fechado el 25 de junio de 1.809. Por Real Cédula de 18 de julio del mismo año se mandaba guardar el decreto anteriormente aprobado (A.H.N., núm. 4.608 del Catálogo).

****. "Los asuntos eclesiásticos y religiosos de las Ordenes Militares, concursos y elecciones, o propuestas de S.M. para los destinos de esta clase, se tratarán en comisión o junta particular por tres caballeros profesos de ellas, ministros del mismo Consejo, con arreglo a sus especiales constituciones" (Real decreto de 25 de junio de 1.809)..

****. Real Decreto de 25 de junio de 1.809.

****. Real decreto de 25 de junio de 1.809.

en número indefinido, elegidos entre los más acreditados por su talento, fidelidad, ciencia y experiencia"". Aunque inicialmente y por decreto"" fechado el mismo día 25 de junio, fueron nombrados quince Consejeros, sucesivamente sus decretos de nombramiento serían expedidos por separado y sus fechas darían el orden de antigüedad. En el decreto de 15 de junio de 1.809 la antigüedad venía expresado por el orden de prelación en la lista recogida.

De los Consejeros inicialmente nombrados, comprobamos que nueve provenían del Consejo de Castilla, cuatro del Consejo de Indias y dos del de Ordenes. Sus nombres eran los siguientes:

- don José Joaquín Colón. Decano
- don Manuel de Lardizábal
- don José Mon, Conde del Pinar
- don Francisco Requena
- don José Pablo Valiente
- don Sebastián Torres
- don Antonio Ignacio Cortabarría
- don Ignacio Martínez de Villela
- don Antonio López Quintana
- don Miguel Alfonso Villagómez
- don Tomás Moyano
- don Pascual Quílez Talón
- don Luis Meléndez Bruna
- don Juan Miguel Pérez Tafalla
- don Ciriaco González Carvajal"".

De ellos uno era el Decano. Curiosamente para una institución que era una réplica de los Consejos tradicionales, no tenía ni Gobernador ni Presidente. Según el Marqués de Ayerbe, esta medida fue tomada para impedir que Infantado fuera Presidente"". Ciertamente; el Duque hizo varias representaciones e instancias alegando su derecho, aunque no fue atendida su petición"". Sin duda

"". Real decreto de 25 de junio de 1.809.

"". A.H.N., Colección de Reales Cédulas, núm. 1.835, "Real decreto de la Junta Gubernativa nombrando los miembros del Consejo Supremo de España e Indias".

"". Ver SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., pág. 1.044. Sin embargo, esta estructura inicial no permaneció invariable. Así sabemos, por ejemplo, que don José Salcedo formaba parte del Consejo reunido el 30 de marzo de 1.810 (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.987).

"". MARQUES DE AYERBE. "Memorias". pág. 264.

"". "Infantado ha hecho muchas y copiosas representaciones sobre el nombramiento que del rey tenía, pero ninguna ha sido atendida, y en Sevilla se decía

parece extraña una medida de este género, pues los Consejos no solían ser dirigidos por un Decano, sino tan sólo en situaciones de interinidad por vacante o ausencia del titular"".

De esta manera, don José Joaquín Colón de Larreátegui ostentó el puesto de Decano del Supremo Tribunal. Fue sin duda una de las grandes personalidades de la Administración Española legítima, como lo demuestran algunos expedientes conservados entre la documentación de la época en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Así, por ejemplo, el Decano del Consejo reunido fue, por ejemplo, el encargado de recibir oficialmente al Embajador de Inglaterra, en nombre de S.M. el Rey y de la Junta Central, en su arribada a España el 12 de agosto de 1.809"".

públicamente, con harto fundamento, que la Junta Central atiende poco a los méritos contraídos con el rey en sus calamidades" (AYERBE, op. cit., pág. 264).

"" Apuntaba al respecto el Marqués de Ayerbe que esta medida no fue sino una ofensa a don Arias Mon, que tan dignamente había ostentado el puesto (MARQUES DE AYERBE, op. cit., pág. 264). Sin embargo, no compartimos esta opinión de Ayerbe, en cuanto que si Mon estaba prisionero en Francia, donde más tarde fallecería, no podía ejercer sus funciones de Decano del Consejo reunido. Por el mismo motivo habría que haber mantenido de Consejeros a los demás miembros de los Consejos que estaban presos, escondidos o fugados.

"" A.H.N., Estado, legajo 28.A. núms. 36 y 53. El Consejo reunido, en cumplimiento de la orden de la Junta Central de 11 de agosto de 1.809 saludó el día 12 al mediodía al Embajador de S.M. Británica con el aparato y decoro que fue posible. El Decano Sr. Colón leyó entonces el siguiente discurso:

"No bastan en extraordinarios acontecimientos demostraciones comunes para significar su grandeza y los sentimientos de admiración y de gratitud. El inmortal descubridor de las Indias, cuando arribó felizmente a nuestro patrio suelo, después de haber adquirido para España aquellos vastos dominios con asombro del universo, fue saludado personalmente por sus heroicos soberanos, separándose de las reglas ordinarias para honrar a tal héroe y manifestarle su reconocimiento. V.E., Señor, que viene en nombre de un Monarca grande y de una nación generosa, a anunciar a España su auxilio y la libertad de ambos mundos, del pérfido yugo de un tirano, lo sería con mayor razón y más digno aparato si nuestro desgraciado Rey, como debía, gozase de su Trono.

Suple su triste ausencia la Suprema Junta Gubernativa de estos reinos, en quien reside su soberanía, de cuya Real Orden felicita a V.E. por su deseado arribo, el Supremo Consejo de España e Indias en nombre de su Soberano el Sr. Don Fernando VII y toda la nación, con las expresiones más puras de reconocimiento y amistad. Ambos sucesos formarán

Más adelante volveremos a la figura del Decano"". Ahora continuamos repasando la configuración de la estructura orgánica de este Tribunal. Al igual que ocurría con el Consejo de Castilla y otros Consejos, anualmente era aprobada la distribución de Ministros para cada una de sus Salas. El propio Decano presentaba una propuesta a la Junta Central, y era aprobada o modificada. Conservamos las propuestas presentadas para el año 1.809, elevada a la Central el 24 de diciembre de 1.809, y aprobada por aquella Suprema Junta el día 28 del mismo mes"".

Como señala el profesor Sánchez-Arcilla"", por el segundo decreto de 25 de junio quedaba nombrado como Secretario General del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias don Esteban Varea, al que se le encomendaba provisionalmente el despacho de ambas Secretarías, de tal

época indeleble en nuestra Historia. Bien puede temblar el monstruo del universo. Si con sus falacias y perfidias ha conseguido hacer titubear los tronos más seguros, la unión memorable de nuestras dos invictas naciones los volverá a afirmar.

Señor: la unión de España con la Gran Bretaña debe ser y será eterna para bien de la Humanidad, de las Ciencias, Artes y Comercio: aliadas ambas con vínculos insolubles, ¿quién disipará su poder? Lejos de nosotros el espíritu de interés y de sedición: guerra y alianza en ambos continentes contra el común enemigo; y gloria para vuestra Nación, la nuestra y sus respectivos soberanos.

"". Curiosamente, en algún documento oficial se refiere la figura del Decano llamándole Presidente, sin en realidad serlo. Ver, por ejemplo, el libro de matrícula de Estado, A.H.N., expediente 36 del legajo 28-A.

"". La distribución fue la siguiente: a) Sala primera de Gobierno de España: don José Joaquín Colón, Decano; don Miguel Alfonso Villagómez; don Tomás Moyano; don Pascual Quílez Talón; don Juan Miguel Pérez Tafalla; don José Salcedo; don Nicolás Sierra, Fiscal (*); don Antonio Cano Manuel, Fiscal; y don Esteban Varea, Secretario General. (*) Don Nicolás María de Sierra, Fiscal del Consejo de España e Indias, fue nombrado el 6 de marzo de 1.810 Ministro de Justicia, en sustitución del Sr. Hermida, en consideración de su avanzada edad (GÓMEZ-RIVERO, "Los orígenes del Ministerio de Justicia", pág. 47).

b) Sala segunda de Gobierno de Indias: don Manuel de Lardizábal y Uribe; don Francisco Requena; don José Pablo Valiente; don Antonio López Quintana; don Luis Meléndez Bruna; y don Ciriaco González Carbajal.

c) Sala de Justicia: el Conde del Pinar; don Sebastián de Torres; don Antonio Ignacio de Cortabarría; don Ignacio Martínez de Villela; don Justo María de Ibar Navarro.

"". SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., pág. 1.045.

forma que en la práctica hubo una sola Secretaría"".

b) Personal subalterno

En cuanto al personal subalterno, gracias a un documento"" conservado en el Archivo Histórico Nacional podemos conocer con detalle los nombres y destinos de los subalternos y dependientes que sirvieron al Consejo reunido en la ciudad de Cádiz"".

Según el Real Decreto expedido el 25 de junio

"". Los documentos oficiales de la época hablan de "la Secretaría" del Consejo de España e Indias.

"". A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno del Consejo de Castilla, legajo 3.026, expediente núm. 46.

"". Así sabemos que en la Secretaría había dos oficiales, don Santos Sánchez, oficial mayor, y don Gregorio Vicente Gil. También fue oficial de esta Secretaría don José Valcárcel Data (A.H.N., Consejos Sala de Gobierno, legajo 4.040 núm. 3). Don Santos Sánchez se fugó a principios de 1.809 de Madrid y se presentó en Sevilla a la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino. A los pocos meses fue creado el Consejo reunido de España e Indias y su Secretario General, don Esteban Varea, solicitó informe de varios Ministros acerca de la persona a quien podría encomendarse el delicado cargo de oficial mayor del Departamento de España, en el que quedaban reunidos los asuntos del Consejo y de la Cámara de Castilla, y de los Consejos de Ordenes y de Hacienda. Fue propuesto unánimemente para este destino por los Ministros consultados, pese a que parece que ni siquiera le conocían. Fue nombrado para dicha plaza con honores de Secretario del Rey, 3.000 reales de sueldo y habilitación para despachar en ausencia o enfermedad del Escribano de Cámara. Pasó más adelante a servir la misma plaza en el Consejo de Castilla en Cádiz y una vez extinguido éste, la de oficial segundo de la Secretaría del Consejo de Estado. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

Por su parte, don Gregorio Vicente Gil, oficial segundo de la Secretaría del Consejo reunido de España e Indias pasó a servir más tarde la misma plaza en el Consejo de Castilla, y extinguido éste fue nombrado Secretario del Jefe Político de Sevilla. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

de 1.809, el Consejo de España e Indias debía contar con tres Escribanías de Cámara. El propio Consejo, en consulta a la Junta Central de 22 de julio del mismo año propuso las personas que estimó más apropiadas, propuesta que fue ratificada por Real Resolución del Consejo pleno de 27 de julio de 1.809. Al frente de cada una de estas oficinas había un Escribano de Cámara: don Segundo García Cid****, don Jacinto Velandia**** y don Manuel Abad****. Como tales Escribanos de Cámara podían autorizar los acuerdos y autos del Tribunal, y refrendar y primar las Reales Provisiones, órdenes y demás despachos que de ellos dimanaren. Y debían ejercer las funciones anejas a tal oficio tal y como las realizaban los Escribanos de Cámara de los antiguos Tribunales****.

En cada una de las Escribanías de Cámara había también un oficial mayor, los cuales luego pasarían a ocupar plaza similar en el Consejo de Castilla restablecido en Cádiz. En consulta del 4 de agosto de 1.809, el Consejo de España e Indias propuso a la Junta Central las personas que había estimado más idóneas para estos puestos de oficial

****. Don Segundo García Cid de Escribano de Cámara del Consejo reunido pasó a servir el mismo oficio en el Consejo de Castilla en Cádiz y permaneció en él hasta su extinción. Tras el restablecimiento del Consejo de Castilla en 1.814 volvió a ocupar plaza de Escribano de Cámara en este Supremo Tribunal. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

****. Pasó también al Consejo de Castilla en Cádiz y falleció en la ciudad gaditana (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

****. Don Manuel Abad también intervino como Escribano de Cámara del Consejo reunido, donde se encargó de la Sala de Justicia. Sabemos también de él que fue nombrado en julio de 1.810 Escribano de la Comisión confiada a don Ignacio de Cortabarría para la pacificación de Caracas. Pasó más tarde también como Escribano de Cámara al Consejo de Castilla en Cádiz, y tras el restablecimiento del Supremo Tribunal en 1.814 volvió a ocupar en el Consejo esta misma plaza de Escribano de Cámara (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

****. Extraído de la disposición de la Junta Central, fechada el 6 de agosto de 1.809, que nombraba Escribano de Cámara a don Manuel Abad. De su título se debía tomar razón en las Contadurías Generales de Valores y Distribución de la Real Hacienda, "sin cuya formalidad ha de ser nulo y de ningún valor ni efecto, declarando como declaro que por esta merced no debéis adeudar el derecho de la media annata por el oficio de nueva creación." (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

de Escribanías"". Previamente habían presentado propuesta al Consejo los titulares de cada una de las Escribanías de Cámara. Fueron oficiales mayores don Miguel Gonzalo, don Sebastián Salcedo"" y don Julián Sandalio Aguado. También conocemos la existencia de seis oficiales de Escribanía más, correspondiendo dos a cada Escribanía: los oficiales segundo don Francisco Izquierdo y Ansaldo, don Diego Aguirre y don Manuel Marín"", y los oficiales terceros don Francisco de Paula Robles, don Tomás de Velandia y don Joaquín Fanjul.

El Consejo reunido en Sevilla y Cádiz contaba con tres Relatores, que nombraba el Consejo por oposición"". Fueron don José de la Vega Carballo"", don Fernando María de Segovia"" y don Manuel Fernández

"". De todos los oficiales de Cámara que servían en el Consejo de Castilla en 1.808 sólo cinco de ellos huyeron de Madrid a Sevilla. Estos cinco serían empleados por el Consejo reunido, con arreglo a sus méritos y antigüedad, y aparte fueron designados otros que reunirían los méritos de haber huido del francés, tener conocimientos de la práctica del Consejo y disposición para poder desempeñar el destino que se les encargase. (A.H.N., Consejos Suprimidos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm.46).

"". De Salcedo sabemos además que al separarse los Consejos y pasar al de Castilla, tenía el rango de oficial mayor más antiguo y de la primera y más antigua Escribanía de Cámara. También entonces se le confirió en propiedad la plaza de Tasador de Pleitos del Consejo de Castilla con preferencia a otros pretendientes. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

"". Don Diego Aguirre y don Manuel Marín se ausentaron con licencia en 1.810 y no volvieron a ocupar sus respectivas plazas, que al parecer quedaron vacantes (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

"". Real Decreto de 25 de junio de 1.809.

"". Don José de la Vega Carballo sirvió en Cádiz al Consejo de Castilla y después de su extinción fue Ministro de la Audiencia de Granada (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

"". Don Fernando María de Segovia serviría más tarde en el Consejo de Castilla en Cádiz como sustituto de don José Zorraquín, que en el año 1.808 sustituía a don Miguel Cornejo. También sirvió en el Consejo de Castilla en Cádiz como sustituto de don Manuel Luján (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

Mazarambroz****.

El Consejo de España e Indias estaba dotado de dos Agentes Fiscales, nombrados a propuesta de los Fiscales: fueron don Antonio Alfaro y don Mateo Sandoquis. Ambos desempeñarían la misma plaza en el Consejo de Castilla en Cádiz****.

Respecto a los porteros del Consejo reunido, contamos con varios documentos que nos permiten conocer sus peculiaridades aún con mayor detalle. El Real decreto de 25 de junio por el que se creaba un Consejo reunido en Sevilla mandaba, entre otras cosas que hubiera cuatro porteros de Cámara, con honores y uniformes de porteros de la Real Persona. Instalado el Consejo, en consulta de 22 de julio de 1.809 se propuso las personas que eran estimadas más beneméritas para servir las citadas porterías****. Eran por tanto plazas de nueva creación y así se afirmó con declaración expresa, ya que no se presentó en Sevilla ningún portero del Consejo de Castilla de los que ocupaban estas plazas en Madrid. Sabemos también que desempeñaron estas plazas en el Consejo reunido un total de seis personas, y que todas ellas serían más tarde porteros del Consejo de Castilla en Cádiz. Sus nombres eran don Antonio Carpio****, don Pablo Caro****, don Benito González Coronas, don Francisco García Sala, don Quirico Díaz y don Manuel Alzaga.

El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias contaba finalmente entre sus subalternos cuatro alguaciles, Pedro Gaitero, Francisco Maldonado padre y Francisco Maldonado hijo, y Juan José Navarro, así como un mozo de aseo, Juan Tuberías, todos los cuales continuaron ejerciendo el mismo oficio más tarde en el Consejo de Castilla en Cádiz.

****. Don Manuel Fernández Mazarambroz sirvió también en el Consejo de Castilla en Cádiz (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

****. Don Mateo Sandoquis fue nombrado más tarde Fiscal de la Audiencia de Madrid (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

****. La consulta fue publicada en el Consejo pleno de 27 de julio y acordado su cumplimiento (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 13).

****a

****. Don Pablo Caro serviría más tarde en una de las Secretarías del Consejo de Estado, falleciendo durante la Guerra. (A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46).

Los procuradores que servían en el Consejo, aunque no formaban parte propiamente de su estructura orgánica, también los incluimos en este estudio. Sabemos que por auto del Consejo reunido de 16 de febrero de 1.811, a solicitud de los procuradores presentes en Cádiz, se aprobó el nuevo arancel interino de sus derechos****. Como ejemplos de procuradores que sirvieron en el Consejo reunido, tanto en Sevilla como en Cádiz, podemos citar a don José María Rojas y don Lorenzo Cisneros****.

De esta manera comprobamos que esta peculiar institución contó con un total de treinta empleados o subalternos****, y guardando en su composición una estructura orgánica similar a la de los otros Consejos.

De la sede material del Consejo de España e Indias, sabemos que tuvo dos residencias. La primera fue en Sevilla y duró hasta los últimos días de enero del año 1.810, trasladándose seguidamente a Cádiz, en cuya Casa Episcopal quedó establecido el Supremo Tribunal****.

c) Conclusión a la Estructura Orgánica

Concluimos este pequeño trabajo llamando la atención sobre algo que vemos ya con detenimiento al estudiar la estructura orgánica del Consejo de Castilla. Nos

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.148 núm. 8.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.021 expediente núm. 16.

****. No incluimos en este número a los procuradores, abogados y otros empleos similares que no pertenecían propiamente al personal del Consejo reunido.

****. CALVO MARCOS, M, "Régimen parlamentario en España en el siglo XIX", pág. 214, citando un edicto del Decano del Consejo de España e Indias, don José Joaquín Colón, fechado el 18 de agosto de 1.810. Argüelles nos completa esta noticia: "Los desastres que trajo consigo la derrota de Ocaña en noviembre de 1.809 obligaron a la Junta Central a precipitar su salida de Sevilla para la isla de León, adonde había decretado antes trasladarse y abrir las Cortes." (ARGÜELLES, A., "La Reforma Constitucional de España", tomo I, pág. 161).

referimos a los múltiples problemas que se plantearon como consecuencia de la nueva creación de plazas que el Consejo reunido debió hacer; y por los derechos adquiridos de aquellos que las servían en el Consejo de Castilla en 1.808, y que no pudieron acudir a Sevilla o Cádiz. En su momento veremos cómo fue resuelta esta cuestión. Ahora sólo adelantamos cómo existía un indudable espíritu de continuidad entre el Consejo de Castilla de 1.808, el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias y el Consejo de Castilla nuevamente constituido. Este principio será generalmente aceptado y considerado a la hora de resolver esta espinosa cuestión.

Este es el motivo fundamental por el que interesa incorporar a este trabajo un detenido estudio del Consejo reunido, que representaba la continuidad del Consejo de Castilla en un periodo histórico muy determinado.

3. Competencias. La labor del Consejo reunido.

A la hora de estudiar lo obrado por esta institución, podemos clasificar su actuación en dos grupos: los expedientes ordinarios de gobierno, gracia y justicia, y las consultas que podríamos calificar como políticas, aunque propiamente podrían ser incluidas en el primero de aquellos grupos. Sin duda, estas últimas consultas son lo más conocido hoy en día sobre el Consejo reunido. Y ello debido en algún caso por el tema tratado, y en otros por el revuelo que supuso en el momento de su publicación. Sin embargo, primeramente estudiaremos los que hemos llamado expedientes ordinarios del Consejo reunido y más adelante veremos las principales consultas.

1) Expedientes ordinarios del Consejo

El Consejo reunido tenía competencias en asuntos de gobierno, gracia y justicia. Sin embargo, es conocido que fueron muy pocos los pleitos entonces planteados, por lo que su labor se centró más bien en

asuntos de gobierno y gracia****. Hemos repasado toda la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid sobre el Consejo reunido en Sevilla en Cádiz, lo que va a permitirnos conocer con un cierto detalle los tipos de asuntos que fueron tratados en aquella institución.

a) El Consejo y las Juntas provinciales

El Consejo trató en bastantes expedientes cuestiones relacionadas con las Juntas y sus competencias. En general, estas Juntas plantearon frecuentes conflictos de competencias con otras autoridades territoriales o con el mismo Consejo. Éste recibía quejas y solicitaba a la Junta correspondiente la sumisión a su autoridad. Curiosamente, la supresión e inexistencia del Consejo de Castilla durante unos meses, así como el desconocimiento de su existencia en los meses de la dominación francesa de Madrid, llevó a muchas Juntas a asumir y ejercer competencias propias de la jurisdicción del Consejo de Castilla. Y fue ésta una fuente constante de pleitos y reclamaciones****.

Del estudio detallado de los expedientes del Supremo Tribunal varias provincias destacan por los frecuentes conflictos que plantearon al Consejo. De un lado Asturias, ya que el Consejo debió conocer los problemas relativos al espinoso asunto de la supresión de la Junta Superior de Asturias por el Marqués de la Romana y la creación de una nueva Junta****. Otros polos de conflicto

****. SANCHEZ-ARCILLA, J., op. cit., págs. 1046 y 1.047.

****. Un ejemplo de esta cuestión sería la queja del alcalde mayor de Azuaga contra la Junta de Llerena, por excederse en sus facultades e imponer una sanción al mismo alcalde: "Tal Junta subalterna no tiene facultades más que para comunicar las órdenes de la Superior de la provincia, distinguiendo siempre a los Magistrados de los alcaldes pedáneos de que se compone su partido...perteneciendo al Consejo contener el despotismo de los pueblos y de las Juntas subalternas, que se va propagando a la sombra de las actuales circunstancias" (Extracto de la instancia remitida al Consejo reunido, A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.992 núm. 39).

****. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.996 núm. 1. Los legajos 11.995 y 11.996 incluyen abundante documentación sobre el particular. Entre otros documentos, aparecen varios escritos de Jovellanos,

fueron Mallorca""", Extremadura""", y Valencia""".

Casos de este orden tratados por el Consejo fueron el correspondiente a los abusos de poder de la Junta de Ayamonte"""; el referente a la insubordinación de la Junta Superior de Extremadura y abuso de poder en la comisión que dio al Conde de Montijo"""; o el expediente sobre la petición de aprobación del reglamento formado por el Tribunal de Seguridad de la ciudad de Granada, que no hacía sino prácticamente reproducir como propias, unas leyes ya aprobadas por el Consejo""".

El dictamen del Fiscal don Antonio Cano Manuel, de 7 de julio de 1.810, en el expediente sobre reducción de las Juntas Superiores de provincia ofrece también algún interés:

"Al Consejo son bien conocidos los fundamentos que han servido de apoyo del Ministerio Fiscal para reclamar la subsistencia de estas corporaciones y por lo

entonces miembro de la Junta de Asturias.

""". Ver, por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.986 núm.7 y 8.. Estos expedientes los problemas planteados como consecuencia de la creación de un Tribunal superior para ejercer las funciones del Consejo de Castilla estudiaba

""". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.987 núm.3.

""". El profesor SANCHEZ-ARCILLA, en su trabajo "El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias" ha sacado a la luz otros expedientes inéditos del Consejo reunido, que podrían servir para completar la relación aquí recogida.

""". "La Junta de Ayamonte no sólo se ha excedido en sus facultades, abrogándose las del Consejo, sino en el modo de usarlas, impropio de la equidad que debe caracterizarla... Por manera que ha faltado a los objetos de su instituto, ha ocupado el tiempo en negocios que no le compete, distrayendo su atención de aquéllas a que debía directamente aplicarla, y ha hollado los derechos de un vasallo que en ninguna manera se ha hecho acreedor a semejantes vejaciones..." (Dictamen del Consejo reunido, 12 de mayo de 1.810, A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz,, legajo 50. 127 expediente núm. 3).

""". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 6.

""". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 5.

tanto excusa repetirlos, y si las circunstancias actuales u otras causas impiden que se tome la providencia de suprimirlos, menos perjudicial sería dejarlas en el estado en que se encuentran hasta que la Nación legítimamente representada en Cortes delibere lo conveniente, que autorizar el plan de subsistencia perpetua, que entre otros males ha de dar ocasión al gravísimo de excitar a las Américas que se las permita manejarse por iguales cuerpos..."****.

Sin duda un caso interesante cursado por el Consejo es uno nacido de una representación de la Junta Superior de Valencia. En esta representación informaba haber admitido en Peñíscola a la Junta de Aragón, así como haber concedido también al Tribunal de seguridad pública establecerse también en territorio del Reino de Valencia (en Benicarló)****.

Con referencia a las Juntas mencionaremos finalmente un expediente nacido como consecuencia de un informe de la Junta de Observación y Defensa del Reino de Valencia sobre la ratificación de un acuerdo de dicha Junta para el socorro de las viudas de guerra. Tiene interés para nosotros por la doctrina desarrollada por el Consejo reunido sobre los llamados "traidores a la Patria"****.

En lo relativo a las Juntas, la actitud del Consejo reunido fue similar a la que había mantenido el Consejo de Castilla: recelo ante sus poderes desmedidos y petición de control y sometimiento a la legalidad vidente.

b) Gobernación de los pueblos

Sobre cuestiones de gobernación de los pueblos, aparecen expedientes de muy diversos temas. En uno de ellos el Ayuntamiento de Alicante solicitaba que se relevase al Mariscal de Campo don Cayetano Iriarte, gobernador militar y político de la plaza, de la fianza de

****. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm. 5.

****. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.985 núm. 14.

****. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.985 núm. 33.

corregidores prevenida por la ley****. También hay algunos casos casos de propuestas de Regidores o propuestas para designar oficios municipales****.

El profesor Sánchez-Arcilla menciona en su ya citado estudio sobre el Consejo reunido****, un curioso caso originado en una representación hecha por el Ayuntamiento de la Ciudad de Palma, solicitando permiso para colocar en su Casa Consistorial el retrato de Fernando VII****.

El Consejo abordó interesantes conflictos de competencias****, como el suscitado entre el Alcalde Mayor de Valencia, don José Pidal y Cuadras, como Corregidor interino, y el Intendente en comisión don José Canga Argüelles, sobre la presidencia de las juntas de los gremios y oficios y asuntos que ocurriesen entre sus individuos****.

O bien la queja del alcalde mayor de Los Barrios, por la conducta de un presbítero, vocal de la Junta de Bagages y Alojamientos, que se atrevió a registrar con

****. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.985 núm. 36. Este caso incluye también un interesante supuesto de conflicto de competencias entre varias autoridades.

****. Por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.987 núm. 36, 19 de octubre de 1.809. Este expediente es también un claro ejemplo de caso en el que el Consejo decide apartarse de dictamen del Fiscal para seguir otro sendero jurídico distinto; también en legajo 11.988 núm. 11.

****. SANCHEZ-ARCILLA, J., "El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias", op. cit., pág. 1.048.

****. Solicitaba el distinguido honor que tenían otras ciudades de voto en Cortes de tener en la sala donde celebraban sus ayuntamientos al Soberano en retrato bajo dosel. Alegaban que Mallorca mereció desde el año 1.718 la Real gracia del voto en Cortes y sin embargo no tenía esepreciado distintivo. En su dictamen, el Fiscal manifestaba no conocer la normativa sobre tal privilegio. El Consejo finalmente no encontró inconveniente para conceder tal permiso, en vista de tan noble solicitud (Sevilla, 16 de agosto de 1.809). (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.986 núm. 6).

****. Hay un caso curioso de competencia entrela justicia de Carrascosa de Haro (Cuenca) y el alcalde mayor de esta villa, en A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.987 núm. 31.

****. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.985.

auxilio de trepa la casa del Fiscal de Marina para embargarle dos mulos****.

c) El Consejo y la libertad de imprenta

El supremo tribunal conoció de asuntos relativos a la libertad de imprenta. Sabemos que al Consejo reunido le costó mucho controlar la ilimitada libertad que tenía la prensa. Artola atribuye esta dificultad en parte por la resistencia de las Juntas provinciales a someterse a las órdenes del Consejo y de las Audiencias****.

Así, por ejemplo, por orden del Consejo todos los libreros e impresores de Sevilla debían entregar en la Secretaría General del Consejo dos ejemplares de todos los papeles periódicos que fueran publicados****. O la facultad que tenía el Consejo de conceder permisos para imprimir almanaques y calendarios****. A veces también concedía títulos de impresión, como fue el caso de don Nicolás Gómez de Requena, que solicitaba el título de impresor del Gobierno****.

Quizás el expediente de más importancia relativo a la libertad de imprenta, de entre los vistos por el Consejo, fue el titulado: "Sobre la libertad de imprenta: sus antecedentes e incidencias en el Consejo", que incluye, entre otros documentos, un interesante informe del Consejo reunido contra la libertad de prensa****. El Supremo Tribunal expresaba en su informe su clara opinión contraria a los abusos que se habían introducido con la libertad de

**** A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.992 núm. 11..

**** ARTOLA. M., "Los Orígenes de la España Contemporánea", tomo I, págs. 245 y ss.

**** A.H.N., consejos, Consejos reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.991 núm. 19.

**** Por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.982 núm. 12.

**** A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.004 núm. 35.

**** A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm.2.

imprensa"".

Finalmente y concluyendo este apartado sobre impresiones, podemos destacar entre los expedientes vistos por el Consejo varias solicitudes para editar o traducir libros"".

d) Asuntos eclesiásticos

Otro grupo de expedientes que llegaron al Consejo en aquellos meses hacían referencia a asuntos eclesiásticos. Entre ellos abundaban las solicitudes de secularización; también eran destacables los informes de saqueos franceses, así como el pase de bulas"", quejas contra eclesiásticos"" y la solicitud de diversos beneficios eclesiásticos o rentas"".

"". Señala Artola que para corregir estos abusos fue aprobado el Decreto de las Cortes de Cádiz de 10 de noviembre de 1.810 (ARTOLA, M., "Los Orígenes de la España Contemporánea", págs. 245 y ss.).

"". Por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, expediente para la concesión del privilegio exclusivo de edición por dos años de la obra "Correspondencia diplomática entre las Cortes de Francia y Roma desde el principio de las actuales hostilidades hasta la deportación del Sumo Pontífice".

"". El legajo 11.982 núm. 8 de la sección Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, Consejos, A.H.N., contiene un expediente de pase de bula de dispensa matrimonial entre dos personas que debían ser de alcurnia, don Francisco Manuel Godoy y Doña Isabel Rita, residentes en Málaga.

"". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.988 núm.10: el Regente de la Jurisdicción se quejaba de que un religioso sacerdote se negaba a oír en confesión a varias personas del pueblo, entre ellas a las sobrinas del cura, por obedecer a una orden intimidatoria dada por los franceses.

"". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.988: la Correctora del monasterio de Religiosas Misioneras de San Francisco de Paula en Daimiel acudía al Consejo para que les fueran pagadas unas rentas adeudadas por varios particulares pudientes, ante la situación de indigencia de aquella comunidad.

El Consejo estudió detenidamente si se declaraba o no la Guerra de la Independencia como guerra de religión, manifestándose contrario a esta denominación****. En esta temática el Consejo de España e Indias, como en su momento hacia el Consejo de Castilla, ordenó varias peticiones de rogativas públicas****. Algunos expedientes trataron también sobre los crímenes franceses contra personas sagradas o bienes de culto, como un curioso expediente sobre reglas que debían adoptarse para proceder en las causas de delitos atroces contra eclesiásticos****; o varios informes sobre pillaje francés y reacción de los pueblos****, como el resultante de un oficio del obispo de Guadix, por la entrada de los franceses en su diócesis****. También conoció el Supremo Tribunal algunos conflictos de competencias****.

Igualmente fueron llevados a conocimiento del Consejo diversos asuntos de orden público e infidencias. Así, por ejemplo, conoció del caso de infidencia del teniente primero de corregidor de la Villa y Corte de Madrid, don Torcuato Antonio Collado. Este caso tiene un especial interés en cuanto Collado fue nombrado por el Duque de Berg miembro del Consejo de Castilla y asistió como tal a las reuniones del Consejo en el llamado primer reinado de José Bonaparte****.

****. VILLANUEVA, J.L., "Mi viaje a las Cortes", to I, pág. 93.

****. Por ejemplo, la orden de 26 de febrero de 1.810 (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.999 núm. 30).

****. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.999 núm. 31., de 23 de julio de 1.810.

****. Muchos de los expedientes conservados informan de esta clase de episodios de la guerra. Ver, por ejemplo, el correspondiente al saqueo del pueblo de Holguera, fechado el 25 de octubre de 1.809 (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.987 núm.22).

****. Este expediente incluye una carta impresa del ministro de Negocios Eclesiásticos, Azanza, fechada en Andújar el 24 de enero de 1.810, dirigida a los obispos para que se uniesen a la causa napoleónica y convenciesen a su clero y a sus feligreses (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.982 núm. 6).

****. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.985 núm.1.

****. El Consejo reunido reconoció la conducta digna de Collado, quien renunció a la plaza y dignidades recibidas del intruso y huyó de la Corte de Madrid. Collado fue

Otros expedientes destacables eran, por ejemplo, el que estudiaba las medidas a adoptar contra las cuadrillas de facinerosos y salteadores que afligían la provincia de Sevilla""; el conocido asunto de la causa formada al arzobispo de Zaragoza por adhesión al partido francés, que tantos quebraderos de cabeza traería al Supremo Tribunal""; y un curioso expediente formado con motivo de un alboroto ocurrido en el presidio correccional de Cádiz en la noche del 23 de febrero de 1.810, en el que el Consejo reunido dio su visto bueno a dos penas de muerte, otra de azotes y presidio en Filipinas y varias penas más de privación de libertad"".

e) Dispensas

Otro grupo de asuntos conocidos por el Consejo se referían solicitudes de dispensas de diverso género y de venias para que un menor pudiera administrar sus bienes. Hay un caso especialmente interesante por la persona que lo solicitaba: fechado el 31 de marzo de 1.810, se conserva el expediente del Conde de Toreno, en solicitud de dispensa de menor edad para administrar sus bienes, nombrar jueces en sus jurisdicciones y hacer en sus estados y ventas lo mismo que su difunto padre"".

repuesto en el cargo de teniente primero de corregidor, para el que había sido nombrado por el Rey Carlos IV, 19 de marzo de 1.809 (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.991 núm. 9).

"" A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.992 núm. 30.

"" A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.991 núm. 8.

"" El Fiscal del Consejo pidió además que le fuera coartada la mano a uno de ellos, después de muerto, en señal de escarmiento público. Aunque el Consejo aprobó las penas, en su sentencia señalaba también que un asunto así no era de su competencia, por no hallarse Cádiz en situación de alboroto público. (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990 núm. 42).

"" Por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido, legajo 11.994 núm. 11; y legajo 11.989 núm. 9.

f) Asuntos varios: de Justicia, Cortes, propios y gracias diversas

El Consejo tuvo conocimiento de asuntos de Justicia, como solicitudes de que una causa fuera estudiada por el Consejo con preferencia a otra jurisdicción"", conocimientos de pleitos de hidalguía"", robos y otros delitos"" o indulto de una pena capital"".

Sabemos también que el Consejo conoció algunos asuntos relacionados con la convocatoria de Cortes, como por ejemplo varios recursos sobre elección de diputados en Asturias"".

También podemos reunir otro grupo de asuntos referentes a bienes propios de distintas localidades"", así como un nutrido grupo de casos sobre construcción de cementerios, consecuencia de las calamidades de la guerra"". Junto a éstos, agrupamos otros expedientes que recogen medidas del Consejo para afrontar las penalidades de la guerra y para la reunión de fondos para costear los

"". Por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.998 núm. 5, Asunción por el Consejo de causa seguida por el corregidor de Ciudad Real.

"". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990 núm. 80.

"". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.987 núm.33: el alcalde mayor de Villaescusa de Haro (Cuenca) remitía al Consejo los autos de cuatro personas sobre robo en una casa; y los autos sobre la fuga de la cárcel de tres de ellos y su posterior detención.

"". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.987 núm.20.

"". A.H.N., Consejos, Consejos reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.995 núms. 3 y 4.

"". Por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.994 núm. 25; y; legajo 12.006 núm. 19.

"". Por ejemplo, A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.006 núm.15.

gastos militares"".

Finalmente podemos mencionar otra serie de expedientes burocráticos tratados por el Consejo, como las incorporaciones a Colegios de Abogados"", la concesión de títulos de maestros de primeras letras"", dispensas de estudios con motivo de la Guerra"" o petición de otros títulos"" o gracias"".

"". El legajo 28.A núm.52 de la Sección Estado, del Archivo Histórico Nacional recoge una serie de Reales Cédulas del Consejo de España e Indias con este fin: una para que todas las alhajas de plata y oro labrados de las iglesias, no necesarias para el culto, se redujesen a moneda; otras para que todos los españoles contribuyesen por vía de préstamo forzoso con la mitad del oro y plata labrada que tuviesen en su poder; otra prohibiendo el uso de coches y carruajes de recreo sin permiso del Gobierno; otras tres destinando a las urgencias del Estado los productos de las encomiendas vacantes; los de las memorias y obras pías que no tuviesen aplicación a los objetos expresados; y los de las procedencias francesas cuya averiguación estaba encargada al tribunal de represalias (30 de diciembre de 1.809).

"". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990 núm. 28; o el legajo 11.985 núm. 19.

"". A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.004 núm. 46: este expediente contiene a su vez 22 expedientes sobre dación de títulos de maestros de primeras letras.

"". Don Bartolomé Mosquera solicitó a Consejo reunido la permuta de tres años de Filosofía por tres años de Jurisprudencia, por haber quedado impedido en la Batalla de Bailén, donde sirvió de cadete del Batallón de Voluntarios de Gerona, 11 de septiembre de 1.810. (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.005 núm. 70).

"". Don Anastasio Jaramillo, revisor de número, pedía en abril de 1.810 que se le tuviera presente para los cotejos y revisiones que hubieran de hacerse en los asuntos de conocimiento del Consejo. El Consejo reunido dio su visto bueno (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.991 núm. 11); también podemos mencionar aquí una solicitud del título de regidor perpetuo por juro de heredad de la ciudad del Puerto de Santa María, con varios privilegios anejos (A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.994 núm. 17).

"". Por ejemplo, "Solicitud de vecino del Puerto de Santa María para que se le conceda tener un preñidero de gallos", en A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.994 núm.23.

2) Consultas del Consejo reunido

Sin embargo, la actuación del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias fue sobre todo conocida por su labor política y por las importantes consultas que presentó a la Junta Central y al Consejo de Regencia. Son especialmente estas consultas las que son objeto de atención por historiadores que se han fijado en el Consejo reunido.

No puede decirse que el Consejo reunido no tuviera una misión precisa^{***}, sino más bien que era una institución de circunstancias que cubría el hueco dejado por los Consejos suprimidos. De esta manera, ejercía las funciones propias de estos Consejos en las peculiares circunstancias del momento, y con una cierta vocación de interinidad. Sin embargo, fue una institución cuya labor ha pasado de alguna manera encubierta para los historiadores. Por su parte Artola considera que su influencia en las decisiones sufrió una sensible reducción con respecto a la que tenía el Consejo de Castilla^{***}. Lo que parece fuera de toda duda es que la institución se esforzó en desempeñar el papel institucional que antes ejercían los otros Consejos reunidos, y que en sus procedimientos asumió el estilo del Consejo de Castilla. "Ni en el modo de enjuiciar ni todo el conjunto de la legislación civil y criminal parecieron variación importante y duradera"^{***}.

Sin embargo, sí que tuvo varias intervenciones relevantes en su corto periodo de existencia. El Consejo realizó una serie de consultas que tuvieron una cierta trascendencia. Por un lado, intervino decisivamente en la propuesta sobre el nombramiento de una Regencia. Así lo expresa Suárez Verdeguez^{***}: "La propuesta sobre el nombramiento de una Regencia se planteó de nuevo en el seno

^{***}. Artola en "Antiguo Régimen y Revolución Liberal" (pág. 163) afirma que el Consejo reunido en su periodo de existencia "no tiene una precisa función".

^{***}. ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", págs. 162 y 163.

^{***}. CONDE DE TORENO, op. cit., tomo III, pág. 206.

^{***}. SUAREZ VERDEGUER, F., "El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810)", EUNSA, Pamplona 1982, págs. 294 y 295.

de la Junta Central a través de dos conductos: una moción en regla del vocal por Aragón Francisco Palafox, presentada el 21 de agosto, y una consulta del Consejo de España e Indias del 26 del mismo mes. La primera fue la que dio lugar a su discusión y votación en la Central, que también tuvo en cuenta (si no oficialmente, sí al menos en el voto de algunos de los vocales) la consulta del Consejo; pero de ésta se difundieron algunas copias****, por lo que el texto llegó a ser conocido por las Juntas provinciales, que reaccionaron contra el Consejo en exposiciones y representaciones que, aparte su protesta, daban a conocer sus puntos de vista acerca de la Junta Central y las Cortes*****.

En su consulta, El Consejo de España e Indias proponía a la Central que se disolviese y nombrase ella misma otro poder supremo de una sola persona, mencionando al Cardenal Borbón, Arzobispo de Toledo y único miembro de la Familia Real que residía en España. Proponía también que para aliviarle de las cargas del puesto se le nombraran cuatro Regentes más como adjuntos.

El profesor Suárez afirma que el hecho de que "esta consulta se hiciera pública a través de algunas copias fue tomado como una prueba de la intención malévola del Consejo, que por tal procedimiento procuraba el desprestigio de la Junta Central*****. Sin embargo, de la lectura de este texto y de los dictámenes de los Fiscales no parecen justas

****. "De esta consulta, con estudio o sin él, se habían difundido copias por varias partes y era materia ya de todas las conversaciones." (ARTOLA, M., "Los Orígenes de la España Contemporánea", pág. 226 nota 37, citando también a Jovellanos, "Memoria...Junta Central", pág. 551).

***. "A la hora de estudiar la moción de Palafox se tuvieron en cuenta varios antecedentes: la consulta del Consejo reunido de 26 de agosto de 1.809 y la del Consejo de Castilla de 18 de octubre de 1.808, junto con la memoria de Jovellanos de 7 de octubre de 1.808" (SUAREZ VERDEGUER, F., op. cit., págs. 298 y 299). Cfr. también ARGÜELLES, A. "La Reforma Constitucional de España", págs. 162 y ss.

****. SUAREZ VERDEGUER, F., "El proceso de la convocatoria a Cortes", pág. 324; Manuel Calvo en "Régimen parlamentario de España en el siglo XIX" afirmaba que la filtración de la consulta fue obra del propio Consejo reunido, pero el Supremo Tribunal obtuvo con ello un resultado contrario al que se proponía, pues todas ellas contestaron a la Junta Central concediéndole un voto de confianza. (op. cit., pág. 70).

las acusaciones vertidas contra el Supremo Tribunal"". Coincidimos con Suárez Verdeguer en que tampoco parece demostrarse ninguna prueba de connivencia entre Palafox y el Consejo de Castilla.

Artola por su parte afirma que con esta consulta y las anteriores en la misma línea, el Consejo lo que hacía era poner en cuestión el principio mismo del levantamiento popular"". Sin embargo, parece más bien que tanto en esta como en anteriores consultas del Consejo de Castilla, el Consejo lo que defiende es el espíritu legalista que siempre había propugnado"", aunque es indudable que el Consejo siempre mantuvo recelos ante la Central y éstos eran bien conocidos del público"". Parece

"". Ver A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm.4; también SUAREZ VERDEGUER, F., op. cit., págs. 325 y ss; y CALVO MARCOS, M., op. cit., págs. 70 y ss.

"". ARTOLA, M., Estudio preliminar al tomo XCVIII de la B.A.E., Memorias del Reinado de Fernando VII, pág. XV.

"". "He aquí un significativo párrafo de la consulta: "Ya en su día puede conocer que no se equivocó aquel Supremo Tribunal (Consejo de Castilla) en sus consejos y reflexivas meditaciones, y que sea cual fuese el gobierno que se hubiese preferido, no pudo ni debió separarse de la letra de la ley" (recogido por CALVO MARCOS, M., "Régimen parlamentario de España en el siglo XIX").

"". Así se refería Argüelles a la oposición del Consejo reunido a la Junta Central: "Entre sus émulos y opositores nadie excedía en odio y actividad al Consejo reunido, compuesto de fragmentos de los Tribunales de la capital, disueltos por Napoleón en diciembre de 1.808. Muchos de sus Ministros se habían refugiado en Sevilla donde, a pesar del descrédito y falta de popularidad en que se hallaban, la Junta Central los acogió lo mejor que pudo, y después formó con ellos, bajo aquella denominación, un cuerpo consultivo que desempeñase las funciones de los anteriores Consejos.

Asociados ahora estos magistrados a otros descontentos, renovaron en Cádiz su hostilidad contra la dispersa Junta, empleando entre otras armas, la doctrina con que el Consejo Real había intentado en Madrid resistir su reconocimiento. Apoyados en ella y en la agitación que reinaba en los ánimos, clamaban por que el gobierno se disolviese y nombrase en su lugar una Regencia. Este acto, en circunstancias tan críticas, envolvía grandes dificultades, que sólo se podían superar procediendo con prudencia y buena fe.

Sostener que la Junta Central era ilegítima y aún usurpadora, y al mismo tiempo pretender que nombrase sucesor; suponer que el poder que éste ejerciese sería legal, cuando ninguna otra autoridad ni facultades podía recibir, sino las

deducirse un deseo de seguridad jurídica por parte del Consejo reunido, frente a la innovación que suponían la Central y las Juntas provinciales"".

Sin embargo, las Juntas no lo vieron así. El texto de la consulta del Consejo fue leído en sus asambleas plenarias y mayoritariamente rebatido o condenado. Casi unánimemente las Juntas manifestaron su oposición al Consejo, quien llegó a ser duramente criticado en muchos casos"". La reacción de las Juntas fue por tanto de adhesión al la Junta Central, a la que veían como una institución elegida por la Nación a través de ellas, a la que veían vinculada su propia existencia"".

Parece lógica la reacción de las Juntas ante esta consulta del Consejo. Era previsible ante un texto que de alguna manera no sólo debilitaba los fundamentos de la Junta Central sino de las mismas Juntas provinciales, al defender la legislación vigente. Por ello mismo, no parece sensato que el propio Consejo reunido se decidiera a filtrar a las Juntas este texto, conocedor además el Consejo de la

que se le comunicase aquella magistratura, eran contradicciones que no podían conciliarse con facilidad. Sin embargo, los enemigos de la Junta Central añaden más a la impaciencia con que deseaban su disolución; y el Consejo reunido creía por su parte, que con tal que el mando se resignase, sino en sus manos, a lo menos en las de personas que se sometiesen enteramente a su dirección y consulta, lo demás importaba poco. Ni podía pensar de otra manera quien aspiró siempre a ser, no sólo depositario de las leyes, sino su intérprete y su órgano único y exclusivo..." (ARGÜELLES, A., "La Reforma Constitucional de España", págs. 162 y 163).

"". Federico Suárez, en "El proceso de la convocatoria a Cortes" llega a la misma conclusión: lo que el Consejo reunido pidió es que se tuvieran en cuenta las leyes vigentes y que se cumplieran. Y añade un hecho curioso: "del peso que esta petición entrañaba se hicieron cargo las Juntas y algunos vocales de la Central, y a partir de este momento, y de modo ya descubierto, incluso en el mismo seno de la Junta Suprema, se negó la validez de las leyes vigentes en 1.808" (SUAREZ VERDEGUER, F., op. cit., pág. 332).

"". Es interesante el estudio que hace F. Suárez de la reacción de las Juntas principales ante el manifiesto del Consejo (op. cit., págs. 332 a 343).

"". Las Juntas criticaron bastante al Consejo: rechazaron su autoridad, le acusaron de pasividad ante los abusos en tiempos de Carlos IV, su actitud condescendiente ante la Junta de Gobierno y las autoridades francesas en los días difíciles hasta la primera salida de los franceses de Madrid y la oportunidad de esta consulta (ver SUAREZ, F., op. cit., pág. 342).

animadversión o recelos existentes entre el Supremo Tribunal y las Juntas. Por ello mismo, parece más lógico que fuera otra persona la que propagara este escrito, persona probablemente interesada en su difusión entre las Juntas. Si el gran beneficiario, aunque sólo inicialmente, de esta difusión fue la Junta Central, ¿no pudo ser responsable la propia Junta de esta difusión? He aquí una simple hipótesis que para aceptarse tendría que ser probada.

Lo cierto es que la consulta del Consejo reunido terminó produciendo sus efectos y la Junta Central, acosada por los problemas de todo género que se agolpaban a su labor de gobierno, accedió a la formación de una Regencia, en los términos insinuados por aquel Supremo Tribunal****.

Otra de las conocidas consultas del Consejo de España e Indias, esta vez ya al Consejo de Regencia****, hacía referencia a la reducción del número de componentes de estas Juntas provinciales. La Regencia había aprobado un decreto reduciendo el número de estas Juntas, pero el Consejo pleno de 21 de julio de 1.810 acordó proponer a aquel Consejo la suspensión de la circulación del Decreto, dejando a las Juntas en el estado en que se encontraban

****. Un expediente de creación e instalación del primer Consejo de Regencia se encuentra en el legajo 11.999 núm.33, de la Sección Consejo reunido en Sevilla y Cádiz (A.H.N.). El Consejo reunido conoció el decreto de la Junta Central de 29 de enero de 1.810, pero parece que no manifestó su enterado hasta el 16 de febrero. Sin embargo, la consulta en que reconoce la suprema autoridad de la Regencia llevaba fecha de 5 de febrero e incluía un importante discurso del Decano Colón.

****. Uno de los cinco miembros del Consejo de Regencia sería el Consejero del Consejo reunido. Se trataba de don Esteban Fernández de León, contador general de Indias, como recoge F. Suárez en "El proceso de la convocatoria a Cortes" (pág. 441). "Aunque no nacido en América pertenecía a una familia distinguida y arraigada en Caracas" (JOVELLANOS, "Memoria", pág. 560, recogido por SUAREZ, F., op. cit.). Esta noticia queda confirmada por el legajo 84 de la Sección Estado, serie "Papeles de la Junta Central", del A.H.N.: Don Esteban Fernández de León era "ministro del Consejo de España e Indias por consideración a las Américas". Sin embargo, sabemos por Toreno (op. cit., tomo III, pág. 203) que fue inmediatamente sustituido por don Miguel de Lardizábal y Uribe, hermano del Consejero de Castilla don Manuel de Lardizábal. Los motivos de la remoción de Fernández de León, según Toreno, fue el no haber nacido en América y la oposición que mostró la Junta de Cádiz.

hasta que las Cortes próximas deliberasen sobre el asunto****. Sin embargo, en esta ocasión el Consejo de Regencia no siguió el dictamen del Consejo reunido y decidió la publicación del decreto, con fecha 17 de junio.

Pero quizás el asunto de mayor relevancia en que intervino el Consejo reunido fue el proceso de convocatoria de Cortes.

La Junta Central había acordado el 26 de octubre de 1.809 un decreto por el que la convocatoria de Cortes tendría lugar el 1 de enero inmediato y por el que la reunión de Cortes sería el 1 de marzo siguiente****. Previamente, el 8 de junio de 1.809, había aprobado un decreto creando la Comisión de Cortes, encargada de estudiar y preparar esta convocatoria****.

La Comisión de Cortes solicitó dictamen del Consejo de España e Indias sobre la reunión de las Cortes en una o dos Cámaras****. El Consejo presentó su informe el 22 de diciembre de 1.809 y en él se inclinaba por "un solo congreso que delibere y decida en común los negocios", inclinándose más por la preferencia popular que por lo representado en nuestra legislación de Partidas****. En su propuesta el Consejo reunido se manifestaba por tanto contrario a la reunión de estamentos****. Sin embargo, en su

****. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 12.000 núm.5.

****. CALVO MARCOS, M., "Régimen parlamentario en España en el siglo XIX", pág. 80.

****. La Comisión de Cortes, entre otras funciones, pediría y recibiría directamente las noticias, informes y dictámenes de que hablaba el propio artículo 4 del Decreto, a los Tribunales, Consejos, Juntas Superiores, Ayuntamientos, obispos, cabildos, universidades y demás autoridades o personas que juzgara conveniente (CALVO MARCOS, M., "Régimen parlamentario de España en el siglo XIX", pág.61).

****. "Al convocar Cortes se estudió si habían de celebrarse según el Antiguo Régimen o según el Régimen moderno." (SOLDEVILLA, F., "Las Cortes de Cádiz. Orígenes de la Revolución Española", Madrid 1910, pág. 26.

****. Afirma el Conde de Toreno que varios Consejeros presentaron un voto particular en sentido contrario: el decano don José Colón, el Conde del Pinar y los señores Riega, Duque de Estrada y don Sebastián de Torres (op. cit., tomo III, pág. 376). Cfr. también ARGÜELLES, A., "La Reforma Constitucional de España", tomo I, págs. 207 y ss.

****. ARTOLA, M., "Los Orígenes de la España Contemporánea", tomo I, págs. 376 y 377.

dictamen el Consejo sugería que los privilegiados conservaran una sombra de su antigua prerrogativa, al admitir a seis Grandes, doce títulos elegidos por ellos mismos y veinticuatro nobles no titulados elegidos por los ayuntamientos; y al clero permitía enviar a cuatro arzobispos y a otros cuatro obispos "sin indicar la forma de su elección".

La Comisión de Cortes criticó las propuestas del Consejo, por separarse en esta ocasión de lo establecido en nuestras leyes tradicionales. De hecho, la Comisión no aceptó todas las proposiciones del Consejo. Propuso y la Central lo aceptó, que los prelados en ejercicio y los grandes fueran convocados individualmente. También aprobó la Central a propuesta de la Comisión, -y en esto revocó una anterior decisión-, que las Cortes se reunieran en dos Cámaras. Como es conocido, la pérdida de este decreto y la precipitación de los acontecimientos llevaría más tarde a la convocatoria de unas Cortes extraordinarias con una sola Cámara popular, sin estamentos. Nuevamente se solicitó una consulta del Consejo reunido. Así lo narraba Agustín Argüelles:

"Obligada al fin la Regencia a cumplir lo

***. SUAREZ, F., "El proceso de la convocatoria de Cortes", pág. 394.

***. "¿Quién creyera que este respetable tribunal, encargado de velar sobre la Constitución del Reino, y que tanto blasona de respetarla, entrase tan a paso llano a derogar sus fundamentos?" (SUAREZ, F., op. cit., págs. 394 y 395).

***. "No es posible juzgar las razones que movieron a la Junta Central a abandonar la propuesta del Consejo reunido, porque no constan en las escasas memorias publicadas hasta el día. Es evidente que siguió otro camino, y el plan que adoptó en su lugar merece atención especial, y lo mismo las causas que estorbaron la ejecución de una de sus partes..." (ARGÜELLES, A., op. cit., tomo I, pág. 191).

***. SUAREZ, F., op. cit., pág. 395. Por tanto hemos de precisar lo afirmado por Labra en "La España del siglo XIX", relativo a que "la Junta Central, el Consejo de España e Indias y la comisión especial nombrada para entender en todo lo relativo a la reunión de Cortes idearon que éstas habían de responder al tipo antiguo, constituyéndose por estamentos, de reunión y deliberación separadas, y hasta con el predominio de los brazos eclesiástico y noble." (LABRA, R.M., op. cit., pág. 200). Como hemos visto, el dictamen del Consejo propiamente defendía la reunión en una sola Cámara.

***. León y Pizarro acusa en sus Memorias a don Manuel Quintana de la pérdida de esta resolución de la Junta Central (op. cit., tomo I, págs. 132 y 133).

prometido por el gobierno Central (la convocatoria de Cortes), hizo nueva consulta al Consejo reunido para saber qué planta convendría adoptar en las primeras Cortes. Este Tribunal, que en Sevilla había recomendado la forma antigua de estamentos reunidos en un cuerpo único, ahora se dividió en dos pareceres. El de la mayoría desechaba la idea de los brazos, proponiendo la elección y concurrencia de diputados sin distinción de clases. La minoría, aunque no publicó su voto, supone entonces que persistía en su anterior dictamen, y además pretendía que se castigase severa y ejemplarmente a los comisionados de las Juntas provinciales por su arrojo y avilantez en obligar a la Regencia a que juntase las Cortes"".

La consulta del Consejo reunido llegó a la regencia con fecha 17 de julio. Parece ser que la consulta seguía el dictamen expresado por el Fiscal don Antonio Cano Manuel, quien se manifestaba contrario a la reunión de las Cortes por estamentos. En el dictamen del Consejo no hubo al parecer unanimidad y del voto general disintieron el Decano Colón y seis de sus miembros"". La Regencia decidió finalmente seguir este dictamen del Consejo reunido y convocó las Cortes en una sola Cámara y sin estamentos.

No se limitó la participación del Consejo en este proceso a la mencionada consulta. Sabemos que el artículo 7 del proyecto de decreto de la Comisión para la elección de los suplentes"" contemplaba una junta para presidir las elecciones, en la que participaban cuatro miembros del Consejo reunido nombrados por el mismo Consejo.

Por otro lado, varios miembros de los antiguos Consejos tomaron parte en la llamada Junta de Legislación, creada por la Comisión de Cortes para examinar y proponer a la Comisión todas las reformas legislativas que debían llevarse a cabo en nuestro sistema de leyes"". Concretamente estaban los Consejeros de Castilla don Manuel de Lardizábal y el Conde del Pinar, miembros del Consejo reunido"". El Secretario de esta Junta era el conocido político don Agustín Argüelles.

"" ARGÜELLES, A., op. cit., tomo I, pág. 203.

"" ARTOLA, M., "Los Orígenes de la España Contemporánea", págs. 376 y 377.

"" ver SUAREZ, F., op. cit., págs. 416 y 417.

"" SUAREZ, F., "El proceso de la convocatoria a Cortes", pág. 241.

"" ARGÜELLES, A. op. cit., tomo I, págs. 190 y 191.

Más adelante, el 27 de febrero de 1.810 el Consejo presentaba nueva consulta al Consejo de Regencia sobre el Manifiesto a los Americanos*** y el Decreto por el que se les convocaba a concurrir a las próximas Cortes extraordinarias****. Tras alabar ambos documentos, el Consejo reunido expresó de forma clara su pensamiento: "satisfacción por el retraso de la reunión de Cortes, rechazo del método de suplentes, prioridad en el combate a los franceses". Con relación a los diputados de América y Asia, insistía en que se buscara una representación "la más legal posible y no supletoria, insinuando" como método más adecuado el que se aplicaba en la propia España****.

El Consejo presentaba también algunos reparos a ambos documentos, en especial la forma de referirse a los ciudadanos americanos, que no era la más acertada. Lo cierto es que la Regencia tomó buena nota de estas puntualizaciones del Consejo****. Entre otras medidas, pidió el 1 de marzo que el Consejo consultase acerca del número de diputados por América. El dictamen del Consejo no tiene desperdicio. Aunque evidenciaba ser una claro partidario de la convocatoria de Cortes, se pronunciaba ambigüamente por una cámara única con distinción de clases. Pedía también que se suprimiera el privilegio de "ciudad con voto en Cortes"

Sin duda, lo que más impresiona de esta consulta del Consejo es que dictaminara que las Cortes Generales se reunieran al estilo de una democracia, con una representación solamente popular, y que no fueran propiamente las de una Monarquía. Este parecer contrasta más si consideramos algunas erróneas afirmaciones de Alcalá Galiano, Toreno y Argüelles considerando al Consejo de España e Indias un opositor sistemático de la convocatoria de Cortes****.

***. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, número 4.622 del catálogo, 28 de octubre de 1.809.

***. A.H.N., Colección de Reales Cédulas, número 4.621, 28 de octubre de 1.809.

****. SUAREZ, F., "El proceso de la convocatoria a Cortes", pág. 455. También hizo observar el Consejo que tal y como se planeaba la distribución de diputados, habría más representantes de América que de España (SUAREZ, F., "Las Cortes de Cádiz", págs. 128 y 129).

****. Reconoció que el número de diputados americanos no podía ser corto ni excesivo y pidió nueva consulta al Consejo sobre el tema; e igualmente reconoció que algunas expresiones del Manifiesto no eran del todo acertadas (SUAREZ, F., op. cit., págs. 456 a 458).

****. Cfr. por ejemplo ALCALA GALIANO, "Memorias", tomo I, pág. 263.

Otra importante consulta del Consejo de España e Indias tuvo lugar a petición de la Regencia. Este Supremo Órgano de Gobierno le consultó sobre el destino que habría de darse a los miembros de la extinguida Junta Central^{***}. El Consejo repitió sus conocidas opiniones sobre la creación y legalidad de la Junta Central, y con un lenguaje inusitadamente duro para la moderación y ponderación del Supremo Tribunal, propuso la continuación de los procesos abiertos a los centrales Calvo de Rozas y conde de Tilly.

El Consejo de Regencia, vista la consulta del Consejo de España e Indias y estudiada la cuestión, resolvió el asunto con la siguiente Real Orden:

"Ilmo. Sr.: El Consejo de los Reinos de España e Indias, adoptando con unanimidad y singular aprecio el prudente y acertado dictamen que le propone ese Supremo Tribunal, ha acordado que con las causas que tiene promovidas a los centrales don Lorenzo Calvo y conde de Tilly, como con la invitación a la Junta superior de Cádiz en razón de que indicase cualesquiera otros procedimientos que intentase con algunos más de los restantes vocales, ha llenado sus deberes en esta parte, y S.M. se propone completarlos, dejando responsables a todos ellos para con la Nación junta en Cortes, a efecto de que den cuenta de su administración y publiquen el Manifiesto que tienen ofrecido. De consiguiente, y en conformidad del referido dictamen, ha resuelto S.M. se franquee a los vocales libres sus pasaportes para que puedan trasladarse a sus provincias, pero de ningún modo a las Américas, debiendo quedar a disposición del Gobierno bajo la vigilancia y encargo especial de los capitanes generales u otros jefes superiores de las provincias a donde les convenga dirigirse, y cuidando la Regencia que no se reúnan muchos en una misma provincia... Real isla de León, 21 de febrero de 1.810. El marqués de las Hormazas. Señor decano del Supremo Consejo de España e

^{***}. Creada la primera Regencia, "el Consejo aprovechará la ocasión para dar rienda suelta a sus sentimientos en la consulta de 19 de febrero de 1.810, en la que pedía se formase causa a aquellos vocales cuya conducta estimase la Regencia como delictiva. Para el Consejo, el gobierno de la Junta Central no ha sido más que una 'violenta y forzada usurpación'." (ARTOLA, M., "Los Orígenes de la España Contemporánea", pág. 229).

Indias"****.

Como hemos visto, la labor realizada por el Consejo de España e Indias en los quince meses de su vigencia fue intensa. Muchos expedientes han quedado sin mencionar, al igual que otras muchas disposiciones de gobierno****, algunas de ellas referidas a la misma ciudad de Cádiz****. Sin embargo, esta institución era heredera del Consejo de Castilla y por tanto heredó también sus detractores. Basta leer las opiniones de políticos de la época como Calvo Rozas o el Conde de Toreno, entre otros muchos, para comprender que este Tribunal o su versión del Consejo de Castilla era todo un símbolo del Antiguo Régimen y por supuesto una institución incompatible con un sistema constitucional de corte liberal.

****, CALVO MARCOS, M., op. cit., págs. 142 a 145.

****. El legajo 28.A de la Sección Estado, del Archivo Histórico Nacional contiene otras muchas disposiciones de este Supremo Tribunal (ver los expedientes 35 a 93).

****. El hecho que el Consejo de España e Indias cambiase de residencia, de Sevilla a Cádiz, a principios de enero de 1.810, hizo que la institución tomara también medidas de gobierno para la ciudad sitiada. Por ejemplo, la petición a través de un Manifiesto de su Decano, de que los refugiados en Cádiz volviesen a sus casas y pueblos, el 20 de marzo de 1.810 (A.H.N., Consejos, Consejos reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.990);

VIII. CATALOGO DE CONSEJEROS Y FISCALES

VIII. CATALOGO DE CONSEJEROS Y FISCALES

ADELL, Francisco Javier

Ministro del Consejo de Castilla en el año 1819. Durante el Trienio Constitucional fue ministro decano del Tribunal especial de las Ordenes Militares. No fue admitido inmediatamente en el Consejo tras el restablecimiento del Supremo Tribunal, sino unas semanas después, el 24 de julio de 1823. Fue jubilado por decreto de 20 de febrero de 1824. Pocos meses después -el 24 de julio de 1824- era repuesto en su plaza en el Consejo. Sabemos que el conocido asunto del obispo de Oviedo del año 1828 estaba entre los más críticos contra los derechos de este prelado. Fue ministro del Consejo hasta el año 1832.

ALCANTARA Y TOLEDO, Pedro de (Duque del Infantado)

Don Pedro de Alcántara y Toledo Salm-Salm Hurtado de Mendoza y Orozco era Duque del Infantado, de Pastrana, de Lerma, Marqués de Santillana y de Saldaña, Príncipe de Éboli, etc., Grande de España de Primera Clase. Se decía que era un típico representante de la aristocracia internacional europea del siglo XVIII. Fue procesado en la llamada Causa de El Escorial, en la que el Fiscal pidió para él la pena de muerte. A consecuencia de la misma fue confinado en Écija por el Rey, pese a haber sido absuelto. Popularmente fue tenido como uno de los cabecillas de aquella conjuración. Fue nombrado por Fernando VII Coronel de Guardias Españolas el 20 de marzo de 1808, tras el Motín de Aranjuez, y ese mismo día también Presidente del Consejo de Castilla. Tomó posesión del cargo el 24 de marzo. Formaba parte de la comitiva regia que el 10 de abril de 1808 partió hacia Bayona. Por el decreto de Napoleón de 12 de noviembre, en Burgos, fue puesto fuera de la ley y declarado traidor. El 1 de diciembre fue nombrado Presidente de la Junta Política y Militar permanente, que gobernaría Madrid tras la salida de la Junta Central hacia Toledo. El 2 de diciembre huyó

hacia Guadalajara en busca de refuerzos, probablemente para evitar caer en manos de Napoleón cuando tomase Madrid. El 21 de enero de 1812 las Cortes nombraron una nueva Regencia, en la que entró como miembro el Duque del Infantado. Cuando en marzo de 1812 Fernando VII ponía nuevamente sus pies en territorio español, Infantado formaba parte de su Consejo privado. El 3 de junio de 1814 por Real Decreto fue nombrado nuevamente Presidente de Castilla. De él dijo una vez el Ministro inglés Lamb que "fuera de Infantado y del Infante don Carlos, no había en España quien no se vendiera, incluso el Rey, por un puñado de libras esterlinas". Al implantarse el sistema constitucional en 1820, Infantado estaba al frente de la guarnición de Madrid. Fue desterrado por el Monarca, aunque las crónicas afirman que tardó algún tiempo en partir hacia el destierro, y entre tanto publicó un crítico artículo en El Espectador. Fue nombrado Presidente de la Regencia constituida por el Duque de Angulema, el 25 de mayo de 1823. Tras el restablecimiento del Consejo pasaron varios meses en que Infantado no ostentaba el cargo de Presidente. Finalmente el Monarca le designaba nuevamente como Presidente de Castilla y como Jefe de la Guardia Real. No aceptó el cargo y dimitió. Pero Infantado no había caído en desgracia. Poco después era nombrado Secretario de Estado. A la muerte del Rey en 1833, entró a formar parte de la Junta de Gobierno, creada el 6 de octubre. Falleció al parecer el 17 de diciembre de 1833.

ALMAZAN, Joaquín

Nacido en Torrente el 28 de noviembre de 1762. Alcalde de Casa y Corte y más tarde Consejero de Castilla por Real Decreto de 20 de febrero de 1824. El 23 de abril de 1824 fue nombrado Caballero pensionista de la Real Orden de Carlos III. Fue ministro del Consejo hasta el año 1828.

ALVAREZ CONTRERAS, Antonio

Consejero de Castilla desde diciembre de 1802. Miembro de la Junta que resolvió la llamada Causa de El Escorial. Por Real decreto de 3 de junio de 1814 fue repuesto en su plaza de Consejero de Castilla. En octubre de 1815 fue nombrado miembro de la Comisión de Estado, encargada de sustanciar la causa a los diputados liberales de las Cortes de Cádiz, cargo que dejó al mes siguiente. Nuevamente le encontramos entre los Consejeros de Castilla al restablecerse el Consejo en 1823. Por entonces tenía 70 años y su estado de salud era malo. Fue jubilado con todo el sueldo y honores a petición del Gobernador del Consejo el 20 de febrero de 1824, con un reconocimiento especial 'por sus antiguos y buenos servicios': se le premió además entonces con los honores de Camarista de Castilla.

ARIAS DE PRADA, Benito

Fue Alcalde de Corte y en 1812 pasó al Consejo de Castilla establecido en Cádiz. Como Alcalde de Corte de miembro de la Junta que enjuició el llamado 'Complot de El Escorial', de la que fue secretario. Tras la salida de los franceses de Madrid en la madrugada del 1 de agosto de 1808, fue nombrado miembro de la comisión encargada de velar por el orden público en la capital. Tras la supresión del Consejo por Napoleón fue hecho prisionero y trasladado a Francia. El 4 de junio de 1811 consiguió huir y llegó a Valencia, donde se puso a disposición de las Cortes. Pasó al Consejo de Castilla. Pero por decreto de las mismas Cortes de 15 de octubre de aquel año fue suspendido en su plaza, al igual que otros trece ministros del Consejo Real. Su firma se encontraba entre las de los 69 diputados de las Cortes que firmaron el llamado "Manifiesto de los Persas" en mayo de 1814. Fue repuesto en su plaza de Consejero de Castilla por Real decreto de 3 de junio de 1814. El 8 de junio de 1823 le correspondió la Superintendencia General de Vigilancia Pública. Falleció en 1823.

ARJONA, Francisco

Ministro del Consejo de Castilla restablecido en Cádiz y nuevamente en 1814 por Real Decreto de 3 de junio. Fue Consejero de Castilla hasta el año 1815.

ARJONA, José Manuel

Nacido en Osma el 3 de diciembre de 1781. Ministro efectivo del Consejo y honorario del Consejo de la Cámara de Guerra. Sufrió al parecer grandes padecimientos bajo el Gobierno constitucional. Superintendente General de Policía y también Superintendente de Vigilancia en 1823. El 1 de octubre de 1823 el Rey le concedió plaza efectiva en el Consejo Real, y más tarde, por decreto de 26 de agosto de 1824, en la Real Cámara. En 1824 fue también nombrado Gobernador de la Sala de Alcaldes, cargo que ocupó hasta 1825. Por decreto de 13 de febrero de 1824 había sido nombrado también Caballero pensionista de la Real Orden de Carlos III. Fue Consejero de Castilla hasta la definitiva supresión del Consejo de Castilla en 1834.

ASTA, Esteban de

Ministro del Consejo de las Ordenes. Por decreto de 21 de octubre de 1828 ingresa en el Consejo Real por fallecimiento del Ministro del Consejo Torres-Cónsul.

AYUSO Y NAVARRO, José

Gobernador de las Salas del Crimen de la Chancillería de Granada. Consejero de Castilla por decreto de la Reina María Cristina de 25 de octubre de 1832.

BLANES, Miguel Antonio

Comenzó su carrera en 1788, tras los sucesos de Orán. Consejero de Castilla en 1823. Tras el restablecimiento del sistema constitucional, en agosto de 1820, había pasado a formar parte del Supremo Tribunal de Justicia como magistrado, en sustitución de dos magistrados ausentes y enfermos. Fue también ministro del Tribunal Especial de Guerra y Marina. Su purificación política tras el restablecimiento del Consejo Real fue retardada hasta el 22 de agosto de aquel año. En un escrito autógrafo de entonces señalaba: "Me precisa a manifestar a V.A.S. los justos sentimientos que ha causado en mi ánimo esta novedad, cuando en todo el tiempo que ha regido el Gobierno constitucional no he hecho otra cosa que obedecer al Rey, hacer rostro firme a la injusticia y padecer por ella...Desde el 7 de marzo de 1820 ni yo he tenido ascenso de escala ni extraordinario, ni variado de destino..." Tras un informe negativo del Gobernador Martínez de Vilela, fue separado del Consejo el 20 de febrero de 1824.

BORJA Y BAYO, Vicente

Nacido en Tudela el 21 de mayo de 1782. Fue elegido alcalde de Tudela por insaculación el 27 de octubre de 1815. Fue más tarde Ministro de las Ordenes Militares antes de ingresar en el Consejo de Castilla, en el año 1824. Caballero supernumerario de la Real Orden de Carlos III. Regente de la Audiencia de Extremadura y más tarde trasladado a la de Galicia. Consejero de Castilla por decreto de 9 de abril de 1824, sabemos que ya no se encontraba entre los Ministros del Consejo a finales de ese año. En 1827 fue restablecido nuevamente en su plaza, por decreto de 7 de junio de aquel año. Estaba entre los Consejeros de Castilla que asistían al Monarca en la Granja, en 1832, durante la convalecencia del Rey de su grave enfermedad. Fue ministro del Consejo hasta la supresión de este Supremo Tribunal en 1834.

CABANILLES, José

Era Consejero de Castilla desde 1818. Al restablecerse el Supremo Tribunal en 1823 fue repuesto en su plaza. Ese mismo año fue comisionado por el Consejo para la visita a la Escribanía de Gobierno del Consejo. Fue Consejero de Castilla hasta la definitiva extinción del Consejo en 1834.

CAMARA CANO, León de la

Nacido en Millara el 11 de julio de 1768. Caballero supernumerario de la Real Orden de Carlos III por decreto de 4 de septiembre de 1817. Fue primer teniente de corregidor y luego corregidor de Madrid. Oidor honorario de la Real Chancillería de Valladolid. Ministro togado honorario del Supremo Consejo de Hacienda. Fiscal togado en propiedad del Supremo Consejo del Almirantazgo. Consejero de Castilla por Real Decreto de 20 de febrero de 1824. Era de conocidas ideas antiliberales. Fue ministro del Consejo hasta 1828.

CANGA-ARGÜELLES Y PÉREZ DE LA SALA, Felipe Ignacio

Nacido en Oviedo el 2 de agosto de 1740. Procurador General (Fiscal) del Consejo de Castilla 1793 a 1802. Caballero pensionista de la Real Orden de Carlos III por decreto de 27 de junio de 1797. Era Consejero de Castilla en 1808. Miembro de la Junta Política y Militar permanente que quedó en Madrid tras la salida de la Villa y Corte de la Junta Central, hacia Toledo, formada el 2 de diciembre de 1808. Tras la supresión del Supremo Tribunal no volvió a reincorporarse a su plaza de Consejero de Castilla.

CANO MANUEL, Antonio

Fiscal del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo reunido) en 1809, había sido anteriormente Alcalde de Casa y Corte. En 1821 era Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

(MARQUÉS DE CASA-GARCIA DE POSTIGO)

Miembro de la Junta que resolvió la Causa de El Escorial. En 1808 era miembro del Consejo de Castilla, plaza que dejó definitivamente tras la supresión de este Tribunal por Napoleón en diciembre de 1808.

CASTAÑOS Y ARAGONI, Francisco Javier (Duque de Bailén)

General en Jefe del Ejército de Andalucía y vencedor en Bailén, lo que le valió el Ducado del mismo nombre. Nació en Madrid en el año 1758. Combatió en Alemania; luchó contra los ingleses en mahón y Gibraltar; también tomó parte en las campañas de Africa y en la de Francia de 1793. En 1808 era ya teniente general y jefe de la Comandancia de Gibraltar. Cuando libró la batalla de Bailén era Capitán General de Andalucía. Fue Presidente de la Junta Central refugiada en la isla de León y más tarde Capitán General de Cataluña. Fue del Consejo de Regencia y tutor y curador de la Reina Isabel y de la Infanta Luisa Fernanda hasta su mayor edad. En octubre de 1832 Fernando VII le había nombrado Presidente del Consejo Real, cargo que ostentó hasta la supresión de este Supremo Tribunal en 1834. A la muerte del Monarca formó parte de la Junta de Gobierno que se formó, el 4 de octubre de 1833. Pasó a presidir el Consejo Real de España e Indias, que substituyó al de Castilla en 1834. Falleció en Madrid, en el año 1852.

CATALAN, Dionisio

Teniente de Corregidor de Madrid. Consejero de Castilla por Real Decreto de 20 de febrero de 1824. De conocidas ideas antiliberales. Hasta 1827 ostentó el cargo de Juez de Ministros. Fue miembro del Consejo Real hasta la definitiva supresión del Consejo en 1834.

CISTERNES, Joaquín

Consejero de Guerra. Debía haber tomado posesión de su plaza de Consejero de Castilla el 7 de marzo de 1823, pero el comienzo del Trienio Constitucional se lo impidió. A instancia suya y tras providencia del Consejo fue purificado el 4 de septiembre de 1823, pasando a continuación a jurar su plaza de Consejero de Castilla. Sin embargo, a principios de 1824 ya no figuraba como miembro del Supremo Tribunal.

CODINA Y CODINA, Domingo

Nacido en Vich. Caballero de la Real Orden de Carlos III por decreto de 30 de noviembre 1792. Consejero de Castilla jubilado por Godoy y restablecido en su plaza por Fernando VII tras el Motín de Aranjuez, en abril de 1808. Se encontraba en Vich cuando las tropas francesas ocuparon Cataluña. Tras la supresión del Consejo de Castilla en diciembre de 1808 no volvió a ocupar plaza en el Supremo Tribunal.

COLÓN DE LARREATEGUI Y XIMÉNEZ DE EMBRÚN, José Joaquín

Nacido en Barcelona el 10 de abril de 1746. Caballero de la Real Orden de Carlos III por decreto de 12 de noviembre de 1789. Consejero de Castilla nombrado por Carlos IV y jubilado por motivos políticos por Godoy. Anteriormente había sido Alcalde de Casa y Corte. Fue restablecido en su plaza por Fernando VII, al acceder al Trono tras el Motín de Aranjuez, en abril de 1808. El 5 de mayo era nombrado miembro de la Comisión para la Censura de la Gaceta. Fue designado por el Consejo para formar parte de la diputación de este Supremo Tribunal para acudir a Bayona a presentar candidato a la Corona de España. Partió el 25 de mayo. El 10 de agosto de 1808 fue nombrado Juez de Imprentas, tras la desaparición del Juzgado del mismo nombre. Participó en la primera de las consultas del Consejo dilatando la prestación del juramento a José. Asistió con el Decano y con otros Ministros a varias sesiones de la Suprema Junta de Gobierno. Parece que su postura fiel y patriótica le valió fuertes amenazas del ocupante francés Mr. Frevill, tanto a él como a Vilches, por no querer seguir el partido francés. De ello dieron cuenta en el siguiente Consejo pleno. Había sido presidente de la Junta de Suministros para las tropas francesas, en abril de 1808. Designado vocal de la Junta Central por el Ayuntamiento de Madrid, no quiso aceptar el puesto. Tras la supresión del Consejo de Castilla por Napoleón y la constitución del Consejo reunido, fue nombrado Decano y máxima autoridad de este Tribunal. Fue también miembro del Consejo de Regencia en 1810. Más tarde y tras el restablecimiento del Consejo de Castilla e Cádiz, sería también decano de este Tribunal. Tras la publicación de su escrito "España vindicada" en 1811 fue sometido a proceso por las Cortes, del que sería finalmente absuelto el 29 de mayo de 1812 por el Tribunal especial de las Cortes que enjuiciaba el caso. Por decreto de 3 de junio de 1814 fue repuesto en el restablecido Consejo de Castilla. Falleció durante el llamado Trienio Constitucional.

CORTABARRIA, Antonio de

Nacido en Oñate el 23 de abril de 1756. Tomó posesión de cargo de Consejero de Castilla el 13 de diciembre de 1802. Anteriormente había sido Fiscal de la Junta de Caballería. Tras la primera salida de los franceses de Madrid, en agosto de 1808 redactó el conocido "Manifiesto de los procedimientos..." Fue especialmente perseguido por los franceses tras la supresión del Consejo en diciembre de 1808. Al constituirse el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo reunido) fue nombrado ministro de este Tribunal. Caballero pensionista de la Orden de Carlos III por decreto de 15 de julio de 1810. Más tarde pasó a ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Por Real

decreto de 3 de junio de 1814 fue repuesto como Consejero de Castilla. Era ministro superintendente del Archivo del Consejo. Falleció siendo Consejero de Castilla en el año 1815.

DÍEZ, Jerónimo Antonio

Fiscal del Consejo. Fue especialmente opuesto al ocupante francés, como lo demuestra su informe de 9 de mayo de 1808, en el que pedía que fuera declarado nulo todo lo decretado por los Reyes en Francia, los tratados de Bayona, la Constitución y todo lo demás propuesto por el gobierno intruso. Fue detenido y confinado en Francia por orden expresa de Napoleón, cuando en compañía del Decano Mon acudieron a Chamartín a visitar al Emperador, el 8 de diciembre de 1808. Permaneció preso en Francia hasta octubre de 1811, en que pudo regresar a España. Ingresó en el Consejo de Castilla restablecido en Cádiz, como Consejero. A la supresión de este Consejo, pasó al Supremo Tribunal de Justicia como magistrado por designación de las Cortes. Fue elegido diputado en Cortes en representación de Salamanca, en 1813, llegando a ser Presidente de las Cortes ordinarias. Fue uno de los 69 diputados de las Cortes de Cádiz que firmaron el llamado "Manifiesto de los Persas", en mayo de 1814. El Real Decreto de 3 de junio de 1814 hacía de él Consejero de Castilla. Fallece en 1815.

DOLAREA, Alejandro

Consejero de Castilla. Durante el Trienio Constitucional fue diputado en Cortes por Navarra y ministro del Tribunal Especial de Marina y Guerra. No fue admitido inicialmente en el Consejo tras el restablecimiento de mayo de 1823. Su purificación fue así retardada hasta el 1 de agosto de aquel año. Fue nombrado Juez de Ministros. Tras un informe negativo del Gobernador Martínez de Vilela, fue separado del Consejo el 20 de febrero de 1824.

DOMENECH Y NADAL, Francisco

Antiguo miembro de la Sala de Alcaldes. Consejero de Castilla desde el año 1803 hasta la primera supresión del Consejo, realizada por Napoleón en diciembre de 1808. No vuelve a ocupar plaza en aquel Tribunal.

DUQUE DE ESTRADA Y ATORRASAGASTI, Vicente

Nacido en San Sebastián. Fue Presidente de la Audiencia

de Sevilla. Consejero de Castilla desde marzo de 1806. El 9 de agosto de 1808 fue comisionado para organizar los reclutamientos de tropas en Madrid. Fue ministro del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias desde su constitución en 1809. En 1810 era miembro del Consejo de Regencia. Tras pasar al Consejo de Castilla en 1810, por decreto de 15 de octubre de 1811 fue suspendido en sus funciones por las Cortes, junto con otros trece Ministros del Consejo Real.

DURAN, Francisco Javier

Consejero de Castilla desde marzo de 1806. En los difíciles días de la Junta de Gobierno se mostró claramente partidario de José I, a quien juró. Huyó con los franceses con la salida de este Monarca de la Corte el 1 de agosto de 1808. Por decreto de 11 de agosto de aquel año fue suspendido de sueldo y pensiones por su pasada colaboración con el Gobierno intruso.

ESCUADERO, Teotino

Cubre plaza en el Consejo Real por fallecimiento de don Luis de León el 19 de noviembre de 1828. Era Regente de la Audiencia de Valencia.

FERNANDEZ DE CAMPOMANES, Domingo

Miembro de la comisión que enjuició al llamado 'Complot de El Escorial', por nombramiento real del 6 de noviembre de 1807. El 5 de mayo de 1808 era nombrado Juez de Policía para Madrid. Tras la supresión del Consejo por Napoleón fue hecho prisionero y trasladado a Francia. En la noche del 4 de junio de 1811 consiguió fugarse y se puso a disposición de las Cortes tras su llegada a Valencia. Restablecido el Consejo de Castilla en 1810, Campomanes pasó nuevamente a formar parte del Supremo Tribunal. En 1811 fue suspendido en sus funciones a resultas del proceso de las Cortes a catorce Ministros del Consejo Real. Fue uno de los 69 diputados de las Cortes firmantes del llamado "Manifiesto de los Persas", en mayo de 1814. Fue repuesto en su plaza de Consejero de Castilla por Real Decreto de 3 de junio de 1814, plaza en la que continuó hasta la supresión del Consejo en 1820. Falleció durante el Trienio Constitucional.

FERNANDEZ DEL PINO, Francisco

Nació en Antequera el 17 de abril de 1768. Fue Regente de la Real Audiencia de Cáceres y más tarde también Regente

de la Real Chancillería de Granada. Fue recibido hijosdalgo en virtud de Real Provisión de Hidalguía de la Chancillería de Granada, el 1 de diciembre de 1809. Caballero supernumerario de la Real Orden de Carlos III por decreto de 23 de agosto de 1817. Consejero de Castilla por Real decreto de 17 de enero de 1824. Fue también Gobernador de la Sala de Alcaldes, por decreto de 11 de abril de 1827. En 1828 se encontraba entre los defensores de la concesión de la amnistía política. Otra noticia nos informa que se opuso al obispo de Orense en el famoso asunto sobre las competencias eclesiásticas, del año 1828. Fue nombrado Ministro de la Real Cámara de Castilla por Real decreto de 9 de diciembre de 1829. El 14 de diciembre de 1832 fue nombrado Secretario de Gracia y Justicia. Fue ministro del Consejo hasta 1833.

(MARQUÉS DE FUENTEHÍJAR)

Consejero de Castilla en el año 1808. En agosto de aquel año fue nombrado miembro de una comisión para velar del orden público en Madrid, tras la retirada francesa de la Corte. Deja el Consejo definitivamente tras la supresión del Tribunal por Napoleón en diciembre de aquel año.

GARCÍA DE HEVIA Y NORIEGA, José

Nacido en Valdesoto. Era hermano del Fiscal del Tribunal del Santo Oficio de Sevilla Javier García Hevia y Noriega. Fiscal del Consejo de Castilla desde el año 1815. También lo era al restablecerse el Supremo Tribunal en 1823. Consejero de Castilla por decreto de 3 de junio de 1824. En 1828 fue uno de los principales defensores de la concesión de la amnistía política. También mostró su oposición al obispo de Orense en aquel famoso asunto de 1828. A la muerte de al Rey entró a formar parte de una Junta de Regencia, formada el 6 de octubre de 1833. Ministro del Consejo de la Cámara por decreto de 2 de marzo de 1833. Tras la supresión del Consejo Real en 1834 pasó al Tribunal Supremo de España e Indias, como Presidente.

GARRIDO Y LÓPEZ, Juan

Regente del Consejo de Navarra. Consejero de Castilla por Real Decreto de 20 de febrero de 1824. Era de conocidas ideas antiliberales. Fue Consejero de Castilla hasta 1826.

GIL, Tadeo Ignacio

Oidor de la Audiencia de Valencia. En 1812 era diputado

en las Cortes de Cádiz y Secretario de este Congreso. No firmó el llamado "Manifiesto de los Persas", en mayo de 1814. Alcalde de Casa y Corte a consulta del Consejo de la Cámara de 2 de junio de 1823. Consejero de Castilla por Real decreto de 20 de febrero de 1824. Era conocido por sus ideas antiliberales. En 1825 entró a formar parte de la Real y Suprema Junta Patrimonial de Apelaciones de los Juzgados de la Real Casa, Capilla, Cámara, Caballeriza y demás del Real Patrimonio. Fue al parecer firme opositor a la concesión de la amnistía política en los primeros días de enero de 1828. También en el polémico asunto del obispo de Oviedo, en 1828, fue un firme defensor de los derechos de los obispos. Por otro lado, no era un ferviente monárquico, al menos del Monarca de entonces. Arias Teijeiro lo describía como "realista intransigente, aunque no muy entusiasmado con la persona de Fernando VII". Sin embargo, en 1832, durante la convalecencia de Fernando VII en la Granja, se encontraba entre los Consejeros de Castilla designados para asistir al Monarca enfermo. Había sido recibido en la Real Cámara de Castilla por Real decreto de 9 de diciembre de 1829. Fue Consejero de Castilla hasta el 3 de marzo de 1833, fecha en que fue jubilado con todos los honores.

GONZALEZ CARRILLO, Juan Antonio

Era miembro del Consejo de Castilla desde marzo de 1806. Anteriormente había sido Regente de la Chancillería de Valladolid. Consejero de Castilla también en el restablecido Consejo Real, en 1810, por decreto de 15 de octubre de 1811 fue suspendido en sus funciones, a resultas del proceso abierto por las Cortes a catorce Ministros de este Consejo. Fue repuesto en su plaza de Consejero de Castilla por el Real Decreto de 3 de junio de 1814. Durante el Trienio Constitucional siguió ocupando plaza en la Junta de Sanidad. Continuó como Consejero de Castilla al quedar restablecido el Supremo Tribunal en 1823. Fue jubilado el 20 de febrero de 1824, a petición del Gobernador de Castilla, con un reconocimiento expreso 'por sus antiguos y buenos servicios'.

GONZALEZ YEBRA, Antonio

Consejero de Castilla. Fue miembro de la Junta encargada de enjuiciar a los inculcados en la Causa de El Escorial, a finales de 1807. Sabemos que fue detenido por las autoridades francesas el 10 de diciembre de 1808, por su condición de miembro del Tribunal de la Inquisición. Deja definitivamente el Consejo de Castilla tras la supresión de este Tribunal por Napoleón en diciembre de 1808.

GUTIÉRREZ DE LA HUERTA, Francisco

Fiscal del Consejo de Castilla desde el año 1814. Falleció durante el Trienio Constitucional.

HEREDIA, Juan Antonio

Fiscal del Consejo y de la Cámara por decreto de 19 de enero de 1824. Ocupó esta plaza hasta la definitiva supresión del Consejo Real en 1834.

HERMIDA, Benito Ramón

Era Regente de la Audiencia de Sevilla cuando fue nombrado Ministro del Consejo de Castilla. Se encontraba en Monroyo (partido de Alcañiz) cuando tuvo lugar la sublevación de Zaragoza, lo que le impidió venir a la Corte. Fue nombrado Secretario de Gracia y Justicia el 15 de octubre de 1808 por la Junta Central. Dejó de pertenecer al Consejo de Castilla tras la definitiva supresión del Tribunal en diciembre de 1808.

HERMOSILLA, Juan Benito

Fue Consejero de Castilla desde el año 1815. A instancia suya fue nombrado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia durante el Trienio Constitucional. Su purificación política tras el restablecimiento del Consejo Real fue retardada por este motivo hasta el 27 de agosto de 1823. Tras un informe negativo del Gobernador Martínez de Villela, tuvo lugar su separación definitiva del Consejo el 20 de febrero de 1824.

IBARNAVARRO, Justo María de

Antiguo Consejero de Castilla y en 1808 Oidor del Consejo de Navarra, el 27 de abril de 1808 informó al Consejo de los sucesos de Bayona, por mandato real. Por Real Decreto de 31 de octubre de 1808 fue nombrado Fiscal del Tribunal Extraordinario y Temporal de Vigilancia y Protección. Al constuirse el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias en 1809 fue nombrado ministro de este Tribunal. Fue al parecer comisario del Gobierno para la formación del Ejército de Sierra Morena. Fue uno de los tres Ministros del Consejo que presentó un voto particular sobre la presunta consulta del Consejo sobre la autoridad de las Cortes, motivo que causó el procesamiento de catorce de sus Ministros en 1811. En 1820 era Ministro retirado del Consejo

Real con todo su sueldo y con los honores de Ministro de la Cámara de Castilla y del Consejo de Estado. Era también encargado de la testamentaría del Sr. Infante don Gabriel, de lo que fue despojado por el Gobierno constitucional y después por las Cortes. Durante el Trienio Liberal fue Consejero de Estado, destino al cual fue llamado por el Rey hacia la mitad del mes de marzo de 1820. No juró la plaza ni tomó posesión de ella hasta últimos de julio o primeros de agosto de aquel año. Tras el restablecimiento del Consejo, solicitó su reintegro en el Consejo pero no fue purificado ni tampoco admitido como Consejero de Castilla.

INGUANZO, Pedro de

Don Pedro de Inguanzo y Rivero era sacerdote de gran ilustración y buen orador. Ordenado obispo ocupó importantes destinos eclesiásticos. Después de 1814 fue sucesivamente obispo de Zamora, arzobispo de Toledo y Decano del Consejo Real. Miembro del Consejo desde marzo de 1806, en el reinado de Carlos IV. Anteriormente había pertenecido a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. En abril de 1808 fue nombrado por Fernando VII miembro de la Comisión del Consejo de Castilla para revisar la llamada Causa de El Escorial, junto con el Conde del Pinar. Fueron los encargados de enjuiciar a Godoy y a sus protegidos. Tras la primera retirada de los franceses de Madrid, el 1 de agosto de 1808, fue nombrado miembro de la comisión de Consejeros de Castilla encargada de velar por el orden público en la capital. Más tarde fue diputado en las Cortes de Cádiz en representación de Asturias. Por el Real Decreto de 3 de junio de 1814 era designado nuevamente Consejero de Castilla. Falleció en Toledo en 1836. Estaba conceptuado como un político de ideas muy monárquicas, que defendió enérgicamente en las Cortes de Cádiz. Tuvo en ellas un papel destacado en los debates sobre señoríos, proyecto de constitución, Inquisición y el restablecimiento de los conventos. J. Belda y R. Labra dicen de él que perteneció a la extrema derecha de la Cámara con Borruil y Huertas.

LAPUENTE, Pedro de

Consejero de Castilla desde 1819. Fue Juez de Ministros. Falleció durante el Trienio Constitucional.

LARDIZABAL, Manuel de

Ingresó en el Consejo de Castilla como Fiscal. Más tarde pasó a Consejero de Castilla nombrado por Carlos IV, siendo después jubilado en su plaza por orden de Godoy, y restablecido por Fernando VII tras el Motín de Aranjuez, en

abril de 1808. Fue designado por el Consejo en mayo de 1808 para asistir a Bayona en diputación de este Supremo Tribunal, para presentar a Napoleón una propuesta de candidato para la Corona de España. Fue nombrado miembro de la Junta Política y Militar permanente formada en Madrid a primeros de diembre, tras la retirada de la Junta Central hacia Toledo. Tras la constitución del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias fue nombrado Consejero de este Tribunal. Restablecido el Consejo de Castilla en 1810 fue nombrado también ministro del Consejo. Por decreto de 15 de octubre era suspendido en sus funciones por las Cortes, al igual otros trece Ministros de este Supremo Tribunal. Por Real Decreto de 3 de junio de 1814 fue repuesto en el recién restablecido Consejo Real. Tras la proclamación del sistema constitucional, el 9 de marzo de 1820 el Rey creaba una Junta consultiva de Gobierno en la que se encontraba Lardizábal como miembro. Falleció durante el Trienio Constitucional.

LARRÚMBIDE, José Antonio

Nació en Asteasu (Guipúzcoa). Consejero de Castilla. Siendo ministro del Consejo de Castilla desde su restablecimiento en 1810, por decreto de 15 de octubre de 1811 fue suspendido en sus funciones, a resultas del proceso abierto por las Cortes a buen número de ministros del Consejo Real. Fue repuesto en su plaza dentro del Consejo por el real decreto de 3 de junio de 1814. Sabemos que formó parte de la Comisión de la Fábrica de Ojalatas de Alcaraz, destino que conservó durante el llamado Trienio Constitucional. Tras el restablecimiento del Consejo continuó como miembro del Consejo. Fue jubilado por decreto de 20 de febrero de 1824. Al año siguiente, el 16 de febrero de 1825 tomaba nuevamente posesión de su plaza de Consejero de Castilla. Dejó el Consejo en 1828.

LASAUCA, Andrés

Consejero de Castilla desde diciembre de 1802. Miembro de la Junta que resolvió la Causa de El Escorial. El 9 de agosto de 1808 fue nombrado de la comisión encargada de organizar los reclutamientos de tropas en Madrid. Fue designado miembro del Tribunal Extraordinario y Temporal de Vigilancia y Protección para entender de las causas de infidencia, cuyo reglamento fue aprobado por Real Decreto de 31 de octubre de 1808. En 1810 era Consejero del restablecido Consejo de Castilla. Pero al año siguiente, por Decreto de las Cortes de 15 de octubre de 1811 era suspendido en su plaza, a resultas del proceso abierto a catorce Ministros del Consejo Real. Fue repuesto como Consejero de Castilla por Real Decreto de 3 de junio de 1814. A principios de septiembre el Rey le nombró miembro de

la Junta Extraordinaria o Comisión de Estado, para la sustanciación de la causa a los diputados liberales de las Cortes. Dimitió del cargo en octubre de 1815. Continuó como Consejero de Castilla hasta el llamado Trienio Constitucional, periodo en el que falleció.

LEÓN, Luis de

Agente Fiscal del Consejo de Indias. Por decreto de 7 de septiembre de 1823 fue nombrado Alcalde de Casa y Corte. Consejero de Castilla por Real Decreto de 20 de febrero de 1824. Era conocido por sus ideas antiliberales. Fue Consejero de Castilla hasta su fallecimiento en 1828.

LÓPEZ ALTAMIRANO, Juan Antonio

Consejero de Castilla bajo Carlos IV, fue jubilado por Godoy y más tarde repuesto en su plaza por Fernando VII tras el Motín de Aranjuez, marzo de 1808.

LÓPEZ PELEGRÍN, Ramón

Fiscal del Consejo de Castilla y del Supremo Tribunal de Justicia en 1820, órgano del que también fue magistrado. Durante el Trienio Constitucional fue también Secretario de Estado de Ultramar y se retiró con los honores de Consejero de Estado. Restablecido el Consejo Real, no fue admitido al principio, y tras una expresa solicitud fue purificado el 30 de julio de 1823. Sin embargo, el 3 de agosto quedaba en suspenso esta reposición hasta el regreso del Rey, por haber ocupado plaza de Secretario del Despacho en tiempos del sistema constitucional. Por entonces era tenido como uno de los Ministros más liberales del Consejo. Tras un informe político negativo del Gobernador Martínez de Villela fue separado del Consejo el 20 de febrero de 1824. Fue repuesto en su plaza por Real decreto de 2 de junio de 1830 y admitido como miembro de la Cámara de Castilla por decreto de 26 de octubre de 1832. Tras la supresión del Consejo Real en 1834 pasó al Consejo Real de España e Indias como Decano de Gracia y Justicia.

LLORENS, José Ignacio

Regente de la Real Audiencia de Cáceres. Consejero de Castilla por Real Decreto de 20 de febrero de 1824. Era conocido por sus ideas antiliberales. Más tarde fue separado del Consejo por motivos políticos. Recuperó su plaza el 23 de febrero de 1828, en sustitución del Ministro Larrúmbide,

a consulta de la Cámara de fecha 26 de enero. Juró su plaza en el Consejo el 5 de marzo del mismo año. Fue Consejero de Castilla hasta la definitiva supresión de este Tribunal en 1834.

MARCOS MARTÍNEZ, Adrián

Consejero de Castilla desde el 18 de abril de 1804. Fue Gobernador de la Sala de Alcaldes. Era Consejero de Castilla en los turbulentos acontecimientos del año 1808. Tras la supresión del Consejo por Napoleón en diciembre de 1808 dejó definitivamente su plaza.

MARÍN, Francisco

Nació en Enquera el 3 de julio de 1764. Juró su plaza como Consejero de Castilla el 27 de agosto de 1814. Caballero de la Orden de Carlos III por decreto de 20 de octubre de 1819. Formó parte de la comisión de la Protectoría de la Casa de Desamparados, destino que conservó durante el Trienio Constitucional. Tras el restablecimiento del Consejo en 1823, continuó formando parte como Consejero de Castilla. Fue jubilado por decreto de 20 de febrero de 1824. El 16 de febrero de 1825 tomaba nuevamente posesión de su plaza de Consejero de Castilla. Ese mismo año entró también a formar parte de la Real y Suprema Junta de Apelaciones de los Juzgados de la Real Casa, Capilla, Cámara, Caballeriza y demás del Real Patrimonio. En 1828 propugnó dentro del Consejo la concesión de una amnistía política. Estando convaleciente el Monarca en 1832, en la Granja, se encontraba entre los Consejeros de Castilla que asistían al Rey. Era miembro de la Cámara de Castilla. Decano del Consejo desde 1832 hasta la definitiva supresión del Consejo en 1834.

MARQUINA GALINDO, José

Ministro del Consejo de Castilla nombrado por Carlos IV. Cuando ocurrió el Motín de Aranjuez su casa fue saqueada por el populacho, por considerarle adicto a Godoy. Por decreto de 11 de agosto de 1808, unos días después de la liberación de la Corte, fue suspendido de sueldo y pensiones.

MARTÍNEZ ARETA, José

Alcalde de Casa y Corte. Consejero de Castilla por decreto de la Reina María Cristina de 25 de octubre de 1832.

Fue miembro del Consejo hasta su definitiva supresión en 1834.

MARTÍNEZ OLIVA, Juan

Auditor de la Rota y al parecer eclesiástico. El 16 de enero de 1824 fue nombrado Consejero de Castilla, plaza que ocupó hasta el año siguiente.

MARTÍNEZ DE VILLELA, Ignacio

Fue nombrado Consejero de Castilla el 16 de mayo de 1803. La Junta Suprema de Gobierno le designó en abril de 1808 para acudir en diputación a Bayona y proponer a José como Rey de España. El 19 de agosto el Consejo le encomendaba una comisión para proceder al embargo de bienes a varios políticos. El 24 de noviembre del mismo año también le eran encomendadas las causas abiertas a dos conocidos ex-Ministros del Intruso: Azanza y Urquijo. Fue ministro del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias al constituirse en 1809. Más tarde era nombrado Consejero de Castilla, al restablecerse el Consejo Real. Por Decreto de las Cortes de 15 de octubre de 1811 fue suspendido en sus funciones, junto con otros trece Ministros del Consejo. En la noche del 10 al 11 de mayo de 1814 dirigió la operación de detención de autoridades y diputados del régimen constitucional junto al General Eguía, como miembro de la Comisión de Policía. Por Real Decreto de 3 de junio de 1814 era repuesto en su plaza de Consejero de Castilla. También continuó formando parte del Consejo tras el restablecimiento del Supremo Tribunal en 1823. Repuesto en el Consejo a partir de junio de 1823, por Real Decreto de 2 de diciembre fue nombrado Gobernador del Consejo Real en propiedad. Era también Consejero de Estado. Eran conocidas sus ideas realistas y antiliberales. Falleció siendo Gobernador del Consejo en Aranjuez, el 12 de mayo de 1827.



BIBLIO
DE ESPA

MELÉNDEZ Y BRUNA, Luis (Marqués de Negrón)

Por el Real Decreto de 3 de junio de 1814 fue nombrado Consejero de Castilla. Fue miembro del Consejo hasta su fallecimiento en 1819.

MIER Y SALCEDO, José

Fiscal del Consejo de Hacienda. Por decreto de 3 de marzo de 1833 pasa al Consejo Real. Fue miembro del Consejo hasta la definitiva supresión del Supremo Tribunal en el año

1834.

MODET, Ramón Miguel

Regente de la Audiencia de Valencia. El 17 de enero de 1824 fue nombrado Ministro del Consejo Real. Parece que en el polémico asunto del obispo de Oviedo, en 1828, defendió los derechos de los obispos. Era antiliberal. Fue Consejero de Castilla hasta la definitiva supresión del Consejo en 1834.

MON, Arias

Fue Auditor de la Audiencia de Zaragoza y más tarde Presidente de la Audiencia de Cáceres. Consejero honorario desde el 6 de abril de 1791 y Consejero titular desde el 30 de noviembre de 1800. Señor de la jurisdicción de Uría y los Villares, con sus agregados en el Principado de Asturias. Decano del Consejo de Castilla y Gobernador interino desde 1807. Presidió la Junta nombrada por el Rey el 6 de noviembre de 1807 para proseguir la causa contra los procesados en el llamado complot de 'El Escorial'. Formó parte de hecho de la Junta Suprema de Gobierno que rigió en España tras la partida de Fernando VII hacia Bayona. En los luctuosos sucesos del 2 de mayo en Madrid tomó papel activo en la apaciguación del pueblo, al frente de una comitiva que recorrió las calles de la capital. En agosto del mismo año, tras la salida de los franceses, se quedó nuevamente como Gobernador interino del Consejo mientras Infantado habitualmente estaba ausente de la Corte. Fue el primer vocal designado por el Ayuntamiento de Madrid para diputado de la Junta Central, pero no aceptó el cargo. El 24 de noviembre se le encomendó llevar los procesos de los ex-ministros del Intruso O'Farril, Cabarrús y Romero. Tras la entrada de los franceses en Madrid, el 8 de diciembre fue detenido y trasladado como prisionero de guerra a Francia. Mon había acudido a Chamartín a visitar al Emperador por orden de éste, al frente de una diputación del Consejo Real. Parece que falleció pocos meses después en un hospital de París. Aparte de Consejero de Castilla, pertenecía al Consejo de la Suprema y General Inquisición, era vicepresidente nato de la Junta de la Inmaculada Concepción, presidente de la Comisión gubernativa de Consolidación de Vales Reales y del honrado Concejo de la Mesta.

MON, José (Conde del Pinar)

Consejero de Castilla con Carlos IV, fue jubilado de la plaza por Godoy. Tras el Motín de Aranjuez, Fernando VII lo restituyó. Era hermano del Decano don Arias Mon.

Inmediatamente fue nombrado como miembro de la Comisión para revisar la Causa de El Escorial (abril 1808). Según Quintana era hombre con fama de ser cruel y severo. Le Brun decía de él que era 'servilísimamente servil'. En mayo de 1808 fue escogido por Murat como miembro de la comisión que debía traer al orden al Principado de Asturias, pero estuvo a punto de ser ahorcado por la chusma enfurecida. Al parecer, fue mandado detener por Napoleón y confinado en Francia. Fue miembro del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo reunido). Tras el restablecimiento del Consejo de Castilla en 1810 pasó a formar nuevamente parte de este Tribunal. Por decreto de las Cortes de 15 de octubre de 1811 fue suspendido en sus funciones, al igual que otros trece Consejeros de Castilla. Fue restablecido en su plaza de Consejero por Real decreto de 3 de junio. A principios de septiembre de 1814 era nombrado miembro de la Comisión de Estado, Junta extraordinaria a la que se encomendó la sustanciación de la causa a los diputados liberales de las Cortes. Dimitió de este cargo en octubre de 1815. Fue miembro del Consejo de Castilla hasta su fallecimiento en 1818.

MONTEMAYOR, José

Durante el Trienio Constitucional fue ministro del Tribunal Especial de Guerra y Marina. Fue propuesto dos veces por el Consejo de Estado para el Tribunal Supremo de Justicia. Nuevamente Consejero de Castilla en 1823, era entonces conceptuado como uno de los ministros más liberales del Consejo. Tras un informe político negativo sobre su persona del Gobernador Martínez de Villela, fue separado del Consejo el 20 de febrero de 1824. Fue repuesto en su plaza por Real decreto de 2 de junio de 1830, plaza que conservó hasta la definitiva supresión del Consejo en 1834.

MORALES GUZMAN Y TOVAR, Juan de

Consejero de Castilla desde el 15 de junio de 1795. Anteriormente había sido Corregidor de Madrid. Era Consejero de Castilla en el luctuoso año de 1808, hasta la supresión del Consejo por los llamados Decretos de Chamartín.

MOYANO, Tomás

Consejero de Castilla en 1808. Miembro de la Junta Política y Militar permanente que quedó en Madrid tras la retirada de la Junta Central, el 1 de diciembre de 1808. Fue ministro del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias al constituirse en 1809. En 1810 era miembro del Consejo de Regencia. Ese mismo año pasó a formar parte del restablecido

Consejo de Castilla. Pero por Decreto de las Cortes de 15 de octubre de 1811 fue suspendido en sus funciones, junto con otros trece ministros del Consejo Real. Fue repuesto en su plaza de Consejero de Castilla por el Real Decreto de 3 de junio de 1814. Debió fallecer unos meses después.

NAVARRO VIDAL, José

Ministro del Consejo de Castilla desde el 8 de septiembre de 1802. Fue uno de los ministros que con más esfuerzo se había opuesto a prestar juramento a José, y participó en las dos últimas consultas sobre el particular: la primera junto con Colón y la segunda con Vilches. Asistió junto al Decano Mon y a otros ministros del Consejo a varias sesiones de la Junta Suprema de Gobierno. Su postura patriótica le valió fuertes amenazas del ocupante galo Mr. Frevill, por no seguir el partido francés, de lo que informó en el siguiente Consejo pleno. Había sido también Presidente de la Junta de Suministros para las tropas francesas. En agosto de 1808, tras la retirada francesa de Madrid, fue nombrado miembro de una comisión encargada de velar por el orden público en la Corte. También era por entonces Presidente de la Junta Provisiones para los Ejércitos Nacionales. El 18 de agosto el Consejo de Castilla reconoció su patriotismo, pero por su seguridad personal, el Consejo le recomendó que dejara Madrid, a lo que Navarro se negó. Fue autor del "Manifiesto del Consejo al Senado conservador de Francia en demostración de la perfidia e iniquidades de su Emperador y la atroz conducta de sus ejércitos en España". También era suya la carta que el Consejo escribió al Rey de Inglaterra. Al constituirse el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, fue nombrado ministro de este Tribunal. Tras la supresión del Consejo de Castilla por Napoleón, se fugó de Madrid el 13 de enero. Un tribunal especial purificó su conducta en Sevilla el 11 de enero de 1810. Ese mismo año fue hecho miembro del Consejo de Regencia. También parece que fue jubilado por decreto de la Junta Central de 27 de septiembre de 1810. Pero al año siguiente formaba parte ya de la plantilla de Consejeros del restablecido Consejo de Castilla en Cádiz. No volvió ya al Consejo de Castilla, pero sabemos que durante el Trienio Constitucional fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.

OLLER, Andrés

Diputado en las Cortes extraordinarias. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia durante el Trienio Constitucional. Fue repuesto en la Alcaldía de Corte en 1824, aunque al oponerse la Sala su reposición quedó sin efecto. En 1828 consigue volver a la Sala de Alcaldes, en la que entra como Decano recuperando su antigüedad. No fue

propiamente nunca Consejero de Castilla.

ONDARZA, Marcelo

Consejero de Castilla desde el año 1815. Falleció durante el llamado Trienio Constitucional.

OTAL Y VILLELA, Miguel

Director interino del Canal de Aragón con honores del Consejo de Hacienda. Fiscal de la Audiencia de Zaragoza y Asesor después de la Superintendencia del Ministerio de Hacienda. Consejero de Hacienda y más tarde Consejero de Castilla por Real decreto de 20 de febrero de 1824. Era conocido por sus ideas antiliberales. Fue Consejero de Castilla hasta el año 1833.

PÉREZ JUANA, Pedro

Abogado de los Reales Consejos. Nombrado Alcalde de Corte el 20 de febrero de 1824, más tarde, el 10 de junio de 1824, pasaba al Consejo Real en la segunda Fiscalía del Consejo, del que sería Fiscal hasta la definitiva supresión del Consejo Real en 1834.

PUIG Y SAMPER, José María

Consejero de Castilla desde el 25 de febrero de 1801. Miembro de la Junta de Comercio y Moneda, cargo que conservó tras la supresión del Consejo de Castilla por Napoleón. Fue retenido preso en el Retiro y más tarde llevado a Bayona. Más tarde entró a formar parte del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias como Consejero. Más tarde pasó al restablecido Consejo de Castilla en Cádiz. En 1810 era también Regente interino. Fue también magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, nombrado tras consulta al Consejo de Estado de 14 de mayo de 1812. Al parecer, se negó a participar en la operación de detención de autoridades y diputados del régimen constitucional, que tuvo lugar en la noche del 10 y 11 de mayo de 1814. Con el restablecimiento del Consejo en 1814 fue repuesto en su plaza de Consejero de Castilla, por Real Decreto de 3 de junio. Tras el restablecimiento del sistema constitucional, volvió a ocupar plaza de magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia, órgano del que sería nuevamente decano. Nuevamente restablecido el Consejo Real, Puig no fue inmediatamente purificado, sino que tras solicitarlo, lo fue el 23 de julio de 1823. Tras un informe negativo del Gobernador Martínez de

Villela, fue separado del Consejo el 20 de febrero de 1824. En 1828 fue uno de los defensores dentro del Consejo de la amnistía política. A principios de agosto de 1829 fue nombrado comisario regio o juez protector de lo que hasta entonces se llamaba Banco de San Carlos y que a partir de ahora se llamaría Banco de San Fernando. Parece ser también que fue un acérrimo defensor de la legitimidad monárquica establecida con la pragmática-sanción, frente a los carlistas. Organizó la resistencia a la conjura preparada por el bando carlista; igualmente se negó a publicar el decreto de revocación de la pragmática de sucesión, mientras no le constase la muerte del Rey. Esta firmeza y su fidelidad al Monarca le valieron el inmediato nombramiento como Gobernador del Consejo efectivo. Sólo estuvo en el cargo unas semanas, pues en octubre del mismo año -1832- fue jubilado con todos los honores debido a su avanzada edad. Tenía entonces ochenta años edad. A la muerte del Rey formó parte de la Junta de Gobierno que se formó, el 4 de octubre de 1833. Sabemos que había sido rehabilitado nuevamente en el Supremo Tribunal, de forma que en el momento de su supresión era Consejero de Castilla. Puig -señala Sánchez-Bella citando a Javier de Burgos- tenía inclinaciones absolutistas. Había sido separado por Cea del Consejo de Castilla tras muchos años de dilatados servicios y conservaba el resentimiento. "Tenía ochenta años; su fibra, en otro tiempo enérgica, se había aflojado. Las vicisitudes que experimentara en el último periodo de su vida habían contribuido tanto como la edad a destruir el vigor que debió un día a su temperamento y a sus largos hábitos de mando". Votó en contra de los seis Decretos reformadores de los Consejos.

QUÍLEZ Y TALÓN, Pascual

Alcalde del Crimen de la Audiencia de Sevilla. Fue recibido como hijosdalgo en Madrid el 25 de noviembre de 1783. Alcalde de la Santa Hermandad el 1 de enero de 1785. Caballero de la Orden de Carlos III por decreto de 8 de octubre de 1790. Consejero de Castilla en 1808. Al constituirse el llamado Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo reunido) en 1809, es nombrado ministro de este Supremo Tribunal. Restablecido el Consejo de Castilla en 1810, fue uno de los tres Ministros del Supremo Tribunal que presentaron un voto particular a la consulta del Consejo sobre la autoridad de las Cortes. Como es sabido, esta consulta motivó el procesamiento de 14 Ministros del Supremo Tribunal en 1811. No repuesto en 1814, el 13 de mayo de 1817 el Consejo de Castilla consultó al Monarca su reposición, a petición de aquél. No fue repuesto.

REDONDO, Francisco

Fiscal de la Audiencia de Valencia. Tercer Fiscal del Consejo Real por decreto de la Reina María Cristina de 25 de octubre de 1832. Fiscal del Consejo de la Cámara por decreto de 11 de noviembre de 1832, plaza que detentó hasta el fin del Consejo Real en 1834.

RIEGA Y SOLARES, Bernardo

Consejero de Castilla desde su toma de posesión el 27 de marzo de 1795. Manifestó claramente su oposición a jurar a José I como Rey de España. Tras la supresión del Consejo de Castilla por Napoleón y la creación del Consejo reunido en 1809, fue nombrado miembro de este Tribunal. Tras el restablecimiento del Consejo de Castilla en 1810, fue nombrado Ministro de este Consejo. Por Decreto de las Cortes de 15 de octubre fue suspendido en sus funciones, al igual que otros trece Consejeros de Castilla. Tras el restablecimiento del Consejo en 1814, fue repuesto en su plaza de Consejero de Castilla. Con el Trienio Constitucional, continuó sirviendo en la Junta de Sanidad, en el Tribunal de la Comisaría General de Cruzada y en el Juzgado de Patrimonio Real. En marzo de 1820 entró interinamente en el Tribunal Supremo de Justicia como magistrado, obteniendo tras instancia la plaza en propiedad. Fue Decano de aquel Supremo Tribunal. Nuevamente recuperó su plaza en el Consejo Real en 1823, en calidad de Decano. Tras el informe negativo del Gobernador Martínez de Villela, fue separado del Consejo el 20 de febrero de 1824. En 1827 estaba de nuevo en el Consejo Real. Tras el fallecimiento del Gobernador Martínez de Villela, el 12 de mayo de 1827, quedó como Decano Gobernador interino del Consejo. A principios de enero de 1828 sabemos que se opuso a la concesión de la amnistía política. Arias Teijeiro decía de él en 1828 que era Presidente de la Junta de Competencias y que por estos cargos era todavía el primer magistrado de la Nación. También afirmaba que aquel año estaba con los realistas. Falleció el 6 de febrero de 1830.

SAINZ DE ANDINO, Francisco

Fue Fiscal del Consejo de Hacienda. Por unos méritos contraídos fue nombrado según algunas fuentes Fiscal del Consejo Real con honores de la Cámara y antigüedad en este Consejo, el 7 de junio de 1831. No aparece en las listas oficiales de Ministros del Consejo.

SIERRA, Nicolás María

Fiscal del Consejo. En mayo de 1808 era miembro de la Junta Suprema Gubernativa que regía en Madrid en ausencia del Monarca. Durante la Guerra llegó a ser Secretario de Gracia y Justicia. Por Real Decreto de 3 de junio de 1814 pasó a ser miembro del Consejo. Falleció siendo Consejero de Castilla el 6 de julio de 1817.

SISTERNES, Joaquín

En 1823 era Ministro nombrado de Castilla, pero no había tomado posesión de aquella plaza ni tampoco del Consejo de la Guerra, al que había sido trasladado. Por orden de la Regencia fue purificado en el Consejo Real, aunque debió pasar al Consejo de la Guerra.

SOBRADO, Felipe

Sabemos que al restablecerse el Consejo en 1823 formaba parte de la plantilla del Supremo Tribunal, del que llegó a ser Decano. Ministro de la Cámara de Castilla por decreto de 27 de febrero de 1824. Por Real Orden de 19 de febrero de 1825 fue jubilado y desterrado de la Corte, tras protagonizar un incidente en la toma de posesión de tres ministros del Consejo.

SOLER, Tadeo

Era miembro del Consejo de Castilla al restablecerse el Supremo Tribunal en 1823. Fue miembro del Consejo hasta 1825.

SUAREZ VALDÉS, Gabriel

Oidor jubilado de la Real Chancillería de Granada. Consejero de Castilla por Real decreto de 20 de febrero de 1824. Juró su plaza el día 23. Era conocido por sus ideas antiliberales. Sin embargo, en 1828 se encontraba entre los Consejeros defensores de la concesión de la amnistía política. También se mostró contrario a la conducta del obispo de Orense en aquel famoso asunto que ocupó al Consejo en 1828. Fue Consejero de Castilla hasta 1829.

SUBIZA, Andrés

Oidor Decano de la Chancillería de Granada. Ministro del Consejo Real por decreto de la Reina María Cristina de 25 de octubre de 1832. Fue miembro del Consejo hasta la definitiva supresión del Consejo en 1834.

TORRES, Sebastián de

Antiguo juez de la Corte Mayor de Navarra y Alcalde de Corte, nombrado el 12 de junio de 1801. Miembro de la comisión que enjuició el llamado 'Complot de El Escorial'. Fue designado por la Junta de Gobierno a finales de abril de 1808 para acudir a Bayona en representación para proponer a Napoleón que su hermano José reinase en la Corona de España. Fue comisionado por el Consejo de Castilla para el armamento y vestuario de las tropas de Madrid y demás provincias de Castilla la Nueva en agosto de 1808. Tras la disolución del Consejo en diciembre de 1808, huyó a Lérida el 5 de enero, ciudad en la que permaneció refugiado. En 1809 al constituirse el Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo reunido), fue nombrado ministro de este Tribunal. En 1810 era restablecido el Consejo de Castilla y Torres pasaba a este Supremo Tribunal. Por decreto de 15 de octubre de 1811 fue suspendido en sus funciones, a resultas de la causa abierta por las Cortes a catorce Ministros del Consejo. El 3 de junio de 1814 fue repuesto en su plaza de Consejero de Castilla, en la que estuvo hasta su fallecimiento en 1819.

TORRES-CÓNSUL, Manuel de

Consejero de Castilla. En octubre de 1815 fue nombrado miembro de la Comisión de Estado encargado de la sustanciación de la causa a diputados liberales de las Cortes de Cádiz. Estuvo en esta comisión apenas un mes. Fue tenido como el principal defensor de la doctrina de la no restauración de las jurisdicciones señoriales, doctrina que fue aceptada por el Monarca a consulta del Consejo el 20 de febrero de 1818. Durante el Trienio Constitucional fue Ministro del Tribunal especial de Guerra y Marina. Tras el restablecimiento del Consejo Real, al principio no fue admitido en el Supremo Tribunal, siendo purificado finalmente el 23 de julio de 1823. Tras un informe negativo del Gobernador Martínez de Villela, fue jubilado el 20 de febrero de 1824. Fue rehabilitado a los pocos meses tras el correspondiente recurso. A principios de enero 1828 se encontraba entre los partidarios de la concesión de la amnistía política. Falleció en febrero del mismo año.

VIEGAS, Simón de

Fiscal del Consejo de Castilla. Participó como Fiscal en la llamada Cauda del 'Complot de El Escorial', en la que solicitó duras penas contra algunos de los encausados, entre ellos el Duque del Infantado. Tras el Motín de Aranjuez y por decreto de 1 de abril de 1808 fue desterrado seis meses de la Corte y ya no volvería al Consejo.

VILCHES, Gonzalo José

Consejero de Castilla desde el 19 de junio de 1791. Miembro de la Junta encargada de enjuiciar a los inculcados en la llamada Causa de El Escorial. Tenía enorme prestigio en el Consejo. Formaba parte en mayo de 1808 de la Junta de Gobierno que se regía España en ausencia de Fernando VII. El 5 de mayo del mismo año fue nombrado miembro de la Comisión para la Censura Diaria de la Gaceta. Designado por el Consejo para acudir a Bayona en diputación del Consejo, en mayo de 1808, para proponer a Napoleón un candidato a la Corona de España, fue vetado por Murat, probablemente por su actitud anti francesa. Recibió al parecer fuertes críticas del ocupante Mr. Freyill por no seguir el partido francés, de lo que dio cuenta en el siguiente Consejo pleno. Miembro de la Junta Política y Militar permanente de Madrid tras la retirada de la Junta Central hacia Toledo, a primeros de diciembre de 1808. Tras la detención del Decano Mon, el 8 de diciembre de 1808, quedó al frente del Consejo Real en calidad de subdecano. También fue decano del recién creado Tribunal Supremo de Justicia. Tras el restablecimiento del Consejo en 1814, fue nuevamente nombrado Consejero de Castilla por Real Decreto de 3 de junio de 1814, ocupando la plaza en calidad de Decano del Consejo hasta su fallecimiento en 1819.

VILLAGÓMEZ Y RODRÍGUEZ DE LORENZANA, Miguel Alfonso

Nacido en Valderas el 6 de octubre de 1754. Fue Oidor de la Real Audiencia de Galicia y electo Consejero de Ordenes. Caballero de la Real Orden de Carlos III por decreto de 5 de abril de 1795. Consejero de Castilla desde el 24 de marzo de 1806. Participó como miembro de la Junta que enjuició y sentenció a los inculcados en la Causa de El Escorial. Según Artola fue nombrado por su prestigio en el Consejo y por su fortaleza para no dejarse intimidar por Godoy. En 1809 fue nombrado Consejero del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo reunido). Fue diputado en las Cortes Extraordinarias de Cádiz. En un escrito afirmaba de sí lo siguiente: "combatiendo día y noche sus perversiones (de las Cortes), padeciendo después y entonces lo que es sobradamente conocido. Ha sido constante su tesón y firmeza en oponerse en todas ocasiones al sistema

constitucional. Por esto su destino al llamado Tribunal de Justicia en propiedad que le dieron sin haber precedido pretensión ni gestión alguna se declaró interinidad sujeta a consulta del llamado Consejo de Estado, debiendo recaer el nombramiento en quienes pretendiesen y probasen ser adeptos al sistema constitucional...ha mostrado su oposición decididamente...Y que en odio a la aversión a este nuevo sistema me acaeció la separación de este destino con un desprecio que siempre me hará honor..." No firmó el llamado "Manifiesto de los Persas". Por Real decreto de 5 de junio de 1814 fue repuesto en su plaza dentro del Consejo de Castilla. En el Trienio Constitucional ocupó plaza de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia desde marzo de 1820. Fue jubilado por decreto de 20 de febrero de 1824. Más tarde, el 16 de febrero de 1825 tomaba nuevamente posesión de su plaza de Consejero, en la que estaría hasta 1829.

VILLANUEVA Y ARÉVALO, José

Ministro del Consejo Real por decreto de la Reina María Cristina de 25 de octubre de 1832. Era entonces Oidor decano de la Audiencia de Sevilla. Ocuparía la plaza hasta la supresión del Consejo en 1834.

VILLANUEVA Y PACHECO, Antonio

Consejero de Castilla desde el 8 de mayo de 1794. Anteriormente era Presidente del Consejo Real de Navarra. Participó en la Junta que enjuició la llamada Causa de El Escorial. Fue respuesto en su plaza en el Consejo tras el restablecimiento del Supremo Tribunal, por Real Decreto de 3 de junio de 1814. Fue Consejero de Castilla hasta 1816.

CATALOGO DE CONSEJEROS Y FISCALES POR AÑOS

1. Año 1.808****

1. D. Arias Mon y Velarde, Decano y Gobernador interino
2. D. Gonzalo José de Vilches
3. D. Antonio Villanueva y Pacheco
4. D. Bernardo de Riega
5. D. Juan de Morales Guzmán y Tobar
6. D. Felipe Ignacio Canga Argüelles
7. D. Antonio González Yebra
8. D. Gabriel de Achutegui
9. Sr. Marqués de Casa García de Postigo
10. D. Manuel del Pozo
11. D. José María Puig de Samper
12. D. Sebastián de Torres
13. Sr. Marqués de Fuente Híjar
14. D. José Navarro y Vidal
15. D. Domingo Fernández de Campomanes
16. D. Andrés Lasauca
17. D. Antonio Alvarez Contreras
18. D. Ignacio García de Cortabarría
19. D. Ignacio Martínez de Villela
20. D. Francisco Domenech y Nadal
21. D. José Marquina Galindo
22. D. Adrián Marcos Martínez, Gobernador de la Sala de Alcaldes
23. D. Francisco Arjona
24. D. Francisco Javier Durán
25. D. Miguel Alfonso Villagómez
26. D. Vicente Duque de Estrada
27. D. Juan Antonio González Carrillo
28. D. Tomás Moyano
29. D. Juan Antonio Inguanzo
30. D. Alfonso Durán y Barazábal, Juez de Ministros
- D. Simón de Viegas, Fiscal
- D. Jerónimo Antonio Díez, Fiscal
- D. Nicolás María de Sierra, Fiscal

****. Real Academia de la Historia, Guía de Forasteros del año 1.808, págs. 72 a 75.

2. Año 1.809 (Consejo reunido)****

1. D. José Joaquín Colón, Decano
2. D. Manuel de Lardizábal
3. D. José Mon, Conde del Pinar
4. D. Francisco Requena
5. D. José Pablo Valiente
6. D. Sebastián Torres
7. D. Antonio Ignacio Cortabarría
8. D. Ignacio Martínez de Villela
9. D. Antonio López Quintana
10. D. Miguel Alfonso Villagómez
11. D. Tomás Moyano
12. D. Pascual Quílez Talón
13. D. Luis Meléndez Bruna
14. D. Juan Miguel Pérez Tafalla
15. D. Ciriaco González Carvajal

3. Año 1.810****

1. D. José Joaquín Colón de Larreátegui,
Decano
2. D. Manuel de Lardizábal
3. Sr. Conde del Pinar
4. D. Bernardo Riega y Solares
5. D. José María Puig y Samper
6. D. Sebastián de Torres
7. D. José Navarro Vidal
8. D. Domingo Fernández de Campomanes
9. D. Andrés Lasauca
10. D. Antonio Ignacio de Cortavarria
11. D. Ignacio Martínez de Villela
12. D. Francisco Arjona
13. D. Miguel Alfonso Villagómez
14. D. Vicente Duque de Estrada
15. D. Juan Antonio González Carrillo y
Ampuero
16. D. Tomás Moyano
17. D. Pascual Quílez y Talón
18. D. Benito Arias de Prada
19. D. Justo María Ibar Navarro

****. A.H.N., Consejos, Consejo reunido en Sevilla y Cádiz, legajo 11.987.

****. Guía de Forasteros año 1.812, págs. 123 a 129, Biblioteca del Congreso de los Diputados.

20. D. José Antonio de Larrumbide
D. Jerónimo Antonio Díez, Fiscal
D. Antonio Cano Manuel, Fiscal
D. Esteban Varea, Secretario

4. Año 1.811

5. Año 1.812: Supremo Tribunal de Justicia****

- Sr. D. Ramón Posada y Soto, Presidente
1. D. José María Puig, Decano
 2. D. Antonio López Quintana
 3. D. Francisco López Lisperguer
 4. D. Jerónimo Antonio Díez
 5. D. Ciriaco González Carvajal
 6. D. Tadeo Segundo Gómez
 7. D. Manuel del Castillo Negrete
 8. D. Francisco Ibáñez de Leiva
 9. D. Manuel Antonio de la Bodega y Mollinedo
 10. D. Francscio Díaz Bermudo
 11. D. Jaime Alvarez de Mendieta
 12. D. Vicente Fita
 13. D. Andrés Oller
 14. D. Diego María Badillos
 15. D. José Navarro Vidal
 16. D. Ramón López Pelegrín
 17. D. Miguel Eizaguirre

6. Año 1.814 ****

- Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. Gonzalo José Vilches, Decano
 2. D. José Joaquín Colón
 3. D. Manuel de Lardizábal
 4. D. Antonio Villanueva
 5. D. Bernardo de Riega
 6. Sr. Conde del Pinar
 7. D. José María Puig
 8. D. Sebastián de Torres
 9. D. Domingo Fernández de Campomanes

****. Guía de Forasteros año 1.813, págs. 175 a 177, Biblioteca del Congreso de los Diputados.

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.026 núm. 46: este expediente nos facilita la lista de Ministros entonces designados

10. D. Andrés Lasauca
11. D. Antonio Alvarez Contreras
12. D. Ignacio Antonio de Cortabarría
13. D. Ignacio Martínez de Villela
14. D. Francisco Arjona
15. D. Miguel Alfonso Villagómez
16. D. Juan Antonio Carrillo
17. D. Tomás Moyano
18. D. Juan Antonio Inguanzo
19. D. Benito Arias de Prada
20. D. Jerónimo Díez
21. D. Nicolás María Sierra
22. D. José Antonio Larrumbide
23. D. Luis Meléndez Bruna.

7. Año 1.815****

- Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. Gonzalo José de Vilches, Decano
 2. D. José Joaquín Colón de Larreátegui
 3. D. Manuel de Lardizábal
 4. D. Antonio Villanueva
 5. D. Bernardo Riega
 6. Sr. Conde del Pinar
 7. D. José María Puig
 8. D. Sebastián de Torres
 9. D. Domingo Fernández de Campomanes
 10. D. Andrés Lasauca
 11. D. Antonio Alvarez Contreras
 12. D. Antonio Ignacio de Cortabarría
 13. D. Ignacio Martínez de Villela
 14. D. Francisco Arjona
 15. D. Miguel Alfonso Villagómez
 16. D. Juan Antonio Carrillo
 17. D. Benito Arias de Prada, Gobernador Sala
 18. D. Jerónimo Díez
 19. D. Nicolás María Sierra
 20. D. José Antonio Larrumbide
 21. D. Luis Meléndez y Bruna
 22. D. Francisco Marín, Juez de Ministros
 - D. Manuel de Torres-Cónsul, Fiscal
 - D. Ramón López Pelegrín, Fiscal
 - D. Francisco Gutiérrez de la Huerta, Fiscal

****. Guía de Forasteros de 1.815, págs. 71 a 73, Biblioteca del Senado.

B. Año 1.816****

- Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. Gonzalo José de Vilches, Decano
2. D. José Joaquín Colón de Larreátegui
3. D. Manuel de Lardizábal
4. D. Antonio Villanueva
5. D. Bernardo Riega
6. Sr. Conde del Pinar
7. D. José María Puig
8. D. Sebastián de Torres
9. D. Domingo F. de Campomanes, Gobernador
de la Sala de Alcaldes
10. D. Andrés Lasauca
11. D. Antonio Alvarez Contreras
12. D. Ignacio Martínez de Villela
13. D. Miguel Alfonso Villagómez
14. D. Juan Antonio González Carrillo
15. D. Benito Arias de Prada
16. D. Nicolás María Sierra
17. D. José Antonio Larrúmbide
18. D. Luis Meléndez y Bruna
19. D. Francisco Marín
20. D. Tadeo Segundo Gómez
21. D. Manuel de Torres Cónsul
22. D. Ramón López Pelegrín
23. D. Juan Benito Hermosilla, Juez de M.
24. D. Marcelo Ondarza
25. D. José Montemayor
D. Francisco Gutiérrez de la Huerta,
Fiscal
D. José Hevia y Noriega, Fiscal
D. Mateo Sandoquis, Fiscal

****. Guía de Forasteros de 1.816, págs. 73 a 78,
Biblioteca del Senado.

9. Año 1.817****

- Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. Gonzalo José de Vilches, Decano
2. D. José Joaquín Colón de Larreátegui
3. D. Manuel de Lardizábal
4. D. Bernardo Riega
5. Sr. Conde del Pinar
6. D. José María Puig
7. D. Sebastián de Torres
8. D. Domingo F. de Campomanes, Gobernador
la Sala de Alcaldes
9. D. Andrés Lasauca
10. D. Antonio Alvarez Contreras
11. D. Ignacio Martínez de Villela
12. D. Miguel Alfonso Villagómez
13. D. Juan Antonio González Carrillo
14. D. Benito Arias de Prada
15. D. Nicolás María de Sierra
16. D. José Antonio Larrúmbide
17. D. Luis Meléndez y Bruna, Marqués de
Negrón
18. D. Francisco Marín
19. D. Tadeo Segundo Gómez
20. D. Manuel de Torres-Cónsul
21. D. Ramón López Pelegrín
22. D. Juan Benito Hermosilla
23. D. Marcelo Ondarza
24. D. José Montemayor
25. D. Felipe Sobrado, Juez de Ministros
D. Francisco Gutiérrez de la Huerta,
Fiscal
D. José Hevia y Noriega, Fiscal
D. Mateo Sandoquis, Fiscal

****. Guía de Forasteros de 1.817, págs. 76 a 79,
Biblioteca del Senado.

10. Año 1.818****

- Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. Gonzalo José de Vilches, Decano
 2. D. José Joaquín Colón de Larreátegui
 3. D. Manuel de Lardizábal
 4. D. Bernardo Riega
 5. Sr. Conde del Pinar
 6. D. José María Puig
 7. D. Sebastián de Torres
 8. D. Domingo F. de Campomanes, Gobernador de la Sala de Alcaldes
 9. D. Andrés Lasauca
 10. D. Antonio Alvarez Contreras
 11. D. Ignacio Martínez de Villela
 12. D. Miguel Alfonso Villagómez
 13. D. Juan Antonio González Carrillo
 14. D. Benito Arias de Prada
 15. D. José Antonio Larrumbide
 16. D. Luis Meléndez y Bruna, Marqués de Negrón
 17. D. Francisco Marín
 18. D. Tadeo Segundo Gómez
 19. D. Manuel de Torres-Cónsul
 20. D. Ramón López Pelegrín
 21. D. Juan Benito Hermosilla
 22. D. Marcelo Ondarza
 23. D. José Montemayor
 24. D. Felipe Sobrado, Juez de Ministros
 - D. Francisco Gutiérrez de la Huerta, Fiscal
 - D. José Hevia y Noriega, Fiscal
 - D. José García de la Torre, Fiscal

****. Guía de Forasteros de 1.818, págs. 79 a 83, Bibliotecas del Congreso de los Diputados y del Senado.

11. Año 1.819****

- Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. Gonzalo José de Vilches, Decano
2. D. José Joaquín Colón de Larreátegui
3. D. Manuel de Lardizábal
4. D. Bernardo Riega
5. D. José María Puig
6. D. Sebastián de Torres
7. D. Domingo F. de Campomanes
8. D. Andrés Lasauca
9. D. Antonio Alvarez Contreras
10. D. Ignacio Martínez de Villela
11. D. Miguel Alfonso Villagómez
12. D. Juan Antonio González Carrillo
13. D. Benito Arias de Prada
14. D. José Antonio Larrumbide
15. D. Luis Meléndez y Bruna, Marqués de Negrón
16. D. Francisco Marín
17. D. Manuel de Torres-Cónsul
18. D. Ramón López Pelegrín
19. D. Juan Benito Hermosilla
20. D. Marcelo Ondarza
21. D. José Montemayor
22. D. Felipe Sobrado
23. D. Francisco Javier Adell
24. D. Tadeo Soler, Juez de Ministros
25. D. José Cabanilles
D. Francisco Gutiérrez de la Huerta, Fiscal
D. José Hevia y Noriega, Fiscal
D. José García de la Torre, Fiscal

****. Guía de Forasteros de 1.819, págs. 79 a 81, Biblioteca del Senado; también A.H.N., Consejos, Consultas de Oficio del Consejo de Castilla, legajo 6.085, consulta del 9 de diciembre de 1.818.

12. Año 1.820****

- Sr. Duque del Infantado, Presidente
1. D. José Joaquín Colón de Larreátegui, Decano
 2. D. Manuel de Lardizábal
 3. D. Bernardo Riega
 4. D. José María Puig
 5. D. Domingo F. de Campomanes
 6. D. Andrés Lasauca
 7. D. Antonio Alvarez Contreras
 8. D. Ignacio Martínez de Villela
 9. D. Miguel Alfonso Villagómez
 10. D. Juan Antonio González Carrillo
 11. D. Benito Arias de Prada
 12. D. José Antonio Larrumbide
 13. D. Francisco Marín
 14. D. Manuel de Torres-Cónsul
 15. D. Ramón López Pelegrín
 16. D. Juan Benito Hermosilla, Gobernador de la Sala de Alcaldes
 17. D. Marcelo Ondarza
 18. D. José Montemayor
 19. D. Felipe Sobrado
 20. D. Francisco Javier Adell
 21. D. Tadeo Soler
 22. D. José Cabanilles
 23. D. Pedro de la Puente, Juez de Ministros
 - D. Francisco Gutiérrez de la Huerta, Fiscal
 - D. José Hevia y Noriega, Fiscal
 - D. José García de la Torre, Fiscal

****. Guía de Forasteros del año 1.820, págs. 81 a 83, Biblioteca del Senado.

13. Año 1.821: Tribunal Supremo de Justicia****

1. D. José María Puig, Decano
2. D. Francisco Ibáñez Leiva
3. D. Manuel de la Bodega
4. D. Jaime Alvarez Mendieta
5. D. Diego María Vadillos
6. D. Andrés Oller
7. D. Miguel Alfonso Villagómez
8. D. Ciriaco González Carvajal
9. D. José Navarro Vidal
10. D. Juan Benito Hermosilla
11. D. Francisco Javier Caro
12. D. Francisco Alfonso de Tuero
13. D. José María Calatrava
14. D. Pedro Silves
15. D. Antonio Villaurrutia
16. D. Francisco Mateo Marchamalo
17. D. Ramón Giraldo
18. D. Miguel Antonio Zumalacárregui
- D. Ramón López Pelegrín, Fiscal
- D. Ramón Feliú, Fiscal

14. Año 1.822: Tribunal Supremo de Justicia****

- Sr. D. Antonio Cano Manuel, Presidente
1. D. José María Puig
 2. D. Ciriaco González Carvajal
 3. D. Manuel de la Bodega
 4. D. Andrés Oller
 5. D. Diego María Vadillos
 6. D. José Navarro y Vidal
 7. D. Juan Benito Hermosilla
 8. D. Francisco Javier Caro
 9. D. Francisco Alfonso de Tuero
 10. D. José María Calatrava
 11. D. Pedro Silves
 12. D. Francisco Mateo Marchamalo
 13. D. Ramón Giraldo

****. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Guía de Forasteros de 1.821, págs. 51 y 52.

****. Guía de Forasteros de 1.822, págs. 53 y 54, Biblioteca del Senado.

14. D. Miguel Antonio de Zumalacárregui
15. D. Domingo Dueñas y Castro
16. D. Miguel de Soria
17. D. José Navia Bolaño
18. D. Joaquín Carrión
19. D. Miguel López Andreu
20. D. José de Zorraquín
 - D. Juan de la Dehesa, Fiscal
 - D. Manuel Encina, Fiscal
 - D. Manuel Abad, Secretario

15. Año 1.823

16. Año 1.824****

Gobernador Sr. D. Ignacio Martínez de Villela,

1. D. Bernardo Riega, Decano
2. D. José María Puig
3. D. Antonio Alvarez de Contreras
4. D. Miguel Alfonso Villagómez
5. D. Juan Antonio González Carrillo
6. D. José Antonio Larrumbide
7. D. Francisco Marín
8. D. Manuel de Torres-Cónsul
9. D. Juan Benito Hermosilla
10. D. Francisco Javier Adell
11. D. Tadeo Soler
12. D. José Cabanilles
13. D. José Manuel de Arjona
14. D. Miguel Alfonso Blanes
15. D. Alejandro Dolarca, Juez de Ministros
 - D. José Hevia y Noriega, Fiscal

****. A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.608
 núm. 48.

17. Año 1.825****

- Sr. D. Ignacio Martínez de Villela,
Gobernador
1. D. Felipe Sobrado
 2. D. José Hevia y Noriega
 3. D. Tadeo Soler
 4. D. José Cabanilles
 5. D. José Manuel de Arjona, Gobernador Sala
 6. D. Miguel Ramón Modet
 7. D. Francisco Fernández del Pino
 8. D. Juan Martínez Oliva
 9. D. Juan Garrido y López
 10. D. León de la Cámara Cano
 11. D. Miguel Otal y Villela
 12. D. Joaquín de Almazán
 13. D. Tadeo Ignacio Gil
 14. D. Luis de León
 15. D. Gabriel Suárez Valdés
 16. D. Dionisio Catalán, Juez de Ministros
- D. Juan Antonio Heredia, Fiscal
D. Pedro Pérez Juana, Fiscal

18. Año 1.826****

- Sr. D. Ignacio M. de Villela, Gobernador
1. D. Miguel Alfonso Villagómez
 2. D. José Antonio de Larrumbide
 3. D. Francisco Marín
 4. D. José Hevia y Noriega
 5. D. José Cabanilles
 6. D. José Manuel de Arjona
 7. D. Miguel Ramón Modet
 8. D. Francisco F. del Pino, Gobernador Sala
 9. D. Juan Garrido y López
 10. D. León de la Cámara Cano
 11. D. Miguel Otal y Villela
 12. D. Joaquín de Almazán
 13. D. Tadeo Ignacio Gil
 14. D. Luis de León
 15. D. Gabriel Suárez Valdés
 16. D. Dionisio Catalán, Juez de Ministros
 17. D.
- D. Juan Antonio Heredia, Fiscal
D. Pedro Pérez Juana, Fiscal

****. Guía de Forasteros de 1.825, págs. 79 y 80,
Biblioteca del Senado.

****. Guía de Forasteros del año 1.826, págs. 80 y 81,
Biblioteca del Senado.

19. Año 1.827****

- Sr. D. Ignacio Martínez de Villela,
Gobernador
1. D. Bernardo Riega, Decano
 2. D. José María Puig de Samper
 3. D. Miguel Alfonso Villagómez
 4. D. José Antonio Larrumbide
 5. D. Francisco Marín
 6. D. Manuel de Torres-Cónsul
 7. D. José Hevia y Noriega
 8. D. Francisco Javier Adell
 9. D. José Cabanilles
 10. D. José Manuel de Arjona
 11. D. Miguel Ramón Modet
 12. D. Francisco F. del Pino, Gobernador Sala
 13. D. Juan Garrido López
 14. D. León de la Cámara Cano
 15. D. Miguel Otal y Villela
 16. D. Joaquín de Almazán
 17. D. Tadeo Ignacio Gil
 18. D. Luis de León
 19. D. Gabriel Suárez Valdés
 20. D. Dionisio Catalán, Juez de Ministros
- D. Juan Antonio Heredia, Fiscal
D. Pedro Pérez Juana, Fiscal

20. Año 1.828****

1. D. Bernardo Riega, Decano y Gobernador interino
2. D. José María Puig de Samper
3. D. Miguel Alfonso villagómez
4. D. Francisco Marín
5. D. Manuel de Torres-Cónsul
6. D. José Hevia y Noriega
7. D. Francisco Javier Adell
8. D. José Cabanilles
9. D. José Manuel de Arjona
10. D. Miguel Ramón Modet
11. D. Francisco F. del Pino, Gobernador Sala

****. Guía de Forasteros de 1.827, págs. 82 y 83, Biblioteca del Senado.

****. Guía de Forasteros de 1.828, págs. 82 a 84, Biblioteca del Senado y Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

12. D. Miguel Otal y Villela
13. D. Joaquín Almazán
14. D. Tadeo Ignacio Gil
15. D. Luis de León
16. D. Gabriel Suárez Valdés
17. D. Dionisio Catalán
18. D. Vicente Borja
19. D. Rafael Paz y Fuertes, Juez de Ministros
- D. Juan Antonio Heredia, Fiscal
- D. Pedro Pérez Juana, Fiscal

21. Año 1.829****

1. D. Bernardo Riega, Decano y Gobernador interino
2. D. José María Puig y Samper
3. D. Miguel Alfonso Villagómez
4. D. Francisco Marín
5. D. José Hevia y Noriega
6. D. Francisco Javier Adell
7. D. José Cabanilles
8. D. José Manuel de Arjona
9. D. Miguel Ramón Modet
10. D. Francisco F. del Pino, Gobernador Sala
11. D. Miguel Otal y Villela
12. D. Tadeo Ignacio Gil
13. D. Gabriel Suárez Valdés
14. D. Dionisio Catalán
15. D. Vicente Borja
16. D. Rafael Paz y Fuertes
17. D. José Ignacio Llorens
18. D. Esteban Asta
19. D. Tomás de Arizmendi
20. D. Teotimo Escudero
- D. Juan Antonio Heredia, Fiscal
- D. Pedro Pérez Juana, Fiscal

****, Guía de Forasteros de 1.829, págs. 82 a 84.

22. Año 1.830¹⁸⁰⁰

1. D. Bernardo Riega, Decano y Gobernador interino
2. D. José María Puig
3. D. Francisco Marín
4. D. José Hevia y Noriega
5. D. Francisco Javier Adell
6. D. José Cabanilles
7. D. José Manuel de Arjona
8. D. Miguel Ramón Modet
9. D. Francisco F. del Pino, Gobernador Sala
10. D. Miguel Otal y Villela
11. D. Tadeo Ignacio Gil
12. D. Dionisio Catalán
13. D. Vicente Borja
14. D. Rafael Paz y Fuertes
15. D. José Ignacio Llorens
16. D. Esteban Asta
17. D. Tomás de Arizmendi
18. D. Teotimo Escudero, Juez de Ministros
19.
20.
D. Juan Antonio Heredia, Fiscal
D. Pedro Pérez Juana, Fiscal

23. Año 1.831¹⁸⁰¹

1. D. José María Puig y Samper, Decano y Gobernador interino
2. D. Francisco Marín
3. D. Ramón López Pelegrín
4. D. José Montemayor
5. D. José Hevia y Noriega
6. D. Francisco Javier Adell
7. D. José Cabanilles
8. D. Manuel José de Arjona
9. D. Miguel Ramón Modet
10. D. Francisco Fernández del Pino
11. D. Miguel Otal y Villela
12. D. Tadeo Ignacio Gil
13. D. Dionisio Catalán
14. D. Vicente de Borja

¹⁸⁰⁰. Guía de Forasteros de 1.830, págs. 84 y 85, Biblioteca del Senado y Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

¹⁸⁰¹. Guía de Forasteros de 1.831, págs. 85 a 87, Biblioteca del Senado y Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

15. D. Rafael Paz y Fuertes
16. D. José Ignacio Llorens
17. D. Esteban de Asta, Gobernador de la Sala
18. D. Tomás de Arizmendi
19. D. Teotimo Escudero, Juez de Ministros
D. Juan Antonio de Heredia, Fiscal
D. Pedro Pérez Juana, Fiscal

24. Año 1.832¹⁸³²

1. D. José María Puig y Samper, Decano y
Gobernador interino
2. D. Francisco Marín
3. D. Ramón López Pelegrín
4. D. José Montemayor
5. D. José Hevia y Noriega
6. D. Francisco Javier Adell
7. D. José Cabanilles
8. D. Manuel José de Arjona
9. D. Ramón Miguel Modet
10. D. Francisco Fernández del Pino
11. D. Miguel Otal y Villela
12. D. Tadeo Ignacio Gil
13. D. Dionisio Catalán
14. D. Vicente de Borja
15. D. Rafael Paz y Fuertes
16. D. José Ignacio Llorens
17. D. Esteban de Asta, Gobernador de la Sala
18. D. Tomás de Arizmendi
19. D. Teotimo Escudero, Juez de Ministros
D. Juan Antonio Heredia, Fiscal
D. Pedro Pérez Juana, Fiscal

¹⁸³². Guía de Forasteros de 1.832, págs. 85 a 87, Bibliotecas del Senado y de la Real Academia de la Historia; A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.912, expediente núm. 2.

25. Año 1.833¹⁸⁰³

- Excmo. Sr. D. Javier Castaños, Presidente
1. D. Francisco Marín, Decano
 2. D. Ramón López Pelegrín
 3. D. José Montemayor
 4. D. José Hevia y Noriega
 5. D. José Cabanilles
 6. D. José Manuel de Arjona
 7. D. Ramón Miguel Modet
 8. D. Francisco Fernández del Pino
 9. D. Miguel Otal y Villela
 10. D. Tadeo Ignacio Gil
 11. D. Dionisio Catalán
 12. D. Vicente de Borja
 13. D. Rafael Paz y Fuertes
 14. D. José Ignacio Llorens
 15. D. Esteban de Asta
 16. D. Tomás de Arizmendi
 17. D. Teotimo Escudero, Gobernador de la Sala de Alcaldes
 18. D. Domingo Barrafón
 19. D. José Martínez Areta
 20. D. José Villanueva
 21. D. Andrés Subiza
 22. D. José Ayuso, Juez de Ministros
- D. Juan Antonio Heredia, Fiscal
D. Pedro Pérez Juana, Fiscal
D. Francisco Redondo, Fiscal

¹⁸⁰³ A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.930
núm. 7; Guía de Forasteros año 1.833, págs. 88 y 89,
Bibliotecas del Senado y de la Real Academia de la Historia.

26. Año 1.834^{***}

- Excmo. Sr. D. Javier Castaños, Presidente
1. D. Francisco Marín, Decano
 2. D. Ramón López Pelegrín
 3. D. José Montemayor
 4. D. José Hevia y Noriega
 5. D. José Cabanilles
 6. D. José Manuel de Arjona
 7. D. Miguel Modet
 8. D. Dionisio Catalán
 9. D. Vicente de Borja
 10. D. Rafael Paz y Fuertes
 11. D. José Ignacio Llorens
 12. D. Esteban de Asta
 13. D. Tomás de Arizmendi
 14. D. Teotimo Escudero, Gobernador de la Sala de Alcaldes
 15. D. Domingo Borrafón
 16. D. José Martínez Areta
 17. D. José Villanueva
 18. D. Andrés Subiza
 19. D. José Ayuso
 20. D. José Mier
 21. D. Matías Herrero Prieto
- D. Nicolás María Gareli, Supernumerario
D. Juan Antonio Heredia, Fiscal
D. Pedro Pérez Juana, Fiscal
D. Francisco Redondo, Fiscal

^{***} A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, legajo 3.951 núm. 5; Guía de Forasteros año 1.834, págs. 128 y 129, Bibliotecas del Senado y de la Real Academia de la Historia.

27. Año 1.835: Consejo Real de España e Indias***

Excmo. Sr. Duque de Bailén, Presidente

Sección de Estado

1. D. Eusebio Bardaji, Decano
2. D. Ignacio de la Pezuela
3. D. José García de León y Pizarro
4. D. Miguel Ricardo de Alava
5.

Sección de Gracia y Justicia

6. D. Ramón López Pelegrín, Decano
7. D. José Cafranga
8. D. Manuel García Herreros
9. D. José Ayuso y Navarro
10. D. Manuel de Arbizu

Sección de Guerra

11. Sr. Conde de Cuba, Decano
12. D. Felipe Montes
13. D. Gaspar Diruel
14.
15.

Sección de Hacienda

16. D. Antonio Martínez, Decano
17. D. Francisco López Alcaraz
18. D. Jacobo María Parga
19. D. Niceto de Larreta
20. D. José López Juana Pinilla

Sección de Marina

21. D. Martín Fernández Navarrete, Decano
22. D. Agustín Perales
23. D. Miguel Moreno

Sección de lo Interior

24. D. Juan Alvarez Guerra
25. D. José Canga-Argüelles
26. D. José de Heredia
27. D. Justo José Banqueri
28. D. Vicente González Arnao

Sección de Indias

29. D. Manuel de la Bodega, Decano
30. D. Ramón Gil de la Cuadra
31. D. Gaspar Vigodet
32. D. Antonio Davan y Urrutia

***. Guía de Forasteros de 1.835, págs. 117 y 118, Bibliotecas del Senado y de la Real Academia de la Historia.

Estado

- 33. D. Luis Urrejola
- 34. D. Joaquín Carrión y Moreno
 - D. Mariano Milla, Secretario Consejo
 - D. Mariano Carnerero, Secretario S.
- D. Damián de la Santa, Secretario Sección
Gracia y Justicia
- D. Francisco de Gárate, Secretario
Sección de Hacienda
- D. Francisco Basurto, Secretario Sección
de Marina
- Sr. Conde de Torre Marín, de la de lo
Interior
- D. Andrés Arango, de la de Indias

IX. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- El Consejo de Castilla fue un apoyo fuerte para Fernando VII en los momentos siguientes al Motín de Aranjuez, así como en la Restauración de 1814.

- La conducta del Consejo en los difíciles días de la ocupación francesa en 1808 no fue afrancesada sino todo lo contrario. Opuso una digna resistencia a las pretensiones de Napoleón, enfrentando a las armas francesas el Derecho.

- La creación de un Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias en 1809 respondió a la carencia de recursos humanos cualificados así como a la drástica disminución de negocios. Causa de ello fue la ocupación francesa de buena parte del territorio español.

- El proceso de las Cortes contra catorce Ministros del Consejo Real fue a todas luces injusto. En realidad se convirtió en un proceso al propio Supremo Tribunal.

- Tras la restauración de 1814 se produjo un importante recorte de competencias en la Presidencia de Castilla y en su Secretaría.

- En la llamada Década Ominosa se produjo un cambio radical en la actitud de Fernando VII con respecto al Consejo Real. Abundaron los estudios sobre reforma de la Administración y el Consejo fue perdiendo paulatinamente competencias gubernativas. Quedó así convertido prácticamente en un Tribunal Supremo de Justicia. A ello se añadió también un fuerte incremento de las funciones consultivas.

- Con la creación del Consejo de Ministros en 1824, se perfilaron unas peculiares relaciones institucionales entre ambos organismos. El Consejo de Ministros acudía al Consejo Real en solicitud de consultas, lo mismo que el Monarca, y ambos tomaban las correspondientes resoluciones ante estas consultas; también el Consejo Real podía enviar consultas al Rey o al Consejo de Ministros, según los casos.

- Los vaivenes políticos también tuvieron su reflejo en el Consejo de Castilla. Prueba de ello fue la jubilación de más de una docena de Consejeros en 1824, a petición del propio Gobernador, tras una sugerencia real. Esta jubilación masiva de de Ministros coincidió con un cambio de Gobierno hacia posturas más conservadoras. Sin embargo, poco a poco fueron siendo reintegrados estos Ministros en sus plazas en el Supremo Tribunal. Esa tendencia aperturista se reflejará en la aparente adopción de medidas de apoyo hacia la causa isabelina al final del reinado.

- Los Ministros y subalternos del Consejo fueron sometidos a purificación política. Algunos de ellos no pasaron esta purificación y tuvieron que dejar sus plazas.

- La diferencia entre Gobernador y Presidente del Consejo radicaba en que el Presidente debía ser noble Grande de España. En el reinado de Fernando VII hubo dos Presidentes, dos Gobernadores y curiosamente abundaron los Decanos en funciones de Gobernadores interinos.

- La autoridad y el prestigio del Consejo de Castilla se vieron sometidos a lo largo de todo el reinado a enormes tensiones y lesiones. Al final del reinado de Fernando VII el Consejo Real había perdido buena parte de su importancia dentro del sistema de nuestra Administración Central.

X. BIBLIOGRAFIA

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

"Actas de la Diputación General de Españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808", Madrid 1874.

"Actas del Consejo de Ministros, Fernando VII", tomos I (1824 y 1825), II (1826 y 1827), III (1828) y IV (1829), Ministerio de Relaciones con las Cortes y de las Secretaría del Gobierno, Madrid 1989-91.

AGUADO BLEVE, P. y ALCAZAR MOLINA, C., "Manual de Historia de España", Madrid 1956.

ALCALA GALIANO, A., "Memorias de don Antonio Alcalá galiano publicadas por su hijo", Madrid 1886; también en B.A.E., núms. 83 y 84, Madrid 1955.

- "Recuerdos de un anciano", Madrid 1878.

ALCARAZ, C., "El Conde de Floridablanca, su vida y su obra", Marcua 1934.

ALCOCER MARTÍNEZ, M., "Consejos: Real de Castilla, de Cruzada, Supremo de Inquisición", págs. 33-44, Imprenta Casa Social Católica, Revista Histórica de Valladolid, 1925.

ALTEA, Conde de, "Historia del Palacio de Santa Cruz (1629-1983)", Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid 1983.

ALVAREZ CASCOS, F., "Los parlamentarios asturianos en el reinado de Fernando VII", Asturias 1985.

ALVAREZ DE MORALES, A., "Apuntes de historia de las instituciones españolas (siglos XVII y XIX)", Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1976.

ALVAREZ PINEDO, F.J., "Guía del Consejo Real de España"

e Indias", A.G.S., Simancas 1987.

ALVAREZ RUBIANO, P., "Esquema de la Administración Española durante la Guerra de la Independencia", Actas del I S.H.A., págs. 381-420, I.E.A., Madrid 1970.

ALVAREZ-COCA GONZALEZ, M.J., "La Corona de Aragón: documentación en el Consejo y la Cámara de Castilla (1707-1834). Fuentes en el Archivo Histórico Nacional", Hispania, XLIX/173 (1989), págs. 895 a 948.

ANDRÉS-GALLEGO, J.A., "La Revolución Francesa en la Historiografía y en la Historia de España", en La Revolución Francesa. Ocho estudios para entenderla, EUNSA, Pamplona 1990.

ANES, G., "El Antiguo Régimen: los Borbones", Historia de España Alfaguara, tomo IV, Madrid 1975.

ANÓNIMO, "Memoria sobre las Secretarías del Despacho", Madrid 1824, publicado por Prado Rozas en "Las Secretarías de Despacho", págs. 137-181.

ANÓNIMO, "Refutación al Manifiesto y representación que algunos diputados a las Cortes ordinarias de 1814 firmaron en Madrid y representaron en Valencia a S.M. el señor don Fernando VII a la entrada en España a la vuelta de su cautividad en Francia el 12 de abril del mismo año", Madrid 1820.

ANÓNIMO, folleto "Opinión general de la Nación Española después que los franceses evacuaron la capital de Madrid, extendida por el corregidor alcalde mayor de Salamanca en obsequio de la Patria", Oficina de Juan Vallejera, Salamanca 1808.

ANÓNIMO, "Causa fundamental de la extinción del Supremo consejo de Castilla", Colección del Fraile núm. 762, Madrid 1812.

ARGÜELLES, A., "Discurso preliminar de la Constitución de 1812", Introducción de Luis Sánchez Agesta, C.E.C., Madrid 1981.

~ "Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1810, hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813", Imprenta de Charles Wood and son, 2 tomos, Londres 1835.

ARIAS TEIJEIRO, J., "Diarios", Documentos del reinado de Fernando VII, Universidad de Navarra, C.S.I.C., Pamplona 1966.

ARRIAZU, M.I. y otros. "Estudios sobre las Cortes de

Cádiz", Pamplona 1967.

- "La consulta de la Junta Central al país sobre Cortes", en Estudios sobre las Cortes de Cádiz, Pamplona 1967.

ARTOLA, M., "Antiguo Régimen y Revolución Liberal", Ariel Historia, Madrid 1978.

- "Orígenes de la España Contemporánea", 2 tomos, Madrid 1959.

- "La España de Fernando VII", en Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXVI, Espasa Calpe S.A., Madrid 1968.

- "La burguesía revolucionaria (1808-1874)", tomo V Historia de España Alfaguara, Madrid 1974.

- "Los afrancesados", Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid 1953.

- "Memorias de tiempos de Fernando VII", B.A.E., tomos XCVII y XCVIII, Estudio preliminar sobre Fernando VII, págs. V y ss., Madrid 1957.

- "Partidos y programas políticos (1808-1936)", 2 tomos, Aguilar, Madrid 1974.

ARVIZU Y GALARRAGA, F., "El Consejo Real de España e Indias (1834-1836)", Actas del III S.H.A., I.E.A., págs. 387 a 408, Madrid 1974.

ARZANDÚN, J., "Fernando VII y su tiempo", Madrid 1942.

ASTUR, E., "Riego", Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias, Oviedo 1984.

AYERBE, Marqués de, "Memorias del Marqués de Ayerbe", Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVIII, Madrid 1957.

AYMES, J.R., "La Guerra de la Independencia en España 1808-1814", Madrid 1974.

- "Los españoles en Francia 1808-1814. La deportación bajo el Primer Imperio", Siglo Veintiuno Editores, Madrid 1987.

AZANZA, M., y O'FARRELL, G., "Memoria sobre los hechos que justifican su conducta política", Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVIII, Madrid 1957.

BAROJA, I.R., "Noticias para literatos acerca de los archivos públicos de la hoy extinguida sala de Alcaldes de Casa y Corte", San Sebastián 1834.

BARRERO GARCÍA, A.M., "La materia administrativa y su gestión en el reinado de Fernando VII", en *Actas del IV S.H.A.*, págs. 71 a 92; también en el *A.H.D.E.*, tomo LIII, págs. 395 a 421, I.N.E.J., Madrid 1983.

BARRIOS PINTADO, F., "El Consejo de Estado en la Monarquía Española (1521-1812)", Consejo de Estado, Madrid 1984.

- "Los Reales Consejos. El gobierno central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII", U.C.M., 1988.

BAYO, E.K., "Historia de la vida y reinado de Fernando VII", 3 tomos, Imprenta Repullés, Madrid 1842.

BELDA, J., y LABRA, R.M. (hijo), "Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San Felipe Neri", Imprenta Portanet, Madrid 1912.

BENEYTO, J., "Historia de la Administración española e hispanoamericana, Aguilar, Madrid 1958.

- "Instituciones de Derecho Histórico Español", 3 tomos, Librería Bosch, Barcelona 1930.

BERMEJO CABRERO CABRERO, J.L., "Dos notas sobre la Sala de Alcaldes de Casa y Corte", Estudios de Historia del Derecho y de las Instituciones, págs. 177-186, Universidad de Alcalá de Henares, 1989.

BLANCO VALDÉS, R.L., "Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823", Institución Valenciana d'Estudis i Investigació, Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., Madrid-Valencia 1988.

BORREGO, A., "Historia de las Cortes de España durante el siglo XIX", Madrid 1885.

BRAVO MURILLO, J., "Política y administración en la España isabelina", Narcea S.A. de Ediciones, Madrid 1972.

BRUGUERA, F.G., "Histoire Contemporaine d'Espagne 1789-1950", Editions Ophrys, Paris 1953.

BULDAÍN JACA, B.E., "Régimen político y preparación de Cortes en 1820", Congreso de los Diputados, Madrid 1988.

- "Documentos relativos a la transición política de 1820", Madrid 1987.

CABRERA BOSCH, M.I., "Consejo Real de Castilla, legislación y revolución liberal, 1808-1834", en la *Revista de las Cortes Generales*, num. II (1987), oct.-dic., págs. 125-155, Madrid.

CADENAS Y VICENT, V., "Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos III, 1771-1847", 12 tomos, Instituto Salazar de Castro, C.S.I.C., Madrid 1979.

CALVO MARCOS, M., "Régimen parlamentario de España en el siglo XIX. Apuntes y documentos para su historia", Madrid 1883.

CALZADA RODRÍGUEZ, I. de la, "La evolución institucional. Las Cortes de Cádiz: precedentes y consecuencias", III Congreso Internacional de la Guerra de la Independencia y su época. Hogar Pignatelli, Institución Fernando el Católico, Zaragoza 1959.

CAMBRONERO, C., "El rey intruso", Madrid 1909.

CAMUÑAS, A., "La reconstrucción del Palacio del Consejo de Estado", Revista Reconstrucción, año 1945 núm. 5, págs. 37 a 56, Madrid.

CANGA ARGÜELLES, J., "Observaciones sobre la historia de la guerra de España que escribieron los Sres. Clarke, Southey, Londonderry y Napier", Madrid 1833.

CANOVAS DEL CASTILLO, "Diccionario de política y administración", Madrid 1868.

CANTOS BENÍTEZ, P., "Escrutinio de maravedises y monedas de oro antiguas, su valor, reducción y cambio a las monedas corrientes, deducido en escrituras, leyes y pragmáticas antiguas y modernas de España", Marín, tomo IV, Madrid 1763.

CARANTONA ALVAREZ, F., "La Guerra de la Independencia en Asturias", Madrid 1983.

CARASA SOTO, P., "Los pósitos en España en el siglo XIX", Revista de Investigaciones Históricas, págs. 247 a 304, Universidad de Valladolid, 1983.

CARNICERO, J.C., "Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de España", Imprenta de don M. de Burgos, 4 tomos, Madrid 1814.

CARR, R., "España, 1808-1939", Barcelona 1969.

CARRASCO CANALS, C., "La burocracia en la España del siglo XIX", I.E.A.L., Madrid 1975.

CARRETERO PÉREZ, A., "La Administración de Justicia desde 1808 a 1833", en Revista de Derecho Judicial, 21 (1965), Madrid.

CASTAÑEDA, V., "Bosquejo del estado de España desde fines de 1819 hasta 17 noviembre 1823", Madrid 1948.

CASTEL, J., "La Junta Suprema y Gubernativa de España e Indias (25 de septiembre 1809-29 enero 1810)", Madrid 1950.

CASTILLO, A.A., "La Constitución de 1812 y el inicio del constitucionalismo", Madrid 1985.

CEVALLOS, "Memorias de Cevallos. Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la Corona de España y los medios que el Emperador de los Franceses ha puesto en obra para realizarla", Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVIII, Madrid 1957.

"Los Códigos Españoles concordados y anotados", tomo X, Novísima Recopilación de las Leyes de España, 2 edición, Antonio S. Martín Editor, Madrid 1872.

"Colección de papeles interesantes sobre las circunstancias presentes", Madrid 1808.

"Colección de providencias generales expedidas en todo el año de 1788 así en virtud de resoluciones de S.M. como del Consejo unas y otras en veneficio del Reyno", Ministerio de Justicia, Madrid 1988.

"Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico Nacional", dirigido por D^a Natividad Moreno Garbayo, D.G. del Patrimonio Artístico y Cultural, Madrid 1977.

COLMEIRO, M., "De la constitución y del gobierno de los reinos de León y Castilla", 2 vols., Librería de don Angel Calleja, Madrid 1855.

- "Derecho Administrativo Español", Madrid 1865.

- "Curso de Derecho Político según la historia de León y Castilla", Madrid 1873.

COMELLAS, J.L., "Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812", en la Revista de Estudios Políticos, número monográfico sobre las Cortes de Cádiz y su Constitución, págs. 69 a 112, Madrid 1971.

- "Historia de España Moderna y Contemporánea", RIALP, Madrid 1973.

- "Estructura del proceso reformador de las Cortes de Cádiz", "Estudios de la Guerra de la Independencia", Zaragoza 1965.

COMÍN COLOMER, E., "La Masonería en España", Madrid 1944.

CONDE DE LA CANADA, "Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y

acaban en los tribunales reales" (tomo I); y "Observaciones prácticas sobre recursos de fuerza" (tomo II), 2ª edición, Madrid 1794.

CORDERO TORRES, J.M., "El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España", I.E.P., Madrid 1944.

CORTÉS ALONSO, V., "Los Consejos y su documentación. Historia, tratamiento y servicios", Revista de Archivística (1989) núm. 1.

COS GAYÓN, F., "Historia de la Administración Pública Española", I.E.A., Madrid 1976.

CUSTINE, M. de, "Espagne sous Ferdinand VII", 4 tomos, Paris 1834.

CHAVARRI SIDERA, P., "Las elecciones a diputados a las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813)", Madrid 1988.

DANVILA, M., "El poder civil en España", 5 vols., Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Madrid 1885.

D.C.E., "El Consejo Real como elemento del gobierno constitucional", Madrid 1846.

DE DIOS, S., "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", Diputación de Salamanca, 1986.

- "El Consejo Real de Castilla", Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1982.

DESDEVISES DU DEZERT, G., "Les institutions de l'Espagne au XVIII^eme. siecle", París

- "Le Conseil de Castille au XVIII^eme. siecle", Revue Historique, 79 (1902).

- "Le Conseil de Castille en 1808", Revue Hispanique, 17 (1907), págs. 66 a 378.

- "La España del Antiguo Régimen", F.U.E., Madrid 1989.

"Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias", Madrid 1873.

"Diccionario Enciclopédico Espasa", 10ª Edición, Espasa-Calpe S.A., Madrid 1988, voz Gobernador, págs. 1379 y 1380.

"Diccionario de Historia de España", Alianza Editorial, dirigido por German Beiberg, voz Consejo Real, págs. 941 a 943, Madrid 1986.

"Diccionario Bibliográfico de la Guerra de la Independencia Española", S.H.M., 3 tomos, Madrid 1944.

DIZ-LOIS, M.C., "Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813)", Universidad de Navarra, I.E.P., Madrid 1976.

- "El Manifiesto de 1814", Pamplona 1967.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., "Sociedad y Estado en el siglo XVIII español", Barcelona 1981.

- "La sociedad española en el siglo XVIII", Madrid 1955.

DOU Y BASSOLS, R.L. de, "Instituciones del Derecho Público General de España con noticia del particular de Cataluña", tomos 2 y 3, Madrid 1801, reeditado por Banchs Editor, Barcelona 1975.

ELLIOT, J.H., "La España Imperial (1469-1716)", Edt. Vicens Vives, Barcelona 1965.

ELLUL, J., "Histoire des institutions. Le XIX siècle", Paris 1969.

"En nombre del honrado y generoso pueblo de la Capital de España, Responde a la admirable proclama que se dignó publicar el día 5 del presente mes el supremo Consejo de Castilla, un buen ciudadano". Colección del Fraile núm. 3.230.

"Ensayo imparcial sobre el gobierno del Rey don Fernando VII. escrito en Madrid por un español en mayo del presente año", Versailles 1824.

ESCOIQUIZ, J., "Memorias de Escoiquiz. Idea sencilla de las razones que motivaron el viaje del Rey Don Fernando VII a Bayona", Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVIII, págs. 1-152, Madrid 1957.

ESCOLANO DE ARRIETA, P., "Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos con distinción de los que pertenecen al Consejo pleno, o a cada Sala en particular: y las fórmulas de las cédulas, provisiones y certificaciones respectivas", 2 vols., Madrid 1796.

ESCODERO, J.A., "Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas", Madrid 1985.

- "Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724)", Estudios de Historia de la Administración, I.E.A., 2 vols., Madrid 1969.

- "Orígenes del Consejo de Ministros en España", 2 tomos, Editora Nacional, Madrid 1979.

- "La Real Junta Consultiva de Gobierno", Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid 1973.

- "Memoriales privados sobre la situación de España en el reinado de Fernando VII", A.H.D.E., 42 (1972), págs. 331-341.

- "Notas sobre el Consejo de Estado entre los siglos XVIII y XIX", Hispania núm. 128, C.S.I.C., págs. 609-625, Madrid 1974.

- "La creación de la Presidencia del Consejo de Ministros", en A.H.D.E., 1972, págs. 757-767, Madrid.

- "Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Régimen", Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1975.

ESPADAS, M., DUFOUR, G., y LUNA, J.J., "La España de José Bonaparte", Cuadernos de Historia 16 núm. 185, Madrid 1985.

"Estadística y vicisitudes de las Cortes y de los Ministerios de España", Madrid 1958.

FAYARD, J., "Fortune et hierarchie au Conseil aux XVII et XVIII siècles. Les Arce et les Medrano", Actas de las I. Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, III, Universidad de Santiago de Compostela, 1975.

- "Les membres du Conseil de Castille à l'époque moderne (1621-1746)", Librairie Droz, Genève 1979.

- "Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788). Informes biográficos", Revista Hidalguía núms. 162 (1980) a 171 (1982), Instituto Salazar de Castro, C.S.I.C., Madrid 1980-1982.

- "Los ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788)", Cuadernos de Investigación Histórica 6, págs. 109-136, F.U.E., Madrid 1982.

- "La tentative de réforme du Conseil du Castille sous le Règne de Philippe V (1713-1715)", en Mélanges de la Casa de Velázquez, tomo II (1966), págs. 259-282.

FERNANDEZ ALMAGRO, M., "Orígenes del Régimen Constitucional en España", Barcelona 1928.

- "Del Antiguo Régimen a las Cortes de Cádiz", Revista de Estudios Políticos, núm. 126, Madrid 1962; también en un número monográfico sobre las Cortes de Cádiz y su Constitución, págs. 9 a 29, Madrid 1971.

FERNANDEZ MARTÍN, M., "Derecho Parlamentario Español", 3 tomos, Madrid 1885-1900.

FERNANDEZ PIRLA, J.M., "El Tribunal Mayor de Cuentas de Fernando VII", Tribunal de Cuentas, Madrid 1986.

FERRANDO BADÍA, J., "Visicitudes e influencias de la Constitución de 1812", en la Revista de Estudios Políticos, número monográfico sobre las Cortes de Cádiz y su Constitución, págs. 169 a 228, Madrid 1971.

FERRER DEL RÍO, A., "Historia de Carlos III".

"Folletos curiosos e interesantes", 7 tomos, Madrid-Londres 1807-1811.

FONTANA, J., "La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1834", Barcelona 1983.

- "La quiebra de la Monarquía Absoluta (1814-1820)", Barcelona 1971.

- "Hacienda y Estado 1823-1833", Ministerio de Hacienda, Madrid 1973.

FONTES, F., "El Consejo de Ministros en el reinado de Fernando VII", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 71 (1985).

- "El Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII", tesis doctoral, Madrid 1986.

GALÍNDEZ DE CARVAJAL, L., "Anales breves", tomo XVIII, Madrid 1851.

GALLARDO Y DE FONT, J., "Apertura de las Cortes en 24 de septiembre de 1810", Segovia 1910.

GALLEGO ANABITARTE, A., "Administración y jueces: gubernativo y contencioso. Reflexiones sobre el Antiguo Régimen y el Estado constitucional y los fundamentos del Derecho Administrativo Español", I.E.A., Madrid 1971.

GALLEGO BURÍN, A., Y OTROS, "Granada en el reinado de Fernando VII. Datos para su historia política", Granada 1986.

GARCÍA GALLO, A., "Aspectos jurídicos de la Guerra de la Independencia", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 3, Madrid 1959.

GARCÍA GARCÍA, J.M., "El pensamiento administrativo de Pedro Sáinz de Andino. 1829- 1848", Madrid 1982.

GARCÍA GOYENA, F., "Tribunal Supremo de España. Noticias sobre su historia, organización y funcionamiento", Madrid 1929.

GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, J., "Memorias", Revista de

Occidente, 2 tomos, Madrid 1953.

GARCÍA MADARIA, J.M., "Estructura de la Administración Central (1808-1931)", Colección de Estudios de Historia de la Administración, I.N.A.P., Madrid 1982.

GARCÍA MARÍN, J.M., "El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media", Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1974.

- Recensión sobre "Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla", de S. de Dios, Revista de Historia del Derecho, págs. 1060-1064.

GARCÍA RAMILA, I., "España ante la invasión francesa", en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo XCIV, págs. 498 a 610, Madrid 1929.

GARÓFANO, R., y DE PARAMO, J.R., "La Constitución Gaditana de 1812", Diputación de Cádiz, 1983.

GARRIGÓS PICÓ, E., "Organización territorial a finales del Antiguo Régimen", en "La economía española a finales del Antiguo Régimen. Instituciones", Madrid 1982.

GATES, D., "The Spanish Ulcer. A History of the Peninsular War", George Allen & Unwin, London 1986.

GIBERT, R., "El Antiguo Consejo Real de Castilla", Rialp, Madrid 1964.

- VOZ "Consejo Real", Gran Enciclopedia Rialp, tomo VI, pág. 289.

GIL AYUSO, F., "Noticia bibliográfica de textos y disposiciones legales de los reinos de Castilla impresos en los siglos XVI y XVII", Madrid 1935.

GIL NOVALES, A., "Del Antiguo al Nuevo Régimen en España", Caracas 1986.

GIL SANZ, A., "La política castellana", Salamanca 1878.

GODECHOT, J., "Los orígenes de la Revolución Francesa", Madrid 1985.

GODOY, M., "Cuenta dada de su vida política por don Manuel Godoy o sean memorias críticas y apologeticas para la historia del reinado del Señor don Carlos IV de Borbón", 6 vols., Madrid 1836-1903.

GÓMEZ DE ARTECHE y MORO, J., "Guerra de la Independencia, historia militar de España de 1808 a 1814 con un prólogo escrito por el excelentísimo señor teniente general D. Eduardo Fernández San Román", Madrid 1869-1903.

GÓMEZ DE LA SERNA, P., "Instituciones de Derecho Administrativo", Madrid 1843.

GÓMEZ VILLAFRANCA, R., "Extremadura en la Guerra de la Independencia española", Badajoz 1808.

GÓMEZ-RIVERO, R., "Los Orígenes del Ministerio de Justicia (1714-1812)", Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, Madrid 1988.

GOÑZALEZ ALONSO, B., "El Corregidor castellano (1348-1808)", Madrid 1970.

- "Observaciones y documentos sobre la administración de Castilla a fines del siglo XV", H.I.D., 3, 1976.

- "Gobernación y gobernadores. Notas sobre la administración de Castilla en el periodo de formación del Estado moderno", Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid 1974.

- "Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen", Madrid 1981.

- voz "La Justicia", Enciclopedia de Historia de España,

GOÑZALEZ LOPEZ, E., "Entre el Antiguo y el Nuevo Régimen: absolutistas y liberales. El reinado de Fernando VII en Galicia", La Coruña 1980.

GOÑZALEZ MARIÑAS, P., "Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en España (1800-1875)", I.E.A., Madrid 1974.

GOÑZALEZ PALENCIA, A., Y VARÓN VALLEJO, E., "Consejo de Castilla. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Catálogo por materias", Madrid 1925.

GOUNON-LOUBENS, J., "Essais sur l'administration de la Castille au XVI siècle", Paris 1860.

"Gran Enciclopedia Larousse", voz Consejero, tomo VI, Editorial Planeta.

GUAITA, A., "La competencia del Ministerio de Fomento. 1832-1931", en Actas del IV Symposium de Historia de la Administración", Madrid 1983.

- "El Ministerio de Fomento 1832-1931", I.E.A.L., Madrid 1984.

"Guía del Archivo Histórico Nacional", Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Madrid 1958.

"Guías de Forasteros", años 1804, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835.

HAMEL, Conde V. du, "Historia constitucional de la Monarquía Española (411-1833)", I-II, Madrid 1848.

HILT, D., "The Troubled Trinity: Cedeo and the Spanish Monarchs", The University of Alabama Press, Tuscaloosa and London 1987.

"Historia de la Guerra de España contra Napoleón Bonaparte", 3 tomos, Madrid 1818.

HEREDIA HERRERA, A., "Los acontecimientos políticos de 1808 en Madrid, a través de la correspondencia de un testigo ocular", en "La Guerra de la Independencia (1808-1814) y su momento histórico", tomo I, III Ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander (octubre de 1979), Centro de Estudios Montañeses, Diputación Regional de Cantabria, Santander 1982.

IBÁÑEZ MARÍN, J., "Biografía de la Guerra de la Independencia", Madrid 1908.

IZQUIERDO HERNÁNDEZ, M., "Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII", Madrid 1963.

JACOB, J.P., "Ensayo imparcial sobre el gobierno del Rey don Fernando VII, escrito en Madrid por un español en mayo del presente año", Versalles 1824.

JIMÉNEZ DE EMBÚN, J., y GONZÁLEZ PALENCIA, A., "Consejo de Castilla. Índice de los pleitos sobre mayorazgos, estados y señorios", Madrid 1927.

JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., "La convocatoria de Cortes constituyentes de 1810, estado de la opinión española en punto a la reforma constitucional", en "Estudios de Historia Moderna", V, Barcelona 1957.

JONES, J.R., "El Dr. Hernando de Guevara del Consejo de S. Magestad", en "El Cardenal Albornoz", tomo II, Bolonia 1972.

JORDANA DE POZAS, I., "El Consejo de Estado español y las influencias francesas a lo largo de su evolución", Madrid 1953.

JOVELLANOS, G.M., "Obras completas de don Gaspar Melchor de Jovellanos", B.A.E., tomo XLVI, Madrid 1963.

JOVER, J.M., "El siglo XIX en España", Planeta, Barcelona 1974.

JURETSCHKE, H., "Los afrancesados en la Guerra de la Independencia", Rialp S.A., Madrid 1962; también en la reedición Biblioteca de la Historia de España, Sarpe, Madrid 1986.

LABRA, R.M. de, "Muñoz Torrero y las Cortes de Cádiz. Historia de la primera Asamblea constitucional. Programa de la transformación social y política de España. La elocuencia y las costumbres parlamentarias en las Cortes de Cádiz", 2 vols., Madrid 1886.

- "Las Cortes de Cádiz en 1810" (discurso), Madrid 1912.

- "Discursos parlamentarios sobre la conmemoración de las Cortes de 1812", Madrid 1912.

- "España y América 1812-1912" "La pérdida de las Américas", Madrid

LAFUENTE, M., "Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII", Madrid 1867.

LALINDE ABADÍA, J., "Los medios personales de gestión del poder público en la Historia de España", Estudios de Historia de la Administración, I.E.A., Madrid 1970.

LARDIZABAL Y URIBE, M., "Manifiesto que presenta a la Nación el Consejero de Estado don Miguel de Lardizábal y Uribe, uno de los cinco que compusieron el Supremo Consejo de Regencia de España e Indias, sobre su conducta política en la noche del 24 de septiembre de 1810", Alicante 1811.

LASA, I., "El primer proceso a los liberales (1814-1815)", en Hispania, XXX (1970), págs. 327 a 383.

- "El proceso a Joaquín Lorenzo Villanueva, 1814-1815", en Cuadernos de Historia, anexos de Hispania, núm. 4, págs. 29-81, Madrid 1973.

LASO GAITE, J.F., "Aportación a la Historia del Tribunal Supremo", en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, tomo LIX 8segunda época), Madrid 1969.

LE BRUN, "Retratos políticos de la revolución de España", Filadelfia 1826.

LEGENDRE, P., "Histoire de l'Administration de 1750 à nos jours", Paris 1968.

LEÓN PINELO, A. de, "Anales de Madrid. Tablas cronológicas de los Reales Consejos Supremos y de la Cámara de las Indias Occidentales", Madrid 1982.

LEPOINTE, G., "Histoire des Institutions du Droit Public Français au XIX siècle 1789-1914", Paris 1953.

LIBREROS SALVADOR, D., "Capitanía General de Madrid, Revista Reconquista, febrero 1964, págs. 16 y 17.

LIZAUZ Y LACAVE, I. de, "La Carta Otorgada de 1808", Imprenta Helénica, Madrid 1916.

LÓPEZ DE LOS MOZOS, J.R., "Don José López Juana Pinilla: su obra y actuación durante la Guerra de la Independencia", en Mad-Al-Hayara, núm. 11 (1984), págs. 133 a 149.

LÓPEZ GÓMEZ, A., "Los Escribanos de Cámara (justicia y gobierno) del Consejo de Castilla", Hidalguía (1989) núm. 212, págs. 119-143.

- "La Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Una institución jurisdiccional y administrativa de la España de los Borbones (1715-1835)", tesina dirigida por el Dr. D. Rogelio Pérez Bustamante, Madrid 1982.

LORENTE SARINENA, M., "Las infracciones a la Constitución de 1812. Un mecanismo de defensa de la Constitución", Madrid 1988.

LOVETT, G.H., "La Guerra de la Independencia y el nacimiento de la España Contemporánea", Ediciones Península, 2 tomos, Barcelona 1975.

LLORENTE, J.A., "Memorias para la historia de la revolución española con documentos justificativos", 3 tomos, París 1814-1816.

MACANAZ, M., "Explicación jurídica e histórica de la consulta que hizo el Real Consejo de Castilla al Rey Nuestro Señor sobre lo que S.M. se sirvió preguntarle y se expresa en esta obra con los motivos que dieron causa para la real pregunta y respuesta y defensa legal de una de las principales partes que componen el todo de la soberanía de S.M.", Semanario Erudito de Valladares, Madrid 1788.

MANFRED, A., "Napoleón Bonaparte", Madrid 1988.

"Manifiesto que hace la Junta Superior de Observación y Defensa del Reino de Valencia de los servicios y heroicos esfuerzos prestados por éste desde el día 23 de mayo de 1808", Valencia 1809, publicado por I.E.P., Madrid

MARAVALL, J.A., "Las comunidades de Castilla", Madrid 1981.

MARGADANT, G.F., "Las tribulaciones del tlaxcalteca Miguel Lardizábal, ante las Cortes de Cádiz", II Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México 1981.

- MARLIANI, M., "El reinado de Fernando VII",
- MARTÍ GILABERT, F., "El Motín de Aranjuez", EUNSA, Pamplona 1972.
- MARTIN, C., "José Napoleón I, Rey intruso de España", Editora Nacional, Madrid 1969.
- MARTÍN ARTAJÓ, A., "El Palacio de los Consejos", Revista Reconstrucción, año 1945 núm. 50, págs. 33 a 35.
- MARTÍN RETORTILLO, S., y ARGULLOL MURGADAS, E., "Descentralización administrativa y organización política. Aproximación histórica (1812-1931)", Madrid 1973.
- MARTÍNEZ BARA, J.A., "Visicitudes del Archivo del Consejo de Castilla en los siglos XVIII y XIX", en Actas del III S.H.A., I.E.A., págs. 357-382, Madrid 1974.
- MARTÍNEZ GIJÓN, J., "Estudios sobre el oficio de escribano durante la Edad Moderna", Madrid 1964.
- MARTÍNEZ MARINA, F., "Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla", Imprenta de la Hija de Don Joaquín Ibarra, Madrid 1808.
- "Teoría de las Cortes o Grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo", 3 tomos, Imprenta de don Fermín Villalpando, segunda edición, Madrid 1820. También edición preparada por J.M. Pérez Prendes, Editora Nacional, Madrid 1979.
- MARTÍNEZ DE SALAZAR, A., "Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo: lo que se observa en el despacho de los negocios que le competen: regalias, preeminencias y autoridad de este supremo Tribunal, y las pertenecientes a la Sala de Señores Alcaldes de Casa y Corte", Madrid 1764.
- MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., "La Constitución Española de 1812 (El constitucionalismo liberal a principios del siglo XIX)", Valencia 1978.
- MARTÍNEZ DE VELASCO, A., "La formación de la Junta Central", EUNSA, Pamplona 1972.
- "El Consejo de Castilla y el poder francés", en "La Guerra de la Independencia (1808-1814) y su momento histórico", tomo I, III Ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander (octubre, 1979), Centro de Estudios Montañeses, Diputación Regional de Cantabria, Santander 1982.
- MARTÍNEZ YANGUES, F., "Antología de las Cortes de 1821

a 1823", Madrid 1914.

MASSA SANGUINETTI, C., "Diccionario jurídico-administrativo", tomo I.

MERCADER RIBA, J., "José Bonaparte, Rey de España, 1808-1813. Historia externa del reinado", C.S.I.C., Madrid 1971.

- "José Bonaparte, Rey de España. Estructura del Estado español bonapartista", C.S.I.C., Madrid 1983.

- "La instauración primera del Ministerio del Interior bajo José Bonaparte", Hispania, 150 (1982), págs. 183-206.

MESONERO ROMANOS, R., "El Antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta Villa", tomo I, Madrid 1881.

- "Memorias de un setentón natural y vecino de Madrid", Madrid 1880.

MINGUIÓN ADRIAN, S., "Historia del Derecho Español", tomo II, Barcelona 1927.

MIRAFLORES, Marqués de, "Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de España desde 1820 hasta 1823", Londres 1834.

- "Memorias para escribir la historia contemporánea en lo siete primeros años del reinado de Isabel II", Madrid 1843.

MOLAS RIBALTA, P., "Edad Moderna", Manual de Historia de España núm. 3, Espasa Calpe S.A., Madrid 1988.

- "La Administración española en el siglo XVIII", en el tomo X-2 de Historia General de España y América, La España de las reformas hasta el final del reinado de Carlos IV, págs. 87 a 143, Rialp S.A., Madrid 1984.

MOLINER PRADA, A., "La peculiaridad de la Revolución Española de 1808", Hispania, XLVII/166 (1987), págs. 629 a 678.

- "Sobre el término 'revolución' en la España de 1808", Hispania núm. 174 (1990), págs. 285 a 299.

MONTANOS FERRÍN, E. y SANCHEZ-ARCILLA, J., "Introducción a la Historia del Derecho", 2 tomos, Dykinson, Madrid 1988.

MONTANOS FERRÍN, E. y SANCHEZ-ARCILLA, J., "Historia del Derecho y de las Instituciones", 3 tomos, Dykinson, Madrid 1991.

MOR DE FUENTES, "Esquejillo de su vida", en Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVII, Madrid 1957.

MORAL, J.G. del, "Memorias de la guerra de la Independencia y de los sucesos posteriores (1808-1825)", publicadas por don Pedro Aguado Bleye, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid 1907.

MORAN ORTÍ, M., "Poder y gobierno en las Cortes de Cádiz (1810-1813)", EUNSA, Pamplona 1986.

MORENO ALONSO, M., "La generación española de 1808", Alianza Universidad, Madrid 1989.

MORENO PASTOR, L., "Orígenes del Tribunal Supremo de Justicia (1812-1838)", Ministerio de Justicia, Madrid 1990.

MORET, S., "La España del siglo XIX", tomo I, Conferencias del Ateneo de Madrid, años 1886-87.

MORIANA, J. de, "Discursos sobre el Consejo y ceremonial del mismo, Discursos generales y particulares de el gobierno general y político de el Consejo Real y Supremo de Justicia de estos Reynos de Castilla y León y ceremonias de él, advertidos por Juan de Moriana, Portero de Cámara de S.M., que sirve en el mismo Conssejo, y en el de la Cámara y estado de Castilla, desde el año 1614 hasta el de 1654, que es cuando se cerró", Madrid 1654.

MOUSNIER, R., "Le Conseil du Roi de Louis XII à la Révolution", Paris 1970.

MOXÓ, S. de, "La disolución del régimen señorial en España", C.S.I.C., Madrid 1965.

MUÑOZ BUSTILLO ROMERO, C., "La organización de los tribunales españoles (1808-1812)", en "Materiales para el estudio de la Constitución de 1812", págs. 545 a 561, Editorial Tecnos S.A., Parlamento de Andalucía, Sevilla 1989.

MUÑOZ MALDONADO, J., "Historia política y militar de la Guerra de la Independencia de España contra Napoleón Bonaparte desde 1808 a 1814", 3 vols., Madrid 1833.

MURAT, Conde de, "Murat, Lieutenant de l'Empereur en Espagne, 1808", Librairie Plon, Paris 1897.

NAPIER, W.F.P., "History of the war in the Peninsula and in the South of France from the year 1807 to 1814", 6 vols., London 1828-1840.

NAVASCUÉS PALACIO, P., "Palacios madrileños, siglo XVIII", I.E.M., C.S.I.C., Universidad Autónoma de Madrid 1978.

NIETO, A., "Apuntes para una historia de los autores de Derecho Administrativo general español", en 34 artículos seleccionados de la Revista de Administración Pública con ocasión de su centenario, Madrid 1983.

- "Los orígenes de lo contencioso administrativo en España", en Revista de Administración Pública, núm. 50 (196).

- "Estudios históricos sobre la Administración y el Derecho Administrativo", Colección de Estudios de Historia de la Administración, I.N.A.P., Madrid 1986.

"Novísima Recopilación de las Leyes de España", Madrid 1805.

NIEVA, J.M., "Decretos de la Reina Nuestra Sra. Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su Augusta Madre la Reina Gobernadora", Madrid 1835.

"Noticias de lo que practica el Consejo en las funciones reales en que interviene", A.H.N., mss. núm. 1.181e.

OMAN, Ch. W., "A History of the Peninsular War", 7 vols., Oxford 1902-1930.

"Opinión general de la Nación Española después que los franceses invadieron la capital de Madrid, extendida por el corregidor alcalde mayor de Salamanca en obsequio de la Patria", Oficina de Juan Vallejera, Salamanca 1808.

ORTEGA ARRANZ, J.M., y TORUYA GARCÍA, L.J., "Cuba: abolición de la trata de esclavos en los debates de las Cortes de 1812", en "Materiales para el estudio de la Constitución de 1812", págs. 609 a 620, Edt. Tecnos S.A., Parlamento de Andalucía 1989.

ORTIZ DE LA TORRE, F., "Papeles de Ugarte. Documentos para la historia del reinado de Fernando VII", Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander 1934.

PALACIO ATARD, V., "La España del siglo XIX", Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid 1974.

- "Siete calas en la España liberal", en "Estudios sobre la España liberal", Anexos de Hispania, núm. 4, Madrid 1973.

PAREDES, J., "La organización de la justicia en la España liberal. Los orígenes de la carrera judicial: 1834-1870", Civitas, Madrid 1991.

PÉREZ RÚA, M., "Publicación y juramento de la Carta otorgada de Bayona por el Consejo de Castilla", Sevilla 1911.

PÉREZ DE LA CANAL, M.A., "Un plan de nueva organización de los Ministerios formado por el Consejo de Regencia en 1811", en Documentación Administrativa, 194 (abril-junio 1982), págs. 213-267.

PÉREZ DE GUZMAN Y GALLO, J., "El Dos de Mayo de 1808 en Madrid", Marcos Real Editor, Madrid 1886.

PÉREZ JIMÉNEZ, N., "Muñoz Torrero y su época", Badajoz 1868.

PÉREZ PRENDES M. DE ARRACÓ, J.M., "Una visión sobre la Administración española en el siglo XVIII", en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, págs. 323-347, VI, Madrid 1959.

- "Apuntes de Historia del Derecho Español", Madrid 1964.

- "Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz", en Revista de Estudios Políticos, págs. 321-431, monografía sobre las Cortes de Cádiz y su Constitución, Madrid 1971.

PESET, M., "Legislación contra liberales en los comienzos de la década absolutista, 1823-1825",

PEYRÓ ARROYO, A., "Las Cortes aragonesas de 1808", Zaragoza 1985.

PINTOS VIEITES, M.C., "La política de Fernando VII entre 1814 y 1820", Pamplona 1958.

PRADO Y ROZAS, A., "Las Secretarías de Despacho", I.N.A.P., Madrid 1982. Introducción de José María García Madaria.

PRADT, M., "Memoires historiques sur la Révolution d'Espagne", Paris 1816.

PRÍNCIPE DE LA PAZ, "Memorias", B.A.E., 2 tomos, Madrid 1965. Estudio preliminar de Carlos Seco Serrano.

PUYOL, J., "Don Diego Clemencín, ministro de Fernando VII. Recuerdos del Ministerio del 7 de julio de 1822", Tipografía de la Revista de Archivos, págs. 1 a 17 y 97 a 123, Madrid 1929.

QUEIPO DE LLANO, J.M., CONDE DE TORENO, "Historia del levantamiento, guerra y revolución de España", 3 tomos, Madrid 1835-1837. También en la B.A.E., tomo LXIV, Madrid 1953.

RIAZA, R., y GARCÍA GALLO, A., "Manual de Historia del Derecho Español", Madrid 1934.

RIBA, C., "El Consejo Supremo de Aragón en el reinado

de Felipe II", Madrid 1915.

RICO Y AMAT, J., "Historia política y parlamentaria de España". Imprenta de las Escuelas Pías, 3 tomos, Madrid 1860 y 1861.

RIERA, J., "Las polémicas tulistas y el Consejo de Castilla (1750-1765)", en Cuadernos Simancas de Investigaciones Históricas, IV, Editorial de la Universidad de Valladolid.

RIO, J.M. del, "Elogio del Señor don Fernando VII, el amado Rey de España y de sus Indias", Madrid 1817.

RIOL, S.A., "Informe que hizo Su Majestad en 16 de junio de 1726 sobre la creación, erección e institución de los Consejos y Tribunales...", Semanario Erudito Valladares, tomo III, Madrid 1727.

- "Noticia general de todos los archivos y papeles pertenecientes a los Consejos y Audiencias de España", Madrid 1726.

RIVAS, N., "El siglo XIX. Episodios históricos", Madrid 1945.

RODRÍGUEZ CASADO, V., "La política y los políticos en el reinado de Carlos III", Biblioteca de Publicaciones Actuales, RIALP S.A., Madrid 1962.

- "Conversaciones de Historia de España", Editorial Planeta, Barcelona 1965.

ROLDAN VERDEJO, R., "Los jueces de la Monarquía Absoluta", Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife-Madrid 1989.

ROMERO RIZO, J.M., "Muñoz Torrero. Apuntes histórico-biográficos", Cádiz 1910.

ROYO VOLLANOVA, S., "El Consejo de Estado en España", Madrid 1941.

RUDORFF, R., "Los Sitios de Zaragoza 1808-1809", Edt. Grijalbo, Barcelona 1977.

RUIZ CASTILLO BASALA, J., "El dos de mayo y Bailén", Diario ABC, 2.V.1990., pág. 44.

SALAZAR Y CASTRO, L., "Institución, origen y autoridad del Consejo de Castilla", Madrid

SALCEDO IZU, J.J., "El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI", EUNSA, Pamplona 1964.

SALMÓN, P., "Resumen histórico de la Revolución de

España. Año de 1808", Madrid 1820.

SAN JOSE, D., "Vida y milagros de Fernando VII, sacados nuevamente a la devoción pública", Madrid

SAN MIGUEL, E., "Vida de don Agustín Argüelles", 4 tomos, Madrid 1851-1852.

SANCHEZ GÓMEZ, R.I., "Estudio institucional de la Sala de Alcaldes de casa y Corte durante el reinado de Carlos II", Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, Madrid 1989.

SANCHEZ SANTIAGO, A., "Idea elemental de los Tribunales de la Corte en su actual estado y última planta", Imprenta Real, 2 tomos, Madrid 1787.

SANCHEZ-AGESTA, L., "Historia del Constitucionalismo Español", Madrid 1984.

- "La revolución de las instituciones", en el tomo XII de Historia General de España y América, Del Antiguo al Nuevo Régimen hasta la muerte de Fernando VII, págs. 306 a 333, Rialp S.A., Madrid 1981.

SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., "La administración de la Justicia real en León y Castilla (1252-1305)", U.C.M., Madrid 1980.

- "El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1809-1810) (Notas para su estudio)", en el volumen En la España Medieval, V, Estudios en memoria del prof. D. Claudio Sánchez Albornoz, vol. II, Madrid 1986, págs. 1033-1050, U.C.M.

- "Las elecciones de diputados a Cortes en Palencia durante la primera época constitucional", tomo IV de las Actas del II Congreso de Historia de Palencia, págs. 193 a 232, Palencia 1990.

- "Las elecciones para el diputado de la Nueva España en la Junta Central Suprema Gubernativa", vol. VI de Homenaje a Vals Taberner, págs. 1541 y ss. (en imprenta).

SANCHEZ-BELLA, I., "La reforma de la Administración Central en 1834", en Actas del III S.H.A., págs. 659 a 688, I.E.A., Madrid 1974.

- "La polémica sobre las fuentes de la Constitución española de 1812", en Actas del IV Congreso Internacional de Historia de América", Buenos Aires 1966.

- "La Revolución Francesa en España: causas del triunfo del Régimen liberal", en La Revolución Francesa. Ocho estudios para entenderla, EUNSA, Pamplona 1990.

SANTALO, J.L., "La custodia de Tierra Santa y la Junta Suprema Central", Madrid 1958.

SANTAMARÍA PASTOR, J.A., "Sobre la génesis del Derecho Administrativo Español en el siglo XIX (1812-1845)", Sevilla 1973.

SANTILLAN, R., "Memorias (1815-1856)", Pamplona 1960.

SANZ CID, C., "La Constitución de Bayona", Edt. Reus, Madrid 1922.

SARRALBO AGUARELES, E., "Catálogo de consultas del Consejo de Aragón", Madrid 1975.

SCHÄFER, E., "El Consejo Real y Supremo de las Indias", 2 vols., Sevilla 1935 y 1947.

SECO SERRANO, C., Introducción a "La España de Fernando VII", Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXVI, Edt. Espasa Calpe, Madrid 1968.

SEIJAS LOZANO, M., "Dietamen fiscal emitido acerca de la competencia del Tribunal Supremo para conocer y fallar el pleito que radicó en el antiguo Consejo de Castilla", en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, tomo XX, Madrid 1862.

SEMPERE Y GUARINOS, J., "Historia del Derecho Español", 3ª edición, Madrid 1846.

SEPÚLVEDA, R., "Madrid viejo, costumbres, leyendas y descripciones de la Villa y Corte en los siglos pasados", Madrid 1988.

SERRANO SANZ, M., "El Consejo de Castilla y la censura en el XVIII", R.A.B., tomo XV, 1906, págs.

SEVILLA ANDRÉS, D., "Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España", Madrid 1969.

- "La Constitución de 1812, obra de transición", en la Revista de Estudios Políticos, número monográfico sobre las Cortes de Cádiz y su Constitución, págs. 113 a 141, Madrid 1971.

SOLDEVILLA, F., "Las Cortes de Cádiz. Orígenes de la Revolución Española", Imprenta Ricardo Rojas, Madrid 1910.

SOLÉ TURA, J., y AJA, E., "Constituciones y periodos constituyentes en España, 1808-1936", Madrid 1977.

SOLÍS, R., "El Cádiz de las Cortes", 2ª Edición, Madrid 1989.

SUAREZ VERDEGUER, F., "Notas sobre la Administración en

la época de Fernando VII", S.I.E.A. I, 1970.

- "Los sucesos de la Granja", C.S.I.C., Madrid 1953.

- "Documentos del reinado de Fernando VII. El Consejo de Estado 1792-1834", Pamplona 1971.

- "El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810)", Pamplona 1982.

- "Las Cortes de Cádiz", Rialp, Madrid 1982.

- "La creación del Ministerio del Interior en España", en A.H.D.E. núm. 19 (1948-1949), págs. 15 a 56.

- "La crisis del Antiguo Régimen en España", Rialp S.A., Madrid 1988.

- "Sobre las raíces de las reformas de las Cortes de Cádiz", en la Revista de Estudios Políticos, número monográfico sobre las Cortes de Cádiz y su Constitución, págs. 31 a 67, Madrid 1971.

- "Notas sobre la Administración en el reinado de Fernando VII", en Actas del I S.H.A., págs. 441 a 460, I.E.A., Madrid 1970.

- "Documentos del reinado de Fernando VII. Informes sobre el estado de España (1825)", tomo II, Universidad de Navarra, C.S.I.C., Pamplona

- "Documentos del reinado de Fernando VII. Pedro Sáinz de Andino. Escritos", tomo I-III, EUNSA, Pamplona 1969.

- "Algunas observaciones sobre la interpretación de la Revolución Francesa", en La Revolución Francesa. Ocho estudios para entenderla, EUNSA, Pamplona 1990.

TAMARIT, E. de, "Memoria histórica de los principales acontecimientos del 2 de mayo", Imprenta Fontanet, Madrid 1864.

TAMARIT, L. de, "Monografía histórica del 2 de mayo de 1808", Madrid 1900.

TAPIA, E. de, "Novísimo Febrero o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos, refundida, ordenada bajo nuevo método y adicionada con un tratado del juicio criminal y algunos otros", 7 tomos, Madrid 1828.

TOMAS Y VALIENTE, F., "El Estado en el siglo XVII (el gobierno de la monarquía y de la administración de los reinos", en Historia de España Espasa Calpe

- "Notas para una historia del constitucionalismo español", Madrid 1984.

- "La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen", en Historia de España, dirigida por J.M. Jover, tomo XXXIV, Madrid 1981.

"La obra legislativa y el desplante del Trono, una historia de las reformas hechas en España en tiempos de las llamadas Cortes, e impugnación de las doctrinas publicadas en la Constitución, diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado", Valencia 1820-1825.

TOMAS VILLARROYA, J., "Breve historia del Constitucionalismo Español", Barcelona 1976.

- "El sistema político del Estatuto Real (1834-1836)", Madrid 1868.

- "El Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837", Madrid 1985.

TORREANAZ, Conde de, "Los Consejos del Rey durante la Edad Media", 2 vols., Madrid 1884-1890.

TOVAR MARTÍN, V., "El Palacio del Duque de Uceda en Madrid: edificio capital del siglo XVII", en Revista Reales Sitios, Patrimonio Nacional, año XVII núm. 64, II Trimestre 1980, págs. 37 a 44.

TUNÓN DE LARA, M., "La España del siglo XIX", París 1971.

VARELA, J., "Jovellanos", Alianza Universidad, Madrid 1988.

VELEZ, R., "Apología del Altar y el Trono. O historia de las reformas hechas en España en tiempos de las llamadas Cortes", Madrid 1818.

VICENS VIVES, "Historia de España y América Social y Económica", Barcelona 1974.

- "Covuntura económica y reformismo burgués. Dos factores en la evolución de la España del Antiguo Régimen", Barcelona 1954.

VILLANUEVA, J.L., "Apuntes sobre el arresto de los vocales ejecutado en mayo de 1814, suscritos en la cárcel de la Corona por el diputado Joaquín Lorenzo Villanueva, uno de los presos", Madrid 1820.

- "Mi viaje a las Cortes", en Memorias de tiempos de Fernando VII, B.A.E., tomo XCVIII (2), págs. 1 a 440, Madrid 1957.

VILLAURRUTIA, Marqués de, "Fernando VII, Rey Absoluto. La ominosa década de 1823 a 1833", Fernando Beltrán Librería, Madrid 1931.

- "Fernando VII, Rey Constitucional. Historia diplomática de España 1820-1823", Madrid 1915.

- "El Rey José Napoleón. La misión del Barón de Agra. Algunos cuadros del Museo del Prado. El Papa de Velázquez", Madrid 1927.

WARREN, D., "Las fuentes de la Constitución de Cádiz", en Estudios sobre las Cortes de Cádiz, Pamplona 1967.

ZUAZNAVAR Y FRANCIA, J.M. de, "Noticias para literatos acerca de los Archivos públicos de la...Sala de Señores Alcaldes de Casa y Corte y del Reposo Mayor de la Corte", San Sebastián 1834.

XI. FUENTES DOCUMENTALES

XI. FUENTES DOCUMENTALES

1. Archivo del Congreso de los Diputados (A.C.D.)

A) Sección Cortes de Castilla, legajos 171, 178 bis,

B) Papeles reservados de Fernando VII, tomos 3, 4, 11 y 60.

C) Serie General, legajos 3, 4, 10, 32, 33, 54.

2. Archivo General de Palacio (A.G.P.)

A) Papeles reservados de Fernando VII, tomos 1, 2, 8, 14, 15, 24, 70, 71.

B) Sección Fernando VII, caja 30 núm. 8; caja 199 núms. 12 y 22; caja 204 núms. 9, 26 y 36; caja 206 núm. 32; caja 207 núms. 16, 20, 24, 39 y 43; caja 212 núms. 22 y 23; caja 216 núm. 2; 302 núm. 2; 309 núm. 16; caja 311 núm. 12; caja 328 núm. 4; caja 445 núm. 1.

3. Archivo General de Simancas (A.G.S)

A) Sección Consejo Real de España e Indias, legajos 2 bis y 33.

B) Gracia y Justicia, Sección Gobierno Intruso, legajos 1.088, 1089, 1.090 y 1.164.

4. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.)

A) Sección Consejos Suprimidos

a) Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo reunido), libros de matrícula núm. 2.718; y el 2.847, libro de matrícula de las consultas de oficio.

b) Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo reunido), legajos consultados: 11.982, 11.983, 11.984, 11.985, 11.986, 11.987, 11.988, 11.989, 11.990, 11.991, 11.992, 11.993, 11.994, 11.995, 11.996, 11.997, 11.998, 11.999, 12.000, 12.001, 12.002, 12.003, 12.004, 12.005, 12.006, 12.007, 12.008, 50.127, 50.128, 50.129.

c) Invasión Francesa, libro de matrícula 2.705 (Biblioteca).

d) Invasión Francesa, legajos consultados 5.511, 5.512, 5.513, 5.514, 5.515, 5.516, 5.517, 5.518, 5.519, 5.520, 5.521, 5.522, 5.523, 5.524, 5.525, 5.526, 5.527.

e) Sala de Gobierno, libros de matrícula 2.689 (1, 2, 3, 4), 2.690 (1, 2), 2.691 (1, 2), 2.692 (1, 2), 2.693 (1, 2, 3), 2.694 (1, 2), 2.695, 2.696 (1, 2, 3, 4), 2.697 (1, 2, 3, 4), 2.698 (1, 2), 2.699 (1, 2, 3, 4, 5, 6)

f) Sala de Gobierno, legajos consultados 2. 633, 2.635, 2.636, 2.638, 2.639, 2.640, 2.641, 2.642, 2.643, 2.644, 2.645, 2.648, 2.649, 2.651, 2.652, 2.658, 2.660, 2.662, 2.663, 2.664, 2.666, 2.670, 2.673, 2.675, 2.683, 2.684, 2.689, 2.698, 2.708, 2.720, 2.757, 2.768, 2.771, 2.786, 2.790, 2.803, 2.805, 2.873, 2.874, 2.875, 2.877, 2.878, 2.879, 2.881, 2.882, 2.883, 2.884, 2.885, 2.892, 2.979, 2.980, 2.983, 2.984, 2.989, 3.020, 3.021, 3.026, 3.034, 3.060, 3.085, 3.086, 3.087, 3.088, 3.089, 3.090, 3.120, 3.124, 3.125, 3.126, 3.128, 3.129, 3.133, 3.148, 3.149, 3.150, 3.211, 3.215, 3.218, 3.221, 3.324, 3.232, 3.267, 3.268, 3.275, 3.276, 3.333, 3.334, 3.335, 3.337, 3.381, 3.384, 3.385, 3.436, 3.452, 3.453, 3.454, 3.455, 3.456, 3.590, 3.591, 3.592, 3.602, 3.608, 3.609, 3.617, 3.618, 3.619, 3.620, 3.621, 3.626, 3.636, 3.656, 3.657, 3.658, 3.659, 3.667, 3.668, 3.697, 3.698, 3.703, 3.704, 3.705, 3.724, 3.727, 3.732, 3.759, 3.761, 3.763, 3.780, 3.781, 3.789, 3.811, 3.815, 3.819, 3.825, 3.828, 3.850, 3.851, 3.855, 3.861, 3.867, 3.885, 3.887, 3.909, 3.910, 3.912, 3.916, 3.930, 3.933, 3.934, 3.936, 3.945, 3.951, 3.954, 3.955, 3.956, 3.957, 3.958, 3.959, 3.960, 3.966, 3.967, 3.969, 3.970, 3.971, 3.972, 3.973, 3.974, 3.975, 3.976, 3.977, 3.978, 3.979, 3.980, 3.981, 3.982, 3.984,

3.993, 3.994, 3.995, 3.998, 4.005, 4.015, 4.019, 4.021,
4.031, 4.033, 4.034, 4.035, 4.040, 4.046, 4.164, 4.165,
4.166, 4.180, 4.184, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189.

g) Consultas de oficio del Consejo de Castilla,
libros de matrícula núms. 2.847 (1, 2, 3).

h) Consultas de oficio, legajos consultados 6.072,
6.073, 6.074, 6.075, 6.076, 6.077, 6.078, 6.079, 6.080,
6.081, 6.082, 6.083, 6.084, 6.085, 6.086, 6.087, 6.088,
6.089, 6.090, 6.092, 6.093, 6.094, 6.095, 6.096, 6.097,
6.098, 6.099, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105,
6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.120,
6.121, 6.122.

i) Archivo Antiguo del Consejo, legajo consultado
17.704.

j) Secretaría de Castilla, legajos consultados
12.410, 12.411, 12.420, 12.422.

k) Secretaría de la Presidencia de Castilla,
legajos consultados 9.767 y 9.768.

l) Tribunal Supremo de España e Indias, legajo
49.765.

m) Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes de
Casa y Corte, núms. 1.398, 1.399, 1.400.

n) Sección Códices: núms 796 B y 797.

ñ) Libros de plazas núm. 741 tomo 19.

o) Tribunal Supremo de España e Indias, legajos
consultados 49.760, 49.761, 49.762, 49.763, 49.764, 49.765,
49.766.

p) Juntas de Negocios Contenciosos, legajos
consultados 51.584 y 51.585.

q) otros libros consultados:

- libro de matrícula de la Presidencia de
Castilla: 2.701;

- libro de matrícula de los expedientes
vuelto a sus legajos: 2.799;

- libros de matrícula de la Secretaría de la
Presidencia de Castilla: 1.734, 1.735;

- libro de matrícula de las consultas de los
viernes: 1.419;

- libro de matrícula de propios: 2.702;

- otros libros de la Sección de Biblioteca:
núms. 1.181, 1.188, 1.802, 2.701e, 2.718, 2.847, 3.482a,

3.483, 3.693 y 3.765.

q) Ctrcs legajos de Consejos Suprimidos consultados: 11.887, 51.424, 51.425, 51.426, 51.427, 51.430, 51.431, 51.432, 51.433, 51.434.

B) Estado

a) legajos consultados 1A, 1C, 2A, 2D, 6A, 21H, 23, 28A, 28C, 29A, 29G, 29H, 31C, 60H, 70H, 70I, 80E, 84A, 170I.

C) Fondos Contemporáneos

a) Ministerio de Justicia: legajos consultados: 4.391 expte. núm. 2.307; 4.284 expte. 783; 4.419 expte. 2.790; 4.681 expte. 6.080; 4.576 expte. 4.941; 4.750 expte. 7.279; 4.612 expte. 5.381.

5. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (A.M.A.E.)

A) Manuscritos núms. 81, 149.

B) legajos consultados 81, 82, 3.312.

6. Archivo del Ministerio de Justicia (A.M.J.)

A) legajos consultados: 751 expte. 12.006; 4.985 exptes. 11.805 y 11.811.

7. Archivo de Villa (A.V.)

A) Secretaría, Sección 2, legajos 141, 166; 7-478-8; 2-328-6; 2-166-1; 7-478-4; 2-416-31.

B) Minutas de las sesiones de la Junta Suprema de Gobierno (7-478-9).

8. Biblioteca del Congreso de los Diputados (B.C.D.)

A) Guías de Forasteros de los años 1778, 1798, 1804, 1812, 1813, 1817, 1818, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834.

9. Biblioteca Real Academia de la Historia (B.R.A.H.)

A) Manuscritos 11-3-8 (9/6.964) y 9-27-3-E-60 (9/5.875)

B) Guías de Forasteros consultadas: de los años 1807, 1808, 1821.

10. Biblioteca del Senado (B.S.)

A) Guías de Forasteros de los años 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835.

11. Hemeroteca Municipal (H.M.)

A) Diario de Granada, junio-julio año 1.808.

12. Servicio Histórico Militar (S.H.M.)

A) Colección del Fraile, volúmenes 197, 762, 873, 925, 3.230, 3.438.